LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN.

José G. Vargas-Hernández, M.B.A.;Ph.D.
Investigador I
Sistema Nacional de Investigadores
Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán
Avenida Tecnológico 100
Cd. Guzmán, Jalisco, 49000
México
Telefax: +52 341 5752050 ext 144
Cerrada Petronilo Lopez 31
Cd. Guzmán, Jalisco, 49000
México
Tel: +52 341 4120909
jvargas2006@gmail.com,
jgvh0811@yahoo.com

"Un reino necesita armas, alimentos y confianza del pueblo en las autoridades. En un caso extremo puede prescindir de las armas y los alimentos, pero no de la confianza, porque si se pierde, se pierde el reino" Filósofo Chino.

"Allí donde la ley está sometida a los gobernantes y carece de autoridad, yo veo la pronta ruina de la ciudad; en cambio, donde la ley es señora de los gobernantes y los gobernantes son sus esclavos, yo veo la salvación de la comunidad y de la acumulación sobre ella de todos los bienes que los dioses suelen conceder a los pueblos." Platón.

"Estamos sembrando vientos y mañana cosecharemos tempestades" José Saramago.

Resumen (Abstract)

El propósito de este trabajo es analizar y contribuir al debate de la gobernabilidad "perce" y a las diferentes formas institucionales de gobernabilidad transnacionales que co-existen con los procesos de globalización, como una agenda de investigación para determinar el impacto que tienen en las esferas políticas, económico - financieras, sociales, etc. Este análisis es el prerrequisito para el diseño de estrategias que permitan el restablecimiento de la gobernabilidad de una sociedad con una fuerte tendencia a la globalización. A pesar de que pueda ser considerado como un análisis monocausal, sin embargo, enfatizamos el carácter multicausal del fenómeno.

El eje central de este análisis es la determinación de los cambios en la función de la gobernabilidad de la sociedad, tradicionalmente encomendada a los Estados-nación, como resultado de la revolución tecnológica de la información y de los acelerados procesos de globalización económica. El patrón gigabyte ha sustituido al patrón dólar que a su vez

sustituyó al patrón oro en lo que se ha denominado la “Nueva Economía”. El notable incremento mundial de las actividades económicas mediante los procesos de globalización, tiene como base el incremento de la información. La revolución tecnológica crea su propio patrón de convergencia o divergencia entre el desarrollo de los diferentes países, favoreciendo más a aquellos que ya están desarrollados y menos a quienes están en vías de desarrollo. Como en toda revolución, los cambios tecnológicos en una economía competitiva son turbulentos y no pueden gradualizarse.

La gobernabilidad surgida del Estado-nación está siendo fuertemente cuestionada por la acción de las denominadas fuerzas libres del mercado, las cuales están requiriendo para su propio desarrollo, la trasferencia de esta gobernabilidad prioritariamente hacia los actores que surgen de la racionalidad del mercado. Las dos grandes tendencias de esta transferencia de gobernabilidad apuntan, por un lado a nivel macro, hacia la formación de un modelo supranacional, mientras que por otro lado también se realizan transferencias de la gobernabilidad hacia los actores privados e individuales que giran en torno de la racionalidad del mercado, tales como las organizaciones, empresas, y en menor grado en los individuos, etc.

Recientemente, la gobernabilidad se está convirtiendo en titularidad global implementada a través de decisiones y medidas colectivas que son delimitadas bajo esquemas de derecho internacional por instituciones que responden a intereses de la globalización. Bajo este esquema globalizador, la gobernabilidad democrática que implica procesos democráticos, la legitimidad y la regla de ley, se logran a través de los procesos de desarrollo económico y social de los pueblos. Sin embargo, dadas las dos tendencias anteriores, la gobernabilidad global de la sociedad está recayendo en las grandes empresas con intereses transnacionales y multinacionales. El desafío para una mejor gobernabilidad bajo un marco globalizador se centra en un sistema que logre el desarrollo integral del ser humano mediante la armonización de las metas macroeconómicas de crecimiento y de igualdad social.

La conclusión de este análisis es que las funciones del Estado-nación, las del mercado y la sociedad son complementarias y ninguno de estos tres puede rebasar sus ámbitos de acción para fundamentar una gobernabilidad en la cual todos los actores quepan. Queda como propuesta la construcción de los equilibrios institucionales que garanticen la gobernabilidad de la sociedad en un ambiente de globalización, así como los equilibrios entre las políticas nacionales y las aspiraciones de una ciudadanía mundial extensiva que busca los beneficios de la globalización.

Introducción.

El mundo está en constante cambio, sobretodo en los últimos años, observándose un aumento rápido de las actividades económicas entre los individuos y las organizaciones de diferentes países. Se vive un período de transformación global radical bajo la consigna de dos términos: lograr el establecimiento de un mercado global libre y el imperio de un sistema democrático, es decir, la mercadización y la democratización.

El análisis crítico demuestra que no puede haber procesos de democratización sin que previamente existan transformaciones socialistas. Con respecto al mercado global, su concepción involucra la producción integrada globalmente, la especialización de mercados laborales independientes, la privatización de los activos del Estado y la inextricable conexión de la tecnología más allá de las fronteras convencionales nacionales. De hecho, la transformación de las organizaciones tiene similitud con la transformación de los Estados nacionales.

Los estudios sobre la globalización requieren de un marco teórico sobre el que diversas áreas de estudio se reconcilien. Los fenómenos de la globalización están siendo estudiados desde diversos enfoques, tales como una época histórica, ideología, proceso, teoría, paradigma, etc., cada uno con diferentes significados. Pero lo que aquí interesa es estudiar la relación existente entre los procesos de gobernabilidad, los procesos de globalización y el desempeño económico, variables que se afectan entre sí debido a la complejidad mutua de sus relaciones. Bonaglia, Braga de Macedo y Bussolo (2001) sostienen que existe una relación entre globalización que afecta la gobernabilidad y el desempeño económico.

De acuerdo a estos autores, las conexiones entre el desempeño económico nacional que implica los niveles de ingreso per cápita y las tasas de crecimiento del producto interno bruto están estrechamente relacionados con la dotación natural de recursos y los niveles de productividad. A través del comercio, los flujos de capital y la migración, la globalización influencia la dotación de recursos disponibles en una economía y a través de las transferencias de tecnología internacionales se afecta su productividad.

Igualmente, las estructuras de producción y la dotación de recursos afecta el comercio con el resto del mundo. La buena gobernabilidad incrementa la calidad de su capital social, mientras que este evolucionan en formas democráticas de gobernabilidad y pueden invertir más recursos para construir instituciones que promuevan el desarrollo. Finalmente, se cuestiona como la globalización y la gobernabilidad interactúan para afectar el desempeño económico nacional.

El mercado considerado como un instrumento más eficiente de asignación de recursos, es la piedra angular de las teorías de los procesos de globalización. Sin embargo, ni el mercado ni el Estado son mecanismos perfectos para la asignación de recursos y ambos presentan fallas. Los procesos de globalización que se desarrollan actualmente profundizan el economicismo, por el cual las políticas económicas nacionales se van diluyendo en beneficio de una política económica internacional. Este fenómeno de la globalización constituye una inmensa ruptura económica, política, social y cultural, hasta cierto grado, inevitable. Esta inevitabilidad es dependiente de los movimientos sociales de resistencia y que realmente mantienen objetivos democráticos.

Sin embargo, el mercado no es un instrumento estratégico. Los procesos de globalización tienen como elementos comunes una reducción sustancial en los costos de transacción en las operaciones y en la emergencia de intercambios de los agentes de las diferentes naciones. En un sistema democrático, los intercambios entre los agentes económicos son costosos e inciertos, sobre todo si no se cuentan con buenos arreglos institucionales. Una fe ideológica en el poder de los mercados para resolver las disputas

sobre la asignación de recursos, conduce a negar la legitimidad del gobierno para involucrarse en la redistribución de la riqueza al pobre, lo que se convierte en irresponsabilidad gubernamental. Es en este sentido que se puede decir que al mercado gobierna y el gobierno administra, considerando que ambos presentan fallas como mecanismos para la asignación de los recursos.

Cualquier análisis sobre la globalización, necesariamente implica estudiar la naturaleza de las relaciones entre el sistema capitalista y la democracia, es decir, de una globalización económica y su relación con una globalización política. En el sistema imperial capitalista las empresas transnacionales combinadas con los Estados imperialistas dominan los mercados nacionales en donde los Estados pierden el control. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula.

El punto central de la globalización es su compatibilidad con la democracia y sus consecuencias económicas, políticas y sociales. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional.

La globalización es una etapa expansiva del sistema capitalista, con diferentes manifestaciones a periodos anteriores en los procesos evolutivos del capitalismo. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado. Los proponentes de la globalización son las naciones más desarrolladas y fuertes, las mismas que más se están beneficiando desproporcionadamente de los procesos. Estas mismas naciones son, la mayor parte de ellas, democracias que tratan de conseguir una mayor justicia social.

Todavía más, en vez de que la comunidad global completa se beneficie de los procesos de globalización, quienes más se benefician son ciertos grupos minoritarios que toman ventaja con la economía de mercado a favor de sus propios intereses para mantener un control sobre los recursos del planeta. Lo preocupante es que los procesos de globalización sólo benefician los intereses particularistas de algunas naciones en contra de una internacionalización orientada a intereses más universalistas. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Para estos grupos minoritarios con intereses hegemónicos, la participación democrática de las mayorías pobres constituye una carga pesada difícil de tolerar. En sí, los procesos de globalización solo privilegian a pocas naciones, y más específicamente a pocos agentes económicos quienes aprovechan los ámbitos en que avanzan estos procesos.

La globalización económica o apertura económica está relacionada con las prácticas de una economía capitalista basada en la liberalización del mercado mientras que la globalización política está referida a la práctica de los valores democráticos.

Visto desde la perspectiva global y a través de los lentes conceptuales de la integración contemporánea en la economía capitalista global, se ha reforzado, sino acentuado esta extrema desigualdad, así como las relaciones injustas de subordinación y dominación que mantiene y complementa esta desigualdad. La naturaleza de la integración regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo. La apertura económica ha sido posible a través del desarrollo del Estado de Bienestar y a través de los organismos supranacionales que regulan el comercio y las finanzas internacionales. Las relaciones de comercio y de mercados se delimitan en acuerdos entre los Estados, los cuales operan dentro de sus fronteras.

El modelo de Estado de Bienestar llevado a escala global o mundial es un proyecto que alienta el rescate de lo mejor de la sociedad humana en contra de declarar su desaparición para maximizar los intereses bursátiles de los grandes conglomerados corporativos transnacionales. El logro del bienestar es el fin último de la organización de cualquier sistema humano La globalización económica se refiere a la intensificación de las actividades económicas entre los individuos que viven en diferentes países del mundo.

La globalización pierde el interés en la conquista territorial del Estado-nación como en los tiempos coloniales, para concentrarse en el dominio de los mercados y las riquezas. La globalización ha acelerado los procesos de desteritorialización del estado para dar lugar a la emergencia de nuevas formas espaciales geopolíticas y geoeconómicas. Así el término globalización ha desplazado al uso del término colonialismo, a pesar de que la herencia colonial ha marcado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados. Estos problemas incluyen un pronunciado grado de explotación económica, desigualdad social y económica, injusticia social y política que ha caracterizado a la región desde los tiempos en que los indígenas pobladores de estas tierras fueron subyugados por la fuerza a la dominación colonial europea en el siglo XVI.

El debilitamiento del grado de territorialidad, sobre todo en materia de actividades económicas, es uno de los signos que caracterizan a la globalización Los procesos de globalización pueden ser vistos, en este sentido, como mecanismos de dominación que mantienen marginadas a naciones menos desarrolladas y que por lo tanto promueven un desarrollo muy desigual en el mundo.

Los mecanismos de dominación explican las relaciones de dependencia de unos países menos desarrollados a otros más desarrollados. Las elites transnacionales exportan un conjunto de valores que son consistentes con el liberalismo y el capitalismo estadounidense, a pesar de que se dan algunas contradicciones entre el funcionamiento del capitalismo y el liberalismo utópico. Las elites gobernantes de los países menos desarrollados generalmente han servido de intermediarias entre el poder externo dominante y la población local. Por lo tanto, las elites nacionales y locales de los negocios han abierto la puerta a las economías de las corporaciones transnacionales que están interesadas en mano de obra barata, recursos naturales, capital financiero y mercados de consumidores en los países latinoamericanos.

La globalización es un proyecto de las elites capitalistas que se apoyan en las agencias internacionales y en los Estado-nación para liberalizar una economía que es vista más en términos internacionales que nacionales. Por lo tanto, los mismos capitalistas rivalizan por lograr mayores beneficios de los procesos de globalización de los mercados. Las naciones que reciben mayores beneficios de la globalización son aquellas que han rechazado los postulados del "Consenso de Washington" para establecer su propio ritmo de crecimiento económico. Los procesos de globalización son vistos por las elites y los poderes dominantes como sus privilegios propios, y es en este sentido que constituyen un instrumento poderoso de homogeneización, destrucción y dominio.

Los gobiernos de los Estado-nación son controlados por elites corporativas y tecnócratas que establecen las agendas locales en materia económica, política y social. No obstante, los gobiernos de las naciones que son proponentes de la globalización y que más se han beneficiado de estos procesos, tratan de redistribuir la riqueza para obtener una mayor igualdad social, incluso si es necesario imponer a la fuerza el valor contrario de preservar las libertades individuales. Pero, la globalización económica está limitando y reduciendo el poder y las funciones de los gobiernos locales y por lo tanto, la capacidad de las mayorías para formular e implementar sus políticas públicas. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas son preferidas a aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible. Los gobiernos locales tienen un papel importante como agentes del desarrollo económico.

La democracia no está interesada en la participación popular para el establecimiento de la agenda de desarrollo económico, político y social, sino más bien en buscar la legitimación del proyecto económico puesto en boga por los políticos. Esta situación ha dado lugar a la degradación de sistemas democráticos, tipificados como democracias delegativas, las cuales se han implantado en muchos países, comparado con los ya establecidos en las democracias europeas.

El estudio de la relación entre democracia y desarrollo económico ha sido uno de los aspectos más debatidos en la segunda mitad del siglo pasado. Para muchos analistas la democracia es la verdadera condición del desarrollo. Por un lado quienes realizaron estudios cuantitativos transversales-nacionales que tendían a coincidir con la ecuación optimista de Lipset (1979) que establecía que a mayor desarrollo económico de los pueblos, más oportunidades para la democracia, y por otro quienes realizaron estudios histórico-comparativos. Convendría llamar a este tipo de democracia, la democracia económica, porque acepta que la democracia es uno de los requerimientos absolutos del desarrollo, es decir, se acepta el supuesto de que la democracia se logran solamente cuando el desarrollo soluciona los problemas materiales de la sociedad. Así, el concepto tradicional de democracia se ajusta a las condiciones de desarrollo del sistema capitalista.

Diamond (1992) reformula la ecuación optimista estableciendo que cuando mejor le va a la gente de un país, en promedio, mayores son las oportunidades de que favorezcan, encuentren y mantengan un sistema democrático. Las conclusiones de los analistas sobre la relación entre desarrollo económico y democracia son divergentes (Altman, 2001b).

Esto a pesar de que se conciba a la democracia como el sistema de gobernabilidad más conveniente para la resolución de conflictos y diferencias entre los diferentes actores económicos, políticos y sociales en un marco que privilegia la libertad individual. Los defensores del modelo económico neoliberal sostienen que si se eliminan las restricciones impuestas políticamente al desarrollo y se mejoran la rendición de cuentas y la trasparencia en la administración pública, los actores económicos tendrán libertad y mejores oportunidades para buscar retornos económicos. Los procesos de globalización afectan el funcionamiento del Estado, el cual es sometido a una reforma de la administración pública. Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica.

No obstante, conviene presentar las diferencias sistemáticas entre los modos de resolución de conflictos internacionales y transnacionales. Según Keohane y Nye (2000), la diferencia esencial entre la resolución de conflictos internacionales y transnacionales es que la resolución de conflictos internacionales accede a los procesos de adjudicación está limitado a los Estados, mientras que en la resolución de conflictos transnacionales, las partes que no son del Estado pueden presentar sus casos y abrir expedientes. Por ejemplo, la tendencia en los conflictos bélicos apunta a que estos se desarrollan más entre los diferentes grupos corporativos que entre los mismos Estados-nación.

En otras palabras, para usar la terminología académica tan en boga, el ascenso de la teleología de la democracia del libre mercado (Chua, 1998), que yo le llamaría la democracia económica, redefine el concepto de desarrollo de los pueblos, en los términos de una competencia por medio de la cual los individuos se controlan unos a otros. En un sistema imperialista, la competencia es estimulada por los mismos Estados imperialistas rivales. Al decir de Patras (2001d) la competencia "en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados".

Al decir de Patras (2001d) la competencia "en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados". En sentido se puede decir que en un proceso de civilización, los individuos aprenden a vivir en sociedad, a dirimir sus conflictos, independientemente de si se trata de un sistema capitalista o uno socialista. De acuerdo al análisis de Bivo (1946), "ser un demócrata significa, primeramente, no tener miedo: no tener miedo de aquellos que tienen diferentes opiniones, hablan diferentes lenguas o pertenecen a diferentes razas".

La competencia y no la colaboración o cooperación, es la regla universal del mercado. La competencia entre individuos, organizaciones, regiones y naciones es el concepto central de la doctrina neoliberal. Desde la década de los sesenta, la competencia se intensifica debido a la intensificación de las relaciones a niveles inter industriales e internacionales. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales.

La competencia es el motor exclusivo y único que hace andar al mercado en los procesos de globalización, y la convierte en la fuerza del desarrollo de los pueblos, pero sus

efectos son negativos en términos de destrucción del tejido social, la falta de solidaridad para resolver los problemas comunes a la colectividad. Involucrarse en la acción colectiva, los actores buscan traer el ansiado bien colectivo y dar forma a la colectividad con respecto al bien colectivo. Una vez que la acción colectiva se inicia, en el curso de este mismo proceso emerge una colectividad que puede aplicar sanciones informales contra los que contravienen y recompensar a colaboradores a bajo costo (castigo u ostracismo), a ningún costo e incluso a premio (avergonzar, reprochar o criticar). Esto hace pensar que para contrarrestar los efectos de los procesos de globalización económica actual, es necesario también globalizar la solidaridad.

La competencia o colaboración como mecanismos sociales sirven a diversos fines en cualquier sociedad. Argumenta Manheim (1951), que en la fase capitalista de un individualismo rudo y competencia como un principio estructural poderoso de organización social. En este sentido, por proteger los derechos individuales por sobre los colectivos, el sistema capitalista muestra una tendencia latente hacia el autoritarismo. Esto clarifica la pregunta de si la competencia capitalista, básica en la estructura social, necesita mantenerse como una presumible fuerza motivadora.

Se puede eliminar la competencia como un principio de organización de la estructura social y reemplazarla por la planeación sin eliminar las competencias como mecanismo social para servir a fines deseables. La dirección de una economía planificada responde adecuadamente a las necesidades de la población, la cual se refuerza mediante mecanismos democráticos. No obstante los mecanismos macroeconómicos de planeación centralizada y la agregación contable ha sido reemplazada por mecanismos microeconómicos de liberalización, desregulación y privatización.

El término desarrollo puede conceptualizarse como los procesos de transición de los pueblos hacia economías industriales, capitalistas y modernas, así como la obtención de mejores niveles de calidad de vida humana y bienestar material, considerado como la satisfacción de un conjunto de necesidades, deseos y temores. Elevar los niveles de calidad de vida de la población, lograr una sociedad satisfecha y sin asimetrías pronunciadas, requiere de mecanismos institucionales de gobernabilidad que se orienten a la asignación de recursos y bienes sociales.

La mejora de las condiciones de la calidad de vida de los individuos queda determinada solamente por el crecimiento económico, medido en términos cuantitativos del producto interno bruto (PIB) per cápita y consumo real promedio. Estos procesos de transición están caracterizados por la emergencia de sistemas democráticos (Karl, 1990; Karl and Schhmitter, 1991) en forma de transacción o por colapso del régimen, hasta alcanzar su consolidación. La democracia es en este sentido un régimen político.

La relación entre el mercado y la democracia, que denominamos la democracia económica, se acrecienta a medida que avanzan los procesos de globalización capitalista y que por lo tanto, alientan un mercado y una democracia global que presenta problemas si se le conciben de la misma forma que al nivel de mercado y democracia en el Estado nacional. Es en este sentido la afirmación de Soros de que los mercados votan todos los días y tienen sentido del Estado.

Mientras que la idea de una “democracia cosmopolita” resulta una mera utopía y la mercadización global ya es más una realidad, aunque la desigualdad entre los Estados nacionales es muy profunda que prácticamente hace imposible un avance conjunto. La supuesta teoría de la convergencia de la democracia y los mercados porque ambos se engendran recíprocamente, es falsa en la realidad, un dogma que no es demostrable en política y en los diversos modos de gobierno. Aceptar el enfoque del conflicto más que la convergencia entre la democracia y el mercado es más cercano a aceptar la realidad. La nula o poca convergencia entre el mercado y la democracia permite concluir que el desarrollo económico por medio de los mercados difícilmente es compatible con grados avanzados de democracia.

En lugar de la convergencia entre la democracia y el mercado, lo que resulta es una supeditación de la democracia al mercado, lo que debilita la legitimidad de los mecanismos democráticos, los cuales son reemplazados por consensos de grupos con intereses específicos. Si se acepta el enfoque del conflicto más que el de la convergencia entre el mercado y la democracia, es posible tener un acercamiento a la realidad de los hechos. Las formas de gobierno promovidos por el mercado y la democracia serían el resultado de las opciones políticas racionales.

La democracia se iguala al mercado y se fundamenta en la “razón” que privilegia la propiedad privada, es por tanto una democracia basada en calificaciones de propiedad privada que queda reservada a ciudadanos que además son empresarios. Frente a la concepción socialista moderna que ve un problema en la propiedad privada y prefiere una propiedad colectiva, Aristóteles consideraba, en efecto, que solamente lo que el individuo tenía como propio es aquello de que me se ocupa con más esmero. Aristóteles pensaría que estaba en la esencia humana el ocuparse más de lo propio que de lo común

Aristóteles no solo se preocupa por la defensa de la propiedad privada, sino la promoción, al mismo tiempo, de un uso en común. En esto difiere Aristóteles radicalmente de lo que se advierte en el capitalismo de mercado, con su mano oculta que todo lo arregla y sus sociedades anónimas. Pues lo que sucede en la sociedad moderna capitalista es que cada uno se ocupa de lo suyo también en el uso y se desentiende del prójimo. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado.

La *filautía* no debe ser enemiga de la *filía*. Aristóteles plantea (Libro II cap 5) la dos formas de economía agraria: en unos pueblos la propiedad de la tierra es individual, pero la cultivan y consumen comunitariamente y otros poseen y cultivan juntos y reparten el producto para uso individual (como hacen algunos pueblos bárbaros, dice). ?O es mejor que tanto la propiedad como el uso sean en común? se pregunta el filósofo. Cuando tenemos demasiadas cosas en común nos peleamos más, dice.

Son más profundas las desigualdades entre las naciones que la desigualdad dentro de las naciones, aunque sea cuestionada la correlación existente entre el impacto que la globalización tiene en la desigualdad mundial. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo

entero. Los dos componentes de esta desigualdad mundial son la desigualdad entre el promedio de ingreso de las naciones y la desigualdad dentro de las naciones. La desigualdad entre las naciones se centra en los determinantes de los ingresos per capita, mientras que la desigualdad dentro de las naciones se centra en los determinantes de factores de precios y su relación con el tamaño de la distribución del ingreso. Existe una relación entre los ingresos per capita y los flujos de capital.

Sin embargo, la conclusión sugiere que las diferencias de ingreso se están estrechando entre las naciones que han entrado en los procesos de globalización del mercado de bienes y otros factores, más que ampliarse (Lindert and Williamson, 2001). A pesar de ello, reportan el caso de los países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay) y el caso de cuatro gigantes asiáticos (China, India, Indonesia y Rusia) que registraron altos crecimientos en las diferencias de los ingresos después deque sus economías se liberalizaron. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados.

Para el caso latinoamericano, la explicación que dan es su contexto histórico, mientras que para el caso asiático, mencionan que la apertura comercial y a las inversiones extranjeras fue incompleta. Cualquier intento serio para explicar las desigualdades y las formas de ubicuidad de la injusticia que caracteriza a las sociedades Latinoamericanas inevitablemente conduce un examen crítico de las relaciones de explotación de producción y distribución capitalista que predomina en la región.

En las últimas dos décadas, casi cada aspecto mayor de la vida económica, política y social en Latinoamérica estuvo influida por la integración acelerada de la región en el sistema capitalista global. Junto con las elites locales y los capitalistas transnacionales han promovido mayores cambios estructurales en las economías latinoamericanas a fin de facilitar la creciente integración de la región en la economía global capitalista. La complejidad de la realidad social de Latino América contemporánea es quizás pensada como una complejidad híbrida de ideologías, prácticas y condiciones de la premodernidad, modernidad y postmodernidad.

Por lo tanto, argumentan, el incremento en la desigualdad parece basarse en la exclusión de una gran parte de la población de los beneficios de la globalización. La exclusión se manifiesta en comportamientos económicos y sociales negativos. El temor de que la globalización esté ampliando las brechas entre los pobres y los ricos es resultado de la creencia de que los inversionistas de los países ricos están rapando todas las utilidades de las inversiones internacionales de los países pobres. Así, un pequeño número de naciones desarrolladas o elites privilegiadas se enajenan en la abundancia de bienes de lujo, mientras que la inmensa mayoría de países carecen de los recursos básicos para proveer a su población de satisfactores esenciales para su subsistencia. Las sociedades nacionales se separan en ricos y pobres.

Además, se concluye que los ingresos mundiales todavía serán desiguales bajo una integración global completa, como lo son actualmente en cualquier economía nacionalmente integrada, pero serán menos desiguales en una economía mundial integrada

que en una segmentada. El comercio y las actividades económicas aceleran la integración y la interdependencia de los individuos, los grupos y las comunidades. Los procesos de globalización acrecientan los niveles de interdependencia entre los Estados y son en parte producto de acuerdos entre los Estados. Las relaciones de comercio y de mercados se delimitan en acuerdos entre los Estados, los cuales operan dentro de sus fronteras.

Sin embargo, se dan grandes disfuncionalidades entre las lógicas del mercado y la democracia, y más concretamente entre la lógica de las finanzas y la lógica democrática. Las disfuncionalidades del mercado limitan el uso efectivo de las asignaciones y los derechos sobre los recursos a un gran número de personas, lo que incrementa los niveles de pobreza. El despliegue de las finanzas en el ámbito global se caracteriza por sus niveles de cobertura e intensidad a tal punto que vulneran las políticas económicas de los Estados-nación.

De hecho, el problema con la democracia global no es un problema de falta de gobernabilidad, como resultado del debilitamiento del papel del Estado por los procesos de globalización económica, sino por la desigualdad que está creando entre los diferentes países y entre la población al interior de cada Estado, es pues una democracia de carácter económico. La democracia global concibe a los intereses privados económicos como los beneficiarios directos de la sociedad

La creciente desigualdad es una de las características estructurales de los procesos de globalización. Feenstra and Hanson (1999) estiman el porcentaje de incremento de la desigualdad debido a la competencia comercial, incluido el outsourcing, entre un 15 y un 33 por ciento. Por lo tanto, la cultura de desigualdad (Calderón, 2000) emergente se vincula a una concepción neoliberal que apela al mercado como el único, natural y eficaz distribuidor de las oportunidades de desarrollo.

La doctrina neoliberal incluye los puntos de la regla del mercado, la reducción del gasto público, desregulación, privatización de empresas públicas, cambio de percepciones de bienes públicos y comunitarios al individualismo y responsabilidad individual, libre comercio en bienes y servicios. Libre circulación de capital e inversiones. La mercadización se refiere al establecimiento de una economía de libre mercado, bajo la regla del libre mercado que protege la libertad de movimientos de capital, bienes y servicios, la liberación económica, la privatización y contractualización de la actividad económica, liberalización financiera y de inversiones y eliminación de controles de precios.

Esta retórica del mercado libre ha sido promovida por los ideólogos de la derecha y asimilada y repetida por los de la izquierda. La derecha ha aprovechado las circunstancias para promover activamente las funciones del Estado orientados por una política económica que benefician a la expansión de las grandes corporaciones transnacionales, la cual es precedida por una expansión militar y política de los Estados imperialistas. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

Los análisis de los movimientos del capital debe considerar los movimientos mismos del capital, los procesos de acumulación, así como los principales centros de ubicación,

organización y decisión. Los movimientos de capital de los Estados imperiales a los mercados emergentes se orientan a desestabilizar muchas de las veces los regímenes nacionalistas.

La democratización se refiere a las reformas políticas que introducen mecanismos esenciales para una mayor competencia electoral, modernización de partidos políticos y creación de nuevas instancias de representación ciudadana y una participación más abierta de la sociedad civil, así como una distribución más equitativa de la riqueza y un mejor equilibrio del ejercicio del poder en la comunidad. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. La sociedad local y regional es uno de los actores sociales que promueven el desarrollo en forma equitativa y equilibrada. Por lo tanto, es claro que para que exista una democratización de la sociedad, es necesario que exista primeramente una transformación socialista.

El debilitamiento de los partidos políticos está condicionado por los arreglos institucionales que delimitan los mecanismos, procedimientos y actores involucrados en los procesos de decisiones políticas. De acuerdo con Ayala (2001), el arreglo institucional es el conjunto de reglas que permite, a través de la negociación política, que los actores realicen sus intercambios económicos y políticos. Los arreglos institucionales acotan el oportunismo pero incentivan a los políticos para actuar con responsabilidad porque se obligan a hacer revelaciones de las restricciones y de los costos de las ofertas electorales que reciben.

El arreglo institucional facilita la coordinación de acciones y decisiones que permiten a los diferentes grupos sociales y agentes económicos recibir beneficios del desarrollo a través de las diferentes instituciones. La apertura creciente y la integración internacional de los mercados afecta tiene un impacto en las instituciones nacionales. Los arreglos institucionales y las negociaciones de los diferentes agentes económicos establecen las instituciones para asegurar sus beneficios, mediante la formación de diferentes configuraciones que facilitan las relaciones de complementariedad y de coordinación entre las instituciones, así como también la emergencia de nuevas formas de auto-coordinación.

Sin duda, que en el futuro aparecerán otras instituciones que suplan en sus funciones a los partidos políticos, pero que servirán de plataforma a los políticos para que medien entre las demandas de la ciudadanía global y los que formulan e implementan las políticas públicas en las organizaciones internacionales. Los partidos políticos son un medio de representación que afectan la gobernabilidad, y por lo tanto el sistema democrático, de tal forma que una buena representación promueve la gobernabilidad democrática, aunque no siempre lo que es bueno para la democracia es bueno para la gobernabilidad (Coppedge, 2000).

La preocupación por el estudio de la gobernabilidad democrática deriva de un interés por desarrollar las sociedades mediante la solución de sus problemas políticos y sociales, la estructuración de marcos de referencia político-institucionales que fundamenten los procesos de toma de decisiones y proporcionen las herramientas de operabilidad para los actores políticos estratégicos. Se tienen que considerar los factores contextuales como

variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

Los actores políticos, económicos y sociales estratégicos se apoyan en las estructuras del poder para ejercer influencia sobre las decisiones que favorezcan sus propios intereses, así como dar forma a nuevas configuraciones de clase. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición". Son los actores políticos estratégicos verdaderos operadores políticos que usando las estructuras institucionales existentes articulan intereses, agendas y recursos de actores sociales y agentes económicos en los procesos de toma de decisiones y formulación e implantación de políticas y estrategias.

Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva. Tanto los actores políticos, económicos y sociales estratégicos ejercen influencia a través de las estructuras del poder. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos.

Cualquier análisis del sistema global tiene que considerar el desarrollo del Estado democrático, por lo tanto, no solo por las instituciones democráticas existentes, sino también por un conjunto de valores y prácticas sociales más amplias. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado.

De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones democráticas cuyo poder se asegura mediante el "enjaulamiento" de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder. Por sí mismas, las instituciones democráticas no garantizan el éxito de la aplicación de las políticas públicas. Las políticas públicas se formulan en las instituciones del Estado en el poder legislativo, los programas del poder ejecutivo y las resoluciones judiciales, mientras la sociedad civil desarrolla sus mecanismos como los foros donde participan los ciudadanos para establecer sus demandas y validar sus actuaciones políticas.

Un Estado deja de ser democrático cuando tiene que sostenerse por la fuerza o mediante la supresión de los derechos democráticos. De acuerdo con Santa-Ana Godoy (2000), los diferentes impactos tecnológicos y económicos de los procesos de globalización y mundialización han provocado desequilibrios en las instituciones políticas de los Estados-Nación. Precisamente, los orígenes de la democracia están en el fortalecimiento de instituciones políticas de representación , la defensa de los derechos humanos, la existencia de fuentes de opinión, y la protección de los derechos humanos y colectivos de de los ciudadanos (Ortega Ortíz, 2001)

Los procesos de globalización conllevan cambios tecnológicos acelerados en las telecomunicaciones, la microelectrónica, biogenética, etc. Estos desequilibrios se

manifiestan en la urgencia del tiempo que demandan las organizaciones en su toma de decisiones frente a la lentitud del aparato político burocrático del Estado. Además, este aparato carece de tecnología de punta que responda a los desafíos de las organizaciones globalizadas y los impactos de los medios de comunicación alteran y posibilitan las expresiones de la participación ciudadana. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. Los procesos de globalización son en parte el resultado de la rapidez de los medios de comunicación que permiten la interdependencia entre los diferentes agentes y actores. Son los mismos medios de comunicación que satanizan al Estado.

Sin embargo, con referencia a una democracia global que vaya más allá del Estado nación, Held (1995) argumenta la construcción de una "democracia cosmopolita" con base en un complejo de instituciones organizadas bajo formas nuevas de gobernabilidad global cuya finalidad sea resolver problemas globales como la de los flujos económicos. Al decir de Haliday (1997: 23), ya se cuenta con un sistema de gobernabilidad global con muchas capas, aunque "uno de los problemas principales es el de resolver, a través de reformas, los efectos de un sistema que ha estado vigente durante varias décadas. ¿Cómo hacer que este sistema de gobernabilidad sea más efectivo, más justo, y más responsable frente a la cambiante situación internacional?". El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma.

La democracia global avanza bajo la concepción de que los intereses económicos privados son los beneficiarios de la sociedad. De hecho es la sociedad local y regional uno de los actores sociales para la promoción de un desarrollo más justo y equitativo. Esta democracia cosmopolita es también una democracia económica. Para que los flujos de capital en los mercados internacionales sean efectivos y transparentes, tienen que ser propiciados por instituciones que propicien la facilitación de la gobernabilidad global. Los Estados nacionales todavía desempeñan un rol importante en la promoción y conquista de los mercados internacionales y en la protección de los mercados internos.

La regla principal del juego en los mercados internacionales es la competitividad en el nuevo ambiente de la globalización. Por definición, la competitividad se encuentra inextricablemente ligada a los procesos de globalización. Para Porter (1991), la competitividad, las empresas tienen que competir en un entorno formado por cuatro atributos que estimulan o limitan la creación de ventajas competitivas. Estos atributos son la disponibilidad de los factores de producción, la demanda interna, la estructura y estrategia de la rivalidad de las empresas y los sectores conexos.

La concepción cosmopolita de un gobierno democrático concibe al ciudadano como persona dentro del Estado, pero, además, capaz de mediar entre una diversidad de tradiciones nacionales, comunidades políticas y estilos de vida alternativos" Es precisamente la diversidad una de las características de los tiempo actuales, y su reconocimiento es una contribución a la riqueza de las sociedades contemporáneas. La

globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. En los principios de la diversidad se acepta el ejercicio de la democracia que no admite excepciones.

El planteamiento de una democracia global acepta la existencia de limitaciones y déficit democráticos a niveles nacionales y locales, lo que dado lugar a la degradación de los sistemas democráticos, lo que se ha tipificado como una democracia delegativa o democracia limitada. La concepción de la democracia global imprime los beneficios de la sociedad a favor de los grandes intereses económicos privados. El concepto de democracia tradicional ha sido abandonado para reelaborar uno nuevo que apoye y mantenga el sistema capitalista.

La falta de políticos intermediarios es parte del déficit democrático de las instituciones locales, nacionales e internacionales. Las instituciones locales tienen el reto de intervenir con sus funciones en las actividades económicas. Consubstancial a los procesos democráticos es la homogeneidad de los pueblos, pero la realidad mundial es otra muy distinta. Los Estados nacionales presentan diferencias profundas en sus niveles de desarrollo económico y social, en niveles de riqueza y sus valores, etc., como para que tengan las mismas consideraciones con respecto al sistema democrático.

No obstante, la teoría de Rustow (1970), ningún nivel de desarrollo económico es prerrequisito para el establecimiento de instituciones democráticas sino más bien el sentimiento y compromiso de unidad nacional entre los diferentes estamentos sociales pero más significativamente, la disposición entre las elites para pactar acuerdos de transición. Las estructuras económicas y sociales de las sociedades duálicas estamentarias se sustentan en principios morales, religiosos y jurídicos para justificar las diferencias y desigualdades entre los diferentes estamentos.

Lipset (1979) ha dicho que cuando mejor le va a un país en términos económicos, mayores son las oportunidades de mantener gobiernos democráticos. Las deficiencias de los procesos democráticos en el ámbito nacional son evidentes y de acuerdo a ciertos analistas, pueden ser subsanados mediante la creación de instituciones democráticas a mayor escala y conectándolas a las formas locales de participación. Consecuente con esta línea de análisis, no existe un determinado nivel de desarrollo económico que sea determinante de la democracia (Przeworski y Limongi (1997).

Los problemas en la realidad, son que estas instituciones supranacionales no ejercitan la democracia necesariamente aunque si la exigen a los Estados-nación, a los que vulneran su soberanía política. El concepto de soberanía del Estado se está volviendo obsoleto ante los avances de las instituciones transnacionales en una economía globalizada. No obstante, es importante establecer las denuncias a esta economía global. El poder y la soberanía de los Estados-nación se contrae y se transfiere a instancias supranacionales y locales.

La nueva soberanía global está al cuidado de los intereses hegemónicos., cuyas aspiraciones globalifílicas tienen pretensiones totalitaristas. Las diferencias de intereses de

clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Castro (1989) pronosticó que “La aceptación del principio de intervención universal por una sola potencia, es el fin de la independencia y la soberanía en el mundo” Este supuesto del derecho de intervención se justifica por la defensa de la democracia, por razones humanitarias y en nombre de los derechos de los pueblos. La soberanía sufre un proceso de reformulación que los Estados no pueden decidir aisladamente, sino desde perspectivas comunes a todas las naciones. Por lo mismo, hay un interés creciente por encontrar otras formas de gobernabilidad, tales como otros arreglos de federalismo, para dar acomodo a la pluralidad nacional o multinacionalidad.

Los sistemas económicos están en constante transformación, al igual que los sistemas políticos basados en los Estado-nación se están disolviendo aceleradamente, y en muchos de los casos, están generando al interior de la sociedad, conflictos, caos y contradicciones con serias rupturas intra nacionales e internacionales. Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional. Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional.

Los sistemas políticos de baja institucionalidad se caracteriza “por la falta de jerarquía y de separación nítida entre la arena constitucional y la de la acción colectiva”, así como por “la falta de una arena central (y centralizante)de mediación de conflictos, separada de otras, en la cual los actores políticos puedan realizar intercambios de forma rutinaria”, tercero, “por la ausencia de reglas de carácter inter-temporal que rigen intercambios entre actores en el proceso de formulación de la ley, que trascienda las mayorías temporales”, cuarto “por la falta de actores institucionales con capacidad de veto que sean legítimos y ampliamente respetados, entre ellos un poder judicial independiente que acate la regla de res iudicata”; quinto, por “agencias públicas que carecen de contornos claros y que por lo tanto no pueden defenderse fácilmente frente a transgresiones de otras” (O’Donnell, 1998)”; sexto, “por discresionalidad generalizada en la aplicación, interpretación y alcance de la ley contraviniendo el espíritu del Estado de derecho, esto es una sociedad de reglas estables y derechos aplicados con imparcialidad a todos los ciudadanos” (Feldman, 2001:9-11).

La economía se propone como tarea el entendimiento de los fenómenos mediante la construcción de modelos que formalizan la realidad económica. El hecho de que la economía sea una fuente recurrente de conflictos sociales, corresponde a la política resolver las tensiones que resulten. La política tiene la capacidad para consensuar cualquier conflicto que se suscite porque su racionalidad, entendida como la forma de gobernar una nación, garantiza el ordenamiento de los intereses privados de la sociedad civil

Las transformaciones de la tecnología de la información y de la economía mundial cuestionan los marcos de referencia teórico-metodológicos de las ciencias sociales y económicas para dar surgimiento a una "nueva economía global". Así por ejemplo, las explicaciones en las ciencias sociales y políticas son hechas alrededor de mecanismos, como los costos de transacción, más que de teorías generales. Los “costos de transacción”

resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos.

Las posibilidades innovadoras de una tecnología de la información que abarató los sistemas de comunicación y que reforzó la generación de transacciones virtuales que incidieron en el auge de una nueva economía, vinieron a reforzar la idea de que las fuerzas del mercado globalizador traería beneficios para todos. La tecnología de la información representa una fuente de inestabilidad económica y crisis financieras. La nueva tecnología de la información se encuentra supeditada y subordinada a los intereses expansionistas del imperialismo mercantilista contemporáneo.

Tanto la tecnología como la globalización se encuentran inextricablemente ligadas a campetitividad, aunque Petras (2001c) demuestra que la productividad fue mayor antes de la "edad de la información" que durante esta. La economía mundial se está globalizando rápidamente en los últimos dos siglos, integrándose en una economía global. Ésta puede existir por sobre los Estados-nación, a los que se encuentra, además, íntimamente interconectada en una compleja interrelación y por los que existe, debido a las políticas que persigue y las formas institucionales que adopta.

Una economía global es diferente a una economía mundial, es una economía con la capacidad para trabajar como una unidad en tiempo real en una escala planetaria. Ha sido después de la última parte del Siglo XX que la economía mundial fue capaz de convertirse en una economía global, sobre la base de una nueva infraestructura proveída por las tecnologías de la información y el conocimiento (TICs) y las tecnologías de la comunicación emergentes. Estas tecnologías han dado forma a lo que se denomina la sociedad de la información y son las principales fuentes del aumento de la productividad porque aceleran los procesos de innovación tecnológica, la flexibilidad organizacional de los sistemas de producción y el aprovechamiento de las economías de escala. Es importante relacionar los procesos de globalización económica con la sociedad de la información, aunque se trata de dos fenómenos diferentes.

La economía global, argumenta Soros (1998) "no se caracteriza sólo por el libre tránsito de mercancías y servicios sino, sobre todo, por el libre tránsito de ideas y de capital…pero la globalización de los mercados financieros ha cambiado hasta ser irreconocible…así que para hablar de la economía global sería más apropiado hablar del sistema capitalista global". De hecho, las naciones que tienen los mercados financieros reglamentados son los que han alcanzado mejores tasas de crecimiento. Los proponentes del desarrollo financiero están en lo correcto cuando restringen sus conclusiones a las economías de mercado desarrolladas. Los procesos de globalización obedecen a imperativos del sistema capitalista que requieren expandirse para operar en mercados cada vez más amplios, de tal forma que no solo garanticen su propia reproducción, sino también su crecimiento.

Investigaciones recientes (Dollar and Kraay, 2000) han encontrado una correlación positiva entre el libre comercio y el crecimiento económico, a pesar de que se puede criticar que las reformas han ido más allá de los cambios en la participación en la economía global, de tal forma que no se puede aislar el efecto independiente del libre comercio. Sin embargo, el crecimiento económico no ha ocurrido igualmente para todos, debido a las diferentes

condiciones sociales, políticas, culturales, etc., determinantes y a otros factores como las presiones de la población sobre los recursos escasos.

Los componentes de esta economía global son los flujos comerciales, de información y de capitales. Los flujos de capitales se orientan hacia donde existen recursos naturales abundantes, poblaciones jóvenes y abundancia de capital humano, en lo que se conoce como la paradoja de Lucas (Lucas, 1990).

Por lo tanto, esta "nueva economía global" con características multi civilizacionales ya presenta serias disfunciones causadas en parte por los grandes volúmenes de capitales volátiles que remolinean a su alrededor, lo cual provoca crisis financieras en los países en desarrollo que son los más vulnerables debido a que se presenta una sobreproducción global en la economía real. La estrategia de reproducción del sistema capitalista es dual en donde los actores hacen y no hacen sucesiva e interrumpidamente algo (Barel, 1989).

Al respecto, Ramos (2001) concluye que las respuestas adaptativas de los actores sociales atrapados en las redes de poder, consisten en apostar por estrategias dobles que permiten construir contraintuitivas identidades paradójicas, con lo cual los actores logran reproducir las redes, consolidarse y "enjaularse" e "incapacitándose para romper la lógica perversa que la anima". Los Estados imperialistas desempeñan un papel importante en la gestión de las crisis financieras y económicas de los Estados menos desarrollados y de aquellas empresas transnacionales que entran en problemas financieros.

Algunos analistas defensores de los procesos de globalización económica sostenían que la nueva economía sustentada en la revolución científico-tecnológica, "ya no estaba sometida a crisis cíclicas " (Petras, 2001c). Apreciaciones que la realidad ha demostrado ser falsas, porque la coincidencia de las crisis estructurales y cíclicas han derivado en recesiones económicas. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

Algunos analistas afirman que las crisis financieras actuales solo reflejan la crisis del neoliberalismo y que por lo tanto, su final ya se puede anunciar. Las crisis financieras son tan viejas como los mercados financieros. No obstante, desde la Segunda Guerra Mundial, la economía global es más inestable que nunca antes. A partir de esta guerra, los procesos de integración han pasado por dos etapas.

La primera inicia con los acuerdos de Bretton Woods para regular los flujos internacionales de capitales y establecer las tasas de cambio. La ideología del liberalismo fue el fundamento para la creación de las instituciones de Bretton Woods. Estos cambios estructurales y los intereses mutuos de estas alianzas son puestas en ideología neoliberal, la cual tiene sus raíces ideológicas en los siglos XVIII y XIX en los pensadores liberales tales como Adam Smith y Jhon Locke.

Estas instituciones internacionales surgieron bajo la forma del modelo de clubes con miembros que representan los intereses de las naciones más avanzadas, para gobernar ciertas áreas económicas, políticas y sociales a escala global. Las diferencias de intereses de

clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Los siguientes 25 años al término de la Segunda Guerra Mundial fue una época de crecimiento sostenido (1945-1970) que dio lugar a dos décadas de restos económicos, políticos y sociales dentro de una economía política cambiante.

Entre 1940 y 1970 se impulsan programas de desarrollo nacional orientados a eliminar las desigualdades económicas y sociales, aunque se benefician más las clases medias urbanas que las pobres rurales. El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido de los beneficios.

En la segunda etapa más identificada con la globalización, la expansión financiera se propagó y se profundizó con la crisis de las instituciones del sistema monetario internacional y los acuerdos de Breton Woods. La expansión del capitalismo se efectuó a través de la organización de la sociedad, el modo de producción y el poder político en los espacios coloniales. De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso.

En cada nueva fase de expansión del capitalismo, las grandes corporaciones transnacionales han requerido del apoyo de los Estados imperiales para repartirse los mercados internacionales. Previa a la expansión de las corporaciones transnacionales en los mercados internacionales se requiere la expansión militar y política de los Estados imperiales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

La herencia colonial ha marcado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados. Por lo tanto, en las últimas tres décadas, desde la crisis económica mundial de 1972-73, que se pueden identificar como el período de intensificación de los procesos de globalización, coinciden con períodos de crisis generalizadas del capitalismo, un capitalismo que ha sido bautizado como capitalismo tardío o neocapitalismo.

De hecho, los problemas contemporáneos de la globalización, la expansión del capitalismo tardío o postmoderno han agravado los más crónicos problemas como en el caso de la región latinoamericana. En las últimas dos décadas, casi cada aspecto mayor de la vida económica, política y social en Latinoamérica estuvo influida por la integración acelerada de la región en el sistema capitalista global. La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas.

El capitalismo de mercado considerado como sistema económico se define como “la propiedad privada de los medios de producción y el sistema de precios como mecanismo

para la asignación de la producción y distribución de los recursos", de acuerdo a Villareal (2000).Así, al final del siglo pasado se alcanzó un volumen del comercio comparativamente similar al alcanzado en los inicios del mismo siglo, si se considera con relación al tamaño de la economía global, pero con una diferente configuración de los flujos comerciales. Esta configuración ahora consiste en flujos de manufacturas que son manejados por las grandes empresas multinacionales y orientadas hacia los países más desarrollados.

Atendiendo a los análisis de los ciclos económicos de larga duración, la tendencia es descendente y depresiva, cuyos efectos se manifiestan en un crecimiento estructural lento, incremento de las tasas de desempleo y de las desigualdades, descenso de los niveles de vida, etc. Estas medidas han afectado adversamente el ingreso y los estándares de vida no solo de las clases más bajas sino también de importantes sectores de las clases medias. Una desigualdad en los niveles de vida entre los diferentes Estados-nación y dentro de cada de ellos, domina el esquema de la economía global, al no poderse recobrar los niveles de igualdad alcanzados en las primeras etapas de los procesos de globalización.

Se considera que la liberalización comercial trae más beneficios a las economías de los países del tercer mundo que a las economías de los países industrializados y que los efectos son mayores cuando se integran a la economía mundial. Los países altamente industrializados compiten entre sí en los mercados globales donde tienen que gestionar sus propios asuntos. El imperativo de los países industrializados de promover el desarrollo industrial para un crecimiento económico ha debilitado la sustentabilidad. La modernización puede lograr la sustentabilidad social si se acerca a los fundamentos culturales de la sociedad. Maximizar los beneficios y minimizar el impacto de los eventos negativos se ha convertido en un asunto colectivo. Los beneficios son mayores entre los países de altos ingresos, como los de la OCDE que entre los países pobres.

En general, los defensores de la globalización, como Lindert y Williamson (2001) argumentan que la globalización favorece a todos los participantes, especialmente aquellos quienes se encuentran en industrialización y penaliza con el rezago a aquellos que deciden no participar, al grado de considerar las barreras comerciales como malas para aquellos países en desarrollo. Los países que liberalizan los factores domésticos del mercado, los mercados domésticos de mercancías y se establecen los derechos de propiedad. Este tipo de políticas incrementa los ingresos, concluyen.

Las últimas dos décadas han sido un periodo de turbulencias y complejidades en el ambiente económico, político, social, tecnológico y cultural, dando origen a cambios transformacionales a niveles de escala local, nacional, regional y global. Las transformaciones económicas locales y regionales, por ejemplo están involucradas con las transformaciones en la misma estructura económica regional, en los cambios de las políticas económicas nacionales y los procesos de globalización económica.

Este proceso de globalización denominado por Held (2000) como el "período contemporáneo" también produce profundos cambios económicos, políticos y sociales con implicaciones directas en las interconexiones nacionales, regionales y globales mediante una nueva configuración del Estado-nación. Los cambios se efectúan en los sistemas y modos de producción, en los modos de hacer política y practicar la religión, en fin en todos

los aspectos de la vida. Todos estos cambios implican transformaciones como la transnacionalización de programas de defensa y seguridad, de regulación del medio ambiente, telecomunicaciones, etc.

La velocidad del cambio es el signo que distingue esta fase de la historia del comercio de las épocas anteriores y lo que hace difícil que los pueblos globalizados se adapten. La globalización representa una configuración coyuntural de varios procesos históricos. Las crisis financieras que han resultado de los cambios acelerados de una globalización corporativa, ha sido defendida por los que están en favor de estos procesos. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera. Se argumenta que se deben a las prácticas anacrónicas en los mercados domésticos que requieren más cambios profundos en la liberalización de los mercados, cuando es precisamente esta liberalización una de las causas de los estragos económicos que han causado a algunas economías.

Los proponentes de la liberalización comercial están motivados por una agenda de ganancias rápidas, diferente a la agenda nacional que desea equidad y uso sustentable de los recursos que garanticen un incremento en la calidad de vida de sus ciudadanos, la cual se sacrifica en nombre del progreso. La elevación de los niveles de calidad de vida y lograr una sociedad satisfecha y sin asimetrías, es viable con la instrumentación de mecanismos institucionales que promuevan la gobernabilidad mediante una asignación equitativa de los recursos y bienes sociales. El modelo de desarrollo supedita la mejora de las condiciones de la calidad de vida de los individuos al crecimiento económico. Este crecimiento económico está más referido a la medición cuantitativa del producto interno bruto (PIB) per cápita y al consumo real promedio.

Las decisiones en torno al uso de los recursos se toman a corto plazo siempre en beneficio de pocos en lugar de a largo plazo y en beneficio de todos. En materia comercial, por ejemplo, los países en desarrollo establecen sus propias agendas para las negociaciones comerciales por lo que demandan mayor acceso a las exportaciones que son más sensitivas para los países ricos. Por lo tanto, las agendas de los países más avanzados pueden ser totalmente diferentes a las agendas de los países más avanzados.

Es necesario administrar el avance de la liberalización de las economías que tienden a la formación de las economías globales. Avalar o simplemente forzar la apertura de las barreras del mercado y dejar que éste haga su trabajo por sí sólo, es abandonar a las gentes que están en situaciones y posiciones de desventaja para que el mercado determine sus destinos. La globalización implícitamente presenta la alternativa en la que la política liberal sea reemplazada por las barreras al comercio y a la migración. La política liberal es un término diferente a economía liberal. La política liberal se relaciona con los temas sociales, mientras que la economía liberal se relaciona con la liberalización de los mercados y la liberalización de las finanzas. La política liberal representa la orientación progresista y flexible del manejo de la política social.

La vulnerabilidad a las crisis bancarias y monetarias se incrementa con la liberalización financiera externa e interna. La liberalización externa permite la entrada indiscriminada de capitales entrar a la economía emergente, los que en un ambiente de liberalización financiera interno, se destina a proyectos productivos o especulativos. Se calcula que el 98% de aproximadamente $1.500 billones de dólares que se mueven diariamente son flujos especulativos y sólo el 2% son transacciones de bienes y servicios. La relación existente entre la vulnerabilidad de un país a los mercados internacionales, con respecto al tamaño de la base de impuestos del programa social es positivo, no negativo, por lo que los países con una mayor vulnerabilidad a los cambos del mercado global tienen tasa impositivas mayores, más gasto social y más amplias redes de seguridad (Rodrik, 1997)

Esto da una idea del inminente peligro que representan los flujos especulativos para las economías más débiles. Los altos niveles de especulación de los flujos financieros debilitan las estructuras del sistema económico y vulneran las estrategias económicas mismas de los poderes económicos hegemónicos. Obviamente, la liberalización financiera no tiene que conducir inevitablemente a la crisis, pero si aumenta las posibilidades de una crisis, la que puede ser disminuida por las políticas gubernamentales. Las crisis monetarias se caracterizan por una disminución de las reservas de divisas o cambios extranjeros y por una elevación de las tasas de interés a corto plazo, ya sea por sí mismas o en combinación con una devaluación.

La escala global de estos cambios connota la naturaleza multidimensional del fenómeno, pero también lo holístico, la actividad integrada, la búsqueda de las relaciones en los elementos de los sistemas complejos. La complejidad y causalidad entre las relaciones de las variables, mercados globales, instituciones, gobernabilidad, y el desempeño económico, son difíciles de determinar. Los efectos de la globalización en la gobernabilidad y en el desarrollo económico toman en cuenta factores múltiples.

Todo sistema tienen objetivos determinados por las necesidades, deseos e intereses de los subsistemas que a su vez requieren de la transformación de insumos, organización y medios de trabajo. Expresiones de la teoría general de los sistemas que sirven de marco conceptual y teórico de la gobernabilidad, se encuentran en desarrollos de las teorías generales de precios y de la producción o procesos de transformación que vinculan los insumos a los productos mediante la participación de tecnologías, administración y organizaciones. El carácter multidimensional se expresa en diversas formas y trayectorias.

Ni la teoría de las relaciones internacionales, ni tampoco la teoría de la democracia alcanza a establecer un marco de referencia que sustente la conceptualización como la práctica del desarrollo democrático de los pueblos y sus relaciones con el capitalismo moderno o neocapitalismo, bajo un contexto global, a pesar de su potencial latente de autoritarismo. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

El Estado-nación sigue siendo el principal protagonista y actor de las relaciones internacionales y sigue siendo el principal sujeto que ocupa un espacio que da contenido a

la nación con sus propias instituciones e instrumentos para organizar el sistema económico, político, social, jurídico, etc. El espacio nacional se delimita en términos territoriales de bloques en serie definidos por las fronteras físicas y geográficas en donde ocurren fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales. Estas características también delimitan los espacios soberanos en función de las unidades de espacios nacionales.

En este espacio nacional se desarrollan los fenómenos geopolíticos, los cuales al avanzar hacia niveles superiores adquieren relevancia los fenómenos geoeconómicos. El desarrollo democrático supone que la democracia es verdaderamente la condición del desarrollo. Este contexto global delimita la estructura del sistema global en el cual las instituciones realizan interacciones, incluyendo al mismo Estado nacional, a partir de un sistema internacional. La estructura espacial de las unidades geográficas delimitadas por territorios físicos y geográficos delimitan las formas de interacciones entre las diversas entidades.

Friedman (1999) considera a la globalización no como una mera tendencia sino como un sistema internacional que da forma a la política doméstica y a las relaciones exteriores de cualquier país y que involucra la integración inexorable de los mercados, Estados-nación y tecnologías, lo que permite a los individuos, corporaciones y Estados-nación llegar más lejos en el mundo, rápido, profundo y barato, de tal forma que produce reacciones violentas en aquellos que son brutalizados o quienes se rezagan.

La idea detrás del capitalismo de libre mercado que deja a las fuerzas del mercado gobernar, de tal forma que a medida que más se abre la economía al libre comercio y a la competencia, la economía se vuelve más eficiente. Al decir de Patras (2001d) la competencia "en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados". Las relaciones de comercio y de mercados se delimitan en acuerdos entre los Estados, los cuales operan dentro de sus fronteras. La globalización significa que los países del mundo adoptan el capitalismo de libre mercado, el cual tiene sus propias reglas para la apertura, la desregulación y la privatización de la economía. La retórica del libre mercado ha sido promovida por los ideólogos de la derecha y repetida y asimilada por los de la izquierda. La derecha ha aprovechado las circunstancias para promover en el beneficio de las grandes empresas transnacionales las funciones del Estado orientadas por una política económica.

No obstante, el libre comercio en el Estado imperial se basa más en criterios políticos que económicos, los cuales se instrumentaban mediante prácticas selectivas que permiten a las corporaciones transnacionales practicar el fundamentalismo del mercado en los países menos desarrollados. En el sistema imperialista, las empresas transnacionales combinados con los Estado imperialistas dominan los mercados nacionales en donde el Estado pierde su poder, y se reparten los mercados internacionales ampliando sus capacidades de influencia y poder.

Petras (2001d) argumenta que el Estado todavía sigue jugando un papel profundo y extendido en la conquista de mercados exteriores y en la protección de los mercados locales. De hecho, argumenta que el Estado-nación en sus diferentes formas, ya sea imperial o neo-colonial, "ha multiplicado y expandido su actividad, lejos de ser un anacronismo, el estado se ha convertido en un elemento central en la economía mundial y

en el seno de los estados-nación", aunque sus actividades y funciones varían de acuerdo a "su carácter de clase".

Estos problemas incluyen un pronunciado grado de explotación económica, desigualdad social y económica, injusticia social y política que ha caracterizado a la región desde los tiempos en que los indígenas pobladores de estas tierras fueron subyugados por la fuerza a la dominación colonial europea en el siglo XVI. El cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra.

La herencia colonial ha marcado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados. El Estado imperialista "es particularmente activo en lo que respecta a la concentración del poder en el interior de la nación y en su proyección exterior con la ayuda de una gran variedad de instituciones, circunstancias económicas y políticas y mediante el establecimiento de vastas esferas de influencia y dominio" (Petras, 2001d)

Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. El poder del Estado imperialista se extiende a las instituciones financieras internacionales, mediante apoyos financieros, nombramiento de sus líderes y asignación de funciones y tareas que benefician a las empresas transnacionales. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación.

La expansión política, económica y militar ha dado lugar a un nuevo orden mundial dominado por un Estado imperial cuya centralidad se evidencia en áreas fundamentales de "actividad político-económica, cultural y económica que refuerzan la posición de los poderes imperialistas, particularmente los de USA", según Petras (2001d). Esta expansión militar y política siempre precede a la expansión de las corporaciones transnacionales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales En este nuevo orden económico mundial adquieren relevancia las estrategias de desarrollo centradas en la eliminación de la política social y en la descentralización de funciones.

Efectivamente, los procesos de descentralización impulsados por el sistema capitalista son inherentes a su propio desarrollo en las circunstancias actuales de trasnacionalización de la economía y los mercados en donde el Estado nación, que una vez fue funcional para su expansionismo, ahora es el principal estorbo. López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una "propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y social lo permiten y, presionan en su favor." Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las

preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica.

La expansión del capitalismo se realizó a través de la organización de la sociedad, el modo de producción y el poder político en los espacios coloniales. La herencia colonial ha marcado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados. Por lo tanto, la estructura actual del sistema internacional se entiende a partir de la evolución de las características de sistema internacional capitalista.

Como un mecanismo económico, el capitalismo puede ser adoptado como un instrumento democratizador que posibilita legitimar un gobierno. En la sociedad moderna hay un conflicto latente entre capitalismo y política. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado.

La política exige por lo menos un uso comunitario sometido a reglas que se regulan por leyes, desde el impuesto obligatorio a las reglas de tráfico, pasando por la reglamentación de la construcción, el comercio etc. El capitalismo como ideología adoptada por el liberalismo político, posibilita una interpretación económica y política del individuo y la sociedad mediante la fundamentación de una ideología empresarial. No obstante que existen algunas contradicciones fuertes entre el liberalismo utópico y el funcionamiento del capitalismo.

La diferencia entre socialdemocracia y liberalismo es que éste quiere la menor intervención política posible (dejando a la regulación del mercado la tarea de poner orden) y la socialdemocracia tiende a regular la mayor cantidad posible de aspectos de la vida humana. En este tira y afloja estamos entre unos regímenes y otros y entre unos períodos históricos y otros. Un liberalismo absoluto en el que el Estado solamente se ocupe del ejército y la policía no es hoy ya sostenible. La sociedad moderna es demasiado complicada para carecer de reglas de juego. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. Por otra parte estamos viendo desaparecer la regulación colectiva de muchas funciones que hasta no hace mucho considerábamos comunes: las compañías telefónicas, el correo, los ferrocarrilles, etc.

Toda ideología permite la generalización en los ambientes complejos en los que operan y de los que no tienen un conocimiento completo, sino incierto, en esta era del conocimiento. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado.

Esta ideología empresarial está basada en motivaciones que alientan la persistencia en el trabajo, la vida austera, la lucha por el avance material, la rendición de cuentas del individuo hacia sí mismo, hábitos de autorregulación y dirección personal, etc., propias de la ética protestante del trabajo descritas por Weber. Mientras que el liberalismo político

abre la puerta a la rivalidad y competencia política entre los partidos para la obtención de recursos financieros mediante métodos no muy legítimos.

Al ritmo que progresa los procesos de globalización, las fuerzas liberales tienden a concentrase en las organizaciones multinacionales. La globalización es también considerada como una ideología que tiene por objeto liberar a las economías en un mundo dominado por las organizaciones transnacionales, las cuales incursionan las áreas de competencia que antes eran exclusivas del Estado-nación. Normalmente se piensa que la democracia es local y que a los individuos de una localidad les corresponde tomar decisiones, es decir, la democracia mantiene las decisiones en el ámbito puramente local. Esto es, la democracia es un proceso activo.

La teoría de la democracia interceptada con el enfoque de la economía política internacional comparativa para analizar el fenómeno de la globalización, tal como lo conceptúan las agencias internacionales, como el Banco Mundial, tiene muchas limitaciones. La principal es que ofrece un marco de referencia opuesto, de acuerdo al análisis de Birchfield, (1999) quien examina la globalización económica neoliberal desde la perspectiva de la teoría de la democracia y, además, critica la ideología del mercado para deslegitimar el pensamiento político como un punto de partida para la acción democrática.

La nueva economía política se enfoca al crecimiento económico prioritariamente y a la calidad de la gobernabilidad democrática. La ideología neoliberal que fundamenta la economía capitalista impulsa los procesos de globalización. La promoción de esta ideología es de hecho un producto de la estrategia global contemporánea de las transnacionales así como de las políticas de las administraciones de Reagan, Bush y Clinton en los Estados Unidos y de Thatcher y Major en Inglaterra

Otros analistas critican que la democracia haya triunfado en los Estados-nación que han dejado de tomar decisiones en asuntos que son importantes para ellos. Las decisiones en materias de políticas públicas se han transferido del ámbito público de los Estados nacionales al ámbito privado internacional de los organismos internacionales que representan a los grandes intereses transnacionales y que transgreden las fronteras de los estados-nación. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

Las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales controlan los comportamientos locales mediante la aceptación o rechazo de las acciones de los actores y definen la ideología dominante en principios de libre mercado y competitividad, los cuales introducen aparentemente como resultado del interés colectivo de la ciudadanía. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula. Esta corporaciones transnacionales se reparten los mercados internacionales apoyados por los estados imperiales, para aumentar su influencia y poder.

Para promover la expansión territorial en la globalidad de las grandes corporaciones transnacionales estadounidenses y europeas, el poder financiero hegemónico a través del

Estado imperial ataca las limitaciones políticas y culturales de los Estados-nación que representen ser obstáculos a su objetivo. En cada nueva fase de expansión de las grandes corporaciones transnacionales se ha requerido del apoyo de los Estados imperiales, los cuales efectúan primero la expansión militar y política. Así, los procesos de globalización aceleran los procesos de desterritorialización del Estado nacional para dar lugar a la emergencia de nuevas formas espaciales de unidades territoriales geopolíticas y geoeconómicas.

Las estrategias de crecimiento internacional de las corporaciones se orientan a la creación de verdaderas corporaciones globales mediante la adquisición de empresas nacionales y locales en todos los países del mundo para expandir sus objetivos corporativos. Las corporaciones globales constituyen grupos de empresas transnacionales y multinacionales cuya localización no está delimitada a una nación en específico, sino que puede estar en todos los Estados-nación donde hay apertura comercial, pero generalmente sus centros corporativos donde se toman las decisiones más importantes se localizan en los Estados imperialistas (Estados Unidos, Unión Europea y Japón) con los cuales actúan en sinergia. De acuerdo a Petras (2001d), la movilidad se basa en "decisiones estratégicas tomadas por la dirección en los cuarteles generales de los centros imperiales. Estas decisiones dependen de las condiciones políticas y económicas creadas por el Estado imperialista y sus representantes de las IFIs. La movilidad esta supeditada a las relaciones entre estados."

Petras (2001c) afirma que "el alcance de las corporaciones globales", se estimula por la guerra de clases contra los trabajadores más que por la revolución tecnocientífica, así como por la reducción o eliminación de la asistencia social. El futuro de los trabajadores es muy incierto. Cuando las corporaciones se expanden en la globalidad, sus niveles de competitividad ya no se circunscriben a un solo país o región, y se constituyen en lo que se denomina competitividad de clase mundial. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales.

Para convertirse en corporaciones globales, estas estrategias de crecimiento internacional tienen varios propósitos, entre los más importantes se encuentran la adquisición y aprovisionamiento de importantes recursos a precios bajos en los países menos desarrollados, con el fin de ganar la competencia de precios de productos en los mercados internacionales. Estas corporaciones compiten entre sí en cualquier lugar, para lograr su globalización mediante la integración de todas sus actividades y operaciones y para afianzar su presencia en todos los mercados.

Las repercusiones de las fuerzas de la competitividad global y del cambio tecnológico se presentan en los niveles del Estado-nación, de las empresas y de los individuos. En el modelo de Veliyath y Zahra (2000), los conceptos que definen la competitividad en el Estado-nación son la soberanía, la cultura, los valores sociales, el desarrollo humano y los estándares de vida. Al nivel de empresa, los conceptos definitorios de competitividad son la jerarquía, la arquitectura estructural, las capacidades, las competencias, los recursos y las estrategias. Al nivel individual son los estándares de vida, el bienestar funcional, el

crecimiento personal, el incremento del capital humano, la libertad personal y la seguridad física. Así, la competitividad se encuentra inextricablemente ligada a la tecnología y a los procesos de globalización.

El discurso neoliberal es fuerte y difícil de combatir. Los procesos de globalización neoliberal fragmentan y debilitan a los actores políticos y sociales, los mecanismos de representación de la ciudadanía y diluyen las identidades colectivas. Los procesos de la individualización enfatizan la presencia del individuo por sobre lo colectivo, escindiendo en forma nominalista entre el individuo y la sociedad, mediante el debilitamiento de los referentes materiales y simbólicos de las identidades colectivas. Estas identidades siempre encuentran los vehículos de expresión en las diferentes unidades espaciales territoriales en unidades locales, regionales, nacionales e internacionales. La fragmentación de las identidades culturales, étnicas, religiosas, políticas, etc., provoca profundos conflictos entre las sociedades.

Por otro lado, la teorización holística de la economía política internacional es una forma contestataria de la creciente globalización neoliberal y a la correlativa representación democrática. La multi dimensionalidad de la globalización está estrechamente vinculada con la idea de conectividad compleja como una condición del mundo moderno (Tomlinson, 1999) Por conectividad compleja el autor entiende que la globalización se refiere a la red de interconexiones e interdependencias que rápida y densamente se desarrollan y que caracterizan la vida social moderna. El pensamiento social burgués separa los dominios económico y político de la vida social (Amín, 2001) mediante la adopción de diferentes principios específicos.

Conectividad significa que la geografía y el tiempo no son una limitación para las personas que interactúan, participan y se involucran en actividades globalmente. Así, la geografía económica y política del espacio nacional están cediendo su lugar a la geografía política y económica en los ámbitos espaciales regionales o globales. La conectividad se refiere al hecho de que en la actualidad, las comunidades, grupos e individuos en todo el mundo comparten un conjunto común de expectativas y principios (Ali, 2001). En la era de la globalización, la interdependencia se manifiesta en la ocurrencia de eventos que tienen lugar en un lugar determinado tienen un impacto inmediato y directo en otras partes del mundo.

Sería ingenuo pensar que la magnitud de las transformaciones de los procesos de globalización no afectan e implican redefiniciones sociales. Estas redefiniciones de las estructuras sociales ha hecho que las partes no sean indiferentes al mensaje de la globalización. Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales.

Las transformaciones económicas y políticas también implican transformaciones de los valores sociales, culturales y sobretodo de valores morales. De hecho, la globalización es vista aquí como un conjunto de estructuras y procesos económicos, sociales y políticos que derivan de un carácter cambiante de los bienes y activos que comprenden la base de la

economía política internacional, y más particularmente la diferenciación estructural creciente de estos bienes y activos (Lawrence, 1996).

Las conexiones existen en un número diferente de modalidades que varían desde las relaciones socio-institucionales que proliferan entre los individuos y las colectividades en todo el mundo, hasta la idea de un flujo creciente de bienes, información, gente y prácticas a través de las fronteras nacionales, por cierto, cada vez más frágiles y disminuidas. El concepto económico territorial de fronteras nacionales está dejando paso a la internacionalización del comercio, donde ya no es fácil determinar el origen de la mercancía. La frontera de la comunicación es quizá la que más ha sido modificada por los procesos de globalización. Incluyen las modalidades más concretas de conexión proveída por los desarrollos tecnológicos tales como el sistema internacional de transporte aéreo rápido y la más literalmente "sin cables" sistema de comunicaciones electrónicas.

La economía encuentra límites para explicar, describir y predecir los cambios que los procesos de globalización están motivando. Para analizar los diferentes niveles tales como por ejemplo, el individuo, la sociedad, el Estado, el mercado, la región, lo internacional, etc., debe considerarse toda la complejidad estructural y holística del sistema global. Las instituciones locales, nacionales, regionales y mundiales ponen en marcha complejos sistemas regulatorios de políticas y procesos de toma de decisiones. Hay escasas evidencias de que la región consiste de "sociedades postmodernas" o que se está moviendo a una era postmoderna.

Las instituciones locales tienen como reto asumir funciones para intervenir en las actividades económicas. Para comprender el sistema global es también necesario analizar las implicaciones de los factores históricos del sistema del sistema internacional capitalista y la desigualdad de sus efectos en los Estados-nación. Los procesos de globalización representan una configuración coyuntural de varios procesos históricos. La principal tarea de las ciencias sociales y econonómico- administrativas sobre los análisis de la globalización con base en modelos que enfaticen los enfoques transdisciplinarios y plurales (Robertson, 1990)

La conceptualización de la globalización dentro del campo específico de las ciencias económicas, como un fenómeno del mercado capitalista es una tendencia unidimensional muy fuerte, si bien se manifiesta como un fenómeno multidimensional que comprende procesos complejos. Las dos metatendencias, el cambio tecnológico fundamental y el ethos de la apertura, transforman el mundo en una civilización de civilizaciones. En términos generales, el fenómeno de la globalización es inevitable y se puede estar en favor o en contra, pero finalmente lo importante es decidir como confrontarlo o rechazarlo.

Esta aseveración es bastante discutible, si en realidad es la globalización un proceso inevitable y que además escapa al control de los agentes económicos, y actores sociales y políticos. No obstante, El estado considerado como un importante actor social sigue jugando un papel importante en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo equitativo y equilibrado entre las diferentes regiones y localidades. La acción gubernamental tiene bajo su protección la producción de este crecimiento económico y es una de sus principales preocupaciones.

La tendencia a ver los procesos de globalización como oportunidades para los negocios van de acuerdo con este enfoque, como por ejemplo en el análisis de Ohmae (1995a) quien llega a argumentar que "los Estados-nación tradicionales se están convirtiendo en naturales, incluso imposibles, [como] unidades de negocios en la economía global.". Algunos de sus críticos, como Hirst and Thompson (1996) retan las ideas conectadas con la transnacionalización de la economía y la redundancia del Estado-nación.

Argumentan que una crítica a la dimensión económica es fatal también para otros aspectos, ya que sin la noción de una economía globalizada muchas de las otras consecuencias que se aducen en los campos de la cultura y la política cesan de sostenerse o dejan de ser menos amenazantes. Una economía global se apoya en la idea de una economía sin naciones Estado bajo el influjo de una ideología de libre mercado, exagera la autonomía del capital con respecto a Estado.

Aceptadas las dificultades para abordar metodológicamente la globalización como un fenómeno unidimensional, tenemos que reconocer que debe ser analizada en los "términos de procesos simultáneos y complejamente relacionados en aspectos de economía, política, cultura, tecnología y otras áreas, que involucran todo tipo de contradicciones, resistencias y fuerzas que se oponen unas a otras en una misma dinámica", siguiendo a Tomplinson, (1999) La globalización es definida completamente como un fenómeno por el Banco Mundial.

Lo que aquí se propone es una crítica a la hegemonía de la globalización neoliberal con su correlativa democratización que ha servido de fundamento a quienes resisten y se oponen a su avance y profundización por considerar que tiene de su parte todas las relaciones de fuerzas que orientan las decisiones económicas de quienes dominan el mundo. Todo proceso de democratización de la sociedad, para ser real, tiene que realizar primeramente una transformación socialista. El proyecto de la globalización que propone un mundo único, con un mercado homogéneo, es altamente discutible por las dificultades que presenta su posible existencia, sobretodo bajo la hegemonía del capitalismo con su potencial latente de autoritarismo.

Esta hegemonía global del capitalismo neoliberal o neocapitalismo, se expresa en el poderío militar de los Estados Unidos y en la expansión de las grandes corporaciones transnacionales que atacan todas las posibles coacciones sociopolíticas. A la expansión de las corporaciones transnacionales precede la expansión militar y política. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales En cada fase expansiva de las grandes corporaciones transnacionales, se requería de la participación del Estado imperial.

Las grandes corporaciones transnacionales se reparten el mundo con el apoyo de los Estados imperialistas aumentando su poder e influencia. El Estado imperial siempre actúa en sinergia con las grandes corporaciones multinacionales. Estados Unidos usa en forma irrestricta el poder militar para imponer su hegemonía en el mundo. El imperio

mercantilista estadounidense confronta una doble realidad. Por un lado se expande y por la otra confronta una crisis económica. Concentra y centraliza el capital, además.

Petras (2001c) argumenta que "el crecimiento y la conquista de mercados extranjeros es hoy en día el producto de empresas gigantes ligados a poderosos estados euro-americanos y que puede, en el mejor caso, ser considerado como parte de un proceso de construcción de un imperio, en vez de algo que parezca globalización". Por lo mismo, es más exacto hablar de imperialismo que de globalización, o más propiamente de un neoimperialismo.

Siguiendo a Petras (2001d), el imperialismo "toma muchas formas pero persigue objetivos similares: la conquista de los mercados del tercer mundo, la penetración en economías competidoras y la protección de los mercados domésticos." Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales.

Sin embargo, este imperialismo neoliberal está siendo reemplazado por el neo-mercantilismo o imperialismo mercantilista. El imperio se ha expandido más en los últimos años (Petras, 2001b) subordinando a sus aliados, imponiendo regímenes clientes en el Tercer Mundo, extendiendo y profundizando "el control imperial contra los desafíos populares". En el sistema imperial, las empresas transnacionales de los Estados imperialistas dominan los mercados y los Estados nacionales.

La concentración del poder mundial, siguiendo a Petras, se orienta más a la formación de un "imperio mundial" integrado por las grandes corporaciones multinacionales mundiales que operan en sinergia con Estados imperialistas, que a la concepción de globalización. Es más propio hablar de imperialismo que de globalización cuando la propiedad y dirección de estas corporaciones son estadounidenses. No obstante, este nuevo imperialismo calificado de neoliberal, siempre fue un mito ya que los Estados imperiales no han adoptado todos los principios del libre mercado, sino que en vez de una apertura completa de sus mercados, esta ha sido selectiva.

Actualmente el imperio confronta un período de crisis y para la consolidación de su dominio frente a la competencia de la Unión Europea y Japón, ha lanzado la tercera guerra fría. La tríada que controlan y mantienen los poderes internacionales, luchan entre si por encontrar un equilibrio mediante el incremento de medidas proteccionistas hacia el interior de su bloque económico regional. Así que la crisis actual se manifiesta en la recesión económica, el colapso de la especulación financiera y una intensificación de la competencia. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

Esta expansión de las corporaciones transnacionales va en sentido contrario a la vieja tendencia de una corporación controlada desde un territorio base, siempre en un Estado imperialista con el que operan en sinergia. En cada fase de la expansión de las grandes corporaciones transnacionales se requiere el apoyo del Estado-nación. La expansión de las corporaciones transnacionales requieren de la expansión militar y política previa de los

Estados imperiales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

Las grandes corporaciones transnacionales se reparten los mercados internacionales para aumentar su dominio e influencia. La retórica del poder militar hegemónico en el mundo, justifica las intervenciones militares en los demás países del mundo por "razones humanitarias", para imponer la democracia como sistema de gobernabilidad global o en nombre de los derechos de los pueblos.

La implantación de una gobernabilidad global entraña grandes peligros para la humanidad. Al decir de Haliday (1997: 23), ya se cuenta con un sistema de gobernabilidad global con muchas capas, aunque "uno de los problemas principales es el de resolver, a través de reformas, los efectos de un sistema que ha estado vigente durante varias décadas. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente a la reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación.

¿Cómo hacer que este sistema de gobernabilidad sea más efectivo, más justo, y más responsable frente a la cambiante situación internacional?". La adaptación al cambio involucra costos de transacción más bajos y mejores resultados que la reforma. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio (Kaiser, 1997).

Con el deterioro del liderazgo económico de los Estados Unidos, a pesar de que conserva la hegemonía militar, están surgiendo otras potencias que rivalizan y organizan bloques comerciales con otros países para participar con ventajas en los mercados mundiales, y los vuelven altamente competitivos. Para mantener su hegemonía, los Estados Unidos llevan a cabo una estrategia sistemática de demostración del poder militar, mientras que se muestra defensor de la democracia, la paz universal, el progreso material y los derechos de los pueblos.

Los procesos de democratización implican el balance del ejercicio del poder de las diferentes fuerzas económicas, políticas y sociales. Estas fuerzas no conspiran clandestinamente para el control y dominio del mundo, sino por lo contrario, gracias a los procesos de globalización se manifiestan abiertamente, y se mueven a su antojo bajo la consigna totalitaria de todo el poder a los mercados.

Las olas masivas de democratización desde la mitad de los setentas ha causado en los institucionalistas clásicos que se preocupen por dos temas de importancia considerable para la constitución y construcción y el entendimiento de las precondiciones de la estabilidad democrática, el debate sobre las ventajas y desventajas de los sistemas parlamentarios y presidenciales y cómo mezclar sus características institucionales. los efectos disfuncionales en las instituciones de los tipos puros. Resulta claro que para que los procesos de

democratización de la sociedad avancen, es necesario que exista una transformación socialista. No obstante, bajo la consigna de globalización, el capitalismo imperialista estadounidense asegura el dominio mundial y, además, puede justificar intervenciones militares para derrocar aquellos regímenes que no obedecen a las consignas.

Hasta ahora poco se ha estudiado desde un enfoque transdisciplinario y holístico el sistema político en general y el papel del gobierno en la sociedad industrial en lo particular. Y menos todavía se han analizado rigurosamente, desde una perspectiva metodológica plural, los arreglos y estructuras organizacionales y las interacciones entre los diferentes agentes económicos que operan en el sistema económico. Los agentes económicos actúan en forma colectiva en el mercado. La economía está relacionada con la conducta de los agentes económicos, ya sean empresas o individuos, oferentes o consumidores, etc. Cualquier sistema económico, ya sea local, nacional o mundial, es una compleja red de intercambios y agentes. La economía conceptualiza a los individuos como Homo economicus , es decir, como calculadores fríos, sin apego a las emociones, de los máximos beneficios. Se espera que el Homo economicus siempre elija que es óptimo.

La combinación ordenada de las fuerzas del mercado, tales como la competencia y el arbitraje, junto con la evolución, son el motor del desarrollo. Si todos los posibles intercambios se presentan en un momento determinado el sistema se vuelve caótico. La irracionalidad de las acciones genera la oportunidad del arbitraje para alguien más. No se puede confiar totalmente en los mercados para hacer racionales a los agentes económicos. La gobernabilidad del sistema es representada por diseños de estructuras de relaciones entre agentes y principales, en las cuales el principal estipula un contrato generalizado con todos los subordinados (agentes) en el que decide que tanto poder de control les delega así como las compensaciones y recompensas por el buen ejercicio de este poder de control. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder.

La amplia gama de relaciones contractuales en los fenómenos organizacionales se comprenden mejor desde la perspectiva de la estructura de governance. El concepto de governance y el de gobernabilidad son interdependientes y operacionalizables en las estructuras institucionales de los diferentes sistemas económicos, sociales y políticos, aunque se refieren a distintos fenómenos sociopolíticos. Las estructuras de governance tienen efectos sobre la gobernabilidad (Cerrillo, 2001)

Los procesos de globalización transforman las configuraciones de organización, agencia e identidad, en las fronteras de las disciplinas económico-administrativas. Estas transformaciones se centran en preocupaciones como el etnocentrismo de las teorías administrativas internacionales en una complicidad con las teorías administrativas y organizacionales occidentales y con las organizaciones transnacionales cuyas prácticas y políticas afectan la vida de miles de millones de seres humanos y transgreden las funciones tradicionales del Estado nacional.

Los cambios organizacionales de las corporaciones globales más importantes se orientan al diseño de estructuras más flexibles, reducción de los costos de transacción, flexibilidad

en los sistemas de producción, intensificación de las innovaciones tecnológicas mediante fuertes inversiones en investigación y desarrollo, formación de capital intelectual, humano, relacional, reputacional, etc., entre otros, los cuales son una base para alcanzar la competitividad en la globalización. Los acuerdos de inversión multilaterales entre diferentes Estados, se realizan con la participación de las grandes empresas multinacionales. De acuerdo al análisis que hace Petras (2001c), el 88 por ciento de los gastos totales en investigación y desarrollo son hechos en el país "madre", y sólo un 12 por ciento en las subsidiarias que tienen una participación mayoritaria en el extranjero.

Estas corporaciones globales se localizan cerca de los mercados y cerca de donde se encuentran sus insumos, a efectos de reducir los costos tanto de aprovisionamiento como de acceso a los mercados nacionales y locales. No obstante, las corporaciones globales siguen manteniendo fuertes lazos con el Estado-nación en donde tuvo su origen, en donde se ubican sus estructuras corporativas y centraliza sus procesos de decisiones. Así, las grandes corporaciones transnacionales operan en sinergia con los Estados imperiales. Las corporaciones transnacionales se reparten los mercados mundiales con el apoyo de los Estados imperiales para aumentar su dominio y poder. Mediante el desarrollo de capital intelectual, las organizaciones adquieren, cultivan, desarrollan y aprovechan las capacidades cerebrales de los miembros o trabajadores.

Petras (2001c) concluye que la corporación global es un mito y argumenta que la expansión y el control por las corporaciones multinacionales globales "no cambian su carácter permanente como relacionadas a naciones-estados; ni sus operaciones internacionales han transformado su carácter de construcción de un imperio centralizado." La expansión de las corporaciones transnacionales requieren de la expansión militar y política de los Estados imperiales.

Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales En cada fase expansiva de las grandes corporaciones transnacionales se requería el apoyo de los estados imperiales. Estas grandes corporaciones que se expanden globalmente por un lado mientras que por el otro, concentran y centralizan el capital y los beneficios que obtienen de sus operaciones, siempre en sinergia con los Estados imperiales.

No obstante las transnacionales no se sienten responsables cuando sus prácticas y políticas afectan negativamente a las sociedades, porque su carácter supranacional les permite tener libertad para buscar posicionamientos en el mercado global, por encima de reglamentaciones y de fronteras, sin que exista Estado nacional o institución internacional que regule sus actividades. Las instituciones internacionales de desarrollo basadas en el conocimiento, oficialmente toman la posición de poseer la verdad en materia de principios del desarrollo, hasta convertirlo en un dogma, obstaculizando y descalificando la existencia de otros puntos de vista alternativos.

Estas instituciones internacionales carecen del elemento que hace posible la democracia y que facilita la rendición de cuentas. Si una organización internacional de desarrollo basada en el conocimiento promueve reformas o cambios institucionales, debería de aceptar compartir las fuentes del conocimiento con otros actores, cosa que no sucede en el modelo

de desarrollo impulsado por el neoliberalismo. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. Puede ser verdad que los cambios institucionales usualmente ocurren como las reacciones de personas con visión estrecha a lo que perciben como más o menos un rango estrecho de necesidades. Así, los procesos de globalización desarrollan y fortalecen a los nuevos poderes supranacionales.

Las empresas transnacionales producen y comercian a través del globo buscando la ventaja económica con apoyo en una administración multinacional sobre una base nacional. Lo hacen mediante la insistencia en la eliminación de las regulaciones de los Estados nacionales a fin de establecer relaciones de poder de los Estados imperiales sobre ellos. Las prácticas administrativas y organizacionales están orientadas a cambiar la cultura para reorientar las instituciones en un enfoque "hacia fuera". Una nueva cultura de la administración viene a dominar el medio ambiente de las corporaciones globales que alcanzan niveles altos de expansión mediante el empleo de estructuras multidimensionales que les permite alcanzar ventajas competitivas sobre sus principales rivales.

El éxito de esta estrategia depende la participación de los diferentes actores que preparan los cambios desde las instituciones del Estado para trasladar el poder fuera de las organizaciones mismas y dar forma a nuevas configuraciones de clase. Giddens (1984) y Clegg (1990) sostienen que las reformas son modificadas por los actores y la dinámica del "agency". El poder se traslada para quedar en organizaciones que no son democráticas, en las instituciones supranacionales y en las empresas transnacionales. La adaptación al cambio involucra costos de transacción más bajos y mejores resultados que la reforma. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente a la reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación.

La globalización puede ser estudiada como fenómeno, teoría, ideología, proceso y como política. El estudio de la globalización como fenómeno es una función del nivel de desarrollo tecnológico, principalmente en las telecomunicaciones y la informática que permiten aumentar los flujos de todo tipo de interacciones entre los seres humanos de cualquier parte del mundo, sin importar las fronteras. La cultura informática se ha intensificado y expandido incrementando exponencialmente el número de contactos y relaciones sin importar tiempo ni espacio.

La globalización es un fenómeno que transforma en tiempo y espacio las interrelaciones de los individuos y conglomerados humanos interconectados para la realización de actividades que generan valor agregado mediante sistemas productivos más eficientes. Tiempo y espacio se vuelven conceptos más abstractos. Las relaciones espaciales se han alterado y no equivalen a territorio y por tanto a autoridad política. El concepto de espacio evolucionó de una concepción territorial a una concepción más dinámica y abierta.

El aceleramiento de los procesos de globalización han traído consigo cambios profundos mediante la desterritorialización del estado nacional para dar lugar a la emergencia de nuevas formas espaciales de territorialización geopolítica y geoeconómica. Arellanes Jiménez caracteriza este nuevo espacio como un "concepto dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal s histórico que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones."

La globalización trata de una creciente interacción de los mercados con signos de conflicto y cooperación entre los Estados y las empresas (Sánchez Albavera, 1995) Las agencias internacionales, como el Banco Mundial conceptualizan la globalización como un fenómeno. La globalización tratada como un fenómeno pone un especial énfasis en las relaciones económicas que se realizan entre agentes económicos de distintas naciones.

La globalización como teoría surge con los trabajos de Adam Smith, un filósofo moralista que contradice los principios de la teoría mercantilista de la política económica que establece que un Estado progrese económicamente debe restringir sus importaciones y promover las exportaciones, argumentando que la competencia y la especialización de las actividades económicas son los elementos clave. La competencia y la especialización se incrementa cuando se lleva a cabo el comercio entre países con sistemas de economía abierta.

La competencia o "mano libre" de las fuerzas del mercado emplea los mejores recursos para ser usados más eficientemente, lo cual involucra la especialización o división del trabajo. Así, los procesos de globalización propician una nueva división internacional del trabajo, en el cual éste se delimita geográficamente, mientras que el capital no encientra fronteras. En esta nueva división, el trabajo se localiza, es decir, se vuelve local, mientras que el capital se globaliza.

La especialización y la competitividad son efectos del libre comercio en las economías nacionales que tienden a ser positivos si se persiguen políticas progresivas de prácticas de los principios democráticos y de libertad. Existen bastantes evidencias de que las naciones del tercer mundo que se abren al comercio internacional, estimulan su crecimiento, a pesar de que pueden experimentar crecimiento negativo y grandes desajustes durante períodos cortos. A su vez, la competencia y la especialización son los elementos clave para alcanzar la prosperidad económica de una sociedad abierta aunque se fundamente en la satisfacción del egoísmo humano.

Como mecanismo de motivación, la competencia es promovida por el sistema imperialista, y más concretamente por los Estados imperialistas rivales bajo el argumento que la naturaleza humana así sometida empuja al progreso de la humanidad.. El egoísmo individual es el origen del progreso económico que tiene por condición la apertura política de la sociedad. Por este mismo individualismo es que la tendencia del sistema capitalista es hacia el autoritarismo, ya que exacerba los derechos individuales por sobre los colectivos.

La teoría desarrollada por Smith conecta la naturaleza humana con las políticas públicas cuando sostiene que los individuos son egoístas por naturaleza motivados para perseguir aquéllas actividades económicas que sirven a su mejor interés. Los economistas enfatizan

las acciones de auto interés de los agentes económicos, se guían por su propio interés para lograr el máximo de beneficios. La naturaleza egoísta del ser humano lo motiva a un deseo creciente y continuo de consumo de bienes y servicios que el sistema capitalista se encarga de alentar.

Por otro lado, los trabajos de David Ricardo sobre las ventajas comparativas y su interpretación moderna en el modelo Heckscher-Ohlin de comercio internacional, establece que las diferencias en las ventajas comparativas en la producción de diferentes mercancías se deben a las diferentes dotaciones de factores. Los países que cuentan con más mano de obra, deben especializarse en la producción y exportación de productos y servicios que empleen mano de obra. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado. Como conclusión, los procesos de la globalización benefician a los países con economías abiertas.

McGrew (1990) sostiene que la globalización constituye una multiplicidad de ligamientos y conexiones que trascienden a los Estados-nación, y por implicación a las sociedades, lo cual forma el sistema mundo moderno. Define el proceso a través del cual los eventos, decisiones y actividades en una parte del mundo puede tener una consecuencia significativa para los individuos y las comunidades en partes bastante distantes del mundo. Una de las características de la globalización es que más que desarrollarse un nuevo proceso, se han intensificado e interconectado viejos procesos. Lo que hay es una profundización de los procesos, más que un cambio cualitativo en la estructura global de la economía.

Como proceso, la globalización pretende cancelar todo proyecto ideológico que no sea el proyecto centrado en la economía, el mercado, las finanzas y la competitividad, como un pensamiento único. Pero en realidad, este pensamiento único no existe, más bien el mundo tiende a fragmentarse más que a unificarse.

Por lo tanto, en este sentido profundiza las teorías mercantilistas y se erige en lo que Chomsky (2001) denomina un “mercantilismo de las corporaciones”, en donde las decisiones sobre las relaciones económicas, sociales y políticas son realizadas por las organizaciones privadas, transnacionales, sin que exista ningún tipo de mecanismo social que establezca equilibrios y controles.

Para Petras (2001c), este sistema corresponde a un imperialismo neo-mercantilista cuyo contenido es definido por “el comercio dirigido por el estado, combinando la protección de los mercados internos y la intervención agresiva para asegurarse ventajas monopolistas en el mercado externo y beneficios para las inversiones”. Las relaciones de comercio y de mercados se delimitan en acuerdos entre los Estados, los cuales operan dentro de sus fronteras.

En este sistema imperial, las empresas transnacionales dominan los mercados y los Estados nacionales. Este nuevo mercantilismo monopoliza la mayor parte de las regiones comerciales. Bajo la forma de imperialismo mercantilista, el Estado imperial toma decisiones unilaterales para maximizar las ventajas comerciales, aplica el proteccionismo y la intervención estatal internamente para favorecer los intereses empresariales, pero

externamente defiende los monopolios mediante la exclusión de competidores y las leyes del libre mercado en todo su imperio.

El liberalismo tiene como centro la doctrina del mercantilismo envuelta en la fina retórica de la democracia. De hecho, el Estado nacional pierde su capacidad de regulación social y su poder institucional para mantener un equilibrio entre los diferentes agentes económicos y actores sociales y políticos. No obstante, el Estado sigue siendo un actor social importante en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo en forma equitativa y equilibrada. Al respecto, Camdesus (1996) ha dicho que "Hay que humanizar los mecanismos de globalización haciendo que maduren todos sus gérmenes de crecimiento y solidaridad, manteniendo a raya las fuerzas del marginamiento."

Las altas ganancias de las corporaciones son producto de los altos rendimientos de la tecnología. Quienes se benefician de estas utilidades son los accionistas y la elite tecnócrata. Es muy cuestionable la posición de Ali (2001) que sostiene que la globalización significa la habilidad de una corporación para conducir negocios entre las fronteras en un mercado abierto, y la maximización de los beneficios organizacionales, sin que se inflijan daños sociales o violaciones a los derechos de las personas de otras culturas. De hecho, a las corporaciones no se les obliga a que se ajusten a los requerimientos de sustentabilidad, y si en todo caso se hiciera, se generan tensiones para cambiar las reglas del juego en las que operan.

Este imperativo de competitividad conduce, según las palabras de Gorz (1998), "irresistiblemente a la globalización de la economía y al divorcio entre los intereses del capital y del Estado-nación". Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. La doctrina económica neoliberal y monetaria se convirtió en el nuevo pensamiento único en que se apoya la economía global y que se consolida con el apoyo de una política económica del Estado, y por lo tanto, como una orientación estratégica, se define la política de Estado. Pero el concepto de economía global hace referencia a una economía sin Estados nacionales al exagerar la autonomía de los capitales bajo el influjo de la ideología del libre mercado.

Lo más importante de una política de Estado es su capacidad de funcionar como un sistema de información que explicita las estructuras del poder mismo y que por lo mismo está sujeto a presiones y manipulaciones de los diferentes agentes económicos. En teoría política, uno de los conceptos de Estado involucra el ejercicio del poder a través de instituciones políticas que garantizan la gobernabilidad, independientemente de que esta sea democrática, dentro del territorio en el que ejercita este poder.

Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición". Sin embargo, la profundización y amplitud de cobertura de los procesos financieros vulneran las políticas macroeconómicas de los estados-nación.

Los procesos de globalización se acompañan de una impresionante destrucción de las instituciones. El proyecto político neoliberal en implementación es el de una destrucción metódica de las colectividades (Bourdeau, 1998), que tiene como finalidad crear las condiciones bajo las cuales la doctrina económica puede realizarse y funcionar. Involucrarse en la acción colectiva, los actores buscan traer el ansiado bien colectivo y dar forma a la colectividad con respecto al bien colectivo. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico "gorrón" causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

Las dos grandes tendencias de este proyecto utópico neoliberal, agrega Bourdeau, son la destrucción de todas las instituciones colectivas capaces de contrarrestar los efectos de la máquina infernal del neoliberalismo. Una vez que la acción colectiva se inicia, en el curso de este mismo proceso emerge una colectividad que puede aplicar sanciones informales contra los que contravienen y recompensar a colaboradores a bajo costo (castigo u ostracismo), a ningún costo e incluso a premio (avergonzar, reprochar o criticar). Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas.

Para otros analistas, las crisis financieras sólo reflejan el colapso del neoliberalismo y son los síntomas de un crecimiento desacelerado, más que sus causas. Quizás por esta razón, los estados imperialistas se aprestan a desempeñar el papel de gestores de crisis financieras y económicas de Estados menos desarrollados y de empresas transnacionales con graves problemas financieros. En primer término al Estado, que es el depositario de todos los valores universales asociados con la idea de esfera pública. De ahí a la imposición en las altas esferas de la economía, el Estado y en las corporaciones de la moralidad basada en un Darwinismo social que rinde culto al ganador e instituye una lucha de todo contra todo y establece en cinismo como la norma de conducta y de la acción.

La globalización como política aplica la teoría del comercio internacional, en cualquiera de sus versiones como la mercantilista o la de laissez-faire, para la formulación e implementación de políticas públicas que claman tener como finalidad elevar el bienestar de la sociedad. El principal vehículo para el crecimiento y expansión del comercio internacional son las empresas transnacionales y multinacionales, las que cualitativa y cuantitativamente contribuyen a un crecimiento económico desigual de las naciones y de sus ciudadanos.

En cada fase expansiva de las grandes corporaciones transnacionales se requería el apoyo del estado imperial. La expansión capitalista ocurre mediante la organización de la sociedad, el modo de producción y el poder político de los espacios coloniales. La herencia colonial ha marcado las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales de los pueblos colonizados. De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos

autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

El fundamento de este bienestar de la sociedad descansa en la formulación de que una mayor apertura a los mercados tiene efectos positivos en el ingreso per cápita y por consecuencia en la reducción de la pobreza. Deneulin (1999) argumenta que mediante la corrección de la asignación de recursos del mercado mediante la introducción de un impuesto internacional de solidaridad, una organización internacional puede eliminar las trampas de la pobreza.

El alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma. Un mayor problema es dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados (De Swaan Abram, 1997). Establecer un impuesto internacional en los países ricos en beneficio de los países pobres puede contribuir a aumentar el ingreso salarial de las economías pobres de tal forma que una parte del salario sea ahorrado, contribuyendo a la acumulación del capital.

Sólo que tal transferencia puede ser implementada solo si la gente de las economías ricas están dispuestas a sufrir una pérdida temporal en su bienestar a fin de incrementar el bienestar de las economías pobres. Las fuerzas motivo asociadas con la acumulación de riqueza que enfatizan el sistema capitalista orienta los costos de capital individual y las empresas privadas capitalistas para expandir sus actividades acumulativas y eliminar todas las barreras geográficas culturales y políticas que obstruyen su paso a la acumulación de riqueza.

Se argumenta que la apertura al comercio y a las inversiones contribuye a incrementar la tasa de ingreso per cápita y a aliviar la pobreza. Sin embargo, los análisis arrojan otros resultados: entre 1980 y 1998, la media del crecimiento del ingreso per fue de 0.0 por ciento en los países en desarrollo, mientras que entre 1960 y 1979 fue de 2.5 por ciento (Easterly, 2000a). No obstante, el mercado globalizador no tiene tiempo ni espacio para el pobre. El pobre es desechable, no tiene nada que vender, ni tampoco puede comprar, aunque necesita muchas cosas, porque carece de poder adquisitivo.

La innovación en las nuevas tecnologías y las reestructuraciones empresariales en vez de aminorar los costos sociales agregan su carga fatal desempleando a millones de trabajadores y volviéndolos totalmente desechables. El futuro de los trabajadores es muy incierto. Quizás es la innovación el rasgo principal que tipifica y caracteriza a los procesos de globalización.

En otras palabras, los que postulan estas teorías sostienen que el crecimiento económico está positivamente relacionado con la reducción de la pobreza y que, además, de estos efectos benéficos incrementarán la igualdad económica de los individuos. Es decir, dan por supuesto la existencia de una relación entre globalización, crecimiento y reducción de la pobreza, bajo el argumento de que la liberalización de los mercados lleva al crecimiento

económico y que éste mejora los niveles de pobreza. Convierten en sí mismo al crecimiento económico en un fin.

La noción de crecimiento económico queda limitada a una medición cuantitativa del producto interno bruto per cápita y a la determinación de un promedio real de consumo. No obstante, la aplicación por los gobiernos de los países en desarrollo, de una nueva economía política que hace un énfasis mayor en políticas económicas consistentes con el libre mercado y en la búsqueda de una gobernabilidad democrática, derivó en procesos regresivos de crecimiento económico y en crisis de gobernabilidad.

Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de "esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política". Una vez que la acción colectiva se inicia, en el curso de este mismo proceso emerge una colectividad que puede aplicar sanciones informales contra los que contravienen y recompensar a colaboradores a bajo costo (castigo u ostracismo), a ningún costo e incluso a premio (avergonzar, reprochar o criticar).

De acuerdo al investigador, "es probable que la actitud de muchas sociedades ancladas sea la de negarse a aceptar, a ciegas, la superposición de capas de la ya formada gobernabilidad global, pero la gobernabilidad reluctante implica el reconocimiento de estándares universales de democracia (poliárquica o consociativa) sobre los que se funda y se explica" (Torrijos, 2001). La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

En lo que se refiere al nivel de desarrollo alcanzado por las naciones más avanzadas, estas despliegan un mayor crecimiento en el gasto público, de acuerdo a lo que se denomina la ley de Wagner (1883), lo que también se identifica con gobiernos más grandes. Por otro lado Rodrik (1998) sostiene que los gobiernos más grandes eliminan los riesgos y fluctuaciones de los mercados globales. ". Para Giddens (1999:36) los riesgos son "la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza." Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno.

En resumen, se argumenta que la globalización es buena para el crecimiento económico y que éste es bueno para el pobre. Para ejemplificar usan la analogía de lo que sucede cuando se elevan los niveles del agua que levanta todos los botes, mientras que los opositores sostienen que este argumento neoliberal no es teóricamente correcto ni está empíricamente validado. En la realidad, este argumento no se apoya en evidencias empíricas.

La tasa de crecimiento económico cercana a cero, de los países en desarrollo que aplicaron las reformas económicas durante las dos décadas pasadas son desilusionantes, cualesquiera que sea la causa, lo que ha dado por resultado que durante este mismo período que los ingresos de los países en estagnación y los de los países ricos diverjan diametralmente. Los procesos globales de la reestructuración capitalista e integración y las reformas liberales tomadas por los gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, han reconfigurado el mercado laboral, incrementado la transferencia del ingreso de las clases bajas a las clases altas y debilitado grandemente la posición de la clase trabajadora en Latinoamérica.

El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma La reforma solamente debe ser llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos.

Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica. En la segunda mitad del siglo pasado, la tasas de crecimiento tuvo un ritmo constante de disminución. Cuando los países en desarrollo tienen un crecimiento negativo, los recursos y activos nacionales y locales, como en el caso de plantas industriales, se convierten en verdaderas ofertas para los ávidos capitalistas foráneos que las adquieren a precios por debajo de su valor real.

Las reformas económicas neoclásicas o neoliberales consistieron en una fuerte restricción del gasto público, sobretodo en materia de gasto social, limitando las inversiones a aquellas áreas que ofrecen altos beneficios, mayor eficiencia fiscal, liberalización financiera y comercial, desregulación y privatización de empresas públicas y el establecimiento de un régimen de seguridad de los derechos de propiedad. El establecimiento de un sistema de derechos de propiedad no es la garantía para crear los mecanismos del mercado y los incentivos suficientes como para que el Estado deje de intervenir estratégicamente en la economía. La recesión económica que siguió al período de crecimiento creó nuevos males administrativos en los países con crecimiento decreciente, tales como la desmotivación, ausentismo, baja productividad, ineficiencia, la mezcla de los negocios y la política, etc.

La teoría mercantilista restringe las importaciones, mientras que la teoría neoliberal se fundamenta en el libre comercio mediante la eliminación de las barreras comerciales. Un estudio reciente del Banco Mundial titulado "Crecimiento es bueno para el pobre" revela que la relación entre el ingreso de la quinta parte más baja de la población y el producto doméstico bruto per cápita es uno a uno.

Esta política económica neoliberal desregula las prácticas del mercado y de la especulación financiera cuya movilidad se ha incrementado y sus riesgos también debido al notable avance de los sistemas de información y telecomunicaciones. Estos avances en las tecnologías de la información y el conocimiento (TICs) facilitan la globalización de los mercados financieros y con ello una movilidad de capitales sin precedente en la historia.

Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. De hecho, las naciones que han alcanzado tasas más altas de crecimiento económico son aquellas que mantienen reglamentado sus mercados financieros.

El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. Así, los procesos de globalización representan una configuración de varios procesos históricos. En la actualidad, el monto de las transacciones financieras internacionales representa más de 50 veces el valor del comercio mundial de bienes y servicios, mientras que el volumen de transacciones del mercado de divisas se ha multiplicado 5 veces desde 1980 para alcanzar dos millones de millones de dólares diarios.

Las telecomunicaciones y la informática han elevado el nivel de globalización de las transacciones financieras. De acuerdo con las estimaciones de Chonchol (2001), La globalización aumentó la riqueza mundial, sobretodo en el plano de los servicios que alcanzaron hasta el 70% del valor de la producción en los países ricos. El comercio mundial sobrepasa los niveles de producción mundial. Mientras la tendencia hacia el mercado de capitales es a disolverse, las inversiones locales están siendo determinadas por los flujos de inversiones directas extranjeras. Los acuerdos multilaterales de inversiones entre diferentes Estados se realizan con la participación de las grandes corporaciones multilaterales.

Los grandes capitales de los mercados financieros controlan el destino económico global, el de las grandes corporaciones transnacionales, de las empresas nacionales y la soberanía de los Estados-nación. Las naciones que han logrado niveles más altos de crecimiento económico son aquellas que mantienen mercado financieros regulados. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula. Las corporaciones transnacionales se reparten los mercados internacionales con la ayuda de los estados imperiales, para aumentar su poder e influencia. Las grandes corporaciones transnacionales siempre operan en sinergia con los Estados nación imperialistas.

Los proponentes del desarrollo financiero están en lo correcto cuando restringen sus conclusiones a las economías de mercado más desarrolladas. Ciudadanos, empresas, corporaciones y Estados se someten al diktat de los mercados financieros. La política se subordina al control de los mercados financieros. En los centros tradicionales del poder económico permanecen concentrados los mercados de capitales están localizados en los países más desarrollados, desde donde desplazan recursos financieros a localidades que muestran mayores ventajas competitivas, sobretodo en los países de reciente industrialización y los países emergentes. La volatilidad de los mercados de capitales limita el crecimiento económico e incrementa los niveles de pobreza. Hasta ahora no se ha demostrado que exista una relación directa entre la liberalización de mercados de capitales y el crecimiento económico.

Las ventajas competitivas de las naciones se sustentan en economías que cuentan con instituciones de mercado, es decir, depende de la calidad de las instituciones y las políticas públicas que tenga. Los mercados de capitales han estado integrados desde antes de la

Primera Guerra Mundial, pero los flujos de capital se mantienen como una fuerza anticonvergente. No obstante, los mismos mercados de capitales, la riqueza y las utilidades que generan siguen igualmente concentrados. Hasta ahora no se ha demostrado que exista una relación directa entre la liberalización de mercados de capitales y el crecimiento económico. La volatilidad de los mercados de capitales limita el crecimiento económico e incrementa los niveles de pobreza.

La modernización neoliberal diferencia las esferas económica, política y social, demanda el ejercicio de nuevas reglas de operación y regulación de los comportamientos sociales, los cuales se acompañan de una creciente inestabilidad en los procesos de cambio. La modernización neoliberal separa a la subjetividad, la considera un proceso autónomo e inconexo que genera tensiones cuando de acuerdo con Lechner (2000), ambos fenómenos son complementarios y es necesario relacionarlos, ya sea en forma espontánea conforme a la apuesta del liberalismo decimonónico o establecida por el Estado conforme al modelo socialdemócrata. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998).

La estrategia de modernización neoliberal se ha absolutizado bajo un dogma ortodoxo que no distingue diferencias de desarrollo entre los Estados nacionales. La modernización era vista como un proceso de diferenciación estructural e integración funcional donde tenían lugar las categorías de clasificación del mundo. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobermabilidad que acota la subjetividad. Sin embargo, no existe necesariamente una relación lineal entre la modernización económica y el establecimiento de instituciones democráticas. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado.

La tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966). Aziz Chaudry (1993) sugiere que las viejas cuestiones para reconciliar los objetivos de crecimiento y equidad fueron reemplazadas por las certezas de los economistas monetaristas. Lo que ha quedado en claro es que el desarrollo económico no es causa de la democracia.

Las teorías del derrame ya desacreditadas en la economía desarrollista se mantuvieron como la respuesta al dilema de la distribución y la teoría de la modernización fue resucitada para pronosticar la última convergencia de los sistemas económicos y políticos a través del globo. La hipótesis central de la teoría del desarrollo plantea que el desarrollo económico traerá consigo el desarrollo político. La política de la organización económica fue explícitamente removida de la agenda y reemplazada por fórmulas que sostuvieron la liberalización del precio, velocidad y minuciosidad como los determinantes exclusivos de la reforma exitosa. En realidad, se reconoce que la organización económica es una cuestión muy compleja.

La modernización parte de la premisa de que el desarrollo es un proceso evolutivo inevitable que incrementa la diferenciación social la cual crea sus instituciones económicas, políticas y sociales que siguen el patrón de desarrollo occidental. El desarrollo es un proceso de cambios dinámicos inducidos mediante políticas y estrategias impulsadas por diferentes agentes económicos y actores políticos. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva

Esta diferenciación social y una creciente disociación de la vida social son producto de los procesos de modernización, los cuales traen inestabilidad. Los procesos de modernización generan aprendizajes rápidos y traen consigo un incremento en las demandas de bienes y servicios e inflación de las expectativas para satisfacer las necesidades y deseos, lo cual no siempre desarrolla la infraestructura y capacidad para lograrlo. La modernización era vista como un proceso de diferenciación estructural e integración funcional donde tenían lugar las categorías de clasificación del mundo, pero para Giddens (1984, 1990), la teoría de la modernización es vista como un proceso de distanciamiento espacio temporal, en el cual el tiempo y el espacio se desarraigan de un espacio y un tiempo concretos. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobermabilidad que acota la subjetividad. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998).

De hecho, los defensores de la modernidad occidental pregonan el progreso científico y tecnológico de la humanidad mediante el establecimiento de los principios de libertad, igualdad y justicia para todos. Muchos de los habitantes de la regiones menos desarrolladas viven bajo condiciones que pueden ser descritas como modernidad desigual más que postmodernidad. La modernidad erige al estado-nación como una forma de gobernabilidad para garantizar un espacio a la nación que necesita ejercitar su vocación histórica.

El espacio nacional se encuentra delimitado por bloques territoriales definidos por fronteras físicas y geográficas en donde ocurren los fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales. Es en el espacio del Estado-nación en donde ocurren los principales fenómenos geopolíticos y es a partir de este nivel que los espacios internacional y global adquieren relevancia por los fenómenos geoeconómicos. Sin la existencia de este espacio nacional, difícilmente la globalización ocurriría. Estas características también determinan las unidades de los espacios soberanos en función de los espacios nacionales. Las grandes corporaciones multinacionales y transnacionales cubren y suplantan al espacio nacional con el espacio de una economía de mercado.

La modernidad implica el desarrollo democrático y por lo tanto, es “la adopción del principio de que los seres humanos individual y colectivamente (esto es, como sociedades) son responsables de su historia” (Amín, 2001). Este desarrollo democrático bajo un sistema capitalista presupone que la democracia es verdaderamente la condición del desarrollo.

No obstante, la modernidad es la ideología del sistema capitalista que se declara a sí misma como la defensora de los derechos individuales por sobre los derechos de la sociedad. Los conceptos de democracia relacionada con la noción de capitalismo,

coinciden con la definición de modernidad, con implicaciones que datan de la Ilustración y que todavía no alcanzan su máximo potencial de desarrollo. Esta modernidad se declara a favor de los derechos del individuo en franca oposición a los derechos sociales, lo que afirma más la tendencia autoritaria del capitalismo.

La modernidad se define como el desarrollo económico industrializado con una convergencia hacia la democracia liberal. Consolidar la democracia liberal requiere de instituciones, actores y agentes que acepten las reglas del juego que acepten los principios del liberalismo político y económico. Así, la globalización es el triunfo de la teoría de la modernización que homogeneiza y estandariza valores en los principios del capitalismo y la democracia, estimula el crecimiento económico y promueve los valores de la democracia, aunque incrementa las condiciones de inestabilidad e incertidumbre. Sin embargo, lo que queda claro es que el crecimiento económico no es causa de la democracia

No obstante, algunos principios del capitalismo no necesariamente promueven la democracia, tales como aquellos que son "concebidos como la expresión de demandas de la razón" (Amín, 2001), entre otros, la propiedad privada, la competencia de los mercados, principios de emprendedores, etc. Frente a la concepción socialista moderna que ve un problema en la propiedad privada y prefiere una propiedad colectiva, Aristóteles consideraba, en efecto, que solamente lo que el individuo tenía como propio es aquello de que me se ocupa con más esmero. Aristóteles no solo se preocupa por la defensa de la propiedad privada, sino la promoción, al mismo tiempo, de un uso en común.

En esto difiere Aristóteles radicalmente de lo que se advierte en el capitalismo de mercado, con su mano oculta que todo lo arregla y sus sociedades anónimas. Pues lo que sucede en la sociedad moderna capitalista es que cada uno se ocupa de lo suyo también en el uso y se desentiende del prójimo. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La *filautía* no debe ser enemiga de la *filía*.

La teoría de la modernización plantea como hipótesis que el desarrollo económico traerá consigo el desarrollo político. La homogeneidad y estandarización de todas las formas de civilización humana bajo un mismo sistema económico puede tener consecuencias fatales para el desarrollo de la humanidad. El sistema económico capitalista se encuentra atrapado funcionalmente en una lógica de crecimiento económico insostenible. La convergencia de la modernización económica definida desarrollo económico industrializado y la democracia liberal, requieren de nuevas instituciones, actores y agentes e involucran limitadamente las capacidades del Estado. La tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966).

No obstante, el poder social del programa neoliberal emerge de los intereses que mantienen quienes detentan el poder económico que da forma al poder político. Giddens (1990) señala que la modernidad extendida da origen a la globalización entendida como "la intensificación a escala mundial de las relaciones sociales que enlazan localidades muy distantes, de tal modo que lo que ocurre en una está determinado por acontecimientos

sucedidos a muchas millas de distancia y viceversa". El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Esta modernidad exacerba los derechos individuales por sobre los derechos sociales. La división internacional del trabajo, la economía mundial capitalista, el sistema de Estados-nación y el orden militar mundial son las dimensiones de esta globalización. En los procesos de globalización, el capital se globaliza mientras que el trabajo se localiza. Esta tendencia y otras son las causantes de lo que Wagner (1996) denomina el final de la modernidad organizada.

El neoliberalismo, argumenta Bourdeau (1998), tiene la tendencia como un todo a favorecer la separación de la economía de las realidades sociales. Por lo tanto, construye en realidad, un sistema económico conforme a la descripción de una teoría pura, esto es, una especie de máquina lógica que se presenta a sí misma como una cadena de restricciones que regulan a los agentes económicos. Estas restricciones, agregamos, son de carácter institucional, determinan los niveles de desempeño de la economía. El Estado diseña y aplica sus políticas en un medo ambiente complejo e incierto de restricciones políticas, económicas, sociales y culturales. Pero a su vez, el estado necesita ser acotado por restricciones institucionales para realzar sus funciones con más eficacia.

Hay que reconocer que este sistema económico no nos sirve porque crea pobreza y destruye una biosfera. Es una máquina infernal, dice el autor, por la forma en que toma cuerpo la utopía neoliberal, cuya necesidad se impone a sí misma y sobre los gobernantes. Evoca una fe poderosa en el libre comercio y santifica el poder de los mercados en nombre de la eficiencia económica, eliminando las barreras político-administrativas que obstaculizan la maximización de las utilidades individuales. Por lo tanto, el reto es diseñar un sistema económico en el cual el desarrollo tenga lugar en forma tal que no solamente se beneficien los intereses actuales sino también los intereses futuros del capital dominante, debido a su influencia decisiva.

Esta obtención de la máxima utilidad individual es la principal finalidad que ha pasado a denominarse como "el modelo de la racionalidad" por el razonamiento matemático empleado y que los economistas no pueden verificar experimentalmente pero que tienden a dar realidad en una utopía "ultra-lógica", sarcásticamente concluye el autor. La racionalidad refleja el límite de las habilidades cognoscitivas que constriñen al humano en la solución de problemas. El problema, argumenta Amartya Sen, es que la maximización de la suma de las utilidades individuales no está preocupada por la distribución de esa suma (Sen, 1973).

Las capacidades esenciales que se necesitan para el desarrollo humano están ausentes. Los estudios de Sen, premio Nobel de economía, concluyen que la pobreza tiene su origen en políticas económicas que sólo benefician a los grandes capitales. Para revertir el círculo vicioso de la pobreza, y salir de la trampa, de acuerdo al enfoque de "derechos" es necesario identificar y eliminar las limitaciones que comprometen el desarrollo de las competencias y habilidades para que los pobres logren la aplicación de estrategias de acumulación. Un mayor problema es dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados (De Swaan Abram, 1997). El alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos

voluntariamente coordinadas de esta forma. Este círculo vicioso de la pobreza crea una trampa que resulta de las disfuncionalidades del mercado, en la que los pobres lo son porque no son capaces de acumular activos que les permita revertir su situación de pobreza.

El enfoque de los "derechos" de Sen toma en consideración no solamente los ingresos de las personas, sino también de los activos y asignaciones, es decir, describe la relación de las personas con los recursos con que cuentan y los satisfactores que necesitan para cubrir las necesidades básicas de subsistencia. La insatisfacción de las necesidades humanas básicas no permite a los individuos la realización de su potencial completo como agentes económicos y sobretodo, su realización como seres humanos.

Esta dimensión ideológica neoliberal de la globalización amenaza con marginar y autodestruir a quien no se someta a sus lineamentos y estrategias. La estrategia de la globalización no es la de compartir, sino la de competir, arrebatar, golpear a los otros con el objeto de tener un mejor acceso a los recursos globales mediante el uso de mecanismos del mercado y apoyados en las instituciones globales que no son democráticas. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva.

Este déficit democrático deslegitima la economía de la globalización, los hace innecesarios e inaceptables y degrada la gobernabilidad. Los sistemas democráticos limitados han sido tipificados como delegativos. Este déficit democrático es debido en parte a la carencia de políticos responsables que resuelvan los problemas.

Esto está obligando a amplios sectores de la izquierda a replegarse hacia el centro, dando lugar a la Nueva Izquierda, con una tácita aceptación de las nuevas condiciones ideológicas, políticas y económicas impuestas por los intereses capitalistas transnacionales de los países desarrollados. La izquierda se ha visto obligada a asimilar y a repetir hasta el cansancio la retórica de la doctrina del libre mercado y a denunciar el desmantelamiento de las funciones del Estado. Las alianzas entre la Nueva Izquierad y los movimientos globafólicos si toman objetivos políticos, sus posiciones pueden hacer frente para resistir los avances de los procesos de globalización.

Aquí se entiende el calificativo de izquierda en los términos en que la describe Norberto Bobbio: son de izquierda fundamentalmente aquellos que luchan por la igualdad de los seres humanos, en distintas circunstancias y en distintas formas, y éste es el motivo fundamental de su acción y su lucha" (Chonchol, 2001). Las banderas de esta "Nueva Izquierda" son la democratización de las instituciones y una "ciudadanía activa" de la sociedad global, de una ciudadanización que identifica al individuo como el elemento fundamental e irreductible del poder político. No obstante, está naciendo una sociedad civil globalizada que se ha manifestado en movimientos antiglobalizadores con cierto éxito relativo, como en el caso de la campaña para la prohibición de minas personales y el movimiento Jubileo para la condonación de la deuda externa de los países más pobres.

La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del

sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. Para que los procesos de democratización avancen, se requiere de procesos de transformación social. Este fenómeno de la globalización social se hace presente por la explosión de organizaciones no gubernamentales (ONG's) en actividad.

La ambición sin límites de estos intereses es tener una mayor participación en la riqueza que se está generando globalmente, para lo cual cuentan con la protección y el apoyo de la hegemonía política que mantiene el grupo de países más poderosos económica y militarmente, dando lugar a un militarismo mercantilista. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

Los intereses del capital dominante tienen una influencia decisiva en las decisiones. La hegemonía militar que sostiene el poder imperial tiene una relación directa con el crecimiento del dominio económico que ejercen las transnacionales. A su vez, el militarismo mercantilista aumenta su gasto para mantener su poder hegemónico. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

Este enfoque participativo busca identificar y traer bajo consideración las relaciones constructivas de todos los grupos con intereses supranacionales. Sin embargo, las conquistas territoriales como determinantes de las relaciones internacionales están pasando a segundo término, ya que la nueva economía no requiere de grandes espacios territoriales para la prosperidad económica mediante la creación de ventajas competitivas, economías de escala y otras capacidades económicas impresionantes, pero a pesar de ello, la Nueva economía no resuelve los problemas de la crisis de sistema capitalista, antes bien, los agrava debido a los movimientos financieros que dependen de expectativas altamente especulativas. No obstante frente a una rápida emergencia de la nueva economía y un consecuente colapso, vuelven a surgir las empresas de la vieja economía. Precisamente, la globalización redefine la relación entre autoridad y territorio. La autoridad se transfiere en términos operativos del Estado a niveles supranacionales y a los gobiernos locales.

Por otro lado, aparentemente desde la dimensión ideológica, la integración económica es una tendencia contraria a los procesos de globalización e interdependencia, los cuales son usados para reinterpretar y debilitar los principios de autodeterminación y soberanía política de los pueblos, mientras que en el otro extremo se enfatiza una propuesta al ultra regionalismo. Este regionalismo se manifiesta internamente en los Estados-nación y es el resultado de un sentimiento de libertad producto de los cambios culturales que resultan de los procesos de globalización. Este tipo de regionalismo intraestatal se distingue porque ocurren dentro de las fronteras territoriales de un Estado-nación.

Los impactos transculturales de los procesos de globalización se manifiestan en la estandarización universal de comportamientos y valores que se reproducen y adaptan localmente con los identificados con los patrones de la cultura occidental: cosmopolita,

capitalista, urbana, moderna, empleo del idioma Inglés como lenguaje universal, etc. La globalización universaliza los valores de la cultura Anglosajona. Aunque en términos generales se puede sostener que el aparato institucional cultural está en crisis. La imposición de los valores y la cosmovisión de la cultura occidental a los pueblos colonizados, ha dado como resultado grandes disfuncionalidades. Los procesos de globalización tal como se están dando hasta ahora, contribuyen a la devaluación de la autoestima de los pueblos ya de por sí subdesarrollados y a crear un sentido de dependencia.

Los argumentos de que un Estado soberano hace posible los procesos democráticos y que los procesos de globalización debilitan la soberanía del Estado democrático, son muy cuestionados por críticos que argumentan a su vez que los Estados no son tan soberanos ni los procesos de globalización no son la fuerza que representan (Hirst, 2000). La vieja doctrina internacional de no-intervención en los asuntos nacionales, está siendo sustituida por la nueva ley internacional de derechos humanos.

De cualquier manera, la realidad del poder político centralizado del Estado-nación es seriamente atacado por las fuerzas que despliegan los procesos de la globalización económica obligándolo a ajustar sus estructuras políticas y económicas. No obstante la globalización de los mercados es productos de acuerdos entre los Estados y del crecimiento que han tenido las empresas transnacionales. El ejercicio del poder político tiene que ser convenido para ser compartido por instituciones nacionales, regionales e internacionales.

De hecho, las instituciones tienen razón de ser cuando son resultado de arreglos institucionales y de negociaciones de largo plazo entre los diferentes agentes económicos y actores políticos, adaptando los modelos globales a las condiciones de desarrollo local. La adaptación al cambio involucra costos de transacción más bajos y mejores resultados que la reforma. El desarrollo local debe pivotar sobre la base de interacciones comunitarias solidariamente comprometidas, en forma activa y continuada, independientemente de que existe contigüidad territorial y física.

El diseño e implantación de programas de desarrollo económico local integral debe considerar la inclusión y pluralidad de los intereses de diferentes agentes económicos y actores políticos para lograr acuerdos y coordinar eficazmente los esfuerzos. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

El desarrollo económico local lo define Tarapuez y Chamorro (2001) como un proceso que reactiva la economía y dinamiza la sociedad local, mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes en una determinada zona, cuyo objetivo es estimular su crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad local. Para diseñar e implantar programas de desarrollo económico local se requiere de una estructura institucional capaz de promover la formación de capital humano y social para elevar la productividad.

Los partidos políticos están cada vez más alejados de la ciudadanía y la centralización del poder político es un síntoma más de malestar que se expresa en demandas por una ciudadanización de la política que procede desde ciertos grupos independientes a los mismos partidos políticos. Cuando la gente pierde la fe en su gobierno, a largo plazo se pierde la confianza en el sistema político. La declinación del liderazgo político significa un debilitamiento de los últimos medios del poder popular legítimo, por lo cual resulta ser de poco valor votar por políticos que carecen de poder real.

Sin embargo, es necesario que existan instituciones que desarrollen las funciones de la democracia equivalentes a las que realizan los partidos políticos para desempeñar las funciones de agregación de intereses y la organización del debate en cuanto a las políticas públicas. El Estado formula las políticas públicas a través de sus instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales, mientras que en la sociedad civil, los ciudadanos participan en foros para establecer las demandas y validar las actuaciones de las instituciones políticas.

La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. La institucionalización de los partidos es un elemento esencial para obtener una gestión política eficiente de la gobernabilidad democrática. La mera idea de estas instituciones que sustituyan en las funciones a los partidos políticos que emergerán en el ámbito global, parece como una utopía hasta ahora.

Pero esta realidad está modificando también la realidad supranacional, esto es, se está cayendo en una hiper realidad manipulable, altamente virtualizada y tecnologizada. La liberalización de las economías va montada en la retaguardia y bajo el cobijo de los avances de la tecnología de la información, la cual facilita la comunicación global entre los ciudadanos. La globalización es por lo tanto, un fenómeno y un hecho real, irreversible y a los que no se puede sustraer Estado-nación alguna y cuyas estructuras de poder no están todavía bien definidas para garantizar los procesos de transición. Estas nuevas estructuras de poder de los procesos de globalización están cada vez más concentradas y difusas. De hecho, las estructuras de poder se han violentado y se han eliminado los mecanismos de mediación política.

De esta forma, plegada a la tendencia de la globalización de los agentes económicos, existe la tendencia a la territorialización de sus recursos, pero es necesario hacer la distinción entre espacios económicos y espacios geográficos. Así, el concepto de espacio ha evolucionado de una concepción física territorial a una más dinámica y multilineal. Arellanes Jiménez (2001) conceptualiza este nuevo concepto de espacio como un "concepto dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones."

En la tendencia a la glocalización o globalización local, las empresas participan de un espacio de los mercados internacionales, al mismo tiempo que explotan sus propios recursos locales. Para insertarse en los procesos de globalización, y además contrarrestar la fuerza de su influjo, es necesario que se diseñe e implemente una política local integral de

desarrollo que sea inclusiva de las lógicas de los intereses del gobierno, mercado y sociedad locales.

Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Tarapuez y Chamorro (2001) define la política local para el fortalecimiento empresarial como "la organización de los esfuerzos y las acciones de los agentes sociales para el logro de un objetivo amplio y genérico: el desarrollo, competitividad, promoción y fortalecimiento de las MIPYMES", (micro, pequeñas y medianas empresas).

De acuerdo a la teoría de la empresa como una función de producción, no se adapta a los propósitos principales de la organización económica. La teoría de la organización realiza importantes contribuciones a los planteamientos de la teoría de la empresa mediante el empleo de los principios de la economía de los costos de transacción, el reconocimiento de la acción de los agentes y actores, la decisión mediante la elección de formas alternativas de gobernabilidad, etc.

La teoría de la empresa, como una forma de gobernabilidad es vista como un proceso continuo de transformación, más que como una construcción terminada. Las grandes corporaciones globales que invierten y establecen operaciones en países y localidades determinadas, son seguidos por sus principales proveedores que también establecen plantas y realizan operaciones en los mismos lugares a fin de sostenerse en las cadenas productivas y por lo mismo en sus negocios.

Las economías territoriales o economías geográficas integran conjuntos específicos de relaciones entre la localidad y la globalidad rompiendo con la concepción de espacio como apertura progresiva de conjuntos PRE- constituidos localmente. Su fuerza tanto en lo que necesita del exterior como lo que contiene al interior (Ballet, 2000) La economía geográfica introduce la dimensión espacial al razonamiento económico y explica la organización económica del espacio. Aporta respuestas relacionados con los costos bajos de transporte, la variedad y la heterogeneidad en los fenómenos de polarización que resulta de la concentración geográfica de los agentes heterogéneos y a la dinámica de la polarización desarrollada por los teóricos de la dependencia. Una reducción sustancial de los costos de transporte es un factor importante para que los procesos de globalización se profundicen.

Las nuevas percepciones y representaciones del espacio en la globalización local y el networking global, red global o economía de archipiélagos, inscriben las economías territoriales en el espacio económico mundial sin que puedan ser analizadas como economías constituidas localmente y que tienen apertura al exterior, mientras sus campos de fuerzas económicas son discontinuos geográficamente. El análisis sobre los mecanismos de polarización territorial de la economía geográfica invierte la teoría del equilibrio del comercio internacional y del crecimiento regional. En este crecimiento regional, el Estado como un actor político y social y un agente económico sigue teniendo un papel importante. Así, la economía geográfica explica la polarización del espacio en relaciones de centro-periferia, pero este esquema ya no corresponde a la nueva organización del espacio caracterizada por la local globalización y el global networking el cual puede ser explicado bajo el enfoque tecnológico e institucional.

El enfoque tecnológico surge de las características intrínsecas de la coordinación y bajo el influjo de la fuerza de la proximidad física, mientras que el enfoque institucional emerge de las redes individuales y sociales o de políticas públicas localmente constituidas que facilitan el acceso de las relaciones económicas entre los diversos agentes. Las redes informales empresariales, por ejemplo, se apoyan en la innovación de la tecnología de la información, facilitan la comunicación en un contexto social para apoyarse en actividades relacionadas y aprovechar las oportunidades que surgen en el medio ambiente de la globalización. De esta forma, el llamado sector informal de la economía representa un tipo de subsidio para las empresas capitalistas en el sector formal. De esta forma, el llamado sector informal de la economía representa un tipo de subsidio para las empresas capitalistas en el sector formal. La presencia de un sector informal grande ayuda a mantener los salarios bajos y los costos de reproducir la fuerza de trabajo urbana a un mínimo para los negocios locales y para las corporaciones transnacionales, por lo tanto los capitalistas son capaces de maximizar sus utilidades pagando bajos salarios a sus trabajadores y pocos si es que algunos beneficios.

La globalización constituye una etapa superior del desarrollo mundial del capitalismo que surge a partir de cambios radicales y profundos en la economía política y la política económica fundamentadas en el neoliberalismo que pretende transnacionalizar su impacto. También puede entenderse los actuales procesos de globalización como resultado de una tendencia continuada por lo menos en los últimos cinco siglos, del desarrollo del capitalismo, hasta llegar a la fase actual denominada neocapitalismo o capitalismo tardío, mediante el análisis más detallado de sus rasgos característicos que muestran diferentes manifestaciones y formas de expresión.

Sin embargo, la doctrina neoliberal no se ha implementado universalmente, aún en el caso de los países más avanzados todavía mantienen prácticas contrarias, como en el caso de las medidas proteccionistas. Hasta ahora, los efectos negativos de las crisis financieras que el modelo neoliberal ha desatado, hacen pensar para muchos analistas en que se asiste al final del neoliberalismo, posición muy discutible porque todavía presenta signos de vitalidad. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera.

Cualquier oportunidad para hacer dinero es la esencia del capitalismo, la que a su vez es la fuerza motivadora detrás de los procesos de liberalización y globalización. Milton Friedman ha dicho que no hay nada nuevo acerca de la globalización, excepto la palabra y la existencia de una más eficiente comunicación y transmisión de tendencias. Así que el nombre del juego es capitalismo. El proyecto político de la globalización pretende instaurar este liberalismo transnacional con su consorte, el capitalismo liberal democrático, o neocapitalismo, como el único modelo de desarrollo (Gill, 1995). Este proyecto político de la globalización se sostiene en una combinación de libre mercado, democracia representativa y pluralidad cultural.

Los modelos de desarrollo han cambiado de una orientación hacia la planificación estatal, de importación de substituciones y de controles de tasas de interés y de precios,

tarifas y regulaciones, flujos de capital e inversiones, hacia un desarrollo orientado al libre mercado, con remoción de los controles anteriores, con apertura comercial hacia el exterior y el establecimiento de precios correctos del mercado, etc., a efecto de que permita lograr un balance en el mercado mediante las presiones de las leyes de la demanda y oferta. Establecer un adecuado sistema de procesos es una condición necesaria pero no suficiente para lograr una reforma del Estado. La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad.

El capitalismo es una teoría de un sistema económico en el cual el control de la producción y la distribución de los recursos reales y financieros están basados en la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad privada es una institución política fundamental del capitalismo que, además, postula la idea de que el Estado debe tener un mínimo involucramiento en la administración de la economía.

Frente a la concepción socialista moderna que ve un problema en la propiedad privada y prefiere una propiedad colectiva, Aristóteles consideraba, en efecto, que solamente lo que el individuo tenía como propio es aquello de que me se ocupa con más esmero. Aristóteles no solo se preocupa por la defensa de la propiedad privada, sino la promoción, al mismo tiempo, de un uso en común. En el capitalismo, la producción adquiere más importancia que la distribución y el consumo porque implica la propiedad de los recursos económicos, principal fuente del poder económico. No obstante, en términos reales, el comercio mundial.

Sin embargo, la habilidad del gobierno para proveer un compromiso creíble a los retornos de la propiedad privada como institución política y su impacto económico no son completos. La no-interferencia del gobierno con los derechos de propiedad privada es instrumental en la obtención de inversiones de capital a largo plazo, el cual es requerido por las naciones para alcanzar tasas de alto rendimiento.

Las inversiones multilaterales entre los diferentes Estados, se realizan con la participación de las grandes empresas transnacionales. Un análisis de los mecanismos de gobernabilidad para las transacciones del sector privado puede ser determinada por los derechos de propiedad. A pesar de que las decisiones de inversión del sector privado están influidas por las percepciones del sector privado de tales resultados económicos no se infiere que existe una conexión entre inversiones y propiedad privada. (Henisz, 2000) En otras palabras, los gobiernos han saneado las economías nacionales, únicamente para favorecer la inversión internacional.

La propiedad intelectual y científica de la producción es fundamental para mantener la innovación y la competitividad del mercado y se constituye en ventajas comparativas para quienes la detentan. Para Porter (1991), la competitividad, las empresas tienen que competir en un entorno formado por cuatro atributos que estimulan o limitan la creación de ventajas competitivas. Estos atributos son la disponibilidad de los factores de producción, la demanda interna, la estructura y estrategia de la rivalidad de las empresas y los sectores conexos.

La modificación del clima intelectual a favor del libre comercio es un fenómeno que ocurre simultáneamente a los procesos de globalización. El mejoramiento de las instituciones que promueven la innovación, tales como los derechos de propiedad, incide en la economía simulada que indica que el factor más importante en la transición al crecimiento ha sido el incremento en lo producido para compensar a los inventores.

La propiedad privada se convierte en un principio de funcionamiento del mecanismo del mercado pero que en vez de otorgar más libertad, la limita. Parafraseando a Ireton, para la preservación de la propiedad privada, no se puede otorgar la libertad en un sentido amplio. De hecho, el que se establezca un sistema de derechos de propiedad nos e garantiza que se desarrollen los mecanismos e incentivos del mercado y que además el estado deje de intervenir estratégicamente en la economía.

El capitalismo es un sistema económico en el cual la plusvalía se extrae de los procesos de producción usando el salario del trabajo y utilizando en la circulación procesos para sostener la acumulación del capital. Las estructuras que contribuyen a la formación de los salarios es crítica para los efectos de impuestos y los beneficios de desempleo en el desempeño de los mercados laborales. Por lo tanto, si el capitalismo muestra signos de recuperación, esto es a expensas de la clase trabajadora que ha visto mermados sus ingresos salariales, aumento del desempleo y la desaparición de sus prestaciones sociales. El futuro de los trabajadores es muy incierto.

Los efectos de la globalización sobre las desigualdades salariales en los países desarrollados y en desarrollo, de acuerdo a Wood (2000), se explican en función de tres teorías compatibles y complementarias: El abaratamiento de las comunicaciones y los viajes permiten que los trabajadores más calificados transfieren sus habilidades y amplían las brechas salariales (Tang and Wood, 2000). La transferencia de actividades de producción del Norte al Sur incrementan la intensidad de las habilidades en ambas regiones y amplía la brecha salarial entre los trabajadores calificados y los no calificados (Feenstra and Handson, 1996). En el modelo de Heckscher and Ohlin. La reducción de las barreras al comercio especializa la producción en ambas regiones, tiende a aumentar la desigualdad salarial en el Norte y a reducirla en el Sur.

Por otro lado, si la dictadura del trabajo domina, la democracia tampoco puede florecer. Al respecto Birchfield (1999) nos recuerda que la relación del salario capitalista necesita la separación conceptual de la economía y la política respectivamente en esferas privadas y públicas de actividad, la que a su vez constituye un elemento definitorio del Estado liberal. En la sociedad moderna hay un conflicto latente entre capitalismo y política. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La política exige por lo menos un uso comunitario sometido a reglas que se regulan por leyes, desde el impuesto obligatorio a las reglas de tráfico, pasando por la reglamentación de la construcción, el comercio etc

El capitalismo puede ser tipificado en formas puras de capitalismo como “capitalismo clásico”, “capitalismo corporativo orientado al mercado”, y “capitalismo corporativo orientado a los bancos”. Estos tipos de capitalismo se alejan del “espíritu capitalista”

propuesto por la doctrina calvinista que sostenía valores como el ascetismo, puritanismo, frugalidad, ética del trabajo, ahorro, vida austera, etc. Los tipos de capitalismos posteriores son evoluciones perversas de la doctrina calvinista. Aunque el capitalismo clásico ya no es el tipo dominante, sin embargo, prevalece en países menos desarrollados.

El capitalismo corporativo, también denominado neocapitalismo o capitalismo tardío, se basa en un régimen de propiedad privada difusa propio de las grandes corporaciones que conjuntan recursos de muchos accionistas. El corporativismo financiero pertenece a este neocapitalismo. De hecho, los problemas contemporáneos de la globalización, la expansión del capitalismo tardío o postmoderno han agravado los más crónicos problemas como en el caso de la región latinoamericana.

Las economías contemporáneas de Latinoamérica se han convertido en partes integral del nuevo sistema económico global que es dominado no por naciones Estados, sino por grandes corporaciones transnacionales que constituyen los principales actores globales en este sistema. La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta. En las últimas dos décadas, casi cada aspecto mayor de la vida económica, política y social en Latinoamérica estuvo influida por la integración acelerada de la región en el sistema capitalista global. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población latinoamericana mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso. Cualquier intento serio para explicar las desigualdades y las formas de ubicuidad de la injusticia que caracteriza a las sociedades Latinoamericanas inevitablemente conduce un examen crítico de las relaciones de explotación de producción y distribución capitalista que predomina en la región.

Existen evidencias para sostener que las distintas facciones de este corporativismo financiero se disputan los intereses y beneficios de los procesos de la globalización en diferentes áreas estratégicas, por diferentes medios que incluyen las guerras y los actos de terrorismo. Los protagonistas del nuevo modelo de desarrollo son los principales agentes económicos y financieros del capitalismo corporativista internacional que para lograr sus propósitos prescinden de instituciones políticas intermediarias, como el Estado-nación.

Además, requieren de una jerarquía interna compuesta de funcionarios y agentes (administradores) para ejercer el control de las operaciones (Screpanti, 1999), mediante el diseño de esquemas de incentivos y recompensas que hagan no atractiva la conducta de corrupción. La corrupción se define como el mal uso que se hace de la oficina pública para la ganancia personal. El principal objetivo de la corrupción es incrementar la ganancia privada. El eclecticismo del personal administrativo es responsable de la desprofesionalización de la administración en ciertos países. Confrontado en algunos casos

por una escasez de personal debido a un rápido crecimiento de la economía. Sin embargo, la propiedad corporativa puede ser, además de ser difusa con un control administrativo rígido, propiedad concentrada en pocos principales capitalistas y aún en otros, los trabajadores influyen fuertemente en la corporación. El control administrativo es generalmente ejercitado por los oficiales sobre sus subordinados, ya sea en forma autónoma o dirigido a su vez por el control judicial.

El control administrativo es generalmente ejercitado por oficiales senior en sus subordinados. El control judicial de la ética involucra la verificación de la conformidad de las acciones y la conducta de oficial público con referencia a valores tales como la probidad, desinterés, neutralidad e imparcialidad. El capitalismo corporativo se reproduce socialmente mediante el uso de técnicas que no son ideológicamente neutrales, se asigna el control a administradores eficientes y se racionaliza el crédito mediante una tendencia clasista.

Este administrador está orientado hacia la globalidad (Ali, 2001), es decir, es un administrador global, el cual, a diferencia de los políticos, no están necesariamente de acuerdo con la orientación hegemónica, aunque perciben los procesos de globalización como inclusivos que maximizan la participación e induce el acceso a la obtención de beneficios en la economía y tecnología global.

El análisis de la globalización desde la economía política estudia su naturaleza capitalista en el contexto del sistema internacional en el cual los actores llevan a cabo sus operaciones, así como la transnacionalización de sus causas y efectos. Bajo este análisis, la estructura transnacional de actores financieros y económicos se sobrepone, cubre, suple, rodea, limita e intercepta al Estado-nación. La estructura espacial de las diferentes unidades geográficas se delimita territorialmente en función de sus fronteras físicas y geográficas y definen las interrelaciones entre las diferentes entidades.

La hegemonía de esta estructura transnacional de clase confía más en lograr el consenso que en la dominación. El fenómeno de la globalización acelera las interconexiones económicas, políticas, sociales y culturales entre lugares distantes del mundo, mediante la convergencia entre naciones y empresas con formas comunes de hacer las cosas.

Cada vez más, bajo los procesos de globalización, las fronteras entre los Estado-nación y las empresas se vuelven más porosas y permeables, con intereses compartidos pero también con intereses en conflicto que aquéllas entre los Estados-nación, por el sólo hecho de que cada persona pertenece a una empresa y al mismo tiempo es ciudadano de un Estado (Tétreault, 1999) Si los procesos económicos, políticos y sociales se extienden más allá de las fronteras territoriales de los Estados-nación, entonces éstas fronteras ya no constituyen la base para enmarcar los procesos de toma de decisiones que afectan a la población, tal como ha sido en los últimos dos siglos. La desterritorialización del Estado-nación está dando lugar a nuevas formas espaciales geopolíticas y geoeconómicas. Entonces, la condición de ciudadano, no está limitada a una comunidad política, sino que se convierte en extensiva a la demarcación regional y global en última instancia. De acuerdo a Putnam (1993: 183), “la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación

deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político".

Los procesos de globalización crean las condiciones para la circulación libre de los capitales. La transnacionalización creciente de las operaciones del sistema capitalista demandan espacios para sus mercados que trascienden las fronteras físicas y culturales del Estado-nación, al que limitan su ámbito de operación, exacerbando las desigualdades económicas, sociales y políticas y a las que jerarquizan de acuerdo a las condiciones en que se presenta en la competitividad de los mercados globales.

Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. Sí los procesos de globalización se encuentran inextricablemente relacionados con la competitividad. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales. No obstante, resulta muy difícil aislar los efectos de la globalización en las desigualdades, sobretodo en los países del tercer mundo.

Los efectos de la globalización no son los mismos en los diferentes territorios y en las sociedades locales. No obstante, la sociedad local y regional adquiere relevancia como un actor social que promueve el crecimiento económico y el desarrollo más equitativo y justo de las regiones. Corresponde a los gobiernos la protección para producir este crecimiento económico. Los beneficios son mayores en aquéllas localidades que previamente ya habían alcanzado niveles de desarrollo y que además tienen posibilidades para desarrollar sus capacidades y ventajas estratégicas.

Sin embargo, se está demostrando que el libre comercio bajo el esquema de la globalización económica no mejora necesariamente las condiciones de competitividad en aquellos países donde no existe, regularmente los países pobres. La globalización de los mercados es producto de los acuerdos comerciales entre los Estados y del crecimiento de las empresas transnacionales. Todos los acuerdos comerciales han sido promovidos y negociados por los Estados para abrir mercados nacionales a sus empresas transnacionales. No obstante, si pueden tener un impacto en la competitividad de aquellos países que ya la tienen y que casi siempre son los países desarrollados, donde la competencia se intensifica porque las restricciones son removidas.

Existe una relación estrecha de inextricabilidad entre la competencia y los procesos de globalización, en donde la competencia es promovida como un mecanismo motivacional por el mismo sistema imperial, y más concretamente por los Estados imperiales. Al decir de Patras (2001d) la competencia "en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados".

La creciente expansión en intensidad y alcance del capitalismo globalizador es resultado de la aceptación de las leyes y principios de la teoría del mercado, en donde nadie controla los mercados globales. La expansión del capitalismo se realiza a través del mercado entre las empresas y al interior de las jerarquías de las grandes corporaciones y empresas burocráticas. En cada fase expansiva de las grandes corporaciones, se requería el

apoyo directo del Estado imperial. En la expansión de las transnacionales se requiere previamente la expansión militar y política del Estado imperial. Desde este principio, el libre comercio significa la creación de oportunidades para la expansión internacional de los mercados.

El corporativismo financiero y económico global es el principal agente que promueven la expansión del capitalismo global, el cual es más resultado de la especulación financiera. La expansión del capitalismo se realiza a través de la organización de la sociedad, el modo de producción y el poder político en las colonias. La herencia colonial ha marcado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados. Para asegurar y multiplicar el funcionamiento del capitalismo global, las diferentes facciones de corporaciones financieras y económicas recurren a diferentes medios para dirimir las diferencias de sus intereses, entre los que se destaca la guerra y sus diversas manifestaciones.

El propósito final del libre comercio impulsado a partir de los avances de la tecnología de la información y transporte, que facilita la movilidad de los factores de la producción (capital, mano de obra, etc.), es la creación de nuevas alternativas de producción, distribución y consumo. Los procesos de globalización originan y son a su vez el resultado de una creciente movilidad de personas. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado. El incremento de la movilidad de bienes y servicios, así como de empresas, también implica que los trabajos llegue a ser demasiado móviles, aunque su tendencia es a delimitarse en un área geográfica por parte de quien lo presta, mientras que el capital no encuentra fronteras territoriales.

Mientras el capital se globaliza, el trabajo se localiza. Una mayor movilidad de los factores de producción, principalmente el capital, sobrepasan las barreras territoriales y sustituyen el territorio. La movilidad de los factores de producción es una de las características distintivas de los proceso de globalización, así como la innovación constante, el enfoque emprendedor y los cambios continuos en la estructura económica.

El sistema del capitalismo globalizado tiene el potencial de crear riqueza, pero tienen que establecerse las condiciones correctas para aquellos que están excluidos de los beneficios a fin de que se incorporen en los términos relativamente iguales. El capitalismo globalizador polariza el desarrollo económico y social de los pueblos. El capitalismo globalizador se encuentra amenazado por una espiral decreciente de crecimiento económico, es decir por una espiral decreciente de los ingresos per cápitas y por los promedios reales de consumo.

El capitalismo globalizador o neocapitalismo genera tensiones que se reflejan en las crisis económicas, políticas, sociales, culturales, educativas, en el medio ambiente, etc. Los agentes económicos y los actores políticos se encuentran en una carrera absurda de competencia por alcanzar una modernidad que termina en una crisis económica, social, ecológica y moral. Esta tendencia y otras son las causantes de lo que Wagner (1996) denomina el final de la modernidad organizada. No hay que perder de vista que mientras el capitalismo se recupera, la inmensa mayoría de los trabajadores ven disminuidos sus

ingresos salariales y prestaciones sociales además de incrementos inusitados de desempleo. El futuro de los trabajadores es muy incierto. Debe quedar abierta la posibilidad en el debate de que la obtención más rápida del incremento de la riqueza no es necesariamente el fin que la economía global debe perseguir.

El nuevo período de la globalización es la acentuación de un período previo de un capitalismo continuado. Los procesos de internacionalización económica y mundialización de capital pueden ser calificados como procesos de expansión del imperialismo porque permiten la dominación, explotación y apropiación de la riqueza por intereses hegemónicos, mediante ciertos mecanismos y bajo un escenario internacional de relaciones comerciales asimétricas, inequitativas e injustas. En el sistema imperial, las empresas transnacionales de los Estados imperialistas dominan los mercados nacionales y los Estados. La expansión del capitalismo ocurre través de la organización de la sociedad, el modo de producción y el poder político en los espacios coloniales. La herencia colonial ha marcado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados.

Petras (2001c) sostiene que las evidencias de este imperialismo y en contra de una economía global interdependiente, son "la naturaleza y las consecuencias de las crisis económicas" más recientes en los últimos años. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados. Sin embargo, en la historia del capitalismo, el imperialismo y los movimientos de liberación son constantes, pero el avance de un capitalismo sin regulación alguna puede terminar en una convergencia hacia la universalización del imperialismo.

La victoria de la mundialización del capital presupone la victoria de la reacción política que impone el poder absoluto del mercado y de una política económica que desregula la economía. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible.

La teoría del imperialismo enfoca a un Estado-nación imperial que concentra las estructuras de decisión, estrategia y poder, desde donde se lanzan las corporaciones transnacionales para establecer alianzas con las empresas nacionales, dando origen a la formación de nuevas configuraciones de clase. La propiedad y el control de las corporaciones transnacionales están concentrados en pocos Estados imperiales. Los Estados imperialistas apoyan a las corporaciones transnacionales en el reparto de los mercados internacionales para aumentar su poder e influencia. En este sentido, el término globalización está desplazando al término imperialismo.

Quizás las corporaciones transnacionales son las únicas que realizan un capitalismo de alianzas y de inversiones conjuntas que refuerza conductas cooperativas. Los acuerdos de inversión multilaterales entre diferentes Estados nación, siempre tienen como fundamento la participación de las empresas transnacionales. Las estrategias cooperativas y de

autogestión en los sistemas de producción, distribución y consumo, no siguen la observancia de procesos democráticos, como el modelo de gobernabilidad democrática sugiere, sino los dictados de un grupo de agentes económico con intereses de hegemonía.

Laïdi (2000) argumenta que la mundialización pone en juego dos mecanismos, el deterioro de la democracia representativa y la ausencia de un instrumento que ofrezca a los Estados-nación una cerca o barrera simbólica. La democracia representativa limita el margen de maniobra de los operadores políticos y presiona por cambios estructurales y funcionales del Estado-nación. Algunas de las tesis de Marx se mantienen vigentes. Las tesis marxistas sobre la mundialización hasta cierto punto se cumplen, sólo que en vez de estar al final, estamos al inicio de los procesos de globalización.

Así, los procesos de globalización son esencialmente procesos dialécticos y generan respuestas en función de la complejidad e incertidumbre de los fenómenos económicos, políticos y sociales. Marx pronosticó la concentración del poder económico señalando que al madurar el sistema capitalista surgirían grandes empresas que controlarían los mercados, con una mayor dependencia en la tecnología, y aumentarían las recesiones económicas. Además, es el poder militar el que se concentrado más abiertamente. Así, Marx al igual que otros precursores como Saint-Simon, Durkheim y Weber, se adelantaron en sus análisis internacionalistas a la idea de la formación del mercado mundial capitalista. Así la globalización es un proceso que tiene como marco de referencia la dominación imperialista por medio de las relaciones internacionales económicas y políticas.

La globalización es consecuencia ineludible de la modernidad capitalista que deriva en la postmodernidad, y por lo tanto, en un preconizado relativismo que socava la crítica social, para el cual la objetividad es una mera convención social. Muchos de los habitantes de la regiones menos desarrolladas viven bajo condiciones que pueden ser descritas como modernidad desigual más que postmodernidad. Si la característica fundamental de la modernidad es la densidad de los cambios, la característica principal de la postmodernidad es la aceleración de estos cambios caracterizados por su complejidad e incertidumbre, por una fenomenología caótica (teoría del caos) que modifica constantemente los procesos económicos, políticos, sociales, culturales, etc. Esta tendencia y otras son las causantes de lo que Wagner (1996) denomina el final de la modernidad organizada.

La postmodernidad alienta la revisión de las culturas y a replantear sus relaciones con la visión de los valores occidentales. Hay escasas evidencias de que la región consiste de "sociedades postmodernas" o que se está moviendo a una era postmoderna. La postmodernidad cuestiona la legitimidad del desarrollo alcanzado por la modernidad y la universalidad de sus valores y procesos, el reduccionismo economicista, el etnocentrismo y la unidimensionalidad de su interpretación.

Las críticas al desarrollo de la posmodernidad se interesan por los paradigmas alternativos que enfatizan el establecimiento de metas desde una tradición y cultura, participación en la toma de decisiones y en la acción de contenidos de desarrollo (Goulet, 1999). Lechner (2000), señala que en la posmodernidad inciden como tendencias, el desmoronamiento de la fe en el progreso y una creciente sensibilidad acerca de los riesgos fabricados por la modernización; el auge del mercado y el consiguiente debilitamiento de la

política como instancia reguladora y el cuestionamiento de la noción misma de sociedad como sujeto colectivo capaz de moldear su ordenamiento.

Muchos de los habitantes de la regiones menos desarrolladas viven bajo condiciones que pueden ser descritas como modernidad desigual más que postmodernidad. La postmodernidad cuestiona las variables sociales, culturales, del medio ambiente, políticas y éticas de la ecuación del desarrollo y su proyecto modernizador. Esta tendencia y otras son las causantes de lo que Wagner (1996) denomina el final de la modernidad organizada.

La globalización puede ser vista como una continuidad del voluntarismo para establecer el ideal de una sociedad justa y afluente mediante la creación del Estado de Bienestar y de las tesis desarrollistas, pero con adaptaciones a la cultura de la postmodernidad. La postmodernidad cuestiona los medios y fines del desarrollo alcanzado por la modernidad y la universalidad de sus valores y procesos, su enfoque ethnocénrtrico, reduccionismo economicista y su unidimensionalidad.

Las orientaciones posmodernas que son condicionantes de los principales agentes de los procesos de globalización, las corporaciones transnacionales y multinacionales, al decir de Santos (1993) son la unicidad de la tecnología, del tiempo y de la plusvalía como motor del desarrollo. El tiempo tiene poco significado y el espacio se comprime como resultado del avance tecnológico.

En la posmodernidad prevalece la idea de que la realidad es compleja y multicausal, en cambio continuo, que acepta diferentes racionalidades con relación a las variables a optimizar y que nada está garantizado o predeterminado. Si la modernidad capitalista fue la creadora del Estado-nación y sus principales creaciones, como una sociedad y mercado nacionales, fronteras, ejércitos, etc., cuando el capitalismo entra en crisis, aunque muy discutible, entonces necesariamente entran en crisis todas estas instituciones, ya en transición hacia la posmodernidad. La posmodernidad de la cultura política se caracteriza por una fragmentación de valores compartidos por las colectividades y el distanciamiento de los ciudadanos a las instituciones, marcado por una creciente desconfianza que provoca crisis de las democracias institucionalizadas. No obstante, las tesis desarrollistas se sustraen de las tendencias globalizantes y persisten solamente como una posible alternativa por si estas llegaran a fallar.

Un inmovilismo discursivo está invadiendo a la sociedad posmoderna. La globalización exalta al individualismo de las personas, las convierte en meros instrumentos homogéneos de producción y consumo y las reduce a simples mercancías que se compran y venden sin que las diferenciaciones culturales sean obstáculo. A mayor globalización, más avance tiene el individualismo, lo que afirma la tendencia hacia el autoritarismo del sistema capitalista. Se vive en un mundo en el que la adquisición y el consumo son considerados como las marcas de éxito personal y no lograrlo es una marca de fracaso. La cultura está siendo globalizada igualmente que el comercio, cuya tendencia es a la destrucción de las culturas locales, a la homogeneización y estandarización que destruye la diversidad y vitalidad cultural y social.

La globalización está afectando el “efecto de calor de hogar político-cultural” protegido por el Estado nacional moderno, por lo que “toda comunidad política real tendrá que dar una respuesta al doble imperativo de la determinación por el espacio y la determinación por el sí mismo” como punto de convergencia para una identidad regional. De acuerdo a Putnam (1993: 183), “la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político”. La identidad se expresa en una comunidad de intereses a través de medios espaciales territoriales nacionales e internacionales. Los procesos de transformación de los Estados-nación, como resultado del impacto de la globalización económica, influyen en las comunidades políticas, cuyas estructuras se vuelven complejas y se modifican debido a la multiplicidad de interconexiones que surgen.

Las estructuras espaciales se delimitan por los territorios físicos y geográficos los que a su vez definen los tipos de relaciones entre las diferentes entidades geográficas. Las funciones y procesos de las comunidades políticas quedan expuestas a las transformaciones de los procesos de globalización, y por lo tanto, quedan fuera del control estricto de las instituciones del Estado-nación. Las transformaciones económicas y políticas también implican transformaciones de los valores sociales, culturales y sobretodo de valores morales. El aceleramiento de los procesos de globalización ha dado lugar a procesos de desterritorialización del Estado nacional para alentar la emergencia de nuevas unidades espaciales geopolíticas y geoeconómicas.

La institucionalización del Estado fue consecuencia de la regulación de las relaciones, establecimiento de los deberes y obligaciones, así como la resolución de conflictos de los individuos en la sociedad. Los procesos de institucionalización efectuados durante los últimos años del siglo pasado, desestructuraron y fueron disfuncionales en las relaciones entre la economía y la política, causando graves crisis.

En la sociedad moderna hay un conflicto latente entre capitalismo y política. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La política exige por lo menos un uso comunitario sometido a reglas que se regulan por leyes, desde el impuesto obligatorio a las reglas de tráfico, pasando por la reglamentación de la construcción, el comercio etc. Los mecanismos de participación política en las comunidades políticas democráticas adquieren nuevas dimensiones cuando se busca la representatividad de los ciudadanos. Sin embargo, la utilización de estos mecanismos puede prestarse a la manipulación de la sociedad. En general, los ciudadanos participan poco o son indiferentes en los asuntos políticos, no se identifican con el juego de la política ni con políticos o partidos políticos a los que desdeñan y en ocasiones desprecian.

Esta tendencia hacia el sí mismo multilocal es ya una característica de esta modernidad capitalista avanzada, del mismo modo que la tendencia hacia el espacio poli étnico o “desnacional” (Sloterdijk, 1999). El concepto de espacio evolucionó de una concepción territorial física a una concepción más dinámica y multilineal. Arellanes Jiménez caracteriza este nuevo concepto de espacio como un “concepto dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones.” Pero la exclusión y segregación

humana tiene serias consecuencias, que se expresan en comportamientos antisociales, tal como Bauman (1998) precisa: "Una parte integral del proceso de globalización es la progresiva segregación espacial, la separación y la exclusión. Las tendencias neotribales y fundamentalistas, que reflejan y articulan la experiencia de la gente al recibir los coletazos de la globalización como la extensamente celebrada "hibridización de la top culture: la cultura en la cima globalizada".

La cultura global puede ser una herramienta que la sociedad y los individuos pueden usar para su beneficio propio más que para perder en los procesos de globalización. La cultura global o world culture con sus símbolos y mensajes mundiales, es difundida por medio de la tecnología de las comunicaciones e impone valores, costumbres, criterios, estándares y estilos de vida homogéneos en el mundo. Todavía está por verse si se cumplen las predicciones de Eliot acerca de que la humanidad tendría un renacimiento en sus culturas locales y regionales bajo el fuerte influjo de la globalización en un diálogo transcultural y sus efectos en las identidades culturales nacionales. Estos efectos de la globalización se manifiestan en la alteración de la estructura social y en la modificación de la concepción de comunidad.

A pesar de que el cuestionamiento de si las identidades colectivas son una ficción ideológica (Vargas Llosa, 2000), no parece ser muy consistente. Los procesos de la individualización enfatizan la presencia del individuo por sobre lo colectivo, escindiendo en forma nominalista entre el individuo y la sociedad, mediante el debilitamiento de los referentes materiales y simbólicos de las identidades colectivas. Dados los procesos de identificación y adhesión a ciertas representaciones sociales, mientras que la identidad cultural individual en que "cada ciudadano de este planeta interconectado –la patria de todos- construya su propia identidad cultural, de acuerdo a sus preferencias y motivaciones íntimas y mediante acciones voluntariamente decididas" no tiene mucho sentido. Estos procesos de afirmación de la identidad cultural son opuestos a los procesos de la globalización económica, los cuales profundizan más las fracturas sociales. Las capacidades del Estado-nación para eliminar las brechas existentes en las disociaciones y disfuncionalidades entre los alcances de los procesos de globalización económica y los procesos de identidad cultural son muy limitados.

Por lo mismo, no necesariamente la identidad nacional puede ser contraria a los procesos de globalización como sucedió con la rigidez del Estado-nación en que algunas identidades culturales fueron sometidas o marginadas. La globalización empuja a la occidentalización, y más específicamente a la americanización de los valores en todo el planeta y a la formación de una nueva ciudadanía mundial. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política.

Es en este sentido que habitualmente la globalización significa americanización, por la posición hegemónica de los Estados Unidos. Pero a menos que se tenga una claridad en los valores que subyacen en las herramientas sociales y tecnológicas, se estará en un grave problema. Con respecto a Occidente, Jaspers (1965) ha dicho que " Occidente no es estable

en ningún sentido; en ello radica su permanente inquietud, su constante insatisfacción, su incapacidad de contentarse con algo perfecto y acabado".

La base de esta nueva ciudadanía mundial es un ser humano que es reducido a la simple expresión de su capacidad para generar beneficios económicos en un mercado planetario transculturizado e interculturalmente uniformado que consagra como único modo de pensar una ideología única y hegemónica, en un diálogo sordo. Toda ideología permita la generalización de una realidad de la que no se tiene el conocimiento completo porque opera en ambientes inciertos y complejos.

Se adoptan las ideologías porque complementan la formalidad del aprendizaje para formular hipótesis de trabajo, cuyos resultados influyen en el crecimiento y el desarrollo. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma. La propuesta de aprendizaje institucional (Kaiser, 1997) sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional.

Las economías orientadas por ideología tienden a transformar la realidad concreta. La ideología neoliberal tiene sus raíces ideológicas en los siglos XVIII y XIX en los pensadores liberales tales como Adam Smith y Jhon Locke. Es en este sentido que la ideología universalista del neoliberalismo, la misma del mercado, la cual propaga y exporta los valores y las prácticas de los países occidentales y más específicamente de los anglosajones, construye un bloque histórico para sostener la hegemonía americana.

Sin embargo, la promoción de esta ideología es de hecho un producto de la estrategia global contemporánea de las transnacionales así como de las políticas de las administraciones de Reagan, Bush y Clinton en los Estados Unidos y de Thatcher y Major en Inglaterra La ideología de la globalización pugna por la liberalización de las economías en un mundo en el que dominan las empresas transnacionales. La globalización como ideología aparece en la esfera pública cuando ya no tiene utilidad para su análisis.

Esta ideología hegemónica constriñe las elecciones disponibles clarificando de la mente de los seres humanos la posibilidad de cualquier otro camino que no sea el que está tendiendo enfrente de todos. Las ideologías tienen siempre un propósito económico, un medio racional de los individuos para fomentar el capital humano Esta ideología del mercado como motor de los procesos de mundialización, condenan toda resistencia o disidencia bajo acusaciones de que no se ajustan a un "realismo".

Así, lo que Thoreau sostuvo, de que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia, lealtad y a resistir a un gobierno cuando su tiranía e ineficiencias son insoportables, no tiene cabida. Sólo existe una forma para hacer que se pertenezca, no hay ninguna otra opción. La búsqueda de otras alternativas, de fórmulas proteccionistas y de regulación mediante procesos democráticos es vilipendiada como graves retrocesos y formas arcaicas.

Por otro lado, si la ciudadanía se convence de que los resultados en materia económica son el producto de la implantación de las fuerzas del mercado y que por lo tanto, los gobiernos del Estado-nación ya no se les responsabiliza. En todos los niveles de gobierno hay una retirada de los temas de justicia redistributiva. Hablando de justicia, es importante enfatizar que la concepción de justicia redistributiva entra a valorar los resultados en los términos de reparto más que de la impersonalidad y justicia de los procedimientos previos, por lo que termina siempre en problemas para estimar lo que se distribuye. En otras palabras, el concepto de justicia debe basarse más en sus procedimientos que en sus resultados. Sin embargo, en los países donde la ideología del mercado no es tan intensa, los principios y fines de la justicia social equilibran las acciones de los gobiernos. Por eso, la batalla en contra de los procesos de globalización neoliberal tienen que darse primeramente en el nivel ideológico.

La globalización neoliberal es la hegemonía de la ideología del mercado representada por una "metáfora incontroversial por una sociedad en libertad para hacer con la propiedad lo que le plazca sin interferencia del Estado" (Birchfield, 1999) La ideología de la democracia del libre mercado constituye el cuerpo teórico y la práctica de la política de desarrollo internacional, pensada como problema de gobernabilidad para establecer las reglas de juego a los agentes económicos. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible.

La globalización neoliberal hace de la ideología del libre mercado el centro de las relaciones sociales, cambiando su realidad y transformando las formas de relaciones personales centradas en una competencia que controla los comportamientos entre los mismos individuos, como si fuera un mecanismo motivacional fuertemente impulsado por el mismo sistema imperial, y más concretamente por los Estados imperiales. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula.

Al decir de Patras (2001d) la competencia "en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados". Hay que tomar en cuenta que las diferencias en las ocurrencias de las relaciones sociales según se expresen dentro de las organizaciones, o entre diferentes organizaciones, de alguna forma determinan los mecanismos del mercado o de las jerarquías a usar. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

Además, hay que considerar que las relaciones sociales se manifiestan en forma diferente dentro de las organizaciones que entre las organizaciones y su ocurrencia es un punto importante para considerar al momento de elegir entre mecanismos de mercado o de jerarquías. Las relaciones de competencia como base del desarrollo destruyen la armonía y solidaridad en el género humano, mientras que las relaciones de cooperación motivada por un servicio, constituye un acto de moralidad elevada. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, dándose el problema del "gorrón", pero las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen

los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales.

La competencia es un mecanismo de motivación impulsado por el sistema imperial y más concretamente por los Estados imperiales rivales, bajo el argumento de que la naturaleza humana así sometida es empujada al progreso de la humanidad. Al decir de Patras (2001d) la competencia "en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados". Esta es una posibilidad para ejercitar una moral en el ámbito global o planetario, como ya sucede en el ámbito de la responsabilidad por el medio ambiente.

La nueva relación social que se globaliza es la que articula la propiedad privada de los medios de la producción como la regla que da certeza al funcionamiento del mecanismo del mercado.. La "macro dictadura total" del neoliberalismo, como sostiene el obispo de Sao Felix do Araguaia, Brasil, que se impone como pensamiento único con sus "teólogos del diablo" y su posmodernidad narcisista (Fazio, 2000)

Esta única ideología es la ideología fundamentalista de libre mercado global, según la cual los mecanismos distributivos de los mercados competitivos producen mejores resultados que otras instituciones. Esta retórica basada en la doctrina del libre mercado ha sido promovida por los ideólogos de la derecha y asimilada y repetida por los de la izquierda. La derecha ha aprovechado las circunstancias para promover aquellas funciones del Estado orientadas por una política económica en beneficio de las grandes corporaciones transnacionales. Así el neoliberalismo predica la libertad y la igualdad de oportunidades, pero la realidad es otra. No todos tienen las mismas oportunidades de acceso a los recursos y quienes tienen menos se hunden. La competitividad neoliberal excluye a las personas del desarrollo, las vuelve prescindibles, desechables.

A pesar de esta aserción, esta ideología hegemónica del libre mercado es la antítesis de los principios de la democracia política, en los mismos términos en que lo explica Shorris (1994): "La democracia política es una relación entre los seres humanos que se controlan a sí mismos. La democracia del mercado es una competencia en la cual las gentes tratan de controlarse unos a otros…esta es una impropiedad, por el control de un ser humano por otro, sin importar que tan sutil sean los medios, no es democracia". Así, la falta de convergencia entre democracia y mercado hace que la democracia se subordine al mercado. Es más realista el enfoque del conflicto entre la democracia y el mercado. La democracia actual es por tanto una democracia del mercado, y se corresponden al modelo de Schumpeter de democracia.

Así, los principios de la lógica que impone el capitalismo transnacional de libre mercado resultan ser totalmente incompatibles con los principios y fines de la democracia. Tanto es así que a medida que avanzan los procesos de globalización, se acrecientan las tensiones sociales que amenazan con perturbar las prácticas democráticas. Si por democracia debe entenderse "el gobierno del pueblo", la participación de los individuos en las decisiones que les afectan es casi nula, por lo que el concepto de democracia en la lógica del capitalismo transnacional resulta inoperante. El concepto de democracia es universalista, pero los

conceptos clásicos de la democracia han sido nuevamente elaborados para apoyar y mantener el status quo del sistema capitalista.

La democracia es entendida como el mecanismo de control que permite la gobernabilidad estable para los mercados internacionales. La democracia ofrece métodos e instrumentos para la resolución de conflictos y la negociación de intereses, mediante el establecimiento de reglas y mecanismos de establecimiento de reglas, confrontación de opiniones y mantenimiento de los equilibrios. Como sistema de gobierno, la democracia establece un conjunto de métodos y procedimientos justos los cuales no necesariamente arrojan los mejores resultados para la gobernabilidad, ni los más justos para la sociedad. El concepto tradicional de democracia ha sido nuevamente elaborado a fin de apoyar y mantener el status quo del sistema capitalista.

Sin embargo, el requisito para un desarrollo efectivo es la ciudadanía real, y por tal entendemos una ciudadanía en sentido amplio que comprende tanto los derechos políticos, económicos y sociales. La ciudadanía se adquiere cuando se defienden los derechos tal como lo hicieron la clase burguesa y media anteriormente y más recientemente los pobres. La ciudadanización de la política construye un discurso alterno al del Estado hegemónico que pretende acotar al mismo poder político vigilando su comportamiento y que coadyuven en sus tareas y legitimen sus acciones, con pretensiones de que asuman directamente funciones del mismo gobierno.

La expansión de una ciudadanía efectiva es una de las promesas de la globalización, la cual implica la reducción de las condiciones de desigualdad y pobreza prevalecientes. Igualmente, se requiere vincular la desigualdad y pobreza con las formas democráticas Estos constituyen los retos principales que enfrenta el mundo en el siglo XXI, y el mayor de los problemas a que se enfrenta el mundo al inicio de este milenio.

Sin embargo, esta promesa de la globalización puede reconstruirse desde abajo, a lo que Portes (1997, 1999), Sassen (1999) describen como “globalización desde abajo”. Esta forma de globalización es un proceso a través del cual los ciudadanos toman ventaja del desarrollo de las telecomunicaciones y el transporte, para integrar y fomentar la acción colectiva de nuevos grupos y movimientos sociales que contrarrestan el poder económico y político de las grandes corporaciones transnacionales y que además mantienen verdaderamente objetivos democráticos.

El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otro ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir (De Swaan Abram, 1997). Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad

entre las partes. Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil.

De hecho, los procesos de globalización y modernización no eliminan la capacidad de acción colectiva para oponerse al poder, reivindicar derechos humanos, políticos, cívicos, sociales, etc., por lo que las condiciones de inestabilidad e incertidumbre se incrementan. En los países en vías de desarrollo, la acción colectiva plantea toda una problemática para lograr avances institucionales y organizacionales. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico "gorrón" causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación. El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados.

Los movimientos sociales intensifican la tendencia descentralizadora de los Estado-nación, considerados como los actores centrales en la organización internacional. Los movimientos sociales y políticos nacionalistas son capaces de confrontar a las organizaciones financieras internacionales y las grandes corporaciones transnacionales, al igual que los gobiernos nacionales, mediante acciones de movilización ideológica y política de las masas y comprometidos con la lucha de clases en los Estado-nación. Por eso, la globalización pretende impedir el desarrollo de los movimientos sociales.

En los próximos años se avisoran un incremento de movimientos sociales nuevos con acciones de resistencia y oposición a los efectos de los procesos de globalización, lo que afirma la sentencia de Thoreau en el sentido de que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia, lealtad y a resistir a un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables. Evans (1998) denomina la "globalización desde abajo" aquélla que permite a los ciudadanos, sobretodo a los de los países pobres, construir vidas que de otra forma no serían posibles en el marco de los bordes establecidos por los tradicionales Estados-nación.

Estas organizaciones comunitarias transnacionales son oponentes al poder que ejercen las elites beneficiarias de los procesos de globalización mediante acciones reivindicatorias que concentran mayor poder en los gobiernos locales. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Los gobiernos locales tienen que jugar un papel protagónico como agente del desarrollo económico. La tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966).

La estrategia de modernización neoliberal se ha absolutizado bajo un dogma ortodoxo que no distingue diferencias de desarrollo entre los Estados nacionales. La modernización neoliberal separa a la subjetividad, la considera un proceso autónomo e inconexo que genera tensiones cuando de acuerdo con Lechner (2000), ambos fenómenos son complementarios y es necesario relacionarlos, ya sea en forma espontánea conforme a la apuesta del liberalismo decimonónico o establecida por el Estado conforme al modelo socialdemócrata. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998).

Lamentablemente, el nivel de severidad de la pobreza se ha incrementado en términos absolutos y relativos en las últimas dos décadas del siglo XX, durante los cuales cantidades sustanciales en ayuda internacional se han ido a los países más endeudados. No obstante, esta ayuda financiera discrimina porque se otorga solamente a aquellos países que cumplen con la condición de la cláusula de democratización.

La globalización ha sido propuesta como un a política para la reducción de la pobreza bajo el principio de que la apertura de los mercados elevan los ingresos per cápita, aunque los efectos parecen evidenciar lo contrario, es decir, una profundización de la pobreza. Sin embargo, tampoco existe evidencia que la acelerada integración de los mercados mundiales incremente la suma de la miseria humana, y quienes esto sostienen, argumentan que se deben a otros factores. La naturaleza de la integración de la regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo.

Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

La ideología de la globalización no es neutral, porque es la respuesta económico-política a los intereses de los poderes hegemónicos desde la caída del muro de Berlín. El cual, para muchos analistas, junto con la caída de la Unión Soviética, marcan el inicio de un nuevo ciclo histórico cuya característica principal es la globalización. La desaparición de la Unión Soviética significó el triunfo del Estado imperialista y el inicio del desmantelamiento del Estado de Bienestar.

La mayor parte del mundo ha sido atrapada entre las garras de una ideología hegemónica del libre mercado pregonada por la globalización, con graves consecuencias para la democracia, la continuidad colonial de la explotación y deterioro de los recursos físicos. La herencia colonial ha marcado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados. Estos problemas incluyen un pronunciado grado de explotación económica, desigualdad social y económica, injusticia social y política que ha caracterizado a la región desde los tiempos en que los indígenas pobladores de estas tierras fueron subyugados por la fuerza a la dominación colonial europea en el siglo XVI. El

cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra.

El fin de la guerra fría acelera los procesos de globalización que comenzaron en su versión contemporánea en los mediados de los setenta. Este fin de la guerra fría marcó el triunfo de los Estados imperialistas sobre la Unión Soviética, lo que significó el inicio del desmantelamiento del modelo de Estado de Bienestar. Desde la segunda mitad de la década de los setenta, el mando se transfiere del Estado al mercado mediante programas de desregulación, lo cual cambia a regulación por el mercado. Los procesos de globalización en sus formas actuales se desarrollan a partir de que termina la guerra fría.

El período de la guerra fría se caracterizó por una distribución bipolar del poder, y su finalización marca la profundización de los procesos de la globalización, marcado por el rompimiento del contrato social existente. Desde el fin de la "Guerra Fría", el evangelio del libre mercado es llevado a todos los rincones del globo, en el nombre de los poderes hegemónicos, Estados Unidos y otros países industrialmente avanzados, a pesar de que "la cultura de la política económica internacional en la democracia más poderosa del mundo no es democrática", como afirma Stiglitz. Esta retórica basada en la doctrina del libre mercado ha sido promovida por los ideólogos de la derecha y asimilada y repetida por los de la izquierda. La derecha ha tomado ventaja de la promoción de las funciones del Estado orientadas por una política económica en beneficio de los intereses de los grandes capitales transnacionales.

Así, la globalización es una respuesta a un desajuste estructural producto de la terminación de la guerra fría y la desaparición de un mundo bipolar. Los análisis del ajuste estructural se refieren al cálculo económico de las expectativas y no consideran la apreciación a la dimensión subjetiva.

Estas políticas de ajuste estructural neoliberal han involucrado completamente la apertura de los mercados domésticos de los países latinoamericanos al capital transnacional, la promoción de las llamadas exportaciones no tradicionales a fin de ganar divisas extranjeras tanto como sea posible para pagar las deudas, y la desregulación del capital local y los mercados comerciales, que han involucrado las impopulares medidas de austeridad fiscal dirigidas a reducir los servicios públicos y a privatizar muchas de los servicios públicos y empresas públicas, de tal forma que los fondos públicos estén destinados al pago de las deudas.

La privatización de los beneficios, riesgos y responsabilidades de los servicios públicos, también enajena las aspiraciones sociales, las cuales se cancelan si la subjetividad es excluida del orden social. Las crueles medidas de austeridad han sido adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de la región a fin de reducir sus gastos en educación, salud y otros servicios sociales de tal forma que pueden servir a la combinación de deudas de los sectores privados y públicos de los diferentes países.

Estas políticas han disminuido la tasa de crecimiento económico en general y han traído una drástica reducción de los servicios del gobierno así como en el empleo público. Esto ha resultado en una venta total desnacionalizadora de los más grandes beneficios y empresas

públicas de estos países y abolido las tarifas protectoras y otras formas de apoyo que previamente tenían las empresas locales.

El ajuste estructural propuesto se relaciona con cambio y un nuevo diseño institucional que modifica la estructura de governance, dando lugar a la emergencia de una "sociedad multi-céntrica, de acuerdo a Luhman (1982), la cual a su vez contribuye a modificar la gobernability o gobernabilidad en su concepto más amplio. Los conceptos de governance y gobernabilidad, aunque hacen referencia a fenómenos sociopolíticos que son diferentes, sin embargo, son interdependientes y operacionalizables en las estructuras institucionales de los sistemas económicos, políticos y sociales.

Los cambios en la estructura de governance alteran la ingeniería institucional de la gobernabilidad. Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política Así entendida, de acuerdo a Cruz (2001), la governance, constituye "el conjunto de instituciones (patrones, estructuras y reglas de juego) que condicionan y posibilitan la acción política y social, en esa medida se está reconociendo su papel como determinante de capacidades individuales, colectivas y sociales para la toma y aplicación de decisiones políticas y de política pública bajo contextos democráticos".

La explicación de la acción política en un contexto institucional es diferente de explicar el cambio institucional en períodos largos de tiempo. Puede argumentarse que los cambios institucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables. En el último caso, la historia y la cultura política, entendida como los supuestos básicos del mundo de la política, las cuales restringen el rango de alternativas disponibles, tienen que ser sistemáticamente integradas como factores, los cuales entre otros, dan forma a la manera en que los actores políticos perciben las situaciones de elección (Kaiser, 1997). Las condiciones sociales, económicas, tradiciones culturales o eventos impredecibles importan pero no influyen en forma mecánica en la acción política.

Por otro lado, el fin de la guerra fría mostró las limitaciones predictivas de las ciencias sociales y de las políticas, así como también causó un vació que dislocó los fundamentos sobre los que se había construido las relaciones internacionales en el periodo de la posguerra sobre la base de una simple bipolaridad (Reich, 1998). El principal sujeto y actor de estas relaciones internacionales es el Estado-nación en cuyo espacio se establecen las instituciones que ordenan la vida económica, política, social, cultural, jurídica, etc. Es en el espacio nacional delimitado por las fronteras territoriales físicas y geográficas donde ocurren estos fenómenos.

El espacio nacional determina las unidades de espacio soberano. En el espacio del Estado-nación ocurren los fenómenos geopolíticos y a partir de avanzar hacia niveles espaciales superiores, como los internacionales y global es que adquieren relevancia los fenómenos geopolíticos. Sin la existencia del ámbito espacial territorial nacional, difícilmente ocurrirían los fenómenos de la globalización. En el espacio nacional, las grandes empresas transnacionales y multinacionales ejercen el predominio de una economía de mercado que luego supedita al espacio nacional.

Con el fin de la guerra fría disminuyeron las presiones hegemónicas globales, pero se da lugar a las presiones hegemónicas regionales. Para establecer le ideología del libre mercado nacional e internacionalmente, se requiere de una intervención estatal fuerte para desregular las economías nacionales, desmantelar las instituciones de regulación económica tradicionales y liberalizar el comercio exterior y el capital. Sobre las ruinas de las instituciones del desarrollo nacional de la posguerra se construyeron las nuevas instituciones de la globalidad económica.

Los Estadounidenses han empujado el modelo económico de la globalización capitalista alrededor del mundo en un intento megalomaniaco para hacer que el resto del mundo adopte sus instituciones y sus normas económicas en forma arrogante y de superioridad moral al grado que se ha convertido en maliciosa (Johnson, 1990). Cuando las corporaciones estadounidenses logran saturar su mercado, o este se encuentra en declinación con respecto a sus productos específicos, se orientan hacia los mercados internacionales para sostener el crecimiento mediante sus incrementos en utilidades.

Las normas sociales y organizacionales que promueve la economía neoliberal tienen la orientación de una nueva moralidad. Hay, por tanto, malicia en las políticas que promueven el libre mercado. Mientras que la moral tradicional parece declinar con el surgimiento de las grandes corporaciones para ser reemplazado por un nuevo sistema moral basado en una gobernabilidad mutua, la cual se realiza entre las asociaciones de grandes competidores de un mercado civil en crecimiento.

Una nueva época quedó delimitada a partir de 1989 con la implosión de del sistema socialista soviético y el auge de una nueva concepción más centrada en la mera subjetividad de la vida y del mundo denominada posmodernidad. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998).

La lógica del sistema hegemónico es inversa al protagonismo de lo colectivo, dando mayor énfasis a las políticas y estrategias individuales. La caída del muro de Berlín representa los cambios de un viejo paradigma a uno nuevo. La ausencia de una ideología alternativa al capitalismo globalizador desde el colapso del comunismo en 1989, estrecha los vínculos entre la ideología del libre mercado y la democracia liberal, entre la política económica neoliberal y la democracia liberal en un proceso de ownership o corresponsabilidad y legitima el sistema político resultante.

El establecimiento de esta democracia liberal requiere de instituciones y actores fuertes que acepten las reglas del juego del liberalismo económico y político. La diferencia entre socialdemocracia y liberalismo es que éste quiere la menor intervención política posible (dejando a la regulación del mercado la tarea de poner orden) y la socialdemocracia tiende a regular la mayor cantidad posible de aspectos de la vida humana. En este tira y afloja estamos entre unos regímenes y otros y entre unos períodos históricos y otros. Un liberalismo absoluto en el que el Estado solamente se ocupe del ejército y la policía no es hoy ya sostenible.

La sociedad moderna es demasiado complicada para carecer de reglas de juego. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde

se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. Por otra parte estamos viendo desaparecer la regulación colectiva de muchas funciones que hasta no hace mucho considerábamos comunes: las compañías telefónicas, el correo, los ferrocarrilles, etc. El neoliberalismo es una versión nueva del liberalismo económico el cual además tienen aplicación en la economía internacional y no solamente dentro de las fronteras nacionales. Sin embargo, actualmente el las funciones del Estado en la economía internacional son esenciales.

Sin embargo, hay que considerar que el fracaso del comunismo en su versión marxista leninista, es también una representación más del derrumbe del liberalismo. No existe una democracia sin mercado, aunque si existen mercados sin democracias. Pero todavía la política económica internacional que sustenta la globalización no es democrática. La reducción del dominio público a favor de un mercado que en principio es desigual, resulta ser antidemocrático.

La corresponsabilidad es entendida como un "sentimiento de identificación o asimilación de una sociedad con determinadas reformas o cambios en la economía o la organización social", cuyo componente esencial es el diseño y la construcción de "mecanismos de resolución de conflictos en una sociedad carente de una larga tradición democrática, y la consiguiente capacidad de fraguar consensos" según Castañeda (1999). Hasta ahora, no se sabe de algún modelo o proyecto económico-político que sea viable y que rebase la ideología del libre mercado, pero que seguramente dará motivo para que los pensadores diseñen uno más viable con la sociedad que se desea construir. La política deber dar resolución a los conflictos sociales que generan la economía centrada en el libre mercado.

La ciencia posmoderna proporciona las bases metodológicas y de contenido para un proyecto económico-político. Este proyecto concibe "la trasgresión de las fronteras, el derrumbamiento de las barreras, la democratización radical de todos los aspectos de la vida social, económica y política" (Sokal y Bricmont, 1999) En el posmodernismo no existen fronteras ni alternativas para el futuro, sino una reiteración de lo mismo a través del empleo de las tecnologías.

La lógica cultural del capitalismo tardío es el posmodernismo donde el espacio se interpreta como un símbolo y una realidad privilegiada. La posmodernidad de la cultura política se caracteriza por una fragmentación de valores compartidos por las colectividades y el distanciamiento de los ciudadanos a las instituciones, marcado por una creciente desconfianza que provoca crisis de las democracias institucionalizadas. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. De acuerdo con estos autores, las fuentes de un posmodernismo que se mueve hacia la izquierda política son: el descontento con la izquierda ortodoxa, su desorientación y la ciencia como un blanco fácil. La izquierda ha asimilado y repetido hasta la saciedad la retórica de la doctrina del libre mercado y a denunciar el desmantelamiento de las funciones del libre mercado.

Sin embargo, entre sus efectos negativos se mencionan la pérdida de tiempo en las ciencias humanas, una confusión cultural oscurantista y el debilitamiento de la izquierda política. Las tendencias derechistas del posmodernismo se expresan con planteamientos tecnocientíficos conservadores de filósofos del stablishment que limitan las alternativas de acción política para superar la etapa de desarrollo de la humanidad, como en el fin de la historia de Fukuyama.

Las condiciones sociales, económicas, tradiciones culturales o eventos impredecibles importan pero no influyen en forma mecánica en la acción política. De acuerdo con Kaiser (1997), la hipótesis del conservadurismo institucional sostiene que las reformas constitucionales en las democracias son relativamente poco comunes, no debido a factores institucionales sino al cálculo de los actores políticos, solamente cuando una gran crisis ocurre, ya sea por un abrupto cambio de factores contextuales o a través de un deterioro dramático de la satisfacción de la política pública, es una ventana de oportunidad abierta para la persecución de planes de reformas. Mientras que el conservadurismo institucional y las propuestas dependentistas institucionales nos conducen a esperar que la evolución de los sistema políticos democráticos exhiben diferentes patrones, la propuesta de aprendizaje institucional apunta a la convergencia.

El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma. La propuesta de aprendizaje institucional sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos , o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional.

Al respecto, Wallerstein (1997) sentencia: “Mi propia lectura de los pasados 500 años me lleva a dudar que nuestro propio sistema mundo moderno sea una instancia de progreso moral sustancial, y a creer que es más probablemente una instancia de regresión moral.” Este sistema mundo no ha sobrevivido de la crisis moral que marca el final del milenio. El sistema mundo capitalista funciona y evoluciona en función de los factores económicos.

La comprensión occidental de globalización, mercado y desarrollo, una comprensión circular de globalización está alineada con los intereses de los capitales globales y de las instituciones financieras internacionales a quienes las teorías organizacionales atienden y por quienes hablan, a pesar de sus políticas ambivalentes cuestionadas por su impacto a largo plazo. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional.

Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación. Estas instituciones son en realidad extensiones de los Estados imperialistas de cuyo poder deriva, más que de organizaciones supranacionales.

El poder internacional tiene su origen en los Estados imperialistas que ejercen su poder e influencia en las decisiones de las instituciones financieras, para designar a los principales funcionarios y para financiar sus operaciones, por lo que se convierten en instrumento para la formulación e implementación de políticas que favorecen sus intereses y los intereses de las grandes corporaciones multinacionales que tienen su principal matriz localizada en estos Estados imperialistas con quienes operan en sinergia.

La creación de directorios financieros que establecen las estrategias y políticas bajo las cuales operan los administradores es un ejemplo de las nuevas formas de organización orientadas a la obtención de una maximización de la rentabilidad del capital en el más corto plazo. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva. Sin embargo, para controlar los movimientos de capitales volátiles que al buscar maximizar sus utilidades, destruyen las economías, se hace necesario un rediseño institucional a la arquitectura financiera que reduzca la irracionalidad, complejidad e incertidumbre. De acuerdo a Kaiser (1997), el argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica.

El control de los movimientos de capitales por los Estados imperialistas a las economías emergentes, muchas de las veces se orientan a desestabilizar los regímenes nacionalistas. La expansión del capital con vocación global rompe las fronteras de los Estados-nación que se oponen a su paso. De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso. La expansión del capitalismo se realiza a través de la organización de la sociedad, el modo de producción y el poder político en los espacios coloniales. La herencia colonial ha marcado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados.

Clinton ha afirmado que cada nación es como una gran corporación que compite en el mercado global. Esta es la dimensión económica de la globalización. Desde ésta dimensión, la integración económica es sólo un paso en la globalización y mundialización. Los denominados procesos profundos de integración económica tienen como agenda la revisión de las políticas internas de los Estados-nación, fuente principal de las restricciones principales existentes al libre comercio. Es en este sentido que el Estado requiere de un gobierno que esté acotado por las restricciones institucionales para realizar sus funciones con más eficacia.

El Estado diseña e implementa sus políticas en un ambiente complejo e incierto de restricciones políticas, económicas, sociales y culturales, las cuales determinan sus niveles de desempeño. Así, el conjunto de restricciones institucionales determina de alguna manera los niveles de desempeño institucional. Este a su vez es otro paso de la hiper mundialización, la que según Laïdi (2000), es una realidad más inquietante, en donde los Estados, las fronteras, los sistemas sociales o los sistemas educativos y las identidades

políticas no tienen ya más sentido a escala nacional. Los sistemas sociales abiertos tienen una supervivencia muy frágil y por lo tanto se expresan como la carencia política para pensar en esta nueva edad de la humanidad. Las identidades fuertes permiten la expresión de intereses que son comunes en las diferentes instancias espaciales territoriales nacionales e internacionales.

Las teorías organizacionales post colonialistas dan la oportunidad para analizar las voces teoréticas de los fenómenos de la globalización en forma circular, reflexiva y crítica para argumentar conceptualizaciones positivas y nuevas formas representacionales de los estudios organizacionales (Calás y Smircich, 1999). El postcolonialismo se junta con la globalización para servir de fundamento a los movimientos teóricos y prácticos en contra de las instituciones internacionales que promueven la profundización de los procesos económicos globales. La herencia colonial ha marcado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados.

La economía política comparativa ofrece diferentes análisis de desarrollos en la economía política global. Los problemas del desarrollo son multifacéticos y complejos. Algunos de los desacuerdos sobre el desarrollo en el presente estado de globalización, son el diagnóstico sobre el desarrollo desigual, la sobre evaluación de los méritos y deméritos de los caminos del desarrollo en las últimas décadas, y sobre las direcciones prescriptivas de las decisiones de políticas.

En este sentido, la expansión del capitalismo globalizador hace pensar a la izquierda en términos de desarrollos desiguales y estrategias de resistencia cultural, política y económica. Thoreau ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia, lealtad y a resistir a un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables.

Los desacuerdos se centran en cuatro temas: la promoción de la integración máxima o selectiva, los niveles del desarrollo económico a perseguir, las estrategias de transferencias de recursos e inversiones guiados por la macroeconomía global o por otras formas de desarrollo alternativo, y la operación internacional de las corporaciones como el agente o actor principal del desarrollo, con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones financieras internacionales (Goulet, 2000). Los acuerdos de inversión multilateral entre los estados siempre tienen la participación de las grandes empresas transnacionales. El concepto de economía global que hace referencia a una economía sin estados nacionales, en realidad exagera el papel autónomo de los capitales bajo el influjo de la ideología del libre mercado.

En realidad, ninguna disciplina científica por sí sola puede ofrecer soluciones al desarrollo y abarcar todo el campo de estudio. Los economistas políticos consideran que los economistas no separan las teorías y las técnicas usadas en el medio ambiente político en el que opera la economía. No existe posibilidad de un tipo de distinción positivo/normativo en el cual toda la teoría y las prescripciones de las políticas deben tener lugar en un marco de referencia institucional. La nueva economía política se orienta a la consecución del crecimiento económico y la gobernabilidad democrática

La economía política institucional proporciona las bases para la lógica de la gobernabilidad al considerar "las consecuencias de las formas institucionales alternativas en la conducta de los individuos y en los resultados de las decisiones colectivas, los mecanismos que posibilitan a las instituciones constreñir los comportamientos y la lógica de los procesos a través de los cuales cambian las instituciones (Weimer, 1995, 2) Los economistas deben tener conocimiento de esto cuando desarrollan sus teorías, aunque la Nueva Macroeconomía Clásica ignora los factores institucionales y encuentra apoyo en la teoría de la elección pública (Gilbert and Michie, 1997)

El análisis de la interacción de las estructuras e instituciones económicas y políticas -análisis estructural e institucional- constituye una importante línea de investigación para el desarrollo de los procesos de transición democrática de las sociedades. Una sociedad democrática es responsable para definir las funciones del mercado y la sociedad en materia de provisión de bienes y servicios privados y públicos, evitando las confusiones que se han dado entre Estado y sociedad, ciudadano y consumidor, etc.

En las relaciones entre el Estado y la sociedad se implican el ejercicio del poder a través de instituciones políticas en un territorio determinado, en donde existe una relativa autonomía del Estado en relación con otras causas de la vida social. La autonomía tiene razón de ser cuando los ciudadanos realizan ejercicios de evaluación y juicio acerca de las acciones de los gobiernos, quienes tienen responsabilidades para una correcta toma de decisiones de sus competencias ante las sociedades. La autonomía es una condición de los pueblos para ejercer su soberanía y para gozar de una independencia política.

El mercado funciona bajo condiciones de competencia, libertad de concurrencia y una demanda en continuo crecimiento. La función del mercado impone el trato a los individuos como consumidores más que como ciudadanos, con una desarticulada capacidad para ejercer sus derechos y con pocas posibilidades para la acción colectiva y desarrollo solidario e introduce una dinámica perversa de desarrollo social y crecimiento económico, convirtiendo a este último en un fin en sí mismo y limitado por la noción de la cuantitativa en términos del PIB per cápita y el consumo real promedio .

Las contradicciones en el desarrollo de las sociedades son los principales parámetros para evaluar los resultados del proyecto hegemónico. La lógica del sistema hegemónico es inversa al protagonismo de lo colectivo, dando mayor énfasis a las políticas y estrategias individuales. El desarrollo social debe estar apuntalado por programas de desarrollo humano que promuevan la formación de capital humano y social y faciliten las oportunidades de acceso al disfrute de los recursos y bienes públicos a efectos de elevar los niveles de calidad de vida y bienestar social. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence). El desarrollo humano sustentable y el buen gobierno son conceptos inextricablemente inseparables. Elevar los niveles de calidad de vida y lograr una sociedad satisfecha y sin asimetrías pronunciadas, es viable con la instrumentación de mecanismos institucionales de gobernabilidad que promuevan la asignación de recursos y bienes sociales.

La función del mercado se fundamenta en el rational choice, o principio racional que busca la maximización de beneficios individuales por sobre la noción del bien común, lo que exacerba los derechos individuales por sobre los colectivos y afirma la tendencia al autoritarismo. Así, el ciudadano es reducido a una mera condición de consumidor. El mercado carece de la capacidad para integrar a la sociedad porque no tiene la noción de bien común, ni tampoco ofrece igualdad de oportunidades, debido a la perversidad y reduccionismo económico de su mecanismo. Una sociedad que es más desarrollada debe ser más humana, no cuando sus ciudadanos tienen más, sino cuando todos son habilitados con competencias y capacidades para ser más.

En la concepción neoliberal deja al mercado las decisiones en términos de oportunidades de los individuos, lo cual es fuente generadora de profundas desigualdades. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. Bajo el concepto de una cultura de desigualdad (Calderón, 2000), el proyecto neliberal apela al mercado como el único, natural y eficaz distribuidor de las oportunidades de desarrollo de los individuos, es "reidificado y considerado reconstructor del orden soico-político y económico. De esta manera, subordina al Estado, a la sociedad e incluso al régimen de partidos y a la democracia misma". El sistema democrático es por lo tanto un régimen político.

Obviamente que el ciudadano prefiere ser tratado como igual mientras que los consumidores o clientes son muy diferentes en sus patrones de consumo. Lamentablemente, la ciudadanía no ha comprendido que el concepto de cliente es con el que más se identifica y no como un ciudadano cuya participación social garantiza sus derechos. Estas confusiones han surgido sobretodo, a partir de la década de los ochenta en que las instituciones fuertes del Estado nacional popular se vienen aflojando a favor de un diseño institucional más acorde con los fenómenos de globalización y el libre mercado. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

Este diseño institucional, de acuerdo a Bonaglia, Braga de Macedo y Bussolo (2001) se establece a partir de las explicaciones teóricas de las relaciones causales entre los procesos de globalización y la gobernabilidad que identifica a la política comercial, la competencia por productores foráneos y la internacionalización de los inversionistas y la apertura con respecto a las diferencias en los costos y beneficios del diseño de las instituciones. Los autores concluyen que las economías más avanzadas tienen la tendencia a ser más abiertos al comercio internacional y a tener un más grande y mejor sector público, combinan correctamente el mercado y el Estado, de globalización y gobernabilidad. Los autores apoyan los efectos positivos en la globalización basados en un estudio cross-section, aunque se sabe que este tipo de análisis tiene serios problemas.

La eficiencia de los agentes económicos se vincula a la estructura institucional en la que operan por lo que se requiere el análisis de los diseños institucionales de los sietams políticos. Este nuevo diseño es comprendido bajo un modelo de Estado capitalista neoliberal, que algunos analistas insisten en llamar, quizás con un poco de exageración, el

Estado virtual. El anterior diseño de Estado-nación capitalista sobrevivió como espacio geopolítico porque logró el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales bajo un modo de producción capitalista, cediendo su lugar al espacio geoeconómico donde se organizó el mercado. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Este espacio nacional está delimitado por las fronteras geográficas y físicas que territorializan la ocurrencia de los fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales. Así, estas características también determinan los espacios soberanos tomando en consideración las unidades de espacios nacionales.

A partir de la ocurrencia de los fenómenos geopolíticos en el espacio del Estado-nación es donde surgen los niveles espaciales internacionales y global que dan preponderancia a los fenómenos geoeconómicos. Es partir de la ocurrencia del ámbito espacial territorial nacional que pueden ocurrir los fenómenos de la globalización. Las grandes corporaciones transnacionales promueven el espacio de la economía del mercado por sobre el espacio del Estado-nación, al cual suplantan y supeditan.

Las corporaciones transnacionales se reparten los mercados internacionales con el apoyo de los Estados imperialistas para aumentar su poder e influencia. Este modelo de Estado refuerza sus actividades y funciones para seguir manteniendo el control en la economía y su presencia en la sociedad civil. Quienes tienen a su cargo la arquitectura de las nuevas instituciones globales, no pueden ignorar el desarrollo de normas para la creación de la regla del derecho y la justicia social de observancia mundial.

El debate sobre los problemas del desarrollo plantea la delimitación de los fundamentos de justicia social. De lo contrario, lo que se verá, será una creciente ola de descontento y de protesta popular por los imbalances que resultan entre los avances en materia de comercio y la regla de la ley y la justicia social. Luego resulta que las instituciones que fueron creadas para realizar ciertas funciones, son tomadas por actores distintos para que realicen funciones diferentes. Lo cierto es que las instituciones surgidas del Estado-nación, por ejemplo son débiles para confrontar los retos y riesgos que plantea la globalización económica. ”. Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. Para Giddens (1999:36) los riesgos son “la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza.”

Este nuevo diseño del Estado-nación virtual, evolución superior del Estado exportador facilita la transferencia de satisfactores con una mayor orientación hacia la economía de los servicios mediante la intensificación los flujos internacionales de producción, distribución y consumo. El dinamismo exportador de este tipo de Estado se acompaña de una mayor segmentación productiva del aparato industrial en el que conviven empresas competitivas vinculadas a firmas transnacionales con pleno acceso al desarrollo tecnológico y a las fuentes internacionales de financiamiento. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales.

La estrategia de modernización económica seguida por la mayor parte de los países del mundo, sólo reporta beneficios derivados del manejo de grandes capitales y de los avances tecnológicos, para las grandes transnacionales. La tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966). La modernización institucional y política y el crecimiento económico centrado en el desarrollo tecnológico no necesariamente crean empleos. Esta estrategia de la globalización está dando por resultado una profundización de los niveles de pobreza mundial. Además, el logro de crecimiento económico no es garantía de un desarrollo democrático.

Estas empresas forman un enclave poco articulado con la estructura industrial interna, dejando al margen a aquéllas empresas que no tienen el acceso a la tecnología y al financiamiento. El progreso tecnológico está alcanzando niveles sin precedentes en los países altamente desarrollados, pero, sin embargo, los países menos desarrollados quedan excluidos de los beneficios. La denominada brecha digital no solamente es un fenómeno interterritorial sino también intraterritorial, la cual se amplía a medida que se incrementan las desigualdades a pesar de que aumentan las oportunidades.

Las estrategias de este nuevo Estado virtual se orientan más a mantener el control corporativo en un centro de gobernabilidad mientras que aprovecha las ventajas territoriales que le proporcionan los procesos de globalización concentrando su desarrollo en inversiones de capital intelectual, es decir, en capital humano, capital relacional y capital estructural. Las demandas que los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales formulan en forma incluyente al Estado, sobrecargan sus estructuras y procesos y lo convierten en un Estado ineficiente. Para el desarrollo y la acumulación tecnológica se requiere de capital intelectual, haciendo posible la generación de ventajas competitivas. Así en los países menos desarrollados no sólo la pobreza económica, sino también la pobreza intelectual se incrementa a tasas exponenciales, en donde la fuga de cerebros es un fenómeno normal.

La pobreza es un fenómeno multidimensional que implica estas variables económicas e intelectuales entre otras. No obstante, la abundancia de capital humano no garantiza el crecimiento económico y el desarrollo social. La pobreza no solamente es considerada en términos de bajos niveles de ingresos, sino también en términos de inseguridad y vulnerabilidad humana a los desastres. Si bien la pobreza alimenta la inseguridad, también es cierto que la inseguridad alienta la pobreza.

Para el estudio de los cambios en la economía global y sus consecuencias, de acuerdo con Appelbaum y Henderson (1995), se requiere un abordamiento conceptual y metodológico transdisciplinario que vayan más allá de las especializaciones intelectuales, tales como la economía de los negocios, la economía política, la sociología organizacional, la geografía económica, las relaciones internacionales y los estudios del desarrollo. Que, además, permita mantener una visión plural dimensional y analógica de la realidad, de una realidad que se está convirtiendo en hiper realidad que modifica nuestras interpretaciones fundamentadas en estructuras piramidales a estructuras de relaciones más planas. La

geografía política y económica del espacio estatal está cediendo su lugar a la geografía política y económica en los ámbitos regionales y mundiales.

Este tipo de abordamiento conceptual y metodológico transdisciplinario se hace necesario por las limitaciones que los marcos teóricos existentes tienen, tales como la teoría de la economía neoclásica, la escuela de Frankfurt, la economía evolucionista y el denominado "realismo crítico". El abordaje de la problemática de las relaciones entre la globalización y la gobernabilidad permitirá evaluar los modelos económico-políticos, las realizaciones del libre mercado y la democratización de la sociedad. El avance de la democratización social requiere de procesos de transformación socialista. El término "gobernabilidad de la democracia" usado por Huntington, para delimitar esta problemática, en realidad está siendo muy atacado por una sobrecarga de demandas por una seguridad económica y una participación política que parecen ser poco realistas. En general, los ciudadanos participan poco o son indiferentes en los asuntos políticos, no se identifican con el juego de la política ni con políticos o partidos políticos a los que desdeñan y en ocasiones desprecian.

Así, un tipo de estructura de gobernabilidad neoinstitucional para la provisión de un servicio público que tiene lugar en empresas con una gobernabilidad de implementación que forman una industria del servicio público. La gobernabilidad óptima para la industria y para la política puede ser derivada por la maximización de las funciones objetivas que resultan en características estándar de gobernabilidad. La gobernabilidad de una organización se representa por una gráfica directa de posiciones conectadas por las relaciones entre principales y agentes. En esta estructura institucional, los principales delegan el poder del control a los agentes mediante esquemas de recompensas e incentivos óptimos que previenen conductas de rapacidad y de búsqueda de rentas individuales, problema que parece afectar a las economías más corruptas en los países en desarrollo.

Los procesos de representación de la gobernabilidad se manifiestan en jerarquías de la base hacia la cúspide con poder otorgado por los miembros mismos de la comunidad, mientras que la implementación de la gobernabilidad constituye jerarquías que parten de las cúspides hacia abajo con poder dado por una autoridad superior. La gobernabilidad interna de las organizaciones se manifiesta en jerarquías.

En una gobernabilidad de representación, los últimos principales son los miembros en los más bajos niveles de delegación (Ruys et al, 1999) La implementación de la gobernabilidad es un tipo de organización jerárquica de arriba hacia abajo y describe otros parámetros tales como el número de niveles organizacionales. La estructura de una organización con una gobernabilidad de implementación que proveen un servicio común está formada por la posición única en cada una de estas organizaciones de tal forma que otorga el poder a una autoridad máxima que se coloca en la cúspide de la jerarquía.

La dimensión política de la globalización apuntala su expansión en todas las regiones y países, promoviendo su democratización. Pero esta democratización no se apuntala en una transformación socialista. Sin embargo, los Estado-nación enfrentan el reto que representan las tendencias de la globalización de los mercados y el establecimiento del modelo económico de desarrollo neoliberal, para la obtención de resultados en los términos de

crecimiento económico y desarrollo social sin que se sacrifique la estabilidad de las instituciones y la cohesión de la sociedad.

Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La perdurabilidad de la democracia se define tanto en el ámbito interno de los gobiernos como en el campo de los opositores, desleales, disidentes o insurgentes. Las instituciones económicas, sociales y políticas determinan las interacciones sociales y políticas que influyen en la calidad del desarrollo social y humano. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Los teóricos han denominado a esto con el término "convergencia económica y social" definida por Ivanova (2000) como el "grado en el cual los desequilibrios en el bienestar económico de varios países o de varias regiones de una zona integrada son social y políticamente tolerables...estas disparidades no van a determinar ninguna acción por parte de los gobiernos nacionales que pudiera poner en peligro el buen funcionamiento de una unión." Las disparidades se explican en términos del desarrollo desigual de las actividades industriales y comerciales.

Este planteamiento da origen a hacer cuestionamientos serios. En otras palabras, cómo lograr mejores niveles de bienestar social bajo un entorno de una economía que se fundamenta en la globalización de los mercados, cuando precisamente son las instituciones de bienestar social las que están limitadas para afrontar los grandes riesgos de la globalización económica, como por ejemplo, el incremento del desempleo y las crisis financieras recurrentes. Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. Técnicamente, la función de bienestar social ha sido determinada. La suma del excedente del consumidor Marshallian de la demanda agregada, el excedente de la oferta agregada y los cambios en el ingreso del gobierno, es una medida exacta de bienestar social para algunas funciones de bienestar (Ju, 2000).

El nuevo modelo global emergente.

Los fenómenos de globalización económica han tenido un proceso evolutivo que dura varios siglos y han existido inherentes a los procesos de internacionalización económica que a su vez son el resultado de procesos de acumulación de capital. Los países del denominado Tercer Mundo que fueron colonias de las potencias europeas por varios siglos, experimentaron el fenómeno de la globalización política. La herencia colonial ha marcado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados. La revolución Industrial en el siglo XIX y la revolución tecnológica del siglo XX son factores importantes que contribuyeron al crecimiento acelerado de las mega corporaciones transnacionales que pugnan por penetrar en las economías nacionales, aún en las más cerradas, y por posicionarse en los mercados mundiales.

La también denominada tercera revolución científico tecnológica ha sido vista como una causa que impulsa los procesos de globalización porque facilita los flujos de capital en una

economía global, la que ha sido llamada como Nueva Economía. El mismo concepto de economía global hace referencia a una economía sin Estados nacionales y exagera los alcances y el papel de la autonomía del capital bajo el influjo de una ideología de libre mercado.

El impacto de la Nueva economía sobre el crecimiento económico se exageró, ya que con la reciente crisis queda demostrado que no resuelve los problemas del sistema capitalista, sino que se vuelve más vulnerable a los movimientos especulativos del capital. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados.

Esta revolución científico tecnológica fue impulsada por los avances en la tecnología de la información, la biotecnología y en las fibras ópticas. La revolución tecnológica se le consideró como la revolución en la revolución. La revolución tecnológica informacional trae consigo aparejados cambios más profundos que la revolución industrial y la causa de las revoluciones en lo social, económico, político, cultural, etc.

Para Petras (2001c), esta revolución ha sido un mito, no ha existido como una forma de medida empírica de aumento de la productividad, atrajo cuantiosas inversiones que desvió de usos más productivos hacia un sector económico con altos niveles de especulación financiera y vulnerabilidad que terminó en una burbuja financiera reventada. No obstante, Petras sostiene que "las mediciones básicas de una revolución tecnológica son los que los autores llaman la 'productividad de factores múltiples,' el aumento de producción por unidad de todas las producciones…las innovaciones de principios y mediados del siglo 20 fueron fuentes mucho más significativas de mejoras de la productividad en toda la economía, que los sistemas electrónicos de información computarizada de fines del siglo."

Hoy, el mundo asiste a la tercera gran revolución capitalista apoyada por una expansión imperialista, la revolución de la globalización económica, la cual es cuestionada por quienes promueven la revolución democrática y la transformación de las formas de apropiación capitalista de la plusvalía por otras más colectivas. Bajo el imperialismo, las corporaciones transnacionales tienen acceso a los recursos baratos bajo la protección de las naciones más desarrolladas que justifican sus intervenciones en países menos avanzados en nombre de razones humanitarias, la democracia, etc.

Siguiendo a Petras (2001d), el imperialismo "toma muchas formas pero persigue objetivos similares: la conquista de los mercados del tercer mundo, la penetración en economías competidoras y la protección de los mercados domésticos." Las otras dos olas expansivas del capitalismo inherente al imperialismo, tuvieron lugar después de la conquista de América y con la revolución industrial (Amin, 2001). En la primera fase se desarrolla el sistema mercantilista y se oponen las fuerzas de liberación que desafían la lógica de la producción.

La segunda fase de la expansión del imperialismo capitalista se inicia con la revolución industrial, la cual profundiza la polarización que ha aumentado la desigualdad y provoca confrontaciones entre los poderes imperialistas, surgen las revoluciones socialistas en la periferia y las revoluciones de liberación nacional.

El crecimiento de la economía capitalista está unido a la expansión imperialista. En la tercera fase expansiva del imperialismo globalizador, sus objetivos siguen siendo el control de los mercados mundiales y la explotación de los recursos de los países menos avanzados. En esta fase, la globalización económica equivale a la expansión del capitalismo imperialista de los mercados mundiales. Visto desde la perspectiva global y a través de los lentes conceptuales de la integración contemporánea en la economía capitalista global, se ha reforzado, sino acentuado esta extrema desigualdad así como las relaciones injustas de subordinación y dominación que mantiene y complementa esta desigualdad. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero.

La naturaleza de la integración regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo. La globalización de los mercados da forma al espacio de la política que da forma a las transformaciones sociales. Las transformaciones económicas y políticas también implican transformaciones de los valores sociales, culturales y sobretodo de valores morales. La conclusión de que la primera causa dela extrema desigualdad social y económica en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo. La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta.

Las mil empresas más beneficiadas y triunfadoras de la globalización concentran activos que superan en un 42 por ciento al producto interno bruto mundial calculado por el Banco Mundial en 28 billones 736 mil 978 millones de dólares. Las 100 muy grandes empresas transnacionales controlan el 70% del comercio mundial. No obstante, hay que dejar claro que no existe una relación significativa entre el crecimiento del comercio mundial y el producto bruto mundial. Sin embargo, hay quienes sostienen que la relación entre las tasas de crecimiento entre el producto interno bruto y la apertura comercial están estrechamente vinculadas dando como resultado de sus análisis que a mayor apertura del país en términos comerciales, mayor es el crecimiento y más rápido, a pesar de que reconocen la complejidad del problema (Bonaglia, Braga de Macedo y Bussolo, 2001).

El volumen de la economía financiera es 50 veces superior a la economía real. El valor de mercado de las mil empresas más beneficiadas es de 23 billones 942 mil 986 millones de dólares, cifra que equivale a 11.8 veces el producto interno bruto de todos los países latinoamericanos. El valor de mercado de la General Electric de 520 mil 250 millones de dólares es equivalente al producto interno bruto de México. Cualquiera de las 23 multinacionales más poderosas tienen ventas superiores a lo que México exporta.

De este selecto grupo de mil empresas 484 son de Estados Unidos, con más relevancia las compañías que forman parte de la llamada “nueva economía”. Es decir, que pertenecen

a los sectores de la tecnología y las telecomunicaciones (Business Week del 10 de julio del 2000) Sin embargo, la nueva economía prolonga el ciclo económico de la vieja economía y demuestra que la productividad, según el análisis de Petras (2001c) fue mayor antes de la "edad de la información" que durante esta.

Así, frente a una rápida emergencia de la nueva economía y un consecuente colapso, vuelven a surgir las empresas de la vieja economía. Las principales generadoras de tecnología son las grandes corporaciones transnacionales, y por lo mismo, son las que mayor uso tienen para sus propios beneficios. La Nueva economía no trasciende la crisis capitalista, sino que por lo contrario, se vuelve "más vulnerable y dispone de menos recursos en qué apoyarse ya que buena parte de sus movimientos de capital dependen de expectativas especulativas de beneficios altos continuados (Petras, 2001d). El control de los movimientos de capitales por parte de los Estados imperialistas hacia las economías emergentes, tratan de orientarse hacia la desestabilización de regímenes nacionalistas.

Los grandes grupos financieros y de telecomunicaciones concentran el poder e imponen decisiones políticas a través de las agencias multinacionales, dando lugar a la formación de nuevas configuraciones de clase. La expansión de las transnacionales representa una tendencia estructural del capitalismo globalizador en la era de la revolución tecnológica y la consolidación de la "nueva economía" con 10 compañías del sector de las telecomunicaciones de las 25 primeras que encabezan la lista. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobermabilidad que acota la subjetividad. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998).

En cada fase expansiva de las grandes corporaciones transnacionales se requiere el apoyo de los Estados imperiales. La propiedad y el control de las corporaciones transnacionales se concentra altamente en pocos Estados imperiales. Para mantener la confidencia en estos mercados globales, las corporaciones se ajustan cada vez más a las exigencias de los mercados. Cómo consecuencia de estos sucesos, se aceleraron los procesos de globalización.

Los procesos de internacionalización económica y de la información llevan ya varias décadas y han sobrepasado los niveles de integración económica logrados antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ya desde el siglo XVI se despliega un proceso de transnacionalización comercial progresiva y una mundialización de la economía y el mercado capitalista global, cuyas relaciones han generado profundas desigualdades.

El desarrollo histórico de los procesos de globalización representa una configuración coyuntural de varios procesos históricos. Este desarrollo histórico se divide en cuatro épocas. La época de la pre-industrialización que comprende los años anteriores a 1820, constituyó una época previa a la globalización en la que los flujos de los factores económicos fueron leves y el comercio distante se realizó en monopolios que manejaban productos clasificados como de ostentación. En esta época, Saint Simon es considerado uno de los precursores al hacer referencia a un internacionalismo utópico.

La segunda época comprende desde 1820, durante el resto del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, fue un período expansivo del comercio mundial y se considera que la verdadera globalización se realiza. Los trabajos de Marx (1971-1976) y Engels describen y registran los rasgos característicos de los mecanismos de coloniaje en que se dan estos procesos promotores de intercambios desiguales. La herencia colonial ha marcado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados.

La tercera época que abarca el período comprendido entre las dos guerras mundiales, está caracterizado por inestabilidad de la economía mundial en la que los procesos de globalización sufren un retroceso para convertirse en economías autárquicas. En este período los precursores fueron Weber y Durkheim que tratan sobre el cambio social en la estructura global. Los funcionalistas de la década de los treinta en el siglo pasado sostienen que el principio de la elección racional fundamenta la internacionalización de los mercados y la democracia.

En economía tienen mucha influencia los trabajos de Keynes que promueven el desmantelamiento de los procesos de globalización mediante una política económica que alienta la intervención estatal en todas las áreas de la producción, distribución y consumo. Keynes sugirió que la regulación e intervenciones del gobierno es necesaria para promover una mayor equidad en el desarrollo. Se imponen barreras a los flujos del comercio internacional que restringen las relaciones de intercambio entre las naciones.

La cuarta época de la globalización comprende toda la segunda parte del siglo XX y al igual que la segunda etapa, se caracterizan por la expansión de los procesos de globalización. Entonces como ahora, los procesos de globalización son similares cualitativamente aunque con algunas diferencias cuantitativas (Aguirre Rojas, 2000) en las formas de producción, distribución, comercio y consumo.

Los movimientos de liberación nacional después de la Segunda Guerra Mundial terminan con un sistema de colonialismo. Sin embargo, al herencia colonia marcó las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados. Estos movimientos unieron a comunidades étnicas y religiosas en contra del capitalismo como un enemigo común. Los países que ganaron su independencia de las potencias europeas, entraron en los procesos de globalización económica. Así, la globalización económica sustituye al viejo sistema colonialista de las potencias europeas para la acumulación capitalista. Los procesos de la economía global son más inestables que nunca antes. A partir de esta guerra, los procesos de integración han pasado por dos etapas.

La primera inicia con los acuerdos de Bretton Woods para regular los flujos internacionales de capitales y establecer las tasas de cambio. La ideología del liberalismo fue el fundamento para la creación de las instituciones de Bretton Woods, para la prevención de problemas temporales de falta de equilibrio de la balanza de pagos y para la resolución de conflictos futuros de las naciones mediante préstamos para la reconstrucción y el desarrollo. En la segunda etapa más identificada con la globalización, la expansión financiera se propagó y se profundizó con la crisis de las instituciones del sistema monetario internacional y los acuerdos de Breton Woods.

La instrumentación de los planes para la reconstrucción económica durante el periodo de de la segunda guerra mundial, sienta las bases institucionales para la internacionalización de la economía y para la convergencia de las economías, las prácticas de los negocios y los estilos de vida. El período comprendido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el colapso del socialismo soviético, se caracteriza por proyectos de desarrollo, uno más orientado por una extensión de sociedad de mercado y el otro con una orientación idealista para el establecimiento de una sociedad justa, igualitaria y rica. Es la sociedad local y regional el actor social que adquiere relevancia para la promoción del crecimiento económico y el desarrollo más justo y equilibrado entre las diferentes regiones.

El proyecto desarrollista que emerge estabilizó la economía capitalista, sobre la base de una organización liberal y principios mercantilistas que sirven como fundamento al Estado-nación. La relación entre el Estado-nación y su ambiente internacional fue transformada radicalmente con la creación de un sistema político supranacional en el cual los Estados-nación son miembros y socios de nuevas agencias e instituciones internacionales creadas para establecer la gobernabilidad de un nuevo sistema económico, político y social mundial.

El diseño de este nuevo sistema sobre la base de una motivación de servicio que se exprese a través de la cooperación, debe implicar no solamente la satisfacción de los intereses actuales sino también la preservación de los recursos naturales para la satisfacción de los intereses futuros, con base en decisiones a largo plazo que beneficien a muchos en vez de decisiones a corto plazo y que beneficien solo a unos cuantos. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, dándose el problema del “gorrón”, pero las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes.

Se estableció un orden internacional más densamente integrado y gobernado que transformó las agendas políticas y cambió las prácticas de gobernabilidad de los Estados-nación miembros. El actual orden internacional existente es modificado por los conflictos de poder entre los Estados y los diversos intereses hegemónicos entre los grupos económicos, contrariamente a la tesis sostenida por Hungtington (1993) que sostiene que la fuente fundamental de conflicto no es ni ideológica, ni económica, afirmando y concluyendo que las grandes divisiones entre la humanidad y la fuente dominante del conflicto serán culturales.

Los conflictos bélicos ahora se presentan más entre los diferentes grupos con intereses específicos en un ambiente de globalizadad, más que entre Estados-nación. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Sin embargo, los Estados-nación se mantendrán como los actores más poderosos en el mundo, pero los principales conflictos de la política global ocurrirán entre naciones y grupos de diferentes civilizaciones.

Sin embargo, las estructuras de la propiedad corporativa permanecen, hasta cierto punto, diferentes por sus formas de concentración y la influencia laboral. La movilidad internacional del trabajo calificado cambia el conjunto de restricciones bajo las cuales se

formulan las políticas nacionales. El proceso de institucionalización de la economía ha sido acelerado a partir de la constitución del Grupo de los Siete (G-7), el cual ha asumido funciones de un gobierno económico global direccionado la globalización económica manifestada en la eliminación de las restricciones al comercio y a las finanzas.

Las economías capitalistas avanzadas se desarrollaron durante las siguientes dos décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, en simbiosis con los sistemas políticos democráticos que tienen una alta capacidad para la regulación efectiva y compensaciones de un Estado de Bienestar, basado en una economía de servicios complejos y fragmentados, porque toma como propia la obligación para proveer los servicios asistenciales a toda la población.

Si bien el Estado de Bienestar pudo dar respuesta a satisfacción de las necesidades sociales y asistenciales, por otro lado, dio origen a la formación de entidades colectivas que funcionaron mediante la corporativización de los ciudadanos. Quienes critican al modelo de Estado Benefactor, lo hacen porque se oponen a la política social orientada a solucionar los problemas del bienestar de la colectividad y porque dan prioridad a una política económica que privilegia la economía basada en el libre mercado. Involucrarse en la acción colectiva, los actores buscan traer el ansiado bien colectivo y dar forma a la colectividad con respecto al bien colectivo. Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil.

La formación de sujetos colectivos que no operaban en forma autónoma e independiente, sino de una manera clientelista, para lograr el control político y social de la ciudadanía, fue la forma en que el Estado de Bienestar mantuvo su legitimidad. Las políticas económico-sociales favorecieron la igualdad económica mediante sistemas de prestaciones sociales otorgadas, subvencionadas y administradas por el Estado central. Este modelo de Estado de bienestar otorgaba seguros a las garantías sociales que "cubrían los principales 'riesgos' de la existencia, (enfermedad, desocupación, jubilación, invalidez, etcétera)" (Rosanvallón, 1996)

En los inicios de la década de los setenta se crea una Comisión Trilateral con Estados Unidos, Europa y Japón, como una organización estratégica en la cual se diseña un modelo global que favorece a los capitales corporativos, en sustitución del modelo de economía internacional de la posguerra. Durante la segunda mitad de los setenta se transfiere el mando del Estado al mercado mediante programas de desregulación que en realidad otorgan la regulación al mercado.

La implantación del modelo de la globalización desde estos años se da como un proceso fluido para los países miembros de esta Comisión. Se utiliza como estrategia para involucrar a los países menos desarrollados el aliento de la deuda externa mediante créditos blandos etiquetados como "ayuda económica"que posteriormente se convierten en mecanismos de presión cuando las tasas de interés aumentan y los países deudores no pueden cubrir su deuda. Esquemas de créditos de bajos intereses en condiciones favorables, por ejemplo, diseñados para servir al más necesitado, casi invariablemente fallan en

alcanzar a la población meta. Petras (2001d) argumenta que los Estados imperialistas como Estados Unidos, Europa y Japón, a través de las instituciones financieras internacionales presionan a los países receptores de préstamos en el tercer mundo para reducir y eliminar barreras comerciales y privatizar empresas del Estado, lo que permite a las empresas transnacionales penetrar en los mercados y comprar empresas locales.

Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional.

Además, este tipo de ayuda se otorga únicamente a aquellos países que solamente cumplen con la condición de la democratización. Este tipo de ayuda económica no hace otra cosa que perpetuar las relaciones de dependencia y de subsistencia bajo la hegemonía del capital transnacional, el cual se concentra en ciertas empresas y sectores de la economía y en regiones determinadas que arrastran a otras de menor desarrollo en detrimento de su crecimiento económico.

La estrategia funcionó perfectamente para tomar como rehenes a los países que se resistían a aceptar los alcances del nuevo modelo global de desarrollo. A pesar de que el alivio de la deuda es hecho en nombre de los países pobres, éstos empeoran si los recursos no son aplicados correctamente en función de programas que estén dirigidos a lograr el crecimiento económico como un fin en sí mismo. Este programa debe dar credibilidad a la política económica implementada. Como resultado, a pesar de que las clases altas y sus agentes de gobierno, incurren en la carga de grandes deudas en los setenta y en los ochenta, las clases bajas han estado soportando la carga del pago de la deuda durante los noventa. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas.

Para revertir este proceso, se requiere reducir el peso de servicio de la deuda externa de los países endeudados. Easterly (2000b) analiza un conjunto de modelos teóricos que predicen que los países con preferencias no cambiantes de ahorros a largo plazo, responden al alivio de la deuda con una mezcla en el gasto de sus activos y con nuevos préstamos. También predice que una alta tasa de descuento el gobierno escoge políticas pobres e impone preferencias intertemporales en la economía. Cada vez avanzan las propuestas que tienden a reducir y condonar la deuda de los países pobres que supera el billón (millón de millones) de dólares, las cuales se ven minadas por el incremento en el precio de los energéticos.

Otras interpretaciones históricas (Reich, 1998) sobre el desarrollo de los procesos de globalización lo fechan al final, más que a la mitad, de la década de los setenta y los inicios de los ochenta, y señalan los eventos concurrentes tales como el impacto acumulado de la segunda crisis petrolera, una declinación sustancial en el producto interno bruto, el aumento en las tasas de inflación, el episodio traumático de los rehenes en la embajada de

Estados Unidos en Irán, el ascenso al poder de Thatcher en Inglaterra, de Reagan en Estados Unidos y Kohl en Alemania. Sin embargo, la promoción de esta ideología es de hecho un producto de la estrategia global contemporánea de las transnacionales así como de las políticas de las administraciones de Reagan, Bush y Clinton en los Estados Unidos y de Thatcher y Major en Inglaterra. Los antecedente se encuentran en la ideología neoliberal, la cual tiene sus raíces ideológicas en los siglos XVIII y XIX en los pensadores liberales tales como Adam Smith y Jhon Locke.

La ideología del neoliberalismo fue empujada por todo el globo condenando toda acción pública que provenga del Estado-nación, transfiriendo la propiedad de los bienes públicos a los privados y empleando las intervenciones militares para la defensa de sus intereses. Sin embargo, la promoción de esta ideología es de hecho un producto de la estrategia global contemporánea de las transnacionales así como de las políticas de las administraciones de Reagan, Bush y Clinton en los Estados Unidos y de Thatcher y Major en Inglaterra. La formación de alianzas militares entre los Estados imperialistas y otros Estados con fuertes aparatos militares, promueven la expansión de las corporaciones transnacionales en los mercados internacionales. Durante esta segunda mitad de la década de los setenta se transfiere el poder del Estado al mercado mediante programas de desregulación que en realidad otorgan la regulación a los mercados.

Hasta la década de los ochenta, la liberalización del comercio internacional sobre la base multilateral fue el éxito de la época de la posguerra, y ciertamente contribuyó a mejorar el crecimiento económico de la economía internacional. En la fase actual de desarrollo de la economía internacional, las funciones del Estado juegan un papel fundamental. Las relaciones de comercio y de mercados se delimitan en acuerdos entre los Estados, los cuales operan dentro de sus fronteras. El comercio mundial creció a una tasa de más del doble del producto bruto mundial. Dio lugar a un medio ambiente altamente permisivo para la política económica incluyendo a los países en vías de desarrollo que había elegido una política comercial de economía cerrada (Krueger, 1999)

A mediados de la década de los ochenta, los arreglos comerciales preferenciales se empezaron a extender al mismo tiempo que la liberalización comercial multilateral. Sin embargo, la década de los ochenta ha sido denominada la década perdida para los países en desarrollo, con excepción de los países de sudeste asiático, los países ricos se hicieron más ricos y los países pobres se hicieron más pobres. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados. Así las sociedades nacionales se polarizan entre aquellas pocas que concentran los principales beneficios y permanecen enajenadas en la abundancia de satisfactores de lujo y aquellas naciones que carecen de los recursos suficientes esenciales para satisfacer sus necesidades más básicas o elementales. Durante esta década, los países menos desarrollados tuvieron poco, nada o negativo crecimiento económico y una caída en los ingresos y en la producción de capital.

El orden estructural bipolar que prevaleció desde la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída del Muro de Berlín es sustituido por el fenómeno de la globalización, cuyo centro principal de decisiones políticas y económicas tiende a ubicarse en Washington, las cuales

se imponen mediante el denominado “Consenso de Washington”. La caída del muro de Berlín y las desiluciones que causó las políticas económicas nacionalistas en númerosos Estados-nación, se creyó que esto representaba el triunfo de la democracia liberal en todo el mundo. El colapso del comunismo legitimó a la democracia como el sistema político más viable.

Los Estados-nación son sometidos a presiones para avanzar en sus transiciones a sistemas con elecciones multipartidistas y a pesar de que contaran con instituciones democráticas, el sistema político es ampliado para dar cabida a nuevos valores y prácticas económico-sociales. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado. De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones democráticas cuyo poder se asegura mediante el “enjaulamiento” de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder.

Estos desarrollos han dado origen a una paradoja: mucho se ha criticado que la democracia ha llegado a los Estados-nación cuando precisamente tienen más restricciones para una toma de decisiones efectiva en los asuntos que le son propios. Es por esto que se dice que para que el desempeño del Estado sea mejor, se requiere que su gobierno esté acotado por restricciones institucionales.

Hay que diferenciar entre la tendencia actual basada en un proyecto de libre mercado a escala mundial, planteamiento que difiere de la economía internacional abierta. En la fase actual del desarrollo de la economía internacional, las funciones del Estado juegan un papel primordial. Los crecientes niveles de internacionalización de comercio e inversiones entre las distintas naciones han sido una tendencia previa a la globalización. Los acuerdos de inversión multilateral entre los diferentes Estados, cuentan siempre con la participación de las grandes empresas transnacionales. Este proyecto de libre mercado global es la propuesta de Estados Unidos que alcanza economías nacionales que antes eran protegidas, para beneficiar a sus empresas transnacionales y multinacionales.

La política exterior rapaz de los Estados Unidos saquea las riquezas en el extranjero “aprovechando programas corruptos de privatización, sobretodo en los países ex comunistas, en América Latina y Asia, la riqueza del Imperio”, basada “más en el poder político y la promoción mediática que en cálculos racionales de mercados” (Petras, 2001b). El Acuerdo de Libre Comercio de América tiene como propósito privilegiar a las grandes corporaciones transnacionales de Estados Unidos que operan en Latinoamérica, al mismo tiempo que restringe el acceso de las empresas latinoamericanas a los mercados de Estados Unidos.

Así, afirma Petras (2001c), la reciprocidad es fórmula para las adquisiciones de Estados Unidos y la bancarrota de las empresas latinoamericanas. La complejidad de la realidad social de Latinoamérica contemporánea es quizás pensada como una complejidad híbrida de ideologías, prácticas y condiciones de la premodernidad, modernidad y postmodernidad. La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de

reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta.

Estas empresas transnacionales y multinacionales, principalmente de origen estadounidense, han demostrado un interés en un reducido sector selectivo de bienes y servicios que les garantizan retornos rápidos sobre la inversión. Originalmente la ciudadanía de muchas empresas transnacionales y multinacionales era estadounidense, pero en la actualidad, en pleno auge de los procesos de globalización, se han convertido en organizaciones supranacionales y sin una patria específica, es decir, se han convertido en apátridas.

La revolución tecnológica contribuyó a profundizar y acelerar los procesos de globalización en las últimas décadas del siglo XX con la aparición de las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales que actúan sobre la base de un interés nacional, y no las corporaciones sin Estado o stateless corporations. Las elites económicas de los poderes imperiales operan a través de las grandes corporaciones transnacionales, mediante nuevas formas de configuración de clase.

La tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966). En el sistema imperialista, las corporaciones transnacionales de los Estados imperialistas con quienes operan en sinergia, dominan los mercados y los Estados nacionales. Por lo tanto, las elites nacionales y locales de los negocios han abierto la puerta a las economías de las corporaciones transnacionales que están interesadas en mano de obra barata, recursos naturales, capital financiero y mercados de consumidores en los países latinoamericanos. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado.

La globalización, es por lo tanto, un proceso reciente mediante el cual las economías con base nacional se disuelven para integrarse en un mercado mundial donde se efectúan flujos comerciales y financieros dominadas por la libre acción de las fuerzas del mercado que escapan a las regulaciones de los Estados-nación y de las agencias multilaterales internacionales. La intensificación de los flujos comerciales, financieros y tecnológicos es otro de los rasgos característicos de los procesos de globalización. Sin embargo, la realidad es muy limitada con respecto al avance del libre flujo comercial y de inversiones.

La internacionalización de la economía es compatible con la existencia de los gobiernos nacionales y con las agencias internacionales. Sin embargo, la globalización económica requerirá de nuevas formas de gobernabilidad supranacional o gobernabilidad global. Las nuevas formas de gobernabilidad de lo colectivo deben sustituir a las estructuras rígidas y pesadas que no dan respuesta a exigencias de la individualidad con orientación abierta y que por lo tanto requieren la emergencia de nuevas formas colectivas con estructuras más abiertas, flexibles y livianas que respondan a las exigencias de la individualidad con orientación abierta.

Al decir de Haliday (1997: 23), ya se cuenta con un sistema de gobernabilidad global con muchas capas, aunque "uno de los problemas principales es el de resolver, a través de reformas, los efectos de un sistema que ha estado vigente durante varias décadas. ¿Cómo hacer que este sistema de gobernabilidad sea más efectivo, más justo, y más responsable frente a la cambiante situación internacional?".Ostry (citada por Kehohane y Nye, 2000: 22) llama "gobernabilidad híbrida" a la forma de gobernabilidad que involucra redes de gobiernos, organizaciones multilaterales, grupos no gubernamentales, etc., las cuales están involucradas en los procesos de formulación e implementación de políticas globales.

Esta nueva forma de gobernabilidad suplementa a otras formas de gobernabilidad. Una orientación hacia la gobernabilidad se centra en estas circunstancias diferentes y en las maneras en que cada una de las formas de gobernabilidad puede ser más exitosa que otra. Redes de organizaciones internacionales, sub-unidades de gobiernos, redes transnacionales y transgubernamentales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de profesionales y empresariales, sindicatos de trabajadores, etc., todos tienen un papel importante en las nuevas formas de gobernabilidad que desempeñan en conjunción con las autoridades nacionales y las organizaciones intergubernamentales. Las nuevas formas de gobernabilidad de lo colectivo deben sustituir a las estructuras rígidas y pesadas que no dan respuesta a exigencias de la individualidad con orientación abierta y que por lo tanto requieren la emergencia de nuevas formas colectivas con estructuras más abiertas, flexibles y livianas que respondan a las exigencias de la individualidad con orientación abierta

El nuevo orden transgubernamental constituye una densa red de relaciones menos apremiante que el liberalismo internacional. Un acercamiento a la gobernabilidad se traduce del macronivel de sectores a un mesonivel de programas y a un micronivel de un oficial tomando decisiones de qué debe hacer. (Larmour,1997). La base política de las organizaciones intergubernamentales y de los regímenes internacionales es tan débil que puede declinar la cooperación internacional.

La expansión financiera del capitalismo que toma como base las crisis periódicas, aceleró los procesos de movilidad, concentración y rentabilidad financiera y cuestionó las políticas monetarias de las instituciones nacionales, derivando en una reestructuración de los sistemas productivos a escala global. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado. En pocas palabras, ha creado tensiones en todas las áreas de la actividad humana. Las empresas se convierten en las aliadas de las corporaciones transnacionales en las relaciones simbióticas que mantienen con los Estados-nación.

Sin embargo, ya no son las corporaciones norteamericanas las únicas ganadoras en el tablero de la globalización como producto de las contradicciones del desarrollo del neocapitalismo, de las tensiones que genera en todas las áreas de la actividad humana, y de los efectos laterales de los mercados globales. Estas grandes corporaciones norteamericanas aumentan su dependencia de las filiales en el extranjero para captar sus ganancias, mediante estrategias de exportación, por lo que son las principales interesadas en impulsar la adopción de los principios del libre mercado y de la economía neoliberal. Las

corporaciones globales se motivan con el establecimiento de filiales en todos los rincones del mundo en donde aplican las reglas de origen de "contenido local" para satisfacer los requerimientos del libre comercio y de sus principales clientes.

De las 500 corporaciones más importantes del mundo, el 46% son de los Estados Unidos y en menos de una década han incrementado sus ganancias de un 36 a un 43%, y once de las 13 casas financieras mayores del mundo son controladas por inversores de Estados Unidos, según datos de Petras (2001a). En la economía mundial dominan las empresas euroestadounidenses. El 79% de las 500 mayores multinacionales se ubican en Estados Unidos o Europa. Si se incluye a las corporaciones japonesas el porcentaje aumenta a 91% (Petras, 2001c). Los acuerdos internacionales que se perciben como negativos para la captación de utilidades de las transnacionales y multinacionales estadounidenses son rechazados, buscando siempre una justificación con "fines humanitarios".

Washington toma una posición unilateral mediante la imposición del denominado "Consenso de Washington", presionando agresivamente para "obtener más ventajas para las corporaciones estadounidenses, aunque sea al precio de alienar a aliados estratégicos y al público en el país" /Petras, 2001). No obstante, una investigación de Abboushi (2001), concluye que las estrategias de crecimiento internacional de las corporaciones estadounidenses han sido hasta ahora robustas y parece que continuará en el futuro.

Mientras que el control de capital se concentra en pocos países de Europa y los Estados Unidos, el resto del mundo se sume en una crisis financiera que da motivos para que los analistas anticipen el fin del neoliberalismo. La prosperidad de la economía estadounidense se basó en la especulación financiera alimentada, dice Petras (2001b) por "...expectativas falsas basadas en propaganda de mercado, desconectada de la economía real. Junto con una política exterior rapaz que saqueaba riquezas en el extranjero aprovechando programas corruptos de privatización, sobretodo en los países ex comunistas, en América Latina y Asia, la riqueza del Imperio, estaba basada más en el poder político y la promoción mediática que en cálculos racionales de mercados."

Otros analistas sostienen que el derrumbe del liberalismo se presentó con el fin del comunismo en su versión marxista leninista, esto es, en 1989. Por lo tanto, el periodo que comprende el liberalismo como ideología global va de sus inicios en 1789 a su derrumbe en 1989, es decir, doscientos años como doctrina e ideología de centro, que sirvió de pilar al sistema mundial moderno. La ideología neoliberal tiene sus raíces ideológicas en los siglos XVIII y XIX en los pensadores liberales tales como Adam Smith y Jhon Locke.

Cada vez más, el ritmo de la globalización económica se acelera, al grado que se convierte en una fuerza difícilmente gobernable y sin que necesariamente ofrezca soluciones más constructivas a los problemas mundiales. El principal cuestionamiento sobre la globalización económica es cómo encontrar formas de mantener los efectos adversos de la globalización.

La evolución del capitalismo transnacional, o neocapitalismo, ha resultado en la globalización económica, la cual en los términos de Márquez Ayala (2001), se sustenta en cuatro pilares: el ideológico que exalta el mercado, la marca es el neoliberalismo, la base

teórica es el monetarismo y su slogan es “la esperanza del acceso colectivo a la aldea global de la prosperidad y el bienestar”. Tanto los promotores como los detractores de los procesos de globalización afirman ser los representantes de los intereses mayoritarios de la ciudadanía silenciosa la que sin aceptar la realidad reacciona con estoicismo. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas.

Los defensores del capitalismo globalizado sostienen que si las condiciones de la ley y el orden se mantienen, el bienestar económico de la sociedad se elevará, porque es más consistente con la naturaleza humana, argumentan. No obstante, el capitalismo globalizador es por naturaleza polarizador del desarrollo de los pueblos, mientras que es amenazado por un bajo crecimiento económico.

La globalización de las relaciones económicas y sociales son el resultado natural de la revolución tecnológica y su tendencia es a unir al mundo por encima de los vínculos institucionales. En el aspecto social, la globalización económica ha dado motivo a discusiones sobre sus efectos negativos en la igualdad y la justicia social, planteando verdaderos dilemas a los filósofos moralistas para reconciliar las realidades del orden emergente con las demandas morales de la sociedad. Tampoco se han encontrado fórmulas que posibiliten la reconciliación de las realidades históricas. La iniquidad y pobreza es el resultado de la injusticia social, consecuencia a su vez de un sistema de valores que privilegia la distribución inequitativa de los recursos, la obtención de utilidad, ganancias y beneficios, y la ausencia de solidaridad y cooperación. Un mayor problema es dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados (De Swaan Abram, 1997). El alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma.

La globalización no ha sobrevivido de la crisis moral que marca el final del milenio. Por lo tanto, la crisis moral necesariamente implica cierta restricción ética similar a cuando la tierra en que está enraizada una planta es pobre y carece de elementos para desarrollarse. Esto implica recibir una ética administrativa empujada por una crisis moral y repensar el profesionalismo en tal forma que la administración esté a tono con el cambio económico y social y las demandas cambiantes de una población desorientada algunas veces en este período de la globalidad, y por lo tanto en una transición simultáneamente económica, política, social y cultural en la mayor parte de los países del mundo. La administración actúa como un juez que asegura el cumplimiento con los valores que forman la ética administrativa y que dan sustancia al servicio público.

Los procesos de globalización económica y comercial son impulsados por los acuerdos entre los Estados y por el crecimiento de las empresas multinacionales. En sí, los procesos de globalización económica desafían el orden económico, político y social y arrebatan el control de los mercados a los Estados-nación, en el supuesto de que los mercados se autorregulan. Pero la autorregulación del mercado a resultado un mito según Polanyi (1957)

porque requiere de una acción política deliberada para su implantación. Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política.

Polanyi argumenta que el movimiento hacia el mercado libre o autorregulado se constituye más allá de en un simple accesorio de la vida económica, porque dirige por sí mismo la producción y distribución de los bienes, mientras que en los sistemas económicos anteriores, el sistema social absorbía el mercado. El mercado como subsistema es parte de un sistema mayor. El funcionamiento de los mecanismos del mercado, así visto como un subsistema, necesita ser regulado en forma diferente a los actuales términos impuestos por los intereses hegemónicos.

Los procesos de globalización se presentan como redes de integración geoeconómica y geopolítica del capital en varias vertientes como la económica, cultural, social, y en menor grado en la política etc., pero es la vertiente comercial el criterio más dominante. Las redes financieras se han desarrollado más que otras, a tal grado comparativo que el intercambio comercial de bienes y servicios sólo representa una ínfima parte de los movimientos de capitales. Estos movimientos de capitales que buscan maximizar sus utilidades, son incontrolables, más que otros procesos de la globalización económica, vuelven vulnerable a la economía y las destruyen. No obstante, el control de los movimientos de capitales por los Estados imperiales hacia las economías emergentes se orientan a desestabilizar los regímenes nacionalistas. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula.

El ciclo económico con sus irracionalidades del sistema capitalista no perdona a la nueva economía que empuja a las industrias de la tecnología de la información. Para limitar los alcances de la irracionalidad e incertidumbre de los movimientos de capitales, se requiere de una red de voluntades e intervenciones políticas. Estas redes aumentan las interrelaciones entre los diferentes actores y agentes gracias a la innovación de la tecnología informática, los que por otra parte tienden a desintegrar mecanismos de control y cohesión social.

Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante, la cual se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. Está claro que la integración económica no siempre viene aparejada con la integración social, la cual queda condicionada a la capacidad de acceso que tienen los individuos al mercado como consumidores.

Estos procesos se vinculan multisecularmente a los despliegues polarizantes del capitalismo mundial. Son compatibles con la lógica del imperialismo para la dominación y apropiación de los excedentes (Saxe-Fernández, 1999). La transferencia de estos excedentes se garantiza mediante el diseño e implementación de políticas en conjunto con las estructuras del poder global.

Rosenau (1995) afirma que la globalización no es lo mismo que globalismo, el cual apunta a las aspiraciones por un estado final de asuntos donde los valores son compartidos

y pertinentes para toda la población mundial, su medio ambiente, sus roles como ciudadanos, consumidores o productores con un interés en la acción colectiva designada para solucionar problemas comunes. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico "gorrón" causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otro ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir (De Swaan Abram, 1997). Tampoco es universalismo, valores que abraza toda la humanidad, hipotéticamente o realmente". Saxe Fernández (2000) denomina el globalismo pop a la ideología conservadora que es un "discurso determinista, a este discurso fácil, que se pone de moda, que es por otra parte, una oferta que siguen muchos públicos: académicos y políticos..."

Mientras que el conservadurismo institucional y las propuestas dependentistas institucionales nos conducen a esperar que la evolución de los sistema políticos democráticos exhiben diferentes patrones, la propuesta de aprendizaje institucional apunta a la convergencia. Así, la política conservadora se orienta por un manejo retrógrada de la política social.

Kaiser (1997) sentencia que la hipótesis del conservadurismo institucional sostiene que las reformas constitucionales en las democracias son relativamente poco comunes, no debido a factores institucionales sino al cálculo de los actores políticos, solamente cuando una gran crisis ocurre, ya sea por un abrupto cambio de factores contextuales o a través de un deterioro dramático de la satisfacción de la política pública, es una ventana de oportunidad abierta para la persecución de planes de reformas. La investigación en la ingeniería constitucional ha tomado nota de los efectos de difusión, tales como la globalización de las comunicaciones que enriquece las bases cognitivas de las cuales escoger.

Mucho antes de que el término globalización, propuesto en 1983 por Theodore Levitt para designar una convergencia de los mercados del mundo, y para referirnos a un objeto que es evasivo e inmanejable, fuera una palabra de moda para significar las conexiones económicas, el mundo ya estaba interrelacionado económica y políticamente. Sólo que ahora el fenómeno se aparece como un verdadero "paradigma montado sobre varias falacias, mitos o slogans" que conduce a la democracia, al bienestar y al progreso de la humanidad. Una propuesta democrática global que no se ajusta a las situaciones locales y viceversa y que "se asimila cada vez más a la defensa de los derechos del hombre y de la propiedad y no a la construcción y al desarrollo de un espacio público" (Laïdi, 2000)

El término globalización es empleado actualmente para hacer referencia a cualquier cosa que puede ser desde la expansión del comercio internacional y empresas que cambian sus puestos de trabajo a cualquier parte del mundo, al igual que a los organismos multilaterales que fijan las reglas para el establecimiento de una economía global. Esta economía global

hace referencia a una economía sin Estados nación en donde la autonomía del capital se exagera bajo el influjo de la ideología del libre mercado. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible.

En sí, mientras el capital se globaliza, el trabajo se vuelve más local, y mientras el trabajo tiende a delimitarse dentro de fronteras territoriales, el capital no encuentra obstáculos geográficos. El concepto de globalización es ambiguo y sólo trata de expresar las evidencias empíricas. El concepto de globalización comenzó a emplearse con fines académicos a mediados de los años ochenta. En todo caso este concepto de globalización debe revisarse desde sus fundamentos, los contenidos y como procesos que caracterizan al desarrollo del capitalismo mundial y sociedades contemporáneas (Aguirre Rojas, 2000)

Los europeos prefieren hablar de "mundialización" en vez de "globalización" para describir el mismo fenómeno. Para Held (2000) la globalización connota la ampliación e identificación de las relaciones sociales, económicas y políticas a través de regiones y continentes, además de que operan en múltiples escalas temporales. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. La globalización trata de la interdependencia y de la imbricación cada vez más estrecha de las economías de numerosos países.

La globalización resulta intensificar las interacciones y la interdependencia internacional Sobre todo el sector financiero, ya que la libertad de circulación de capitales, de flujos financieros, es total y hace que este sector domine muy ampliamente a la esfera económica (Ramonea, 2000) De la Madrid (1996) destaca las tendencias actuales de la globalización en la económica, la mundialización de los fenómenos políticos y la mundialización de la sociedad. Estas tendencias son fenómenos macro por lo que se les denomina también mega tendencias que describen las principales características que determinan la globalización.

El fenómeno conocido como la globalización se refiere a la proliferación del comercio global, los flujos de inversiones y las conexiones de comunicación en un mundo de rápida transformación tecnológica (Stein, 1999) De acuerdo con Cohen (1995), la "globalización es un término que da cuenta de una doble realidad: de un lado la internacionalización de bienes, servicios y factores de producción; de otro, el surgimiento de empresas industriales capaces de concebir su desarrollo en escala mundial y formular para ello estrategias globales de producción, comercilialización y gestión."

La globalización como proceso, según Wettstein (2000), sostiene la "interacción – y eventualmente interdependencia- que se produce entre las distintas unidades constitutivas del nuevo sistema mundial (bloques de poder, empresas transnacionales, organismos financieros multilaterales, aparatos del Estado, sociedades nacionales, consumidores en sentido amplio), las cuales dan lugar a nuevas formas de configuración de clase. Para Vilas (1997) "la globalización es un proceso de desarrollo desigual en sus diferentes niveles o dimensiones. En su etapa actual se encuentra mucho más desarrollada en materia financiera que en materia de producción o de comercio". La globalización como un proceso da forma

a estrategias dentro de una visión que permite determinar otras alternativas en los modos de producción, estructuras de clases y arreglos políticos.

El concepto de globalización está estrechamente vinculado a la idea de un mundo sin fronteras ni barreras de ningún tipo, en donde las fronteras económicas, políticas, sociales y culturales rebasan a las fronteras nacionales. Ohmae (1995b) sostienen que los administradores del sector privado y los formuladores de políticas están descubriendo que no tiene sentido en un mundo sin fronteras hablar de que los países tienen entidades económicas discretas. Sus variaciones internas son tan grandes y sus conexiones externas son extensivas como para hacer generalizaciones que puedan servir de guías.

La globalización es un conjunto de creencias que promueven un sentido de conectividad, interdependencia e integración en la comunidad mundial. Las transformaciones a que da lugar los procesos de globalización se caracterizan en problemas de fronteras, los cuales cuestionan los intereses soberanos del los Estado-nación y los intereses regionales, internacionales y globales. Las transformaciones económicas y políticas también implican transformaciones de los valores sociales, culturales y sobretodo de valores morales

Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. La forma en que la globalización organiza la producción, distribución y consumo remueve los factores que condicionan la geografía y las fronteras, haciéndolas menos relevantes. La geografía económica y política del ámbito espacial estatal está cediendo su lugar a una geografía económica y política en los ámbitos regionales y globales. La apertura de las fronteras ha permitido que la tecnología y el conocimiento fluyan alrededor del mundo teniendo como principal motor el incremento de la productividad. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países.

No obstante, Petras (2001c) sostiene que la baja productividad lograda en los últimos años, mediante el influjo de la denominada tercera revolución científico-tecnológica, hace que esta sea solo un mito. La economía global está acelerando los cambios en lo que lo más valioso es el conocimiento que sustituye al trabajo como fuente de identidad de los pueblos. La identidad se expresa en intereses que son comunes a través de diferentes instancias nacionales e internacionales. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. La economía del futuro es la economía del conocimiento en una sociedad del conocimiento. La economía basada en el conocimiento, la tecnología es el disparador que facilita la creación de satisfactores con alto valor agregado. No obstante, los diferenciales en los procesos de globalización económica e identidad cultural de los pueblos profundizan las fracturas sociales.

Existe similitud de transformación basada en el conocimiento entre los procesos d e desarrollo económico y la transformación institucional, en los países del tercer mundo (Ellerman, 1999). La globalización traerá cambios fundamentales en la base del conocimiento y en y en las capacidades de las instituciones existentes y por lo tanto,

establece el escenario para la innovación y la toma de riesgos (Veliyath y Zahra, 2000). ". Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. Para Giddens (1999:36) los riesgos son "la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza."

Los Estados nación como bastiones de la sociedad industrial no pueden asimilar y manejar los retos que plantea la sociedad del conocimiento. La globalización, de acuerdo a Amoore (1997) abarca "un amplio rango de aspectos materiales y no materiales de la producción, distribución, administración, finanzas, tecnologías de información y comunicaciones y acumulación del capital".

Los defensores de los procesos de globalización económica sostienen que la productividad se incrementa cuando los países producen aquellos bienes y servicios en los que tienen ventaja comparativa. Las fuerzas motivo asociadas con la acumulación de riqueza que enfatizan el sistema capitalista orienta los costos de capital individual y las empresas privadas capitalistas para expandir sus actividades acumulativas y eliminar todas las barreras geográficas culturales y políticas que obstruyen su paso a la acumulación de riqueza.

Por globalización se denomina el conjunto de características que predominan en las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales a escala internacional. La globalización implica, según Held (1991), que las actividades económicas, políticas y sociales tienen un alcance mundial y la intensificación de los niveles de interacción entre los Estados y las sociedades que integran la sociedad internacional. En este sentido, la globalización denota el acercamiento y la profundización de las relaciones e instituciones a través del espacio y tiempo, en tal forma que las actividades diarias son influidas por sucesos en la otra parte del globo. Tiempo y espacio se vuelven conceptos más abstractos por aquélla circulación de objetos y sujetos que la economía marxista y postmarxista describen (Arellanes Jiménez, 2001). Así mismo, las prácticas y decisiones de los grupos locales o comunidades tienen efectos globales (Held, 1995) Las denominadas "cybercommunities" son grupos de acción colectiva transnacionales formadas por grupos de acción local para frenar los efectos de la globalización. El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados.

Estos efectos positivos o adversos de la globalización, de acuerdo a Luna (2000), son la sustitución de los intercambios internos por los externos, la aparición de transacciones que no son bloqueadas por prohibiciones explícitas de normas sociales y el dilema que se crea por el rango de nuevas oportunidades que se incrementan debido a la globalización. Sin embargo, estas oportunidades no están disponibles en igualdad de condiciones para todos los individuos, porque en el mejor de los casos, esta disponibilidad para los individuos permanece constante.

El desplazamiento de los intercambios internos por los externos, puede ser posible de asimilar a tal grado que el intercambio interno no representa la única alternativa para el agente. La ausencia de efectos y el incremento del retrazo, es nada más que el resultado de la carencia de alternativas. La complejidad de las relaciones entre lo local y lo global es enfatizada por contribuciones a la teoría de la globalización, como por ejemplo, Robertson (1995) ha acuñado el término "glocalización" que se asocia a la globalización de los fenómenos pero al mismo tiempo a la localización de relaciones económicas y políticas derivadas de los gobiernos nacionales a los gobiernos locales. Para otros analistas como Ruigrok and van Tulder (1995), la glocalización se refiere al intento de las compañías para llegar a ser aceptado como un "ciudadano local" en un diferente bloque comercial mientras que se transfiere el poco control sobre un área estratégica. La glocalización es antes que todo una estrategia política y de localización de negocios.

La glocalización se asocia con la globalización y se discute si existe complementariedad o tensión. En la era de la globalización, la separación de lo local, nacional, regional y mundial se torna compleja, mientras que los procesos económicos entre estos diferentes niveles son monitoreados por organismos internacionales. Para insertarse en los procesos de globalización, y además contrarrestar la fuerza de su influjo, es necesario que se diseñe e implemente una política local integral de desarrollo que sea inclusiva de las lógicas de los intereses del gobierno, mercado y sociedad locales. Tarapuez y Chamorro (2001) define la política local para el fortalecimiento empresarial como "la organización de los esfuerzos y las acciones de los agentes sociales para el logro de un objetivo amplio y genérico: el desarrollo, competitividad, promoción y fortalecimiento de las MIPYMES", (micro, pequeñas y medianas empresas).

Las transformaciones económicas regionales y locales están determinadas por los cambios en las estructuras económicas mismas, en las políticas macroeconómicas nacionales y en los procesos de globalización. Las transformaciones económicas y políticas también implican transformaciones de los valores sociales, culturales y sobretodo de valores morales. La intensificación de estos aspectos se debe a las nuevas dimensiones tecnológicas, organizativas, administrativas y legales que sirven de interconexión. Así, las empresas glocalizadas tienen como estrategia la replicación de productos en las diferentes regiones y generan una concentración geográfica de la división del trabajo entre las empresas. A estas empresas que buscan replicarse a niveles locales se les denomina empresas multinacionales.

La tesis que fundamenta estos cambios es la interdependencia económica, política, social y cultural entre los Estado-nación. Los procesos de integración económica que comprenden el libre movimiento de bienes y servicios, trabajo y capital, generan procesos de competencia regulatoria (Pollack, 1997) entre los diferentes sistemas nacionales de regulación. En otras palabras, la competencia está pasando por una redefinición. Sin embargo, mientras que los rendimientos al capital están al alza, los rendimientos al trabajo están a la baja. Así, los procesos de globalización modifican la comprensión de la naturaleza del trabajo, y mientras que este se hace más local, el capital se globaliza.

En estos tiempos se vivencia la información en tiempo real. Si bien el trabajo y el capital han sido los factores que reconoce la economía neoclásica por los últimos dos siglos, la

información y el conocimiento están surgiendo como factores importantes de la economía tecno globalizada. Esto da lugar a lo que se conoce como las sociedades del conocimiento (Escorcia, 2000) capaces de agregar valor o no a los intercambios económicos, dejando de manifiesto que el capital ya no es el factor determinante en los procesos económicos. Estos a su vez, de alguna manera están derivando en una nueva división internacional del trabajo que margina del acceso a los beneficios de la revolución tecnológica a muchos trabajadores que pasan a engrosar las filas de un ejército de reserva industrial. El futuro de los trabajadores es muy incierto. Grandes masas de trabajadores sin habilidades se vuelven obsoletos debido a los grandes cambios tecnológicos que obligan a las empresas a requerir trabajadores con más habilidades.

La economía global se caracteriza por una compleja y creciente división internacional del trabajo que crea interdependencias extendidas y cuyas conexiones remotas en las cadenas de producción resultan ser cruciales porque tienen que sostenerse entre actores que ni siquiera se conocen. A menos que se regulen estas cadenas de relaciones creadas por la división internacional del trabajo, los efectos esperados en las economías nacionales y locales pueden ser más desproporcionados que el desorden inicial, debido a que el factor trabajo tiende a localizarse mientras que el capital se globaliza. La gobernabilidad económica debe involucrar la correspondiente gobernabilidad de la división internacional del trabajo.

El Estado no es propiamente hablando, el beneficiario de la gobernabilidad de la nueva división del trabajo, pero es un pivote en el logro de ella debido a que es territorial y la conexión entre los diferentes niveles. Otorga poder a los gobiernos regionales y a las agencias quasi-gubernamentales, participa en los cuerpos de gobierno internacional y puede hacerlos rendir cuentas a las poblaciones nacionales. La autoridad del Estado se mueve hacia arriba hacia las agencias gubernamentales internacionales y hacia abajo, hacia las estructuras de gobierno local, cuya autonomía se encuentra limitada y es relativa, por lo que siempre está en conflicto con los demás niveles de gobierno. Desafortunadamente, el gobierno local no asume su papel como agente del desarrollo en las decisiones relacionadas con la sociedad.

La estructura espacial de las diferentes unidades geográficas está delimitada territorialmente por las fronteras físicas y geográficas que definen los tipos de interrelaciones entre las diferentes entidades geográficas. El Estado tiene atributos que otras agencias no tienen y esto los hace indispensables en el orden institucional requerido para la nueva división internacional del trabajo entre los poderes gobernantes. Hirst, (2000) argumenta que en todos estos arreglos que son balances de las ventajas y limitaciones, el Estado ha ganado más de lo que ha perdido en la capacidad de la gobernabilidad.

La teoría de la ventaja comparativa muestra los beneficios de la división internacional del trabajo. Sólo que ahora, resulta difícil demostrarlo por una teoría del equilibrio que es estática. Mientras que las capacidades están al alza, el trabajo no calificado se encuentra a la baja. Pero también el capital está mejor posicionado debido a su movilidad que el trabajo que se encuentra siempre a la baja. El capital no encuentra fronteras mientras que el trabajo se encuentra delimitado geográficamente. Mientras que el capital tiende más a globalizarse, el trabajo tiende más a ser local. Estos sistemas son ajustados a los procesos

de internacionalización del capital a efecto de hacerlos más atractivos a los inversionistas y productores.

De hecho los organismos transnacionales como la UNCTAD considera que las inversiones privadas son la clave para el progreso de las naciones menos desarrolladas, al considerar que el desarrollo es un tema multifuncional y complejo, en el que el sector privado es el actor principal. Además, precisan que al invertir en naciones pobres, las compañías extranjeras un rol vital para superar la trampa de la riqueza (AFP y DPA, 2001)

Mientras que la integración económica se profundiza globalmente, se reducen las capacidades nacionales para regular y para exigir el pago de impuestos al capital móvil y a las empresas (Scharpf, 1997). En otras palabras, los procesos de integración económica internacional erosionan las funciones de un Estado de Bienestar extendido debido a las dificultades para sostener un gran sector público encargado de administrar un sistema de seguridad. No obstante, el modelo del Estado de Bienestar llevado a escala global o mundial representa un proyecto que alienta el rescate de lo mejor de la sociedad humana, en contra de maximizar los intereses de los grandes grupos corporativos transnacionales.

Estos procesos de globalización de las actividades económicas tienen serias implicaciones para la organización política y económica de los Estado-nación, el mercado, las empresas, las instituciones sociales, etc. Las instituciones sociales, económicas y políticas determinan las decisiones y procesos de los sistemas sociales. De hecho, se puede argumentar que lo que se está globalizando es una relación económico social que privatiza los medios de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Si bien sus impactos desencadenan y se apoyan mutuamente con los avances tecnológicos y científicos propiciados por el acceso a las telecomunicaciones, éstos han sido distintos para los diferentes países. A los cambios científicos y tecnológicos suceden y corresponden los cambios económicos y políticos.

La globalización impone cambios que replantean la ideología y el ejercicio del poder político y económico de las sociedades contemporáneas. En parte, estos cambios conllevan a la aparición del Estado como aparato ideológico de un mercado mediático. Se crean y se ejercitan nuevas formas de poder que debilitan las fuentes de legitimidad de la autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas. Esta nueva conceptualización de las fuentes de poder debilita la noción territorial como uno de los elementos indispensables del Estado.

El caso más conocido es el planteamiento de la “sociedad abierta” que hace Soros (1998) como un modo para describir “los aspectos positivos de la democracia” como el más alto nivel de la libertad que coincide con la justicia social y que está caracterizada por “el dominio de la ley, el respeto a las opiniones minoritarias, la división de poderes y una economía de mercado”. Esta economía del mercado se fundamenta en las actividades de producción y consumo, cuya dirección obviamente producen una respuesta a las necesidades.

Una sociedad global abierta se mantiene siempre dispuesta al cambio y al mejoramiento, aunque no deja de ser un mero mito. No obstante, está naciendo una sociedad civil globalizada que se ha manifestado en movimientos antiglobalizadores con cierto éxito

relativo, como en el caso de la campaña para la prohibición de minas personales y el movimiento Jubileo para la condonación de la deuda externa de los países más pobres.

Por lo tanto, la sociedad capitalista global no es más una mera construcción de carácter ideológico. Esta sociedad capitalista orientada por las estructuras del mercado tiene contradicciones que requieren la intervención política centrada en el Estado para regular las relaciones sociales, las que a su vez demandan de mecanismos de intercambio y mercantilización, generando así procesos simbióticos entre el mercado y el Estado. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

La propuesta de una democratización de la economía de mercado constituye por sí misma un modelo alternativo que implica necesariamente una transformación socialista. El principio organizador de una sociedad global requiere el rechazo al modelo de una sociedad de mercado. Por supuesto que todos estos cambios replantean la relación entre el hombre y la naturaleza, las relaciones de interacción entre los pueblos y Estados-nación dando lugar a la concepción de un nuevo federalismo.

En los dos últimos decenios del siglo pasado (Siglo XX) los procesos de globalización se extendieron y se profundizaron debido a una serie de factores, entre otros: La revolución tecnológica con su impetuoso desarrollo de la telemática y las comunicaciones y la rápida innovación de la base científica y tecnológica. Una economía abierta alienta la innovación con las ideas frescas que proceden de otras partes del mundo. Pero la innovación no ha sido empleada para satisfacer las necesidades inmediatas de todas las personas de este mundo, para aliviar sus niveles crónicos de pobreza, sino más bien para incrementar el crecimiento y la riqueza de quienes más tienen.

Sin embargo, es la interdependencia económica entre todos los Estados-nación el factor distintivo de la globalización, la cual se manifiesta con la intensificación de la internacionalización de las actividades de producción, manufactura y distribución de las organizaciones empresariales, creando un gran mercado mundial. Las estrategias de desarrollo empresarial tienden a orientar la producción hacia los sectores que tienen ventajas competitivas y un mayor valor agregado para insertar eficazmente la economía local y regional en los flujos de los mercados internacionales.

Casi todos los mercados de productos y servicios financieros están interconectados en casi todos los países del mundo y aquéllas organizaciones que se integran estratégicamente a escala transnacional o multinacional y que son capaces de movilizar sus recursos financieros, tecnológicos y de información con mayor rapidez alrededor del mundo, son las que obtienen los beneficios de la globalización. Los beneficios que han obtenido algunas de las naciones del mundo que se han involucrado en los procesos de globalización por sí mismas, se han distribuido en forma equitativa. Las naciones que han logrado mejores beneficios de los procesos de globalización son las que han rechazado los postulados del Consenso de Washington y establecieron sus propios ritmos de crecimiento económico.

Sin embargo otras naciones no lo han logrado, sobretodo aquellas que han tenido la asesoría de las instituciones financieras internacionales. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante,

voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación.

Las relaciones estratégicas entre los diferentes agentes económicos y los mercados son una de las características dominantes de la globalización económica. La posesión de información es vista como un insumo importante de poder. Las empresas transnacionales y multinacionales adquieren poder de información económica en detrimento de los Estados-nación, convirtiéndose en entidades de tomadores de decisiones finales.

Por lo tanto, de las actividades no solamente comerciales y financieras, altamente especulativas, lo que ha dado lugar a la formación de mercado financiero global y facilita la transferencia de inversiones extranjeras en los mercados y servicios nacionales. Los mercados financieros son los procesos más dinámicos de la globalización y se manifiesta en una mayor volatilidad del sistema financiero global y las crisis económicas. Los altos niveles de volatilidad de los sectores económicos especulativos afectan a los otros sectores y socavan los cimientos del sistema económico hegemónico. Es difícil de controlar la volatilidad delos mercados financieros por las naciones pequeñas en desarrollo. En las palabras de Vilas (1997) "... vivimos en medio de una marcada volatilidad, agravada por el carácter de corto plazo que predomina en las corrientes de la inversión financiera (lo que resulta en) una dramática vulnerabilidad de la economía de los juegos financieros de la globalización".

Las inversiones financieras que tienen como característica principal la volatilidad, se incrementan en mayor volumen que las inversiones productivas, lo que hace más vulnerables a las economías. Al parecer nadie controla los mercados globales de capitales en un mercado financiero que es grande, complejo e interdependiente como para ser controlado por algún actor específico. Sucede exactamente al revés, los mercados financieros dictan las normas tanto a empresas como a los Estados nacionales. Sin embargo, las naciones que han alcanzado niveles más altos de desarrollo económico son aquellas que mantienen sus mercados financieros regulados.

La crisis económica capitalista es aprovechada por sus beneficiarios, los empresarios transnacionales para concentrar las decisiones y el poder. In general, la clase trabajadora y otros elementos de la clase baja, los campesinos, los estratos bajos de la clase media, los participantes pobres en el sector informal, etc., han sido forzados a pagar los costos de la crisis económica de los ochenta y el proceso global de reestructuración capitalista que está teniendo lugar desde los setentas.

Los Estados imperialistas desempeñan una importante función en la gestión de las crisis financieras y económicas de los Estados menos desarrollados que tienen problemas de pago de deuda externa, devaluación de su moneda, etc., así como a las empresas transnacionales que confrontan problemas financieros y económicos. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus

economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera. Las monedas nacionales se han devaluado y pegado al patrón del dólar estadounidense, y el crecimiento de las exportaciones, principalmente de las exportaciones no tradicionales, tales como las frutas, las legumbres, as flores y algunos bienes manufacturados, han sido promovidos a expensas de la baja en la producción de alimentos para el consumo doméstico.

Esta crisis del capitalismo global se presenta más en su valor de uso que en su valor de cambio. Las grandes corporaciones trasnacionales que tienen sus matrices en los países desarrollados, son las que obtienen los beneficios de las crisis financieras en los países menos desarrollados mediante la operación de sus filiales. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera. Los flujos especulativos financieros vulneran las políticas macroeconómicas nacionales y acarrea crisis de sectores económicos completos.

Los altos niveles de especulación económica determinan la vulnerabilidad del sistema económico. Basta que una institución nacional tenga ciertas dificultades financieras para arrastrar después de sí a amplios sectores y para rebasar las fronteras, convirtiendo al fenómeno en regional. Pero el final de la crisis económica significa la recuperación de los beneficiarios del capitalismo y una seria disminución del nivel de vida y de beneficios sociales de las clases populares trabajadoras. El futuro de los trabajadores es muy incierto. La crisis del objeto del capitalismo se presenta más en el dominio de su valor de uso que en el dominio del valor de cambio.

No obstante, los Estados nacionales tienen el poder para controlar los problemas que presentan los mercados financieros internacionales mediante políticas prudentes y el uso efectivo de sus propios recursos. Esto lo puede lograr de tal forma que le permitan establecer reglas sobre los tipos de intercambio, y desarrollar las estructuras de gobernabilidad interna de las instituciones con funciones específicas para ejecutar las políticas necesarias para regular los flujos financieros altamente especulativos provenientes del exterior, los cuales vulneran los cimientos de las economías nacionales.

Además, es necesaria la cooperación entre las diferentes autoridades nacionales para controlar las peores formas de especulación financiera. La regulación del sistema financiero internacional es una necesidad urgente para controlar los efectos perniciosos de los flujos financieros especulativos. Así, los altos niveles de especulación de los flujos de capitales globales influencian las estrategias económicas y ataca la estabilidad de todo el sistema económico global. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva.

Bajo un análisis multicausal, Giddens (1990) reconoce como factores de la globalización, el sistema económico capitalista, el sistema interestatal, el complejo militar y los procesos de industrialización. Otros analistas enfatizan que el incremento en la

productividad y las inversiones en tecnología son los principales factores que generan la revolución tecnológica, la cual está creando la economía global y que suplanta a las economías locales. No obstante, Petras (2001c) argumenta lo contrario al concluir que solamente el 0.3%, solo una tercera parte del aumento de la productividad durante el período de 1995 a 1999, puede ser atribuido a la revolución de la información. Así, las tecnologías de la información no son las fuerzas dominantes del nuevo orden económico mundial

Las utilidades en las inversiones internacionales y la tecnología no pueden ser tan grandes como para explicar las desigualdades globales que se están creando. La conclusión de que la primera causa dela extrema desigualdad social y económica, como es la situación en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo. Las economías contemporáneas de Latinoamérica se han convertido en partes integral del nuevo sistema económico global que es dominado no por naciones Estados, sino por grandes corporaciones transnacionales que constituyen los principales actores globales en este sistema.

La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta. De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población latinoamericana mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso.

Para Castells (1996) los factores fundamentales de los procesos de globalización son el desarrollo de las tecnologías de información, los cambios en la productividad del capital y las nuevas condiciones laborales que afectan de manera desigual a la población. La creciente movilidad internacional de los trabajos calificados cambia el conjunto de restricciones bajo las cuales se formulan las políticas nacionales.

En la era de la tecnología, la especialización comercial de las naciones depende significativamente del conocimiento industrial. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. Los constantes cambios tecnológicos a escala global mejoran los niveles de productividad y con ello desplazan a los trabajadores, quienes pasan a formar parte del ejército de desempleados, no solamente en los países avanzados, sino también en los países en desarrollo y los menos desarrollados. El modelo capitalista de acumulación flexible que resulta de los avances tecnológicos, excluye de los beneficios del desarrollo hasta su completa marginalización, a los trabajadores menos competentes en el uso de las nuevas tecnologías.

La superioridad en conocimiento tecnológico de las naciones no sólo se mantiene sino que se acelera con la concurrencia de los cerebros que se fugan de los países menos desarrollados. Bajo el enfoque de la ventaja comparativa de las naciones se concluye que en la medida en que la economía global permanece abierta, las naciones tienden a especializarse en ciertas actividades dentro de la cadena de producción global y a promover competencias en sus empresas e instituciones públicas que favorecen estas actividades. Así,

las naciones menos desarrolladas se convierten en receptores de tecnología y se especializan en productos que requieren niveles inferiores de conocimiento intelectual y tecnológico.

Otros factores importantes en la profundización de los procesos de globalización son: La regulación de los mercados y los diversos organismos económicos multilaterales. El incremento del intercambio comercial de bienes y servicios entre las diferentes naciones y la formación de bloques comerciales: La expansión del poder financiero de las corporaciones multinacionales y transnacionales por todo el mundo, libre de controles y con poderes de decisión no sujeto a nadie.

Estas corporaciones buscan expandir sus inversiones y sus propias exportaciones en el extranjero. La expansión de las corporaciones transnacionales es precedida por la expansión militar y política de los estados imperiales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales. Los acuerdos multilaterales de inversiones entre los diferentes Estados nación con la participación activa de las grandes corporaciones transnacionales. Las empresas transnacionales, organizaciones internacionales y los Estados más avanzados concentran las estructuras de decisión y estrategia en materia de inversiones, desarrollo, ganancias, flujos de capital, etc.

Las grandes corporaciones financieras y de medios de comunicación concentran el poder e imponen sus decisiones. Las organizaciones internacionales tienden a ser dominadas por pequeñas redes de profesionales que modifican las reglas informales y las prácticas. Los gobiernos nacionales se han convertido en meros subcontratistas de las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales. Todas estas organizaciones prevalecen sobre los sindicatos de trabajadores que defienden el proteccionismo. El futuro de los trabajadores es muy incierto.

Las transnacionales y multinacionales buscan las reducciones de las regulaciones en los países que penetran, para poder operar en “manga ancha”, lo que contribuye a aumentar aún más la dependencia de los países pobres. Así los procesos de globalización perpetúan las relaciones de dependencia entre los pueblos menos desarrollados y los de más alto desarrollo capitalista. Los pueblos más desarrollados concentran los beneficios y permanecen enajenados en una abundancia de bienes suntuarios mientras que la inmensa mayoría de naciones solo disponen de los recursos esenciales para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia, y muchos de ellos ni siquiera eso.

Es decir, la globalización está profundizando las relaciones de dependencia y desarrollo entre los pueblos del mundo mediante procesos que son de saqueo, rapiña y devastación de recursos naturales, humanos y financieros. Al respecto, González Casanova (1997) ha dicho que “la actual globalización mantiene y reformula las estructuras de la dependencia de origen colonial y las no menos sólidas del imperialismo de fines del siglo XX, y del capitalismo central y periférico que se estructuró entre 1930 y 1980”.

La herencia colonial marcó las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales de los pueblos colonizados. De lo anterior concluye que el discurso de la globalidad se está

usando para una reconversión de la dependencia. Estos problemas incluyen un pronunciado grado de explotación económica, desigualdad social y económica, injusticia social y política que ha caracterizado a la región desde los tiempos en que los indígenas pobladores de estas tierras fueron subyugados por la fuerza a la dominación colonial europea en el siglo XVI. El cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra.

El incremento de las deudas internacionales y los apuntalamientos políticos de las relaciones intergubernamentales entre los países poderosos, como los casos de Estados Unidos-Japón y Francia-Alemania, son dos importantes factores que aceleraron los cambios. Este tipo de relaciones transgubernamentales que forman verdaderas "redes de gobiernos" tiende a resolver problemas de gobernabilidad global. Sin embargo, estas redes son secretivas, no son tan abiertas a un número mayor de participantes, lo que las hace una especie de redes de grupos elites.

Uno de los principales problemas para el ejercicio de la gobernabilidad es la necesidad de encontrar aliados que asegure la aprobación de las iniciativas por las mayorías. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas son preferidas a aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible. Slaughter (2000) argumenta que la legitimidad de estas redes gubernamentales deriva de su propio desempeño y de su proceso, ya que operan a través de procesos de persuasión más que en las decisiones de autoridades. Estas redes gubernamentales pueden otorgar más poder a los gobiernos democráticos y sus políticos mediante la cooperación entre ellos, en vez de dejar las decisiones al mercado.

Igualmente, la caída estrepitosa del socialismo soviético y de los países de Europa del Este, de los que curiosamente, Gorvachov ha sostenido que su esencia era la competencia en el sentido Hegeliano-Marxista. El sistema socialista no estaba preparado para competir con los procesos de destrucción creativa del capitalismo financiero global que promete la prosperidad para todos. Pero a su vez tiene que criticarse activamente al capitalismo financiero. El proyecto del socialismo estatal fue incapaz de competir con el capital financiero globalizado.

Por lo tanto, el socialismo real entró en un período de decadencia total, en una crisis sin retorno. Frente a los excesos del capitalismo, es necesario encontrar explicaciones y enseñanzas de esta caída a efecto de redefinir las nuevas formas de organización. Si bien hay que aceptar que el socialismo no fracasó del todo porque llevó a cabo importantes contribuciones al desarrollo de los pueblos que lo experimentaron, más, sin embargo, no pudo resistir los ataques ideológicos del capitalismo globalizador. La crisis del objeto del capitalismo cae más en el dominio del valor de uso más que en el valor de cambio.

El incremento de los niveles de hambre, marginación, pobreza, crimen e inseguridad pública, falta de alimentos, de trabajo y de techo, etc., entre otros, han sido los factores disparadores de los cambios acelerados que podemos observar en los fenómenos económicos, sociales, políticos, culturales, etc. Estos efectos evidencian el fracaso del principio en que descansa el fenómeno de la globalización, de que a una mayor apertura de

los mercados, se elevan los niveles de ingreso per cápita y, por consiguiente, la pobreza se reduce.

Existe un consentimiento generalizado basado en estudios empíricos de que a una mayor apertura del comercio del comercio internacional corresponde efectos positivos en el ingreso per cápita de las naciones. Acemoglu y Ventura (2000) estimaron la distribución del ingreso mundial con relación a los términos de los efectos de intercambio y concluyeron que cuando un país acumula más rápido que otros, experimenta un decrecimiento en los términos de los efectos de intercambio. La fuerza estimada de los términos de los efectos de intercambio es aproximadamente del orden correcto de la magnitud que cuenta para las diferencias de los países, en niveles de ingreso y en velocidad de la convergencia condicional. No obstante, las naciones con altos ingresos per cápita no necesariamente son desarrolladas y no todo avance en el desarrollo es sustentable.

Sin embargo, una sexta parte de la población mundial produce 78 por ciento de los bienes y servicios y recibe el 78 por ciento del ingreso mundial. Esto equivale a un promedio de 70 dólares por día. Mientras que tres quintas partes de la población mundial, que vive en los 61 países más pobres, recibe sólo el 6 por ciento del ingreso mundial, que equivale a menos de dos dólares por día, según datos del Banco Mundial (2000) Una tercera parte de la humanidad está mal alimentada y sufre de anemia y más del 20% de los niños no ingieren alimentos con las proteínas y las calorías suficientes. De los 4 500 millones de personas de los países menos desarrollados, más de una tercera parte no tienen acceso al agua potable. Esta distribución tan inequitativa del ingreso mundial es moralmente injustificable. Incluso, si el quintil más pobre de la población mundial tiene más riqueza que hace una generación, la brecha entre este y el quintil más rico se ha incrementado, de tal manera que la habilidad del quintil más pobre para influir la política global, ha disminuido

La pobreza es un fenómeno social que se origina de vivir en sociedad. El fenómeno de la pobreza se manifiesta en forma diferente en aquellas sociedades donde es transitorio a aquellas otras en las que los pobres quedan atrapados bajo fallas de acumulación debido a circunstancias estructurales. La pobreza es considerada como un fenómeno multidimensional y complejo que resulta de desequilibrios estructurales profundos y arraigados en todos los ámbitos de la existencia humana, como son el Estado, la economía, la sociedad, la cultura y el medio ambiente, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1996).

La pobreza tiene su origen en gran parte en instituciones que son disfuncionales, y más específicamente, en el mercado. El significado de pobreza es “la negación de las oportunidades y las opciones más fundamentales del desarrollo humano como son: vivir una vida larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y de los demás” (PNUD, 1997a). Los conceptos de desarrollo humano sustentable y buen gobierno son conceptos inextricablemente inseparables.

Se considera que este desarrollo es un proceso que enriquece la libertad de los individuos en la búsqueda de sus valores propios. Lebret (1942) define el desarrollo como “las series de transiciones, para una población dada y para todos los grupos de población

comprendidos, desde un patrón menos humano a otro más humano de la existencia, al ritmo más rápido posible, al más bajo costo posible, mientras se toman en cuenta todos los lazos de solidaridad que existen (deben de existir) entre estas poblaciones y los grupos poblacionales."

Para Tarapuez Chamorro (2001) el desarrollo se refiere a "cambios inducidos en forma consciente e intencional, a través de políticas que en forma deliberada son impulsadas por diferentes agentes del desarrollo, de lo cual se infiere que el desarrollo es un proceso colectivo y dinámico que no se realiza en forma aislada...". Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales. En el centro de las preocupaciones por el desarrollo humano está la naturaleza del sistema que entrega resultados económicos, sociales y del medio ambiente (Bebbington, 2000), este último en degradación constante.

Más de la cuarta parte de la población mundial vive en pobreza extrema, hecho que está siendo confirmado por los burócratas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial del Comercio. 1 300 millones de los 6 mil millones de habitantes viven en la pobreza extrema, con menos de dos dólares diarios. Los gobiernos han condenado los males sociales, incluyendo la pobreza, debido a la falta de recursos financieros para implementar programas de desarrollo, pero esta condena ha cambiado hacia la economía global que favorece los países industrializados.

El imperativo de los países industrializados para un mayor crecimiento económico mediante la promoción de las actividades industriales, debilita la sustentabilidad del desarrollo a largo plazo. La modernización puede lograr la sustentabilidad social si se acerca a los fundamentos culturales de la sociedad. El crecimiento económico siempre se ha producido mediante la promoción de los gobiernos. No obstante, siguiendo a Grubb et al. (1993) el cuestionamiento permanece, si se supone que el punto final del desarrollo sea radicalmente diferente al actual patrón de uso intensivo de recursos de los países industrializados, cómo es que se supone que estos países deben desarrollar este nuevo Estado?. Las demandas que los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales formulan en forma incluyente al Estado, sobrecargan sus estructuras y procesos y lo convierten en un Estado ineficiente.

De 1990 a 1998, el número absoluto de personas viviendo con menos de dos dólares diarios se incrementó de 2.7 miles de millones a 2.8 miles de millones. Según datos del Banco Mundial (2000), el número de personas en extrema pobreza que viven con un ingreso menor a un dólar por día era de mil 200 millones al finalizar 1998. Desde 1995, de acuerdo a informes de las Naciones Unidas, el número de personas que viven en pobreza absoluta ha crecido de mil millones a mil doscientos millones, mientras que la población ha crecido en 400 millones en el mismo lapso de tiempo. Queda claro que los procesos de globalización profundizan las diferencias de ingresos y riqueza y no podrá sacar de la miseria a millones de pobres en el mundo.

En otras palabras, la globalización del capitalismo también globaliza la miseria, aunque tenga como pretensión la reducción del nivel y severidad de la pobreza tomando ventaja de este fenómeno. Queda claro que no es tanto la cantidad de recursos la que determina el nivel de pobreza en un país sino que usos se hacen de los recursos. La pobreza presenta varias dimensiones, desde los que siempre tienen hambre, hasta la carencia de oportunidades para el desarrollo y la falta de acceso a obras de infraestructura básica (alumbrado, agua potable, etc.), pasando por aspectos psicológicos como la impotencia, humillación, dependencia, etc. Se estima que 40 millones de personas mueren de hambre cada año.

La pobreza no se sufre voluntariamente sino que a los individuos se les limita en la obtención de mejores niveles de vida cuando el sistema les niega sus derechos y libertades, tal como es la situación en muchos países. Estas medidas han afectado adversamente el ingreso y los estándares de vida no solo de las clases más bajas sino también de importantes sectores de las clases medias. El alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma. En estos tiempos, ser pobre es conocer el desprecio de otros y el propio desprecio internalizado.

Un mayor problema es dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados (De Swaan Abram, 1997). Este desdén propio y falta de poder ampliamente enfatizado por la comunicación global que niega estos valores indígenas tradicionales que una vez fueron la base del uso sustentable de los recursos, que consideran ciertos lugares especiales sagrados y para la comunidad.

Probablemente ningún otro sector de la población de Latinoamérica más desigualdades e injusticias que las gentes indígenas de la región. Durante los últimos cinco siglos, las gentes indígenas de Latinoamérica han sufrido casi todas las indignidades y abusos imaginables. Desde la conquista europea de la región, la sociedad latinoamericana se ha basado en la maximización de la explotación laboral entre las líneas étnicas y el trajo diferencial de los grupos étnicos tanto por el capital como el Estado han creado una compleja estructura de ethnoclases. Relaciones paternalistas, autoritarias y clientelistas de subordinación entre las elites locales y las masas a los niveles nacionales y subnacionales han ido de la mano con la subordinación de las sociedades latinoamericanas a las elites externas coloniales y neocoloniales interesadas en la explotación de los recursos naturales, trabajo y capital de estas sociedades.

Las gentes indígenas tienen generalmente ocupado el más bajo nivel de esta estructura de extrema desigualdad económica y social y hasta muy recientemente han estado excluidos o marginados del proceso de la política (Harris, 1997) Los indígenas están conscientes de su papel y han empezado a organizarse, a reconstruir su identidad y a plantear reivindicaciones culturales. Sin embargo, a pesar de las condiciones económicas, sociales, etc., hay posición y resistencia al mantenimiento de la estructura de ethnoclases existente de un creciente número de organizaciones, incluyendo los nuevos movimientos sociales organizados.

La libertad es la ausencia de restricciones y coerciones humanas que limitan el ejercicio de su elección racional así como también la dotación de medios y poderes para realizar estas decisiones. Tanto las elecciones de los agentes como su posible comportamiento son inciertos. La libertad es un elemento central del desarrollo que se revela por visiones internas, las cuales, según Amartya Sen, desde el punto de vista de los desvalidos de la sociedad nos ayuda a comprender la verdadera índole del desarrollo. El ejercicio de la libertad individual se fundamenta en una correcta toma de decisiones, la cual tiene como soporte las posibilidades de acceso a las fuentes del conocimiento. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países.

El concepto de desarrollo es un concepto más amplio que el de crecimiento, aunque no es del todo aceptable un concepto puramente economicista sino involucra el desarrollo humano y social, así como una adecuada acción política. Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política. El desarrollo humano y social son el resultado de variables determinadas por las instituciones que condicionan las interacciones sociales. Para Tarapuez Chamorro (2001), el desarrollo se refiere a "cambios inducidos en forma consciente e intencional, a través de políticas que en forma deliberada son impulsadas por diferentes agentes del desarrollo", así, el desarrollo es un proceso colectivo y dinámico que no se realiza en forma aislada y en el cual también influyen los cambios generados desde y hacia el interior de la región".

Además, el concepto de desarrollo es un concepto ambiguo que se usa en forma descriptiva o normativa y puede hacer referencia a los medios o fines del cambio social, como visión de mejores condiciones de vida o como proceso para lograr la modernidad de las sociedades, la cual implica su desarrollo democrático en consideración que la democracia es verdaderamente el requisito del desarrollo. El concepto tradicional de la democracia ha sido abandonado para elaborar nuevamente un concepto de democracia que apoya y mantiene el sistema capitalista.

La modernidad establece al estado-nación como una forma de gobernabilidad para asegurar espacio a la vocación histórica de la nación. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible.

El espacio nacional se encuentra delimitado territorialmente por fronteras geográficas y físicas que definen la ocurrencias de fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales. Estas características también delimitan los espacios soberanos en función de las unidades de los espacios nacionales. No obstante, Hungtington (1993) plantea que la modernización provocaba inestabilidad, por lo que llegó a sostener que antes de tener gobiernos democráticos era necesario gobiernos que centralizaran el poder para llevar a cabo los procesos de modernización.

Los procesos de modernización generan aprendizajes rápidos y traen consigo un incremento en las demandas de bienes y servicios e inflación de las expectativas para satisfacer las necesidades y deseos, lo cual no siempre desarrolla la infraestructura y capacidad para lograrlo. Es en el espacio del Estado-nación donde ocurre la geopolítica y

al avanzar hacia niveles espaciales internacionales y global adquiere relevancia la geoeconomía. Es a partir de la existencia del ámbito espacial nacional que tienen ocurrencia los procesos de globalización.

Las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales promueven el espacio del mercado por sobre el espacio nacional, al cual cubren y supeditan. De esta forma, las corporaciones transnacionales promueven la extensión de la geopolítica y la geoeconomía del espacio al espacio internacional y global

Por lo tanto se puede decir que el concepto de desarrollo es multidimensional porque implica todos los componentes del bienestar humano, tales como los económicos, sociales, políticos, culturales, espirituales y del medio ambiente. Goulet (2000) enumera como dimensiones del desarrollo las siguientes: el componente económico, el ingrediente social, la dimensión política, elemento cultural, y el paradigma de vida completa.

No obstante, Amrtya Sen (1999) concluye que la hipótesis de que no existe una clara relación entre el crecimiento económico y la democracia, en ninguna dirección se mantiene extremadamente plausible. El desarrollo integral implica una estrecha relación entre el acceso a los recursos económicos necesarios para la adquisición de capacidades humanas que permitan la realización de las personas, de acuerdo con los trabajos de Amartya Sen.

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas reporta que las instituciones de gobernabilidad, responsables y que rinden cuentas constituyen el eslabón perdido entre los esfuerzos contra la pobreza y la reducción de la pobreza, incluyendo cuando los países buscan implementar políticas nacionales y dirigen sus intervenciones en favor de los pobres, la falta de gobernabilidad nulifica su impacto. Precisamente, las instituciones de gobernabilidad surgen como resultado de las disparidades en el potencial para la creación de valor. Deneulin (1999) argumenta que mediante la corrección de la asignación de recursos en los mercados, o ya sea mediante la introducción de un impuesto solidaria internacional, una organización internacional puede eliminar las trampas de la pobreza.

Es moralmente aceptable que los pobres del mundo tengan el derecho a buscar mejores condiciones de calidad de vida, que en las condiciones del sistema globalizador de la economía y la política actuales son muy difíciles de lograr ya que se sacrifican en nombre del progreso futuro. De hecho, el logro de la calidad de vida en el actual modelo de desarrollo orientado por la globalización económica, se supedita al crecimiento económico. Lograr una sociedad satisfecha y sin asimetrías pronunciadas, así como mejorar los niveles de calidad de vida de la sociedad, es factible con la instrumentación de mecanismos de gobernabilidad que promuevan una asignación equitativa de los recursos y bienes sociales.

El pobre necesita volver a ganar sus capacidades productivas. De acuerdo con Amartya Sen, las capacidades son “un nivel de éxito funcional, intermedio entre recursos y bienestar” (Gómez y Loyola, 1999) La estrategia contra los efectos perniciosos de la globalización económica es la movilización y reactivación de las capacidades y competencias productivas de los pobres, con el objetivo de que eleven sus niveles de mejoramiento de calidad de vida sacrificada en nombre de un progreso incierto. El pobre en las sociedades pobres con una economía estancada o decreciente, constituyen un problema

de proporciones no manejables, pero no que se imponga por sí mismo con mucha urgencia para la comunidad de las naciones, excepto como una tragedia humana que ruega por una solución de humanitarismo.

Sin embargo, mientras que en la economía y los mercados la tendencia es hacia la globalización, las demandas sociales y políticas presentan una tendencia hacia su fractura, tal como puede apreciarse con la fragmentación y el debilitamiento del rol de los Estado-nación. La fragmentación del Estado en regiones y localidades es una fuerza encontrada con los procesos de globalización e interdependencia que genera tensiones y dan por resultado un fenómeno que Torrijos (2001) ha denominado como dispersión internacional.

Si los procesos económicos y sociales tienen como tendencia la globalización, entonces el Estado-nación pasan a ser entidades de decisión únicamente. Es decir, al intensificarse los procesos de globalización, entonces se disminuyen las capacidades y competencias de los Estados-nación. De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales. Así, se pone en entredicho el precio a pagar por la cohesión de los países que resulta en la fragmentación de las sociedades que los forman. La tendencia del mundo, más que a unificarse tienden a fragmentarse.

Esta fragmentación de los valores culturales, étnicos, religiosos, etc., siempre termina en profundos conflictos sociales. Así, se pone en entredicho el precio a pagar por la cohesión de los países que resulta en la fragmentación de las sociedades que los forman. Esto hace suponer que difícilmente se conseguirá un gobierno mundial genuino con una política también mundial, echando por tierra la tesis del Estado Homogéneo Universal insinuada por Fukuyama (1990) como una asociación política supranacional, como la característica del mundo posthistórico en el que no existen conflictos, antagonismos ni crisis. Sin embargo, la realidad muestra que la tendencia en los conflictos apunta a efectuarse más entre grupos con ciertos intereses específicos dentro del ambiente global más que entre los Estados-nación mismos.

No obstante, se puede argumentar que la estrategia para el establecimiento de un gobierno mundial consiste en fraccionar todas las fuerzas que son hostiles al proyecto. Esto sería resultado de la aceptación del modo de vida occidental, aunque parece que Fukuyama ignoró que precisamente las crisis es una característica del mundo accidental. No obstante, el mundo más que a unificarse tiende a fragmentarse.

Esto se debe en parte a la gran alianza de los grandes centros de poder que controlan la economía y la política global, como el Grupo de los Siete (G-7), el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, meros instrumentos de los países ricos para profundizar los procesos de globalización. Los gobiernos de los Estados nacionales se someten a la dictadura en materia de política económica, cuyas consignas y lineamientos se diseñan por estos grandes centros de poder mundial. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia. La ideo de un Estado Homogéneo Universal de deja de ser una mera utopía en el supuesto de

que todos los seres humanos tengan las mismas expectativas y sin que existan heterogeneidad ni antagonismos de intereses.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron constituidos en 1944 en Bretton Woods como federaciones para servir a los intereses comunes de sus miembros los Estados nacionales y no a los ciudadanos globalizados, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. No obstante, junto con su nuevo aliado, la Organización Mundial del Comercio (OMC), estas instituciones han modificado sus propósitos originales para ponerse al servicio, no de los Estados nacionales miembros sino de una abstracción ideológica, "la economía global".

La economía global hace referencia a una economía sin Estados nacionales en la que la autonomía del capital se exagera bajo el influjo de una ideología de libre mercado. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. La OMC es ejemplo de las instituciones internacionales que tiene cierta autoridad y normas precisas para exigir su cumplimiento a los Estados Nación afiliados. Su posición centrada en el comercio es fuerte en relación con otros regímenes internacionales.

La orientación de la OMC a la liberalización del comercio internacional, considerada como algo beneficioso para los pueblos del mundo, la hace presentarse con una dosis mayor de legitimidad que otras instituciones internacionales. Desde una perspectiva democrática, Keohane and Nye (2000) sostienen que su diseño como una institución internacional es casi ideal, su burocracia internacional es débil y la organización responde a los gobiernos electos. Hay la percepción de que la OMC, más que ser una burocracia cerrada, está abierta a la participación.

Las organizaciones internacionales actúan bajo un modelo de club de régimen comercial organizaciones multilaterales de acuerdo a Keohane and Nye, 2000), el cual se está debilitando por la acción de varias fuerzas, entre las que destacan la creciente influencia que tienen las normas democráticas en más países y que intentan implementar a niveles internacionales. El modelo del club que adoptaron las organizaciones internacionales está siendo atacado, aunque si bien no es descartado, sin embargo, requiere de ciertas modificaciones.

Estas organizaciones deciden por consenso y no por mayoría de los votos, con autonomía limitada y responden a los intereses de los Estados-nación con más influencia. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas son preferidas a aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible. La autonomía es una condición de los pueblos para el ejercicio de su soberanía e independencia política. La autonomía se fundamenta en el ejercicio que hace la ciudadanía para evaluar y juzgar las acciones de sus gobiernos y sus responsabilidades para una correcta toma de decisiones en el ámbito de sus competencias ante la comunidad. . De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales. Estas competencias de los

diferentes niveles de gobierno del Estado nación deben ser delimitadas entre las que son exclusivas y las que son concurrentes.

Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Las prácticas de los clubes entran en conflicto con las demandas de una mayor transparencia y rendición de cuentas de las sociedades democráticas. Resulta obvio que en el futuro las organizaciones internacionales necesitan un mayor balance entre la transparencia y participación y un equilibrio entre el liderazgo público y las comunidades.

Los críticos enfatizan la participación directa y la rendición de cuentas, la falta de transparencia en los procesos, existencia de barreras para la participación de grupos interesados, así como ausencia de políticos con conexiones en las organizaciones y en sus respectivos grupos. Lo que se ha perdido es la actividad legítima de los políticos con amplias bases en una sociedad democrática, que hablen directamente a los electores y que tengan responsabilidad para rendir cuentas de sus acciones. Las sanciones son el corolario usual de la responsabilidad

La rendición de cuentas es la fuente de la credibilidad de los pronunciamientos de las políticas. La transparencia es importante para la rendición de cuentas, aunque no sea total o instantánea. El problema reside en cómo lograr la transparencia y la rendición de cuentas al mismo tiempo que se logre una mayor cooperación e integración internacional. La creciente integración internacional induce una mayor competencia de productos en el mercado, lo que implica que llegue a ser más costoso mantener los sistemas de bienestar financiados con fondos públicos. Por lo tanto, la rendición de cuentas es un fenómeno multidimensional que considera tanto la rendición de cuentas electoral como la no electoral. Una de las dimensiones de la rendición de cuentas que reporta a los líderes electos a través de la cadena de delegación.

La ausencia de transparencia en las sesiones de negociación de los delegados, quienes a pesar de ser instruidos y responden a oficiales electos en las democracias, actúan en lo privado en clubes que se forman alrededor de los temas, intereses e instituciones. Este tipo de organizaciones internacionales carece de los elementos fundamentales que hacen posible la democracia y con ello la rendición de cuentas. Por lo tanto, la falta de transparencia y las restricciones en la participación afectan adversamente la legitimidad pública de las instituciones internacionales.

Las instituciones fallan porque no representan los arreglos institucionales y las negociaciones establecidas a largo plazo entre los diferentes actores económicos y porque no se ajustan a las condiciones de desarrollo local integral adaptándose el modelo global propuesto por los organismos multilaterales. El diseño e implantación de planes y programas de desarrollo económico local debe tomar en consideración la pluralidad e inclusión de los intereses de diferentes agentes económicos y actores políticos para lograr los compromisos y coordinar eficazmente los esfuerzos.

La propuesta de aprendizaje institucional (Kaiser, 1997) sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más

próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

No obstante, el desarrollo local debe pivotar sobre un compromiso de la comunidad bajo la concepción de un espacio de interacciones solidarias y activas que sustituye al concepto tradicional de espacio físico delimitado territorialmente. Para Tarapuez Chamorro (2001), el desarrollo económico local es un proceso que reactiva la economía y dinamiza la sociedad local, para aprovechar eficientemente los recursos endógenos existentes a efecto de estimular el crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida. Para que este proceso de desarrollo económico local sea eficaz requiere de una estructura institucional capaz de diseñar e implantar programas de formación de capital humano y social, para mejorar los niveles de productividad.

Sin transparencia los medios de rendición de cuentas son carentes de legitimidad aunque la transparencia no implica gobernabilidad a través de las elecciones. La mejora en la transparencia y en la rendición de cuentas así como la eliminación de las restricciones políticas impuestas al desarrollo, dará más libertad a los actores económicos para lograr resultados económicos. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes.

Uno de los directivos de la OMC ha dicho que lo que se está escribiendo es la constitución de una economía global y no las reglas de interacción entre economías nacionales separadas. Por otro lado, Petras (2001a) señala con claridad que los únicos países en posición de determinar las reglas son aquellos que controlan las organizaciones de comercio mundiales y las instituciones financieras internacionales. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación. Las relaciones de comercio y de mercados se delimitan en acuerdos entre los Estados, los cuales operan dentro de sus fronteras.

Las instituciones financieras internacionales son instituciones que desempeñan funciones y actividades que les han encomendado los Estados imperiales de cuyo poder deriva. Aquellos que están en la cima establecen las reglas para aquellos otros que están debajo", y concluye: "La aplicación desigual de las reglas comerciales es resultado de la naturaleza imperialista de la estructura y de la economía mundial". En los últimos dos siglos, la economía mundial se ha vuelto más desigual, ampliando la brecha de los ingresos entre las naciones y dentro de las mismas naciones.

Sin embargo, la globalización ha incrementado la desigualdad entre las naciones pero sus efectos en la desigualdad dentro de las naciones no es muy claro. Lo que es claro es que los procesos de globalización enfrentan una tensión por la desigualdad de las diferentes naciones de acceso a los mercados internacionales que no pueden resolver fácilmente a pesar de que ha mitigado la desigualdad entre algunas naciones. Un análisis crítico de los

efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. Las que ganaron más de los procesos de globalización son aquellas que modificaron sus políticas para insertarse, que aquellas que no lo hicieron, de acuerdo a Lindert y Williamson, (2001). Los efectos de la globalización en la desigualdad dentro de las naciones, ha resultado en las dos formas, positiva y negativa.

La revolución tecnológica de la información y la telemática, transforma las formas de acceso, distribución y consumo de la información y comunicación, generando una nueva economía, La revolución tecnológica está transformando los procesos de producción que involucran nuevos modos de producción industrial y comercial y están modificando profundamente los conceptos del valor, lo que repercute así mismo en una desvalorización del trabajo. La revolución tecnológica de la información modifica los mercados laborales y convierte a la educación en un jugoso mercado. Lo que se está presenciado es un cambio radical del capitalismo industrial a una concepción postindustrial de las relaciones económicas. Tanto las relaciones inter económicas, como las inter estatales y las inter regionales son cuestiones inherentes a los procesos de globalización del capital.

La nueva sociedad postindustrial, sociedad de la información, sociedades del conocimiento o también llamada "sociedad digital", surgida de la sociedad industrial está terciarizando la economía en detrimento de las manufacturas y, además, están lanzando un cuarto sector que está incrementando el valor del conocimiento y la información o las industrias de high-tec que reemplazan a los productos materiales. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. La sociedad de la información intensifica el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en todos los ámbitos de la vida. La afirmación de que las tecnologías de la información revolucionan la economía al crear una economía global en la cual las economías nacionales desaparecen, es dudosa, de acuerdo al análisis de Petras (2001,d) para quien la tecnología de la información no llega a ser todavía la fuerza trascendente que define el nuevo orden mundial, ni siquiera de los grandes estados imperialistas

En términos de productividad, intensifica la innovación tecnológica, la flexibilidad de los sistemas de producción y alienta las economías de escala. Las grandes empresas transnacionales son los vehículos más eficientes de generación de innovación tecnológica y de su rápida transferencia en el mercado. El mismo sector económico no solamente representa un nuevo y único agrupamiento de actividades sino también una nueva forma de actividades. Utilizar los instrumentos que proporciona el creciente desarrollo tecnológico para el desarrollo de la sociedad de la información sobre una plataforma cultural, puede apoyar las relaciones de acercamiento entre los asuntos globales y los locales.

En sí, la globalización está cambiando los sistemas productivos que fueron la base de la sociedad industrial. No obstante, la sociedad de la información ha estado sin ninguna proporción apagando las esperanzas en su habilidad para mejorar las condiciones de las personas en este planeta, sino que refuerza el sistema tal como está. De acuerdo con Fernández Colón (2001), existen tensiones estructurales que presagian el desplome de la sociedad de la información, tales como la concentración del capital en las corporaciones, extinción de pequeña y mediana empresa, desempleo por la robotización e informatización

de la producción, competencia por bajas salariales para atraer inversionistas, desmantelamiento de los sistemas de seguridad social, entre muchos otros más.

Lo importante será distribuir las tecnologías de las comunicaciones y la información y la experiencia globalmente, ya que pueden ser herramientas importantes para el cambio. En vez de que la tecnología se convierta en un altar al que tengamos que rezar, debe ser una caja de herramientas que a emplear para el logro de determinados fines.

Por tanto, la formación de capital intelectual (capital humano, relacional y estructural) adquiere importancia. Una investigación de Ballester, Livnat y Sinha (1999) en empresas estadounidenses que están en transición de una economía industrial a una de servicios, basada en los conocimientos, están pasando por un creciente énfasis en activos no físicos, como el capital humano, por sobre los físicos. El conocimiento implícito en el capital humano es visto como el factor competitivo clave de las organizaciones que tienen como base el desarrollo tecnológico y a su vez, como la palanca del desarrollo económico de los Estados-nación. El capital humano representa el potencial económico del conjunto de capacidades y competencias que poseen las personas.

En el futuro aparecerán nuevos servicios que actualmente no son rentables, generando lo que se denomina como las economías de proximidad. La investigación encuentra que en promedio el 16% de los costos laborales son valorados por el mercado como inversiones en capital humano. El mercado condiciona los incentivos para las inversiones en capital humano y también el mercado discrimina en función de las características del capital humano. La proporción del activo capital humano, al valor del mercado se encuentra positivamente relacionada a la incertidumbre que opera al promedio del salario pagado a los empleados y a la proporción de los gastos laborales a las ventas, pero inversamente relacionado con el tamaño de la empresa. Para lograr la equidad en la dotación de capital humano es necesario la instrumentación de mecanismos de intervención política para igualar las oportunidades de acceso.

La economía global tiene la tendencia a incrementar los niveles de productividad con base en la innovación científica y tecnológica, el abaratamiento y la flexibilidad de la mano de obra que tiene que adaptarse a las condiciones de la competitividad internacional. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales.

Las economías menos desarrolladas están siendo integradas en la economía capitalista global como mercados cautivos y la fuente de recursos naturales y humanos baratos para las transnacionales que tienen su base en Norteamérica, las cuales se encuentran retadas por las corporaciones transnacionales que tienen su base en Europa y Asia. La flexibilidad de las estructuras organizacionales es fundamental para lograr la competitividad entre equipos de trabajo que desempeñan funciones múltiples y entre divisiones autónomas. Quienes no se adaptan a los cambios tecnológicos son desplazados del mercado global.

Los países menos desarrollados no solamente son pobres económicamente sino también lo son intelectualmente por la fuga de sus mejores cerebros que buscan mejores condiciones de desarrollo. Si bien la ubicuidad de la información y la globalización de los flujos económicos y financieros, son dos fuerzas poderosas del cambio vertiginoso al que estamos sujetos en la actualidad, como fuerzas, constituyen tanto amenazas como oportunidades. Los cambios tecnológicos representan posibilidades para delimitar los alcances de la dependencia de materias primas energéticas en el futuro de los Estado-nación Los perdedores son quienes en el pasado han controlado la información y serán quienes en el futuro queden excluidos de estos avances. En sentido inverso, mientras menos poder y autoridad se posea, más información se requiere.

Así, la globalización de los fenómenos económicos está incrementando el ritmo del cambio y creando nuevos dilemas a las economías de los mercados. La globalización profundiza las diferencias en la apropiación, acumulación y distribución del capital, el acceso a los conocimientos y el desarrollo de jerarquías humanas. Teóricamente el proceso de apertura de los mercados ofrece posibilidades ilimitadas hasta llegar a operar en una economía de tipo "espacial". Sin embargo, las ventajas comparativas y competitivas son para los que siguen acumulando capital o siguen teniendo y no para la "población".

La globalización económica es un fenómeno que ha resultado del avance de las tecnologías de la información y el conocimiento (TICs) al igual que las tecnologías de las telecomunicaciones, mediante la integración de las actividades económicas que se manifiestan principalmente en el aumento acelerado de la movilidad del capital. Este incremento de la movilidad internacional del capital, junto con el incremento de alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones es una de las características de la globalización. Sin embargo, esta revolución de la información no es, como se estimaba anteriormente, la fuerza dominante del nuevo orden económico mundial.

El crecimiento de las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales se efectúa a través de estrategias de fusión y adquisición de empresas extranjeras, formando estructuras corporativas que se conocen como corporaciones fusionadas. La globalización se caracteriza por una declinación de los costos de transacción en el intercambio comercial y económico entre las diferentes naciones. Las nuevas tecnologías constituyen un medio de bajo costo, competitivo, rápido y de mejor calidad para comunicarse, trabajar de diversos modos y de participación ya sea en los negocios o en la vida política y los gobiernos.

Mediante la expansión del conocimiento disponible en los mercados, así como la reducción de los costos de transacción del mercado las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento permiten una administración más efectiva de los riesgos pero no han logrado reducir la volatilidad de los mercados financieros ni tampoco han podido eliminar las conductas impredecibles de los mercados. ". Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno.

Es difícil de controlar la volatilidad delos mercados financieros por las naciones pequeñas en desarrollo. Para Giddens (1999:36) los riesgos son "la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de

dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza." Tan pronto como existan algunos costos de oportunidad para experimentar o aprender con una nueva estrategia, cualquier aprendiz racional elegirá no hacerlo.

Las nuevas tecnologías impactan incrementalmente a la sociedad de la información. Las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento pueden ayudar a manejar las crisis económicas y financieras, o bien pueden empeorarlas, depende de las formas en que se utilicen. Las nuevas tecnologías son herramientas de coordinación con costos muy bajos, facilidad para elección de objetivos y con rapidez para las actividades económicas y democráticas de la sociedad, lo que obliga a los gobiernos a un manejo simbólico de la información. Pueden aumentar la participación pública y la transparencia en procesos complejos de formulación de las políticas públicas. El Estado formula las políticas públicas a través de sus instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales, mientras que los ciudadanos se reúnen en foros para discutir y establecer demandas y para validar las acciones del sistema político.

Los procesos de democracia directa, como en el caso del plebiscito, pueden profundizarse y desplazar en parte a la democracia representativa, mediante formas de participación más transparentes. En las democracias representativas, la participación se canaliza y en muchas formas se limita, pero algunas oportunidades se presentan para expresar las opiniones y puntos de vista. La democracia en directo es la expresión individualizada de una política que se transforma en procesos de despolitización para centrarse en la máxima expresión de las elecciones personales. La democracia directa es más un impulso que un conjunto de instituciones actuales. La democracia directa o unitaria, asume que las personas tienen los mismos intereses, pero no saben individualmente que es lo mejor (Mansbridge, 1983)

No obstante, sus efectos principales se dejan sentir en la realización de una democracia representativa y en una declinación en las capacidades regulatorias al nivel doméstico del Estado-nación, sobre los sectores clave de la economía mediante la estrechez de la política económica. La concentración de los medios electrónicos para la difusión de la información conduce a oligopolios que mediante economías de escala pueden manipular el contenido informativo y reducir la pluralidad ideológica. La relación de los medios y la política constituye un signo de cambio radical de la primacía entre la realidad y las ideas, para llegar a representar en el Estado moderno una realidad simbólica.

La finalidad de este Estado moderno es la procuración de mejores condiciones de vida de los ciudadanos y garantizar la paz. Para que la denominada democracia electrónica sea funcional tienen que promocionar el acceso a las mayorías ciudadanas al uso de la nueva tecnología y mejorar los procesos de comunicación, transmisión, difusión y análisis de información, de debate en asuntos de interés publico y de participación ciudadana en los procesos de formulación de las políticas públicas. La ciudadanía se reúne en foros para discutir y formular las demandas y para validar las actuaciones del sistema político, mientras que el Estado formula las políticas públicas en las diversas instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales.

Los efectos en los procesos de formulación y ejecución de las políticas públicas son varios: aumentan la flexibilidad, descentralización y calidad democrática de los procesos de decisión. Esto les permitiría promover el crecimiento económico y el desarrollo social de las localidades, aumentar la participación ciudadana y democratizar los procesos políticos y sociales.

Esta calidad democrática puede tener una relación con la voluntad política y la estructura de las instituciones y en menor medida con el uso de la tecnología. La mejora en los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas y en la calidad democrática encuentra serios obstáculos humanos y tecnológicos. Aunque los procesos de descentralización pueden ser altamente cuestionados por el carácter estratégico que siempre han tenido la formulación de las políticas públicas.

López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una "propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y social lo permiten y, presionan en su favor." Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica. Un mayor acceso a la información puede complicar los procesos, porque si bien se incrementa la informalidad en los intercambios y permiten una mayor transparencia en los análisis y debates, sin embargo, complican la toma de decisiones.

En este sentido, la economía modela y disciplina a la democracia en forma realista. Así, la democracia representativa se ha convertido en un simple mecanismo para legitimar las decisiones que de rendición de cuentas y responsabilidad de los gobernantes a la ciudadanía. Una ciudadanía revitalizada sustituye a una democracia pasiva centrada en un continuo y creciente consumismo alimentado por el sistema capitalista con una tendencia latente de autoritarismo. Por otro lado, el desarrollo de las tecnologías y su vinculación con la globalización si bien favorecen el intercambio de conocimientos, hasta ahora no muestran una mejora en las condiciones de vida en la mayor parte de los habitantes de este planeta.

La democracia representativa tiene poco o nulo impacto sobre en la pobreza si no está apoyada por mecanismos que promuevan el acceso tecnológico, faciliten la participación y otorguen poder mediante intercambios de conocimientos a través de mecanismos transparentes. Un mayor problema es dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados (De Swaan Abram, 1997). El alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma.

Los gobiernos de los Estado-nación están perdiendo sus facultades soberanas y decisorias sobre el control efectivo de las fronteras económicas, lo cual crea a su vez, condiciones de competencia regulatoria del capital móvil transnacional y de las empresas.

La competencia es promovida por el mismo sistema imperial y los Estados imperiales rivales como un mecanismo de motivación que empuja a los seres humanos al progreso.

Aunque esta competencia regulatoria al nivel nacional puede o no estar manifiesta, sin embargo, como resultado de la interacción de estas fuerzas, la competencia se ha intensificado, se ha incrementado la rendición de cuentas y la responsabilidad administrativa y los mercados han alcanzado los niveles de virtualidad que las corporaciones necesitan para operar globalmente. Tanto las organizaciones como las empresas virtuales generan redes de interacciones para realizar diferentes procesos entre los diferentes actores y agentes económicos y políticos.

La rendición de cuentas de las instituciones y agencias internacionales es difícil de conseguir, más para los Estados nacionales pobres que para los poderosos. Los actores privados que forman el mercado, más que los gobiernos de los Estado-nación, son los que tienen una acentuada participación en los procesos de toma de decisiones en las relaciones económicas globales, las cuales implican las interrelaciones estatales, regionales e intereconómicas.. Los procesos de toma de decisiones en materia de políticas públicas que estaban confinados al ámbito nacional público de los Estados nacionales, ahora se están transfiriendo al ámbito internacional privado Los gobiernos son forzados por el mercado para adoptar medidas de política económica que resultan ser impopulares pero indispensables para el desarrollo del mismo mercado.

La determinación de los actores, ya sea internos (elites político-económicas subordinadas al capital transnacional, por ejemplo) como externos (los países hegemónicos, grandes corporaciones transnacionales o multinacionales) que promueven los procesos de globalización y de los que se benefician, nos sirve para posibilitar su reversibilidad, a pesar de que Fukuyama (1999a) sostenga lo contrario cuando dice que la globalización llegó para quedarse por tres razones: Porque no hay un modelo de desarrollo alternativo, porque la izquierda está debilitada y por el apuntalamiento que recibe de la revolución tecnológica, argumentos que no son del todo convincentes y fácilmente rebatibles. No obstante, la izquierda ha asimilado y repetido hasta la saciedad la retórica de la doctrina del libre mercado y denunciado el desmantelamiento de las funciones del Estado.

Ahí donde más se concentran estos actores privados capaces de acciones globales se da un mayor grado de posicionamiento geopolítico, que luego cede su lugar a un posicionamiento geoeconómico en las instituciones del mercado. Los conflictos por el control político de las regiones del mundo tienen su origen más en los intereses económicos de los grupos corporativos transnacionales que en las guerras entre civilizaciones, como auguraba Huntington (1993). Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. La tendencia apunta a que los conflictos se desarrollan más entre grupos con intereses corporativos en un ambiente de globalidad, más que entre los Estados-nación determinados. Los intereses económicos han sido redefinidos del ámbito del espacio nacional al espacio global por un lado y por otro a los espacios locales y regionales.

La globalización representa la dimensión espacial global la cual se manifiesta actualmente en un contexto de fragmentación. Esta fragmentación espacial del Estado en autonomías regionales y locales es una fuerza que se contrapone a los procesos de globalización y que genera tensiones en un fenómeno que Torrijos (2001) ha descrito como de dispersión internacional. La autonomía es una condición de los pueblos para ejercer su soberanía y su independencia política. Sin embargo, para que su acción sea efectiva en el entorno de la globalización tienen que actuar cooperando y conciliando sus intereses con los otros actores globales.

Por otro lado, el poder de los productores que se sustentaba en el espacio del mercado se está modificando para transferirse al consumidor que tiene el poder de la información conectado instantáneamente a fuentes de información global, transformando el significado de rendición de cuentas, responsabilidad y democratización de la nueva economía global de la información. Más sin embargo, el incremento de los niveles de desigualdades y pobreza constituye un poderoso argumento para deslegitimar los avances de la nueva economía y de los procesos de globalización. Todavía más, la nueva economía tiene un nivel alto de concentración monopólica lo que la vuelve menos competitiva. La conclusión de que la primera causa dela extrema desigualdad social y económica en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

El término globalización significa "la internacionalización e interdependencia de las economías nacionales en el marco de un planeta que tiende a ser una sola unidad económica y un solo gran mercado financiero, monetario, bursátil y comercial que funciona las 24 horas del día." (Borja, 1997). La unidad económica implica la unidad de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Estos procesos de mundialización de las economías, son en realidad una transnacionalización de las mismas, por estar dirigidas por las corporaciones transnacionales y son excluyentes de la fuerza laboral, factor de producción que no entra en la mundialización del mercado.

No obstante, la creciente movilidad de los trabajos calificados modifica las restricciones bajo las que se formulan las políticas nacionales. La internacionalización de las economías está modificando sus estructuras y las reglas de funcionamiento tanto de los mercados como las industrias nacionales, las cuales se vuelven más interdependientes. La estructura espacial de las diversas entidades geográficas delimitadas territorialmente por las fronteras físicas y geográficas, definen los tipos de interrelaciones entre esas unidades.

La globalización es una diversidad de procesos en constante cambio originado por una mezcla de influencias económicas, políticas, sociales y culturales que transforma los modos de operación de todos los actores, individuos, organizaciones e instituciones. La globalización es entendida por Grant (1998) como un proceso continuo que reduce la significancia de las fronteras nacionales como un impedimento para el libre movimiento de capital, trabajo, bienes y servicios. Este libre movimiento de recursos, bienes, etc. tiene como móvil encontrar siempre recursos a precios más bajos para maximizar las utilidades.

Los procesos de globalización que integran los mercados tienen como obstáculos las fronteras geográficas, las cuales evaden especialmente en el caso de los servicios y de los capitales. Es una aceleración de movimiento hacia una integración económica e interdependencia mayor que ha tenido lugar en un período largo de tiempo y que han resultado en un conjunto de procesos que han hecho más viable y deseables para las compañías localizar algunas de sus operaciones en otros países (Hall, 1998)

Por tanto, la globalización es la capacidad efectiva para promover el mercado, un ambiente de inversión favorable al capital transnacional o multinacional de empresas de los países ricos. Las estrategias para la inversión directa extranjera de las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales se orientan hacia los países que ofrecen una mayor rentabilidad, y más concretamente buscan las industrias recientemente privatizadas en las economías emergentes. Por lo tanto, los flujos del mercado de capitales y de inversión directa extranjera son otros fenómenos recientes que son parte de los elementos de la globalización cuyas implicaciones tienen serias consecuencias en el tercer mundo.

Los flujos de capital son una consecuencia del comercio internacional y de las inversiones directas extranjeras. Éstas no son mutuas y fluyen de los países más desarrollados hacia los países en desarrollo. Para muestra de estas disfuncionalidades, un reporte de la Conferencia de las naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) muestra que los 49 países más pobres del mundo reciben sólo 0.11 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) de un total a nivel mundial calculado en 1 100 millones de dólares (AFP y DPA, 2001) El porcentaje de IED en las naciones pobres creció 0.5% en la última década, al pasar de 0.6 a 0.11, de las cuales más del 90% fueron flujos de inversión productivos y no de fusiones y adquisiciones transfronterizas, como sucede en los países ricos.

Los procesos de globalización se encuentran en una estrecha relación con los procesos de desarrollo regionales, nacionales y locales. El desarrollo regional se encuentra estrechamente imbricado con los procesos acelerados de la globalización bajo un nuevo paradigma orientado por la revolución científico-tecnológica que profundiza los procesos de descentralización gubernamental, impulsa la creación de empresas y el cuidado del medio ambiente.

López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una “propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y social lo permiten y, presionan en su favor.” Las transformaciones locales y regionales están determinadas por los cambios mismos en sus estructuras económicas, en las políticas macroeconómicas nacionales y en los procesos de globalización.

Los actores sociales clave en este desarrollo social son el Estado, la sociedad y el sector privado empresarial. La sociedad local y regional como actor social adquiere relevancia en

la promoción del crecimiento económico y el desarrollo social equilibrado y justo entre las diferentes regiones. La promoción del crecimiento económico siempre ha sido patrocinado y producido bajo la protección gubernamental. Las condiciones regionales para la promoción de las actividades empresariales están implicadas con el fomento de la integración o diversificación de la estructura económica regional y la coordinación interinstitucional de planes, programas y proyectos de impacto regional (Tarapuez Chamorro, 2001).

El Estado sigue siendo el principal impulsor de un desarrollo más equilibrado y equitativo entre las regiones. La sociedad regional también es un actor clave en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo regional. La presión que los procesos de globalización ejerce sobre el desarrollo regional está desterritorializando las fronteras geográficas espaciales para dar mayor relevancia a los agentes y actores del desarrollo. No obstante, en esta nueva tendencia, el estado queda reducido a su mínima expresión como agente impulsor del desarrollo que garantice la equidad y el equilibrio regional, para trasferirse estas responsabilidades a las organizaciones empresariales y de la sociedad civil. La sociedad regional adquiere importancia como un actor social que impulsa el crecimiento económico y el desarrollo regional en forma equitativa y equilibrada.

Al respecto, Rodríguez (1997) argumenta que "en la fase de globalización, integración mundial, y desvanecimiento de fronteras económicas, surge también una tendencia a impulsar y fortalecer las identidades locales y regionales, como un mecanismo social de defensa de su entorno inmediato, de su ámbito de cotidianidad, de su necesidad de pertenencia y de permanencia. La identidad permite la expresión de intereses en espacios comunes a niveles locales, nacionales, regionales y global. El valor de concebir los problemas globalmente, en su trascendencia mundial pero traducirlos en preocupaciones y acciones locales, parece ser una búsqueda de reposicionamiento social ante un mundo demasiado complejo en su desarrollo, en sus desequilibrios, y en sus contradicciones."

El redimensionamiento de lo local, en sociedades centralizadas y abiertas a los procesos de globalización, plantea un gran reto para formularse como una estrategia integradora que involucre todos los aspectos de la vida local. El desarrollo local se encuentra supeditado a los intereses regionales y globales que implican las interacciones de las dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales, tecnológicas, institucionales, etc. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. No obstante, es importante que en el diseño de planes y programas de desarrollo regional integral se deben considerar que son planes incluyentes y plurales de aceptación de diferentes intereses de los agentes económicos y actores políticos. Se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos, las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

El desarrollo local integral debe pivotar sobre la base de un compromiso en las interacciones solidarias, activas y continuas que se presentan en una comunidad determinada independientemente de la contigüidad física y territorialmente delimitada. Para Putnam (1993b), "El capital social encarnado en normas y redes de compromiso cívico parece ser un prerequisito para el desarrollo económico así como para un gobierno efectivo". El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el

involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. La sociedad local y regional adquiere una importancia en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo regional más justo y equilibrado.

De hecho, el “localismo” el particularismo y la irregularidad geográfica se sustituye por la unidad, la uniformidad y el universalismo. Si se quiere impulsar el desarrollo de regiones, se tienen que diseñar e implementar planes que orienten todos los esfuerzos hacia la compatibilidad con los procesos de la globalización, la cual puede ser el resultado de un concepto de esfuerzos de regiones.

Entonces, lo urgente para impulsar el desarrollo de las regiones es apuntalar e impulsar programas diseñados para cada una de esas regiones. Esta tendencia apunta a la profundización de las iniciativas para la integración regional en el contexto de una liberalización comercial multilateral y no discriminatoria, o mediante la liberalización comercial unilateral. Junto con la inversión directa extranjera, ambas iniciativas figuran en las nuevas estrategias de desarrollo y crecimiento de la mayor parte de los países.

La liberalización comercial unilateral implica una tarifa más baja de protección para el sector de manufacturas, la cual tiende a ser relativamente intensiva en capital. En materia de inversión directa externa, los países desarrollados la desalientan mediante el establecimiento de reglas rígidas en los acuerdos comerciales y las prácticas antidumping discriminatorias. Todos los acuerdos comerciales entre los Estados son promovidos y negociados por los mismos Estados con la finalidad de abrir los mercados a sus empresas transnacionales.

De hecho, los acuerdos regionales de integración comercial combinan una serie de prácticas intrincadas y complicadas de liberalización y proteccionismo económico y comercial. En la creación de proteccionismos que se está revirtiendo como tendencia, el proteccionismo de los productores domésticos estaba más concentrado que el proteccionismo de los consumidores. No obstante, investigaciones recientes (Rogers y Smith, 2001) demuestran que los precios de los consumidores entre los diferentes países, no se igualan entre sí, como sería de esperarse en un mundo altamente integrado por los mercados, a tal grado que los precios de productos similares fallan igualarse entre los diferentes países, más que entre regiones de un mismo país.

Los productores exportadores y las multinacionales estaban más concentradas que los pequeños y que competían con importadores. Hay que considerar que antes de abrir totalmente las barreras comerciales y financieras, la capacidad local necesita fortalecerse. El fortalecimiento de las comunidades locales necesita de tiempos y ritmos diferentes de acuerdo a los niveles de desarrollo diferentes de las comunidades. Una competencia justa es solamente una palabra de moda cuando el campo de juego no está nivelado para todos los participantes.

En la década de los noventa se está experimentando el resurgimiento del regionalismo en una "segunda ola". Los procesos de globalización se manifiestan relacionados con los procesos de regionalización. El fenómeno de la regionalización puede ser considerado

como una inercia a la globalización que estrecha los vínculos de las instituciones económicas mediante fórmulas de asociación comercial entre países. Así, los procesos de globalización se ven frenados y obstaculizados por la tríada, como le ha denominado Gretschman (1995).

La tríada está formada por tres grandes bloques comerciales formada por la Unión Europea (UE), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Hay quienes consideran que estos grupos comerciales son formas de un nuevo proteccionismo con un disfraz de libre comercio y que da continuidad al nacionalismo económico. Así, paralelamente a los procesos de globalización, también se desarrollan procesos de nacionalismos que vigorizan las identidades culturales y étnicas. Por lo mismo, la comunidad de intereses se expresan en una identidad a través de los diferentes medios en las instancias espaciales locales, nacionales, internacionales y globales.

Es decir, hay otra posición que asume que los procesos de regionalización son de defensa frente a los embates de la globalización. El incremento del tamaño de los bloques comerciales y de su poder relativo en el mercado, debido a su naturaleza preferencial y discriminatoria, puede aumentar o reducir los beneficios en los términos de bienestar para los países miembros.

El fenómeno de la regionalización frente a la globalización tiende a ser excluyente y con efectos limitados. Los procesos de globalización son excluyentes. Estas contradicciones aplican lo mismo para los países excluidos o bien para el mundo en su totalidad debido a que distrae los recursos de sus formas más eficientes de uso. Las dificultades existentes entre los procesos de globalización y de regionalización generan fuertes tensiones por las implicaciones transfonterizas, la disminución de la autonomía nacional y los desafíos a la soberanía política de los estados nacionales (Rosas, 2000).

La autonomía se fundamenta en la idea de que los ciudadanos son los mejor ubicados para evaluar y juzgar las acciones de sus gobiernos, potenciando mecanismos que permitan a estos gobiernos decidir acerca de los asuntos de su competencia y de sus responsabilidades frente a la sociedad. La autonomía es una condición para el ejercicio pleno de la soberanía y de la independencia política de los pueblos.

Sin embargo, la liberalización comercial unilateral puede deteriorar el bienestar social nacional, dependiendo de las distorsiones resultantes entre la relación de los cambios unilaterales en las tarifas de importación y en los flujos internacionales de capital. Así, en los procesos de liberalización con la participación de coaliciones, los liberalizadores participan en un juego de ganar, en el cual cada acción liberalizadora fortalece a sus propias coaliciones y debilita a los competidores. Los gobiernos están posibilidades de negociar con las diferentes coaliciones sobre la base de reciprocidad.

Los movimientos de capital y de comercio son considerados como sustitutos uno del otro en el modelo tradicional de Heckscher-Ohlin model, en el que se propone que los países tienen diferentes dotaciones de estos factores. Las actividades de los mercados de capital (acciones y bonos) han crecido globalmente en importancia durante el período 1980-

1995 según las investigaciones de Glen y Sumlinski (1998). El incremento de los movimiento de capital constituye una amenaza para la estabilidad de los mercados internacionales. Hasta ahora no se ha demostrado que exista una relación directa entre la liberalización de mercados de capitales y el crecimiento económico. La volatilidad de los mercados de capitales limita el crecimiento económico e incrementa los niveles de pobreza. El libre comercio conlleva la igualación de los precios de los factores, la cual elimina la racionalidad de los movimientos de los factores, pero si el factor se mueve de donde es abundante a donde es escaso, las bases para el comercio desaparecen o se reducen.

Por lo tanto, los movimientos de los factores son un sustituto para el comercio. La hipótesis de los mercados eficientes racionales hace dos clases de predicciones acerca de la conducta de precios, cuando se consideran correctos y reflejan el valor racional, y cuando los precios son impredecibles con base en la información pública disponible. Los mercados eficientes, desde la economía neoinstitucionalista, requiere de costos bajos de transacción y de producción y cumplen con una serie de factores y características básicas, tales como la existencia de un Estado de Derecho y de capital social (confianza), protección de derechos de propiedad y bajos costos de los contratos. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la "trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos" Putnam (1995: 67) define capital social como "redes, normas y confianza social que facilitan la coordinación y cooperación en beneficio mutuo".

Un país abundante en trabajo que impone una tarifa, el retorno al capital se incrementa y el capital se mueve ahí, dando lugar a una desvalorización del trabajo y al surgimiento de "nuevas formas de trabajo". En la globalización, el trabajo se fragmenta y en muchos de los casos simplemente desaparece, o es condicionado por leyes de un nuevo mercado laboral que requieren flexibilidad en las tareas y pagos paupérrimos, para concentrar más las ganancias en el capital. Así, los agentes y actores del capital actúan en formas diferentes a los del trabajo. Cuando la movilidad del capital es perfecta, el comercio desaparece eventualmente. La combinación de los movimientos de capital internacional y las barreras tarifarias distorsionadoras generan un crecimiento de la miseria en pequeñas economías. Cooper (1968) sentenció que estaban cado las barreras políticas y psicológicas al comercio y que los resultados incluían más sensibilidad de los flujos comerciales a disturbios dentro de las economías nacionales o la economía mundial.

Un crecimiento capitalista, completamente libre y no regulado es improbable que considere la pobreza, por lo que ciertas medidas deliberadas y aplicadas tanto por organismos internacionales como por los Estados nacionales son necesarias para facilitar la inclusión de los países y las gentes pobres. Por tanto, Abrego (1999) concluye que el resultado de los cambios tarifarios distorsionadores que conducen a flujos de capital que generan miseria, se apoya crucialmente en el capital foráneo que no paga impuestos en los países receptores. El argumento va a favor de los beneficios que reciben las economías en una apertura unilateral hacia el libre comercio. Las relaciones de comercio y de mercados se delimitan en acuerdos entre los Estados, los cuales operan dentro de sus fronteras.

La integración de un sistema comercial basado en bloques comerciales regionales puede ser inferior a un sistema global comercial, según el análisis de Andriamananjara (1999a) El

denominado debate "Regionalismo versus multilateralismo" no ha ofrecido respuestas al cuestionamiento de sí la integración regional dispone a los países a participar activamente en la liberalización comercial. Junto con las elites locales y los capitalistas transnacionales han promovido mayores cambios estructurales en las economías locales a fin de facilitar la creciente integración de la región en la economía global capitalista.

En el otro extremo del debate, la integración de los bloques comerciales es considerada como un paso necesario para el libre comercio global. La tendencia hacia un regionalismo abierto en su economía, comercio y política requiere de un proyecto de gobernabilidad que ordene equilibradamente los desarrollos de los distintos pueblos en forma equitativa y justa. Y es que la gobernabilidad tiene una relación directa con el crecimiento económico, el desarrollo social, la justicia social y la igualdad de oportunidades para la población

Cervantes Galván (1997) avanza la hipótesis de que los regionalismos y la reconfiguración de los Estados nacionales tenderán a manifestarse con mayor fuerza y claridad a medida que avancen los procesos de integración económica. La integración económica conduce a la convergencia de economías con diferentes niveles de desarrollo, debido a que las economías pobres crecen más rápido que las economías avanzadas (Lawrence, 1996).

La naturaleza de la integración regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. Pritchett (1996) recomienda olvidarse de la convergencia porque las evidencias apuntan a que el elemento recurrente de la economía moderna es una divergencia masiva en los ingresos per cápitas entre los países ricos y pobres, una brecha que continúa creciendo todavía.

La contradicción se manifiesta entre una integración económica que no siempre trae consigo la integración social y política. La integración social y política se condiciona al acceso a los mercados. La emergencia del regionalismo es una de las estrategias de apertura comercial que más impacto tienen en los Estado-nación y que deja en entredicho si los procesos de integración regional constituyen procesos de construcción o de obstaculización del libre comercio global. El comercio regional nunca incrementa el apoyo político para el libre comercio global. La competencia entre estos bloques comerciales puede llevar a una división del mundo.

Andriamananjara (1999, 1999a) estudia los efectos de la integración regional en los incentivos de los miembros así como también aquéllos de los no miembros para entrar en la liberalización comercial multilateral, y deriva dos resultados: por un lado, el máximo nivel de liberalización multilateral por el que el apoyo de los miembros de un acuerdo comercial preferencial (ACP) se incrementa siguiendo su establecimiento, declina cuando el grado de preferencia se eleva. Por otro lado, el más alto grado de preferencia dentro de un acuerdo comercial preferencial, entre más alto es el nivel mínimo de los cortes tarifarios multilaterales para los cuales se incrementa el apoyo y se reduce la resistencia en el país excluido. Por lo tanto, el regionalismo debilita el apoyo para el multilateralismo tanto en los países miembros como en los no miembros.

La formación de los Arreglos de Integración Regional (AIR) requieren de una coincidencia de deseos entre las partes interesadas para incrementar los incentivos, ya sea mediante la "expansión endógena" de los bloques comerciales, o bien mediante la "protección endógena" que conduce a los miembros a una mayor o menor protección con respecto a los países que no pertenecen al bloque. Los incentivos de los bloques comerciales para expandirse o fusionarse están determinados a través de procesos políticos dominados por productores más que por consideraciones de bienestar.

Las fusiones de las corporaciones que pertenecen a países de diferentes bloques económicos debilitan el posicionamiento unilateral y debilitan las estrategias hegemónicas motivadas por las grandes corporaciones estadounidenses que pertenecen al complejo militar industrial. El resultado de este proceso de expansión de los bloques comerciales, es que los no miembros siempre quieren unirse, en algún punto los incentivos de los países miembros para admitir nuevos miembros declina a cero antes que todos los países sean admitidos.

¿Hasta dónde el resurgimiento del regionalismo en la década de los noventa ha afectado el comercio?. Este es el cuestionamiento que se hacen Sloaga y Winters (1999) quienes aplicaron el modelo de gravedad modificado para identificar los efectos separados de Acuerdos Comerciales Preferenciales (ACP) en el comercio interno de los bloques. Las relaciones de comercio y de mercados se delimitan en acuerdos entre los Estados, los cuales operan dentro de sus fronteras. Todos los acuerdos comerciales entre los Estados son promovidos y negociados por los mismos Estados para abrir mercados a sus empresas transnacionales. Como resultado de su investigación, no encontraron alguna indicación de que la "nueva ola" de regionalismo haya acelerado el comercio interno de los países que forman parte del bloque comercial significativamente.

Rosas (2000) reconoce tres acepciones sobre este regionalismo: la interestatal o intergubernamental, la transestatal y la intraestatal. El debate sobre el regionalismo interestatal involucra agrupaciones de los diferentes Estados nacionales involucrados que tienen acuerdos de cooperación y desarrollan mecanismos de integración de actividades económicas en áreas geográficas específicas que tienen características estructurales homogéneas.

La globalización de los mercados de bienes no es necesariamente positiva para el desarrollo regional a largo plazo, especialmente por la externalidades de la producción del conocimiento (Bretschger, 1999). El nuevo paradigma del desarrollo regional se centra en la revolución científico-tecnológica, la profundización de procesos de descentralización gubernamental, la impulsión empresarial y el cuidado del medio ambiente. La existencia de externalidades positivas en el comercio interregional requiere apartarse de la teoría tradicional del comercio. La tasa de crecimiento a largo plazo de una economía puede ser más baja con el incremento del comercio de bienes que en autarquía, porque los insumos usados intensamente en escalas de producción, se encarecen.

De acuerdo con el modelo de gravedad el comercio entre dos naciones, depende no sólo de su tamaño en los términos de población y del territorio. También depende del producto

nacional bruto y de los costos de transacción relacionados con la distancia, las similaridades culturales, etc. La voluntad para entrar a la liberalización comercial multilateral también depende del tamaño del mercado y del número de empresas de los países miembros. Andriamananjara (1999a) concluye que el regionalismo afecta los incentivos para el multilateralismo y la proliferación de los arreglos comerciales regionales generan fuerzas que debilitan los esfuerzos para lograr un sistema comercial multilateral más liberal.

Por lo tanto, si bien las instituciones del Estado-nación y las organizaciones locales son influidas por los cambios globales, éstas a su vez ejercen una fuerte presión para orientar dichos cambios, aunque hace falta un análisis más profundo para determinar su influencia en los proyectos de cooperación y desarrollo. El éxito de la estrategia de cambio depende del grado de preparación de las instituciones del Estado para mantener un compromiso de cambio en los términos de uso de recursos, cultura organizacional, políticas y entrega de servicios y facilitar el cambio de poder fuera de las organizaciones. En este sentido, la globalidad tiene como antídoto la localidad, lo que está próximo.

En una encuesta realizada al sector privado en 69 países por Brunetti, Kisunko y Weder (1998), detallan los obstáculos regionales para la realización de negocios: la corrupción es percibida entre los tres más importantes obstáculos en todas las regiones de los países menos avanzados, con la excepción de los países asiáticos y los de la región en transición. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados. Por lo mismo, las economías más abiertas y avanzadas tienen una mejor gobernabilidad con bajos niveles de corrupción percibida. Una baja corrupción y una buena gobernabilidad estimulan el comercio y los flujos de capital internacionales, por lo que se concluye que las economías más abiertas al comercio internacional dedican más recursos al combate a la corrupción.

Bonaglia, Braga de Macedo y Bussolo (2001) encontraron como resultado de su investigación que l conexión causal de la apertura a la corrupción es fuerte y estadísticamente significante, es robusta a la introducción de un completo conjunto de variables exploratorias adicionales usadas en la literatura sobre las causas de la corrupción. Sus conclusiones apoyan la tesis de que la corrupción declina en sociedades más abiertas.

La corrupción es alta cuando los costos psicológicos y sociales percibidos son más bajos que sus beneficios. Existe la percepción generalizada que los Estados federales son más corruptos que los Estados centralizados tomando en cuenta el control por el nivel de desarrollo económico. La corrupción es más manifiesta en los Estados federales y con recientes procesos de democratización. Investigación empírica reciente confirma que existe una conexión entre una percepción alta de la corrupción y bajas inversiones y crecimiento. La corrupción ha sido condenada por las fallas para el desarrollo en ciertos países. Sin embargo, a pesar de que se argumenta que la corrupción debilita el crecimiento económico, en algunos países donde la corrupción campea, crecen. Pero si otros factores conducen al crecimiento y desarrollo, la corrupción es probable que disminuya.

Las diferentes teorías sobre la corrupción asocian las variaciones entre las naciones con tradiciones históricas y culturales, niveles de desarrollo económico, instituciones políticas y

políticas gubernamentales. Se han sugerido una variedad de características nacionales de tipo económico, político, social, religioso, cultural, etc. que afectan los costos de los riesgos y beneficios esperados. Entre las principales causas de la corrupción se encuentran variables, económicas, culturales y sociales.

O'Donnell (1979) concluye que los diferentes niveles de desarrollo de los pueblos están estrechamente relacionados con los diferentes sistemas políticos. Por lo tanto, los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional. Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional.

Se argumenta en diversas investigaciones que para ciertos países y naciones en particular, se tiene una cultura que es congénitamente conduciva a la corrupción, como el caso de Rusia.

Los factores histórico-culturales de la región latinoamericana pueden explicar los niveles de corrupción que se dan en esos países, y otros investigadores se apresuran y achacan a las tradiciones de la fe católica algunos efectos residuales de la corrupción (Tresman, 1999) aunque se requiere mayor investigación. Cualquier intento serio para explicar las desigualdades y las formas de ubicuidad de la injusticia que caracteriza a las sociedades Latinoamericanas inevitablemente conduce un examen crítico de las relaciones de explotación de producción y distribución capitalista que predomina en la región.

En las últimas dos décadas, casi cada aspecto mayor de la vida económica, política y social en Latinoamérica estuvo influida por la integración acelerada de la región en el sistema capitalista global. Las economías contemporáneas de Latinoamérica se han convertido en partes integral del nuevo sistema económico global que es dominado no por naciones Estados, sino por grandes corporaciones transnacionales que constituyen los principales actores globales en este sistema.

La complejidad de la realidad social de Latinoamérica contemporánea es quizás pensada como una complejidad híbrida de ideologías, prácticas y condiciones de la premodernidad, modernidad y postmodernidad. La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

Las tradiciones institucionales y culturales afectan los niveles de percepción de la corrupción más significativamente que las políticas del Estado. La ausencia de leyes que resuelvan conflictos de intereses, que exijan el cumplimiento de contratos y que no permitan se distorsione la competencia, abona a elevar la corrupción institucional. El

monopolio del poder combinado con altos niveles de discreción y una baja rendición de cuentas, de acuerdo con Klitgaard (1988).

La corrupción en la administración, incluyendo la internacional, ocurre generalmente cuando hay un requerimiento por un servicio de un usuario y los servidores públicos transforman su obligación de servir en poder para hacer o romper, para enriquecer o empobrecer y por lo mismo entran en una relación mercantil con los usuarios, en una relación en la que ellos están en una relación de fuerza, dan prioridad al que ofrece más y esperan que los demás acepten sus condiciones. Por ejemplo las altas barreras a las transacciones internacionales alientan a los agentes económicos privados a iniciar actos de corrupción.

Una segunda forma de corrupción resulta cuando los bienes y servicios son comprados por el Estado mediante el otorgamiento de contratos públicos que favorece la compra de favores (Kampto, 1997). La estructura de los mercados y los niveles de rentas determinan la intensidad en una economía. Las altas rentas que resultan de un medio ambiente de baja competencia aumentan las niveles de corrupción. Ades and Di Tella (2001) elabora un modelo que conecta la creciente competencia de los mercados con bajas rentas y bajos niveles de corrupción, lo cual depende de tres variables: salarios de la burocracia, el nivel de monitoreo y las utilidades que dependen del grado de competencia.

Entre los costos de los riesgos está el ser sorprendido en una conducta de corrupción y castigado si el sistema legal es efectivo. Los países con diferentes tradiciones coloniales presentan varios niveles de corrupción y tienen diferentes culturas legales con grados diferentes de susceptibilidad a la corrupción. La herencia colonial marcó las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados.

La tradición histórica puede afectar los costos percibidos de acciones corruptas a través de la influencia religiosa. El riesgo de exponerse es mayor en un sistema político abierto y más democrático. (Tresiman, 1999). ”. Para Giddens (1999:36) los riesgos son “la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza.” Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno.

Los resultados de estas investigaciones sugieren que la batalla contra la corrupción en muchos países ha sido difícil. Es necesario democratizar la sociedad y liberalizar el comercio. Hay evidencias de que los procesos de desarrollo económico reducen los niveles de corrupción por medio de la racionalización de los papeles privados y del Estado, así como del avance educativo que no permite los abusos.

Lo que permite el ejercicio de conductas corruptas es el uso discrecional de un poder monopólico por parte de los miembros de cualquier organización. El crimen y el robo, que también se transnacionalizan, son uno de los obstáculos mayores en todos los países menos desarrollados, con excepción de los países asiáticos y de los tres países en la región del Medio Este y el Norte de Africa.

Las regulaciones impositivas y altos impuestos están entre los cuatro mayor obstáculos en 20 de 22 países. Las regulaciones del trabajo y seguridad y regulaciones del medio ambiente tienden a ser percibidas como los mayor obstáculos en los países industriales que en países menos desarrollados. La inadecuada oferta de infraestructura está en la mitad de la escala de obstáculos en la mayoría de las regiones. Los obstáculos que se relacionan con las políticas monetarias son los más altos en algunos países africanos y latinoamericanos. La inestabilidad de las políticas no está entre los grandes obstáculos en cualquiera de las regiones, excepto para algunas regiones en transición e Iberoamérica. La complejidad de la realidad social de Latinoamérica contemporánea es quizás pensada como una complejidad híbrida de ideologías, prácticas y condiciones de la premodernidad, modernidad y postmodernidad.

La inestabilidad económica se manifiesta en los altos déficit fiscales, altos índices de inflación, volatilidad en las tasas de cambio, etc. que agravan los costos del desempleo y repercuten en bajos niveles de inversiones en los sectores exportadores de la economía, con la consecuente reducción de creación de empleo a su vez. El empleo es el medio de acceso a los mercados. Los controles de precios parece ser problemas del pasado, pero el terrorismo ha vuelto a resurgir. Por sobre todo, los países más ricos son también aquellos que tienen las mejores marcas de los empresarios.

Los elementos de integración del Estado-nación surgen posteriormente como elementos de diferenciación que replantean los beneficios y perjuicios de los procesos de globalización a escala regional. Esta diferenciación se manifiesta en lo social y en lo funcional, con efectos de desestructuración. Incluso la dinámica de diferenciación social se ha vuelto más compleja, se redefine en una profunda dualización caracterizada por una integración selectiva de algunos grupos mientras que otros son excluidos de los beneficios de la globalización. Los beneficios que han obtenido algunas de las naciones del mundo que se han involucrado en los procesos de globalización por sí mismas, se han distribuido en forma equitativa.

Sin embargo otras naciones no lo han logrado, sobretodo aquellas que han tenido la asesoría de las instituciones financieras internacionales. Las naciones que han logrado mejores beneficios de los procesos de globalización son las que han rechazado los postulados del “Consenso de Washington” y han establecido ritmos propios de crecimiento económico. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación.

Esta diferenciación social incide en la misma disociación de la vida social de amplios sectores. La sociedad duálica y estamentaria basada en las estructuras económicas del coloniaje, justifica las diferencias entre los ricos y los excluidos en principios morales, religiosos y jurídicos que considera consustancial al sistema económico.

Sin embargo, la globalización de las actividades económicas es "promovida por los gobiernos, los sectores empresariales y otros grupos. Hace cambiar la vida cotidiana y crea nuevos sistemas y fuerzas trasnacionales, transforma las instituciones de las sociedades en que vivimos y tiene que ver con el surgimiento del individualismo" (Centro Tepoztlán AC, 1999) El surgimiento de este individualismo es debido en parte, a que la competencia se extiende a los mismos individuos y es preocupante porque puede determinar el nivel latente de autoritarismo existente en el capitalismo. Este individualismo competitivo forma el cimiento de la crisis del sistema económico globalizador. La crisis del objeto del capitalismo cae más en el dominio del campo del valor de uso que en el dominio de valor de cambio.

Los actores que promueven los procesos de globalización económica son optimistas con respecto a los resultados y a las oportunidades que esperan se traduzcan en crecimiento económico, desarrollo social, pluralismo político y democracia. Los detractores de estos procesos argumentan que están ampliando la polarización social y las brechas de la desigualdad económica e incrementando los niveles de pobreza, marginación y exclusión social, que ha dado lugar en Europa al concepto de aquellos que no tienen “nombre ni domicilio fijo”.

Esto de tal forma que actualmente la quinta parte de la población más rica dispone del 80% de los recursos, mientras el quinto más pobre dispone sólo dispone de menos del 0.5% de los recursos. El 20% de la población mundial tiene acceso a los beneficios de estos procesos de globalización, mientras que el restante 80% es excluido del desarrollo. Según el análisis de Harris (1997) el más alto 20 por ciento del ingreso obtiene entre el 40 y 70 por ciento del total anual del ingreso ganado en los países latinoamericanos, mientras que el más bajo 40 por ciento de los que obtienen ingresos obtienen solo entre el 5 y el 20 por ciento del total del ingreso ganado en estos países, el 40 por ciento de todos los hogares latinoamericanos viven bajo la línea de pobreza definida en términos del ingreso requerido para satisfacer necesidades básicas para alimentación, habitación, y ropa.

De hecho la mitad de los grupos no tiene un ingreso suficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas de alimentación. Una de las realidades más impresionantes de Latinoamérica es el grado extremo de desigualdad económica, social y política que caracteriza a las sociedades de la región, a tal grado que esta desigualdad es quizás mejor revelada por la distribución de ingreso entre los niveles más altos y bajos de ingreso en las sociedades latinoamericanas. En suma, la desigualdad económica y social es extrema a través de Latinoamérica y recientes transformaciones en el sistema capitalista global y las economías de los Estados latinoamericanos han contribuido en su mayor parte a la ya de por sí polarizada estructura de clases, diferenciación étnica, racial y de género (Harris, 1997).

Un estudio de las Naciones Unidas (citado por Chonchol, 2001), reporta un incremento de la desigualdad que va de 1960, cuando el 20% más rico de la humanidad recibía el 70% del producto mundial. En ese mismo año, el 20% más pobre recibía el 2.3%, en una relación de 30 a 1, hasta alcanzar una relación de 74 a 1 en 1997. Todavía más, las investigaciones recientes (Lindert and Williamson, 2001) encuentran una dramática

divergencia en los ingresos de las naciones y de los individuos desde 1 600 o antes y se incrementa durante la época previa a la revolución industrial, para acentuarse en los últimos dos siglos, aunque es más elevado el incremento en las diferencias del ingreso entre las naciones. Por lo tanto, los procesos de divergencia global de los ingresos tienen ya 400 años frente al desarrollo de los procesos de globalización que se inician en 1820 y que sólo tienen 150 años si se sustraen el período de los mercados autárticos que comprenden de 1914 a 1945.

Los procesos de globalización dan como resultado una sociedad dual: Mientras que una minoría es la receptora de los mayores beneficios y privilegios, una inmensa masa de personas son excluidos de esos beneficios. La dualización social es un fenómeno complejo que resultan de la implantación de los procesos de globalización económica y que se manifiesta en desigualdades extremosas y profundas entre los cada vez más ricos, quienes reciben todos los beneficios y los excluidos o marginados, quienes nunca tendrán alguna posibilidad de acceso a disfrutar de los beneficios.

Sin embargo, el problema serio con este modo de desarrollo capitalista es que agrava la desigualdad social la cual tiene otras repercusiones en la desigualdad política. El incremento de la desigualdad social se ha hecho evidente en los estratos medios en muchos países menos desarrollados. La formación de una sociedad estamentaria y duálica basada en las estructuras económicas coloniales, justifica las diferencias entre los ricos y los excluidos en principios morales, religiosos y jurídicos que consideran esas diferencias ser inherentes al mismo sistema económico.

Entre otras de las razones por las que algunos países y algunos grupos sociales son excluidos de los beneficios de la globalización, está el problema de que los países menos desarrollados y más pobres, no han sido empobrecidos por la globalización, sino que están siendo excluidos de la misma y sin tener una integración real a la economía global. Los beneficios que han obtenido algunas de las naciones del mundo que se han involucrado en los procesos de globalización por sí mismas, se han distribuido en forma equitativa. Sin embargo otras naciones no lo han logrado, sobretodo aquellas que han tenido la asesoría de las instituciones financieras internacionales. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional.Por lo tanto, este problema reclama el apoyo y la asistencia de la comunidad internacional para la construcción de las instituciones y el diseño de las políticas que faciliten su ingreso y su participación en la economía global, algo que es improbable que se dé bajo un esquema globalizador de alta competencia entre las naciones.

Cierto grado de participación de los Estados nacionales en la economía global puede ser benéfico. Pero hay una gran diferencia entre políticas que promueven un sistema de mercado coherente para el beneficio de la mayoría de los participantes, y las políticas que entregan el poder a los capitalistas rapaces, que consiguen ser más ricos a costa de la pobreza de la mayoría..

El componente político de una economía de libre mercado es la democracia como forma de gobierno. El reclamo moral de la democracia se fundamenta en el valor y la igualdad de los individuos bajo la consideración de una persona, un voto. La noción de democracia de los clásicos se fundaba en la posibilidad de tener acceso al poder económico y en la posibilidad de lograr una república formada por pequeños propietarios, lo cual implicaba una relación estrecha entre el poder económico y el poder político. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición".

El modelo de democracia promovido por los procesos de globalización es de la democracia liberal transnacional, el cual soporta las nuevas bases de la gobernabilidad del sistema capitalista centradas en los derechos de propiedad más que en los derechos personales. Esta democracia liberal transnacional requiere de actores e instituciones fuertes que acepten los principios del liberalismo económico y político. El vínculo existente entre los diferentes actores y las estructuras institucionales requiere de procesos de análisis de los diseños institucionales de los sistemas políticos. La nueva democracia neoliberal se orienta a otorgar mayores niveles de protección a los actores y agentes del capital que a los actores y agentes sociales del trabajo. La globalización es inevitable y la democratización indispensable.

La democracia ofrece al individuo moderno promesas de autonomía y libertad y acepta como sus principales características, la diversidad y la inestabilidad del proceso. La autonomía es una condición para el ejercicio pleno de la soberanía y la independencia política de los pueblos. Son la inestabilidad y la incertidumbre símbolos de los tiempos de la globalización. La incertidumbre vista como una característica sociocultural de la democracia que interpreta la realidad como esquemas que se salen de la normalidad. Dado el rol de las sanciones en la preservación de la normalidad social la cual involucra nada menos que la salvaguarda de los valores fundamentales de una sociedad. La democracia institucionaliza las posibilidades de modificación de decisiones de los ciudadanos y por lo tanto, posibilita las transiciones de los pueblos.

La democracia es definida por la globalización como un sistema que permite a los individuos el ejercicio pleno de sus libertades y responsabilidades, sus derechos y obligaciones en un marco de convivencia, aunque en la realidad dista mucho de lograrse estos fines por la fuerte incompatibilidad entre los principios del libre mercado y los principios de la democracia.

En realidad el concepto tradicional de la democracia ha sido reelaborado para que sirva de apoyo y mantenimiento al sistema capitalista. No obstante, la democracia constituye un mecanismo de control que permite una estabilidad en la gobernabilidad para las operaciones de los mercados y los inversionistas internacionales. La democracia es un conjunto de métodos, instrumentos y procesos, que tienen por objeto lograr y mantener equilibrios mediante la expresión de opiniones, la confrontación de ideas, la solución de conflictos, negociación de intereses, etc.

La relación entre el mercado y la democracia es una relación tortuosa mientras que los principios de la economía política en que se fundamenta el capitalismo transnacional contradicen los principios de la teoría democrática cuando se privilegian ciertos derechos sobre otros. Esta teoría democrática liberal tiene como fundamentos los principios de libertad e igualdad de los individuos, en donde éstos adquieren mayor relevancia que las comunidades y sus identidades políticas. En torno a este principio de la democracia liberal se da un debate entre posiciones liberales multiculturalistas, democráticos socialistas y los comunistas. Las democracias liberales más avanzadas se convirtieron en democracias sociales

Pero la propuesta democrática de la globalización es elitista y oligárquica que privilegia los intereses de los grupos en el poder y con el poder económico y político y en donde la oposición política queda incapacitada o al margen para elaborar y proponer nuevas iniciativas. Lo más preocupante son los mecanismos para repartir el poder entre las diferentes instancias. La posesión y ejercicio asimétrico del poder que emerge de los procesos de globalización tensiona las instituciones establecidas y presiona en la dirección de la creación de un nuevo orden orientado por una clase capitalista transnacional. Este nuevo orden mundial emerge después de la caída del muro de Berlín, el cual se anunció después de la Guerra del Golfo en 1991, aunque en realidad la geopolítica se ha complicado. En nuevo orden mundial que emerge, el Estado no desaparece sino que se está desagregando en partes distintas, separadas, de acuerdo a su funcionalidad. Un nuevo status de los Estados-nación surge que los estratifica en la unipolaridad política mundial.

El nuevo orden económico mundial implica estrategias de desarrollo orientadas a la redefinición de las funciones del Estado, la cual presenta dos tendencias. Por un lado, la tendencia que enfatiza eliminación de la política social y a la descentralización de las funciones del Estado y por otro lado, la tendencia a fortalecer su capacidad regulatoria para enfrentar nuevas responsabilidades en el ámbito de la promoción del desarrollo local.

La descentralización tiene como objetivos aumentar el poder, la autonomía de la decisión y el control de los recursos, las responsabilidades y las competencias de las colectividades locales, en detrimento del poder del poder de los órganos del gobierno central (Mattos, 1990:165-167). . De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales.

El énfasis en los procesos de reestatización o neoestatización se orienta a recuperar algunas de las funciones eliminadas o debilitadas y constituye la pieza principal de la expansión global de las grandes corporaciones transnacionales. Esta expansión de las transnacionales en los mercados internacionales es precedida por la expansión militar y política de los Estados imperialistas. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

Mientras que la redistribución de los beneficios de la globalización es un aspecto meramente político, el crecimiento económico es un problema técnico convertido en un fin en sí mismo. El crecimiento económico implica la noción de la medición cuantitativa en términos del PIB per cápita y el consumo promedio real. El crecimiento económico es producido bajo la protección gubernamental.

Los actores y agentes que impulsan los procesos de la globalización, no están dispuestos a ceder el poder y por eso definen el problema como uno de carácter técnico. En otras palabras, la globalización hace más difícil el funcionamiento democrático de las sociedades y por ende, de los Estado-nación, la tradicional unidad de identidad política, ahora debilitados por las formas diversas de expresión nacionalistas. Las diferencias en los avances de los procesos de identidad de los pueblos y los procesos de globalización económica están abriendo más las fracturas sociales.

Chua (1998) propone un modelo de mercadización, democratización y etnonacionalismo que explora las consecuencias de perseguir la consecución del libre mercado y la democracia. Este modelo considera las siguientes condiciones: el subdesarrollo económico, divisiones étnicas severas, la presencia dominante de una minoría étnica y la presencia de una mayoría empobrecida que como en el caso de los indígenas claman ser los dueños verdaderos de la nación y que ya empiezan a reconstruir su identidad.

Así, en forma paralela a los procesos de globalización se desarrollan procesos de vigorización de nacionalismos que dan vitalidad a los valores étnicos y culturales. La democracia ha desarrollado modelos que dan acomodo a la diversidad etnocultural aunque no ha podido dar respuesta completa para resolver los problemas económicos que emergen de estos acomodos. Pocos gobiernos nacionales han administrado y manejado en forma democrática la diversidad étnica y cultural de las comunidades. En la diversidad se apoyan los principios básicos de la democracia que no admiten excepciones.

Así a la consecución de una racionalidad y eficiencia del mercado se asocian los valores de la cultura democrática basada en la competencia, bajo el razonamiento de que la democracia liberal y el capitalismo se explican por razones económicas y por la lucha por el reconocimiento. La competencia como un mecanismos de motivación es impulsada por los Estados imperiales rivales y en general por el mismo sistema imperial. Al decir de Patras (2001d) la competencia “en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados”.

La cultura democrática debe sustentarse en un código de principios que guíen el comportamiento político y la acción del gobierno. Al respecto Santiso (2001) propone los siguientes principios: Inclusión, participación y articulación de preferencias por medio de un sistema de partidos políticos y representación ciudadana, reponsabilidad política horizontal y vertical y capacidad de respuesta de las políticas públicas a las preferencias, transparencia de la acción pública y obligación de rendir cuentas, el Estado de derecho y la independencia de los poderes. Las políticas públicas se formulan en las instituciones del Estado, las legislativas, las del ejecutivo y el judicial, mientras que la ciudadanía se reúne en diversos foros para discutir y formular las demandas así como para validar las acciones del sistema político.

Se puede inferir que los valores internos de las organizaciones están determinados por los valores externos, tales como la gobernabilidad del sistema social y sus valores culturales en los cuales la organización se desempeña. Como cualquier sistema, el sistema social tiene mecanismos de retroalimentación para ajustarse continuamente e irreversiblemente a los cambiantes factores socioeconómicos y socio ecológicos.

En la pugna ideológica esta democracia capitalista ha salido victoriosa y Fukuyama en su libro *El fin de la historia* ha anunciado ya el inicio de un jubileo laico con el triunfo de la democracia liberal y la desregulación de los mercados. Así, la democracia se ha convertido en la herramienta más perfecta para mantener el poder hegemónico del capitalismo globalziador. La desregulación limita las funciones de los gobiernos de los Estados nación para operar, funciones que rápidamente son tomadas por las grandes corporaciones transnacionales, las cuales ejercitan para sus propios intereses. Así, Fukuyama concluye que "Nada de lo que ha pasado en la política mundial o en la economía global en los últimos diez años contradice, desde mi punto de vista, la conclusión de que la democracia liberal y una economía orientada al mercado, son las únicas opciones viables para las necesidades modernas" (Fukuyama, 1999a)

No obstante, la política de la desregulación financiera hace posible la utopía neoliberal de un mercado perfecto (Bourdeau, 1998) lo cual se logra mediante la acción destructiva de todas las medidas políticas y de las estructuras colectivas. Estas estructuras colectivas, tales como la nación, los grupos de trabajo, sindicatos, familia, etc., obstaculicen el ejercicio de las fuerzas del libre mercado y la acción e inversiones de las corporaciones transnacionales en los Estados-nación. Los acuerdos de inversiones entre los diferentes Estados toman en cuanta la participación de las grandes empresas transnacionales. Sin embargo, estos actores, como en el caso de los sindicatos, se han vuelto incapaces en tiempos en que la misma lógica del desarrollo los han convertido en totalmente inoperantes, al igual que se han modificado las convicciones ideológicas.

Pero por otro lado, se ha iniciado también una "democratización" del debate sobre las políticas económicas internacionales, el libre mercado y el libre comercio.

El nuevo modelo de economía de mercado global.

El modelo de globalización es un modelo de una dictadura corporativa que se caracteriza por ser una estrategia para la expansión de las operaciones comerciales y financieras de las grandes corporaciones transnacionales, la cual es precedida por una expansión militar y política de los Estados imperialistas. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales Los agentes del corporativismo financiero y económico internacional son los protagonistas del nuevo modelo de desarrollo neoliberal y para alcanzar sus metas, han prescindido de la intermediación de las instituciones políticas del Estado-nación.

Las instituciones políticas son determinantes en los resultados económicos. Las diferentes facciones que integran el corporativismo financiero global entran en graves

conflictos por los intereses que tienen en áreas estratégicas de la globalización. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Así mismo, los conflictos globales entre diversas clases dominantes chocan entre sí y la tendencia apunta que los conflictos bélicos se desarrollan más entre estos grupos con intereses corporativos en la globalidad que entre Estados-nación determinados.. Muchos de estas confrontaciones inter corporativas financieras y económicas globales son las causantes de las guerras, más que los enfrentamientos entre las naciones.

La sociedad se encuentra dominada por las grandes corporaciones transnacionales que ejercen una forma de dictadura económica. Lo realizan por medio de una estructura supranacional de instituciones, manejadas por una burocracia tecnocrática al servicio del capital, las cuales sin ningún control que equilibre su poder económico, político y militar, imponen decisiones y restringen la soberanía política de los Estados-nación. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula. La estructura espacial de las unidades geográficas delimitadas por fronteras físicas y geográficas definen los tipos de interrelaciones entre las diversas entidades. Suplantan la soberanía política por el concepto de soberanía consumidora y dejan las decisiones en las oportunidades de desarrollo que tienen los individuos en manos del mercado.

El sistema capitalista alienta y estimula el consumo continuo y creciente. El papel del mercado impone criterios de trato a los ciudadanos en función de su capacidad adquisitiva como consumidores, debilita los lazos solidarios y desarticula las posibilidades de acción colectiva. El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otro ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir (De Swaan Abram, 1997).

Por lo tanto, las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. La globalización establece estos poderes supranacionales que tienen como centro el poder de los mercados financieros e imponen sus decisiones en materia de política económica a los Estados nacionales, con reducciones drásticas de funciones. Así, el mercado toma el papel protagónico del desarrollo y subordina al Estado y a la sociedad. No obstante, las naciones que han logrado alcanzar niveles más altos de desarrollo económico son aquellas que mantienen las regulaciones en sus mercados financieros.

El reconocimiento de que los resultados del modelo de globalización implementado hasta ahora, orientado por las grandes corporaciones a través de sus burocracias, con sus inevitables crisis económicas y financieras, no han sido los esperados, cuestiona su legitimidad. Incluso el control democrático es difícil de establecer y problemático, además. Como siempre, es el Estado imperialista el que siempre desarrolla la función de gestión de crisis de aquellos Estados que tienen problemas de devaluación monetaria, insolvencia para el pago de la deuda, etc. al igual que para empresas transnacionales con problemas financieros.

Organismos financieros e inversionistas internacionales con intereses capitalistas multinacionales han cambiado las estructuras de toma de decisiones económicas y políticas nacionales mediante el acoso de las crisis financieras. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera.

Los beneficiarios directos del capitalismo se recuperan cuando efectivamente afirman que la crisis económica llega a su término, pero esto significa un alto descenso en los niveles de vida y en servicios públicos para la mayoría de los ciudadanos, sobre todo la clase trabajadora. La privatización de los beneficios, riesgos y responsabilidades de los servicios públicos, también enajena las aspiraciones sociales, las cuales se cancelan si la subjetividad es excluida del orden social. Estas medidas han afectado adversamente el ingreso y los estándares de vida no solo de las clases más bajas sino también de importantes sectores de las clases medias. El futuro de los trabajadores es muy incierto.

El modelo de economía global que defienden los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial entre otros, no necesariamente promueve el desarrollo democrático, ni condiciones de equidad y justicia para las sociedades porque en sí mismo es impuesto y no propuesto y aceptado. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia.

La democracia es un componente básico del desarrollo propuesto. El concepto tradicional de la democracia ha sido reelaborado a efecto de apoyar y mantener el status quo del sistema capitalista. Tanto el Banco, como las otras instituciones son fuertes para argumentar a nivel macro acerca de las políticas y estrategias financieras, pero son pobres para argumentar o dar ejemplos a nivel micro, de los beneficios de la globalización para los pobres. Los beneficios que han obtenido algunas de las naciones del mundo que se han involucrado en los procesos de globalización por sí mismas, se han distribuido en forma equitativa. Sin embargo otras naciones no lo han logrado, sobretodo aquellas que han tenido la asesoría de las instituciones financieras internacionales. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación. Los procesos de globalización no retribuyen equitativamente ni a las sociedades ni a los individuos.

La globalización de la economía del mercado acelera la liberalización comercial, promueve la eficiencia y la competitividad de los productores domésticos y desarrolla contactos comerciales profundos. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales. Para Porter (1991), la competitividad, las empresas tienen que competir en un entorno formado por cuatro atributos que estimulan o limitan la creación de ventajas competitivas.

Estos atributos son la disponibilidad de los factores de producción, la demanda interna, la estructura y estrategia de la rivalidad de las empresas y los sectores conexos.

Los procesos de globalización están en una estrecha relación de inextricabilidad con los la competitividad. No obstante, es necesario evitar la confusión extendida existente entre los conceptos de eficiencia de la economía local, regional, nacional y la eficiencia empresarial, las cuales son diferentes y en muchos casos se excluyen mutuamente. En el primer caso se trata de una eficiencia basada en la racionalidad económica, mientras que en el segundo caso es una eficiencia resultado de la administración.

En las administraciones de los países se ha visto un incremento de asesores que acompañan la expansión económica que justifican las reducciones demandadas por las instituciones de Bretton Woods como parte de los planes de ajuste estructural que están implementando. Estas políticas de ajuste estructural neoliberal han involucrado completamente la apertura de los mercados domésticos de los países latinoamericanos al capital transnacional, la promoción de las llamadas exportaciones no tradicionales a fin de ganar divisas extranjeras tanto como sea posible para pagar las deudas, y la desregulación del capital local y los mercados comerciales, que han involucrado las impopulares medidas de austeridad fiscal dirigidas a reducir los servicios públicos y a privatizar muchas de los servicios públicos y empresas públicas, de tal forma que los fondos públicos estén destinados al pago de las deudas.

Como resultado, a pesar de que las clases altas y sus agentes de gobierno, incurren en la carga de grandes deudas en los setenta y en los ochenta, las clases bajas han estado soportando la carga del pago de la deuda durante los noventa. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Las crueles medidas de austeridad han sido adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de la región a fin de reducir sus gastos en educación, salud y otros servicios sociales de tal forma que pueden servir a la combinación de deudas de los sectores privados y públicos de los diferentes países.

Los análisis del ajuste estructural se refieren al cálculo económico de las expectativas y no consideran la apreciación a la dimensión subjetiva. De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso.

Si una economía mundial globalizada es define en los términos de conseguir otros fines diferentes a la maximización de la riqueza en el sistema, entonces la eficiencia basada en las utilidades resulta ser ineficiente a dichos fines. Ejemplos, de estos fines diferentes a la búsqueda de la eficiencia en las utilidades son: la distribución mínima de la riqueza para aliviar la pobreza y abrir oportunidades, los regímenes de uso de recursos sustentables, la defensa de los derechos de los trabajadores, así como el mantenimiento de la capacidad para la persecución de modos de vida con valor.

En una economía capitalista es eficiente para las empresas producir al más bajo costo y las técnicas para hacerlo incluyen la reducción de los costos laborales, la maximización de

las ventas y la externalización de los costos sociales. Sin embargo, no es eficiente para la economía de un país enfrentarse con problemas causados por la inestabilidad del empleo, la contaminación ambiental, el desplazamiento de pequeños productores rurales y dueños de empresas nacionales por las operaciones de las grandes empresas transnacionales y multinacionales, etc. Por tanto, la naturaleza excluyente de la transformación económica de la agricultura latinoamericana ha incrementado el empobrecimiento de la población rural y acelerado la migración del pobre rural a las ciudades en busca de empleo. El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido de los beneficios.

En los últimos diez años, las 500 mayores empresas transnacionales solamente generaron 400 mil empleos por año, en realidad insuficiente. El actual número de desempleados en el mundo alcanza los 800 millones. El problema se agrava cuando el empleo que se genera es más precario. El empleo es la forma más directa para obtener la capacidad de acceso a los mercado. Todo esto genera fisuras en el tejido social que resultan fundamentalmente de las grandes diferencias en los estratos sociales creadas por desigualdades de los ingresos.

La economía del mercado globalizador no es una estructura homogénea aunque pretende el surgimiento de una regulación descentralizada de los mercados aparejada con una democracia liberal cosmopolita y facilitada por instituciones transnacionales. Estos organismos tienen como función principal mantener la gobernabilidad política y social transparente y que transgreden las fronteras de los Estados nacionales para incursionar en áreas que antes eran de su competencia. La capacidad para gobernar un sistema político o un poder público se vincula a la gobernabilidad política. La democracia se ha convertido en una forma preponderante de la gobernabilidad política. A medida que la democracia llega a convertirse en gobernabilidad política, su contenido discursivo llega a ser más pobre y estrecho, limitándose a las opciones institucionales disponibles. Por lo tanto, las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva.

Las nuevas instituciones que traten de los asuntos y problemas de ciudadanos cosmopolitas no solamente deber estar circunscritas a políticas públicas delimitadas por intereses del estado-nación, sino que también deben implicar las exigencias de mediación y acceso a los procesos económicos, políticos, sociales y del medio ambiente de los niveles regionales e internacionales. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas.

Estas instituciones transnacionales difícilmente podrán coordinar la integración económica y social en parte por su falta de democratización de los procesos y por su significado simbólico de pérdida de identidad nacional, a pesar de que incursionan en áreas que anteriormente eran competencia del Estado-nación. Al decir de Patras (2001d) la competencia “en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los

Estados". Los intereses comunes de los individuos establecen los espacios apropiados para su expresión a niveles nacionales e internacionales. No obstante, las capacidades del Estado-nación para reducir la brecha de las disfuncionalidades y disociaciones entre los procesos de identidad cultural y de globalización económica son muy limitadas.

No obstante, la ausencia de instituciones democráticas en un Estado-nación dominado por elites económico-políticas, son éstas las beneficiarias de la globalización, mientras la mayoría son excluidos de estos beneficios. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado. De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones democráticas cuyo poder se asegura mediante el "enjaulamiento" de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder.

La tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966). El error más frecuente de las instituciones es que no son el resultado de arreglos institucionales y de negociaciones a largo plazo entre los agentes económicos. También es causa de error el adoptar modelos de aplicación global sin adaptarlos a las condiciones locales del desarrollo. Los agentes requieren de incentivos para crear nuevas instituciones mediante arreglos y negociaciones.

La economía global emergente se describe mejor como empresarialmente fundamentada, orientada hacia el desarrollo de los recursos humanos y sensitiva al medio ambiente en constante degradación, a bienes menos tangibles más que a bienes derivados de la tierra los cuales la economía clásica consideró valiosos. La participación en la economía global emergente requiere de innovación y tomar riesgos empresariales. (Sahara, 1999)

El nuevo modelo de economía de mercado global surge como respuesta a la denominada "Crisis de los paradigmas" y se fundamenta en las actividades de producción y consumo bajo una dirección que se orienta por las necesidades, en donde la primera adquiere más importancia porque involucra los derechos de propiedad de los recursos económicos, base real de la fuente del poder económico. La crisis del objeto del capitalismo se aprecia más en el dominio del valor de uso que en el campo del valor de cambio.

A su vez, estos derechos de propiedad protegen las actividades intelectuales y de negocios o mercadotecnia de la producción, en donde el mejoramiento, la innovación y la invención de nuevos satisfactores crean ventajas para mantenerse y posesionarse del mercado.

Los elementos de ésta emergente economía global son, siguiendo a North (1997), cuatro.

En primer término, la creciente movilidad de los recursos específicos de la empresa y las capacidades, especialmente los activos intangibles basados en el conocimiento, a través de las fronteras nacionales. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el

capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. Las prioridades establecidas por la globalización, consideran que los recursos que tienen más altos niveles de movilidad en las transacciones comerciales son el conocimiento, la información, el capital de cartera y la tecnología. En menor grado de movilidad ubica a los bienes y capital humano, la inversión en plantas, el capital gerencial y los principios de regulación y manejo de las empresas. La inmovilidad de los recursos se manifiesta en el capital humano de nivel medio, en los principios regulatorios y esquemas organizacionales básicos, la infraestructura y en los principios de la soberanía.

El conocimiento es un "bien público", es decir, un bien que está disponible a todos, sin que el acceso al conocimiento de un consumidor no limita el uso de otro, sin embargo, las fuerzas del mercado determinan los precios de su producción y distribución, mediante el establecimiento de incentivos protegidos por los derechos de propiedad. El concepto de bien público es un concepto multivalente, dependiendo del concepto que se tenga de lo público. La acumulación del conocimiento es un importante factor para incrementar la productividad de los recursos humanos, el capital físico y humano y el ingreso per cápita, indicadores del desarrollo y competitividad regional.

Las multinacionales concentran tecnologías superiores mientras que las empresas locales carecen de acceso informacional a esta tecnología superior, ampliándose la brecha digital y con ello la desigualdad a pesar de incrementarse las oportunidades. De hecho, una forma d adquirir tecnología de punta para las empresas nacionales o locales es conectarse a la expansión internacional de las grandes corporaciones para tomar ventaja de los desarrollos de innovación y tecnología que no le son posibles adquirirlos porque no están disponibles a nivel nacional.

En cada fase de expansión de las transnacionales se acompaña del apoyo de los estados imperiales, por lo que a la expansión de las transnacionales siempre es precedida por una expansión militar y política de los Estados imperialistas. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

La transferencia del conocimiento y la tecnología de las multinacionales a las empresas locales es un factor importante para el crecimiento económico y el desarrollo de los países. Las empresas locales carecen de los medios e instrumentos para operar al ritmo de la competitividad que exigen los flujos económicos y financieros de los mercados transnacionales. Bernhardt y Dvoracek (1999) derivan condiciones bajo las cuales las multinacionales estratégicamente ofrecen a sus trabajadores salarios más altos que sus competidores locales para prevenir el pirateo de su fuerza de trabajo, y por ende, que aprendan los secretos profesionales. Pero en términos generales, la globalización empuja hacia abajo los salarios.

En la economía global, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información instantánea y de transportación rápida, y los satisfactores (productos y servicios) que se envían a cualquier parte del mundo en poco tiempo, contribuyen a facilitar la movilidad de los recursos. Esto se hace de tal forma que la globalización de industrias

borra las fronteras entre las industrias, produciendo una reordenación de sus recursos y procesos.

Las redes de la comunicación global permiten estar en comunicación constante todo el tiempo y dan lugar a la emergencia de la sociedad altamente informatizada con la tendencia a desintegrar mecanismos de control y cohesión sociales y políticos. Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad

En las economías regionales, las actividades económicas se concentran en redes densas de comunicación. La transformación de las economías regionales están en función de los procesos de globalización económica, los procesos macroeconómicos de las estructuras de la economías nacionales y de las estrategias de desarrollo económico regional.

Las regiones difieren en la forma en que producen y difunden el conocimiento dentro de la región, así como también del acceso que tienen al conocimiento producido en otras regiones (Bretschger, 1999). Hay escasas evidencias de que la región consiste de "sociedades postmodernas" o que se está moviendo a una era postmoderna. Las diferencias en infraestructura regional para la difusión del conocimiento obliga a las regiones a especializarse en diferentes actividades económicas. Nunca antes los ciclos de innovación, desarrollo y de vida de los productos, han sido tan cortos. Un claro ejemplo lo son las innovaciones tecnológicas que se profundizan en los mercados y operadores financieros.

Los otros tres elementos de la economía global emergente son:

La creciente significación de transacciones fronterizas las cuales están dentro de la misma firma o entre firmas con acuerdos cooperativos que se efectúan.

La reducción dramática en transportación de larga distancia y costos de comunicación, y de las barreras psíquicas y culturales entre los países, tomando en consideración que se han subestimado los obstáculos al subdesarrollo, y

La creciente importancia de activos determinados por la localidad, notablemente una fuerza de trabajo educada y una infraestructura física sofisticada, las cuales influyen el establecimiento de las actividades de valor agregado por las multinacionales. Tanto para los individuos como para las naciones en una economía global, el trabajo del conocimiento constituye el primer recurso para su crecimiento económico. En todos los países, la disponibilidad y calidad de estos activos están fuertemente influidos por la política gubernamental.

La economía global es un complejo y contradictorio conjunto de mercados globales, estrategias de desarrollo nacional y estrategias corporativas competitivas (Borrus and Zysman, 1997). De hecho, los modelos de desarrollo nacional existentes son disfuncionales ante los nuevos retos que plantean los procesos de globalización económica que transforma las diferentes dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales. Cuando los intereses

de las diferentes facciones del corporativismo financiero y económico global entran en conflicto, se provocan guerras y acciones de terrrorismo, más que las diferencias entre las naciones.

Los cambios del ámbito nacional al ámbito internacional en los procesos de producción y la forma en que las naciones se integran a estos cambios, inciden en el desarrollo. El comercio global se incrementó un 237.7% en tan sólo once años, de 1983 a 1994. La globalización es en parte el resultado del desarrollo económico mundial y la apertura de los mercados nacionales a las operaciones de las corporaciones multinacionales o transnacionales, las cuales a su vez afectan a los mercados, a los proveedores, competencia, sitios y técnicas de producción, y hasta las empresas locales. Las transnacionales amenazan con absorber o desaparecer a millares de micros, pequeñas y medianas empresas. Estas corporaciones toman ventaja de los mercados laborales globales sin alterar sus fundamentos institucionales, los cuales muchas de las veces chocan contra las rigideces institucionales en las diferentes naciones donde operan.

Pero sobretodo, deciden en beneficio propio bajo formas de gestión integrada a escala mundial, las políticas y estrategias que antes eran responsabilidad y función del Estado-nación. Por su modus operandi, limitan la soberanía del Estado-nación en materia de política económica, crean culturas organizacionales híbridas, etc. La soberanía que originalmente era propiedad de los Estados-nación ha sido sustraída por organizaciones e instituciones supranacionales. Estas instituciones exigen a los Estados Nación que recorten sus presupuestos, que eliminen los programas que tienen una función social del Estado por considerarlos los causantes de las crisis del sistema capitalista.

Los indicadores de inversión directa extranjera muestran que los procesos de globalización están apoyando sus logros, en su propio beneficio. En 1998, según datos del World Investment Report de 1999 de las Naciones Unidas, existen 60 mil corporaciones transnacionales con más de 460 mil filiales en el mundo, con una inversión directa de más de 4 billones de dólares, más del 25% de la producción mundial y ventas en 1998 por 11 billones de dólares. La inversión extranjera se incrementó en 468.1% de 1983 a 1994. Sin embargo, el papel dominante lo juegan menos de cien mega corporaciones que tienen sus centros de operaciones en los países desarrollados y controlan más de la mitad de la inversión extranjera directa total con más del 70% destinada a los países desarrollados y menos del 30% a los países emergentes.

Mediante las reglas de “nivelación del campo de juego”, la inversión extranjera procedente de los países ricos exige a los países pobres, el libre acceso a sus mercados. Las 100 principales transnacionales poseen activos por más de 4.2 billones de dólares, equivalente al 14.6% de la economía mundial y mayor en 139.3% del producto interno bruto (PIB) de los países latinoamericanos. La complejidad de la realidad social de Latinoamérica contemporánea es quizás pensada como una complejidad híbrida de ideologías, prácticas y condiciones de la premodernidad, modernidad y postmodernidad.

En contrapartida, como resultado del avance de las inversiones directas extranjeras altamente especulativas bajo el esquema neoliberal, la miseria y marginación, el hambre, el desempleo, la inseguridad, etc. está creciendo a niveles alarmantes en los países menos

desarrollados. No obstante, es importante determinar hasta donde el impacto de las inversiones internacionales es responsable de las crecientes desigualdades de los países y de los individuos dentro de los países. Los trabajadores sindicados en los países más desarrollados tienen el temor de que la globalización de la economía les quitará sus trabajos para dárselos a trabajadores de los países menos desarrollados a quienes se les paga menos salario por el mismo trabajo. El futuro de los trabajadores es muy incierto.

El incremento del desempleo y el pago de salarios más bajos repercuten en una disminución de los estándares de vida. Estas medidas han afectado adversamente el ingreso y los estándares de vida no solo de las clases más bajas sino también de importantes sectores de las clases medias. La mejora de los niveles de vida de las clases más pobres es una preocupación que es común a todas las sociedades. Estas medidas han afectado adversamente el ingreso y los estándares de vida no solo de las clases más bajas sino también de importantes sectores de las clases medias.

Mientras que la población ocupada se estrecha, el concepto de solidaridad como una experiencia vital compartida también se modifica o se destruye en una sociedad cuyos lazos sociales se dañan produciendo como efectos el incremento de actos de violencia, ilegalidad, delincuencia, etc. El crecimiento de los niveles de pobreza de una inmensa masa de personas, y su desesperación por salir de ella es uno de los motivos del aumento en los niveles de violencia, en muchos de los países en desarrollo.

La identidad de los marginados que antes se definía a partir de las carencias, ahora se auto definen como ciudadanos sin viabilidad económica poniendo de relieve el papel de las estructuras del poder económico, político y social que determinan quienes tienen las oportunidades y quienes quedan excluidos del desarrollo. El “macroimperio liberal”, tal como le llama el obispo de Sao Felix do Araguaia, Brasil, que refuerza las desigualdades sociales y la dominación de las elites y oligarquías se ha impuesto sobre los Estado-nación, tiende igualmente a reforzar el dominio económico de una mayoría étnica nacional por sobre las minorías. Por lo tanto, las elites nacionales y locales de los negocios han abierto la puerta a las economías de las corporaciones transnacionales que están interesadas en mano de obra barata, recursos naturales, capital financiero y mercados de consumidores en los países latinoamericanos. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado.

En las oligarquías la sociedad se organiza en forma duálica y estamentaria es resultado de la formación de las estructuras económicas coloniales que encuentran justificación a las diferencias entre ricos y excluidos en principios morales, religiosos y jurídicos, para explicarlo como algo inherente al sistema económico. Estos problemas incluyen un pronunciado grado de explotación económica, desigualdad social y económica, injusticia social y política que ha caracterizado a la región desde los tiempos en que los indígenas pobladores de estas tierras fueron subyugados por la fuerza a la dominación colonial europea en el siglo XVI. La política contemporánea y la vida social de la región se debe en parte al legado del dominio colonial europeo, a sus instituciones de dominación ideológica y a una tradición de militarismo y conflictos armados así como también a una institucionalización de numerosas desigualdades de clases, género y razas étnicas.

La propensidad oligárquica de las organización democrática no ha sido bien entendido ni explicado. Por lo tanto, lo que se está gestando es un proceso de "neooligarquización" en las formas de dominio global. Los posibles problemas que conlleve este proceso no debe ser motivo de extrañeza ni de sorpresa tampoco. La teoría de la organización democrática es un caso general recalcitrante de las herramientas de acción humana en donde la tendencia por metas a ser subvertidas a través de la creación de nuevos centros de interés y motivación es inherentes a las organizaciones.

Un correcto tratamiento de las minorías es un asunto de seguridad nacional, ya que las relaciones entre las mayorías y las minorías son vistas como desestabilizadoras del Estado y amenazas a su existencia, por lo que justifica el uso del poder para institucionalizar la violencia y establecer medidas represivas y de sometimiento de las minorías a la mayoría. Por lo tanto, las minorías pueden expresar sus opiniones y puntos de vista, aumentar su capacidad de organización e influir en los procesos de la formulación e implementación de las políticas públicas mediante el uso de las nuevas tecnologías.

En la reciente primera cumbre del grupo de los 77 (G-77), realmente integrado por 133 países con niveles bajos y en vías de desarrollo de América Latina, África y Asia, los dirigentes condenaron la "corriente neoliberal inhumana". Así mismo, pidieron la transformación de las relaciones económicas internacionales para que sean más justas y equitativas mediante la ampliación de los beneficios de la globalización y las reformas al sistema financiero internacional.

Esto a efecto de que esté más orientado a apoyar el desarrollo y a la reducción de la pesada carga de la deuda externa que en algunos países consume de gasto público hasta un 40%. Muchos países en Latinoamérica están ahora en el camino de alcanzar economías competitivas y están en la posición de diseñar y financia sus políticas sociales por sí mismos. La complejidad de la realidad social de Latinoamérica contemporánea es quizás pensada como una complejidad híbrida de ideologías, prácticas y condiciones de la premodernidad, modernidad y postmodernidad. Estos temas en estas sociedades son predominantemente de naturaleza política doméstica: invertir o no invertir más en capital humano adoptan más políticas impositivas igualitarias y crean fondos colectivos para el cuidado de la salud y las pensiones.

Las nuevas tendencias de la economía internacional aunadas a los problemas de la crisis financiera y deuda externa de los países menos desarrollados, fueron los detonantes de los programas de reforma estructural de la economía de esos países. La reforma solamente debiera ser llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica.

En la economía internacional, las nuevas funciones extensas del Estado tienen un papel fundamental. Petras (2001d) argumenta que los Estados imperialistas como Estados Unidos, Europa y Japón, a través de las instituciones financieras internacionales presionan a

los países receptores de préstamos en el tercer mundo para reducir y eliminar barreras comerciales y privatizar empresas del Estado, lo que permite a las empresas transnacionales penetrar en los mercados y comprar empresas locales. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación.

Como siempre, los Estados imperialistas desempeñan el importante papel de gestión de la crisis para evitar las devaluaciones monetarias, insolvencia de la deuda externa y otros problemas económicos de los países menos desarrollados, así como de los problemas económicos que confrontan las empresas transnacionales

Mientras tanto, en los países avanzados, la proporción del gasto público con respecto de su producto nacional no ha disminuido, y en algunos casos ha aumentado. Lo que se requiere es una reducción del servicio de la deuda externa de los países menos desarrollados a efecto de liberar recursos que pueden ser destinados al gasto social y a la inversión productiva. Los recortes al gasto social son menos factibles en aquellos países con esquemas de tributación más progresivos porque permiten una mayor redistribución del ingreso, lo que garantiza que no desaparezcan los derechos sociales. Como resultado, a pesar de que las clases altas y sus agentes de gobierno, incurren en la carga de grandes deudas en los setenta y en los ochenta, las clases bajas han estado soportando la carga del pago de la deuda durante los noventa.

Las economías de mercados nacionales, siguiendo a Hall (1997, 1998), pueden ser liberales y coordinados. La economía de mercado liberal maneja los problemas de coordinación a través de los mecanismos competitivos del mercado y mediante relaciones contractuales a corto plazo. Las economías de mercado coordinadas se definen por el grado extensivo de confianza en otras instituciones que son diferentes a los mecanismos competitivos del mercado para resolver la coordinación de problemas, como en el caso en el cual los proveedores financieros se involucran en la gobernabilidad corporativa. La dirección de esta economía de mercado se orienta por las necesidades, a las que pretende dar una respuesta apropiada.

La gobernabilidad corporativa es definida por Berglöf and Von Thadden (1999) como los mecanismos que trasladan las señales del producto e insumos del mercado en la conducta corporativa. Estos mecanismos son, entre otros, la presión generada por los inversionistas externos, el monitoreo por los empleados, proveedores, competidores, redes corporativas, la influencia del gobierno, etc. El hecho de que todos estos actores tienen influencia en las decisiones en las organizaciones tiene implicaciones normativas. Por ejemplo, los compradores o los trabajadores usan las redes transnacionales informatizadas como una herramienta de uso político global para transformar las condiciones locales. Las fuerzas económicas y políticas condicionan la dinámica de la gobernabilidad corporativa que genera un camino de dependencia en la mayoría de los países (Bebchuk and Roe, 1999)

Las diferencias en la gobernabilidad corporativa, especialmente en los patrones de propiedad y corresponsabilidad, atraen la atención de los analistas, algunos de los cuales

sugieren que las diferencias en los sistemas de gobernabilidad corporativa se deben más a factores ideológicos que a factores económicos. Coffe (1998) que dichas diferencias persistirán pero conllevan cierto grado de "convergencia funcional" como la provisión de funciones específicas de recompensa y castigo a los administradores. El modelo presentado por Pagano y Volpin (1999) lanzan como hipótesis el enfoque en la estructura de la propiedad mutuamente consistente y un régimen legal, en el cual la estructura de propiedad se escoge anticipando al régimen legal que prevalecerá dada la estructura de propiedad. Su predicción es que lo legal puede evolucionar sólo mediante el intercambio de una alta protección a los inversionistas por una baja protección al empleo, o al revés.

En uno u otro modelo, las organizaciones empresariales encuentran formas de lograr las estrategias corporativas. El desarrollo de un modelo de competencia estratégica se fundamenta desde un punto de vista de sistemas y pasa a ser un componente esencial del desarrollo productivo porque estimula la eficiencia. En el mismo se comprende el concepto de competencia de adversarios. Se apoya en la teoría poder-dependencia y en un acercamiento analítico de redes de las relaciones de la sociología interorganizacional (Burgers, Cromartie y Davis, 1998) El enfoque de sistemas sostiene que la existencia y la sobre vivencia de cualquier organización tiene que ser entendida en el contexto de las relaciones organizacionales con el medio ambiente.

La teoría del poder-dependencia se basa en el poder relativo y dependencia de las organizaciones dentro de sus relaciones de cooperación están determinadas conjuntamente por el grado en que las partes tienen acceso a recursos alternativos. Al tiempo, el poder relativo de los participantes tiende a equilibrarse con un mayor poder de consumo, mayor poder en la negociación y una mayor participación en las ganancias. El enfoque analítico de redes considera a éstas como los actores individuales conectados por patrones de comunicación explícita o implícita en asuntos de interés común, dando lugar a la emergencia de una sociedad de redes altamente informatizada y con una orientación a desintegrar los mecanismos de control social y político.

Los mercados globales requieren de sensibilidad a las necesidades locales de productos y servicios y de su dispersión espacial y temporal por la empresa. El éxito de los negocios depende del alcance en la expansión global de las organizaciones. Los retos competitivos que plantea la globalidad de los mercados a los Estado-naciones y a las organizaciones en general, consisten en identificar las fuerzas de la creciente complejidad e intensidad para adaptarse a los cambios, así como desarrollar procesos para identificar las características de sus competidores globales y para tomar en consideración las ventajas competitivas asociadas.

Esto supone reconocer la posibilidad de una cooperación entre competidores como un intento para conspirar y para reducir riesgos, como puede encontrase en el caso dentro de una industria en particular que operen al nivel global. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, dándose el problema del "gorrón", pero las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes. La formación de las coaliciones entre competidores redireccionan su energía hacia otros que no forman parte.

Hitt, Keats y DeMarie (1998) argumentan que las empresas que se mueven a nuevos mercados tienen muchas oportunidades pero también muchos retos que vencer y ejemplifican con el aumento de incentivos para la innovación y las oportunidades de mejoramiento para ganar retornos sobre esa innovación. Sin embargo, las actividades de expansión internacionales complican las operaciones en los diversos medios ambientes. Para tomar ventajas de las oportunidades por economías de posicionamiento regionales, las empresas tienen que aprender las formas efectivas para coordinar las operaciones a través de las fronteras de muchos países.

El ritmo, la magnitud y la dirección del cambio originado por la globalización continuarán avanzando aceleradamente a través de la transferencia de tecnologías, uniendo sociedades y culturas, modificando los valores de la comunidad, ampliando la brecha entre pobres y ricos, pero también creando oportunidades y retos para las sociedades y las organizaciones. Es necesario y urgente institucionalizar un sistema de valores que anteponga el alivio de la pobreza como la principal meta del desarrollo, por encima de una operación suave del mercado. Esta reconstrucción de valores para la vida comunitaria de la sociedad del mañana no surge de la nada. Puede ocurrir que en algunas sociedades con raíces profundas en culturas específicas y con recursos humanos que no pueden ser reinvertidos cuando pueden ser reemplazados.

Tanto los individuos como las nuevas instituciones necesitan estar dotados de facultades y habilidades para poder coexistir en ambientes de cambio turbulento. Ireland y Hitt (1999) predicen que la increíble extensión y profundidad de los efectos de la economía global se muestran en las sugerencias de que en el siglo XXI, los Estado-naciones perderán su soberanía.

La pobreza seguirá profundizándose, como puede desprenderse del análisis histórico del producto interno bruto mundial de los países pobres que descendió de un 23 por ciento en 1980 a un 18 por ciento en 1988 (Chomsky). Además, la tecnología reemplazará al trabajo, y las corporaciones se asemejarán a amibas, como colecciones de trabajadores que se subdividirán en equipos dinámicos y siempre cambiantes para explotar competitivamente los recursos, capacidades y competencias de las empresas. El número de cambios estructurales que ocurren simultáneamente en el sistema internacional, resulta en sistemas de economía y comunicaciones que están más integradas.

Las nuevas estrategias para la globalidad.

La revolución tecnológica aunada al creciente fenómeno de la globalidad, están originando nuevas formas de competitividad tanto a niveles macro como en el caso de las naciones, como a niveles micro organizacionales. Existe una estrecha relación de inextricabilidad entre los procesos de globalización y la competitividad. Es posible para los diferentes actores económicos en los diferentes niveles macro y micro, sortear pero no cerrarse a las fuerzas de los cambios globales que tienen un fuerte impacto en la competitividad. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes.

Así, la competitividad constituye un elemento no solamente de las relaciones entre las empresas, sino también de las diferentes relaciones entre los sistemas económicos capitalistas. La competitividad es una fuerza inevitable que dirige y orienta el desarrollo de todos los niveles de las sociedades. Las empresas en mercados imperfectamente competitivos tienen como interés que señalar que tienen una estructura de costos bajos de tal manera que pueden lograr incrementos en la participación del mercado y desde luego, en sus utilidades.

Ha sido claro el predominio de los Estados Unidos en el proceso de globalización económica que universaliza las relaciones de producción, distribución y consumo capitalistas para imponer sus intereses geoeconómicos y geopolíticos, a través de sus grandes corporaciones transnacionales y multinacionales estrechamente vinculadas a la política internacional del Estado Norteamericano, más que a un choque de civilizaciones como pretendía Hungtington (1993).

Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Las corporaciones transnacionales estadounidenses mantienen la supremacía mundial por ser el vehículo más eficiente para la generación de tecnología y su transferencia a los mercados globales. Menos de 200 corporaciones forman la reducida oligarquía que controla la economía del mundo.

Pero el conocido dicho de que "lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos queda en entredicho" y ya no lo es necesariamente. Sobretodo después del altercado con Bill Gates de Microsoft, quien comparó la industria de los ordenadores con la de los automóviles, hecho que fue severamente criticado en la respuesta de General Motors. Hay que considerar el poderío de General Motors que mueve capitales equivalentes al producto interno bruto de México (Almeyra, 2001)

Las 5 mayores empresas electrónicas suman un poducto interno bruto mayor al producto sumado de todos los países latinoamericanos. Durante el gobierno de Clinton, los mercados y empresas latinoamericanas fueron compartidas por Estados Unidos y Europa. Si bien los analistas económicos hasta antes de 1999 advertían como situación peligrosa que los Estados Unidos tuvieran el control del desarrollo económico internacional, el horizonte económico internacional está modificándose aceleradamente. Más que reforzar el poderío norteamericano, la globalización lo limita.

La situación hegemónica de los procesos de globalización están derivando en una tendencia de formación de un sistema mundial de multipolaridad económica o de hegemonía compartida, con polos de desarrollo global en intensa competencia y rivalidad por la supremacía para mantener el control y dominio del comercio internacional, pero de una unipolaridad militar. Así, la competencia es vista como un mecanismo de motivación por los Estados imperiales rivales que empuja al logro del progreso humano. Al decir de Patras (2001d) la competencia “en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados”.

Los analistas reconocen que el mundo se dividirá en tres islas monetarias alrededor del dólar, el euro y el yen, porque Estados Unidos, La Unión Europea y Japón en la actualidad

representan el 60 por ciento del producto interno bruto (PIB) del mundo. Esto se manifestará en que no habrá dos sistemas económicos en el mundo, sino manifestaciones variadas de un mismo capitalismo globalizador que proporciona rumbo y dirección a los mercados.

Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado. Sin embargo, este capitalismo globalizador tiene como tendencia la polarización social, dando lugar a la formación de una sociedad dual.

La dualización de la sociedad se expresa en desigualdades profundas y extremosas entre los ricos, quienes reciben todos los beneficios de los procesos de globalización económica y los excluidos o marginados, aquellos que nunca tendrán la oportunidad ni las posibilidades de acceso a dichos procesos de globalización. La sociedad estamentaria y duálica formada en las estructuras económicas coloniales, justifica las diferencias entre los ricos y los pobres, en principios morales, religiosos y jurídicos, lo que consideran como parte consustancial al mismo sistema económico. El pobre en las sociedades pobres con una economía estancada o decreciente, constituyen un problema de proporciones no manejables, pero no que se imponga por sí mismo con mucha urgencia para la comunidad de las naciones, excepto como una tragedia humana que ruega por una solución de humanitarismo.

Siguiendo a Gray (1999), en el capitalismo globalizador tiene aplicación los principios del Darwinismo social mediante la Ley de Gresham (el dinero malo expulsa de la circulación al dinero bueno) al liquidar ciertos modelos de capitalismo que son más conscientes de la responsabilidad social, sacrificados precisamente por el capitalismo globalizador altamente especulativo en boga. La emergencia de este Darwinismo social representa la lucha de todo contra todo en todos los niveles de la jerarquía (Bourdeau, 1998).

Este argumento se apoya en las condiciones de inseguridad, amenaza de pérdida de empleo, stress y sufrimiento que resultan de la complicidad de arreglos precarios y la existencia de una reserva de desempleados dóciles a los procesos del desarrollo del capitalismo globalizador. La inseguridad elimina los mecanismos de acumulación de los pobres. Debido a los resultados del capitalismo globalizador que polarizan y crean una sociedad dual, la alternativa para el desarrollo económico y social tiene que venir de la construcción de un modelo de sociedad postcapitalista.

La dualización social es un fenómeno complejo que profundiza las desigualdades entre quienes reciben los beneficios de los procesos de globalización económica y los excluidos o marginados, quienes nunca tendrán posibilidades ni las oportunidades de tener acceso a estos procesos de globalización. La sociedad local y regional adquiere importancia como actor social promotor del crecimiento económico y el desarrollo más justo y equilibrado.

La aceptación de que existen diversos modelos de capitalismo desarrollándose en una misma economía global, implica el reconocimiento de que también existe una diversidad de modelos de democracia. Para decirlo en los términos de Huntington (1999), la globalización es un sistema híbrido, unimultipolar, con una superpotencia y varias potencias principales. Las mismas que reconfiguran la política económica global y en la que la participación de los Estados Unidos es indispensable para la estrategia sobre cualquier asunto global, después de que emprendieron la política de globalismo unilateral.

Y que, además, se erige en el estándar contra lo que se evalúa y utilizan la política de "cooperación bajo coerción" para aplicar sanciones económicas y las intervenciones militares a quienes no se adhieren a dichos estándares. Muchas de las veces su política es de un doble estándar A pesar de ello, su política económica exterior es de "retórica y retirada" y con una reputación creciente de "falsa hegemonía"

Las tendencias muestran transformaciones económicas de Japón y Europa con Alemania al frente, las cuales están impactando la nueva dinámica en los mercados de capital global, convirtiéndose con ello en los pilares de una dinámica que contrarresta la estrategia de Norte América. Hasta ahora no se ha demostrado que exista una relación directa entre la liberalización de mercados de capitales y el crecimiento económico. La volatilidad de los mercados de capitales limita el crecimiento económico e incrementa los niveles de pobreza. El concepto de capital global no ha sido bien definido, pero se entiende que con este término otorga autonomía al capital y se le disocia de sus relaciones espaciales y de ubicación geopolítica nacional, regional o local. La geopolítica cede su lugar al posicionamiento geoeconómico donde se organizan y aglutinan las fuerzas e instituciones del mercado.

El capital global norteamericano y europeo, al decir de Petras (2001), descansa en tres pilares inestables e insostenibles, los cuales son un sector altamente vulnerable y especulativo, un alto nivel de transferencia de beneficios, intereses y royalties y el poder político y la seguridad que otorgan esos Estados imperiales a nacionales extranjeros. Este poder político y la seguridad de los Estados imperiales dependen de sectores económicos estratégicos que son vulnerables a la competencia.

De esta forma se ha transitado de una forma hegemónica bipolar basada en diferencias ideológicas y definidas por el poderío militar a una forma hegemónica triádica definida por el poder económico, la competencia por los mercados y porque comparten una misma ideología. Lo que existe hasta ahora, es un monopolio del sistema de comercio global y lo que se requiere es el establecimiento de controles y reglas que aseguren el establecimiento de un régimen gobernante global a favor de un sistema de comercio internacional más justo.

Algunos sectores empresariales fundamentan su competitividad en el establecimiento de un monopolio de precios más que de innovaciones e incrementos en su productividad. Por otro lado, la globalización denuncia los mercados monopólicos de los servicios públicos que detenta el Estado-nación y se declara a favor de una democracia económica. Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

Las organizaciones que necesariamente realizan transacciones de recursos entre sí, extienden sus actividades en el mundo y se expanden modificando sus modelos de estructuras transnacionales a multinacionales a través de estructuras organizacionales más flexibles. Esta flexibilidad de estructuras es en los términos de modos de desarrollo informacional que permiten coordinar las actividades de producción, distribución y administración en un espacio global, a través de la contratación y subcontratación externa de funciones que antes eran propias de la misma organización. El espacio global representa la globalización la cual se manifiesta en un contexto fragmentado.

Este nuevo sistema económico desmantela la organización verticalmente integrada de la producción basada en un sistema fordista, para favorecer la flexibilidad reordenándola espacialmente en una especie de "manufactureros sin fábricas". A mediados de los setenta ocurre la transición del modelo de organización económica fordista a un modelo postfordista o toyotista mediante la implantación de nuevas estructuras, procesos y estrategias que requieren nuevos comportamientos para trabajar en ambientes de alta incertidumbre y mucha complejidad. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva .Este proceso coincide con la transferencia del mando del Estado al mercado mediante programas de desregulación que dan la regulación a los mercados.

El modelo de organización de la máquina es demasiado simple para responder a las demandas por el control de los agentes económicos y actores políticos, entonces surge un nuevo modelo estratégico que toma en cuenta la complejidad de las demandas de los diferentes agentes económicos. La propuesta de aprendizaje institucional (Kaiser, 1997) sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional.

El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones. En los sistemas de producción global, las localidades intermedias se convierten en centros regionales significativos para la tecnología en donde la experiencia y las habilidades administrativas tienden a emerger.

La concentración geográfica es ventajosa para las organizaciones en los términos de las ventajas en costos de transacción que se obtienen y porque la competitividad local sirve de base para obtener la competitividad global en función de las cadenas globales de mercancías. Las cadenas de mercancías se conceptualizan (Appelbaum and Henderson, 1995) como redes de exportación global que resultan en especialización geográfica y firmemente ligadas a la contratación y subcontratación externa global. La contratación externa puede no dar origen a ahorros porque los costos de elaboración y manejo de los

contratos es mayor que los costos de la dirección de los empleados. Así, la especialización de la producción de las economías nacionales es un efecto de la globalización comercial.

Las empresas transnacionales pueden ser contrastadas con organizaciones que usan estrategias internacionales, multinacionales o globales. Precisamente, el término globalidad tiene una connotación holística o de actividades integradas. La estrategia global se usa cuando una empresa localiza su matriz en un país mientras que sus operaciones se desarrollan en uno o más países. El enfoque internacional de las organizaciones llama por una estructura más vertical y establece conexiones estratégicas entre los países en los cuales opera. La estrategia de la empresa internacional presenta el mayor de los retos para las organizaciones que buscan incrementar su competitividad global (Boudreau, Loch, Robey, y Staub, 1998) Las ventajas comparativas construidas internamente en los Estado-nación permiten su posicionamiento en los procesos de globalización.

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Y SUS TEMAS COMPETITIVOS CLAVE.

Tipos de estrategias empresariales	Temas competitivos clave.
Global	Eficiencia
Multinacional	Responsabilidad
Internacional	Aprendizaje
Transnacional	Eficiencia
	Responsabilidad
	Aprendizaje

Fuente: Adaptado de Boudreau, Loch, Robey y Staub, 1998.

Ambos fenómenos, revolución tecnológica y la apertura de los mercados globales están cambiando la naturaleza de la competencia, la cual no puede ser sustituida por la especulación. La Internet está acelerando los sucesos a la velocidad del tiempo cíber, cambiando la prontitud de la atención que antes representaba ser la ventaja comparativa por una necesidad. Para ello, se estructura en una arquitectura, no de una gran telaraña, sino de una red con “focos y rayos” que representan centros de actividad y vínculos a otros centros que son autónomos pero que están interconectados.

Las demandas de los consumidores son más fuertes, por lo que representan grandes retos a la capacidad de las organizaciones para mantener sus niveles actuales de competitividad e impulsan a otros niveles de hipar competitividad, caracterizada por una competencia escalonada rápidamente y por maniobras estratégicas (Hit, Kyats y Demasié, 1998)

La competencia es un concepto central al libre mercado que postulan los modelos económicos y administrativos contemporáneos. Al decir de Patras (2001d) la competencia “en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados”. Los

Estados imperiales rivales promueven la competencia como un mecanismo de motivación que empuja al progreso de la humanidad. Se define como la acción de esforzarse para ganar lo que otros esfuerzos ganan al mismo tiempo, por lo que se le asocia a la rivalidad que se establece entre actores de un mercado y que por lo tanto afecta sus decisiones en materia de precios, condiciones y términos, etc. El paradigma de la competitividad ha permeado las decisiones, acciones e interrelaciones formales e informales de los individuos y las organizaciones en los mercados y quasi-mercados.

La competencia basada de compañía a compañía está cambiando a grupos de empresas que compiten contra otros grupos de empresas en un ambiente de cambio rápido, mediante mecanismos de alianzas estratégicas (strategic alliances), inversiones conjuntas de riesgo compartido (joint ventures), sociedades y asociaciones (partnerships), etc., como formas para una reestructuración global.

El problema no es tanto si establecer alianzas o no, sino más bien con quien. En la operación de una alianza, los socios pueden enfatizar la cooperación o la competencia entre ellos mismos Después de que se estructura la alianza, los socios tienen que administrar la colaboración entre sí, para que opere en un ambiente de ventaja colaborativa con suficiente colaboración de las partes. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, dándose el problema del "gorrón", pero las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes. Investigaciones recientes sobre alianzas entre competidores se enfocan en la perspectiva de las implicaciones de la conspiración, en las deficiencias que resultan de los acuerdos y en la motivación subyacente en la competencia cooperativa. (Burgers, Cromartie y Davis, 1998).

El reto en la alianza es tener una dosificación correcta de suficiente cooperación, ni mucha ni poca, significa que las empresas persiguen intereses comunes y por lo tanto se abstienen de realizar actividades que dañan a los socios. Sin un adecuado nivel de cooperación, la alianza, las alianzas no pueden operar adecuadamente, y sin la suficiente competencia se pierde la ventaja competitiva.

Los acuerdos entre las empresas competidoras tienden a reducir la conspiración y la competencia, incrementan los precios y alienta la innovación, reduce los costos de transacción y los riesgos. Más, sin embargo, las alianzas no proveen seguridad para coludirse con la competencia, porque la competencia sigue siéndolo. Por lo mismo, cierto nivel de competencia entre los miembros de la alianza es necesario como manifestación de que persiguen intereses privados y que no son enteramente compatibles o similares. Ambas, cooperación y competencia deben ser preservadas en una alianza como condiciones dinámicas y permanentes. El sentido de competencia debe ser entremezclado con el espíritu de cooperación.

Hay que hacer una distinción entre competencia y conducta oportunista. La competencia es abierta, legítima y toma ciertas formas como aprender de los socios, la protección del conocimiento tácito y del personal, previniendo la alianza de convertirse en un competidor directo del negocio propio, mientras que la conducta oportunista es autointeresada y con

cierta saña. Con fundamento en las perspectivas tradicionales sobre cooperación horizontal, confabulación y eficiencia, se puede elaborar un cuadro comparativo:

Variables	Confabulación	Eficiencia
Enfoque	Efectos de la cooperación entre los competidores sobre los clientes y los proveedores: reduce competencia, reduce la conspiración, incrementa los precios y alienta la innovación.	Reduce los costos de transacción, reduce los riesgos. La eficiencia de la alianza es comparada contra los métodos alternativos de transacciones que van desde las fusiones hasta otros tipos de arreglos.
Planos de análisis	Análisis al nivel industrial para la cooperación entre empresas en competencia	Examina alianzas al nivel de alianzas individuales, enfocando los beneficios y costos y determinando los factores asociados con el establecimiento de relaciones cooperativas entre las organizaciones.

PERSPECTIVAS TRADICIONALES EN COOPERACIÓN HORIZONTAL.
Fuente: Cuadro elaborado a partir del trabajo de Burgers, Cromatie y Davis (1998)

Las razones por las que se crean estos mecanismos de asociacionismo entre grupos de empresas son, entre otros, el logro de los costos a través de las economías de escala y por las innovaciones derivadas del acceso a la tecnología. Tienen como características propias la flexibilidad de sus estructuras múltiples que conectan a diferentes tipos de las organizaciones. La velocidad, informalidad y economía de las negociaciones y acuerdos, permiten la complementariedad de las operaciones complejas y enormes mediante tratos para compartir los costos en acciones específicas, tales como licencias, distribución, mercadotecnia conjunta, investigación conjunta, relaciones de utilidad, estructuras legales múltiples, etc.

RAZONES POR LAS QUE LAS ALIANZAS TIENEN MAS SENTIDO QUE LAS ADQUISICIONES.

- La flexibilidad e informalidad promueven las eficiencias.
- Acceso a los nuevos mercados y tecnologías.
- Habilidad para crear y desbandar proyectos con un papeleo mínimo.
- Múltiples partes comparten riesgos y gastos.
- Las partes pueden vender independientemente su identificación de marca.
- Trabajar con las partes posesionan habilidades múltiples que pueden crear mejores sinergias.

- Los rivales pueden ofrecer trabajo conjunto armoniosamente.
- Las alianzas pueden tomar multivariadas formas, desde el simple trato de investigación y desarrollo hasta grandes proyectos.
- Las aventuras pueden acomodar docenas de participantes.
- Las leyes antimonopólicas pueden proteger actividades cooperativas de investigación y desarrollo.

Fuente: Business Week (Octubre 25, 1999)

Frente a esta tendencia de surgimiento de alianzas entre empresas multinacionales que buscan compartir riesgos de apertura de nuevos mercados en un ambiente de globalidad, los gobiernos están siendo llamados para promover estas colaboraciones competitivas cuidando que no dañen la competencia y a los consumidores. Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. Las alianzas dan origen a nuevos problemas por el gran número de nuevas relaciones que significan casi siempre, más conflictos de interés, a veces difíciles de manejar, como por ejemplo, en el establecimiento de los estándares.

Por lo tanto, las alianzas se han convertido en la estrategia de los nuevos modelos de negocios contemporáneos (globales) para que las empresas alcancen y mantengan una posición competitiva en la globalización de la economía y los mercados mediante la validación de los socios y los clientes. Las industrias globales son aquéllas en las cuales la posición competitiva de la empresa en un país es significativamente influida por su posición en otros países, según Porter (1986), por lo que la competencia en las industrias globales requiere de la integración de las actividades comerciales sobre una base mundial más que de mercados separados. Al decir de Patras (2001d) la competencia "en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados".

La competencia horizontal entre regiones para atraer empresas puede compensar la competencia vertical entre los niveles de gobierno para extraerlas de las mismas compañías. En este sentido, la cadena de mercancías global se ofrece como un medio para entender la producción como un conjunto de procesos dinámicos entre empresas, más que como propiedades estáticas de las naciones.

Son por lo tanto, más típicas de los sistemas mundiales y formas similares de las teorías del desarrollo (Appelbaum and Henderson) Las estrategias de desarrollo empresarial tienden a orientar la producción hacia los sectores que tienen ventajas competitivas y un mayor valor agregado para insertar eficazmente la economía local y regional en los flujos de los mercados internacionales. Los Estados nacionales todavía juegan un papel importante en la promoción y conquista de los mercados internacionales y en la protección del mercado interno.

En este medio ambiente altamente competitivo, estas fuerzas pueden influir en las formas en las cuales los recursos inimitables de las corporaciones y sus competidores son definidos y evaluados, a nivel micro. La cooperación entre competidores en un mismo

mercado puede tener efectos restrictivos debido a políticas regulatorias. Las organizaciones son orientadas por exigencias de una mayor competitividad, eficiencia, calidad y productividad. La competencia entre las empresas de los diferentes Estados-nación, se centra más en la calidad que en los costos. Las diferencias de las políticas nacionales y los medios ambientes institucionales en cada Estado-nación impactan a las organizaciones de varias maneras y difícilmente pueden transferirse las experiencias de un medio ambiente a otro.

Sin embargo, la competencia económica internacional no afecta directamente todas las áreas de las políticas públicas, a pesar de que la competencia económica es una preocupación de los que formulan las políticas públicas. En la medida que aumenta la competencia económica en el nuevo orden mundial, los intereses hegemónicos de las grandes corporaciones tienen como alternativas aceptar las políticas que emergen o desafiarlas mediante agresiones político-militares. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

En este nuevo orden económico mundial las estrategias de desarrollo se centran más en la modernización del Estado mediante la descentralización de las funciones. La estrategia de modernización neoliberal se ha absolutizado bajo un dogma ortodoxo que no distingue diferencias de desarrollo entre los Estados nacionales. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva. Efectivamente, los procesos de descentralización impulsados por el sistema capitalista son inherentes a su propio desarrollo en las circunstancias actuales de trasnacionalización de la economía y los mercados en donde el Estado nación, que una vez fue funcional para su expansionismo, ahora es el principal estorbo.

López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una “propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y social lo permiten y, presionan en su favor.” Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica. Esto les permitiría promover el crecimiento económico y el desarrollo social de las localidades, aumentar la participación ciudadana y democratizar los procesos políticos y sociales.

Un enfoque participativo a los procesos de elaboración de políticas públicas resta oportunidades y privilegios a los grupos con intereses ya legitimados. No necesariamente resulta en lo que Scharpf, (1997) denomina una "carrera hacia el fondo" creada por un proceso de competencia regulatoria entre los Estados-nación que desregulan competitivamente en un intento para mantener la atractibilidad al capital móvil. Por un lado, las empresas transnacionales y multinacionales evaden las normatividades y los impuestos nacionales, y por el otro, los consumidores y usuarios obtienen satisfactores producidos en Estados-nación donde los costos de regulación y el pago de impuestos son bajos.

Por el contrario, las regulaciones nacionales de los productos no afectan negativamente a la integración, sino que en condiciones de competitividad regulada, inducirá a una carrera hacia arriba. La competencia del mercado de satisfactores (productos y servicios) producidos bajo diferentes regulaciones nacionales permiten a los consumidores seleccionar el sistema regulatorio óptimo, lo cual presupone, según Scharpf (1997) una distinción las "regulaciones del producto" y las "regulaciones de procesos": consumidores racionales autointeresados responden positivamente a regulaciones que mejoran la utilidad y la seguridad de los satisfactores.

La competencia del mercado funciona como un mecanismo social que sirve a un principio de organización de la actividad económica y establece las reglas de la gobernabilidad del sistema social. Al decir de Patras (2001d) la competencia "en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados". Para los Estados imperiales rivales, la competencia es un mecanismo de motivación que impulsa a los individuos en el sistema imperial al progreso de la humanidad.

La estrategia global de las organizaciones involucra pensar en todos los aspectos de una manera integrada, para concentrarse en áreas de excelencia dentro de todas las posibilidades a su alcance. La economía global integra y conecta las actividades de las empresas por medios como la exportación global y las redes laborales, concentrándolas espacialmente, pero al mismo tiempo las somete a una fuerte competencia entre ellas mismas. Esta competencia se realiza mediante procesos de fragmentación y dispersión geográfica debido a la existencia de un mercado laboral accesible globalmente. Torrijos (2001) ha denominado dispersión internacional al fenómeno mediante el cual se contraponen las fuerzas de los procesos de globalización y las de fragmentación espacial regional y local.

Es de esperarse que la integración internacional conduzca a estructuras más descentralizadas de los mercados laborales, por lo que existe cierta presión para cambiar las estructuras institucionales. Las estructuras espaciales delimitadas territorialmente por las fronteras físicas y geográficas también definen las formas de interrelaciones entre las diversas entidades. Se espera que la tendencia hacia la integración de los procesos económicos se oriente hacia estructuras de mercados laborales menos centralizados.

La movilidad de bienes, servicios y empresas trae consigo esta movilidad de los trabajos y por lo tanto tiene consecuencias en las actividades del Estado de Bienestar. Como consecuencia de estos procesos, el mercado laboral se transforma disminuyendo el empleo permanente, aumentando brutalmente el subempleo y desempleo. Así, el empleo como un medio para tener acceso a los mercados, tiene alcances limitados.

El punto de vista marginalista del mercado laboral sostiene que el mercado es un factor perfectamente competitivo en donde el equilibrio se establece entre la oferta y la demanda. Sin embargo, como resultado de los procesos de globalización, sólo el 20% de los trabajadores relacionados con actividades de manipulación de símbolos, tales como computación, marketing, etc., son los que reciben los beneficios de los procesos de globalización, mientras que el restante 80% de los trabajadores empleados en actividades

de producción y servicios, reciben cada vez percepciones menores. Sin embargo, muchos de estos servicios que en la actualidad no son rentables, aparecerán en el futuro como economías de proximidad.

El aumento de la inversión institucional global de las corporaciones transnacionales está originando importantes y trascendentales cambios competitivos en las instituciones, cuyos dueños comparan el desempeño de sus corporaciones, con los desempeños mejores existentes. Sin embargo, lo que ha hecho vulnerables tanto a las naciones como a las organizaciones, de acuerdo con Krugman (1999) es que eligen abrir sus economías a los flujos de capital internacional y luego toman ventaja de los préstamos en dólares a corto plazo que ofrecen siempre con una gran disponibilidad los prestamistas foráneos.

Ahora resulta claro que la liberalización de los mercados financieros globales no está cumpliendo sus promesas. Strange (1999) define a los mercados financieros como “disparatados e imprudentes” sobre los que los Estados y los organismos multilaterales no tienen control y cuyo comportamiento se manifiesta con “irregular frenesí” y en otras ocasiones con “injustificado abatimiento”. Lo que queda claro es que una prematura liberalización de los mercados financieros en países cuyos déficit fiscales son altos, induce entradas de capitales extranjeros que luego generan problemas. De hecho, las naciones que han alcanzado mayores niveles de crecimiento económico son aquellas que mantienen las regulaciones en sus mercados financieros.

Más que la asignación de los ahorros globales en forma eficiente y de tal forma que estimule el crecimiento, los mercados de capitales con frecuencia estimulan los flujos especulativos de dinero "caliente" que desestabilizan las economías locales. La volatilidad de los mercados de capitales limita el crecimiento económico e incrementa los niveles de pobreza. Hasta ahora no se ha demostrado que exista una relación directa entre la liberalización de mercados de capitales y el crecimiento económico. Los altos niveles de especulación de los flujos financieros globales vulneran los sistemas económicos.

El modelo del ciclo de vida predice que las tasas de ahorro son independientes del ingreso. La irresponsabilidad de los gobiernos es la causa principal de la inestabilidad y la especulación de los mercados financieros. La inestabilidad del mercado global financiero es inherente al sistema capitalista global y la principal causa de las crisis financieras de las economías emergentes. La vulnerabilidad de las economías emergentes a las crisis bancaria y monetaria se incrementa después de la apertura financiera. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados.

Según Soros (1998), el sistema capitalista global tiene cinco grandes deficiencias: la desigual distribución de los beneficios, la inestabilidad del sistema financiero, la incipiente amenaza de monopolios globales y oligopolios, el nuevo papel del Estado neoliberal y la cuestión de los valores y la cohesión social. Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante, la cual se caracteriza por la nula o

poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. Los bajos costos marginales y los altos promedios de costos permiten a los monopolios naturales establecer barreras de entrada a nuevos competidores.

Los mercados en el sistema capitalista global no tienden al equilibrio y, además, operan en escenarios políticos. En otras palabras, los procesos de globalización contemporáneos expanden el "libre comercio" con la tendencia concentradora de las operaciones mediante la formación de oligopolios, contratos entre las transnacionales y la formación de alianzas estratégicas entre las grandes empresas. De acuerdo con Soros, las especulaciones del sistema financiero internacional necesitan de la regulación para evitar catástrofes mundiales.

Las debilidades estructurales que prevalecen después de la liberalización financiera, deben ser atacadas con políticas adecuadas para canalizar los recursos financieros provenientes del exterior. Para remediar en parte estos problemas, Krugman considera que la imposición temporal de control de capital puede ayudar a controlar las crisis financieras provocadas por desequilibrios externos y devaluaciones a partir de la falta de control de la expansión económica.

"Los costos del proteccionismo son muy reales, pero cuando se suman, usualmente son menores de lo que sugiere la retórica del libre comercio" afirma Krugman (1995) para destacar que se sobrevalúan las virtudes y se subestiman los costos del libre comercio en el desarrollo económico. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera.

Por lo tanto, las economías emergentes que desean liberalizar su sistema financiero deben evaluar antes su necesidad para liberalizar en los términos de demandas de crédito, ya que los financiamientos no necesariamente van a donde se suponen que deben ir en ambientes menos regulados, o de lo contrario, se abren posibilidades para las crisis. Esquemas de créditos de bajos intereses en condiciones favorables, por ejemplo, diseñados para servir al más necesitado, casi invariablemente fallan en alcanzar a la población meta.

El diseño e implementación de instituciones para la estabilización de la moneda y la bancaria es un requerimiento necesario e importante para la liberalización financiera exitosa. Las monedas nacionales se han devaluado y pegado al patrón del dólar estadounidense, y el crecimiento de las exportaciones, principalmente de las exportaciones no tradicionales, tales como las frutas, las legumbres, as flores y algunos bienes manufacturados, han sido promovidos a expensas de la baja en la producción de alimentos para el consumo doméstico.

El éxito global está en aprender de otros en localidades lejanas a la nuestra, para determinar las sinergias y las diferencias entre los socios aliados y entre los mismos mercados. Esto significa lograr los estándares mundiales primeramente al nivel local si se quiere participar posteriormente en el mercado mundial. La globalización de las

organizaciones es en sí misma un proceso constante desde la perspectiva de la evaluación de los estándares mundiales desempeño. Zahra y O´Neill (1998) predicen cuatro tipos de competencia global: El nivel de rivalidad entre la industria globalizada, el nivel de globalización, la tasa de movimiento de la globalización y la naturaleza de los cambios que dirigen la globalización. La industria global (Graham, 1993) está formada por un grupo de empresas que actúan como proveedores en los mercados mundiales mediante el cruzamiento de las fronteras territoriales nacionales ya sea en actos de comercio internacional o cuando empresas afiliadas nacionales elaboran el producto o prestan el servicio en los mismos territorios nacionales donde se localizan sus mercados.

La competencia global está socavando la teoría de la ventaja comparativa de la economía clásica que sostiene que el libre comercio incrementa las exportaciones de productos de un país en el cual tenga abundancia de factores e incrementa las importaciones de productos para cuya elaboración se requieran factores que son escasos pero abundantes en otros países. Mientras que el volumen de exportaciones avanza aceleradamente en el ámbito mundial, los países menos desarrollados pasaron del 0.6% en 1980, al 0.5% en 1990 y al 0.4% en 1997.

En una economía empresarialmente orientada, tanto las organizaciones como sus administradores se enfrentarán a grandes retos. Se identifican tres características particulares de estos avances.

Aparte de las experiencias de pocos países en desarrollo ricos en recursos naturales, el progreso económico se está haciendo crecientemente condicionado por las habilidades de las instituciones privadas - algunas veces en conjunción con las instituciones públicas- para innovar nuevos activos, y para elevar la eficiencia en los cuales estos pueden ser utilizados con sus recursos y capacidades existentes. No obstante, en la mayor parte de los países en desarrollo, los recursos son limitados y se han convertido en la presa de las corporaciones transnacionales.

Las empresas recientemente privatizadas que ingresan a la escena global, encuentran que para ser competitivas no pueden ir solas y que tienen unir esfuerzos a través de mecanismos de vinculación y alianzas estratégicas con otras organizaciones. Estas alianzas estratégicas tienen como fin el de poder tener acceso a recursos tecnológicos, capitales, mercados, etc. Las condiciones existentes tanto en el sector público como en el privado demandan mejorar las habilidades administrativas y los procesos de toma de decisiones en todos los niveles, estimulando la innovación y la creatividad. La innovación será más importante en la economía y descansa en un buen sistema de información.

Una elevada proporción de activos creados contiene no solamente un elemento fuerte de “bienes públicos” pero el mercado para ellos es altamente imperfecto. En la economía globalizada las organizaciones les debe preocupar no solamente las exigencias públicas para hacer las cosas correctas sino también hacerlas en forma emprendedora e innovadora. Las organizaciones establecen sus estrategias con base en el desarrollo de capacidades emprendedoras de tal forma que les permita capitalizar las oportunidades que el ambiente de la globalización les ofrece.

Algunas sociedades tienen una mayor cultura emprendedora que otras y su impacto tiene relación con su propio desarrollo. Las implicaciones del desarrollo empresarial que una sociedad alcanza en altos niveles de competitividad económica tienen también relación con los niveles de bienestar. Además, frecuentemente los "bienes públicos" creados tienen múltiples usos y no son específicos del sector. Tales activos incluyen una fuerza de trabajo educada, capacidad innovatoria, competencia organizacional y una infraestructura legal y comercial sofisticada.

Existen algunas sugerencias de que la globalización está alentando la estructura económica al menos entre los países con ingresos altos y medios(Williamson, 1995), se sigue que la forma en la cual los activos físicos y humanos de una nación están organizados es lo conveniente de que se conviertan en la determinante más importante del desempeño económico de una nación. Los administradores deben tratar con un número creciente de propietarios y contingencias organizacionales, los cuales complican los sistemas de incentivos para administradores y la evaluación del desempeño de las diferentes unidades de la organización, basados en una cultura al mérito donde se conectan la compensación al desempeño alcanzado.

Las preocupaciones sobre la naturaleza del desarrollo económico se centran en las prácticas y políticas de desarrollo humano que una sociedad experimenta y que conllevan a la revisión de las prácticas organizacionales, privadas o públicas. Lechner (2000) sostiene que las políticas de desarrollo tienen que manejar complementariamente la modernización y la subjetividad. El desarrollo humano es el fin y el desarrollo económico es el medio, aunque el sistema económico neoliberal confunda y persiga el crecimiento económico como el fin y no el medio, lo que resulta en un desarrollo desequilibrado y con un excesivo costo de sufrimiento humano. Los conceptos de desarrollo humano y buen gobierno son conceptos inextricablemente indivisibles.

Una sociedad desarrollada es más humana cuando todos sus ciudadanos son habilitados con capacidades o competencias para ser mejor en vez de para tener más. El desarrollo humano posibilita a los individuos a tener acceso a un conjunto de capacidades tanto para la producción de riqueza como para el logro de su realización personal. Por ejemplo, el empleo de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento (TICs) representan nuevas oportunidades para el desarrollo humano mediante la creación de capital humano y social. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence). El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países.

Así, el desarrollo económico está sostenido en gran parte por el desarrollo humano, aunque desafortunadamente no siempre el desarrollo económico se traduce en desarrollo humano. El crecimiento económico es el medio y el desarrollo humano es el fin. La noción de crecimiento económico implica la medición cuantitativa en términos del PIB per cápita y el promedio real en el consumo.

Desde cuando se inició la economía del desarrollo, en años posteriores a la Primera Guerra Mundial, su evolución fue de una disciplina teórica separada que enfatizó la acumulación de bienes de capital, como la maquinaria y el hardware. Si embargo, el énfasis se ha modificado para concentrarse más en el conocimiento organizacional o software (Ellerman, 1999) Con esta tendencia, las organizaciones enfrentan retos excitantes para la generación y aplicación de nuevo conocimiento que se transforme en estratégico.

Un proceso de globalización cuestionado.

Los procesos de globalización están siendo seriamente cuestionados por diferentes análisis, algunos de los cuales muestran los beneficios y logros, mientras que otros cuestionan seriamente los beneficios porque no son compartidos por todos los actores. Estos análisis muestran las contradicciones existentes entre su universalidad y particularidad, su grado de integración o de fragmentación, su homogeneización o diferenciación, su yuxtaposición o sincretismo y su centralización o descentralización (Fernández Santillán, 1999). Aparte de otras contradicciones ya señaladas por Sonntag (1995), destacan la contradicción de los beneficios asimétricos para los diferentes agentes económicos, la polarización y fragmentación de sociedades y la incompatibilidad entre democracia y globalización.

Los procesos de globalización son cuestionados por el énfasis que hace en los aspectos comunes y en las similitudes de la humanidad sin que necesariamente se descuiden sus diferencias, así como también por la extensión de los beneficios y las responsabilidades al nivel global. Algunos analistas (Ali, 2001) sugieren que el mundo globalizado debe ser creado a imagen del superpoder existente, y que por lo tanto debe haber una unificación de los aspectos económicos, sociales, culturales, etc., bajo una determinada orientación política. Sin embargo, en el espíritu y los objetivos de la globalización, se aprecian las diferencias y se tratan como fundamentos para la autoexpresión, la creatividad y la coexistencia humana. No obstante, cierta convergencia en prácticas organizacionales efectivas, en áreas de regulación comercial y en derechos humanos, es más probable que ocurra.

La nueva sociedad postindustrial surgida de la sociedad industrial enfrenta dilemas para combinar estos universalismos y particularismos necesarios. También para integrar la gobernabilidad democrática de las instancias globales, regionales y locales. La tendencia de las sociedades actuales a buscar la gobernabilidad democrática a pesar de sus problemas económicos, políticos y sociales, es lo que Torrijos (2001) denomina como la gobernabilidad reluctante, la misma que considera ser una gobernabilidad que emerge desde la ingobernabilidad de los ambientes altamente inestables, inciertos y caóticos.

La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. Resulta una contradicción que en una sociedad postindustrial que desarrolla sistemas de producción flexibles, las mega corporaciones tienen la tendencia a centralizar más los procesos decisorios y de estrategias.

En términos generales, la globalización se manifiesta por un largo, inestable y lento período de crecimiento caracterizado por un cuestionamiento de sus dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales e ideológicas. Las críticas se centran en argumentos que enfatizan los beneficios de la globalización en el crecimiento, los incrementos de productividad, el avance de las capacidades tecnológicas. Petras (2001c) analiza la productividad baja lograda durante los años comprendidos de 1995 a 1999 cuando se alcanza un incremento del 0.3% de la productividad que puede atribuirse a la revolución tecnológica.

Pero la globalización no distribuye adecuada y eficientemente la riqueza y los ingresos generados a favor de los más pobres y por lo contrario, redistribuye la riqueza y el ingreso a favor de quienes menos necesitan. El alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma. Un mayor problema es dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados (De Swaan Abram, 1997).

Los analistas reconocen ahora que el movimiento hacia la globalización es más arduo y difícil de lo que se había pensado inicialmente y que está alcanzando sus propios límites. Muchas de estas reacciones son muy agrias, como por ejemplo, Pieza Rugarcía (1999) comenta: “Haber iniciado el proceso mal llamado global, puso a la mayor parte de los países, a merced de altas concentraciones de dinero en pocas manos, y de haber abierto el apetito de ilusionados, apetito que sólo podría ser atendido con espejismos dado que la mesa puesta pronto se quedaría hasta sin migajas”. En este sentido, las privaciones que bajo el capitalismo globalizador enfrentan tanto consumidores como productores potenciales presionan sobre el sistema global y lo desequilibran.

Sus alcances, ventajas y beneficios no han sido generalizados para todas las economías regionales y nacionales, creando fuertes desequilibrios y tensiones de crecimiento económico y desarrollo socio-político. Las transformaciones de las economías regionales están en función de sus propias estrategias de crecimiento económico, de la estructura macroeconómica nacional y de los procesos de globalización económica.

Las recientes crisis económicas mundiales que demuestran una crisis severa del capitalismo, nos muestran dramáticamente que tan lejos puede ir la economía global, como en el caso de la prolongada y profunda recesión del sector de manufacturas en Estados Unidos que ha tenido un fuerte impacto en la economía mundial, principalmente para los países latinoamericanos y asiáticos, afectando la implantación del modelo económico neoliberal. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados. Hay que considerar que la crisis del objeto del capitalismo es una crisis que se debe más al valor de uso que al

dominio del valor de cambio. La desaceleración del crecimiento económico, más que explicar las causas de las crisis económicas, se manifiestan como sus síntomas.

Las crisis económicas y financieras del capitalismo transnacional, que han causado grandes problemas al desarrollo y crecimiento de los países en desarrollo, se iniciaron en agosto de 1982, cuando México anunció que no podía cubrir el servicio de su deuda externa. A partir de este anuncio, los bancos y las instituciones financieras internacionales suspendieron los créditos a los países del tercer mundo. Le siguieron a México, durante la década de los ochenta, los países de bajos ingresos de América Latina y África. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas.

Como resultado de la crisis de la deuda experimentada por los países tales como México, Bolivia y Argentina durante los ochentas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras agencias de préstamos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, impusieron políticas de ajuste estructural de libre mercado en los gobiernos latinoamericanos a fin de asegurar que dedicaran suficientes fondos a pagar la deuda internacional. Los contemporáneos latinoamericanos han heredado las estructuras del Estado basadas en e autoritarismo político.

La exclusión de grandes sectores de la población de los procesos gubernamentales, así como de las formas crónicas de violencia política, levantamiento militares frecuentes y dictaduras que provocan insurrecciones populares así como una brutal supresión de ellas. Además, las dictaduras militares, la represión militar de las protestas e insurrecciones populares, las invasiones militares foráneas y la frecuente intervención de los militares en los procesos gubernamentales han sido un elemento continuado y prominente de la escena política. Sin embargo, los regímenes civiles que han reemplazado a las anteriores dictaduras militares no han sido ni verdaderamente democráticas ni soberanas.

Nuevamente México tiene otra severa crisis económica y financiera en 1994, cuyo "efecto tequila" tuvo consecuencias en otras economías en desarrollo. Le siguió la crisis financiera del Sudeste asiático en 1997-98, cuyo "efecto Singha" provocó también graves consecuencias que derivaron en crisis financieras en economías de países tan lejanos como Rusia y Brasil. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados. Como resultado, a pesar de que las clases altas y sus agentes de gobierno, incurren en la carga de grandes deudas en los setenta y en los ochenta, las clases bajas han estado soportando la carga del pago de la deuda durante los noventa.

Soros argumenta que una fe ciega en las fuerzas del mercado ha generado inestabilidades causantes de las crisis económicas y financieras. No obstante, va más allá al predecir que si no se logra preservar la paz y neutralizar los excesos de los mercados financieros, la economía global se colapsará.

Los países que más se benefician de los procesos de globalización, con ganancias medidas en los términos de incrementos de niveles de ingresos y de vida, son aquellos que

ya cuentan con la estructura de un mercado interno, un nivel de desarrollo avanzado y un ingreso per cápita superior al promedio del mundo. Sin embargo, el desarrollo no es acerca de crecimiento anual del producto interno bruto, está más bien relacionado con la satisfacción de las necesidades básicas de la gente.

Resulta una paradoja que mientras la globalización ha traído beneficios al nivel macroeconómico para estos países, sin embargo, al nivel de los ingresos per cápita, éstos no se corresponden y están decayendo entre los trabajadores principalmente. El futuro de los trabajadores es muy incierto. En todo caso, los beneficios del libre comercio no han sido compartidos hasta ahora. Por el contrario, los costos de la globalización han sido demasiado altos para algunos países y regiones del mundo que no pudieron sostener el ritmo de expansión sostenida durante el tiempo necesario para eliminar las diferencias con los países más avanzados.

Frente a los efectos de los procesos de globalización económica, se tiene que decidir entre aceptarlos o rechazarlos y en todo caso como confrontarlos. Después de las protestas a las reuniones de la Organización Mundial del Comercio (OCM) en Seattle, y a la del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington. Seattle dejó en claro las dificultades que hay en las negociaciones del comercio internacional que resultan de la combinación de objetivos heterogéneos del Estado y el activismo de las organizaciones no gubernamentales (ONG'S). Así, una larga lista de protestas ha seguido a partir de Seattle en contra de las reuniones de los organismos multinacionales han celebrado desde 1999.

Las protestas de los globalifóbicos tienen como causas una larga lista de quejas que van desde la irresponsabilidad del medio ambiente, favoritismo por la elite de instituciones de los ricos y poderosos, el alto valor que se pone en las utilidades del comercio por sobre la seguridad y salud del consumidor, la destrucción de los trabajos, la disolución de la soberanía del Estado y más particularmente el control sobre la economía nacional y el sistema financiero. Por otra parte, los globalifílicos, campeones de la globalización y sus prácticas y prescripciones de libre comercio, liberalización y privatización, replican que estas quejas son exageradas e infundadas (Goulet, 2000).

Las tres agencias internacionales son conocidas por la literatura de protesta como la "tríada global" que obliga a los países a reestructurar sus economías a favor de los administradores corporativos, los inversionistas y especuladores. Igualmente, ha habido manifestaciones en las reuniones de Bangkok, Davós y la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para revisar los avances de la Cumbre Social de Copenhague. En todas estas reuniones de la elite financiera internacional se anuncian con un mensaje simple que privilegia a las personas por sobre las ganancias y como un abierto rechazo al neoliberalismo y a las instituciones de Breton Woods, los implementadotes de los procesos de globalización y las políticas neoliberales de libre mercado, tendrán que reformular sus estrategias.

En Seattle se juntaron más de 40 mil personas entre trabajadores, estudiantes, activistas de derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales, para protestar por los efectos de las decisiones que toman los implementadores de los procesos de globalización.

Davós reune a poco más de mil representantes de organismos financieros internacionales, empresarios, gobernantes y políticos para decidir las tendencias de la política económica internacional.

Ciertamente, en la reunión de Davós, la policia ha cerrado el paso a los manifestantes. Más recientemente, en enero del 2001, mientras se efectuaba la reunión de los ricos en Davós, en Porto Alegre, Brasil, se realizaba al mismo tiempo, el primer Foro Social Mundial, la que al decir de Noam Chomsky (2001), proporcionó " una oportunidad sin precedentes para la unión de fuerzas populares de los más diversos sectores, en los países ricos y pobres, en el sentido de desarrollar altarnativas constructivas en defensa de la aplastante mayoría de la población mundial que sufre constantes agresiones a los derechos humanos fundamentales". Fue también "una importante oportunidad para avanzar en el sentido de debilitar las concentraciones ilegítimas de poder y extender los dominios de la justicia y la libertad".

Será difícil que estas instituciones dejen de ser los agentes de las corporaciones transnacionales para convertirse en los agentes de los pobres. Pedir su desaparición debido a que la implementación de sus programas no ha dado siempre buenos resultados es quizá un error. Queda claro que estos organismos multilaterales requieren de reformas radicales a sus estructuras y funciones para sacar a los manifestantes de las calles y a los políticos de estas agencias. La propuesta nueva arquitectura financiera internacional debe dotar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional de funciones para abatir la desigualdad y la pobreza, así como democratizar sus decisiones para evitar el predominio en la agenda del grupo de los siete (G7) representado por los países más poderosos. Quizá lo que se requiere es la creación de nuevas instituciones con autoridad económica transnacional capaces de formular una nueva coordinación de políticas económicas a niveles regionales y global y bajo la dinámica de los procesos económicos y de los mercados internacionales. Los Estados juegan un papel importante en la protección de los mercados internos y en la conquista y promoción de los mercados internacionales.

La turbulencia política puede afectar la agenda de los procesos de globalización económica. Quienes protestan contra las acciones de los organismos multilaterales, sólo muestran sus temores de que las políticas de la globalización sólo benefician a las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales en detrimento de la economía local, pero sobretodo de los ciudadanos (Malking, 2000). Sus decisiones antidemocráticas debilitan la soberanía de las naciones y sus regulaciones en materia laboral y de medio ambiente. Los movimientos sociales y grupos que defienden los derechos laborales y el medio ambiente pueden tener ciertas limitaciones de acceso a la información correcta, a las redes de información y comunicación y a los recursos financieros necesarios para realizar sus actividades.

Las redes de información y conocimiento constituyen uno de los principales elementos para la integración económica, política y social. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. La información y el conocimiento son productos que requieren mucha inversión en investigación y desarrollo pero que tienen una gran demanda. Pero también, los argumentos de los manifestantes son la expresión de la inconformidad social y la

oposición franca a la aplicación de políticas y premisas neoliberales que impone la globalización.

Estas políticas y premisas pueden sintetizarse con "la sustitución del ser humano por la utilidad económica". Así como "la imposición de las supuestas fuerzas del mercado para reemplazar la responsabilidad política de los gobiernos y sociedades" (Montemayor, 2000) En las palabras del ministro francés Lionel Jospin, estas manifestaciones de inconformidad son una "señal positiva del nacimiento de una opinión pública mundial, de 'una toma de conciencia global' sobre los riesgos de la mundialización". Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. Para Giddens (1999:36) los riesgos son "la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza."

El mismo FMI se encuentra en proceso de reforma entre cuyas propuestas destaca la de Estados Unidos que sugieren aumentar los mecanismos de control y supervisión sobre la balanza de pagos de los países así como una reducción sustancial del financiamiento a naciones que pueden tener acceso a los mercados privados de capitales. Para los formuladores de las políticas y los políticos será difícil encontrar una base común a todas las demandas ciudadanas, por las dificultades que implican el rediseño de las agencias multilaterales que prestan recursos financieros a los países en crisis así como de aquéllas que establecen los estándares globales laborales y del medio ambiente.

Sin embargo, las reformas no serán efectivas mientras no se tome en cuenta la opinión de los países emergentes y menos desarrollados en igualdad de proporción al voto de los principales prestatarios. La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica.

El objetivo de esta reconsideración será para considerar la oposición motivada por el descontento generalizado por los efectos de su aplicación. La oposición a los procesos de la globalización es real y está creciendo. Estas fuerzas de oposición ya representan un reto para las políticas de libre mercado que objetan. Los activistas reconocen que tienen raíces internacionalistas que no rechazan una comunidad global pero la quieren más justa.

Algunos de los efectos perniciosos de la globalización son el lento crecimiento económico, crecimiento sostenido de las deudas, el aumento de la miseria y pobreza, aumento en las tasas de desempleo, desigualdad social y el debilitamiento de la estabilidad económica, política y social. En el ámbito internacional se requiere un entorno económico estable que favorezca el crecimiento, establezca limitaciones a la especulación de los flujos financieros y eliminen su volatilidad asociada a los procesos de globalización. Es difícil de controlar la volatilidad delos mercados financieros por las naciones pequeñas en desarrollo

Además, la emergencia de un nuevo orden que propicia la aparición de la violencia social y el agravamiento de los problemas de seguridad pública, salud y ecología, etc. De acuerdo con Bourdeau (1998), el fundamento último de este entero orden económico que pregona el signo de la libertad, es en efecto la violencia estructural que resulta del desempleo, la inseguridad de tener trabajo y la amenaza de despido que implica.

Pero además, en este nuevo orden económico mundial se modifican las estrategias de desarrollo en torno a la modernización del Estado mediante la descentralización de funciones y la desaparición de la asistencia social. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva. Las condiciones para el funcionamiento "armonioso" del modelo micro-económico individualista están dadas en el fenómeno masivo de la existencia de una reserva de desempleados.

La globalización está polarizando la distribución de la riqueza, es decir, lo que está resultando es la globalización de la pobreza en sí. La globalización del mercado impacta en la inutilización de las actuales capacidades de los pobres y los elimina por considerarlos obstáculos para el desarrollo de procesos productivos que requieren de la competitividad global y los condena a la extrema pobreza o a su desaparición. El pobre en las sociedades pobres con una economía estancada o decreciente, constituyen un problema de proporciones no manejables, pero no que se imponga por sí mismo con mucha urgencia para la comunidad de las naciones, excepto como una tragedia humana que ruega por una solución de humanitarismo.

Esta desigual distribución de la riqueza que se produce entre los diferentes Estados-nación, tiende también a reproducirse y profundizarse al interior de cada uno de los estados-nación, acentuando los rasgos contradictorios del sistema capitalista tanto a niveles de globalidad como de localidad. No hay justificación para decir que los procesos de globalización están dando como resultado beneficios para todos los individuos y las naciones. Al contrario, existen amplias evidencias de que millones de pobres y personas vulnerables han sido afectados adversamente.

Los dos términos, globalización y pobreza están íntimamente asociadas. Los procesos de la globalización están correlacionados negativamente con el crecimiento del ingreso per cápita, entre el 40 por ciento de la población mundial más pobre, de acuerdo a un informe reciente del Banco Mundial por Lundberg y Squire. Se argumenta con respecto a la relación entre globalización, crecimiento y pobreza, que si la liberalización de los mercados significa hacerlos más competitivos, considerando que son caracterizados por una desigualdad en los ingresos y la riqueza. Esto conduce a situaciones del óptimo de Pareto (tomando en cuenta que no existen externalidades), pero la desigualdad es un factor que incide en bajas tasas de crecimiento económico, lo que a su vez no contribuye a reducir la pobreza, en parte debido a que le crecimiento económico es considerado como un fin en si mismo. El crecimiento económico alivia la pobreza mediante la creación de oportunidades de trabajo y el incremento de los salarios reales.

El Banco Mundial ha determinado los niveles de severidad de la pobreza por el número de personas que viven con un ingreso diario menor de 2 dólares. Los datos son contundentes. De 1990 a 1998, el número de personas viviendo por debajo de la línea de ingresos per cápita diarios a aumentado de 2.7 a 2.8 miles de millones, mientras que la brecha entre los países desarrollados y los países pobres se ensancha cada vez más y deriva en una alta polarización social. Según datos de Ramonet (2000), la relación entre el país más rico y el más pobre era de alrededor de 3 a 1 en 1816.

Para 1950 ésta relación era de 35 a 1, en 1973 de 44 a 1, de 72 a 1 en 1992 y de 82 a 1 en 1995, lo que demuestra que a pesar de que la Nueva Economía a contribuido al crecimiento económico de algunos países, sin embargo, los beneficios no se desparraman a la mayoría de ellos, lo cual demuestra el carácter poco competitivo y la alta concentración monopólica existente en este sector. Los alcances de la nueva economía son limitados para resolver la crisis del capitalismo. Por lo contrario, la agrava, debido a los altos niveles de las expectativas especulativas de los capitales.

El modelo de crecimiento económico centrado en el "desparrame" o "trickle-down" se ha desacreditado, sobre todo cuando numerosas investigaciones han encontrado que la expansión económica de las dos décadas recientes, no ha reducido la pobreza, y por el contrario, ha profundizado los niveles. Este modelo de crecimiento económico de desparramiento consideraba que los beneficios logrados por los niveles superiores de ingreso, por efectos de "derrame" también beneficiarían a los niveles inferiores de ingreso. Pero la noción de crecimiento económico solo implica al medición cuantitativa del producto interno bruto per cápita y el consumo real promedio.

Sin embargo, Enders y Hoover (2001) muestran que los efectos del crecimiento económico y otras variables explicativas de la tasa de pobreza, no son estimaciones lineales y que por lo mismo, la expansión económica de las últimas dos décadas, en forma de crecimiento robusto, si tuvieron efectos importantes en la reducción de la pobreza. Ciertamente, hasta ahora, no existen caminos pavimentados para alcanzar la prosperidad de los países pobres como tampoco existe la voluntad de los países más avanzados para ser más justos y equilibrados en la consecución de sus propios intereses. Los países más ricos siguen enajenados en la concentración de recursos y bienes suntuarios mientras que los países más pobres ni siquiera cuentan con los recursos más esenciales para la subsistencia de su población.

Mientras que pocos reciben los beneficios de una concentración de la riqueza y viven muy bien, la pobreza económica y la pobreza intelectual se están profundizando en el Tercer Mundo y constituyen una bomba de tiempo para las naciones mas desarrolladas. Un informe de las Naciones Unidas de 1999 da a conocer que la fortuna acumulada de las 200 personas más ricas del mundo son dueñas de más de un millón de millones de personas, mientras que los 582 millones de habitantes de los 43 países menos desarrollados tienen ingresos por 146 millones de dólares. La riqueza de las tres personas más ricas del mundo es mayor que el total del producto interno bruto de todos los países menos desarrollados con 600 millones de personas. El patrimonio de las 15 personas más ricas del mundo supera el producto interno bruto de toda el Africa subsahariana.

Las causas del incremento de los niveles de pobreza y marginación de grandes multitudes de individuos, pueblos y naciones se encuentran en los límites de las acciones irresponsables e incontrolables de la rapacidad de los imperios corporativos, los cuales a su vez, al explotar los recursos naturales, destruyen la biosfera y los ecosistemas. También la pobreza económica y la pobreza intelectual en los países menos desarrollados es consecuencia de las condiciones de libertades individuales.

El fenómeno de la globalización es irrevocable y está afectando todas las prácticas humanas. El desarrollo de la tecnología de las comunicaciones está propagando la homogeneización de una nueva visión del mundo: modelo de desarrollo, instituciones, ideología, estilo de la vida, cultura, valores, patrones de consumo, etc. La homogeneización es más de valores superficiales que de valores profundos, es más de cambio superficial que de cambio fundamental.

La emergencia globalizadora de valores basados en una cultura de consumismo, homogeneiza cada vez más las culturas nacionales y aún las indígenas, a través de un proceso contradictorio en sí mismo y además de que el consumismo se manifiesta como un fenómeno inherentemente pasivo, de secularismo comercial.. El sistema capitalista induce artificialmente las necesidades y deseos de consumo creciente y continuo. Esta destrucción de las culturas nacionales arremete contra la insistencia de Herder, el romántico alemán, en la defensa de una cultura nacional como la esencia espiritual única que tiene que cerrase y protegerse de la contaminación extranjera.

Mientras que por un lado, esta emergencia globalizadora de los valores se presenta como una tendencia a la convergencia, por el otro lado se presenta al mismo tiempo a la divergencia de la sociedad. Berruga (1997) argumenta que "La segmentación tradicional de intereses y valores por niveles socioeconómicos y educativos, se ve hoy alimentada por productos de la comunicación y la cultura, que tienden a romper formas de conciencia nacional y, más claramente aún, las de aspiración universal". Es quizá, esta perspectiva socioeconómica interesada en las utilidades con un énfasis en el establecimiento social dentro del cual emergen las actividades, la más adecuada para procurar la justicia en la complejidad (Zafirovski, 1999) del fenómeno neoliberal globalizador.

Los efectos de los procesos de globalización no son del todo homogéneos y afectan en formas diferentes a los diversos países y regiones, favorecen a los sistemas económicos en los cuales el capitalismo nacional tiene poca intervención estatal por sobre aquellos que tienen una fuerte dependencia de la organización política del Estado. La intervención consciente y directa, proceda del Estado o de cualquier otra entidad es desacreditada, en nombre de la libertad individual, es desacreditada y condenada en beneficio del mercado como mecanismo anónimo. La globalización es una etapa superior de desarrollo del capitalismo que trata de imponer su modelo para regular la interacción humana con fundamento en las relaciones económicas del mercado y minimizando la acción del Estado.

Jacques Maritain afirma que el Estado es únicamente parte del cuerpo político, cuya función específica consiste en mantener la ley, en promover la prosperidad común y el orden público, y en administrar los negocios políticos. El Estado es una parte especializada de los intereses del todo. No es un hombre o un grupo de hombres: Es un conjunto de

instituciones que se combinan para formar una máquina reguladora que ocupa la cumbre de la sociedad, concluye el análisis de Maritain.

Así, en teoría económica, el Estado comprende el ejercicio del poder a través de instituciones de gobernabilidad, la cual puede ser democrática en el espacio territorial en el cual ejercita este poder. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición". Es en este espacio territorial nacional donde se contiene a la sociedad, a pesar de que los procesos de globalización están acelerando la desterritorialización del Estado para ceder su lugar a nuevas formas espaciales de organización geopolítica y geoeconómica.

La sociedad local y regional adquiere una relevancia inusitada como actor social en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo social más justo y equilibrado. Esta promoción del crecimiento económico corresponde y es producido bajo la protección de los gobiernos.

El desarrollo social debe pivotar sobre programas de desarrollo humano que promuevan la formación de capital humano y social y faciliten el acceso a mayores oportunidades de disfrute y uso de recursos y bienes sociales a efecto de elevar los niveles de calidad de vida y bienestar social. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence). Las instituciones determinan las interacciones económicas, sociales y políticas que influyen en el desarrollo humano y social. Lograr la mejora de estos niveles de calidad de vida, hasta alcanzar una sociedad satisfecha y sin asimetrías pronunciadas, es factible con la instrumentación de mecanismos institucionales de gobernabilidad que promuevan la asignación de recursos y bienes sociales.

Sin embargo, hay que recordar que la ley es el producto de un proceso político y en el contexto de una reforma regulatoria, los problemas que pueden ser atribuidos a la ley están en el centro de la estructura del sistema político. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente a la reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación. Una gobernabilidad regulatoria (Henisz, 1999:353) puede ser de carácter administrativa, legislativa o las empresas pueden ser organizadas por el Estado ya sea en posesión del Estado o como departamento de gobierno bajo un control político

Los procesos de globalización impulsan nuevas instituciones económicas y políticas que buscan superar a las anteriores, las cuales han evidenciado debilidades estructurales para afrontar los problemas de injusticia y desigualdad sociales y para asegurar la cohesión social. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras

se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado. Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Pero mientras los sistemas políticos nacionales están perdiendo la gobernabilidad de la integración económica, las instituciones políticas supranacionales no tienen todavía la capacidad para gobernar la economía capitalista con el mismo grado de efectividad y legitimidad democrática. Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional.

Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Las instituciones políticas determinan el logro de los resultados económicos y la capacidad política para gobernar un sistema político o un poder público, es decir inciden en la gobernabilidad.

Un sistema de gobernabilidad requiere de un marco de instituciones que procesen los acuerdos y negociaciones de los agentes económicos y de los principales actores políticos y sociales. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

Los elementos requeridos por las instituciones están definidas por las capacidades para "gobernar" los comportamientos de agentes y actores diferentes, quienes tienen que aceptar los parámetros institucionales en los que actúan. De hecho, las instituciones que no son producto de acuerdos a largo plazo y de arreglos institucionales entre los diferentes agentes económicos, tienen serias ineficiencias, en parte debido a la falta de adaptación de los modelos globales diseñados por los organismos multilaterales internacionales a las condiciones de desarrollo local. La adaptación al cambio involucra costos de transacción más bajos y mejores resultados que la reforma. Este desarrollo local integral debe considerar las cuestiones de pluralidad e inclusión de los intereses de diferentes agentes económicos y actores políticos. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos.

La carencia de instituciones políticas que regulen la gobernabilidad de las organizaciones con sus comunidades, ya sea a través de los partidos políticos o de políticos, es el principal obstáculo para que se desarrolle la gobernabilidad global basada en la legitimidad de instituciones globales. Al decir de Haliday (1997: 23), ya se cuenta con un sistema de gobernabilidad global con muchas capas, aunque "uno de los problemas principales es el de resolver, a través de reformas, los efectos de un sistema que ha estado vigente durante varias décadas.

El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma. La reforma solamente debiera ser llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio¿Cómo hacer que este sistema de gobernabilidad sea más efectivo, más justo, y más responsable frente a la cambiante situación internacional?". La institucionalización de los partidos políticos es un elemento esencial para la obtención de una gestión política eficiente de la gobernabilidad democrática, cuya calidad se vincula con los arreglos político-institucionales.

La gobernabilidad democrática se entiende como "la capacidad de los gobiernos para ejercer el poder político democrático de forma continua en condiciones de legitimidad" (Castro, 2000). Torrijos (2001) ha denominado gobernabilidad reluctante a la tendencia de las sociedades actuales que buscan la gobernabilidad democrática a pesar de los múltiples conflictos económicos, políticos, sociales, etc., la cual considera ser una gobernabilidad que emerge de la ingobernabilidad de los ambientes altamente caóticos, inciertos e inestables. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

La efectividad es pensada como el alentar la legitimidad en las escalas macro y micro. Se trata de establecer nuevas instituciones que completen, regulen y gobiernen la profundización de los fenómenos de la globalización. Nuevas organizaciones en los que los individuos identifiquen las oportunidades de desarrollo de capacidades personales con el adecuado funcionamiento del sistema social. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence).

La complejidad, incertidumbre, e intensidad de la economía global actual reta a los gobiernos de los Estado-naciones, a los líderes de las corporaciones, empresas, etc., a competir en materia de comercio, inversión y nuevas tecnologías entre cualquiera de ellos, en cualquier lugar y tiempo.

Muchas de estos actores consideran que sus "ventajas competitivas" incluyen recursos humanos y naturales baratos: "los salarios de miseria, las pésimas condiciones sanitarias, la superexplotación de los trabajadores y campesinos, el trabajo femenino e infantil, la desconsideración por los recursos naturales... tanto en los países industrializados como en los dependientes, hay una fuerte oposición a hacer pagar esa "competitividad" a los obreros y campesinos y los pobres y a excluir del libre comercio la mercancía mano de obra (cuyo precio, el salario, sigue determinado sobre bases nacionales, para gran beneficio de las trasnacionales, que así tienden a rebajar también los salarios y niveles de vida en los países metropolitanos)", (La Jornada, 1999). La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado. Además, el tradicional sector campesino está declinando como resultado de que el campesinado se orienta más a la obtención de salarios en fuentes de ingresos y a su migración a las ciudades.

Las economías menos desarrolladas están siendo integradas en la economía capitalista global como mercados cautivos y la fuente de recursos naturales y humanos baratos para las transnacionales que tienen su base en Norteamérica, las cuales se encuentran retadas por las corporaciones transnacionales que tienen su base en Europa y Asia.El futuro de los trabajadores es muy incierto. Como ejemplo, es suficiente citar que más de 300 millones de infantes son explotados brutalmente en el mundo.

Tanto es así, que la tendencia en los procesos de toma de decisiones y formulación de estrategias es clara: mientras que los trabajadores discuten sus asuntos al nivel local, las megacorporaciones lo hacen en el ámbito global. La movilidad de la mano de obra se ha incrementado mediante flujos migratorios, a pesar de que se dan reacciones negativas motivadas por ideologías conservadoras que tratan de controlar estos movimientos de migración motivada por la búsqueda de mejores oportunidades laborales. Además, el tradicional sector campesino está declinando como resultado de que el campesinado se orienta más a la obtención de salarios en fuentes de ingresos y a su migración a las ciudades.

El libre comercio internacional puede tener efectos positivos en la igualdad. Existe una relación entre el incremento del comercio internacional y la migración con respecto a la desigualdad. Una mayor inmigración y comercio internacional de un país, aumenta las desigualdades, mientras que un mayor flujo de emigración y de comercio internacional de un país, disminuyen las desigualdades. Los procesos de globalización anteriores al período de las guerras mundiales, constituyen una fuerza igualadora de los ingresos entre las naciones participantes, pero con efectos mezclados con incremento en las desigualdades dentro de los países.

En el período comprendido entre las dos grandes guerras mundiales, las barreras a los flujos comerciales y financieros aumentaron las desigualdades entre las naciones, aunque probablemente las desigualdades internas se redujeron. Pero aún todavía ahora, un mundo completamente con una economía globalizada tendrá regiones vastas con grandes desigualdades, económicas, sociales, educativas, culturales, etc.

La conclusión de que la primera causa dela extrema desigualdad social y económica en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo. La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta. Las economías contemporáneas de Latinoamérica se han convertido en partes integral del nuevo sistema económico global que es dominado no por naciones Estados, sino por grandes corporaciones transnacionales que constituyen los principales actores globales en este sistema.

En las últimas dos décadas, casi cada aspecto mayor de la vida económica, política y social en Latinoamérica estuvo influida por la integración acelerada de la región en el sistema capitalista global. Junto con las elites locales y los capitalistas transnacionales han promovido mayores cambios estructurales en las economías latinoamericanas a fin de facilitar la creciente integración de la región en la economía global capitalista. De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del

capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población latinoamericana mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso.

A nivel micro por ejemplo, la incertidumbre, la ambigüedad y el desarrollo rápido del mercado competitivo global que provee oportunidades sin precedentes a las corporaciones con visiones bien desarrolladas, para dar forma a sus mercados y para definir aquéllas características y recursos que pueden resultar en una ventaja competitiva sostenida. Además, las únicas ventajas competitivas de los capitalistas en los países menos desarrollados que tienen disponible para competir en el mercado mundial es la mano de obra barata, la cual se mantiene con bajos salarios debido a grandes niveles de desempleo y represión política y ciertos recursos naturales valiosos, pero carecen de tecnología, recursos humanos calificados, son grandes mercados de consumo doméstico y por capital financiero que es poseído por capitalistas en los mayores países capitalistas del mundo.

En otras palabras, las organizaciones enfrentan una fuerte competitividad no exenta de un número creciente de discontinuidades estratégicas debido a la incertidumbre, complejidad y ambigüedad del medio ambiente. El temor bien fundado de muchas empresas de que deben "comer o ser comidas", las presiona a crecer a fin de sobrevivir en una economía global, para tratar de evitar convertirse en un preciado bocadillo de una adquisición por una empresa con más poder global.

El advenimiento de la globalización está demandando que los gobiernos reconsideren sus funciones al igual que aquellos otros modos y formas organizacionales (jerarquías, mercados, comunidades, etc.) así como las diferentes formas de interacción entre ellos, que en muchos de los casos tiende a ser de adversarios, más que de cooperación. Mecanismos gubernamentales, no gubernamentales y no del mercado, pueden ser más eficientes que los mecanismos del mercado para la obtención de ciertos fines importantes. Burgers, Cromatie y Davis (1998) argumentan que los aspectos estratégicos de la cooperación pueden ser entendidos en el contexto de redes de relaciones de cooperación en las cuales las transacciones entre las diversas formas organizacionales están involucradas.

La estructura de gobernabilidad de la acumulación más desarrollada es el mercado de bienes o mercancías, los cuales se definen como aquellos en que se realizan transacciones de mercancías reales y crédito pero excluye las transacciones de acciones de capital de las empresas. Un nuevo marco de análisis institucional establece diferencias entre el institucionalismo clásico y el nuevo instucionalismo, principalmente en la explicación de los modelos empleados.

El neo institucionalismo económico sostiene que en el mercado los individuos realizan con una intención y buscando resultados, todo tipo de intercambios, desde mercancías, hasta influencias, agresiones, etc. El institucionalismo clásico se relaciona con la descripción de las instituciones políticas y sus interrelaciones. El institucionalismo clásico descansa en las tipologías e implícita o explícitamente argumenta que los arreglos institucionales reflejan las condiciones estructurales. La Nueva Economía Institucional opera en dos niveles interrelacionados: el medio ambiente que establece las reglas del juego y a nivel de instituciones de gobernabilidad que representa el juego en sí mismo, y las

cuales emergen como resultado de las disparidades existentes en el potencial de la creación del valor.

El institucionalismo clásico y el nuevo institucionalismo difieren principalmente en los modelos de explicación empleados. El institucionalismo clásico descansa en tipologías e implícita o explícitamente argumenta que los arreglos institucionales reflejan condiciones estructurales. El nuevo institucionalismo se basa en modelos que explican la relación de actores y procede del supuesto de que las preferencias solamente pueden ser entendidas en el contexto de los incentivos generados institucionalmente y las opciones disponibles que estructuran la elección. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. Las preferencias de los actores políticos son cruciales para lo que se diseña institucionalmente porque los participantes conocen que los altos costos pueden involucrarse si las decisiones van en contra de ellas

De esta forma, el aparato de la economía institucional, la teoría de juegos y la teoría de la elección racional queda disponible para la teoría de la democracia empírica. Por lo tanto, el nuevo institucionalismo, más que un simple mensaje que no sorprende a los institucionalistas clásicos, de que las instituciones importan. El nuevo institucionalismo se aparta del estrecho margen de tipos y explícitamente está relacionada en modelos explicativos basados en actores, tales como a teoría de la elección racional o la teoría de la organización. (Kaiser, 1997).

La premisa que sirve de fundamento al neoinstitucionalismo concibe que la acción humana se sustenta más en un sistema de apropiaciones que es gobernada más por una estructura de reglas y concepciones de identidades que en un conjunto de preferencias e intereses exógenos. Las identidades permiten la manifestación y la expresión de intereses que son comunes en las diferentes instancias espaciales locales, nacionales y transnacionales. El nuevo institucionalismo es por lo tanto, más que un mensaje simple, el cual no debe sorprender a los institucionalistas clásicos de la importancia que tienen las instituciones.

El neoinstitucionalismo asume que los sistemas de incentivos económicos de las instituciones desempeñan un papel importante en la dinámica y desarrollo de los sistemas económicos, políticos y sociales. El nuevo institucionalismo se basa en los modelos explicativos de actores y procede del supuesto que las preferencias pueden ser entendidas en el contexto de los incentivos generados institucionalmente y de las opciones disponibles institucionalmente que estructuran la elección. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva.

Hay dos variables de esta tradición de la investigación en la ciencia política. La primera está basada en la elección racional e interpreta a las instituciones como soluciones de equilibrio para los problemas de la acción colectiva. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico "gorrón" causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

La segunda llamada institucionalismo histórico rechaza algunos supuestos de la elección racional y enfatiza fuertemente al tiempo y secuencias en el desarrollo institucional mientras que los teóricos de la elección racional están interesados explícitamente en cómo estas preferencias se construyen socialmente (Kaiser, 1997). La reforma institucional, por lo tanto, refiere al potencial que descansa en una síntesis de los dos acercamientos de elección racional institucional y un institucionalismo histórico. Los actores pueden reformar las instituciones básicas otras que por evolución en un largo camino institucional, de tal forma que combina las diferentes tradiciones de la democracia.

El acercamiento del nuevo institucionalismo a la regulación de la gobernabilidad enriquece el marco de referencia ofrecido por la escuela de los derechos de propiedad mediante los argumentos de que en cada estructura de gobernabilidad se ofrecen distintos costos y competencias bajo varias combinaciones del medio ambiente institucional y de las características transaccionales (Henisz, 1999: 353).

En aquellos países donde el medio ambiente no favorece las transacciones mediante un adecuado marco regulador y por lo tanto, la realización de transacciones son muy riesgosas, se requiere el establecimiento de mecanismos de gobernabilidad para atenuar todas las posibles causas de los riesgos. " Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. Para Giddens (1999:36) los riesgos son "la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza."

Villareal (2000) sostiene que "En la escuela del nuevo institucionalismo o neoinstitucionalismo, se plantea que el mercado no se reduce a relaciones de precios y cantidades entre individuos (homos economicus), en las que la suma de todas las decisiones explica el funcionamiento del mercado, sino que hay que incorporar el contexto institucional en el que opera el mercado." El nuevo institucionalismo es por lo tanto, más que un mensaje simple, el cual no debe sorprender a los institucionalistas clásicos de la importancia que tienen las instituciones. El nuevo institucionalismo se aparta del rango estrecho de los tipos y se basa explícitamente en modelos de explicación relacionados con la teoría del actor, tales como la teoría de la elección racional o la teoría de la organización.

La teoría de la organización fundamenta la teoría de la empresa como una estructura de governance. Las estructuras de governance necesariamente tienen efectos sobre la

gobernabilidad (Cerrillo, 2001). El concepto de governance y el de gobernability son conceptos interdependientes y operacionalizables en las estructuras institucionales de los diferentes sistemas económicos, políticos y sociales, aunque ambos hacen referencia a fenómenos sociopolíticos totalmente diferentes.

La teoría de la organización realiza importantes contribuciones a la economía de los costos de transacción y por tanto a la teoría de la empresa mediante descripciones y análisis de los agentes y actores, los procesos de transformación intertemporales, los procesos de elección de las unidades de análisis y la descripción de formas alternativas de gobernabilidad. Como una estructura de gobernabilidad, la teoría de la empresa es vista más como un proceso en continua transformación más que como una construcción terminada.

Por lo tanto, las instituciones son las reglas formales e informales del juego que regula las relaciones de la acción colectiva. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. Para Santiso (2001), las instituciones son conjuntos de reglas compartidas por la comunidad política que estructuran interacciones en determinadas forma. De acuerdo a Putnam (1993: 183), "la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político".

Feldman (2001) define las instituciones como "mecanismos especializados, que encarnan los diferentes principios de regulación social (jerarquía, intercambio y solidaridad), que individuos o colectivos que actúan en todas y cada una de las esferas de acción social (política, económica, sociedad) y en el Estado, adoptan para coordinar acciones destinadas a la solución de problemas y/o de conflictos así como para la realización de objetivos". Tanto el Estado nacional como la sociedad regional son dos actores sociales que promueven un crecimiento económico y un desarrollo regional más justo y equilibrado.

Las instituciones son interpretadas como incentivos estructurales para la acción política. La explicación de la acción política en un contexto institucional es diferente de explicar el cambio institucional en períodos largos de tiempo. Puede argumentarse que los cambios institucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables. En el último caso, la historia y la cultura política, entendida como los supuestos básicos del mundo de la política, las cuales restringen el rango de alternativas disponibles, tienen que ser sistemáticamente integradas como factores, los cuales entre otros, dan forma a la manera en que los actores políticos perciben las situaciones de elección (Kaiser, 1997).

Las instituciones son el resultado de acuerdos a largo plazo y de arreglos institucionales entre los diferentes actores políticos y los agentes económicos. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones. La propuesta de aprendizaje institucional (Kaiser, 1997) sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son

influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional.

El neoinstitucionalismo económico pretende sustituir al institucionalismo sociológico. Este enfatiza el papel que en las interacciones tienen las comunicaciones, los símbolos, artefactos, etc., es decir, las variables socioculturales y antropológicas, el marco jurídico, las reglas, organizaciones, actores y estructuras políticas, etc. El nuevo institucionalismo se basa en los modelos explicativos de actores y procede del supuesto que las preferencias pueden ser entendidas en el contexto de los incentivos generados institucionalmente y delas opciones disponibles institucionalmente que estructuran la elección. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. El neoinstitucionalismo económico es el paradigma de paradigmas. Es decir, el paradigma hegemónico que postula al egoísmo personal como la verdad absoluta del motor del desarrollo de la humanidad.

Las jerarquías internas son estructuras organizacionales capitalistas que constituyen un instrumento necesario para la extracción de la plusvalía de los procesos productivos al asegurar la existencia de relaciones de poder. Las jerarquías políticas y sociales en los países menos desarrollados son por herencia injustas y estas jerarquías son preservadas por estructuras y prácticas que son injustas en términos de los estándares universales y locales de legalidad y justicia, los cuales son frecuentemente expuestos pero no practicados. Las jerarquías son estructuras más rígidas que los mercados que facilitan los intercambios cuando existen reglas menos racionales, pero que facilitan la acción colectiva. El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otro ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir (De Swaan Abram, 1997). Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil.

Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. En un sistema democrático, a pesar de la existencia de arreglos institucionales que reducen los conflictos de intereses entre los diferentes agentes, los intercambios económicos y políticos son costosos e inciertos, sobre todo entre las diversas clases dominantes que generan conflictos globales. Por lo mismo, los resultados son por abajo del óptimo de Pareto.

Estas relaciones de poder permiten la gobernabilidad así como la implementación de la explotación del trabajo (Screpati, 1999) Además, la jerarquía interna tienen como funciones, entre otras la coordinación de la actividad de producción, las economías de escala y de alcance, la innovación y el desarrollo de capacidades específicas; el control y monitoreo de la información cuando las asimetrías amenazan dañar la extracción de la plusvalía, y finalmente la organización y desarrollo del conocimiento cuando la innovación y adaptación al cambiante medio ambiente requiere la solución colectiva de los problemas. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas

que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. . La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado En las jerarquías externas, como en el caso de firmas que pertenecen a grupos corporativos, los mecanismos de competencia organizacional trabajan mejor.

De acuerdo a Larmour (1997), existen dos modelos de coordinación jerárquica. Weber estableció un modelo burocrático de coordinación jerárquica, caracterizado por jurisdicciones fijas, relaciones superior-subordinado y apegamiento estricto a reglas y ordenanzas. Hood establece un modelo corporativo de administración perfecta diseñado de acuerdo a los principios de competencia perfecta y caracterizado por una organización unitaria, normas y valores compartidos, obediencia perfecta, información completa y el tiempo necesario para hacer el trabajo propiamente. Aquí, los valores deben ser entendidos como las creencias firmes acerca de acciones preferidas o modos de conducta La sub-optimización multiorganizacional es el resultado de la falta de coordinación y de objetivos conflictivos.

Las instituciones combinan en diferentes proporciones las tres típicas e ideales formas de organización, el mercado, la jerarquía y la comunidad con sus correspondientes mecanismos de coordinación, el precio, la autoridad y la confianza. Las diferentes formas de organización representan diferentes modos de gobernabilidad los cuales tienen fortalezas y debilidades propias.

Sin embargo, las teorías de la economía organizacional han demostrado que la confianza, el precio y la autoridad, son mecanismos relativamente efectivos para la administración de los activos, comparado con los activos basados en la intensidad del conocimiento estratégico. Este conocimiento estratégico es cada vez más importante como una tendencia, por lo que se esperan la proliferación de nuevas formas de organización institucional que responda a los retos que plantea la globalización. Todas las formas de organización existentes hasta ahora tienen diferentes modos de gobernabilidad que presentan fortalezas y debilidades. Estas nuevas formas de organización son modificadas por el uso y desarrollo de nuevas tecnologías que otorgan una ventaja competitiva a los países que las desarrollan.

Ni el mercado, ni tampoco las jerarquías o cualquier mezcla de ambos responde adecuadamente a los retos que plantea la revolución del conocimiento. Los costos de transacción y los costos administrativos sientan las bases de opción entre las formas de gobernabilidad del mercado y jerarquías. Así los costos de transacción desde una perspectiva de la economía, proveen el soporte para una teoría de la estructura de gobernabilidad de las empresas. Las dos estructuras de gobernabilidad enfrentan costos de transacción positivos, complejidad en el sistema de contratación interna y problemas de agencia.

Pero además, las jerarquías requieren de una administración más estricta para mantenerlas, con lo cual los costos se incrementan. Las jerarquías políticas y sociales en los países menos desarrollados son por herencia injustas y estas jerarquías son preservadas por estructuras y prácticas que son injustas en términos de los estándares universales y locales

de legalidad y justicia, los cuales son frecuentemente expuestos pero no practicados. Los arreglos institucionales para solucionar estos problemas varían dependiendo de las diferentes formas organizacionales y sus adaptaciones al desarrollo local de los modelos propuestos por los organismos multilaterales. No existe hasta ahora un modelo de combinación de mercado y jerarquías que optime un equilibrio.

Adler (1999) argumenta que al mismo tiempo que el mercado se fundamenta en el precio como un mecanismo para coordinar acciones (entre proveedores competitivos y compradores anónimos) y la jerarquía en la autoridad, la comunidad se basa en la confianza, la cual es un mecanismo de coordinación por su propio derecho. En la gobernabilidad por la comunidad, la coordinación se logra por normas de compartidas de comportamientos apropiados. Si se elige la forma de gobernabilidad de la comunidad se requieren de grandes esfuerzos para crear comunidades donde nunca antes han existido.

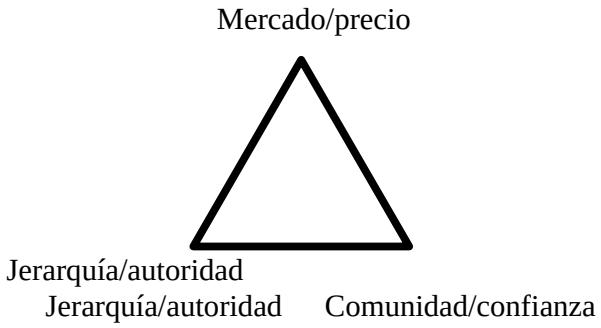
Las nociones de gobernabilidad derivados de sociedades sin Estado, con recursos comunales, no se comparan fácilmente con otras nociones de gobernabilidad que enfatizan los derechos humanos, económicos y culturales. Las costumbres evolucionan y dividen el trabajo y para compartir los productos. Su hipótesis sostiene que comparada con la autoridad pura y el precio, la confianza hace posible la generación del conocimiento, así como el compartirlo, convirtiéndose en un importante determinante del desempeño. Las instituciones que incluyen todas las formas de organización social (grupos, mercados, empresas, redes sociales, etc.) involucran diferentes grados de mecanismos de coordinación (precios, autoridad y confianza), los cuales pueden ser combinados en diferentes grados. Cada una de las formas de organización presentan diferentes modos de gobernabilidad que tienen diferentes fortalezas y debilidades.

Sin embargo, en una sociedad capitalista en la era de la globalización, de intensa competencia y de tendencias de crisis financieras internacionales, las diferentes combinaciones de mercado, jerarquía y comunidad (confianza) operan bajo la predominancia del mercado, lo cual limita el crecimiento de los otros elementos y en muchas ocasiones las destruye. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera.

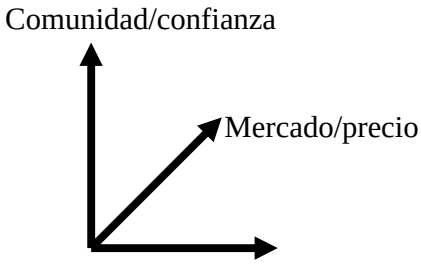
Esta sociedad capitalista orientada por las estructuras del mercado tiene contradicciones que requieren la intervención política centrada en el Estado para regular las relaciones sociales, las que a su vez demandan de mecanismos de intercambio y mercantilización, generando así procesos simbióticos entre el mercado y el Estado. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

Durante los ochenta se recomendaba más el empleo de los mercados y durante los noventa las formas comunitarias. Sin embargo, se practican formas mixtas. Por ejemplo, la regulación jerárquica se ha debilitado en ciertas circunstancias y áreas, tales como el mercado laboral, mientras que se ha fortalecido en otras, como en la protección ambiental.

Retomando los arreglos de formas organizacionales de Williamson (1991) quien argumenta la existencia de dos formas organizacionales alternativas, el mercado/precio o la jerarquía/autoridad, de Zenger/Hesterly (1997) quienes consideran existe un continuo entre el mercado y la jerarquía, y de Ouchi (1980) que sugiere tres formas de organización (mercado/precio, jerarquía/autoridad y comunidad/confianza), Adler mapea las instituciones en tres dimensiones de acuerdo a la prominencia de los mecanismos de coordinación (confianza, precio y autoridad) y a la combinación de las formas organizacionales (comunidad, mercado y jerarquía). Por supuesto, cada una de estas formas de organización presenta diferentes modos de gobernabilidad que tienen además diferentes fortalezas y debilidades.



Ouchi (1980)



Adler (1999)

CONCEPTUALIZACIONES DE FORMAS ORGANIZACIONALES

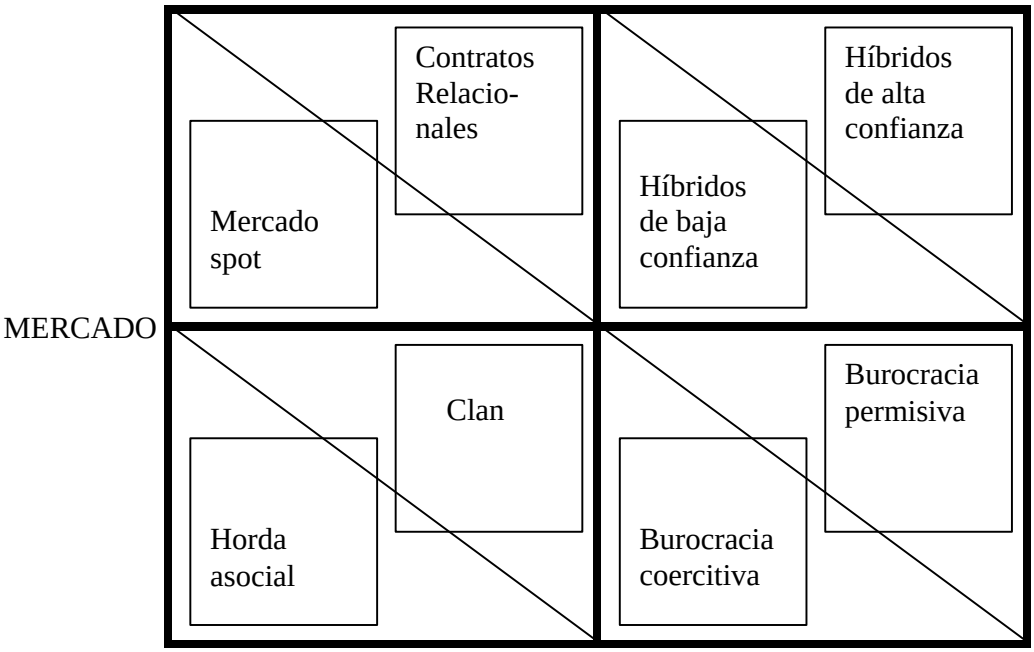
La representación tridimensional de Adler considera a la comunidad /confianza en combinación con las otras dos formas o modos organizacionales. La confianza se combina con el precio en forma de "contratos relacionales" y cuando falta la confianza en el mercado, éste se convierte en ocasional o spot. La importancia de los contratos como marco de referencia determinan la continuidad mientras que adopta una posición de largo alcance en la imperfección de los mismos contratos. Las jerarquías son una forma organizacional de baja confianza como en el caso de los aparatos burocráticos, pero si combina la confianza con la jerarquía se crean tipos de burocracia representativa, dinámica y motivadora a la acción. En sí, la polisemia del concepto de burocracia es variada y comprende desde la concepción weberiana que la describe por atributos ideales o por una definición de sus rasgos con Crozier.

Los economistas han estudiado las estructuras jerárquicas con el enfoque de supervisión y asignación de tareas, de la teoría de los incentivos y la teoría del equipo y procesamiento de la información. Las jerarquías óptimas son aplicables tanto a las estructuras de los Estado-nación como a una microempresa. Así, la estructura espacial de las diferentes unidades se define en función territorial y delimitan sus interrelaciones entre las diversas entidades e instancias.

Hart y Moore (1999) desarrollan un modelo basado en la asignación de jerarquías, en el cual una empresa tiene una persona o un grupo con autoridad última en todas las decisiones, y en el caso de una economía que tiene muchas personas con autoridad última

sobre las diferentes decisiones. Las estructuras jerárquicas pueden ser básicamente divisionales y funcionales de acuerdo a la importancia relativa de la coordinación en las actividades funcionales, dentro de una línea de producto y economías de escala de combinar funciones similares entre las diferentes líneas de productos. Si se segregan estas funciones por funciones de productos, sin embargo, resulta en fallas para explotar economías de escala disponibles si, por ejemplo, la mercadotecnia de todos los productos es manejada por un departamento central de mercadotecnia (Harris and Raviv, 1999)

Cuando los mercados y las jerarquías se combinan, los incentivos y la autoridad de mezclan pero la desconfianza es alta. Una combinación de incentivos, autoridad y de alta confianza las encontramos en organizaciones multidivisionales colaborativas, en las diferentes empresas como en el caso de las Keiretsu. Siguiendo a Adler (1999), quien enfatiza la confianza en las diferentes formas organizacionales, genera la siguiente tipología:



TIPOLOGÍA DE FORMAS INSTITUCIONALES DE ADLER.

La competencia alienta la innovación, la toma de riesgos empresariales y el crecimiento. Tanto los Estado-naciones, como las corporaciones que alcancen mayor éxito, éste dependerá de competir por la oportunidad para definir la estructura que todavía no existe (Thomas, Pollock and Gorman, 1999) A este enfoque teórico, Hamel and Prahalad (1994) le han denominado competiendo para el futuro.

Con el surgimiento del “imperio mundial de las corporaciones” (Korten, 1995), el Leviatán del Estado está siendo desmantelado y reemplazado por el Leviatán de las

“demoníacas”, impersonales y con frecuencia monopolísticas corporaciones transnacionales y multinacionales, las cuales se están dividiendo el mundo y sometiendo a los gobiernos nacionales, empresas nacionales y a las impotentes comunidades locales. Pesa más sobre los intereses de estas mega corporaciones la protección de derechos de su propiedad que la salvaguarda de la democracia y soberanía nacional.

Sin embargo, algunos países limitados en recursos y carentes de infraestructura, no pueden escapar del círculo vicioso del subdesarrollo y no tienen capacidades para absorber las tecnologías emergentes y mucho menos para innovar y competir a escala global. Estas naciones sólo tienen como elección unir sus destinos a aquéllas naciones avanzadas a través del crecimiento de su deuda externa, en espera de lo mejor.

Se han desarrollado algunos modelos teóricos (Easterly, 1999) basados en análisis históricos de lo acontecido en las dos últimas décadas del siglo pasado, para predecir las acciones de los Estados-nación efectuarán para responder a la deuda externa, y los resultados son que tienen dos alternativas: contrayendo nuevas y mayores deudas o bien comprometiendo la venta de ciertos recursos valiosos, sobretodo los naturales que derivarán en un “suicidio ambiental”.

Cuando un Estado tiene problemas financieros necesita urgentemente capital fresco de trabajo para que no se colapsen sus principales funciones y para obtenerlo de sus posibles acreedores se somete a procesos no solamente complicados, sino hasta perversos, debido a las asimetrías y transparencias de información que existen entre los potenciales acreedores y los Estados. Y si las preferencias de los Estado-nación no cambian a largo plazo, entonces los esfuerzos para la reestructuración de deuda soberana resultan contradictorios. Se debe apoyar más a aquellos Estados-nación que modifiquen este esquema determinista de preferencias inter temporales.

No son opciones de solución para los países endeudados ni la liquidación del Estado, ni el mercado, porque los Estados no tienen dueños. Los Estados no son liquidables, a diferencia de las corporaciones, su soberanía les da el espacio que necesitan para sobrevivir. A los Estados soberanos no se les liquida, ni sus activos se redistribuyen para usos económicos más valiosos.

La legitimidad política de los Estados-nación y su soberanía nacional todavía pueden mantenerse en condiciones de interdependencia económica a pesar de que las responsabilidades del desarrollo económico están siendo trasladada al mercado global. De las tres formas elementales de legitimación del Estado moderno, el derecho, la administración (cálculo) y la historia (épica), predominó la primera forma bajo el modelo del Estado liberal (Semo, 1998). Este modelo de Estado que surgió de la herencia liberal del siglo XIX, degeneró en el modelo de Estado corporativo con una democracia limitada, es decir, termina en una democracia corporativa. La transformación del Estado corporativo al modelo de Estado gerencial se debe al impulso que adquieren las fuerzas del capitalismo transnacional como agentes del desarrollo económico cuya representación de intereses se localiza en las fuerzas del libre mercado.

No obstante, por ejemplo, un marco de referencia legal supranacional para la reestructuración de la deuda externa debe alentar la rehabilitación económica de los Estados, de tal forma que se les otorgue apoderamiento (empowerment) para responder de sus deudas frente a los acreedores. La oportunidad para una rehabilitación económica puede surgir de una decisión unilateral del Estado para la suspensión de pagos, a diferencia de las corporaciones, con el respaldo de algunos activos localizados en diferentes jurisdicciones.

Lo que se conoce como deuda transnacional es el conjunto de créditos otorgados por gobiernos a otros gobiernos y todas las posibles formas de deuda entre fronteras. A través de la deuda externa, las naciones son encadenadas a una dependencia económica, política y tecnológica marcada en el mejor de los casos. La atracción de financiamiento externo es más difícil y complicado para los Estados que para las empresas. Petras (2001d) argumenta que los Estados imperialistas como Estados Unidos, Europa y Japón, a través de las instituciones financieras internacionales presionan a los países receptores de préstamos en el tercer mundo para reducir y eliminar barreras comerciales y privatizar empresas del Estado, lo que permite a las empresas transnacionales penetrar en los mercados y comprar empresas locales. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional.

Para los países que tienen economías de mercado y comparten los mismos supuestos de reorganización de empresas que tienen problemas financieros, es posible que desarrollen sistemas nacionales de reorganización de bancarrota que funcione de la misma forma, porque los aspectos funcionales de estos sistemas son formados más por necesidad que por cultura o política. Un estudio comparativo de los sistemas de bancarrota puede dar por resultado algunas diferencias, pero en todo caso éstas no son aplicables a los Estados.

Los intentos de las entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la institución central que coordina la deuda soberana, para ayudar a resolver los problemas de reestructuración de la deuda de los países soberanos han hecho las cosas peor. Los críticos del desempeño del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la pasada crisis económica de 1997-99 sostienen que la crisis se profundizó debido a que las políticas y acciones de este organismo multilateral desorientaron los esfuerzos.

Como sostiene Joseph Stiglitz, economista que abandonó la Dirección del Banco Mundial, en teoría el FMI apoya a las instituciones democráticas de los países que ayuda, aunque en la realidad socava el proceso democrático al imponer su política económica. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia. La ayuda es orientada a remediar las deficiencias del mercado que vulneran tanto a los más pobres como a las instituciones de asistencia al desarrollo.

Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, dictan y exigen el cumplimiento de la política económica a la elites burocráticas gobernantes, las que a su vez, en nombre de una democracia reducida al máximo de sus márgenes reales, gobiernan a espaldas siempre de la ciudadanía nacional. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia.

No hay que olvidar que la ciudadanía existe por efecto de la soberanía y en el marco de un Estado, aunque se quiera sustituir este concepto de soberanía nacional por el concepto de soberanía consumidora que da prioridad a las decisiones del mercado para tratar a los individuos no como ciudadanos sino como consumidores siempre en función de su capacidad adquisitiva.

En manos del mercado quedan las oportunidades de desarrollo de los individuos y en el sistema capitalista esta se reduce a su capacidad de consumo estimulado en forma artificial. La solidaridad ciudadana se debilita y desarticula la acción colectiva. El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. La manera en que muchos países que han alcanzado el estado de insolvencia temporal en un tiempo corto, obligan a replantear las funciones del FMI como organismo central del sistema monetario internacional, para la prevención de las crisis financieras más que a su solución.

Un estudio del FMI encontró que dos terceras partes de los países miembros experimentaron problemas financieros en las últimas dos décadas, y en casi todos los casos hubo desestabilización de los sistemas bancarios locales con fallas en su moneda de curso legal también. Las monedas nacionales se han devaluado y pegado al patrón del dólar estadounidense, y el crecimiento de las exportaciones, principalmente de las exportaciones no tradicionales, tales como las frutas, las legumbres, as flores y algunos bienes manufacturados, han sido promovidos a expensas de la baja en la producción de alimentos para el consumo doméstico.

El Reporte de la Comisión Meltzer propone un nuevo FMI que se limite a ayudar financieramente a corto plazo a las economías insolventes y a proporcionarles asistencia técnica-económica, tal como lo fue su función original bajo el régimen de Bretton Woods que prevaleció hasta los setenta. Además, debe considerarse que la ayuda se otorga a aquellos países que cumplen con las condiciones de las cláusulas de democratización que se les impone.

Si en nombre de la ayuda a los Estados-nación pobres, la reestructuración de la deuda externa crea incentivos para retrasar las reformas necesarias para su crecimiento económico y desarrollo social, entonces su situación se empeora más que mejorar. La ayuda foránea orientada a remediar las deficiencias del mercado que crean trampas de vulnerabilidad para los más pobres y para las instituciones de asistencia al desarrollo. La ayuda a los países más pobres declinó en los últimos años y estuvo orientada más hacia la asistencia a emergencias causadas por los desastres naturales, más que al desarrollo social.

Los componentes más importantes del desarrollo social son la educación, salud, alimentación, habitación, etc., considerada como estrategia de necesidades básicas, la cual plantea como prioridad la satisfacción de un nivel absoluto de necesidades básicas. El desarrollo social debe apuntalarse sobre la base de implementación de programas de desarrollo humano que promuevan la formación de capital humano y social y que brinden mayores oportunidades de acceso al disfrute de bienes y recursos sociales, a efecto de elevar los niveles de calidad de vida y de bienestar social. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence).

Las instituciones económicas, sociales y políticas determinan las interacciones sociales y políticas que influyen en el desarrollo humano y social. Para lograr esto y alcanzar una sociedad satisfecha y sin asimetrías pronunciadas, se requiere de mecanismos institucionales de gobernabilidad que promuevan una asignación equitativa de recursos y bienes sociales.

Como estrategia, la satisfacción de las necesidades básica difiere de una estrategia de desarrollo global y se hace difícil la consecución de sus objetivos. Se deben elaborar estrategias de desarrollo para optimizar los recursos y potencialidades existentes en las localidades y regiones. El desarrollo social se relaciona con el grado de desarrollo económico, tecnológico y cultural. Si el desarrollo económico de una sociedad tiende a aumentar la clase media y a disminuir los extremos, es decir las clases bajas y altas, se abona para crear una sociedad con una tendencia ideológica hacia el centro del espectro político que propicia la democracia. La ayuda foránea no necesariamente promueve el crecimiento económico y el consecuente desarrollo social.

Existe una percepción generalizada de que lo que el FMI hace y cómo está estructurado, al igual que otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, sus funciones no son las adecuadas a las necesidades del desarrollo mundial. El estatuto del Banco Mundial de responder al alivio de la pobreza, legitima las acciones que realice con ese fin, conciliando esta finalidad con la persecución del desarrollo económico.

Sin embargo, bajo el rubro de desarrollo económico, el Banco se convierte en el lacayo para la globalización en los términos del capitalismo transnacionalita o neocapitalismo. De esta forma, la finalidad del FMI, como la de otras organizaciones multilaterales, no es el desarrollo de los países más pobres, sino "confortar la supremacía de los países ricos" como sostiene Mark Malloch (La Jornada, 1999) Las decisiones de las instituciones y organismos multilaterales favorecen los intereses de los países ricos. Por lo tanto, mientras tienen bases para la legitimidad en estos países, son ilegítimos a escala global. Los países con problemas financieros, por lo general recurren a créditos del FMI y éstos tienen prioridad para exigir el cumplimiento de su pago por sobre otros acreedores privados.

Para algunos analistas (Schwarcz, 2000), el papel del FMI como prestador en última instancia crea un riesgo de peligro moral, porque el dinero proviene de quienes pagan sus impuestos y se presta esperando proteger sus créditos de posibles consecuencias que originan que los países fallen en el cumplimiento de sus obligaciones. Esto es, los que

pagan impuestos en los países ricos subsidian a los Estados que no cumplen con sus obligaciones, así como a los bancos y otras instituciones crediticias. Si se permite a los Estados deudores determinar su prioridad para la atracción de créditos, los riesgos de incumplimiento del pago se reducen.

Además, argumentan que los países que requieren de éstos préstamos tienen menos razones para seguir un programa económico prudente. En este sentido, el peligro moral simplemente significa la mayor tendencia que tienen los prestadores quienes se protegen de las consecuencias de conductas riesgosas para engancharse en tales conductas. Los deudores y acreedores que se protegen de las consecuencias de incumplimientos de los pagos, tienen una mayor tendencia a engancharse en conductas económicas riesgosas.

También a tomar mayores riesgos financieros, sin buenas garantías (Schwarcz, 2000) Parte de la solución a este problema, argumentan, consiste en que el Fondo Monetario implemente un marco legal que deje en manos del mercado a las instituciones financieras para que presten a los Estados. Para lograr esto, es necesario modelar un sistema efectivo de reglas para una convención internacional sobre la reestructuración de la deuda soberana.

El FMI como una institución central coordinadora de la deuda soberana debe reestructurar su esquema para la administración de las deudas soberanas y las prioridades de financiamiento, así como su monitoreo y escrutinio. En las administraciones de los países se ha visto un incremento de asesores que acompañan la expansión económica que justifican las reducciones demandadas por las instituciones de Bretton Woods como parte de los planes de ajuste estructural que están implementando para liberalizar las economías de países más pobres y endeudados a efecto de que las grandes corporaciones internacionales penetren en sus mercados y tengan acceso a recursos baratos, siempre operando en sinergia con los Estados imperiales. Summers, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos sugiere que el FMI se enfoque más a los rescates financieros de los países en crisis y en financiamientos a largo plazo, mientras que el Banco Mundial debe realizar más actividades financieras tendientes a aliviar la pobreza mundial.

Si se cambian las fuentes de los recursos del FMI a los mercados privados de capitales, puede eliminar la necesidad de que se apoye a países endeudados con recursos que provienen de quienes pagan impuestos y se evitarían que las decisiones se politicen. Además de que los mercados privados de capital son demasiado grandes y extensos para acomodarse a las necesidades propias de financiamiento de los Estados, el FMI puede asignar prioridades y servir como colateral de los créditos que otorgue el mercado de los acreedores a los Estados-nación

Los intentos de las entidades multilaterales que ayudan a los procesos de reestructuración de las deudas soberanas han creado problemas que dan origen a serios cuestionamientos morales, de tal forma que involucran a los estados miembros para financiar. Estos implica que a mayor cantidad de prestamos con cargo a los impuestos de los ciudadanos que hacen los tesoros de los países avanzados a los países endeudados, como el caso de México, más seguridad obtiene las instituciones financieras privadas. El Estado, a diferencia de una corporación, tiene el poder para imponer impuestos a los

ciudadanos y tiene a su favor la capacidad de negociación de ayuda, derivada de su posición de soberanía.

Sin embargo, sin una prioridad los Estados no pueden obtener crédito y financiar mercados de capital debido a que las asimetrías de información entre el Estado y los potenciales financieros son grandes y carecen de transparencia. Hasta ahora no se ha demostrado que exista una relación directa entre la liberalización de mercados de capitales y el crecimiento económico. La volatilidad de los mercados de capitales limita el crecimiento económico e incrementa los niveles de pobreza. La ausencia de transparencia permite que los funcionarios actúen como clubes privados en los procesos de toma de decisiones en las organizaciones implicadas. Los Estados con problemas financieros miran a las instituciones multilaterales como instituciones acreedoras de última instancia. Las instituciones multilaterales internacionales creadas son costosas y políticamente tenues para mantener la soberanía del Estado.

La definición de la soberanía como la capacidad de gobernabilidad queda entrampada en lo que es el punto crucial aquí, la determinación de si la soberanía de las agencias económicas internacionales es compatible con la soberanía del Estado nacional y si la gobernabilidad de las instituciones públicas y privadas multinacionales es compatible con la gobernabilidad del Estado nacional. La gobernabilidad del Estado tenía como fundamento una política de integración del Estado orientado por la provisión de bienestar social. Estudios empíricos en sociedades premodernas y pequeñas permiten concluir que la gobernabilidad puede lograrse sin la necesidad de mantener un ominoso y costoso aparato burocrático.

Estudios empíricos han demostrado que en las sociedades sin Estado, se identifican las condiciones en las que las personas mantienen el orden sin formas de gobierno centralizadas y jerárquicas, entre las que sobresalen, las creencias y valores comunes en el grupo para lograr la coordinación, interrelaciones múltiples y directas para el trato cara a cara entre los individuos, reciprocidad, y el uso de la crítica y la vergüenza como formas de control social (Larmour, 1997).

La gobernabilidad es resultado de instituciones capaces de procesar los acuerdos y negociaciones de los principales agentes económicos y de los principales actores políticos. Etimológicamente, la gobernabilidad se refiere a “la habilidad de gobernar”, y a “la capacidad de procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas”, lo cual representa una de las capacidades para procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas (Altaman, 2001). La gobernabilidad es la capacidad que se tiene para gobernar.

La gobernabilidad se refiere al acto de gobernar en un sentido amplio. Gobernar la conducta de diferentes agentes y actores requiere de capacidades para coordinar los cursos de acción que decidan. Como concepto, el PNUD (1997b:2) la gobernabilidad es el “ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para administrar los asuntos de un país en todos los niveles. Comprende los mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercitan sus derechos jurídicos, cumplen sus obligaciones y median sus intereses”.

Es el resultado emergente de las interacciones privadas y públicas.Los Estados nacionales son la fuente primera para establecer y legitimar su soberanía a través sistemas de gobernabilidad y democracia. Estudios empíricos en sociedades premodernas y pequeñas permiten concluir que la gobernabilidad puede lograrse sin la necesidad de mantener un ominoso y costoso aparato burocrático. Sin embargo, para los neoinstitucionalistas, la gobernabilidad no puede surgir de las instituciones tradicionales del Estado-nación, sino de la emergencia misma de la sociedad (Peters, 1998)

El concepto de soberanía proviene del latín superanus, super omnia, que significa por encima de todo, por sobre de. Se define como "aquélla unidad decisoria que no está subordinada a ninguna otra unidad decisoria universal y eficaz" (Herman Heller) El concepto de soberanía del Estado desarrollado en los siglos 16 y 17 concibió a la soberanía como algo que puede ser poseída exclusivamente. Así también como una cantidad determinada de poder, como un comandante no comandado capaz de ordenar pero no de recibir ordenes (Bodin, 1576; Hobbes, 1651) La lucha por el poder se representa como un juego de suma cero donde uno gana lo que otro pierde. Es por lo tanto, es un poder supremo, la última instancia de decisión y la libre determinación del orden jurídico.

La soberanía del Estado tiene aquí dos vertientes. Hacia el interior consiste en el poder que el Estado tiene por sobre los otros poderes y fuerzas que conviven dentro. La manifestación externa de la soberanía del Estado se expresa en la autonomía e independencia de otros Estados y organización internacional. La autonomía es una condición para el ejercicio pleno de la soberanía de los pueblos y de su libertad política. Por lo tanto, la soberanía del Estado, en su sentido más básico, está siendo redefinida por las fuerzas de la globalización y de la cooperación internacional.

Las compañías transnacionales y la tecnocracia de las agencias internacionales están concentrando el poder de los Estados nacionales en nuevas configuraciones de clase. Tanto las empresas multinacionales como las organizaciones internacionales tienden a limitar la autonomía de los Estados-nación y su capacidad para ejercer la gobernabilidad. Las funciones de las organizaciones internacionales tienden a suplementarse mediante el empleo de redes de políticas que involucran a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales, etc.

Las estructuras del poder mismo están cambiando y la tendencia se manifiesta en el sentido de que el poder se está trasladando de las instituciones políticas a las instituciones económicas. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. La estructura de las diferentes entidades se delimita territorialmente mediante las fronteras geográficas y físicas, las que a su vez definen los diferentes tipos de interrelaciones entre las unidades.

Por lo tanto, el desarrollo económico no es causa de la democracia, los orígenes de la democracia están en el fortalecimiento de instituciones políticas de representación, la defensa de los derechos humanos, la existencia de fuentes de opinión, y la protección de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos (Ortega Ortíz, 2001). En la sociedad moderna hay un conflicto latente entre capitalismo y política. Esta sociedad moderna se

organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La política exige por lo menos un uso comunitario sometido a reglas que se regulan por leyes, desde el impuesto obligatorio a las reglas de tráfico, pasando por la reglamentación de la construcción, el comercio etc.

Las instituciones políticas son determinantes en el logro de resultados económicos. Por lo tanto, también la soberanía puede ser política y económica (Colmenares Páramo, 1999) La soberanía política es la capacidad suprema, sustantiva e independiente de la comunidad para definir sus metas y organizar sus propias instituciones, políticas e instrumentos para alcanzarla. De acuerdo a Putnam (1993: 183), "la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político".

La soberanía económica es la facultad para ordenar los gastos e ingresos necesarios para el ejercicio de la soberanía, el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo económico y social. En el caso de las corporaciones transnacionales y multinacionales, por su modus operandi limitan la soberanía interna en materia de política económica del Estado-nación. No obstante, ahora se trata de sustituir la soberanía política por el concepto de soberanía del consumidor que deja las decisiones sobre el desarrollo en manos del mercado.

Por ejemplo, los intentos para crear una autoridad mundial reguladora de los mercados por parte del Grupo de los Siete ("G-7") a logrado muy poco éxito debido a las discrepancias de los ministros de finanzas para controlar los cambios violentos de los mercados financieros. De hecho, las naciones que mantienen altos niveles de crecimiento económico se debe a que tienen sistemas de regulación adecuados de sus mercados financieros. Es urgente el establecimiento de un sistema de regulación internacional de los flujos especulativos de capitales porque atacan los cimientos de las economías nacionales y vulneran el sistema económico global.

La deuda externa implica mecanismos de subordinación de los Estados-nacionales de la periferia al centro, los cuales traen como consecuencia la pérdida de soberanía y la transferencia de riquezas en favor de la acumulación del capital. Las fuerzas motivo asociadas con la acumulación de riqueza que enfatizan el sistema capitalista orienta los costos de capital individual y las empresas privadas capitalistas para expandir sus actividades acumulativas y eliminar todas las barreras geográficas culturales y políticas que obstruyen su paso a la acumulación de riqueza.

Petras (2001d) argumenta que los Estados imperialistas como Estados Unidos, Europa y Japón, a través de las instituciones financieras internacionales presionan a los países receptores de préstamos en el tercer mundo para reducir y eliminar barreras comerciales y privatizar empresas del Estado, lo que permite a las empresas transnacionales penetrar en los mercados y comprar empresas locales. Los patrones de apropiación, acumulación y distribución del capital económico se han intensificado en el globo terráqueo y las instituciones que regulan la acumulación del capital son denominadas "estructuras de gobernabilidad de la acumulación" (Screpanti, 1999) Las fuerzas motivo asociadas con la

acumulación de riqueza que enfatizan el sistema capitalista orienta los costos de capital individual y las empresas privadas capitalistas para expandir sus actividades acumulativas y eliminar todas las barreras geográficas culturales y políticas que obstruyen su paso a la acumulación de riqueza.

Screpanti (1999) ha acuñado el término "estructuras de gobernabilidad de acumulación" para definir los sistemas que gobiernan los usos de la plusvalía que sostienen la acumulación, tales como los "mercados de bienes", los "mercados compañías" o mercados para el control corporativo, las jerarquías externas y las jerarquías internas. Los mercados de bienes o mercancías son aquellos en los que los consumidores individuales y organizacionales aparecen como sujetos y los objetos de transacción son insumos y productos reales, dinero y créditos.

Los mercados compañías o mercados para el control corporativo son aquellos que tratan a las empresas como cosas que son el objeto de la transacción. Los costos de transacción explican la existencia de las jerarquías como formas de gobernabilidad para reducir los costos de hacer y mantener los contratos en un mercado determinado. Por lo tanto, los costos de transacción proporcionan el soporte técnico y teórico para la teoría de la estructura de gobernabilidad de las empresas.

La amplia gama de relaciones contractuales en los fenómenos organizacionales se comprenden desde la perspectiva de la estructura de governance. Los conceptos de governance y gobernability aunque se refieren a fenómenos totalmente diferentes, son interdependientes y operacionalizables en las estructuras institucionales de los diversos sistemas económicos, sociales y políticos. Las jerarquías internas son estructuras de relaciones que unen a los miembros de una organización. Las estructuras externas son estructuras de relaciones de poder y subordinación entre las organizaciones. Sin Embargo, tanto los mercados, como las jerarquías, consideradas como estructuras de gobernabilidad, enfrentan altos costos de transacción, una complejidad en sus sistemas de contratación interna y problemas de agencia.

Schwarcz (2000) reconoce que dejar la decisión de fondear en los mercados, remueve la decisión del área de las relaciones internacionales, lo que puede ser o no políticamente aceptable. En tal caso, propone la creación de una teoría legal normativa, una regulación legal supranacional para la reestructuración de la deuda soberana, basada en los principios de la ley de reorganización en bancarrota.

Un primer cuestionamiento con respecto a la globalización es el esclarecimiento de sí la globalización es una política específicamente diseñada o si consiste en un proceso que es objetivo. En la economía global, la fuerza dominante que modela las relaciones económicas, políticas, sociales, tecnológicas y culturales entre las diversas naciones, tiene su origen en las relaciones comerciales que se establecen en los mercados internacionales. La promoción de estas relaciones comerciales a niveles internacionales y la protección de los mercados internos son funciones que todavía desempeña el Estado nacional.

Por lo tanto, la globalización de los mercados tiene efectos importantes en las relaciones internacionales de cada país en particular, ya que el Estado-nación es el principal sujeto

actor de estas relaciones internacionales en cuyo espacio se ordena el sistema económico, político, social, jurídico, cultural, etc. Los apuntalamientos políticos que tienen su origen en las relaciones intergubernamentales contribuyen a la estabilidad del sistema financiero internacional, como en los casos de Japón-Estados Unidos y Alemania-Francia, por lo cual, en la medida en que dichos apuntalamientos son frágiles, esto contribuye a desestabilizar el sistema financiero global.

Existe un fuerte debate entre el desarrollo de una "economía internacional al nivel mundial" y "una economía internacional globalizada". En estas formas de economía internacional las funciones extendidas del estado juegan un papel relevante Para los que argumentan que la economía internacional al nivel mundial avanza, la integración económica está ocurriendo mientras que las economías nacionales mantienen un significante grado de autonomía, de tal forma que los gobiernos nacionales todavía mantienen el poder para la administración económica nacional y de negociación con los capitales transnacionales.

La autonomía de los pueblos es una condición esencial para el ejercicio de la soberanía y la independencia política de los pueblos. Para los que argumentan la formación de una economía globalizada, las distintas economías nacionales son absorbidas y prearticuladas en el sistema económico internacional por procesos y transacciones esencialmente internacionales. En una economía globalizada se presentan procesos de benchmarking que comparan el desempeño de las políticas en diferentes países.

La "arena global" es definida como "un producto de un conjunto definitivo de propiedades dinámicas que incluyen la formación de estructuras de centro-periferia y su expansión, contracción, fragmentación y re-establecimiento a través de los círculos de hegemonía". Es una precondición para la globalización, argumenta Friedman (1994) En este mismo sentido, tal parece que más que una "economía global", es una "economía unipolar". La misma que de acuerdo con Jalife-Rahme (1999), "ha sentado sus reales y por medio de la globalización financiera especulativa, se está adueñando en silencio de las joyas estratégicas de los cobayos de experimentación llamados mercados emergentes".

Esta globalización financiera, de acuerdo a Sandoval Ballesteros (2000), no es otra cosa más que un sistema a través del cual los bancos occidentales y las élites se enriquecen a expensas la demás población, quien cargada con la "crisis de la deuda" resulta la principal contribuyente de estas manipulaciones en los centros financieros de los países occidentales.

Los países imperialistas desempeñan un papel fundamental mediante la gestión de las crisis financieras y económicas de aquellos países menos desarrollados que confrontan problemas de insolvencia de la deuda externa, fuertes devaluaciones de sus monedas, etc., así como de aquellas empresas transnacionales que entran en quiebra, bancarrota, y que tienen problemas de solvencia financiera. Las monedas nacionales se han devaluado y pegado al patrón del dólar estadounidense, y el crecimiento de las exportaciones, principalmente de las exportaciones no tradicionales, tales como las frutas, las legumbres, as flores y algunos bienes manufacturados, han sido promovidos a expensas de la baja en la producción de alimentos para el consumo doméstico. Los gobiernos de los países considerados económicamente como satélites no tienen el poder, bajo las presiones de las

organizaciones internacionales, para reducir la importación de bienes que no son necesarios para el desarrollo.

El espacio internacional de la economía política está siendo reconceptualizado en una nueva lógica que delimita a un escenario global. El concepto de espacio ha evolucionad de una configuración territorial física a otra más dinámica y abierta. Los procesos de desterritorialización del Estado acelerados por la globalización económica está dando lugar a nuevas formas de unidades espaciales de organización geopolítica y geoeconómica.

Para Arellanes Jiménez (2001), este nuevo concepto de espacio es un "concepto dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando as diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones." Esta nueva lógica da origen a la noción de "globalización" como una narrativa organizada de una incluyente política económica internacional, la cual es necesariamente global en el sentido de que lo que es requerido para tal inclusividad es una "apertura a todos los efectos e influencias que pueden tener significancia en la política económica" (May, 1997)

También las interrelaciones entre las naciones se han vuelto inherentemente más complejas que la administración de las actividades dentro de una sola nación. Muchos esfuerzos de la globalización han sido demolidos bajo el peso de la coordinación de necesidades sociales insatisfechas (Boudreau, Loch, Robey, Straud, 1998) La coordinación de políticas económicas Inter.-gubernamentales ha tenido un relativo avance, al menos más que en el caso de las políticas macro organizacionales.

Los procesos de globalización también son cuestionados desde otras perspectivas. Stein (1999) hace referencia a tres tendencias negativas: la creciente volatilidad de los flujos de inversión, el retraso y la marginalización de algunas regiones a estos procesos y la creciente hegemonía de la economía neoclásica como la inspiración de estas políticas económicas dirigidas a la estabilización, transformación y desarrollo económico. Es difícil de controlar la volatilidad delos mercados financieros por las naciones pequeñas en desarrollo Esta hegemonía de la economía neoclásica se fundamenta en el principio que establece que el mercado resuelve eficientemente la organización de los factores de producción (tierra, capital, trabajo y organización), pero no integra a las instituciones de la economía. La movilidad de los factores de la producción es una de las características distintivas de este modelo neoclásico, así como el enfoque emprendedor y de innovación que modifica constantemente las estructuras de la economía.

Los establecimientos institucionales de los sistemas político-democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, el desarrollo económico, la homogeneidad cultural, la herencia de un imperio colonial anterior y el lugar del país en el sistema económico y político internacional. Estos problemas incluyen un pronunciado grado de explotación económica, desigualdad social y económica, injusticia social y política que ha caracterizado a la región desde los tiempos en que los indígenas pobladores de estas tierras fueron subyugados por la fuerza a la dominación colonial europea en el siglo XVI.

El cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra. La herencia colonial ha marcado las estructuras

económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados. Una mayor atención al diseño de las políticas nacionales, ubica la importancia que tienen los factores externos, tales como el crecimiento industrial y la tasa de interés mundial.

Los flujos de inversión extranjera directa y los portafolios de inversión están creciendo abruptamente en la relación al tamaño de muchas economías nacionales y por lo tanto son motivo de preocupación crítica en la formulación de una política económica efectiva, que tenga consideraciones con respecto al medio ambiente en constante degradación. Los gobiernos nacionales han saneado las economías únicamente para favorecer la inversión internacional. Sin embargo, existen muchas dificultades para controlar, monitorear y medir los flujos de inversión en una marco de referencia de liberalización de controles, que da lugar a reportar por debajo de los niveles normales los flujos de inversión que vienen y van en las organizaciones internacionales.

En un mundo donde no existen agencias regulatorias el sistema financiero está en riesgo constante. Por esto la necesidad urgente de establecer una institución internacional que regule el sistema financiero. La analogía del sistema financiero con un casino es ya muy conocida. Lo cierto es que en una globalidad en que el capital financiero es la bola demoledora que provoca la ruina de las naciones enteras y no necesariamente las más subdesarrolladas.

El modus operandi de estos capitales desestabilizan los equilibrios macroeconómicos de los países financieramente más dependientes de capitales foráneos y los hunden en crisis profundas de desarrollo y crecimiento económico. Existe una masa de más de dos billones de dólares en constante rotación diaria que se involucran en actividades de especulación financiera, bursátil y cambiaria que distorsiona los mercados financieros internacionales y destruye las sociedades.

Los flujos de capitales especulativos circulan sin controles y con mucha volatilidad en un sistema globalizado, distorsionando las economías nacionales y causando serias crisis financieras y monetarias que traen consigo deflaciones y depresiones porque destruyen la confianza sobre la que descansa la actividad económica de los Estados-nación. Los estados imperialistas desempeñan una función importante en la gestión de las crisis de los Estados menos desarrollados y en las empresas transnacionales que confrontan problemas financieros. Dos de las causas principales de estas crisis financieras son la volatilidad de las transferencias de inversiones altamente especulativas y la irresponsabilidad de los Estados nacionales para administrar sus economías.

Las crisis financieras han aumentado los efectos perversos de los procesos de globalización en la sociedad tales como la reducción del gasto público en educación, salud, vivienda y el aumento en la desigualdad y pobreza. Las crisis afectan adversamente el comercio internacional y los flujos de capital, el crédito doméstico y en general el producto. Esto demuestra que no existe un equilibrio en los mercados financieros sustentado sobre la base de las expectativas que anulan los equilibrios. El concepto del equilibrio en la teoría económica queda invalidado. Todo esto hace pensar que el fin del neoliberalismo ya está cercano.

Resultados de análisis empíricos de las relaciones entre el riesgo monetario y el riesgo nacional, al igual que el desarrollo nacional y la localización del país, sugieren que aquellos países con relativamente altos niveles de riesgos nacionales, experimentan relativamente altos niveles de riesgos monetarios, tal como Yenin and Borde (1998) sostienen. Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. Esta conclusión apoya el argumento de que aquellos factores que conducen al riego nacional, parecen tener también una influencia en la tasa del riesgo del cambio monetario. Las instituciones que promueven el fundamentalismo del libre mercado no han sido capaces de lograr sus objetivos para proporcionar una mayor estabilidad y desarrollo político, económico y social a los pueblos de la tierra.

El mismo concepto de la transformación de los sistemas globales, bajo procesos de expansión y contracción se relaciona con las cambiantes relaciones de poder existentes entre el centro y la periferia e involucra una multitud de cambios en nuevas configuraciones de clase.. Los procesos de globalización desdibujan la figura del Estado-nación en su tránsito hacia otras formas de organización multinacional. Las nuevas formas de organización y de autoridad emergen con el uso de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento (TICs) y dan como ventaja una mayor flexibilidad.

La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. Las concepciones de la globalización delimitan las estructuras de las relaciones de poder entre los Estado-nación como un fenómeno ambiguo y exponen los efectos de pesadilla del emergente orden global (Kayatekin y Ruccio, 1998)

Los efectos de la globalización tienen diferentes impactos en las economías nacionales y regionales, dependiendo de sus niveles de desarrollo y el grado en que se integran a los nuevos procesos de la internacionalización económica. Frente a las expectativas que se tenían de la globalización de los supuestos beneficios para todos los habitantes del mundo, hasta ahora las consecuencias han sido un incremento en los niveles de pobreza y hambre en los individuos, economías disfuncionales para muchas naciones, desintegración y violencia social, catástrofes ecológicas, etc. Los procesos de globalización tal como avanzan en la actualidad son procesos que pauperizan y polarizan a la sociedad, generan desempleo, depreda los recursos naturales, contamina, etc. Las disfuncionalidades de los mercados constituyen un importante factor que limita el uso efectivo de los derechos y asignaciones de los recursos y genera pobreza.

La emergencia del mundo globalizado es contradictoria, a nivel macro surgen nuevas identidades de regiones y a nivel micro se agudizan los problemas de identidades de los regionalismos y sus expresiones en separatismos. La expresión de estas identidades encuentran sus vehículos en las diferentes instancias nacionales e internacionales.

Por un lado, desde afuera la globalización afecta la racionalidad del estado-nación, por el otro lado, desde adentro los procesos de los regionalismos y separatismos afectan la gobernabilidad. No obstante, a pesar de la disfuncionalidad del Estado-nación como forma

política para el control territorial de los mercados, y frente a capitales que no reconocen nacionalidades, la gobernabilidad de las instituciones que promueven los procesos de globalización resulta ser prioritaria. Es cuestionable si la soberanía y autonomía representan obstáculos para los procesos de globalización, considerando que los Estados-nación no han podido resistir los embates de los centros de poder económico y político mundial. La autonomía es la condición esencial para que los pueblos ejerciten su soberanía y su independencia.

En el análisis de Berruga (1997), "el globalismo económico y la fragmentación política son fenómenos de signo contrario y, potencialmente, punto de origen para importantes fricciones internacionales. La fragmentación política, en el fondo, es una reacción al centralismo y a la toma de decisiones a distancia del destinatario... Esta tensión entre el parroquialismo (sic) político y la globalidad económica tiene importantes repercusiones sobre las relaciones internacionales". La fragmentación espacial regional y local es una fuerza que se contrapone a los procesos de globalización y genera tensiones dando como resultado una dispersión internacional, como la denominado Torrijos (2001). La fragmentación política debilita los sistemas de gobernabilidad centralistas. El mundo tiende más a fragmentarse que a unificarse.

La forma en que se han resuelto algunas de estas fragmentaciones es mediante los acuerdos confederados que conceden autonomía a los miembros en coherencia con las estructuras de los gobiernos centrales. En las decisiones tomadas por los grupos dominantes mayoritarios en los foros de los Estados-nación, con los mismos símbolos y lenguaje usados en las instituciones públicas que operan en todo su territorio, las separaciones y fragmentaciones implican siempre cambios radicales.

Esta tendencia a la fragmentación del Estado-nación conduce a globalizar los fenómenos locales y a exacerbar la estabilidad debido a conflictos políticos, económicos, sociales, étnicos, religiosos, etc. La tendencia del mundo, más que a unificarse es a fragmentarse. Desde esta perspectiva, la globalización debilita las culturas locales, la soberanía nacional, la independencia económica y política de estas naciones, la integridad de las instituciones políticas y sociales y la seguridad nacional.

La soberanía nacional está siendo afectada en forma asimétrica porque las principales decisiones internacionales son tomadas por un selecto número de países sin considerar los organismos internacionales integrados por las comunidades de naciones. Se asume que incluso, los poderes occidentales sacrifican el principio de integridad de las fronteras territoriales del Estado-nación porque tienen razones geopolíticas de más peso para hacerlo, razones que luego se convierten en geoeconómicas con la expresión de sus diferentes instituciones del mercado. La desterritorialización del Estado está dando lugar a nuevas formas de organización espacial geopolíticas y geoeconómicas.

No obstante, la geoestrategia y la política, ante los acontecimientos recientes, se ha complicado a tal grado que para Sandoval Ballesteros (2000), este período corresponde a una “geopolítica del caos” que cede su lugar a los intereses de las instituciones del mercado, es decir a una geoeconomía. Las grandes corporaciones transnacionales promueven la geopolítica y la geoconomía del espacio nacional al espacio global. Este

espacio global está representado por la globalización, la cual se manifiesta en un contexto de procesos fragmentados.

Los discursos existentes sobre la globalización se enfocan en la conceptualización de una pluralidad de formas de la subjetividad y las posibilidades para la clase política, de las que emergen dos en la literatura de la economía política radical, el "Keynesianismo nacional" y el "imperativo global". La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). Las políticas keynesianas perdieron legitimidad para avanzar en el desarrollo del sistema capitalista que busca más altos niveles de participación global.

Algunos economistas políticos radicales sostienen la idea de que las políticas macroeconómicas inspiradas en la teoría de la política económica del Keynesianismo, fueron capaces de generar y mantener balances internos y externos de los Estados-nación con la creación y el desarrollo de un Estado de Bienestar. El modelo de Estado de Bienestar se arraigó principalmente en los países desarrollados del norte, mientras que los países del sur adoptaron las estrategias desarrollistas. En este modelo, el Estado acepta la obligación de otorgar los bienes y servicios asistenciales a la población.

Durante el último medio siglo, los gobiernos de los países del occidente practicaron medidas de redistribución del ingreso bajo el modelo de un Estado de Bienestar, para contrarrestar los efectos negativos del capitalismo agravados por las consecuencias de las crisis económicas y la creciente presencia de la amenaza comunista. La racionalidad de la intervención estatal para la obtención de una mejor distribución del ingreso cae dentro de la teoría marginalista que justifica el argumento de la equidad. En este sentido, las políticas de bienestar responden a un contexto de fuerzas sociales que emergen en una fase de la acumulación capitalista.

Bajo las condiciones de un Estado de Bienestar en sus diferentes modalidades, la economía es una esfera de actividad relativamente independiente, a diferencia de una economía de Estado, que no distingue entre el Estado y la economía como esferas separadas de actividad pero entendida la economía como un componente planeado y organizado del Estado. La racionalidad económica del Estado de Bienestar es la combinación óptima de la justicia social y la eficiencia económica que pueden lograrse dentro del capitalismo. El modelo de Estado de Bienestar retiene la obligación moral de proveer los servicios y bienes asistenciales a toda la población. El modelo de Estado de Bienestar llevado a escala global o mundial es un proyecto que alienta lo mejor de la sociedad humana en contra de maximizar los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

La literatura sobre el bienestar económico y la teoría de la opción social tratan sobre los mecanismos de transferencia y redistribución del ingreso para la maximización del bienestar social y minimizar las pérdidas de eficiencia. Se emplea el término utilidad para referirse al bienestar individual, pero cuando existe incertidumbre respecto de los resultados esperados, se emplea el término "utilidad esperada". En economía del bienestar, la noción de bienestar de los individuos incorpora cualquier cosa que puede ser de valor en una forma

positiva para dichos individuos. Todo lo que sea socialmente relevante porque tiene valor a los miembros de la sociedad se incluye en la medida del bienestar social. Los factores no relacionados al bienestar de los individuos son irrelevantes al bienestar.

La economía del bienestar promueve el bienestar individual favoreciendo una mayor precisión en el logro de los beneficios y reducción de costos para conseguirlo, mediante el control de la conducta de los burócratas que ejercitan discreción, logran una mejor percepción de legitimidad del sistema legal y concentran la atención en la reducción de costos administrativos. Aparentemente se ha mantenido la legitimidad en las economías de bienestar si se considera que los gobiernos tanto de izquierda como de la derecha que se mantienen en el poder y por los movimientos sociales que se manifiestan y que realmente mantienen objetivos democráticos. Mientras que la derecha ha aprovechado las circunstancias para promover activamente las funciones del Estado orientados por una política económica en beneficios de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, los de la izquierda hablan de un desmantelamiento de las funciones del Estado.

El bienestar individual afecta el bienestar social en forma simétrica. El bienestar social depende del bienestar de los individuos. Sin embargo, las transferencias destinadas a mejorar el bienestar social pueden aumentar o disminuir la desigualdad. El óptimo de Pareto puede sancionar la injusticia al menos peor si se maximiza el bienestar social. El concepto de bienestar de la sociedad se basa en el bienestar de los individuos y es postulado como una función creciente del bienestar de los individuos sin que dependa de otros factores. En forma utilitaria, el bienestar social es la suma de las utilidades individuales. Es decir, se da una agregación. La relación entre el bienestar individual y el bienestar social es una relación de dependencia positiva.

Las políticas efectivas del Estado de Bienestar dependen de los poderes centrales de los gobiernos de los Estados-nación. La formación y ascenso de los Estados nacionales facilitó la creación de instituciones que fueron capaces de centralizar las decisiones No obstante, el Estado de Bienestar encuentra una serie de restricciones impuestas por la competencia global, la cual ha removido, y más aún todavía, eliminado a los principales defensores de las políticas del Estado de Bienestar.

Quienes critican el desempeño del Estado de Bienestar están a favor de una economía con base en los principios de libre mercado y en contra de una política social orientada a solventar el bienestar de la colectividad. Involucrarse en la acción colectiva, los actores buscan traer el ansiado bien colectivo y dar forma a la colectividad con respecto al bien colectivo.

Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación. Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de

la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil.

En la sociedad moderna hay un conflicto latente entre capitalismo y política. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado La política exige por lo menos un uso comunitario sometido a reglas que se regulan por leyes, desde el impuesto obligatorio a las reglas de tráfico, pasando por la reglamentación de la construcción, el comercio etc. Una vez que la acción colectiva se inicia, en el curso de este mismo proceso emerge una colectividad que puede aplicar sanciones informales contra los que contravienen y recompensar a colaboradores a bajo costo (castigo u ostracismo), a ningún costo e incluso a premio (avergonzar, reprochar o criticar).

El modelo de Estado de Bienestar llevado a escala global o planetaria es un proyecto que alienta lo mejor de la sociedad humana en contra de maximizar los intereses económicos de los grandes grupos corporativos transnacionales. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

La noción de bienestar social está enmarcada en una tensión que surge de la consideración de que la sociedad se integra por clases como una simple agregación de individuos y que por lo tanto, las trasferencias que originan un mayor bienestar social, pueden aumentar o disminuir la desigualdad social. El bienestar social es una función de la utilidad que los individuos gozan bajo un régimen legal. La utilidad es definida como el gozo que cada individuo tiene por la satisfacción de las preferencias del individuo.

Precisamente, uno de los métodos para la evaluación de cambios de políticas públicas es mediante la determinación de la función de bienestar social. Esta función compara las asignaciones de utilidad antes y después del cambio postulando niveles de asignación de la utilidad alternativa y la política de cambio recomendada como deseable si la nueva asignación de utilidad genera un más alto nivel de bienestar social. Algunos factores que influyen el bienestar de los individuos son difíciles de analizar y de cuantificar. Si un individuo prefiere un estado de cosas por sobre otro, entonces el bienestar social es mayor en el primer estado que en el segundo. Sin embargo, para muchos economistas esto es inaceptable porque involucra comparaciones interpersonales de utilidad y, además, cuestionan la determinación de la función de bienestar social correcta.

La competencia económica impide a las regulaciones del Estado de Bienestar que imponen cargas desiguales sobre los ingresos de capital y de negocios móviles. En el Estado de bienestar, la economía básicamente se controla a sí misma, de acuerdo con sus propios principios. El Estado interviene, sin que necesariamente exista una solución uniforme para la diferenciación entre las responsabilidades y bienes públicos y privados, o entre oferta pública y tenencia privada. La oposición a la regulación vista como un impedimento al desarrollo social y al crecimiento económico, es fuerte en quienes sostienen la idea de que es necesario una reforma regulatoria eficiente del Estado. El crecimiento económico se ha producido bajo la protección de los gobiernos.

Esta reforma regulatoria es concebida como un nuevo marco institucional de regulaciones económicas, sociales y administrativas que los gobiernos establecen a través de diversos instrumentos a los individuos y a las organizaciones. La reforma regulatoria mejora el costo, desempeño y la calidad jurídica de las regulaciones. Estas regulaciones "incluyen las leyes, ordenamientos formales e informales y reglas subordinadas emitidas por todos los niveles de gobierno, así como las reglas emitidas por órganos no gubernamentales o auto-regulados a los cuales los gobiernos hayan delegado facultades regulatorias" (OCDE, 1999).

Esta reforma regulatoria se identifica con la reforma institucional de acuerdo a Villareal (2000) porque "norma, más que regula el comportamiento de los agentes (empresas, ciudadanos, trabajadores, bancos extranjeros) en una nueva economía de mercado privatizada y abierta a la competencia internacional." Esta economía de mercado se orienta por las necesidades. Los actores pueden reformar las instituciones básicas otras que por evolución en un largo camino institucional, de tal forma que combina las diferentes tradiciones de la democracia.

La reforma institucional, por lo tanto, refiere al potencial que descansa en una síntesis de los dos acercamientos de elección racional institucional y un institucionalismo histórico. Los actores pueden reformar las instituciones básicas otras que por evolución en un largo camino institucional, de tal forma que combina las diferentes tradiciones de la democracia. Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica.

La dificultad para predecir futuros efectos de la reforma institucional da como resultado una estrechez de visión. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma. La reforma institucional así vista, requiere de "un nuevo marco de reglas formales (leyes, normas, etc.) e informales (valores, actitudes, etc.) que promuevan la operación eficiente de los mercados en el nuevo sistema de economía privatizada y mercados libres y abiertos a la competencia internacional...".

Esta retórica basada en los mercados libres repetida hasta el cansancio por los ideólogos conservadores es también usada por la izquierda. Mientras que el conservadurismo institucional y las propuestas dependentistas institucionales nos conducen a esperar que la evolución de los sistema políticos democráticos exhiben diferentes patrones, la propuesta de aprendizaje institucional apunta a la convergencia. La reforma institucional, por lo tanto, refiere al potencial que descansa en una síntesis de los dos acercamientos de elección racional institucional y un institucionalismo histórico.

El diseño de las nuevas instituciones debe ser el resultado de negociaciones y arreglos entre los diferentes agentes económicos. Las nuevas instituciones deben favorecer el desarrollo de las capacidades del individuo a efecto de que su interés se identifique con el del sistema social. Además, debe tomar en cuanta las restricciones existentes, los resultados logrados anteriormente y la incertidumbre de un cambiante medio ambiente. Los niveles de restricciones institucionales existentes determinan el desempeño económico.

Spence and Gopalakrishnan, (2000) argumentan que la distinción entre un alivio regulatorio y una reforma regulatoria es una distinción entre fines y medios, entre simplemente reducir la carga regulatoria sobre la industria, bajando sus estándares, y en dar solución al problema de cómo obtener un estándar mejor. La crítica a la eficiencia de la regulación es antigua y bien conocida como la solución económica a las ineficiencias, en la que se da el reemplazo de mandatos regulatorios con los incentivos de los mercados. Los sistemas de colaboración regulativa han fallado al alcanzar las expectativas de los proponentes, aunque los críticos argumentan que lo que atacan es el proceso de decisiones de las políticas no su contenido. Por otro lado, se argumenta que la regulación colaborativa mejora la persecución de las agencias del interés público.

La doctrina del interés general se manifiesta así misma como un sistema de representación que intenta inculcar la creencia en la legitimidad del orden político y social. Es la medida de la legitimidad de cualquier acción administrativa. Asume que la habilidad para solucionar las diferencias sociales y los antagonismos a fin de lograr una meta común a todos los miembros de la comunidad nacional. La idea principal que incorpora es que los oficiales administrativos no llevan a cabo sus acciones administrativas por sí mismos y para su propio beneficio, sino en nombre y beneficio del grupo entero (Kampto, 1997). Para esto, la regulación tiene que ser mínimamente prescriptiva, dejando a las empresas la determinación de los medios de cumplimiento con los límites regulatorios y sus metas.

Una forma de intervención del Estado moderno en las esferas autorreguladas de la sociedad, como en el caso de la competencia del mercado, es que una de las tareas de la planeación política es decidir que funciones socio-económicas el Estado debe realizar. La tendencia a fortalecer las funciones de intervención y de regulación para promover el desarrollo regional está mediada por una demanda en la satisfacción de necesidades de la sociedad. El Estado nacional sigue siendo un importante actor social en la promoción del crecimiento y desarrollo regional en forma equilibrada y equitativa.

La dirección de una economía planificada satisface más apropiadamente las necesidades de la población si se utilizan mecanismos democráticos. Las capacidades de intervención del Estado todavía son grandes en muchos sectores de la economía. Baumol (1993) desarrolló una teoría económica que justifica la intervención estatal que cuestiona por qué con ciudadanos racionales en una democracia, se tolera la interferencia gubernamental en la operación de la economía. La racionalidad de la intervención del Estado bajo la teoría marginalista se hace en consideración a lograr una mayor distribución en el ingreso y una mayor eficiencia del mercado.

A finales de la década de los treinta, los Keynesianos sociales buscaron atar el gasto social a políticas macroeconómicas para mantener el pleno empleo. El Keynesianismo dominó en la formulación e implementación de las políticas públicas desde los cuarenta y hasta los setenta. Durante esta época, el modelo económico imperante, promueve los programas basados en una política de desarrollo social, orientados a eliminar las desigualdades económicas y sociales, aunque finalmente se benefician más las clases medias urbanas que las rurales pobres. El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido de los beneficios.

El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido de los beneficios. Por tanto, la naturaleza excluyente de la transformación económica de la agricultura latinoamericana ha incrementado el empobrecimiento de la población rural y acelerado la migración del pobre rural a las ciudades en busca de empleo.La eficacia de la política de desarrollo estuvo determinada por una burocracia desarrollista que no alcanzó a consolidar su autonomía y que siempre estuvo marcada por vicios patrimonialistas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la intervención estatal se centró en la seguridad de desempleo y seguridad medica. La doctrina del libre mercado se aplicó a los sistemas de seguridad social desde el New Deal de Franklin D. Roosvelt en Estados Unidos y durante el período de posguerra en Inglaterra, se realizaron grandes transformaciones de política social, fomentando la igualdad democrática y seguridad social, subvencionadas por el Estado de Bienestar. Los ideólogos conservadores han promovido esta retórica del mercado libre y ha sido asimilada y repetida por la izquierda.

Hay que dejar claro que la política social puede ser una práctica pública estatal que dista mucho del Estado de Bienestar y que su principal objetivo es la procuración de los bienes y servicios públicos en materia de educación, salud, habitación, alimentación, etc. El liberalismo creó un sistema de seguridad social que tuvo éxito durante la segunda mitad del siglo XX, en pago a su apertura, el cual se encuentra ahora bajo presión. No obstante, el modelo del Estado de Bienestar llevado a escala global o mundial es un proyecto que alienta lo mejor de la sociedad humana en contra de maximizar los intereses económicos bursátiles de los grandes grupos corporativos transnacionales.

Los Keynesianos propusieron medidas para crear el pleno empleo por medio de políticas estatales activas que más tarde fueron reemplazadas por las políticas de los Keynesianos comerciantes y éstas a su vez, al final de los setenta, por las políticas de libre mercado. A finales de la década de los setenta, la desregulación del estado transfiere el mando al mercado, es decir, la regulación por el mercado. No obstante el problema que existe actualmente en muchos países es una déficit de regulación y gobernabilidad debido principalmente a que la transferencia de mando y poder no se ha dado porque por un lado mientras las instituciones del Estado se han vaciado en sus funciones reguladoras, por otro lado las instituciones del mercado no han sido capaces de adquirir estas funciones reguladoras.

Las fallas para coordinar las políticas sociales y macroeconómicas, así como la política del pleno empleo ha reforzado la creencia política de que cada persona buscará maximizar su beneficio. La gradual erosión del Estado de Bienestar se relaciona con el gradual avance de las políticas basadas en las expectativas racionales-monetaristas (Moudud and Zacharias, 1999) El laissez faire y la “responsabilidad personal” son los principales postulados de las fuerzas conservadoras dominantes.

Kaiser (1997) afirma que la hipótesis del conservadurismo institucional sostiene que las reformas constitucionales en las democracias son relativamente poco comunes, no debido a

factores institucionales sino al cálculo de los actores políticos, solamente cuando una gran crisis ocurre, ya sea por un abrupto cambio de factores contextuales o a través de un deterioro dramático de la satisfacción de la política pública, es una ventana de oportunidad abierta para la persecución de planes de reformas. La investigación en la ingeniería constitucional ha tomado nota de los efectos de difusión, tales como la globalización de las comunicaciones que enriquece las bases cognitivas de las cuales escoger.

Los bienes y servicios continúan produciéndose y distribuyéndose por el Estado. Sin embargo, en vista de la carga pesada que soporta el Estado de Bienestar, se le cuestiona si debe restringir su función de Estado moderno a garantizar la seguridad y el orden público en todas las áreas de la sociedad, llegando a institucionalizar el monopolio de la violencia. El Estado moderno ha sido el principal instrumento para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En estas áreas, se incluye la economía (König, 1998)

A principios de los ochenta, el Estado de Bienestar empieza a ser atacado y diez años después empieza a desaparecer. En las últimas dos décadas, las funciones del Estado de Bienestar han sido objeto de un largo debate en las políticas públicas, como resultado de los avances de los procesos de globalización, la cual muestra dos tendencias, hacia la eliminación de funciones o a su fortalecimiento mediante la promoción de la regulación del desarrollo local.

Este debate ha resultado en propuestas para adelgazar y hacer más eficiente al aparato del Estado mediante la aplicación de medidas de austeridad, las cuales, consideran sus principales detractores, son necesarias para elevar el crecimiento económico y mantener bajo los niveles de desempleo. Las crueles medidas de austeridad han sido adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de la región a fin de reducir sus gastos en educación, salud y otros servicios sociales de tal forma que pueden servir a la combinación de deudas de los sectores privados y públicos de los diferentes países.

Por la otra tendencia, la reestatización o neoestatización del Estado se orienta a recuperar funciones eliminadas o disminuidas por el modelo neoliberal y constituye ahora la pieza fundamental sobre la que pivota la expansión de las grandes corporaciones transnacionales. Esta expansión de las transnacionales descansa en la expansión militar y política de los Estados imperialistas. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

En esta fase del sistema capitalista se alienta una contrarrevolución para desmantelar las instituciones del bienestar social y revertir los beneficios alcanzados en materia de igualdad social y democracia participativa, en la que los ciudadanos tienen la capacidad para la formulación de políticas públicas que requiere el desarrollo. No obstante, el empleo de los mecanismos de participación política, económica y social, puede dar lugar a procesos de manipulación y control político por regímenes autoritarios que consideran usar la violencia contra quien se opone, por considerar que desestabiliza, tanto en la esfera pública como en la privada, logrando institucionalizar la violencia. Ahora que la amenaza comunista ya no existe, ya no es necesario contener los efectos negativos del modo de producción capitalista. El recuento que hace Said (2000) es por demás claro:

> “Primero los sindicatos fueron disueltos o divididos (los mineros británicos y los controladores de tráfico aéreo estadounidenses) A esto le siguió la privatización de los principales servicios, como el transporte, la luz, el gas, la educación y la industria pesada sobre todo en Europa. En Estados Unidos, donde la mayoría de las industrias, excepto la luz y el gas, estaban ya en manos privadas, pero los precios eran controlados por el gobierno en el sector de los servicios básicos, la liberalización estaba a la orden del día. Esto significaba que el Gobierno ya no desempeñaría ningún papel a la hora de garantizar que los precios de transporte, las necesidades básicas, la sanidad, la educación, así como el gas y la electricidad, se mantendrían dentro de ciertos límites. El mercado iba a ser ahora el que dictara las normas, lo que significaba que el mantenimiento de los costes y beneficios de las líneas aéreas, hospitales, compañías telefónicas y, más tarde, el gas, electricidad y el agua quedaban en manos de las compañías privadas frecuentemente con un considerable perjuicio económico para el consumidor. Muy pronto, hasta correo y buena parte del sistema de prisiones fueron privatizados y liberalizados. En Gran Bretaña, el thatcherismo destruyó prácticamente el sistema universitario, pues veía a cada institución universitaria como un proveedor de aprendizaje y, por tanto, como un negocio que, desde el punto de vista de pérdidas y ganancias, tendía a perder dinero. Se eliminaron muchas cátedras, lo que provocó una pérdida extraordinaria de moral y productividad, ya que miles de profesores tuvieron que buscar empleo en el extranjero”.

La privatización se convirtió en parte del paradigma hegemónico del neoinstitucionalismo para eficientar la acción de los individuos eliminando las ineficiencias de las empresas propiedad del Estado. Sin embargo, hasta ahora, los efectos han sido negativos. Las bases de la gobernabilidad se han trastocado. Las empresas propiedad del estado a pesar de ser independientemente constituidas, autónomas, o separadas del control político, permanecen como propiedad del Estado representado por los políticos y burócratas.

Se establecieron programas de privatización sin los correspondientes esquemas de incentivos que, además, requieren la creación de nuevas instituciones capaces de encausar los comportamientos racionales pregonados por el neoinstitucionalismo económico. El neoinstitucionalismo asume que los sistemas de incentivos económicos de las instituciones desempeñan un papel importante en la dinámica y desarrollo de los sistemas económicos, políticos y sociales. El nuevo institucionalismo se basa en los modelos explicativos de actores y procede del supuesto que las preferencias pueden ser entendidas en el contexto de los incentivos generados institucionalmente y de las opciones disponibles institucionalmente que estructuran la elección. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. Las preferencias de los actores políticos son cruciales para lo que se diseña institucionalmente porque los participantes conocen que los altos costos pueden involucrarse si las decisiones van en contra de ellas.

Estas nuevas instituciones deben de sustituir a las anteriores con todos los supuestos vicios como la corrupción, el patrimonialismo, el nepotismo, las acciones no éticas, la

degradación del medio ambiente, etc. La mejora institucional y el incremento de sus capacidades para el combate abierto a la corrupción está determinado en buena parte por los recursos destinados por la sociedad civil

Por lo tanto, la globalización económica ha puesto en serias dificultades al Estado de Bienestar porque trata de eliminar el control nacional sobre las transacciones económicas que cruzan las fronteras de los Estados-nación y por lo tanto expone a los productores nacionales a colocar sus productos y servicios al nivel mundial con las condiciones de competencia. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula.

Así, los procesos de la globalización realizados puramente por transacciones de capital especulativo, están reacomodando el ejercicio del poder económico y político en nuevas configuraciones de clase para pasar de un mercado regido por el Estado a un Estado regido por el mercado que debilita la soberanía nacional y la autonomía de las decisiones políticas de los gobiernos. La misma expansión de este capital especulativo de corto plazo, limita los alcances de una planeación estratégica del Estado-nación, con las consiguientes limitaciones al ejercicio de los sistemas de democracia política y soberanía nacional. De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo han favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

La emergencia durante los ochenta del “racionalismo económico” en las políticas públicas en aquellos valores que parecen ser inherentes a la cultura y en la práctica de la economía del bienestar, particularmente evalúa los aspectos de la relación entre los modelos de la microeconomía y la macroeconomía de la intervención del Estado. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. La teoría de la microeconomía identifica la política comercial, la competencia entre los productores foráneos y las inversiones internacionales, así como las diferencias relacionadas con la apertura en los costos de diseño institucional.

El vínculo entre los agentes económicos y las instituciones requiere del análisis del diseño institucional de los sistemas políticos. Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente. La propuesta de aprendizaje institucional sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional.

De acuerdo a Kaiser (1997) el argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación

directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma.

Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional.

Los post-positivistas y los institucionalistas atacan el paradigma tradicional de la racionalidad del análisis de las políticas públicas como un instrumento de la administración pública. La administración está perdiendo de vista sus propios objetivos, entre ellos, la consideración de que la democracia es el principio razonable de la buena administración pública (Amín, 2001). Tal parece que existe para sus propios propósitos y con frecuencia parece ser el fin en sí mismo para aquellos que desean entrar. Los procesos de globalización están sometiendo a tensiones al Estado y lo someten a una reforma de la administración pública.

El análisis de las políticas públicas es el nuevo diseño instrumental de la nueva administración pública y de la denominada gerencia pública, cuyos objetivos no son solamente lograr la eficiencia y la maximización de utilidades, sino también lograr la legitimidad del modelo económico que postulan mediante la aprobación ciudadana, tomando en consideración que la conducta y la acción humana se sustenta también en la cultura y las instituciones. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. Esto ha dado lugar a una supremacía de los análisis de políticas públicas basadas en modelos de conducta humana que buscan la maximización de las utilidades, y por lo tanto con una clara orientación al mercado.

Estas políticas públicas organizan al sector público bajo el enfoque de una nueva administración pública, denominada gerencia pública, con fundamento en principios de economía neoclásica, cuya operatividad y funcionalidad responden a los intereses de la globalización económica. Las funciones tradicionales del Estado-nación son redefinidas por las presiones de los procesos de globalización, las cuales reclaman una reforma a la administración pública. El mercado como forma de coordinación está siendo adoptada por el sector público, en relaciones de comprador-proveedor y de subcontratación de servicios. Así, el Estado es considerado como un conjunto de organizaciones interconectadas y no un solo actor. El concepto de Estado implica el ejercicio del poder a través de instituciones. Es un archipiélago más que una isla de poder consciente. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las

telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición".

Sin embargo, el límite de este enfoque instrumentalista de las políticas públicas son los valores de la sociedad. La "racionalidad instrumental" tiene serias implicaciones en la formulación de las políticas públicas al desarrollar una "tiranía de la ciencia política". En los términos de Dryzek (1990) es un proceso de políticas controlado por una elite de manipuladores que sobre regulan y dan forma a los deseos y aspiraciones de los demás individuos. Estos individuos son considerados como idiotas, en la acepción original del griego, que llamaban así a los individuos que eran irresponsables en las políticas públicas que los tenían sin cuidado.

El análisis de las políticas públicas deben fundamentarse más en los valores sociales y en las instituciones que las sustentan que en modelos gerenciales basados en la economía neoclásica de maximización de utilidades y efectividad. La reforma a la administración pública implica su despolitización y la exigencia ciudadana de que las políticas públicas tengan "responsividad" Los valores son creencias firmes acerca de acciones preferidas y de modos de conducta. Aaron, Man y Taylor (1994: p. 3) sostienen que los analistas han empezado a reconocer que los valores y las normas no son exógenos o independientes de la política pública y la idea de que los valores pueden cambiar, combinado con el reconocimiento de que las respuestas a las políticas dependen de las preferencias a la gente, esto es, de sus valores, lo que conduce a pensar acerca de cómo las políticas públicas deben cambiar los valores directamente o indirectamente, y por lo tanto cambiar las repuestas a las mismas políticas públicas.

Esta relación es con referencia al impacto de la teoría Keynesiana desde los finales de los treinta. Todas las promesas que hace la macroeconomía Keynesiana para cuidar de las variables económicas de la sociedad en su conjunto, con cierta autonomía de las implicaciones confusas de la microeconomía, resumió la economía que tomó seriamente los temas de la microeconomía, como la asignación de los recursos escasos, la determinación de los precios y la oferta.

Sin embargo, el Keynesianismo es disfuncional bajo el esquema de la globalización de la economía. La teoría de la microeconomía identifica la política comercial, la competencia entre los productores foráneos y las inversiones internacionales, así como las diferencias relacionadas con la apertura en los costos de diseño institucional. El vínculo existente entre la eficiencia que buscan los agentes económicos y las instituciones requieren de análisis de diseños institucionales de los sistemas políticos. Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional. Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional.

El neoliberalismo de los ochenta redefinió el papel del Estado en la economía nacional y en el sistema internacional, dejándole pocas opciones bajo el imperativo de encoger sus funciones mientras que por otro lado enfrentan el reto que representa un mundo cada vez más competitivo. El nuevo papel del estado neoliberal rechaza las responsabilidades contraídas por el Estado de Bienestar profundizando los efectos negativos de la diferenciación social y la disociación de la vida social en amplios sectores de las comunidades.

Los ideólogos ortodoxos neoliberales anularon el papel fundamental del Estado, por lo que es necesario se reconsidere cómo debe desempeñar más eficazmente las actividades y funciones de regulación, protección y bienestar social, y mediante que métodos de gobierno debe hacerlo. No obstante, el modelo del Estado d Bienestar llevado a escala global o mundial es un proyecto que alienta lo mejor de la sociedad humana en contra de la maximización de los intereses económicos bursátiles de los grande grupos transnacionales. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

El Estado con un perfil neoliberal asume, promueve y defiende la aplicación de las leyes del libre mercado que más benefician a los agentes multinacionales y trasnacionales del capital. El Estado-nación juega ahora un papel reducido frente a las decisiones de los grandes centros de poder globales. Los gobiernos de los Estados-nación se adaptan a los mandatos del modelo neoliberal. La adaptación al cambio involucra costos de transacción más bajos y mejores resultados que la reforma. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Las políticas que modelan al nuevo Estado se sintetizan en reducciones de sus funciones, y en las privatizaciones y “ajustes estructurales”. Las demandas que los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales formulan en forma incluyente al Estado, sobrecargan sus estructuras y procesos y lo convierten en un Estado ineficiente.

La formulación e implantación de políticas públicas y políticas sociales se olvidan de considerar los principios de equidad, participación, solidaridad, etc., en nombre de la eficiencia económica. En la sociedad moderna hay un conflicto latente entre capitalismo y política. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La política exige por lo menos un uso comunitario sometido a reglas que se regulan por leyes, desde el impuesto obligatorio a las reglas de tráfico, pasando por la reglamentación de la construcción, el comercio etc.

Esta eficiencia económica se logra con la remoción de todas las formas de intervención del gobierno en las actividades económicas y no debe haber restricciones de tarifas en la industria y en el comercio dentro de una nación. Las relaciones de comercio y de mercados se delimitan en acuerdos entre los Estados, los cuales operan dentro de sus fronteras. El neoliberalismo desprecia al Estado-nación porque lo considera ser el principal obstáculo para que las leyes de la “mano invisible del mercado” funcionen bajo criterios de eficiencia racional.

El deterioro del Estado de Bienestar puede explicarse bajo el argumento de la falla del mercado que usa la teoría marginalista para explicar la intervención del Estado. La forma en que el Estado capitalista media en las demandas sociales y los resultados determinan la política social durante las diferentes etapas del proceso contradictorio de acumulación capitalista. La actual tendencia de redefinición de funciones del Estado, la que algunos analistas han denominado como la reestatización o neoestatización del Estado frente a las presiones de los procesos de globalización, la cual se orienta al fortalecimiento de las funciones de intervención y regulación en el desarrollo local y regional, están mediadas por las demandas sociales.

Esta reestatización o neoestatización pretende recuperar funciones eliminadas o disminuidas por el Estado durante la implantación del modelo neoliberal y es la pieza fundamental sobre la que pivota la expansión de las grandes corporaciones transnacionales, la cual es precedida por una expansión militar y política de los Estados imperiales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

El modo de producción capitalista aseguró las relaciones sociales y el desarrollo de las fuerzas productivas en un espacio geopolítico organizado por el Estado-nación y que protege la organización geoeconómica donde tiene su organización las instituciones del mercado. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Las estrategias de desarrollo empresarial tienden a orientar la producción hacia los sectores que tienen ventajas competitivas y un mayor valor agregado para insertar eficazmente la economía local y regional en los flujos de los mercados internacionales. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales. La promoción y conquista de estos mercados internacionales es una función todavía que realiza el Estado nación, como lo es también, la protección de los mercados internos.

La concepción del espacio nacional se encuentra delimitada por la delimitación territorial en función de fronteras físicas y geográficas donde ocurren los fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales. En el espacio nacional ocurren los fenómenos geopolíticos de donde avanzan hacia los niveles espaciales internacionales y global la preponderancia en los fenómenos geoeconómicos. La determinación de los espacios nacionales contribuye a delimitar las unidades de espacios de soberanía.

Con el proyecto neoliberal de Estado, se supeditó la política social a la política económica. La política social neoliberal sigue la lógica de la caridad, sólo para desatender a erradicar las causas de la pobreza, para concentrar recursos en programas de atención limitada a sujetos en pobreza extrema. Un mayor problema es dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados. El alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma (De Swaan Abram, 1997). A pesar del libre

movimiento de capitales, las trampas de la pobreza emergen debido a la inmovilidad del trabajo y a la baja productividad que repercuten en ingresos salariales más bajos.

El neoliberalismo modificó radical y profundamente la política económica de los Estados-nación transformando sus funciones de subsidiario a regulador, cuando lo que se requiere con urgencia es enfatizar el rol subsidiario del Estado mediante el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la sociedad civil. La sociedad adquiere una relevancia importante como actor social en la promoción del crecimiento y el desarrollo equilibrado y equitativo entre las diferentes regiones y localidades. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

También hay que considerar la posibilidad que al declinar las funciones del Estado, la sociedad civil pudiera desintegrarse. Así mismo, la política social tiene que volver a darle una orientación más humana a la estrategia de desarrollo neoliberal. Las estrategias de desarrollo deben ser formuladas para generar oportunidades mediante la optimización de recursos y potencialidades existentes en las localidades y regiones.

Por eso, en el diseño de la política social y en su implementación, deben impulsarse sobre la base de consensos con todas las orientaciones ideológicas y fuerzas políticas activas en la sociedad. Sin embargo, la eficacia de la política no está determinada por su diseño, sino que también depende de muchas otras variables. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva.

El neoliberalismo modifica también la política económica promoviendo la competitividad y la liberalización de los mercados, la creación de acuerdos comerciales, la desnacionalización de las empresas estatales, la privatización y transnacionalización de los factores de producción, estimulación y concentración de capitales transnacionales e inversión extranjera, etc. La privatización de los factores de producción concentra los procesos e tomas de decisiones a escala planetaria, como acciones concretas de las corporaciones transnacionales. Una mayor movilidad de los factores de producción es la principal característica de estos cambios que conllevan un enfoque emprendedor y de innovación.

En la globalización económica, ninguno de los factores de la producción (materias primas, capital, trabajo y organización) es determinante, pero sí lo es el nivel óptimo de una relación entre éstos factores. No obstante, a las corporaciones no se les requiere que se ajusten a una sustentabilidad porque para modificar las actuales reglas del juego en que operan se generarían tensiones. Una corporación orientada a la sustentabilidad tiene una redefinición de su contrato social con la sociedad.

La estructura estatal se está modificando para apartarse de las agencias que están más cercanas a las fuerzas sociales, hacia aquéllas otras agencias que están más relacionadas con los procesos transnacionales de formación de consensos. Las estructuras espaciales

delimitadas territorialmente por fronteras físicas y geográficas definen hasta cierto punto las interrelaciones entre las diferentes unidades.

La inversión directa borra las fronteras entre existentes entre los Estados-nación y las empresas permitiendo a éstas penetrar en aquél y al mercado penetrar y doblegar el sistema político. Así, el Estado nación queda limitado para ejercer la facultad soberana de control de las actividades que desarrollan las corporaciones transnacionales. En función de ello, la globalización ha impuesto al Estados-nación la condición ineludible de participación en bloques comerciales y serias restricciones en su política económica. Los grandes intereses de los grupos corporativos transnacionales limitan las acciones de regulación de los Estados a efectos de lograr mayores ventajas que les reditúen altas tasas de utilidades.

Las crisis que detuvo el Estado de Bienestar, han resurgido con más fuerza una vez que se le ha sustituido por el Estado Neoliberal. Soros (1999) sostiene que el origen de la crisis del sistema capitalista global, caracterizado más por el libre flujo de capital que por el libre comercio, se encuentra en el mecanismo que define su esencia: los mercados de capital libres y competitivos que "mantienen capital privado en movimiento constante a los largo y ancho del planeta, al acecho de mayores beneficios y de, supuestamente, la distribución más eficiente de las inversiones y los ahorros a escala mundial" Hasta ahora no se ha demostrado que exista una relación directa entre la liberalización de mercados de capitales y el crecimiento económico. La volatilidad de los mercados de capitales limita el crecimiento económico e incrementa los niveles de pobreza. El capital privado se expande a todas regiones del mundo y continúa en estrecha relación con los Estados-nación imperiales en la economía global. Por lo tanto, las crisis son sólo un síntoma de la patología de una epidemia económica global. Las crisis del objeto del capitalismo se deben más al dominio de su valor de uso que al dominio del valor de cambio.

Los cambios que se dan en las finanzas internacionales están abrumando a los gobiernos del Estado-nación. Bajo un enfoque de finanzas internacionales y de servicios corporativos, como formas de globalización económica en las últimas dos décadas, las agencias en cuestión, no necesariamente están fortaleciendo el sistema interestatal (Sassen, 1995) Las diferentes formas de globalización de hecho pueden estar llevando a incrementar las tasas de pobreza de algunas naciones y en determinados sectores sociales. Mientras que simultáneamente están disminuyendo las tasas en otros sectores y naciones. Las agencias internacionales no pueden reconfigurar las bases sociales para provocar cambios de gran impacto pero mediante presiones tienen una mayor influencia para recomendar cambios en las funciones del Estado-nación.

Con el surgimiento del capitalismo corporativo o neocapitalismo, la conducta de los individuos definidos como "consumidores" es regulada por agentes económicos. Estos agentes económicos toman decisiones para operar en un mercado, en función de la información disponible. Sin embargo, los analistas de la globalización actualmente hacen énfasis en que las fuerzas y las instituciones globalizadoras están por encima y atrás de todas los Estados-nación, con la consecuente pérdida de su poder soberano debido a la transformación radical y al desplazamiento de la posición de las relaciones existentes entre el centro y la periferia.

Incluso, Brzezinski va más allá, cuando afirma que a largo plazo, las políticas globales tenderán a ser cada vez más incompatibles con la concentración de poder hegemónico en manos de un único Estado. De ahí, que Estados Unidos, sostiene el autor, no sólo es la primera y la única verdadera superpotencia global sino que, probablemente, será también la única. Cualquier intento de los Estados-nación por regular las actividades de las grandes corporaciones transnacionales, es visto como acciones de insubordinación, amenazas e intimidación y por lo tanto es severamente castigado.

A pesar de las diferencias significativas entre los análisis de la economía política y otros análisis como el cultural, un punto que unifica los desarrollos teóricos es la conceptualización de la omnipotencia del capital global (Kayatekin y Ruccio, 1998) Korten (1995) acusa a la intelligentsia neoliberal de distorsionar las teorías del libre mercado de Adam Smith y David Ricardo sobre el mercado libre y la ventaja comparativa, en favor de las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales. La retórica del libre mercado ha sido promovida por los ideólogos conservadores de la derecha y asimilada y repetida por la izquierda.

La teoría de la ventaja comparativa sostiene que las empresas de los países que se abren al comercio internacional, tienden a especializarse en aquello en lo que el país en que operan hace lo mejor. Desde tan pronto como, la subestimación de los factores culturales del desarrollo ha causado grandes trastornos, por lo que es urgente la incorporación de la etnocultura a los proyectos de desarrollo basados en una ventaja comparativa..

Las instituciones y las fuerzas impulsoras de la globalización están por arriba y más allá de las naciones-Estado, transformando y desplazando las relaciones del equilibrio existentes en la economía y la sociedad. La globalización de la producción y las finanzas debilita la habilidad de los que elaboran la política económica nacional delimitada por un marco de referencia internacional establecido por las fuerzas globales transnacionales. Una política económica que no tiene consideraciones de un medio ambiente en constante degradación.

Algunos analistas hacen referencia al impacto que estas tendencias están teniendo sobre el Estado para señalar la transición hacia un “Estado virtual” que basa sus estrategias en la movilidad del capital, el trabajo y la información. Y que, además, busca controlar más los mercados mundiales que sostener la soberanía sobre grandes extensiones territoriales, los cuales ya no constituyen la base estructural del crecimiento económico y el desarrollo social.

Sin embargo, la tendencia globalizadora a la sobreproducción deriva en ciclos económicos con periodos de crisis que rasgan el desarrollo de regiones y países. La estrategia de reproducción del sistema capitalista es dual en donde los actores hacen y no hacen sucesiva e interrumpidamente algo (Barel, 1989). Al respecto, Ramos (2001) concluye que las respuestas adaptativas de los actores sociales atrapados en las redes de poder, consisten en apostar por estrategias dobles que permiten construir contraintuitivas identidades paradójicas, con lo cual los actores logran reproducir las redes, consolidarse y “enjaularse” e “incapacitándose para romper la lógica perversa que la anima”.

Las investigaciones evidencian que la comparación de los ciclos de negocios entre los países desarrollados documenta la existencia de fluctuaciones macroeconómicas entre los países que están más unidos y que, además, los ciclos de los negocios en las economías en desarrollo exhiben varias características que son comunes con los ciclos de aquéllas economías de los países desarrollados.

Sin embargo, hasta ahora no ha habido estudios que examinen las propiedades de los ciclos de negocios mundiales en forma simultánea con los ciclos regionales o nacionales. Los factores dinámicos nacionales representan un papel importante en la explicación de las fluctuaciones del consumo más que los factores mundiales y regionales.

Las instituciones internacionales que limitan la acción de las instituciones nacionales constituyen en sí mismas los obstáculos para un dinamismo socio técnico global que resuelva los problemas a un macro nivel, en parte debido a su carácter antidemocrático que excluye de participar en los procesos de tomas de decisiones a las instituciones nacionales. Resulta una utopía pensar que las instituciones internacionales pueden tener prácticas democráticas. Un problema crucial para el futuro inmediato es el diseño de instituciones internacionales requieren de un diseño bien articulado adaptado a las normas democráticas apropiadas.

La adaptación al cambio involucra costos de transacción más bajos y mejores resultados que la reforma. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio (Kaiser, 1997). Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica.

Por lo tanto, la mayor parte de las protestas en contra de estas instituciones se basan en esta deficiencia democrática. Muchos estudios se están realizando bajo esta perspectiva teórica implicando evitar la "trampa territorial" que se concentra en el Estado como el primer actor, perspectiva que en todo caso está en discusión. No obstante, las instituciones internacionales son débiles con relación a los Estados que son ricos y poderosos.

La tendencia apunta al entendimiento global del sistema económico internacional y a la teorización de la pluralidad de espacios de la economía política.

Globalización vs. Gobernabilidad.

Los sistemas económico-políticos nacionalistas que transitaron al modelo neoliberal han visto disminuida su gobernabilidad. La globalización representa un gran reto para la gobernabilidad, sujeta a dos condiciones contrastantes: la localización de los lugares y la virtualización del espacio económico, los cuales son fines opuestos en sí mismos y no alcanzan a ser capturados en la dualidad nacional-global convencional.

La deslocalización de las empresas tiene como premisa la búsqueda de mano de obra abundante y barata para la operación de procesos automatizados que de otra forma reducen los costos de producción. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado. Las economías menos desarrolladas están siendo integradas en la economía capitalista global como mercados cautivos y la fuente de recursos naturales y humanos baratos para las transnacionales que tienen su base en Norteamérica, las cuales se encuentran retadas por las corporaciones transnacionales que tienen su base en Europa y Asia.Los instrumentos económicos del libre mercado global rechazan los sistemas de gobernabilidad existentes de los Estados nacionales, ni tampoco acepta otros sistemas de control social, que no sea el control democrático el cual es siempre problemático en cualquier nivel de gobierno. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible.

El surgimiento de las preocupaciones por la gobernabilidad, sostiene Ziccardi (1995), en el pensamiento conservador fue el resultado de las tensiones y la deslegitimación de las democracias de la posguerra y la inestabilidad y el desorden de las instituciones económicas. Mientras que el conservadurismo institucional y las propuestas dependentistas institucionales nos conducen a esperar que la evolución de los sistema políticos democráticos exhiben diferentes patrones, la propuesta de aprendizaje institucional apunta a la convergencia.

Sobre la base de las instituciones del desarrollo nacional de la posguerra, se construyeron las nuevas instituciones de la era de la globalidad económica. Kaiser (1997) sentencia que la hipótesis del conservadurismo institucional sostiene que las reformas constitucionales en las democracias son relativamente poco comunes, no debido a factores institucionales sino al cálculo de los actores políticos, solamente cuando una gran crisis ocurre, ya sea por un abrupto cambio de factores contextuales o a través de un deterioro dramático de la satisfacción de la política pública, es una ventana de oportunidad abierta para la persecución de planes de reformas.

El capitalismo globalizador que desestabiliza las economías nacionales pone en peligro la gobernabilidad de las sociedades democráticas liberales y elimina la política como actividad social humana. Este tipo de neocapitalismo está provocando muchas tensiones en la sociedad actual. Por medio de la legitimidad se validan las decisiones institucionales y se refuerza la gobernabilidad. Pero ni la legitimidad ni la obediencia con carácter duradero son garantizadas por la misma democracia liberal. La perdurabilidad de la democracia se define tanto en el ámbito interno de los gobiernos como en el campo de los opositores, desleales, disidentes o insurgentes.

La transición de un sistema económico, político y social centrado en un modelo de Estados-nación a un nuevo modelo de globalización económica centrado más en las organizaciones e instituciones supranacionales, tiene serias consecuencias en la calidad de la gobernabilidad global (global governance) de la sociedad. Al decir de Haliday (1997: 23), ya se cuenta con un sistema de gobernabilidad global con muchas capas, aunque “uno de los problemas principales es el de resolver, a través de reformas, los efectos de un sistema que ha estado vigente durante varias décadas. ¿Cómo hacer que este sistema de

gobernabilidad sea más efectivo, más justo, y más responsable frente a la cambiante situación internacional?". La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos.

El término governance es usado tanto en el sector público como en el privado, para caracterizar los arreglos organizacionales tanto locales como globales, ya sea que se refiera a las estructuras organizaciones, procesos administrativos, filosofías administrativas, o a cualquier forma combinada de estructura y juicio administrativos de los mercados financieros globales o de instituciones de educación. El concepto de gobernabilidad está estrechamente vinculado con las instituciones del Estado, el mercado y la sociedad.

Los conceptos de governance y gobernabilidad son conceptos interdependientes y operacionalizables en las estructuras institucionales de los sistemas económicos, políticos y sociales. Feldman (2001) reconoce que governance es la estructura que une instituciones y actores que potencian la sinergia de las instituciones. No obstante, propone que "será necesario un posterior cambio en el foco de análisis que deje atrás el estudio de la estricta arena política y las instituciones de gobierno, para concentrarse en el estudio de la governance y su contribución a la gobernability en un sentido amplio".

Los conceptos de governance y gobernability se refieren a conceptos totalmente diferentes. Así entendida, la governance es "un conjunto de instituciones (patrones, estructuras y reglas del juego) que condicionan y posibilitan la acción política y social, en esa medida se está reconociendo su papel como determinante de capacidades individuales, colectivas y sociales para la toma y aplicación de decisiones políticas y de política pública bajo contextos democráticos." Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. La explicación de la acción política en un contexto institucional es diferente de explicar el cambio institucional en períodos largos de tiempo. Puede argumentarse que los cambios institucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables.

En el último caso, la historia y la cultura política, entendida como los supuestos básicos del mundo de la política, las cuales restringen el rango de alternativas disponibles, tienen que ser sistemáticamente integradas como factores, los cuales entre otros, dan forma a la manera en que los actores políticos perciben las situaciones de elección (Kaiser, 1997) Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política. En sí, los conceptos de governance y gobernabilidad, están relacionados con la noción de instituciones. Las condiciones sociales, económicas, tradiciones culturales o eventos impredecibles importan pero no influyen en forma mecánica en la acción política.

Pero governance y gobernabilidad "no son términos equivalentes" y reconocerlo, de acuerdo a Feldman (2001) abre la puerta para indagar empíricamente tanto en qué medida, como de qué manera, "estructuras" de governance, de morfología, modalidad de funcionamiento y calidad determinadas, brindan a los diferentes actores un marco

adecuado para coordinar acciones destinadas a la solución de (qué) problemas y/o de conflictos así como para la realización de (cuáles) objetivos, y con qué consecuencias."

La governance contribuye a la gobernability en su concepto más amplio, por lo que se refieren a fenómenos sociopolíticos diferentes. Las investigaciones empíricas de la governance involucran la selección de una configuración de gobernabilidad particular y de una unidad de análisis. En los trabajos de investigación empíricos sobre la gobernabilidad, se pueden identificar las relaciones centrales y los factores involucrados dentro de un marco de referencia institucional.

Una teoría o modelo de gobernabilidad puede implicar un aspecto particular de un proceso, la relación entre diferentes actores o entidades o más ampliamente de desempeño, cualquier subconjunto de reglas, leyes o prácticas que reflejan solamente una parte del marco de referencia de un programa público de gobernabilidad (Lynn, Heinrich and Hill, 2000). Por lo tanto, la gobernabilidad implica estructuras y procesos que guían la actividad administrativa. Crean restricciones y controles que confieren y permiten autonomía y discreción a los actores administrativos. Todo esto para dar cumplimiento a los propósitos de las coaliciones establecidas.

Sin embargo, las instituciones centradas en el Estado-nación siguen teniendo una función importante en la gobernabilidad de los procesos sociales y en establecimiento de metas de desarrollo social y crecimiento económico de los países y las transnacionales se siguen comportando como actores que extienden sus actividades desde un Estado-nación. El problema es que en los análisis de las interacciones y operaciones de los procesos sociales, se recurre a métodos simplistas de dualidad entre los espacios nacionales o domésticos en función de lo internacional o foráneo.

Los procesos sociales que interactúan y operan en diferentes escalas son enrarecidos por los análisis dualistas y simplificadores que consideran el espacio nacional o doméstico en función de lo internacional o exterior. Las instituciones deben ser el resultado de acuerdos y arreglos institucionales, así como negociaciones a largo plazo entre los diferentes agentes económicos. Las instituciones mismas tienen que fortalecer y al mismo tiempo nutrirse de los valores sociales, como la democracia, la participación ciudadana, etc.

Contrariamente a lo que algunos analistas sostienen, a pesar de los fuertes embates de los procesos de globalización, el Estado-nación sigue igual de fuerte en las economías avanzadas sobretodo. A pesar de esto, los procesos de globalización plantean como reto a la gobernabilidad, el diseño y la implementación de la política económica, pero no pueden exigir su cumplimiento a los demás actores, como por ejemplo, el mercado, sobre todo en preocupaciones relacionadas con el medio ambiente.

En la transición a una economía de mercado, existen dos posiciones teóricas. Una que se orienta por una transición gradual al mercado, enfatiza la importancia de la estructura institucional centrada en el mercado con fundamentos que van desde la regla de la ley para exigir los cumplimientos de contratos hasta mecanismos que regulan el sistema financiero. Enfatizan la importancia de impulsar la competencia más que la privatización de las empresas públicas propiedad del Estado (EPEs).

Estas empresas son sujetas a una continuada discreción burocrática y una alta intervención de carácter político, a pesar de que se constituyan en forma autónoma e independiente del control político, son propiedad del Estado y administrada por sus representantes políticos o burócratas. La otra que sostiene una fe ciega en el mercado, la que consideran como una doctrina universal y establecen las condiciones requeridas para trabajar efectivamente, argumentando que entre más fuerte sea la medicina, más rápida es el restablecimiento.

Esto, en cierto sentido es dependiente de lo que Archibugi, Held y Kohler (1998) llaman una "democracia cosmopolita" construida por instituciones de diferentes niveles de la política internacional. El supuesto principal es que tiene que haber una coordinación efectiva de la política internacional, para no permitir que las acciones de los gobiernos reviertan los procesos de globalización. Estas instituciones que son creadas a niveles internacionales deben dar oportunidades de acceso y mediación a una ciudadanía más cosmopolita en los procesos económicos, sociales, políticos, etc., por sobre una ciudadanía construida sobre la base soberana de un Estado-nación y que rebasan as fronteras espaciales de los Estados-nación. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas.

El proyecto de ciudadanía del Estado-nación incorporó una ideología capitalista múltiple de clases que logró aglutinar y cohesionar en una identidad nacional, no exenta de ciertos conflictos, pero que sirvió de base para un proyecto de desarrollo económico. Esta ideología capitalista sostiene principios de una ética que se sustenta en la ambigüedad de la competencia. Esta ideología capitalista se ha consolidado más debido a aspectos sociales que a situaciones económicas que son el reflejo de un conservadurismo.

La nueva gobernabilidad global requiere de la institucionalización de las voluntades políticas transnacionales, hasta cierto punto difícil de lograr, porque la formulación e interpretación de las políticas es un fenómeno que se ha pluralizado y se ha vuelto sumamente complejo. Cualquier patrón de gobernabilidad global para que sea sustentable requiere formalizar e institucionalizar los canales de comunicación y contacto entre las organizaciones internacionales y las organizaciones e individuos que forman la denominada sociedad civil.

En un mundo democrático, el cuestionamiento serio de la gobernabilidad global tiene que ser "quienes son la gente" cuando existe muy poco sentido de identidad de la comunidad y el Estado-nación es la base de la organización del sistema político mundial, por demás desigual para cada uno de ellos. Pero la afirmación de la identidad de la comunidad constituye el principal obstáculo para el avance del proyecto hegemónico globalizador. De acuerdo a Putnam (1993: 183), "la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político".

La lógica del sistema hegemónico es inversa al protagonismo de lo colectivo, dando mayor énfasis a las políticas y estrategias individuales. Los procesos de la individualización enfatizan la presencia del individuo por sobre lo colectivo, escindiendo en forma nominalista entre el individuo y la sociedad, mediante el debilitamiento de los referentes materiales y simbólicos de las identidades colectivas. No obstante, bajo un régimen de instituciones internacionales que no se ajustan a los criterios de la democracia, la calidad de la gobernabilidad resulta ser no solamente irrelevante sino hasta contradictoria.

La calidad de esa gobernabilidad en una sociedad es esencial para determinar el incremento de los indicadores de la calidad del desarrollo humano, económico, social, político y cultural de los pueblos. Los conceptos de desarrollo humano y buen gobierno son conceptos inextricablemente indivisibles. El concepto de gobernabilidad está vinculado estrechamente a las múltiples dimensiones del concepto de desarrollo. El desarrollo humano es resultado del impacto positivo de las libertades implicadas en la gobernabilidad democrática.

Existe una relación directa entre la calidad de la gobernabilidad y el crecimiento económico y el desarrollo social. La noción de crecimiento económico implica la medición cuantitativa del producto interno bruto per cápita y el promedio de consumo real. El desarrollo humano es el fin y el crecimiento económico es el medio. El desarrollo social debe de pivotar sobre programas de desarrollo humano que promuevan la formación de capital social y humano y proporciones mayores oportunidades de acceso al disfrute de bienes y recursos sociales, a efecto de elevar los niveles de calidad de vida y de bienestar social. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la "trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos" Putnam (1995: 67) define capital social como "redes, normas y confianza social que facilitan la coordinación y cooperación en beneficio mutuo". El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí.

Las instituciones económicas, sociales y políticas determinan las interacciones sociales y políticas que influyen en el desarrollo social y humano. En la sociedad moderna hay un conflicto latente entre capitalismo y política. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La política exige por lo menos un uso comunitario sometido a reglas que se regulan por leyes, desde el impuesto obligatorio a las reglas de tráfico, pasando por la reglamentación de la construcción, el comercio etc. Para mejorar los niveles de la calidad de vida de la población se requiere de mecanismos institucionales que hagan viable el ejercicio de un sistema de gobernabilidad para garantizar la asignación equitativa de los recursos y bienes sociales, de tal forma que satisfaga a la sociedad y evite asimetrías.

No obstante, el sistema económico actual confunde e invierte la relación, dando más importancia al desarrollo económico como un fin y al desarrollo humano como el medio, situación que resulta en costos de sufrimiento humano y denigración cultural. Una sociedad es más humana o desarrollada cuando sus miembros tienen las posibilidades de adquirir las competencias y habilidades para ser más en vez de tener más. Por eso, es imprescindible

que los ciudadanos de los países desarrollados reconozcan que para la defensa de sus propios intereses como consumidores, trabajadores, etc, tienen que ayudar a los ciudadanos de los países menos desarrollados.

La gobernabilidad, del latín guvernaculum que significa timonel que "da rumbo y estabilidad a la nave, hace referencia a "la necesidad de que haya una ruta confiable y un equilibrio entre las partes componentes del conglomerado civil para evitar que la conflictividad destructiva surja entre ellas", de acuerdo a Fernández Santillán, (1997).

Pachano (1990: 7) afirma que se recurre a "la noción de gobernabilidad para definir ese enfrentamiento entre las condiciones vigentes y las necesidades de estabilización y control del sistema democrático." Curcio Gutiérrez (1996: 169) la define como "la capacidad de una comunidad política para desarrollar equilibrios virtuosos (o por lo menos razonablemente estables) entre los sistemas económico, político y cultural que permitan, a su vez, conducir con relativa armonía los asuntos públicos". La gobernabilidad es definida como "el grado en que las relaciones entre los actores poderosos obedecen a unas fórmulas estables y aceptadas" de acuerdo a Coppedge (1997).

La gobernabilidad se refiere al acto de gobernar en un sentido amplio, lo cual requiere de capacidades para coordinar las conductas de los diferentes actores y agentes que deciden sobre diferentes cursos de acción.. Es el resultado emergente de las interacciones privadas y públicas. Para Hague, Harrop & Breslin (1998:5), la gobernabilidad es "la tarea de manejar sociedades complejas, contemplando la coordinación de algunos organismos propios del sector público y privado."

La gobernabilidad se refiere a la habilidad de la sociedad para gobernarse a sí misma, por y a través de su propia gente, incluyendo el gobierno electo. La gobernabilidad orienta los esfuerzos de la sociedad como un todo mediante procesos de formulación e implementación de políticas y toma de decisiones, elección de alternativas y asumir las responsabilidades compartidas por los resultados. Sólo que las elecciones de los agentes y su posible comportamiento son inciertos. Para De Quiroga (1999:169), gobernabilidad es "un conjunto de condiciones para gobernar de manera consensuada, concertada y armónica."

La gobernabilidad puede entenderse como la capacidad de gobernar en un sentido amplio, lo cual implica también el concepto de governance desarrollado por los organismos internacionales (Ziccardi 1995). Los conceptos de governance y gobernabilidad (gobernability), son conceptos interdependientes y que pueden ser operacionalizables y aplicados en las diferentes estructuras institucionales de los sistemas económicos, políticos y sociales, aunque se refieren a fenómenos sociopolíticos totalmente diferentes.

Gobernabilidad y governance pueden ser conceptos equiparables (Feldman, 2001) que dan la oportunidad para estudiar la relación que existe entre una "estructura de governance"y las bases institucionales de la gobernabilidad. las estructuras de governance necesariamente tienen efectos sobre la gobernabilidad (Cerrillo, 2001).

No obstante los conceptos de governance y gobernability se refieren a fenómenos sociopolíticos diferentes. Así, "el concepto de governance sirve como paraguas conceptual para referirse a las diversas instancias de "gobierno" (entendido como un sentido amplio) público y privado que existen en una sociedad, así como para analizar las consecuencias derivadas de la coexistencia de distintas redes locales de governing institutions de distinto grado de sofisticación y desarrollo institucional (incluyendo pero no reduciendo éstas a la de la esfera política)."

Usos y adjetivaciones de los conceptos de gonernabilidad y gobernance según Cruz (2001)

	Governability	**Governance**
Traducción aceptada al Idioma castellano	gobernabilidad	gobernanza (enfatizando la dimensión normativa del vocablo *governance*)
Traducciones alternativas		Gobernación, gobernancia, gobernabilidad, buen gobierno, gobernanza o se ha usado el vocablo gobernabilidad
Adjetivación en relación con los regímenes políticos	gobernabilidad dictatorial gobernabilidad autoritaria gobernabilidad democrática (Democratic gobernability)	gobernabilidad democrática (Democratic gobernance)
Asociada a ámbitos o a Actores políticos y sociales	gobernabilidad ejecutiva gobernabilidad legislativa gobernabilidad social	societal governance european governance citizen gobernance corporate governance local gobernance
Adjetivación conceptual normativa		good governance

Fuente: Cruz, César Nicandro (2001). "Gobernabilidad y "governance" democráticas: El confuso y no siempre evidente vínculo conceptual e institucional", Instituto Internacional de Gobernabilidad. Magazine No. 23, 6 de noviembre del 2001.

El Consejo Británico de Governance define governance como el proceso cuyos elementos en la sociedad otorgan poder y autoridad, influencia y establecen políticas y decisiones relacionadas con la vida pública y el desarrollo económico y social. El anglicismo governance significa "gobernación", "gobernalidad", "gobernabilidad", "buen gobierno" (Stoker, 1998), "gobernancia" (Stren, 2000) y gobernanza (Solá, 2000). La real Academia española lo define el término governanza como "Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado en la economía" (Pasqua y Rey, 2001)

Governance es la capacidad que tienen los gobiernos para dirigir, guiar e influir los procesos económicos, sociales y políticos Governance se define como “los patrones o estructuras que emergen en un sistema sociopolítico , como el común resultado (outcome) de los esfuerzos de intervención interactiva de todos los actores implicados” de acuerdo con Kooiman (1993). Peters (1998) lo entiende como un concepto que implica conducir o emplear mecanismos orientados a proveer a la sociedad de una dirección coherente. En este concepto se asume que se requiere una dirección central coherente.

Aún todavía, la gobernabilidad trasciende el mero papel del gobierno solo y desde arriba, para tratar de orientarse hacia el cuestionamiento de las funciones del Estado desde dos perspectivas opuestas, por un lado la eliminación de funciones y por otro lado, la promoción de la función regulatoria del desarrollo local. La tendencia del Estado nacional a recuperar las funciones eliminadas ha sido denominada por los analistas como la reestatización de procesos. Esta neoestatización de las funciones es una de las piezas fundamentales de la expansión de las grandes corporaciones transnacionales, la cual es precedida por una expansión militar y política de los Estados imperiales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

Governance es conceptualizada como "la capacidad de gobernar, evaluada con base en indicadores como las condiciones de eficiencia, honestidad, transparencia, accountability, responsabilidad e información con que debe operar la administración pública para mejorar su actuación...". (Marshall, Wray, Epstein y Grifel, 1999). Kaufmann, Kray y Zoido-Lobatón (1999) desarrollaron un modelo para operacionalizar las características de governance en indicadores compuestos que corresponden a las dimensiones de voz y responsabilidad, estabilidad política/ausencia de violencia, eficacia gubernamental, marco regulatorio, marco legal/Estado de derecho y control de la corrupción (Costafreda, 2001,a).

El desarrollo económico y social de un pueblo es en parte resultado de una buena gobernabilidad que incorpora principios de participación democrática, la institucionalización legítima del poder y el ejercicio de la ley. Governance es una noción más amplia que gobierno. Governance involucra interacción entre estas instituciones formales y aquéllas de la sociedad

En el campo de las políticas públicas, el término governance se define como los regímenes legales, las reglas administrativas, la reglamentación judicial, y prácticas que constriñen, prescriben y posibilitan la actividad gubernamental, en donde tales actividades son ampliamente definidas como la producción y entrega de bienes y servicios públicamente proveídos. En sentido más amplio, el estudio de la governance concierne la relación existente entre governance tal como es definida y el desempeño gubernamental (Lynn, Heinrich and Hill, 2000).

El desarrollo de la teoría de governance tiene serias implicaciones semánticas cuyas derivaciones tienen significados distintos de acuerdo a las interpretaciones de los cambios de paradigmas (Mayntz (2000). Schmitter (2001) define la governance como “el conjunto de mecanismos y métodos para atender un amplio espectro de problemas y conflictos, mediante los cuales los actores implicados usualmente llegan a tomar decisiones

vinculantes y satisfactorias". El concepto de governance se asocia a los conceptos de "co-dirección, interacción y co-gestión y en algunos casos, al de conducción (steering) entre actores políticos y sociales". Así la governance se refiere a "las estructuras (reglas de juego) y procesos que condicionan la participación e interacción de actores políticos y sociales" (Cruz, 2001).

En una teoría de la gobernabilidad en la administración pública, se identifican categorías de variables con fundamento en la economía política, análisis de redes, modelos sistémicos, etc. Dentro del amplio espectro de la gobernabilidad, la administración pública implica las acciones discrecionales de los actores en funciones administrativas sujetas a la autoridad formal. Los enfoques gerenciales de la administración pública se centraban en el logro de la efectividad expresada en maximización de utilidades, por lo que la reforma debe orientarse a despolitizar los procesos administrativos mediante la profesionalización e incorporación del principio de "responsividad" a las exigencias de la ciudadanía. La administración moderna se ejercita en cualquier parte sobre la base de un conjunto universal de valores que reflejan las necesidades y expectativas de los gobernados con respecto a aquellos que son los responsables por la conducta de los asuntos públicos.

La necesidad administrativa surge con tres condiciones: cuando una coalición explícitamente delega las acciones a agencias ejecutoras, cuando el mandato es ambiguo y se da la oportunidad a los administradores para actuar, y cuando se da cumplimiento a los objetivos administrativos o legislativos que requieren de juicio en la interpretación y la exigencia del cumplimiento de regulaciones a casos específicos. Muchas de las actividades económicas, sociales y políticas son hechas por coaliciones o grupos de individuos en esfuerzos de cooperación y conflicto entre las partes involucradas. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, dándose el problema del "gorrón", pero las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes.Los conflictos bélicos ahora se desarrollan más entre los diferentes grupos corporativos con intereses en los procesos de globalización, más que entre Estados-nación específicos.

Lynn, Heinrich and Hill, (2000) identifican dos acercamientos paradigmáticos a la administración pública identificados dentro de lo que denominan la lógica de la gobernabilidad. Los administradores públicos pueden optimizar los resultados dentro de un sistema dado de autoridad formal, con un énfasis en los roles administrativos y en elementos de la psicología, la táctica y en el manejo político de los asuntos administrativos. El segundo acercamiento de la administración publica se enfoca a los participantes proactivos involucrados en política de coaliciones, como representantes de ejecutivos electos y de agencias, o como actores que buscan la obtención de metas para su propio provecho. La administración está perdiendo de vista sus propios objetivos. Tal parece que existe para sus propios propósitos y con frecuencia parece ser el fin en sí mismo para aquellos que desean entrar

Este último enfoque amplía la administración pública al campo de la gobernabilidad para incluir el diseño de arreglos y al control administrativo de la burocracia, entendida como un sistema de organización racional-legal en la concepción weberiana y no en el

concepto de burocracia maquinal de Mintzberg El control administrativo es generalmente ejercitado por los oficiales sobre sus subordinados, puede ser autónomo a dirigido por control judicial. En la concepción weberiana la burocracia se somete a normas internas y externas que limitan la arbitrariedad de sus decisiones y garantizan la previsión de los resultados de su gestión. Según Prats (2001), la racionalidad burócrata está limitada en su capacidad por la imposibilidad de monitorear el "empleo público moderno", la durabilidad del cumplimiento de compromisos legislativos (commitment) o regulaciones y el monitoreo de la delegación de poderes (agencia) de los políticos a los burócratas.

El control administrativo es generalmente ejercitado por oficiales senior en sus subordinados. Pude ser autónomo o control de carácter judicial. Cualquiera que sea el tipo de control, está relacionado con las obligaciones de los oficiales administrativos que se relacionan con tal ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales caen dentro de este campo.Es en este sentido que la gobernabilidad es el resultado de negociaciones y arreglos institucionales que requieren la existencia de instituciones capaces de procesar dichos acuerdos entre los diferentes agentes económicos y los actores políticos. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

Las instituciones necesitan desarrollar capacidades para "gobernar" los comportamientos de los diferentes agentes y actores económicos quienes deben aceptar los arreglos institucionales en los que actúan. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Permanece el problema de si adoptar los modelos de arreglos institucionales propuestos por los organismos multilaterales internacionales o si adaptar variaciones de acuerdo a las condiciones del desarrollo local. La adaptación al cambio involucra costos de transacción más bajos y mejores resultados que la reforma.

Tarapuez Chamorro (2001) define el desarrollo local como el proceso para reactivar la economía y dinamizar la sociedad local mediante el aprovechamiento eficiente de recursos endógenos y cuya finalidad es estimular el crecimiento económico, crear empleo y mejorar los niveles de vida de la población. Estas medidas han afectado adversamente el ingreso y los estándares de vida no solo de las clases más bajas sino también de importantes sectores de las clases medias. Este desarrollo local integral debe pivotar sobre la base de interacciones solidariamente comprometidas, activas y continuas de una comunidad, más que en la simple contigüidad física delimitada por territorios geográficos. Las instituciones mismas tienen que fortalecer y al mismo tiempo nutrirse de los valores sociales, como la democracia, la participación ciudadana, etc., hasta alcanzar niveles de virtudes cívicas.

En este contexto de economía ultraliberal que domina el mundo, la administración pública sufre de disolución moral la cual parece iniciar con los líderes políticos. Es también en este sentido que la administración pública no ha sobrevivido de la crisis moral que marca el final del milenio. Por lo tanto, la crisis moral necesariamente implica cierta restricción ética similar a cuando la tierra en que está enraizada una planta es pobre y carece de elementos para desarrollarse.

Así, las instituciones eficientes y eficaces son el resultado de negociaciones entre los diferentes actores políticos y de arreglos institucionales entre los diferentes agentes económicos. La propuesta de aprendizaje institucional sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma.

Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones. Los valores no pueden ser independientes del contexto cultural que los produce. Esta es la razón del por qué otras plataformas para la construcción de una ética administrativa es el mismo contexto de cada país. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos.

Cualquiera que sea el tipo de control solamente tiene que ver con las funciones del oficial administrativa que se relaciona con esa ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales caen dentro de este campo.El problema de la restauración de la ética administrativa no puede ser en los mismos términos en diferentes contextos culturales. La administración actúa como un juez que asegura el cumplimiento con los valores que forman la ética administrativa y que dan sustancia al servicio público.

Esto implica recibir una ética administrativa empujada por una crisis moral y repensar el profesionalismo en tal forma que la administración esté a tono con el cambio económico y social y las demandas cambiantes de una población desorientada algunas veces en este período de la globalidad, y por lo tanto en una transición simultáneamente económica, política, social y cultural en la mayor parte de los países del mundo. La ética administrativa tiene sus raíces en una crisis moral, la cual está influida por las culturas específicas de la sociedad en cuestión.

La administración actúa como un juez que asegura el cumplimiento con los valores que forman la ética administrativa y que dan sustancia al servicio público. La reestructuración de la ética administrativa puede ser exitosa solamente si la exaltación de tales valores se acompaña con la reafirmación del principio de responsabilidad. Las sanciones son el corolario usual de la responsabilidad La responsabilidad es el corolario lógico de la autoridad ejercitada por los oficiales de la administración.

En los regímenes de gobernabilidad del sector público, la necesidad de administrar surge de la formación de coaliciones que implícita o explícitamente delegan responsabilidades a las agencias, a administradores de programas o a burócratas de nivel inferior. Dentro de este marco referencial de la gobernabilidad se pueden explorar los determinantes de las políticas y los impactos de los programas sin que se limiten por la dicotomía en los análisis de arriba hacia abajo (top-down) y de abajo hacia arriba (botton-up) de los resultados del desempeño. Sin embargo, las instituciones locales y nacionales (el mercado, redes, etc.)

necesitan de la dirección que provee la gobernabilidad para implementar las políticas y acciones necesarias. Así, las instituciones locales tienen el reto de intervenir con nuevas funciones en las actividades económicas.

La governance implica una configuración que confronta distintos elementos pero que se encuentran íntimamente interrelacionados, entre los que hay que señalar, la naturaleza configuracional de la governance, los intereses políticos que influyen la acción, y la autoridad formal e informal.

Es inherentemente política porque involucra procesos de negociación y de compromisos donde siempre hay ganadores y perdedores, se distribuyen recursos y responsabilidades para las funciones y operaciones dentro y entre las dependencias y organizaciones de los sectores privados y públicos y la governance se complementa con estructuras formales e informales, ejercicios informales de juicios por los actores involucrados en la formulación e implementación de las políticas (Lynn, Hinrich and Hill, 2000) Peters identifica como proposiciones para los actores de governance, los siguientes:

a) El debate sobre la governance carece de historia.
b) La governance se refiere al establecimiento de fines (setting goals)
c) Se refiere a la resolución de conflictos
d) No implica juegos de suma cero
e) Es un proceso ajustable
f) Es una actividad diferenciada
g) Requiere responsabilidad pública, rendición de cuentas (public accountability)

El mejoramiento y el fortalecimiento de governance implican la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos privados y públicos, a través del apoyo de un medio ambiente económico liberal y estable. Los requisitos básicos para la buena gobernabilidad son la rendición de cuentas y la responsabilidad (accountability) en el uso de los presupuestos públicos y en la trasferencia de poderes para la toma de decisiones públicas a aquellos que son los más afectados por tales decisiones. Las sanciones son el corolario usual de la responsabilidad.

Los defensores del modelo económico neoliberal sostienen que la eliminación de las restricciones políticamente impuestas al desarrollo y mejoras en la transparencia y rendición de cuentas, se mejorará la gobernabilidad. No obstante, el ejercicio de una buena gobernabilidad no implica necesariamente que la sociedad civil y los gobiernos locales tomen las funciones legítimas del gobierno central. La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados. La sociedad local y regional adquiere una relevancia inusitada como actor social promotor del crecimiento económico y el desarrollo regional equitativo y justo.

La ausencia de governance provoca el atrofio de las economías y la escisión de las sociedades. Cuando la corrupción, el fraude y el soborno son rampantes en un país no es posible que se dé un desarrollo sostenido, por lo que se requiere de reformas institucionales

que bajo un marco conceptual orienten las acciones precisas en la implementación de una agenda política. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma. La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio. Sin embargo, en los casos de cambio rápido aparente en el nivel de corrupción del país, puede llevar a una falsa impresión de las oportunidades de la reforma.

En este sentido, el diseño de instituciones es necesario para reducir la corrupción influenciada por la estructura institucional existente. La apertura comercial, la competencia internacional y la inversión en el diseño institucional pueden registrar niveles de corrupción más bajos. La ley no soluciona los conflictos de intereses cuando existen altos niveles de corrupción.

Este concepto de governance o de gobernabilidad corporativa es promovido en todos los países a través de la fórmula del Banco Mundial. El concepto de governance y gobernability son conceptos que se refieren a fenómenos sociopolíticos diferentes. El Fondo Monetario Internacional también coloca en una alta prioridad los aspectos económicos de la governance. Esta fórmula es para los inversionistas a escala mundial, incluyendo para las instituciones financieras y los grandes fondos de pensiones, con sanciones para dar cumplimiento a las líneas de acción de gobernabilidad para que se puedan hacer inversiones y prestamos en un país.

Además, la gobernabilidad implica también "Todo lo que surge del campo de las relaciones sociales, del ejercicio de la democracia, de las formas de participación y representación social y de la legitimidad que deben generar las acciones gubernamentales". De acuerdo con la etimología de democracia, ésta se relaciona con el papel de los individuos y su gobernabilidad.

Democracia es el gobierno efectuado por oficiales que rinden cuentas a la mayoría de sus electores, pero que, además, buscan la protección para las minorías y los individuos. De acuerdo con Schumpeter (1962), el método democrático es el arreglo institucional para arribar a las decisiones políticas en los cuáles los individuos adquieren el poder de decidir por medios de una estructura competitiva para el voto de la gente. Así, el concepto tradicional de la democracia ha sido reelaborado para ajustarse a los lineamientos del sistema capitalista.

Si la meta es lograr una perfecta representación, entonces se requiere un gran número de partidos políticos que la posibiliten, pero si la meta es lograr la gobernabilidad, entonces un partido es suficiente. La institucionalización de los partidos políticos es un elemento esencial para lograr una gestión política eficiente de la gobernabilidad democrática, cuya calidad se vincula a los arreglos institucionales.

La gobernabilidad democrática se asocia a los conceptos de “orden, estabilidad, eficacia y legitimidad política basada en la democracia”. La gobernabilidad democrática estudia las instituciones políticas y actores políticos clave. Torrijos (2001) ha denominado gobernabilidad reluctante a la tendencia de las sociedades actuales a buscar la

gobernabilidad democrática a pesar de los múltiples conflictos económicos, políticos y sociales en que se encuentran, la cual considera el autor ser una gobernabilidad que surge desde la ingobernabilidad de ambientes altamente inestables, caóticos y de incertidumbre. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Cuando este tipo de ambientes de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, el autor las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los problemas. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas.

De acuerdo al investigador, "es probable que la actitud de muchas sociedades ancladas sea la de negarse a aceptar, a ciegas, la superposición de capas de la ya formada gobernabilidad global, pero la gobernabilidad reluctante implica el reconocimiento de estándares universales de democracia (poliárquica o consociativa) sobre los que se funda y se explica" (Torrijos, 2001). Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de "esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política. Involucrarse en la acción colectiva, los actores buscan traer el ansiado bien colectivo y dar forma a la colectividad con respecto al bien colectivo.

Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil. Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad.

El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil.Una vez que la acción colectiva se inicia, en el curso de este mismo proceso emerge una colectividad que puede aplicar sanciones informales contra los que contravienen y recompensar a colaboradores a bajo costo (castigo u ostracismo), a ningún costo e incluso a premio (avergonzar, reprochar o criticar) Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico "gorrón" causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

Resulta una contradicción que en una sociedad postindustrial que desarrolla sistemas de producción flexibles, las mega corporaciones tienen la tendencia a centralizar más los procesos decisorios y de estrategias.

La governance tiene un campo de estudio multidireccional en diferentes ámbitos, tipos de actores, niveles de gobierno y en los entornos locales, subnacionales, nacionales, regionales, supranacionales. La eficacia de la governance política, de las reglas de juego y

estructuras que facilitan las interacciones políticas están determinadas por la la gobernabilidad. Por lo tanto, la governance democrática "se refiere esencialmente a los patrones y estructuras mediante las cuales los actores políticos y sociales llevan a cabo procesos de intercambio, coordinación, control, interacción y toma de decisiones dentro y entre órdenes sociales y regímenes democráticos", de acuerdo a Cruz, (2001). En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos.

El mismo autor afirma que el estudio de la governance democrática "se centra actualmente en el papel que las instituciones políticas, económicas y sociales juegan como articuladoras de decisiones públicas y como moldeadoras de procesos socioeconómicos al interior de los regímenes democráticos. Para diferenciar los elementos entre gobernabilidad y governance, presenta el siguiente cuadro:

Diferencias en elementos de la gobernabilidad y governance de Cruz (2001)

	Gobernabilidad democrática (democratic gobernability)	**Governance Democrática (democratic governance)**
Definición del concepto	Capacidad de presentar y aplicar decisiones políticas mediante cauces institucionales y las reglas del juego establecidos en los regímenes democráticos, sin violentar el marco del derecho y en un contexto de legitimidad democrática.	Patrones y estructuras mediante las cuales los actores políticos y sociales llevan a cabo procesos de intercambio, coordinación, control, interacción y toma de decisiones (en las cuales también se encuentra la toma de decisiones políticas) dentro y entre órdenes sociales y regímenes democráticos, y que en su dimensión prescriptivo-normativa, busca en la actualudad ser consecuente con los valores de democracia (representatividad, legitimidad), la eficiencia y la eficacia institucionales.
Denotación del concepto	Atributo del sistema político (con niveles o grados), capacidad, habilidad.	Orden de cosas, patrones de interacción, condición, situación, mecanismos y métodos institucionalizados.
Objetos de estudio directamente asociados al concepto	Regímenes políticos considerados democráticos en general, y por su centralidad en el proceso de	Sistemas sociales, regímenes políticos, organizaciones y redes de organizaciones, en espacios territoriales y

	toma de decisiones, se da especial importancia al papel del poder ejecutivo.	organizacionales diferenciados.
Ámbitos de referencia	Nacional, subnacional, y excepcionalmente al nivel local.	Local, nacional, regional, supranacional
Actores políticos relevantes	Actores políticos y sociales estratégicos (poderes ejecutivo, legislativo y judicial, partidos politicos, sindicatos, movimientos).	Actores políticos y sociales estratégicos, ONGs, organismos internacionales, agrupaciones comunitarias, corporaciones privadas, redes de actores.
Características de la interacción	Generada con base en reglas de juego legalmente establecidas, donde hay que incluir aquella interacción politica establecida y generada	Implícita dentro del concepto de *governance*. La interacción se genera entre una gran cantidad de actores varios y actores políticos clave.
Papel del entorno y del sistema (orden) social	Se asume un entorno político y social dinámico, determinante para la comprensión de los factores que condicionan procesos de toma de decisiones políticas (la formación de coaliciones, agendas políticas, expectativas sociales, movimientos, entre otros).	Se asume un entorno dinámico, tanto fuera como dentro del ámbito de referencia, el cual es condicionado por (y a su vez motor condicionante de) el orden social
Orden y estabilidad	Criterios para definir niveles de gobernabilidad, cuando los actores políticos implicados en la toma de decisiones son capaces de garantizar (mediante las reglas de juego establecidas) la permanencia del sistema político y social sin el uso de estados de excepción y sin vulnerar derechos humanos fundamentales y las leyes básicas.	Conceptos implícitos en el término governance democrática. Alude al orden político institucional que determina la participación e interacción de actores en los procesos de conducción social.

Fuente: Cruz, César Nicandro (2001). "Gobernabilidad, y "governance" democráticas: El confuso y no siempre evidente vínculo conceptual e institucional", Instituto Internacional de Gobernabilidad, Magazine 23, 6 de noviembre, 2001.

De acuerdo a Torrijos (2001) la gobernabilidad se fundamenta en tres elementos: la concertacesión, el equilibrio y la operatividad democrática, los cuales requieren como ejes conceptuales la cohesión y la perdurabilidad. Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad La perdurabilidad de la democracia se define tanto en el ámbito interno de los gobiernos como en el campo de los opositores, desleales, disidentes o insurgentes.

Los sistemas políticos que han evolucionado a partir de estos elementos en tres tipos de situaciones, (siguiendo a Mcrae,1997: 285) que comprenden el crecimiento a largo plazo de prácticas y actitudes de consenso que derivan en una cultura, el compromiso institucional negociado y restos del medio ambiente que incidan en la superación de las diferencias entre los diferentes actores y agentes. Para Putnam (1993b), "El capital social encarnado en normas y redes de compromiso cívico parece ser un prerequisito para el desarrollo económico así como para un gobierno efectivo".

Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional. Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional.

El concepto de gobernabilidad democrática se vincula al concepto de gobernabilidad política porque se "asume la importancia del Estado y de su gobierno como catalizador y conductos de la acción colectiva", sostiene Cruz (2001). Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico "gorrón" causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otro ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir. El alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma. Un mayor problema es dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados (De Swaan Abram, 1997). La capacidad política para gobernar un sistema político o un poder público incide en la gobernabilidad política. La gobernabilidad política condiciona la governance política, las reglas del juego y las estructuras de interacción sociopolítica.

La existencia de muchos partidos políticos posibilita un sistema democrático competitivo, pero no tantos que resulte difícil y complicado el sistema de gobernabilidad política. Por lo tanto, la fragmentación política (Coppedge, 2000) debilita los sistemas de

gobernabilidad, mientras que una polarización de las posiciones ideológicas de los partidos proporciona mayores posibilidades para realizar elecciones significativas, medibles en función de la dispersión del voto.

La gobernabilidad puede ser de naturaleza económica, política y administrativa. La gobernabilidad se apoya en los procesos de toma de decisiones que afectan la economía, la política y la implementación de políticas (PNUD, 1997c). Esta gobernabilidad está siendo desafiada por las formas de pensar y de hacer la política. Pero la política, como una actividad humana de lo social, al igual que el Estado-nación, también está en crisis.

En la sociedad moderna hay un conflicto latente entre capitalismo y política. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La política exige por lo menos un uso comunitario sometido a reglas que se regulan por leyes, desde el impuesto obligatorio a las reglas de tráfico, pasando por la reglamentación de la construcción, el comercio etc. La liquidación paulatina de la política como actividad humana fue anunciada como la "muerte de la política" por Marx en su libro Miseria de la filosofía. Esta muerte paulatina de la política se manifiesta en el descrédito de los partidos, los políticos, y en general todas las instituciones políticas.

Una nueva fase de recomposición de lo político implica el rediseño, readaptación y creación de nuevas formas y métodos de acción de los desacreditados políticos, partidos, organizaciones, movimientos, etc. Un enfoque en la virtud cívica conduce a la preocupación por el diseño y la reinvención de las instituciones políticas y un acercamiento a los valore sociales, enfatiza el mantenimiento de las instituciones sociales dentro de las cuales se nutren los valores sociales (Pal, 1996). Las instituciones sociales, económicas y políticas determinan las decisiones y procesos de la sociedad. El adecuado funcionamiento de un sistema social en la que los individuos puedan desarrollar sus capacidades y sus libertades, depende de su entorno institucional.

La gobernabilidad democrática es un elemento imprescindible para un crecimiento económico sostenido y un desarrollo social. Entre la democratización y el desarrollo social existe una relación estrecha. Sin embargo, la inestabilidad es congénita a la democracia liberal como consecuencia de que ofrece más expectativas y perspectivas que soluciones y por lo tanto los procesos de democratización son inherentemente inestables e inciertos.

La democratización se convierte así en una herramienta perfecta del poder hegemónico del capitalismo. Las olas masivas de democratización desde la mitad de los setentas ha causado en los institucionalistas clásicos que se preocupen por dos temas de importancia considerable para la constitución y construcción y el entendimiento de las precondiciones de la estabilidad democrática, el debate sobre las ventajas y desventajas de los sistemas parlamentarios y presidenciales y cómo mezclar sus características institucionales los efectos disfuncionales en las instituciones de los tipos puros.

En sí, los procesos de democratización deben implicar verdaderas transformaciones socialistas. Se discute sobre lo adecuado de las estructuras institucionales para la democracia liberal. Smith (1999) sostiene que "por definición, la democratización implica

inestabilidad, la cual seguirá agudizándose por la progresiva pluralización de las fuerzas políticas".

Las masivas olas de democratización desde la mitad de los setenta han preocupado a los institucionalistas clásicos con dos asuntos básicos para su constitución y construcción y el entendimiento de las condiciones de estabilidad democrática: el debate en las ventajas y desventajas de los sistemas parlamentario y presidencialista y cómo mezclar sus características institucionales de tal forma que eviten los efectos institucionales disfuncionales de los tipos "puros" (Kaiser, 1997).

Un ambiente de inestabilidad política reduce la gobernabilidad pero la reducción del crecimiento económico es altamente controversial (Brunneti, Kisunko y Weder, 1998). No obstante, un estudio de Rodrik (1999) concluye que los países que tienen conflictos sociales debido a que carecen de consenso social y tienen instituciones débiles, sufren de un impacto negativo en su crecimiento, fundamentalmente por los términos de las pérdidas comerciales. La debilidad institucional afecta negativamente el potencial del crecimiento económico y del desarrollo social. La misma debilidad institucional es un obstáculo para el desarrollo y la reforma de las instituciones. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente a la reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación. Incluso, algunos países sin conflictos sociales tuvieron una declinación significativa en su crecimiento.

Las medidas de inestabilidad política, en estas situaciones, son más consistentes que otras medidas políticas o de derechos civiles. La inestabilidad y la incertidumbre de un proceso democrático puede paralizar y en muchos de los casos revertir los avances logrados en el crecimiento económico y el desarrollo sociopolítico de los pueblos. El efecto indirecto positivo de la democracia por sobre el crecimiento es a través de sus impactos en las probabilidades en los dos tipos de cambio político, cambio de régimen y cambio de gobierno constitucional de un partido en el gobierno a otro. La investigación en la ingeniería constitucional ha tomado nota de los efectos de difusión, tales como la globalización de las comunicaciones que enriquece las bases cognitivas de las cuales escoger. Puede argumentarse que los cambios constitucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables.

Estos cambios políticos tienen efectos significantes y opuestos sobre el crecimiento. El crecimiento tiene un efecto negativo e el cambio de régimen y un efecto positivo en la probabilidad de que el partido gobernante permanezca en el poder. A largo plazo, el crecimiento económico tiende a tener un efecto positivo sobre la democracia (Feng, 1997). Un cambio normal mayor en el gobierno tiene un efecto positivo en el gobierno en el crecimiento. La democracia tiene un impacto positivo en un cambio normal mayor de gobierno y un impacto negativo en un cambio de régimen.

Para contrarrestar y limitar los alcances de la inestabilidad, una economía de mercado y una sociedad democrática requieren de mecanismos de gobernabilidad que sean

compatibles para la conducción de los actores políticos, sociales e instituciones del Estado en el uso más eficiente de los recursos y en la atención de las demandas sociales. Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente. El concepto de gobernabilidad está estrechamente vinculado con las instituciones del Estado, el mercado y la sociedad. Por ello, la gobernabilidad es el resultado de negociaciones y arreglos institucionales que requieren de instituciones capaces de procesar los acuerdos entre los diferentes agentes económicos y actores políticos.

Los mecanismos de gobernabilidad funcionan correctamente en un sistema democrático en donde los insumos del sistema político actúan articuladamente, tales como la actividad popular, los medios de comunicación social, los partidos políticos, las elecciones, cabildeo de grupos de interés plurales. En un sistema político, se pretende que los gobiernos sean capaces de mantener la gobernabilidad mediante mecanismos democráticos. Estos mecanismos de gobernabilidad o de control político son el resultado de la concentración del poder y se expresan en proyectos de ingeniería social propuestos por los organismos supranacionales. No obstante, los derechos pueden ser logrados a través de luchas sociales en contra del sistema político dominante que se resiste a cederlos y a reconocerlos.

De acuerdo a Ansaldi (1990: 12) la gobernabilidad democrática “es la capacidad de que dispone un gobierno de ser obedecido sin violentar las reglas de juego de la democracia y sin que la amenaza de ruptura de éstas por otro actor social político resulte convincente para el conjunto de la sociedad”. La gobernabilidad democrática es conceptualizada por Lechner (1995) como "las capacidades de las instituciones y procedimientos democráticos para conducir eficazmente los procesos sociales, capacidad que hace de la democracia un mecanismo de conducción política". Estos procesos sociales en su relación entre interacciones y operaciones en las diferentes escalas de espacios, siempre son reducidos en análisis dualísticos y simplistas de lo nacional y doméstico en función de lo internacional o exterior.

La esfera de la gobernabilidad democrática se refiere, de acuerdo con Costafreda (2000), al conjunto de reglas del juego que determina las coordenadas para la acción colectiva en una sociedad. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. Estas reglas del juego se refieren a las instituciones que configuran una governance específica y permiten a los actores articular preferencias, intereses y agendas, además de que constituyen un elemento para comprender las condicionantes de la gobernabilidad (Cruz, 2001). El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados.

La gobernabilidad democrática es “la capacidad de los gobiernos para ejercer el poder político democrático de forma continua en condiciones de legitimidad”, de acuerdo con Castro (2000:9). Altman (2001a) define la gobernabilidad democrática como la “capacidad de procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas sin violentar el marco del derecho y en un contexto de legitimidad democrática.” La gobernabilidad democrática es la capacidad de la sociedad para la provisión de bienes y servicios públicos, derechos civiles y

políticos que impactan las oportunidades vitales de la población. En la gobernabilidad democrática, la esfera pública de la sociedad es muy amplia.

La gobernabilidad democrática es un concepto que debe entenderse como " la capacidad de presentar e implementar decisiones políticas mediante causes institucionales y las reglas del juego establecidos en los regímenes democráticos", de acuerdo a Cruz (2001). La relación e interacción de actores estratégicos que luchan políticamente en contextos institucionalizados, así como la "conformación y el diseño político institucional como determinante del comportamiento y expectativas estratégicas de dichos actores", constituyen el principio de la gobernabilidad democrática. La gobernabilidad es "el acto mismo de construirla", y por lo tanto es "cambiante, alterable, susceptible de crisis que la someten permanentemente a prueba", (Torrijos, 2001).

La institucionalización de los partidos es esencial para lograr una gestión política de la gobernabilidad democrática. Si la meta es una representación perfecta, entonces se requerirá un gran número de partidos, pero si la meta es la gobernabilidad, un partido es suficiente. Lo importante es lograr un equilibrio entre gobernabilidad y democracia. La calidad de la gobernabilidad democrática se vincula con los arreglos político-institucionales en cualquier análisis de la gestión política.

El respeto por las reglas del juego establecidas en las instituciones, constituye el punto central de las democracias. El carácter democrático de la gobernabilidad requiere de instituciones que procesen los requerimientos del sistema democrático, pero en principio pueden existir sistemas de gobernabilidad no democráticos y democracias que sean capaces de ser gobernadas, es decir, ingobernables. Entonces el desafío es lograr una economía de mercado con estabilidad política y social con un fuerte sustento en arreglos institucionales democráticos entre los Estado-nación y las organizaciones internacionales, pero que además se oriente totalmente a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Así, el sistema democrático debe garantizar el desarrollo de las competencias, derechos y libertades tanto individuales como sociales.

La gobernabilidad democrática es el producto de una estructura de governance que resulta de un nuevo diseño de instituciones promovido por el modelo neoliberal y que da lugar a la emergencia, de lo que Luhman (1982) denomina la "sociedad multi-céntrica". En la gobernabilidad democrática, la esfera social de la sociedad es muy amplia. Estos arreglos institucionales tienen que dar respuesta a criterios de representatividad y responsabilidad política, al mismo tiempo que dar la flexibilidad necesaria al sistema para agilizar y eficientar los procesos políticos.

Los cambios que se gestan en la estructura de governance modifican la ingeniería de las instituciones y afectan la gobernabilidad de la sociedad. La calidad de la gobernabilidad democrática está vinculada con los arreglos político institucionales en el análisis de la gestión pública. La gestión pública es un factor importante para tomar decisiones que fortalezcan o debiliten la acción de los gobiernos. La intensificación de las formas de la política globalizadora y el surgimiento de estructuras plurales de gobierno fragmenta las estructuras democráticas de los Estados-nación.

La gobernabilidad democrática está vinculada con la capacidad de gobernar en espacios definidos y resulta de una estructura de governance por un nuevo diseño institucional promovido por el modelo neoliberal que da lugar a la emergencia de una sociedad "multi-céntrica", en los conceptos de Luhman (1982). Gobernar requiere de capacidades para coordinar los esfuerzos de diferentes agentes y actores que deciden sobre diferentes cursos de acción. La vinculación entre la eficiencia de los agentes económicos y las estructuras institucionales requiere el análisis del diseño institucional de los sistemas políticos. Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional.

De acuerdo a Kaiser (1997), el argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica. Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente. Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional.

Estos problemas incluyen un pronunciado grado de explotación económica, desigualdad social y económica, injusticia social y política que ha caracterizado a la región desde los tiempos en que los indígenas pobladores de estas tierras fueron subyugados por la fuerza a la dominación colonial europea en el siglo XVI. El cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra. La conclusión de que la primera causa dela extrema desigualdad social y económica en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo. La política contemporánea y la vida social de la región se debe en parte al legado del dominio colonial europeo, a sus instituciones de dominación ideológica y a una tradición de militarismo y conflictos armados así como también a una institucionalización de numerosas desigualdades de clases, género y razas étnicas.

Otra condición de desigualdad que llama la atención en Latino América es la aguda disparidad en la tenencia de la tierra, profundamente enraizada en desigualdades históricas e instituciones explotadoras y se ha estado agravando por la expansión de las relaciones del mercado capitalista, la amplia comercialización de la agricultura, el desarrollo de las agroindustrias y el desplazamiento concomitante de grandes números de agricultores en pequeñas propiedades y campesinos pobres (Harris, 1997) El cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra..

La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta. Las economías contemporáneas de Latinoamérica se han convertido en partes integral del nuevo sistema económico global que es dominado no

por naciones Estados, sino por grandes corporaciones transnacionales que constituyen los principales actores globales en este sistema..

En las últimas dos décadas, casi cada aspecto mayor de la vida económica, política y social en Latinoamérica estuvo influida por la integración acelerada de la región en el sistema capitalista global. Junto con las elites locales y los capitalistas transnacionales han promovido mayores cambios estructurales en las economías latinoamericanas a fin de facilitar la creciente integración de la región en la economía global capitalista.

De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población latinoamericana mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso. La tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966).

Cuando se ponen en riesgo las instituciones políticas de los regímenes democráticos, se arriesga también la capacidad del sistema político para generar los consensos y por lo tanto, se amenaza la gobernabilidad democrática. ”. Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno.

Para Giddens (1999:36) los riesgos son “la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza.” Por lo tanto, el desarrollo económico no es causa de la democracia, los orígenes de la democracia están en el fortalecimiento de instituciones políticas de representación, la defensa de los derechos humanos, la existencia de fuentes de opinión, y la protección de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos (Ortega Ortíz, 2001).

La transición a la gobernabilidad democrática involucra un proceso de cambio hacia un nuevo "paradigma de gobernabilidad". Camou (1992) denomina "paradigma de gobernabilidad" al "conjunto de respuestas firmes (ideas, valores, normas prácticas) que una comunidad política sustenta en pos de resolver (y aceptar) ciertas soluciones a sus problemas de gobierno". Tres elementos constituyen el paradigma de gobernabilidad de acuerdo a este autor: modelos políticos resultante de un amalgamiento de ideas y valores, fórmulas institucionales dadas en mecanismos operacionales para la toma de decisiones, y el conjunto de políticas públicas estratégicas.

Por tanto, la formulación e implantación democrática de políticas públicas debe aceptar los riesgos y los costos involucrados. El riesgo de las instituciones democráticas es inherente a las contradicciones de los procesos de la globalización, y por sí mismas no garantizan la aplicación eficiente y eficaz de las políticas. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado. De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones

democráticas cuyo poder se asegura mediante el “enjaulamiento” de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas.

Luego resulta que para la implementación de las políticas públicas se requieren de las adecuadas instituciones, las cuales no pueden ser establecidas dogmáticamente desde el exterior del Estado-nación y ajenas totalmente a la idiosincrasia. Para el diseño de nuevas instituciones, de acuerdo a Ayala (2000), las políticas públicas, también denominada política de Estado, deben orientarse al establecimiento de reglas claras, al logro de crecimiento económico y mejora de la política social, el ejercicio de un Estado de Derecho y la reforma institucional del poder legislativo.

Es en este sentido que la política de Estado es concebida por Ayala (2001) como “el conjunto de mecanismos institucionales a través de los cuales el Estado puede restringir la conducta oportunista de los agentes económicos...”. La política de Estado se preocupa por la calidad de intervención del gobierno, la cual depende de su diseño institucional. De acuerdo a Kaiser (1997), el argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica. Los mecanismos institucionales que propone este autor, para mejorar el desempeño de la política económica son: los arreglos institucionales, el anuncio anticipado de instrumentos y resultados de la política económica por el gobierno, los compromisos públicos del gobierno sobre la política económica, el control de los burócratas y políticos, sistema electoral y rendición de cuentas y, finalmente, el control del presupuesto público.

La función más importante de la política de Estado es su papel para establecer las políticas y lineamientos económicos, políticos y sociales que faciliten los procesos de intercambios y establezcan los mecanismos de cooperación y coordinación, de tal forma que distribuya los costos y beneficios entre los diferentes agentes económicos. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, dándose el problema del “gorrón”, pero las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer.

El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes. En síntesis, una buena política de Estado acordada mediante arreglos institucionales contribuye a ampliar los márgenes de gobernabilidad en un período complejo de transición. La política de Estado define la estrategia de la política económica, cuyos objetivos son más de carácter normativo que para alcanzar en la realidad.

Cuestionando a Camou (1992), el amalgamiento de ideas y valores es más bien un modelo ideológico que político. El proceso de transición hacia el nuevo "paradigma de gobernabilidad" es un proceso "bifronte". Por un lado, determina las reglas de quién y con cuáles condiciones se debe ejercer el poder.

Por otra parte, se preocupa por el ejercicio eficaz del poder. Este ejercicio del poder se refiere al "oscuro pero institucionalizado entramado de reglas -escritas y no escritas- entre factores reales de poder" que garantiza la estabilidad (Camou, 1995) Sin embargo, la profundización de los procesos de globalización exigen una reconceptualización del poder político replegado en los Estados-nación. El surgimiento de una gobernabilidad democrática que promete libres mercados y libertad a las naciones ha sido deformada por las normas constitucionales. La investigación en la ingeniería constitucional ha tomado nota de los efectos de difusión, tales como la globalización de las comunicaciones que enriquece las bases cognitivas de las cuales escoger.

Esto es, para crear marcos de acción favorables a las grandes corporaciones monopolísticas transnacionales, más que a la ciudadanía que podría controlar estas corporaciones, cuando irónicamente critican los monopolios que ejercen los Estados-nación sobre los servicios públicos. Los grandes intereses corporativos atentan contra el Estado porque consideran que mediante sus acciones reguladoras limita el logro de mayores tasas de utilidades, la adquisición de materias primas y recursos económicos en abundancia y siempre a bajo costo, la penetración de sus productos en nuevos mercados y la reducción de sus costos de transacción en las operaciones comerciales.

De hecho, el liberalismo económico debilita la ciudadanía, tal como lo sostiene Barber (1984), quien, además, demuestra que el liberalismo ha sancionado la débil democracia que no puede concebir otra forma de ciudadanía que no sea un trato auto interesado. Las formas de ciudadanía promovidas por el Estado-nación incorporan la multiplicidad ideológica de las clases sociales que logra aglutinar y cohesionar en una identidad común para dar lugar a un proyecto de desarrollo económico. No obstante, para eliminar las disfuncionalidades y disociaciones que surgen a partir de los avances que tienen los diferentes procesos de globalización económica y de identidad cultural, el Estado-nación tiene pocas y limitadas capacidades.

El liberalismo económico favorece el desarrollo anárquico de los negocios y exacerba la racionalidad mercantil. Las corporaciones que no responden a las presiones tanto de los accionistas, como de las expectativas sociales, arriesgan la pérdida de su legitimidad. Para referirse a las crecientes expectativas sociales de desempeño social, algunas corporaciones han adoptado elementos que se consideran formar parte de una ética y las firmas de consultoría han promovido el uso de elementos de diseño ético. La ética se basa en los fundamentos morales de la sociedad. La ética sirve para esconder las miserias e impotencias de la acción económico-política conservadora para resolver los problemas de la época. Mientras que el conservadurismo institucional y las propuestas dependentistas institucionales nos conducen a esperar que la evolución de los sistema políticos democráticos exhiben diferentes patrones, la propuesta de aprendizaje institucional apunta a la convergencia.

Los sistemas avanzados de la información contribuyen en las discusiones sobre la gobernabilidad con la posibilidad de capacidades para la regulación derivadas de la concentración de recursos significativos y que son esenciales para la participación en la economía global, tales como el capital fijo y en los lugares estratégicos. La naturaleza misma de la gobernabilidad implica un "gobierno interconectado en red" sin límites de

comunicación gobierno / cliente, a través de infraestructuras de información gubernamental e interconexiones horizontales que facilitan la descentralización y la transferencia de funciones hacia unidades pequeñas y dinámicas.

Se incluyen las organizaciones no gubernamentales y las agencias (Gobierno Digital, 1997) La condición de este proceso implica abrir canales de comunicación de la sociedad con el Estado. El considerable direccionamiento en lugares de muchos de estos recursos contrastan con la hipermovilidad de la información. Esto da lugar a problemas de control de un espacio electrónico y que deriva de las propiedades de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, así como de la capacidad del Estado y del sector privado para gobernar estos procesos y para operar en estos mercados electrónicos (Sassen, 1995)

De acuerdo con May (1997), la reconfiguración del espacio global se da en temas centrales que se orientan hacia fuera y en temas más periféricos que se dirigen hacia dentro, para producir los espacios políticos globales. El espacio global está integrado por los procesos de globalización, los cuales se expresan en un contexto de fragmentación. La teoría política ejerce una influencia mayor que la de los modelos económicos del actor racional en la economía política global, cuyo principal imperativo es el crecimiento económico en el supuesto de que exista una constante lucha contra los recursos escasos. Queda para la discusión el uso apropiado del término economía política global, el cual empezó a emplearse a mediados de la década de los ochenta, abordado teóricamente desde tres perspectivas, el liberalismo económico, el nacionalismo económico y el marxismo. El desarrollo cíclico de este campo se representa bajo la tendencia que parece ser más determinística que incluyente.

En un mercado en proceso de globalización se van debilitando las barreras geográficas entre los mercados internos nacionales y el externo o internacional, impuestas por el Estado-nación.. Las barreras naturales dieron origen a ineficiencias desde el punto de vista de economía política, por lo que pueden denominarse ineficiencias útiles que proveen un soporte para las diferencias políticas locales mientras que permiten la apertura a la economía global. Los procesos de integración económica a escalas regional y global acompañados con la desregulación de los mercados han transformado radicalmente la naturaleza de las funciones del Estado y la sociedad, así como las actividades políticas, económicas y sociales de los gobiernos.

Los procesos de globalización someten al estado a una redefinición de sus funciones. Existen dos tendencias de esta redefinición del papel del Estado: a eliminar funciones mediante la desregulación de actividades, o a promover la regulación del desarrollo local. La finalidad de una política de desregulación es alentar la competencia no solamente entre los diferentes países, sino también entre instituciones y organizaciones.

Los cambios han sido significativos de las funciones y atribuciones del Estado, la ideología política, la economía política y la política económica que le dan sustento para su participación en las actividades económicas. Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales. La ideología capitalista ha sido

consolidada más por factores de un conservadurismo social que por la simple situación económica y es el reflejo de los principios de una ética que se expresa en la ambigüedad de la competitividad.

En otras palabras la estrategia de la política económica define la política de Estado con una orientación hacia un crecimiento económico y a la gobernabilidad democrática. La propiedad privada de los medios de producción y en los procesos de transformación es el requisito y el factor clave del funcionamiento de una economía del mercado, en donde también existen diferentes patrones de desarrollo y profundizan las relaciones sociales con la propiedad privada de los medios de producción, distribución y consumo. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Además, hay que considerar que las diferencias en la ocurrencia de las relaciones sociales dentro de las organizaciones y entre las organizaciones pueden ayudar a determinar los tipos de mecanismos de mercado o de jerarquías a usar.

Esto es, la economía del mercado es una estructura heterogénea condicionada por diferencias en los modos de relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad. La dispersión de la propiedad de las grandes organizaciones transnacionales y multinacionales en partes llamadas acciones, es un fenómeno que evita la concentración fácilmente localizable en algunas economías, a pesar de que la propiedad concentrada y no dispersa es el patrón dominante.

Las implicaciones de la creciente tendencia a la internacionalización y globalización de la actividad económica, que tienen en la gobernabilidad de la creación y distribución de recursos, impulsan la urgente necesidad de revisar las agendas de los gobiernos nacionales y supranacionales. La modernización y la democratización no siempre son compatibles porque tienen como base diferentes racionalidades y criterios de eficiencia, eficacia y legitimidad. Es decir, el desarrollo económico no siempre es causa del desarrollo democrático.

La teoría de la modernización que plantea como hipótesis que el desarrollo económico traerá consigo el desarrollo político, que tuvo un énfasis en las décadas de los setenta y ochenta fue cuestionada por haber justificado e impulsado regímenes capitalistas autoritarios que institucionalizan los métodos violentos para el control político. Hungtington (1993) por ejemplo, sostiene que los procesos de modernización provocan inestabilidad, por lo que para llevarlos a cabo requiere de gobiernos que centralizan el poder más que de gobiernos democráticos. Los procesos de modernización generan aprendizajes rápidos y traen consigo un incremento en las demandas de bienes y servicios e inflación de las expectativas para satisfacer las necesidades y deseos, lo cual no siempre desarrolla la infraestructura y capacidad para lograrlo.

La crisis de la gobernabilidad del Estado-nación.

La globalización económica y la revolución tecnológica de la información comenzaron a erosionar las funciones y capacidades de los gobiernos de los Estado-nación para intervenir políticamente en las estructuras de las instituciones económicas y en la modificación de las condiciones del mercado, desde la década de los setenta. Durante la segunda mitad de la

década de los setenta se inicia la transferencia del poder y del mando del Estado al mercado mediante programas de desregulación, que en realidad son la regulación por el mercado.

Muchos de los cambios actuales fueron iniciados por los mismos Estados-nación, un tanto presionados por los procesos de globalización, las cuales transforman las comunidades políticas y modifican las funciones del Estado-nación. Es en este sentido que Wallerstein (1999,1994, 1983) sugiere que la unidad de análisis no debe ser el Estado-nación o la sociedad nacional, sino el sistema-mundo en su conjunto. La sociedad nacional contenida en el espacio territorial nacional es más homogénea y cohesiva que la sociedad global contenida en la unidad de espacio global.

No obstante, está naciendo una sociedad civil globalizada que se ha manifestado en movimientos antiglobalizadores con cierto éxito relativo, como en el caso de la campaña para la prohibición de minas personales y el movimiento Jubileo para la condonación de la deuda externa de los países más pobres. Hay que considerar que por definición, la sociedad es restringida al nivel nacional, esto es, la sociedad se contiene en el espacio nacional. No obstante, la sociedad local y regional es un actor social que adquiere más relevancia en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo equitativo y equilibrado.

En el espacio global se representan los fenómenos de globalización los cuales se expresan en un contexto de fragmentación. La fragmentación territorial del Estado ha dado lugar a una creciente autonomía espacial de los gobiernos regionales y locales como una fuerza que se contrapone a los procesos de globalización y que generan tensiones dando como resultado una dispersión internacional de acuerdo con Torrijos (2001). La autonomía municipal se clasifica en política y administrativa.

Es autonomía política la que se refiere directamente al ejercicio del poder de elegir y gobernar y la autonomía administrativa se refiere al funcionamientos de las organizaciones. De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes. La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

La autonomía local, de acuerdo a Castells (1999: 292) tiene como fundamento la idea de que los ciudadanos son los que se encuentran mejor ubicados para evaluar y juzgar las acciones de los gobiernos y que se requieren potenciar mecanismos que permitan a estos gobiernos locales tomar decisiones en los asuntos que les competen, ya que son responsables efectivos de sus acciones ante la comunidad. La autonomía de los pueblos es una condición esencial para determinar la soberanía y la independencia política. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas son preferidas a aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible.

Con base en los trabajos de Wallerstein, es cuestionable hasta donde la soberanía y la autonomía de los Estados-nación han sido realmente respetados por los poderes económicos hegemónicos y globales. La baja autonomía política de los Estados-nación está

determinada por las políticas económicas neoliberales que atacan directamente las capacidades para decidir sus propios destinos. Wallerstein plantea la desintegración social como un escenario inevitable. Los procesos globales y regionales implican a las comunidades políticas locales y nacionales mediante procesos de coordinación de expectativas, que las convierte en más interdependientes para la resolución de problemas transfonterizos, regionales e internacionales.

El Estado-nación entra en crisis al no poder contener las funciones étnico-regionales erosionadas por el avance de las fuerzas globalizadoras y al no poder controlar la nueva economía, la cual tampoco resuelve la crisis del sistema capitalista tal como se estimó. La crisis del Estado-nación es estructural y se manifiesta en tendencias contradictorias hacia la supranacionalidad y hacia la intranacionalidad, en su incapacidad para cumplir con sus funciones, principalmente las de implementación de políticas sociales.

Esta política de compensación a los requerimientos y demandas de los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales sobrecargan las estructuras político burocráticos y provocan la crisis del Estado de Bienestar. La política de compensación a los requerimientos y demandas de los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales sobrecargan las estructuras político burocráticos y provocan la crisis del Estado de Bienestar

Por lo tanto, existe una doble crisis, la crisis de lo político y la crisis del Estado en las democracias institucionalizadas. Sin embargo, en la crisis de lo político, la crisis del Estado de Bienestar no incide necesariamente en la crisis de la democracia. En la crisis de lo político, la crisis del Estado de Bienestar no incide en la crisis de la democracia. La crisis de lo político es caracterizada por Ramos (1994) por débiles implicaciones políticas subjetivas, escasos sentimientos de competencia, relevancia de las actitudes desconfiadas y cínicas hacia los políticos, así como una muy baja identificación partidista (Del Alamo, 2001). La ausencia de políticas sociales destruye el tejido social. Precisamente, el diseño de adecuadas políticas sociales como mecanismos de protección en prevención de situaciones de emergencias y crisis sociales, constituye una actividad con una orientación económica rentable que prioritaria del Estado, en vez de revertir los costos de la crisis.

El elemento común de la crisis de gobernabilidad es la falta de funcionalidad de las instituciones para dar solución a los problemas, por lo tanto, la crisis de la gobernabilidad democrática se manifiesta debido a la debilidad de las instituciones democráticas, resultado de otra crisis, la democrática. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado.

De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones democráticas cuyo poder se asegura mediante el “enjaulamiento” de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder. Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Involucrarse en la acción colectiva, los actores buscan traer el ansiado bien colectivo y dar

forma a la colectividad con respecto al bien colectivo.

Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico "gorrón" causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico "gorrón" causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

De acuerdo al investigador, "es probable que la actitud de muchas sociedades ancladas sea la de negarse a aceptar, a ciegas, la superposición de capas de la ya formada gobernabilidad global, pero la gobernabilidad reluctante implica el reconocimiento de estándares universales de democracia (poliárquica o consociativa) sobre los que se funda y se explica" (Torrijos, 2001). Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política.

La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad La crisis de la gobernabilidad democrática y la inestabilidad de las instituciones son características de las democracias participativas que requieren de la implantación de programas de desarrollo humano para mejorar sus sistemas de gobernabilidad.

Torrijos (2001) ha denominado gobernabilidad reluctante a la tendencia de las sociedades actuales a buscar la gobernabilidad democrática a pesar de las condiciones críticas económicas, políticas y sociales en que se encuentran, la cual considera que es una gobernabilidad que emerge desde la ingobernabilidad de ambientes de alta incertidumbre, inestabilidad y caos. La crisis de la democracia es un remanente de una deficiente regulación del mercado.

Las crisis de la gobernabilidad son resultado de las debilidades del Estado, disfuncionalidades de las instituciones económicas, políticas y sociales que erosionan los sistemas democráticos y dan lugar a regímenes híbridos. Cuando este tipo de ambientes de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los problemas. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas.

Resulta una contradicción que en una sociedad postindustrial que desarrolla sistemas de producción flexibles, las mega corporaciones tienen la tendencia a centralizar más los

procesos decisorios y de estrategias. Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de "esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política". La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad

Esta carencia de funcionalidad de las instituciones se debe a la falta de arreglos institucionales y negociaciones entre los diferentes agentes económicos. A pesar de que la administración de finales del siglo XX obscurece la del siglo XXI, las ciencias administrativas enfrentan la tarea de forjar una nueva administración en las sociedades que se encuentran en crisis de dirección, lo cual debilita las percepciones colectivas, exacerba el individualismo y la introversión y erosiona los fundamentos morales de la vida comunitaria.

En la dialéctica entre comunitarismo e individualismo se hace patente el reconocimiento del potencial de autoritarismo que contiene el sistema capitalista en su declaración y su inclinación por los derechos del individuo. Aristóteles hace una distinción entre lo que llamaríamos colectivismo, una acción común dirigida desde arriba y un comunitarismo en el que los ciudadanos tienen fines personales no siempre coincidentes, pero saben ponerse de acuerdo acerca de los medios. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas. Pues la buena economía dice que hay que utilizar los recursos comunes para favorecer a todos en la mayor medida posible. Usamos los mismos instrumentos para lograr fines personales no idénticos. Pero si cada uno obra por su cuenta, el resultado puede ser que todos salgan perdiendo

Este conjunto universal de valores se forjan con referencia a las metas últimas de la administración, los cuales tienen que ser redescubiertos a fin de reconstruir la nueva administración en la tradición moral de las sociedades modernas. A pesar de que ciertos valores de la administración son universales en carácter, en particular porque son promulgados vía las ideologías socio económicas y las doctrinas políticas y legales, no hay esperanza de que triunfen en los países, a menos que se adapten al medio ambiente cultural de cada uno de ellos.

Las crisis de gobernabilidad democrática afectan el desempeño de las instituciones del sistema político y a la inversa, si las instituciones no son eficientes, la gobernabilidad se ve disminuida. Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Involucrarse en la acción colectiva, los actores buscan traer el ansiado bien colectivo y dar forma a la colectividad con respecto al bien colectivo. Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de "esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Resulta una contradicción que en una sociedad postindustrial que desarrolla sistemas de producción flexibles, las mega corporaciones tienen la tendencia a centralizar más los procesos decisorios y de estrategias. La calidad de la gobernabilidad democrática se vincula con los arreglos político-institucionales. Para superar las crisis de gobernabilidad democrática y la inestabilidad institucional de los sistemas democrático participativos, se requiere se requiere de la implantación de programas de desarrollo humano.

De acuerdo con Altman (2001a) las crisis de gobernabilidad democrática "se dan en países con sistemas de partidos muy poco institucionalizados, donde la fragmentación partidaria es alta, la disciplina es baja, el presidente goza de fuertes poderes ejecutivos y fue electo haciendo una campaña anti-establishment, la confianza en las instituciones es muy limitada y donde el Estado deja, como O'Donnell dice, muchas zonas "marrones", es decir, en los sectores de la sociedad donde el Estado está ausente.

Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de "esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política". La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad El debate sobre la crisis de la gobernabilidad democrática se centra en la relación causalidad versus casualidad de los fenómenos. La crisis de gobernabilidad democrática es una crisis que lleva implícita las estructuras estatales y el fin de la política, anunciada por Marx.

En realidad, las estructuras estatales se convierten en obstáculos para el cambio y la transformación. Frente a esta crisis del Estado-nación es necesario la construcción teórica de nuevos modelos de organización política y económica, de nuevas formas y desarrollos de gobernabilidad. Esta política de compensación a los requerimientos y demandas de los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales sobrecargan las estructuras político burocráticos y provocan la crisis del Estado de Bienestar. Esta política de compensación a los requerimientos y demandas de los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales sobrecargan las estructuras político burocráticos y provocan la crisis del Estado de Bienestar.

Por lo tanto, existe una doble crisis, la crisis de lo político y la crisis del Estado en las democracias institucionalizadas. En la crisis de lo político, la crisis del Estado de Bienestar no necesariamente incide en la crisis de la democracia. La crisis de lo político es caracterizada por Ramos (1994) por débiles implicaciones políticas subjetivas, escasos sentimientos de competencia, relevancia de las actitudes desconfiadas y cínicas hacia los políticos, así como una muy baja identificación partidista (Del Alamo, 2001). El Estado-nación pierde el monopolio de la violencia y abandona sus funciones de proveedor de bienestar social. Sin embargo, la aserción de que el Estado-nación está llegando a su fin, no es de todo una realidad, ya que difícilmente los espacios nacionales se fusionen en un solo espacio mundial.

La conceptualización del espacio físico y territorial ha evoluciona a una forma más dinámica y abierta. La desterritorialización del Estado nacional está dando origen a nuevas formas de organización espacial tanto geopolíticas como geoeconómicas. Arellanes Jiménez (2001) caracteriza este espacio como un "concepto dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones." Ciertamente, las economías nacionales se transforman y al fusionarse con otras no desaparecen, aunque su margen de autonomía y gobernabilidad si se reduce por la interdependencia.

La tendencia globalizadora de la gobernabilidad promueve la implementación de procesos democráticos, la legitimación de las decisiones gubernamentales y la aplicación de las leyes en cada uno de los Estados-nación. Así la gobernabilidad está determinada por un balance de éstos estándares transnacionales, democracia, legitimidad y regla de la ley, (Franck, 1999) que están emergiendo en las últimas dos décadas y que están siendo aceptados por convergencia global de lo que debe ser una buena gobernabilidad democrática. Esta convergencia supone que el mercado y la democracia están estrechamente vinculadas al desarrollo económico.

El propio concepto de democracia ha sido reelaborado para ajustarse a los requerimientos del sistema capitalista. Más que el modelo de la convergencia del mercado y la democracia, es el enfoque del conflicto el que más se acerca a explicar la realidad. Un análisis de la convergencia del mercado y de la democracia nos muestra los límites de una supeditación de la democracia al mercado, lo que se demuestra con un desarrollo económico que tiene poca relación con la democracia.

El elemento común de la crisis de gobernabilidad democrática, argumenta Prats (2000),es la incapacidad de las instituciones democráticas para asumir y procesar democráticamente el conflicto. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado. Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de "esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política". La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. Para superar esta crisis de gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones, características de los sistemas democrático participativos, se requiere de la implantación de programas de desarrollo humano.

La aceptación de los agentes y actores para que las instituciones actúen como reglas del juego, está determinada por las expectativas de los beneficios que esperan recibir de dichos arreglos institucionales. No siempre las instituciones democráticas garantizan por sí mismas resultados eficientes y eficaces de la aplicación de políticas públicas. Las instituciones, afirma Coppedge (1996) afectan el "horizonte de posibilidad" de los actores, y a su vez, éste afecta la acción de los actores sobre las instituciones.

Todos los individuos, por el hecho de ser humanos y en reconocimiento a su personalidad, en cualquier parte del mundo tienen derecho a igual titularidad de estándares mínimos de democracia, legitimidad y a la regla del derecho, los cuales pueden ser monitoreados por instituciones transnacionales no gubernamentales o gubernamentales. Los estados democráticos que se ajustan internamente a la regla del derecho y aceptan las decisiones en su contra de las instituciones de justicia, también son más propensos a aceptar la regla del derecho internacional y a respetar sus acuerdos, por lo que los principios de la gobernabilidad nacional refuerzan los principios de la gobernabilidad internacional.

Las diferencias en el contexto político entre la gobernabilidad en el ámbito internacional y a escala local radican en la intensidad de uso del principio de legitimidad democrática. El punto medular aquí es lograr la conciliación entre las reglamentaciones nacionales y la creación de un derecho regional o internacional que dé respuesta a los cambios que impone la globalización y que por otro lado, respete los marcos históricos, culturales y jurídicos de las sociedades nacionales. En el ámbito local y regional, la sociedad adquiere importancia como un actor social en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo social más justo y equilibrado. Pero corresponde a los gobiernos el mérito de que bajo su protección se produce el crecimiento económico.

La legitimidad democrática tiene que aplicarse a escala de las prácticas propias de las organizaciones internacionales, aunque tienen que seguir siendo la preocupación de las instituciones de los gobiernos nacionales y locales. Las organizaciones internacionales tienen que balancear sus actividades con la necesaria transparencia, pero, además estrechar contactos con el liderazgo público y de las comunidades nacionales y locales, a través de instituciones y mecanismos que incrementen su legitimidad democrática. La legitimidad democrática y la credibilidad en los procedimientos son debilitadas por deficiencias en la regulación del mercado. Esta debilidad puede dar motivo a un sistema de alternancia donde los mecanismos democráticos sean reemplazados por intereses de grupos étnicos o religiosos.

La teoría normativa que juzga a las instituciones globales es una base importante para el desarrollo de la gobernabilidad global, pero como (Keohane y Nye, 2001) sugieren, más que lograr instituciones fuertes para alentar una integración profunda, es más apropiado perseguir una imagen de "minimalismo de redes" bajo un enfoque de acción de subsidiariedad. Las instituciones multilaterales no deben competir más que confiar en las funciones de las instituciones domésticas.

Si se sigue haciendo énfasis en las instituciones internacionales antes de que adquieran la legitimidad democrática, la trasparencia y la rendición de cuentas necesarias, entonces la gobernabilidad global está condenada al fracaso. Al decir de Haliday (1997: 23), ya se cuenta con un sistema de gobernabilidad global con muchas capas, aunque "uno de los problemas principales es el de resolver, a través de reformas, los efectos de un sistema que ha estado vigente durante varias décadas. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma. La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio. ¿Cómo hacer que este sistema de

gobernabilidad sea más efectivo, más justo, y más responsable frente a la cambiante situación internacional?”.

El diseño de instituciones democráticas bien articuladas y efectivas, en nuevas formas de gobernabilidad global, de conformidad con la normalización democrática, es uno de los principales retos que aguardan en el futuro. Las nuevas formas de gobernabilidad de lo colectivo deben sustituir a las estructuras rígidas y pesadas que no dan respuesta a exigencias de la individualidad con orientación abierta y que por lo tanto requieren la emergencia de nuevas formas colectivas con estructuras más abiertas, flexibles y livianas que respondan a las exigencias de la individualidad con orientación abierta.

El diseño institucional enmarcado en procesos electorales y decisionales, sostiene Ayala (2001), es un proceso de ensayo y error. El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997).

Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente. La propuesta de aprendizaje institucional sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional. Cada decisión en materia de diseño institucional tiene que ser el resultado de un proceso de negociación lo cual contribuye a lograr la gobernabilidad democrática.

Se requiere el diseño de instituciones que modifiquen e institucionalicen una mezcla de las opciones de salida y voz dentro del sector público como un medio de apoderamiento dentro del sector público mediante la participación de la sociedad civil en una red de asociaciones voluntarias, de tal forma que se transforme el centro de las instituciones de gobernabilidad pública, mediante la combinación de voluntarismo con procedimientos de seguridad de voz. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Las instituciones de gobernabilidad emergen precisamente de las disparidades del potencial para la creación del valor. El principio de libertad debe ser protegido mediante una clara separación de la fuerza del Estado lo que hace posible que la institucionalización se presente en un sistema político plural que acepte como normalidad las diferencias. (Sorensen, 1997)

Las instituciones que sustentan una gobernabilidad internacional efectiva tienen que estar apuntaladas por un grupo de Estados nacionales democráticos, cuyos intereses converjan con una clara orientación a respetar y proteger los derechos de los países menos favorecidos. En el momento en que los países desarrollados dejen de formular e implementar políticas menos interesadas, la gobernabilidad internacional se legitima a largo plazo. La emergencia de estos derechos ya protegidos por leyes internacionales y que están siendo reconocidos por las instituciones de los diferentes Estados-nación puede ser la

garantía de que una buena gobernabilidad también persigue la paz y la colaboración entre los diferentes pueblos del mundo.

En este sentido, la democracia sería un excelente instrumento para dirimir y resolver conflictos, siempre y cuando estos se sometan al marco de la regla del derecho. Gobernabilidad es también el sistema de gobierno para la resolución de los conflictos. La negociación de los intereses, más que al acuerdo de la mayoría es el instrumento democrático para resolver las diferencias de intereses entre las naciones y entre los individuos al interior de cada nación. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas son preferidas a aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible.

Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Esta tendencia es resultado de una mayor interdependencia de las economías y las industrias nacionales que modifican sus ámbitos de relaciones y de decisión desafiando los sistemas de gobernabilidad del Estado-nación basados en una política de integración del Estado a la satisfacción del bienestar de la sociedad. La modernización de las estructuras del Estado-nación significó la formación de las identidades y el carácter de lo nacional, la concentración del poder basado sobretodo en lo militar y la unificación territorial de un mercado interno.

Estudios empíricos en sociedades premodernas y pequeñas permiten concluir que la gobernabilidad puede lograrse sin la necesidad de mantener un ominoso y costoso aparato burocrático. Estudios empíricos han demostrado que en las sociedades sin Estado, se identifican las condiciones en las que las personas mantienen el orden sin formas de gobierno centralizadas y jerárquicas, entre las que sobresalen, las creencias y valores comunes en el grupo para lograr la coordinación, interrelaciones múltiples y directas para el trato cara a cara entre los individuos, reciprocidad, y el uso de la crítica y la vergüenza como formas de control social (Larmour, 1997).

Por lo tanto, la titularidad a los derechos de una buena gobernabilidad ya no está delimitada por la soberanía nacional, es decir, por una soberanía que define la capacidad de gobernabilidad de los sistemas del Estado nacional, sino por instituciones transnacionales que se han erigido en los guardianes de la gobernabilidad mundial, porque todavía estamos muy lejos de la emergencia de un Estado mundial. Sin embargo, la presencia de un estado mundial o global requerirá de instituciones democráticas que diriman los conflictos políticos, económicos, sociales, judiciales, etc. entre los diferentes grupos multinacionales.

Por otro lado, las fuerzas de la globalización tienen el poder suficiente para arrastrar a los Estados-nación e imponerles la implementación de los criterios de gobernabilidad, pero las consecuencias de sus fallas ya empiezan a mostrar problemas también en el ámbito global. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición".

Es en este sentido que se puede afirmar que ante los procesos de globalización económica, el mundo parece ser más gobernable pero esta gobernabilidad difícilmente es democrática.

La cooperación de las agencias públicas y privadas en todos los niveles (individuos, organizaciones no gubernamentales, locales, nacionales, regionales, mundiales, etc.) puede incrementar la gobernabilidad no solamente de los sistemas del Estado nacional sino también de todos los otros sistemas de gobernabilidad de la sociedad. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, dándose el problema del "gorrón", pero las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales.

Esto da la oportunidad a cada uno de los miembros para ser más efectivos en el gobierno de sus funciones específicas y en el control de sus actividades. Si se desarrolla esta capacidad de gobernabilidad compartida y se comparte el poder entre las diferentes agencias también se fortalece la soberanía y la solución de los problemas nacionales se torna más fácil. El Estado nacional democrático representa un papel importante en la división de las funciones de gobernabilidad en todos los niveles, internacional, regional, nacional y local.

La acentuación de la falta de gobernabilidad es resultado de una política macroeconómica inestable que ha dado pie a cambios bruscos en los criterios de manejo de las políticas económicas y sociales. La ausencia de gobernabilidad genera conflictos de competencia entre los diversos agentes económicos, crea inestabilidad en los mercados financieros y de inversión, debilidad del sistema financiero, vulnerabilidad fiscal eleva los costos de transacción, etc., lo cual repercute en la inestabilidad política y social y en la falta de un acuerdo político-social. Las naciones que tienen niveles más altos de crecimiento económico sn aquellas que mantienen sistemas de regulación de sus mercados financieros.

El nivel de los costos de transacción mide el funcionamiento de la economía en función de la calidad de las instituciones. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Para mitigar los problemas derivados de altos costos de transacción, problemas de agencia y complejos sistemas de contratación, los arreglos institucionales varían de acuerdo a las diferentes formas organizacionales. Pero esto no es suficiente, para explicar el desempeño de una política económica que disminuya el empleo discrecional de los recursos y el oportunismo de los burócratas.

Taylor y Singleton (1993) argumentan que los costos de transacción se reducen en la administración común de los recursos, y existe menos incertidumbre en lo que cada uno quiere, los intercambios son fáciles de identificar e implementar, el monitoreo y la aplicabilidad informal son menos costosos. Las instituciones afectan los costos de producción y los costos de transacción. Los diferentes arreglos institucionales pueden mitigar los problemas de costos de transacción altos, complejidad de los sistemas de

contratación interna y disfuncionalidades de la agencia, dependiendo de las diversas formas de organización.

Costos bajos de transacción y que se encuentren relacionados con la ausencia de sentido político y de instituciones políticas de la comunidad o de las autoridades puede dificultar los procesos de elección de políticas públicas. Pero estos procesos de elección de los diferentes agentes económicos y actores políticos, así como sus posibles comportamientos son inciertos. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones. Los intereses a corto y largo plazo de los agentes económicos reflejan las inconsistencias intertemporales de cambio en las instituciones. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos.

Costos de transacción elevados agregan "ineficiencia operacional" (Villareal, 2000) o "ineficiencia de transacción", es decir, agrega costos adicionales al valor real de los productos o servicios, como en el caso de transacciones comerciales que estén basadas en un sistema jurídico que dé confianza a los agentes económicos. Los diferentes arreglos institucionales pueden reducir los problemas de los altos cotos de transacción y de la agencia, mediante estructuras de gobernabilidad con diferentes formas organizacionales. Los mercados que no tienen las instituciones adecuadas operan con ineficacia e ineficiencia. Las instituciones deben cumplir con tres elementos básicos: reglas de juego claras, jugadores transparentes u organizaciones y un sistema de incentivos a la productividad y eficiencia.

La inestabilidad política reduce la voluntad y la capacidad de los países para el servicio de su deuda externa y para asumir medidas de ajuste estructural y de austeridad sin poner en riesgo a la nación. Las crueles medidas de austeridad han sido adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de la región a fin de reducir sus gastos en educación, salud y otros servicios sociales de tal forma que pueden servir a la combinación de deudas de los sectores privados y públicos de los diferentes países.

Los análisis del ajuste estructural se refieren al cálculo económico de las expectativas y no consideran la apreciación a la dimensión subjetiva. Estas políticas de ajuste estructural neoliberal han involucrado completamente la apertura de los mercados domésticos de los países latinoamericanos al capital transnacional, la promoción de las llamadas exportaciones no tradicionales a fin de ganar divisas extranjeras tanto como sea posible para pagar las deudas, y la desregulación del capital local y los mercados comerciales, que han involucrado las impopulares medidas de austeridad fiscal dirigidas a reducir los servicios públicos y a privatizar muchas de los servicios públicos y empresas públicas, de tal forma que los fondos públicos estén destinados al pago de las deudas.

La privatización de los beneficios, riesgos y responsabilidades de los servicios públicos, también enajena las aspiraciones sociales, las cuales se cancelan si la subjetividad es excluida del orden social. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobermabilidad que acota la subjetividad. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de

pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). La lógica del sistema hegemónico es inversa al protagonismo de lo colectivo, dando mayor énfasis a las políticas y estrategias individuales.

Como resultado, a pesar de que las clases altas y sus agentes de gobierno, incurren en la carga de grandes deudas en los setenta y en los ochenta, las clases bajas han estado soportando la carga del pago de la deuda durante los noventa. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

Estas políticas han disminuido la tasa de crecimiento económico en general y han traído una drástica reducción de los servicios del gobierno así como en el empleo público. Esto ha resultado en una venta total desnacionalizadora de los más grandes beneficios y empresas públicas de estos países y abolido las tarifas protectoras y otras formas de apoyo que previamente tenían las empresas locales.

El Banco Mundial inició los préstamos para el ajuste estructural y el Fondo Monetario Internacional los expandió en los inicios de la década de los ochenta, condicionándolos a la implementación de un nuevo consenso en las políticas económicas tendientes a liberalizar sus economías. Sin embargo, el desempeño económico de los países que adoptaron la nueva política económica fue desilusionante, tal como lo expresara Krugman (1995).

La inestabilidad política es un componente del análisis del riesgo nacional, que genera fluctuaciones en la tasa de cambio de la moneda y transmite información que genera un ambiente negativo para las inversiones. Las monedas nacionales se han devaluado y pegado al patrón del dólar estadounidense, y el crecimiento de las exportaciones, principalmente de las exportaciones no tradicionales, tales como las frutas, las legumbres, as flores y algunos bienes manufacturados, han sido promovidos a expensas de la baja en la producción de alimentos para el consumo doméstico.

De acuerdo con Guerrero Gutiérrez (1999), la inestabilidad sociopolítica y gubernamental entorpece y paraliza la acción del gobierno y deteriora el ejercicio de las libertades individuales y los derechos políticos de la ciudadanía. El gobierno se hace irresponsable de sus propias funciones.

Además, afecta negativamente el crecimiento de la economía, perjudica la consolidación del orden democrático y aumenta los riesgos de una regresión autoritaria que emplea métodos violentos contra quienes disienten de sus opiniones, tanto en la esfera pública como en la privada, institucionalizando la violencia. Los países que muestran altos índices de ingobernabilidad representan serios riegos para la expansión capitalista al generar desconfianza de los inversionistas.

Cuando los actores políticos estratégicos no tienen capacidad para tomar decisiones e implementarlas en función de su contexto y de las expectativas de los distintos actores y agentes, entonces surge la ingobernabilidad. Tanto los actores políticos, sociales y

económicos estratégicos se apoyan en la estructura del poder para ejercer su influencia en la toma de decisiones que beneficien sus propios intereses. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición". Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

Los actores políticos estratégicos se apoyan en la estructura institucional para la toma de decisiones políticas y la formulación e implementación de políticas y estrategias de gobierno que articulan los intereses, agendas y recursos de actores sociales y agentes económicos. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva.

Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos. Para que los agentes económicos inviertan, los gobiernos tienen que modificar los mecanismos regulatorios y el medio ambiente institucional a efecto de alinear las políticas discriminatorias, de tal forma que se establezcan los incentivos que los capitalistas requieren.

Para algunos analistas, como Peón Solis, (1999), "el futuro del Estado está prácticamente sellado al haberse convertido en una instancia incapaz de liberarse del avasallador empuje de la dinámica económica y la fuerza de las conexiones de carácter global. Por consiguiente, dada la determinación del orden externo sobre el Estado, éste no sólo ha visto mermada su autonomía y erosionada su capacidad para llevar a cabo el papel que le corresponde en el ámbito doméstico.

Sino que, se argumenta, se asiste a su fin como instancia soberana, capaz de generar los instrumentos prácticos y normativos en lo que tradicionalmente se ha fundamentado el ejercicio del poder estatal y su conducción de lo nacional." Pero este debilitamiento del Estado no se debe del todo a la globalización ni a la aplicación de las políticas de ajuste estructural que proponen un nuevo diseño institucional que modifica la estructura de governance y facilita la emergencia de una sociedad "multi-céntrica" según Luhman (1982).

Las estructuras de governance necesariamente tienen efectos sobre la gobernabilidad (Cerrillo, 2001). Las modificaciones en la estructura de la governance cambian la ingeniería de las instituciones y afectan la gobernabilidad de la sociedad. Los conceptos de governance y gobernability o gobernabilidad son interdependientes y son operacionalizables y aplicados en las estructuras institucionales de los sistemas

económicos, políticos y sociales, aunque ambos conceptos hagan referencia a fenómenos sociopolíticos diferentes.

Las organizaciones empresariales presionan al Estado en cada país para desregular las condiciones del mercado como una condición para enfrentar a los procesos de globalización. Los Estados-nación están siendo monitoreados por organismos internacionales y por la sociedad civil a efecto de que no restrinja las actividades inherentes a la libertad económica, mientras que a las grandes corporaciones transnacionales y organismos internacionales, no existe nada ni nadie que los limite en sus acciones. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional. Bajo el fundamento de la racionalidad económica, presionan al Estado-nación a desmantelar sus instituciones y cuerpos regulatorios en un intento por alcanzar el concepto ideal.

Lo que sucede, dice Saxe-Fernández (1999) es que se divulga “una prédica qu dice que no hay opciones, que el Estado se está desmantelando, en fin, todos los elementos contenidos en el discurso de la globalización que escuchamos a diario, como si hubiera una fuerza externa que dirime todos estos acontecimientos y no haya nada que hacer. Una especie de sobredetrminación, es el TINA: “there is not alternative” y, en realidad, nosotros lo que estamos planteando es que el análisis científico mostraría el TIIA: there is an alternativa”.

En este sentido, conviene quizás hablar más de transformación de las funciones del estado-nación, más que de eliminación del mismo. Lo que es claro, de acuerdo a la conclusión de Touraine (2000) es que “la idea de Estado-nación desaparece en cuanto correspondía a una fuerte interrelación de todos los elementos de la vida social al mismo nivel territorial. Pero ni el estado ni la nación desaparecen ahogados por el poder absoluto de los mercados.” Sin embargo, las mismas organizaciones empresariales requieren de las acciones de un Estado fuerte con capacidad para mantener la gobernabilidad del sistema, la conducción política y social, así como la regulación de las operaciones y transacciones internacionales.

Los gobiernos no solamente son los depositarios responsables de los recursos naturales de los Estado-nación, sino que también representan un papel protagónico para asegurar que estos recursos se distribuyan equitativamente. Tanto los mecanismos gubernamentales como los no gubernamentales y no del mercado son necesarios para la realización de ciertos fines diferentes a los fines que persiguen los mecanismos del mercado.

El Estado fuerte es una condición necesaria para la democratización económica del mercado. La vinculación Estado-empresas multinacionales (EM), señala Peón Solís (1999) es una relación de dos vías: "la del impacto que ejerce el ámbito internacional sobre el Estado y la que éste ejerce sobre la EM desde el punto de vista de protección, seguridad e, inclusive, capacidad para negociar términos favorables a los designios nacionales". Los

gobiernos fuertes también garantizan a las empresas multinacionales y transnacionales la certidumbre para operar en estructuras socio- políticas estables y les proporcionan la infraestructura que necesitan. Por lo tanto, para un fuerte control de la economía es necesario desarrollar las instituciones de un Estado fuerte

Para tener una visión más equilibrada de las tendencias de la globalización, habrá que cuestionarnos si hasta la argumentación de la pérdida de gobernabilidad por parte del Estado-nación es una realidad. La erosión de las funciones y capacidades del Estado- nación es falaz hasta cierto punto, porque los mismos acuerdos de integración entre varios Estados-nación, vienen a reafirmar su soberanía y se convierten en los actores principales. Peón Solís (1999) argumenta por ejemplo que "el Estado nación no sólo no se ha disuelto ante el embate globalizador; Su peso y presencia hoy en día continúan siendo tan relevantes en términos regulativos, de control y de conducción que resulta indispensable para el adecuado desarrollo del proceso de globalización".

A pesar de las tendencias en la globalización económica que se apropia de la esfera pública y social, destruyendo lo colectivo en aras del interés privado y el mercado, los Estados contemporáneos demuestran vitalidad cuando todavía determinan las políticas públicas. Estas políticas instrumentalizan el crecimiento económico y el desarrollo social hacia el interior de su territorio, mientras que generan condiciones para que sus empresas transnacionalicen sus inversiones y operaciones.

Las políticas públicas aún elaboradas sobre la base de un “racionalismo económico” y bajo un enfoque tecnocrático que tiene como principal fuente la disciplina del mercado, toma como dados los valores de los accionistas dominantes y desatiende los intereses de los demás grupos, los cuales son excluidos de la participación para la toma de decisiones que les afecte.

Estos grupos no pueden atemperar los efectos que producen la inestabilidad inherente a los flujos financieros internacionales, lo cual justifica, hasta cierto punto, una política intervencionista como protección en contra de los estragos que causan las crisis financieras a los Estado-nación debido a inestabilidad financiera. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera. Los Estados imperialistas desempeñan un papel importante en la gestión de crisis económicas y financieras de los Estados menos desarrollados y de aquellas empresas transnacionales que confrontan problemas financieros. No obstante, no se puede ignorar el impacto que una mayor apertura financiera tiene en la estabilidad financiera.

El papel que desempeña el Estado-nación en el diseño e implementación de la política social puede ser cuestionado pero no por ello deja de ser el principal responsable tanto de su orientación como de los resultados que se logren en la solución de problemas específicos, tales como los generados por una mala distribución de la riqueza.

De acuerdo con Scott, la política social en su conjunto, representa la herramienta principal con que cuentan los gobiernos para promover el objetivo de igualdad de

oportunidades...” (Gómez y Loyola, 1999) Así, la política social tiene como objetivo, crear las “condiciones que permitan la inclusión de valores individuales en las decisiones colectivas y estas, además deben ser consistentes con el conglomerado de los derechos humanos...que el individuo cuente con el desarrollo pleno de su capacidad para aprovechar esas oportunidades, y al mismo tiempo, tenga la libertad individual de decir qué es lo que más le conviene” (Sobrino Sierra, 2000).

Hasta ahora, los resultados de la implementación de programas de políticas públicas que se focalizan a los grupos más pobres, sin atacar verdaderamente las causas de su pobreza, descuidan otros importantes sectores también golpeados por las crisis económicas y por el modelo neoliberal capitalista. In general, la clase trabajadora y otros elementos de la clase baja, los campesinos, los estratos bajos de la clase media, los participantes pobres en el sector informal, etc., han sido forzados a pagar los costos de la crisis económica de los ochenta y el proceso global de reestructuración capitalista que está teniendo lugar desde los setentas.

El pobre en las sociedades pobres con una economía estancada o decreciente, constituyen un problema de proporciones no manejables, pero no que se imponga por sí mismo con mucha urgencia para la comunidad de las naciones, excepto como una tragedia humana que ruega por una solución de humanitarismo.Las crisis del objeto del capitalismo están más relacionadas con su valor de uso que con el valor de cambio. Existe una relación positiva entre eficiencia económica y generación de la riqueza.

En situaciones de perfecta igualdad y de desigualdad, se minimizan la eficiencia económica. El análisis de Prats (2001) sobre los trabajos de Bardham y Ghatak, deduce que “existe un único grado óptimo de desigualdad que maximiza los beneficios conjuntos, pues el trade-off entre igualdad y eficiencia causa que en situaciones de perfecta igualdad se maximize la utilización del bien de propiedad común pero se minimice la eficiencia conjunta debido a los problemas de congestión y las imperfecciones del mercado y a la inversa para los casos de desigualdad perfecta”.

No olvidemos sin embargo que Aristóteles se refiere explícitamente a la propiedad común de los hijos en la República de Platón, criticando el uso de la palabra "todos" ("los hijos de todos") a la manera que hizo Rousseau al distinguir entre "la volonté de tous" y "la volonté générale"). Aristóteles pensaría que estaba en la esencia humana el ocuparse más de lo propio que de lo común. La palabra *panta*, o nuestra "todos" es, según Aristóteles, un paralogismo, pues decir que algo es de todos significa a veces que es de todos colectivamente y otras veces que es de cada uno. "Soy del pueblo, pueblo soy, y adónde me lleva el pueblo voy", decía la bonita pero manipulativa canción cubana allá por los 60. "El pueblo" al final significa Fidel Castro. una pura metonimia.

Por lo tanto, “demasiada igualdad o desigualdad en la distribución del bien privado o de la renta es mala para la maximización conjunta de beneficios, existiendo, por tanto, un grado óptimo de desigualdad que maximiza la eficiencia de la utilización conjunta de ambos insumos”. Así, la estrategia para lograr una mejor redistribución de la riqueza sea la “que reduzca el tamaño de la clase más rica y de las más (sic) pobres e incremente la clase media afecta al conjunto de participantes de la siguiente manera: (a) mejora la eficiencia en

el caso de los bienes públicos puros; (b) mejora o reduce la eficiencia en el caso de los recursos de propiedad común, dependiendo de si el trasvase acerca o no la distribución de la renta al punto óptimo de la desigualdad".

La política social del Estado para derrotar la pobreza requiere de la participación conjunta del Estado, la sociedad y el sector privado. El alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma. Un mayor problema es dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados (De Swaan Abram, 1997). El acercamiento hacia la política social es consistente con el enfoque Keynesiano a la administración de la macroeconomía dominante en las décadas pasadas.

Las estrategias típicas de la política social se enfocan a las políticas asistenciales, participación ciudadana, formación de capital humano, inversiones en infraestructura física, desarrollo regional, promoción de proyectos productivos y de comercialización, etc., bajo el nuevo paradigma orientado por la revolución científico-tecnológica, la profundización de los procesos de descentralización gubernamental, la impulsión empresarial y el cuidado del medio ambiente.

López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una "propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y social lo permiten y, presionan en su favor." Los principales actores sociales que impulsan este desarrollo regional son el Estado y la sociedad regional. Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica.

El hecho de que los pueblos tengan una alta dotación de capital, no es garantía de que logren su crecimiento económico y desarrollo social. No obstante, la desterritotialización de las fronteras espaciales geográficas de las regiones está concediendo mayor importancia a los agentes y actores del desarrollo. Las responsabilidades del desarrollo regional equilibrado y equitativo se transfiere del Estado a los agentes del desarrollo económico, las organizaciones empresariales y de la sociedad civil.

El Estado no puede renunciar a su función básica de aseguramiento de un conjunto de derechos sociales, ni sustituirla por el combate a un dualismo social y económico, según lo hace la lógica del desarrollo impuesta por el mercado a los agentes económicos como maximizadores de beneficios con bien entendidos intereses económicos. Estos intereses económicos han sido redefinidos del espacio nacional a los espacios locales y regionales por un lado y por otro a los espacios internacionales y global.

Las decisiones que los agentes tomen en función de la información disponible, facilitan la operatividad del mercado. La lógica del libre mercado es el paradigma que centra al individuo como el agente económico que busca en todas sus relaciones la maximización de

sus beneficios. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible.

La retórica del libre mercado ha sido promovida por los ideólogos de la derecha y asimilada y repetida por los de la izquierda, además de que ésta se ha concentrado en denunciar el desmantelamiento de las funciones del Estado. En el mercado de libre competencia, el gran número de compradores y vendedores saben lo que quieren y lo que están dispuestos a pagar por la adquisición de satisfactores, actúan con libertad e independencia para entrar y salir del mercado, la información es libre y accesible sobre precios y productos y los costos de negociación son bajos.

El mercado es un sistema que asigna recursos escasos a usos alternativos mediante decisiones descentralizadas. Desde la perspectiva neoinstitucionalista, (Villareal, 2000) el mercado es "una institución con un marco jurídico de reglas, normas, etc., tanto formales como informales (costumbres, culturas, etc.) que determinan el carácter de las reglas del juego (instituciones) y de los jugadores (organizaciones).

La modelación de los agentes económicos que tienen capacidades de procesamiento de información ilimitada fue criticada por Simon (1955), quien sugirió el término de racionalidad restringida que hace una descripción más realista de la solución de problemas. No obstante, la economía no siempre incorpora los modelos de racionalidad restringida. La delimitación de reglas ayuda a la racionalidad para restringir facultades cognoscitivas. Las creencias o juicios y las elecciones surgen de la racionalidad. El mercado es hegemónico y dictan a la sociedad su ámbito de acción y legitiman sus procesos para privilegiar la libertad individual. Para evitarlo, los derechos sociales deben estar separados del empleo a efecto de garantizar la igualdad social.

Es en este sentido que se puede afirmar que los procesos de globalización no son un fenómeno reciente, sino que llevan ya algunas décadas cuya tendencia es hacia la homogeneización de los procesos económicos mediante el traspaso de las fronteras territoriales y los regímenes políticos de los Estados-nación. La integración económica ha atrapado en complejas redes al Estado-nación, lo presiona y lo vulnera en forma diferente para la desregulación, según el área de la política pública de que se trate. Sin embargo, las complejas redes de ciudadanos pueden influir en la determinación de la política pública de los gobiernos. La política pública puede ser caracterizada como las grandes líneas de acción de una institución pública que tienen objetivos fijos y medios para lograr la satisfacción de necesidades públicas. Las nuevas instituciones deben reflejar no solamente la multiplicidad de los asuntos y problemas de los ciudadanos en el ámbito nacional sino regional y global también.

La integración económica confronta a los sistemas nacionales de regulación no solamente con la creciente competencia internacional de los mercados de bienes y servicios, sino también, con la creciente movilidad de activos financieros y empresas y de ciertos tipos de trabajos altamente calificados. De éstos depende la viabilidad económica de regiones y países (Scharpf, 1997) La competencia internacional deja de tener como referente lo nacional para encuadrarse en lo global, como resultado de una nueva combinación de factores de producción en donde la tecnología y la mano de obra calificada

tienen un papel estratégico y constituyen de por sí ya ventajas competitivas. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado

Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales. La movilidad de los factores de producción que conlleva procesos de innovación con enfoque emprendedor, es una de las características de estos procesos de globalización.

La estrategia consiste en establecer y consolidar un programa de economía del trabajo congruente con la dinámica de la economía empresarial, que sea eficiente económica y socialmente, pero, además, que sea equitativo en los beneficios, remunerador y sobretodo capaz de autosustentarse. Las condiciones regionales para la promoción de las actividades empresariales tienen relación con el fomento a la integración o diversificación de la estructura económica regional y la coordinación interinstitucional de planes, programas y proyectos de impacto regional (Tarapuez Chamorro, 2001)

La característica común de estos procesos de integración económica es la creciente desigualdad del desarrollo de los países y regiones. La naturaleza de la integración regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo. La conclusión de que la primera causa dela extrema desigualdad social y económica en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

Esto deja en claro que la integración social no se da necesariamente con la integración política, porque ambas quedan determinadas a los mecanismos del mercado. En el nuevo modelo global emergente, no son los Estado-nación, sino las organizaciones, principalmente las empresas, las que compiten en los mercados internacionales y para ello cuentan con el apoyo de otras instituciones sociales y los gobiernos, como los principales actores que promueven la globalización de una ideología del consumo.

Los Estados nacionales todavía siguen siendo los principales promotores de los mercados internacionales y también desempeñan el rol importante de protección a los mercados internos. Las instituciones sociales, económicas y políticas determinan las decisiones y procesos del sistema social. Así el sistema capitalista estimula artificialmente las necesidades y deseos para incrementar continuamente el consumo. En la relación Estado-empresas del nuevo modelo global emergente, son las empresas las que tienen primacía. Sin embargo, la preeminencia en la economía por sobre las instituciones de la política y gubernamentales está vulnerando el mismo sistema.

Por tanto, el origen, naturaleza y dinámica de estos procesos de globalización, tienen serias consecuencias de carácter eminentemente político, que subordinan los procesos de

gobernabilidad de los Estado-nación a los procesos de la internacionalización de la economía. Rubio (1998) sostiene que quizás "el impacto político más importante de la era de la información y la globalización sea que los mercados financieros se hayan convertido en factores determinantes en la toma de decisiones de los gobiernos. El hecho tangible es que los gobiernos de todos los países cuentan con un margen de maniobra muy estrecho en la elaboración de políticas públicas. Esto evidentemente constituye una restricción real (y virtualmente absoluta) a la política interna de cada país... la globalización de la economía y de las decisiones en materia de políticas públicas, así como la ubicuidad de la información, constituyen la antítesis de la política, entendiendo a esta como el epítome de la negociación de los intereses en una sociedad".

Así, paradójicamente por su posición política con respecto a los procesos de globalización, las Naciones Unidas no son una instancia de la gobernabilidad internacional. Las Naciones Unidas proporcionan una base muy pobre para el avance democrático hacia una gobernabilidad internacional de los Estados nacionales. Esto es debido a que la gran mayoría son pobres y no tienen la capacidad para conjuntar esfuerzos con las naciones ricas que mantienen un peso desigual de poder que se manifiesta en la toma de decisiones que les favorecen en detrimento de los países pobres.

En la construcción de una democracia global económica, los representantes de los países pobres tienen que ser realistas al igual que los alegatos de los miembros de las organizaciones no gubernamentales. La democracia global otorga prioridad a los intereses económicos particulares por sobre los intereses de la sociedad. Estos intereses económicos han sido redefinidos del espacio nacional a los espacios global, regional y local. La sociedad local y regional adquiere importancia como actor social en la promoción del crecimiento económico y desarrollo más justo y equilibrado entre las mismas regiones.

El sistema global de gobernabilidad de las naciones debe promover procesos más democráticos de toma de decisiones basadas en la participación electoral y dando oportunidad a las expresiones de la pluralidad política. La creación de un gobierno global o el apoderamiento de las Naciones Unidas para moderar los resultados no muy atractivos de la globalización, de acuerdo a los valores contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, es ya un clamor. Lo que se requiere es el establecimiento democrático de un poder político mundial capaz de gobernar los procesos de globalización económica, aunque todavía está muy lejos del Estado mundial o global.

Los procesos de globalización económica, comercial y de los mercados avanzan en función de acuerdos entre Estados y por el crecimiento de las empresas transnacionales. Sin embargo el surgimiento de un Estado global o mundial requiere de instituciones que diriman los conflictos económicos, políticos, sociales y culturales que emerjan entre los diferentes intereses de los grupos corporativos transnacionales. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. El proyecto hegemónico de un gobierno mundial mantiene como estrategia la fragmentación de todo poder que se oponga a sus intereses.

De tal manera debe realizar esto, que proporcione las bases para la legitimación de instituciones del gobierno global y que hagan imperativo la aplicación de las leyes, sin que

existan distinciones por los diferentes niveles de desarrollo económico, social y político de los pueblos. Los Estados nacionales han entrado en un sistema de gobernabilidad internacional común que imponen limitaciones a la aplicación de políticas nacionales, las que a su vez reducen las capacidades del sistema de gobernabilidad nacional. El deterioro de los gobiernos de los Estado-nación para resolver los problemas y conflictos de la globalización es lo que hace pensar en el surgimiento de un gobierno global, no obstante, el control geoeconómico y geopolítico de las regiones del mundo por sus recursos más que como guerras de civilizaciones. La tendencia de los conflictos bélicos apunta a efectuarse más entre los diferentes grupos corporativos con intereses específicos en la globalización, más entre los estados-nación. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

Las nuevas formas del orden económico son orientadas por un mercado despolitizado, en el cual la información es virtualmente perfecta. Así, la política pasa a despolitizarse para centrarse en cada ciudadano en prácticas directas de democracia, reducidas a simples acciones y elecciones individuales. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. No obstante, el sistema capitalista muestra una tendencia latente hacia el autoritarismo, al resolverse a favor de los derechos del individuo más que en los derechos de la comunidad.

La democracia se sustenta en el reclamo moral que considera el valor y la igualdad de los individuos bajo el principio de una persona un voto. En la noción de democracia económica el principio se adecua a un dólar un voto. La desaparición de los controles políticos en la sociedad globalizada contribuye a ampliar las bases de una mayor pluralidad, apertura democrática y liberalización de ideologías nacionalistas.

Una sociedad global abierta corregirá las deficiencias del sistema capitalista (Soros, 1998), del que sobre vivencia depende de la satisfacción de necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. La sociedad global capitalista no deja de ser un mero mito. La sociedad global espera que las corporaciones persigan los modos tradicionales de eficiencia. La sociedad global capitalista no es más que una mera abstracción ideológicamente construida. El principio democrático en que se fundamenta una sociedad basada en el mercado es incompatible con el principio de organización sobre el que debe fundamentarse el modelo de sociedad global.

Algunos de los efectos de esta liberalización política son la destrucción de las viejas estructuras autoritarias monopolizadoras de la información y la misma internacionalización de las decisiones políticas que explica en gran parte el comportamiento de las instituciones políticas internas del Estado-nación. Según un informe de Freedom House en 1999, la tendencia hacia la apertura democrática está aumentando hasta alcanzar en la actualidad que tres quintas partes de la población mundial vivan bajo sistemas democráticos y 120 países sean manejados por gobiernos democráticamente electos.

Las instituciones del Estado-nación tienen que ser entendidas en el marco de las instituciones internacionales y supranacionales que señalan el rumbo de globalización. No obstante, las instituciones internacionales sólo rinden cuentas y son responsables de sus acciones ante ciertos Estados nacionales, los más fuertes y poderosos, ante quienes son débiles. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Si las instituciones internacionales deben ser legítimas, tanto sus actividades como sus resultados necesitan ajustarse a los principios y prácticas democráticas. Ninguna institución internacional que opere en el ámbito global tiene la autoridad que tiene un Estado.

Una forma de entender los problemas que generan la falta de prácticas democráticas de las instituciones internacionales es considerarlas con el mismo tratamiento que las instituciones nacionales, bajo la perspectiva que se ha denominado como la "analogía doméstica" por Bull (1977). Resulta impropio adoptar la "analogía doméstica" cuando se carecen de espacios para el debate y la discusión entre las personas o público, ya de por sí difícil de determinar. Además de que también se carece de instituciones que funcionen como intermediarios entre el público y los cuerpos de gobierno. De esta forma, las instituciones internacionales pueden ser más transparentes, rendir cuentas y salvar el déficit democrático, que ha dado lugar a que se les caracterice como instituciones que promueven una democracia delegativa o limitada.

Las instituciones surgidas del Estado-nación han perdido capacidades para enfrentar los retos de un mundo en procesos de globalización económica. Si bien los procesos de globalización están modificando las funciones y capacidades de los Estado-nación, éstos a su vez están transformando el ambiente global mediante la internacionalización de las instituciones. La globalización económica, comercial y de los mercados es resultados de los acuerdos entre los Estados y del crecimiento de las empresas transnacionales. La creación de instituciones supranacionales para controlar los procesos de globalización económica fortalece los procesos internos de bloques económicos formado por varias naciones con el objetivo de obtener un mejor posicionamiento en los mercados internacionales. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula. Los Estados nacionales todavía juegan un papel importante en la promoción y conquista de los mercados externos así como en la protección de los mercados internos.

Aunque los procesos económicos transnacionales se diferencian significativamente de la dualidad nacional/global que se presupone en los análisis de la economía global, resulta ser conveniente descomponer al Estado-nación en una variedad de elementos significativos para el análisis de las actividades económicas internacionales y las capacidades regulatorias. La economía global es algo que no necesariamente sobre cubre o existe por encima del Estado-nación, sino que está en contacto directo y muchas veces sus relaciones son estrechas. Esto en función del dinamismo de la convergencia de fuerzas geográficas, tecnológicas, económicas, sociales, políticas, culturales y cognitivas, que presiona el equilibrio existente y lo modifican, provocando grandes saltos en el establecimiento de un proyecto de gestión global.

Sassen (1995) sostiene que se están dando cambios en la "práctica del control global" en donde el trabajo de producción y reproducción de la organización y la administración de un sistema de producción global y un mercado global para las finanzas, ambos bajo condiciones de concentración económica. La estrategia de reproducción del sistema capitalista es dual en donde los actores hacen y no hacen sucesiva e interrumpidamente algo (Barel, 1989). Al respecto, Ramos (2001) concluye que las respuestas adaptativas de los actores sociales atrapados en las redes de poder, consisten en apostar por estrategias dobles que permiten construir contraintuitivas identidades paradójicas, con lo cual los actores logran reproducir las redes, consolidarse y "enjaularse" e "incapacitándose para romper la lógica perversa que la anima".

La expansión del actual sistema de producción capitalista requiere gente que consuma en forma creciente y continua. Con respecto a los mercados financieros, la globalización se refiere a la rapidez que tienen la implementación de las decisiones en las transacciones financieras a través de las fronteras nacionales.

El control y la administración centralizada sobre un conjunto de plantas, oficinas, locales de ventas y servicios dispersos geográficamente que requieren el desarrollo de un rango amplio de servicios especializados y de las funciones de alta dirección para controlar y administrar, constituyen parte de los elementos de un sistema mundial. Este sistema mundial es acentuado por la importancia del capitalismo en los procesos de globalización.

Así, la globalización de la actividad económica está elevando la escala y la complejidad de las transacciones y por lo tanto acrecentando la demanda de funciones de alta dirección multinacional y de servicios corporativos avanzados.

La crisis de la gobernabilidad internacional.

Las organizaciones internacionales han seguido un proceso dual para ignorar o para impulsar los nuevos vehículos del movimiento globalizado. Las organizaciones internacionales organizan coaliciones de personas, organizaciones, empresas y grupos que los apoyen buscando su propio beneficio, aunque muchas de las veces son coaliciones muy débiles debido a que sus acciones son débiles o porque son organizaciones que fácilmente pueden burlar los políticos. Mientras que por otro lado usan su poder para desmantelar los mecanismos de control establecidos por el Estado-nación (Stella, 1999) Quizás los procesos de democratización del Estado-nación contagien a las organizaciones internacionales en los procesos de toma de decisiones. Estas decisiones ahora son realizadas por grupos tecnocráticos-burocráticos con marcados intereses hegemónicos, psicológica y políticamente lejos de los ciudadanos, ante quienes no tienen ninguna responsabilidad ni necesidad de rendir cuentas.

El avance del poder corporativo transnacional en los procesos de globalización capitalista que subordina los intereses nacionales, corroe las estructuras de las instituciones económicas, políticas y sociales del Estado-nación y debilitan las funciones que tenían asignadas para la conducción, cohesión y dominación, las mismas que antes fueron esenciales para la obtención de sus propios fines. Más que las diferencias entre las naciones, las guerras y actos de terrorismo son el resultado de las diferencias que existen

por intereses en él desarrollo de áreas estratégicas de las diferentes facciones del corporativismo financiero y económico internacional.

Los verdaderos agentes protagonistas del desarrollo es el capitalismo corporativo financiero. Las organizaciones internacionales y otros actores están rebasando al Estado-nación en detrimento de sus funciones y soberanía. El Estado nación ya no representa el papel de ser el actor económico y político de los intereses del poder corporativo capitalista transnacional, ni tampoco garantiza la salvaguardia de estos intereses. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Por el contrario, se ha convertido en el mayor de los obstáculos para su avance.

Pero también muchos de los esfuerzos de globalización se han estrellado bajo el peso de una coordinación de necesidades no satisfechas, desde la quiebra del sistema de Bretton Woods, el cual produjo un vacío de gobernabilidad internacional rápidamente ocupado por los mercados financieros y las organizaciones transnacionales y multinacionales. Las instituciones y agencias supranacionales creadas y sostenidas por los países ricos tratan de establecer una gobernabilidad internacional, pero solamente responden a los intereses de quienes las apoyan y ante quienes rinden cuentas y son responsables, nunca ante los países pobres.

Para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas electoral a escala interestatal, es necesario establecer el control del Estado a través de cadenas de delegación, incrementar la rendición de cuentas democrática mediante el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas locales e incrementar el control legislativo sobre las políticas en el ámbito supranacional (Keohane y Nye, 2000).

Sin embargo, estos no son los únicos elementos, porque existen también algunas dimensiones no-electorales de la rendición de cuentas. Entre estas dimensiones se pueden mencionar tales como el espacio público como un conjunto identificable de temas dentro de un medio ambiente comunicativo en donde las personas hablan en forma comprensible, las normas profesionales y las redes internacionales, de las cuales los estándares internacionales pueden ser identificables y usados para pedir la rendición de cuentas a los adversarios. Igualmente la desigualdad en los votos que tienen las personas en los mercados competitivos dependiendo de su riqueza. Los mecanismos de la gobernabilidad existen, sólo que no están integrados en un sistema coherente formado con componentes que se refuerzan unos a otros

Al menos, en la gobernabilidad internacional, la rendición de cuentas (public accountability) y la legitimidad son indirectas porque responden a compromisos entre los oficiales de las agencias y los oficiales del gobierno del Estado nacional, los que a su vez responden a los representantes locales. Las elites gobernantes de los países menos desarrollados generalmente han servido de intermediarias entre el poder externo dominante y la población local. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder.

Cuando se piensa en la legitimidad es importante separar los insumos y los productos de un gobierno democrático. La rendición de cuentas no es tan perfecta cuando las elites gobernantes manipulan a los públicos ya sea mediante el control de la agenda, el gasto de campañas, etc. (Keohane y Nye, 2000) La competencia de las elites asegura a largo plazo que los gobiernos no pueden oponerse a la voluntad fuerte de la mayoría. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas son preferidas a aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible.

La legitimidad democrática de los Estados nación son el fundamento básico de la efectividad de las agencias supranacionales, consideradas como un tipo de organizaciones quasi-políticas. Lo importante es el empleo de las fuentes normativas y sustantivas de legitimidad. Sus acuerdos legitiman también sus propias políticas, a pesar de que su rendición de cuentas y su legitimidad con respecto a los Estados nacionales es indirecta, ya que los consejos y asambleas de las agencias internacionales están formados por representantes de los gobiernos nacionales. La legitimidad en las agencias internacionales depende de la efectividad de sus procesos y de la rendición de cuentas, la cual no necesariamente debe realizarse exclusivamente a través de los canales de la delegación de los gobiernos nacionalmente electos.

La rendición de cuentas y la responsabilidad de los gobernantes de los Estados nacionales a su ciudadanía, depende en mucho de sus actitudes democráticas. Las sanciones son el corolario usual de la responsabilidad. La ciudadanía efectiva se puede lograr mediante la estrategia de la democracia mediante la cual se determinan las relaciones de colaboración de los ciudadanos entre sí y con relación al Estado mismo. El mecanismo de rendición de cuentas es necesario para alcanzar la legitimidad de las decisiones del sistema político. Cualquier forma que tome este mecanismo de rendición de cuentas, la transparencia de las acciones es crucial para asegurar una correcta rendición de cuentas.

En realidad, puede afirmarse que las grandes corporaciones están sustituyendo la gobernabilidad que están perdiendo los Estado-nación y organismos multilaterales. Esta gobernabilidad global no es democrática ni tampoco efectiva porque es ejercitada por un grupo minoritario cuyos intereses económicos y financieros se multiplican a escala mundial. Estos intereses económicos se han redefinido del espacio nacional a los espacios local, regional e internacional.

Los mecanismos de gobernabilidad global existentes perpetúan las formas de dependencia y explotación de los países subdesarrollados por los países más desarrollados. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas son preferidas a aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible. Estos mecanismos de gobernabilidad existentes en la actualidad, difícilmente pueden contribuir a lograr un crecimiento económico, desarrollo y cohesión social mediante el aprovechamiento de oportunidades y eliminación de riesgos. ". Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. Para Giddens (1999:36) los riesgos son "la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza."

Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. Los resultados de una mala gobernabilidad global se muestran en los efectos negativos que están causando la degradación ambiental, el incremento de la violencia y actos de terrorismo, consumo de drogas y estupefacientes, limpieza étnica, aumento de los flujos migratorios, etc.

Los organismos internacionales existentes reorientan sus funciones y se crean otros para la gestión y la gobernabilidad transnacional. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia. Sin embargo, la misma Organización de las Naciones Unidas no tienen ejercicio democrático de gobernabilidad internacional. En sustitución de este sistema de gobernabilidad interestatal se piensa en un sistema de gobernabilidad que esté centrado en el Estado.

Es decir, ya que la tesis de la gobernabilidad global tendría muchos obstáculos para establecerse, la gobernabilidad internacional tiene que surgir a partir de los mismo Estados-nación. Los regímenes internacionales tienden a estar más orientados hacia los asuntos políticos que al tratamiento tecnocrático, aunque se requiere que estén más vinculados a las instituciones locales legítimas, las cuales tienen como reto asumir nuevas funciones para interevenir en las actividades económicas. La gobernabilidad internacional necesita de la fortaleza democrática de los Estados nacionales. Las prácticas de la democracia de los Estados nación son importantes para extender la gobernabilidad internacional mediante una legitimidad ampliada de las instituciones.

En las últimas dos décadas, más de 100 países cambiaron de regímenes autoritarios a regímenes democráticos, y a pesar de que hoy los pueblos viven más en la democracia, no obstante, el sistema económico sólo ha contribuido a aumentar la pobreza y la desigualdad, cuestionando el verdadero avance de las libertades civiles y reduciendo el significado de la democracia. Sin embargo, muchos de estos Estados nacionales no son democráticos o su sistema democrático es imperfecto, otros son pobres, con niveles altos de desigualdad social, injusticias, o bien no cuentan con las instituciones apropiadas que garanticen las bases para el establecimiento de la gobernabilidad nacional y para la extensión a la gobernabilidad internacional. Estos sistemas democráticos imperfectos no garantizan el desarrollo de las competencias, derechos y libertades tanto individuales como sociales.

Los gobiernos de los Estado-nación enfrentan muchos problemas en la administración de sus políticas económicas y los sistemas basados en economías de mercado tienen muchos problemas y muchas debilidades, las que empujan mas cambios sobre el cambiante medioambiente global. Sin embargo, a pesar de que el papel de la administración en la economía se ha reducido, su rol como custodio de la cohesión social y el interés general tendrá que expandirse en un mundo dominado por la actitud de certeza de estar bien, razón por la que es necesario reconstruir los fundamentos para encarar los nuevos retos de desempeño y solidaridad que se demandan en el nuevo siglo.

Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.También la solidaridad necesita ser globalizada para contrarrestar los efectos negativos de los actuales procesos de globalización económica.

La institucionalización de los indicadores de gobernabilidad global debe señalar las fortalezas y debilidades que los diferentes Estados-nación muestran en la democratización de procesos de decisiones económico-sociales. Varios procesos de institucionalización efectuados en las décadas de los ochenta y los noventa del siglo pasado, fueron disfuncionales y desestructurados entre la política y la economía, dando lugar a crisis económicas y políticas. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. In general, la clase trabajadora y otros elementos de la clase baja, los campesinos, los estratos bajos de la clase media, los participantes pobres en el sector informal, etc., han sido forzados a pagar los costos de la crisis económica de los ochenta y el proceso global de reestructuración capitalista que está teniendo lugar desde los setentas.

La crisis política es la determinante de la crisis económica, si se considera que los procesos de globalización comercial y financiera son fenómenos que deben escapar al control político. De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones democráticas cuyo poder se asegura mediante el "enjaulamiento" de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder. La legitimación de las acciones y la supremacía de la ley para dirimir conflictos socio-políticos y económicos, y, además, recomendar cuando sea procedente en función de respeto a la soberanía, que estos principios sean incorporados en el diseño de la arquitectura estructural de los gobiernos.

Por lo tanto, existe una doble crisis, la crisis de lo político y la crisis del Estado en las democracias institucionalizadas. En la crisis de lo político, la crisis del Estado de Bienestar no incide necesariamente en la crisis de la democracia. La crisis de lo político es caracterizada por Ramos (1994) por débiles implicaciones políticas subjetivas, escasos sentimientos de competencia, relevancia de las actitudes desconfiadas y cínicas hacia los políticos, así como una muy baja identificación partidista (Del Alamo, 2001). Obviamente, el diseño de las estructuras de gobernabilidad permite mayor transparencia en la solución de los conflictos sociales, económicos y políticos.

Los mismos organismos financieros multilaterales, tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, están preocupados por el crecimiento de la pobreza en los últimos años. Reconocen que el crecimiento económico no sólo genera una mejora en la distribución del ingreso, sino que también aumenta la desigualdad. La noción de crecimiento económico implica el uso de indicadores cuantitativos, tales como el producto interno bruto (PIB) per cápita y el consumo real promedio.

Diferentes estudios muestran una relación positiva entre distribución de la riqueza y crecimiento económico. El ingreso per cápita es afectado por la cohesión social (Knack y Keefer). Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la

gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Una apreciación más equilibrada del avance globalizado es reconocer que mientras está agravando la pobreza en algunos sectores sociales, en otros está disminuyéndola. No obstante, la severidad y niveles de desigualdad que el capitalismo globalizador está generando es injusta y la tendencia es hacia el agravamiento. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. La conclusión de que la primera causa dela extrema desigualdad social y económica en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo. Sin embargo, el capitalismo globalizador se encuentra amenazado por una espiral descendente de declinación económica después de la implosión del mundo comunista.

Todavía más, el capitalismo no es ecológicamente sustentable, como puede inferirse de las evidencias existentes. No obstante, otros investigadores como Lindert and Williamson (2001) defienden a la globalización como la causa principal de las crecientes desigualdades y culpan a los gobiernos antidemocráticos y con deficientes sistemas de gobernabilidad y administración pública. Por esta y otras razones, la administración pública está en un proceso de reforma dado el contexto de los procesos de globalización. Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma.

En este contexto de economía ultraliberal que domina el mundo, la administración pública sufre de disolución moral la cual parece iniciar con los líderes políticos. La racionalidad mercantil y la rivalidad partisana son dos factores que enfatizan el déficit ético en la administración pública. A pesar de que la administración de finales del siglo XX obscurece la del siglo XXI, las ciencias administrativas enfrentan la tarea de forjar una nueva administración en las sociedades que se encuentran en crisis de dirección, lo cual debilita las percepciones colectivas, exacerba el individualismo y la introversión y erosiona los fundamentos morales de la vida comunitaria. Estas tendencias muestran una inclinación del sistema capitalista hacia el autoritarismo al declararse en defensa de los derechos individuales por sobre los derechos colectivos.

Cierto grado de banalidad partisana está siendo la regla en las administraciones, de tal forma que una carrera administrativa depende de ser más partisano que de la competencia, parece moralmente inaceptable y en cualquier caso contrario a la ética administrativa, principalmente en países con status de servicio público combinado con un código de ética. La administración actúa como un juez que asegura el cumplimiento con los valores que forman la ética administrativa y que dan sustancia al servicio público. La administración actúa como un juez que asegura el cumplimiento con los valores que forman la ética administrativa y que dan sustancia al servicio público.

La reestructuración de la ética administrativa puede ser exitosa solamente si la exaltación de tales valores se acompaña con la reafirmación del principio de responsabilidad. Las sanciones son el corolario usual de la responsabilidad. En cualquier caso, no tendrán que ser asimilados por cada servidor público contra un criterio contra el cual juzgar su conducta en pena de sufrir las consecuencias de cualquier situación. La administración actúa como un juez que asegura el cumplimiento con los valores que forman la ética administrativa y que dan sustancia al servicio público. El privilegio de compartir parte de la autoridad del Estado y el prestigio de su posición debe acompañarse por un sentido de obligación y una conciencia de la importancia de su función y las expectativas de los usuarios.

Este neocapitalismo genera fuertes tensiones económicas, políticas y sociales. Su tendencia es al ejercicio de un autoritarismo. Responsabilizan a "los malos gobiernos, con falta de transparencia, corrupción y crimen" como el principal impedimento para el desarrollo y la reducción de la pobreza, y no a los desastrosos resultados de las políticas económicas y sociales derivadas de la implantación de los procesos de globalización. (Delgado, 1999) En parte es cierto que los gobiernos corruptos tienen más dificultades para atraer capital y para mantenerla confianza de los inversionistas extranjeros, Sin embargo, lo que se requiere con urgencia es la implementación de políticas redistributivas del ingreso y de generación de oportunidades que estimulen la participación de los marginados en las actividades económicas, políticas y sociales.

Desdichadamente, los gobiernos de los Estado-nación han perdido funciones y capacidades para superar muchos de estos problemas. Resulta contradictoria la acción de estos organismos multilaterales que teóricamente apoyan las instituciones y los procesos democráticos pero en la práctica los debilitan imponiendo sus políticas mediante procesos de negociación. La solución a un problema que aqueja a toda la "villa global" tiene que partir de un sistema de gobernabilidad internacional, como por ejemplo, de las Naciones Unidas.

Es más, una economía global de alta velocidad como la actual puede confrontar a los países con amenazas emergentes y no esperadas que requieren respuestas creativas y no convencionales para sortear las crisis emergentes. Las recientes crisis financieras de varios países orientales en desarrollo claramente muestran que los procesos de globalización económica son un arma de doble filo, y no solamente para las naciones que no están preparadas para competir en los mercados internacionales. Como resultado de la crisis de la deuda experimentada por los países tales como México, Bolivia y Argentina durante los ochentas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras agencias de préstamos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, impusieron políticas de ajuste estructural de libre mercado en los gobiernos latinoamericanos a fin de asegurar que dedicaran suficientes fondos a pagar la deuda internacional.

Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales. La promoción de los mercados exteriores y la protección de los mercados internos son dos importantes funciones que realiza todavía los Estados nacionales. Muchos de los componentes de la globalización

económica no fortalecen el sistema de gobernabilidad interestatal y gestión global de las crisis financieras, pero si debilitan los sistemas de gobernabilidad del Estado-nación.

Por lo mismo, esta economía global representa ciertos riesgos para la estabilidad económica y financiera de las entidades organizacionales y de las naciones mismas con más altos niveles de vulnerabilidad. Las alternativas son claras: o establecer mecanismos de gobernabilidad global y gestión internacional de las crisis financieras o dejar la responsabilidad de la gobernabilidad y de protección a cada Estado-nación de acuerdo a sus propias características.

Sin embargo, Sassen (1995) argumenta que la globalización ha transformado el significado y los lugares de la gobernabilidad de las economías. La declinación significativa del Estado en la economía global es una proposición demasiado enfatizada por la hipermovilidad del capital y una menor movilidad de la mano de obra, así como de antecedentes conceptuales que establecen una relación mutuamente exclusiva entre lo global y lo nacional. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado. A pesar de la alta movilidad del capital, la baja o nula movilidad de la mano de obra y la baja productividad son las principales causas de la pobreza.

Las capacidades del Estado en materia económica se han visto reducidas. El Estado en sí mismo, ha sido transformado por su participación en el diseño e implementación del sistema económico global. Incluso en las industrias más globales e hipermovibles, tales como finanzas y el avance de los servicios corporativos, se encuentran finalmente involucradas en una red global de conexiones y sitios, en los cuales se presentan grandes concentraciones de facilidades materiales y procesos de trabajo estratégicos para la hipermovilidad del capital.

Los gobiernos se encuentran cada vez limitados para la formulación e implementación de su política económica, las cuales tienen que ser conciliadas mediante procesos democráticos para ajustarse a los lineamientos imperativos de las fuerzas globalizadoras del modelo capitalista. De acuerdo con uno de sus teóricos, Novak, (1984) este modelo de capitalismo democrático constituye una realidad compleja y dinámica de convivencia de una economía de mercado basada en incentivos y normas prácticas y orientada a la satisfacción de las necesidades Por lo tanto, su tendencia latente es al ejercicio de un autoritarismo.

Una política que respeta los derechos individuales y promueve la participación democrática de las personas para su desarrollo propio y de conformidad con dignidad y su reto, y un sistema de institucionalización de la cultura que se inspira en los ideales de justicia y libertad para los individuos. A pesar de la supuesta correspondencia entre las leyes del libre mercado y los principios de la democracia, lo que se demuestra en la realidad es una incompatibilidad. La tendencia latente del capitalismo es hacia el ejercicio autoritario, al exacerbar los derechos individuales por sobre los derechos de la comunidad.

Sin embargo, a pesar de las proposiciones del papel declinante del Estado, todavía se requiere de la gobernabilidad y del desempeño de las funciones del Estado-nación. El

Estado nacional democrático, como la institución originaria del orden constitucional, tiene un importante papel en la formulación y el mantenimiento de la división del trabajo de la gobernabilidad entre los diferentes niveles, internacional, regional, nacional y local. El Estado nación es la fuente original de la gobernabilidad y la democracia y representa por lo tanto, el cuerpo político del complejo sistema de gobernabilidad porque tiene la capacidad de legitimar a las agencias supranacionales y, además, tiene la capacidad soberana para distribuir el poder dentro de su territorio nacional dando lugar a la gobernabilidad interna.

Esto se hace necesario en una economía de espacio que revela la necesidad de los lugares situados en territorios nacionales que son estratégicos por su concentración de recursos e infraestructura, los cuales son menos movibles que lo que la economía global sugiere. El espacio nacional se delimita por un territorio marcado por fronteras físicas y geográficas en donde tienen ocurrencia ciertos fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales.

La determinación de las unidades de espacios nacionales también delimitan los espacios de soberanía. Es en el espacio del Estado-nación donde surgen los fenómenos geopolíticos y al avanzar en los niveles espaciales internacional y global adquiere relevancia los fenómenos geopolíticos. Sin la existencia del espacio territorial nacional difícilmente puede ocurrir los procesos de globalización. Las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales promueven el espacio de la economía del mercado por sobre el espacio del Estado y lo supeditan.

Por lo tanto, surge la urgente necesidad de acondicionar el entorno nacional. Por ejemplo, una desregulación selectiva en vez de una desregulación total en todas las áreas puede significar que el Estado mantiene la gobernabilidad. Por lo tanto, las descripciones sobre la declinación de las capacidades de gobernabilidad y rendición de cuentas de los Estados-nación son parciales. A escala internacional, el problema d la rendición de cuentas de la gobernabilidad se debe a una desarticulación de mecanismos existentes para la rendición de cuentas.

Después de todo, el Estado permanece como el último garantizador de los derechos del capital global. Quizá nunca como ahora, las funciones de los gobiernos de los Estado-nación han sido tan importantes por la trascendencia de las instituciones para mantener la estabilidad macroeconómica, política y social, que los procesos de globalización económica requieren. Los mecanismos gubernamentales son necesarios para la persecución de ciertos fines que los mecanismos del mercado no pueden lograr. Así, el Estado nación es el organismo político central en el complejo sistema de gobernabilidad porque otorga legitimidad a las agencias supranacionales y distribuye el poder hacia el interior. Pero es urgente reemplazar las viejas y obsoletas instituciones.

La emergente gobernabilidad transnacional.

El cambio económico conlleva al cambio político. Este componente político está orientado por la primacía que adquieren los fenómenos económicos por sobre los políticos, contrariamente al sistema tradicionalista en el cual las decisiones en materia económica siempre estaban determinadas por las políticas. Ahora, en el supuesto de que las políticas

nacionales generen la diversidad capitalista, la globalización de los procesos económicos interactúan con los sistemas de gobernabilidad de las economías de los Estado-nación. Podemos señalar que el reto principal de la gobernabilidad encontrar el equilibrio correcto entre las políticas nacionales y las aspiraciones globales de una ciudadanía extensiva que busca el acceso al poder.

La tendencia nuestra que el poder se está modificando para pasar de los tomadores de decisiones elegidos a los tomadores de decisiones que son electores en donde los poderes público y privado compiten en un modelo de "desorden durable" (Cerny, 1998). Los tomadores de decisiones que están involucrados en programas de reestructuración en gran escala de los diferentes sectores económicos que son sensibles a la política, tienen pocas alternativas para la implementación de sus programas.

Las fuerzas geoeconómicas y geopolíticas prevalecientes en la actualidad están creando un nuevo orden mundial uniendo a los Estados-Naciones vecinos que habían estado separados por mucho tiempo. El nuevo orden económico mundial se centra en estrategias de desarrollo que buscan la modernización del Estado mediante la descentralización de funciones y la eliminación de la política social. La estrategia de modernización neoliberal se ha absolutizado bajo un dogma ortodoxo que no distingue diferencias de desarrollo entre los Estados nacionales.

La modernización neoliberal separa a la subjetividad, la considera un proceso autónomo e inconexo que genera tensiones cuando de acuerdo con Lechner (2000), ambos fenómenos son complementarios y es necesario relacionarlos, ya sea en forma espontánea conforme a la apuesta del liberalismo decimonónico o establecida por el Estado conforme al modelo socialdemócrata. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). Este nuevo orden global impone su modelo para integrar a todos los Estados-nación del mundo bajo un pensamiento único guiado por las leyes del mercado, aunque todavía resulta ser una utopía la creación del Estado mundial.

No obstante, el surgimiento de un Estado global o mundial requiere de instituciones económicas, políticas, sociales, judiciales, etc. para dirimir los diferentes conflictos que surjan entre los diferentes grupos económicos corporativos transnacionales. Más bien parece que el mundo se fragmenta más que tienda a unificarse, como consecuencia de la aplicación de la realidad de ese pensamiento único.

Esta ideología del pensamiento único, que solo acepta una política económica única con base en los principios de la doctrina económica neoliberal y de libre mercado, es la única capaz de ordenar a la sociedad para alcanzar mayores niveles de bienestar humano. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. Los ideólogos de la derecha han promovido la retórica del libre mercado, la cual ha sido asimilada y repetida también por la izquierda, la cual además se ha concentrado en la denuncia del desmantelamiento de las funciones del Estado. La sociedad local y regional como actor social que promueve el crecimiento económico y el desarrollo social adquiere relevancia.

El desarrollo social tiene que estar apuntalado en programas de desarrollo humano que promuevan la formación de capital humano y social y que faciliten las oportunidades de acceso a los bienes y recursos sociales, a efecto de elevar los niveles de calidad de vida y de bienestar de la sociedad. Las instituciones económicas, sociales y políticas determinan las interacciones sociales y políticas que influyen en la calidad del desarrollo humano y social.

Habrá que considerar aquí que el desarrollo de una sociedad que pretende ser más humana, no está en función de que sus ciudadanos tengan más, sino en de que tengan más posibilidades de adquirir competencias y habilidades para ser más. Para mejorar los niveles de calidad de vida de una sociedad, para alcanzar una sociedad satisfecha y sin asimetrías pronunciadas, se requiere de mecanismos institucionales de gobernabilidad que asignen en forma equitativa los recursos y bienes sociales.

Este nuevo orden mundial genera tensiones entre las posibilidades crecientes que tienen las sociedades de participar en los beneficios y la creciente desigualdad estructural mundial de las sociedades que no pueden tener el acceso adecuado a los procesos de globalización. El nuevo orden económico mundial se centra en estrategias de desarrollo orientadas a la modernización del Estado mediante la descentralización de sus funciones y la eliminación de su política social.

Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva. Efectivamente, los procesos de descentralización impulsados por el sistema capitalista son inherentes a su propio desarrollo en las circunstancias actuales de trasnacionalización de la economía y los mercados en donde el Estado nación, que una vez fue funcional para su expansionismo, ahora es el principal estorbo.

Por otro lado, las divisiones geoeconómicas y geopolíticas del globo, complican los procesos de globalización y ponen en competencia a los Estados-naciones para conseguir los mejores beneficios, como por ejemplo, la instalación de plantas industriales y empresas multinacionales y transnacionales en sus territorios. Al decir de Patras (2001d) la competencia "en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados". Las empresas multinacionales son empresas glocalizadoras que buscan replicar sus productos en bases regionales. Las empresas globalizadoras que tienen una estrategia de división del trabajo intrafirma en el ámbito mundial, son denominadas empresas transnacionales (Reich, 1998).

De forma aparente, se ha vuelto un fenómeno inherentemente más complejo el manejo de las interdependencias entre las naciones que simplemente manejar las actividades de una sola nación en donde los regímenes de gobernabilidad económica también varían en las diferentes regionales subnacionales dando como resultado algunas reacciones en la definición de las identidades locales frente a los procesos de globalización. La expresión de los intereses comunes de los individuos se expresan en su identidad a través de medios espaciales locales, nacionales, regionales e internacionales.

Las identidades nacionales entran en crisis, debilitadas desde arriba por estructuras transnacionales que imponen valores, símbolos, etc., y desde abajo por la irrupción de

expresiones localistas. Así, progresivamente se separan los aspectos políticos, sociales y culturales del sistema económico y definen las identidades colectivas de los pueblos. Los procesos de la individualización enfatizan la presencia del individuo por sobre lo colectivo, escindiendo en forma nominalista entre el individuo y la sociedad, mediante el debilitamiento de los referentes materiales y simbólicos de las identidades colectivas. Lo que resulta es un proceso sobrepuesto entre una economía que tiene grandes avances en los procesos de globalización y una política que mientras busca su legitimación local, se rezaga de la economía.

La gobernabilidad se está convirtiendo en un fenómeno complejo en el que los Estados nacionales están siendo desplazados por el poder de las agencias públicas y privadas supranacionales, y, además, tienen que compartir el poder con los gobiernos locales y con organizaciones no gubernamentales. La gobernabilidad debe garantizar la coordinación necesaria de las instituciones y organismos públicos y privados en todos los niveles: local, nacional, regional e internacional.

Las prácticas de coordinación propia y las relaciones de complementariedad de las instituciones contribuyen a lograr los consensos de un conjunto de reglas entre los diferentes agentes y actores involucrados que dan lugar a diferentes configuraciones organizacionales, así como a la emergencia de nuevas formas de auto-coordinación. Existen diferencias entre la gobernabilidad de las organizaciones que persiguen fines de lucro y la gobernabilidad de organizaciones no gubernamentales. En esta última, la gobernabilidad de los procesos es menos clara para determinarse, como puede apreciarse en el siguiente cuadro.

Características de la gobernabilidad de negocios y de organizaciones sin fines de lucro.

NEGOCIOS CON FINES DE LUCRO.		**ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES CON FINES DE LUCRO.**
Capitalización del crecimiento del mercado a través de productos y servicios.	**MISIÓN**	Entrega de servicios a las comunidades clave.
Desempeño financiero.	**MEDIDA**	Desempeño financiero balanceado con otras medidas.
El Director General es sólo jefe.	**LIDERAZGO**	El director general reporta a la base no ejecutiva.
Pequeño. Comité ejecutivo relativamente limitado en amplitud de visión.	**COMPOSICIÓN DEL CONSEJO**	Largo. El comité ejecutivo es vital pero puede salirse del control. El comité nominativo está

El comité nominativo es relativamente inactivo. No hay comité de operaciones.		trabajando constantemente. El comité de operaciones es esencial.
Perfiles predichos, con frecuencia profesionales de negocios con experiencia. Funciones predecibles. Horas predecibles Servicio duradero. Altamente pagado.	**MIEMBROS DEL CONSEJO**	Perfiles diversos con frecuencia incorporan a los donadores financieros potenciales. Roles diversos. Horas antisociales. Alta rotación. Se esperan que donen.

Adaptado de Macfarlán (1999)

A escala nacional, la gobernabilidad trata de las relaciones entre el Estado y los gobernados, así como también entre los miembros de una sociedad nacional particular, ya sean individuos, organizaciones u otras entidades, a través de arreglos institucionales y procesos aceptables que fortalezcan la cohesión social y disminuyan los conflictos entre las diferentes partes. . Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. El espacio nacional es más cohesivo y homogéneo que el espacio internacional y global. Por definición, la sociedad se restringe al espacio nacional, y es en este espacio donde se delimitan las unidades de espacio de soberanía. Es en este espacio territorial nacional donde se contiene a la sociedad.

Esto es debido a que puede expresarse porque existe una fuerte correlación entre la cohesión social y el PIB per cápita. La globalización está orillando a los individuos a buscar formas de organización para la acción política a fin de influir en la formulación de las políticas y las decisiones públicas y a establecer contactos más estrechos con el gobierno. Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política. Las precondiciones sociales o económicas, las tradiciones culturales y los eventos repentinos importan pero no influyen mecánicamente en la acción política.

La explicación de la acción política en un contexto institucional es diferente de explicar el cambio institucional en períodos largos de tiempo. Puede argumentarse que los cambios institucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables. En el último caso, la historia y la cultura política, entendida como los supuestos básicos del mundo de la política, las cuales restringen el rango de alternativas disponibles, tienen que ser sistemáticamente integradas como factores, los cuales entre otros, dan forma a la manera en que los actores políticos perciben las situaciones de elección (Kaiser, 1997).

Los individuos que defienden acciones no conflictivas, cuando son vecinos y están conectados estrechamente pueden obligar a cualquier individuo a tomar una acción diferente como formar una coalición en donde cada miembro que también defienda acciones no conflictivas se unan. Las coaliciones tienen movimientos promotores y

movimientos detractores en ambientes sociales donde se forman a través de acuerdos y desacuerdos en acciones que especifican lo que pueden realizar cuando dichas coaliciones se forman. Por ejemplo, en las "coaliciones promotoras" (advocacy coalitions), los procesos de cambio son importantes para la resolución de conflictos. El uso de las nuevas tecnologías incrementa los intercambios de información y permiten la formación de coaliciones mediante procesos de colaboración horizontal en espacios territoriales diferentes.

Herings, Mauleon and Vannetelbosch (2000) proponen el concepto de racionalidad social para estudiar la interacción social del comportamiento de los grupos de agentes a partir de un acercamiento de racionalización a los ambientes sociales. El concepto de racionalidad social para ambientes sociales se basa en la racionalidad individual. La racionalidad individual refleja el límite de las habilidades cognitivas que constriñen al humano en la solución de problemas. La acción racional se conjunta por interés propio de los individuos para un desempeño social. Estos ambientes sociales tratan con la conducta de las coaliciones, mediante las implicaciones de la racionalidad de los individuos, lo cual convierte la conducta de coalición en conducta individual. La racionalidad social modela la conducta individual en ambientes sociales que tratan con movimientos de coaliciones y sus resultados se basan en la racionalidad individual. Las conjeturas no se asumen como correctas, sino que están constreñidas por consideraciones de racionalidad.

Los individuos consideran que la conducta que toman otros individuos es la mejor respuesta a las conjeturas sobre las conductas de los otros miembros. Reconocen que la participación de los individuos en las coaliciones tiene como posibilidades moverse a favor de la coalición o bloquearla. Más que integrarse a una coalición, los agentes tienen la opción de moverse al mismo tiempo en la misma o en otra dirección. Es en este sentido que la racionalidad social satisface la racionalidad de las coaliciones. Los supuestos en que se fundamenta la racionabilidad social, consideran que los individuos son racionales y que cuentan con una jerarquía de hipótesis y que el conocimiento es común en el status-quo original, lo que resulta en que la racionalidad de los individuos es conocimiento común.

Es importante aclarar que una de las principales críticas contra el neoinstitucionalismo es que parte de un supuesto ya universalizado acerca de la racionalidad limitada y que genera relaciones de intercambio entre los individuos para lograr objetivos racionales. El nuevo institucionalismo se basa en los modelos explicativos de actores y procede del supuesto que las preferencias pueden ser entendidas en el contexto de los incentivos generados institucionalmente y de las opciones disponibles institucionalmente que estructuran la elección.

Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. Las preferencias de los actores políticos son cruciales para lo que se diseña institucionalmente porque los participantes conocen que los altos costos pueden involucrarse si las decisiones van en contra de ellas. El neoinstitucionalismo asume que los sistemas de incentivos económicos de las instituciones desempeñan un papel importante en la dinámica y desarrollo de los sistemas económicos, políticos y sociales.

La racionalidad limita en la perspectiva de la Nueva Economía Institucional se relaciona con la misma conducta de economizar que enfatizan las explicaciones de eficiencia basadas en determinadas preferencias. Por otro lado, la explicación Vebleniana de racionalidad limitada considera el papel de ineficiencia del patrón de la conducta dependiente debido a la formación endógena y al cambio en las preferencias de los individuos. No obstante, los dos acercamientos tienen como elemento en común que la historia no permite un entendimiento adecuado de la diversidad de los caminos que han tomado las diferentes sociedades, por lo que se vuelve necesario hacer análisis comparativos de las instituciones.

Así, la racionalidad social garantiza la racionalidad de las coaliciones y, por tanto, la racionalidad individual. Pero al exacerbarse la racionalidad individual por sobre la racionalidad colectiva, el sistema capitalista muestra una tendencia latente hacia el ejercicio autoritario. Lo que aquí preocupa es un subconjunto de estas relaciones, aquéllas que se relacionan con el control de la asignación, acceso y uso de los recursos económicos, los arreglos para la disposición de la propiedad y su custodia en una sociedad nacional, sujeta a ciertas condiciones sociales y políticas. En el espacio nacional, la sociedad es más cohesiva y homogénea que en la sociedad en el espacio global. Es en este espacio global, representado por los procesos de globalización, los que se expresan en un contexto de fragmentación. Es la sociedad local y regional la que como actor social adquiere relevancia en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo más justo y equitativo.

La fragmentación del espacio nacional en espacios regionales y locales con más autonomía, constituyen una fuerza que se contrapone a los procesos de globalización y que generan tensiones, lo que da por resultado lo que Torrijos (20019 ha denominado dispersión internacional. Por definición, la sociedad se limita al espacio del Estado-nación, y por lo tanto, es en este espacio nacional donde queda contenida la sociedad. Sin embargo, sin este espacio nacional, difícilmente los procesos de globalización pueden presentarse.

Por ejemplo, la estructura institucional y burocrática del mismo Estado que ejerce su poder sobre los ciudadanos individuales. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Los ciudadanos tienen preocupaciones por aspectos como la seguridad, el bienestar y la identidad.

Es claro que los procesos de globalización imponen una nueva definición de ciudadanía económica y le exige el ejercicio democrático autoorganizado como el principal requisito para fundamentar sus expectativas en función de sus capacidades y competencias. Pareciera que la confusión de ciudadanía económica se centra más en considerar a los individuos más como clientes que como ciudadanos, y en todo caso, como miembros de una sociedad de consumo más que como miembros de una sociedad de participación.

El involucramiento activo de la ciudadanía facilita los procesos democráticos y el acceso al poder de individuos que no guardan relación alguna con el poder político de los partidos hegemónicos. La institucionalización de los partidos políticos es importante para

lograr eficiencia en la gestión política de la gobernabilidad democrática. Esta ciudadanía económica se focaliza más en aquellos actores como el mercado, las empresas, los desempleados y marginados, etc., que tienen un poder mayor que los gobiernos. El surgimiento de grupos contra-hegemónicos que resisten y limitan el poder de las elites presionan para establecer un nuevo orden. Este nuevo orden económico mundial se centra en estrategias de desarrollo orientadas a eliminar la política social y a descentralizar las funciones del Estado.

Las elites transnacionales requieren de estabilidad y reducción de la incertidumbre en la acción de los mercados internacionales y los sistemas políticos de los Estado-nación, mediante sistemas de regulación que logren la gobernabilidad local, bajo los postulados de la teoría de la elección racional o rational choice. El rational choice emplea herramientas e instrumentos de análisis de los mercados para interpretar los fenómenos políticos y las relaciones políticas. El comportamiento racional de los individuos es guiado por la búsqueda de incentivos económicos para maximizar sus beneficios. Los incentivos no económicos no son considerados, bajo el argumento de que no son científicamente estudiables (Downs, 1967)

La elección racional se explica con los términos de la teoría del prospecto que describe como los individuos eligen bajo condiciones de incertidumbre. Esta teoría se combina con un entendimiento de una "contabilidad mental" para comprenderse. Los elementos de la función valor de la teoría del prospecto son explicados por Mullainathan y Thaler (2000) en los siguientes términos: se define en los cambios de la riqueza más que en los niveles para incorporar el concepto de adaptación. La función de pérdida es más importante que la función de ganancia para incorporar la noción de aversión a la pérdida; la noción de que los individuos son más sensibles a los decrementos que a los incrementos en su bienestar. Ambos despliegan una sensibilidad de disminución o pérdida para reflejar los resultados experimentales.

Pero la cultura económica propiciada por las fuerzas de la globalización privilegia el beneficio personal egoísta en detrimento de un debilitamiento de la solidaridad social. Por lo tanto, se hace necesario también globalizar la solidaridad para contrarrestar los efectos negativos de los procesos de globalización económica. Esta cultura tiene como base una teoría económica que sostiene que los individuos son agentes económicos orientados por el logro de su propio interés. La solidaridad como un valor universal ya no es defendido ni garantizada por las instituciones en el actual modelo de desarrollo, por lo que se requiere globalizar la solidaridad. El requisito necesario para un desarrollo efectivo es una ciudadanía real.

En estas condiciones, sostienen Colasse y Standish, (1998), de tensiones entre el Estado y las fuerzas de la competencia económica, la ciudadanía permanece ansiosa por mantener una solidaridad a través de la autoorganización que represente sus propios intereses y que permita enfrentar las formas tradicionales del poder público. Como tal es el caso de la exigencia de los servicios públicos o el acceso a ciertas instituciones para cuyo funcionamiento es necesario que sus titulares sean ciudadanos. Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

En este sentido, como ha dicho Casaldáliga (Fazio, 2000), solidaridad es el nuevo nombre de la sociedad humana que requiere de una revolución ética, estructural, cultural, sociopolítica, económica y sobre todo, espiritual. Casaldáliga habla de "la solidaridad como una virtud, amasada de indignación y praxis liberadora. Thoreau ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia, la lealtad y a resistir a un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables. A propósito de la capacidad de indignación del ser humano, también se está modificando para convertirse en una inercia de rebaño. Los procesos de globalización representan nuevos retos para crear el sistema ético que debe ser implementado a fin de asegurar que el cambio social a escala global no provoque una conmoción global.

Un estudio sobre los enfoques principales de la ciudadanía respecto al papel frente al Estado establece tres categorías: súbdito/beneficiario, participación ciudadana y apoderamiento. Bajo el enfoque de súbdito / beneficiario, el individuo se somete y se adhiere a la voluntad del Estado benevolente de quien recibe los beneficios. Bajo el enfoque de representación y participación ciudadana establece una vía de influencia de doble sentido entre los ciudadanos y el Estado para la realización de proyectos políticos, los cuales se someten al consenso y aprobación ciudadana.

El enfoque de apoderamiento (empowerment) o creación de poder, genera el poder desde el mismo ciudadano o grupo para realizar sus propios proyectos de desarrollo a partir de bases de poder social. Asignaciones de recursos naturales, financieros, y de capital social otorgan poder a los individuos para manejar riesgos y para reducir la vulnerabilidad. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales.. El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí.

De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la "trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos" Putnam (1995: 67) define capital social como "redes, normas y confianza social que facilitan la coordinación y cooperación en beneficio mutuo". El significado de apoderamiento depende del enfoque agregativo o integrativo a la teoría de la democracia. En la teoría de la democracia con un enfoque agregativo, el concepto de apoderamiento significa influencia igual y autonomía individual, esto es, los individuos tienen un parte igual de influencia en los procesos de tomas de decisiones colectivas y mantienen una esfera de autonomía lo más grande posible.

El diseño de las instituciones debe garantizar a todos los ciudadanos un nivel de influencia y control similar sobre los procesos de gobierno colectivo, mientras que separa los procesos de toma de decisiones individuales y colectivos, a pesar de la tendencia hacia el autoritarismo debido a la inclinación a proteger los derechos individuales por sobre los colectivos. Bajo una teoría de la democracia integrativa, apoderamiento significa la transformación de los individuos en ciudadanos mediante el incremento de su habilidad para internalizar una perspectiva holística de gobierno societal y para desarrollar sus

capacidades sociales e intelectuales. La participación de los ciudadanos es inherente al apoderamiento facilitado por el diseño de instituciones democráticas. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas.

Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado.

Una estrategia de apoderamiento democrático se enfoca en ambos enfoques de la democracia.

ASPECTOS AGREGATIVOS E INTEGRATIVOS DEL APODERAMIENTO.

	ASPECTOS AGREGATIVOS	ASPECTOS INTEGRATIVOS
Distinción empírica	Los procedimientos sirven para distribuir el poder y para influenciar y regular los conflictos.	Los procedimientos sirven para producir ciudadanos democráticos
Distinción analítica	La sociedad consiste en individuos atomizados con preferencias dadas exógenamente.	La sociedad es una construcción social y las preferencias son endógenamente producidas.
Distinción normativa	Percepción negativa de libertad.	Percepción positiva de libertad.

Fuente: Adaptado de Sorensen (1997).

El apoderamiento de los ciudadanos es esencialmente dependiente del grado de preparación de las agencias del Estado para conferir poder. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición".

Las bases del poder social, de acuerdo a la estrategia de Friedman (1992) son ocho: El espacio vital defendible (vivienda y propiedad del suelo), tiempo libre, conocimiento y habilidades, información apropiada, organización social, redes de vinculación, instrumentos de trabajo y vida y recursos económicos (Pineda Pablos, 1999) Sólo que la creciente fragmentación organizacional puede ser una amenaza significativa al apoderamiento. Las diferentes variables organizacionales delimitan la participación de los individuos y debilitan el potencial para el apoderamiento de la ciudadanía.

La ciudadanía tiene que ser entendida como soberanía, es decir, como la titularidad del poder constituyente que define las normas y leyes y que no dependen del poder, y no nada más ser tomada en cuenta para efectos de consumo, de acuerdo con el nuevo concepto de soberanía consumidora que deja en el mercado las principales decisiones de desarrollo de

los individuos mediante el aliento y estimulación artificial de un consumo continuado y creciente. En este sentido, el Estado tiene que servir a la gente. Debe dar prioridad al ejercicio de la soberanía individual, al ejercicio de las libertades individuales y a los derechos humanos fundamentales. Un Estado-nación soberano que respeta y sostiene los derechos humanos inalienables de sus ciudadanos, es también un Estado-nación que se gana el respeto y el reconocimiento de la comunidad global de naciones. Por lo tanto, la buena gobernabilidad que como obligación soberana mantiene un Estado-nación para su propia población, también repercute para todas las poblaciones de todas las demás naciones del mundo.

Mientras que por un lado, las naciones con índices bajos de desarrollo se han incorporado al sistema de la economía global dentro de un amplio margen de papeles y relaciones con las naciones más industrializadas, éstas se encuentran en una transición acelerada del monopolio del capital basado en la nación. La nueva era de economía mundial poli céntrica está basada en la competencia de corporaciones transnacionales que operan en sinergia con los Estados imperiales con un amplio poder económico y riqueza que rivaliza con el Estado. Estas corporaciones transnacionales son las que organizan la internacionalización de sus sistemas de producción de acuerdo a sus propios intereses y formulan estrategias mediante evaluaciones de la viabilidad de sus inversiones, gracias ala asociación que hacen entre globalización y progreso tecnológico para facilitar su propia expansión. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva.

No resulta tan aventurado sostener que han sido los inversionistas, antes que los economistas quienes reconocieron en las fuerzas de la globalización eran favorables para el crecimiento. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales. Para la implementación de sus estrategias toman en cuenta información sobre las relaciones del riesgo internacional, riego nacional y riesgo monetario. ". Para Giddens (1999:36) los riesgos son "la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza."

Los gobiernos de los Estados-naciones están cada vez presionados por estos intereses transnacionales sobre los que tienen poca o nula influencia y sujetos a los flujos de información que determinan su capacidad para la acción. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Los inversionistas financieros por un lado y las organizaciones financieras internacionales presionan para que los Estados-nación abran sus mercados financieros, desregulen sus economías y privaticen las empresas públicas. Estas políticas han disminuido la tasa de crecimiento económico en general y han traído una drástica reducción de los servicios del gobierno así como en el empleo público. Esto ha resultado en una venta total desnacionalizadora de los más grandes beneficios y empresas públicas de estos países y abolido las tarifas protectoras y otras formas de apoyo que previamente tenían las empresas locales.

El transnacionalismo económico presenta ciertas características relacionadas con el problema de la gobernabilidad. Las estructuras corporativas difieren entre las economías más avanzadas. La gobernabilidad corporativa surge como un tema de políticas dominantes en economías orientadas al mercado y de las instituciones implicadas en el desarrollo de economías en transición. La teoría del camino-dependencia de las estructuras corporativas señala diferencias en las estructuras tanto de propiedad como de gobernabilidad corporativa (Bebchuc y Roe, 1999) La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas son preferidas a aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible.

Las estructuras corporativas que una economía tiene, están determinadas por las que tuvo anteriormente. Las estructuras corporativas de una economía dependen de la estructura con la cual la economía inició, mientras que las estructuras iniciales de propiedad tienen ciertos efectos porque afectan la identidad de las estructuras que son eficientes para una corporación. A su vez, las regulaciones corporativas afectan las estructuras de la propiedad la cual depende de la estructura corporativa con la cual la economía inició.

La reciente literatura de estudios empíricos de la gobernabilidad corporativa se fundamenta en la premisa de que el principal problema es una administración auto interesada y accionistas débiles y dispersos que abren debates entre la propiedad y el control corporativo y los conflictos entre la administración y los accionistas. Las protecciones legales para los accionistas que tienen la propiedad minoritaria de las empresas requieren de más apoyo por parte de las regulaciones locales a efecto de evitar la concentración de la propiedad de las grandes empresas en pocas manos.

Sin embargo, la investigación reciente en la gobernabilidad corporativa ha encontrado diferencias sistemáticas entre las naciones en la concentración de la propiedad, el desarrollo del capital del mercado, el valor de los derechos de votación y el uso de finanzas externas. Se ha generalizado la concentración de la propiedad de las grandes empresas más que su dispersión mediante la participación de pequeños inversionistas mediante el sistema de acciones. La naturaleza y la calidad de la protección legal difieren ampliamente en las naciones dividiendo al mundo corporativo en sistemas rivales de propiedad dispersa y propiedad concentrada, con diferentes estructuras de gobernabilidad corporativa. Las estructuras de gobernabilidad son fundamentalmente las redes económicas y las jerarquías. Las redes económicas son sistemas institucionales que regulan los mercados y las jerarquías económicas son sistemas institucionales que regulan las organizaciones económicas (Screpanti, 1999) Las redes de las corporaciones transnacionales son cada vez más complejas.

La teoría del camino-dependencia de la propiedad y gobernabilidad corporativa (Bebchuc y Roe, 1999) muestra que los patrones de las estructuras de propiedad y gobernabilidad corporativa difieren en los países más avanzados y que por lo tanto, existen fuentes significativas en los patrones nacionales de la estructura de propiedad corporativa. Una de estas fuentes es la orientada por la estructura y que se relaciona con el efecto directo de las estructuras de propiedad iniciales en las estructuras subsecuentes de propiedad.

Las estructuras de propiedad iniciales de la economía tienen influencia directamente en las subsecuentes estructuras de propiedad, y tienen como principales motivos la búsqueda de la eficiencia y de rentabilidad. La otra fuente es la orientada por las regulaciones corporativas que implican todas las reglas legales que gobiernan la relación entre la corporación y sus inversionistas, accionistas, administradores y las relaciones entre todos. Las estructuras iniciales de propiedad corporativa afectan las estructuras subsecuentes a través de la afectación de las regulaciones corporativas que las modelan con fundamentos en razones de eficiencia y el interés en política de grupos.

Esta diversidad de regulaciones dificulta las negociaciones a escala global al no poder escapar de ciertas políticas sociales domésticas por ejemplo. Por lo tanto, es necesario dar mayor coherencia a las regulaciones que actualmente norman y rigen tanto las políticas como los programas sociales. A pesar de la premisa de que diferentes patrones de propiedad y diferentes sistemas de gobernabilidad parecen válidos, todavía no es comprensible la forma en que los sistemas de la ley común proveen protección a una minoría de accionistas. La investigación en la gobernabilidad corporativa comparada ha encontrado que los sistemas legales dan a los accionistas minoritarios mucha protección del fraude y expropiación que otros y asume que las diferencias críticas se encuentran en las leyes estatutarias de los sistemas rivales.

Si se examinan las diferencias entre varios sistemas de gobernabilidad corporativa, la homogeneidad asumida de los sistemas de leyes comunes se desbarata. Mucho de la literatura moderna sobre "ley y economía" en gobernabilidad corporativa asume que la regulación de los mercados corporativos es innecesaria y que el papel de la ley corporativa es simplemente ofrecer un modelo de contrato a inversionistas para permitirles economizar sobre los costos de transacción, como en el caso de los problemas de información que elevan los costos de transacción. Los costos de transacción que incluyen la adquisición de información, lograr los acuerdos y los costos de monitoreo y la aplicación legal de los acuerdos alcanzados. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Los mercados regionales están profundizando y madurando con una consecuente reducción de los costos y una mayor coordinación mediante el uso de herramientas de las nuevas tecnologías

De cualquier forma, las implicaciones para que una ola de fusiones globales ocurra, los adquirentes tenderán a ser empresas con una concentración en altos valores de la propiedad protegidos por los regímenes legales o bien empresas con altos valores reputacionales. Las empresas de propiedad familiar quedan condenadas a tener dificultades para sobrevivir a esta tendencia (Coffee, 1999b) Los procesos de destrucción creativa Schumpeterianos están redefiniendo a las organizaciones empujándolas a realizar reestructuraciones, fusiones, liquidaciones, etc. Desaparecen cadenas productivas enteras en regiones. Sin embargo, los objetivos que buscan lograr las fusiones están sufriendo una redefinición desde el punto de vista de ganar economías de escala, crear ventajas competitivas gerenciales, financieras y operativas, tener acceso a una mayor variedad de productos, facilitar la expansión a los mercados internacionales y reducir los costos de estrechamiento de márgenes de mercados maduros.

Las fusiones y adquisiciones entre empresas crean sistemas organizacionales, que conducen a altos niveles de concentración industrial cuyo tamaño e intensidad del volumen de operaciones es un parámetro crucial de competencia en una economía globalizada. El crecimiento de las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales se basa en estrategias de adquisición y fusión de empresas extranjeras, mediante procesos conocidos como de corporaciones fusionadas.

Las fusiones entre grandes corporaciones multiplican el número de mega organizaciones transnacionales y multinacionales con poder económico mayor al producto interno bruto de cualquier Estado nacional. Tal es el caso de la industria de la información, el conocimiento y las telecomunicaciones porque son capaces de influir en las decisiones de los gobiernos nacionales y locales, reducir su vulnerabilidad a los cambios turbulentos de la economía, y ejercer un poder en los mercados nacionales y regionales. . La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países.

El enfoque de la gobernabilidad corporativa basada en el mercado, incluye no solamente el problema de las organizaciones controladas por los dueños y accionistas mayoritarios, sino también la consideración como un modelo de negociaciones multilaterales y ejercicio de influencias entre un numero de diferentes partes interesadas. El nuevo paradigma de la gobernabilidad corporativa reconoce la naturaleza contextual y su dependencia en el medio ambiente institucional de la legalidad y la regulación. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas son preferidas a aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible. Además, reconoce la necesidad de considerar no solamente a los accionistas mayoritarios y minoritarios sino también a todas las demás partes interesadas, como una prioridad, entre otras, para los países en transición y desarrollo. (Berglöf and Von Thadden, 1999)

El medio ambiente institucional , de acuerdo a Levy and Spiller (1996:4-6) se caracteriza por la existencia de un sistema judicial independiente, respetado y no corrupto, así como por una serie de contrapesos al poder ejecutivo que incluyen a la Constitución, elecciones democráticas, cámaras legislativas, niveles múltiples de gobierno y restricciones internacionales.

Algunas de las otras prioridades para la transición de la gobernabilidad corporativa que señalan Berglöf y Von Thadden (1999), son el reconocimiento de las diferencias internacionales en los sistemas de governance, requisitos de transparencia y contabilidad general, la protección de los inversionistas extranjeros, los efectos de los programas de governance en el desarrollo, la protección de los acreedores a corto y mediano plazo, la liquidez de los mercados de seguridades a largo plazo, la aplicación obligada de la ley y la complementariedad con las instituciones políticas, la protección a los accionistas y demás partes interesadas, la condicionalidad externa requerida y finalmente la consideración de que la gobernabilidad corporativa requiere una combinación de amenazas y co-optación de los principales actores.

Los arreglos para una gobernabilidad corporativa óptima reflejan diferentes balances de la relación costo / beneficios de concentración de propiedades, participación de los empleados, estructuras administrativas, redes corporativas, entre otros elementos institucionales de la economía. Los elementos de las instituciones políticas son el tipo de régimen de gobierno y los resultados de las instituciones del sistema electoral. La democracia es en este sentido un régimen político.

Así pues, en este sentido, la governance es producto de la conformación de redes intraorganizacionales e interorganizacionales, el cual puede ser aplicado como procesos de co-dirección y de cogestión. El concepto de governance y el de gobernability o gobernabilidad, aunque se refieren a fenómenos sociopolíticos totalmente diferentes, son conceptos interdependientes y operacionalizables en las funciones de las estructuras institucionales de los sistemas económicos, políticos y sociales.

Desgraciadamente, en la integración de estas redes prevalecen los intereses de los grupos que forman elites poderosas y no están abiertas a todos los posibles participantes. La informalidad, flexibilidad, y descentralización de redes significa que es muy difícil establecer precisamente quienes son los actores y cuales son sus motivos (Slaughter, 2000). Por ejemplo, redes para la formulación de políticas públicas pueden tener el apoyo del Estado, mediante procesos cooperativos de governance, de tal manera que se incrementen los esfuerzos y se contribuya a darle poder a otros actores.

Los autores Berglöf y Von Thadden (1999), caracterizan los problemas de governance corporativa en diferentes tipos:

Organizaciones de propiedad amplia.	**Organizaciones de propiedad limitada.**	**Empresas familiares.**
Administradores fuertes.	Bloque estrecho de dueños fuerte.	Administradores fuertes
Dueños débiles.	Minorías débiles	No externos.

Organizaciones en transición	**Organizaciones en desarrollo.**
Administradores omnipotentes	Administradores fuertes
Poca resistencia	Inversionistas relacionados.

Fuente: Adaptado de Berglöf and Von Thadden (1999)

Los componentes de la infraestructura necesaria para los procesos de globalización económica, tales como la telemática y la formación de complejos de producción que conducen a economías de aglomeración, están siendo fuertemente cuestionados en los términos de su gobernabilidad, rendición de cuentas y responsabilidad. El sistema de globalización económica materializa en procesos concretos situados en lugares específicos, que aunque parezcan contradictorios, resultan de una dispersión espacial de las actividades económicas apoyadas por los adelantos de una revolución tecnológica en las telecomunicaciones. Estos avances contribuyen a una expansión de las funciones centrales en las grandes corporaciones, bajo una continua concentración del control, la propiedad y la apropiación de las utilidades. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas

individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula. En cada fase expansiva de las grandes corporaciones transnacionales se tiene el apoyo y la participación de los estados imperiales.

Este control en la economía global va más allá de los sistemas de coordinación centrados en el Estado o no en el Estado que prevalece en la literatura de la gobernabilidad. Es importante para esto, determinar un punto central en las decisiones entre una estructura que apoye la gobernabilidad en la globalización de las actividades económicas. Las estructuras espaciales delimitadas territorialmente por entidades geográficas y físicas definen los diferentes tipos de interrelaciones entre las diversas entidades. Las estrategias necesariamente se sitúan en algún punto de un continuo que va desde un extremo en que las corporaciones pueden elegir entre el diseño de una estructura de gobernabilidad como una respuesta a los requerimientos de la de la internacionalización, y en el otro extremo, el diseño de una estructura de gobernabilidad idónea para la expansión de las actividades globales. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva.

Una monocultura institucional de mercados deregulados y jerarquías reducen la diversidad de los arreglos de gobernabilidad disponibles. Potencialmente causan una pérdida neta en el desempeño económico (Crouch and Streeck, 1997). Las jerarquías cuentan con sus propios mecanismos judiciales para la resolución de conflictos. Las tendencias del capitalismo y la incapacidad de los mercados para afrontar efectivamente la intensidad del conocimiento en la sociedad postmoderna, refuerza el argumento de Schumpeter sobre la eficacia de la coordinación del mercado, así como la tendencia hacia corporaciones y gobiernos grandes. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado.

Por lo tanto, confirma la importancia que tienen la jerarquía. Una sociedad postmoderna acepta la idea de que el desorden es la constante y por lo tanto, lo contingente es lo opuesto al orden racionalista de la modernidad. El posmodernismo critica fuertemente los paradigmas de investigación, análisis, diseño e implementación de las políticas públicas. El posmodernismo representa la lógica cultural del capitalismo tardío en donde el espacio es símbolo y realidad. La posmodernidad de la cultura política se caracteriza por una fragmentación de valores compartidos por las colectividades y el distanciamiento de los ciudadanos a las instituciones, marcado por una creciente desconfianza que provoca crisis de las democracias institucionalizadas. Lechner (2000), señala que en la posmodernidad inciden como tendencias, el desmoronamiento de la fe en el progreso y una creciente sensibilidad acerca de los riesgos fabricados por la modernización; el auge del mercado y el consiguiente debilitamiento de la política como instancia reguladora y el cuestionamiento de la noción misma de sociedad como sujeto colectivo capaz de moldear su ordenamiento.

Hay que considerar que el dominio de una “racionalidad instrumental” en la sociedad moderna y la crítica postmoderna provee las bases para la formación de una “racionalidad comunicativa”. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y

los 70 del siglo pasado. El enfoque sociológico de la "racionalidad comunicativa" es despreciado por la lógica de la teoría del rational choice o elección racional postulada por el neoinstitucionalismo económico.

En palabras de Habermas (1984), representa un potencial caracterizado por la interacción social libre de dominación o el ejercicio coercitivo del poder, una conducta estratégica de los actores para cuestionar los argumentos, de decepción y autodecepción por la influencia de la ideología. La actividad de la racionalidad comunicativa de Habermas se opone a la noción de espacio público. La actividad comunicativa es entendida como las interacciones humanas mediatizadas por mensajes simbólicos a través de actividades tecnológicas. La batalla contra la globalización neoliberal tiene que darse necesariamente en el plano de la ideología.

Sin embargo, la sociedad moderna está sujeta a incrementos de está racionalización caracterizada por la expansión de la racionalidad instrumental (Sanderson, 1999), es decir, una racionalidad que demanda la "acción instrumental" como la capacidad que divisa, selecciona e implementa medios efectivos a fines definidos y, además, demanda un "conocimiento objetivo" acerca de los efectos de tales medios. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La racionalidad instrumental y el objetivismo son las bases de la acción y la creencia racionalidad (Dryzek, 1990) Sin embargo, a pesar de la preponderancia de esta racionalidad científica, objetivista-positivista, Habermas (1982) está en favor de la institucionalización de lo que denomina una racionalidad procedimental y comunicativa en las decisiones de las políticas (Baynes, 1995)

La racionalidad económica es sustituida por una racionalidad de carácter sociológica, en donde se consideran las variables culturales y antropológicas como fundamentales para las relaciones de intercambio en los individuos bajo espacios de incertidumbre pero que buscan resultados más allá del máximo beneficio individual. Dryzek (1990) argumenta que el modelo discursivo de la racionalidad instrumental se relaciona con la acción de los movimientos políticos que presionan a las agencias del Estado para perseguir cambios ideológicos, culturales y procedimentales.

A pesar de todo, estas estructuras de gobernabilidad idóneas (mercados y jerarquías) de las corporaciones transnacionales y multinacionales se sustentan en las categorías de los procesos de producción y espacio que no niegan la centralidad de la hipermovilidad del capital y el poder mismo de las corporaciones según Sassen (1995), para dar forma a nuevas configuraciones de clase. Las relaciones económicas en el sistema capitalista ocurren entre empresas en el mercado y al interior de las grandes jerarquías de las corporaciones y empresas burocráticas, al igual que el Estado. Las empresas transnacionales son las empresas globalizadoras que tienen una estrategia que persigue una división laboral intrafirma a nivel mundial. Las empresas multinacionales son empresas glocalizadoras que buscan replicar su producción sobre la base de regiones (Reich, 1998).

El enfoque en las propiedades clave, tales como la velocidad de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, así como el lugar específico de las dos variables,

direccionamiento del lugar y velocidad en la virtualización, modifican la apreciación de los problemas y sus implicaciones para la gobernabilidad en una nueva economía que vuelve más vulnerable al sistema capitalista, debido al alto nivel de expectativas de especulación financiera.Tal apreciación tiene que ser en una forma diferente a como se viene haciendo en el contexto de la dualidad nacional-global. Las nuevas tecnologías en el marco de la globalización están acelerando la obsolescencia de las especializaciones centradas en la adquisición de aptitudes y competencias locales, en su base profesional y geográfica debido a una reducción de su valor en cualquier sector económico y a un ciclo de vida cada vez más corto.

De hecho, los ciclos económicos descritos por Kondratiev, son cada vez más cortos. Por lo tanto, las capacidades para la operación global, la coordinación y el control contenidos en las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, así como en el poder de las multinacionales necesitan ser producidas (Sassen, 1995)

La aceleración de la velocidad de los procesos mediante el empleo de nuevas tecnologías, complica los actuales mecanismos de administración y control aplicados por los aparatos institucionales privados, y gubernamentales. Además, los convierte en obsoletos. Por otro lado, muchas de los recursos necesarios para las actividades económicas globales no son hipermovibles a diferencia del capital y de la tecnología por ejemplo, y por lo tanto pueden tenerse bajo un sistema de regulación efectiva.

También las corporaciones multinacionales enfrentan un dilema de gobernabilidad y muestran serias deficiencias y complicaciones en sus sistemas de administración y control como consecuencia de los cambios acelerados en los procesos de integración económica global, desregulación doméstica y la evolución de la tecnología de la información (TI) y telecomunicaciones. La tecnología de la información constituye una fuente permanente de inestabilidad económica y crisis financieras.

Una tecnología de la información (TI) descentralizada y sistemas de comunicaciones abiertas difíciles de controlar por cualquier Estado-nación, ha sido la punta de lanza de los procesos de la globalización. Las posibilidades de establecer un sistema de gobernabilidad mundial para controlar las tecnologías de la información y el conocimiento (TICs) y las comunicaciones requieren de instituciones establecidas por la voluntad política de una estructura de gobierno global, las cuales todavía no existen.

El medio ambiente global se torna cada vez más complejo e incierto. Por lo mismo, aumenta la inestabilidad. Para responder a estos desafíos, las estructuras y las reglas de funcionamiento de la internacionalización de los mercados se modifican implicando la formación de alianzas estratégicas. Las estructuras de gobierno de las corporaciones multinacionales basadas en una cadena de comando estrecha imposibilita la funcionalidad organizacional como resultado de su tamaño, su dispersión geográfica y los diferentes ambientes transculturales en que opera.

Su habilidad para monitorear las acciones de la alta dirección geográficamente dispersa se convierte en problemas serios. Cuando las corporaciones multinacionales llegan a internacionalizarse más, tienen que afinar sus estrategias a las diferentes culturas y a la

creciente diversidad de clientes, competidores, etc., así como desarrollar estructuras de mayor gobernabilidad que maximicen su habilidad para el procesamiento de la información.

Por ejemplo, Cox (1995) estudia las conexiones existentes entre las tendencias macroeconómicas y la reestructuración del desarrollo de las coaliciones políticas corporativas para explicar la formación de bloques comerciales regionales. Argumenta que las coaliciones de corporaciones formadas para influir en los procesos de globalización, reflejan en su diversidad de intereses, tales como el carácter desigual de la globalización económica. Este carácter desigual se manifiesta en tal forma que mientras que unas compañías expanden sus operaciones internacionalmente, otras regionalizan sus operaciones y buscan la protección de los gobiernos de la región para implementar acuerdos discriminatorios regionales que las protejan de la competencia foránea.

Los procesos de integración económica regional posibilitan el ordenamiento de las redes mundiales de intercambio comercial y financiero, de tal manera que permita utilizar mecanismos de mercado que redefinan las relaciones entre los Estado-nación en el contexto de la globalización. Complejas redes de empresas transnacionales se consolidan. Los países que forman bloques comerciales regionales mediante alianzas económico-políticas que son de carácter defensivo ante el resto del mundo, sin que de manera alguna cambie su competencia económica al nivel local ni su adaptación al sistema económico transnacional, encuentran sus propias limitaciones.

La naturaleza de la integración regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo Surge así el concepto del Estados-regiones cuyos vínculos se producen en la economía global y no en los diferentes estados que los albergan.

Bajo este esquema, las corporaciones adquieren un poder casi igual al de los países en los que estas compañías están ubicadas, por lo que los gobiernos de los Estado-nación ya no pueden tratar a sus firmas domésticas más favorablemente que a las firmas extranjeras (Zizek, 1999) Así mismo, estas corporaciones tienen facultades para demandar a los Estados soberanos cuando éstos no flexibilizan sus criterios para satisfacer las demandas de las corporaciones extranjeras en materia de medio ambiente global en degradación constante, uso de la tierra y recursos naturales, salud y trabajo, etc.

La globalización es un buen pretexto para modificar la administración de una política social y reducir los beneficios que el Estado de bienestar proporcionaba, bajo el argumento de que el Estado de Bienestar ha sido una carga pesada para la actividad económica que ha reducido el desempeño económico. Las organizaciones son afectadas por una alteración creciente de estructuras, comportamientos y procesos tecnológicos sometidos a un medio ambiente global cada vez más inestable, complejo e incierto y que modifican radicalmente las relaciones laborales. Sin embargo, el modelo de Estado de Bienestar llevado a escala mundial o global es un proyecto que alienta el rescate de lo mejor de la sociedad humana, en contra de declarar su desaparición para maximizar los beneficios de los intereses bursátiles de las grandes corporaciones transnacionales.

El principio universal de que todos los ciudadanos tienen derecho a beneficios de bienestar, depende de los arreglos que se hagan en el mercado laboral. El avance de una “nueva cultura laboral” que propone cambios radicales en las relaciones laborales, en la gestión y ejecución del trabajo, revoluciona el “management” y desarrolla modelos híbridos de organización del trabajo que conjunta principios del fordismo y del toyotismo. El fordismo en economía política se refiere a las formas de organización industrial de los países avanzados, mientras que es llamado desarrollismo en los países menos desarrollados. Desde la perspectiva de los trabajadores, el contrato social que amparaba la permanencia, titularidad, paternalismo y jerarquía ha resultado en un decrecimiento de la seguridad laboral. El futuro de los trabajadores es muy incierto.

Por otro lado, en aquéllas naciones donde no existe el mercado, sus economías no responden con efectividad a los requerimientos de participación en una economía global. Por lo tanto, el desarrollo de las naciones es parcialmente dependiente de la ubicación de las naciones en el sistema capitalista global. Esta posición engendra relaciones centro-periferia dentro de economías centro-periferia igualmente (Appelbaum and Henderson, 1995) En nombre de ciertos "intereses estratégicos" que se argumentan en la nueva política global ética (Zizek, 1999), las naciones más beneficiarias de estos procesos de desarrollo global violan la soberanía de los Estados-nación menos favorecidos. Usan como pretexto que éstos violan los derechos humanos.

La desigualdad de los Estados nacionales es evidente, lo que se refleja en la teoría formal de la soberanía en la legislación internacional que es de poca utilidad ante las realidades de una nueva soberanía, y división de funciones de la gobernabilidad en los diferentes niveles: internacional, nacional, regional y local. Los filósofos neoliberales aclaman las bondades de una era de nueva moralidad en la que la comunidad internacional establece y practica un código de ética global que impide a los Estado-nación involucrarse en crímenes contra la humanidad. No obstante lo que prevalece es un código de doble moral que se contradice en el discurso de libre mercado y las acciones en materia de comercio internacional.

Las disfuncionalidades del Estado, el mercado y la sociedad.

La globalización es un factor importante que ha contribuido a la disfuncionalidad de las instituciones del mercado, la sociedad y el Estado, generando graves consecuencias en la economía, la política, la sociedad y la cultura de nuestros pueblos. Las instituciones del mercado son resultado de la organización y división del trabajo colectivo para la colaboración en los procesos de producción, distribución de los recursos y competencia por los productos sociales. Las instituciones del Estado se desarrollaron por la necesidad que se presentó para regular las relaciones de los individuos en sociedad, establecer sus derechos y obligaciones y resolver sus conflictos.

Para que el mercado funcione eficientemente necesita de las instituciones que establezcan las reglas del juego de la sociedad y de organizaciones que participan como jugadores. La tríada que comprende al estado, el mercado y la sociedad entró en desequilibrio por un sobredimensionamiento de las funciones y actividades del Estado, por sobre las funciones y actividades que realizan el estado y la sociedad. Las funciones

tradicionales del Estado se colapsan y son la causa de que aumente la inseguridad, violencia y el crimen organizado.

Los intereses de las empresas transnacionales se contra puntean con los intereses de las grandes empresas nacionales y con más razón de las medianas, pequeñas y micros, al grado de que muchas de éstas sucumben a los embates del capital transnacional. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Además, los intereses de los dueños de este capital e inversionistas se sobreponen a los intereses colectivos de las sociedades. Los procesos de diferenciación por los que atraviesan los Estados-nación bajo la globalización, reducen las funciones y los recursos del Estado en beneficio del mercado y de la denominada sociedad civil. Es la sociedad local y regional como actor social la que adquiere relevancia en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo equilibrado y equitativo entre las regiones. Por lo tanto, la lógica financiera que quiere avanzar junto con la lógica de la democracia, también entran en conflicto.

El Estado-nación ya no puede dar marcha atrás y volver a proteger su economía, ni tampoco orientarse a la demanda social, con las condiciones que le impone la globalización. En parte esto se explica porque la evolución del capitalismo ha requerido del Estado para que cumplan con ciertas tareas que no le proporcionan beneficios directos y por lo tanto influye en su comportamiento. El Estado es en cierta manera, un representante oficial del capitalismo.

El Estado surgió como un instrumento para salvaguardar los intereses del capital y como una necesidad de gobernabilidad de una sociedad con una división de clases sociales, lo que ha dado lugar a la formación de nuevas configuraciones de poder de clase. Una de las cuales, la clase dominante, necesita de instrumentos para proteger sus intereses garantizando y creando las condiciones necesarias para la reproducción y acumulación de procesos y medios de producción que son el origen de su poder y riqueza. La estrategia de reproducción del sistema capitalista es dual en donde los actores hacen y no hacen sucesiva e interrumpidamente algo (Barel, 1989). Al respecto, Ramos (2001) concluye que las respuestas adaptativas de los actores sociales atrapados en las redes de poder, consisten en apostar por estrategias dobles que permiten construir contraintuitivas identidades paradójicas, con lo cual los actores logran reproducir las redes, consolidarse y "enjaularse" e "incapacitándose para romper la lógica perversa que la anima".

El Estado se formó en el siglo XVII y se consolidó en el XIX tanto el ámbito de la ideología, las organizaciones y las instituciones. Para lograr sus propósitos, imponen la racionalidad del sistema, las condiciones legales y las políticas que guían la acción de las instituciones económicas y sociales. El Estado tuvo como objeto muchas propiedades mensurables tales como el poder y la riqueza. Las condiciones de operabilidad del capitalismo cambian y ahora necesita de un Estado mínimo, cuya existencia haga viable un gobierno para el mercado.

Para la creación del Estado mínimo se han implementado programas de ajuste estructural y de estabilidad macroeconómica, hasta la aplicación de ciertos acuerdos políticos de países desarrollados que imponen sus criterios a través de organismos e instituciones supranacionales en forma de normas y reglas extraterritoriales, que tienen por objeto abrir

las economías de los países menos desarrollados a efecto de que las corporaciones transnacionales penetren en sus mercados y tengan acceso a recursos naturales baratos.

Así, los procesos de globalización tan acelerados están dando lugar a nuevas formas de organización espacial geopolíticas y geoeconómicas. El nuevo papel que el capital tiene en la globalización requiere de una subordinación, y un papel complementario del Estado a sus intereses, es decir, los protagonistas de este nuevo modelo de Estado son los empresarios y los administradores de las grandes corporaciones Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

La sociedad civil intenta buscar respuestas a la dominación capitalista neoliberal supranacional en el mismo plano a través de la experimentación de procesos autorganizativos. Las normas sociales que promueve tienen el potencial para infundir una nueva moralidad a la economía. Esta moralidad por sí misma surge de dos raíces, las que a su vez han influenciado la ética administrativa, una fuente espiritual y una fuente secular. La fuente espiritual exalta la noción del "bien común" y está directamente inspirada en el pensamiento judeo-cristiano pero también s encuentra en otras doctrinas religiosas en formas de creencias.

Concibe el servicio público como una especie de sacerdocio que involucra el servicio desinteresado a los otros, en otras palabras, actuar como un ministro en la acepción amplia de la palabra. Asume que el bien común se identifica con el fin social hacia el cual todas las fuerzas individuales tienden, y sobretodo con la administración responsable para trasladar las aspiraciones comunes que toman forma en las acciones del Estado. Existen algunas dudas con respecto a la secularidad que ha dado la espalda a la moralidad. Construye su ética administrativa alrededor del concepto de la voluntad general (Kampto, 1997)

Pero ni el Estado, ni el mercado, ni la sociedad civil tienen la suficiente capacidad por sí mismas para lograr la gobernabilidad de una sociedad. La contingencia de gobernabilidad se incrementa porque ni el Estado alcanza a coordinar políticamente, ni el mercado garantiza la integración de la vida social y funcional de una sociedad contemporánea altamente diferenciada. La sociedad civil crea los gobiernos para establecer y mantener reglas que deben restringir las fuerzas del mercado y permitir la expresión de cuidado de las personas. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. El deseo de mantener cierto control sobre las localidades ha introducido los gobiernos civiles en el mercado competitivo. La sociedad local y regional adquiere importancia como actor social en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo equilibrado y equitativo regional.

El mercado no tiene la suficiente capacidad para cohesionar una sociedad que presenta fisuras por problemas de diferencias políticas, étnicas, religiosas, etc. y por conflictos de intereses. El mercado es una fuente constante de conflictos y tensiones sociales que deben ser resueltos por un proyecto político diferente al modelo neoliberal que mezcla el libre mercado con la democracia representativa y la pluralidad cultural.

Screpanti (1999) ha acuñado el término “estructuras de gobernabilidad de acumulación” para definir los sistemas que gobiernan los usos de la plusvalía que sostienen la acumulación, tales como los “mercados de bienes”, los “mercados compañías” o mercados para el control corporativo, las jerarquías externas y las jerarquías internas. Las jerarquías establecen sus propios mecanismos para la resolución de sus conflictos. Los mercados de bienes o mercancías son aquellos en los que los consumidores individuales y organizacionales aparecen como sujetos y los objetos de transacción son insumos y productos reales, dinero y créditos. Los mercados compañías o mercados para el control corporativo son aquellos que tratan a las empresas como cosas que son el objeto de la transacción.

Las jerarquías internas son estructuras de relaciones que unen a los miembros de una organización. Las estructuras externas son estructuras de relaciones de poder y subordinación entre las organizaciones. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. En un Estado-nación visto como jerarquía, los individuos interactúan políticamente dentro de cada Estado con la gente de otros Estados a través de sus gobiernos. El mercado reduce todo, incluidos los seres humanos (mano de obra) y la naturaleza (tierra) a mercancía. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado. Los costos de transacción explican la existencia de las jerarquías como formas de gobernabilidad para reducir los costos de hacer y mantener los contratos en un mercado determinado.

Los diversos arreglos institucionales pueden mitigar los problemas derivados de los altos costos de transacción y de la agencia mediante estructuras de gobernabilidad que usen diferentes formas organizacionales. Podemos tener una economía de mercado, pero no podemos aceptar una sociedad de mercado que se encuentre orientada totalmente a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. El mercado con una orientación social acepta como una prioridad los intereses de la sociedad y deja en segundo término la obtención de los beneficios máximos que satisface los intereses del capital. Además de los mercados, la sociedad necesita instituciones que sirvan a fines sociales como la libertad y la justicia social. Esas instituciones existen en países concretos, pero no en la sociedad global, continúa diciendo. No obstante, está naciendo una sociedad civil globalizada que se ha manifestado en movimientos antiglobalizadores con cierto éxito relativo, como en el caso de la campaña para la prohibición de minas personales y el movimiento Jubileo para la condonación de la deuda externa de los países más pobres.

A su vez, una sociedad que aprecia la libertad tiene en el nihilismo un reto para evitar al Estado totalitario que bajo su poder involucra y sofoca a los seres humanos. Las sociedades que tienen regímenes totalitarios como en el caso de economías centralmente planificadas, con un solo partido en el poder o monarquías absolutas, entre otras, entran en la caracterización del “Estado soy yo” de Luis XIV. De acuerdo con Hender son (1996), las asimétricas consecuencias sociales, políticas, económicas y territoriales de la globalización son parcialmente un resultado de la lógica de los procesos de globalización por sí mismos.

El mismo sistema mundial, para mantener este carácter asimétrico contradictorio, impulsa la profundización de los procesos de globalización. También, parcialmente de las relatividades de la economía nacional y el poder geopolítico y geoeconómico, y parcialmente de la constitución, prioridades y lógicas de las formas de capitalismo que organiza los espacios nacionales y locales: Para lograrlo, es capaz de recurrir a los conflictos armados más que a guerras de civilizaciones. La tendencia va en el sentido de que los conflictos bélicos se desarrollan más entre los grupos corporativos con intereses específicos en la globalización, más que entre los Estados-nación. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

La sustitución de las formas del capitalismo por otras, como en el caso de la sustitución de bienes de capital por bienes de la tecnología de la información, no necesariamente aumenta la productividad de toda la economía en su conjunto. Vista la globalización desde estos espacios, es la continuidad de la experiencia capitalista. La globalización es una etapa superior del desarrollo del sistema capitalista. El Estado ya no desempeña las funciones que tenía anteriormente, dejando un vacío que no ha podido cubrirse por ninguna de las instituciones existentes.

La comprensión adecuada de nuestra condición presente, demanda atención a la conceptualización y teorización de los recursos, naturaleza y consecuencias de la globalización de las diferentes formas de capitalismo que ahora organizan sus respectivos territorios dentro de la economía mundial y a sus múltiples articulaciones. Los procesos de globalización avanzan con procesos concurrentes de destrucción de instituciones, industrias, cadenas productivas, etc., así como de una devastación ecológica. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

Bajo la tesis de que el capitalismo globalizador es un proceso de destrucción creativa como resultado de un manejo de las tensiones entre caos y orden, se explica que las empresas globales están reemplazando a las empresas que operan solamente en un territorio nacional. Las empresas globalizadoras tienen como su principal estrategia lograr una división del trabajo intrafirma global. En este sentido, el poder de sobre vivencia del capitalismo global depende de su capacidad para corregir sus propias deficiencias, aún a costa de recurrir frecuentemente al autoritarismo. Las empresas globalizadoras son generalmente denominadas corporaciones transnacionales, las cuales operan en sinergia con los Estados imperiales.

La productividad del capitalismo globalizador es resultado de una incesante y brutal destrucción de cadenas industriales locales y regionales, estilos de vida nacional, etc. Existen evidencias contundentes que señalan que el capitalismo no es ecológicamente sustentable. Por ejemplo, en los términos de producción, distribución y consumo, se confronta con un dilema: entre la producción orientada hacia la satisfacción de las necesidades de un mercado nacional, y la producción competitiva orientada para insertarnos en un mercado globalizado, en el supuesto de que la información en ese sea virtualmente perfecta.

Las estrategias de desarrollo empresarial tienden a orientar la producción hacia los sectores que tienen ventajas competitivas y un mayor valor agregado para insertar eficazmente la economía local y regional en los flujos de los mercados internacionales. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales.

Los Estados nacionales tienen la importante función de promover los mercados internacionales y de proteger los mercados internos. El comercio mundial se incrementa más rápidamente que la producción mundial. El mercado nacional considerado como uno de los pilares del Estado-nacional, es anulado por las fuerzas de la globalización, y con ello, las empresas y gobiernos locales son arrastrados por las fuerzas del capitalismo transnacionalista.

Las organizaciones son dominios importantes para el análisis crítico de las esferas públicas y privadas. Las organizaciones están pasando por un período crítico de autodiagnóstico para determinar sus capacidades y competencias que les permitan no solamente su sobre vivencia, sino también asegurar cierta continuidad a sus operaciones y funciones en un mercado global. Una política crítica debe respaldar la idea de trabajo organizacional. La dinámica de la economía ha hecho obsoletos muchos mecanismos a nivel micro para la administración de los costos organizacionales. Las organizaciones pueden ser vistas como unas economías en miniatura en las cuales la propiedad de los activos conlleva el poder de los directivos para definir las reglas del juego.

Las organizaciones, sobretodo las empresas, son creadas para reducir los costos de transacción asociados con el uso de los sistemas de precios. Lograr el mejor sistema de precios es una condición necesaria pero no suficiente para una reforma exitosa del Estado. La reducción de los costos de transacción es la característica principal de la globalización y lo logra mediante el diseño de nuevas estructuras de gobernabilidad mediante el empleo de nuevas formas organizacionales. La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio.

Sin embargo, Riordan y Williamson(1985) en su discusión sobre la economía de los costos de transacción y la elección organizacional anticiparon que la elección organizacional puede estar influenciada por la búsqueda de la eficiencia y por la estrategia bajo una competencia de números pequeños. La economía de los costos de transacción sirve de plataforma a las nuevas formas de organización con las consecuentes nuevas formas de gobernabilidad.

Los análisis sobre la economía de los costos de transacción y de otros acercamientos organizacionales a la administración estratégica no incorporan el conflicto estratégico. Nickerson y Bergh (1999) sugieren que la elección de gobernabilidad para una transacción intermedia puede estar condicionada por los atributos tanto por la misma transacción como por consideraciones estratégicas en la transacción empresa-cliente. Por lo tanto, para estos autores, economizar y estrategizar son actividades relevantes a la elección organizacional.

Los conceptos de los costos de transacción de la historia económica (North and Thomas, 1973) ayudan en los análisis de las relaciones entre el gobierno y el mercado y en los diferentes arreglos institucionales que existen para subsanar las llamadas fallas tanto del mercado como del sector público, justificando hasta cierto punto las intervenciones del gobierno. El concepto de costos de transacción necesariamente involucra los aspectos de transportación sino también los elementos que evitan el bloqueo de los intercambios. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos.

Los diferentes trabajos de North (1981, 1990, 1993) analizan los incrementos de los costos de transacción y coordinación como resultado de una creciente complejidad de la actividad económica y los avances tecnológicos y organizacionales que impactan en los arreglos institucionales. Allen (1991) define los costos de transacción como los recursos necesarios para transferir, establecer y mantener los derechos de propiedad, los cuales llegan a ser más completos y extensivos cuando se acercan a cero, aunque no necesariamente el establecimiento de estos derechos de propiedad crean los incebntivos suficientes.

Entre estos costos se identifican la elaboración de contratos para cada una de las transacciones y las dificultades para especificar que es lo que cada una de las partes espera de la otra en circunstancias futuras impredecibles. El contrato legal es un marco de referencia donde se enfatiza la importancia de la continuidad y se adopta una perspectiva de contratos incompletos a largo plazo.

Una teoría parcial de la firma integra aspectos de organización interna con la teoría de los derechos de propiedad (Holmstrom, 1999) Esta teoría hace énfasis en la contratación incompleta y en los derechos de decisión residual en lugar de los contratos imperfectos y los costos de la agencia. Estos costos de agencia son más bajos en el modelo del sector privado que en el sector público. El establecimiento de un sistema de derechos de propiedad no necesariamente crea los mecanismos del mercado y con ello los incentivos necesarios para evitar las interevenciones y las acciones estratégicas gubernamentales.

No obstante, los actores económicos, accionistas en el sistema de propiedad privada y votantes en el sistema de propiedad pública, tienen como incentivos el poder ser gorrones (free riders) a pesar de que tienen que pagar ciertos costos para ser informados. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Los costos de la agencia dan mayor claridad al significado de propiedad como una característica definitoria del mercado. El cuestionamiento de fronteras entre mercado y organización permite analizar las interacciones y las competencias así como las formas de complementación en la asignación de individuos- tareas y en los incentivos individuales. Este análisis no descarta la tendencia hacia el autoritarismo que muestra el sistema capitalista al exacerbar los derechos individuales por sobre los derechos colectivos.

Los costos de transacción están representados por los costos de las negociaciones, contratos relacionales, demandas legales, etc. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos.

La transacción ideal desde la economía y el derecho es aquélla de mercado spot en la cual la identidad no es un aspecto importante como lo es la regulación legal de los derechos.

Entre estos costos se identifican la elaboración de contratos para cada una de las transacciones y las dificultades para especificar que es lo que cada una de las partes espera de la otra en circunstancias futuras impredecibles. Bajo derechos de propiedad perfectamente especificados, con cero costos de transacción, los mercados operan perfectamente. El contrato legal como un marco de referencia determina la importancia de la continuidad y se adopta una perspectiva a largo plazo de contratos imperfectos.

No obstante, el establecimiento de un sistema de derechos de propiedad no necesariamente garantiza la creación de los mecanismos de mercado y los incentivos a los actores económicos para evitar que el gobierno intervenga estratégicamente. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Los mercados son el instrumento que sustenta a la propiedad privada que provee los incentivos suficientes a los capitalistas para eliminar los costos de transacción y los riesgos de la agencia a fin de lograr la máxima utilidad financiera de sus inversiones hasta el grado de que el precio de la acción refleje el valor neto presente de los retornos futuros esperados. Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno.

Un análisis de los mecanismos de gobernabilidad para las transacciones del sector privado puede ser determinada por los derechos de propiedad. De acuerdo con el enunciado del Teorema de Coase, si los derechos de propiedad se especifican completamente y los costos de transacción son cero, la asignación de los recursos será eficiente. Tanto las estructuras de gobernabilidad del sector privado como de la propiedad pública tienen que enfrentar costos de transacción y riesgos de la agencia, y además, tanto los votantes de las empresas públicas como los accionistas de las empresas privadas tienen incentivos para convertirse en “gorrones” o “free riders”, a pesar de que tienen que pagar ciertos costos de información. Las empresas propiedad del estado, a pesar de ser construidas en forma autónoma e independiente del control político, siguen siendo administradas por los oficiales y burócratas del Estado.

De acuerdo con Adler (1999), la confianza como un mecanismo de coordinación del modo organizacional comunidad, reduce considerablemente los costos de transacción y los riesgos de la agencia. Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil. En la gobernabilidad por la comunidad, la coordinación se logra por normas de compartidas de comportamientos apropiados. Las costumbres evolucionan y dividen el trabajo y para compartir los productos.

La confianza entre los agentes económicos o actores que efectúan transacciones económicas se fundamenta en reglas no escritas y constituyen el capital social de las comunidades. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital

social como la “trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos” El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí.

Aunque la coordinación eventualmente toma la representación del dilema del prisionero en la construcción de una reputación que sea creíble para castigar las desviaciones, también se pueden usar argumentos evolutivos para mostrar el desarrollo de las normas sociales y la cooperación entre los individuos, cuando éstos están orientados racionalmente o siguen algunas reglas de comportamiento. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, dándose el problema del “gorrón”, pero las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes.

Si se explica el dilema del prisionero desde la racionalidad social, la cooperación se sostiene. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, dándose el problema del “gorrón”, pero las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los individuos cooperan porque así logran mejores resultados para su interés personal, pero la cooperación queda condicionada si su acción individual le reporta mayores beneficios.

El concepto de eficiencia de un sistema económico es definido por Coleman (1993) sólo dentro de una distribución particular de recursos, una asignación constitucional de derechos y recursos. La investigación en la ingeniería constitucional ha tomado nota de los efectos de difusión, tales como la globalización de las comunicaciones que enriquece las bases cognitivas de las cuales escoger. Puede argumentarse que los cambios constitucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables.

Si las externalidades son internalizadas y los costos de transacción son reducidos a cero, ese sistema logra la eficiencia, pero si los derechos se asignan diferentemente, a personas con diferentes intereses, entonces la eficiencia resultante varía. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. El vehículo de la globalización es la reducción de los costos de transacción a cero entre los Estados-nación. Costos de transacción bajos y relacionados con la ausencia de sentido político de las instituciones políticas de las autoridades o de las comunidades, hará difícil los procesos de integración en la elección de las políticas públicas.

Sin embargo, la desigualdad económica, la heterogeneidad étnica, lingüística, religiosa, etc., debilitan la comunidad e incrementan los costos de transacción. Los costos de transacción de la comunidad se elevan con las diferencias étnicas y las desigualdades económicas. De hecho, los procesos de elección de las políticas por los diferentes agentes económicos y actores políticos son inciertos hasta cierto grado. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las

situaciones de la toma de decisiones. De esta forma se filtran las percepciones del medio ambiente a través de los actores políticos (Kaiser. 1997).

Sin embargo, en la realidad esta situación ideal enunciada en el Teorema de Coase no existe debido a las fallas del mercado. Las fallas del mercado pueden ser definidas como las desviaciones de lo óptimo con respecto a la operación de un sistema de precios que no es costoso, de acuerdo a Serie y McCurdy, 1999. Establecer un buen sistema de preocesos es una condición necesaria pero no suficiente para una reforma del Estado. La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma. Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica.

La ausencia de estas condiciones en los mercados da lugar a las "fallas del mercado" que pueden deberse a monopolios naturales, a las externalidades, a los bienes públicos y a los costos de transacción elevados. La globalización aboga por una democracia económica y critica fuertemente los monopolios que ejercen los Estados-nación para el control de los servicios públicos. El concepto de falla de mercado es usado por la teoría marginalista para describir situaciones en las que por alguna razón se violan los supuestos que garantizan las proposiciones centrales.

Cada una de estas fallas ha dado lugar a justificar la intervención del Estado, en lo que se concibe como el modelo del Estado populista que desarrolla altos niveles de intervención en las políticas económicas y sociales. Se necesita resolver las fallas del mercado manteniendo algunas áreas de actividades fuera del mismo y en el sector público, ya sea en manos del gobierno o de las comunidades. El análisis marginalista de las fallas del mercado identifica dos estados: El primero enfocado a los efectos externos, la competencia imperfecta y los bienes públicos que dejan poco lugar para la intervención del Estado y muy poco para la provisión estatal de bienes y servicios (Moudud and Zacharias, 1999) Sin embargo, en la realidad de muchos países con economías capitalistas avanzadas el rol del Estado excedió las fronteras demarcadas por la teoría marginalista.

Las fallas de mercado ocurren cuando éste no produce los bienes públicos, inadvertidamente produce externalidades, da origen a monopolios naturales, exenta a las partes por medio de asimetrías de información o crea distribuciones no deseables de ingresos. Los bajos costos marginales y los altos promedios de costos permiten a los monopolios naturales establecer barreras de entrada a nuevos competidores. Cuando la información es imperfecta, las acciones de las instituciones económicas, individuos u organizaciones, pueden fallar en el avance para lograr su máxima utilidad o su propio bienestar.

Las externalidades surgen cuando las partes efectúan transacciones (Zerbe y McCurdy, 1999). En las externaliodades se consideran tanto los beneficios como los costos que recaen en terceras partes y que no son considerados en las decisiones para iniciar o terminar una actividad. Las fallas del mercado desaparecen cuando los costos del sistema de precios son cero. Pero este modelo del mercado falla porque las externalidades son definidas por los

costos de transacción y porque los costos de transacción son ubicuos. Las externalidades son definidas por los costos de transacción como el valor neto de la externalidad que constituye la frontera más baja de los costos de transacción asociados, es decir, los costos de transacción nunca serán más bajos que el impacto monetario neto de la externalidad. Estos costos de transacción nunca serán cero y serán iguales o mayores que el valor neto de la externalidad. Las externalidades se presentan en cualquier momento que haya ineficiencias en las leyes que afectan los mercados y sus efectos pueden ser negativos, como en el caso en que empeoran el bienestar de algunos individuos por la satisfacción de ciertas preferencias.

En la organización de las transacciones pueden elegirse entre colocarlas en el mercado o localizarlas dentro de una empresa, de acuerdo a Case (1937) Las empresas, caracterizadas como jerarquías administrativas, son una forma particular de organización la cual se contrasta con otras formas diferentes, como el mercado, para administrar intercambios o transacciones entre las diferentes partes involucradas. En el mercado, las transacciones ocurren sin la supervisión de los administradores.

Según Coase (1937) y Simon (1951), la característica distintiva de una empresa es el uso de la autoridad. Las empresas pueden considerarse como microeconomías donde la propiedad de los activos otorga el poder a los directivos y dueños para definir las reglas del juego (Holmstrom, 1999) en la toma de decisiones. Sin embargo, Alchian y Demsets (1972) sugieren que la característica distintiva de una empresa es el monitoreo de los insumos más que los productos.

Las empresas existen porque pueden reducir los costos de negociación y establecimiento de términos y condiciones de intercambio relativos a las transacciones del mercado. A medida que los costos de negociación basados en las transacciones, los contratos necesarios para mantener dichas transacciones, incrementan sus costos considerablemente. Las jerarquías permiten una mejor adaptación que la contratación entre partes autónomas. Los costos de transacción explican la existencia de las jerarquías como formas de gobernabilidad para reducir los costos de hacer y mantener los contratos en un mercado determinado. La perspectiva del contrato como marco de referencia enfatiza la importancia de la continuidad, pero también adopta la posición a largo plazo de la imperfección de los contratos.

La adaptación es importante porque las consideraciones de eficiencia con frecuencia requieren que se hagan ajustes en la distribución de las ganancias en una relación de intercambio, cuando las relaciones de intercambio cambian. Las jerarquías son capaces de resolver las disputas surgidas del intercambio por fiat como un último recurso, en donde el fiat no es disponible para gobernar los contratos del mercado. En contraste, en las contrataciones del mercado, una parte puede usar la ley y el sistema legal oportunísticamente para "hacer esperar" una parte contractual (Coase, 1937; Williamson, 1975, 1985; Klein, 1993; (Argyres y Liebeskind, 1999)

Más cuestionable es el concepto de la eficiencia económica. Este se le asocia con "la vigencia del ideal democrático con un aparato productivo que garantiza la competencia, el crecimiento y la elevación de los niveles de bienestar social", según Berruga (1997) Sin

embargo, la globalización económica ha incrementado las amenazas y riesgos que no pueden resolver las instituciones de bienestar social. Cuando un sistema económico opera con altos niveles de ineficiencia, su estructura se vulnera y aumenta su inestabilidad, repercutiendo en el debilitamiento de su gobernabilidad.

Escisión entre la racionalidad económica y la gobernabilidad de la sociedad.

Para delimitar las bases teóricas de los cambios en el Estado, la sociedad y el mercado, es necesario revisar las teorías de la agencia (agency theory) y de la elección racional (rational choice) en que se fundamentan la racionalidad económica y analizar cómo estos principios crean disfuncionalidades en la gobernabilidad de la sociedad, cuya característica principal es la separación entre una racionalidad instrumental propia de la economía de libre mercado y el sombolismo cultural. El nuevo institucionalismo se aparta del estrecho margen de tipos y explícitamente está relacionada en modelos explicativos basados en actores, tales como a teoría de la elección racional o la teoría de la organización.

Esta racionalidad instrumental que se fundamenta en que cada uno de los actores busca egoístamente la satisfacción de su propio interés, entra en contradicción con los acuerdos y el consenso entre los diferentes grupos de interés para lograr la gobernabilidad democrática. La tendencia de las sociedades a lograr esta gobernabilidad democrática a pesar de los problemas de inestabilidad e incertidumbre, es lo que Torrijos (2001) denomina como gobernabilidad reluctante, la cual considera como la gobernabilidad que surge de la ingobernabilidad debido a la inestabilidad, la incertidumbre y el caos. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. La gobernabilidad local y la global se fundamentan en los postulados de la teoría del rational choice para lograr la estabilidad y reducir los niveles de incertidumbre en la interacción de los sistemas políticos y el mercado.

Un sistema de instituciones estables puede proveer información necesaria apara absorber incertidumbre en los mercados, que además utiliza los instrumentos que pone a disposición una sociedad de la información. La racionalidad económica es la base de la "lógica del mercado" y de la gobernabilidad de la sociedad bajo el principio dominante que la naturaleza y conducta humana, como una inviolable verdad, pueden ser caracterizadas por la persecución de la maximización de beneficios personales que aseguran el interesamiento en sí mismos. Es decir, los individuos buscan los incentivos económicos personales propios de los mecanismos del mercado para maximizar sus beneficios.

Hasta cierto punto, sin embargo, existen fines sociales o motivaciones de conductas económicas enraizadas en un contexto societal, aunque los medios necesarios para lograrlos sean económicos o no económicos. La teoría de la conducta de las organizaciones influye más en el campo de la teoría de la organización que en la economía y no agota las lecciones de la teoría de la organización con aplicación en la economía y ayuda a la formación del espíritu racional del economista mediante una propuesta metodológica instrumental, más que una doctrina, para que obtenga conclusiones correctas. La teoría de la organización aporta importantes propuestas para la teoría de la empresa basada en la economía de los costos de transacción, que incluyen las teorías de los agentes y actores, los procesos de transformaciones en las unidades de análisis y la descripción de nuevas formas de gobernabilidad. Las nuevas formas de gobernabilidad de lo colectivo deben sustituir a las estructuras rígidas y pesadas que no dan respuesta a exigencias de la individualidad con orientación abierta y que por lo tanto requieren la emergencia de nuevas formas colectivas con estructuras más abiertas, flexibles y livianas que respondan a las exigencias de la individualidad con orientación abierta. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización

post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes. La teoría de la empresa fundamenta las formas de gobernabilidad como procesos en transformación constante y no como construcciones terminadas.

Bajo el modelo emergente de globalización neoliberal, esta "lógica del mercado" y de "pensamiento único", se aplica a todo tipo de relaciones económicas, políticas y sociales, lo que da como resultado una creciente sublimación de la política y un desprecio de la realidad social (Birchfield, 1999). Los economistas neoliberales pretenden establecer en el mercado la solución automática a todos los problemas mediante el uso eficiente de los recursos. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación "puramente expresiva y gratuita" como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). La lógica del sistema hegemónico es inversa al protagonismo de lo colectivo, dando mayor énfasis a las políticas y estrategias individuales.

Los individuos llevan a cabo sus relaciones con otros para intercambiar de todo, desde mercancías hasta poder, influencias, valores, agresiones, etc. Y en el marco de estas relaciones se generan las reglas bajo las cuales tienen que realzarse estos intercambios, dando origen a las instituciones, tales como el mercado, las jerarquías, etc. Hay ciertas instituciones que no permiten el comportamiento racional "correcto".

Los acercamientos analíticos de la teoría de la agencia (Agency theory o AT) referida a la tecnología para monitorear obligaciones que toman la forma de nexos contractuales y organizacionales, así como la teoría de la economía de los costos de transacción o transaction cost economics (TCE) que relacionan a las organizaciones como estructuras de gobernabilidad, bajo el supuesto conductual de una racionalidad confinada y oportunista, constituyen la base de la nueva racionalidad económica y la gobernabilidad de la sociedad.

La economía de los costos de transacción argumenta que cada forma genérica de gobernabilidad se apoya en una forma distintiva de contrato legal en un ambiente circunstancial. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. La transacción ideal en economía y en derecho es la de los mercados spot en los cuales la identidad no es importante y se aplican las reglas legales.

Las diferencias en las estructuras de gobernabilidad están relacionadas a los atributos de las transacciones, las cuales tienen diferentes necesidades de adaptaciones. El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es.

Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico "gorrón" causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula

contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes.

Una vez que la acción colectiva se inicia, en el curso de este mismo proceso emerge una colectividad que puede aplicar sanciones informales contra los que contravienen y recompensar a colaboradores a bajo costo (castigo u ostracismo), a ningún costo e incluso a premio (avergonzar, reprochar o criticar) (De Swaan Abram, 1997). Las estructuras de gobernabilidad tienen diferentes capacidades para proveer adaptación autónoma y cooperativa. Los diferentes atributos de las transacciones se alinean con las estructuras de gobernabilidad las cuales difieren en sus costos y competencia, así como en sus formas de economizar los costos de transacción.

La economía de los costos de transacción sostiene que cada modo genérico de gobernabilidad se define por un síndrome de atributos internamente consistentes, de los cuales, la intensidad de los incentivos, los controles administrativos y el régimen del contrato legal son especialmente importantes. El concepto del contrato como una forma de gobernabilidad enfatiza la continuidad, mientras que adopta una perspectiva a largo plazo de mercados incompletos. Cualquier cosa o asunto que pueda ser materia de contratos puede también ser analizado en términos de las economías que generan los costos de transacción. (Williamson, 2000).

Por ejemplo, la economía de los costos de transacción interpreta al consejo de dirección, como un elemento de seguridad que apoya los contratos para la rentabilidad financiera, y es en este sentido, que tanto la administración de la deuda como de la rentabilidad, constituyen mecanismos de gobernabilidad. La economía de los costos de transacción proporciona la plataforma para alcanzar la economía mediante el diseño de estructuras de nuevas formas de organización y consecuentemente de nuevas formas de gobernabilidad. Lo importante en este diseño es que todas las partes involucradas en la determinación de los costos de transacción deben obtener beneficios en forma mutua.

No solamente la economía de los costos de transacción toma como unidad de análisis a la transacción, sino que ve a la gobernabilidad como el medio para establecer el orden, mitigar los conflictos y obtener ganancias mutuas. Una aproximación al estudio de los costos de transacción desde la perspectiva de la economía, proporciona el soporte teórico para integrar la teoría de las estructuras de gobernabilidad de las empresas. Las diferencias en las estructuras de gobernabilidad se relacionan con los atributos de las transacciones. Las orientaciones racionales de las condiciones económicas y sociales integradas en sus estructuras para su aplicación delimitan la concepción de esta racionalidad.

De acuerdo con Przeworski (1996), la economía es una red de relaciones múltiples y diferenciales entre clases particulares de principales y agentes: administradores y empleados, dueños y administradores, inversionistas y empresarios pero también entre ciudadanos y políticos, políticos y burócratas. El desempeño de las empresas, de gobiernos, y de la economía como un todo depende del diseño de las instituciones que regulan estas relaciones y de las fronteras que se establezcan para la separación de los campos de acción entre los Estados-nación y las empresas. Los empresarios son administradores que actúan como agentes de los inversionistas y funcionarios de las empresas.

En el problema tradicional de la agencia, tanto el esfuerzo costoso del agente, como los factores estocásticos más allá del control del agente, influyen en los resultados de una actividad productiva propiedad del principal, quien elige un contrato de compensación para el agente que trata de alcanzar incentivos económicos óptimos. Desde luego, lo que se desea con estos incentivos óptimos es prescindir del esfuerzo con el daño a riesgos compartidos causados por la exposición del agente al exceso de riesgo de los factores más allá del control del agente. ". Para Giddens (1999:36) los riesgos son "la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza." Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno.

Sin embargo, lo que importa es que los empleados tengan incentivos para maximizar sus esfuerzos, si los administradores tienen incentivos para maximizar sus utilidades, si los emprendedores tiene incentivos para tomar solamente los riesgos buenos, si los políticos tienen incentivos para promover el bienestar público, si los burócratas tienen incentivos para implementar metas establecidas por los políticos. Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. El medio ambiente global externo de las organizaciones es más favorable a un desarrollo emprendedor si se dan los incentivos del mercado favorables.

Gersbach (1999), por ejemplo, considera un modelo donde el público está inseguro acerca de la competencia de un agente y si el agente está preocupado acerca de las consecuencias de decisiones de políticas, como en el caso del estadista, o si solo está preocupado acerca de las creencias del público, es decir, populista. Un agente competente puede juzgar las consecuencias de un proyecto de políticas y debe invertir inmediatamente o nunca. En términos generales, el bienestar social puede ser mayor comparado a la situación en donde el público está inseguro si el agente es un estadista o un populista. Los tipos de populistas distorsionan su decisión, mientras que los tipos de estadistas son más eficientes en sus decisiones.

El antiguo debate entre lo público y lo privado bajo el marco de referencia de la teoría de la agencia está relacionado con el cuestionamiento de cual forma de propiedad es la que principalmente promueve el bienestar social. Los individuos que forman las partes de un contrato que se elabora fuera de las estructuras de gobernabilidad del Estado, encuentran otras formas privadas para realizar sus transacciones. La teoría de la agencia da ventajas a la información asimétrica y oportunista. La esfera de lo público no es solamente aquello que se concentra en el Estado, sino que también comprende los debates y las discusiones que no necesariamente corresponden al sistema político. Lo público es el espacio para la discusión de los intereses generales y la apelación de valores, según Costafreda (2001).

La compatibilidad entre los objetivos políticos y económicos ocurren cuando en un sistema político ideal se enfatiza el mercado neoclásico con cero costos de transacción, lo que permite que ocurra el intercambio político de la maximización de la riqueza. Altos costos de transacción son inherentes a las dificultades para organizarlos. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos.

Economizar mediante el empleo de los costos de transacción es un concepto perverso en el cual todos los beneficios y costos tienen que calcularse al diseñar las diferentes formas de organización, lo cual tiene que hacerse comparativamente. Tanto en economía como en derecho, la transacción es una de mercado spot donde la identidad no es importante, pero si la aplicación de reglas legales. La comparación de las diferencias de los costos de transacción entre las diferentes formas de gobernabilidad es un proceso más complicado que el simple cálculo del mismo.

Por lo tanto, es más fácil establecer los costos para las formas de gobernabilidad en forma unitaria, que comparar las diferencias de estos costos. Sin embargo, la desigualdad económica, la heterogeneidad étnica, lingüística, religiosa, etc., debilitan a la comunidad e incrementan los costos de transacción. Los costos de transacción de la comunidad se elevan con las diferencias étnicas y las desigualdades económicas. El problema está en que ningún sistema político es perfectamente eficiente, lo que repercute en limitaciones que reducen la riqueza.

El modelo teórico agente-principal incorpora explícitamente los incentivos y las asimetrías de información en el diseño de mecanismos óptimos en las organizaciones. El equilibrio de cualquier mecanismo se obtiene como un resultado de un mecanismo de revelación bajo e cual los agentes revelan confiadamente su información privada. El modelo económico basado en el equilibrio asume que los individuos tienen expectativas comunes de sus propias conductas. En el mercado, este equilibrio se obtendría de las decisiones que tomen los diferentes agentes en función de la información disponible.

Las relaciones entre al agente y el principal (el administrador y el dueño) son importantes en la determinación de los niveles de eficiencia. La teoría de la agencia se refiere a las relaciones entre el principal y el agente, provee de información oportunista y asimétrica, salvaguardando las transacciones que realicen contra acciones que son oportunistas. Las transacciones entre las diferentes partes donde la identidad no importa incluye especificidad de los activos en sus diferentes formas, la incertidumbre y la frecuencia.

La unidad de análisis de la teoría de la agencia es el agente contratante, mientras que para la teoría de los costos de transacción es la misma transacción materia del contrato. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. La unidad de análisis de la transacción es la unidad de actividad que contiene en sí misma los principios de conflicto, mutualidad y orden (Commons, 1932, p.4). En el diseño de las estructuras en función de los análisis de los costos de transacción, deben proporcionar beneficios a todas las partes involucradas en forma mutua.

La teoría de los costos de transacción con todos los tipos de relaciones contractuales eficientes, tales como los costos en información, negociación, contratación y garantía para hacer cumplir las condiciones de los intercambios, examinan formas alternativas de organización económica para economizar con respecto a las consecuencias de una racionalidad confinada. Por ejemplo, los costos de información elevan los costos de transacción en el ámbito de diseño y aplicación de las políticas públicas.

El estudio de los costos de transacción desde la perspectiva de la economía, proporcionan las bases para la integración del cuerpo teórico de las estructuras de gobernabilidad de las

empresas. Estos costos de transacción se relacionan con el desarrollo de estructuras de gobernabilidad que aseguran la obtención integrada de los contratos. La perspectiva de los mercados como marco de referencia enfatiza la importancia de la continuidad a largo plazo mientras que reconoce la imperfección de los mismos contratos. Las diferencias en las estructuras de gobernabilidad tales como sus costos y competencias, así como las formas de economizar los costos de transacción se alinean con los diferentes atributos de las transacciones. Las diferencias en las estructuras de gobernabilidad se relacionan con los atributos de las transacciones, ya que los mercados son desplazados selectivamente más que uniformemente.

La introducción de resguardos contractuales sustituyen las formas de gobernabilidad alternativas, como en los casos en que se mueven las transacciones del mercado a las jerarquías. Las transacciones económicas ocurren en el mercado, entre las empresas o en las jerarquías, al interior de las grandes empresas burocráticas. Cada forma de gobernabilidad se apoya en un régimen de contrato legal diferente. Ambas teorías son excepciones de la economía neoclásica que modela a la empresa como una función de producción cuyo objetivo es la maximizar utilidades mediante la reducción de los costos burocráticos.

La teoría neoclásica y el enfoque de los costos de transacción aplicados a la organización de las empresas y del mercado difieren ampliamente. La economía ortodoxa y neoclásica es más imperial porque impone una interpretación teórica de los precios de los fenómenos, mientras que la economía de los costos de transacción orienta sus cuestionamientos hacia lo que está sucediendo (Williamson, 2000:22).

Williamson (2000) hace una comparación entre los elementos que distinguen a las empresas de los mercados.

Elementos	**Empresas**	**Mercado**
Intensidad de los objetivos	Bajo poder	Alto poder
Controles administrativos	Mayor número de reglas y procedimientos administrativos y más apoyo de organizaciones informales	Menor número de reglas y procedimientos
Contrato legal	El contrato es de ordenanza y un acuerdo implícito interno	Contrato legalístico y regulado por el sistema judicial
Adaptación	Adaptaciones cooperativas	Adaptaciones autónomas

Cuadro elaborado por el autor en función de la descripción de Williamson (2000).

Dunning (1997), argumenta que los patrones cambiantes de demanda y avances tecnológicos han impactado los costos de transacción y coordinación de la actividad de valor agregado. Las instituciones e infraestructuras culturales sobre las que se desarrolla tal actividad, han afectado críticamente los méritos de los modos alternativos de la organización económica, y sobre los años, la combinación óptima de estos modos ha sufrido un cambio marcado. De hecho, la combinación de los modos de organización económica es determinante de los diferentes niveles de desarrollo sustentable.

Sin embargo, para que los pueblos alcancen niveles de desarrollo autosostenible es necesario no solamente que realicen su revolución capitalista, sino que también logren su

desarrollo democrático, en donde la democracia es verdaderamente la condición del desarrollo. El concepto de democracia ha sido abandonado y reelaborado en uno nuevo que sirva de apoyo y mantenimiento al status quo del sistema capitalista. El crecimiento y el desarrollo sustentable no necesariamente se relacionan con lograr la modernidad, sino que depende más de factores indirectos. Esta tendencia y otras son las causantes de lo que Wagner (1996) denomina el final de la modernidad organizada.

Si este desarrollo sustentable se relaciona con las formas de organización económica, entonces las actividades empresariales adquieren relevancia por ser la base de las actividades económicas de los individuos consideradas en tanto que son relaciones entre fines y recursos escasos. Las condiciones regionales apara la promoción de las actividades empresariales están relacionadas con el fomento de la integración o diversificación de la estructura económica regional y la coordinación interinstitucional de planes, programas y proyectos de impacto regional (Tarapuez Chamorro, 2001). Las diferentes formas de organización despliegan un conjunto de elementos. Hay que recordar que para la teoría neoclásica, los problemas que tienen las empresas se deben a que se desvían de sus principios e incurren en altos costos burocráticos.

Las variables culturales están siendo subestimadas como obstáculos al desarrollo, y tampoco se toma en cuenta el estudio prioritario de las necesidades manifiestas por sobre los deseos o preferencias de la población para la planificación del desarrollo. Las organizaciones que se diversifican en los mercados internacionales tienen la tendencia a ser más innovadoras y a desempeñarse mejor que las organizaciones que no lo hacen. En parte, esto se debe a que participan en mercados mayores, en los cuales no solamente pueden obtener más altos retornos sobre las inversiones, sino también para proveerse de los recursos necesarios para desarrollar nuevas y mejores innovaciones.

Los procesos de globalización creciente presionan fuertemente a las organizaciones para la obtención de una constante "desintermediación" de los procesos de producción, distribución y consumo que altera los patrones establecidos al nivel organizacional y acelera la innovación de nuevos mecanismos que proporcionan ventajas en la adquisición de la información y expectativas, en un marco de instrumentalización de la sociedad de información. Así, la forma en que las corporaciones multinacionales se organizan en un medio ambiente global altamente competitivo, el cual las presiona para dejar de operar como si fueran una colección de subsidiarias independientes, por una estructura organizacional más flexible. Las corporaciones transnacionales operan en sinergia con el Estado imperialista que detenta o concentra el control y la propiedad..

Los grandes intereses de las corporaciones transnacionales para debilitar la función reguladora del Estado-nación, se centra en la avidez para lograr mayores y mejores recursos, penetración de mercados, reducción de costos de transacción en sus operaciones comerciales y la obtención de mayores utilidades. Esta estructura les facilita la integración de sus actividades a través de las diversas localidades geográficas, a fin de compartir los recursos y ganar en economías de escala. La adopción del modelo organizacional transnacional por una empresa multinacional es ampliamente reconocida como los medios preferidos para ir global (Bouderau, Loch, Robey y Straud, 1998)

Las organizaciones multinacionales deben desarrollarse en organizaciones transnacionales a efecto de obtener la coordinación global para compartir los recursos y ganar

en economías de escala. Al mismo tiempo, permiten la autonomía local para tomar ventajas sobre las oportunidades en los mercados locales nacionales (Hitt et al, 1997). Según Castells (1999:292) la autonomía local tiene como fundamento la idea de que los ciudadanos son los más indicados para juzgar las acciones del gobierno. Los gobiernos locales deben potenciar los mecanismos para tomar decisiones en asuntos de su competencia lo que implica responsabilidad ante la comunidad. La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad.

De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales. Las competencias de los gobiernos deben ser precisadas en los diferentes niveles entre aquéllas que son exclusivas y las que son concurrentes.

El reto que enfrentan las organizaciones transnacionales es identificar y explotar las sinergias existentes a través de las fronteras y balancear las demandas locales con la visión global de la organización. La propiedad y el control de estas organizaciones transnacionales se concentra en pocos Estados imperiales. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula. El diseño estructural de una organización transnacional requiere de una cultura corporativa que valora las diferencias globales tanto en las culturas como en los mercados (Hitt, Keats and DeMarie, 1998) Bajo una cultura corporativa, las empresas transnacionales muestran comportamientos directamente proporcionales al grado de apoyo y restricciones que reciben de los diferentes Estados nacionales.

Todavía más, en lo concerniente a los gobiernos, como supervisores y participantes en el proceso creativo y de asignación de recursos, se representan cualquier papel del todo, sus acciones en afectar la competitividad de las firmas localizadas dentro de su dominio son propicias a afectar ese desempeño. Para Porter (1991), la competitividad, las empresas tienen que competir en un entorno formado por cuatro atributos que estimulan o limitan la creación de ventajas competitivas.

Estos atributos son la disponibilidad de los factores de producción, la demanda interna, la estructura y estrategia de la rivalidad de las empresas y los sectores conexos. La movilidad de los factores de producción conlleva un enfoque emprendedor y de innovación que modifica constantemente los procesos de las estructuras económicas. La creciente integración estructural de las políticas de los mercados, jerarquías y gobiernos a través del espacio geográfico, desde la mitad de los setenta, ha dado origen a una nueva ola de pensamiento de los economistas, teóricos organizacionales, y analistas de negocios.

Precisamente, durante la segunda mitad de la década de los setenta se inicia la transferencia del poder y del mando del Estado al mercado mediante programas de desregulación que en realidad significaron la regulación por el mercado. Sin embargo, lo que se ha producido ha sido un déficit de regulación y gobernabilidad al no producirse la regulación por el mercado y al vaciarse la regulación del Estado. El análisis en los tipos de veto es actualmente en discusión de la reforma institucional es indicativo de la percepción que prevalece de déficit en el sistema político.

Este nuevo pensamiento es acerca del papel de las instituciones y los modos organizacionales en la toma de decisiones económicas (Dunning, 1997) La principal contribución de los economistas clásicos y neoclásicos es la de avanzar el entendimiento de la naturaleza de los mercados. Los mercados son considerados como un fenómeno económico, mientras que los institucionalistas enfatizan el significado de las instituciones como un fenómeno económico y desprecian el sentido en que lo entienden los sociólogos como Zucker (1987)

Se necesita determinar los elementos esenciales de una teoría dinámica del papel de las empresas en el desarrollo económico de tal forma que proporcionen un marco de referencia para el análisis social e institucional. El análisis cualitativo institucional compara las alternativas estructurales discretas. Las instituciones son diseñadas para obtener resultados eficientes y representan un papel importante en el desempeño económico. El modelo globalizador de la economía ha dado mayor preponderancia a las empresas en las relaciones con el Estado-nación, aunque resulta difícil separar las fronteras entre el Estado-nación y las empresas, no solo en el plano conceptual sino también en la realidad.

La percepción y concepción dominantes es la de que la separación entre Estados y firmas es un producto del tratamiento de modernidad del mismo Estado-nación. De hecho, la nación requirió de un espacio para desarrollar su vocación histórica, la cual geopolíticamente se convierte en el Estado-nación como forma de gobernabilidad de la modernidad. El espacio nacional se encuentra delimitado por fronteras territoriales geográficas y físicas que definen la ocurrencia de ciertos fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales. Estos espacios nacionales han sido determinados como espacios soberanos.

Pero además, este espacio geopolítico cede su lugar a la organización del espacio geoeconómico con sus instituciones de mercado. La geopolítica se origina en el espacio nacional, del cual siguen los espacios internacionales y global donde la geoeconomía tiene mayor preponderancia. Las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales promueven la extensión de la geopolítica y la geoeconomía del espacio nacional al espacio internacional y global, no obstante que operan en sinergia con el Estado imperialista que detenta o concentra la propiedad y el control.. Pero en el espacio global que es en donde se representan los procesos de globalización, estos tienen lugar en un contexto sumamente fragmentado.

El punto de vista neoclásico de cómo se comportan los mercados y como deben actuar las instituciones, se fundamenta en la teoría de la elección racional (rational choice) de la economía organizacional. La teoría de la elección racional se sostiene en la hipótesis de que conducta de elección de los individuos trata de maximizar sus propios niveles de satisfacción, hipótesis que no puede afirmarse totalmente. Bajo el enfoque del rational choice propuesto por el neoinstitucionalismo, las instituciones tiene que diseñarse de tal forma que maximicen la racionalidad de los individuos, que maximicen el logro de beneficios y se reduzcan los costos de transacción de sus acciones sujetas a las relaciones del mercado. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. La reforma institucional puede diseñarse en una síntesis de los dos acercamientos de elección racional institucional y un institucionalismo histórico.

Los actores pueden reformar las instituciones básicas de otras maneras más que por evolución en un largo camino institucional, de tal forma que combina las diferentes

tradiciones de la democracia La propuesta de aprendizaje institucional sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de su sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional (Kaiser, 1997).

Las preferencias de los actores políticos son cruciales para lo que se diseña institucionalmente porque los participantes conocen que los altos costos pueden involucrarse si las decisiones van en contra de ellas. El nuevo institucionalismo se aparta del estrecho margen de tipos y explícitamente está relacionada en modelos explicativos basados en actores, tales como a teoría de la elección racional o la teoría de la organización.

El neoinstitucionalismo asume que los sistemas de incentivos económicos de las instituciones desempeñan un papel importante en la dinámica y desarrollo de los sistemas económicos, políticos y sociales. El nuevo institucionalismo es por lo tanto, más que un mensaje simple, el cual no debe sorprender a los institucionalistas clásicos de la importancia que tienen las instituciones. Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política.

Hay dos variables de esta tradición de la investigación en la ciencia política. La primera está basada en la elección racional e interpreta a las instituciones como soluciones de equilibrio para los problemas de la acción colectiva. El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otros ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir, (De Swaan Abram, 1997) La segunda llamada institucionalismo histórico rechaza algunos supuestos de la elección racional y enfatiza fuertemente al tiempo y secuencias en el desarrollo institucional mientras que los teóricos de la elección racional están interesados explícitamente en cómo estas preferencias se construyen socialmente (Kaiser, 1997).

Este neoinstitucionalismo económico o Nueva Economía Institucional opera en las interrelaciones entre el medio ambiente de las instituciones y la gobernabilidad institucional. Las condiciones sociales, económicas, tradiciones culturales o eventos impredecibles importan pero no influyen en forma mecánica en la acción política. La explicación de la acción política en un contexto institucional es diferente de explicar el cambio institucional en períodos largos de tiempo.

Los actores políticos pueden inventar nuevas estrategias para adaptarse a los cambios de reglas y las instituciones son parte de una configuración, donde un cambio hecho en una institución puede tener efectos impredecibles y no esperados en otros. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. En el último caso, la historia y la cultura política, entendida como los supuestos básicos del mundo de la política, las cuales restringen el rango de alternativas disponibles, tienen que ser sistemáticamente integradas como factores, los cuales entre otros, dan forma a la manera en que los actores políticos perciben las situaciones de elección (Kaiser, 1997).

El neoinstitucionalismo fortalece el marco de referencia de las estructuras de gobernabilidad regulatorias mediante mecanismos de rational choice, costos de transacción, teoría de la agencia y establecimiento de los contratos internos mediante la provisión de

información que es asimétrica y oportunista. Las diferencias en las estructuras de gobernabilidad se relacionan con los atributos de las transacciones, ya que los mercados son desplazados selectivamente más que uniformemente.

La racionalidad instrumental del rational choice o elección racional se orienta por la eficiencia para el crecimiento económico como un fin en sí mismo. El crecimiento económico así conceptualizado se mide cuantitativamente en términos cuantitativos del producto interno bruto y el consumo real promedio. Esta gobernabilidad regulatoria (Henisz, 1999), puede ser administrativa, legislativa, o bien la empresa puede permanecer organizada como propiedad del Estado, ya sea como empresa del Estado o como departamento del gobierno a pesar de que sus costos burocráticos pueden ser demasiado elevados.

Las instituciones determinan las reglas formales e informales del juego en las que se llevan a cabo las relaciones de la acción colectiva. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. De esta forma, el llamado sector informal de la economía representa un tipo de subsidio para las empresas capitalistas en el sector formal. Una vez que la acción colectiva se inicia, en el curso de este mismo proceso emerge una colectividad que puede aplicar sanciones informales contra los que contravienen y recompensar a colaboradores a bajo costo (castigo u ostracismo), a ningún costo e incluso a premio (avergonzar, reprochar o criticar) (De Swaan Abram, 1997).

Se reconoce la existencia de una relación estrecha entre la acción colectiva y el diseño de políticas públicas. La acción colectiva y el interés público no deben fundamentarse únicamente en la racionalidad instrumental sino también en los valores cívicos. La acción colectiva y la persecución del interés público limitan los alcances del rational choice debido a que no logra la mayor reducción de los costos de transacción y a los malos diseños institucionales.

Las instituciones deben facilitar los incentivos adecuados para estimular la racionalidad de los individuos considerados como agentes económicos. Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política. Para hacerlo, el gobierno debe diseñar políticas que eliminen los mecanismos de discriminación y alinear el medio ambiente institucional. Las condiciones sociales, económicas, tradiciones culturales o eventos impredecibles importan pero no influyen en forma mecánica en la acción política.

A su vez, el diseño del Estado neoliberal y de la formulación de las políticas públicas, se orientan y se ajustan a los fundamentos de las teorías de la elección racional y de la elección pública de la economía neoclásica. Estas guían las decisiones hacia la búsqueda de la eficiencia, la justicia y el interés público en forma de una racionalidad objetivista científica, y por lo tanto positivista, más que desde un criterio procedimental. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general. La presencia del interés público es relativa y se alcanza mediante acuerdos que se vuelven contradictorios desde la perspectiva de la racionalidad instrumental en la que la principal motivación de los individuos es su propio interés.

El interés público se define en procesos de negociación entre los intereses de diferentes grupos entre los que el Estado es mediador. El neoliberalismo no se identifica con un Estado

centrado en la racionalidad absoluta y la idea de un interés público, sino que se identifica al Estado como un agente económico de los intereses hegemónicos que dominan el mercado. De acuerdo al modelo neoliberal de Estado, este tiene la misión de posibilitar el funcionamiento eficiente del mercado mediante el diseño institucional, el mínimo necesario.

La eficiencia de los agentes económicos está vinculada a las estructuras institucionales, por lo que se requieren análisis del diseño institucional de los sistemas políticos. Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997).

De acuerdo con esto, si estamos interesados en la explicación del cambio institucional, se debe estar consciente que la información disponible para los participantes es limitada. Esto significa que cuando se asume que las intenciones de los actores políticos están conectadas lógica y empíricamente a los resultados institucionales, tenemos que reconocer el hecho que esto es una relación más compleja la cual está influenciada adicionalmente por una amplia gama de factores contextuales

Las estructuras institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional. Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos.

De acuerdo con este enfoque de diseño del Estado, los individuos buscan la maximización de sus utilidades. La teoría de la elección pública, se relaciona con el análisis de la administración del Estado moderno representado por el desempeño de los administradores y servidores públicos que persiguen la maximización de beneficios. Los Estados que promueven este tipo de “mercado interno”, las operaciones de compraventa se realizan entre los diferentes departamentos entre sí, y si encuentran una mejor oferta fuera de su estructura, la efectúan.

El Estado moderno era un espacio de autoridad con un discurso que tiene como objeto magnificar el poder y el conocimiento. Para el Estado neoliberal, la administración involucra una separación del sistema dirigente que era omnipresente y adaptar un sistema donde el centro de las decisiones económicas está en otra parte y en donde la administración y el Estado tienen que centrarse a sí mismos para jugar un rol de apoyo y actuar como árbitros en el juego en el cual ya no juegan el papel de jugadores dirigentes. Es en este escenario que surge el Estado neocolonial, que es “tan activo, regulador e intervencionista como el populista o el estado de bienestar, pero su actividad, reglas e intervención se dirigen a servir

los intereses de una clase diferente: el capital extranjero y la CCT (clase capitalista transnacional)" de acuerdo a Petras (2001d).

El Estado moderno monopolizó la violencia institucional, pero se responsabilizó de la administración de políticas sociales. Sin embargo, surge el cuestionamiento moral (Hoff et al 1993) cuando los individuos realizan acciones para maximizar su propio bienestar en detrimento del bienestar de otros, sobretodo en aquéllas situaciones donde los problemas de información previenen la asignación a los individuos del daño total causado por esta acción. La obtención del bienestar es el principal fin de toda organización de sistemas humanos. El proceso por el que transcurren las acciones directas se caracteriza por pasar del conflicto a la lucha, seguido de la negociación y el monitoreo y por último en la asociación en el mejor de los casos.

La economía clásica o convencional ha asumido esta conducta hiper racional de los individuos. Los dos pilares de la economía ortodoxa son la teoría neoclásica de la empresa y la teoría neoclásica de la conducta del consumidor. La teoría neoclásica de la empresa como una función de producción es una construcción tecnológica en la cual se analizan los trabajos internos de la empresa, las formas y arreglos internos de la organización y en relación con el mercado. Es decir, no solamente se analizan los fenómenos internos de la organización sino también en las relaciones contractuales con otras empresas.

Sin embargo, está surgiendo un nuevo enfoque en la economía conductual que diverge de la teoría de la elección racional (rational choice) Este nuevo enfoque surge en el supuesto de que en la realidad las personas actúen en forma diferente. Es decir, en forma irracional, al buscar la maximización de sus beneficios y de su bienestar mediante el uso de la información disponible y actuando siempre con un auto interés a largo plazo, porque carecen de la visión y de la voluntad para hacer lo que los textos de economía sugieren. En la teoría del rational choice o elección racional, los individuos solo se motivan por su propio interés.

Las variables culturales, políticas, sociales, etc., son vistas como irracionales y no son consideradas por los análisis de la elección racional. El rational choice estudia las relaciones del mercado y las aplica a las relaciones sociales y políticas, a efecto de diseñar las instituciones que maximicen los beneficios de los individuos mediante la creación de incentivos económicos y reduzcan los costos de transacción. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Por ejemplo, hasta ahora, se estudia la relación entre la confianza y la elección racional (Moe, T. 1995). Los defensores del rational choice argumentan la eliminación de todo elemento irracional que influya en las decisiones de intercambio para lograr el nivel óptimo de los beneficios.

Este nuevo enfoque de economía conductual usa las teorías de la conducta para explicar el "rompecabezas del premio de la utilidad". Esto lo hace bajo el hecho de que los retornos de utilidad a largo plazo son más altos. Por lo tanto, de que las personas odian más las pérdidas que gozan de las ganancias, de que la gente es recíproca al espíritu de otros más que a contra atacar y que las percepciones de injusticias alimentan la revancha aún cuando los costos sean mayores. Además, sostienen los teóricos de este modelo, los economistas Richard Thaler, Andrei Shleifer, Daniel Kahneman y Amos Tversky entre otros, que el trabajo que toma realizar la planeación financiera es una buena razón por la cual las personas son negligentes y descuidan las cosas más importantes que requieren de esfuerzos personales.

Diferencias entre el enfoque racional e irracional o conductual de la economía.

ENFOQUE DE LA ECONOMÍA CONVENCIONAL O DE LA TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL	ENFOQUE DE ECONOMÍA CONDUCTUAL O DE LA ELECCIÓN IRRACIONAL
La gente se enfoca en todos los activos	La gente compartamentaliza sus finanzas. Viviendas con ahorros elevados tienen deudas de tarjetas de crédito con altos intereses.
Las acciones se desempeñan mejor que los bonos.	La gente toma períodos largos para evitar perder dinero. Ya que las acciones son de mayor riesgo que los bonos, los inversionistas en acciones demandan retornos más altos para compensar las pérdidas.
Las personas actúan sobre la base del puro interés.	La gente iguala su conducta a aquélla de quienes le rodean. Esto explica por qué las personas hacen sacrificios voluntariamente y por qué aquellos que se sienten maltratados pueden vengarse a pesar de que el costo es más alto.
En la vida diaria, la gente se enfoca a largo plazo.	La negligencia en asuntos importantes es rampante. Esta es la razón por qué muchas personas tienen grandes sumas en cuentas de cheques con bajos intereses y no ahorran para el retiro.

Elaborado con información de Whalen, Charles J. (2000) "Putting a human face on economics", Business Week, Number 3676-1006, July 31. Páginas 65-66.

La sobre vivencia de las regulaciones pueden tener como explicación las teorías de la elección pública acerca de los grupos y la búsqueda de rentas. Así, las políticas elaboradas fuera de esta definición del Estado neoclásico son vistas como generadoras de rentas económicas para apoyar el pago de las corruptelas (mordidas) y para recompensar a los electores por el apoyo político. Por lo tanto, la racionalidad económica ha forzado a los Estado-nación a desmantelar instituciones y organismos regulatorios en un intento para alcanzar el concepto ideal.

Sin embargo, se cometen excesos, por ejemplo, cuando los emprendedores sobrellevan los costos de agencia y tienen buenas razones para rendir cualquier discreción para expropiar la riqueza de los inversionistas y para servir con más lealtad a los accionistas. No hay que olvidar que se obtienen costos de agencia más bajos bajo la operatividad del modelo de propiedad privada que bajo el modelo de propiedad pública. Las partes contratantes que en forma privada y fuera de las estructuras de gobernabilidad del Estado efectúan transacciones, encuentran incentivos suficientes para hacerlo.

Los capitalistas emprendedores tienen ciertos incentivos para gorrear pero deben de cubrir ciertos costos de información en un mercado de propiedades, en donde obtienen utilidades negociando el precio de la acción hasta que alcanzan el valor neto presente de los retornos futuros esperados. La propiedad pública es menos efectiva para controlar los costos de la agencia que la propiedad privada. La conclusión lógica, afirma Coffee (1999) es que la

regulación promueve la eficiencia económica, más que confiar en la contratación financiera solamente.

La economía organizacional se caracteriza por una coexistencia en un estado constante de tensión vigorosa pero creativa entre la intensiva competencia de los mercados y múltiples empresas. A mayor competencia se generan estructuras de mercado más competitivas. En un modelo competitivo, las organizaciones maximizan sus beneficios si cuentan con una tecnología que genere rendimientos constantes a escala. La interacción continua entre las empresas que se someten a una búsqueda incansable de nuevas formas que generan valor y los mercados que presionan a las empresas a rendir parte de este valor a otros.

La economía de la organización se enfoca a los costos de coordinación y transacción de la actividad económica, bajo la tesis de que en condiciones de competencia perfecta, estos costos son cero para usar el mercado como un modo de asignación de recursos, en el supuesto de que la información necesaria sea completa. La economía de la organización propone que las organizaciones importan y que además son susceptibles de análisis.

El problema principal de análisis en la economía de la organización es el problema de la adaptación, y para ello, elabora el concepto de adaptación colaborativa como una forma consciente, deliberada y con propósito de trabajar a través de la administración. La adaptación involucra costos de transacción más bajos y más alto los resultados del cambio que la reforma. La lógica de la adaptación autónoma y cooperativa conduce a una teoría predictiva de la economía organizacional (Barnard, 1938: 4; Williamson, 2000:8-9).

La adaptación autónoma de las organizaciones responde a los cambios en los precios relativos mientras que las adaptaciones cooperativas de las organizaciones se logran mediante la administración. No solamente las transacciones tienen diferentes necesidades de adaptación de estos dos tipos, sino que también las estructuras de gobernabilidad tienen diferentes capacidades para proveer adaptación autónoma y cooperativa (Williamson, 2000: 19-20)

En aquéllas culturas donde las relaciones de confianza tienen un valor de activo social, los costos de transacción se reducen, aumentando la competitividad del sistema económico y político. Así, un elevado desarrollo económico puede coexistir con un debilitamiento de las relaciones de confianza y cooperación cívica (Grootaert, 1998). El capital social se expresa en la relación existente entre relaciones de confianza y cooperación cívica Por otro lado, cuando los costos de transacción son elevados, inherentemente las dificultades de organización son mayores.

La confianza es definida como la probabilidad subjetiva con la cual un actor evalúa que otro actor o grupo de actores desempeñará una acción particular, antes de que pueda monitorear tal acción. Independientemente de su capacidad para poder monitorear, y en un contexto en el cual afecta su propia acción (Adler, 1999) Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Las relaciones entre los actores y grupos atraviesan por procesos determinados por situaciones específicas de conflicto, enfrentamiento, negociación y acuerdo, monitoreo y asociación. Los científicos sociales deberían estar preparados para designar bien los atributos de los actores, tales como las condiciones de cognición y auto interés o interés propio.

El desarrollo de los proyectos y las reformas para la transformación, siempre son modificados por las dinámicas gestadas por los actores (Giddens, 1984; Clegg, 1990). Los costos y beneficios de la reforma económica, política y social pueden ser compartidos por los diferentes agentes dentro de marcos institucionales que faciliten la participación ciudadana. La reforma económica implica reformas al sistema político, el desarrollo de las instituciones políticas y la reforma del Estado. Las instituciones del sistema político, tales como la los movimientos y los partidos políticos pierden legitimidad y credibilidad y se convierten en inestables.

La participación de los ciudadanos en la gestión pública es uno de los objetivos de los procesos de gobernabilidad democrática. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. La gestión pública es un factor importante en la toma de decisiones en materia de desarrollo.

Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general. Los individuos y las instituciones se reúnen en los foros, para elaborar demandas o para validar actuaciones de la sociedad política. La sociedad política es un espacio en donde se representan los intereses de los diferentes grupos de la sociedad, pero que es diferente al espacio mismo de la sociedad civil. Para que la asociación y la participación ciudadana adquiera valor como instrumento democrático debe ir acompañada de libertad de expresión.

En la forma tácita del conocimiento, la confianza es una condición esencial para la transferencia del conocimiento efectivo. Adler argumenta que la forma de confianza más efectiva es la confianza que tiene propiedades efectivas únicas para la coordinación de actividades intensivas en conocimiento dentro y entre las organizaciones, sobretodo la que denomina “confianza reflectiva”, en oposición a la confianza tradicionalista o ciega, para responder a creciente intensidad en el manejo de activos basados en el conocimiento. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado.

Pareciera que esta “confianza reflectiva” amenaza los actuales privilegios de los actores sociales dominantes, quienes se resisten mediante la combinación de interdependencias complejas entre los mecanismos de precios, autoridad y confianza, para responder a las tendencias de las relaciones interorganizacionales, interdivisionales y de los empleados. Las formas organizacionales de baja confianza logran menos costos pero su desempeño en la generación de conocimiento estratégico es muy pobre. La tendencia hacia una economía cada vez más intensiva en el conocimiento tiene grandes efectos en la dinámica capitalista, la cual se convierte en disfuncional. Todo esto representa un gran reto para la sociedad capitalista actual. Esta sociedad capitalista orientada por las estructuras del mercado tiene contradicciones que requieren la intervención política centrada en el Estado para regular las relaciones sociales, las que a su vez demandan de mecanismos de intercambio y mercantilización, generando así procesos simbióticos entre el mercado y el Estado. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

A pesar de que es innegable la fuerza expansiva de los mercados competitivos, éstos no siempre son la más eficiente forma de transacción de bienes y servicios. Cuando el desarrollo económico continúa, los costos de organizar la producción y el intercambio se incrementa, cuestionando las condiciones bajo las cuales las diferentes formas alternativas de gobernabilidad son más costo-eficientes. Los institucionalistas no necesariamente sostienen que la mano visible de las jerarquías y los gobiernos son necesariamente preferibles a la mano invisible de los mercados, sino cuales son las condiciones en que los gobiernos pueden intervenir exitosamente para reemplazar o facilitar otros arreglos institucionales, los cuales puedan ser aplicados con ciertas variaciones locales en contra de la imposición de un solo modelo de arreglos institucionales en el ámbito global.

Sin embargo, para los neoinstitucionalistas, la gobernabilidad no puede surgir de las instituciones tradicionales del Estado-nación, sino de la emergencia misma de la sociedad (Peters, 1998). Los arreglos institucionales para las estructuras de gobernabilidad basadas en tanto en la propiedad privada como en la propiedad pública, tienen sus respectivos costos de transacción, problemas de agencia y una complejidad en los contratos internos.

Las diferencias en las estructuras de gobernabilidad se relacionan con los atributos de las transacciones, ya que los mercados se desplazan en forma más selectiva que uniforme. Para atenuar estos problemas, los arreglos institucionales varían dependiendo de las formas organizacionales, y pueden ajustarse de acuerdo a las condiciones locales más que a la adopción de un modelo de arreglos institucionales global. La economía política institucional proporciona un marco teórico para la lógica de la gobernabilidad a partir de considerar al individuo como la unidad de análisis.

Esta perspectiva centrada en el individuo, permite visualizar las interacciones, programas y arreglos como parte de un sistema más amplio de prácticas administrativas, legislativas, legales y judiciales que permiten la acción del gobierno. La interacción de los sistemas judicial y legislativo en forma independiente permite al gobierno en el poder unificarse en varias formas de gobernabilidad, en regímenes presidencialista o parlamentario, en sistemas centralizado o federalista, etc. Cada una de estas formas de gobernabilidad se apoya en un régimen de contrato legal diferente. Explica, además, la formación de coaliciones de los diferentes actores, entre los burócratas, administradores, legisladores, etc.

El análisis de redes organizacionales permite determinar las relaciones sociales de los múltiples actores en donde para el análisis de la acción humana se requiere evitar la atomización implícita en los extremos teóricos de las concepciones socializadas. La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. En las formas de organización por redes ocurren importantes efectos informales. De esta forma, el llamado sector informal de la economía representa un tipo de subsidio para las empresas capitalistas en el sector formal. La presencia de un sector informal grande ayuda a mantener los salarios bajos y los costos de reproducir la fuerza de trabajo urbana a un mínimo para los negocios locales y para las corporaciones transnacionales, por lo tanto los capitalistas son capaces de maximizar sus utilidades pagando bajos salarios a sus trabajadores y pocos si es que algunos beneficios.

En el diseño institucional, hay que tomar en cuenta que los mecanismos gubernamentales, los no gubernamentales y los mecanismos que no corresponden al mercado son necesarios para la persecución de ciertos fines que los mecanismos de mercado no pueden lograr eficientemente. El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997).

De acuerdo con esto, si estamos interesados en la explicación del cambio institucional, se debe estar consciente que la información disponible para los participantes es limitada. Esto significa que cuando se asume que las intenciones de los actores políticos están conectadas lógica y empíricamente a los resultados institucionales, tenemos que reconocer el hecho que esto es una relación más compleja la cual está influenciada adicionalmente por una amplia gama de factores contextuales.

Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente ala reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación. Los costos de uso de los mecanismos de mercado pueden ahorrarse si se usan mecanismos de coordinación centralizada e impuestos desde arriba hacia abajo, dentro de la organización, y su existencia es siempre contingente tomando en cuenta el costo relativo de las transacciones internas opuesto a la contratación externa.

La desaparición, sustitución o creación de instituciones que no cuentan con el consenso y la credibilidad, solo muestran una debilidad institucional que tiene sus efectos correspondientes en el desarrollo. No obstante, para el nuevo diseño institucional no existen hasta ahora principios sustentados en evidencias empíricas sólidas. Además, las instituciones diseñadas bajo los principios de las teorías del rational choice, los costos de transacción y la agency theory (teoría de la agencia) motivan a individuos que buscan en forma oportunista el beneficio interesado y egoísta bajo el frío cálculo racional. La teoría de la agencia provee de información oportunista y asimétrica.

Esto sin importar que despoje a otros seres humanos de sus derechos y de la posible oportunidad de lograr su propio desarrollo, o bien no se toman en cuenta prioritariamente las necesidades manifiestas de la población por sobre los deseos o preferencias en los procesos de tomas de decisiones para la elaboraciones de los planes de desarrollo. Por sobretodo, el desarrollo es un asunto de valores humanos y actitudes, metas definidas por la sociedad y criterios que determinan los costos durante el período de cambio. El desarrollo de la sociedad, con tendencia a ser más humana, es aquélla que posibilita a sus ciudadanos para adquirir capacidades o competencias para ser más en ves de tener más. El ciudadano es sujeto de derechos y obligaciones, considerado en forma individual o colectivo, ya sea que actúe con personalidad propia o como parte de una forma organizativa.

Dunning (1997), concluye que si la actividad económica involucra costos de transacción y coordinación, no es posible formular una mezcla óptima de modos organizacionales alternativos los cuales sean aplicables universalmente. La naturaleza de la asociación entre los sectores público y privado parcialmente depende de la naturaleza de las funciones de producción o transacción que están siendo tomadas. Las partes individuales que celebran contratos privados fuera de las estructuras de gobernabilidad del estado, lo hacen porque

encuentran los suficientes incentivos para efectuarlos. Los académicos han venido incrementalmente a enfatizar no solamente la importancia de los costos de transacción y coordinación de la actividad económica, sino también de la necesidad de flexibilizar las instituciones y los modos organizacionales. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes.

La flexibilidad organizacional queda manifiesta en la flexibilización de los sistemas de producción y acumulación que junto con la perspectiva de los costos de transacción permiten que las organizaciones lleguen a ser más flexibles a través de la desintegración vertical y horizontal. Las restricciones verticales al mercado siempre emergen en apoyo en apoyo del capital. La fricción de la distancia se incrementa en importancia proveyendo un fuerte incentivo para el aglomeramiento geográfico (Appelbaum and Henderson)

Esta flexibilización se expresa en estructuras de redes que facilitan las interrelaciones que tienen que desarrollarse en los diferentes niveles espaciales: local, nacional, regional y global, dando paso a la emergencia de una sociedad de redes apoyadas en la tecnología informática. La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales. Las estructuras espaciales delimitan los efectos en las relaciones e interacciones entre las diferentes entidades geográficas. La sociedad de redes facilita la organización informal la cual ocurre espontáneamente.

La eficiencia de la organización informal está determinada por la selección de la forma interna de organización. De esta forma, el llamado sector informal de la economía representa un tipo de subsidio para las empresas capitalistas en el sector formal. La presencia de un sector informal grande ayuda a mantener los salarios bajos y los costos de reproducir la fuerza de trabajo urbana a un mínimo para los negocios locales y para las corporaciones transnacionales, por lo tanto los capitalistas son capaces de maximizar sus utilidades pagando bajos salarios a sus trabajadores y pocos si es que algunos beneficios.

La formación e integración de un sistema de redes de participación directa en la gestión pública local permiten la reinvención del espacio geopolítico, que luego cede su lugar al espacio geoeconómico donde se organizan las instituciones del mercado y otorgan a los gobiernos locales las competencias requeridas para afrontar los retos de la globalización. De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales.

Las competencias de los diferentes niveles de gobierno debe ser delimitadas entre aquellas que son exclusivas y las que son concurrentes. El concepto de espacio es “un concepto dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones” (Arellanes, Jiménez, 2001).

Más allá de las organizaciones transnacionales está la noción de una corporación sin Estado, es decir, una corporación que no reclama una nación como su patria, ni tampoco permite que un país domine sus decisiones. Sin embargo, la corporación global es hasta ahora un mito. Las corporaciones siempre reconocen su patria en algún Estado-nación donde tienen

sus oficinas corporativas y sus estructuras de toma de decisiones más importantes en materia de inversiones y desarrollo.

Los acuerdos de inversiones multilaterales se efectúan entre los Estados participantes con la participación de las corporaciones transnacionales. Los Estados imperialistas operan en sinergia con las corporaciones transnacionales, de las que detentan y concentran la propiedad y el control. Los intereses de estas corporaciones transnacionales por limitar la función reguladora del Estado se centra en la avidez que tienen por obtener recursos a bajo costo, penetrar en nuevos mercados, alcanzar bajos costos de transacción en sus operaciones comerciales y sobre todo, lograr la mayor tasa de utilidades como retorno de sus inversiones.

Por lo tanto, las corporaciones globales, ni apoyan ni promueven una unificación económica y cultural. Estas organizaciones tienen que ser más flexibles para competir en los mercados globales y más capaces para innovar. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes. Esta flexibilidad que reclaman las corporaciones transnacionales está cambiando el papel del gobierno, algunas veces haciéndolo más importante, otras veces menos importante.

Las economías capitalistas están organizadas de diferentes maneras, pero todas ellas se han vuelto más interdependientes debido a los procesos de globalización en que se encuentran inmersas. La globalización de la economía es en sí misma un fenómeno de amalgamiento de diferentes formas de economías capitalistas. Las economías que no se estructuran en el mercado difícilmente pueden dar respuesta a los requerimientos para participar en una economía global. La economía global ha disminuido las barreras nacionales. Una forma para sostenerse en un mercado global altamente competitivo consiste en implementar estrategias cooperativas.

Un Estado mutante.

En la era de la globalización el Estado-nación está en crisis porque fue una creación de la modernidad capitalista, al igual que todas las instituciones creadas a su alrededor, tales como un mercado y una sociedad con una cultura propia dentro de las fronteras establecidas y con un ejército para su defensa, etc. El mismo Estado-nación es una forma de gobernabilidad de la modernidad para asegurar un espacio a la nación. El espacio nacional se delimita por fronteras físicas y geográficas que definen la ocurrencia de ciertos fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales. Por lo tanto, estos espacios nacionales han sido determinados como espacios soberanos.

Hasta ahora, sin embargo, todavía la mayoría de los países se conciben a sí mismos como Estados-nación, aunque no necesariamente tengan como característica la homogeneidad cultural. El desarrollo impulsado por el Estado nacional está siendo afectado por determinantes económicos, políticos, sociales, históricos, geográficos, del medio ambiente, psicológicos, etc. No obstante, la geopolítica tiene su origen en el espacio del Estado-nación del cual surgen los espacios internacional y global en donde la geoeconomía adquiere mayor preponderancia. Es en el espacio global donde se representa el fenómeno de la globalización la cual se manifiesta en un contexto fragmentado. Las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales cubren y suplantan el espacio nacional con un espacio de mercado.

Al entrar en crisis el capitalismo moderno o neocapitalismo, genera fuertes tensiones y desequilibrios, de tal forma que es lógico que sus instituciones también entran en crisis, porque la nueva fase del capitalismo globalizador requiere de nuevas instituciones para su desarrollo. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

Este capitalismo globalizador polariza el desarrollo de los pueblos dando lugar a la formación de una sociedad dual. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. La dualidad de la sociedad se manifiesta en los efectos del capitalismo en la formación de desigualdades extremas, por un lado los ricos beneficiarios del sistema y por otro lado los excluídos y marginados del desarrollo.

Visto desde la perspectiva global y a través de los lentes conceptuales de la integración contemporánea en la economía capitalista global, se ha reforzado, sino acentuado esta extrema desigualdad así como las relaciones injustas de subordinación y dominación que mantiene y complementa esta desigualdad. La economía capitalista del mercado tiene un carácter social. La naturaleza de la integración regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo. El desarrollo se ha estudiado como un examen técnico para la movilización eficiente de recursos y la construcción de infraestructura mejor adaptada al crecimiento. No obstante, es discutible si el capitalismo en realidad está en crisis cuando está logrando resultados positivos en función de crecimiento ininterrumpido.

El hecho de que un país esté en crisis económica no necesariamente implica que el capitalismo está en crisis, mientras que los países desarrollados siguen creciendo. La crisis es del objeto del capitalismo, la cual no se debe al dominio del valor de cambio, sino más bien se presentó en el valor de uso. Para algunos analistas, la crisis del capitalismo es inminente y es aprovechada como la gran oportunidad por los empresarios beneficiarios del modelo neoliberal, para concentrar recursos, decisiones y poder mundial. Será necesario explicar las interrelaciones entre ambas situaciones.

La crisis del Estado-nación lo empuja a su transformación, acotada como un componente de los procesos de “reestructuración global” asociados con la emergencia de un capitalismo transnacionalita. Esta política de compensación a los requerimientos y demandas de los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales sobrecargan las estructuras político burocráticos y provocan la crisis del Estado de Bienestar. Como resultado de la crisis, el Estado-nación está perdiendo el monopolio de la violencia institucionalizada y su capacidad para administrar la provisión de servicios que procuran el bienestar social de la población, entendida ésta como la capacidad para satisfacer las necesidades, deseos y temores de la organización social.

Por lo tanto, existe una doble crisis, la crisis de lo político y la crisis del Estado, que viven las democracias institucionalizadas. En la crisis política, la crisis del Estado de Bienestar no incide en la crisis de la democracia. La crisis de lo político es caracterizada por Ramos (1994) por débiles implicaciones políticas subjetivas, escasos sentimientos de competencia, relevancia de las actitudes desconfiadas y cínicas hacia los políticos, así como una muy baja

identificación partidista. En la crisis de lo político, la crisis del Estado de Bienestar no incide en problemas en la democracia (Del Alamo, 2001). De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones democráticas cuyo poder se asegura mediante el "enjaulamiento" de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder.

La crisis del Estado es fiscal y de governance. La crisis del Estado es una crisis fiscal o económica esencialmente que tiene su origen en el déficit público debido al excesivo gasto en las instituciones de bienestar y asistencia social. El análisis de governance contribuye a la gobernability en su concepto más amplio, por lo que cualquier cambio en la governance altera la estructura institucional de la gobernabilidad. Ambos conceptos hacen referencia a fenómenos sociopolíticos totalmente diferentes. La operacionalización y aplicación de las formas de governance de las instituciones económicas, sociales y políticas tienen efectos directos en la gobernabilidad del sistema democrático.

Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política. Este sistema democrático debe garantizar el desarrollo de las competencias, libertades y derechos tanto individuales como sociales. La explicación de la acción política en un contexto institucional es diferente de explicar el cambio institucional en períodos largos de tiempo.

Los actores políticos pueden inventar nuevas estrategias para adaptarse a los cambios de reglas y las instituciones son parte de una configuración, donde un cambio hecho en una institución puede tener efectos impredecibles y no esperados en otros. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. En el último caso, la historia y la cultura política, entendida como los supuestos básicos del mundo de la política, las cuales restringen el rango de alternativas disponibles, tienen que ser sistemáticamente integradas como factores, los cuales entre otros, dan forma a la manera en que los actores políticos perciben las situaciones de elección (Kaiser, 1997).

Conviene más hablar de transformación de las funciones del Estado-nación que de su inminente eliminación, como resultado del avance de los procesos de globalización. Al respecto, existen dos tendencias muy marcadas, por un lado, aquella que trata de eliminar la función reguladora e interventora del Estado en la economía y aquella otra que promueve el fortalecimiento de la función regulatoria del Estado en materia de desarrollo local.

La reestatización o neoestatización de las funciones del Estado es un proceso que se orienta a recuperar algunas de las funciones perdidas o disminuidas por el Estado bajo la aplicación de las políticas del modelo neoliberal y constituye actualmente una de las piezas fundamentales de la expansión de las grandes corporaciones transnacionales que es el resultado de la expansión militar y política de los Estados imperiales. Estos estados imperiales concentran y detentan la propiedad y el control de las transnacionales.

Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales Sin embargo, las transformaciones y mutaciones del Estado-nación no van siempre siguiendo una misma dirección. Ya no es el Estado-nación modelado como un actor que tiene coherencia y un destino propio dentro de una jerarquía de poder internacional y como resultado de una racionalidad de intereses.

El espacio político del Estado-nación ya no se identifica ni depende del ejercicio soberano sobre un territorio nacional delimitado. Lo que se manifiesta en el ámbito espacial nacional es la desterritorialización del Estado a partir de la emergencia de unidades espaciales. El territorio se redefine para centrarse más en la gestión pública local bajo una nueva estructura territorial local. La estructura espacial basada en el territorio de entidades geográficas y físicas delimitan las interrelaciones entre estas entidades.

Los cambios económicos, políticos y sociales originados por los procesos de globalización transforman la naturaleza de la comunidad política y las funciones del Estado-nación dando lugar a un nuevo régimen de gobierno y de acción gubernativa. De acuerdo a Putnam (1993: 183), "la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político" La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. Existen dos tendencias que marcan las transformaciones del Estado. Por un lado, a la eliminación de funciones mediante procesos de desregulación, y por otro lado, al fortalecimiento de la función regulatoria de la promoción del desarrollo local y regional.

Los procesos de reestatización o neoestatización del Estado se orientan a recuperar algunas de las funciones disminuidas o eliminadas durante el período de aplicación de la política del modelo neoliberal, la cual constituye una de las principales piezas de la fase expansiva de las grandes corporaciones transnacionales. De acuerdo con Held (2000), este nuevo régimen desplaza al Estado-nación tradicional, concebido como una nueva forma de poder público indivisible y territorialmente excluyente, dando lugar a un nuevo y complejo orden regional y global. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición".

La poca flexibilidad con que cuenta el Estado-nación no le permite reaccionar eficazmente a los cambios acelerados de la globalización económica, mientras que sus pesadas estructuras corporativas son inerciales a las demandas de la ciudadanía, por lo que se requiere que se fortalezcan a las localidades. No obstante, los procesos de globalización comercial y de los mercados avanza como resultado de los acuerdos entre los Estados y por el crecimiento de las empresas transnacionales. Por otra parte, la presencia activa del Estado en las diferentes actividades económicas, polariza el debate de las funciones del mercado, el Estado y la sociedad en la asignación de los recursos y se dan diferentes interpretaciones acerca del papel óptimo de los gobiernos.

Sin embargo, hay que reconocer que este debate está perdiendo validez debido a que las fronteras y divisiones entre Estado, mercado y sociedad son más fluidas y porosas. El equilibrio entre un mercado eficiente y un efectivo Estado contribuyen a la formación de una sociedad sana y floreciente. Las fronteras entre las empresas y los Estados son todavía más permeables que aquéllas entre los Estado-nación, tanto porque cada persona que pertenece a la empresa es al mismo tiempo ciudadano de al menos un Estado-nación.

Por ejemplo, existe una necesidad urgente para compactar globalmente los esfuerzos de los gobiernos locales, nacionales e internacionales, de la sociedad civil nacional e internacional y del sector privado global, nacional y local para resolver los problemas que el

desarrollo plantea en los términos de medio ambiente, laboral y de derechos humanos que debe sustentar la nueva economía global. Las decisiones que se toman en el ámbito internacional tienen un impacto en la formulación de políticas y estrategias de los gobiernos nacionales y locales, al mismo tiempo que el desarrollo de las instituciones locales logran efectos en los niveles nacionales, regionales, internacionales y globales. Las instituciones locales tienen como reto asumir funciones para intervenir en las actividades económicas.

El término desarrollo tiene relación con el potencial para el desarrollo material humano que se encuentra encadenado a la naturaleza. Precisamente, uno de los cuestionamientos del desarrollo tiene que ver con los criterios a considerar en la toma de decisiones relacionada con los problemas de la naturaleza. No obstante, los Estados nación son los representantes exclusivos de la ciudadanía, lo que los hace ser diferente de otros agentes tales como los organismos públicos o privados internacionales, las empresas transnacionales y multinacionales, las organizaciones no gubernamentales, etc.

Incluso en los Estados de Bienestar más desarrollados, las diferencias estructurales del gasto en materia de bienestar eran muchas, pero eran más importantes las diferencias institucionales entre los Estados de bienestar universalistas financiados directamente de los impuestos y los sistemas "corporativistas" con un enfoque a las contribuciones de empleadores y empleados.

Esta crisis corporativista dentro de la administración debido a la absorción de personal no corporativista que emplean métodos heterodoxos es una de las causas de las fallas del profesionalismo. Resulta menos costoso sostener programas de beneficios de bienestar universal si los mercados laborales se encuentran demasiado centralizados. Por lo tanto, la flexibilidad laboral en el nuevo modelo económico neoliberal, permite una mayor reducción de los costos de beneficios, lo que resulta en una mayor precariedad del ingreso, bajas condiciones laborales y de bienestar.

Las diferencias estructurales e institucionales entre aquellos Estados de Bienestar con altos niveles de protección social obstaculizaron las políticas de relaciones sociales e industriales por acuerdos internacionales (Scharpf, 1997) Muchos países que aplican el modelo de Estado de Bienestar toman una actitud paternalista con respecto a la sociedad, al tratar de proveer los bienes y servicios públicos asistenciales. Asumen la toma decisiones de gobernabilidad, formulando e implementando políticas que correspondían al ámbito de la sociedad, y descuidando la promoción de una cultura política basada en la democracia. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

La democracia capitalista se manifiesta de formas y modelos muy diversos en la organización de las interrelaciones Estado-mercado, incluyendo el estado de Bienestar. El proyecto del Estado de Bienestar a escala global o mundial alienta el rescate de lo mejor de la civilización humana, en vez de declarar su desaparición en pos de una mayor maximización de los intereses bursátiles. Así, la democracia se convierte en una herramienta perfecta del poder hegemónico del capitalismo globalizador, principal razón de por qué las democracias capitalistas no han logrado administrar correctamente la diversidad cultural y étnica de las comunidades.

Los supuestos fracasos del Estado de Bienestar o Estado Keynesiano por no representar ya los intereses del capitalismo globalizador, requieren de mutaciones radicales. El nuevo Estado surge a partir de propuestas de políticas monetaristas y de una economía política neoliberal-ortodoxa por las Escuelas de "Chicago" y de Stanford". Este nuevo paradigma se fundamenta en el supuesto de que los agentes económicos actúen correctamente, con conocimiento de causas y son progresistas socialmente.

La estrategia fundamental es limitar la participación del Estado en la economía. El capitalismo global socava el poder absoluto del Estado y rinde la dualidad existente entre público-privado y economía-política que presiona al Estado nación a renunciar a su función de mantener el bienestar social, contradictoriamente cuando la sociedad necesita la protección contra los excesos del mercado. Por otro lado, la soberanía nacional se debilita cuando están incrementándose las relaciones de interdependencia entre los diferentes países del mundo.

Tanto el Keynesianismo como el monetarismo tienen como fundamento la teoría clásica en materia de políticas de estabilización económica. Cuando el Keynesianismo no fue capaz de dar respuesta a los problemas económicos de los años setenta en Inglaterra debido a las presiones del mercado, la reconfiguración de las bases sociales del Estado y al cambiante clima de las ideas y opiniones domésticas (Baker, 1999) entonces comenzó su reemplazo por el monetarismo. En la "teoría General" de Keynes, éste sostiene que "una economía de iniciativa privada que emplea dinero, intangible o fiduciario necesita ser estabilizada, y por lo tanto, ello sería posible a través de políticas monetarias y fiscales adecuadas. Los procesos políticos y económicos se estabilizan con las cargas impositivas para lograr el equilibrio fiscal.

En contraste, los auténticos monetaristas son de la opinión de que, no existe una verdadera necesidad de estabilizar la economía. O de que incluso, en caso de que la hubiera esto no podría realizarse. Ya que las políticas estabilizadoras probablemente se incrementarían en vez de disminuir esa estabilidad" (Alcántara Meixueiro, 1998) Cuando el Keynesianismo entró en crisis, las prescripciones monetaristas sirvieron de fundamento a los formuladores de las políticas públicas, bajo la perspectiva dominante de que las políticas económicas nacionales se ajustan de acuerdo a los requerimientos de la economía mundial en transición.

Durante la segunda mitad de la década de los setenta se inicia la transferencia del poder y del mando de las instituciones del Estado a las instituciones del mercado mediante programas de desregulación que en realidad significaron la regulación por el mercado. Los resultado han sido negativos en términos de regulación y gobernabilidad, al presentarse una falta de regulación por las instituciones del mercado y un vaciado de la regulación del Estado

El argumento de la irreversibilidad de los procesos de globalización está permeando la reforma del Estado y los nuevos diseños de sus funciones. La reforma del Estado es impulsada por los organismos financieros internacionales y economistas nacionales que promueven el modelo económico neoliberal. Este nuevo modelo económico permite la acumulación del capital mediante el control del sistema financiero y la expansión del capital especulativo, el cual se debe a la expansión política y militar de los Estados imperiales. De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso.

Las fuerzas motivo asociadas con la acumulación de riqueza que enfatizan el sistema capitalista orienta los costos de capital individual y las empresas privadas capitalistas para expandir sus actividades acumulativas y eliminar todas las barreras geográficas culturales y políticas que obstruyen su paso a la acumulación de riqueza. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales. Los Estados imperiales concentran y detentan la propiedad y el control de las principales empresas transnacionales.

La reforma neoliberal de Estado implica la reducción de la capacidad del Estado para atender las demandas sociales, las cuales se transfieren a los gobiernos locales. Ideológicamente, la reforma del Estado se define como la reducción del tamaño y funciones del Estado, para lograr mayor eficiencia y eficacia. Los gobiernos locales reciben la responsabilidad de la promoción del desarrollo que realizan en forma limitada por la escasez de recursos y su falta de capacidad para intervenir en factores nacionales.

Muchas otras de las funciones que originalmente corresponden al Estado-nación están siendo transferidas a instancias supranacionales debido a una presión exagerada que ejercen los procesos de globalización. Esta supranacionalidad tensiona al Estado-nación buscando espacios más allá de las fronteras físicas y culturales, aunque no lo deja vacío del todo. El concepto de espacio ha evolucionado de una configuración territorial y física a un concepto más dinámico y multilineal.

Arellanes Jiménez (2001) tipifica este nuevo concepto de espacio, como “dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones”. La reforma del Estado no tienen los alcances para remover de la agenda política las posiciones separatistas de grupos poblacionales minoritarios con diversidad étnica y cultural, que alentados por los alcances de los procesos de globalización, buscan autonomía territorial. Pocos gobiernos logran manejar y mantener democráticamente la diversidad.

Lo que la reforma del Estado está haciendo es transferir la responsabilidad para la gestión y resolución de conflictos sociales a los gobiernos locales, la cual se condiciona a la estructura social de las localidades. El instrumento de la reforma del Estado y modernización política es la descentralización del poder político de las instancias del centro a las instancias locales. Los procesos de modernización generan aprendizajes rápidos y trae consigo un incremento en las demandas de bienes y servicios, la cual no siempre desarrolla la capacidad para satisfacerla.

De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales. La descentralización tiene como objetivos aumentar el poder, la autonomía de la decisión y el control de los recursos, las responsabilidades y las competencias de las colectividades locales, en detrimento del poder del poder de los órganos del gobierno central (Mattos, 1990:165-167).

Las competencias de los diferentes niveles de gobierno deben ser delimitadas entre las que son exclusivas y las que son concurrentes. Para que la reforma del estado se centre en un redimensionamiento de las relaciones entre la sociedad, el mercado y el Estado, requiere de

procesos de descentralización para lograr una gestión pública más eficiente. La gestión pública es un factor importante en la toma de decisiones para impulsar el desarrollo.

López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una "propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y sociallo permiten y, presionan en su favor."

La descentralización de las funciones del Estado nacional es una tendencia relacionada a los cambios en "el modo de acumulación, a la revolución científica y tecnológica, a la reestructuración del Estado y a las demandas por espacios de autonomía planteadas por la sociedad civil (Marsiglia y Pintos, 2001). Efectivamente, los procesos de descentralización impulsados por el sistema capitalista son inherentes a su propio desarrollo en las circunstancias actuales de trasnacionalización de la economía y los mercados en donde el Estado nación, que una vez fue funcional para su expansionismo, ahora es el principal estorbo.

Esto les permitiría promover el crecimiento económico y el desarrollo social de las localidades, aumentar la participación ciudadana y democratizar los procesos políticos y sociales. Los gobiernos locales tienen que potenciar mecanismos para el ejercicio de la autonomía local considerando que son los propios ciudadanos los más indicados para juzgar las acciones del mismo gobierno. Además, los gobiernos locales deben tener competencia para decidir sobre asuntos de la comunidad ante quien tienen responsabilidad de sus acciones, a pesar de que la reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. De acuerdo a Putnam (1993: 183), "la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político".

La sociedad regional es un actor clave en el desarrollo local. El diseño e implantación de programas de desarrollo local debe considerar la pluralidad e inclusión de intereses de los diferentes agentes económicos y actores sociales, a efecto de establecer los acuerdos y compromisos, así para coordinar los esfuerzos.

Los programas de desarrollo local deben pivotar sobre la base de interacciones comunitarias, solidariamente comprometidas en forma activa y continua, más que en la simple contigüidad física o geográfica. La centralización de las funciones del desarrollo alienta el crecimiento de algunas regiones a cambio del retraso de otras, sobretodo cuando se trata de las funciones financieras e industriales. Las transformaciones de la economía regional están en estrecha relación con su estructura económica propia, los procesos macroeconómicos nacionales y los procesos de globalización económica. Los procesos de globalización económica, comercial y de los mercados son el resultados de los acuerdos comerciales entre los Estados y por el crecimiento de las empresas transnacionales. Todos los acuerdos comerciales entre los diferentes Estados, son promovidos por los mismos Estados para abrir fronteras a sus empresas transnacionales.

Por lo tanto, la reforma del Estado implica una reingeniería de las instituciones orientada al logro de una mayor eficiencia, y una participación más equitativa en los procesos de desarrollo regional, de tal forma que los resultados contribuyan a lograr tasas de mayor

igualdad, bajo el nuevo paradigma orientado por la revolución científico-tecnológica, la profundización de los procesos de descentralización gubernamental, la impulsión de pequeñas y medianas empresas y el cuidado del medio ambiente.

En este sentido, el desarrollo es "un proceso colectivo y dinámico que no se realiza en forma aislada y en el cual también influyen los cambios generados desde y hacia el interior de la región" (Tarapuez Chamorro, 2001). Sin embargo, la desterritorialización de las fronteras espaciales geográficas a que se ven sometidas por los avances de los procesos de globalización económica, concede mayor importancia a los agentes y actores del desarrollo. No obstante el Estado queda reducido en sus funciones para impulsar un crecimiento que garantice el desarrollo equitativo y equilibrado de las regiones y son las organizaciones empresariales y de la sociedad civil las que toman el papel protagónico de este desarrollo regional. La sociedad regional es un actor clave en el desarrollo regional equilibrado y equitativo que puede gestarse su propio desarrollo.

La reingeniería de los procesos de gobierno implica cambios en los métodos y formas de gobierno. Como lo señala Lasagna (1999), "la reforma del Estado quedará hipotecada en caso de no impulsarse cambios sustantivos en la gobernabilidad democrática que tiendan a hacerlo más transparente, eficaz, inclusivo y legítimo. Cambios que deberían tender a mejorar la capacidad de gobernar en un marco de mayor responsabilidad, eficiencia y legitimidad de la acción gubernamental."

En realidad, los procesos de globalización por un lado están desmantelando las instituciones y funciones del Estado pero por otro lado está apoyando su recomposición mediante nuevas instituciones y funciones. Los procesos de reestatización o neo estatización se orientan a recuperar aquellas funciones que han sido eliminadas o disminuidas por la aplicación de la política económico social del modelo neoliberal, y constituyen una de las piezas principales para la expansión de las grandes corporaciones transnacionales, debido a la expansión política y militar de los poderes imperiales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

Territorio, moneda, fuerzas armadas, etc., están en constantes procesos de cambio. Faletto (1995) argumenta que "El desafío es el de mejores vínculos entre las instituciones políticas y la sociedad; la reforma del Estado no es un mero problema de reorganización interna, sino un intento creativo para poder dar respuesta a la necesidad que todo proceso de cambio trate consigo."

Un análisis de las finanzas internacionales y los servicios corporativos puede ayudar a mostrar las diferencias entre el papel del Estado en las formas anteriores de internacionalización y de la actual globalización de las actividades económicas evidentes en algunos sectores económicos (Sassen, 1995) El papel del Estado neoliberal rechaza las obligaciones contraídas por el Estado de Bienestar profundizando los efectos negativos de la diferenciación social. Queda claro que el Estado neoliberal más que buscar el bien común de la población, lo que hace es convertirse en defensor de los intereses de la clase dominante.

La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación "puramente

expresiva y gratuita" como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). Por lo tanto, el modelo de un Estado de Bienestar a escala global o mundial es un proyecto que puede rescatar lo mejor de la humanidad en contra de declarar su desaparición en aras de maximizar los intereses bursátiles.

El resultado de esta política económica neoliberal ha creado una creciente diferenciación y disociación de lo social. Los ideólogos ortodoxos neoliberales anularon el papel fundamental del Estado en el desempeño de las funciones de protección y bienestar social. El Estado tiene que reconsiderar cómo debe hacer para desempañar una función más propia de regulación de estas actividades y mediante que formas de gobierno. Lo que ahora se presenta es un fenómeno de déficit de regulación y gobernabilidad debido a las deficiencias de la regulación por las instituciones de mercado y al vaciado de la regulación de las instituciones del Estado. El análisis en los tipos de veto es actualmente en discusión de la reforma institucional es indicativo de la percepción que prevalece de déficit en el sistema político.

El papel del Estado es complementario al mercado y de acompañamiento en donde los nuevos protagonistas del desarrollo económico son los empresarios. Las condiciones regionales para la promoción de las actividades empresariales tienen implicaciones con el fomento de la integración o diversificación de la estructura económica regional y la coordinación interinstitucional de planes, programas y proyectos de impacto regional (Tarapuez Chamorro, 2001).

El papel del mercado en el desarrollo es reidificado por el proyecto neoliberal que bajo una cultura de la desigualdad (Calderón, 2000) apela al mercado como el único, natural y eficiente distribuidor de los beneficios y oportunidades de desarrollo a los individuos, es considerado como reconstructor del orden socio político y económico para lo cual subordina al Estado, la sociedad y el régimen político en una dinámica que tienen efectos perversos para el desarrollo. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). La función del Estado es proveer los marcos regulatorios para superar las fallas del mercado y el modelo mismo del Estado mínimo.

El concepto de un Estado ampliado sería la esfera de acción donde confluyen las instituciones de la sociedad civil y del Estado para la realización de proyectos conjuntos mediante formas de colaboración que den origen a nuevas formas de gobernabilidad. Las nuevas formas de gobernabilidad de lo colectivo deben sustituir a las estructuras rígidas y pesadas que no dan respuesta a exigencias de la individualidad con orientación abierta y que por lo tanto requieren la emergencia de nuevas formas colectivas con estructuras más abiertas, flexibles y livianas que respondan a las exigencias de la individualidad con orientación abierta.

Así, la sociedad civil no invadiría el campo de acción de las instituciones del Estado para disminuirlo en importantes funciones y reducirlo al papel original del Estado policía, cuando su principal función en una sociedad democrática y solidaria debe ser su función reguladora de las actividades económicas, sociales, políticas, culturales, etc. El Consenso de Washington delimita las funciones de las instituciones de la sociedad civil y orienta sus agendas y desafíos en sustitución de las funciones del Estado, postulando una intervención mínima del gobierno en el mercado, liberalización de la economía y privatización de las empresas públicas.. Los países que más beneficios han tenido de los procesos de la globalización son

aquellos que establecieron su propio ritmo de crecimiento apartándose de los postulados del Consenso de Washinton

La composición de la propiedad corporativa tiene un papel importante en la creación y sostenimiento del crecimiento económico a largo plazo, lo cual tiene una fuerte implicación en la teoría del crecimiento endógeno (Gylfason et al 1999)

Las Naciones-Estado han estado siempre presentes y representan un papel importante en el desarrollo económico al hacerse responsable de la reproducción de las condiciones necesarias para la acumulación del capital y para la legitimación de los arreglos sociales y políticos asociados con la obtención de riqueza y poder en un sistema económico. La estrategia de reproducción del sistema capitalista es dual en donde los actores hacen y no hacen sucesiva e interrumpidamente algo (Barel, 1989). Al respecto, Ramos (2001) concluye que las respuestas adaptativas de los actores sociales atrapados en las redes de poder, consisten en apostar por estrategias dobles que permiten construir contraintuitivas identidades paradójicas, con lo cual los actores logran reproducir las redes, consolidarse y "enjaularse" e "incapacitándose para romper la lógica perversa que la anima". La transformación del capital social tiene relación con los cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los individuos. Las formas de legitimación del Estado moderno, el Derecho, la administración o cálculo y la historia o épica, son las determinantes para el predominio de un tipo de modelo de Estado (Semo, 1998).

Así, al modelo de Estado liberal en donde predominó el Derecho y la herencia liberal del Siglo XIX, sucede el modelo de Estado corporativo que tiene problemas para incorporarse plenamente al sistema democrático y acaba presentándose como una democracia corporativa. Las ideas clásicas de la democracia han sido sustituidas por una doctrina de la democracia que apoya y mantiene la hegemonía del staus quo.

Al Estado corporativo sucede el modelo de Estado gerencial en el cual las fuerzas elitistas del capitalismo transnacional emergen como las principales agentes del desarrollo económico cuya representación de intereses se encuentra en el mercado. La nueva clase transnacional capitalista que emerge entre las elites capitalistas nacionales y que son la clase dominante en sus respectivos países, comparten el mismo proyecto neoliberal, intereses y privilegios de los poderes hegemónicos para implantar una política económica que les favorece.

Por lo tanto, las elites nacionales y locales de los negocios han abierto la puerta a las economías de las corporaciones transnacionales que están interesadas en mano de obra barata, recursos naturales, capital financiero y mercados de consumidores en los países latinoamericanos. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado. Sin embargo, la tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966).

La expansión del capitalismo a dado mayor fortaleza a los Estados imperiales que se han convertido en un componente clave de la Nueva Política Económica. La conclusión de que la primera causa dela extrema desigualdad social y económica en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo. Un análisis

crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero.

Los Estados nacionales han pasado por procesos formativos en los que los conceptos de orden y progreso evolucionan a los conceptos de gobernabilidad democrática y desarrollo humano. El buen gobierno y el desarrollo humano son conceptos intrincados. No obstante, en la actualidad los modelos de desarrollo humano en los sistemas democráticos se ven limitados por la inestabilidad de sus instituciones y la crisis de la gobernabilidad democrática. Torrijos (2001) ha denominado gobernabilidad reluctante a la tendencia que tienen los pueblos a lograr la gobernabilidad democrática a pesar de los múltiples problemas económicos, políticos y sociales en que se encuentran, y que considera como una gobernabilidad surgida de la ingobernabilidad construida a partir de la incertidumbre, la inestabilidad y el caos. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

La gobernabilidad democrática, de acuerdo a Castro (2000), es "la capacidad de los gobiernos para ejercer el poder político democrático de forma continua en condiciones de legitimidad"..

Los Estados-nación se adaptan a la evolución misma de las formas que el desarrollo capitalista le impone, un desarrollo estrechamente vinculado con el sistema democrático, en donde la democracia es verdaderamente la condición del desarrollo. Pero el concepto de democracia ha sido vuelto a definir para que sirva de apoyo al sistema capitalista. La forma en que los recursos son obtenidos y usados, determinan hasta cierto punto el tipo de desarrollo económico.

Muchas de las veces las decisiones en torno a los recursos se toman para beneficiar a pocos en el corto plazo, en vez de que se tomen a largo plazo y que beneficien a muchos. Este consiste en un proceso interactivo para la creación y realización de valor, a través de las diferentes combinaciones de recursos e intercambios (Moran y Ghoshal, 1999) Lo importante de esta combinación de recursos y los intercambios que se realizan, es el resultante crecimiento económico como un fin en si mismo, el cual se mide en términos cuantitavos del producto interno bruto per capita y el promedio real de consumo. Este crecimiento económico tiene que trasladarse en mejoramiento de los niveles de calidad de vida de la población mediante la instrumentación explícita de mecanismos institucionalizados de gobernabilidad que generan credibilidad para la asignación de los beneficios del desarrollo y contribuyen a crear una sociedad satisfecha y menos asimétrica en desigualdades.

La eficiencia y la fiabilidad de las reglas son dos canales a través de los cuales las políticas pueden influir el crecimiento económico de los países (Brunetti, Kisunko y Weder, 1998c) La eficiencia de las políticas explica las diferencias en crecimiento con las diferencias en políticas macro y microeconómicas. La fiabilidad de las políticas se refiere a la estabilidad e incertidumbres que rodean su implementación, la cual puede ser absorbida por un sistema de instituciones. Los investigadores usan variables objetivas para medir la inestabilidad política, las cuales resultan incompletas para reducir las incertidumbres.

La inestabilidad puede ser objetivamente observada mientras que la incertidumbre es subjetiva. Como resultado de su investigación, encontraron una relación cercana entre los

indicadores de incertidumbre institucional y el crecimiento económico. Se puede desprender de este hecho que la absorción de la incertidumbre se realiza cuando las instituciones proporcionan la información correcta. La credibilidad de las reglas se asocia significativamente con las diferencias en crecimiento e inversiones entre los países, capturando una relación a largo plazo entre las instituciones y el crecimiento. Los nuevos acuerdos multilaterales entre los diferentes Estados se formulan con la participación de las grandes corporaciones transnacionales. Existen algunas evidencias que demuestran que una política económica que crea certidumbre en el entorno económico competitivo alcanza mayores tasas de crecimiento económico. Los teóricos en economía política ofrecen análisis basados en instrumentos como los costos de transacción, las externalidades, monopolios, propiedad privada y propiedad pública, etc. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos.

Para promover este crecimiento y desarrollo económico, el gobierno tiene que embarcarse en programas de desarrollo social que garanticen ciertos derechos y libertades, políticas públicas que combatan el hambre, la insalubridad, el analfabetismo, la tiranía de los gobiernos no democráticos, etc., en una palabra a la gobernability del sistema político en su contexto de libertades públicas, respeto de derechos políticos, sociales y cívicos, participación, negociación y consensos, transparencia, etc. El desarrollo social está apuntalado por los programas de desarrollo humano que promueven la adquisición de capital humano y social y facilitan mayores oportunidades de acceso a los recursos y bienes sociales. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence).

En sí, el crecimiento y el desarrollo económico contribuyen a aumentar el nivel y calidad de vida de la población mediante la instrumentación de mecanismos de gobernabilidad que contribuyen a la asignación más justa y equitativa de los beneficios del desarrollo, y por tanto a crear una sociedad satisfecha y menos asimétrica en las desigualdades.

El derecho a la libertad y a la propiedad, como derechos civiles fueron logrados por los ciudadanos frente al Estado autoritario, pero además deben lograrse los derechos civiles de los excluidos, los cuales se garantizarán cuando también se reconozcan los sociales. La exclusión es definida por los incluidos, siempre en defensa de las normas que mantienen a una sociedad en funcionamiento. De acuerdo al liberalismo, se considera negativo las interferencias del Estado en los derechos civiles como la libertad y la propiedad de los individuos. Los derechos civiles afirman la ciudadanía en contra de una reducción del poder de las elites político burocráticas del Estado.

Los derechos políticos a votar y ser electo lo conquistaron los ciudadanos frente a un régimen político y finalmente se conquistaron los derechos sociales que tratan de garantizar los derechos humanos o derechos del hombre, que son también derechos en defensa de la sociedad civil. Así, la democracia se conquista cuando existe una clase media. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. Es en el propio interés de los actores económicos así como de los más pobres, asegurarse que los gobiernos continúen siendo responsables, no sólo por sus acciones en relación con los derechos civiles y políticos sino también por sus prioridades políticas en relación con la asignación de los recursos.

Sobretodo por aquellos recursos que directamente impactan en los derechos económicos y sociales de las personas. Si las naciones pobres quieren ser competitivas, no pueden ignorar los males sociales que les aquejan. En el presente una pequeña pero muy persistente y especialmente necesaria categoría permanece: el pobre en las sociedades pobres con una economía estancada o decreciente, constituyen un problema de proporciones no manejables, pero no que se imponga por sí mismo con mucha urgencia para la comunidad de las naciones, excepto como una tragedia humana que ruega por una solución de humanitarismo (De Swaan Abram, 1997).

Si el desarrollo desigual permanece como una característica del sistema mundial, la estratificación parece incrementarse dentro de las naciones industrializadas (Habermas 1974, Offe 1975, Carnoy 1984, Appelbaum and Henderson 1995) Los Estados pro-activos permanecen centrales al crecimiento y a la prosperidad económica, mientras que la economía que parecer ser caótica, demanda por un mayor papel de la regulación supranacional. La regulación supranacional es facilitada debido al fracaso que ha tenido la transferencia del mando y el poder en el espacio nacional de las instituciones del Estado a las instituciones del mercado. La pérdida de regulación por las instituciones del Estado no se ha traducido, como se esperaba en una regulación por las instituciones del mercado.

El papel de las agencias estatales subnacionales como socios de empresas y asociaciones de negocios energizan las redes de acción económica ubicadas localmente, es una de las formas para apoyar el crecimiento económico y el desarrollo social. Pero este desarrollo económico y social desigual está muy lejos de un verdadero desarrollo sustentable sólo delimitado por una cultura propia local y por una moralidad económica. Las transformaciones económicas y políticas también implican transformaciones de los valores sociales, culturales y sobretodo de valores morales. Para lograr niveles de desarrollo económico sustentable es necesario que además de las reformas económicas se den las reformas políticas y democráticas Abordar las discusiones sobre desarrollo sustentable es preocuparse por los problemas del medio ambiente y por las cuestiones sociales.

El medio ambiente comprende los elementos ecológicos, económicos, sociales y políticos. El sistema local se inserta en el ambiente ecológico o ecoware (Vázquez, 1993) con el que mantienen relaciones. El ambiente económico, político y social se inserta en el "macro sistema de referencia" y norma las funciones y relaciones externas al sistema local que comprende las capacidades instaladas (software), los recursos financieros (finware) y formas organizacionales (orgware).

El modo de desarrollo económico actual está siendo seriamente cuestionado porque no es desarrollo que aliente la sustentabilidad ecológica y la justicia social en todos los habitantes del globo. La modernización puede lograr la sustentabilidad social si se acerca a los fundamentos culturales de la sociedad. De hecho, las soluciones a los problemas sociales y del medio ambiente parecen que se encuentran implícitos en las formaciones culturales de los pueblos. Así, el desarrollo sustentable formula severos cuestionamientos a las prácticas sociales, culturales y ambientales con respecto a las actividades organizacionales. El desarrollo sustentable requiere de reformas económicas y reformas institucionales.

Bebbington (2000) previene de usar el término desarrollo sustentable para significar "buena administración del medio ambiente". En otras palabras, logra la eficiencia de uso del

medio ambiente, o eco-eficiencia a largo plazo. El imperativo moral del desarrollo sustentable está orientado a la obtención de la justicia social para todos los habitantes del mundo, es decir, de una eco-justicia entre las diferentes generaciones y al interior de cada una de ellas. Esta eco-justicia tiene un impacto en las operaciones de las actividades de los negocios que tradicionalmente se han orientado por entregar riqueza material a ciertos grupos de alto consumo El desarrollo global sustentable requiere que aquellos que son más ricos, adopten estilos de vida más de acuerdo con los medios ecológicos. No obstante, es en la relación medio ambiente y desarrollo en donde se localiza el origen del desarrollo sustentable y el desarrollo que reconoce que tiene límites estructurales y de orígenes naturales se orienta a la sustentabilidad. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad.

El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Satisface las necesidades básicas de todos y extiende a todos la oportunidad de realizar sus aspiraciones para un mundo mejor (UNWCED, 1987:8). El desarrollo sustentable se define como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, de acuerdo a la Comisión Mundial del medio Ambiente y Desarrollo (1987). El desarrollo sustentable es un valor que permite hacer una elección moral para aceptar la equidad y la justicia social. La preocupación del desarrollo sustentable es la satisfacción de las necesidades de todas las personas en el mundo ahora y en el futuro, y por lo tanto, los beneficios y los costos del desarrollo deben distribuirse entre todos.

Streeten (1992) hace referencia a que el término “desarrollo sustentable” tiene seis diferentes significados: 1) mantenimiento, reemplazo y crecimiento de capitales activos, ambos físicos y humanos; 2) mantenimiento de las condiciones físicas del medio ambiente para la constitución del bienestar; 3) la recuperación del sistema para que le permita ajustarse a las crisis y a los shocks; 4) evitar las cargas a las futuras generaciones de deudas internas y externas; 5) sustentabilidad fiscal, administrativa y política. La política tiene que ser creíble y aceptada por los ciudadanos, de tal forma que exista suficiente consenso para llevarla a cabo; y 6) la habilidad para manejar proyectos por la administración por los ciudadanos de los países en desarrollo en los cuales se llevan a cabo, de tal forma que los expertos extranjeros pueden retirarse sin poner en peligro su éxito.

Redclift (1987) sugiere que “el desarrollo debe ser sujeto a una redefinición, ya que es imposible que la acumulación tenga lugar dentro del sistema económico global dentro del sistema económico global que hemos heredado sin costos del medio ambiente no aceptables. Ante todo, el desarrollo plantea cuestionamientos a los valores humanos y actitudes, así como las metas definidas por la sociedad y criterios para determinar los costos que tienen que hacerse y por quien.

El desarrollo sustentable, si es que hay una alternativa al desarrollo no sustentable, implicaría un receso dentro del modelo lineal de crecimiento y acumulación que finalmente sirve para debilitar los sistemas de apoyo de la vida del planeta. La modernización puede lograr la sustentabilidad social si se acerca a los fundamentos culturales de la sociedad. El desarrollo sustentable se usa para motivar las iniciativas económicas, políticas, legales, que buscan resolver la problemática del medio ambiente, económica y social. La sustentabilidad debe asegurarse en las áreas económicas, sociales, políticas, culturales, científicas,

tecnológicas y del medio ambiente. El desarrollo, por tanto, se encuentra limitado a los costos ambientales aceptados. Sin embargo, el actual desarrollo económico no es sustentable porque los costos humano y del medio ambiente son inaceptables.

Sin embargo, el desarrollo actual es un desarrollo económico que privatiza los beneficios y socializa los costos. El mismo proceso de integración comercial es apoyando por el Estado-nación que está solícito a pagar socializando los costos y riesgos de las empresas y por lo mismo a evitar cualquier costo de carácter burocrático. Las corporaciones empresariales están obligadas a dirigir sus energías a satisfacción de todos los aspectos del desarrollo de las generaciones actuales y futuras en el contexto industrial.

El propio concepto de desarrollo sustentable debe estar relacionado con la competitividad de la economía, el nivel de desarrollo social y por un modelo de nación. El desarrollo es el resultado de un conjunto de cambios inducidos intencionales y conscientes que no se realizan en forma aislada.

El desarrollo social debe apuntalarse en los programas de desarrollo humano que promuevan la adquisición de capital humano y social y favorezcan las oportunidades de acceso a los bienes y recursos sociales para elevar los niveles de calidad de vida. Para alcanzar el desarrollo sustentable es necesario lograr resultados en las reformas económicas y en las institucionales. La satisfacción de las necesidades de la población está influida por el nivel de desarrollo económico y social. Las raíces epistemológicas de un desarrollo no sustentable pueden localizarse en la concepción lineal de progreso de la era moderna.

El cuestionamiento sobre la legitimidad del papel que el gobierno debe tener para intervenir el mercado y en los asuntos privados es muy antiguo, y en términos generales se acepta como respuesta normativa y como una justificación, que el gobierno interviene en el mercado cuando éste falla en sus funciones. Apareció inicialmente como una forma de explicación en términos económicos del por qué la necesidad de que los gobiernos eleven su gasto (Zerbe y McCurdy, 1999)

Sin embargo, no existe una teoría normativa que sea satisfactoria con respecto a las funciones apropiadas del gobierno en una economía mixta, es más bien resultado de estudios empíricos. Por tanto, el modelo de las fallas del mercado también falla, como cualquier otro modelo deductivo porque no deriva suficientemente de lo empírico, no es suficientemente inductivo y sólo se fundamentan en métodos entendimiento que derivan proposiciones específicas de principios generales sin mucha atención los hechos observados.

Cada una de estas fallas ha dado lugar a justificar la intervención del Estado. El papel d la intervención pública del Estado en la promoción del desarrollo, como en el caso de los países conocidos como los cuatro tigres asiáticos, en comparación de los países latinoamericanos y de Europa del Este que han seguido fielmente las prescripciones recomendadas por los organismos multilaterales donde el crecimiento ha sido más que mediocre. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados. La tendencia a reforzar la capacidad de intervención del Estado y a fortalecer su acción regulatoria en el desarrollo local y regional se orienta a satisfacer las demandas de la sociedad.

Los analistas de las políticas públicas consideran que las fallas del mercado y la existencia de externalidades dan una justificación necesaria aunque no suficiente de las intervenciones gubernamentales, como en el caso en que el bienestar de algunos individuos se afecta por la satisfacción de ciertas preferencias. En este sentido es que la provisión de bienes y servicios públicos por parte del Estado debe estar orientada a corregir las fallas de los mecanismos del mercado.

Cuando la intervención del Estado es necesaria, se formulan políticas públicas que delimitan la legitimidad de la intervención y protegen el interés público. El concepto de fallas del mercado es aplicable a circunstancias donde la persecución del interés privado no conduce a un uso eficiente de los recursos de la sociedad o a una distribución justa de los bienes de la sociedad. Los bienes gratuitos de la sociedad deben ser regulados y gobernados por el Estado y por instituciones del sector social.

Por lo mismo, debe considerarse que la provisión de bienes y servicios públicos por el Estado, en las palabras de Sandmo (1989:263), una respuesta al problema de las fallas del mercado, las decisiones sobre la oferta de bienes públicos son hechos más que nada en procesos políticos. Este principio toma nota del hecho que las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica (Kaiser, 1997).

La intervención gubernamental puede realizarse cuando muestra que una política genérica menos intrusiva, no puede ser utilizada. O cuando no pueda diseñarse efectivamente un contrato privado para tratar de resolver la falla del mercado (Veimer y Vining, 1992). Las partes que celebran contratos privados fuera de las estructuras de gobernabilidad del Estado, lo hacen porque encuentran suficientes incentivos para hacerlo. Existe un consenso generalizado de que cierto grado de intervención gubernamental es generalmente deseable para manejar la globalización y para mitigar su impacto en aquellos que tienen el riesgo de ser marginados.

Sin embargo, muchos gobiernos de los Estado-nación, por ejemplo, están tomando la actitud hacia la pobreza de dejar las manos libres al mercado, sustentándose en la premisa de que la globalización económica derramará un mayor crecimiento económico y por consecuente el incremento en los ingresos que disminuirán los niveles de pobreza. No obstante, evidencias empíricas de que la apertura comercial y financiera contribuyen a incrementar la tasa de crecimiento per cápita y aliviar las situaciones de pobreza, no existe una relación significativa con la desigualdad en los individuos y los países. En la década de los noventa la media anual del ingreso per cápita fue negativa en más de 50 países y menor que hace 20 años en más de setenta países. No necesariamente a mayor ingreso per cápita corresponde mayores niveles de desarrollo y no todo desarrollo es sustentable.

El informe del Banco Mundial “Crecimiento es bueno para el pobre” relaciona uno a uno los ingreso de la quinta parte más baja de la población con el producto doméstico bruto per cápita y argumenta que el ingreso de todos los sectores crece proporcionalmente en la misma tasa. El estudio enfatiza que los beneficios de la apertura comercial son los mismos para los pobres que para la economía total. Las investigaciones empíricas sobre los efectos del empleo en la liberalización comercial en los países en desarrollo confirman que los costos potenciales

de la apertura comercial pueden ser reducidos o aumentados por el contexto de las políticas en las cuales la reforma se efectúa.

La pobreza, al igual que la riqueza tiene sus causas estructurales en el desarrollo. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad. Habrá que comparar los beneficios de la intervención gubernamental con el riesgo de que los problemas principal-agente en el sector público hagan los problemas mucho más difíciles. La eficiencia de la intervención del gobierno hecha en los términos de Kaldor-Hicks se fundamenta cuando los costos de intervención son menores que los beneficios.

Es decir, la intervención del gobierno es más eficiente cuando los beneficios que se obtienen son mayores que los costos que se implican. Se asume que una falla del mercado es una condición necesaria para una intervención eficiente (Serie y McCurdy, 1999) Es decir, la condición suficiente de la intervención gubernamental se determina cuando el impacto económico de la regulación es mayor en los términos de beneficios que de costos, cuando las ganancias sobrepasan los daños y perjuicios.

El análisis costo-beneficio de la regulación puede determinar el impacto económico de la política social, lo cual recibe menos atención que presupuesto de gastos gubernamental. Hay que reconocer que existen limites en los recursos para aplicación de programas sociales y que por lo tanto, se requiere de una priorización de esfuerzos, quizás en función de resultados o de la relación costo-beneficio. De esto se sigue que los que formulan las políticas públicas, hasta donde les sea posible deben cuantificar y comparar los beneficios y los costos cuando se tomen decisiones de intervención y de regulación. La investigación (Hahn, 1998) sugiere que la regulación y la intervención de los gobiernos pueden ser ampliamente y significativamente mejoradas, de tal manera que obtengan mayores beneficios, salvar vidas por ejemplo, con menos recursos. Entre otros beneficios del carácter preventivo de la política social, no solamente contribuye a estabilizar la economía, sino que incrementa su capital social también. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la “trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos”.

El objetivo de la política social es la potenciación de los elementos de cohesión son beneficiosos para la democracia, puesto que desincentivan conductas egoístas de los individuos y promueven los lazos de solidaridad entre los seres humanos. . Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La perdurabilidad de la democracia se define tanto en el ámbito interno de los gobiernos como en el campo de los opositores, desleales, disidentes o insurgentes. Los requisitos para un buen diseño y formulación de la política social son: eliminar los altos niveles de discrecionalidad en la administración de programas sociales, flexibilizar las estructuras de poder cada vez más difusas y concentradas y cambiar esquemas de financiamiento y gasto, de tal forma que se orienten más a quienes realmente lo necesitan que

a apoyar a los capitalistas. Cualquier diseño de reformas financieras queda incompleto sino se fortalecen las instituciones existentes con una orientación hacia la formulación y aplicación de una política social acorde a las circunstancias.

La evaluación de la política social involucra dos pasos: determinar bajo un análisis positivo cuales son los efectos de la política y evaluar los efectos de la política para determinar su deseabilidad social (Kaplov y Shavell, 2000) En economía del bienestar, la política social es evaluada desde el punto de vista de sus efectos en el bienestar de los individuos, por lo que lo que es relevante para el bienestar de los individuos es también relevante para la economía del bienestar. Debido a que la evaluación de economía del bienestar se basa directamente en el bienestar de los individuos, la economía del bienestar encuentra problemas de información imperfecta. Si los individuos están conscientes, actúan de acuerdo con sus propias limitaciones.

Las políticas legales deben considerar esta imperfección de la información o bien, el gobierno debe proveer mejor información, cuando éste tiene acceso a un conocimiento superior. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países.

No obstante, las reglas legales pueden afectar las preferencias, sobretodo cuando es empleada como un instrumento para darles forma. El efecto posible de la ley en las preferencias es relevante en la economía del bienestar. Las preferencias cambian con el tiempo, lo cual puede reflejarse en conductas diferentes, como en el caso de las normas sociales. Las preferencias de los actores políticos son cruciales para lo que se diseña institucionalmente porque los participantes conocen que los altos costos pueden involucrarse si las decisiones van en contra de ellas. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Los efectos de la ley sobre las conductas pueden ser evaluados, a pesar de que algunos de ellos sean solamente simbólicos.

El aspecto normativo relaciona si los cambios en preferencias son deseables, asumiendo que ocurren. Sin embargo, algunos analistas sugieren que ciertas preferencias que caen en conductas racionales y bien informadas, deben ser truncadas cuando no tienen peso en el cálculo del bienestar social y es necesario redefinir el bienestar de los individuos de tal forma que se sustituyan otras preferencias. La economía del bienestar ofrece un acercamiento para la objeción de preferencias en el sentido de que éstas reflejan el bienestar actual de los individuos.

Hay dos razones por las cuales la satisfacción de las preferencias puede ser contraproducente y se reduzca el bienestar de los miembros de la sociedad: Las externalidades como en el caso en que se afecta el bienestar de los individuos debido a satisfacción de ciertas preferencias y por la adopción de políticas contrarias a las preferencias actuales que producen cambios en las preferencias y, por tanto, en el bienestar social. Profundas externalidades individuales e interpersonales son generadas más por las diferencias

en el capital social que en otros tipos de capital. El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí.

Así, la membresía individual a redes sociales genera externalidades positivas pero el status del individuo puede generar una externalidad negativa (Glaeser, Laibson and Sacerdote, 2000:4). El desarrollo de las redes sociales está determinada por un desplazamiento existente de las relaciones fuertes, permanentes y estables por otras más débiles, flexibles y pasajeras. La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales. En teoría, el capital social agregado incorpora todas las externalidades generadas por los diferentes tipos de capital social individual. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes. Los determinantes de capital social al nivel individual no siempre determinan el capital social al nivel de sociedad. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales.

Frankel (1995) por ejemplo, sugiere que en aquéllas situaciones donde se involucran bienes públicos, el gobierno puede estar en una mejor posición que el sector privado para operar una empresa a pesar de que sus costos burocráticos pueden ser mayores. Existen ciertos bienes y servicios públicos que son intrínsecamente no lucrativos y que por lo tanto no proporcionan estímulos financieros al sector privado para su provisión. Los bienes públicos que benefician a la gente pero cuyos costos no pueden ser recuperados para que resulten atractivos a las empresas.

No obstante, el Estado-nación pierde poder y soberanía no solamente por las empresas transnacionales sino por el avance del sector privado, en términos generales, que trata de imponer el concepto de soberanía consumidora para sustituirlo por el concepto de soberanía política que restituye al Estado sus capacidades y responsabilidades de regulación del desarrollo. Con la misma defensa de los derechos del consumidor, los individuos adquieren la categoría de ciudadanos. El esfuerzo de la ciudadanía para elevar la productividad del sistema económico puede fortalecer la soberanía política.

Los costos de transacción proveen el marco conceptual y el método para justificar la naturaleza de la acción colectiva y explican las relaciones entre el gobierno y el mercado. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es. Los economistas con una orientación neoliberal desacreditan la acción colectiva así como la intervención del Estado. El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otros ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir, (De Swaan Abram, 1997) El Estado promueve mediante procesos de intervención directa o indirecta, las relaciones entre los agentes económicos locales e internacionales.

La intervención gubernamental es óptima cuando sus costos de transacción son cero y no se presentan problemas de principal-agente. Inherentemente, cuando los costos de transacción se elevan, las dificultades para organizar son mayores también. Sin embargo, la acción

colectiva aumenta los costos de transacción debido a los malos diseños institucionales, es decir, a la falta de incentivos económicos adecuados y malas reglas del juego para regular las relaciones de intercambio entre los individuos.

Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico "gorrón" causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación. Las transacciones deben ser consideradas desde la perspectiva que proporcionen beneficios a las partes involucradas.

El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico "gorrón" causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. Para incentivar la acción de los agentes económicos, es necesario que el Estado diseñe políticas que eliminen las discriminaciones y alineen el medio ambiente institucional. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

En general, concluyen Zerbe y McCurdy (1999) en cualquier tiempo que el gobierno pueda reducir los costos de transacción privados o sus propios costos de provisión debe hacerlo a pesar de que exista o no una externalidad. Los análisis de los costos de transacción llaman la atención a las características que le dan al gobierno una ventaja relativa sobre otras instituciones en su habilidad para bajar los costos de transacción, tales como el poder de coerción. Weber (1958) define al gobierno como una institución que monopoliza el uso de la fuerza o los poderes de coerción sobre un territorio dado.

La intervención del Estado debe desarrollar aquéllas funciones en las que el poder de coerción le da ventaja absoluta. Esta intervención del estado está siendo cuestionada bajo el supuesto que el gobierno realice mejores opciones a las del mercado, ya que al igual que las empresas privadas, también puede explotar a los consumidores, realizar cargos superiores a los servicios como una forma para colectar mayores impuestos y realizar cálculos erróneos del valor de las externalidades para su propio beneficio y transferir los efectos negativos en sus oponentes políticos (Larmour, 1997).

Por otro lado, el relativo éxito que han logrado las economías orientadas por el mercado, han sido las formas en las cuales el Estado y los mercados sistemáticamente interactúan. Ni el mercado, ni el Estado ni cualquier otra institución económica son perfectas como mecanismos de coordinación. Se puede decir que existe una crisis generalizada de las instituciones, una crisis de la democracia, y por tanto una crisis de gobernabilidad. La crisis

de gobernabilidad es el resultado de la debilidad del Estado, disfuncionalidades de las instituciones económicas, políticas y sociales que erosionan el sistema democrático y da lugar a regímenes políticos híbridos. Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de "esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política".

De acuerdo al investigador, "es probable que la actitud de muchas sociedades ancladas sea la de negarse a aceptar, a ciegas, la superposición de capas de la ya formada gobernabilidad global, pero la gobernabilidad reluctante implica el reconocimiento de estándares universales de democracia (poliárquica o consociativa) sobre los que se funda y se explica" (Torrijos, 2001). La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Cada institución tiene sus costos y beneficios y es por lo tanto mejor que otras con ciertas condiciones y peor con otras condiciones, observa Chang (1994) Los gobiernos de los países tienen asignadas funciones en diferentes grados y niveles de responsabilidad. Todo esto dependiendo de sus sistemas políticos, de sus fuerzas demográficas, ingreso, riqueza y preferencias de la gente por la provisión pública de bienes y servicios (Aronson and Ott, 1991) Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional.

Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional. Sin embargo, entre las acciones que el gobierno puede establecer para reforzar las funciones del mercado, está la creación de instituciones que fortalecen los derechos de propiedad privada. Así mismo, instituciones para el aseguramiento de la aplicación de pesas y medidas, etc.

Estas acciones tienden a reducir los costos de transacción. A pesar de que economizar mediante el empleo de los costos de transacción es un concepto perverso en el que los costos y beneficios para cada una de las formas de organización tienen que calcularse comparativamente. Tanto en economía como en derecho, la transacción ideal es una de mercado spot donde la identidad no es importante sino la aplicación de reglas legales.

Tampoco resulta fácil determinar hasta qué grado los regímenes supranacionales y las administraciones nacionales necesitan modificar sus agendas y prescripciones de las políticas

en virtud de la creciente movilidad de los recursos. En un extremo, la definición por una mayor función de las instituciones del mercado para autorregular las formas de organización económica y la asignación de los recursos, y en el otro extremo, la concepción neoestructuralista de las limitaciones del mercado como asignador óptimo de los recursos. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad. Para la teoría neoclásica, las empresas son y tienen problemas porque se apartan de sus principios. Es en este sentido que la organización económica está íntimamente relacionada con el desarrollo sustentable de los pueblos.

No existe un consenso de cómo el desarrollo puede ser sustentable. La modernización puede lograr la sustentabilidad social si se acerca a los fundamentos culturales de la sociedad. Las formas de organización económica determinan la sustentabilidad del desarrollo, el cual es privilegiado por las actividades empresariales que constituyen la base de las actividades económicas. La trayectoria dominante del desarrollo económico desde la Revolución Industrial no sustentable. La extensión y la forma de intervención e involucramiento del gobierno es dependiente de la extensión y el carácter de las imperfecciones del mercado, así como de las demandas que establezca la sociedad.

Esta concepción fundamenta la responsabilidad de la orientación del desarrollo económico de las sociedades periféricas, la cual debe recaer principalmente en el Estado. Pero hasta ahora, no se ha evaluado si la intervención estatal es más efectiva en costos que el mercado que reemplaza. A partir de las fallas del mercado es como se construye una teoría de intervención estatal, pero además, la escuela de la elección pública incorpora las fallas del Estado. Por otro lado, la cultura puede ser un substituto de la acción gubernamental.

Las funciones emergentes del Estado.

En un intento para crear una tipología de acercamientos a la organización económica, Dunning (1997) identifica seis roles del gobierno en una economía orientada por el mercado: Los intereses políticos y económicos del Estado deben ser la principal justificación para la actividad económica (mercantilistas, regular los asuntos de acuerdo a un orden natural (Fisiócratas), la "mano invisible" de los mercados como el mejor asignador de los recursos (clásicos y neoclásicos), un activo y participativo papel del Estado en todos los aspectos de los asuntos económicos (economía socialista), el bienestar social de la comunidad y la distribución del dividendo nacional (economía de bienestar), libertad personal y contra la intervención del Estado (contractarianismo) y la falta de confidencia en la eficiencia y en la justicia social de la economía del mercado justifica las intervenciones del Estado (Estructuralismo). El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad.

Los nuevos funciones emergentes en las responsabilidades del Estado incluyen las formas en que éste afecta al mercado. El nuevo Estado emergente es un Estado capitalista neoliberal que se ha convertido, al decir de Cox (1992) en la “correa de transmisión” de los intereses globales a los nacionales. El Estado-nación capitalista se convirtió en el espacio geopolítico donde se organizaron las fuerzas productivas y las relaciones sociales en un modo de producción capitalista, cuyo objetivo es lograr mayor eficacia y competitividad en la inserción internacional de la economía nacional y regional. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Ya que las empresas nacionales y locales

carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales.

En este espacio nacional delimitado por fronteras geográficas y físicas se definen la ocurrencia de fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales, y por lo tanto estos espacios nacionales definen las unidades de espacios que son soberanos. Además, este espacio geopolítico dio lugar a un espacio geoeconómico donde se organizan las instituciones del mercado. El espacio geopolítico se origina en el Estado-nación el cual da lugar a niveles superiores de organización de los espacios internacional y global en donde la geoeconomía adquiere mayor preponderancia.

Las grandes corporaciones transnacionales promueven la extensión de la geoconomía y la geopolítica del espacio nacional al espacio internacional y global siempre actuando en sinergia con los Estados imperlialistas, quienes concentran y detentan la propiedad y el control de la mayor parte de transnacionales. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula. Es en el ámbito espacial global en donde tienen lugar las expresiones de la globalización en un contexto fragmentado.

Por lo tanto, el nuevo Estado es una agencia para el ajuste de las políticas económicas nacionales y las prácticas de las exigencias percibidas de la economía global. Las demandas que los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales formulan en forma incluyente al Estado, sobrecargan sus estructuras y procesos y lo convierten en un Estado ineficiente. Todavía más, el Estado-nación tiene que desempeñar un importante papel en la resistencia a los excesos de la política homogeneizadora del capital. Thoreau ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia, lealtad y a resistir un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables. Esto puede apreciarse con el crecimiento de las agencias estatales que cada vez se conectan más a la economía global. Sin embargo, Baker (1999) no está de acuerdo con esta noción del Estado. En todo caso, la metáfora no captura la complejidad de la relación entre los procesos de globalización y el Estado.

El Estado emergente está transitando de un Estado interventor a un Estado facilitador de las actividades del sector privado. Pero en este tránsito se está descuidando el combate a los problemas de la pobreza, la marginación y la exclusión social, hasta terminar en el concepto de los “sin nombre y sin domicilio fijo”, es decir, no existen como ciudadanos ni como seres humanos. La exclusión se manifiesta en conductas antisociales y económicas negativas que evaden los mecanismos del mercado. De acuerdo a Bauman (1993), la sociedad estigmatiza a los individuos como un mecanismo de defensa de la ambigüedad que resulta del fenómeno de marginalización y exclusión social, situación que más que resolver los problemas los agrava.

El nuevo modelo simplemente ignora la necesidad de desarrollar un sistema social más justo y eficiente, con las instituciones que lo garanticen. Hasta ahora, la instrumentación de programas de estabilización y ajuste macroeconómicos ha dejado un fuerte impacto en los segmentos más pobres de la sociedad, lo que hace urgente que se realicen arreglos institucionales que hagan inversiones sociales para legitimar los roles emergentes del Estado. No obstante es cuestionable hasta donde los arreglos institucionales deben uniformarse en todos los países del mundo, o bien deben implementar arreglos diferentes y ajustados a las

situaciones locales. Estos arreglos institucionales pueden resolver los problemas, conflictos y pugnas de intereses existentes entre los diferentes agentes económicos.

Las políticas de ajuste estructural desmantelaron el sistema corporativista construido para facilitar la formulación e implementación de la política social y por lo tanto, han contribuido a aumentar las desigualdades y la pobreza en donde se han implementado. Estas políticas de ajuste estructural neoliberal han involucrado completamente la apertura de los mercados domésticos de los países latinoamericanos al capital transnacional, la promoción de las llamadas exportaciones no tradicionales a fin de ganar divisas extranjeras tanto como sea posible para pagar las deudas, y la desregulación del capital local y los mercados comerciales, que han involucrado las impopulares medidas de austeridad fiscal dirigidas a reducir los servicios públicos y a privatizar muchas de los servicios públicos y empresas públicas, de tal forma que los fondos públicos estén destinados al pago de las deudas. Las crueles medidas de austeridad han sido adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de la región a fin de reducir sus gastos en educación, salud y otros servicios sociales de tal forma que pueden servir a la combinación de deudas de los sectores privados y públicos de los diferentes países.

Los análisis del ajuste estructural se refieren al cálculo económico de las expectativas y no consideran la apreciación a la dimensión subjetiva. Bajo el sistema corporativista, la política social que se intentó implementar durante el período comprendido entre 1940 y 1970 fomentó el desarrollo de una clase media mediante la eliminación de las desigualdades sociales. Esta política finalmente benefició a la sociedad urbana en detrimento de la sociedad rural. Por tanto, la naturaleza excluyente de la transformación económica de la agricultura latinoamericana ha incrementado el empobrecimiento de la población rural y acelerado la migración del pobre rural a las ciudades en busca de empleo. El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido de los beneficios

Tres principios sirven de fundamento para legitimar los diferentes papeles del Estado en una sociedad. Siguiendo a Camou (1998), estos tres "principios legitimadores" del desarrollo y del progreso de los individuos en la sociedad son: en primer término el "privatista" que se fundamenta en la libre iniciativa y la competencia abierta, el principio "compensador" que fundamenta la protección a través de compensaciones que debe dar el Estado a los grupos sociales más vulnerables, y finalmente el principio de "bienestar" que justifica la intervención del Estado para satisfacer las necesidades apremiantes por sobre los deseos y preferencias de grandes grupos de la población que carecen de bienes y servicios básicos.

Desde otro punto de vista, el punto de vista filosófico / ideológico refleja la naturaleza de la sociedad y la forma correcta, más que eficiente, de cómo la actividad económica debe ser organizada. El punto de vista del costo-beneficio de las formas organizacionales alternativas (mercados, jerarquías, comunidades) parte de la consideración de que en una situación de perfecta competencia, los mercados son el mejor instrumento para la asignación de recursos escasos, aunque al igual que el Estado, presentan fallas. Además, la reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. Ambos, Estado y mercado no son mecanismos perfectos de asignación de recursos y por lo tanto, así como existen fallas del Estado, también existen fallas del mercado. La contingencia de gobernabilidad se incrementa porque ni el Estado alcanza a coordinar políticamente, ni el

mercado garantiza la integración de la vida social y funcional de una sociedad contemporánea altamente diferenciada.

Estado y mercado son mecanismos imperfectos de asignación de recursos. Tal parece que la tendencia dominante en la ola de cambios de las formas organizacionales apuntan hacia una hibridización de formas de jerarquías y mercados, las cuales introducen los incentivos de los mercados en las organizaciones y jerarquías que controlan el manejo de los activos en los mercados. Puede ser verdad que los cambios institucionales usualmente ocurren como las reacciones de personas con visión estrecha a lo que perciben como más o menos un rango estrecho de necesidades. Para esta hibridización se requiere de un sistema institucional que formule e implante las regulaciones.

La forma del mercado se fundamenta en el mecanismo de los precios para coordinar oferentes competitivos y compradores anónimos. Con mercancías estándar, derechos de propiedad y precios marginales se promete optimizar la producción y la distribución: La dinámica de la competencia, la provisión y la demanda llevan el precio a un bienestar social que es un óptimo de Pareto. En este óptimo, ningún bienestar se incrementa sin que se reduzca el de otro (Adler, 1999) Amartya Sen muestra cómo los derechos liberales pueden producir resultados que cada individuo preferiría evitar, por lo tanto, violando el principio de Pareto. Los derechos y libertades de los individuos constituyen un conjunto de capacidades que le permiten elegir diferentes funcionamientos y posibilidades de su desarrollo.

Sen critica el "bienestarismo" (Welfarism), de bienestar, porque hace de los juicios morales una función sólo de la utilidad de los individuos. Lo define como el punto de vista que enjuicia la relativa bondad de los estados de cosas alternativos. Estos deben estar basados exclusivamente en, y tomados como un incremento de la función de, las respectivas colecciones de las utilidades individuales de estos estados (Sen, 1979) Sin embargo, la teoría del bienestar no necesita asumir que el bienestar social para una población dada es igual a la suma de las utilidades individuales.

Chang (1999) presenta un ejemplo de una función de bienestar que puede incorporar principios de justicia y aún cumplir con el principio de Pareto, demostrando que el principio de Pareto por sí mismo no necesariamente implica que se tenga que abandonar principios de justicia, imparcialidad y tolerancia liberal. Las nociones de imparcialidad se refieren a los principios usados para evaluar las reglas legales bajo las cuales los análisis basados en los principios se acuerda dar un peso a los factores que son independientes del bienestar de los individuos. Estas nociones de imparcialidad tienen la propiedad de que las evaluaciones no se basan exclusivamente en como las políticas legales afectan el bienestar de los individuos.

Kaplow y Shavell (2000) argumentan que con base en las reglas legales de la economía del bienestar, la imparcialidad basada en la evaluación no depende exclusivamente en los efectos de las reglas legales del bienestar de los individuos, y como consecuencia, las nociones de satisfacción de imparcialidad pueden empeorar a los individuos, es decir, reducir su bienestar. Los autores avanzan la tesis de que las políticas legales deben ser evaluadas usando el marco de referencia de la economía de bienestar, bajo la cual, la evaluación de las políticas depende exclusivamente de sus efectos en el bienestar de los individuos, la cual también se refleja en la preocupación por la distribución de ingreso.

Las nociones de injusticia e imparcialidad, como en la justicia distributiva y correctiva empleadas para evaluar las reglas legales, dependen directamente de las acciones del bienestar de los individuos. Concluyen que los individuos empeorarán su bienestar como consecuencia de perseguir una noción de imparcialidad basada en análisis, la cual se encuentra en oposición al bienestar humano en su nivel más elemental. Si se profundizan las nociones de imparcialidad que favorecen políticas diferentes de las apoyadas por la economía del bienestar, los resultados son una reducción del bienestar individual. Los investigadores critican que no deben mezclarse puntos de vista en la evaluación de las políticas legales más que la sola evaluación del bienestar de los individuos, como el centro de la economía del bienestar.

Los investigadores sostienen que hay correspondencia entre las nociones de imparcialidad y justicia que son usadas como principios independientes para la evaluación de reglas legales y las normas sociales que guían a los individuos en sus vidas diarias. Las nociones de imparcialidad y justicia se corresponden con las normas sociales, como principios que los individuos socializados usan como guías de su conducta. Las normas de conducta social deseables tienden promueven el bienestar de los individuos en sus interacciones cotidianas. Los individuos recurren a las normas sociales para determinar su conducta en sus interacciones con los demás. A pesar de que las normas sociales tienen una influencia fuerte en nuestras mentes, no deben de ser elevadas al rango de principios para el análisis y la evaluación de las políticas legales. Esta relación entre las nociones de imparcialidad y las normas sociales ayuda a reconciliar el atractivo que ejerce las nociones de imparcialidad. La identificación de las reglas legales que mejor promueven el bienestar de los individuos y los factores relevantes en objetivos que se relacionan con la distribución del ingreso

La teoría de la justicia puede incorporar el principio de Pareto y puede generar, además, una lista jerarquizada completa de alternativas, tanto como una función utilitaria de bienestar social puede. Para ello, necesita de instituciones morales fuertes con respecto al principio de tolerancia liberal y que, además, respete el principio de Pareto.

La sola justificación de la intervención externa es que de una manera u otra, los mercados fallan en el desempeño del óptimo de Pareto. Las razones de las imperfecciones del mercado más importantes que afectan los niveles de precios y el desarrollo, entre otros son, las distorsiones de las estructuras del mercado en oligopolios y monopolios, la recesión del mercado interno, las externalidades y la beneficencia social. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles. Además, se consideran también las deficiencias en la infraestructura física, el desempleo estructural, los cuellos de botella que aumentan los costos de producción y distribución, las instituciones y los costos de transacción y coordinación y la tecnología y el cambio organizacional.

Las empresas y los mercados difieren en sus formas de acceso al “fiat” lo cual se explica parcialmente por las diferencias en los contratos legales. Las jerarquías fundamentan la autoridad en el poder legítimo o “fiat” para crear y coordinar la división horizontal y vertical del trabajo, con una variación considerable de niveles y de actividades agrupadas. La jerarquía cuenta con organismos judiciales para aplicar las resoluciones y resolver las controversias que surjan. Muchas organizaciones están diseñas en estructuras jerárquicas, en las cuales cada administrador reporta solamente a otro de nivel superior.

El papel del Estado en el desarrollo económico ha cambiado radicalmente desde la crisis de la década de los ochenta y se ha acelerado con los procesos de globalización, rechazando radicalmente las responsabilidades del Estado de Bienestar y profundizando los efectos negativos de la diferenciación social y la disociaciación de la vida social en amplios sectores de las comunidades. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. Los ideólogos ortodoxos neoliberales negaron y limitaron el papel fundamental del Estado en la protección y bienestar social. Igualmente, anularon su función reguladora de las actividades. No obstante, el modelo del Estado de Bienestar a escala global o planetaria es un proyecto que alienta el rescate de lo mejor de la humanidad en contra de declarar su desaparición en beneficio de la maximización de los intereses bursátiles.

Pero la reducción de funciones del papel del Estado en la política económica no es una condición suficiente para el habilitamiento de otras instituciones. El bienestar fue evaluado como la distribución de un producto social neto sobre las bases de ciertas funciones que los ciudadanos cumplían y de derechos derivados de ciertos papeles personales. Las necesidades en materia económica eran mensurables y capaces de ser comparadas interpersonalmente por "agentes", con razonamiento y responsabilidad autónoma, dentro de un espacio público de ciudadanía y a quienes además tienen el reconocimiento de un sistema jurídico democrático.

Si no hay ciudadanía tampoco puede haber democracia. La democracia afirma la ciudadanía que es el resultado de largas luchas políticas y sociales, de tensiones entre los intereses colectivos e individuales, públicos y privados, y sistemas de valores donde predominan los liberales y sociales. Las luchas políticas en el ámbito del Estado-nación cuestionaban la legitimidad del gobierno pero nunca la legitimidad del Estado mismo.

La denominada crisis de la ciudadanía arrastra consigo una crisis de la razón igualitaria de los derechos. El espacio público formado por la sociedad civil y el Estado sirve de base para la construcción de una ciudadanía responsable que exige el cambio de comportamientos de los diferentes actores políticos, todo lo cual contribuye a la formación de capital social. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la "trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos". Un sistema de gobernabilidad efectivo permite el desarrollo y formación de capital social y humano El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales.

El capital social es visto como un atributo de la comunidad después de los trabajos de Coleman (1990). El capital social de una comunidad tiene como base las reglas no escritas, como en el caso de la confianza que existe entra los diferentes agentes económicos. El capital social individual (Glaeser, Laibson and Sacerdote, 2000) y la confianza individual no necesariamente coincide, porque aquellos individuos que son más confiables no siempre sacan provecho de las interacciones sociales.

No obstante se puede asumir que cuando las relaciones de confianza mejoran, se desarrollan estructuras sociales más inclusivas y se forma un espíritu colectivo orientado por un mismo sentido de comunidad. Así, un elevado desarrollo económico puede coexistir con un debilitamiento de las relaciones de confianza y cooperación cívica (Grootaert, 1998). El capital social se expresa en la relación existente entre relaciones de confianza y cooperación cívica. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales.

Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil.El orden se crea y se mantiene mediante comportamientos de cooperación que tienen referencias continuas para respetar la tradición a cambio de no encontrar la censura o desaprobación de la comunidad. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, creando lo que se ha dado en llamar la ación del "gorrón". El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes.

En la gobernabilidad por la comunidad, la coordinación se logra por normas de compartidas de comportamientos apropiados. Las costumbres evolucionan y dividen el trabajo y para compartir los productos. Por lo tanto, se enfatizaron la titularidad de las asignaciones dentro de un concepto de distribución económica contrastados con las diferentes numeraciones asociadas con estimaciones de gastos e ingresos agregados que se centraban en un concepto de ciudadanía "activa e individualista" que pone en crisis a la razón igualitaria.

Ahora se insiste en que los Estados subjetivos no pueden ser comparados. Pero que las operaciones de "la economía" son concebidas como una entidad largamente autónoma gobernada por sí misma, reguladas para hacer disponible las satisfacciones individuales que persigan los individuos (Brown, 1997) Un individualismo y un libre mercado, han dado por resultado compradores y vendedores monopolísticos agrupados en corporaciones transnacionales monopolísticas e impersonales. Los intereses de las grandes corporaciones por limitar la acción reguladora del estado-nación se centran en la avidez por nuevos mercados y obtención de recursos a más bajos costos, todo en función de obtener tasas mayores de retorno de sus inversiones.

En el mercado de libre competencia, el gran número de compradores y vendedores saben lo que quieren y lo que están dispuestos a pagar por la adquisición de satisfactores, actúan con libertad e independencia para entrar y salir del mercado, la información es libre y accesible sobre precios y productos y los costos de negociación son bajos. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. El libre mercado es en realidad muchas de las veces un mercado monopolista que concentra recursos, energías, etc., mientras que otras veces destruye y desvaloriza capacidades útiles, expectativas y voluntades.

La derecha postula principios liberales neoclásicos, por lo que también se le conoce como neoliberalismo que tiene sus raíces ideológicas en los siglos XVIII y XIX en los pensadores liberales tales como Adam Smith y Jhon Locke, luego promovidos por la Escuela de Chicago desde la década de los sesenta del siglo pasado. Sin embargo, la promoción de esta ideología es de hecho un producto de la estrategia global contemporánea de las transnacionales así como de las políticas de las administraciones de Reagan, Bush y Clinton en los Estados Unidos y de Thatcher y Major en Inglaterra.

La ideología neoliberal atacó las teorías estructuralista y dependentista hasta lograr la hegemonía doctrinaria e influir en el diseño de la política económica que se instrumentaliza en los programas de ajuste estructural y estabilización macroeconómica recomendados por los organismos financieros internacionales a los países en crisis económica y financiera, que ha tenido alcances muy relativos en el desempeño del crecimiento económico y negativos en el desarrollo social. Las monedas nacionales se han devaluado y pegado al patrón del dólar estadounidense, y el crecimiento de las exportaciones, principalmente de las exportaciones no tradicionales, tales como las frutas, las legumbres, as flores y algunos bienes manufacturados, han sido promovidos a expensas de la baja en la producción de alimentos para el consumo doméstico.

La subjetividad es refugio o resistencia contra este modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación "puramente expresiva y gratuita" como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). El crecimiento económico implica el concepto de medición cuantitativa del producto interno bruto per cápita y el promedio de consumo real. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad.

La preocupación por encontrar un nueva alternativa de desarrollo ha resultado en el surgimiento de un nuevo modelo denominado la "tercera vía" bajo principios de una Nueva Macroeconomía Clásica. La Nueva Macroeconomía Clásica es aliada de la Nueva Derecha y al conservadurismo que se apoya en la teoría de la elección pública. Está basada en los trabajos de Buchanan y Tullock (1962), favorecen el establecimiento de reglas constitucionales para controlar las acciones del Estado, limitar sus intervenciones y reducir su crecimiento (Gilbert and Michie, 1997), aunque es dudosa la aseveración de que la Nueva Macroeconomía Clásica se apoya en el trabajo de elección pública de Buchanan.

Kaiser (1997) propone tres principios básicos los cuales pueden explicar los procesos y resultados de ingeniería constitucional: el conservadurismo institucional, la dependencia institucional y el aprendizaje institucional. La investigación en la ingeniería constitucional ha tomado nota de los efectos de difusión, tales como la globalización de las comunicaciones que enriquece las bases cognitivas de las cuales escoger. Mientras que el conservadurismo institucional y las propuestas dependentistas institucionales nos conducen a esperar que la evolución de los sistema políticos democráticos exhiben diferentes patrones, la propuesta de aprendizaje institucional apunta a la convergencia.

De acuerdo con Kaiser (1997), la hipótesis del conservadurismo institucional sostiene que las reformas constitucionales en las democracias son relativamente poco comunes, no debido a factores institucionales sino al cálculo de los actores políticos, solamente cuando una gran

crisis ocurre, ya sea por un abrupto cambio de factores contextuales o a través de un deterioro dramático de la satisfacción de la política pública, es una ventana de oportunidad abierta para la persecución de planes de reformas. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas propuestas son preferidas aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible.

La propuesta de aprendizaje institucional sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional.. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma.

La Nueva Derecha a desplazado a la Vieja Derecha y se autodenomina "Nuevo Orden" o "Nuevos Demócratas" La Nueva Derecha se ha identificado por la combinación del individualismo de la derecha y una nueva retórica populista que destruye a las organizaciones populares, bajo el apotegma de que el individuo no tiene límites y por lo tanto el mejor gobierno es el que no gobierna. Internacionalmente, la conexión entre la actividad popular y las políticas son muy débiles.

La Nueva Derecha es el sustento de los regímenes denominados como la Tercera Vía o democracia social, un programa socioeconómico que mezcla las ideologías del neoliberalismo y el socialismo de Estado. La Nueva Derecha tiene como antecedentes la ideología neoliberal, la cual tiene sus raíces ideológicas en los siglos XVIII y XIX en los pensadores liberales tales como Adam Smith y Jhon Locke.

La modernización neoliberal separa a la subjetividad, la considera un proceso autónomo e inconexo que genera tensiones cuando de acuerdo con Lechner (2000), ambos fenómenos son complementarios y es necesario relacionarlos, ya sea en forma espontánea conforme a la apuesta del liberalismo decimonónico o establecida por el Estado conforme al modelo socialdemócrata. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación "puramente expresiva y gratuita" como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). La diferencia entre socialdemocracia y liberalismo es que éste quiere la menor intervención política posible (dejando a la regulación del mercado la tarea de poner orden) y la socialdemocracia tiende a regular la mayor cantidad posible de aspectos de la vida humana. En este tira y afloja estamos entre unos regímenes y otros y entre unos períodos históricos y otros.

Un liberalismo absoluto en el que el Estado solamente se ocupe del ejército y la policía no es hoy ya sostenible. La sociedad moderna es demasiado complicada para carecer de reglas de juego. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. Por otra parte estamos viendo desaparecer la regulación colectiva de muchas funciones que hasta no hace mucho considerábamos comunes: las compañías telefónicas, el correo, los ferrocarrilles, etc. Las democracias liberales más avanzadas se convirtieron en democracias sociales. La doctrina de la tercera vía es una versión populista del capitalismo que propone cambios al gasto social en beneficio de subsidios capitalistas para presentar una alternativa al Estado de Bienestar y al libre mercado.

La tercera vía es diferente a la Vieja Derecha porque “combina políticas ultrarregresivas con la más elevada retórica humanitaria... La Nueva Derecha proyecta una identidad distinta, basada en combinar una retórica populista con el individualismo de la derecha. La ideología apela al Gran Negocio porque reciben beneficios sustantivos en material, mientras que la calse media más baja es rematada con retóricas humanistas y apelaciones emocionales simbólicas... La Tercera Vía es una continuación y extensión del neoliberalismo de la Vieja Derecha de simbolismos populistas vacíos. Guerra de Clases desde arriba y Guerras Imperiales en el extranjero... ” (Petras, 2001a).

Puesto que los niveles de intervención del gobierno son altos en la mayor parte de las economías, la Nueva Macroeconomía Clásica apoya las acciones tendientes a establecer reglas que gobiernen la elección de las políticas, las cuales considera son no efectivas en su generalidad. Por ejemplo, Buchanan argumenta a favor de reglas que restringen la acción del gobierno a fin de limitar la coerción de individuos ya sea a través de las acciones propias de otros individuos o a través de acciones colectivas por medio del gobierno.

Hasta ahora los trabajos académicos de Giddens han orientado las acciones de gobiernos social-demócratas que mutilan programas de política social y destruyen redes benéficas de asistencia social, etc. Alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma. Un mayor problema para dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados. La política social se ocupa de la provisión de bienes y servicios asistenciales a la población, tales como educación, salud, habitación, alimentación, etc.

La Nueva Macroeconomía Clásica es un acercamiento instrumentalista que llama por reglas de las políticas en el supuesto básico de que los mercados trabajan y que la intervención del gobierno es superflua y generalmente el responsable de los problemas macroeconómicos. La intervención incontrolada del Estado en el mercado crea incertidumbres que causan inflación y es responsable de los ciclos de los negocios. Por lo tanto, concluyen los autores, las reglas son preferibles a la discreción. Pero la no-intervención del gobierno en la economía, es lo mejor.

En realidad, las corporaciones transnacionales concentran los recursos, poder y decisiones mediante megafusiones bajo los regímenes denominados de la tercera vía, siempre en sinergia con los Estados imperialistas. Estos Estados imperialistas concentran y detentan la propiedad y el control de las transnacionales más importantes. Las corporaciones transnacionales se reparten los mercados internacionales con el apoyo de los estados imperialistas, para aumentar su poder e influencia. Las grandes corporaciones siempre tienen intereses en la obtención de las mayores tasas de retorno sobre la inversión en términos de utilidades mediante la avidez de los recursos naturales, la conquista de mayores mercados, la reducción de sus costos de operación y transacción en la comercialización. Para lograrlo tratan de reducir la acción reguladora de los Estados-nación, la cual es contraria a sus intereses

De un Estado activo que intervenía en la racionalidad del desarrollo económico, de acuerdo con Salazar Xirinachs, se ha pasado a “... un ambiente intelectual de profundo escepticismo acerca de los motivos, las habilidades y la conveniencia de la intervención estatal, y a una

reafirmación de las bondades de las fuerzas del mercado y de la iniciativa individual y privada". La tendencia a fortalecer las funciones de intervención y de regulación de las actividades económicas está determinada en parte por la capacidad para satisfacer las demandas de la sociedad.

El elemento central de este nuevo orden es la intervención del Estado sobre una base diferenciada en la complejidad de la nueva economía. El nuevo orden económico se centra en estrategias de desarrollo que se orientan a la eliminación de una política social y a la descentralización de las funciones del Estado, por un lado, y por otro, en la promoción del desarrollo local mediante el fortalecimiento de las funciones regulatorias y de intervención. La descentralización tiene como objetivos aumentar el poder, la autonomía de la decisión y el control de los recursos, las responsabilidades y las competencias de las colectividades locales, en detrimento del poder de los órganos del gobierno central (Mattos, 1990:165-167).

Esta intervención del Estado está siendo cuestionada bajo el supuesto que el gobierno realice mejores opciones a las del mercado, ya que al igual que las empresas privadas, también puede explotar a los consumidores, realizar cargos superiores a los servicios como una forma para colectar mayores impuestos y realizar cálculos erróneos del valor de las externalidades para su propio beneficio y transferir los efectos negativos en sus oponentes políticos (Larmour, 1997). La tendencia hacia una mayor intervención en la promoción del desarrollo local o regional, está determinada en parte por las demandas de la sociedad

Así por ejemplo, Buchanan (1991) no niega el papel del gobierno cuando centra su atención en la posibilidad de las fallas del mercado y la tendencia a expender el nivel de intervención del gobierno. En este sentido, las reglas son diseñadas para afectar el proceso de gobierno. Sin embrago lo que se necesita es una verdadera "teoría de la intervención estatal legítima" (Prats, 2000)

Por otro lado, la Nueva Macroeconomía Clásica considera la intervención del Estado como ineficiente y las reglas como los medios para limitar y reducir hasta lo posible la intervención del gobierno (Gilbert and Michie, 1997) El gobierno ya no es más un lugar para las simples estructuras de los flujos de materiales planeados. El manejo de los asuntos públicos requiere de un acercamiento altamente diferenciado a pesar de que la democracia como un valor universal exige que los ciudadanos se involucren en las decisiones de los asuntos públicos. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

En este acercamiento, las decisiones finales se toman sobre la base de una cascada de decisiones preliminares (Cong, 1998) Esta reevaluación del papel del Estado se encuentra "... estrechamente asociada con una reevaluación de las estrategias y mecanismos para promover el desarrollo y lograr la reactivación económica..." en los términos de Salazar Xirinachs. El Estado requiere revalorizar su función reguladora apropiada de actividades, delimitando los métodos y las formas de gobierno eficaces para hacerlo. Sin embargo, la limitación de las funciones del Estado en materia de economía política no garantiza el adecuado funcionamiento de otras instituciones.

Un cuestionamiento central a las funciones del Estado actual, es determinar cuáles deben ser modificadas y eliminadas mediante los procesos de privatización y cuáles siguen siendo esenciales para fortalecer o incorporarlas de acuerdo al nuevo modelo de desarrollo. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación.

La tendencia de la reestatización o neoestatización de las funciones del Estado se orienta a recuperar algunas de las funciones eliminadas o disminuidas durante la aplicación de la política económica y social del modelo neoliberal, la cual constituye una de las piezas principales en la expansión de las grandes empresas transnacionales, lo cual ha sido posible por la expansión militar y política de los Estados imperiales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

El gobierno del Estado-nación despiadadamente sometido a los embates de las fuerzas económicas transnacionales y a una revolución tecnológica de la información, no debe sucumbir fácilmente a las presiones, y menos renunciar a sus funciones de mediadores entre la sociedad y el mercado frente a los enormes retos que estos cambios globales significan. Por el contrario, ante el enorme reto que representan las fuerzas de los procesos de globalización informática y económica, los Estado-nación deben fortalecer sus estructuras mediante la reorganización y el refinanciamiento de las instituciones del Estado-nación necesarias para establecer la nueva gobernabilidad entre la sociedad y el mercado.

Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política. La explicación de la acción política en un contexto institucional es diferente de explicar el cambio institucional en períodos largos de tiempo.

En cada cambio de las constelaciones institucionales se involucran altos costos de transacción de los actores políticos afectados. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. En el último caso, la historia y la cultura política, entendida como los supuestos básicos del mundo de la política, las cuales restringen el rango de alternativas disponibles, tienen que ser sistemáticamente integradas como factores, los cuales entre otros, dan forma a la manera en que los actores políticos perciben las situaciones de elección (Kaiser, 1997). Con ello, se debe apoyar un desarrollo que se sustente en una profundización de la democracia y solidaridad social. Las condiciones sociales, económicas, tradiciones culturales o eventos impredecibles importan pero no influyen en forma mecánica en la acción política.

El papel del estado es evidente si se toma en cuenta que a pesar de la preocupación de los organismos internacionales por soluciones centradas en la estrategia del mercado, todavía

confían en el Estado para la formación de instituciones apropiadas. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia.

El Estado debe recobrar sus funciones de producción de regulaciones, de protección y bienestar social mediante una reingeniería de procesos y actividades así como de formas de gobierno para hacerlo en forma más eficaz. Así, el papel del Estado es complementario al mercado, en donde los nuevos agentes económicos y actores políticos son los empresarios y los administradores de las organizaciones del sector privado. Estas instituciones tienen como finalidad obtener y mantener la estabilidad macroeconómica como base para el desarrollo de una economía competitiva y dinámica del mercado y para el mejoramiento sostenido en el bienestar de sus poblaciones.

Las nuevas formas de gobernabilidad de un Estado-nación ampliamente insertado en la globalidad, deben traducirse en políticas públicas que posibiliten una relación positiva entre el crecimiento económico y el desarrollo social. Las nuevas formas de gobernabilidad de lo colectivo deben sustituir a las estructuras rígidas y pesadas que no dan respuesta a exigencias de la individualidad con orientación abierta y que por lo tanto requieren la emergencia de nuevas formas colectivas con estructuras más abiertas, flexibles y livianas que respondan a las exigencias de la individualidad con orientación abierta.

Si se considera las formas de gobernabilidad como coordinación, su efectividad se determina en función de los costos de transacción. Cada una de las formas de gobernabilidad tiene sus propios costos de transacción y el asunto es determinar cual forma de coordinación es la que promete menores costos en circunstancias específicas. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer

Por lo que los argumentos de los costos de transacción son comparativos. Economizar mediante el empleo de los costos de transacción es un concepto perverso en el que los costos y los beneficios tienen que calcularse en forma comparativa para cada una de las formas de organización. Cada forma de gobernabilidad tiene sus propios costos que requiere el soporte de un régimen de un contrato legal. Se requiere más los fundamentos de la teoría de los contratos que los conocimientos de los procesos de adjudicación judicial. Cada modelo de gobernabilidad implica soluciones a problemas organizacionales percibidos. Por lo tanto, son las circunstancias diferentes en las cuales cada una de las formas son más eficientes que las otras. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible.

El crecimiento económico que pueda derivarse de los procesos de globalización tienen que acompañarse de un conjunto complejo de políticas entre las que se deben incluir la asistencia financiera y técnica multilateral proveniente de organismos e instituciones globales, así como encauzamiento para la transferencia y ayuda bilateral a los países menos desarrollados.

La práctica de políticas públicas y una política económica que promuevan un crecimiento económico que provea los recursos para sostener una política social capaz de mejorar la equidad en la distribución de los beneficios, es un requisito necesario, aunque no suficiente para ampliar las opciones y oportunidades al pleno desarrollo humano. Los actuales sistemas democráticos ven limitados su desarrollo humano debido a la crisis de gobernabilidad y a la inestabilidad institucional que les caracteriza.

Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas. Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de "esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política". La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

El crecimiento económico implica la medición cuantitativa del producto interno bruto per capita y el promedio de consumo real. Así por ejemplo, la preservación del medio ambiente es necesaria para el futuro desarrollo humano, la cual es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo sustentable. El concepto de desarrollo humano sustentable es un concepto intrincado al concepto de buen gobierno. Planteado el desarrollo sustentaba como política de Estado no ha producido los resultados esperados, ni los cambios en comportamientos y actitudes requeridos.

La pertinencia de las políticas públicas y la política económica se sustenta en la fijación, aceptación y cumplimiento de las reglas del juego, instrumentos y metas entre los diferentes agentes económicos y actores políticos. La orientación estratégica de las políticas públicas y de la política económica debe ser el resultado de mecanismos acordados y aceptados, así como de arreglos institucionales para mitigar mediante estructuras de gobernabilidad apropiadas los problemas de agencia, reducir los costos de transacción y la complejidad de los contratos, en función de formas organizacionales. Las partes individuales que celebran contratos entre sí, fuera de las estructuras de gobernabilidad del Estado, encuentran incentivos adecuados para hacerlo mediante arreglos privados.

La perspectiva de los contratos como marcos de referencia enfatiza la continuidad a largo plazo y reconoce la imperfección de los contratos. La teoría de los contratos puede ser de más beneficio como fundamentos, que el estudio de los procesos de adjudicación judicial. Las estructuras de gobernabilidad tienen relación con los atributos de las transacciones las cuales tienen diferentes necesidades para la adaptación, ya que por ejemplo, los mercados se desplazan en forma más selectiva que uniforme.

El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es.

Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico "gorrón" causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación. La adaptación

involucra costos de transacción más bajos y más alto los resultados del cambio que la reforma. En otras palabras, la orientación estratégica de la política económica define la política de Estado, la cual debe reflejar el mandato de los ciudadanos.

Una política económica que, además, tenga preocupaciones por el uso correcto de los recursos del medio ambiente. La política económica neoliberal soslaya la dimensión social hasta que brotan inconformidades que desestabilizan el logro de los objetivos económicos. Hasta ahora la política social se ha focalizado en los más pobres, aunque los resultados han sido negativos porque estigmatiza y no ataca de fondo las causas. En el presente una pequeña pero muy persistente y especialmente necesaria categoría permanece: el pobre en las sociedades pobres con una economía estancada o decreciente, constituyen un problema de proporciones no manejables, pero no que se imponga por sí mismo con mucha urgencia para la comunidad de las naciones, excepto como una tragedia humana que ruega por una solución de humanitarismo (De Swaan Abram, 1997).

Además, las políticas públicas deben orientar y apoyar los procesos de transformación que la sociedad misma impulsa e incorporar a la ciudadanía y a la sociedad en razón igualitaria de los beneficios y oportunidades y no solamente en el traslado de los costos de estos cambios. El progreso y desarrollo de los países requiere además del Estado de Derecho, probidad financiera, estabilidad política, la ausencia de conflictos y de un marco legal que estimule las inversiones domésticas y foráneas.

El desarrollo de la democracia y el desarrollo integral de la sociedad son dos factores importantes para avanzar en las nuevas formas de la gobernabilidad sustentadas sobre la base de un Estado-nación eficaz y con un liderato político fuerte y un ejercicio de la autoridad delimitado por las instituciones que articule las diversas fuerzas y armonice los intereses. Todavía el Estado nacional constituye la base territorial para sostener la gobernabilidad y la democracia como los primeros recursos para legitimarse y para delimitar la ciudadanía misma que representan.

No obstante, lo que está ocurriendo ahora es la desterritorialización del Estado a escala espacial nacional para dar lugar a la emergencia de nuevas formas de unidades espaciales territoriales. Frente a los retos de competitividad que plantea la globalidad, un Estado-nación con estas características es el mejor diseño para la incorporación y la expresión de las expectativas de la sociedad y para conectarlas con los cambios del ambiente globalizado.

Mercado contra Estado.

El largo debate existente entre los diferentes sistemas económicos (socialismo contra capitalismo), se caracteriza por la polarización de las funciones del Estado contra las del mercado. La conclusión de Touraine (2000) es que “la idea de Estado-nación desaparece en cuanto correspondía a una fuerte interrelación de todos los elementos de la vida social al mismo nivel territorial. Pero ni el estado ni la nación desaparecen ahogados por el poder absoluto de los mercados.”

En estos sistemas económicos, el ser humano se hace “objeto” del poder del Estado o del mercado. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de

poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición".

El debate se ha centrado en un espectro de las formas institucionales de las economías del mercado puro, los mercados regulados, el socialismo del mercado y las jerarquías puras en la forma de las economías de planificación central. La gobernabilidad por las jerarquías opera mediante la imposición de políticas, reglas y reglamentaciones en forma autoritaria, de los niveles superiores a los inferiores, sobretodo en los aparatos burocráticos del sector público, para lo cual justifica el uso de métodos represivos contra quienes no están de acuerdo con sus proyectos y opiniones.

La violencia se institucionaliza. Las jerarquías políticas y sociales en los países menos desarrollados son por herencia injustas y estas jerarquías son preservadas por estructuras y prácticas que son injustas en términos de los estándares universales y locales de legalidad y justicia, los cuales son frecuentemente expuestos pero no practicados. Las soluciones propuestas van entre un extremo que reclama la intervención directa del Estado en las actividades económicas (economía socialista), al otro extremo, en el que el mercado con sus mecanismos de precios reclaman plena libertad para el ejercicio de sus funciones (economía capitalista). La economía capitalista del mercado tiene un carácter social.

Entre estas dos propuestas extremas, existen las intermedias como la del "socialismo democrático", "socialismo del mercado" y la del "mercado social", solo por mencionar algunas. La "economía social de mercado" y el "liberalismo social" son propuestas que se acercan mucho a la doctrina del neoliberalismo. Tanto el Estado comunista totalitario como el Estado nacionalista popular han resultado inviable. El socialismo del mercado se refiere, por ejemplo, a un modelo de economía en que los trabajos del mercado eran simulados, más que la existencia de un mercado real. Sin embargo, esta tipología es muy genérica y lo que se acepta es la simplificación de que existen muchos modelos de capitalismo. Screpanti (1999) hace una clasificación de las formas institucionales del capitalismo en función de las estructuras de la gobernabilidad, de la acumulación y de los regímenes de la propiedad privada. La propiedad privada es la regla fundamental sobre la que se fundamenta el mecanismo del mercado.

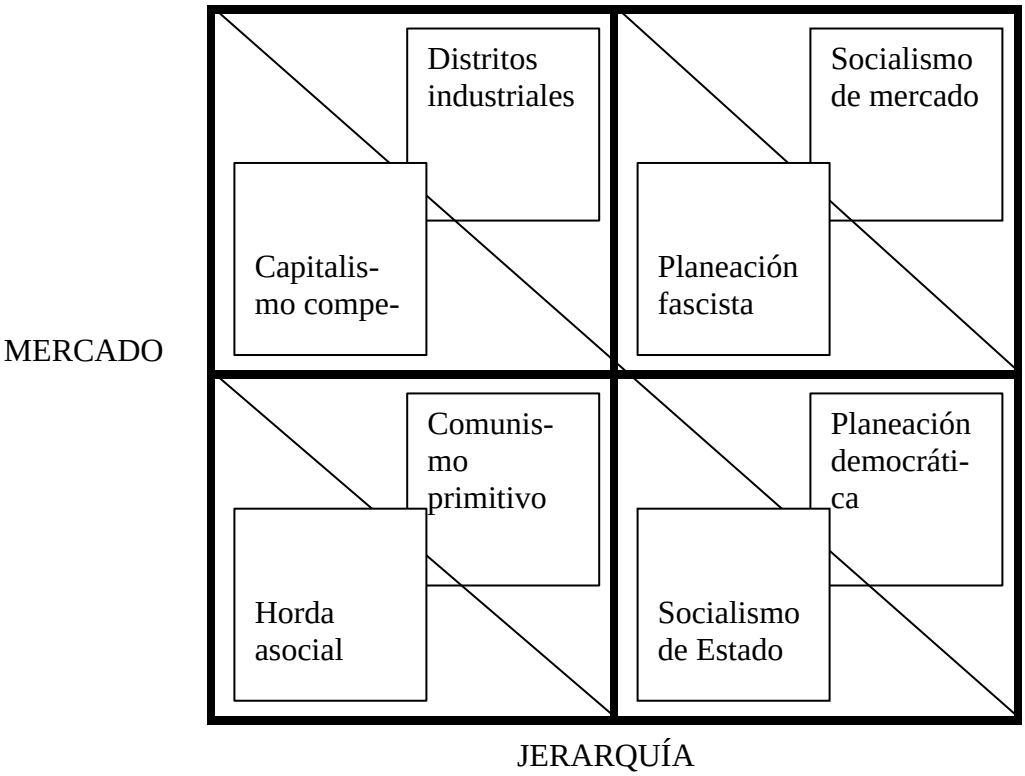
FORMAS INSTITUCIONALES DEL CAPITALISMO DE SCREPANTI (1999)

	REGÍMENES DE DERECHOS DE PROPIEDAD		
ESTRUCTURAS DE GOBERNABILIDAD DE ACUMULACIÓN	**Propiedad privada concentrada**	**Propiedad privada difusa**	**Propiedad estatal**
Mercados de bienes o mercancías.	***Capitalismo clásico.*** Revolución industrial		Yugoslavia
Mercados de compañías.		***Capitalismo corporativo orientado al mercado.*** Estados Unidos. Reino Unido.	
Jerarquías externas		***Capitalismo***	Unión de Repúblicas

		corporativo orientado a los bancos. Alemania Japón.	Soviéticas Socialistas.
Jerarquías internas	Todas las anteriores	Todas las anteriores	Todas las anteriores

Las diferentes configuraciones de las formas de sociedades capitalistas y post-capitalistas correspondientes a las dimensiones del análisis sociológico de mercado, Estado y sociedad civil, son substituidas por las formas y modos organizacionales de mercado, jerarquía y comunidad. Estados efectivos y mercados eficientes son importantes para establecer una sociedad humana floreciente. Sin embargo, la reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad.

El análisis institucional cualitativo compara las alternativas estructurales discretas. La conexión entre los tres modelos de gobernabilidad (mercado, jerarquía y comunidad), deriva de los supuestos del rational choice o elección racional y principalmente los costos de transacción, es decir, mientras los costos de transacción se incrementan en una forma de gobernabilidad, otra se vuelve más eficiente. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. El cálculo de los costos y beneficios de las diferentes formas de organización mediante el empleo de costos de transacción, es un concepto perverso. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. El acercamiento que hace Adler (1999) de los tipos ideales para entender los híbridos en los que incorpora la noción de confianza se derivan en una tipología de las formas institucionales.



TIPOLOGÍA DE FORMAS SOCIALES (ADLER, 1999)

Comparando los tres modelos de gobernabilidad se deben considerar como factores el número de actores involucrados, la intensidad y duración de las relaciones entre ellos, disponibilidad de la información y la presencia o ausencia de valores compartidos. A nivel macro, las tres formas de gobernabilidad, las jerarquías, los mercados y la comunidad, no necesariamente corresponden a los sectores público, privado, y social también denominado voluntario, organizaciones no gubernamentales o tercer sector.

De hecho, cada uno de los sectores diferentes contienen una mezcla de formas de gobernabilidad aunque uno puede prevalecer sobre los demás. Las formas de gobernabilidad también sugieren algunas formas específicas de entrenamiento de oficiales y aquellos involucrados en organizaciones voluntarias y privadas con varias formas de conexión al Estado y que cruzan las fronteras entre lo público y lo privado, es decir que van más allá de la esfera del sistema político.

A nivel meso, el enfoque de la gobernabilidad enfatiza la elección instrumental, en la que los costos de transacción son decisivos para determinar la forma como deben ser entregados los servicios tomando en consideración las características técnicas y de los clientes. Las transacciones entre las diferentes partes involucradas deben proporcionar beneficios mutuos a todos. El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Finalmente, a nivel micro se enfatizan la elección individual.

La emergencia de la confianza como un mecanismo de coordinación, siguiendo a Adler (1999), debilita la legitimidad del mercado y de la jerarquía. También debilita al mercado como un modelo de gobernabilidad para las relaciones ínter divisionales e ínter empresariales, en las corporaciones de forma M. Tanto las empresas como el mercado difieren en su acceso al fiat el cual es parcialmente explicado por las diferencias en los contratos legales. Igualmente, debilita la legitimidad de la jerarquía como un modelo de gobernabilidad para las relaciones de los empleados y las relaciones ínter divisionales en las corporaciones de forma U.

Las costosas fluctuaciones con las manifiestas fallas de los mercados, así como el dominio coercitivo y la especialización enajenante de las jerarquías, las convierte en incapaces para administrar las capacidades generadas por el conocimiento. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado.

La evolución de la estructura socioeconómica hacia más altos niveles de capacidades de administración del conocimiento requiere del desplazamiento del mercado como la forma organizacional dominante. La infusión de confianza en el mercado y en la jerarquía parece legitimar la democratización de las organizaciones. Los procesos de planeación requerirán de altos niveles de confianza de las personas involucradas, pero sobretodo, de una transformación de las relaciones sociales. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

Las relaciones sociales dentro y entre las empresas difieren y deben de considerarse en la

decisión para usar formas de gobernabilidad del mercado y de las jerarquías. Las empresas y los mercados difieren en su acceso al fiat lo que se explica parcialmente por las diferencias en los contratos legales. Las relaciones de intercambio entre las empresas pueden ser reducidos a transacciones que representan ciertos costos burocráticos establecidos en mecanismos de precios. La dirección de una economía planificada requerirá de procesos y mecanismos democráticos para lograr una apropiada satisfacción de las necesidades de la población. Por lo mismo, la dirección de una economía planificada, responde más apropiadamente a las necesidades de la población si se utilizan mecanismos democráticos.

El modelo de Estado de Bienestar fue implementado en muchos países durante varias décadas de este siglo, mediante políticas públicas y decisiones de gobernabilidad que iban desde posturas keynesianas que favorecían un intervencionismo estatal, hasta posiciones extremas socialistas en donde el Estado asume control total del mercado. El Estado de Bienestar representó después de la Segunda Guerra Mundial, un régimen de economía social del Estado que procura una mejor distribución de la riqueza. Muchos de los Estados nacionales implementaron una política económica y social diferente a la recomendada por las instituciones financieras internacionales durante el período de la posguerra comprendido entre los años de 1945 a 1975.

La economía social del mercado, del término alemán soziale Marktwirtschaft, afirma Semo (1998), es una metáfora que significa "la regulación del mercado por el conflicto social y el control del Estado por los contrapesos democráticos". El déficit de regulación y gobernabilidad se debe a los fracasos en la transferencia del poder y el mando de las instituciones del Estado a las instituciones del mercado mediante programas de desregulación del Estado que significan en realidad la regulación por el mercado. El análisis en los tipos de veto es actualmente en discusión de la reforma institucional es indicativo de la percepción que prevalece de déficit en el sistema político.

La nacionalización de las empresas, basado en ideales socialistas o comunistas, ha sido un fenómeno recurrente en los países en desarrollo. Habermas (1998) acierta un punto que finalmente resulta ser muy discutible cuando afirma que en las actuales dimensiones, las funciones del Estado de bienestar social sólo pueden cumplirse cuando pasan del Estado nacional a unidades políticas que se adelantan en cierta medida a una economía transnacionalizada. En sí, el modelo de Estado de Bienestar a escala global o mundial es un proyecto que alienta el rescate de lo mejor de la sociedad humana en contra de declarar su desaparición para beneficiar la maximización de los grandes intereses bursátiles corporativos.

La influencia de la Nueva Derecha y los trabajos académicos de Hayek, Friedman y la Escuela Austriaca de economía en la década de los ochenta, inclinó las decisiones en favor de un sistema económico basado en las libres fuerzas del mercado. La Escuela Austriaca enfatiza la teoría subjetiva del valor a diferencia de la teoría clásica de la economía política que enfatiza la teoría objetiva del valor.

Probablemente el economista y filósofo político Hayek es el más influyente en el neoliberalismo. Es famoso el debate que sostuvo Hayek con Keynes acerca del intervencionismo. Keynes argumentó la existencia de fallas para entender el papel que las tasas de interés y el capital juegan en la economía de mercado. Milton Friedman sigue las propuestas de Hayek y junto con otros prominentes economistas norteamericanos forma la escuela Americana Neoliberal con varias corrientes: la Escuela de Chicago, la teoría de la

elección pública, la teoría del capital humano. Hayek previno de los peligros políticos del socialismo, como el totalitarismo que surge que surge de la naturaleza planeada de las instituciones económicas y se preocupa por restaurar el liberalismo clásico en una sociedad libre, la cual incluye al mercado libre como su principal institución.

La orientación del Estado hacia el bienestar obstaculiza el desarrollo del mercado, consume la riqueza e infringe los derechos ciudadanos, sostienen estos economistas. No obstante, es el Estado el garante de los derechos ciudadanos conquistados en luchas por nuevas libertades políticas y sociales por los individuos, grupos y naciones. Al decir de Inherin (1987:15), "todos y cada uno de los derechos, ya sean derechos de personas o derechos individuales, se reafirman únicamente mediante una continua tendencia a la lucha". A una primera etapa en que se crearon los derechos individuales, se establecieron los mecanismos para la defensa de estos derechos.

Hayek resume la doctrina social del neoliberlismo diciendo que "una sociedad requiere de ciertas morales que en ultima instancia se reducen a la mantención de vidas: no a la mantención de todas las vidas porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas. Por lo tanto las únicas reglas morales son ... la propiedad y el contrato" (Hayek, 1990). Anteriormente (Hayek, 1980) había dicho que "El Estado debe proveer un cuerpo general de leyes al mejor funcionamiento del mercado. Esto implica mejorar gradualmente las reglas del derecho privado y comercial. El estudios de los fundamentos de la teoría de los contratos son de mejor fundamento que el estudio de los procesos de adjudicación judicial.

Luego está la función de proveer, por fuera del mercado, un conjunto de bienes y servicios para algunas personas que no tienen la capacidad de ganar un nivel mínimo de salario en el mercado de trabajo. Pero esto no debe hacerse interfiriendo en el mercado. Las personas que no puedan lograr un nivel de ingreso que les permita cubrir sus necesidades más elementales deben recibir una compensación uniforme del Estado." Esta política de compensación a los requerimientos y demandas de los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales sobrecargan las estructuras político burocráticos y provocan la crisis del Estado de Bienestar. No obstante, la integración internacional debe conducir a estructuras más descentralizadas de los mercados laborales.

Ciertamente, los mismos problemas internos que previenen el florecimiento de un desarrollo basado en el mercado, también entorpece la dimensión externa, la esfera globalizada de los mercados. Esto es, si la sociedad se encuentra atrapada en el desarrollo de sus instituciones domésticas y su economía política, la globalización no es la solución ciertamente a los problemas. Por el contrario, si se enfatizan los procesos de globalización bajo este esquema de desarrollo nacional, lo más seguro es que las dimensiones de los problemas crezcan. Se sobre enfatiza la importancia de la globalización en el amplio esquema del desarrollo.

En vez de ajustar el desarrollo local y nacional a las tendencias y patrones globales, una estrategia de desarrollo nacional debe tomar en cuenta las necesidades locales y nacionales, sus particularidades y potencialidades, sus ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, como la base para una más articulada integración en los procesos de globalización. La estrategia de modernización neoliberal se ha absolutizado bajo un dogma ortodoxo que no distingue diferencias de desarrollo entre los Estados nacionales y las localidades. Las

estrategias de desarrollo deben ser formuladas para generar oportunidades locales y regionales mediante el uso óptimo de recursos y potencialidades.

En este sentido el desarrollo nacional que promueve el desarrollo local y regional, debe avanzar en doble sentido. El crecimiento económico y desarrollo de la economía regional está relacionada directamente con la estructura económica del mismo territorio, las variables macroeconómicas nacional y los procesos de globalización económica. Los procesos de globalización económica y de los mercados son resultado de los acuerdos entre los Estados y por el crecimiento de las empresas transnacionales. Los programas de desarrollo local deben pivotar sobre la base de interacciones comunitarias y solidariamente comprometidas en forma activa y continua, más que por la simple contigüidad física o territorial.

Esfuerzos para un desarrollo estructural con una amplia cobertura de arriba hacia abajo y esfuerzos de abajo hacia arriba que enfatizan las particularidades de las diferentes localidades y regiones. La estructura espacial delimitada por los diferentes niveles de territorios, definen las interrelaciones entre las diferentes entidades geográficas. Con la desterritorialización del Estado a escala de espacio nacional, nuevas formas de unidades espaciales están emergiendo.

La construcción territorial del espacio de las decisiones públicas de abajo hacia arriba, que privilegia con una mayor autonomía al gobierno local, debe considerar la corresponsabilidad de competencias en la gestión pública. El ejercicio de la autonomía del gobierno local entra en conflicto con otros niveles de gobierno, por lo que no es una autonomía absoluta, sino relativa. Las competencias exclusivas y las concurrentes deben ser delimitadas en los diferentes niveles de gestión pública.

De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales. La gestión pública es un factor importante en la gestión del desarrollo local, aunque desafortunadamente los gobiernos locales no asumen su responsabilidad como agentes de desarrollo en las decisiones relacionadas con la sociedad local.

El desarrollo local es un proceso orientado por estrategias y políticas que articula esfuerzos y recursos de agentes económicos y actores políticos con capacidad de acción territorial para lograr objetivos de crecimiento económico, desarrollo social y mayores niveles de bienestar de la población. Son actores y agentes todos los que toman decisiones que afectan al territorio (Marsiglia y Pintos, 2001). Los programas de desarrollo local deben pivotar sobre la base de una estructura de interacciones comunitarias, solidariamente comprometidas en forma activa y continua, más que en una simple contigüidad territorial o geográfica,

Por lo tanto, no existe un modelo único de desarrollo local sino distintas propuestas de proyectos. El desarrollo, según Tarapues Chamorro (2001) se entiende como el “proceso capaz de permitir un mejoramiento de las capacidades humanas y, por tanto, un alza de la producción y de la productividad de bienes y servicios favorable al crecimiento”. Y lo local se refiere al “espacio donde, de manera inmediata, se concreta tal proceso; se trata de encontrar métodos para ayudar a la creación de la actividad en ámbitos locales”. La tendencia en la formulación e implantación de una política de desarrollo empresarial, es orientar la

producción hacia sectores de mayor valor agregado y lograr una inserción en los mercados internacionales de la economía nacional y regional.

El Estado nacional todavía tiene un papel importante que desempeñar en la promoción y conquista de los mercados internacionales y en la protección de los mercados internos. La eficacia de la política de desarrollo depende mucho del ejercicio de una burocracia desarrollista que no ha logrado consolidarse en forma autónoma y que sigue arrastrando viejos vicios patrimonialistas. Lechner (2000) sostiene que las políticas de desarrollo tienen que manejar complementariamente la modernización y la subjetividad. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación "puramente expresiva y gratuita" como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000).

Los actores son las personas e instituciones que desarrollan acciones directas en un territorio, así como también a las "estructuras, organismos y personas que por misión o acción tienen un lugar y un papel en los engranajes de los intercambios locales (Cachón, 1996). Tomando en consideración que el término local se asocia tanto a un territorio físico definido, como también a un grupo en movimiento en un espacio móvil, van Helmerick (2001) define una localidad o un sistema localizado como "un conjunto de elementos en interacción dinámica, localizado dentro de los límites de un espacio físico determinado, organizados en función de un fin".

El concepto anterior de espacio como una delimitación física y territorial ha evolucionado a un concepto más dinámico, abierto y multilineal. Arellanes Jiménez caracteriza este espacio como "concepto dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones", Una redefinición del territorio es la base para el nuevo espacio geopolítico que requiere la nueva gestión pública local para involucrar a los diferentes actores y agentes en la promoción del desarrollo de la sociedad. La gestión pública es un factor importante para el fortalecimiento o el debilitamiento de la acción gubernamental. La sociedad regional adquiere relevancia en la promoción del desarrollo local equitativo y equilibrado. El espacio geopolítico redefinido, además cede su lugar al espacio geoeconómico donde se organizan las instituciones del mercado.

Este conjunto de elementos se refiere a las personas que viven habitualmente y a las unidades económicas establecidas en un territorio. Marsiglia y Pintos (2001) conceptualizan el territorio local/regional como "una dimensión económica, una dimensión identitaria e histórica, una comunidad de intereses y como espacio con un potencial endógeno para potenciar el desarrollo. De acuerdo a Putnam (1993: 183), "la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político".

La reinvención del espacio geopolítico del gobierno local implica una nueva estructura territorial que implica el desarrollo del espacio geoeconómico donde se organiza el mercado, en la cual la gestión pública municipal se manifiesta como el escenario en que los diferentes actores y agentes interactúan en proyectos de colaboración conjunta para la solución de sus propios problemas, mediante políticas que articulan los esfuerzos locales con los nacionales.

Por otro lado, la redefinición de las funciones de los gobiernos municipales requieren del compromiso de servidores públicos capaces de formular e instrumentar estrategias de desarrollo a largo plazo. La ciudadanía, organizaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales, organismos empresariales, etc., como actores de la sociedad civil, deben ser involucradas por el gobierno municipal para participación en los procesos de tomas de decisiones para la formulación y ejecución de políticas públicas orientadas a estimular el desarrollo local y regional.

El gobierno municipal puede establecer determinadas reglas del juego en el ejercicio de su autonomía, la cual, de acuerdo a Ruíz Blanco (1993: 120) comprende "la elección de sus propias autoridades (autonomía política); la libre gestión en las materias de su competencia (autonomía normativa); la creación y recaudación de impuestos (autonomía tributaria) y la inversión de sus propios ingresos (autonomía administrativa)". De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes. La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

La gestión pública municipal es un factor importante para el fortalecimiento o debilitamiento de las acciones gubernamentales, aunque desafortunadamente los gobiernos locales no asumen su responsabilidad en los procesos de tomas de decisiones relacionadas con la sociedad local en la promoción del desarrollo. El fortalecimiento de los gobiernos municipales requieren de una mayor autonomía financiera y administrativa, la participación ciudadana y de la sociedad, el manejo eficiente de sus recursos, proyectos intergubernamentales e interinstitucionales, etc.

La autonomía municipal se clasifica en política y administrativa. Es autonomía política la que se refiere directamente al ejercicio del poder de elegir y gobernar y la autonomía administrativa se refiere al funcionamientos de las organizaciones. De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes.

El gobierno municipal puede establecer determinadas reglas del juego en el ejercicio de su autonomía, la cual, de acuerdo a Ruíz Blanco (1993: 120) comprende "la elección de sus propias autoridades (autonomía política); la libre gestión en las materias de su competencia (autonomía normativa); la creación y recaudación de impuestos (autonomía tributaria) y la inversión de sus propios ingresos (autonomía administrativa)". La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

Van Hermelrick (2001) define el espacio local como un sistema compuesto de "un conjunto de subsistemas en interacción dinámica entre sí y con su medio ambiente, cuya finalidad es la satisfacción de necesidades." El mismo autor entiende el desarrollo local como "un proceso basado en alianzas entre actores, que se genera en un ámbito territorial inmediato, con el fin de impulsar procesos de cambios para el mejoramiento de su bienestar colectivo."

Los proyectos de desarrollo local integral deben tener como fundamento la reconstrucción de su propia realidad y no ser elaborado desde el escritorio de una oficina del gobierno central, de tal forma que tome en consideración las necesidades de desarrollo locales, los recursos y capacidades locales existentes, las áreas prioritarias y el involucramiento de los principales agentes económicos y actores políticos y sociales. Estos agentes y actores son el Estado y gobierno mismo, sociedad civil, empresas privadas, etc. Por lo tanto, no existe un modelo único de desarrollo local sino distintas propuestas de proyectos.

Enríquez (2001) plantea la apertura del campo del desarrollo local en tres vertientes: la concepción metodológica de trabajo que impulsan las organizaciones de la sociedad civil y que impulsa acciones desde abajo para enfrentar la problemática del crecimiento económico y desarrollo social; como resultado de los procesos de descentralización y democratización del Estado, y como respuesta a los requerimientos de la cooperación internacional, la promoción de la reforma del Estado y la tendencia democratizadora. Corresponde a los gobiernos la protección para la producción del crecimiento económico.

López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una "propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y sociallo permiten y, presionan en su favor." La tendencia hacia las reformas en los gobiernos municipales y en su autonomía se expresa en las reformas constitucionales en muchos países del mundo.

La democratización y el desarrollo social se encuentran en una relación estrecha íntima. Lo que queda claro es que los procesos de democratización social, requerirán de procesos de transformación socialista. Las concepciones extremas de los modelos autárquicos a los modelos globalizadores, con diferentes componentes. Sin embargo, hasta ahora, el desarrollo local sufre de los efectos recesivos de las políticas de ajuste estructural y de estabilización económica que arrojaron un incremento masivo del desempleo, elevación de los niveles de pobreza y desigualdad social.

Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

Visto desde la perspectiva global y a través de los lentes conceptuales de la integración contemporánea en la economía capitalista global, se ha reforzado, sino acentuado esta extrema desigualdad así como las relaciones injustas de subordinación y dominación que mantiene y complementa esta desigualdad. La economía capitalista del mercado tiene un carácter social. Junto con las elites locales y los capitalistas transnacionales han promovido mayores cambios estructurales en las economías menos desarrolladas a fin de facilitar la creciente integración de la región en la economía global capitalista. La naturaleza de la integración regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo

Por lo anterior, el desarrollo local integral tienen que ser reorientado en su objetivo para cubrir o minimizar estas deficiencias y los impactos negativos en el desarrollo social, impulsando y promoviendo proyectos que impliquen nuevas formas de organización para incrementar los niveles de eficiencia pero también la consecución de una mayor igualdad en el acceso a los recursos y beneficios del crecimiento económico medido en términos cuantitativos del producto interno bruto per cápita y el promedio real de consumo.

No obstante, la promoción del desarrollo económico local se mantiene solamente con una orientación en el ámbito del mercado, por lo que sería importante no conceptualizarlo subordinado siempre a la eficiencia de los agentes económicos. Para Tarapuez Chamorro (2001), el desarrollo económico local es el proceso que reactiva la economía y dinamiza la sociedad local mediante el aprovechamiento eficiente de recursos endógenos existentes en la localidad a efecto de estimular el crecimiento económico, crear empleo y mejorar los niveles de calidad de vida.

Precisamente, Boisier (1988), argumenta que lo local es el escenario óptimo para la participación individual en la orientación del mercado, pero insuficiente para la participación colectiva. El diseño e implantación de programas de desarrollo económico local se requiere de una estructura institucional orientada a la promoción de la formación de capital humano y social para elevar los niveles de productividad.

El desarrollo económico regional es descrito como la serie de incrementos en el volumen de las operaciones económicas tales como el producto agregado y el ingreso total, entendidos como la suma del valor de lo producido en las diferentes actividades económicas y como la suma total de los ingresos generados para quienes participan en dichas actividades (Tarapuez Chamorro, 2001). El crecimiento y desarrollo de la economía regional está determinada por la estructura económica existente en el mismo territorio, las variables macroeconómicas nacionales y los procesos de globalización económica.

Así mismo, en detrimento de la acción centrada en el papel del Estado como promotor del desarrollo y crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. El crecimiento económico se ha producido bajo la protección gubernamental. En este nuevo modelo económico definido por una relación hacia dentro de separación entre el mercado y el Estado y hacia fuera por la integración a los procesos de globalización económica, e implementado con algunas diferencias en las políticas económicas.

En términos generales, la primera fase de reformas del Estado estuvo marcada por un desmantelamiento del mismo Estado y por el reforzamiento de una economía antiestatista, en lo que se ha dado en llamar, reformas de la primera generación. Los ideólogos ortodoxos neoliberales limitaron las funciones del estado en materia de regulaciones y en la protección y bienestar social. Los procesos globales de la reestructuración capitalista e integración y las reformas liberales tomadas por los gobiernos latinoamericanos han reconfigurado el mercado laboral, incrementado la transferencia del ingreso de las clases bajas a las clases altas y debilitado grandemente la posición de la clase trabajadora en Latinoamérica.

Sin embargo, existe también la otra tendencia opuesta que consiste en la promoción del desarrollo local y regional mediante el fortalecimiento de la función regulatoria. En esta última tendencia, la reestatización o neoestatización de las funciones del Estado se orientan a recuperar algunas de las funciones eliminadas o disminuías por la aplicación de las políticas

económico-sociales del modelo neoliberal, la cual constiituye por sí misma una de las piezas clave en la expansión de las grandes corporaciones transnacionales, la cual ha sido posible debido a la expansión militar y política de los Estados imperialistas.

Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales Esta expansión la logran las corporaciones transnacionales mediante el reparto de los mercados internacionales apoyados por los Estados imperialistas que aumentan su poder e influencia. El cuestionamiento es cómo debe hacer el Estado para involucrarse en el desempeño eficaz de estas actividades y mediante qué formas de gobierno.

Estas reformas fueron reformas ortodoxas que se implantaron a finales de los años ochenta y principios de los noventa, enfocadas a la estabilización macroeconómica sin considerar cambios en el sistema político. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Los gobiernos que instrumentaron esta primera generación de reformas lo hicieron en forma autoritaria, haciendo uso de sus prerrogativas ejecutivas para gobernar por decreto y sin consultar a la ciudadanía. El gobierno por decreto deja repercusiones negativas en la gobernabilidad, por lo que los métodos y estilos de gobierno empleados no garantiza el éxito en la aplicación de las reformas de la segunda generación.

Sin embargo, en un entorno de globalización, el Estado tiene problemas para garantizar el bienestar de los ciudadanos que se encuentran desempleados, marginados o excluidos socialmente. En otras palabras, las instituciones que garantizan el bienestar social se han vuelto disfuncionales. Los apoyos del Estado para el bienestar social quedaron desvirtuados cuando se destinaban preferentemente a una clase media y no a los pobres y marginados quienes verdaderamente lo necesitaban. Pero tampoco el nuevo orden propuesto por la globalización no ha creado las instituciones que resuelvan los grandes desajustes que genera y que enfrenten los costos sociales.

El problema se reduce a una rehabilitación de las funciones del Estado necesario y suficiente, más que un Estado mínimo, para llevar a cabo las tareas y funciones del nuevo modelo de desarrollo, a dotar al Estado de las capacidades que se requieren para el desempeño de nuevas funciones, prioritariamente la función reguladora. Esta función de regulación del Estado en una sociedad democrática y solidaria, amplía las funciones económicas, políticas, sociales, culturales, etc., mediante estructuras de gobernabilidad colaborativa entre las instituciones del Estado y de la sociedad civil en la realización de proyectos comunes.

Este concepto de Estado ampliado que involucra a las instituciones de la sociedad civil no les permite a estas sustraerlo de importantes funciones para reducirlo a la expresión del Estado policía. En este sentido, El Consenso de Washington orienta la agenda y los desafíos de las instituciones de la sociedad civil a sustituir importantes funciones del Estado, a liberalizar la economía, privatizar empresas y a limitar la intervención del gobierno en el mercado. Los países que tienen mejores beneficios de los procesos de globalización son aquellos que se han separado de los postulados del Consenso de Washington regulando su propio crecimiento.

Igual que antes, el sistema de asistencia social del Estado ayuda a ciertos sectores empresariales y otros estratos sociales que han sido debilitados por las fuerzas de la globalización, pero no a quienes lo necesitan por su condición de ser marginados del desarrollo. Alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma. Un mayor problema para dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados.

Las condiciones para la promoción regional de la actividad empresarial, de acuerdo a Tarapuez Chamorro (2001) requieren también el fomento de la integración o diversificación de la estructura económica regional y la coordinación interinstitucional de planes , programas y proyectos que incluyan a los marginados en los procesos de desarrollo. La globalización despoja del poder a la gente marginada y sus correspondientes representantes electos y otorga el poder a procesos e instituciones que son controlados por gente que no parecen entender incluso que la pobreza es más que una perspectiva abstracta de números deshumanizados.

Por tanto, en una economía capitalista, los modos en que se organiza la actividad económica tales como los roles de los mercados, las jerarquías, las alianzas entre empresas y los gobiernos, se han vuelto más complejos. La economía capitalista del mercado tiene un carácter social. En las economías en desarrollo, son las fuerzas libres del mercado las que orientan sus objetivos de crecimiento económico y su desarrollo social, la propuesta de los países capitalistas desarrollados, aunque no señalen como lograr el equilibrio de un desarrollo sustentable en el logro de estos objetivos, una vez que se han rebasado los ánimos iniciales.

Por supuesto que aquí el concepto de desarrollo sustentable está enfocado hacia la obtención de una racionalidad de medios-fines según el concepto Weberiano. En un sistema de libre mercado, por ejemplo, no existe forzamiento para la producción de acuerdos sobre cualquier cosa, de tal forma que cualquier acción puede ser tomada, pero ajustándose a esta racionalidad en la relación medios-fines.

Mientras, el sistema socialista pregonaba que los medios de producción y distribución debían ser propiedad y administradas por el Estado en substitución del mercado. La propiedad social, de acuerdo a Amín (2001) se convierte en “una realidad solo desde el momento en que la democratización ha realizado tales poderosos progresos que los ciudadanos-productores han llegado a ser amos de todas las decisiones tomadas a todos los niveles de la vida social desde el lugar de trabajo a las cumbres del estado”.

La propiedad social tuvo como paso inicial “la abolición de la propiedad privada del capital y de la tierra”. Pero en sí, la tarea implica “la construcción de una nueva cultura, que requiere de generaciones sucesivas que gradualmente se transforman a sí mismas mediante su propia acción.” Frente a la concepción socialista moderna que ve un problema en la propiedad privada y prefiere una propiedad colectiva, Aristóteles consideraba, en efecto, que solamente lo que el individuo tenía como propio es aquello de que me se ocupa con más esmero. Aristóteles pensaría que estaba en la esencia humana el ocuparse más de lo propio que de lo común.

Aristóteles no solo se preocupa por la defensa de la propiedad privada, sino la promoción, al mismo tiempo, de un uso en común. Aristóteles plantea (Libro II cap 5) la dos formas de economía agraria: en unos pueblos la propiedad de la tierra es individual, pero la cultivan y

consumen comunitariamente y otros poseen y cultivan juntos y reparten el producto para uso individual (como hacen algunos pueblos bárbaros, dice). ?O es mejor que tanto la propiedad como el uso sean en común? se pregunta el filósofo. Cuando tenemos demasiadas cosas en común nos peleamos más, dice.

En esto difiere Aristóteles radicalmente de lo que se advierte en el capitalismo de mercado, con su mano oculta que todo lo arregla y sus sociedades anónimas. Pues lo que sucede en la sociedad moderna capitalista es que cada uno se ocupa de lo suyo también en el uso y se desentiende del prójimo. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La *filautía* no debe ser enemiga de la *filía*.

El progreso económico se logra no solamente mejorando la eficiencia dentro de una asignación constitucional de los derechos y mediante cambios en las reglas que definen la eficiencia con los consecuentes cambios en la asignación constitucional de derechos sobre los recursos. Por lo tanto, puede argumentarse que las constelaciones constitucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables. La suposición de que las políticas públicas comunes de varios Estados-nación sobre la integración de los mercados, representan para estos Estados-nación mayor eficiencia y mayores beneficios que pueden modelarse bajo la simetría del clásico Dilema del Prisionero, no es del todo clara.

La peor solución al Dilema del prisionero se logra mediante el uso de mecanismos de competencia, por ejemplo, en la provisión de los bienes públicos si estos fueran, contrario a su definición, no proveídos por el Estado o por la sociedad civil y sí por empresas privadas que lo convierten en bienes privados para obtener con ellos utilidades. No todos los bienes y servicios públicos pueden proporcionar utilidades a los particulares, porque hay algunos que son intrínsecamente no lucrativos. Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

Sin embargo, la eficiencia de un mercado puede estar limitada por altos grados de incertidumbre que complican el cálculo del valor potencial de los recursos, la perversidad de los costos de transacción que distorsionan las percepciones de la naturaleza de recursos disponibles y su grado de accesibilidad y las presiones de la competencia. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Las organizaciones y las empresas pueden balancear las limitaciones institucionales impuestos a los mercados mediante el debilitamiento, la reposición y la modificación de los incentivos económicos del mercado, redefiniendo la motivación y la eficiencia de las actividades económicas en las que influyen. Las empresas y el mercado difieren en su acceso al fiat debido en parte a las diferencias en los contratos legales.

Cuando esto sucede, el concepto de eficiencia se modifica, de ser una eficiencia de asignación a una eficiencia adaptativa (Moran y Ghoshal, 1999). Las necesidades adaptativas de las transacciones en forma autónoma y cooperativa varían de acuerdo a los atributos de las transacciones y a las capacidades adaptativas de las formas alternativas de gobernabilidad también difieren (Williamson, 2000:8) El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de

su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es.

Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico "gorrón" causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes.

El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. La interdependencia entre las transacciones también varía para crear el ambiente económico. Las teorías económicas no han podido fundamentar implícita o explícitamente el desarrollo de los Estados-nación como resultado de la motivación externa y a iniciado a cuestionarla mediante el reemplazo de una motivación intrínseca.

Los métodos para evaluar la elección entre los mercados y las jerarquías como modos de creación y asignación de recursos no pueden ser usados para evaluar la elección entre gobiernos y jerarquías o entre gobiernos o mercados. La gobernabilidad por las jerarquías opera mediante la imposición de políticas, reglas y reglamentaciones en forma autoritaria, de los niveles superiores a los inferiores, sobretodo en los aparatos burocráticos del sector público, institucionalizando la violencia como método de control político. Las jerarquías políticas y sociales en los países menos desarrollados son por herencia injustas y estas jerarquías son preservadas por estructuras y prácticas que son injustas en términos de los estándares universales y locales de legalidad y justicia, los cuales son frecuentemente expuestos pero no practicados.

En la asignación de los recursos, todos estos mecanismos presentan fallas. Incluso, dentro de las economías basadas en el mercado, el marco de referencia institucional y las percepciones del papel de los gobiernos, jerarquías y mercados entre sí, difieren, junto con una reacción a las fallas organizacionales.

El imperativo del capitalismo sobre la globalización económica ha sido ampliamente reconocido, pero los sistemas de organización eficaces para llevarla a cabo no son del todo muy claras. En esta forma, el mercado adquiere importancia tanto en términos económicos como culturales, dando sentido a criterios de eficiencia, productividad, legitimidad, transacciones y relaciones interpersonales, etc. La interdependencia de las transacciones crea un ambiente económico. Los mercados operan en un medio político. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. La aplicación de una política económica neoliberal que favorece el libre mercado ha generado una mayor desigualdad, pobreza, exclusión y degradación de los recursos naturales del medio ambiente.

Las investigaciones empíricas, hasta ahora, no evidencian una simple asociación entre los cambios en la apertura comercial y los cambios en las desigualdades y, sin embargo, en muchos países la desigualdad se ha elevado con los procesos de integración de estos países con la economía global. La naturaleza de la integración de la regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo No obstante, en otros casos de países, la desigualdad ha caído con la apertura económica abonando a favor del argumento de que en términos generales, una mayor apertura eleva los ingresos per cápita de los pobres y por lo tanto el ingreso de los pobres. Algunos investigadores como Tildert and willliamson (2001) culpan a los malos gobiernos y antidemocráticos de ser las principales fuentes de las desigualdades.

No obstante, la distribución del ingreso per cápita entre países ha llegado a ser más desigual en las últimas décadas, y por supuesto, las diferencias se reflejan en su población. Esta es la razón por la que no todo aumento en los ingresos per cápita se corresponde con aumentos en desarrollo, ni tampoco todo desarrollo es sustentable. Las investigaciones arrojan resultados generalizados de que los procesos de globalización tuvieron efectos que incrementaron las desigualdades en los países abundantes en tierra y un efecto más igualitario en los países con escasez de tierra. Se puede concluir que abrir las puertas al comercio exterior es positivo si se hace en el mejor interés de cada nación y no en los intereses de la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Las relaciones de comercio y de mercados se delimitan en acuerdos entre los Estados, los cuales operan dentro de sus fronteras.

Los gobiernos neoliberales no han podido reorientar las instituciones para lograr una distribución más justa y equitativa en los beneficios de la globalización. Los beneficios que han obtenido algunas de las naciones del mundo que se han involucrado en los procesos de globalización por sí mismas, se han distribuido en forma equitativa. Sin embargo otras naciones no lo han logrado, sobretodo aquellas que han tenido la asesoría de las instituciones financieras internacionales. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación. El capitalismo consiste en no más que un modo de producción en el cual formalmente se recluta libremente el trabajo por empleadores regulares de empresas que compiten en el mercado por la obtención de utilidades (Runciman 1995) Las implicaciones son obvias: Cómo se pueden hacer predicamentos democráticos que postulen la igualdad política bajo condiciones de una economía que intrínsicamente favorece la desigualdad.

Al nivel de economía nacional se exhiben variaciones sustanciales en el significado de asignaciones del mercado basadas en los precios, la política industrial y las relaciones de los negocios con el Estado (Appelbaum and Henderson, 1995) Al mercado se le objeta de que está profundamente enraizado en principios que promueven la competencia y la codicia entre los seres humanos. Que, además, conduce a la explotación y a la profundización de las desigualdades.

El mecanismo sobre el que se organiza la globalización es el de una selección permanente en un contexto de competencia entre los principales factores de la producción, como por ejemplo, entre el trabajo y el capital, con mayores ventajas para éste último por la movilidad

que le proporcionan los mismos procesos de globalización. Actualmente se discute la significación del valor del trabajo frente al capital. Los procesos globales de la reestructuración capitalista e integración y las reformas liberales tomadas por los gobiernos latinoamericanos han reconfigurado el mercado laboral, incrementado la transferencia del ingreso de las clases bajas a las clases altas y debilitado grandemente la posición de la clase trabajadora en Latinoamérica. La orientación de una política económica de crecimiento hacia fuera basado en la competitividad para poder insertarse en los mercados internacionales, ha limitado la capacidad redistributiva del Estado y como resultado se han incrementado los índices de pobreza. No hay que olvidar que el concepto de pobreza es un concepto relativo.

Las elecciones económicas sobre el consumo y la inversión individuales son influidas por las variables sociales, culturales, institucionales, etc. Esta ambigüedad se manifiesta más claramente en la necesidad que tienen los ciudadanos para mantener lealtades separadas. Por un lado, a sus propias tradiciones e instituciones, y por el otro lado, a las características de una cultura internacional que rápidamente se desarrolla (Ireland and Hitt, 1999)

Con las transformaciones económicas ocurren las políticas, sociales y culturales. Las transformaciones económicas y políticas también implican transformaciones de los valores sociales, culturales y sobretodo de valores morales. Los valores, costumbres, tradiciones, ideas, modas, etc., como manifestaciones sociales y culturales, al igual que los procesos económicos, han experimentado procesos de mundialización. La organización económica de las sociedades democráticas ha quedado delimitada por las diferentes funciones que desempeñan los gobiernos, ya sea como iniciador, supervisor del sistema económico y árbitro en las disputas que surgen entre los diferentes agentes económicos.

Estas funciones se consideran especiales y de responsabilidad única para gobiernos, o bien como dueño de activos, participante e influenciador de la forma en que los recursos son asignados, funciones que son frecuentemente realizadas por las instituciones tanto del sector público como del privado. La creación de mecanismos de coordinación entre los sectores público y privado es una estrategia para impulsar el desarrollo económico desde una perspectiva micro y una orientación a la solución de los problemas locales.

De acuerdo a Boisier (1988) el ámbito espacial local es el escenario óptimo para la participación individual. Cualquier sociedad moderna debe ser un equilibrio ajustado de una mezcla de instituciones del sector privado y del sector público que regule y redistribuya los recursos y que, además, experimente la autoorganización. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado.

Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política. La sociedad regional es un actor importante en la promoción del desarrollo local integral equilibrado y equitativo y para lograrlo, debe considerar la inclusión y pluralidad de intereses de los diferentes agentes económicos y actores políticos, para lograr los compromisos y coordinar eficazmente los esfuerzos. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones. Las condiciones sociales, económicas, tradiciones culturales o eventos impredecibles importan pero no influyen en forma mecánica en la acción política

Para mantener un nivel de gobernabilidad en la organización económica de una sociedad y conseguir los objetivos sociales, se requiere equilibrar estas dos funciones de los gobiernos con las funciones de otras instituciones, como el mercado mismo, por ejemplo. Este dilema de disfuncionalidad y desequilibrio de las relaciones entre Estado y mercado es delimitado por Orive (1997) Este autor anota que "el mercado funciona con competencia pero la cooperación exige el papel activo del Estado... como promotor y catalizador de acuerdos entre los actores económicos y sociales que el mercado por sí mismo no garantiza... un papel más allá de ser el simple corrector de las fallas del mercado sin por ello volver a ser el actor dominante".

La contingencia de gobernabilidad se incrementa porque ni el Estado alcanza a coordinar políticamente, ni el mercado garantiza la integración de la vida social y funcional de una sociedad contemporánea altamente diferenciada. El Informe del Banco Mundial de 1997 previene que : “Han fracasado los intentos de desarrollo basados en el protagonismo del Estado, pero también fracasarán los que se quieran realizar a sus espaldas. Sin un Estado eficaz el desarrollo es imposible” (Benco Mundial, 1997:26).

El mercado puede ser el principal asignador de recursos, pero el Estado puede crear las condiciones de equidad y justicia para que prioritariamente las necesidades de los más pobres sean satisfechas por sobre los deseos o preferencias. Sin embargo, es difícil delimitar la frontera entre el mercado y el Estado, las cuales cambian constantemente, cargándose a un lado o a otro y ha sido el tema central de luchas políticas e ideológicas que trastornan al mundo y modifican drásticamente a la humanidad, causando muchas de las veces enormes daños y desigualdades.

Las luchas políticas producidas dentro del ámbito del Estado-nación, pueden cuestionar la legitimidad de su gobierno, pero no cuestionan la legitimidad misma del Estado. La acción de un Estado fuerte que apoya a empresas pequeñas y medianas puede fortalecer un sistema económico con una política social más justa y equitativa, con base en relaciones de servicio que se expresan en acciones de cooperación individuales y colectivas. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, creando lo que se ha dado en llamar la ación del “gorrón”. El fortalecimiento de un Estado activamente involucrado en la asignación de recursos, que incluya las políticas de distorsión del mercado, es importante para la obtención de una masa crítica de capital, de conocimiento, etc.,

Así, la dinámica de la acumulación del capital humano está relacionada con el cambio tecnológico y las elecciones e interpretaciones ideológicas. Las ideologías tienen como propósitos establecer generalizaciones sobre las complejidades e incertidumbres del medio ambiente, de tal forma que permiten a los individuos operar. No obstante, una vez que la masa crítica de capital físico y capital humano se acumula, como resultado de sistemas económicos orientados por una ideología neoliberal que trata de transformar realidades, hay una necesidad crítica de abrir y usar las políticas comerciales activamente para promover la competencia y la disciplina de las empresas. Al decir de Patras (2001d) la competencia “en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados”. Sin embargo, en las relaciones entre el Estado y las empresas, estas últimas mantienen su primacía sobre el Estado.

Appelbaum y Henderson (1995) sostienen que las compañías tendrán una presión creciente a niveles nacional e internacional a fin de formular estrategias corporativas que sean

determinantes para lograr objetivos que tomen en cuenta la naturaleza de las estructuras de la gobernabilidad. El grado en el cual las compañías son capaces - en algunos casos incluso interesadas - en institucionalizar la innovación como el mayor objetivo de su operación, son centralmente importantes no solamente para el desempeño económico nacional, sino que también para el grado en que pueden construirse sociedades más igualitarias y prósperas.

Así pues, no es sorpresa que las transformaciones económicas han traído consigo cambios políticos, sociales culturales y psicológicos. Las transformaciones económicas y políticas también implican transformaciones de los valores sociales, culturales y sobretodo de valores morales. Estos cambios tienen que analizarse no solamente en sus actores, estructuras y procesos, sino también desde el punto de vista del ciudadano, a efecto de delimitar la urgencia que tiene el Estado para atender las exigencias de una ciudadanía más capaz para deliberar y tomar decisiones. Pero también para exigir que se cumplan irrestrictamente las políticas públicas y una mayor transparencia en las acciones gubernamentales. Decir que los principios democráticos y los principios solo se manifiestan en un modelo económico "neoliberal" resulta una falacia, de tal forma que de la misma afirmación esos principios se convierten en antidemocráticos.

La existencia de principios democráticos y de libre mercado tampoco es garantía de un modelo de desarrollo social legitimado. No obstante, existe una estrecha relación entre el desarrollo social y la democratización. De hecho, no existe todavía una economía pura de mercado donde la democracia esté totalmente consolidada. Lo que existen son democracias con diferentes grados de intervención estatal en la economía para garantizar a los ciudadanos ciertos bienes públicos, tales como la educación, salud, vivienda, etc. Son las demandas sociales las que establecen la base de una política de regulación e intervención del Estado en la promoción del desarrollo local y regional.

La decisión de qué bienes públicos producir y cuánto producir es colectiva, así como el ingreso geográfico que se destina a la producción. Los bienes públicos que benefician a la gente pero cuyos costos no pueden ser recuperados para que resulten atractivos a las empresas, por ser intrínsecamente no lucrativos. En situaciones como esta se hace necesario el establecimiento de mecanismos de precios para determinar las relaciones de intercambio entre las empresas y los costos burocráticos. Por otro lado, la democracia está siendo delimitada por los cambios tecnológicos y el industrialismo. El concepto de democracia ha sido vuelto de definir para ajustarse a los requerimientos del sistema capitalista.

De acuerdo con Linz y Stepan (1996), la consolidación de la democracia requiere de "la institucionalización de un mercado políticamente regulado. Esto requiere de una sociedad económica, que a su vez requiere de un Estado efectivo. Aun un objetivo tal como estrechar el alcance de la propiedad pública (por ejemplo, la privatización, como una actividad del Estado, que requiere una buena participación institucional) en una forma legal y ordenada es llevado a cabo con mayor eficacia por un Estado fuerte que por uno débil. El deterioro económico provocado por la incapacidad del Estado para desempeñar funciones regulatorias básicas en buena medida conjuga los problemas de la reforma económica y la democratización".

Racionalidad económica vs. Racionalidad política: Tecnocratismo vs. Neopopulismo.

Más difícil resulta la determinación de la racionalidad política y económica. Igualmente, el contenido apropiado del involucramiento del gobierno en la creación y administración de recursos dentro de su jurisdicción. La idea de una racionalidad autónoma del gobierno es más claramente predicada en un entendimiento del Estado, tanto como una estructura institucional distintiva no reducible, y como conteniendo su propio principio de racionalidad implicada en la noción de "razón de Estado".

La racionalidad económica y la racionalidad política del Estado parece que están en franca contraposición. Mientras un tecnocratismo impone los criterios de la racionalidad económica relegando la racionalidad política a segundo término, como en el caso de una participación ciudadana electoral, un neopopulismo involucra la participación ciudadana. El sistema electoral tiene que ser no solamente más directo sino también más personalizado, de tal forma que permita a los ciudadanos involucrarse en los procesos de gestión con fundamento en la territorialidad, lo cual implica un nuevo ordenamiento territorial para lograr una mejor eficacia administrativa. La desterritorialización del estado está dando lugar a la emergencia de nuevas unidades de espacios territoriales.

Los ciudadanos tienen que participar en los procesos más democráticos de deliberación y en la toma de decisiones, para la búsqueda de la legitimación de la eficiencia de su desempeño más que la puramente electoral. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

Las actuales instituciones democráticas bloquean el desarrollo porque tienen grandes obstáculos para la participación de los ciudadanos. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado. De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones democráticas cuyo poder se asegura mediante el "enjaulamiento" de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder.

Se requiere proponer instituciones democráticas que garanticen igual acceso de los individuos a los canales de influencia, proporcionar una esfera de autonomía individual y promover procedimientos que contribuyen a la formación de una ciudadanía democrática. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política

Así, la institucionalización de la participación ciudadana avanza los aspectos integrativos y agregativos del apoderamiento y constituye un poderoso instrumento político para el avance de la gobernabilidad democrática, vulnerable a crisis por las disfuncionalidades económicas, las desigualdades sociales y una democracia deficitaria. La tendencia de las sociedades actuales a lograr la gobernabilidad democrática a pesar de los problemas de inestabilidad e incertidumbre económica y política, es lo que Torrijos (2001) ha denominado como gobernabilidad reluctante, la cual considera como una gobernabilidad que surge de la ingobernabilidad debido a los ambientes de alta incertidumbre, inestabilidad y caos. La

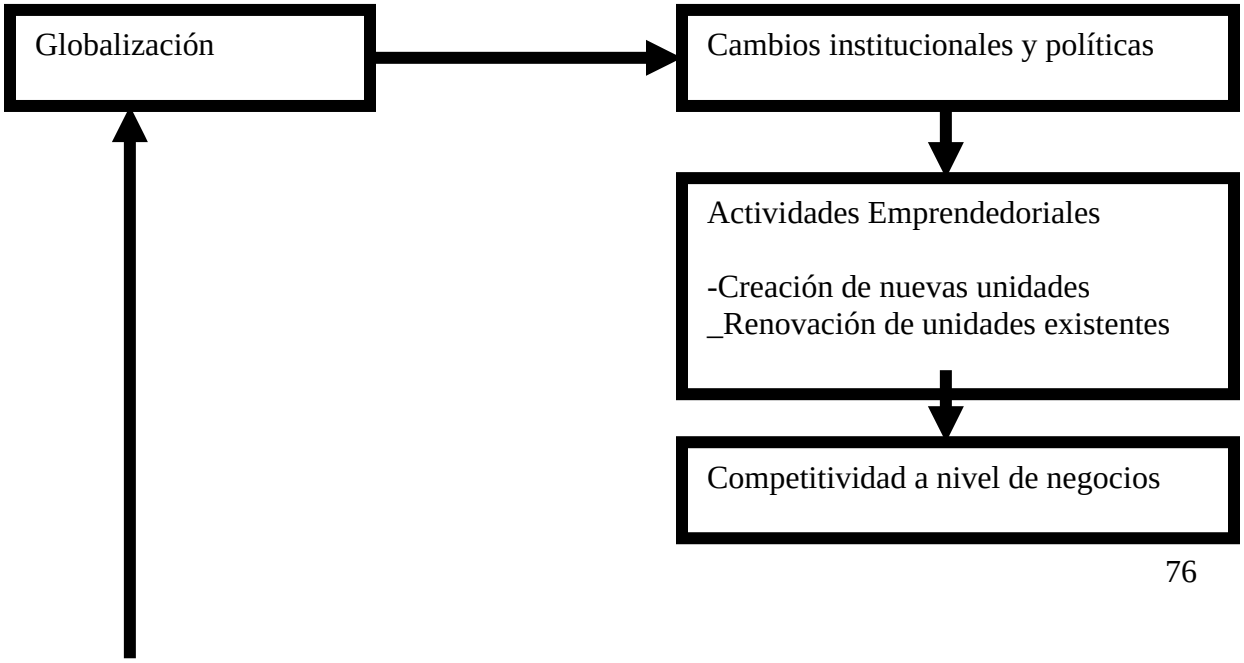
gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Esta democracia deficitaria es tratada en un modelo de democracia limitada o "delegativa" por O´Donnell (1994), presenta los requisitos esenciales de democracia, pero está caracterizada por una amplia concentración del poder en la presidencia, el recurso a decretos ejecutivos como forma de gobernar, y como una característica de las dinámicas de los procesos de democratización, especialmente para la región latinoamericana. La democracia delegativa es una democracia de elites que concentran el poder político-burocrático, y por lo tanto, con capacidad para definir los proyectos nacionales. No obstante, la tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966).

La degradación de los sistemas democráticos, en contraste con las democracias que son fuertes, caracterizado como democracias limitadas o delegativas, ha dado por resultado mayor ingobernabilidad social. La política económica implementada en la primera generación de reformas resultó en una mayor concentración del poder económico y político, así como en el aislamiento excluyente de grandes segmentos de la ciudadanía.

Según Forester (1989), el control de la toma de decisiones, el establecimiento de las agendas y la formación de necesidades son tres modos del poder que crean desinformación y la participación ciudadana. El control político de la toma de decisiones de las burocracias administrativas se ha erosionado por la versión gerencialista del control tecnocrático que promete rendición de cuentas y responsabilidad ante los ciudadanos. Las sanciones son el corolario usual de la responsabilidad. Mientras no se tenga una teoría del cambio institucional y del desarrollo de las instituciones, la versión gerencial y tecnocrática estará ejerciendo el control con fines meramente eficientistas. En cada cambio de las constelaciones institucionales se involucran altos costos de transacción de los actores políticos afectados.

Veliyath y Zahra, visulizan las implicaciones del cambio institucional en una relación inextricablemente estrecha con los procesos de globalización y competitividad, de la siguiente forma:



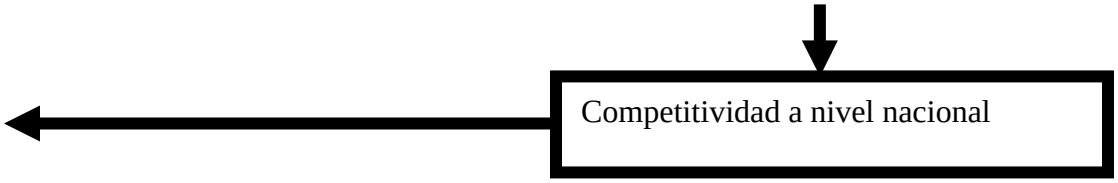


Figura. Elaborado en base a Velyyath y Zahra (2000)

Las burocracias patrimonialistas desarrollaron muchas buropatologías hasta el punto que representaban obstáculos para la implantación del modelo económico neoliberal. La burocracia patrimonialista es una forma irracional de burocracia previa a la burocracia genuina del capitalismo moderno. La burocracia auténtica participa del Estado de Derecho y se caracteriza por una racionalidad-legalidad de las tareas y funciones, por la división impersonal del trabajo, el uso de tecnología, etc.

El modelo patrimonialista de la administración pública fue sustituido por el modelo de administración pública burocrática. Posteriormente se hizo necesario la sustitución de los sistemas burocráticos (Modelo de administración de racionalidad instrumental) y de contigencias (Nueva Administración Pública) por un modelo denominado de "Nueva Gerencia Pública" que promueve una cultura gerencial basada en los principios y técnicas de gestión y dirección de organizaciones privadas, cuya aplicación tiene serias implicaciones y limitaciones en los asuntos públicos.

Los procesos de globalización presionan al Estado por una redefinición de sus funciones y requieren de una urgente reforma a su administración pública. Lamentablemente, mientras no haya una teoría que supla al modelo gerencial, que se oriente al cambio institucional y al desarrollo de las capacidades del Estado, difícilmente se podrá hablar de una profunda reinvención de las instituciones estatales y políticas. Los actores políticos pueden inventar nuevas estrategias para adaptarse a los cambios de reglas y las instituciones son parte de una configuración, donde un cambio hecho en una institución puede tener efectos impredecibles y no esperados en otros. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes.

Bresser (1997: 28) (citado por Prats, 2001) describe las principales características de la administración pública gerencial como: "(a) orientación de la acción del Estado para el ciudadano-usuario o ciudadano-cliente; énfasis en el control de los resultados a través de los contratos de gestión (al contrario de control de los procedimientos); (c) fortalecimiento y aumento de la autonomía de la burocracia estatal, organizada en carreras o "cuerpos" de Estado, y valorización de su trabajo técnico y político de participar, junto con los políticos y la sociedad, en la formulación y gestión de las políticas públicas; (d) separación entre las secretarías formuladoras de políticas públicas, de carácter centralizado y las unidades descentralizadas ejecutoras de esas mismas políticas; (e) distinción de dos tipos de unidades descentralizadas: los organismos ejecutivos, que realizan actividades exclusivas de Estado, por definición monopolistas, y los servicios sociales y científicos de carácter competitivo, en que el poder del estado no está involucrado; (f) transferencia hacia el sector público no-estatal de los servicios sociales y científicos competitivos; (g) adopción acumulativa, para controlar las unidades descentralizadas, de los mecanismos (1) de control social directo, (2) de contrato de gestión en que los indicadores de desempeño sean claramente definidos y los resultados

medidos, y (3) de la formación de “cuasi-mercados” en que se da la competencia administrada; (h) tercerización de las actividades auxiliares o de apoyo, que pasan a ser licitadas competitivamente en el mercado.”

Tanto en el control, como en el proceso políticos, la toma de decisiones, el sistema de información tiene un papel crucial para los gobiernos. Por otro lado, la globalización económica requiere de reacciones rápidas en la mayor parte de la administración a las demandas de los agentes económicos, la burocracia administrativa encuentra difícil abandonar los viejos hábitos que crean bloqueos, desaniman a inversionistas y resulta en pérdidas de utilidades o competitividad para ciertas empresas.

Para Porter (1991), la competitividad, las empresas tienen que competir en un entorno formado por cuatro atributos que estimulan o limitan la creación de ventajas competitivas. Estos atributos son la disponibilidad de los factores de producción, la demanda interna, la estructura y estrategia de la rivalidad de las empresas y los sectores conexos.Así de los modelos de administración patrimonialistas se pasa a los modelos de la racionalidad instrumental o burocráticos, en donde las relaciones interempresariales están determinadas por mecanismos de precios y costos burocráticos en que incurren y que tratan de reducir en sus intercambios.

Sin embargo la maquinaria burocrática es demasiado lenta para responder a las demandas del entorno, por lo que modelos de estructuras más flexibles basados en la teoría de contingencias empiezan a reemplazarlos. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes. La implantación del modelo económico neoliberal requiere el transplante de la cultura de las organizaciones por una cultura gerencial más orientada al logro de sus intereses, a través de lo que se ha dado en llamar la reforma administrativa.

Echebarria Ariznabarreta (2000) ha tipificado la reforma administrativa en cuatro modelos o visiones que distingue entre las diferentes reformas gerenciales y la garantista, eficientista, contractualista y servicial. Pero cualquiera de estas reformas será incompleta mientras nos e tenga una teoría del cambio institucional y de desarrollo de las capacidades del estado que supla a la versión gerencialista que solo se preocupa por el crecimiento económico medido en términos cuantitativos de ingreso per cápita y consumo promedio real. Los actores políticos pueden inventar nuevas estrategias para adaptarse a los cambios de reglas y las instituciones son parte de una configuración, donde un cambio hecho en una institución puede tener efectos impredecibles y no esperados en otros.

No obstante, la reforma administrativa debe orientarse a garantizar los bienes públicos puros, una vez que se han superado los obstáculos que interponen los sistemas patrimonialistas, corporativistas y clientelares, tal como sostiene Prats (2001): “La primera y gran tarea no es superar la cultura burocrática (inexistente, por lo general, entre nosotros) y sustituirla por una cultura gerencial, sino en superar el populismo político y su clientelización de la función pública y sustituirlo por un Estado de Derecho dotado de una administración genuinamente burocrática responsable del buen desarrollo de las funciones exclusivas y superiores del Estado.”

Mientras se carezca de una teoría del cambio institucional y de desarrollo de las capacidades del estado, los alcances de la versión gerencialista están muy limitados. En cada cambio de las constelaciones institucionales se involucran altos costos de transacción de los actores políticos afectados. La debilidad de la legalidad del Estado y del estado de derecho, que niegan derechos civiles a los ciudadanos, constituye el principal obstáculo a la gestión de la gobernabilidad democrática y de acuerdo a O'Donell (1996), caracterizan las denominadas poliarquías informalmente institucionalizadas. En esta situación, la gobernabilidad democrática es muy vulnerable a crisis, debido a las disfuncionalidades económicas, políticas y administrativas de los Estados nacionales.

Revalorizar la función pública es prioritario frente al desmantelamiento de las funciones que a sufrido el Estado hasta poner en cuestionamiento sus verdaderas razones de ser en el desarrollo económico, político y social. Por lo tanto, la reforma administrativa del Estado debe también considerar que el sistema de administración burocrática reinventada sigue siendo el más racional para la organización y desempeño de las principales funciones propias del Estado, "exclusivas y superiores" también tipificadas como "funciones estatales de orden superior" (Dror, 1995). Por lo tanto, el modelo de la Nueva Gerencia Pública es apropiado para la provisión de los servicios públicos. Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

En general, el rápido crecimiento de las administraciones en los países subdesarrollados y desarrollados ha producido deficiencias y perversiones tales como los entrelaces funcionales, el desarrollo de canales informales, centralización excesiva la cual explica la tendencia general hacia la descentralización. La centralización de las funciones del desarrollo favorecen a determinadas zonas y regiones a cambio del subdesarrollo de otras. Estos controles burocráticos son de dos tipos: anteriores y posteriores a las acciones. Los controles anteriores a las acciones anticipan el no cumplimiento de acciones y decisiones, mientras que los controles posteriores detectan las desviaciones y establecen castigos por la falta de cumplimiento.

Así, los aparatos administrativos burocráticos de los Estados-nación, al igual que las elites financieras y políticas nacionales han sido transformadas profundamente por la globalización y mantienen una estrecha dependencia de los capitales financieros hegemónicos de la globalización. Por lo tanto, las elites nacionales y locales de los negocios han abierto la puerta a las economías de las corporaciones transnacionales que están interesadas en mano de obra barata, recursos naturales, capital financiero y mercados de consumidores en los países latinoamericanos. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado

La nueva clase transnacional capitalista que emerge entre las elites capitalistas nacionales y que son la clase dominante en sus respectivos países, comparten el mismo proyecto neoliberal, intereses y privilegios de los poderes hegemónicos para implantar una política económica que les favorece. Sin embargo, la tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966).

Un claro ejemplo de estas contraposiciones entre la racionalidad económica y la racionalidad política es el famoso “teorema de la imposibilidad de Arrow” que concluye que las decisiones racionales y democráticas para el logro del bienestar social, no se puede fundamentar en una simple agregación de las preferencias de los individuos la cual origina un impasse. La resolución de esta situación conduce a intervenciones autoritarias que protegen los intereses de grupos oligárquicos.

Este problema de la racionalidad es reformulado por Sen quien considera que cuando la libertad económica produce pobreza, desigualdad y exclusión social, puede ser cuestionada. En su teoría sobre la desigualdad, Sen demuestra que se pueden introducir cambios mediante la instrumentación de la elección colectiva que otorga la libertad a los individuos para corregir situaciones de pobreza, desigualdad y exclusión social originados por el sistema económico-político imperante. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. El principal instrumento para este cambio consiste mejorar la igualdad de las capacidades individuales más que la igualdad de oportunidades.

La "racionalidad económica" se orienta hacia la operación de economías de escala, mediante la integración de flujos de inversión, sistemas de producción y de mercados en espacios cada vez mayores, con capacidades de aprovechar no solamente las ventajas comparativas, sino también de crear las ventajas competitivas. Las estrategias de desarrollo empresarial tienden a orientar la producción hacia los sectores que tienen ventajas competitivas y un mayor valor agregado para insertar eficazmente la economía local y regional en los flujos de los mercados internacionales.

El Estado nacional todavía tiene un papel importante en la promoción y conquista de los mercados internacionales y en la protección de los mercados internos. Una estrategia de desarrollo que se base en el actual reparto internacional de ventajas comparativas no es aceptable. La estrategia de modernización neoliberal se ha absolutizado bajo un dogma ortodoxo que no distingue diferencias de desarrollo entre los Estados nacionales. Las estrategias de desarrollo para generar oportunidades deben formularse a partir del uso óptimo de recursos y potencialidades con que cuentan las localidades y las regiones.

La "racionalidad política”, es una racionalidad que se presenta a sí misma como intrínseca a la naturaleza del Estado, enfocándose en el bienestar o los intereses del Estado y de la población regida por el Estado, así como el entendimiento de estos intereses en sus propios términos, más que si fueran dependientes de algún principio externo y superior. La racionalidad política cuestiona el manejo de la población del Estado y las instituciones, las organizaciones y procesos que operan dentro de esa población. La percepción del gobierno de un Estado que tiene su propia racionalidad autónoma tiene significativas consecuencias por la manera en que los miembros de la población son así mismos tratados como objetos de gobierno.

El argumento de que el Estado tiene su propia racionalidad intrínseca puede ser vista como un debilitamiento de cualquier sugerencia de que los miembros de una población gobernada por el Estado están naturalmente o esencialmente en una condición de sujeción. La idea de una racionalidad autónoma del gobierno sugiere que la población consiste de individuos libres, no de sujetos. Diferentes trabajos enfatizan la hipótesis de que la racionalidad instrumental en que se fundamentan los sistemas económicos existentes. Estos

pueden ser superados por “una interpretación y una crítica de la sociedad que permitan fortalecer la dinámica de un sujeto cultural que proponga de nuevo la vitalidad del ethos de las naciones” (Guerra López, 1999) por encima de la dignidad y de los valores de las personas y de sus tradiciones.

Las prácticas del gobierno son contingentes y son particulares y locales las formas en que las identidades sociales se constituyen como significativas e inteligibles para el gobierno. Las identidades sociales suponen procesos de diferenciación como resultado de la agregación de elecciones individuales. La transformación del capital social tiene relación con los cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los individuos. Los diferentes tipos de intereses que existen en las sociedades procuran la apertura de sus propios espacios para expresar su identidad, independientemente de que estos espacios sean los locales, regionales, nacionales o los transnacionales. Una racionalidad del gobierno que se dirige a la promoción de la libertad de los miembros de la población subjetiva, se encontrará así misma promoviendo condiciones en las que Weber llama “acción políticamente orientada”, la cual puede esperarse que florezca. Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política

El estudio de estas racionalidades las presenta en tensión entre un compromiso con la libertad individual como una condición de seguridad. El deseo de promover condiciones institucionales y la adopción de estilos de comportamiento personal que resultan en individuos que actúan libremente, de tal manera que aseguran el funcionamiento de los mercados, casa tenencias y otros aspectos significativos de la vida social. Tal acción y las racionalidades políticas que informan, son la mayor fuente de problemas gubernamentales los cuales una racionalidad liberal del gobierno tiene que tratarlos como única alternativa. La acción políticamente orientada presenta un problema particular para la racionalidad de un gobierno comprometido con la idea ilusoria de su propia autonomía (Hiedes, 1997).

Las condiciones sociales, económicas, tradiciones culturales o eventos impredecibles importan pero no influyen en forma mecánica en la acción política. La explicación de la acción política en un contexto institucional es diferente de explicar el cambio institucional en períodos largos de tiempo. En cada cambio de las constelaciones institucionales se involucran altos costos de transacción de los actores políticos afectados.

Los actores políticos pueden inventar nuevas estrategias para adaptarse a los cambios de reglas y las instituciones son parte de una configuración, donde un cambio hecho en una institución puede tener efectos impredecibles y no esperados en otros. En el último caso, la historia y la cultura política, entendida como los supuestos básicos del mundo de la política, las cuales restringen el rango de alternativas disponibles, tienen que ser sistemáticamente integradas como factores, los cuales entre otros, dan forma a la manera en que los actores políticos perciben las situaciones de elección (Kaiser, 1997)

Entre la dicotomía de las fronteras de la jurisdicción económica y política se necesita una reevaluación del marco teórico institucional de los sistemas económicos nacionales. En la sociedad moderna hay un conflicto latente entre capitalismo y política. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La política exige por lo menos un uso comunitario sometido a reglas que se regulan por leyes, desde el

impuesto obligatorio a las reglas de tráfico, pasando por la reglamentación de la construcción, el comercio etc.

Esta reevaluación puede significar una reorientación de los papeles de supervisión de los gobiernos, y otras veces, de sus roles como administradores de conflictos y como estabilizadores de última instancia, y otras veces de sus papeles regulatorios, participatorios o de consejero. Pero algunas veces también se sugiere que los gobiernos, como las empresas, deben engancharse en alianzas a través de las fronteras para intercambiar información e ideas y, donde apropiadamente, para coordinar políticas (DNG, 1997)

La realidad refuta la noción de que existe una armonía natural en la economía de mercado. Por lo tanto, el Estado activo debe asumir el papel para poner orden a la economía, a través de controles directos e indirectos para intervenir en las acciones de los individuos privados, los ciudadanos y las organizaciones (ONG, 1998) Se requieren instituciones democráticas que tengan el poder de mantener la gobernabilidad económica, política y social mediante procesos de gobierno. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política.

Esto es, del mercado y los actores políticos y sociales capaces de elaborar e implementar las políticas sociales que emparejen las diferencias entre la racionalidad económica y la racionalidad política. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente ala reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos.

En esta forma de gobernabilidad del mercado, resultado de la agregación de preferencias de un gran número de individuos. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. La gobernabilidad del mercado emerge de las decisiones descentralizadas de un numero de actores que toman decisiones para comprar y vender. El mercado exige la rendición de cuentas a los gobiernos y a las corporaciones transnacionales, quienes siempre actúan en sinergia.

Las expectativas racionales de los individuos como fundamento del nuevo orden.

La teoría social ha avanzado el supuesto de que los mercados totalmente desreglados, o al menos flexiblemente regulados, constituyen los instrumentos más eficientes para la producción, distribución y consumo de todo tipo de satisfactores. La expansión del sistema actual de producción capitalista, requiere de gente que consuma de manera continua y creciente, y para lograrlo, estimula artificialmente la necesidad y deseo de comprar.

Un consumismo fuertemente arraigado en el mercado tiende a reducir las relaciones de los ciudadanos con el Estado al papel de relaciones de intercambio, así como de consumo de bienes y servicios. El Estado afirma la ciudadanía cuando garantiza los derechos individuales conquistados por los ciudadanos, quienes a su vez adquieren la capacidad para participar e

influir en la formulación y prescripción de las leyes. Una democracia así conquistada resulta de la existencia de una amplia clase media.

La lógica del mercado global consiste en que los bienes y servicios producidos con la mayor calidad y al más bajo costo posible, para satisfacer las necesidades prioritariamente de los prospectos en todo el mundo. Los ciudadanos convertidos en meros "consumidores" adquieren la capacidad de ejercitar la elección racional por obra del libre mercado. Las principales decisiones sobre las oportunidades de desarrollo de los individuos quedan en manos del mercado El nuevo papel del mercado aglutinado en los crecientes procesos de globalización y de tecnología, es sustituir a los ciudadanos por simples consumidores siempre en función de su capacidad adquisitiva, desarticula la acción colectiva y diluye la solidaridad social. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es.

Esto hace pensar en la necesidad que existe de globalizar también la solidaridad humana. El mercado asume el papel protagónico del desarrollo y subordina la acción del Estado y de la sociedad en un mecanismo dinámico de perversidad que desintegra el desarrollo social en función del crecimiento económico que se vuelve en un fin en sí mismo, porque mide cuantitativamente el ingreso per cápita y el consumo real. El mundo se coca-coliza y se McDonaliza como símbolos de una civilización ubicua que define, estandariza y marca comportamientos, hábitos, costumbres, símbolos e imágenes, etc. Con los procesos de globalización económica también se mundializan las variables culturales y sociales. Así, todas las fuerzas que ha creado el consumismo se multiplican en todo el globo.

En la nueva economía capitalista posmoderna (Barbera, 1998), los productores crean las necesidades para satisfacer su propia oferta, apuntando "...al blanco de la mente y el espíritu tratando de trasformar como piensan los seres humanos..." La economía capitalista del mercado tiene un carácter social. Sin embargo, los mercados no atienden a todas las necesidades humanas. Los mercados constituyen la arena primaria para las empresas económicas y para la innovación técnica.

Los mercados consideran a los individuos como productores y consumidores que buscan sus propios beneficios privados, el lucro o la satisfacción y no como ciudadanos que con una orientación más social, buscan la satisfacción de los intereses públicos. Los mercados no instruyen a las personas con grandes ingresos a consumir solamente la parte proporcional de los recursos naturales que les corresponden. El mercado adquiere el rol protagónico para otorgar las oportunidades de desarrollo a los individuos en función de su capacidad adquisitiva.

Por ejemplo, la Nueva Macroeconomía Clásica que tiene como premisas fundamentales los mercados libres y la optimización de los agentes que actúan de acuerdo con la hipótesis de las expectativas racionales, enfatizando la naturaleza racional de las expectativas y el problema de la inconsistencia del tiempo en la implementación de políticas, describe un sistema económico estable. Si bien este sistema económico se conforma de agentes racionales que tienen o actúan como si tuvieran, un entendimiento claro de la economía, pero no hay una mención explícita a los factores institucionales que tengan la implicación de que

estos están cambiando. El mercado real opera en función de las decisiones de los agentes económicos, y éstas decisiones a su vez dependen de la información que esté disponible a los agentes.

Las implicaciones son claras: si los mercados se están clarificando y los agentes están optimando, entonces la intervención del gobierno debe limitarse lo más posible porque solamente reducen la eficiencia del sistema completo (Gilberto ad MICIP, 1997) La economía política de Buchanan da el soporte ético a estos planteamientos al sostener que la intervención gubernamental motivada políticamente por los políticos interesados y por la naturaleza coercitiva de cualquier forma de intervención. La Nueva Macroeconomía clásica clama por reglas para controlar las políticas emanadas de la intervención del Estado en gran escala, contribuyendo a la efectividad de las políticas y a limitar la extensión de la interferencia gubernamental en la economía, rechazando por lo tanto todo tipo de intervencionismo del Estado en las actividades económicas.

Ciertamente, existen criticas serias al enfoque de la Nueva Macroeconomía Clásica sobre la clarificación del mercado, el cual se sale del terreno realista para caer en el campo nominalista, mientras que las hipótesis sobre las expectativas racionales tienen que ser consistentes con el modelo económico que cargan los individuos en sus mentes. Las expectativas racionales y monetaristas son una versión de la economía neoclásica la cual pone en conflicto a las políticas sociales con las políticas económicas. Sólo que los individuos mejor informados con el modelo económico correcto son los que obtienen los mejores beneficios a expensas de otros que quedan fuera de los negocios, en un esquema de "Darwinismo social" en donde sólo sobrevive el más competente. En este sentido, la premisa de los mercados libres no funciona correctamente y más de la mitad de esos mercados no son tan libres porque siguen siendo mercados administrados.

En lo que respecta al uso de las hipótesis de las expectativas racionales, estas se consideran como un modelo que todos los agentes representativos tienen en sus mentes, en donde no existen posibilidades de error sistemáticos, a menos que el modelo no sea verdadero cuya existencia implica una distribución objetiva de eventos futuros. Si la estructura del modelo no es independiente de las expectativas, entonces el modelo verdadero no existe y por lo mismo, si las expectativas son auto cumplen, entonces no existe una distribución objetiva que pueda ser explotada por agentes racionales. En la modelación económica por ejemplo, la cultura no es relevante porque no es tan obviamente racional. Por lo mismo, no encaja muy bien en la metodología del agente racional de la economía neoclásica (Hermalin, 1999) Por naturaleza, la economía neoclásica es exclusionaria porque se enfoca limitadamente sobre variables de tipo financiero con una proposición de cómo los agentes reaccionan a estas variables.

Gilbert y Michie (1997) concluyen al respecto que los supuestos de clarificación del mercado y de las hipótesis de las expectativas racionales de una economía no pueden desviarse sistemáticamente de su centro de gravedad o el correspondiente nivel de tasa natural de desempleo de los monetaristas. Es decir, sólo existen un único conjunto equilibrado de precios y por lo tanto de un nivel correspondiente de empleo y producto.

Las elecciones privadas de los consumidores pueden ser más modeladas y manipuladas, no son autónomas e independientes y son totalmente diferentes a las elecciones cívicas que hacen los ciudadanos. A pesar de estas consideraciones, la “lógica de las ganancias privadas”

se ha impuesto sobre la “lógica de los bienes públicos” en donde entran los mecanismos de competencia a generar y proveer los bienes públicos como bienes privados, derivando en situaciones similares a las mostradas en el Dilema del Prisionero, como la peor solución. A tal grado, que la teoría de la elección pública considera que el supuesto de la maximización de la utilidad racional debe de extenderse a todas las instituciones incluyendo el mismo gobierno, ya que está compuesto de individuos que también observan conductas e búsqueda de la maximización de los beneficios.

Sin embargo, se invalida el soporte que la teoría de elección pública hace para la Nueva Macroeconomía Clásica la cual tiene un fuerte componente basado en el supuesto de las expectativas racionales, supuesto que ha universalizado. Las instituciones y el gobierno ofrecen sus propios incentivos, implícitos o explícitos para la motivación de la conducta de los empleados. La carencia de incentivos institucionales limita la negociación de acuerdos y compromisos entre los diferentes actores, incluyendo al gobierno, el cual necesita de una estructura institucional.

Los desafíos del diseño organizacional en un medio ambiente globalizador.

Las teorías de crecimiento y desarrollo económico denominadas bajo el rubro de neoinstitucionalismo económico o nueva economía institucional, que incorporan el análisis del papel de las organizaciones e instituciones, así como los análisis de los costos de transacción, fundamentan a las instituciones como el factor determinante para lograr la eficiencia de un sistema económico. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Hay dos variables de esta tradición de la investigación en la ciencia política.

La primera está basada en la elección racional e interpreta a las instituciones como soluciones de equilibrio para los problemas de la acción colectiva. La segunda llamada institucionalismo histórico rechaza algunos supuestos de la elección racional y enfatiza fuertemente al tiempo y secuencias en el desarrollo institucional mientras que los teóricos de la elección racional están interesados explícitamente en cómo estas preferencias se construyen socialmente.

Las preferencias de los actores políticos son cruciales para lo que se diseña institucionalmente porque los participantes conocen que los altos costos pueden involucrarse si las decisiones van en contra de ellas. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. El nuevo institucionalismo es por lo tanto, más que un mensaje simple, el cual no debe sorprender a los institucionalistas clásicos de la importancia que tienen las instituciones.

La reforma institucional puede diseñarse en una síntesis de los dos acercamientos de elección racional institucional y un institucionalismo histórico. Categorizando los puntos de veto de acuerdo a los efectos deseados, las estrategias de los actores políticos para el uso de los puntos de veto o en la propuesta de reformas institucionales pueden analizarse en modelo integrado de democracia. La propuesta de aprendizaje institucional sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más

próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional (Kaiser, 1997).

El nuevo institucionalismo se aparta del estrecho margen de tipos y explícitamente está relacionada en modelos explicativos basados en actores, tales como a teoría de la elección racional o la teoría de la organización.

La nueva economía institucional opera en las interrelaciones entre el medio ambiente institucional y las instituciones de gobernabilidad. El neoinstitucionalismo asume que los sistemas de incentivos económicos de las instituciones desempeñan un papel importante en la dinámica y desarrollo de los sistemas económicos, políticos y sociales. El análisis cualitativo de las instituciones compara discretamente las alternativas estructurales. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad. Las instituciones de gobernabilidad deben surgir ahí donde precisamente emergen disparidades en el potencial para la creación de valor.

El enfoque neoinstitucionalista de la economía provee un marco de referencia teórico que enriquece a los derechos de propiedad, que apoyan el diseño de estructuras de gobernabilidad de acuerdo a la combinación de distintos costos de transacción y competencias, problemas de agencia y contratos internos y que además toman en cuenta el medio ambiente institucional. Los contratos proveen un marco de referencia para regular las diferentes relaciones y transacciones entre los individuos y los grupos de una organización. El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados.

Los individuos que celebran contratos individuales fuera de las estructuras de gobernabilidad del Estado, lo realizan porque encuentran mejores incentivos mediante arreglos privados. Las diferencias en las estructuras de gobernabilidad están relacionadas con los atributos de las transacciones, las cuales presentan diferentes necesidades de adaptación autónoma o cooperativa. La adaptación involucra costos de transacción más bajos y más alto los resultados del cambio que la reforma.

Las diferencias en los atributos de las transacciones se alinean con las diferencias de las estructuras de gobernabilidad, tales como sus costos y competencias así como en las formas de economizar los costos de transacción. La perspectiva de economizar los costos de transacción (Williamson 2000:31) sostiene que sujeto al criterio de remediación, la ineficiencia invita a su propia pérdida, en donde la ineficiencia es evaluada en relación a las posibles alternativas, más que a un ideal hipotético, y la provisión se hace mediante los costos de implementación. Las estructuras de gobernabilidad tienen diferentes capacidades para proveer de adaptación autónoma o cooperativa.

De acuerdo con Levy and Spiller (1996, pp. 4-6), las características del medio ambiente incluyen la existencia de un sistema judicial independiente, respetado y no corrupto, así como de equilibrios y contrapesos al poder ejecutivo que incluyen la Constitución, las cámaras legislativas, y los niveles múltiples de restricciones gubernamentales e internacionales. Cuando el medio ambiente institucional no proporciona el marco de referencia para que las transacciones se realicen adecuadamente, con costos bajos o para proteger y garantizar los

derechos de propiedad de los diferentes peligros, entonces se requiere del diseño de estructuras y mecanismos de gobernabilidad.

Los costos de transacción son los cálculos de los costos para hacer y mantener los acuerdos, cuyos resultados permiten preferir una forma de gobernabilidad determinada por sobre otra. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. La eficiencia resulta de alinear los costos de transacción con las estructuras de gobernabilidad. En el diseño de las estructuras de los costos de transacción deben considerarse aquellas transacciones que proporcionen beneficios mutuos a las partes involucradas. Las estructuras de gobernabilidad se relacionan con los tributos de las transacciones, ya que los mercados se desplazan en forma selectiva más que uniformemente. Las transacciones tienen diferentes necesidades de adaptación autónoma o cooperativa.

Las diferencias en las transacciones se alinean con las estructuras de gobernabilidad las cuales a su vez difieren en sus costos y competencias, así como en las formas de economizar los costos de transacción. La perspectiva de economizar a través de los costos de transacción sostiene que sujeto al principio de remediación, la ineficiencia invita a su propia eliminación, donde la ineficiencia es evaluada en relación a las posibles alternativas, más que a ideales hipotéticos, y la provisión es hecha por los costos de implementación (Williamson, 2000:31). Las estructuras de gobernabilidad proveen las diferentes capacidades de adaptación autónoma o cooperativa.

La creación de una economía institucional de mercado requiere de estructuras de instituciones participativas, del establecimiento de normas y reglas del juego y de agentes económicos que se adhieran a ellas mediante un sistema de incentivos que estimula las contribuciones al crecimiento económico y el desarrollo social. El marco institucional de la economía de mercado se establece a través de diversos instrumentos, los gobiernos establecen como requisitos a empresas y a los ciudadanos (OCDE, 1999).

El institucionalismo económico ha hecho grandes aportaciones para estudiar a las organizaciones e instituciones y su comportamiento colectivo. Un nuevo marco de análisis institucional establece diferencias entre el institucionalismo clásico y el nuevo instucionalismo, principalmente en la explicación de los modelos empleados. El nuevo institucionalismo se basa en los modelos explicativos de actores y procede del supuesto que las preferencias son entendidas en el contexto de los incentivos generados institucionalmente y de las opciones disponibles institucionalmente que estructuran la elección. El institucionalismo clásico es raramente relacionado con la descripción de las instituciones políticas y sus interrelaciones.

Las instituciones regulan las relaciones de la acción colectiva mediante la determinación de las reglas del juego y sistemas adecuados de incentivos económicos. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es. El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir

que otros ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir, (De Swaan Abram, 1997). Para incentivar adecuadamente a los diferentes agentes económicos, el Estado debe diseñar políticas que eliminen las discriminaciones y alineen las variables del medio ambiente insgtitucional.

El Estado crea las arenas en las cuales promueve las relaciones entre los agentes económico locales e internacionales y, además, hace cumplir las reglas del juego. En el escenario local se optimiza la participación individual, pero la acción colectiva resulta disfuncional. La acción colectiva reduce la racionalidad económica debido a malos diseños de organizaciones, inadecuados sistemas de incentivos económicos y elevación de los costos de transacción. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Los costos de transacción son los cálculos de los costos para hacer y mantener los acuerdos, cuyos resultados permiten preferir una forma de gobernabilidad determinada por sobre otra. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. La teoría neoinstitucionalista enfoca el estudio de los fenómenos económicos, políticos y sociales para asignar nuevas funciones a las instituciones y al Estado.

No obstante, hay que estar consciente de las críticas que esta corriente de la economía está recibiendo, porque amenaza con convertirse en un nuevo dogma con consecuencias no deseadas porque como propuesta paradigmática tiene problemas metodológicos que resolver antes de ser aplicada a las ciencias sociales y políticas. Así, por ejemplo, las explicaciones de las ciencias sociales y políticas deben organizarse alrededor de mecanismos parciales más que en teorías generales es aceptado por la economía de los costos de transacción.

Tal pareciera, argumenta Arellano, (2000) que "el neoinstitucionalismo económico requiere de un proceso ´puro' de desarrollo, así sea a costa de redescubrir conceptos largamente estudiados en otras tradiciones pero que cometen el 'pecado' de no asumir la racionalidad individual y las posibilidades formalizantes que este supuesto otorga". Hay dos variables de esta tradición de la investigación en la ciencia política. La primera está basada en la elección racional e interpreta a las instituciones como soluciones de equilibrio para los problemas de la acción colectiva. La segunda llamada institucionalismo histórico rechaza algunos supuestos de la elección racional y enfatiza fuertemente al tiempo y secuencias en el desarrollo institucional mientras que los teóricos de la elección racional están interesados explícitamente en cómo estas preferencias se construyen socialmente (Kaiser, 1997).

Los organismos internacionales promueven la construcción de instituciones bajo este enfoque cuyos procesos de intervención refuerzan los mecanismos del mercado y la democracia. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia. Por lo tanto, existe mucho escepticismo sobre este acercamiento de economía que refleja la creencia de que es demasiado estrecha para capturar las situaciones y las relaciones que surgen entre los individuos y la sociedad.

Algunos de los principios en que se sustenta, formulan que la teoría del hombre económico que busca maximizar sus beneficios (rational choice) se concreta en los incentivos económicos que proveen las instituciones, es decir, el individuo realiza relaciones oportunistas de intercambio en formas de organización que dan origen a mercados, jerarquías,

etc. Las transacciones económicas en el capitalismo ocurren en un mercado entre las empresas e individuos o en las jerarquías al interior de las grandes corporaciones y los Estados imperialistas siempre en sinergia.

Todas las formas de organización despliegan un conjunto de elementos característicos. Todas las posibles formas de organización constituyen modos alternativos de gobernabilidad con diferentes fortalezas y debilidades. Las formas de organización alternativas difieren en sus procesos de transformación intrínsecos y e intertemporales y requieren de un cuerpo metodológico conceptual de economía organizacional para su buen diseño.

El diseño y operación de las instituciones se fundamenta en el hecho de que proporciones los incentivos económicos que los individuos requieren para guiar su comportamiento, de tal forma que les permita maximizar sus beneficios mediante la mayor reducción de los costos de transacción. Además, el Estado debe diseñar las políticas públicas tendientes a eliminar las discriminaciones de acción de los diferentes agentes económicos y a regular las variables del medio ambiente institucional.

Por lo tanto, la acción individual es la más conveniente de las formas, pero para ser potenciadas requieren de la acción colectiva. Una vez que la acción colectiva se inicia, en el curso de este mismo proceso emerge una colectividad que puede aplicar sanciones informales contra los que contravienen y recompensar a colaboradores a bajo costo (castigo u ostracismo), a ningún costo e incluso a premio (avergonzar, reprochar o criticar) (De Swaan Abram, 1997).

Pero la acción colectiva limita la racionalidad económica porque eleva los costos de transacción, debido a inadecuados sistemas de incentivos económicos y a malos diseños institucionales. Por lo tanto en el diseño institucional deben considerarse aquellas transacciones en donde los involucrados reciban beneficios mutuos. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

La acción colectiva se vicia y se descompone dando lugar al fenómeno del gorrón o “free rider” que se abstiene de participar a sabiendas de que de todos modos alcanza los beneficios logrados por la acción colectiva. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997).

Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente. De acuerdo con esto, si estamos interesados en la explicación del cambio institucional, se debe estar consciente que la información disponible para los participantes es limitada. Esto significa que cuando se asume que las intenciones de los actores políticos están conectadas lógica y empíricamente a los resultados institucionales, tenemos que reconocer el hecho que esto es una relación más compleja la cual está influenciada adicionalmente por una amplia gama de factores contextuales

Al igual que los accionistas del sector privado, los votantes del sector público también encuentran incentivos para gorrear pero deben cubrir ciertos costos para mantenerse informados. Se predice la existencia de los problemas del gorrón porque no pueden esperarse que los individuos contribuyan al bien público, a menos que su bienestar individual se mejore. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes. Bien público es una acción cooperativa para satisfacer una necesidad colectiva (Mueller, 1979). El concepto de bien público es un concepto multivalente, dependiendo del concepto que se tenga de lo público.

Los miembros de la colectividad tienen el mismo derecho a los beneficios del bien público ya sea suministrados por el Estado o por la sociedad civil. Involucrarse en la acción colectiva, los actores buscan traer el ansiado bien colectivo y dar forma a la colectividad con respecto al bien colectivo. Tanto el estado como la sociedad civil son actores sociales del desarrollo local integral, y deben procurar impulsarlo en forma equitativa y equilibrada. Los programas de desarrollo local deben pivotar sobre la base de una red de interacciones comunitarias, solidariamente comprometidas en forma continua y activa, más que en la simple contigüidad territorial o física.

Además, el diseño e implantación de programas de desarrollo local integral deben considerar la pluralidad e inclusión de los intereses de diferentes agentes económicos y actores políticos, a efectos de establecer los acuerdos y compromisos necesarios, así como para coordinar eficazmente los esfuerzos de todos. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

La acción colectiva tiene la tendencia a logra resultados inferiores al óptimo de Pareto para los individuos involucrados, cuando hay información incompleta y es turbulenta. Para desalentar al gorrón, las instituciones requieren de la adopción de ciertas reglas que los análisis económicos de mercado proveen. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes.

Otro caso de sub optimización de Pareto es el fenómeno del dilema del prisionero en donde los individuos involucrado pierden la racionalidad de los sistemas cooperativos. No obstante, aquí el estado todavía puede jugar un papel importante para regular el marco institucional que asegure el cumplimiento de que los beneficios del bien público alcancen equitativamente a todos los miembros de la colectividad. El concepto de bien público es un concepto multivalente, dependiendo del concepto que se tenga de lo público.

La teoría de los costos de transacción y la modelación económica formal constituyen dos canales a través de los cuales el medio ambiente de las instituciones afecta los resultados macroeconómicos, sobretodo cuando los retornos económicos pueden lograrse a través de canales políticos que hacen que los individuos reasignen sus recursos de la actividad económica a la política. Los costos de transacción ocurren cuando se presenta la racionalidad limitada en las relaciones de intercambio entre los individuos, mediante mecanismos que tienden a reducir las desventajas de la acción colectiva.

La racionalidad limita en la perspectiva de la Nueva Economía Institucional se relaciona con la misma conducta de economizar que enfatizan las explicaciones de eficiencia basadas en determinadas preferencias. Por otro lado, la explicación Vebleniana de racionalidad limitada considera el papel de ineficiencia del patrón de la conducta dependiente debido a la formación endógena y al cambio en las preferencias de los individuos. No obstante, los dos acercamientos tienen como elemento en común que la historia no permite un entendimiento adecuado de la diversidad de los caminos que han tomado las diferentes sociedades, por lo que se vuelve necesario hacer análisis comparativos de las instituciones.

La racionalidad limitada que considera que los actores tienen una racionalidad pero limitada, es una condición cognoscitiva menos limitada que sustituye a una hiperracionalidad supuesta por la economía ortodoxa. El hecho de sustituir la hiperracionalidad con una racionalidad limitada reemplaza la obtención de la maximización por la satisfacción, para encontrar un curso de acción que es bueno (Simon, 1957: 204-205. El punto clave de la racionalidad limitada para el estudio de la economía organizacional es la consideración de que los contratos son complejos e inevitablemente incompletos (Williamson, 2000).

El concepto del contrato legal como un marco de referencia de las relaciones y transacciones enfatiza la perspectiva de la continuidad a largo plazo y reconoce la naturaleza imperfecta de los mimos contratos. El concepto de contrato legal provee de un marco de referencia para regular las relaciones y las diferentes transacciones que surjan entre los individuos y grupos en la organización.

Los costos de transacción son los cálculos de los costos para hacer y mantener los acuerdos, cuyos resultados permiten preferir una forma de gobernabilidad determinada por sobre otra. La economía de los costos de transacción se desarrolla de acuerdo con las consideraciones de las complejidades de la conducta humana y siempre tarta de encontrar las aparentes explicaciones a las comparaciones de las estructuras institucionales. Tanto la conducta humana como la conducta organizacional tienen excepciones más que rutinas. La economía de los costos de transacción argumenta que cada forma genérica de gobernabilidad se apoya en formas distintivas de contratos legales bajo circunstancias determinadas.

La economía de los costos de transacción tienen como propósito la adaptación de las organizaciones (Willimson, 2000), la cual se distingue en dos tipos: la adaptación autónoma que response a los cambios en los precios relativos y la adaptación cooperativa que se logra a través de la administración, así por ejemplo, la economía de los costos de transacción considera al consejo de directores como un elemento de seguridad que apoya los contratos para lograr la rentabilidad financiera. La adaptación involucra costos de transacción más bajos y más alto los resultados del cambio que la reforma.

En este sentido, la deuda y la rentabilidad financiera de las empresas son mecanismos de gobernabilidad. Cualquier asunto o cosa que pueda ser materia de contratos, puede ser tratada en términos de economizar mediante la aplicación de los costos de transacción. Las transacciones que proporcionan beneficios mutuos a las partes involucradas deben de ser las transacciones preferidas.

Las instituciones políticas impactan lo económico e influyen en las decisiones. La economía de los costos de transacción proporciona las base para la economía mediante el diseño de estructuras de las nuevas formas de organización y por lo tanto, las consecuentes formas de gobernabilidad. La economía de los costos de transacción siempre tiene explicaciones a las estructuras de las instituciones.

La propuesta de la economía de los costos de transacción a la teoría de las organizaciones es la del principio de adaptación (Williamson, 2000), la cual pude ser de dos tipos: adaptación autónoma y adaptación cooperativa. La adaptación autónoma de las organizaciones response a los cambios en los precios relativos y la adaptación cooperativa se logra a través de la administración. La adaptación involucra costos de transacción más bajos y más alto los resultados del cambio que la reforma. La economía de los costos transaccionales siempre encuentra explicaciones a la formación de las estructuras organizacionales e institucionales.

La economía de los costos de transacción delimita las dimensiones describiendo las transacciones mediante el enfoque en los factores que son responsables por la quiebra en la transacción ideal en el derecho y en la economía, de acuerdo a lo cual los contratos tienen lugar entre los diferentes agentes económicos, para regular sus relaciones y transacciones. La perspectiva de los contratos como marco de referencia enfatiza la continuidad a largo plazo y acepta la naturaleza imperfecta de los mismos contratos. La gobernabilidad democrática se extiende y profundiza si se mejoran los vínculos entre las instituciones políticas. La conexión entre las decisiones políticas y los resultados económicos hacen evidente la necesidad de instrumentos que prueben la utilidad de las instituciones.

El diseño óptimo de las organizaciones toma en consideración los costos / beneficios de las diferentes estructuras organizacionales basadas en una coordinación óptima de interacciones entre las diferentes actividades. Las instituciones, de acuerdo a North (1984) se definen como un conjunto de limitaciones a la conducta en la forma de reglas y regulaciones, como un conjunto de procedimientos para detectar desviaciones de las reglas y de las regulaciones. Finalmente, como un conjunto de normas de conducta éticas y morales, las cuales definen los contornos que constriñen las formas en las cuales las reglas y las regulaciones son especificadas y aplicadas.

En el acercamiento tradicional, las sanciones por una falta de conducta ética va de la mano con el castigo del oficial público por la falta para cumplir sus compromisos. Cualquiera que sea el tipo de control solamente tiene que ver con las funciones del oficial administrativo que se relaciona con esa ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales caen dentro de este campo. Las cuestiones institucionales son propiamente tratadas por la economía del bienestar porque en todos los aspectos se trata de reglas legales e instituciones que afectan el bienestar individual.

La teoría neoinstitucional ha encontrado un lugar especial en la teorización económica con los trabajos de Arrow, Alchian, Demsetz, Williamson y otros autores, quienes equipados con las teorías básicas de los contratos se han concentrado en la determinación de las fronteras de las empresas. El concepto de contrato establece la regulación de las relaciones y transacciones entre los diferentes individuos y grupos en la organización.

Todo esto sucede en los tiempos en que las alianzas estratégicas, las inversiones conjuntas, las fusiones y las adquisiciones adquieren relevancia como el rostro más visible de la globalización económica y como formas de organización y producción que ofrecen una urgente respuesta a la necesidad que tienen las empresas para crecer y ganar poder en los mercados globales. Las estrategias de desarrollo empresarial tienden a orientar la producción hacia los sectores que tienen ventajas competitivas y un mayor valor agregado para insertar eficazmente la economía local y regional en los flujos de los mercados internacionales. El Estado tiene importantes funciones en la promoción y conquista de mercados internacionales y en la protección de mercados internos.

En sí, las relaciones interempresariales están determinadas por los intercambios regulados mediante mecanismos de precios y costos burocráticos que se tratan de reducir al máximo. Las estrategias de fusiones y adquisiciones fundamentan la expansión y crecimiento de grandes corporaciones multinacionales y transnacionales las que mediante los mecanismos de corporaciones fusionadas atraen empresas de otros Estados-nación. En cada fase expansiva de las grandes empresas transnacionales se requiere el apoyo de los Estados imperiales, los cuales avanzan la expansión militar y política previa a la expansión de las transnacionales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

En 1999 se concretaron nueve mil 240 fusiones y adquisiciones entre empresas que alcanzaron un valor de dos billones 963 mil millones de dólares. Esta cantidad supera 67 por ciento el producto interno bruto anual de todos los países de América latina y el Caribe, calculado por el Banco Mundial en un billón 769 mil millones de dólares (González Amador, 2000) Tan sólo en el sector financiero, las fusiones y adquisiciones bancarias se han acelerado como una respuesta a la globalización de los servicios. Totalizaron más de 300 mil millones de dólares en 1999 más otros cien mil millones de dólares que se esperan para el año 2000.

No obstante, uno de los efectos perniciosos de la ola de fusiones y adquisiciones es el nulo crecimiento en la generación de empleo. El total de las fusiones en 1998 alcanzaron los $2 400 billones de dólares, más, sin embargo, no se generaron puestos de trabajo.

El paradigma económico fundamentado en la economía institucional y neoclásica impone el tipo de instituciones y políticas, al menos en formas idealizadas, al estilo Estadounidense. Según North (1993), las instituciones dan forma a las reglas del juego de la interacción humana, estructuran incentivos en los intercambios económicos, políticos y sociales. Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales. Sin embargo, a escala internacional, las regulaciones son muy diferentes de país a país y las negociaciones pueden ser estropeadas por la inhabilidad para sortear las políticas sociales locales.

Las instituciones pueden ser formales o informales. En las instituciones formales, las reglas son construcciones creadas y están escritas leyes para resolver problemas de coordinación económica, política y social. Mientras que en las instituciones informales, los problemas se resuelven de acuerdo a normas no escritas, tales como el uso y las costumbres (Ayala Espino, 1996) Las formas de contratación formal son costosas, poco factibles a las futuras contingencias ambientales difíciles de verificar por anticipado y pueden tener muchos problemas debido a los costos de negociación.

Cuando los costos de negociación basados en sus características transaccionales se incrementan, los contratos para proteger los derechos de propiedad llegan a ser tan altos que son difíciles de adquirir. Así mismo sucede con los costos asociados con el monitoreo y de exigencia de cumplimiento de los contratos. Es decir, solo contratos incompletos pueden ser factibles de aplicar en situaciones futuras de interés, ni tampoco los contratos pueden sustituir las culturas de las partes involucradas en los intercambios económicos, políticos y sociales para especificar todas las posibles contingencias ambientales futuras.

En este sentido, Hermalin (1999) sostiene que la formalización de una cultura corporativa permanece como un fundamento para categorizar y entender posibles comportamientos futuros imprevisibles de contingencias ambientales hasta que se desarrollen modelos más aceptables que reduzcan la incertidumbre de las contingencias, y en términos más generales, modelos de racionalidad delimitada.

Cuando la cultura entra dentro de estos modelos, determina acciones tales como por ejemplo, cuales son consideradas como de explotación y cuales son de trato justo. Cuando las contingencias específicas surgen, la cultura especifica y determina la validez de las acciones en función de aquellos comportamientos esperados y exigibles en los contratos formales. Se puede afirmar, que la cultura corporativa facilita las inferencias acerca de los comportamientos esperados de los agentes económicos. En una cultura corporativa, las empresas transnacionales muestran comportamientos directamente proporcionales al grado de apoyo y las restricciones que reciben de los Estados nacionales.

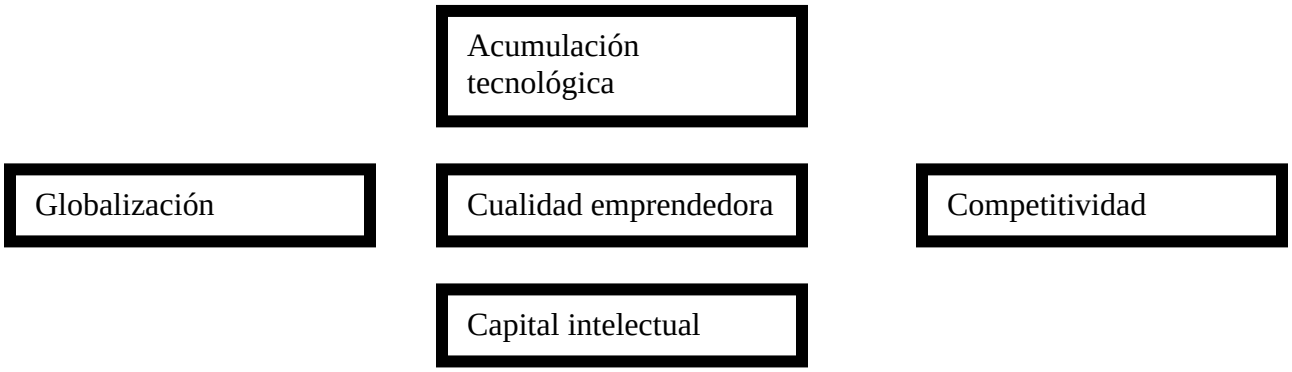
Las teorías de la empresa necesitan moverse más allá de las fallas del mercado. Pero también necesitan reconocer el papel positivo de las organizaciones en los procesos de identificación y explotación de combinaciones de nuevos recursos (Moran y Ghoshal, 1999) Las empresas globales sólo toman en cuenta la relación óptima de los factores de la producción, los que mediante el empleo de técnicas de gestión avanzadas, permitan obtener el máximo nivel de explotación.

Las relaciones interempresariales quedan determinadas por los costos burocráticos y mecanismos de precios que regulan sus intercambios. Por lo tanto, resulta ser críticamente importante diseñar organizaciones que respondan a los desafíos de un medio ambiente globalizador. Las interacciones entre las organizaciones y las instituciones que representan un papel importante en la asignación de recursos en una economía, constituyen el principal componente que da forma al desarrollo económico, así tanto las empresas como los mercados son necesarias para el desarrollo de cualquier economía. Las empresas difieren de los mercados en su acceso al fiat, debido principalmente a las diferencias en los contratos legales.

Las teorías apreciativas (Nelson y Winter, 1982) del desarrollo económico, sugieren que los papeles que juegan las organizaciones, están relacionadas con la asignación eficiente de respuestas a las fuerzas del mercado (Coase, 1960, 1988) Así como para constituirse en la fuente primaria del cambio institucional (North, 1990b) En cada cambio de las constelaciones institucionales se involucran altos costos de transacción de los actores políticos afectados. Estas tareas son extendidas por Moran y Ghoshal (1999) para elaborar un punto de vista de las empresas. Se consideran a las empresas como las fuentes primarias donde los recursos de la sociedad se localizan, se desarrollan y se emplean para iniciar y completar los procesos de desarrollo económico. La sociedad local y regional es un actor social que puede impulsar el desarrollo equitativo y equilibrado.

Este enfoque del papel que juegan las empresas y los emprendedores en el desarrollo económico, es diferente a las teorías de la empresa basadas en la eficiencia (Case, 1991; Willimason, 1985) y de las teorías ecológicas que dejan al mercado los determinantes del desarrollo (Hannan y Freeman, 1977). La característica de emprendedor hace posible capitalizar y explotar el capital intelectual de las organizaciones requerido para la innovación, desarrollo y acumulación tecnológica que crean la ventaja competitiva. Por lo tanto es el capital intelectual que las organizaciones adquieren, promueven, desarrollan, cultivan y aprovechan del poder cerebral de sus miembros y trabajadores, lo que constituye la base de su competitividad. Veliyath y Zahara (2000), ofrecen el siguiente esquema para explicar las relaciones existentes entre globalización, cualidad emprendedora y competitividad.

Globalización, cualidad emprendedora y competitividad



Los teóricos de este campo del conocimiento ofrecen varias alternativas de sistemas organizacionales en los cuales las tecnologías de la información representan un papel importante en la diseminación y aglutinamiento de tareas a través de la dispersión espacial y temporal. El tipo de capitalismo y el marco de referencia institucional dentro del cual operan son muy diferentes. Dunning (1997) identifica tres niveles en la evolución del capitalismo basado en el mercado: el capitalismo empresarial, jerárquico y la alianza. Algunos elementos de las tres edades del capitalismo se ilustran en el siguiente cuadro.

	Fase 1 Capitalismo empresarial (1770-1875)	Fase 2 Capitalismo jerárquico (1875-1980)	Fase 3 Alianza o capitalismo flexible (1980-¿?)
Mercados	Pequeño y fragmentario, local y nacional:	Nacional o internacional: crecientemente	Regional y global: dinámico y más competitivo.

	principalmente competitivo.	oligopolístico.	
Especialización	Simple y modesta, basada principalmente en la distribución de activos naturales: nacional.	Se convierten en más complejos: nacional e internacional.	Extensivo e interdependiente: la paradoja de la creciente división global del trabajo basado en la localización de activos creados, junto con agrupamientos sub-nacionales especializados de actividad económica.
Recursos clave	Recursos naturales, por ejemplo, frutas de la tierra y trabajo no calificado.	Físico y algún capital de conocimiento.	Activos tangibles, por ejemplo, infraestructura y capacidad tecnológica. Activos intangibles, por ejemplo, competencia humana y conocimiento, información capacidad organizacional y de aprendizaje.
Movilidad de activos	Pequeña excepto para el capital financiero y alguna emigración.	Gradualmente se incrementa vía operaciones de empresas multinacionales.	Movilidad sustancial de activos específicamente creados por la empresa.
Organización	Fábrica, pequeñas empresas.	Largas jerarquías de corporaciones integradas.	Más alianzas ínter empresariales, jerarquías de empresas sencillas, redes corporativas.
Sistemas de producción	Forma D, lote.	Forma M, masa o escala.	Motivada por innovación: flexible.
Papel del gobierno.	Involucramiento limitado: papel activo confinado a la provisión de servicios públicos, políticas fiscales y bienestar social.	Intervención creciente: crecimiento en la provisión de servicios de beneficencia; considerable proteccionismo durante los años entre las guerras.	Más sistemático mercado posibilitador: menos regulación de los mercados individuales.
Estructura	Legislación local /	Legislación nacional,	Mayor pluralidad de

gubernamental	nacional.	instituciones supranacionales limitadas.	formas de gobierno, especialmente a niveles subnacional y supranacionales.
Actividades internacionales.	Comercio clásico, muy poca producción extranjera.	Mercado y recursos naturales buscando inversiones directas extranjeras: crecimiento del comercio intra-industrial.	Eficiencia sustancial e inversión directa extranjera estratégica en búsqueda de activos.
Integración transfronteriza	De mercados de producto y finanzas.	Fluctuación: los años entre las guerras con el período temprano de la pos segunda guerra mundial.	Creciente, a través de la integración corporativa y regional.
Poder hegemónico	Reino Unido.	Estados Unidos.	Ningún país en particular.

Adaptado de DNG (1997)

En particular, afirma DNG (1977), los costos y beneficios de los sistemas alternativos de colocación de recursos se ven impactados por la mayor complejidad y especialización de la actividad económica, la creciente interdependencia de muchos mercados de productos intermedios. La especialización de las naciones menos desarrolladas se encuentra limitada por la falta de una política progresiva que promueva la práctica de los valores democráticos.

Los obstáculos y resistencias que las sociedades de los diferentes sistemas políticos pongan a la democratización de las prácticas del mercado contribuyen a profundizar la pobreza económica e intelectual y a aumentar la dependencia de naciones con un sistema de capitalismo globalizado más avanzado, también denominado neocapitalismo. Las olas masivas de democratización desde la mitad de los setentas ha causado en los institucionalistas clásicos que se preocupen por dos temas de importancia considerable para la constitución y construcción y el entendimiento de las precondiciones de la estabilidad democrática, el debate sobre las ventajas y desventajas de los sistemas parlamentarios y presidenciales y cómo mezclar sus características institucionales los efectos disfuncionales en las instituciones de los tipos puros.

Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional. Estos problemas incluyen un pronunciado grado de explotación económica, desigualdad social y económica, injusticia social y política que ha caracterizado a los países en desarrollo desde los tiempos en que los indígenas pobladores de estas tierras fueron subyugados por la fuerza a la dominación colonial europea en el siglo XVI. El cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra.

Una condición de desigualdad que llama la atención en Latino América es la aguda disparidad en la tenencia de la tierra, profundamente enraizada en desigualdades históricas e instituciones explotadoras y se ha estado agravando por la expansión de las relaciones del

mercado capitalista, la amplia comercialización de la agricultura, el desarrollo de las agroindustrias y el desplazamiento concomitante de grandes números de agricultores en pequeñas propiedades y campesinos pobres (Harris, 1997). Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional.

El avance de la democratización social depende en gran parte de la ocurrencia de una verdadera transformación socialista. Una crítica a este neocapitalismo polarizador de las desigualdades económicas y sociales se endereza a la creación de una alternativa postcapitalista de desarrollo. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado. Esto convierte al esquema globalizado de los mercados promovido por los organismos internacionales, en un instrumento que profundiza la pobreza y la dependencia de los países menos avanzados de los más avanzados.

La resistencia a la transición neoliberal tiene como origen la existencia de reservas de capital social que tratan de proteger el orden social existente, y que por lo mismo se convierten en fuerzas conservadoras subversivas que se resisten al establecimiento de un nuevo orden. Thoreau ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia, lealtad y a resistir a un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son isoportables.

De acuerdo con Kaiser (1997), la hipótesis del conservadurismo institucional sostiene que las reformas constitucionales en las democracias son relativamente poco comunes, no debido a factores institucionales sino al cálculo de los actores políticos, solamente cuando una gran crisis ocurre, ya sea por un abrupto cambio de factores contextuales o a través de un deterioro dramático de la satisfacción de la política pública, es una ventana de oportunidad abierta para la persecución de planes de reformas

La denominada transición democrática del Estado se realiza ya sea por que las elites político financieras deciden otorgarla, o porque una fuerte sociedad civil la exige. Se caracteriza por mutaciones en los rasgos centrales de la estructura “matriz estado céntrica” que Cavarozzi, (1992b) delimita como “una forma de organización de la vida política en torno a la intervención y regulación de estado que impregnó la mayoría de los espacios sociales y que, de ese modo, afectó las oportunidades de vida de prácticamente toda la población”.

Si las reservas de capital social se agotan y no se reproducen a largo plazo, las fuerzas conservadoras del stablishment sucumbirán ante los embates del nuevo orden neoliberal. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales.. El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí. Este nuevo orden económico mundial se centra en estrategias de desarrollo que se orientan a la eliminación de la política social y a la descentralización de las funciones del Estado. Efectivamente, los procesos de descentralización impulsados por el sistema capitalista son inherentes a su propio desarrollo en las circunstancias actuales de trasnacionalización de la

economía y los mercados en donde el Estado nación, que una vez fue funcional para su expansionismo, ahora es el principal estorbo.

Una tendencia contrapuesta consiste en la promoción del desarrollo local y regional mediante el fortalecimiento de la función de regulación del Estado. La reestatización o neoestatización de las funciones es un proceso que tiende a recuperar las funciones eliminadas o disminuidas por las políticas económicas y sociales aplicadas por el modelo neoliberal, la cual constituye en sí misma una pieza clave en la fase expansiva de las grandes corporaciones transnacionales.

Estas corporaciones transnacionales se reparten los mercados internacionales con el apoyo de los Estados imperialistas que aumentan su poder e influencia. Son los pocos estados imperialistas los que detentan y concentran la propiedad y el control de las transnacionales. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula.

Otros aspectos a considerar son el acelerado movimiento hacia una economía orientada por la información y la innovación, y la ampliación de las fronteras territoriales de las empresas. Así también, el creciente significado de activos creados, como por ejemplo, las habilidades humanas y las capacidades tecnológicas en los procesos de valor agregado, el desarrollo de nuevas instituciones y formas organizacionales, y una reevaluación de culturas y normas conductuales, han impactado los costos y beneficios de los sistemas alternativos de colocación de recursos.

En particular, las relativas ventajas de los mercados, empresas y gobiernos como modos de gobernabilidad. Según Williamson (1991), la empresa constituye la forma de organización que puede ser usada cuando todas las demás formas de organización fallan, satisfacen más eficientemente las demandas del mercado, incluso mejor que los mercados mismos de acuerdo con Coase, (1991) No obstante, hay acuerdo en que todas las posibles formas de organización tienen diferentes modos de gobernabilidad que intrínsecamente cuentan con debilidades y fortalezas, además de que presentan un conjunto de elementos característicos de cada una de las formas.

Tanto las empresas como la sociedad confrontan el problema económico de dar el mejor uso a los recursos mediante las diferentes combinaciones e intercambios, para lograr el crecimiento y desarrollo económico, el cual implica la noción de aumento del nivel y calidad de vida de la población. La sociedad local y regional es un actor social que puede impulsar el desarrollo en forma equilibrada y equitativa. Los intercambios entre las empresas se regulan mediante mecanismos de precios y costos burocráticos.

El concepto de desarrollo económico es un concepto más amplio que el concepto de crecimiento económico, el cual implica la noción de la medición cuantitativa del producto interno bruto per cápita y el consumo promedio real. Según Tarapuez Chamorro(2001), el desarrollo es “un proceso colectivo y dinámico que no se realiza en forma aislada y en el cual también influyen los cambios generados desde y hacia el interior de la región.”

Es además un concepto ambiguo que puede ser usado en forma normativa o descriptiva En el modelo neoliberal, el crecimiento económico se ha vuelto un fin en sí mismo. Hay que

diferenciar entre los diversos tipos de crecimiento en función de su calidad. Un crecimiento exponencial material indefinido, no es sustentable, a diferencia del crecimiento en bienes y servicios de salud, educación, etc. En este sentido, se habla más de desarrollo que de crecimiento económico, es decir, la calidad del desarrollo se redefine del crecimiento económico. Corresponde a la acción gubernamental la promoción y protección del crecimiento económico.

Las tensiones que existen entre el crecimiento económico y el desarrollo se fundamentan principalmente en la concepción del desarrollo sustentable, el cual formula serios cuestionamientos sociales, culturales y ambientales a las prácticas de las organizaciones. Para alcanzar el desarrollo sustentable es necesario lograr resultados positivos en las reformas económicas e institucionales. Lamentablemente, este enfoque de desarrollo no ha producido los resultados esperados. En este sentido es necesario establecer nuevos esquemas de colaboración entre la sociedad y el mercado. Los cambios endógenos de los procesos de desarrollo económico tienen su origen en las nuevas combinaciones de estos recursos, descrito ya por Schumpeter (1942), como una destrucción creativa como un proceso evolutivo que "incesantemente revolucionaliza la estructura económica desde dentro, incesantemente destruyendo la vieja estructura e incesantemente creando una nueva".

Actualmente las estructuras económicas políticas y sociales de los Estados nacionales en desarrollo están siendo barridas por la aplicación de las políticas de ajuste estructural como parte de la instrumentación del proyecto neoliberal, las cuales a pesar de su magnitud, los resultados medidos en términos de desempeño de crecimiento económico y desarrollo social no son satisfactorios. En este sentido, los análisis del ajuste estructural se refieren al cálculo económico de las expectativas y no consideran la apreciación a la dimensión subjetiva del fenómeno.

Por lo tanto, las políticas de ajuste estructural hacen referencia a “poder de clase, riqueza y control”, en donde el Estado recolonizado (Petras, 2001d), es activo en la implementación que incluyen “cambios en la propiedad (de público a privado, de capital nacional a capital extranjero” mediante una serie de medidas que benefician a la clase capitalista transnacional.

Estas políticas de ajuste estructural neoliberal han involucrado completamente la apertura de los mercados domésticos de los países latinoamericanos al capital transnacional, la promoción de las llamadas exportaciones no tradicionales a fin de ganar divisas extranjeras tanto como sea posible para pagar las deudas, y la desregulación del capital local y los mercados comerciales, que han involucrado las impopulares medidas de austeridad fiscal dirigidas a reducir los servicios públicos y a privatizar muchas de los servicios públicos y empresas públicas, de tal forma que los fondos públicos estén destinados al pago de las deudas.

La privatización de los beneficios, riesgos y responsabilidades de los servicios públicos, también enajena las aspiraciones sociales, las cuales se cancelan si la subjetividad es excluida del orden social. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). Las crueles medidas de austeridad han sido adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de la región a fin de reducir sus gastos en educación, salud y otros servicios sociales de tal forma que pueden servir a la combinación de deudas de los sectores

privados y públicos de los diferentes países. Por lo tanto, la implantación de las políticas de ajuste estructural requieren de "un estado fuerte dispuesto a resistir la oposición de la mayoría.

Como tipos polares, las democracias con un mínimo de puntos de veto son mayoritarias en carácter, mientras que las democracias de negociación contienen un máximo de puntos de veto (Kaiser, 1997) Estas políticas han disminuido la tasa de crecimiento económico en general y han traído una drástica reducción de los servicios del gobierno así como en el empleo público. Esto ha resultado en una venta total desnacionalizadora de los más grandes beneficios y empresas públicas de estos países y abolido las tarifas protectoras y otras formas de apoyo que previamente tenían las empresas locales.

La propuesta para el análisis del cambio institucional es opuesta a la democracia mayoritaria y negociadora como el punto de partida. Como tipos polares, las democracias con un mínimo de puntos de veto son mayoritarias en carácter, mientras que las democracias de negociación contienen un máximo de puntos de veto (Kaiser, 1997) Un estado ideológicamente comprometido, dispuesto a ocultar su rol histórico como entidad independiente y a rechazar la idea de la soberanía popular para así poder implantar políticas por vías autoritarias, por real decreto." La propuesta para el análisis del cambio institucional es opuesta a la democracia mayoritaria y negociadora como el punto de partida.

Schumpeter encuentra que bajo este proceso de destrucción creativa del capitalismo que destruye viejas instituciones y modos de vida, sus intereses se centran en aumentar su productividad aunque se sacrifique la cohesión social y se aniquile a las sociedades democráticas liberales. Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

La inestabilidad inherente al dinamismo del sistema capitalista es incompatible con la estabilidad y la cohesión de una sociedad democrática liberal y da origen a nuevas elites económico-políticas que se enclaustran en nuevos fundamentalismos y nacionalismos. La nueva clase transnacional capitalista que emerge entre las elites capitalistas nacionales y que son la clase dominante en sus respectivos países, comparten el mismo proyecto neoliberal, intereses y privilegios de los poderes hegemónicos para implantar una política económica que les favorece.

Las democracias liberales han cambiado sus actitudes y ha reconocido que la supresión de los grupos nacionales minoritarios fue un error. Con la excepción de derechos minoritarios constitucionalmente protegidos, ningún actor político está equipado con el poder de veto. Los nacionalismos intensificados por un conjunto de manifestaciones reactivas debilitan y vulneran al Estado-nación como la unidad tradicional de identidad política.

Los alcances del Estado-nación para eliminar las disociaciones y disfuncionalidades entre los procesos de globalización económica y los procesos de identificación política y cultural de los pueblos, son muy limitados, lo cual profundiza la ruptura social. Por tanto, la globalización es un fenómeno que está estrechamente ligado a la emergencia de nacionalismos. Pretender integrar a los grupos minoritarios nacionales en un grupo

poblacional étnico dominante ha sido uno de los grandes errores de los Estados-nación, que dio origen a grandes problemas socio-políticos y culturales.

Es más, la inestabilidad del sistema capitalista global fragmenta las economías regionales y nacionales cuando sus crisis financieras provocan desequilibrios que son difíciles de superar y que inciden en todo el sistema político-social. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera. La estructura económica regional, las variables macroeconómicas nacionales y los procesos de globalización económica inciden en las transformaciones de la economía local y regional. La estructura misma del sistema político que incluye a las instituciones, partidos y movimientos políticos están perdiendo legitimidad y credibilidad y son altamente inestables.

Las crisis financieras profundizan la polarización social, contribuye al quiebre de numerosas cadenas productivas. La reducción de los desequilibrios de las cuentas corrientes de las balanzas de pagos requiere de balancear el crecimiento económico para sostener el desarrollo social. Por lo tanto el laissez faire del mercado globalizador con su inherente inestabilidad es el destructor de las formas democráticas de gobernabilidad. El laissez-faire como un mecanismo natural que se autorregula lleva al deterioro de la competencia porque considera a este mundo como irreal y artificial, lo que conduce a la paradoja de tener que regular el laissez-faire para mantener la competencia.

Sin embargo, las nuevas combinaciones de recursos crean fuentes nuevas de valor potencial, pero tanto el valor de creación y el valor de realización se requieren para un sistema económico equilibrado. Según Hayek (1945), el problema económico de la sociedad no es en sí un problema de cómo asignar ciertos recursos dados. Esto es, si dados significa dados a una mente individual. Es más bien el problema de cómo asegurar el mejor uso de los recursos conocidos a cualquiera de los miembros de la sociedad para fines cuya relativa importancia solamente estos individuos conocen. El intercambio de los recursos para ser asignados a usos más productivos influencia el desarrollo económico cuando este se orienta a alentar la productividad social a través de una asignación más eficiente, asegurando el mejor uso de los recursos conocidos a cualquiera de la sociedad.

Si bien el transnacionalismo y la desregulación están reduciendo el papel del Estado en la gobernabilidad de los procesos económicos, a decir de Sassen (1995), el Estado permanece como la garantía última de los derechos de capital nacional o foráneo. La desregulación es un vehículo a través del cual se profundizan los procesos de globalización económica y al mismo tiempo se garantizan los derechos de su principal ingrediente, el capital global. Las transnacionales y multinacionales requieren la seguridad de que el Estado nacional ejercite las funciones tradicionales de la economía, principalmente para garantizar los derechos de propiedad y los contratos.

Sin embargo, para imponer el libre mercado en una sociedad, se requiere de instituciones reguladas por un Estado fuerte y centralizado. Esta es la ironía del libre mercado. La implantación de las reformas económicas y políticas del modelo neoliberal, orientadas a introducirse en los procesos de globalización del mercado, requirió del poder central del Estado-nación, facilitadas por un aislamiento relativo a las presiones sociales por parte de las elites tecnocráticas encargadas de instrumentarlas.

La nueva clase transnacional capitalista que emerge entre las elites capitalistas nacionales y que son la clase dominante en sus respectivos países, comparten el mismo proyecto neoliberal, intereses y privilegios de los poderes hegemónicos para implantar una política económica que les favorece. Tanto políticos y burócratas que centralizan las decisiones, asignan los presupuestos y reparten los recursos para busca el máximo beneficio siempre a una clientela política. No obstante, la tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966).

Sin embargo, las mismas reformas debilitaron las bases de su soberanía y gobernabilidad, tanto interna como externa al mismo Estado-nación, en una especie de auto suicidio. Al mismo tiempo que se desregulan y eliminan los controles para que la economía sea más dependiente de las fuerzas del mercado y se reducen las funciones del Estado-nación, también se modifican las bases de la gobernabilidad y control político-social, a pesar de que la centralidad de las decisiones continúa. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

No obstante, el modelo de Estado necesario y suficiente, más que el Estado mínimo, para el nuevo modelo de desarrollo debe ser el estado regulador, bajo el esquema de un Estado ampliado que involucra la participación conjunta en la realización de proyectos comunes, a las instituciones tanto de la sociedad civil como a las instituciones del Estado. Tanto el estado como la sociedad local y regional son dos actores sociales que impulsan y promueven el desarrollo en forma equitativa y equlibrada. Así, la sociedad civil no se encargaría de realizar funciones que disminuyan al Estado y que lo reduzcan a la expresión del Estado policía, cuando tiene un importante rol que desempeñar como regulador de las actividades económicas, sociales, políticas y culturales, etc.

En una sociedad democrática y solidaria, el Estado cumple una función de regulación de importantes actividades económicas, sociales, políticas, culturales, etc., y no las de un Estado disminuido cuyas funciones son absorbidas por una sociedad civil que le despoja de importantes funciones reguladoras para reducirlo al modelo del Estado policía. Por el contrario, tanto las instituciones de la sociedad civil como las del Estado deben de participar en proyectos comunes mediante formas de gobernabilidad que estimulen la colaboración para una esfera de acción que confluya en un espacio de Estado ampliado. Ambos, sociedad y Estado son actores sociales del desarrollo y deben procurar impulsarlo en forma equitativa y equilibrada.

Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La agenda y los desafíos de las instituciones de la sociedad civil son orientadas por el Consenso de Washington para sustituir importantes funciones del Estado y limitar su campo de acción. El Consenso de Washington impone a las naciones en desarrollo sus postulados para limitar la participación del Estado en las actividades económicas y del mercado, privatizar las empresas del Estado y liberalizar la economía. Las naciones que han logrado mayores beneficios de los procesos de globalización

son aquellas que se han apartado de la aplicación de los postulados del Consenso de Washington y han regulado su propio crecimiento.

Por esta razón se puede afirmar abiertamente que las instituciones para la gobernabilidad global no son democráticas y por lo tanto, la reconciliación entre una economía de mercado global e instituciones para la gobernabilidad global democrática son meras utopías y falacias, y todo proyecto histórico que se sustente sobre las bases del capitalismo globalizador está condenado a fracasar. Al decir de Haliday (1997: 23), ya se cuenta con un sistema de gobernabilidad global con muchas capas, aunque "uno de los problemas principales es el de resolver, a través de reformas, los efectos de un sistema que ha estado vigente durante varias décadas. ¿Cómo hacer que este sistema de gobernabilidad sea más efectivo, más justo, y más responsable frente a la cambiante situación internacional?". Todavía más, de acuerdo con Gray (1999), "ningún tipo de capitalismo es universalmente deseable. Cada cultura debería ser libre para elegir su propio estilo y para buscar un modus vivendi con las variedades de capitalismo desarrolladas por los otros".

Los procesos económicos transnacionales interactúan con los sistemas para la gobernabilidad de las economías nacionales en tanto que los procesos de globalización económica materializan en determinados espacios, continúan operando bajo esquemas de regulación soberana, bajo regímenes transnacionales emergentes y con frecuencia bajo condiciones de una desnacionalización del territorio nacional.

La desterritorialización del espacio estatal está resultando en la emergencia de nuevos espacios territoriales. El concepto de espacio evoluciona de una delimitación territorial y física a un concepto más dinámico y abierto. Arellanes Jiménez (2001) caracteriza este concepto nuevo de espacio como un "concepto dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones".

En este sentido, todavía el Estado se concibe como una representación de una capacidad técnico-administrativa respaldada por un poder político-militar que no puede ser fácilmente replicada por otro arreglo institucional y que sostiene a los poderes hegemónicos en el sistema de integración interestatal. Sin embargo, a pesar de que la legitimidad y competencia del mercado son fuertemente cuestionados, después de todo, el Estado continúa representando un papel crucial en la producción de legalidad de las formas emergentes de actividad económica a pesar del mecanismo de desregulación de estas actividades que reducen el papel del Estado y facilitan la globalización de los mercados.

Las estrategias de desarrollo empresarial tienden a orientar la producción hacia los sectores que tienen ventajas competitivas y un mayor valor agregado para insertar eficazmente la economía local y regional en los flujos de los mercados internacionales.El Estado nacional todavía tiene un rol importante que desempeñar en la promoción y conquista de los mercados internacionales y en la protección de los mercados internos.

Los ideólogos ortodoxos neoliberales limitaron las funciones de regulación de actividades, de protección y bienestar del Estado. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). Cómo debe involucrarse el Estado en el desempeño de estas actividades y mediante qué métodos y formas de organización para hacerlo eficazmente, es una de las consideraciones del debate actual. Es el sistema social el

que provee el principio de organización económica y las reglas de gobernabilidad para hacer funcionar la competencia del mercado como un mecanismo social.

Principalmente, el mercado fue la modalidad favorecida en la asignación de los recursos debido fundamentalmente a los bajos costos de coordinación y transacción, por sobre la administración pública que no tenían ni la experiencia ni la motivación para organizar eficientemente la actividad económica. Los procesos de globalización presiona al Estado por una redefinición de sus funciones instrumentadas mediante una reforma a la administración pública.

Por lo tanto, el paradigma burocrático de la administración pública considerado como el modelo de la teoría organizacional que tenía como finalidad la normalización dela racionalidad instrumental para la eficiencia, tienen alcances limitados en aquellos países donde no existen las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales, dando lugar a un modelo de administración que se centra en la racionalidad de una estructura organizacional que se adapte con mayor flexibilidad a los cambios y contingencias. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes.

La modernización del sector público ha evolucionado más allá del simple fortalecimiento institucional. Los procesos de modernización generan aprendizajes rápidos y trae consigo un incremento en las demandas de bienes y servicios, la cual no siempre desarrolla la capacidad para satisfacerla. El mercado como forma de coordinación está siendo adoptada por el sector público, en relaciones de comprador-proveedor y de subcontratación de servicios.El enfoque gerencialista de la administración pública intenta desburocratizar las estructuras gubernamentales mediante el uso de técnicas administrativas empleadas por las organizaciones del sector privado. Es un gerencialismo que intenta fortalecer la racionalidad instrumental, la cual promete una aplicabilidad universal

El surgimiento de este enfoque gerencialista tiende a sustituir el poder de los administradores por tecnócratas que bajo una racionalidad instrumental buscan más la eficiencia en la medición del desempeño que la efectividad en la entrega de servicios a la ciudadanía. La visión de los tecnócratas, se critica, es estrecha. El ciudadano es tratado como un cliente o usuario y no como un ciudadano titular de derechos y miembro de una sociedad de participación más que de consumo. El enfoque estimula la eliminación de ciertas instituciones del sector público y la contratación de aquellos servicios y operaciones en los que la disciplina del sector privado logre obtener mejores indicadores de desempeño y rendimientos.

Así, el estado es considerado como un conjunto de organizaciones interconectadas y no un solo actor. El concepto de Estado implica el ejercicio del poder dentro de un territorio mediante instituciones que garantizan la gobernabilidad, independientemente de que esta sea de naturaleza democrática. Es un archipiélago más que una isla de poder consciente. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición”.

La integración de los procesos económicos internacionales conduce a una mayor volatilidad y necesidades de reestructuración del sector público que incrementen la demanda de servicios en seguridad social. Es difícil de controlar la volatilidad delos mercados financieros por las naciones pequeñas en desarrollo. Así también en la implementación de un sistema de administración financiera gubernamental que evalúe los resultados en los términos de economía, eficiencia, efectividad, calidad en el servicio y desempeño financiero. Algunos investigadores encuentran una correlación entre la calidad del gobierno en las diferentes regiones y la participación cívica.

En este contexto de economía ultraliberal que domina el mundo, la administración pública sufre de disolución moral la cual parece iniciar con los líderes políticos. El enfoque gerencialista de la administración pública del Estado se centra en los procesos del libre mercado, y sus defensores (Clarke and Newman, 1997) sostienen que por la posición científica de neutralidad e impersonalidad, los administradores pueden ser confiables, porque no son parte de la guerra entre los diferentes intereses políticos y ocupacionales.

El sistema de mercado libre no tiene igual cuando se trata de generar crecimiento, prosperidad material y elección del consumidor, pero sus mecanismos de competencia, transparencia y regulación que tienden a hacerlos más “perfectos”, no son del todo suficientes para estabilizar los flujos. Se requiere algo más para reactivar la eficiencia de los mercados. Ward (1976) argumenta que “Un sistema de mercado que no esté totalmente corregido por instituciones de justicia, para compartir y de solidaridad hace más fuerte al fuerte y más débil al débil.

Los mercados como herramientas útiles en el funcionamiento de orden social juegan un papel positivo y de descentralización. Los mercados como maestros de la sociedad, enriquecen al rico y pauperizan al pobre”. En el centro del sistema de mercado está la innovación dinámica. Los campeones del mercado creen que puede simultáneamente innovar a través de lo que Schumpeter llamó la "destrucción creativa" dejando de alguna forma los valores tradicionales intactos.

Schumpeter argumentó a favor de los monopolios que estimulan un más acelerado proceso de desarrollo al motivar las innovaciones más rápidamente debido a que cuentan con un mercado protegido, ya que no tienen competidores que les copien sus nuevos productos y por lo tanto, pueden competir más efectivamente en contra de los innovadores. El término acuñado por Schumpeter, “destrucción creativa” describe el proceso mediante el cual las nuevas compañías tienen que innovar a fin de penetrar y posicionarse de mercados dominados por otros. El argumento de que a mayor competencia hay una mayor innovación no es del todo evidente, tal como sucede con el caso de la división de Microsoft, la cual se presume hará avanzar el progreso y desarrollo de este sector industrial.

Sin embargo, en algunas instancias, como en la provisión de bienes y servicios públicos, los gobiernos pueden ser la modalidad organizacional más adecuada, aunque por la falta de análisis económicos serios, no es del todo posible evaluar el papel óptimo del gobierno tanto en la provisión de bienes y servicios públicos, como en la reconciliación de costos sociales y privados. Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades Sin embargo, el gobierno debe mantener la provisión de aquellos bienes y

servicios públicos que deseables social y políticamente y que además quiera tener un poder sobre su presupuestación. La falta de democratización de los procesos de descentralización para la provisión de bienes y servicios requiere de la formulación e implantación de políticas propiciadoras.

Los gobiernos democráticos han desarrollado mecanismos para proveer al bien común aquellos servicios que los mercados privados no pueden ofrecer a precios accesibles para la mayoría ciudadana. La propuesta para el análisis del cambio institucional es opuesta a la democracia mayoritaria y negociadora como el punto de partida. Como tipos polares, las democracias con un mínimo de puntos de veto son mayoritarias en carácter, mientras que las democracias de negociación contienen un máximo de puntos de veto. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar. (Kaiser, 1997)

La concepción tradicional y clásica del servicio público está ligada indisolublemente a una vocación social de las instituciones delimitadas por un proyecto nacional. La provisión de bienes y servicios públicos forman parte de la responsabilidad del Estado para dotar de infraestructura al desarrollo social y el crecimiento económico. Pero más que infraestructura, los bienes y servicios públicos son los recursos de la soberanía del Estado, que no presentan exclusividad para su consumo y que incluye los derechos civiles y políticos. En aquellos bienes sociales que son libres o gratuitos, el Estado y otras instituciones del sector social debe regular y gobernar su utilización y acceso por parte de la ciudadanía. Los gobiernos, además, deben mantener la función presupuestal para proveer aquellos bienes y servicios que son política y socialmente deseables.

Sin embargo, en un proyecto de nación se definen las áreas de la provisión de bienes y servicios que deben ser atendidos por el Estado mismo y otras en las que la determinación de su carácter público o privado resulta ser más conflictiva. Existen muchas confusiones todavía en el terreno de las relaciones entre servicio público y ciudadano, para definir al usuario o consumidor de los servicios, cliente, público, etc. así como hasta que niveles de participación ciudadana en los procesos de planeación, diseño y entrega de los servicios públicos por los niveles de juzgamiento que implican. La participación popular para el control de los bienes y servicios públicos, se facilita por los modelos de atención prescritos en los procesos de descentralización administrativa.

Igualmente las confusiones abundan en el ejercicio de los diferentes tipos de derechos ciudadanos y el énfasis que pueden tener, como por ejemplo en la exigencia de sanciones por deficiencias en la provisión de los servicios públicos. El surgimiento de los “derechos republicanos” en la ciudadanía, constituyen los derechos que tienen los ciudadanos al patrimonio económico público, cultural y medio ambiental y que “los defienden en contra de aquellos que intentan apropiarse, de manera individual, de los bienes que pertenecen o deben pertenecer a todos” ((Bresser-Pereira, 2001). Por otra parte, los denominados “derechos de los pueblos” al “buen gobierno”, no constituyen más que simples mecanismos que usan los agentes económicos del capitalismo hegemónico

Los derechos republicanos son colectivos y al mismo tiempo son parte de los derechos individuales y subjetivos de los ciudadanos, es decir lo que los juristas denominan “derechos públicos subjetivos”. Colectivos porque protegen a la colectividad e individuales porque cada

individuo los porta., aunque en la dialéctica individuo - colectivo social, el capitalismo responde con el potencial del autoritarismo. Los ciudadanos, de acuerdo a este autor, "…tienen derecho a que la res publica siga existiendo y sirviendo a todos (derechos republicanos), mas que ser apropiada por grupos patrimonialistas o corporativistas, que actúan en la sociedad como "buscadores de rentas" (rent-seeking agents)". La res pública constituye el patrimonio público, económico, histórico, cultural y medioambiental, y está formada por "el total de bienes públicos y por los flujos de recursos públicos de los que se ocupan las organizaciones públicas estatales y no estatales" (Bresse-Pereira, 2001).

Dado el papel de las sanciones en la preservación de la normalidad social, lo que involucra nada menos que la salvaguarda de los valores fundamentales de la sociedad, deberían traerse al conocimiento del público en general y su publicación es una obligación legal. La literatura en economía neoliberal clama que el mercantilismo en los servicios públicos a empujado a la corrupción a nuevos extremos en que dicen beneficiar a economías en desarrollo cuya expansión esta limitada por el mismo Estado y sus burocracias (Kampto, 1997). Sin embargo, esta teoría no puede sustentarse porque el neoliberalismo mide cualquier cosa bajo un parámetro de valor comercial y no considera los conceptos de servicio público e interés general.

La ética cristiana y la ética secular en este sentido vienen juntas en la noción del interés general. Este concepto es el producto de una mezcla de dos tradiciones, y tal convergencia excluye cualquier posibilidad para la construcción de la ideología del Estado moderno en una escuela de pensamiento simple. La ideología permite hacer generalizaciones en ambientes complejos en las que operan, como medios racionales para la promoción y acumulación del capital humano.

El interés general es un principio fundamental de legitimación usado para reforzar el consenso que rodea al Estado y para renovar constantemente la creencia en la legitimidad de su poder (Kampto, 1997). Por lo tanto, parece ser esencial que cubra el ejercicio de la autoridad del Estado y la acción administrativa. De acuerdo a Prats (2001) no es muy razonable, tal como lo pretende el modelo de la Nueva Gerencia Pública en el Estado neoliberal, identificar la acción administrativa de autoridad como "gerencia", "gestión" o "management" público si se define en función de la economía, la eficacia y la eficiencia.

El principal determinante de la elección entre el sector público o el privado, para la provisión de servicios públicos, es una función del nivel de los costos de transacción, la teoría de la agencia y el principal, la cual provee oportunismo e información asimétrica. Todo esto como resultado de la delegación de autoridad bajo asimetría informacional (Sappington and Stiglitz, 1987). La provisión de servicios públicos implica dos tipos de asignaciones (Finot, 2000), el empleo de decisiones políticas para la provisión propiamente sobre qué, cuánto y con qué producir y a las decisiones que se refieren a la combinación de factores e insumos para la producción de los bienes públicos (decisiones técnicas diría yo). Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades

La teoría de la agencia y el principal ha sido ampliamente estudiada en las instituciones públicas y persisten los cuestionamientos sobre quien es el propietario o principal y quien el agente o administrador en los servicios públicos. El uso de la competencia en la procuración

de los servicios públicos, tan popular en la reinvención del gobierno propuesto por el modelo neoliberal, es una forma para conseguir los más bajos niveles de los costos de transacción.

El gobierno, por lo tanto, es visto como una institución que por medio de su estructura burocrática tiene como principal función la de prestar los servicios públicos, los cuales son demandados por la ciudadanía a través del proceso de votación. El mecanismo de votación mayoritaria determina las políticas públicas en un sistema democrático, aunque considerado como un proceso de elección colectiva, los resultados no son del todo consistentes con las elecciones sociales y tienden a incrementar el nivel de gasto del Estado. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. Quizás por esto, en el nuevo contexto, los gobiernos democráticos no conceden demasiada autonomía a los procesos de diseño e implementación de las políticas públicas. Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

Las nuevas formas de la gobernabilidad económica.

Con la liberalización de los mercados y la regulación de las actividades de valor agregado, están emergiendo nuevas formas organizacionales. La geografía de la actividad del valor agregado y los mercados pueden afectar la gobernabilidad óptima de la asignación de recursos, por lo que el mercado, al igual que el Estado no son mecanismos perfectos para la asignación de recursos y presentan sus fallas correspondientes. La geografía política y económica circunscrita a un espacio nacional está cediendo su lugar a una geografía política y económica regionales o globales.

No obstante, la estructura económica regional, las variables macroeconómicas nacionales y los procesos de globalización económica influyen en las transformaciones de las economías regionales y locales. El capitalismo de alianza refleja la estructura socio-institucional emergente en las economías basadas en el mercado, que enfatizan la asociación entre los diferentes modos organizacionales de asignación de recursos, así como el papel asignado al gobierno como el supervisor del sistema económico y el árbitro último para dirimir los conflictos entre los diferentes agentes privados y públicos.

La estructura espacial delimitada por territorios con base en fronteras físicas o geográficas definen las interrelaciones entre las diversas entidades geográficas. Kali (1999) desarrolla una teoría que sugiere que los grupos diversificados de negocios son un elemento de transición de las organizaciones que facilitan el desarrollo económico bajo la presencia de limitaciones institucionales, especialmente los mercados financieros.

La ubicuidad de los grupos diversificados de negocios se explica por sus respuestas económicas privadas que evaden las distorsiones de las políticas y la influencia del patronazgo político. Además, constituyen respuestas valuables a las fallas de la infraestructura institucional. El fortalecimiento de los nexos económicos y sociales de los grupos de empresas y el incremento de su intermediación en el mercado mejora los problemas de coordinación que surgen de la existencia de las asimetrías organizacionales generadas por la ausencia o la carencia de habilidades e incentivos de intermediarios financieros especializados. Las empresas difieren de los mercados en su acceso al fiat, debido principalmente a las diferencias en los contratos legales. Los individuos que deciden contratar en forma privada y fuera de las estructuras de gobernabilidad del estado, encuentran

suficientes estímulos para hacerlo. Una nueva estructura institucional global puede garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.

Entre las nuevas formas organizacionales, por ejemplo, encontramos aquéllas con las implicaciones de las diferentes interconexiones que tienen los sistemas de organización económica (enfoques de sistemas de negocios y cadenas globales de mercancías) con los contextos políticos, sociales y culturales, permiten explicar las variaciones en la coordinación de sistemas económicos a escalas internacionales, nacionales y locales (Whitley, 1996)

Por lo tanto, los elementos distintivos del acercamiento de sistemas de negocios, según Gereffi (1996), se fundamentan en el distinto contexto institucional. Se hace un énfasis predominante en sistemas de negocios nacionales, e incluso en raros casos de regiones supranacionales que tienen suficiente homogeneidad étnica, continuidad histórica, y aislamiento de influencias externas que constituyen un sistema distintivo de negocios bajo la presunción de proximidad geográfica. Pareciera que este enfoque justifica el estudio de la formación del capital social y sus implicaciones en la creación del valor (Tsai and Ghoshal, 1998). De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la "trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos".

Como el capital físico y el capital humano, el capital social afecta el crecimiento económico y el desarrollo social y político. Existen diferencias entre las diferentes formas de capital y el capital social. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la "trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos" Por capital humano se hace referencia a una "dotación de capacidades", " contenidas en cada una de las personas, bajo el supuesto de que todas esas capacidades son igualmente una forma de "capital" y que la manera en la que esas capacidades son utilizadas no afecta al capital humano de cada uno" (Yañez, 2001). El capital humano se encuentra incorporado inherentemente a los seres humanos y el total agregado sería mayor si su acumulación se encuentra distribuida entre los individuos que forman la sociedad.

El capital humano es una condición necesaria pero no suficiente para apalancar el desarrollo de los pueblos. En tanto se incrementa el retorno al capital humano, debido a la complementariedad de habilidades de manejo de capital, el capital humano llega a ser el motor más importante del crecimiento y la igualdad, en la presencia de restricciones crediticias, estimula las inversiones en capital humano y promueve el crecimiento económico. El capital humano asignado a las actividades financieras mejorará el crecimiento económico a largo plazo, pero los reducirá en el corto plazo.

Las relaciones causales entre las actividades financieras y el crecimiento económico, de acuerdo a Graff y Karmann (2001), se agrupa en cuatro categorías: cuando no tienen ninguna relación de causalidad, cuando la actividad financiera se toma como el resultado de la actividad económica, cuando la actividad financiera es vista como una actividad económica y cuando es vista como un impedimento para la actividad económica real. En los estadios posteriores de desarrollo, cuando el retorno del capital humano se incrementa debido a la complementariedad de las habilidades del capital, el capital humano llega a ser el motor del crecimiento (Galor y Moav, 2000).

Los resultados de la investigación de Graff y Karman (2001) indican que durante los ochentas, las finanzas obviamente importaron al crecimiento. Sin embargo, mientras la causalidad corrió principalmente del desarrollo financiero al desarrollo real con poca evidencia para una causalidad mutua y ninguna evidencia por una causalidad reversible del desarrollo real al desarrollo reversible. Los proponentes del desarrollo financiero están en lo correcto cuando restringen sus conclusiones a las economías desarrolladas del mercado. Una política de desarrollo financiero debe estimular solamente después de una evaluación cuidadosa con un resultado que lo hace ver como eso, en cuanto se relaciona con un crecimiento financiero.

El capital humano visto como promotor de la capacidad para obtener mejores niveles de "empleabilidad" y "emprendedoriedad", representa un activo del crecimiento económico y desarrollo social. Así, el desarrollo social se apuntala en los programas de desarrollo humano que promueven la formación de capital humano y social y el incremento de oportunidades de acceso a los bienes y recursos sociales, para elevar los niveles de calidad de vida. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence). El capital humano destinado a las actividades financieras aumentará los niveles de crecimiento económico a largo plazo, mientras que tenderá a reducirlos a corto plazo. El capital humano es una variable de desempeño económico cuyo impacto en el crecimiento es difícil de determinar, lo cual aumenta las dificultades para incorporarlo al diseño de las políticas públicas.

Las investigaciones sobre capital social documentan la existencia de una correlación entre el capital social y el crecimiento económico, pero no necesariamente la relación existe entre el capital humano y el desarrollo económico. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. El paradigma moderno es dominado por dos enfoques: Mercados imperfectos de capital y el acercamiento de economía política. Bajo el enfoque de mercados imperfectos de capital, la igualdad en economías desarrolladas estimulan las inversiones de capital humano tales como en proyectos individuales específicos y estimula el crecimiento económico, mientras que el enfoque de economía política, la igualdad disminuye la tendencia a la inestabilidad socio-política o a una redistribución distorsionada y por lo tanto, estimula las inversiones y el crecimiento económico Galor y Moav, 2000).

El fortalecimiento de las capacidades humanas y el aumento de capital humano son condiciones necesarias pero no suficientes para le desarrollo (Yañez, 2001). En este sentido, el capital social está determinado por el grado de confianza que existe entre las instituciones, organizaciones, gente, etc., y el capital humano considera las condiciones de educación, salud, etc.

Este concepto que es aplicable a un amplio conjunto de fenómenos sociales, incluyendo desde las relaciones dentro y fuera de las familias, relaciones dentro y fuera de las empresas, las interacciones entre la organización y el mercado y la vida pública en las sociedades contemporáneas. Pero a decir de Fukuyama (1999b), el capitalismo está desgastando el capital social de los países y por ende, la construcción social. Este desgaste del capital social tiene como origen el ethos mismo del capitalismo centrado en la especulación financiera.

Las inversiones en capital humano tienen una rentabilidad esperada en un período posterior, en forma de retribuciones económicas. El capital humano destinado a actividades financieras producirá altas tasas de crecimiento a largo plazo, pero las reducirá en el corto. Las inversiones de capital humano localizado en los individuos, está sujeto a retornos individuales disminuyentes, los retornos agregados a las inversiones en capital humano se maximizan si los retornos marginales son iguales entre los individuos.

Así, el capital social individual emerge conceptualizado como las características sociales de las personas que incluyen ciertas habilidades intrínsecas como su extroversión y carisma, y los resultados de sus inversiones de capital social, como por ejemplo el tamaño grande de su "Rolodex" que le permiten la obtención de ganancias mercantiles y no mercantiles de las interacciones con otros. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la "trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos".

El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí. Así, el capital social individual es visto como el componente social del capital humano. (Glaeser, Laibson and Sacerdote, 2000:4). Los miembros de la generación orientada a la comunidad formados por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial están siendo reemplazados por nuevas generaciones formadas por sus propios hijos y nietos, más centradas en el individualismo.

Por capital humano debemos entender el conocimiento y las habilidades de la fuerza laboral de una organización o bien en un concepto más amplio, de la ciudadanía. La disposición de destrezas en áreas de la telemática expande las posibilidades y las oportunidades para ejercitar la ciudadanía y brindan mayores opciones de desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano es un concepto intrincado al concepto de buen gobierno. El desarrollo humano debe apuntalar el desarrollo social. Los sistemas democráticos se encuentran limitados para desplegar a plenitud sus programas de desarrollo humano, debido principalmente a la crisis de gobernabilidad y a la inestabilidad de sus instituciones por la que atraviesan. El desarrollo de estas capacidades y destrezas constituyen un activo que incrementa significativamente las oportunidades de movilidad y desarrollo de una sociedad.

La sociedad local y regional es un actor que puede impulsar el desarrollo equilibrado y equitativo. Las sociedades más humanas o más avanzadas, son aquéllas en que sus ciudadanos tienen oportunidades para adquirir capacidades y competencias que posibiliten ser más que tener más. En forma similar al capital físico y humano, el capital social es un recurso productivo facilitador de acciones que varían desde los logros ocupacionales de los individuos, hasta las operaciones de negocios de una empresa. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence). Es desde este último enfoque donde se encuentra el cruzamiento entre los sistemas de negocios y la formación del capital social.

El término capital social es conceptualizado como un conjunto de recursos sociales involucrados en las relaciones sociales (Burt, 1992; Loury, 1977) y en las normas y valores

asociados (Coleman, 1990; Portes & Sensenbrenner, 1993; Putnam, 1995). Putnam (1993: 167) define como capital social aquellos "rasgos de la organización social como confianza, normas y redes que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordenadas" que resalta la existencia de una comunidad cívica, la cual resulta de un "proceso histórico, cuyas tradiciones asociativas son preservadas mediante el capital social" y que como forma de organización "permite evitar los dilemas de la acción colectiva mediante lazos de confianza social" (Lechner, 2000). Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es. De acuerdo a Putnam (1993: 183), "la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político".

Putnam (1995: 67) define capital social como "redes, normas y confianza social que facilitan la coordinación y cooperación en beneficio mutuo". Putnam define el capital social como redes, y lo considera como un atributo a nivel en el ámbito de comunidad. El capital social es la suma de las densas y complejas redes de conexiones, valores, normas y relaciones recíprocas en una comunidad. Glaeser, Laibson y Sacerdote (2000) definen el capital social como una característica que incluyen las habilidades sociales, carisma y el tamaño de su Rolodex..

El capital social es el "stock" que históricamente se ha acumulado y que determinan las opciones de desarrollo. Sin embargo, las relaciones de confianza y compromiso cívico representan un flujo más que un stock. Así, un elevado desarrollo económico puede coexistir con un debilitamiento de las relaciones de confianza y cooperación cívica (Grootaert, 1998). Para Putnam (1993b), "El capital social encarnado en normas y redes de compromiso cívico parece ser un prerequisito para el desarrollo económico así como para un gobierno efectivo". El capital social se expresa en la relación existente entre relaciones de confianza y cooperación cívica.

Después de los trabajos de Coleman (1990), el capital social es visto como un atributo de las comunidades. El orden se crea y se mantiene mediante comportamientos de cooperación que tienen referencias continuas para respetar la tradición a cambio de no encontrar la censura o desaprobación de la comunidad. El capital social comprende muchos aspectos del contexto social, tales como las conexiones sociales, las relaciones de confianza y los sistemas de valores que facilitan las acciones individuales localizadas en ese contexto. Así, un elevado desarrollo económico puede coexistir con un debilitamiento de las relaciones de confianza y cooperación cívica (Grootaert, 1998). El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la "trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos". El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí. Las actitudes que generan confianza entre los diferentes actores, tiene una influencia importante en el rational choice o elección racional.

Los valores que mantiene una sociedad constituyen un tipo de capital social que beneficia a la sociedad misma como un todo. Las inversiones en capital social mediante la creación de fondos para el fortalecimiento de los valores éticos permiten la formación de una nueva sociedad. Una característica del capital social que lo diferencia de otras formas de capital es la complementariedad interpersonal en inversiones. Los patrones de acumulación del capital social son consistentes con el modelo de inversiones de capital.

De acuerdo con Glaeser, Laibson and Sacerdote (2000:27) cuando se hacen inversiones en capital social en una comunidad que luego abandonan los individuos, dicho capital social se deprecia como resultado de la movilización. Inversamente, si hay altos retornos de capital social, entonces pueden hacerse mayores inversiones de capital social, cuyo costo puede estar determinado por la proximidad espacial y el costo de oportunidad del tiempo. Las personas que pertenecen a grupos con mayor capital social tienden a invertir más en capital social para sí mismos.

El déficit ético en la cultura administrativa está ligado a los procesos de desarrollo nacional y los efectos que tienen en los aparatos burocráticos, lo que se acentúa más por los efectos mercantiles de una ideología predominantemente neoliberal. La cultura administrativa que domina el medio ambiente de las corporaciones, creció en tamaño y ha adoptado la forma de organización basada en estructuras multidivisionales a efecto de lograr la ventaja competitiva. En realidad, la estructura industrial determina el desempeño de las empresas dentro de la industria.

A pesar de que la administración de finales del siglo XX obscurece la del siglo XXI, las ciencias administrativas enfrentan la tarea de forjar una nueva administración en las sociedades que se encuentran en crisis de dirección, lo cual debilita las percepciones colectivas, exacerba el individualismo y la introversión y erosiona los fundamentos morales de la vida comunitaria. El estudio de Nahapiet and Goshal (1997) identificó los diferentes aspectos del contexto social en tres dimensiones del capital social, el estructural, el relacional y el cognitivo, en aspectos que incluyen las formas de la interacción social, el nivel de la confianza como un atributo de las relaciones y en los códigos y paradigmas compartidos.El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí.

Por su parte, los elementos distintivos de las cadenas globales de mercancías enfatizan los mecanismos organizacionales de las múltiples redes económicas, involucran formas de organización económica a través de las nacionales y sus estructuras de gobierno coordinan y controlan actividades geográficamente dispersadas y su preocupación por las variaciones intra e intersectoriales. Las cadenas globales de mercancías se conceptualizan como redes de exportación global que resultan en especialización geográfica y en el aprovisionamiento internacional global ligado fuertemente. Las cadenas globales de mercancías entienden la producción como un conjunto dinámico de procesos entre las empresas más que como una propiedad estática de las naciones, más típica de los sistemas mundiales y de formas similares de la teoría del desarrollo (Appelbaum and Henderson, 1995)

Desde la perspectiva de la teoría organizacional, las cadenas globales de mercancías extienden la noción de los campos organizacionales para abarcar las redes estratégicas de los actores económicos, innovadores y diseñadores, proveedores de insumos y manufactureros de productos terminados, comerciantes y financieros, mayoristas y minoristas, que proveen un

conjunto particular de bienes en la economía global. Estas redes se apoyan en una creciente innovación de la tecnología informática y facilitan la organización informal y sus efectos que ocurren espontáneamente. La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales

La organización de estas redes puede ser centralizada o descentralizada, y tienen un amplio o angosto enfoque geográfico. El concepto de una posición central de una empresa en el contexto industrial, sugiere que para maximizar su poder y control, las organizaciones deben buscar múltiples socios y conectarse todos formando una red industrial en la que cada socio persigue un poder mayor o al menos igual. Tener muchos socios incrementa el poder en el corto plazo, pero decrece la flexibilidad estratégica a largo plazo.

Estas cadenas están modeladas por una variedad de fuerzas institucionales, incluyendo políticas estatales, variaciones nacionales en sistemas laborales, estructuras industriales domésticas, y así otras. Lo que es esencial es que las fronteras tradicionales entre las naciones, empresas e industrias son reconfiguradas y tanto la teoría de la organización como la teoría del desarrollo necesitan encontrar formas de abarcar todos los actores relevantes dentro de un solo marco de referencia. (Gereffi, 1996)

La teoría de la organización realiza importantes contribuciones a la teoría de la empresa con fundamento en la economía de los costos de transacción que incluye la descripción de los agentes y actores, los procesos de transformación intertemporal, las elecciones de la unidad de análisis y los diferentes arreglos de las formas de gobernabilidad. La teoría de la empresa fundamenta las formas de gobernabilidad no como procesos terminados sino como procesos en constante transformación.

La teoría de la organización y la economía se juntaron para reducir las tensiones y conflictos que había entre ellas. La teoría de la organización proporciona los fundamentos para la formación de las estructuras de gobernabilidad cuyas diferencias tienen implicaciones en las políticas públicas. La teoría de la organización incorporó en la economía algunas contribuciones importantes tratando de empujar una lógica racional. Las fronteras entre los Estados y las empresas resultan ser más porosas que entre las existentes entre los Estados-nación, a pesar de que comparten o entran en conflicto por intereses.

La teoría de la empresa como una forma de gobernabilidad (Williamson, 2000), responde al seguimiento de los desarrollos de la teoría de la organización en aspectos, tales como la racionalidad limitada en que trabaja bajo el establecimiento de contratos incompletos, en los cuales surgen riesgos y peligros entre las partes bilaterales dependientes, tales como en la especificidad de activos, cuando son empujados fuera de los contratos establecidos por los disturbios causados por la incertidumbre, en donde las partes involucradas busca ejercitar su oportunismo. Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno.

El concepto de contrato legal establece las regulaciones entre las relaciones y transacciones que realizan los individuos y los grupos dentro de las organizaciones. El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Este concepto de contrato

como marco de referencia para regular las transacciones tiene una perspectiva de continuidad a largo plazo y acepta su naturaleza imperfecta.

Este tipo de transacciones invita a las partes con visión a largo plazo a relevar el conflicto y a promover adaptación cooperativa mediante el involucramiento de las transacciones, ya sea en la credibilidad de los contratos o en las estructuras de gobernabilidad, en donde estas dos alternativas de gobernabilidad difieren en la discreción de sus estructuras, de lo cual, las cargas comparativas de la burocracia y los accesos diferenciales al fiat son dos.

Una comparación de los elementos clave de estos dos acercamientos para el análisis de las formas de organización económica, tomando en consideración que para el análisis cualitativo institucional, las alternativas institucionales que se comparan son discretas, tal como se muestra a continuación:

	Sistemas de negocios	Cadenas globales de Mercancías
Fenómenos que se explican	Formas de coordinación económica en diferentes contextos institucionales.	Coordinación internacional de producción y actividades de distribución ampliamente dispersada.
Dimensiones de variabilidad	Características de actores económicos, mercados, sistemas de trabajo y sus interconexiones	Centralización de sistemas de coordinación y agentes dominantes.
Factores explicativos	Sistemas cultural, político, financiero y laboral.	Intensidad del capital, costos de transacción y trabajo.
Laguna mayor	Variaciones intersectoriales, cambios a corto y mediano plazo, coordinación y control a través de la nación.	Mecanismos que explican las variaciones en cadenas de mercancía, su establecimiento, estabilización y cambio, roles de las instituciones en impulsando o inhibiendo cadenas globales de mercancía..
Afinidades intelectuales	Teorías institucionalistas de organización, teorías evolucionistas de la firma, historia de economía comparativa y de negocios.	Teoría de sistemas mundiales, sociología del desarrollo.

Comparación de los sistemas de negocios y las cadenas globales de mercancías, basado en Whitley (1996)

Se han identificado diferentes formas de capitalismo las cuales se interrelacionan con instituciones sociales, políticas y culturales, para regular los flujos de organización y de acceso a los recursos, como por ejemplo, las instituciones que gobiernan el acceso al capital y al trabajo. Las instituciones de la sociedad civil tienen muy diversas formas organizativas, desde las formas fundamentales que representan intereses económicos y sociales, hasta aquellas formas que tienen como objeto el desarrollo del conocimiento, la información y la ideología. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. Estos intereses han sido redefinidos de lo nacional a lo regional, local y global. El Consenso de Washington orienta las agendas y los desafíos de las instituciones de la sociedad civil a limitar las acciones del Estado.

Las agendas de las instituciones globalizadas de la sociedad civil son contestatarias frente a las agendas de las instituciones multilaterales que promueven los procesos de globalización económica. Los principios de selección permanente y competencia a que están sujetos el capital y el trabajo en el sistema capitalista globalizador, se mueven siempre a favor del capital al que le proporciona una mayor movilidad que al trabajo. Existe una gran discusión con respecto al papel significativo que tiene el valor del trabajo frente al capital.

En este mismo sentido, cualquier sociedad que pretenda ser económicamente moderna, sostiene Fukuyama, no tiene más alternativa que dotarse de instituciones políticas democráticas y de estar integrada en una economía de mercado (Llorente, 1999) La globalización, reconoce Fukuyama, obliga a las sociedades a adoptar instituciones económicas y políticas similares. Las sociedades están capacitadas para conducirse a sí mismas, para readecuarse y restablecer el equilibrio perdido. Por lo tanto, concluye en la idea de que la democracia y la globalización, por sí mismas, pueden producir una sociedad realmente satisfactoria. Conclusión en la que no estamos del todo de acuerdo.

Como resultado de estas conectividades interinstitucionales, no puede existir una sola forma de capitalismo eficiente en particular a través de los procesos competitivos universales. El análisis del desarrollo de los mercados dentro del capitalismo mundial ha demostrado las estrechas interdependencias existentes con el desarrollo y la organización de las instituciones del estado y la sociedad a pesar de algunas variaciones históricas. Withley (1992b) encontró que estas formas diferentes de organizar las actividades económicas han sido caracterizadas como sistemas de negocios los cuales varían en un número de dimensiones en conexión con las diferencias institucionales.

Los sistemas de negocios, de acuerdo con Withley (1996), son formas particulares de organización económica que se han establecido y reproducido en ciertos contextos institucionales a escala local, regional, nacional e internacional. Estas son formas distintivas de coordinar y controlar las actividades económicas las cuales se desarrollaron en forma interdependiente con instituciones clave que constituyen los tipos particulares de sistemas políticos, financieros, de trabajo y culturales. Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos.

Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente ala reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la

posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional. Entre más integrada y mutuamente reforzados son estos sistemas institucionales sobre un territorio particular o población, más cohesivo y distintivo será su sistema de negocios.

Para Fukuyama por ejemplo, un componente cultural al que denomina las redes de confianza, las cuales varían en las diferentes partes del mundo, constituye el "capital social" fundamental para el funcionamiento adecuado de las instituciones económicas y políticas sociedades democráticas modernas. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. La gobernabilidad efectiva de un sistema económico, social y político, facilita en desarrollo y formación de capital social y humano. Sin embrago, resulta altamente cuestionable que para la formación de capital social se promueva las diferentes formas asociaciativas basadas en la confianza, lo cual entra en contradicción con el modelo de desarrollo del capitalismo globalizador que fomenta el individualismo y fragmenta lo social.

Entre más fuertes sean las ataduras de las conexiones de las redes mayor es el potencial para la cooperación cívica y la confianza que puede mejorar las condiciones de vida de todos y cada uno de los ciudadanos, o bien para mejorar las condiciones del medio ambiente dela mayoría de la población mundial. La inversión social, y más específicamente, la inversión civil, fortalece programas que destinan fondos al fortalecimiento de valores éticos. Por lo tanto, la caída de los fundamentos éticos y los estándares profesionales en los países en desarrollo reflejan lo que está pasando en estas sociedades en general. Alentar las transformaciones culturales y de los valores de una sociedad, facilita su estructuración pluralista y fortalece la tolerancia a los nuevos estilos de vida y a la innovación de nuevas ideas. Las transformaciones económicas y políticas también implican transformaciones de los valores sociales, culturales y sobretodo de valores morales.

Donde las instituciones nacionales son poderosas y altamente estandarizadas dentro de un país y diferente entre países, las características distintivas de los mercados y las firmas se institucionalizan sobre bases sociales. Las variaciones en las formas de organización económica se encuentran en cualquier parte donde existan diferencias fuertes en instituciones clave, particularmente aquellas que gobiernan el acceso a los recursos del capital y el trabajo. Las formas de organización económica están relacionadas con el nivel de sustentabilidad del desarrollo. Es en este sentido que la modernización puede lograr la sustentabilidad social si se acerca a los fundamentos culturales de la sociedad.

La discusión por la búsqueda de una mayor significación al valor del trabajo frente al capital no concluye todavía Las formas de organización económica en las economías de mercado consisten en distintas formas de llevar a cabo y coordinar las actividades económicas dentro y entre las diferentes unidades de acción económica. Si el desarrollo sustentable está íntimamente relacionado con estas formas de organización económica, por lo

tanto, las actividades empresariales desempeñan un papel importante en este desarrollo, porque crean las bases de las actividades económicas.

De acuerdo a Tarapuez Chamorro (2001), las condiciones regionales para la promoción de la actividad empresarial requieren del fomento de la integración o diversificación de la estructura económica regional y la coordinación interinstitucional de planes, programas y proyectos de impacto regional. La estructura económica regional, las variables macroeconómicas nacionales y los procesos de globalización económica influyen en las transformaciones de la economía local y regional.

Una perspectiva socioeconómica y de conducta económica para la obtención de utilidades, denominada como acción social por Zafirovski (1999) es planteada como una alternativa al modelo económico puro de la economía neoclásica, con un mayor énfasis en el establecimiento social dentro del cual emerge y se desarrolla. Finanzas es la rama de la economía en donde se aplica más la conducta económica. Dentro de un marco de referencia socioeconómico Weberiano, la obtención de las utilidades como una acción social no sólo es una acción orientada racionalmente contando con cálculos de costo-beneficio o racionalidad formal, sino también acción racional del valor que consigue fines no económicos o racionalidad sustantiva. Esta racionalidad sustantiva es el fundamento de la creación de consensos que se orientan a lograr el interés público. Los elementos de este acercamiento a la obtención de utilidades y a la conducta económica contra el acercamiento puramente económico se muestran a continuación.

Acercamiento de economía pura y acercamiento socioeconómico a la obtención de utilidades y la conducta económica

Tema	Acercamiento de economía pura	Acercamiento socio-económico. Beneficios de Acción social.
Economía	Sistema independiente, separado de la sociedad.	Parte del sistema social, involucrado en la sociedad.
Sociedad	Extensión/ reflexión de la economía.	Autónoma, inclusiva y primeramente relacionada con la economía.
Actor	Homo economicus.	Actor social complejo.
Acción	Racionalmente dirigido.	Racionalmente dirigido así como racional valoral, afectivo, y tradicional.
Motivación	Auto interesado	autointeresado, así como prestigio social, poder, justicia, moralidad, motivación religiosa y otros. Motivos no económicos.
Principio metodológico	Individualismo.	Holismo.
Transición microeconómica	Agregación individual	Estructuración social.
Estructuras sociales	Invenciones de resolución de problemas para la obtención de utilidades.	Pre existencia de fenómenos sui generis.
Enfoque causal	Factores económicos de la	Condiciones sociales de la

	vida social.	vida económica.
Racionalidad	Únicamente utilitarios: maximización de las utilidades. Racionalidad formal -procedimental basada en el cálculo y consistencia.	Persecución de medios utilitaristas y no utilitaristas. También la persecución de otros fines diferentes a la utilidad. La optimización no es una posibilidad real de racionalidad sustantiva. Basado en valores sociales y criterios.
Valores y preferencias	Dados, estables, homogéneos	Variables, socialmente endógenos.
Fronteras a la acción individual	Psicológica (cognitiva) e informacional.	Estructural social (Institucional)
Tipos de actores	Individuos (micro) y organizaciones (meso)	Individuos (micro), organizaciones (meso), y sistemas sociales (macro)
Cultura	Apéndice de obtención de utilidades.	Autónomo del factor de obtención de utilidades.
Historia	Ahistórico. Persigue las utilidades sin considerar el tiempo	La obtención de utilidades como un fenómeno histórico.
Mercado	Institución económica que soluciona la maximización de utilidades y otros problemas de eficiencia.	Estructuras sociales: conjunto de relaciones que enfatizan la acción de búsqueda de utilidades.
Paradigmas	Economía pura: la sociedad como la economía (sociedad de mercado)	Economía como una sociedad económica.
Estado y economía	Laissez-faire, Estado débil.	Realismo institucional (gubernamental)
Psicología	Hedonismo simplista: Utilidades-pérdida, placer-pena.	Psicología compleja: una variedad de fuerzas psicológicas no reducibles a hedonismo.
Fuente: Basado en Zafirovski (1999: Página 77)		

El rol emergente de la ciudadanía y de la sociedad civil.

Los procesos de globalización han tenido efectos negativos en el tejido social más profundo como sucede con la familia y el cambio de los valores comunitarios. Esta reconstrucción de valores para la vida comunitaria de la sociedad del mañana no surge de la nada. Puede ocurrir que en algunas sociedades con raíces profundas en culturas específicas y con recursos humanos que no pueden ser reinvertidos cuando pueden ser reemplazados. En el modelo económico neoliberal que da soporte a la globalización, la fuerza centrífuga es el "espacio privado" que tiene más preponderancia por sobre las actividades del "espacio

público", debilitando la solidaridad, la calidad de la subsidiariedad entre los grupos o entre las naciones.

Se hace necesario también globalizar la solidaridad. El principio de subsidiariedad del Estado aprovecha las capacidades de la sociedad civil para articular los procesos de provisión de bienes y servicios públicos. La sociedad local y regional es uno de los principales actores sociales que impulsan y promueven el desarrollo equilibrado y equitativo. Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

Al apropiarse de las esferas social y pública, el neoliberalismo globalizador destruye lo colectivo y la cohesión social entre los miembros de una sociedad que se desintegra. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil. La lógica del sistema hegemónico es inversa al protagonismo de lo colectivo, dando mayor énfasis a las políticas y estrategias individuales.

Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas. Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. Para reparar la cohesión social, es imperativo el diseño de una política social que reduzca las desigualdades sociales y que además se promuevan comportamientos y valores colectivos, que apoyen la colaboración en la esfera social y no los de individualismo egoísta.

Así, el neoliberalismo aparece como una descripción falsa de la forma en que las sociedades funcionan realmente. Se trata de deteriorar el espacio público para privilegiar el espacio privado. Las redes de solidaridad de las sociedades se rompen por la fuerte orientación de los intereses privados de las grandes empresas que para mantenerse competitivas en el mercado, requieren la sobre explotación de los factores de la producción mediante una relación óptima y con el apoyo de instrumentos avanzados de organización y gestión.

Para revertir esta tendencia, es necesario disminuir la influencia del mercado en el desarrollo y asignar un papel protagónico a la "ciudadanía extensiva" y a la formación de una nueva sociedad. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas.

La sociedad civil y el Estado, como esferas interdependientes están llamadas a involucrarse más en la construcción de una ciudadanía más consciente de los cambios requeridos. En vez de concebir el desarrollo en una exclusiva bipolaridad entre el mercado y el Estado, se tienen que pensar en las potencialidades y posibilidades de un desarrollo

humano sustentable basado en un círculo virtuoso de Estado-sociedad civil-mercado. La inestabilidad de las instituciones y la crisis de gobernabilidad por la que atraviesan los sistemas democráticos, limitan los alcances de los programas de desarrollo humano. Los conceptos de desarrollo humano sustentable y de buen gobierno son conceptos intrincados.

Las preocupaciones sobre la naturaleza del desarrollo económico y el correspondiente desarrollo humano, conduce a consideraciones de las políticas y prácticas del Estado-sociedad civil-mercado. Para estos fines, debe considerarse al desarrollo económico como el medio y al desarrollo humano como el fin. Existe una fuerte correlación entre desarrollo humano y desarrollo económico y social. Normalmente se persigue el crecimiento económico como si fuera el fin y no el medio, ya que la noción de crecimiento económico implica la medición cuantitativa del producto interno bruto.

Todo proyecto de desarrollo debe colocar al ser humano y sus relaciones con la comunidad a la que pertenece como el centro sobre el cual deben gravitar todas las potencialidades, capacidades y libertades del ser humano. De acuerdo a Putnam (1993: 183), "la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político". No obstante, cuando una comunidad limita a los individuos que la forman y se restringe a sí misma, dentro de las estructuras del sistema a que pertenece, se constituye prácticamente en un apartheid.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) pretende medir el desarrollo en términos diferentes a las mediciones basadas en el ingreso per cápita del enfoque de desarrollo como crecimiento económico. El crecimiento económico implica la noción de medición cuantitativa en términos del producto interno bruto per cápita y el promedio real de consumo. El IDH, también muestra deficiencias al no poder establecer un cuerpo teórico que permita su operacionalización para facilitar la medición y por lo mismo no mide los niveles de desigualdades.

Ahora el Estado se ha satelizado en torno a la sociedad civil, la cual trata de eliminar las barreras de acceso que separan la esfera pública de la privada y las invade para legitimar y transparentar acciones políticas con fundamento en principios de legalidad y moralidad. Así se transfieren las responsabilidades de carácter público del Estado a la sociedad civil. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. Es la sociedad local y regional uno de los principales actores sociales en la promoción del desarrollo. Esfera pública es sinónima de res publica que comprende el patrimonio económico público, cultural y medioambiental.

Los políticos pueden ser los intermediarios entre las organizaciones y sus comunidades en la sociedad civil, fortaleciendo la legitimidad en las organizaciones en retorno para asegurar que las comunidades tengan influencia en las políticas de las instituciones. Esto hace necesario la integración y articulación de los diferentes grupos sociales a los procesos de desarrollo, los cuales demandan políticas sociales y programas que permiten a estos grupos resolver el carácter exclusivo de la globalización económica. Sólo a través de la participación civil en la agenda del desarrollo, es posible promover principios de justicia y equidad.

El modelo desarrollista y de modernización estaba centrado en el Estado-nacional y en la defensa de su soberanía e independencia, hasta mediados del siglo pasado. Las elites

nacionales proporcionaron el soporte principal de la legitimidad del Estado nacional para acrecentar y mantener su soberanía. No obstante, la tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966).

La legitimidad del Estado se desgarra entre el desvanecimiento y dispersión de las fuerzas internas y entre el fuerte impacto de las fuerzas externas que la aniquilan. La modernización neoliberal separa a la subjetividad, la considera un proceso autónomo e inconexo que genera tensiones cuando de acuerdo con Lechner (2000), ambos fenómenos son complementarios y es necesario relacionarlos, ya sea en forma espontánea conforme a la apuesta del liberalismo decimonónico o establecida por el Estado conforme al modelo socialdemócrata. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000).

El desmantelamiento del modelo de "modernización desarrollista" para privilegiar un nuevo modelo de "modernización globalizadora" ha presentado rasgos estructurales ampliamente debatidos. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad. La modernización neoliberal separa a la subjetividad, la considera un proceso autónomo e inconexo que genera tensiones cuando de acuerdo con Lechner (2000), ambos fenómenos son complementarios y es necesario relacionarlos, ya sea en forma espontánea conforme a la apuesta del liberalismo decimonónico o establecida por el Estado conforme al modelo socialdemócrata.

La modernización era vista como un proceso de diferenciación estructural e integración funcional donde tenían lugar las categorías de clasificación del mundo, pero para Giddens (1984, 1990), la teoría de la modernización es vista como un proceso de distanciamiento espacio temporal, en el cual el tiempo y el espacio se desarraigan de un espacio y un tiempo concretos. La modernización neoliberal separa a la subjetividad, la considera un proceso autónomo e inconexo que genera tensiones cuando de acuerdo con Lechner (2000), ambos fenómenos son complementarios y es necesario relacionarlos, ya sea en forma espontánea conforme a la apuesta del liberalismo decimonónico o establecida por el Estado conforme al modelo socialdemócrata.

Los procesos de modernización generan aprendizajes rápidos y traen consigo un incremento en las demandas de bienes y servicios e inflación de las expectativas para satisfacer las necesidades y deseos, lo cual no siempre desarrolla la infraestructura y capacidad para lograrlo.

Las elites financieras nacionales son empujadas por los nuevos mercados financieros internacionales y desquician su relación con el Estado-nacional, al que socavan su soberanía, para entregarse a los intereses y mandatos de las grandes corporaciones e instituciones transnacionales. Por lo tanto, las elites latinoamericanas de los negocios han abierto la puerta a las economías de las corporaciones transnacionales que están interesadas en mano de obra barata, recursos naturales, capital financiero y mercados de consumidores en los países

latinoamericanos. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado. La nueva clase transnacional capitalista que emerge entre las elites capitalistas nacionales y que son la clase dominante en sus respectivos países, comparten el mismo proyecto neoliberal, intereses y privilegios de los poderes hegemónicos para implantar una política económica que les favorece.

Los grandes intereses de las empresas transnacionales atentan contra la acción reguladora del Estado-nación porque es el principal obstáculo para lograr la mayor tasa de utilidades sobre sus inversiones mediante la consecución de materias primas a bajos costos y en abundancia, penetración y ampliación de la cobertura de nuevos mercados, reducción de los costos de transacción de las operaciones de comercialización, etc.

Los procesos de modernización del Estado-nación no implicaron la modernización de lo público que ha dado lugar a burocracias que se han apropiado del Estado hasta el extremo de privatizarlo. La estrategia de modernización por la globalización, cede la soberanía e independencia del Estado a favor de organismos supranacionales, lo que significa la pérdida de la hegemonía del Estado nacional.

De acuerdo a Camou (1992) son: "la creciente transnacionalización de flujos de bienes, servicios y factores de producción (en la que se destaca el papel de la información); la emergencia de la economía del saber, esto es un modo de producción que hace del dominio del conocimiento un factor productivo estratégico, y finalmente, lo que parece ser la tendencia a la separación del patrón de crecimiento económico respecto al patrón del pleno empleo, con las todavía inciertas consecuencias sobre la información de una nueva estructura social". El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. No obstante, la adaptación del conocimiento del desarrollo a las condiciones y cultura locales presenta serios obstáculos tanto teórico-metodológicos como prácticos.

La corriente “neoliberal” del desarrollo pone un énfasis mayor en la efectividad de la estrategia del racionalismo económico de una “ciudadanía activa”, que más que constituirse en un foro para la participación política, es reforzada por mecanismos que apoyan la elección del consumidor y la libertad del mercado. En general, los ciudadanos participan poco o son indiferentes en los asuntos políticos, no se identifican con el juego de la política ni con políticos o partidos políticos a los que desdeñan y en ocasiones desprecian. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política

Esta visión de ciudadanía entra en crisis y arrastra la razón de igualdad. El ciudadano como el titular de derechos humanos o derechos de hombre que comprenden todos los derechos, los políticos, económicos, sociales, republicanos patrimoniales, etc., es reducido a su mínima expresión como cliente o usuario integrado más a un mercado que a una sociedad participativa. Estos mecanismos convierten precisamente al lugar del mercado en lo que determine el propio interés de los consumidores.

En palabras de Petrella (1996), "Antes que la sociedad cuenta el mercado... este no tiene más historia que la de corta duración. La vida de un producto y de un servicio es cada vez más breve, los mercados se vuelven volátiles, efímeros y su carácter no durable aumenta la incertidumbre de los propios mercados...". El carácter reversible que tienen los derechos sociales se debe a que han sido otorgados en forma paternalista, más que a ser derechos conquistados. El otorgamiento de los derechos la realiza una clase económica y política que decide o es presionada para hacerlo, mientras que la conquista de los derechos se logra por una amplia clase media que los reclama.

La noción de democracia implica los conceptos de ciudadanía política, ciudadanía civil y ciudadanía social. La ciudadanía civil involucra el goce de garantías fundamentales protegidas por el Estado. Existe teóricamente una cuidadosa separación de la ciudadanía política y la ciudadanía social de la productividad económica, en donde la identidad conferida sobre el ciudadano no es una de subjetividad individualizada sino una contractual, de titularidad cuidadosamente itematizada. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación "puramente expresiva y gratuita" como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000).

La transformación del capital social tiene relación con los cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los individuos. Lechner (2000) sostiene que las políticas de desarrollo tienen que manejar complementariamente la modernización y la subjetividad. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación "puramente expresiva y gratuita" como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000).La gran diversidad de intereses económicos, políticos y sociales de los individuos, los impulsan a lograr establecer sus propios espacios para la expresión de su identidad ya sea en los espacios nacionales o en los espacios transnacionales. Los intereses económicos se redefinen en los diferentes espacios locales, regionales, nacionales e internacionales.

Bajo esta concepción, la ciudadanía entra en crisis y arrastra consigo el principio de razón igualitaria. Esta separación de las concepciones de ciudadanía identifica al ciudadano como cliente y lo despojan de sus derechos de ciudadano para fiscalizar las funciones públicas, para exigir su participación, el cumplimiento y la transparencia de las políticas y programas públicos extender la ciudadanía social a los excluidos socialmente es entrar en un proceso de democratización de la globalización. Así, los avances en materia de democratización implican necesariamente una transformación socialista. La existencia de la miseria, la exclusión y la marginación dan cuenta del fracaso que ha tenido la ciudadanía social. El régimen democrático que protege la ciudadanía política subsiste con un Estado autoritario que garantiza poca ciudadanía cívica y una sociedad inequitativa que es altamente deficitaria de una ciudadanía social.

El ciudadano existe a través de un acceso asegurado al mercado bajo la figura de consumidor, puesto como un punto para determinar la equidad, pero en los términos de una identidad que es acertada a través de clamores específicamente enumerados. Los ciudadanos tienen sus propios intereses y procuran los espacios convenientes para expresarlos, ya sean en el ámbito nacional o en el transnacional. Algunos economistas han tomado seriamente al mercado como una esfera pública, es decir como un espacio público abierto de ciudadanía contractual, en donde los individuos actúan más como agentes que se comprometen con el

bien común bajo condición de que las políticas de asignación trabajen hacia grandes niveles de igualdad económica, más que de crear una más difusa igualdad social, entre todos los participantes.

La incorporación de mayores segmentos de la sociedad al mercado implican que estos segmentos eleven sus niveles de eficiencia y productividad para volverse más competitivos conforme a las exigencias del modelo. La sociedad local y regional es uno de los principales actores sociales promotores de un desarrollo que puede ser más equilibrado y equitativo. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. El gran desafío que tienen las sociedades locales en general y sociedades periféricas en particular es desarrollar las capacidades para alcanzar los niveles de ventaja competitiva requeridos para insertarse en las redes de los procesos de globalización económica y recibir los beneficios. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales.

Ma (2000) hace un análisis de las tres teorías de la ventaja competitiva en el campo de estratégico desde el punto de vista y tratamiento de la empresa, los conceptos teóricos centrales y su tarea de estrategia, los cuales le sirven para adelantar un modelo integrador. Desde la perspectiva de la orientación a los recursos analiza los acercamientos al compromiso, la economía Schumpeterian, la economía de los costos de transacción y la perspectiva de la eficiencia, la perspectiva ecológica, la hipercompetencia y la teoría de juegos y co-opetición. De esta forma, el aparato de la economía institucional, la teoría de juegos y la elección racional están disponibles para la teoría empírica de la democracia.

Su modelo integrado le denomina como modelo de desempeño superior persistente. La economía de los costos de transacción proporciona la plataforma para el diseño de las estructuras de las nuevas formas de organización y por lo tanto de las nuevas formas de gobernabilidad. Las nuevas formas de gobernabilidad de lo colectivo deben sustituir a las estructuras rígidas y pesadas que no dan respuesta a exigencias de la individualidad con orientación abierta y que por lo tanto requieren la emergencia de nuevas formas colectivas con estructuras más abiertas, flexibles y livianas que respondan a las exigencias de la individualidad con orientación abierta. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes.Las transacciones que proporcionan beneficios a las partes involucradas en forma mutua deben ser las preferidas en el diseño de la estructura.

De acuerdo a Williamson, (2000), la adaptación a las organizaciones en las que se enfoca la economía de los costos de transacción, se fundamenta en dos tipos, la autónoma y la de cooperación. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Cualquier cosa o situación que pueda ser tratado en términos de economía, puede ser analizado desde la perspectiva de los costos de transacción. La economía de los costos de transacción argumenta que cada forma genérica de gobernabilidad se apoya en una forma distintiva de contrato legal bajo circunstancias determinadas. Así, la economía de los costos de transacción siempre encuentra explicaciones comparativas de las estructuras organizacionales e institucionales.

En su modelo de desempeño superior persistente, el sistema de ventaja competitiva se apoya en tres factores: la posición, la capacidad y la acción. La posición está referida al poder del mercado y al liderazgo en los eco-sistemas de negocios. La capacidad está referida a las dotaciones únicas, las competencias centrales, la capacidad dinámica y eficiencia. La acción está referida a la innovación, la hipercompetencia, la coopetición y el compromiso. No obstante, cuando los sistemas se vuelven más competitivos, las personas se vuelven menos necesarias.

Así, la ciudadanía que debe surgir de un sistema legal y a partir de formar parte de una organización territorial del Estado mismo más que de un régimen, se reduce a su mínima expresión en la concepción economicista delimitada por el mercado. Las nociones de ciudadanía y democracia se vinculan como atributos del Estado, del régimen político y de la sociedad.

El neoliberalismo consiste en un conjunto de políticas económicas que promueven un orden económico basado en el libre mercado bajo ciertas reglas económicas y legales, cuya aplicación ha producido resultados parciales e imperfectos, al no poder dar la libertad económica a todos los individuos, verdadero fin del liberalismo. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. La retórica de la doctrina del libre mercado ha sido sostenida y promovida por los ideólogos de la derecha ha sido también asimilada y repetida por los de la izquierda. La derecha ha tomado ventaja de las situaciones para la promoción de funciones del Estado y de una política económica que beneficia a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales.

La izquierda se concentra en la pérdida de las funciones del Estado, mientras la derecha aprovecha las circunstancias para y reforzar aquellas actividades del Estado que benefician a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Esto es, la existencia del mercado libre no necesariamente ha contribuido a liberar económicamente a los hombres. Por el contrario, el neoliberalismo ha producido una mayor dependencia económica en la mayoría de los individuos, mientras unos pocos tienen el verdadero control sobre los beneficios económicos.

Moralmente el neoliberalismo resulta inaceptable para cualquier experto en economía política que verdaderamente se preocupe por el uso eficiente de los recursos escasos, sino también porque sus propuestas sean moralmente aceptables. El sentimiento de impotencia y frustración por la injusticia social que emana de un modelo que se dice ser producto de la "racionalidad" pero que excluye y destruye la vida de las mayorías es inviable e insostenible como modelo de desarrollo de la humanidad.

Esta injusticia social se manifiesta con los indicadores que muestran que la desigualdad, no solamente se mantiene igual, sino que sigue creciendo. La expansión de nuestro actual sistema industrial a través de la liberalización y el incremento de las actividades comerciales puede dar como resultado que más gente tenga un cierto nivel de riqueza material, pero puede al mismo tiempo destruir otros aspectos de la vida que son igualmente más valiosos. De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja

consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

Contrariamente al supuesto de las ideas modernas igualitarias, liberte-egalité del legado común del pensamiento clásico y republicano, que podemos traducir en la libertad del mercado e igualdad de derechos, la historia de la ciudadanía ha sido aquélla de una posición exclusiva y solamente confinado a los pocos altamente educados (Meredith, 1997) O bien, aquellos que concentran más recursos. Hasta recientemente que se ha extendido parcialmente a una porción más amplia de la población de las modernas democracias y territorios nacionales. No obstante, la posición es clara, la ciudadanía civil, política y social se reclama, se conquista, se logra a través de luchas, cruentas muchas de las veces. Ciertamente, las conquistas de libertades se vinculan a las luchas de carácter político y social

Zakaria argumenta que por casi un siglo la democracia ha significado la democracia liberal, un sistema marcado por elecciones libres y limpias, por la regla de la ley, una separación de poderes, y la protección de libertades básicas de palabra, religión y propiedad. Elecciones libres y transparentes no son condiciones suficientes para la democracia. Para Fukuyama (1999a), una democracia liberal moderna es simplemente una serie de instituciones políticas diseñadas para asegurar derechos universales custodiados por la Lista Estadounidense de Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes básicas de la mayoría de las democracias contemporáneas. La propuesta para el análisis del cambio institucional es opuesta a la democracia mayoritaria y negociadora como el punto de partida.

Como tipos polares, las democracias con un mínimo de puntos de veto son mayoritarias en carácter, mientras que las democracias de negociación contienen un máximo de puntos de veto. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente a la reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación.

Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997). La democracia liberal requiere de actores, agentes e instituciones fuertes que abrasen los principios del liberalismo político y económico.

Novak (1999) afirma que la modernidad encontró “los principios prácticos de la sociedad libre hasta entonces desconocidos por los antiguos y los medievales. Sociedad libre en su forma de gobierno, libre en su economía y libre en los ámbitos de la conciencia y la investigación. Los grandes logros modernos en estos tres campos han sido eminentemente prácticos: cómo hacer que las instituciones libres funcionen lo mejor posible y mejor que los antiguos regímenes”. Pero el proceso de construcción de la modernidad bajo la globalización riñe con las identidades nacionales. La transformación del capital social tiene relación con los

cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los individuos. Esta tendencia y otras son las causantes de lo que Wagner (1996) denomina el final de la modernidad organizada. Muchos de los habitantes de las diferentes regiones del mundo viven bajo condiciones que pueden ser descritas como modernidad desigual más que postmodernidad,

El Estado-nación se constituye como la forma de gobernabilidad que caracteriza a la modernidad y que asegura el espacio a la nación para que ejercite su vocación histórica. El espacio nacional se encuentra delimitado por las fronteras físicas y geográficas territoriales dentro del cual ocurren ciertos fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales. Estos espacios nacionales están determinados por la definición de unidades de espacios que son soberanos. Es decir, la modernidad capitalista creó las instituciones que necesitaba para su desarrollo en torno al Estado-nación, tales como la sociedad y el mercado delimitados por fronteras y defendidos con ejércitos propios, etc.

Sin embargo, mientras el espacio geopolítico se origina en el estado-nación, de ahí emergen los niveles de espacios internacionales y global en donde la geoeconomía adquiere mayor relevancia. Es en el espacio global en donde las diferentes expresiones de la globalización se expresan en una forma contextual fragmentada. Las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales tratan por todos los medios a su alcance de extender el espacio de aplicación de le geopolítica y la geoconomía del nacional al internacional y global. Las corporaciones transnacionales se reparten los mercados internacionales con el apoyo de los Estados imperialistas que aumentan su poder e influencia. Precisamente, son estos Estados imperialistas los que concentran y detentan la propiedad y el control de las principales corporaciones transnacionales. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula.

Sin embargo, los requerimientos de los procesos de globalización están profundizando las manifestaciones contemporáneas del capitalismo y lo han empujado a una crisis, la crisis global del capitalismo moderno. La crisis del objeto del capitalismo no solamente se presenta en el dominio del valor de cambio sino que ya se presentaba en el valor de uso.

La actual crisis del capitalismo representa el pretexto y la oportunidad para los empresarios transnacionales cobijados por el neoliberalismo, para concentra decisiones y poder. Esta crisis capitalista requiere de un redimensionamiento de las instituciones creadas por el capitalismo moderno. Aguirre Rojas (2000) concluye que “la modernidad capitalista parece por fin estar llegando al final de su ciclo de vida histórica general. Un ciclo de vida que, lejos de continuar ahora, con la nueva y transformadora etapa de la “globalización”, se acerca más bien a su terminación, con la crisis y desestructuración globales que ahora presenciamos”. Esta tendencia y otras son las causantes de lo que Wagner (1996) denomina el final de la modernidad organizada.

De hecho, las transnancionales y multinacionales foráneas son motivadas o desmotivadas para adoptar una perspectiva global por los rasgos nacionales, no obstante que en sí mismas mantienen una cultura organizacional fuertemente influida por la nación de origen, cargando consigo estos valores nacionales en su expansión a todas las partes del mundo. En la formación de la cultura corporativa de las grandes empresas transnacionales influyen en forma directa los apoyos y las restricciones que reciben de los Estados nacionales.

Similarmente, en la mayoría de los países que recientemente se han convertido a la doctrina neoliberal, la administración ha sido lenta para hacer los ajustes culturales, especialmente porque significa una pérdida de poder. Conviene recordar la definición de nación de Ernest Gellner (1983) como la formada por aquéllas personas que comparten una misma cultura y que, además, se reconozcan a sí mismas como pertenecientes a la misma nación, tener derechos y responsabilidades mutuos en virtud de una membresía compartida.

En tanto que estas empresas conservan sus marcos de referencia institucional, pueden tomar ventaja de los beneficios institucionales que para sus operaciones cada país les ofrece. Muy pocas organizaciones son anacionales en estricto sentido o globales, como el caso de ciertas agencias internacionales en las que trabajan empleados políglotas. Las agencias internacionales son delimitadas tipológicamente como organizaciones quasi-políticas formada por las asambleas de los consejos de gobierno formados con representantes de los países miembros.

Las corporaciones integradas a los mercados globales no requieren conformarse a un comportamiento ideal global (Doremus, Keller, Pauly and Reich, 1998) No obstante, los autores cuando se enfocan sobre los productos de sus sistemas nacionales, descuentan sus oportunidades para prosperar en un mundo balanceado por influencias globales y locales. Esta situación los lleva a concluir que la globalización más que erosionar las diferencias nacionales, las refuerza.

Sin embargo, se tiene que enfrentar con los retos reduccionistas del racionalismo económico, no poniendo alguna oposición inherente entre ciudadanía y mercado, sino delimitando los clamores posibles a la ciudadanía, la 'titularidad cívica' y dando origen a muchos mercados discretos, como por ejemplo, de etnicidad, género, acceso del medio ambiente y social, salud, etc. Estos diferentes tipos de mercados representan formas múltiples y particularísticas de subjectividad democrática. (Brown, 1997)

Entonces, resulta importante la conceptualización de la sociedad civil con relación a la comunidad, el mercado y el Estado, si relacionamos la sociedad civil con los conceptos de democracia substantiva y de Estado de Derecho. La polisemia del concepto de sociedad civil muestra diferentes contenidos según la describa Tocqueville o algún autor actual. Tanto Mill como Tocqueville caracterizan a la sociedad civil distinguiéndola del Estado-aparato, caracterización que es más relevante en Gramsci y que entran en contradicción..

La sociedad civil constituye la forma orgánica más natural de autoorganización social, cuyas actividades y prácticas tienen alguna conexión con los poderes institucionales pero constituyen una fuerza positiva para la democratización. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. Entre más complejidad exista en la redistribución del poder sea la sociedad civil, más posibilidades tiene de ser democrática. La sociedad civil es conceptualizada no como un sujeto en sí misma, sino como una esfera o campo de acción donde se manifiestan ciertos intereses y en donde las instituciones y entidades que la forman realizan sus funciones y actividades.

De alguna manera, los términos como comunidad, sociedad, Estado, organización, nación, grupo, etc., son formas referentes de orden social. A pesar de que el proyecto utópico neoliberal está desmantelando las instituciones que preservan el orden social, la sobre vivencia de estas instituciones mantienen todavía el orden social lejos del caos. Este

derrumbamiento de las instituciones sociales representa el mismo derrumbamiento de la autorrepresentación de la sociedad, una sociedad que está en crisis como resultado de las tensiones a las que la somete los procesos de globalización.

Tanto el Estado, como los sistemas económicos y sociales están sometidos a procesos de constante transformación que dan por resultado constelaciones de variaciones en los sectores públicos y privados en los diferentes países. Las democracias liberales más avanzadas se convirtieron en democracias sociales. La transformación radical del sistema político en las democracias liberales, amenaza las fronteras de la institucionalización de los sectores público y privado, principalmente debido a la pérdida de legitimidad y credibilidad de todas las instituciones políticas, incluyendo a movimientos y partidos políticos, incrementánndose también sus niveles de inestabilidad.

Es mejor dicho, un proceso de desinstitucionalización del Estado que pierde su referente de centralidad con la nación. El nuevo diseño del sistema político tiene que fundamentarse en las normas democráticas, los contrapesos democráticos, la libertad de elección, los derechos humanos, etc. La separación institucional entre política y administración, y al Estado-nación como la unidad básica de gobierno de sociedad (Sorensen, 1997). Las prácticas con una fuerte sustentabilidad democrática en una sociedad, no necesariamente se traducen en la eficiencia de los gobiernos. La modernización puede lograr la sustentabilidad social si se acerca a los fundamentos culturales de la sociedad.

Lo ilógico de las "lógicas partisanas".

La teoría social representa el papel de la "lógica partisana" en los debates sobre el papel del Estado, a tal grado de que convierte en el punto de articulación entre el interés del mercado y los principios sociales, cargando al Estado con la responsabilidad de mediar entre las dos lógicas antagónicas de la racionalidad social y la racionalidad económica. En otras palabras, los individuos racionales se vuelven cooperativos por interés propio y por lo tanto realizan un comportamiento de acción colectiva. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es.

Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Una vez que la acción colectiva se inicia, en el curso de este mismo proceso emerge una colectividad que puede aplicar sanciones informales contra los que contravienen y recompensar a colaboradores a bajo costo (castigo u ostracismo), a ningún costo e incluso a premio (avergonzar, reprochar o criticar) (De Swaan Abram, 1997). El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otros ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir, (De Swaan Abram, 1997). Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil.

North (1993), por ejemplo, sostiene que el Estado puede representar un papel importante para apoyar las instituciones dentro de un ambiente de responsabilidad para reaccionar al cambio estructural, de tal forma que sea consistente con el bien social. El Estado no

solamente puede crear los espacios en los cuales se encuentren los diversos agentes económicos locales e internacionales para realizar intercambios, sino que, además, puede crear, vigilar y hacer cumplir las reglas del juego de dichos intercambios a través de sus instituciones. Aquí el concepto de espacio se mueve de su caracterización física y territorial a una caracterización más abierta y dinámica. Así, el fenómeno de la desterritorialización del Estado está dando lugar a una nueva territorilización en función de creación de unidades espaciales diferentes.

El cambio estructural tiene por objetivo establecer un marco institucional para lograr mercados más competitivos. Se realiza mediante mecanismos de apertura y liberalización comercial y financiera, inversión extranjera, privatización de empresas públicas, desregulación, etc. Estas políticas han disminuido la tasa de crecimiento económico en general y han traído una drástica reducción de los servicios del gobierno así como en el empleo público. Esto ha resultado en una venta total desnacionalizadora de los más grandes beneficios y empresas públicas de estos países y abolido las tarifas protectoras y otras formas de apoyo que previamente tenían las empresas locales. El cambio estructural ha posibilitado una nueva estructura y operación de la economía del mercado que implica la racionalidad de las funciones del Estado sujeto a las reglas que establecen los principios del libre mercado.

El objetivo de los programas de ajuste estructural es el tránsito de una economía cerrada, centrada en el Estado de Bienestar y con altos niveles de regulación e intervención estatal a una economía abierta, con un énfasis en los principios del libre mercado y de competitividad internacional. La característica principal de este estado de Bienestar es la función que cumplía de hacer obligatoria la provisión de colectiva de los servicios asistenciales básicos. Esta economía de libre mercado se desarrolla con agentes económicos centrados en la propiedad privada y en la defensa de sus propios intereses. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible.

Los programas de ajuste estructural y estabilización macroeconómica en realidad desajustan la relación de las dinámicas económicas y sociales nacionales y siguen manteniendo las prácticas patrimonialistas y clientelares como formas de control social del Estado y generadoras de corrupción. Los programas de ajuste estructural fueron impuestos para rediseñar las instituciones y modificar la estructura del governance, pero los resultados han sido limitados. En este sentido, los análisis del ajuste estructural se refieren al cálculo económico de las expectativas y no consideran la apreciación a la dimensión subjetiva del fenómeno.

Cualquier cambio en la estructura del governance afecta la estructura institucional de la gobernabilidad. El estudio de governance contribuye a la gobernabilidad o gobernability, a pesar de que ambos conceptos se refieran a fenómenos soiopolíticos diferentes. La governance y la gobernabilidad son términos interdependientes en los sistemas democráticos. La operacionalización y aplicación de las diferentes formas de governance en las instituciones sociales, económicas y políticas inciden directamente en los efectos de la gobernabilidad del sistema democrático. Las instituciones económicas, sociales y políticas son determinantes de las decisiones y procesos sociales. En un sistema democrático, se espera que se desarrollen las competencias, libertades y derechos tanto individuales como sociales.

El patrimonialismo confunde el patrimonio público con el patrimonio individual y familiar. El corporativismo defiende los intereses de grupos en nombre del interés público y confunde el patrimonio del Estado con el patrimonio de los grupos de interés. El corporativismo como una forma de expresión actual del patrimonialismo mezcla intereses legítimos de grupos que se constituyen bajo el fundamento de la democracia representativa, pero que al mismo tiempo identifican sus propios intereses con el interés público.

Las "lógicas partisanas" son parte importante de los elementos del debate político. El principal p0apel que desempeña el Estado moderno es el de un "árbitro neutral" entre las demandas de la empresa económica y los derechos racionales de beneficencia social, entre la "solidaridad social" y la "racionalidad industrial". El Estado moderno institucionalizó la violencia y administró los servicios sociales a la población con un enfoque de diferenciación territorial que profundizó la brecha de las desigualdades. La ausencia de solidaridad destruye la democracia liberal de la sociedad, y los excluidos no dominan su propia condición. Los programas de beneficencia del Estado institucionalizaron la titularidad relativa y circunstancial, dependiente de los procedimientos para reconocer los diferentes posición y la distribución de los bienes sociales. (Meredith, 1997; Donzelot, 1988)

Una forma racional de obtener el reconocimiento universal de los individuos garantizado por un conjunto de derechos humanos o derechos del hombre es a través del Estado liberal moderno. La defensa y garantía de los derechos humanos es todavía un problema no resuelto en situaciones específicas, tales como por ejemplo cuando están en peligro los derechos humanos 0de los adversarios políticos a algunos regímenes. El Estado liberal moderno con características de reformista, legalista y semiautoritario, era considerado por los liberales como el único capaz de mantener la paz.

Con la internacionalización de la economía y los cambios en las orientaciones de los modelos económicos, de una economía socialista hacia una economía capitalista centrada en empresarialismo, el Estado de beneficencia social ha modificado sus funciones, para convertirse al decir de algunos en un Estado internacionalizado, concepto que no deja de ser muy vago. La economía capitalista del mercado tiene un carácter social.

La "internacionalización del Estado", de acuerdo al concepto de Baker (1999) involucra la priorización de los intereses del capital globalmente móvil sobre aquellos de una economía basada nacionalmente y de los agrupamientos sociales, aunque la economía global está íntimamente conectada al Estado. El Estado existe en un contexto de integración económica e intercambio transfronterizo. Lo anterior se manifiesta en la apertura de las economías nacionales a la competencia internacional, a través de una serie de medidas tales como las liberalizaciones, desregulaciones, privatizaciones y modificación del sector estatal y la persecución de políticas económicas austeras para conseguir el balance fiscal y una baja inflación.

Un segundo elemento de la "internacionalización del Estado" es la noción de que el estado actúa como una "correa de transmisión" del ámbito de lo global a lo local, establec0iendo el conjunto de ideas que proveen las bases para este acercamiento a las políticas públicas tenga un origen internacional. La transformación del estado inicia con un proceso de formación de consenso internacional, relacionado con las necesidades de la economía mundial.

La transformación del Estado desde los setenta implica el abandono de su función como mediador entre los intereses del trabajo y del capital, de los objetivos nacionales y del orden global. (Cox, 1992) Desde finales de la década de los setenta se inicia la transferencia del mando y el poder del Estado al mercado a través de programas de desregulación del estado que en realidad han significado la regulación por el mercado.

El déficit en regulación y gobernailidad de muchos países se debe al fracaso de los programas de desregulación del Estado y a las deficiencias en regulación por las instituciones del mercado. El análisis en los tipos de veto es actualmente en discusión de la reforma institucional es indicativo de la percepción que prevalece de déficit en el sistema político. El movimiento conservador iniciado en Inglaterra está transformando el papel del Estado en la economía, relegando su papel de administración económica del bienestar social e ignorando las presiones económicas de importantes grupos demográficos, para concentrarse más en la concesión de derechos de libertades personales.

Estas concesiones incluyen a la empresa privada, en la limitación y reducción de recursos asignados a la administración de servicios públicos. Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

O bien, de plano en su desregulación a través de esquemas privatizadores o corporativizadores que transfieren al sector privado, a inversionistas privados y a agencias supranacionales las capacidades para su administración, con la esperanza de que la disciplina de la propiedad privada mejore el desempeño económico tanto de las empresas como del sector gubernamental. Para que el sistema corporativo empresarial florezca, es necesario que estas formas de organización sean reconocidas por las regulaciones nacionales e internacionales y representadas por un conjunto de elementos característicos.

El otorgamiento de garantías a la propiedad privada y la introducción de incentivos para alentar la competencia por recursos que son escasos, son dos de los mecanismos usados para impulsar el libre mercado. La subcontratación para la provisión de los servicios públicos es resultado del deseo de introducir programas de aseguramiento de calidad, involucramiento más efectivo de la ciudadanía y la competencia, como la mejor forma de encontrar el mejor valor, la mejor calidad al más bajo precio por servicios que satisfagan las necesidades de las personas.

Estos cambios han dado lugar a un amplio y largo debate sobre los beneficios y alcances reales y potenciales de las empresas públicas o propiedad del Estado (EPEs), en contraste con las empresas privadas. Hasta ahora, las evidencias empíricas son muy ambiguas. Las empresas propiedad del Estado permanecen sujetas a discreción e intervención política y burocrática, lo que en muchas de las ocasiones aumentan los denominados costos burocráticos. Se argumenta que en los países menos desarrollados, las empresas públicas no son productivas y menos redituables.

Además se reconoce que la renta de las empresas públicas puede ser usadas para fines políticos, ya sea motivando la expansión del empleo o financiando actividades de naturaleza política. Quedan así estas empresas sujetas a la discreción e intervención política y burocrática. Sin embargo, la euforia privatizadora de las últimas dos décadas del siglo XX se

enc0uentra ahora en una fase de reflujo, la cual tiende hacia la búsqueda de un equilibrio entre el papel del Estado, el del mercado y el de la sociedad.

Los gobiernos están procediendo a la privatización de sus empresas e instituciones paraestatales, mediante procesos de desnacionalización que promueven la competencia y el desarrollo emprendedor. Estos procesos de privatización son solamente una parte de un intento amplio para liberalizar economías que enfrentan dificultades. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional.

Sin embargo, estos procesos de privatización son ampliamente promovidos por las grandes corporaciones transnacionales en sinergia con los Estados imperiales, quienes las detentan o concentran la propiedad y el control.. Por lo tanto, con la venta de las empresas del Estado al sector privado internacional, estas terminan siendo propiedad de los grandes grupos corporativos transnacionales y multinacionales, los que a su vez presionan a los Estados nacionales para la obtención de otros beneficios favorables para mantener el dominio global.

La existencia de diferentes modelos de privatización determina su impacto en el valor de la empresa privatizada, en el bienestar social agregado y en los grupos de interés. Las privatizaciones logran ganancias sustanciales por productividad (Megginson, et al, 1994). Estos procesos se llevan acabo en una amplia gama de formas de traspaso de propiedad y responsabilidades, que van desde un enfoque de “Estadidad corporatista” de empresas privadas delegadas para que actúen en su nombre, hasta la venta total de todas las prerrogativas a ciertos emprendedores que reorientan las actividades empresariales hacia un libre mercado.

Este desarrollo emprendedor (del francés entrepreneur) según Flores (1998) “destaca y diferencia a las personas que alejados de la administración o la gestión de recursos de una empresa estable, con vitalidad e imaginación, se salen de este círculo con ánimo de construir algo. Crean, inventan, seducen con nuevos modelos, nuevos productos, que a su vez generan una nueva realidad social.” Desde en cuanto habrá que distinguir claramente entre estos emprendedores y quienes son simples especuladores de la renta del capital..

Los procesos privatizadores de las empresas propiedad del Estado (EPEs) no es un fin en sí mismo sino es sólo un instrumento para la implementación de estrategias de desarrollo de un Estado-nación. Se deben formular estrategias de desarrollo para generar oportunidades mediante la optimización de los recursos y las potencialidades locales y regionales. Pero a pesar de que las empresas públicas o de propiedad del Estado se separen o se constituyan en forma autónoma e independiente del control político, permanece la propiedad del Estado por ser representados por burócratas y los políticos.

Mucho se ha discutido sobre las dificultades para privatizar los monopolios del gobierno, para convertirse en monopolios privados (Levy y Spiller, 1996). La identificación de las variables de las principales decisiones del gobierno presenta las identificaciones de los intercambios políticos que tienen que enfrentarse los gobiernos cuando llevan a cabo

procesos de privatización. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación.

Los procesos de privatización se acompañan de medidas complementarias de liberalización comercial como parte de una racionalización de las economías y que se acompañan de procesos políticos. Este principio toma nota del hecho que las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica (Kaiser, 1997).

Los resultados de investigaciones (Avishur, 2000) que un gobierno que maximiza el voto, establece el valor óptimo de las variables de sus decisiones, dependiendo de las características del mercado político. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

Aizenman (2000) trata de mostrar que en una economía donde las políticas están determinadas por votantes promedio, las privatizaciones conducen a la eficiencia de las ganancias mediante el cambio del menú de impuestos. Tal es el caso, por ejemplo, la reducción de los impuestos al capital. Igualmente, North (1990:365) argumenta que los mercados políticos tienen la tendencia a ser ineficientes, y que además en torno a la política gravitan altos costos de transacción (p. 362), los cuales resultan difíciles de organizar.
0

Los procesos de integración comercial internacional alientan la movilidad de las bases impositivas para minimizar los pagos de impuestos y ponen en entredicho el financiamiento de las capacidades del Estado nación. Una mayor integración de los procesos económicos internacionales pone bajo presión al sector público, sobretodo del Estado de Bienestar, debido al incremento de que las consecuencias de aplicación de impuestos que distorsionan, cuando los mercados de productos llegan a estar más integrados (Andersen, 2001).

Existe un punto de vista diferente al esencialista que separa a las empresas y al Estado y que consiste en la concepción de empresas que sean parcialmente o totalmente propiedad del Estado. El creciente interés en la privatización de las empresas propiedad del Estado (EPEs) en los años recientes es parte de la experiencia diaria de privatización de servicios y fragmentación de responsabilidades a tal grado que parece ser una evidencia empírica, aunque muy cuestionada, que indica que la empresa privada es más eficiente. Algunas investigaciones empíricas muestran que en un promedio general, las empresas del estado son menos rentables y menos eficientes que las corporaciones privadas.

Sin embargo, no necesariamente las empresas propiedad del Estado (EPEs), ni los gobiernos tienen necesariamente un monopolio de ineficiencia, como se les ha estigmatizado. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las

instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros.

La privatización es definida como la venta deliberada por un gobierno de empresas propiedad del Estado o activos, a los agentes económicos privados (Megginson and Netter, 1999) Por otra parte, Phelps (1992) argumenta como razones de la superioridad en la eficiencia de las empresas privadas, que éstas están más empresarialmente orientadas. El mejoramiento de las condiciones regionales para la promoción de la actividad empresarial conlleva el fomento de la integración o diversificación de la estructura económica regional y la coordinación interinstitucional de planes, programas y proyectos de impacto regional Terapuez Chamorro (2001).

Por otra parte, esta orientación empresarial determina los intercambios en función de mecanismos de precios y costos burocráticos. Además, los administradores actúan directamente en los procesos de producción y los productos con un enfoque en la maximización de las utilidades. El modelo de los derechos de propiedad, según De Alessi (1980), sostiene categóricamente que "la diferencia crucial entre las empresas privadas y las políticas (públicamente poseídas) es que la propiedad en la última es efectivamente no trasferible. Ya que esto excluye la especialización en su propiedad, inhibe el capitalismo de consecuencias futuras en la trasferencia corriente de precios y reduce los incentivos de los dueños para monitorear la conducta administrativa".

No obstante, el establecimiento de un sistema formal de derechos de propiedad, no necesariamente crea los incentivos del mercado, ni las previene de intervención política. Además, sin que existan grupos de presión con diferentes intereses, los inversionistas se enfocan a la adquisición de activos bajo una perspectiva de largo plazo y por las dificultades para obtener asistencia pública en casos de dificultades, la penalización por no alcanzar los objetivos es muy drástica y dolorosa.

No obstante, los modelos privatizadores de las empresas del sector público no toman en consideración los efectos en la distribución del ingreso. La propiedad que el Estado tiene de los factores de producción, es una de las piedras angulares del comunismo. E incluso, bajo el sistema capitalista, el Estado representó un importante papel en los asuntos económicos, como en el caso de los países Europeos y de países en desarrollo, donde controló la producción de bienes y servicios y la distribución de los recursos. Las empresas propiedad del Estado (EPE) o empresas controladas por el Estado son entidades económicas que generan la mayor parte de sus ingresos de la venta de bienes y servicios en los que el sector privado no tiene interés en ofrecer, y que los gobiernos benevolentes realizan en beneficio de los intereses de la ciudadanía.

Además, ideológicamente los gobiernos desean mantener el control sobre la producción de bienes y servicios, no tanto por los beneficios económicos sino por otros beneficios políticos. Así las privatizaciones iniciadas por políticos son una respuesta a los cambios del mercado político-electoral, mediante el cual, la privatización introduce un modo de operación del dominio de Pareto que tiende a generar un mayor apoyo político-electoral. Muchas de las privatizaciones sólo han beneficiado a los rent seekers y a los free riders de un patrimonio económico público.

Ya se señaló el argumento de North (1990) acerca de que los mercados políticos siempre gravitan en torno de altos costos de transacción, los cuales son difíciles de organizar. Sin embargo, las empresas propiedad del Estado (EPE) operan en la mayor parte de los países que mantienen este sistema de propiedad bajo ciertas limitaciones y restricciones y además de que son más susceptibles a las presiones de los grupos políticos, con intereses a corto plazo y electoreros.0

Los políticos valoran a las empresas propiedad del Estado porque pueden usarlas para favorecer a los que apoyan políticamente, otorgándoles empleo, inversiones focalizadas regionalmente y precios subsidiados de los productos o bien pagando mejor a los proveedores políticamente conectados. Por éstas razones, la transferencia de empresas paraestatales al sector privado debe realizarse preferentemente a accionistas externos, más que a administradores y políticos que tienen las mismas motivaciones para mantener empleo excesivo.

La posibilidad de una bancarrota en el sector privado, motiva a una mayor eficiencia y productividad mediante una administración efectiva de los activos que requiere un mayor esfuerzo administrativo. La percepción acerca de la efectividad del manejo de los activos propiedad del Estado está modificándose por un lado, mientras que por otro resulta atractivo para el Estado vender estos activos por el dinero que recibe.

La privatización ha probado ser una política económica hasta cierto punto exitosa porque ha reducido significativamente el papel del Estado con el control de la propiedad de las empresas, en la vida económica de los países. Pero para poderlo afirmar es necesario analizar los efectos de las privatizaciones en los ingresos nacionales y su impacto en la tasa de crecimiento sobre el tiempo. Las privatizaciones reasignan y reorganizan los recursos con la finalidad de mejorar la eficiencia y el incremento del crecimiento económico de una nación, de acuerdo con la nueva teoría del crecimiento endógeno, o al menos por un tiempo, como lo sugiere el modelo neoclásico de crecimiento que convierte al crecimiento económico en un fin en sí mismo.

El crecimiento económico implica la noción de la medición cuantitativa en términos del producto interno bruto pre cápita y el promedio real del consumo. A través de la identificación de parámetros políticos y económicos, relevantes a la privatización, el modelo propuesto por Avishur (2000) predice la elección para la privatización de una industria, el tiempo de transición, la forma que toma y la asignación de recursos que toma. Además de que explica los diferentes enfoques a la privatización en diferentes países basados en restricciones políticas enfrentadas por gobiernos con más poder.

Rubio (1999) comenta que “algunos países vieron en la privatización de empresas una nueva manera de gobernar, una nueva manera de concebir la relación entre el gobierno y la economía. Sobre todo, una manera de restaurar al sector privado, a la inversión privada y, sobre todo (sic) a la economía de mercado, como la mejor manera de provocar el desarrollo económico. Otros países, quizás los más, incluido el nuestro, no acabaron de cambiar el paradigma: vieron en las privatizaciones una manera de agenciarse ingresos fiscales de corto plazo y de quitarse de encima pesados fardos y enormes fuentes de corrupción y subsidios descontrolados, pero no más. La noción de potenciar el desarrollo a través de un mercado activo y pujante nunca avanzó”.

La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros. El continuo de posibilidades de Avishur (2000) de programas de privatización va de un capitalismo popular como la tendencia de gobiernos que son vulnerables a las críticas y hasta compañías nomenklatura en la cual los administradores toman los activos a costos más discrecionales. En el medio de este continuo se ubican los esquemas de privatizaciones basados en vouchers y en accionistas. El elemento para entender los patrones de privatizaciones está en la identidad de los individuos que se amparan bajo el término inocente de inversionistas privados.

Como doctrina económica del Estado, la privatización ha tenido una amplia aplicación, a pesar de que la literatura académica apoya teórica y empíricamente las empresas propiedad del Estado, al extremo de que algunos estudios muestran que la administración de la propiedad del Estado no tiene necesari0amente un desempeño pobre. Quizá más importante que el criterio de privatizar para hacer eficientes las organizaciones, debe considerarse la máxima realización de las prestaciones.

Sin embargo, los movimientos sociales que se manifiestan en contra de los procesos privatizadores de la vida social están reconstruyendo su identidad colectiva y reivindicando una nueva dimensión de lo público al proponer una agenda contra hegemónica de la ideología dominante, mediante organizaciones con estructuras más planas que permiten la horizontalidad de las relaciones sociales y de producción, sí como la apropiación de un nuevo discurso. La transformación del capital social tiene relación con los cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los individuos. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Los procesos de la individualización enfatizan la presencia del individuo por sobre lo colectivo, escindiendo en forma nominalista entre el individuo y la sociedad, mediante el debilitamiento de los referentes materiales y simbólicos de las identidades colectivas.

Los diferentes tipos de intereses que existen en una sociedad hace que sus individuos se expresen en espacios locales, regionales, nacionales y transnacionales. La sociedad local y regional es uno de los principales actores del desarrollo el cual puede ser equilibrado y equitativo. Es en el espacio global donde tiene lugar el fenómeno de la globalización en u contexto de fragmentación. Las relaciones sociales son diferentes dentro de las empresas que entre las empresas lo que debe de considerarse a la hora de elegir entre el mercado y las jerarquías.

Las relaciones económicas en el sistema capitalista ocurren en un mercado entre las empresas y al interior delas jerarquías de las grandes corporaciones, empresas burocráticas y el estado mismo. Las empresas y los mercados difieren en su acceso al fiat debido principalmente a las diferencias en los contratos legales. En otras palabras, a pesar de los avances en la consolidación del sistema económico neoliberal globalizador, se separan las características políticas, sociales y culturales de los pueblos, las cuales aumentan las capacidades de las identidades colectivas de los pueblos. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas.

La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). El capital social tiene carácter instrumental y expresivo,

fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación "puramente expresiva y gratuita" como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación "puramente expresiva y gratuita" como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). Estas capacidades de las identidades colectivas encuentran sus espacios para expresar sus intereses en las instancias locales, nacionales y transnacionales. La lógica del sistema hegemónico es inversa al protagonismo de lo colectivo, dando mayor énfasis a las políticas y estrategias individuales.

Muchas de las expresiones de los movimientos sociales constituyen actos de rebeldía contra las desigualdades sociales. Los movimientos sociales contribuyen a la formación de la ciudadanía mediante la afirmación de los derechos individuales civiles, políticos y sociales frente a su imprecisión como "derechos de tercera generación" que promueven los organismos multilaterales. Muchos de estos movimientos sociales son románticos porque critican la destrucción de las culturas tradicionales y los modos de vida por el capitalismo.

En realidad, el sistema capitalista ha evolucionado hacia formas más tolerables durante los últimos 150 años, en parte debido a la acción de los movimientos sociales, hasta que en los últimos 25 años todo parece cambiar, y el capitalismo adopta tendencias autoritarias. Con la caída de los sistemas socialistas en los finales del siglo pasado y frente a los excesos del capitalismo globalizador, es necesario que los movimientos sociales nuevos redefinan sus estrategias y métodos de resistencia y oposición a los efectos negativos de los procesos de globalización. Thoreua ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia, lealtad y a resistir un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insportables.

Quienes argumentan a favor de la privatización afirman que la propiedad privada siempre resulta en un alto nivel de eficiencia productiva en un buen Estado, porque el bienestar de los consumidores entra en la función de utilidad del gobierno, pero no en la de los gerentes de las empresas privadas. La distinción entre la propiedad privada y la propiedad pública no toma en consideración importantes mecanismos de gobernabilidad como los problemas de la agencia, los costos de transacción y la complejidad de los contratos internos. Estos contratos internos regulan las relaciones y las transacciones entre los diferentes individuos y grupos dentro de la organización. El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Cuando los individuos deciden realizar contratos individuales y privados fuera de las estructuras de gobernabilidad del estado, es porque encuentran los suficientes estímulos para hacerlo.

La ventaja primaria de la propiedad privada sobre la propiedad pública es la responsabilidad a la información sobre la demanda de los consumidores y los costos de insumos, según Glaeser and Scheinkman (1996) Estos autores concluyen que la privatización debería empezar donde la incertidumbre o la ignorancia es mayor en áreas que transmiten información a otros agentes económicos. Por tanto, el gobierno tiene más que ganar de un incremento en la eficiencia productiva y debería ser capaz de pagar más por esa ganancia (Megginson and Netter, 1998)

En las últimas dos décadas se ha presentado una tendencia que muestra claramente como los gobiernos de todos los rincones del mundo y de diferentes ideologías han aceptado como política económica la desincorporación de las empresas propiedad del Estado, a través de programas de privatización, como resultado de objetivos múltiples que tienen fines económicos y políticos. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación.

Se considera que los Estados-nación mejoran su capacidad de competencia internacional si se limitan a configurar los sectores social y privado. Al decir de Patras (2001d) la competencia "en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados".

La privatización tiene un impacto diferencial del papel del Estado en las diferentes economías. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros.La privatización ha sido aceptada como una herramienta legítima de las funciones del Estado por los gobiernos de más de 100 países.

Pero estas políticas de desincorporación dañan el tejido democrático de la sociedad. Habermas (19998) ha escrito con singular maestría que este dilema llamado "la cuadratura del círculo" por Ralph Dahrendorf, "se trata de unir tres cosas sin conflictos: Conservar y fortalecer la capacidad de competencia en el viento huracanado de la economía internacional; No sacrificar la cohesión social ni la solidaridad; y llevarlas a cabo con las condiciones y en las instituciones de una sociedad libre". Es en el terreno de la economía internacional en donde el papel expandido del Estado es fundamental.

Las investigaciones empíricas sobre la efectividad concluyen a favor del sector privado por sobre las empresas del Estado, con una evidencia de que es más rentable, con más bajos niveles de deuda y sistemas de producción menos intensivos en empleo de recursos. Las investigaciones académicas están marcadamente en favor de la proposición de que las empresas de propiedad privada son más eficientes y más rentables que las empresas propiedad del Estado.

Sin embargo, la literatura académica ofrece poca información sobre el mejor método para privatizar y los análisis teóricos de costos y beneficios son limitados. La mayor parte de los programas de privatización se realizan como actos de fe (Megginson, Nash and Randenborgh (1994) Los modelos económicos estándar de contratación financiera dentro de las empresas no encajan en el contexto de la privatización, principlamente porque las empresas no evolucionan sobre el tiempo de pequeñas empresas, sino que son creadas por fiat gubernamental (Coffee, 1999)

El teorema fundamental de la privatización concluye que la intervención del gobierno es menos costosa bajo la propiedad gubernamental. Pero la promesa del gobierno de no

intervenir tiene más credibilidad bajo la propiedad privada (Sappington and Stiglitz, 1987) Los programas ortodoxos de privatización de empresas de un número creciente de gobiernos de países han sido aceptados como un instrumento de economía política. Investigaciones sobre el incremento del desempeño de las empresas privatizadas demuestran que se incrementa en términos económicos y estadísticos después de que han sido traspasadas al sector privado (D'sousa, Juliet and Megginson L. William, 1999) Sin embargo, la competencia, o desregulación es más importante que la privatización, para mejorar el desempeño económico.

Por otro lado, las empresas están pasando por un período de autorreflexión y auto evaluación para determinar si sus competencias y capacidades están en tono con los grandes cambios que se avecinan en los mercados globales. Administradores y trabajadores reconocen la importancia de trabajar conjuntamente en una economía crecientemente compleja y retadora. El futuro de los trabajadores es muy incierto.

El aumento del papel del gobierno de redes de políticas e intereses privados, el incremento del uso de la subcontratación, la automatización y un simultáneo proceso de internacionalización y descentralización de las instituciones públicas de gobierno, son algunos otros eventos que están ocurriendo. La formación de redes de pequeñas y medianas empresas, vinculadas por niveles de competencias y una creciente tecnología informática innovadora, y la creación de alianzas y asociaciones estratégicas entre los sectores público y privado son otras de las tendencias crecientes.

Brada (1996) ha clasificado los métodos de privatizaciones en privatizaciones a través de la restitución, privatización a través de la venta de propiedad estatal por ventas directas o por emisión de acciones, privatización masiva y privatización desde abajo mediante el inicio de nuevos negocios. La propiedad privada es preferida a la propiedad pública si el incentivo para innovar y contener los costos es fuerte.

Los agentes administrativos del sector público tienen pocos incentivos para eliminar o reducir los costos y mejorar la calidad. La propiedad pública se prefiere sólo cuando las oportunidades de reducción de costos conducen a reducciones de calidad no contractables que son significantes, si la innovación es relativamente no importante, si la competencia es débil y la elección del consumidor es inefectiva y si los mecanismos reputacionales son débiles (Hart, Shleifer and Vishny, 1994)

Los procesos de privatización están modificando las estructuras de los sistemas económicos de muchos países, como parte de una medicina amarga que está provocando muchos cambios acompañados de inestabilidad e incertidumbre. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros.

La preponderancia de los intereses particulares que buscan el máximo beneficio en el más corto plazo en los procesos de privatización están arrojando resultados negativos en términos sus contribuciones a una mayor fragmentación y polarización social, aumento de la incertidumbre, incremento de los niveles de desigualdad económica y social que luego resultan en altos niveles de violencia. Estos procesos de privatización conducen inexorablemente a profundizar la dualización de la sociedad que genera brechas profundas de

desigualdades económicas y sociales, por un lado los ricos beneficiarios del sistema capitalista y por el otro los excluidos y marginados del desarrollo capitalista.

Ferreira (1999) ha desarrollado un modelo sobre la dinámica de la distribución de la riqueza y lección ocupacional para investigar las consecuencias distribucionales de las políticas asociadas con economías en transición y concluye que la más eficiente privatización diseñada para ser más igualitaria conduce a incrementos en la desigualdad y pobreza. Los resultados de estos procesos de privatizaciones subrayan la importancia de retener la provisión gubernamental de bienes y servicios públicos básicos, la remoción de barreras para prevenir la participación de los pobres en el nuevo sector privado y establecer las necesarias redes de seguridad.

Los defensores de la privatización la justifican insistiendo en el supuesto de que los mercados sean esencialmente democráticos y eficientes frente a la corrupción e ineficiencia de las empresas del Estado. Los monopolios del Estado tienen numerosos casos de corrupción, mal uso del poder y los recursos e ineficiencia. Sin embargo, la corrupción es producto del monopolio del poder y del uso discrecional que hacen de él. Las diferentes formas de corrupción, entre otras, el patrimonialismo, el nepotismo, el cleintelismo, etc., son ataques directos a la res publica. Por lo tanto, mientras no exista una profunda reforma a las instituciones, una reforma de la denominada segunda generación después de aplicadas las reformas estructurales y de estabilización macroeconómica, las conductas corruptas seguirán manifestándose aún en el sector empresarial privado.

Las reformas de segunda generación se orientan a profundizar la reforma del Estado, el desarrollo de las instituciones y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, dentro de un marco de crecimiento económico y consolidación democrática. La tendencia de las sociedades actuales a lograr la gobernabilidad democrática a pesar de la inestabilidad económica y política es lo que Torrijos (2001) ha denominado como gobernabilidad reluctante la cual considera ser una gobernabilidad que emerge desde la ingobernabilidad, porque se construye a partir de ambientes de alta incertidumbre, inestabilidad y caos. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Las economías en desarrollo tienen que dar especial atención a la reforma de sus institucionales, lo cual en sí mismo constituye un formidable reto. Las reformas de segunda generación requieren una nueva forma de gobernabilidad, lo cual implica nuevos modos y métodos de gobierno. Sin embargo, la reforma institucional carece de un marco conceptual que sirva de guía a la implementación de las acciones en una agenda política precisa, la cual debe orientarse a proteger y defender la res pública de los ataques de la corrupción y de los buscadores de rentas.

La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio. categorizando los puntos de veto de acuerdo a los efectos deseados, las estrategias de los actores políticos para el uso de los puntos de veto o en la propuesta de reformas institucionales pueden analizarse en modelo integrado de democracia. La dificultad para predecir futuros efectos de la reforma institucional da como resultado una estrechez de visión.

La protección de la res publica tiene hacerse a través de leyes y regulaciones y una política de Estado que limite los alcances de la corrupción y que no tenga como propósito la defensa de los intereses de sectores específicos y privados, como el caso de los banqueros en México. La corrupción está influencias por la existente estructura del poder institucionalizado, por lo que se requiere de una reforma institucional para reducirla, conocida como reforma de segunda generación. No hay duda de que la corrupción depende positivamente del monopolio del poder y la discreción de su ejercicio que tienen los miembros de cualquier organización.

Por otro lado, argumentan que el sacrificio de eliminar empleos se ve compensado con el mejoramiento del desempeño. Sin embargo, estos procesos de reforma económica denominados como reformas de primera generación, de ajuste estructural y estabilización macroeconómica con las consecuentes adecuaciones, además de que están inconclusas, están originando otras disfuncionalidades y profundos desajustes en las dinámicas económico-sociales nacionales. En este sentido, los análisis del ajuste estructural se refieren al cálculo económico de las expectativas y no consideran la apreciación a la dimensión subjetiva del fenómeno.

Estas reformas de primera generación fueron ortodoxas y se implantaron a finales de los años ochenta y principios de los noventa bajo modos de gobierno que no permiten profundizar la segunda etapa de las reformas, conocidas como de segunda generación. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. El objetivo de las reformas de "segunda generación", de acuerdo con Santiso (2001), consiste en " profundizar, completar y corregir las insuficiencias de las reformas de mercado de la primera "generación".

Estas reformas de segunda generación se orientar a profundizar la reforma del Estado, la reinvención de las instituciones políticas y el desarrollo de las instituciones dentro de un marco de crecimiento económico y consolidación de la gobernabilidad democrática. La aplicación de las reformas de segunda generación implica la implementación de procesos de reingeniería política, es decir, son procesos eminentemente políticos cuya finalidad es profundizar la gobernabilidad democrática. La reingeniería política implica involucrarse en cómo debe realizar las actividades, los métodos y las formas de gobierno.

Originalmente los programas de ajuste institucional representan un cambio en el diseño de las instituciones para modificar la estructura de governance y en los mecanismos que pueden dar el sustento a una gobernabilidad democrática que mantiene en equilibrio las relaciones entre la economía, la política y la sociedad, dando lugar a la emergencia de una sociedad "multi-céntrica", para usar las palabras de Luhman (1982).

Tanto la governace como la gobernabilidad son conceptos interdependientes en las estructuras económicas, políticas y sociales de los sistemas democráticos, aunque se refieran a fenómenos sociopolíticos diferentes. Es en este sentido que el estudio de governance contribuye a la gobernabilidad en su concepto amplio. Las instituciones forman el entramado de la sociedad, la economía y la política. Las diversas formas de operacionalización y aplicación de la governance en las instituciones económicas, sociales y políticas tienen incidencia directa en los efectos de la gobernabilidad de un sistema democrático. Las modificaciones de la estructura de governance afectan el diseño de la ingeniería institucional de la gobernabilidad.

La pirámide del empleo se ha volteado, de tal forma que menos personas tienen acceso a los beneficios del empleo mientras se incrementa el número de dependientes. Además, la obtención de empleo está condicionada a las competencias y habilidades que el mercado requiere. Así la capacidad del empleo como medio de acceso a los mercados es muy limitada.

Según Coffe (1999), la privatización ha producido una incongruencia conceptual: inherentemente produce una inicial dispersión de la propiedad, pero bajo un régimen legal intencionado para acomodar la concentración de la propiedad. Sin embargo, los sistemas de la ley civil no toman en cuenta los abusos que no han podido atestiguar, tales como el robo o el control explotativo. Y por lo tanto, dejan a los accionistas públicos en un sistema de propiedad dispersa expuesta a una situación de ganar y tomar todo, mientras que los perdedores recrean como expectativa una futura expropiación.

El cuestionamiento será determinar si la globalización está dejando beneficios y ganancias netas a los países, ¿por qué entonces no emplean estos excedentes del producto interno bruto para compensar a los perdedores y por lo tanto, disminuir las resistencias? Pero el sistema se ha diseñado para operar exactamente al revés: la trasferencia de los excedentes de los países menos desarrollados a los más desarrollados se garantiza mediante el diseño y aplicación conjunta de políticas.

Precisamente la privatización crea tal sistema de propiedad dispersa de tal forma que facilita estos abusos. Una privatización rápida sin acompañarse de una protección minoritaria y una adecuada exposición de estándares conducirá a la expropiación y a la búsqueda de rentas. La privatización es modelada como una política incierta debido al problema de información asimétrica porque los inversionistas no tienen certeza de que un gobierno determinado sea populista o está comprometido con programas de privatización. La información asimétrica entre los diferentes agentes económicos facilita que otros agentes incurran en oportunismo, como cuando se oculta información relevante para terceros, dando lugar a que surja el daño moral.

Los gobiernos orientados hacia el mercado pueden ser desplazados por gobiernos con orientación socialista. Estos tienen como programa expropiar las utilidades de los procesos de privatización (Perota, 1995) Desde el punto de vista populista, las privatizaciones de los bienes públicos pueden significar retrasos sociales considerables y una “racionalidad ética insostenible” de acuerdo con Benítez (1998), en la medida en que limiten los beneficios sociales. La orientación, apunta este investigador, debe ser hacia la eliminación de los factores que han hecho ineficientes a las instituciones responsables, a la recomposición de la sociedad más que a la racionalización del mercado. Es la sociedad local y regional uno de los actores sociales promoventes del desarrollo que puede ser más equilibrado y equitativo. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Por lo tanto, la provisión eficiente de los bienes públicos por el Estado o por la sociedad civil no pueden actuar los mecanismos de la competencia generadores de los bienes privados (Samuelson, 1954).

Los gobiernos populistas no pueden resistir ni enfrentar las presiones sociales para redistribuir los beneficios de las empresas, ya sea mediante la interferencia en las operaciones, cambiando el medio ambiente regulatorio o bien haciendo reversibles los procesos de privatización. Los motivos de un gobierno populista para privatizar son el obtener dinero y adquirir la opción políticamente valuable para redistribuir el valor de la

empresa después de la privatización. Los beneficios económicos potenciales no son motivos porque no pueden apoyar la privatización en el futuro por razones políticas. Los gobiernos populistas están motivados para mal representarse a sí mismo porque perciben que el compromiso incrementará los ingresos y motivará a los administradores a mejorar el valor de privatización de las empresas, resultando en un mayor valor para la redistribución.

En el otro extremo, los gobiernos que están comprometidos con los programas de privatización, no expropian las utilidades derivadas de los esfuerzos privados. Los beneficios económicos derivados de la privatización incluyen la reducción de la interferencia pública en la asignación del valor de la empresa, la iniciación de la reforma económica como resultado de la disciplina del mercado, el desarrollo del mercado de capitales domésticos, el acceso al capital foráneo y el incremento de los ingresos para el gobierno. Hasta ahora no se ha demostrado que exista una relación directa entre la liberalización de mercados de capitales y el crecimiento económico. La volatilidad de los mercados de capitales limita el crecimiento económico e incrementa los niveles de pobreza. No planean interferir en el futuro y están dispuestos a enfrentar la redistribución del riesgo asociado con pequeñas ventas parciales (Dones, et al, 1999).

La gran falla de los científicos sociales, los formuladores de las políticas públicas y de los líderes es el diseño de un sistema económico y social que sostenga los ecosistemas mundiales y provea de las condiciones morales decentes para el desarrollo social y el crecimiento económico. De hecho, los procesos de diseño y puesta en práctica de políticas públicas eficientes y eficaces, capaces de lograr el crecimiento económico y el desarrollo social, sigue siendo uno de los grandes retos de políticos, burócratas y científicos. Los tomadores de decisiones y formuladores de planes de desarrollos deben estudiar las necesidades expresadas y manifiestas de la población a quienes deben de beneficiarse. Las necesidades a satisfacer se relacionan con el consumo.

Es en este sentido que Galbraith (1962) argumenta que el requerimiento final de la planeación moderna del desarrollo es que tiene una teoría del consumo, el punto de vista de que la producción es últimamente sirve para determinar que tipo de consumo debería ser planificado. La aplicación de políticas públicas tiende a producir sesgos que favorecen a determinados grupos sociales. Los burócratas pueden manipular los objetivos de la política para ajustarlos a las condiciones contextuales y ambientales, o bien para beneficiar y proteger los intereses de determinados grupos o individuos. El cuestionamiento de cómo organizar un sistema económico de tal forma que el desarrollo tenga lugar, sin que se deteriore el medio ambiente, en el cual estén representados todos los intereses, incluyendo los futuros, es, por tanto, un cuestionamiento no fácil de contestar.

Los ámbitos de aplicación de los valores económicos (economía) y los valores morales (ética) tienen que ser complementarios para dirigir el actuar humano de los actores económicos, cuyo principal problema es determinar hasta qué grado es sostenible la racionalidad económica como único criterio de eficiencia. De la teoría pura de la disciplina económica emergen fallas y deficiencias de una lógica económica basada en la competencia y la eficiencia y la lógica social de la justicia, las cuales se han hecho obstinaciones fatales. Sin embargo, pueden resultar altamente cuestionables los muchos estudios hechos en países avanzados y no avanzados concluyen que el mercado trabaja mejor si los gobiernos se mantienen fuera de la economía.

Debido a los cambios económicos y políticos de los últimos años, los términos mercado libre y democracia, se utilizan como sinónimos y se enfatizan con la frase "democracia de mercado", aunque los vínculos del mercado son invisibles y los constreñimientos de los mercados sobre la democracia son muchos y peligrosos. La restauración de la idea de la "mano invisible" del mercado a través de elecciones individuales agregadas que buscan la satisfacción de sus beneficios individuales, convierte a los mercados en contractuales y no en comunitarios.

Una política crítica debe respaldar la idea de un trabajo relacionado con la comunidad y la forma en que la comunidad debe tomarlo. De acuerdo a Putnam (1993: 183), "la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político". La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. El lugar del mercado ha sido seriamente desestimado como una institución social, especialmente por aquellos preocupados por con los problemas de 'dominación del productor' que ha tenido efectos de reducir a los consumidores en 'compradores enajenados de mercancías fetichizadas' (Brown, 1997)

La consolidación democrática requiere de instituciones del Estado, las cuales son simultáneamente responsivas a las necesidades de los agentes individuales y capaces de proveer bienes públicos a la sociedad, tales como la ley universal, la defensa nacional, el control monetario y fiscal, y el bienestar social. La habilidad del Estado para ofertar estos bienes depende de su coherencia interna, la cual se refiere a las características organizacionales del Estado para alentar los acuerdos internos y un sentido común de propósitos entre ministros y burócratas.

La coherencia interna que permite al Estado proveer estos bienes debe ser balanceado por el involucramiento de una red informal de conexiones institucionalizadas entre los actores privados y las agencias estatales (Bartlett and Hunter, 1997). Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Un Estado responsivo no siempre es el más profesionalizado, como el caso de los Estados Unidos que es más responsivo y menos profesionalizado que otros Estados.

Además, la sociedad que emerge de un proceso simultáneo de internacionalización y descentralización de las instituciones públicas, no tiene límites claros y necesita de un sistema de gobierno societal multicentrado que permitan el traslado del poder económico, político y social. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición".

La descentralización es el arreglo más eficiente cuando las externalidades y las regiones son heterogéneos, para la provisión de los bienes públicos. De acuerdo al teorema de descentralización de Oates (1976), si las preferencias son geográficamente diferenciadas, las asignaciones son más eficientes si se descentraliza políticamente el proceso.

Por otro lado, Carbonara (2000) encontró que una mayor descentralización tiene un impacto positivo en la corrupción y eleva las posibilidades individuales para aceptar corruptelas a partir de la premisa de que la organización interna de las instituciones influye la propensión de los miembros a aceptar la corrupción. Sin embargo, una descentralización con altos niveles de monitoreo pueden ayudar a controlar la corrupción a pesar de que crea problemas de agencia.

Consecuentemente, afirma Sorensen (1997), la habilidad de liderazgo político tradicional para gobernar y controlar a la sociedad se debilita considerablemente. Debemos aprender a gobernar mejor y sobretodo, debemos aprender como gobernar mejor juntos, ha dicho Kofi Annan, Ex-Secretario General de las Naciones Unidas. No solo carecen los gobiernos de los países en desarrollo de recursos financieros para satisfacer las demandas de la gente, también carecen de la necesaria autoridad para la persecución de metas de carácter político, de tal forma que no tiene posibilidades de cumplir con las promesas electorales.

Abrazar la democracia no implica nada más aceptar el pluralismo político o elecciones libres y limpias, sino también la promoción de mecanismos de participación ciudadana y transparencia en los asuntos del Estado. Los mecanismos actuales de participación pública son inadecuados y para dejar de serlo requieren de reformas de las denominadas de segunda generación y establecimiento de nuevas institucionales, a efecto de que se faciliten los procesos de participación y deliberación ciudadana. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. Las reformas de esta segunda generación se orientan a profundizar la reforma del Estado, la reinvención de las instituciones políticas y el desarrollo institucional, dentro de un marco de crecimiento económico y consolidación democrática.

El Estado de bienestar dirige la economía y la sociedad usando una variedad de instrumentos, tales como el poder, la ley, el dinero, la información, etc., pero quizá un Estado de bienestar que busque transformar a su sociedad, tiene que apoyarse en la regulación de una política del conocimiento estratégico explicito o codificado y tácito o personal. El Estado de Bienestar toma como obligación la provisión de bienes asistenciales. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado.

Pero bajo condiciones de un Estado basado en la ley y en una economía de mercado, los dos medios de control más importantes son la ley, por su naturaleza de unión y el dinero por su poder de compra para el Estado, la economía y la sociedad (Köning, 1998). El modelo de Estado de Bienestar a escala global o planetaria es un proyecto que alienta el rescate de lo mejor de la sociedad humana en contra de declarar su desaparición para beneficiar la maximización de los intereses bursátiles de las grandes corporaciones transnacionales.

Además, los mercados no están diseñados para reemplazar las funciones que realizan las comunidades democráticas y finalmente no aseguran el bien común y destruyen el sentido de comunidad. La emergencia de las nociones de bien común y utilidad pública, confirman la existencia de un sentido de comunidad y una conciencia de la necesidad de la existencia del Estado.

Los arreglos institucionales que conducen a la provisión de bienes colectivos y de propiedad común son ampliamente conocidos. No olvidemos sin embargo que Aristóteles se refiere explícitamente a la propiedad común de los hijos en la República de Platón, criticando el uso de la palabra "todos" ("los hijos de todos") a la manera que hizo Rousseau al distinguir entre "la volonté de tous" y "la volonté générale"). La palabra *panta*, o nuestra "todos" es, según Aristóteles, un paralogismo, pues decir que algo es de todos significa a veces que es de todos colectivamente y otras veces que es de cada uno. "Soy del pueblo, pueblo soy, y adónde me lleva el pueblo voy", decía la bonita pero manipulativa canción cubana allá por los 60. "El pueblo" al final significa Fidel Castro. una pura metonimia.

Además, los arreglos institucionales pueden resolver los conflictos de intereses existentes entre los agentes económicos y los actores políticos. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente ala reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación.

Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos. Por lo tanto, no tiene que ver con la limitación de las funciones del gobierno y del Estado sino con el confinamiento de la misma democracia. De acuerdo con Barber (1998), los mercados necesitan democracia, pero ésta necesita algo más que sólo mercados.

El pensamiento económico liberal ha conjurado la concepción de un mercado natural, pero la teoría democrática depende de la invocación de una sociedad civil espontánea la cual encuentra su propia base en una comunidad autogobernable, independiente y separada del Estado, tal como lo conceptualiza Meredyth, (1997) en sus trabajos. La sociedad civil se organiza en forma autónoma a la organización del Estado. La relación que existe entre el Estado y la sociedad civil, es una relación de traslado del poder de las elites burocrático-administrativas a los individuos mismos. Ambos, estado y sociedad son dos actores sociales importantes en la promoción del desarrollo que puede ser más equilibrado y equitativo. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes.

El Estado pierde el mandato de los ciudadanos el cual era independiente a la subjetividad de la elite gobernante. El ciudadano individual o colectivo, como sujeto de deberes y obligaciones, actúa como personalidad o como parte orgánica de una asociación. La autoridad despersonalizaba la obediencia al mandato ciudadano mediante el arreglo institucional que legitimaba las acciones del Estado, separando la esfera pública de la privada. Lechner (2000) sostiene que las políticas de desarrollo tienen que manejar complementariamente la modernización y la subjetividad. Ahora la prominencia de la sociedad civil invade la esfera pública y se apodera de la subjetividad de social en el espacio público. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil.

La sociedad civil es una forma natural y orgánica de autoorganización de la sociedad. La sociedad civil se organiza en forma política fuera del Estado. Sin embargo, los mercados no pueden lograr su propia autorregulación, mucho menos son capaces de regular una sociedad democrática. Sería un gran error suplantar las relaciones sociales por las relaciones del

mercado, aunque en sí mismas, las organizaciones civiles no representan ningún reto para las corporaciones multinacionales que gobiernan el mercado global. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

Además las relaciones sociales se manifiestan en forma diferente en el mercado que en la jerarquía. Para que el mercado sobreviva necesita el control y la regulación de las fuerzas cívicas y democráticas de una sociedad. El mercado "necesita a la democracia más de lo que la democracia necesita de él, pero mientras que la democracia cultiva mercados libres, los mercados muchas veces no logran cultivar democracia" (Barber, 1998)

A pesar de que las tesis de las "lógicas partisanas" desprecian el papel que puede jugar el Estado democrático en el cultivo del mercado, la reflexión teórico-práctica de lo público, considerando que esta discusión va más allá de aquella relacionada solamente con el Estado o el sistema político, que están perdiendo su legitimidad y credibilidad y se incrementan los niveles de inestabilidad. El Estado democrático es la expresión de la voluntad racional de la gente o de la comunidad política, la cual según Aristóteles, la clase media es la comunidad política mejor y que puede darse una mejor forma de gobierno. Para legitimarse, se asume, el poder gubernamental y la experiencia deben emanar de la voluntad política y su facultad racional (Hunter, 1994) La evolución de serios problemas del poder popular es la razón fundamental de la actual intensificación de problemas de legitimidad.

En realidad, la actividad popular y las políticas tienen una conexión demasiado débil a escala internacional. Este estado de situaciones apunta a la necesidad de considerar nuevos medios de apoderamiento popular del sistema político, en otras palabras, la tarea de desarrollar nuevas instituciones de gobierno democrático para asegurar que el poder político se mantenga en las manos de la gente, en una sociedad multicentrada y sin límites (Sorensen, 1997). En un sistema democrático, la organización de los grupos de interés y la política popular que se despliegue conduce a procesos legislativos, los que permiten lograr el apoderamiento popular del sistema político.

Cada vez más, las organizaciones civiles interactúan con el gobierno y participan en las decisiones gubernamentales y en el diseño e implementación de las políticas públicas. El fortalecimiento de la sociedad hará posible que las acciones del gobierno sea más transparentes. La sociedad local y regional es uno de los actores sociales promoventes del desarrollo más equilibrado y equitativo.

A pesar de la fuerza que tienen las organizaciones civiles como retórica política, se dificulta trasladar estas convicciones en programas de gobernabilidad, de tal forma que puedan alentar una mayor libertad con una redistribución de responsabilidades, de mayor igualdad política en una comunidad donde existen desigualdades económicas de poder, experiencia y posición social. De acuerdo a Putnam (1993: 183), "la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político". La exigencia de una rendición de cuentas y responsabilización de los gobernantes puede provenir de una sociedad fortalecida mediante la implementación de instrumentos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa, etc.

Tan pronto como el gobierno legítimo se identifica con principios pre-sociales, o con la expresión de la voluntad popular, la retórica política de ciudadanía y participación cívica,

tiende a permanecer a cierta distancia de las operaciones, imperativos y problemas de la gobernabilidad en muchos Estados modernos. Existe una relación compleja entre el fenómeno de globalización, Estado, sociedad civil y ciudadanía difícil de enmarcar teóricamente para realizar y validar análisis, sobretodo cuando se desea contextualizar a manifestaciones de localidades y comunidades específicas.

Las relaciones entre el estado y la sociedad implican que el estado ejercite el poder a través de instituciones en un determinado territorio con una relativa autonomía en relación a otras causas de la vida social. La autonomía local se asume cuando los ciudadanos están mejor preparados para juzgar las acciones del gobierno que decide asuntos que le competen y que por lo tanto son responsables de sus acciones ante la comunidad. El ejercicio de la ciudadanía se asume a través de un nuevo pacto social que explicita responsabilidades y obligaciones que refuerzan un Estado de Derecho. Las sanciones son el corolario usual de la responsabilidad

Por otro lado, cuando los espacios económicos se entrelazan con los territorios soberanos, se requieren diferentes formas de gobernabilidad con diferentes regímenes de contratos legales. Un acercamiento a la gobernabilidad se traduce del macronivel de sectores a un mesonivel de programas y a un micronivel de un oficial tomando decisiones de qué debe hacer (Larmour, 1997). Los impulsos hacia la gobernabilidad transnacional pueden conducir a la formación de algún tipo de Estado supranacional del capital, un Estado que no tiene territorio y que se imponga sobre los Estados territoriales que representan a sus respectivos pueblos y que eligen democráticamente a sus gobernantes, que finalmente tienen que aceptar los dictados del sistema financiero internacional.

En sí, la desterritorialización del espacio estatal está dando lugar a la emergencia de nuevas unidades espaciales. Este Estado global ya puede presentar rasgos de un perfil autoritario, concentrador de decisiones cuya finalidad es imponer y mantener el modelo de dominación política al resto del mundo, aún a costa de métodos propios de una violencia institucionalizada. La presencia de un Estado mundial o global requiere de instituciones económicas, políticas, sociales, judiciales, etc. que resuelvan los diferentes conflictos de intereses que surjan entre los grupos corporativos transnacionales.

Sin embargo, a pesar de que la propuesta del Estado Homogéneo Universal de Fukuyama es utópica, la formación de un Estado mundial o planetario sería la respuesta a una amenaza común a todas las naciones que provenga del exterior, es decir, del espacio biosférico. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de la formación del Estado mundial. El interés soberano del Estado, privilegiado por la agenda doméstica, es considerado como la fuerza que conduce a los Estados soberanos a comprometerse con los intereses globales para obtener el reconocimiento a la interdependencia internacional.

Sin embargo, los gobiernos prefieren competir más que cooperar entre ellos para la obtención de sus propios beneficios. Conforme la globalización avanza, de acuerdo con Dunning (1997), las negociaciones entre los beneficios de la competencia y la cooperación inter-gubernamental, así como también del papel y organización de regímenes económicos supranacionales, pueden esperarse que cambien. Las relaciones de cooperación entre los Estados se constituyen “o para defenderse o por miedo a ser atacados o para sacar algún beneficio” en los términos de Maquiavelo (Grenada, 1987)

La nueva correlación de fuerzas del mercado, la sociedad y el Estado en la globalidad.

La nueva correlación de fuerzas del mercado, la sociedad y el Estado han estado marcadas por varios procesos vinculados a una transición política. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva. De acuerdo con Camou (1992), estos procesos son los de liberalización política, procesos de democratización y de consolidación democrática. La liberación política es un "proceso que vuelve efectivos ciertos derechos que protegen a individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros".

Los procesos de liberación política mediante una transición prolongada, se convierten en el modus vivendi para las elites gobernantes del antiguo régimen (Trejo, 2000) que administran la liberalización desde arriba, por lo que la alternancia del poder es la condición necesaria para el cambio de régimen. Las elites gobernantes de los países menos desarrollados generalmente han servido de intermediarias entre el poder externo dominante y la población local. No obstante, la tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966). Las elites gobernantes trabajan fuerte para anticipar las reacciones, por lo que los procesos de realimentación, criticismos, resultados electorales, etc. Son mas importantes que los castigos posteriores.

Los procesos de democratización del Estado son aquellos que incorporan los miembros de una sociedad a la participación en la toma de decisiones de carácter políticas, económicas y sociales a través de mecanismos institucionales que permiten el avance plural de la sociedad. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

Las olas masivas de democratización desde la mitad de los setentas ha causado en los institucionalistas clásicos que se preocupen por dos temas de importancia considerable para la constitución y construcción y el entendimiento de las precondiciones de la estabilidad democrática, el debate sobre las ventajas y desventajas de los sistemas parlamentarios y presidenciales y cómo mezclar sus características institucionales los efectos disfuncionales en las instituciones de los tipos puros.

Tanto el estado como la sociedad son dos actores sociales del desarrollo de los pueblos. En este sentido, la democractización de la sociedad implica una transformación radical socialista. Las repercusiones negativas de la implantación de las reformas estructurales han debilitado los mecanismos de la gobernabilidad democrática, como la responsabilidad y la rendición de cuentas y las instituciones políticas. Sin embargo, es muy difícil alcanzar las metas a pesar de que existan mecanismos institucionales avanzados, como por ejemplo, en la transparencia de recursos empleados o el empleo de instituciones que formalicen las formas democráticas como la iniciativa legal y el referéndum para la aprobación o el rechazo de las decisiones del gobierno en asuntos de política fiscal, por ejemplo.

Los procesos de democratización también deben darse en el plano económico, mediante formas de participación organizacional y empresarial en los procesos de producción, distribución y consumo de satisfactores que la sociedad demanda, incluyendo los servicios públicos. El Estado debe concentrarse en los campos de su competencia para garantizar a la sociedad el resguardo de los intereses colectivos de las actividades empresariales y las condiciones del mercado.

De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales. Las competencias de los diferentes niveles de gobierno deben ser delimitadas entre las que son exclusivas y las que son concurrentes. Al decir de Petras (2001d) la competencia "en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados". El Estado es uno de los actores sociales que puede promover un desarrollo más equitativo y justo.

Los sistemas democráticos en todo caso no pueden funcionar sin que se presenta la alternancia del poder político. Aunque es claro que la misma democracia surja de una alternancia de poder, lo cual introduce incentivos para formular e implementar políticas públicas más equitativas y eficaces, para limitar el uso discrecional de los recursos y para motivar los procesos democráticos como los medios y métodos efectivos para orientar los intereses de la ciudadanía y dirimir los conflictos existentes. No obstante, la puesta en práctica de las políticas siempre produce sesgos que benefician a ciertos sectores sociales más que otros.

Los procesos de democratización tienen como condición esencial la organización para el cambio político que permitan la construcción de la legitimidad de las oposiciones. La democractización implica en sí misma una transformación socialista. Los operadores de estos cambios políticos de gran escala tiene una limitada oportunidad política para implementarlos en una sociedad que es sensible. Los procesos de democratización están caracterizados como cambios en el patrón legitimario de normas que regulan el acceso, distribución y ejercicio del poder político. La democracia tiene que ver con las funciones que juegan los individuos en su gobernabilidad, la cual se apoya en la legitimación como un proceso que valida las decisiones institucionales.

La legitimidad de la gobernabilidad es determinada por el grado en el cual aquellos deciden ejercitar el poder en cumplimiento con los balances de los procesos correctos. La ilegitimidad en la gobernabilidad debilita el orden público y el consentimiento en ser gobernados (Franck, 1999) La transición política altera el ordenamiento del sistema de legitimación que fundamenta el sistema democrático del régimen y las prácticas de los actores. Kilson y Cohen (1992) afirman que lo que uno ve no es siempre lo que se consigue, que la democratización puede producir regímenes ostensiblemente democráticos pero sustantivamente plutocráticos.

En los procesos de consolidación democrática, "las reglas del juego político se institucionalizan". En un Estado democrático de Derecho, señala Acuña (1999), "... los valores democráticos son mucho más que procedimientos para acceder al poder" Es a la vez concierto de principios y valores efectivos que desembocan en su ejercicio. El cual en prácticas y hábitos cotidianos en los que el escrutinio verás de los procesos de actuaciones públicas han de ser una cuestión normal. De otro modo el ejercicio del poder será regido por

simulaciones frecuentemente lesivas al ciudadano". El Estado democrático deja de serlo cuando se impone la fuerza o se limitan los derechos y valores democráticos.

El problema de la gobernabilidad es en parte un problema de gobierno, pero también del sistema político y de la sociedad. Por lo tanto, no se trata solamente de que el Estado regule las actividades del mercado, ni tampoco de que el mercado se libere de la acción del Estado, aunque es importante reconocer la legitimidad de la aplicación de ciertas limitaciones sociales y políticas a la acción del mercado.

La propuesta es de tener un mercado fuerte, una sociedad fuerte y un Estado fuerte como condiciones necesarias para esta nueva correlación de fuerzas. Ambos, estado y sociedad son actores sociales que promueven el desarrollo. Existe un reconocimiento generalizado de que un desarrollo exitoso requiere de un Estado fuerte. Un Estado fuerte es una condición de una economía democratizada de mercado. Desde el punto de vista de Przeworski (1997), se requiere "diseñar mecanismos institucionales específicos que induzcan a los diversos agentes (políticos y burocráticos, empresarios, o trabajadores) a comportarse de un modo colectivamente benéfico".

La reforma del Estado tiene como elementos la "responsividad" de las políticas públicas a las demandas y necesidades de los ciudadanos, fortalecer las instituciones y articular los principios de gobierno tales como la participación, la responsabilidad o accountability, la transparencia y la efectividad (Santiso, 2001).

La reforma del Estado supone reconsiderar el papel que deberá asumir "el compromiso de la solidaridad, la equidad y el equilibrio interterritorial, a la vez que implica ineludiblemente el fortalecimiento institucional del municipio como instrumento idóneo para cerrar la brecha social que puede abrir en la comunidad la exclusión de colectivos a la vez que asumir el papel de articulador y promotor de las expectativas y deseos de la comunidad local" (DHIAL, 2001).

El gobierno municipal puede establecer determinadas reglas del juego en el ejercicio de su autonomía, la cual, de acuerdo a Ruíz Blanco (1993: 120) comprende "la elección de sus propias autoridades (autonomía política); la libre gestión en las materias de su competencia (autonomía normativa); la creación y recaudación de impuestos (autonomía tributaria) y la inversión de sus propios ingresos (autonomía administrativa)". De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes. La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

El fortalecimiento de los gobiernos municipales requieren de una mayor autonomía financiera y administrativa, la participación ciudadana y de la sociedad, el manejo eficiente de sus recursos, proyectos intergubernamentales e interinstitucionales, etc. La autonomía municipal se clasifica en política y administrativa. Es autonomía política la que se refiere directamente al ejercicio del poder de elegir y gobernar y la autonomía administrativa se refiere al funcionamientos de las organizaciones. De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes. La autonomía

administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

Los municipios necesitan de políticas que articulen sus esfuerzos locales con los esfuerzos nacionales. La ciudadanía, organizaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales, organismos empresariales, etc., como actores de la sociedad civil, deben ser involucradas por el gobierno municipal para participación en los procesos de tomas de decisiones para la formulación y ejecución de políticas públicas orientadas a estimular el desarrollo local y regional

La redefinición de las funciones de los gobiernos municipales requieren del compromiso de servidores públicos capaces de formular e instrumentar estrategias de desarrollo a largo plazo. La creación de un sistema democrático en el ámbito del gobierno local y municipal, permitirá la participación estrecha de la ciudadanía en los asuntos de la gestión pública y permitirá el fortalecimiento de la identidad comunitaria. La gestión pública es un factor importante en la promoción del desarrollo comunitario, aunque los gobiernos locales no reconocen su responsabilidad como actores para tomar decisiones relacionadas con la promoción del desarrollo local.

La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados. Esta identidad comunitaria se ve reforzada por la expresión de los intereses de los ciudadanos en los espacios locales, nacionales y transnacionales. Es en el espacio global que tienen lugar los fenómenos de la globalización en un contexto de fragmentación. La fragmentación del espacio estatal en regiones y localidades constituye una fuerza que se contrapone a los procesos de globalización y que generan fuertes tensiones, las cuales resultan en lo que Torrijos (2001) denomina la dispersión internacional.

La reinvención política del gobierno local tiene su expresión en el fortalecimiento espacial de las competencias del municipio en materia de desarrollo. Las competencias exclusivas y las competencias concurrentes deben ser delimitadas. Las tres relaciones más importantes en la reforma del Estado, son aquéllas de regulación que se dan entre los agentes privados y del gobierno, las relaciones de vigilancia y supervisión que se dan entre los políticos y los burócratas y las relaciones de responsabilidad y rendición de cuentas (accountability) que se dan entre los ciudadanos y los políticos.

Las agencias que controlan la validación y legalización de los actos del poder ejecutivo, en lo que se denomina accountability horizontal (Feldman, 2001), están estrechamente vinculadas con la calidad de la democracia y la contribución de los distintos actores a la gestión política de la gobernabilidad democrática. La burocracia debe mejorar los mecanismos de balanzas y cuentas para hacer más efectiva la rendición de cuentas mientras que los políticos deben tener más representación de una ciudadanía más participativa. A su vez, los ciudadanos deben tener más capacidad de control sobre las actividades de los políticos.

Accountability se traduce como responsabilidad o responsabilización para rendir cuentas. Este concepto de responsabilidad es equivalente al término aglosajón de accountability o

rendición de cuentas, ya que la promoción de la ética es fundamentalmente un asunto individual, es una práctica buena para cada individuo, la responsabilidad implica controles y sanciones. Cualquiera que sea el tipo de control solamente tiene que ver con las funciones del oficial administrativa que se relaciona con esa ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales caen dentro de este campo.

La inexistencia del término en algunas culturas implica la falta de una cultura política de rendición de cuentas. La rendición de cuentas como acto que obedece a la conciencia de un mandato moral, ético, político, jurídico, etc., para rendir cuentas. La rendición de cuentas de la burocracia político-administrativa es el inicio para que mediante el ejercicio de los derechos republicanos de defensa del patrimonio económico público se reinvente la república.

Por lo tanto, la reforma del Estado debe partir de una visión de su papel en el nuevo modelo de desarrollo. La primera generación de reformas estructurales y de estabilización macroeconómica ha enfrentado a la sociedad con una economía de mercado y abandonó la participación ciudadana y lo social. Así, en función de los procesos de cambio de la reforma del Estado, se hace necesario plantear el papel de la sociedad civil, de tal forma que promueva la participación activa de los ciudadanos bajo nuevas formas de organización que permitan las expresiones de sus anhelos políticos, económicos y sociales.

Se propone la formación de un Estado ampliado como una esfera o espacio de acción donde concurran y colaboren en forma sostenida las instituciones de las esferas del Estado y la sociedad civil para impulsar proyectos que sean comunes, sin que ninguna pierda su identidad, la cual se manifiesta y s expresa en las diferentes instancias espaciales. La continuidad de las reformas de la primera generación en una segunda generación tiene que remover los obstáculos de los modos de gobierno utilizados para profundizar la agenda de la reforma del Estado, la reforma política y la intensificación del desarrollo institucional. La reforma política implica la reforma del Estado y la reforma de las instituciones de gobernabilidad. La tendencia hacia las reformas en los gobiernos municipales y en su autonomía se expresa en las reformas constitucionales en muchos países del mundo.

Las nuevas reformas deben fortalecer la institucionalización y no la desinstitucionalización de la participación social como base de la democracia para llegar a la economía. Por lo tanto, puede argumentarse que las constelaciones constitucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables. Kaiser (1997) propone tres principios básicos los cuales pueden explicar los procesos y resultados de ingeniería constitucional: el conservadurismo institucional, la dependencia institucional y el aprendizaje institucional. Mientras que el conservadurismo institucional y las propuestas dependentistas institucionales nos conducen a esperar que la evolución de los sistema políticos democráticos exhiben diferentes patrones, la propuesta de aprendizaje institucional apunta a la convergencia. La investigación en la ingeniería constitucional ha tomado nota de los efectos de difusión, tales como la globalización de las comunicaciones que enriquece las bases cognitivas de las cuales escoger.

De acuerdo con Kaiser (1997), la hipótesis del conservadurismo institucional sostiene que las reformas constitucionales en las democracias son relativamente poco comunes, no debido a factores institucionales sino al cálculo de los actores políticos, solamente cuando una gran crisis ocurre, ya sea por un abrupto cambio de factores contextuales o a través de un deterioro

dramático de la satisfacción de la política pública, es una ventana de oportunidad abierta para la persecución de planes de reformas. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas propuestas son preferidas aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible.

La propuesta de aprendizaje institucional sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional.. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma.

La economía, la sociedad y el Estado funcionan eficientemente cuando se dan las instituciones que se requieren para la gobernabilidad. De hecho, los contenidos de un pacto de gobernabilidad deben quedar trazados en la agenda de la reforma del Estado, de tal forma que vincule la gobernabilidad con la democracia en la transición del Estado, que aliente la participación ciudadana como base de los procesos de democratización. Esta transición entra en una paradoja (Loza Otero, 1997) cuando el orden democrático tiende a ser más legítimo, entonces las convenciones tradicionales que le vulneran no son del todo ilegítimas.

Sin embargo, este modelo sigue a las economías fuertemente desarrolladas y orientadas por un mercado también fuerte en donde los actores tienen un amplio margen de alternativas para la contestación democrática (Rueschemeyer et al, 1992) Mientras esto es real para los países occidentales del Norte, sin embargo, la realidad parece ser otra para los países menos desarrollados y del Sur. En muchos Estados no hay acuerdos en torno a su naturaleza y tareas propias, sus funciones, obligaciones y límites frente a los desafíos de la globalización en sus dos vertientes, como proceso y como ideología. Como ideología, los procesos de globalización tienen que ser combatidos primeramente en este plano.

Desde la perspectiva ideológica, la globalización sostiene las fuerzas que buscan extender su influencia, presentando las transformaciones y cambios que promueven como “inevitables” de una “civilización de negocios transnacionales”, o de “negocios contemporáneos” como suele llamársele también. Ambiciosos grupos con poder financiero y político se frustran de los procesos de globalización cuando ideológicamente chocan contra las instituciones nacionales.

En cuanto los procesos de globalización avanzan inexorablemente, los sistemas políticos entran bajo intensas presiones ideológicas para modificar sus instituciones y converger con las nuevas instituciones globales. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional.

Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Pero la causa principal que amenaza el derrumbe ideológico del sistema capitalista mundial es la amenaza inherente de inestabilidad de los mercados financieros globales.

Así concebida, la posición ideológica de los países avanzados se centra en la emergencia de un "Tecn.-nacionalismo" (May, 1997) El rol de la estructura del conocimiento estratégico en la economía política global está siendo ampliamente reconocida. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado.

El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. El futuro pertenece a las economías del conocimiento, con implicaciones en las transferencias de tecnología y de instituciones, mediante métodos verticales y horizontales. La restricción vertical al mercado siempre emerge en apoyo del nombre del capital. Los métodos horizontales facilitan el componente tácito o personal del aprendizaje de conocimientos del desarrollo local y general.

Los recientes debates relacionados con la competitividad nacional en un sistema capitalista global, se han centrado en el papel del conocimiento estratégico en las actividades productivas y de servicios en organizaciones domésticas y multinacionales. Para Porter (1991), la competitividad, las empresas tienen que competir en un entorno formado por cuatro atributos que estimulan o limitan la creación de ventajas competitivas. Estos atributos son la disponibilidad de los factores de producción, la demanda interna, la estructura y estrategia de la rivalidad de las empresas y los sectores conexos. Esta movilidad de los factores de la producción conlleva un enfoque emprendedor y de innovación que modifican constantemente las estructuras de la economía, como una de las características de los procesos de globalización.

La teoría económica moderna muestra que la producción y distribución socialmente óptima del conocimiento, en donde el costo marginal de proveer conocimiento a otro consumidor es casi cero. Sin embargo, el óptimo de Pareto no optimiza la producción y la distribución del conocimiento, debido principalmente a los derechos de propiedad intelectual que bloquean el acceso libre.

Sobre todo, las compañías multinacionales que de-localizan los aspectos basados en el conocimiento estratégico de su propia empresa, están en mejor posición para capturar los productos del conocimiento que les permitirán mantenerse competitivos, ya sean a través de inversiones conjuntas o de acceso a nuevos archivos de investigación y desarrollo. Los acuerdos multilaterales entre varios Estados se realizan con la participación de las grandes corporaciones transnacionales.

Son las empresas multinacionales y transnacionales las que realizan la mayor parte de la investigación y desarrollo del mundo. Recientes investigaciones reconocen la importancia del conocimiento tácito, el cual en sí mismo representa un reto a la efectividad del mercado. Esto porque trae consigo todos los retos de un conocimiento encubierto en las relaciones principal-agente. En parte, porque la transferencia de éste tipo de conocimiento es más costosa,

mientras que por otro lado, las formas codificadas del conocimiento continúan siendo un factor importante en el crecimiento económico porque generan retornos más altos.

La habilidad para el establecimiento de la agenda sobre la ideología en un sistema global, la regulación de ciertas elecciones de las políticas, el reconocimiento de ciertos espacios son los temas centrales en el debate sobre el conocimiento en la economía política global, considerando que la economía del conocimiento es el futuro de la economía. Es precisamente en un contexto fragmentado en el espacio global donde ocurren estos fenómenos de la globalización.

Carece de sentido esperar que todos los gobiernos apliquen uniformemente un conjunto de reglas a pesar de sus bastantes diferencias en circunstancias sociales y herencias culturales, como en el caso de organismos multilaterales que pretenden haber descubierto una economía neutral en una sociedad y cultura universales y que funcionan antidemocráticamente y no rinden cuentas a nadie. Es claro que el dominio ideológico no estructura del todo la actual elección de la política.

Por lo tanto, podemos hablar de dos formas de procesos de globalización, una que avanza desde arriba y otra que surge de abajo, desde los movimientos sociales y populares que reaccionan a la globalización funcionando en red, aunque a veces los mismos procesos de globalización ponen en peligro su propia resistencia institucional. Estas nuevas formas de organización de los movimientos tratan de equilibrar las relaciones entre las instituciones locales y las globales, evitando la dependencia vertical y autoritaria, aunque los resultados están muy lejos de lo esperado. Thoreau ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución , como el derecho a rechazar la obediencia, lealtad y a resistir un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables.

Los movimientos sociales que surgen desde abajo se organizan por grupos que se coordinan en función de afinidades de nuevos actores sociales que se oponen a la marginación y exclusión y exigen una ampliación de la ciudadanía asumida a través de un pacto social que explicita obligaciones y responsabilidades frente a un Estado de Derecho. Las sanciones son el corolario usual de la responsabilidad

Distingue Aristóteles entre la *homonoia* o concordia, el acuerdo que reina entre los ciudadanos y la mera *homodoxía* o igualdad de pareceres. Pues no se trata de que los ciudadanos opinen lo mismo de cualquier cosa, sino de la misma cosa. La concordia es la amistad de la ciudad. Es el mismo Estado uno de los actores sociales que debe impulsar el crecimiento económico y el desarrollo en una forma equitativa y equilibrada entre las diferentes regiones. Muchas de las acciones de los movimientos sociales son actos de rebeldía para no aceptar las desigualdades que son efectos de las políticas públicas.

La concordia supone un diálogo o deliberación entre los ciudadanos. Solamente dialogando puedo saber qué intereses nos igualan y nos distinguen y podemos obrar coordinadamente y no cada uno por su cuenta y riesgo, como cuando compramos o vendemos acciones en la bolsa. Esto es comparable al paralelogramo de fuerzas de la física. Si cada uno tira de un cuerpo para un lado distinto, el cuerpo se mueve en una dirección que es distinta de la deseada por cada uno. Ahora bien ese diálogo coordinador de nuestras acciones no es otra cosa que la actividad que estudia Aristóteles en su Retórica. Hablando se entiende la gente, decimos. Pero hablando bien y con entendimiento del otro. La Retórica es el *Organon* de la

acción común, de la política. La Retórica no es tanto el discurso de la verdadero cuanto el discurso de lo bueno.

Los movimientos de la "globalización desde abajo" se organizan bajo la consigna del pensamiento local para organizar la acción global y establecer los cambios necesarios en el ámbito local. Evans (1998)describe tres tipos de movimientos transnacionales contra la hegemonía de la ideología del libre mercado: Redes de apoyo para la defensa de los derechos humanos, de la mujer y defensa del medio ambiente. Redes de trabajadores y consumidores y los movimientos locales. Los movimientos sociales organizados y sus reivindicaciones se hacen públicos a través del ejercicio de la acción global de intercambio y difusión de la información. Muchas de sus expresiones son actos verdaderos de rebeldía en contra de las imposiciones de una política económica cuyos resultados han sido los aumentos de las desigualdades y la degradación ambiental.

Esta "globalización desde abajo", también llamada "globalización contra-hegemónica" es una razón poderosa para que las elites económicas y financieras de los procesos de globalización, rediseñen las instituciones a efecto de que se establezca un sistema de gobernabilidad que beneficie el desarrollo económico y social de todos los ciudadanos. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. Esto es, el surgimiento de una nueva ciudadanía global tiene como base la emergencia de los movimientos contra-hegemónicos de la globalización, cuyo objetivo principal es "la reducción de las iniquidades y desigualdades" y asumen "una lógica instrumental y totalizante de funcionamiento, hegemonizando la crítica y características que demandan los grupos locales, en su diálogo y enfrentamiento con las grandes transnacionales".

Existe una nueva relación que se plantea entre los nuevos movimientos sociales y la nueva "ciudadanía extensiva" que está surgiendo desde los ochenta como formas novedosas para reclamar el ejercicio de derechos humanos mediante el ejercicio de la resistencia civil y de una nueva ética. Thoreau ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia y lealtad y a resistir un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables. Los nuevos movimientos sociales se aglutinan favoreciendo el pluralismo y el culturalismo que acepta las diferencias étnicas y culturales de las comunidades pero que tienen las mismas demandas en contra de la explotación de los agentes del capitalismo y por el establecimiento de un verdadero sistema democrático.

Las estrategias de resistencia contra la hegemonía política de la sociedad del mercado global son un aspecto central para la ampliación del avance democratizador de procesos de globalización que en el fondo son antidemocráticos. En la sociedad global del mercado se privilegia el éxito económico por sobre los valores de libertad e igualdad. La globalización de los procesos económicos han dado origen a una globalización de los fenómenos de la sociedad civil mediante la creación de nuevas instituciones o redes que formulan agendas globales. La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales. No obstante, está naciendo una sociedad civil globalizada que se ha manifestado en movimientos antiglobalizadores con cierto éxito relativo, como en el caso de la campaña para la prohibición de minas personales y el movimiento Jubileo para la condonación de la deuda externa de los países más pobres.

No obstante, está naciendo una sociedad civil globalizada que se ha manifestado en movimientos antiglobalizadores con cierto éxito relativo, como en el caso de la campaña para la prohibición de minas personales y el movimiento Jubileo para la condonación de la deuda externa de los países más pobres. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. Por lo tanto, la lista de los criterios de diseño de mercados globales debe extenderse para proteger la autonomía individual por sobre los criterios de un éxito económico que se convierte en el fin mismo del desarrollo, en el valor de redención humana.

El Estado resulta ser una entidad económica y política demasiado grande para ser local y demasiado pequeña para ser global. La globalidad de los procesos económicos impone su estructura a los Estados-naciones y le exige la adaptación de sus instituciones, dando como resultado que se afecte su cohesión como actor en el contexto de la globalización. La adaptación involucra costos de transacción más bajos y más alto los resultados del cambio que la reforma.

Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. Una estructura organizacional del gobierno se basa en una visión acerca de las funciones propias del Estado-nación y las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno.

Su soberanía no tiene la fuerza legal ni política para detener las acciones irresponsables de los agentes económicos que actúan al nivel global, aunque soberanía no sea un concepto antagónico de interdependencia económica, pero de lo que se trata es de imponer el concepto de soberanía consumidora en sustitución de soberanía política. Lo cierto es que el Estado-nación ya no puede controlar los flujos de capital e información que cruzan a través de sus fronteras físicas y culturales. Sería a partir del esfuerzo que hagan los ciudadanos para elevar la productividad de la estructura económica para mantener la soberanía política.

Los debates de la economía política global se centran en las perspectivas del desarrollo de las ventajas competitivas, el desarrollo económico nacional y la “explotación” sobre otro. Naciones y Estados tienen algunas características que son comunes a ambos. La economía política global es una disciplina “inclusiva” que necesita ser sensitiva e informada del trabajo académico hecho fuera de sus fronteras tradicionales, especialmente de la geografía política, por ejemplo.

Tanto la geografía política, como la económica a nivel nacional están cediendo su lugar a la geografía política y económica en los espacios regionales o globales. Muy poca atención se presta a los aspectos no ideales y antidemocráticos de las acciones del Estado, sobretodo en lo concerniente a la delimitación de las fronteras de seguridad nacionales, la prosperidad de las economías nacionales y la paz civil de las poblaciones nacionales.

Lo que resulta evidente para resolver en parte la problemática planteada anteriormente, es la necesidad de crear un modelo de desarrollo donde confluyan una economía de mercado y una sociedad altamente participativa, y que también sea incluyente. Por ejemplo, en materia de sistemas de seguridad social, Jütting (1999), desde una perspectiva institucional señala que la principal diferencia entre las diferentes organizaciones descansa en una estructura de incentivos para asegurar la cooperación y el cumplimiento. El Estado depende más de la

aplicación coercitiva de la ley y de regulaciones. El mercado en la aplicación de las presiones comerciales y las organizaciones basadas en los miembros (OBM) trabajan juntos por el interés propio, la afiliación local y la solidaridad.

Los ciudadanos se apoyan entre sí esencialmente por las normas sociales y los valores. El modelo de análisis adaptado de Jütting se explica en la siguiente tabla:

Características de las organizaciones que proveen seguridad social.

	Estado	**Mercado**	**Organizaciones basadas en los miembros**	**Ciudadanos**
Instituciones	-Gobierno central -Gobierno local	-Empresas orientadas hacia las utilidades. -Contratantes privados.	-Organizaciones sin fines de lucro. -Cooperativas -Sociedades mutualistas -Grupos religiosos	-Familias -Familiares -Comunidad vecinal
Instrumentos	Seguro social, Asistencia social, Transferencias, Provisión de fondos.	Póliza de seguros o contrato.	Arreglos mutuales, Trabajo voluntario.	Intercambio de regalos, Préstamos contingentes del Estado. Remesas, Transferencias, Seguro de cosecha.
Modelo de operación	De arriba hacia abajo	Individualista.	Principalmente de abajo hacia arriba.	De abajo hacia arriba.
Incentivos	Poder de la ley, Regulaciones	Maximización de ganancias y de utilidades, señales de precios y ajustes de cantidades	Reciprocidad balanceada, interés propio, voluntarismo, solidaridad.	Normas sociales y valores, conductas altruistas, caridad, interés propio.
Sanciones	Exclusión de personas de los programas, eliminación de programas.	Nivel de premio, límite de oferta de seguro.	Presiones sociales, exclusión de la organización	Presión social, contrato inherentemente familiar

Fuente: Elaboración propia con base en adaptaciones al trabajo de Jütting (1999)

Lamentablemente, hasta ahora algunas experiencias fundamentadas en estos principios han demostrado su inviabilidad, como el caso del programa de “bienestar para trabajar” que el Estado diseña e instituye con dos finalidades aparentemente contradictorias, tanto para proveer asistencia como para motivar al trabajo. Los resultados de las investigaciones

(Pepper, 1999) sobre el impacto de este tipo de programas de asistencia social sugieren que no se cumplen con los requerimientos establecidos o que solamente se cumplen en circunstancias especiales.

La forma de contrarrestar y balancear la emergencia del poder de las corporaciones transnacionales que cada vez se expanden más mientras que el Estado se contrae, es mediante la promoción de sociedades reguladas en las cuales un Estado capaz opere en un balance tripartita armonioso con un sector privado autónomo y una sociedad civil dispuesta a asumir su responsabilidad. Tanto la sociedad como el estado son actores sociales que impulsan el desarrollo. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes.

Los intereses de los grandes grupos corporativos tratan de limitar las acciones de regulación del Estado porque lo consideran como contrario para el logro de sus expectativas, la obtención de la tasa más alta de utilidades sobre sus inversiones. Los acuerdos de inversiones multilaterales que se realizan entre lo diferentes Estados se hacen con la participación de las grandes corporaciones multinacionales.

Para esto, obtienen sus recursos y materias primas a muy bajo costo y en abundancia, penetran en nuevos mercados y reducen sus costos de transacción en las operaciones de comercialización. La agenda del nuevo gobierno privilegia las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno y los acuerdos de colaboración entre los sectores públicos, sociales y privados. Gobierno, sector privado y sociedad civil pueden ser más efectivos si trabajan en conjunto para identificar áreas de oportunidad para mejorar el crecimiento económico y el desarrollo social, mejorar las condiciones ambientales de la comunidad, etc., y para administrar y medir el desempeño. No hay que olvidar que el crecimiento económico mide cuantitativamente el producto interno bruto per cápita y el promedio de consumo real.

El empoderamiento a las comunidades debe otorgar la capacidad para evaluar el desempeño de los funcionarios a efecto de influir en la administración pública, lo que haría que se convirtieran en los funcionarios del ciudadano. El saberse que los diferentes actores son evaluados trae efectos multiplicativos para toda la comunidad. Lamentablemente, en las relaciones simbióticas que parecen darse entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados-nación imperiales, las empresas son los socios que se inclinan a favor de las corporaciones.

A pesar de esto, los grandes intereses de las corporaciones transnacionales siempre atentan contra la acción reguladora del Estado a efecto de obtener las tasas de utilidades más altas, mediante la adquisición de materias primas y recursos a más bajo costo y en abundancia, para penetrar en los nuevos mercados y para alcanzar niveles más bajos de costos de transacción en las operaciones de comercialización.

Marshall, Wray, Epstein y Grifel (1999) establecen un modelo ideal de gobernabilidad basado en las prácticas aceptadas de tres elementos para obtener una gobernabilidad efectiva: el involucramiento de los ciudadanos, la medición del desempeño e implementación de la política gubernamental. Idealmente, una comunidad puede alinear los tres elementos para obtener los mejores resultados de los recursos públicos y privados, sobretodo, medir los resultados esperados por los ciudadanos.

Por tanto, ambos actores, gobierno y los ciudadanos toman el liderazgo para establecer las metas, iniciar el diálogo, estimular el cambio y medir los resultados. Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales.

Tanto el gobierno como los ciudadanos tienen importantes papeles que desempeñar. De acuerdo con este modelo, las conexiones para mejorar la administración y construir una gobernabilidad efectiva son el desempeño administrativo del gobierno, los ciudadanos que se involucran en la medición del desempeño y los ciudadanos que se involucran en las políticas gubernamentales y su implementación y finalmente, el alineamiento estratégico de los tres elementos de governance referidos como tal a la naturaleza y estructura de acceso a las funciones de alto mando del Estado.

Comunidad / sociedad y organización / estado ante los desafíos de la globalidad.

La comunidad constituye la tercera forma organizacional típica ideal, después del mercado y de la jerarquía. La construcción de comunidades es quizá uno de los grandes y más viejos retos que confronta la organización de la humanidad, la cual llega a expresarse en la angustia social por encontrar la identidad comunitaria. La transformación del capital social tiene relación con los cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los individuos. Esta identidad comunitaria se expresa en diferentes espacios nacionales y transnacionales que representan sus propios intereses. Es precisamente en el espacio global donde tienen ocurrencia los fenómenos globales en un contexto de fragmentación. La identidad y el sentido de pertenencia a la comunidad posibilitan las decisiones colectivas en los proyectos de desarrollo comunes.

Pero también las comunidades encierran a los individuos dentro de sus limites y en sí mismas, como una unidad se autolimitan dentro de las jerarquías del sistema formando especies de apartheids. No olvidemos sin embargo que Aristóteles se refiere explícitamente a la propiedad común de los hijos en la República de Platón, criticando el uso de la palabra "todos" ("los hijos de todos") a la manera que hizo Rousseau al distinguir entre "la volonté de tous" y "la volonté générale"). Aristóteles pensaría que estaba en la esencia humana el ocuparse más de lo propio que de lo común. La palabra *panta*, o nuestra "todos" es, según Aristóteles, un paralogismo, pues decir que algo es de todos significa a veces que es de todos colectivamente y otras veces que es de cada uno. "Soy del pueblo, pueblo soy, y adónde me lleva el pueblo voy", decía la bonita pero manipulativa canción cubana allá por los 60. "El pueblo" al final significa Fidel Castro. una pura metonimia.

La comunidad se fundamenta en la confianza como mecanismo de coordinación y es una forma de organización que responde más adecuadamente a los retos que plantea los procesos de la globalización, sobretodo la globalización del conocimiento. El término comunidad captura el sentido de responsabilidad y de acción independiente que caracterizan a esta forma organizacional y que al mismo tiempo puede funcionar dentro de las fronteras de otras formas de organización, llámese nación, mercado, organización, jerarquía, etc.

Las diferentes formas de organización representan diferentes modos de gobernabilidad con diferentes fortalezas y debilidades y desde luego presentan un conjunto de elementos que son característicos. El orden se crea y se mantiene mediante comportamientos de cooperación

que tienen referencias continuas para respetar la tradición a cambio de no encontrar la censura o desaprobación de la comunidad. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, creando lo que se ha dado en llamar la ación del "gorrón". El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes.

La comunidad es uno de los componentes centrales de cómo las organizaciones tienen que ser diseñadas. De acuerdo a Putnam (1993: 183), "la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político". La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. Las condiciones para que el ejercicio de poder se transforme a favor de la comunidad, de acuerdo a Solis (2000), son la multiplicidad y complejidad de problemas que deben resolverse colectivamente, participación en la economía mundial, incremento en las capacidades locales, aspiraciones de las comunidades y los individuos a ser sujetos y no sólo objetos de la acción pública.

Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Las economías locales adquieren importancia frente a las economías nacionales y el desarrollo de competencias y diseño de las instituciones locales tienen un impacto en la reforma del sistema político nacional.

De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales. La tendencia hacia las reformasen los gobiernos municipales y en su autonomía se expresa en las reformas constitucionales en muchos países del mundo. Además, las instituciones locales tienen como reto asumir nuevas funciones para intervenir en las actividades económicas.

Este diseño se da bajo un conjunto universal de principios con base en el desarrollo natural de equipos autodirigidos y semiautónomos, cuyos miembros tienen conciencia de su papel de "spirit of corps", autoorganizados en jerarquías planas y en forma de redes no rígidas de asociaciones profesionales, con menos mecanismos de control y más mecanismos de coordinación. El diseño de la comunidad presupone una reinvención de espacios y redes sociales en los que los individuos encuentran alivio a su ansiedad en la búsqueda por encontrar la identidad a la comunidad que pertenece. El desarrollo de las redes sociales están determinadas por un desplazamiento existente de las relaciones fuertes, permanentes y estables por otras más débiles, flexibles y pasajeras.

El espacio social en que las relaciones sociales se expresan, elaboran el imaginario colectivo en que se permite la realización de actividades colectivas para el logro de fines comunes. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil.

Ninguna de las comunidades tendría la misma estructura de organización por ser un proceso orgánico, dinámico y por lo tanto, cambiante que desarrolla medios ambientes para servir en la satisfacción de las necesidades de sus miembros y de quien depende su éxito. El culturalismo comunitario logra la afirmación mediante la consideración de que sus valores son irreductibles y que por lo tanto, entran en contradicción con los principios de la democracia. El culturalismo acepta la transhistoriedad de la diversidad y las diferencias étnicas y culturales de los pueblos. Si se elige la forma de gobernabilidad de la comunidad se requieren de grandes esfuerzos para crear comunidades donde nunca antes han existido. De acuerdo a Putnam (1993: 183), "la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político".

En este punto, no hay que desestimar las capacidades y potencialidades de las comunidades en la promoción del desarrollo, así como la posibilidad de que mediante programas de capacitación y desarrollo comunitario, ejerciten un sistema democrático más participativo y mejoren su desempeño. En el modelo de desarrollo comunitario, los promotores tienen fines pragmáticos cuando buscan hacer algo por los miembros de la comunidad y fines democráticos cuando mantienen la afirmación comunitaria en sus decisiones.

Las nociones de gobernabilidad derivados de sociedades sin Estado, con recursos comunales, no se comparan fácilmente con otras nociones de gobernabilidad que enfatizan los derechos humanos, económicos y culturales. Las comunidades que participan en la determinación, asignación y aplicación de presupuestos para realizar obras, tienden a realizar aportaciones locales, a vigilar la ejecución y en términos generales a reducir los presupuestos gubernamentales. Son las mismas comunidades las que conocen mejor que nadie, la prioridad que debe darse a sus necesidades.

Los estudios empíricos de las sociedades sin Estado y la administración de recursos, proveen evidencia para argumentar acerca de los costos de transacción en formas de gobernabilidad comunitarias sustentables con fundamento en los siguientes "principios de diseño":

1. Definición clara de fronteras. La gente que tiene el derecho de uso de los recursos y sus fronteras físicas tienen que ser claro.
2. Congruencia entre las reglas de apropiación y provisión y las condiciones locales, es decir la delimitación de cuánto de los recursos pueden tomarse y las obligaciones de los miembros del grupo deben sustentar las condiciones locales y las características técnicas de los recursos.
3. Los arreglos de elección colectiva que afectan a los individuos y quienes pueden participar para modificarlas.
4. Monitoreo del uso de los recursos debe ser continuo.
5. Sanciones graduales. Quienes rompen las reglas deben ser penalizados en proporción a la seriedad de la ofensa.
6. Mecanismos de resolución de conflictos, así como otras formas de medición y arbitración deben estar disponibles.
7. Reconocimiento mínimo del derecho a organizarse. Las autoridades del gobierno externo no deben debilitar los procesos de auto-administración. (Ostrom, 1990).

Ostrom (1990) no explica por qué los grupos exitosos son capaces de monitorearse así mismos y por qué las sanciones endógenas son suficientes. Las transacciones que brindan beneficios mutuos a todos los involucrados, son las transacciones que deben ser consideradas en los diseños de las estructuras de los grupos. Los grupos con altos costos de transacción son inherentemente más difíciles de organizar. Los grupos exitosos tienen características en virtud de las cuales los costos de transacción son bajos en una solución endógena, tales como:

1. La estabilidad de las relaciones entre los miembros quienes esperar seguir tratándose entre sí en un mayor número de transacciones a largo plazo.
2. Relaciones múltiples de trato entre unos y otros en diferentes contextos.
3. Relaciones directas de trato entre unos y otros de cara a cara, sin la mediación de oficiales.
4. Creencias y preferencias compartidas.

Ejemplos de estas nuevas formas organizacionales son las denominadas comunidades estratégicas y las comunidades prácticas. Las comunidades estratégicas están integradas por un número grande de profesionales en tecnologías de la información trabajando en un centro corporativo y en unidades de negocios. Las comunidades estratégicas proveen un medio a los profesionales de la tecnología de la información para manejar más efectivamente una infraestructura compleja, proveer alta calidad, manejar problemas no estructurados y validar soluciones, operando como un mecanismo eficiente para compartir el conocimiento y la motivación para el aprendizaje y desarrollo de los individuos es mayor.

Las estructuras de las comunidades estratégicas privilegian el modelo abierto de una organización de aprendizaje activo basado en una filosofía donde los aprendices juegan un rol activo en la adquisición del conocimiento, por sobre el modelo de una organización que promulga un conocimiento previamente elaborado (Ellerman, 1999) Bajo el acercamiento de aprendizaje abierto y activo, se centra en la transformación del aprendiz más que en la mera transferencia de la información. El desarrollo institucional puede funcionar como el modelo de la iglesia que promulga la existencia de una mejor manera de hacer las cosas, o bien, como una organización de aprendizaje abierto donde a las diferentes teorías se les permite contender públicamente y enfatizan la experimentación. Bajo este último enfoque, el aprendizaje tecnológico institucional es la clave del crecimiento económico.

Además, las organizaciones de aprendizaje muestran similitudes reveladoras con las instituciones internacionales de desarrollo que tratan de inducir el desarrollo económico en los países de los Estados-nación. Así, el aprendizaje se convierte en un proceso activo auto dirigido de razonamiento crítico, diálogo, experimentación e interpretación de resultados que impulsan a los individuos, organizaciones y sociales a estar en constante movimiento hacia el futuro y hacia delante re-aprendiendo de las experiencias del pasado.

Las formas de gobernabilidad y los funciones de liderazgo de la comunidad estratégica se muestran a continuación:

Formas de gobernabilidad y funciones de liderazgo.

Formas de gobernabilidad

Funciones de liderazgo	Matriz gruesa	Matriz delgada	Comunidad estratégica
Centro corporativo	Diseño y mandato estratégico	Provee de dirección.	Define la estrategia, provee de apoyo y facilita la comunidad.
Administrador de unidades de negocios	Asegura el cumplimiento de los mandatos corporativos.	Interpreta los consejos corporativos y la toma de decisiones	Comparte el conocimiento entre las unidades de negocios y provee de realimentación al centro corporativo

Adaptado de Storck y Hill (2000)

Para que las comunidades de este tipo funcionen eficazmente, es necesario que sigan ciertos principios fundamentales: que el diseño y el formato de interacción que promueva apertura y permita la serendipity, construir sobre una cultura organizacional común, demostrar la existencia de intereses mutuos después del éxito inicial en la resolución de asuntos y lograr las metas corporativas, capitalizar aquellos aspectos de la cultura organizacional que respeten el valor del aprendizaje colectivo, incluir prácticas para compartir el conocimiento en los procesos de trabajo del grupo, y establecer un medio ambiente en el que el conocimiento compartido se base en procesos y normas culturales definidas por la comunidad más que por otras partes de la organización.

Existe una relación estrecha entre sociedad y desarrollo de valores cuando los valores y el profesionalismo son compartidos y expresan la cultura de una organización, como en el caso en que se percibe el mundo y la forma en que se encuentran soluciones a los problemas de adaptación a su entorno, la cultura de la administración y los valores que puntualizan son heredados de los valores sociales dominantes.

La cultura corporativa de las grandes corporaciones multinacionales está fuertemente influida por los apoyos y las restricciones que reciben de los estados nacionales imperiales con quienes actúan en sinergia. Pero la situación parece ser al revés. Los intereses de las grandes corporaciones atentan contra el Estado por considerar que su acción reguladora limita su avidez por la consecución de materias primas y recursos en abundancia y a bajo costo, penetración en nuevos mercados y reducción en los costos de transacción de sus operaciones mercantiles, etc., todo lo cual redunda en la obtención de la máxima utilidad.

Las comunidades estratégicas muestran características y principios similares a las denominadas organizaciones de aprendizaje. Estos principios se representan en la siguiente tabla.

Principios clave de las comunidades estratégicas

Características de la comunidad	Acciones
Formato de interacción	- Organizar regularmente reuniones cara a cara. - Estimular el diálogo cándido. - Estructurar para la serendipity.
Cultura organizacional	- Capitalizar entrenamiento común, experiencia, y vocabulario.

	- Facilitar el trabajo alrededor de las restricciones.
Interés mutuo.	- Construir compromisos demostrando el progreso visible hacia metas comunes. - Promover la mejora continua de los procesos de la comunidad.
Aprendizaje individual y colectivo	- Reconocer y recompensar a los que enseñan a otros y a los que aprenden de otros. - Capitalizar conocimiento y experiencia de compañeros respetables. - Proveer un medio ambiente en que ocurra la reflexión acerca del aprendizaje.
Aprendizaje compartido	- Incluir el aprendizaje compartido en la práctica laboral. - Reforzar su valor con realimentación inmediata.
Procesos y normas de la comunidad	- Permitir el establecimiento de una "zona de seguridad" que construya confianza e identidad comunitaria. - Minimizar la conexión al control de la estructura formal. - Motivar a la comunidad a establecer su propio proceso de gobernabilidad

Adaptado de (Storck y Hill, 2000)

Las comunidades de prácticas son usualmente consideradas estar formadas por grupos voluntarios que emergen de las prácticas de trabajo común (Strock y Hill, 2000) Las comunidades de prácticas son grupos de personas informalmente reunidas para compartir experiencia y pasión por una empresa conjunta. La naturaleza informal, espontánea y orgánica de las comunidades de prácticas las hace ser resistentes a la supervisión e interferencia en las organizaciones.

Sin embargo, representan una nueva frontera en la organización y ayudan a manejar la estrategia, empiezan nuevas líneas de negocios, solucionan problemas rápidamente, transfieren las mejores prácticas, desarrollan habilidades profesionales, ayudan a reclutar y retener el mejor talento, generan conocimiento y se renuevan a sí mismas. Las comunidades de prácticas son tan diversas como las mismas situaciones que las originan y pueden formarse dentro de las organizaciones, entre diversas divisiones y unidades de negocios y entre varias empresas.

A pesar de que las comunidades de prácticas son fundamentalmente informales y auto-organizativas, sin embargo, también se benefician de su cultivo. Para que las comunidades de prácticas se desarrollen, es necesario que se identifiquen los potenciales para impulsar las competencias de la organización, se provea de una infraestructura que las apoye y les permita aplicar su experiencia efectivamente y se usen métodos no tradicionales para evaluarlas. Las diferencias de las comunidades de prácticas con otras formas de organización, las cuales presentan conjuntos de elementos característicos, se muestran a continuación:

Comparación de las características de las comunidades de prácticas con otras formas de organización.

	¿Cuál es el propósito?	¿Quién pertenece?	¿Qué los mantiene juntos?	Cuánto dura?
Comunidad de prácticas	Desarrollar las capacidades de los miembros, construir e intercambiar conocimiento.	Miembros que se seleccionan a sí mismos.	Pasión, compromiso e identificación con los grupos de experiencia	Mientras exista interés en mantener al grupo.
Grupo formal de trabajo	Para entregar un producto o servicio	Cualquiera que reporte al grupo del gerente	Requerimientos del trabajo y metas comunes	Hasta la siguiente reorganización.
Equipo de proyecto	Para lograr una tarea específica	Empleados son asignados por la alta dirección.	Los puntos importantes del proyecto y las metas	Hasta que el proyecto se complete
Red informal	Colectar y pasar la información de los negocios	Amigos y negocios conocidos	Necesidades mutuas.	Mientras que las personas tengan una razón para seguir conectados.

Adaptado de Wnger y Snider (2000)

Para otros investigadores, el principal principio de la formación de las comunidades es la confianza que existe entre los miembros. Adler (1999) sintetiza la literatura sobre la confianza, sus fuentes, mecanismos y sus metas.

DIMENSIONES	COMPONENTES
Fuentes	- Familiaridad a través de una interacción repetida - Cálculo basado en los intereses - Normas que crean predictibilidad y confiabilidad.
Mecanismos	- Contacto interpersonal directo. - Reputación. - Contexto institucional
Objetos	- Individuos. - Sistemas - Colectividades
Bases	- Consistencia, confianza contractual. - Competencia. - Benevolencia, lealtad, preocupación, buena voluntad, confianza fiduciaria - Honestidad, integridad - Apertura.

Basado en Adler (1999)

La identificación nacional es una forma legítima de entender a los seres humanos como pertenecientes a una comunidad determinada. De acuerdo a Putnam (1993: 183), “la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para

quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político". La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. No obstante, el culturalismo comunitario que acepta la transhistoriedad y se afirma en sus propios valores irreductibles, los cuales de alguna manera contradicen a los principios de la democracia. No obstante, el culturalismo ha sido exitoso cuando acepta la diversidad cultural y étnica de los pueblos.

Las naciones en sí mismas se constituyen en éticas que fundamentan las identidades y determinan el significado moral de las obligaciones de los ciudadanos, bajo la guía racional de un principio de nacionalidad (Miller, 1998). En la comunidad se expresan una pluralidad de identidades, las cuales buscan las diferentes formas para expresarse como pertenecientes o no. La identidad encuentra instrumentos y medios en los diferentes espacios nacionales y transnacionales para expresar sus propios intereses económicos, políticos y sociales. La transformación del capital social tiene relación con los cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los individuos.

Estos intereses se han redefinido del espacio nacional a los espacios local, regional y global. En el espacio global se expresan las diferentes formas de globalización en un contexto fragmentado. Si se elige la forma de gobernabilidad de la comunidad se requieren de grandes esfuerzos para crear comunidades donde nunca antes han existido. El mundo se está transformando aceleradamente a través de fenómenos que Melucci (1990) describe como "el declive de grandes formas colectivas de identificación, y el surgimiento de actores colectivos múltiples y fragmentados". Las redes de actores individuales y colectivos "representan un nexo sobresaliente en la relación entre las personas y los sistemas funcionales" (Lechner, 2000).

Una comunidad describe un conjunto existente o alternativo de relaciones entre los individuos. En forma diferente a otros términos de organización social, tales como el Estado, la nación o la sociedad, el término comunidad no se usa desfavorablemente (Williams, 1976) El sentido verdadero de comunidad encaja mejor con las cualidades esenciales de la condición humana. Dentro de una comunidad, las conductas de los miembros son guiadas por el sentido de identidad. La transformación del capital social tiene relación con los cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los individuos. En la gobernabilidad por la comunidad, la coordinación se logra por normas de compartidas de comportamientos apropiados. Las costumbres evolucionan y dividen el trabajo y para compartir los productos.

El orden se crea y se mantiene mediante comportamientos de cooperación que tienen referencias continuas para respetar la tradición a cambio de no encontrar la censura o desaprobación de la comunidad. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas. Estar en contra de la comunidad significa estar en contra de un bien colectivo no argumentable sólo por un interés egoísta e individualista, por la fragmentación y la negación de un valor común (Parker, 1998) De acuerdo a Putnam (1993: 183), "la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político".

Al involucrarse en la acción colectiva, los actores buscan traer el ansiado bien colectivo y dar forma a la colectividad con respecto al bien colectivo. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales

incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es. Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad.

El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil. Los miembros de una misma comunidad se conectan por determinadas “relaciones sociales” que facilitan los procesos de colaboración entre sí. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Una vez que la acción colectiva se inicia, en el curso de este mismo proceso emerge una colectividad que puede aplicar sanciones informales contra los que contravienen y recompensar a colaboradores a bajo costo (castigo u ostracismo), a ningún costo e incluso a premio (avergonzar, reprochar o criticar) (De Swaan Abram, 1997).

La noción de comunidad, del latín com que significa estar juntos, se ha enfocado más en los estudios de las formas en que los significados y la conducta en un territorio conducen a la integración social y a la coherencia, empleando un punto de vista orgánico de la cultura. Para Weber (1981) entiende a la “comunidad de una relación social cuando y en la medida en que (...) se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los participantes de construir un todo”.

En el modelo actual de desarrollo, la integración social, política e inclusive la integración económica, quedan supeditadas a los mandatos del mercado y el Estado a renunciado a su facultad para garantizarlas. En la sociedad moderna hay un conflicto latente entre capitalismo y política. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La política exige por lo menos un uso comunitario sometido a reglas que se regulan por leyes, desde el impuesto obligatorio a las reglas de tráfico, pasando por la reglamentación de la construcción, el comercio etc.

No obstante, la formación de redes de información y de conocimiento es uno de los principales requisitos para esta integración económica, política y social. La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. La formación de nuevas formas de relación social que promuevan la dinámica del desarrollo local integral en los procesos de globalización.

Las organizaciones son culturas y son comunidades. Las comunidades y Las organizaciones comparten algunas características. La conexión definicional entre organización y comunidad hace más para establecer las mínimas condiciones de orden social. Este enfoque se ha centrado más en los estudios de la comunidad iniciados por el sociólogo Alemán, Tönnies (1957), quien distinguió el concepto de comunidad o 'gemeinschaft' del concepto sociedad o 'gesellschaft'.

La distinción tiene como base los diferentes tipos de relaciones humanas que se dan en cada una, aunque ligados a divisiones espaciales y temporales, presentando estos conceptos como "temas para el análisis" más que como formas sociales ligadas a tipos de asentamientos

particulares. Sin embargo, otros análisis concluyen en que las relaciones de comunidad y sociedad son independientes de los caracteres espaciales de los lugares (Phillips, 1998)

La modernidad no acepta todavía la disolución del orden social establecido y la construcción de uno nuevo basado en múltiples asociaciones o "gesellschaft" que las organizaciones necesitan para ser más cohesivos en los términos de valores. La modernidad erigió al Estado-nación como una forma de gobernabilidad que aseguraba a la nación y a la comunidad el ejercicio de su vocación histórica. Esta tendencia y otras son las causantes de lo que Wagner (1996) denomina el final de la modernidad organizada.

El trabajo de la organización puede ser reimaginado como una comunidad - a Gemeinschaft- cuyo resultado puede ser el deseo de todos los miembros de la organización (Parker, 1998) Gemeinschaft o comunidad se relaciona con las "relaciones humanas cercanas desarrolladas a través del parentesco... el habitat común y... Cooperación y acción coordinada para el bien social". Gesellschaft o sociedad es creada a través de "ligas impersonales y relaciones basadas en el intercambio formal y contractual". En este intercambio, "no acciones... manifiestan la voluntad o espíritu de... unidad" (Harper, 1989)

En el Gemeinschaft los seres humanos permanecen esencialmente unidos a pesar de todos los factores que los separan, mientras que en el Gesellschaft los seres humanos son esencialmente separados a pesar de todos los factores que los unen. En la Gemeinschaft o comunidad, la resistencia a los procesos de homologación cultural es más poderosa que en la Gesselschaft. Una vida íntima, privada y exclusiva se entiende como una vida en comunidad (Gemeinschaft), mientras que la Gesellschaft es la vida pública y el mundo por sí mismo (Tönies, 1957), de tal forma que la comunidad o Gemeinschaft ha sido vista como preferible a la sociedad o Gesellschaft, término que, además, sugiere tener una manifestación más humanista (Phillips, 1998)

Bürgerliche gesellschaft describe "una esfera social en la que la relación entre los ciudadanos no queda simplemente confinada a los procesos económicos de intercambio y trabajo, sino que también incluye a las instituciones del debate público de modo que formen una unidad sociológica anterior a cualquier integración política" de acuerdo a Honneth (1999).

A mediados del siglo XIX empieza a desarrollarse una sociedad capitalista corporativa que antepusieron el valor monetario a todas las cosas para ser intercambiadas en el mercado. Se inicia una batalla por el dominio corporativo sobre los mercados civiles. Esta sociedad capitalista orientada por las estructuras del mercado tiene contradicciones que requieren la intervención política centrada en el Estado para regular las relaciones sociales, las que a su vez demandan de mecanismos de intercambio y mercantilización, generando así procesos simbióticos entre el mercado y el Estado. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

Marx critica la sociedad civil burguesa rompiendo con el esquema Hegeliano al argumentar que el Estado capitalista sería reemplazado por la fuerza de un movimiento comunista que separaría a la sociedad de la opresión del Estado y la explotación del mercado. Marx ubica en la sociedad civil el espacio negativo de lo privado donde se desarrollan las relaciones económicas o materiales y en donde además, la familia

representaba lo opuesto a la parte más organizada de la sociedad denominada Estado o sociedad política.

El concepto Durkheimiano de la "densidad moral" ayuda a distinguir entre sociedad y comunidad. La sociedad se refiere a una identificación sostenida de un grupo grande de personas a través de ligas afectivas débiles y más generalizadas, existen en grandes espacios con frecuencia en un Estado, mientras que la comunidad se refiere a una comunicación sostenida con un grupo pequeño, pero con similaridades fuertes más localizadas en pequeños espacios territoriales.

No obstante, el concepto de espacio evoluciona de su mera caracterización física y territorial a una caracterización más dinámica y multilineal. Este nuevo concepto de espacio es caracterizado como “un concepto dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones.”

Las comunidades están formadas por pequeños grupos humanos en los que por supuesto, sus arreglos sociales no están exentos de tensiones y fricciones. La existencia de arreglos institucionales entre los diferentes agentes económicos, no solamente reduzca los niveles de incertidumbre, sino que también resuelve las pugnas y conflictos de intereses. Es difícil imaginar una comunidad en donde no exista una tensión como resultado de la división del trabajo, por ejemplo dando como resultado la formación de un tipo ideal de burocracia. La distinción sociedad-comunidad puede ser representada en un continuo en el cual si la frontera es más amplia la densidad de interacción es más débil y viceversa. Si se elige la forma de gobernabilidad de la comunidad se requieren de grandes esfuerzos para crear comunidades donde nunca antes han existido.

Después de la estrepitosa caída del socialismo soviético y de los países del este de Europa, la versión democrática del poder es el sustento de la sociedad civil. La proliferación de las organizaciones de la sociedad civil, con actividades organizadas, voluntarias y privadas, representan la innovación social del siglo XX, como lo fueron el gobierno representativo en el siglo XVIII y las grandes burocracias públicas y privadas en el siglo XIX (Salomon y Anheier, 1997)

La comunidad se distingue de una sociedad porque ésta última es resultado de un contrato en que las decisiones individuales, según Villoro (2000) La comunidad es inestable debido a los acechos del liberalismo que exalta el individualismo a su máxima expresión. Los principales elementos que diferencian a una comunidad de una sociedad, se muestran en la siguiente tabla:

	COMUNIDAD	**SOCIEDAD**
Libertad	Asegurar la libertad de todos, sin exclusión. Igualdad de oportunidades para realizar lo que elijan. Igualdad en las condiciones mínimas para satisfacer las necesidades básicas e igualdad de oportunidades sociales para	Libertad individual y respeto a los derechos humanos. Libertad es la capacidad de elegir un plan de vida, pero no la posibilidad de realizarlo.

	ejercer la elección.	
Decisiones	Comunales	Individuales
Equidad	Mayor equidad	Mayor desigualdad y marginación.
Tensión de intereses	Interés por el todo. El individuo es un elemento perteneciente a una totalidad. Postula fines y valores comunes	Intereses particulares
Democracia	Participativa, que Complementa y corrige a la democracia representativa	Representativa
Identidad personal	No renuncia a la afirmación de la propia identidad personal con la apertura a otros.	Obsesión por sí mismo.
Ética	Exaltación de virtudes sociales: respeta la pluralidad de fines y valores de cada individuo, respeta la libertad de otros y contribuye a su realización mediante el servicio recíproco.	Exaltación de las virtudes individuales: libertad, etc.
Fundamento	El servicio recíproco asumido con libertad.	Cálculo del propio beneficio
Estado	Un fin comunitario eliminando la exclusión, pero sin imponerse a los ciudadanos.	Liberal: Actuar lo menos posible.

La sociedad / comunidad se refiere a un sentido subjetivo de colectividad, mientras que el Estado / organización se refiere a un tipo de construcción jurídica que define la membresía sin referirse a percepciones subjetivas y por lo tanto, no necesariamente se refieren a algún tipo de conexión afectiva. Ante el embate de los procesos de globalización, la idea de colectividad autodeterminada como el fundamento para la concepción del Estado-nación, es rebasada en sus límites.

Al involucrarse en la acción colectiva, los actores buscan traer el ansiado bien colectivo y dar forma a la colectividad con respecto al bien colectivo. En la dialéctica individuo-colectividad, el capitalismo responde con un potencial de autoritarismo. Los procesos de globalización orientados por el mercado tienen efectos sobre la estructura social y alteran la concepción y naturaleza de comunidad.

Hasta cierto punto el Estado / organización es afectivamente neutral y definido contractualmente por un conjunto de relaciones y arreglos entre las personas y las cosas. Los arreglos institucionales reducen las posibilidades de fricciones y pugnas entre los diferentes agentes económicos y actores políticos mediante estructuras de gobernabilidad apropiadas que reduzcan los costos de transacción, los problemas de la agencia y simplifiquen las

complejidades de los contratos internos que regulan las relaciones y transacciones entre los diferentes individuos y grupos dentro de la organización. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos.

El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente a la reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación.

Tanto los actores políticos, sociales y económicos estratégicos se apoyan en las estructuras del poder para ejercer influencia en las decisiones que favorezcan sus intereses. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

Los acuerdos de voluntades privadas mediante contratos celebrados fuera de las estructuras de gobernabilidad del Estado, encuentran mejores incentivos para efectuarlos. Las estructuras de gobernabilidad se alinean con los diferentes atributos de las transacciones las cuales tienen diferentes necesidades de adaptación, ya sea autónoma o cooperativa. La adaptación involucra costos de transacción más bajos y más alto los resultados del cambio que la reforma. Las diferencias de las estructuras de gobernabilidad, tales como los costos y competencias, así como las formas de economizar los costos de transacción, se alinean con los atributos de las transacciones.

Las estructuras de gobernabilidad tienen diferentes capacidades para proveer la adaptación autónoma o cooperativa. La adaptación involucra costos de transacción más bajos y más alto los resultados del cambio que la reforma. La perspectiva de economizar mediante los costos de transacción sostiene que bajo el criterio de remediación, la ineficiencia invita a su propia desaparición, en donde la ineficiencia es evaluada en relación a las alternativas viables, más que ideales hipotéticos y por lo mismo se hace la provisión para los costos de implementación (Williamson, 2000:31).

Las diferencias en las estructuras de gobernabilidad deben estar en relación estrecha con los atributos de las transacciones debido que los mercados son desplazados en forma selectiva más que uniforme. No obstante, economizar mediante el empleo de los costos de transacción es un concepto perverso a pesar de que los costos y beneficios adscritos a las formas alternativas de organización necesitan trabajarse comparativamente. Cuando los costos de transacción son altos, resultan inherentemente más difíciles de organizar.

El orden social constituye un contrato social y es, por tanto, afectivamente neutral. Además, las sociedades y las comunidades son materia de definición ínter subjetiva, mientras

que los Estados y las organizaciones son materia de definición legal que no requieren de ninguna afiliación emocional a fin de operar. Si se elige la forma de gobernabilidad de la comunidad se requieren de grandes esfuerzos para crear comunidades donde nunca antes han existido. Un aspecto de consideración es que ni la comunidad ni la organización combinan la cálida persuasión con la efectividad instrumental (Parker, 1998) La separación entre las estructuras económicas públicas y los intereses privados y de la comunidad es un punto crucial para el sistema capitalista globalizador. De acuerdo a Putnam (1993: 183), "la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político".

El Estado / organización puede ser poderoso y efectivo si sus miembros tuvieran el apego emocional característico de las sociedades / comunidades (Parker, 1998) Pero lo que es claro, es que los procesos económicos, políticos, sociales y del medio ambiente escapan más allá de las fronteras y espacios territoriales del Estado-nación. El espacio nacional se delimita territorialmente mediante las fronteras físicas y geográficas que definen la ocurrencia de ciertos fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales, y que por lo tanto también determinan los espacios de soberanía en función de estas unidades de espacios nacionales.

En el espacio nacional se origina la geopolítica del cual emergen los niveles espaciales internacionales y globales en donde adquieren relevancia la geoeconomía. Es en el ámbito espacial global en que las diferentes expresiones de la globalización dse manifiestan en un contexto altamente fragmentado. Las grandes corporaciones transnacionales tratan de avanzar en su proyecto globalizador en sinergia con los Estados imperiales, la geopolítica y la geoeconomía del nivel de espacio nacional al espacio internacional y global. Las corporaciones transnacionales se reparten los mercados internacionales con el apoyo de los Estados imperialistas que aumentan el poder e influencia, detentan y concentran la propiedad y el control de la mayor parte de las transnacionales. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula.

El espacio como un concepto territorial y físico evoluciona a una conceptualización más abierta y dinámica. Los procesos de globalización tan acelerados están dando lugar a una desterritorialización del Estado nacional que trae consigo la emergencia de nuevas formas espaciales de organización geopolítica y geoeconómica. Las comunidades de seres humanos no pueden ser normadas exclusivamente con criterios de racionalidad económica. El dominio de la racionalidad instrumental que ha derivado en un tratamiento tecnócrata de la sociedad moderna es criticado por el posmodernismo que aporta las bases para el desarrollo de una racionalidad más comunicativa, inspirado en una disatisfacción de la tradición humanista occidental y en el orden racionalista que daba certidumbre ala mente modernista.

La posmodernidad de la cultura política se caracteriza por una fragmentación de valores compartidos por las colectividades y el distanciamiento de los ciudadanos a las instituciones, marcado por una creciente desconfianza que provoca crisis de las democracias institucionalizadas. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. Lechner (2000), señala que en la posmodernidad inciden como tendencias, el desmoronomaineto de la fé en el progreso y una creciente sensibilidad acerca de los riesgos fabricados por la modernización; el auge del mercado y el consiguiente debilitamiento de la

política como instancia reguladora y el cuestionamiento de la noción misma de sociedad como sujeto colectivo capaz de moldear su ordenamiento.

Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. Muchos de los habitantes de las diferentes regiones viven bajo condiciones que pueden ser descritas como modernidad desigual más que postmodernidad. Esta tendencia y otras son las causantes de lo que Wagner (1996) denomina el final de la modernidad organizada.

Aún, la corriente del posmodernismo es vista como una pomposa denominación de la crisis de la creación sociocultural. El posmodernismo representa la lógica cultural del capitalismo tardío que privilegia el espacio como símbolo y como realidad. Es en las comunidades donde los individuos que la forman se expresan a través de una continua elaboración de la cultura y una atribución del valor que llega a ser esencial contra el imperialismo cultural de los centros económicos y políticos. Las personas están conscientes de su cultura y experimentan su distintividad (Cohen, 1982) no a través del desempeño de un ceremonial especializado y elaborado, sino a través de la evaluación de sus prácticas diarias.

Las organizaciones no son solamente estructuras formales constituidas por la división del trabajo y el trabajo de división, o alineamientos segmentados de complejas organizaciones, (Parker, 1998) sino que son "instituciones". La organización informal coexiste con la organización formal, haciéndola viable mediante tres funciones indispensables: la comunicación, mantener la cohesión mediante la voluntad de servir y la estabilidad de la autoridad objetiva, así como mantener el espíritu de integridad del personal el auto respeto y la elección independiente (Barnard, 1938:122). . Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. La eficacia de la organización informal varía con la elección de las formas de organización interna.

La organización informal también tiene una importancia en la formación de una comunidad mediante el establecimiento de normas que son aceptadas y compartidas por todos sus miembros. Si se elige la forma de gobernabilidad de la comunidad se requieren de grandes esfuerzos para crear comunidades donde nunca antes han existido. En la interpretación del término comunidad, encontramos las nociones de relaciones internas e inter organizacionales.

Institucionalizar es más que infundir valor a los requerimientos técnicos de las tareas (Selznick 1957) Las teorías institucionales enfatizan la importancia de la comunidad política más allá de la simple agregación de individuos y sus intereses y conectan la teoría organizacional con la ciudadanía. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política.

Sin embargo, hay que considerar que hasta antes de la modernidad, el viejo dilema si el individuo o la comunidad, el problema se solucionó con el reconocimiento de sus diferentes roles en las colectividades, tales como la familia y la sociedad, es decir, mediante la plena asimilación del individuo a la colectividad. Al involucrarse en la acción colectiva, los actores

buscan traer el ansiado bien colectivo y dar forma a la colectividad con respecto al bien colectivo. Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil.

La modernidad erige al Estado-nación como la forma de gobernabilidad para asegurar un espacio a la nación a fin de que ejercite su vocación histórica. El espacio nacional se encuentra delimitado territorialmente por fronteras físicas y geográficas que definen la ocurrencia de ciertos fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales. Estas características también definen las unidades de los espacios soberanos en función de los espacios nacionales.

En el espacio del Estado-nación surge la geopolítica, la cual da lugar a niveles espaciales internacionales y globales en donde tienen relevancia la geoeconomía. Pero la desterritorialización del Estado nacional está dando lugar a la emergencia de nuevas formas espaciales de organización geopolítica y geoeconómica.

Pero en las diferentes expresiones de los procesos de globalización que cubren el ámbito espacial global se expresan en un ámbito contextual fragmentado. Las corporaciones transnacionales y multinacionales cubren los espacios estatales con espacios de economía de mercado, apoyados por los Estados imperialistas. Precisamente, son estos Estados imperialistas los que concentran y detentan el control y propiedad de las grandes transnacionales. Una organización no necesita para existir el cuidado de sus miembros, quienes racionalmente calculan que los beneficios que reciben por su membresía son mayores que los no beneficios.

Pero la verdadera gobernabilidad democrática resulta de individuos actuando como ciudadanos (Pal, 1966). Como gobernabilidad democrática vincula su componente sustantivo con el concepto de orden social en un contexto institucional en el cual los individuos tienen oportunidad de elección en función de sus preferencias e intereses, se dirimen los conflictos y se absorbe la incertidumbre. La tendencia de las sociedades a alcanzar la gobernabilidad democrática a pesar de la inestabilidad política y económica es lo que Torrijos (2001) ha denominado como gobernabilidad reluctante, la cual considera que es una gobernabilidad desde la ingobernabilidad y que por lo mismo se construye a partir de la inestabilidad, la incertidumbre y el caos.

La gobernabilidad democrática está relacionada a los conceptos de orden, seguridad, estabilidad, etc. Así las políticas públicas son las responsables del capital social y de las virtudes cívicas de una comunidad que forman la identidad democrática o no democrática de una sociedad con incidencia en su gobernabilidad. La transformación del capital social tiene relación con los cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los individuos.

De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la "trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos". Los sistemas de gobernabilidad democrática facilitan el desarrollo y al formación de capital humano y social. Los gobiernos locales tienen un importante papel en el desarrollo de

instituciones que promuevan y fortalezcan la formación de capital social y la identidad comunitaria. La transformación del capital social tiene relación con los cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los individuos.

Estas políticas públicas no deben causar daño o debilitar a las instituciones comunales existentes como consecuencia de perseguir una globalización más abstracta que concreta. Cuando las comunidades entran en contacto con instituciones económicas más desarrolladas, la cooperación interna entre los miembros de la comunidad se deteriora, de tal forma que de acuerdo al análisis de Spagnolo (1998), entre más cerca estén las comunidades de los mercados organizados más rápido es la erosión de los recursos comunitarios. La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad.

El hecho de que la propiedad privada debe ser garantizada y los incentivos para competir por recursos escasos, son alentado y descritos como naturales para el funcionamiento del mercado. Por lo tanto, argumenta Birchfield (1999), los valores comunales y la cooperación no son nutridos porque debilitan el papel que tiene la escasez de los recursos, como la idea central que rige el sistema completo. Por lo tanto, concluye el investigador, la democracia se debilita.

La sustitución de las relaciones recíprocas que ligan a los miembros de las comunidades en los mercados anónimos colapsa la cooperación. El "intercambio de relaciones recíprocas" (Kranton, 1996) entre los miembros de las comunidades. En donde el cumplimiento de los acuerdos bilaterales es sancionado por la amenaza de terminar la relación, cuando se introducen métodos más sofisticados de intercambio con base en "los valores individualistas del mercado" (Jodha, 1988), la cooperación se hace imposible de sostener. Por ejemplo, todo contrato laboral conlleva en la racionalidad intrínseca, cierto grado de “violencia estructural” (Bourdeau, 19998) Este se encuentra envuelto en el discurso de la cultura organizacional que habla de valores como confianza, cooperación, lealtad, etc. Mientras que elimina todas las garantías y derechos de adherencia al trabajo y deja a la voluntad de los patrones el derecho de terminar y rescindir los contratos laborales.

El fenómeno de la cooperación en situaciones estratégicas ha sido estudiado en los modelos estáticos de la teoría de juegos, tales como el "dilema del prisionero". La explicación alternativa propuesta por Spagnolo (1998) se basa en la interacción entre la aversión de los jugadores (agentes) a la sustitución intertemporal, su habilidad para accesar bienes mercados financieros y su habilidad para sostener la cooperación. La evaluación de los agentes reduce las ganancias a corto plazo de las desviaciones unilaterales relacionadas con pérdidas por castigos. Las relaciones estratégicas se realizan entre dos o más agentes cuando se influyen mutuamente en las decisiones, es decir, cuando la decisión de uno depende de la decisión del otro. De esta forma, el aparato de la economía institucional, la teoría de juegos y la elección racional están disponibles para la teoría empírica de la democracia.

Sin embargo, el comunitarismo organizacional es una ideología en la que los más poderosos convencen a otros menos poderosos de que están actuando en tal forma que benefician a ambos grupos y a la sociedad. Las personas tienen intereses colectivos en el trabajo, unos más que otros. Se encuentran relacionados a través de varias formas de estratificación social, lo cual resulta muchas de las veces en un problema político cuya raíz

está en la enajenación o anomia. Disfuncionalidades que seguramente las organizaciones deben encontrar formas de remediar (Parker, 1998)

Sin embargo, el comunitarismo ataca al Estado por considerarlo un instrumento de ejercicio de poder de las elites hegemónicas por sobre las minorías, a las que intenta reivindicar cultural y económicamente. Aristóteles hace una distinción entre lo que llamaríamos colectivismo, una acción común dirigida desde arriba y un comunitarismo en el que los ciudadanos tienen fines personales no siempre coincidentes, pero saben ponerse de acuerdo acerca de los medios. Pues la buena economía dice que hay que utilizar los recursos comunes para favorecer a todos en la mayor medida posible. Usamos los mismos instrumentos para lograr fines personales no idénticos. Pero si cada uno obra por su cuenta, el resultado puede ser que todos salgan perdiendo

Para asegurar la lealtad de las minorías nacionales, se propone la defensa y la aceptación de su diversidad nacional y cultural, desde el punto de vista, muy cuestionable por cierto, de que los grupos minoritarios no tienen derecho para separarse cuando tienen autonomía dentro de un Estado-nación y no son oprimidos política y económicamente. Con la excepción de derechos minoritarios constitucionalmente protegidos, ningún actor político está equipado con el poder de veto. Es en este sentido que la política y la administración pública del Estado debe estar orientada a administrar la diversidad, a aceptar la pluralidad ideológica y la multiculturalidad, superando las viejas posiciones del proceso de homogeneidad/destrucción cultural e ideológica del Estado-nación. Pocos gobiernos nacionales han logrado administrar y manejar en forma democrática la diversidad étnica y cultural.

En la diversidad se acepta el ejercicio de un principio básico de la democracia que no admite excepciones. Por lo tanto, las minorías tienen posibilidades de organizarse para expresar sus posiciones y sus puntos de vista e influir en los procesos de decisiones de las elites hegemónicas. Sin embargo, la tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966).Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general. Los nacionalismos de las poblaciones étnicas minoritarias están tomando las formas de autonomía territorial mediante formulas complejas de sistemas basados en el federalismo.

Hay una tendencia hacia la formación de Estados multinacionales para dar acomodo a los grupos étnicos minoritarios, también denominadas por Kymlicka (2000) como “federaciones multinacionales” cuya aceptación se debe a la creencia de que los criterios para la evaluación de los sistemas políticos se fundamenta en los valores liberales de la democracia, la libertad y justicia social. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Si nuevos

problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente a la reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación.Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional.

Se asume que un federalismo más democrático reduce las posibilidades de separación y fragmentación de las comunidades, pero también se lanzan retos a la concepción de que la principal función del Estado-nación es el mantenimiento de la integridad y seguridad territorial, si se considera que los Estados y las fronteras territoriales de los Estado no son sagrados a perpetuidad.

La fragmentación del espacio nacional en regiones y localidades es una fuerza que se contrapone a los procesos de globalización y generan tensiones fuertes a tal grado que están dando origen a un fenómeno de dispersión internacional. No obstante, en una sociedad integrada con diferentes flujos a los procesos de globalidad, sus formas de organización se fragmentan espacialmente y se territorializan localmente. La sociedad regional y local es uno de los principales actores sociales que pueden promover el desarrollo en forma más equilibrada y equitativa.

Es interesante analizar cual es la aplicabilidad de una comunidad como una descripción de lo que son las organizaciones, así como también de un modelo potencial para pensar en la emancipación en las organizaciones. Una organización que puede ser el tipo ideal de comunidad es descrita por Parker como "organidad" basada en especulaciones acerca de una neoburocracia utópica pensada como un experimento para mostrar que tan lejos puede ir la comunidad en las ideas de las organizaciones, no como una alternativa de trabajo comunitario de la burocracia. La "organidad” propuesta se basa en la membresía unitaria y su afiliación provee identidad al individuo.

Los individuos encuentran siempre los medios en los espacios nacionales y transnacionales para expresar y manifestar sus propios intereses. La categoría de membresía de la organización se subordina a otras potenciales afiliaciones del lugar de trabajo con relaciones extendidas de entretenimiento. La división espacial entre el trabajo público y el hogar privado tendrá poco sentido y se minimizan la estructura de las relaciones jerárquicas y laterales. La organización no especifica ni predefine las relaciones entre sus miembros ya que se asume la consensualidad, minimizando la diferenciación interna mediante un sistema de recompensas igualitariamente justas y asegurando un alto grado de armonía normativa y mediante el reforzamiento de una socialización continua.

Poco crédito se da al carácter experto y especialista de la administración social y la burocracia en particular, dependiente de personal equipado con experiencia técnica y capacidades profesionales que no son tan trasparentes al escrutinio público, ni tampoco afectas a la voluntad popular (Meredyth, 1997; Minson, 1993; Hunter, 1994) Debe también tener una dimensión ética debido a la función representativa de la administración en la sociedad. Cualquiera que sea el tipo de control solamente tiene que ver con las funciones del oficial administrativa que se relaciona con esa ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales caen dentro de este campo.La globalización económica requiere de reacciones

rápidas en la mayor parte de la administración a las demandas de los agentes económicos, la burocracia administrativa encuentra difícil abandonar los viejos hábitos que crean bloqueos, desaniman a inversionistas y resulta en pérdidas de utilidades o competitividad para ciertas empresas. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales.

Ya los trabajos de Ouchi (1981), Peters y Waterman (1982) y Deal y Kennedy (1988), rechazaron el lenguaje racionalista burocrático y la administración científica, argumentando que el éxito organizacional se gana mediante una nueva forma de pensamiento acerca de las organizaciones. Ouchi afirma que la "organidad" es un arreglo que voltea de arriba hacia abajo a la organización burocrática. Es tal vez un modelo ideal para las organizaciones pero más viable en comunidades grandes y autosuficientes, en donde las personas crean un sentido de identidad. En las comunidades se expresan la pluralidad de las identidades. Esta pluralidad de identidades manifiestan sus propios intereses en los diferentes medios espaciales locales, nacionales y transnacionales. La organización pretende ser la expresión de las identidades colectivas de los miembros.

El éxito económico de las organizaciones estadounidenses, de acuerdo a estos y otros autores, está determinado por la capacidad de dichas organizaciones para transformarse en un tipo de comunidades. Las organizaciones son potencialmente comunidades unitarias y por lo tanto pueden desarrollar un cálido comunitarianismo organizacional en vez de una maquinaria burocrática deshumanizada, a pesar de que uno de los problemas del comunitarianismo es que define una vida significativa como aquélla en que se ejercita una menor libertad. La expansión económica, el crecimiento y la subversión de la autoridad burocrática quedan relacionadas estrechamente. La administración y la cultura burocrática no están suficientemente bien establecidos y asimilados por la población y los oficiales del servicio público.

Un sentido de comunidad y membresía de una organización son divisibles analíticamente. Así las organizaciones no solamente son culturas, sino también son comunidades, uno de los recursos que usamos para construir los sentidos de la identidad. Los sentidos de comunidad relacionadas con el trabajo no son exclusivas ni tampoco puede reproducir otros sentidos de identidad de la comunidad. La afirmación de la identidad comunitaria constituye uno de los principales obstáculos al avance del proyecto hegemónico globalizador, por lo que su estrategia principal es fraccionar todo poder que se oponga a sus intereses a fin de poder manejar en forma separada las demandas de acuerdo a las identidades. La lógica del sistema hegemónico es inversa al protagonismo de lo colectivo, dando mayor énfasis a las políticas y estrategias individuales.

Pero una teoría y una política que niegan la importancia de un sentido de identidad comunitaria pueden ser contraproducentes para la tolerancia de las diferencias entre sus diversos miembros. Las formas de organización comunitarias pueden ser menos efectivas en sociedades modernas, multiculturales, con mayor desigualdad económica. En este sentido, concluye Parker (1998) el Estado-nación no es un modelo de promoción de la emancipación humana. Por más de dos siglos, el Estado-nación ha sido el promotor del desarrollo, y todo giraba en torno a esta entidad. Las fuentes de información al igual que las industrias eran nacionales. Los Estados-nación erigían barreras para detener el avance de la intervención foránea.

No obstante, la extensión lateral de las relaciones sociales y económicas intensifica las presiones hacia una mayor autonomía e identidad cultural de las localidades. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. La autonomía local se asume cuando los ciudadanos están preparados para juzgar las acciones de los gobiernos locales y para exigirles el cumplimiento de sus responsabilidades en las decisiones de competencias ante la comunidad. La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados

A pesar de que los procesos de globalización económica presionan a la apertura de las economías locales, es en este sentido que las localidades con actividades económicas semi-autónomas son consideradas como sistemas semi-cerrados. El Federalismo ha propuesto diversas fórmulas de autonomía territorial que han sido adoptadas por diversos Estados-nación como medios para dar acomodo a grupos étnicos minoritarios, como los señalados por Kymlicka (2000), las "naciones sin Estado" y la "gente indígena", los mismos que están tratando de reconstruir su identidad. Con la excepción de derechos minoritarios constitucionalmente protegidos, ningún actor político está equipado con el poder de veto.

Las comunidades indígenas se resisten a los procesos de homologación/destrucción de sus formas de vida cultural y social, por lo que su movimiento es de rebelión para lograr autonomía política y cultural. De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes. El Federalismo permite la creación de unidades políticas regionales controladas por grupos nacionales minoritarios.

Las naciones sin Estado son naciones que no tienen un Estado en el que su grupo étnico sea mayoría, que comparten un Estado con otras naciones, pero que tuvo o trató de tener un Estado en el pasado. Por diversas razones, en algunos casos se da origen a la existencia de Estados multinacionales cuando existen acuerdos voluntarios entre dos o más grupos étnicos nacionales para dar forma a una federación. Las "gentes indígenas" son aquellos pobladores que originalmente poseían las tierras, pero que fueron quitadas o tomadas por la fuerza o a través de tratados por pobladores posteriores que las incorporaron a Estados gobernados por personas considerados como extranjeros.

Probablemente ningún otro sector de la población de Latinoamérica más desigualdades e injusticias que las gentes indígenas de la región. Durante los últimos cinco siglos, las gentes indígenas de Latinoamérica han sufrido casi todas las indignidades y abusos imaginables. Desde la conquista europea de la región, la sociedad latinoamericana se ha basado en la maximización de la explotación laboral entre las líneas étnicas y el trajo diferencial de los grupos étnicos tanto por el capital como el Estado han creado una compleja estructura de ethnoclases (Harris, 1997).

Relaciones paternalistas, autoritarias y clientelistas de subordinación entre las elites locales y las masas a los niveles nacionales y subnacionales han ido de la mano con la subordinación de las sociedades latinoamericanas a las elites externas coloniales y neocoloniales interesadas en la explotación de los recursos naturales, trabajo y capital de estas sociedades. Relaciones paternalistas, autoritarias y clientelistas de subordinación entre

las elites locales y las masas a los niveles nacionales y subnacionales han ido de la mano con la subordinación de las sociedades latinoamericanas a las elites externas coloniales y neocoloniales interesadas en la explotación de los recursos naturales, trabajo y capital de estas sociedades.

Sin embargo, a pesar de las condiciones económicas, sociales, etc., hay posición y resistencia al mantenimiento de la estructura de ethnoclases existente de un creciente número de organizaciones, incluyendo los nuevos movimientos sociales organizados. Las gentes indígenas tienen generalmente ocupado el más bajo nivel de esta estructura de extrema desigualdad económica y social y hasta muy recientemente han estado excluidos o marginados del proceso de la política. El cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra.

Hay que distinguir las federaciones multinacionales que dan respuesta al acomodo de los diversos grupos plurales etnoculturales que desean retener autonomía y formas de gobierno propio, de aquellas federaciones cuyas unidades federales eliminan la existencia de los grupos minoritarios. Esta eliminación se da mediante diversos mecanismos de control de derechos y que no acepta una autonomía territorial donde se les permita establecer sus propias instituciones políticas, económicas, sociales, culturales, etc. La identidad de "lo público" es el limite de las instituciones políticas y del Estado, aunque se entiende que también comprende las discusiones y debates que van más allá del sistema político. Lo publico hace referencia al "espacio para la discusión de los intereses generales y la apelación de los valores.

Estos cambios implican una redefinición del Estado-nación tradicional por el de Estado multinacional. El concepto de Estado-nación es reemplazado por una nueva forma que Kymlicka denomina "federaciones multinacionales" . Constituyen un modelo de Estado en el que las minorías nacionales son federadas al Estado a través de algunas formas de autonomía territorial, en el que se delinean fronteras internas y se distribuyen poderes de tal forma que aseguran a cada grupo nacional su capacidad para mantenerse por sí mismo como una cultura societal distinta y autogobernada.

Las federaciones multinacionales como forma de gobernabilidad manejan los conflictos que surgen entre las diferentes identidades y sus diversos intereses económicos y otorga un mayor grado de libertad a sus ciudadanos. La transformación del capital social tiene relación con los cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los individuos. Los intereses han sido redefinidos en su ámbito espacial nacional para pasar a los espacios global, regional y local.

Esta forma de gobernabilidad ha demostrado manejar apropiadamente los nacionalismos, pero hasta ahora reducen pero no han logrado eliminar los movimientos separatistas totalmente de la agenda política. Su fundamento radica en la correlación existente entre democratización y nacionalismo minoritario. Con la excepción de derechos minoritarios constitucionalmente protegidos, ningún actor político está equipado con el poder de veto. Los grupos minoritarios autogobernados usan su propio lenguaje y símbolos en sus instituciones y constituyen el grupo dominante en su territorio autónomo y autogobernado.

Por su participación y contribuciones, comparado con los beneficios que reciben de la federación multinacional, se reduce la presión para la separación. Sin embargo, los beneficios

de un federalismo democrático se deben aceptar los planteamientos de separación que formulen los diferentes actores políticos y someterse al mandato democrático. Tanto los actores políticos estratégicos, como los económicos y los sociales ejercen influencia a través de las estructuras de poder a favor de las decisiones que benefician sus propios intereses. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

Lo que se requiere es de actores políticos que en un marco institucional del Estado, observen comportamientos acordes a una cultura política democrática y por lo tanto, actúen en forma congruente con los valores democráticos y de justicia social. Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos. De acuerdo a Lechner (1999:22) la política democrática "no es sólo una cuestión de procedimientos e instituciones o de quiénes y cómo deciden; la política democrática tiene que ver igualmente con las condiciones sociales e históricas en los que estos procesos tienen lugar".

El federalismo democrático, se asume, trabaja mejor cuando se permite y se acepta la legitimidad de las manifestaciones y movilizaciones políticas que buscan la separación. El federalismo no trabaja cuando se asume que la separación no es aceptada por el Estado y por lo tanto, no se toleran las movilizaciones. Estas movilizaciones políticas aseguran una mayor justicia etnocultural.

Sin embargo, el objetivo de establecer una sociedad sin grandes negocios y sin grandes gobiernos ha sido olvidado por una política económica y social que se desarrolló desviándose hacia un control de una elite que comanda desde lo más alto de la pirámide económica y que controla diferencialmente el acceso a los recursos basados en el conocimiento. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. No puede limitarse a la acción única del mercado la distribución de activos basados en el conocimiento.

El riesgo que se corre ha sido ya señalado por la Comisión para América latina y el Caribe (Cepal): "Un mundo futuro dividido entre informatizados y no informatizados será tal vez más contrastante que la división que estamos superando entre alfabetizados y analfabetos. Reproduciría brechas tanto en las capacidades productivas como en la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía". La complejidad de la realidad social de Latino América Contemporánea es quizás pensada como una complejidad híbrida de ideologías, prácticas y condiciones de la premodernidad, modernidad y postmodernidad.

Así pues, resulta obvio que los ciudadanos que integran la nueva sociedad del conocimiento deben estar vinculados entre sí y con las diferentes formas de interpretación de la realidad que desean controlar. La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales El ciudadano considerado como sujeto de derechos y obligaciones, considerado en forma

individual o colectivo, actúa con personalidad propia o como parte de una entidad institucional.

Una combinación de relaciones de mercado y relaciones de "clan", estas últimas al estilo de la influencia japonesa, basada en una filosofía de cuidado y socialización de empleados en objetivos que son comunes y empleo de por vida, parece ser una forma adecuada para el rescate de la burocracia. En un clan a cada individuo se le dice afectivamente hacer lo que la persona quiere, mientras que en un mercado a cada individuo se le pide perseguir intereses egoístas. Sin embargo, estos dos mecanismos de gobernabilidad realizan el potencial humano y maximizan la libertad humana porque no constriñen la conducta (Parque, 1998) Finalmente, poco énfasis descriptivo se ha puesto en el logro de aquellos aspectos que forman parte del dominio de lo social (Doncelote, 1991)

La sociedad civil.

El ser humano es un ser eminentemente social, que busca establecer lazos de identidad y amistad con otro. En establecimientos organizacionales, los diversos grupos de personas usan estos lazos para apoyos sociales y para la consecución del trabajo (Mehra, Kilduff y Brass, 1998) La sociedad civil se encuentra según Wolfe (1989) en “familias, comunidades, redes de amistad, conexiones solidarias en los lugares de trabajo, voluntarismo, grupos espontáneos y movimientos”.

La sociedad civil es la forma de autoorganización social más natural y orgánica de todas las formas de organización. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. La sociedad civil se organiza en forma política fuera del Estado. Es de hecho, un forma de organización de la sociedad que es anti-política, con interese demasiado fragmentados. El concepto prevaleciente de sociedad civil es que es un sistema de asociaciones civiles autorreguladas, descentralizadas y voluntarias, basadas en una vida moral y organizadas en forma autónoma del Estado.

La función central de las conductas y prácticas asociativas se fundamentan en relaciones interdependientes de confianza mutua, reciprocidad e intercambio en el desarrollo de nuevas formas de ejercicio de derechos ciudadanos que se conquistan a través de luchas políticas y sociales y que definen los derechos civiles que se originan del Estado y cuya burocracia liberal es quien debe garantizarlos además. Son las mismas luchas políticas que en el ámbito del Estado-nación cuestionan la legitimidad de sus gobiernos pero no la legitimidad misma del Estado.

Los derechos ciudadanos se conquistan a través de las prácticas democráticas que resultan de una redistribución del poder político. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición”. Los derechos políticos por el régimen político y los derechos sociales por el aparato social del Estado y la sociedad. Tanto el Estado y la sociedad son dos actores sociales que promueven el desarrollo el cual puede ser más justo y equitativo.

La sociedad civil se basa en normas de reciprocidad, confianza e intercambio mutuo que tienen lugar dentro de ciertos espacios institucionales y que median la relación entre los hogares y las instituciones que controlan y tienen el poder sobre los recursos económicos, políticos y culturales. La definición o el concepto de sociedad civil implica recurrir a referencias filosóficas, económicas, políticas, sociales, culturales, históricas, funcionales, etc.

La sociedad civil se conceptualiza también como una esfera directamente conectada al ámbito del Estado por medio de una red de autoridades administrativas autogobernadas y otros cuerpos cooperativos, pero de carácter anti-político. El lugar en el que la sociedad entra en relación con el Estado constituye la sociedad civil, la cual no actúa como un sujeto sino como un espacio o esfera donde expresan y se manifiestan sus instituciones y entidades que la forman.

Por lo tanto la sociedad civil no debe ser considerada como un sujeto, sino como una esfera o espacio donde se expresan determinados intereses. El mismo carácter anti-político de la sociedad civil fragmenta los intereses y limita sus aportaciones a la construcción de las instituciones. Los Estados controlan y limitan las prácticas políticas de la sociedad mediante el establecimiento de fronteras, como por ejemplo, la articulación del discurso político.

Por lo tanto, los gobiernos locales pueden contribuir a crear las condiciones para que se garantice la confianza entre los diferentes agentes y actores que conciertan las políticas y estrategias del desarrollo. Así, el lugar en que se efectúan mediaciones y contestaciones entre la sociedad y el Estado y con las macro instituciones del poder económico y cultural, es lo que Rocco (1999) denomina sociedad civil. Estos sitios de mediación son los lugares de la vida diaria, donde los individuos y los grupos entran en contacto mediante normas, fronteras, tradiciones, y redes que definen las relaciones institucionales, etc.

Según Honneth (1999), este concepto "sitúa el núcleo civil de una sociedad a igual distancia de la esfera económica y política de la sociedad". La ausencia de una cultura institucional impide el logro de mejores resultados, incluyendo la autonomía. La sociedad civil al ser parte de la superestructura facilita la operabilidad de las relaciones con otras instancias al mismo nivel, como el Estado-aparato y que difieren de las contradicciones que se generan entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción.

El concepto de sociedad civil, del Inglés *civil society*, tal como lo conceptualizó Adam Ferguson, se refiere a "Todas las instituciones y organizaciones civiles que preceden al Estado, ya que son la condición previa a cualquier resistencia por parte de los ciudadanos, contra la dictadura de la burocracia de partido." En este sentido, Thoreau ha dicho que los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia, lealtad y a resistir un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables (Honneth, 1999) El término anglosajón de *civil society* hace referencia más al concepto de sociedad civilizada que al de sociedad natural.

El concepto de *civil society* hace alguna referencia al concepto de societas civiles de Aristóeteles con que se denominaba a la forma de comunidad de la pólis. En el libro II cap. 2 {1261 a} refuta Aristóteles la tesis platónico-socrática de que el Estado o Polis deba ser lo más unitario posible. "La *Pólis* -dice Aristóteles- no es un unidad de la manera que algunos afirman. Y lo que algunos llaman el mayor bien común en realidad lo destruye", "No hay pues que buscar la unicidad de la sociedad en grado exagerado". Para Aristóteles la familia es

la forma social más unitaria, pero no la más autosuficiente. El estado-ciudad es autosuficiente no siendo tan unitario, pues la autosuficiencia es preferible a la unicidad. Todo estado-ciudad que tienda a mayor unicidad tiende a dejar de ser un estado-ciudad para convertirse en una especie de alianza militar. Pues una *pólis* se caracteriza por una pluralidad de individuos que son diferentes.

Así la sociedad civil comprende las "instituciones, entidades, personalidades que representan y manifiestan los intereses de las clases sociales, pero sobretodo de las clases dominadas "mediante la actuación de instituciones e individuos que no pueden representar esos intereses en el Estado (espacio) o sociedad política". La sociedad civil "Es un espacio donde las clases y las fracciones de clase, expresan sus intereses a través de diferentes instituciones, organismos e individuos, los cuales se confrontan y resuelven a nivel de la suoperestructura en una formación social determinada" (Urquiza y Ulloa, 2001).

Las clases dominantes cuentan con otras instituciones de la superestructura para expresar y manifestar sus intereses, tales como el Derecho, el Estado, la ideología, etc. En este sentido el concepto de sociedad civil se expande hasta comprender los conceptos de ciudadanía y derechos humanos. Salamon y Anheier, (1997) ven a la sociedad civil como "la plétora de organizaciones privadas, sin fines de lucro y no gubernamentales que han emergido en las décadas recientes en virtualmente cada esquina del mundo para proveer vehículos a través de los cuales los ciudadanos pueden ejercer iniciativa individual en la persecución privada de los propósitos públicos".

En un concepto más amplio, la sociedad civil comprende a las diversas instituciones sociales, económicas del mercado, la libre asociación de los ciudadanos para debatir, la que tiene que ir acompañada de la libertad de expresión. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. Las instituciones económicas, sociales y políticas son determinantes en las decisiones y procesos sociales. Así, la sociedad civil no es un sujeto en sí misma, sino la esfera en la actúan y realizan sus actividades las instituciones y entidades que la forman. En la sociedad civil se involucran fuerzas que se contraponen en sus intereses irreconciliables, muchas de las veces.

Urquiza y Ulloa (2001) hacen una distinción operativa al interior de la sociedad civil entre lo que denomina la "sociedad civil del capital" y la sociedad civil descapitalizada". El concepto de "sociedad civil del capital" lo expresa como "el conjunto de individuos y organismos privados que controlan el gran capital, y que por tanto, poseen intereses comunes y guardan una mayor afinidad ideológica", mientras que la "sociedad civil descapitalizada está caracterizada por la no propiedad del capital y por situarse frente a él como una masa asalariada, y por tanto, por asumir o "deber asumir" una posición existencial de lucha contra la explotación y buscar una mayor participación de los beneficios del trabajo que garantice una adecuada sobrevivencia humana". Distingue Aristóteles entre la *homonoia* o concordia, el acuerdo que reina entre los ciudadanos y la mera *homodoxía* o igualdad de pareceres. Pues no se trata de que los ciudadanos opinen lo mismo de cualquier cosa, sino de la misma cosa.

La concordia es la amistad de la ciudad. La concordia supone un diálogo o deliberación entre los ciudadanos. Solamente dialogando puedo saber qué intereses nos igualan y nos distinguen y podemos obrar coordinadamente y no cada uno por su cuenta y riesgo, como cuando compramos o vendemos acciones en la bolsa. Esto es comparable al paralelogramo de fuerzas de la física. Si cada uno tira de un cuerpo para un lado distinto, el cuerpo se mueve en

una dirección que es distinta de la deseada por cada uno. Ahora bien ese diálogo coordinador de nuestras acciones no es otra cosa que la actividad que estudia Aristóteles en su Retórica. Hablando se entiende la gente, decimos. Pero hablando bien y con entendimiento del otro. La Retórica es el *Organon* de la acción común, de la política. La Retórica no es tanto el duíscurso de la verdadero cuanto el discurso de lo bueno.

Sin embargo, la caracterización dual de la sociedad civil en términos de quien tiene capital y no lo tiene es confusa sino se delimitan los sujetos, las instituciones que representan sus intereses y el espacio o esfera donde resuelven sus conflictos. La dualización de la sociedad es un fenómeno que resulta de los beneficios que reciben los individuos de los procesos de globalización y que genera profundas desigualdades entre los ricos que tienen acceso y los excluidos o marginados que no lo tienen. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

Visto desde la perspectiva global y a través de los lentes conceptuales de la integración contemporánea en la economía capitalista global, se ha reforzado, sino acentuado esta extrema desigualdad así como las relaciones injustas de subordinación y dominación que mantiene y complementa esta desigualdad. La economía capitalista del mercado tiene un carácter social. La naturaleza de la integración regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo

Así, su teoría dicotómica de la sociedad civil, intenta establecer “la línea divisoria entre la gran empresa unida a los altos dirigentes del Estado-aparato y la gran mayoría restante, mayoría que encierra potencialidades similares de cara al cambio social.” La propuesta para el análisis del cambio institucional es opuesta a la democracia mayoritaria y negociadora como el punto de partida. Como tipos polares, las democracias con un mínimo de puntos de veto son mayoritarias en carácter, mientras que las democracias de negociación contienen un máximo de puntos de veto.

Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997). La sociedad civil conceptualizada como el espacio donde se expresan las mayorías por sí mismas o a través de sus instituciones, es considerarla como una instancia de resolución de conflictos económicos, políticos y sociales, o que bien los trasciende en forma de demandas al espacio estatal.

La sociedad civil del capital puede guiar las acciones y manipular los comportamientos y voluntades de la sociedad civil descapitalizada. El Estado-aparato sigue una política de dualidad, mientras que con la sociedad civil capitalizada entra en procesos de negociación de políticas e intereses y resolución de conflictos, desprecia con trato diferenciado a la sociedad civil no capitalizada la cual es fácilmente manipulable para fines corporativos electorales. La dualización social es un fenómeno que es resultado de las oportunidades de acceso a los beneficios del modelo de desarrollo capitalista que tienen los individuos y que genera profundas desigualdades. Los ricos tienen acceso completo a todos los beneficios que el

sistema les brinda, mientras que en el otro extremo, los excluidos y marginados carecen de las oportunidades mínimas.

El concepto de sociedad civil como sujeto, asume "roles y representaciones que corresponden a sujetos específicos" (Urquiza y Ulloa, 2001) tales como los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, etc., toma ventaja de sus posiciones dentro del espacio, para la defensa de sus propios intereses. La sociedad civil como espacio debe contener a las instituciones, organismos e individuos que representan los intereses de las clases sociales.

Las instituciones sociales tienen diferentes formas organizativas que van desde aquellas fundamentales que representan intereses económico y sociales, hasta aquellas que representan al conocimiento, la información y la ideología. Las instituciones sociales, económicas y políticas determinan las decisiones y los procesos sociales. La sociedad civil compendia un grupo heterogéneo de individuos y colectividades cuya característica común es que no forman parte del Estado, y que son capaces de movilizarse como actores políticos para la defensa de sus intereses y para la promoción de cambios económicos, sociales, políticos, culturales, etc. Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales.

En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos. Los actores políticos estratégicos, así como los económicos y los sociales aprovechan las estructuras de poder para ejercer influencia sobre los procesos de toma de decisiones que les favorezcan sus propios intereses. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

Este compendio heterogéneo de componentes que actúan en la esfera de la sociedad civil, de acuerdo a Murillo Castaño (2000), constituye un "modelo que valora la pluralidad y el respeto a las diferencias, culturales, étnicas y religiosas. Un modelo que aprecia y respeta la existencia de diferencias (sic) expresiones de acción colectiva, tendientes a la articulación y a la representación de intereses...un modelo que propugna por el fortalecimiento y la progresión de la democracia como el régimen político acorde con el logro de la justicia social sin importar que esta se da en los Estados de Derecho a secas o en los estados Sociales de Derecho".

Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es.El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otros ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir, (De Swaan Abram, 1997)

El desarrollo actual de la sociedad civil ha sido motivo de diversos análisis. Según Bruyn (1999), los conservadores la denominan el “sector voluntario”. Los filósofos la ven como la ”esfera pública” de la sociedad evolucionando dentro de una esfera privada de la misma sociedad, aunque algunas de las redes de acción social constituyen parte de esta “esfera pública” por su forma y contenido de la vida social.

Sin embargo, las formas voluntarias privadas están limitando las responsabilidades públicas de los Estados-nación por el bienestar de sus ciudadanos. Los teóricos culturales la ven como “la resolución de tensiones entre los principios opuestos en la modernidad” como por ejemplo: individual contra comunidad, público contra privado, con orientación hacia la sociedad postmoderna. Muchos de los habitantes de la región viven bajo condiciones que pueden ser descritas como modernidad desigual más que postmodernidad, Esta tendencia y otras son las causantes de lo que Wagner (1996) denomina el final de la modernidad organizada.

La revolución cultural alentada por los movimientos sociales del 68, radicalmente cuestionan los fundamentos de la cultura occidentalizada, centrada en el individualismo y la racionalidad, porque destruyen el tejido social. Thoreau ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia y la lealtad y a resistir un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables. De hecho, la imposición de los valores de la cultura occidental ha provocado muchas disfuncionalidades en los pueblos colonizados. Las grandes corporaciones transnacionales socavan la soberanía y autonomía de los pueblos colonizados o recolonizados, para una toma de decisiones independiente en la regulación de su propia economía.

Por lo tanto, los Estados recolonizados, “actúan para servir los intereses de capitalistas extranjeros…Sin un estado (recolonizado) fuerte los objetivos imperialistas estarían en peligro. La fuerza se mide en este contexto por la capacidad de los actores del estado y las instituciones para llevar a cabo importantes cambios estructurales y asegurar su establización contra la mayoría de movimientos sociales populares, sindicatos y partidos políticos” Petras (2001d).

De hecho, el elemento central del concepto de sociedad civil es la práctica que tiene como base una actividad asociacionista y que tiene lugar fuera de la esfera de influencia de las funciones del Estado y fuera de las estructuras formales de las organizaciones e instituciones oficialistas. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. La sociedad civil se organiza en forma autónoma al Estado, pero no como un sujeto sino un espacio o esfera donde se expresan intereses. Sin embargo, tanto la sociedad civil como el Estado son actores sociales del desarrollo.

La sociedad civil es evolutiva, pasa por procesos de transformación, hasta llegar a desarrollarse en redes formales e informales de individuos voluntarios. La facilidad de acceso que tienen los individuos a las redes formales e informales para la consecución de sus objetivos, se posibilita por lo que ofrecen los contactos con estas mismas redes, en los términos de recursos instrumentales, tales como el apoyo y el consejo relacionado con las actividades, y por los recursos emocionales como la amistad. La sociedad civil se enfoca al entendimiento y a los diferentes modos conscientes y a las prácticas de la naturaleza comunitaria de las culturas y prácticas diarias de los ciudadanos, sus valores y creencias, etc.,

fuera de las instituciones del Estado y en donde las instituciones y entidades que la forman desarrollan sus actividades y funciones

Las formas de organización comunitarias pueden ser menos efectivas en sociedades modernas, multiculturales, con mayor desigualdad económica. Una erosión de las creencias colectivas sólo se explica en la medida en que se fragmentan los fundamentos políticos, religiosos, culturales, etc. Para resolver este problema, la composición homogénea de la sociedad como característica del Estado nacional es suplido por una concepción de Estado que acepta una sociedad más plural y multicultural.

En todo caso, es, como sostiene Bruyn (1999), un orden basado en normas sociales, contratos, costumbres, tradiciones, reglas, convencionalismos, etc. En situaciones de amistad, las personas tienen la tendencia a interactuar preferentemente con quienes son sus similares, en situaciones caracterizadas como de homofilia, formando redes informales de apoyo. La sociedad civil constituye una red de individuos privados unidos por sus relaciones legales (contrato social) y se concibe su esfera como una comunidad de valores compartidos basada en las múltiples asociaciones de los ciudadanos (Honneth, 1999). Los ciudadanos como sujetos de derechos y obligaciones actúan en forma individual o colectiva, ya sea con personalidad propia o como una forma organizativa. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil.

Sin embargo, cuando existen presiones exclusionarias de grupos mayoritarios, la formación de redes informales basadas en procesos de formación de amistad de los individuos que comparten las mismas características distintivas, sustenta las bases para su propia identificación social. De acuerdo con esta teoría de la distintividad (McGuirre, 1984), los miembros numéricamente sub representados en los grupos mayoritarios, exhiben tendencias más fuertes para la manifestación expresiva de su segregación (Mehra and Brass, 1998), la cual también puede convertirse en el instrumento para la defensa de sus intereses y la consecución de sus propios objetivos. Por qué algunas redes son más efectivas que otras, es un tema que está siendo investigado y cuestionado por los teóricos (Provan and Sebastian, 1998) La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales

En las organizaciones de la sociedad civil descansa un potencial de cambio económico, político y social. La sociedad local y regional es uno de los principales actores del desarrollo que puede ser más justo, equilibrado y equitativo. Las acciones y las formas operativas de una sociedad civil pueden abrir, profundizar y ampliar los procesos de cambio para la institucionalización de una cultura democrática sustentada en un código de principios democráticos. A mayor complejidad de las relaciones de poder entre los diferentes agentes y actores económicos y políticos, la sociedad civil tiende a ser más democrática. En la sociedad civil, los ciudadanos tienen las posibilidades de ejercitar su libertad y en los términos de igualdad de oportunidades. El impacto que tiene la sociedad civil para resolver los grandes problemas contemporáneos de una sociedad más democrática, todavía está por verse.

Las organizaciones voluntarias y el voluntarismo parecen ser los elementos centrales de la sociedad civil de acuerdo con Decaer y Van den Broque (1998) Estos autores proponen la "voluntariedad como el principio guía de la sociedad civil y las asociaciones como sus actores colectivos dominantes. Las redes de actores individuales y colectivos "representan un

nexo sobresaliente en la relación entre las personas y los sistemas funcionales" (Lechner, 2000).

El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. Un prerrequisito de participación en la sociedad civil es la entrega: la voluntad para sostenerse a sí mismo en un curso de acción y tomar responsabilidades." El hecho que las organizaciones privadas sean voluntarias para proporcionar servicios limitados a la ciudadanía, atenta contra la función y la responsabilidad pública que tiene el Estado para proporcionar esos servicios, buscando el bienestar general de la ciudadanía.

Así, los proyectos económicos y políticos nacionales deben estar suficientemente apoyados y respaldados por la voluntariedad entre las fuerzas sociales y políticas. Esto a través de consensos que inician con las disposiciones para buscar los acuerdos, para establecer las estrategias de negociación y para materializarlos en resultados que beneficien a todos los actores sociales (Latapí Sarre, 1998) La negociación, más que la voluntad general, es el instrumento complementario para resolver las diferencias en cualquier sistema democrático. El Estado es el principal actor social que debe impulsar un desarrollo equlibrado y equitativo entre las diferentes regiones.

La toma de decisiones idealmente toma forma a través del debate y los argumentos constituyen el medio de intercambio. El grado del poder que ejercitan los agentes de participación popular, tales como las organizaciones voluntarias y los movimientos populares en los procesos de toma de decisiones, puede ser interpretado políticamente, como un instrumento para el "apoderamiento" (empowerment) de los estratos socioeconómicos de más bajo nivel.

Bajo un acercamiento pragmático (Schönwälder, 1997) de la participación popular en los procesos de descentralización de los gobiernos locales, vista como una herramienta de las políticas del Estado, las organizaciones voluntarias locales representan un papel importante en el éxito de programas de descentralización para la provisión de los bienes públicos. La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales Las estrategias de descentralización que han perseguido varios gobiernos han sido motivadas por darle un mayor poder a la gente. En el caso de la provisión de bienes públicos por particulares, éstos persiguen utilidades más que acciones meramente caritativas.

Aparte de movilizar recursos locales, estas organizaciones voluntarias se constituyen en intermediarias entre el Estado y la población, proveyendo invaluable información acerca de las comunidades-meta y permitiendo a los tomadores de decisiones enfocar mejor sus políticas. La participación de las asociaciones en la sociedad civil representa un potencial democrático que une los movimientos populares al sistema político, estabilizando y fortaleciendo sus instituciones.

Las demandas de aquellos movimientos progresistas se establecen para lograr la ampliación y profundización de los procesos democráticos y para luchar en contra de sistemas de explotación económica, social y política. A mayor complejidad existente entre las

relaciones de poder existentes entre los diferentes actores y agentes económicos y políticos, existen más posibilidades de que la sociedad civil se democratice.

La emergencia de la sociedad civil como tipo ideal de la gobernabilidad.

La sociedad civil ha pasado por un largo periodo de transición para convertirse en el principal actor, protagonista de los cambios en todos los órdenes del tejido social, dejando atrás la abulia tradicional que le caracterizaba como un sujeto pasivo y manipulable. Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales. La sociedad local y regionales uno de los principales actores sociales que pueden promover un desarrollo más equilibrado, justo y equitativo.

En La Política de Aristóteles se hace referencia al término *koinonía politiké* que literalmente significa comunidad política que se traduce al Latín como *societas civilis* con se denominaba a la pólis griega. En el libro II cap. 2 {1261 a} refuta Aristóteles la tesis platónico-socrática de que el Estado o Polis deba ser lo más unitario posible. "La *Pólis* -dice Aristóteles- no es un unidad de la manera que algunos afirman. Y lo que algunos llaman el mayor bien común en realidad lo destruye", "No hay pues que buscar la unicidad de la sociedad en grado exagerado".

Para Aristóteles la familia es la forma social más unitaria, pero no la más autosuficiente. El estado-ciudad es autosuficiente no siendo tan unitario, pues la autosuficiencia es preferible a la unicidad. Todo estado-ciudad que tienda a mayor unicidad tiende a dejar de ser un estado-ciudad para convertirse en una especie de alianza militar. Pues una *pólis* se caracteriza por una pluralidad de individuos que son diferentes.

La pólis, de acuerdo a Urquiza y Ulloa (2001) era “una forma de comunidad diferente a la familia y superior a ella, que consistía en la organización de una convivencia que cobraba las características de la autosuficiencia, de la independencia y del interés social, aspectos que a partir de la modernidad pretenderán ser las propiedades del Estado”.

Es necesario analizar otra distinción que Aristóteles hace en su Política sobre lo que significa la *koinonía* o vida comunitaria. Pues una cosa es el uso en común promovido por la ley y el castigo y otro la acción común inspirada en la *filía*, que es la virtud de la *polis*. De la lectura de algunos pasajes de la Política y en armonía con lo que inspira a la Ética a Nicómaco puede "destilarse" una distinción conceptual que yo expresaría distinguiendo entre "colectividad" y "comunidad" en el lenguaje moderno.

Frente a la concepción socialista moderna que ve un problema en la propiedad privada y prefiere una propiedad colectiva, Aristóteles consideraba, en efecto, que solamente lo que el individuo tenía como propio es aquello de que me se ocupa con más esmero. Aristóteles pensaría que estaba en la esencia humana el ocuparse más de lo propio que de lo común. Aristóteles no solo se preocupa por la defensa de la propiedad privada, sino la promoción, al mismo tiempo, de un uso en común.

No olvidemos sin embargo que Aristóteles se refiere explícitamente a la propiedad común de los hijos en la República de Platón, criticando el uso de la palabra "todos" ("los hijos de

todos") a la manera que hizo Rousseau al distinguir entre "la volonté de tous" y "la volonté générale"). La palabra *panta*, o nuestra "todos" es, según Aristóteles, un paralogismo, pues decir que algo es de todos significa a veces que es de todos colectivamente y otras veces que es de cada uno. "Soy del pueblo, pueblo soy, y adónde me lleva el pueblo voy", decía la bonita pero manipulativa canción cubana allá por los 60. "El pueblo" al final significa Fidel Castro. una pura metonimia.

En el siglo XVIII, Adam Smith y David Hume hablaron de “sociedad civil” para referirse a la emergente clase burguesa surgida del comercio para protegerse de los señores feudales, de tal forma que el término fue aplicado al naciente sector comercial privado, por el que los individuos eran libres para desarrollar sus propios negocios.

Según Charles Taylor (citado por Honneth, 1999), en la obra de Montesquieu "se encuentra el origen de una noción de sociedad civil en la que las corporaciones legalmente legitimizadas de autogobierno público son las responsables de mediar constantemente entre la esfera social y el Estado". El Zivilgessellschaft que "evoca el republicanismo democrático de Tocqueville" y el Bürgerliche gesselschaft que se refiere a la estructura legal del "sistema de necesidades", tales como se conocen en la Filosofía del derecho de Hegel, son los conceptos alemanes que se acercan a la concepción de sociedad civil para referirse a todas las instituciones y organizaciones que preceden al Estado. La polisemia del concepto de sociedad civil muestra diferentes contenidos según la describa Tocqueville o algún autor actual. Tanto Mill como Tocqueville caracterizan a la sociedad civil distinguiéndola del Estado-aparato, caracterización que es más relevante en Gramsci y que entran en contradicción

El filósofo Alemán Hegel describió a la “sociedad civil” como la esfera comercial donde la gente era considerada como individuos separados, cuyos intereses eran civiles y económicos, pero no políticos ni morales y se basaba en el propio interés de individual y particular que no podía ser reconciliado con una moralidad universal. Hegel consideró a la sociedad civil como la esfera de representación de intereses que no comprende al Estado. Hegel concluyó que el Estado es la autoridad moral final para los conflictos que surjan dentro del mismo (Bruyn, 1999)

Marx ubica en la sociedad civil el espacio negativo de lo privado donde se desarrollan las relaciones económicas o materiales y en donde además, la familia representaba lo opuesto a la parte más organizada de la sociedad denominada Estado o sociedad política. Para Gramsci el concepto de la *societé civile* es equivalente a "esfera pública" o Bürgerliche Öffentlichkeit de Habermas, definido como un "ámbito social en el que están incluidos todas las instituciones culturales dentro de las cuales se forma la opinión pública". Para Gramsci, la sociedad civil está compuesta por organizaciones privadas que constituyen prototipos de las relaciones que establecen entre los seres humanos.

Gramsci distingue la caracterización de la sociedad civil del Estado-aparato, los cuales entran en contradicción con intereses que pueden ser irreconciliables sobretodo cuando el Estado-aparato se apartan del bien social. Gramsci rescata a la sociedad civil de la base económica y la lleva a la superestructura y le da el lugar de la formación del poder ideológico diferente del poder político en sentido estricto y de los poderes de legitimación de la clase dominante.

Urquiza y Ulloa (2001) sintetizan la conceptualización moderna y contemporánea de la sociedad civil en su carácter relacional, señalando que “los modernos establecen una cierta continuidad , porque cuando hablan de la sociedad civil aluden a un sedimento relacional de sana convivencia, tolerancia ideológica, búsqueda de intereses particulares y disfrute de los derechos individuales y sociales”. De los contemporáneos señalan que “tienen un punto de convergencia al referir la sociedad civil como un substrato organizacional de carácter privado que ejerce una influencia especialmente económica e ideológica decisiva en toda la sociedad, para bien o para mal, dependiendo de sus propios intereses”. El problema es el carácter relacional del análisis que no es confiable.

Por lo tanto, concluyen que la sociedad civil “comprende el conjunto de relaciones y acciones que generan los individuos, ya sea asociados o no asociados, cualificados por el hecho de estar desprovistos, por lo menos de forma expresa, de la autoridad que confiere el poder político que emana del Estado-aparato”. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. Así, la sociedad civil es vista más en términos de relaciones que como espacio. La sociedad civil está formada por el conjunto de intereses de los sujetos que se relacionan entre sí a través de las instituciones y las organizaciones creadas para tal fin. La sociedad es uno de los actores sociales que promueve el desarrollo en sus diferentes formas.

El modelo económico neoliberal limita la participación del Estado en la solución de problemas sociales, los cuales transfiere a la sociedad civil. La sociedad civil tiene un papel preponderante para establecer y mantener la gobernabilidad a través de la asistencia a los gobiernos en la implementación de amplios objetivos sociales. Sin embargo, la sociedad civil en el modelo neoliberal queda reducida a un conjunto de meros procedimientos que limitan la concepción de las instituciones políticas y su compromiso con el desarrollo humano. La crisis de gobernabilidad por la que atraviesan los sistemas democráticos y la inestabilidad de las instituciones limitan los alcances de los programas de desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano y de buen gobierno están intrincados.

Desdichadamente, los cambios que realiza no parecen tener un direccionamiento y en la mayor parte de los casos carecen de credibilidad. Sin embargo, la tendencia de una sociedad que se individualiza es a exigir una mayor participación y a una mayor democratización, pero es una democratización que no exige una transformación socialista. A mayor complejidad de las relaciones de poder existente entre los diversos agentes y actores económicos y políticos, mayores son las posibilidades de democratización.

La individualización de la sociedad es resultado de la influencia de las corrientes ideológicas del neoliberalismo. Estas corrientes extienden la competencia a los mismos individuos entre sí, mediante un conjunto de técnicas de dominación racional (Bourdeau, 1998) que implican la implementación de estrategias de delegación del desempeño. Estas estrategias de desempeño presionan a un “auto-control” individual más allá de la administración participativa mediante técnicas que fomentan la individualización de las relaciones laborales basadas en una evaluación del desempeño, salarios y bonos de acuerdo a este desempeño. Los procesos de la individualización enfatizan la presencia del individuo por sobre lo colectivo, escindiendo en forma nominalista entre el individuo y la sociedad, mediante el debilitamiento de los referentes materiales y simbólicos de las identidades colectivas

Esta tendencia neoliberal que aglutina los procesos de globalización del mercado y de la información hacia la centralidad del individualismo, cambian los estilos de vida y debilitan los estándares de una solidaridad de la colectividad. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas No obstante, se considera que si las instituciones de la sociedad civil valoran la individualidad mediante la defensa de los derechos individuales y los valores de la colectividad, tales como la confianza, entonces la sociedad civil puede ser más democrática. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil.

El Consenso de Washington orienta la agenda y los desafíos de las instituciones de la sociedad civil a limitar las acciones del Estado. Así, en las instituciones de la sociedad civil se encuentran formas de organización de las más variadas, desde las fundamentales con intereses económicos y sociales hasta aquéllas formas organizativas que tienen por objeto de trabajo el conocimiento, la información, la ideología, etc. Los intereses han sido redefinidos en sus ámbitos espaciales, pasando de lo nacional a lo local, regional y global.

Sin embargo, la modernización y la individualización tienen efectos negativos sobre el voluntarismo, en parte debido a un utilitarismo capitalista que al enfatizar el interés propio, debilita las virtudes éticas basadas en la organización. Los procesos de la individualización enfatizan la presencia del individuo por sobre lo colectivo, escindiendo en forma nominalista entre el individuo y la sociedad, mediante el debilitamiento de los referentes materiales y simbólicos de las identidades colectivas.

El voluntarismo tiene efectos positivos sobre el capital social y el discurso publico, pero hace falta una cultura del consenso que anteponga el bien general a los beneficios particulares. La mutualidad y la confianza son cualidades que forman parte importante del capital social. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la "trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos". La confianza y la reciprocidad son elementos del capital social que estimulan la cooperación en forma espontánea entre los individuos y generan redes de asociaciones voluntarias en una comunidad.

Las asociaciones voluntarias y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) se han desarrollado durante las últimas décadas del siglo XX. Son actores que emergen recientemente y conscientes de sus responsabilidades y funciones, capaces de influenciar eventos y líderes con alcance macro. En la última década del siglo anterior, el número de ONG's internacionales creció de 6,000 a 26,000. La explosión de las ONG's y sus actividades han conformado un fenómeno de globalización social que trabajan en contra de los procesos de integración a pesar de que no exista una identidad colectiva. Los procesos de la individualización enfatizan la presencia del individuo por sobre lo colectivo, escindiendo en forma nominalista entre el individuo y la sociedad, mediante el debilitamiento de los referentes materiales y simbólicos de las identidades colectivas.

La identidad colectiva encuentra siempre la oportunidad para expresar sus intereses en las diferentes instancias de organización espacial local, nacional, e internacional. La globalización de los procesos económicos ha generado la globalización de la sociedad civil, mediante la creación de nuevas redes e instituciones que formulan agendas globales. La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las

redes locales, nacionales y globales. Las ONGS' son entidades nuevas que emergen de entre los grupos de asociaciones profesionales, y de negocios, sindicatos de trabajadores, etc., se están convirtiendo en participantes activos en los procesos multilaterales de formulación e implementación de políticas.

Estas organizaciones fomentan la ideología neoliberal que sostiene la responsabilidad privada por proporcionar servicios a la ciudadanía para limitar la responsabilidad pública del Estado por el bienestar de la población. Las sanciones son el corolario usual de la responsabilidad Las ONG´s participan en diferentes coaliciones con funcionarios gubernamentales entre diferentes gobiernos y naciones.

Cuando las organizaciones no gubernamentales desarrollan vínculos estrechos entre diferentes organizaciones, pueden representar serias alternativas a los funcionarios de los regímenes internacionales. En realidad surgieron como una estrategia paralela de implementación de la política económica neoliberal implantada autoritariamente "desde arriba". El Banco Mundial ha tenido un éxito relativo trabajando con ONG's que apoyan sus proyectos de desarrollo global y por lo tanto, su legitimidad es altamente cuestionada por este involucramiento en términos de cooptación, corrupción.

Hasta ahora, las organizaciones no gubernamentales no han desempeñado un papel protagónico que en realidad signifique un reto para el sistema capitalista neoliberal. Sevidvash (2000) propone que las organizaciones no gubernamentales pueden crear una nueva cultura institucional de respeto e igualdad basada en un sistema de valores que enfatice la unidad dentro de la diversidad y promotora de principios de justicia social, tolerancia a la diversidad, servicio y cooperación, etc.

La diversidad es un principio democrático básico que no admite excepciones y por lo tanto se sostiene con la práctica misma de la democracia. Las organizaciones no gubernamentales están preparadas para aceptar y administrar en la diversidad, la pluralidad ideológica y la multiculturalidad. La ausencia de esta cultura institucional limita los resultados. Pocos gobiernos nacionales logran la administración y manejo democrático de la diversidad de las comunidades étnicas y culturales. El sistema de valores debe implantarse por medio del método de consulta en grupo como forma de resolución pacífica de los conflictos.

Quienes implementan esta política económica se dieron cuenta de la polarización económica y social que estaba causando en la ciudadanía y creando una sociedad dual. Los procesos de dualización social son efecto del actual sistema capitalista que genera profundas desigualdades entre los individuos que tienen diferentes oportunidades de acceso a los beneficios del desarrollo. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero.

Por un lado, los ricos son los beneficiarios de este desarrollo pero por otro lado, los excluidos, pobres y marginados no tienen posibilidades de acceso al modelo de desarrollo capitalista. En el presente una pequeña pero muy persistente y especialmente necesaria categoría permanece: el pobre en las sociedades pobres con una economía estancada o decreciente, constituyen un problema de proporciones no manejables, pero no que se imponga por sí mismo con mucha urgencia para la comunidad de las naciones, excepto como una tragedia humana que ruega por una solución de humanitarismo (De Swaan Abram,

1997).

Una sociedad dualizada se fragmenta en grupos y divide a los individuos, con un deterioro sustancial de las normas de convivencia. Por lo que decidieron promover y financiar con recursos la formación de organizaciones “desde abajo” como estrategia para implementar la política neoliberal “desde abajo”, mediante el aglutinamiento de los procesos de globalización del mercado y de la tecnología, en formas que destruyen los estilos de vida de las personas y fragmentan a las comunidades y destruyen la solidaridad de sus miembros. La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad.

Las comunidades son reducidas a simple objetos y destruyen la capacidad de las comunidades humanas de ser sujetos genuinos de su propia historia social. Los procesos de este tipo de organizaciones están conectados de tal forma que se involucran en diferentes actividades y asuntos mediante la formación de redes transnacionales que involucran a ciudadanos, organizaciones internacionales, gobiernos, etc.

Es decir, desde la base misma de la sociedad, se apoya la defensa de la ideología neoliberal y antiestatista, desde una falsa posición de izquierda que defiende a la sociedad civil y que conduce a procesos de despolitización y desmovilización de los grupos que pudieran expresar sus inconformidades y demandas contra el sistema neoliberal a través de movimientos sociales. La izquierda se ha concentrado en asimilar y repetir la retórica de la ideología del mercado y en denunciar el desmantelamiento de las funciones del Estado.

Las alianzas entre la izquierda y los movimientos globalifóbicos si son de naturaleza políticas, pueden representar un frente de resistencia a los procesos de globalización promovidos por las grandes corporaciones transnacionales en sinergia con los Estados nación imperiales que son las que las detentan y concentran la propiedad y el control. En el análisis de la globalización de los movimientos sociales se presentan siempre elementos subjetivos, ya sea que se luche en contra de intereses de explotación o por la democratización de los sistemas políticos. Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

La mayoría de las organizaciones no gubernamentales que cuestionan las decisiones y las políticas estructuradas en el ámbito internacional, no pueden justificar que sus propias acciones son producto de una legitimidad democrática, carecen de la transparencia y rendición de cuentas necesarias. Su legitimidad democrática no se establece solamente porque alegan que son parte de la sociedad civil. Si no existe legitimidad de las instituciones que implica la manifestación de confianza y aprobación del mandato conferido por la ciudadanía, tampoco existe gobernabilidad. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en

la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas.

Una investigación de Resumen Latinoamericano (2001) encontró que "existe una relación directa entre el crecimiento de movimientos sociales que desafían al modelo neoliberal y los esfuerzos para subvertirlos, mediante la creación de formas alternativas de acción social a través de las ONG's". Sostiene, además, que "el anti estatismo fue el boleto ideológico de tránsito de una política de clase a una política de 'desarrollo comunitario', del marxismo a las ONG's. La cooptación de líderes rebeldes por las ONG's es una muestra de la capacidad de estas organizaciones para subvertir los movimientos sociales adversos que pretendan desafiar al modelo económico neoliberal hegemónico.

La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación "puramente expresiva y gratuita" como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). La política estratégica está constituida más por la sociedad civil que establece la reforma y legitima a las instituciones, más que por las instituciones por si solas.

En los últimos años, con la profundización del modelo económico neoliberal se ha incrementado el financiamiento exterior a las ONG's con el fin de subsidiar los efectos perniciosos que resultan de la implementación de la política económica.

Pero en realidad lo que resulta es la perpetuidad de las relaciones de dependencia y coloniaje de los gobiernos extranjeros, las organizaciones multilaterales y de las grandes corporaciones multinacionales que actúan siempre en sinergia. Es en este escenario que surge el Estado neocolonial, que es "tan activo, regulador e intervencionista como el populista o el estado de bienestar, pero su actividad, reglas e intervención se dirigen a servir los intereses de una clase diferente: el capital extranjero y la CCT (clase capitalista transnacional)" de acuerdo a Petras (2001d).

Las grandes corporaciones transnacionales socavan la soberanía y autonomía de los pueblos colonizados o recolonizados, para una toma de decisiones independiente en la regulación de su propia economía. Estos problemas incluyen un pronunciado grado de explotación económica, desigualdad social y económica, injusticia social y política que ha caracterizado a los pueblos recolonizados desde los tiempos en que los indígenas pobladores de estas tierras fueron subyugados por la fuerza a la dominación colonial europea en el siglo XVI. El cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra.La herencia de la colonia marca y señala profundamente las estructuras económicas, políticas y sociales de los pueblos colonizados.

Los Estados recolonizados, "actúan para servir los intereses de capitalistas extranjeros…Sin un estado (recolonizado) fuerte los objetivos imperialistas estarían en peligro. La fuerza se mide en este contexto por la capacidad de los actores del estado y las instituciones para llevar a cabo importantes cambios estructurales y asegurar su establización contra la mayoría de movimientos sociales populares, sindicatos y partidos políticos" Petras (2001d).

Este coloniaje se repite mediante los procesos de crisis por los que atraviesan los Estados-nación como resultado de los intereses financieros de los inversionistas y organismos multinacionales. Estos intereses corporativos por alcanzar las máximas utilidades atentan contra el Estado-nación porque consideran que su acción reguladora limita la adquisición de recursos a bajo costo y en abundancia, la penetración de nuevos mercados y la reducción de los costos de transacción en la comercialización de sus productos.

De esta forma, se crea un resguardo social para prevenir conflictos en aquellos grupos y movimientos sociales más propensos a rechazar la política económica neoliberal. No obstante, las ONG's no promueven movimientos sociales, sino la implementación de proyectos específicos de mejora de condiciones de vida pero siempre trata de encontrar las respuestas dentro del esquema del sistema de producción y consumo neoliberal o bien encontrar soluciones para mejorar las condiciones del medio ambiente de la mayoría de la población mundial que tiende a degradarse.

Es en este sentido que también podemos decir que el Estado está retrocediendo en su compromiso que tiene para la mejora de las condiciones de vida de la población. Por otra parte, las ONGS nunca profundizan en el sistema económico-político que produce la pobreza extrema, desigualdades y exclusión, sino que atacan sus manifestaciones externas.

Si bien muchas de las ONG's desarrollaron un importante papel en la formulación de denuncias contra abusos de derechos humanos, en ningún momento se atreven a denunciar las atrocidades cometidas por sus patrocinadores, casi siempre organizaciones transnacionales. Además, para imponer la política económica neoliberal, las ONG's proporcionan ayuda económica para proyectos de auto-empleo, promueven proyectos locales, apoyan capacitación y adiestramiento laboral, promocionan la libre empresa con apoyos financieros a la microempresa y suministran servicios sociales y asistenciales. Esquemas de créditos de bajos intereses en condiciones favorables, por ejemplo, diseñados para servir al más necesitado, casi invariablemente fallan en alcanzar a la población meta. La articulación de los proyectos de desarrollo locales y regionales con políticas nacionales o globales constituye una tarea prioritaria de las ONG's. Por estar más cercas de las comunidades, las ONGs dirigen la asistencia a los que verdaderamente la necesitan.

En una palabra, crean la falsa ilusión de que el modelo neoliberal es capaz de dar oportunidades de desarrollo a todos los individuos. Todas estas acciones son parte de la estrategia para limitar las funciones en materia de política social que había alcanzado el Estado de Bienestar. Sin embargo, las acciones de las ONG's son muy limitadas y sólo proporcionan ayuda a ciertos segmentos poblacionales, muchas de las veces eliminando la solidaridad entre los individuos, quienes entran en competencia por recursos que son escasos. Las actividades de las ONG's son contra el gasto público a efecto de liberar recursos del presupuesto para destinarlos a subsidiar instituciones financieras y empresas exportadoras.

Las semillas de las virtudes cívicas no se encuentran en las instituciones económicas y políticas, sino en las asociaciones voluntarias de la sociedad civil, empezando con la familia. La ampliación de redes de asociaciones voluntarias en una comunidad incrementa su capacidad autorganizativa para coordinar acciones conjuntas y facilitar su bienestar. El creciente número de organizaciones sociales no gubernamentales para la formulación e implementación de las políticas públicas y la provisión de los servicios públicos puede

significar la oportunidad para que el Estado eficiente sus costos e incrementar su capacidad de governance, referida a la naturaleza y estructura de los papeles de mando del Estado. Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

El análisis del governance contribuye a la gobernabilidad en su concepto amplio a través de la operacionalización en las instituciones económicas, políticas y sociales de un sistema democrático. La operacionalización y aplicación de las diversas formas de governace tienen incidencia en la gobernabilidad del sistema democrático, aunque ambos conceptos se refieran a fenómenos sociopolíticos diferentes. No obstante se espera que en un sistema democrático, se desarrollen las competencias, libertades y derechos tanto individuales como sociales. Los procesos de globalización han dado nacimiento a una gran cantidad de agentes y organizaciones no estatales, asociaciones profesionales y de negocios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos de trabajadores, etc., todos con agendas que tienen relación con las políticas económicas y comerciales.

Instituciones democráticas saludables y economías fluorescentes crecen de una raíz común, de una vigorosa sociedad civil, a pesar de que las mismas instituciones democráticas no pueden garantizar los resultados de la aplicación de las políticas públicas. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado.

De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones democráticas cuyo poder se asegura mediante el “enjaulamiento” de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder. Las instituciones democráticas son el fundamento para el buen diseño institucional del gobierno, que propicie la participación y ejercicio de la ciudadanía plena asumida a través de un pacto social que explicite las responsabilidades y obligaciones frente al Estado de Derecho.

El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997). De acuerdo con esto, si estamos interesados en la explicación del cambio institucional, se debe estar consciente que la información disponible para los participantes es limitada. En cada cambio de las constelaciones institucionales se involucran altos costos de transacción de los actores políticos afectados.

La vinculación entre la eficiencia de los agentes económicos y la estructuras institucionales requiere del análisis del diseño institucional de los sistemas políticos. Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de

los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997). Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente. De acuerdo con esto, si estamos interesados en la explicación del cambio institucional, se debe estar consciente que la información disponible para los participantes es limitada.

Esto significa que cuando se asume que las intenciones de los actores políticos están conectadas lógica y empíricamente a los resultados institucionales, tenemos que reconocer el hecho que esto es una relación más compleja la cual está influenciada adicionalmente por una amplia gama de factores contextuales.A su vez, los ciudadanos tienen la capacidad de controlar las acciones de su gobierno a través de las elecciones, a pesar de que no disponen de ningún instrumento para sancionar el incumplimiento de promesas, por lo que los procesos electorales están diseñados para elegir más que para controlar a los políticos.

Las organizaciones no gubernamentales se están convirtiendo en grupos de presión que se mueven en los planos internacionales para promover sus demandas. Sin embargo, la actividad voluntaria de naturaleza privada de las ONG's no solamente atentan contra la soberanía de los pueblos, sino que también socavan el carácter público de atribuciones, funciones y actividades que son responsabilidades de los gobiernos por el bienestar de los ciudadanos. Tal como Resumen latinoamericano (2001) concluye, "al incorporar a la población pobre a la economía neoliberal meramente a través de "acción voluntaria privada", las ONG's crean un mundo político donde la apariencia de solidaridad y de acción social encubre una conformidad conservadora con la estructura de poder nacional e internacional".

Streetck y Schimitter (1985) caracterizaron las nociones de comunidad, mercado, Estado y las asociaciones en los términos de principios que guían, los actores colectivos dominantes, los pre-requisitos para la participación, el principio de la regla de decisión, el medio de intercambio, los tipos de bienes, y las externalidades generadas. Las redes de actores individuales y colectivos "representan un nexo sobresaliente en la relación entre las personas y los sistemas funcionales" (Lechner, 2000). En sí, estos elementos constituyen distintos agrupamientos institucionales, pero también representan modelos ideales de orden social. Deckker y Van den Broek (1998), tomando como base los modelos de Streetck y Schimitter (1985), desarrollaron una caracterización y tipificación de los cuatro elementos como tipos ideales de orden social en los siguientes términos:

Algunas características de Comunidad, mercado, Estado y sociedad civil como tipos ideales de orden social

Criterios	Comunidad	Mercado	Estado	Sociedad Civil
Principios guía	Solidaridad	Competencia	Jerarquía	Voluntariedad
Actores colectivos dominantes.	Familias, vecindades.	Negocios, partidos políticos.	Agencias burocráticas.	Asociaciones.
Prerrequisito para la participación.	Adscripción.	Poder de compra.	Autorización legal.	Compromiso.

Regla de decisión principal.	Consenso.	Oferta y demanda.	Adjudicación autoritaria.	Debate.
Medio de intercambio.	Estima.	Dinero, votos.	Coerción.	Argumentos.
Tipo de bienes generados.	Bienes solidarios.	Bienes privados.	Bienes colectivos.	Bienes mixtos
Externalidades positivas.	Afección mutua, identidad colectiva.	Prosperidad, responsabilidad .	Seguridad, justicia.	Capital social, Discurso público

Estos tipos ideales nos muestran las diferentes lógicas de cooperación y coordinación que existen en todas las sociedades e instituciones modernas. La sociedad civil se caracteriza con relación al Estado, en que este último constituye el espacio que sirve para la expresión de los intereses de sectores minoritarios de la sociedad y cuyas instituciones también están en función de los intereses del Estado. Con la excepción de derechos minoritarios constitucionalmente protegidos, ningún actor político está equipado con el poder de veto.

Dekker y Van den Broek (1998), basándose en un análisis propio acerca los principales argumentos del debate sobre la posición de la sociedad civil en Los Países Bajos, ofrecen una representación gráfica que relaciona la distancia de varias instituciones de los Estados modernos de bienestar en los cuatro modelos de orden social mencionados. En esta representación gráfica, la sociedad civil se localiza entre la comunidad, el mercado, y el Estado.

ESTADO
Gobierno nacional
Sector no lucrativo.
Autoridades locales Organizaciones No Gubernamentales.

Partidos políticos Grupos de presión
Movimientos
Sociales Organizaciones profesionales
Grandes compañías
Iglesias
SOCIEDAD <---------- MERCADO
CIVIL Sindicatos
Comunidades locales de negocios.
Asociaciones voluntarias

Vida del club social

Redes informales en vecindades, en el trabajo

Familia, lazos de amistad.

COMUNIDAD

El aparato del Estado en muchos países en desarrollo, principalmente los países Latinoamericanos, continúa estando fuertemente centralizado. También está permeado por tradiciones antidemocráticas y controlado por las elites políticas, las cuales perpetúan las relaciones existentes de poder, así como las desigualdades económico-sociales y regionales (Schönwalder, 1997) Las estructuras económicas, políticas y sociales de la colonia marcan las desigualdades de los individuos en una sociedad estamentaria y con un soporte jurídico y moral que considera las diferencias sociales como inherentes al mismo sistema. La política contemporánea y la vida social de la región se debe en parte al legado del dominio colonial europeo, a sus instituciones de dominación ideológica y a una tradición de militarismo y conflictos armados así como también a una institucionalización de numerosas desigualdades de clases, género y razas étnicas. Las grandes corporaciones transnacionales socavan la soberanía y autonomía de los pueblos colonizados o recolonizados, para una toma de decisiones independiente en la regulación de su propia economía.

Así, los Estados recolonizados, "actúan para servir los intereses de capitalistas extranjeros…Sin un estado (recolonizado) fuerte los objetivos imperialistas estarían en peligro. La fuerza se mide en este contexto por la capacidad de los actores del estado y las instituciones para llevar a cabo importantes cambios estructurales y asegurar su establización contra la mayoría de movimientos sociales populares, sindicatos y partidos políticos" Petras (2001d). Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes.

En un ambiente de "clientelismo neopatrimonial" (Término usado por Jean-Francois Bayart), son las elites políticas las que se benefician de la ineficiencia económica, convirtiéndose en los free riders que siempre obtienen ventajas personales o de grupo. Así, el patrimonialismo, el corporativismo y el clientelismo burocrático son mecanismos de intermediación entre el Estado y la sociedad que controla los principales beneficios y prebendas que otorga el Estado para favorecer a ciertos grupos e individuos free riders.

La eficiencia económica requiere que el aparato burocrático administrativo cumpla con los compromisos (commitment) legislativos contraídos. El Estado patrimonialista cometió excesos y fue ineficiente en la administración de los recursos, lo cual derivó en crisis constantes de los países subdesarrollados. En general, el rápido crecimiento de las administraciones en los países subdesarrollados y desarrollados ha producido deficiencias y perversiones tales como los entrelaces funcionales, el desarrollo de canales informales, centralización excesiva la cual explica la tendencia general hacia la descentralización para la provisión de los bienes públicos.

Si las políticas del libre mercado fueran exitosas y trajeran la prosperidad en los países en desarrollo, la brecha existente de las desigualdades económicas y sociales se acortaría. La realidad es a la inversa, a la recurrente crisis de las naciones menos desarrolladas, corresponde la prosperidad de las naciones más avanzadas. Además, se evitaría el resentimiento económico predicho por el modelo de mercadización, democratización y etnonacionalismo propuesto por Chua (1998) Tanto los gobiernos democráticos como autoritarios han respondido al "problema" de una minoría económicamente dominante adoptando políticas dirigidas a la falta de balance y equilibrio etnoeconómico.

De hecho, las relaciones étnicas son vistas como un juego de suma cero, en donde cualquier beneficio que reciban las minorías es considerado por las mayorías como una amenaza. No obstante, los gobiernos democráticos legitimados por el voto mayoritario, tienen el compromiso de hablar por su población y cuando adquieren compromisos internacionales, estos tienen que ser cumplidos por los gobernantes sucesores elegidos democráticamente.

La propuesta del modelo capitalista democrático para las economías de mercado de los países latinoamericanos necesita revisarse en función de los resultados expresados en incremento de la pobreza. Esto redunda en la formación de una sociedad con grandes contrastes en la distribución del ingreso, como en el caso específico de México donde 20 millones de mexicanos (20% de la población total), viven en condiciones de pobreza extrema y más de 40 millones (40% de la población), viven por debajo de la línea de pobreza. El Banco Mundial presenta cifras en las que 42 millones de mexicanos tienen niveles salariales por debajo de los veinte pesos diarios.

Un examen de los países como Chile, Costa Rica y México que han seguido fielmente las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional revela que sus logros publicados en el crecimiento macroeconómico a sido alcanzado al costo de mantener bajos los salarios reales de su fuerza de trabajo asalariada, el adelgazamiento de sus servicios públicos , la reducción de los beneficios sociales, así como el rápido crecimiento del sector informal de sus economías compuesto de vendedores de la calle autoempleados, manos alquiladas, trabajadores en pequeños talleres, jornaleros, reparadores, prostitutas, servidores domésticos y así entre otros (Harris, 1997). De esta forma, el llamado sector informal de la economía representa un tipo de subsidio para las empresas capitalistas en el sector formal.

La Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en los Hogares (ENIGH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el año 2000, reporta que la generación de la riqueza aumentó en los últimos seis años, pero la distribución de la esta riqueza se volvió más inequitativa, con niveles de deterioro alarmantes. El 10 por ciento de los hogares más ricos del país concentra 38.11 por ciento del ingreso nacional. En el otro extremo, la décima parte de los más pobres percibe apenas el 1.50 por ciento del total, cuando en 1996 fue de 1.79 por ciento.

Estos resultados de los procesos de globalización en México, constatan que dicha globalización económica se ha dado casi totalmente en una dirección: la entrada de empresas transnacionales y multinacionales, ahora denominadas empresas globales o negocios contemporáneos, las cuales en esencia, son foráneas y se han adueñado legalmente de recursos naturales, tierras, etc. y dejan pocos beneficios.

Mientras que el aumento del ingreso per cápita mundial ha aumentado en un 90% desde 1970, en los países latinoamericanos el crecimiento del ingreso per cápita para el mismo período ha sido menor y, además, con los efectos de una contracción económica. Las economías contemporáneas de Latinoamérica se han convertido en partes integral del nuevo sistema económico global que es dominado no por naciones Estados, sino por grandes corporaciones transnacionales que constituyen los principales actores globales en este sistema.

La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta. En un sentido son las variables estructurales las responsables del bajo crecimiento económico y de una cohesión social deficiente. Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Los elementos estructurales de las economías de mercado latinoamericanas dan a los dueños del capital y la tierra incentivos y oportunidades para perseguir estrategias políticas no partidistas, de tal forma que las estructuras del mercado alientan a las elites económicas a delimitar los procesos de democratización, como resultado de dos lógicas: los recursos de los agentes en el sistema socioeconómico influencia su afinidad estrategias políticas partidistas o no partidistas y el componente institucional evalúa como las instituciones estatales y los partidos políticos dan forma a los incentivos estratégicos de estos actores.

El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad. Son las variables institucionales las que desvían el potencial del desarrollo hacia una disfuncionalidad que crean mayores niveles de desigualdad económica. Sin embargo se está viendo cada vez más que la lealtad al partido cuenta más que la eficiencia y la competencia en muchos países

La reforma de los partidos políticos deben abrirse a los cambios que experimenta la sociedad civil al influjo de los procesos de globalización, abandonando esquemas corporativistas rígidos, con la posibilidad de ofrecer elecciones significativas. La idea de que emergerán instituciones en el ámbito global que desarrollen las funciones de los partidos políticos, parece ser irreal, a pesar de la necesidad de que existan políticos que sirvan de intermediarios entre la ciudadanía global y los formuladores e implementadores de las políticas.

El problema de la formación de pequeñas elites económicas y administrativas en los procesos de reforma del Estado, o la instrumentación de estas reformas por ciertas agencias selectivas, se reduce a mantener un estricto control de los cambios en beneficio de sus propios intereses con el consecuente debilitamiento de los procesos democráticos que dicen impulsar. En la práctica, las elites gobernantes con frecuencia han sido capaces de consolidar sus posiciones y encontrar nuevas formas de explotación bajo un régimen de liberalization. Las elites gobernantes de Latinoamérica generalmente han servido de intermediarias entre el poder externo dominante y la población local.

La nueva clase transnacional capitalista que emerge entre las elites capitalistas nacionales y que son la clase dominante en sus respectivos países, comparten el mismo proyecto neoliberal, intereses y privilegios de los poderes hegemónicos para implantar una política económica que les favorece. Por lo tanto, las elites locales de los negocios han abierto la puerta a las economías de las corporaciones transnacionales que están interesadas en mano de obra barata, recursos naturales, capital financiero y mercados de consumidores en los países latinoamericanos. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado.

El modelo institucional llena estos huecos explorando como las instituciones del Estado y de los partidos dan forma a los incentivos y transforman la conducta política. La dinámica de las instituciones existentes y la sociedad civil son el fundamento que determinan el modo de gobierno y su nivel de gobernabilidad democrática. Los factores estructurales son más apropiados para sobrepasar incluso configuraciones institucionales favorables cuando los recursos económicos de las elites terratenientes y capitalistas les dan poder político subordinado. Granjas modernas capitalistas orientadas a la exportación y complejos agro industriales, muchos de los cuales están conectados a corporaciones transnacionales han reemplazado la mayor parte de los anteriores grandes terratenientes y plantaciones que dominaron el campo latinoamericano durante siglos.

La tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966). El poder político del dinero pervierte la democracia entregando el poder a quienes son ricos, dando como resultado que sea el poder económico el que se imponga por sobre las decisiones democráticas electorales.

En otros casos, las instituciones meramente refuerzan las tendencias estructurales. Claramente, la combinación del Estado mínimo y de las instituciones mínimas partidistas es apta para desestabilizar los sistemas económicos (Bartlett and Hunter, 1997). Se deberá pensar más que un Estado mínimo en un Estado suficiente y necesario. Todavía más, se debe dar lugar a un Estado ampliado donde las instituciones de las esferas propias de la sociedad civil y del Estado confluyan en formas de gobernabilidad que propicien la colaboración Así, la consolidación democrática se centra en la voluntad de los actores sociales para usar el sistema partidista como su medio primario de articulación de sus intereses.

La falta de capacidades en los ciudadanos los coloca en desventaja para una participación efectiva en una sociedad democrática. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. Esta sociedad democrática y liberal se caracteriza porque todos los actores y agentes políticos tienen las mismas posibilidades de acceso al poder y al interés público, sin que nadie lo concentre para su propio beneficio. Los procesos de democratización, enfrentan serias contradicciones con respecto a la participación y representación política, las cuales no han podido cumplir la promesa de mayores libertades e igualdades en un contexto de sistemas políticos inclusivos, lo cual está propiciando una mayor desigualdad económica y social, y un incremento de la pobreza y exclusión social.

Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

En este sentido Coppedge (1993) señala la contradicción existente entre los principios de la democratización y la gobernabilidad que generan tensión, cuando sostiene que: "La

gobernabilidad requiere la representación efectiva de los grupos en proporción a su poder; la democracia requiere la representación de los grupos en proporción al número de adherentes que cada grupo tiene. La gobernabilidad respeta la lógica del poder, mientras que la democracia respeta la lógica de la igualdad política".

No hay que olvidar a Villoro (2000) quien entiende la democracia como una “serie de procedimientos de gobierno adoptados por los países occidentales más desarrollados: elecciones, representación popular, división de poderes, decisiones por mayoría, etcétera.” Esa forma de democracia, concluye, “es coherente con el individualismo, pues se supone resultado de las decisiones individuales sumadas de ciudadanos iguales”.

Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente ala reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación.

El principio básico de la democracia se fundamenta en la consideración de que todas las personas tienen el mismo valor y son iguales, por lo que la regla básica es una persona, un voto. Como tipos polares, las democracias con un mínimo de puntos de veto son mayoritarias en carácter, mientras que las democracias de negociación contienen un máximo de puntos de veto. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Una política económica errónea puede limitar la capacidad de gobernabilidad de la sociedad, independientemente del régimen político en que se aplique. La pertinencia de la política económica implica el acuerdo, aceptación y cumplimiento de las reglas del juego, instrumentos y metas que guían las relaciones económicas entre los diferentes agentes económicos y actores políticos. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. En realidad, el establecimiento de un régimen de gobernabilidad permite y crea niveles de discreción e influencia en las organizaciones públicas, sobretodo en aquéllas donde su función principal es la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía o de regulación de desempeños.

Por lo tanto, no necesariamente existe una relación directa entre regímenes políticos, democráticos o autoritarios y gobernabilidad. Los regímenes políticos requieren un liderazgo que reconozca sus posibilidades y limitaciones de desarrollo. La consolidación democrática induce a los actores de la sociedad a escoger el camino de dar voz a la articulación de sus intereses, asegurando la lealtad a largo plazo a los principios democráticos. La democratización es un proceso inherentemente inestable.

Una democracia estable requiere un balance delicado entre la coherencia del Estado que delimita la equidad social y el involucramiento que proporciona a las elites económicas privilegiadas, acceso a las instituciones del Estado (Bartlett y Hunter, 1997) La democracia es un sistema que establece métodos, mecanismos e instrumentos de gobierno para la resolución

de los conflictos políticos y la negociación de los intereses mediante la confrontación de las opiniones, el establecimiento de reglas y normas que definen la participación y mantienen el equilibrio entre las partes. En sí, el concepto de la democracia tradicional ha sido redefinido para ajustarse a los requerimientos del sistema capitalista.

La nueva estrategia de desarrollo implica no solamente el cambio de estructuras e instituciones, sino también de un cambio profundo en los valores individuales y sociales. Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales. La estrategia de modernización neoliberal se ha absolutizado bajo un dogma ortodoxo que no distingue diferencias de desarrollo entre los Estados nacionales. Las estrategias de desarrollo deben formularse para generar las oportunidades locales y regionales mediante el uso óptimo de recursos y potencialidades existentes.

Las transformaciones de la economía local y regional están influidas por la misma estructura económica, las políticas macroeconómicas nacionales y los procesos de globalización económica. Para acelerar el cambio y no solamente para coexistir, los individuos deben tener facultades y habilidades requeridas para dominar el arte de la retroalimentación y para interpretar la realidad misma que propone transformar. Hay muchas tendencias que indican que este proceso de transformación sostenida ya ha iniciado, aunque se encuentra todavía en un inicio incipiente.

Bien lo aprecia Habermas (1998) al afirmar que el "cambio de perspectiva de las relaciones internacionales a una política interior universal (…)no es suficiente para lograr la institucionalización de procedimientos económicos internacionales de carácter relevante, prácticas y reglamentaciones que permitan la solución de problemas globales. Todavía el estado-nación sigue siendo el sujeto actor principal de las relaciones internacionales en cuyo espacio se asientan las instituciones y los instrumentos de su orden político, económico, social, cultural, jurídico, etc. Es en el espacio nacional donde se manifiestan ciertos fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales definidos por las fronteras territoriales físicas y geográficas.

Es en este espacio del Estado-nación en donde emerge la geopolítica y a partir de aquí surgen en los niveles espaciales internacionales y global la importancia de la geoeconomía. Los procesos acelerados de globalización económica están cediendo su lugar a nuevas formas espaciales de organización geopolítica y geoeconómica. El espacio estatal es cubierto por otro espacio de economía de mercado promovida por las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales supeditando así el espacio nacional al espacio del mercado. Así, el proyecto globalizador de las corporaciones transnacionales avanza la geopolítica y la geoeconomía del espacio nacional al espacio internacional y global. Es en el ámbito espacial global que tienen lugar los diferentes procesos de la globalización en un contexto fragmentado.

Lo que falta es la urgente formación de una solidaridad civil universal (Weltbürgerliche Solidarität) que tendría ciertamente una calidad menor a la solidaridad civil dentro de los Estados nacionales". Para contrarrestar los efectos perversos del modelo económico basado en los procesos de globalización económica, es necesario que la solidaridad también se globalice. El desarrollo requiere de instituciones capaces de aprovechar los beneficios de la

globalización y que propicien la participación política y económica de los grupos de ciudadanos más excluidas y vulnerables. Los beneficios que han obtenido algunas de las naciones del mundo que se han involucrado en los procesos de globalización por sí mismas, se han distribuido en forma equitativa.

Sin embargo otras naciones no lo han logrado, sobretodo aquellas que han tenido la asesoría de las instituciones financieras internacionales. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación. En general, los ciudadanos participan poco o son indiferentes en los asuntos políticos, no se identifican con el juego de la política ni con políticos o partidos políticos a los que desdeñan y en ocasiones desprecian.

Al decir de Willy Brandt (1980), la humanidad nunca antes había tenido recursos técnicos y financieros tan grandes para enfrentar el hambre y la pobreza. Esta inmensa tarea puede ser atacada una vez que la voluntad colectiva sea mobilizada. La solidaridad entre los hombres debe ir más allá de las fronteras nacionales: no se puede permitir que se reduzca a una frase sin significado. La solidaridad internacional debe salir de fuertes intereses mutuos en cooperación y de compasión por el hambre.

La democracia cumple una función importante para la conquista de lo derechos políticos y sociales, de acuerdo a la teoría de acción comunicativa de Habermas (1992:504), quien afirma que "…sólo los derechos de participación política fundamentan el marco legal de los derechos reflexivos y autoreferidos de los ciudadanos. En general, los ciudadanos participan poco o son indiferentes en los asuntos políticos, no se identifican con el juego de la política ni con políticos o partidos políticos a los que desdeñan y en ocasiones desprecian.

Las libertades negativas y los derechos sociales pueden, en comparación, ser concedidos por una autoridad paternalista.. En principio, el Estado constitucional y el Estado de Bienestar son posibles sin una democracia." . Por lo tanto, puede argumentarse que las constelaciones constitucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables.

Kaiser (1997) propone tres principios básicos los cuales pueden explicar los procesos y resultados de ingeniería constitucional: el conservadurismo institucional, la dependencia institucional y el aprendizaje institucional. Mientras que el conservadurismo institucional y las propuestas dependentistas institucionales nos conducen a esperar que la evolución de los sistema políticos democráticos exhiben diferentes patrones, la propuesta de aprendizaje institucional apunta a la convergencia.

La investigación en la ingeniería constitucional ha tomado nota de los efectos de difusión, tales como la globalización de las comunicaciones que enriquece las bases cognitivas de las cuales escoger. Así, para que la gobernabilidad democrática avance, se requiere de dos instrumentos, la acción comunicativa o debate público y la crítica social. La libertad negativa es la libertad de, por ejemplo, los ciudadanos tienen la libertad de no tener interferencias,

restricciones y limitaciones por parte del Estado. Así entonces, la libertad positiva es la libertad que tienen los ciudadanos para, por ejemplo, participar en las decisiones democráticas del gobierno.

Requiere además de instituciones del Estado, que con el apoyo de la ciudadanía gobernada y del sector solidario, reconozcan posibilidades y limitaciones en el imperio de la escasez. Las instituciones bajo el esquema de la globalización tienen que reforzar el que tienen los gobiernos para aprovechar las oportunidades y los beneficios del desarrollo que pueden proporcionar los procesos de integración con economías más desarrolladas. Junto con las elites locales y los capitalistas transnacionales han promovido mayores cambios estructurales en las economías menos desarrolladas a fin de facilitar la creciente integración de la región en la economía global capitalista.

La participación política de los actores y movimientos sociales tradicionales y nuevos en el actual proyecto democrático, que enfatiza la redefinición del papel del Estado y la construcción de una sociedad civil, es muy limitada si se instrumenta bajo esquemas de racionalidad económica. El papel del mercado en el desarrollo es reidificado y subordina las funciones del Estado y de la sociedad, e incluso al régimen político en una dinámica perversa que desintegra el desarrollo social en beneficio del crecimiento económico que en el modelo actual se ha convertido en un fin en sí mismo, ya que mide cuantitativamente el producto interno bruto per cápita y el promedio de consumo real.

El desarrollo social debe pivotar sobre los programas de desarrollo humano que promuevan la formación de capital humano y capital social y que brinden mayores oportunidades de acceso a los recursos y bienes sociales, a efecto de elevar los niveles de calidad de vida. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la “trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos”. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence). Un sistema de gobernabilidad democrática facilita la formación y desarrollo de capital humano y social.

Tanto la sociedad como el Estado son dos actores sociales que pueden promover el desarrollo en forma equitativa y equilibrada. Sin embargo, el desarrollo social debe estar apuntalado por el desarrollo humano, por el desarrollo de la persona mediante la adquisición de capital humano y con mayores oportunidades de acceso a los recursos, para un incremento en los niveles de calidad de vida. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence).

La reforma del Estado que promueve el Consenso de Santiago intenta rehabilitar la función del Estado como promotor del desarrollo para superar las deficiencias que tienen los mecanismos del mercado y el modelo del Estado mínimo. La tendencia apunta al fortalecimiento de la función regulatoria para la promoción del desarrollo local y regional. Una rehabilitación completa de las funciones del Estado implica que el Estado tenga un papel importante que desempeñar en la regulación, protección y bienestar de la sociedad.

La reestatización o neoestatización de las funciones eliminadas o disminuidas por la aplicación de las políticas económicas y sociales del modelo neoliberal, la cual constituye en sí misma una pieza clave en la expansión de las grandes corporaciones transnacionales. Esta expansión de las empresas transnacionales es precedida por la expansión militar y política de los Estados imperiales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

Lamentablemente, los movimientos y organizaciones sociales no han podido defender la destrucción de las relaciones comunitarias y de solidaridad. Existen elementos de subjetividad en los análisis de la globalización de los movimientos sociales. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación "puramente expresiva y gratuita" como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). Cuando los movimientos sociales son protagonizados por grupos excluidos del poder del Estado y que, además, no tienen representación en el sistema económico-político, logran mayor eco cuando vinculan sus inconformidades y reclamos de derechos que han sido postergados con las exigencias de ejercicio de una ciudadanía extensiva. Sin embargo, los logros para mejorar las condiciones de bienestar han sido casi nulos.

Existe una relación cercana entre el desarrollo de los movimientos sociales y el desarrollo democrático, para impulsar las formas democráticas en todos los ámbitos de la organización social. Nuevamente, el pensamiento de Habermas es claro:

> *"En el proceso de la globalización, la capacidad de cooperación de los egoístas racionales se encuentra rebasada. Las innovaciones institucionales no tienen lugar en sociedades –cuyas élites gubernamentales son capaces de tales iniciativas- si no encuentran antes la resonancia y el apoyo en las orientaciones valorativas reformadas de sus poblaciones. Por esta razón los primeros destinatarios de este proyecto no pueden ser los gobiernos, sino los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales, es decir, los miembros activos de una sociedad civil que trasciende las fronteras nacionales. Sea como fuere, la idea nos lleva a pensar que la globalización de los mercados debe ser reglamentada por instancias políticas: las arduas relaciones entre la capacidad de cooperación de los regímenes políticos y la solidaridad civil universal (Weltbürgerliche Solidarität)*

La organización de los movimientos sociales democráticos desafía los poderes autocráticos establecidos, pero lamentablemente al igual que muchas organizaciones no gubernamentales, se orientan más por un sistema democrático representativo que obstaculiza el desarrollo de uno más participativo. Las demandas de los movimientos se encuentran conectadas con luchas contra sistemas de explotación o por la profundización y ampliación de sistemas políticos más democráticos.

Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Luxemburgo (1977) afirmó que “si la democracia se ha convertido para la burguesía en algo en parte superfluo, en parte enojoso, para la clase obrera resulta necesaria e indispensable. Es necesaria, en primer término, porque crea las formas políticas (autodeterminación, sufragio, etc.), que servirán al proletariado de impulso y apoyo en su transformación de la sociedad burguesa. Pero resulta indispensable también, en segundo lugar, porque sólo en ella, en la lucha por la democracia, en el ejercicio de sus derechos, puede llegar el proletariado a tomar conciencia de sus intereses de clase y de sus tareas históricas”. En este tipo de democracia burguesa se está muy lejos de aceptar la diversidad cultural y étnica. Las luchas sociales por la ciudadanía y por la democracia deben estar amparadas y comprendidas dentro de un marco de gobernabilidad democrática, para allanar los excesos de quienes tienen más poder.

Los movimientos sociales y de la izquierda que se han enganchado en las arenas de los gobiernos locales como agentes de cambio, están confluyendo las funciones del Estado y las funciones de las organizaciones civiles en proyectos colaborativos. La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados.

La izquierda ha asimilado y repetido la retórica de la doctrina del libre mercado y ha denunciado el desmantelamiento de las funciones del Estado. Las alianzas entre los movimientos de izquierda y los movimientos globalifóbicos pueden representar un frente de oposición y resistencia muy fuerte a los procesos de globalización que promueven las grandes corporaciones transnacionales en sinergia con los Estados-nación imperialistas, quienes detentan y concentran la propiedad y el control de las principales transnacionales.

Los gobiernos locales tienen un papel importante como agentes del desarrollo económico y social para garantizar la competitividad de las localidades en la dinámica de una economía globalizada. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales.

Los gobiernos locales como agentes del desarrollo tienen experiencias diversas para enfrentar los problemas de una realidad local. El desarrollo económico regional es descrito como los incrementos en el volumen de las operaciones económicas, tales como el producto agregado y el ingreso total entendidos como la suma del valor de lo producido en las diferentes actividades económicas y como la suma total de los ingresos generados para quienes participan en dichas actividades (Tarapuez Chamorro, 2001) La economía regional está determinada por la misma estructura económica, las políticas macroeconómicas nacionales y los procesos de globalización económica.

Esto debido principalmente a que los gobiernos locales no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas para cumplir con sus funciones. El desempeño de los gobiernos locales se encuentra limitado por las características regionales, la estructura de la sociedad y los sistemas de organización para la producción, distribución y consumo que se tengan. Los movimientos sociales que logran interpelar al sistema económico-político y al conjunto de la sociedad, sensibilizan a la opinión pública en torno a

problemas que trascienden las preocupaciones privadas y particulares de cada uno de los individuos. Los movimientos establecen sus demandas en la lucha contra los sistemas explotativos y por la profundización y ampliación de la democracia.

Las “cybercommunities” como grupos de acción colectiva transnacionales canalizan las preocupaciones de las organizaciones locales para contrarrestar los efectos perniciosos de los intereses hegemónicos de las corporaciones transnacionales y de la globalización económica, por ejemplo. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es. Cuando la acción colectiva supera la fase de latencia y entra en el escenario de oportunidad para expresar las reivindicaciones, su presencia se hace visible para ejercer un repertorio de contestación. La acción colectiva y el costo de participación se cruzan con los resultados que se obtienen cuando la estructura de oportunidades cambia.

Sin embargo, las prescripciones del modelo de desarrollo neoliberal está drenando el significado y las metas de la política desde que todas las luchas por el poder serán en vano, dada la desaparición del Estado como un centro de poder o como un instrumento de cambio (Poitevin, próximo a publicarse) Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición”. A pesar de los procesos de globalización económica, si tiene que haber algún tipo de respuesta democrática a la ascendencia del neoliberalismo, entonces la transformación del Estado a través de los movimientos sociales queda como un camino válido (May, 1997)

Por lo tanto, la legitimidad del gobierno está determinada en parte por su capacidad para resolver los problemas y los conflictos sociales que surjan. Corresponde al proyecto político desactivar las tensiones causadas por la hegemonía del mercado. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible.

La legitimidad es "el atributo de una relación social en donde una de las partes le concede a la otra el derecho de mando, aceptando la obligación relativa de obediencia, sin importar cuales sean los fundamentos de estas creencias" (Loza Otero, 1999) La legitimidad de un sistema tecnocrático se centra más en el desempeño económico del gobierno. Mientras que la responsabilidad de los partidos políticos legitiman la democracia mediante los mecanismos de representación que afectan la gobernabilidad, los partidos políticos son vistos como agentes de reclutamiento del gobierno y como agentes de participación política.

La institucionalización de los partidos políticos es un elemento esencial para lograr una gestión política efectiva de la gobernabilidad, cuya calidad se vincula con los arreglos político-institucionales. Las interacciones entre la sociedad y los partidos políticos son complementarias y no deben analizarse como un juego de suma cero donde hay un ganador y un perdedor. Los componentes de la sociedad civil pueden contribuir a potenciar la ideología y los programas de acción de los partidos políticos, para que representen intereses heterogéneos. La satisfacción con la forma de gobierno en sí misma no significa legitimidad,

sino que también es importante considerar las actitudes hacia las otras alternativas políticas extremas manifiestas en esos intereses heterogéneos.

Las organizaciones que integran la sociedad civil y los partidos políticos están compuestos por ciudadanos cuya única diferencia es de naturaleza jurídica. La sociedad civil está formada por agrupaciones que tienen intereses públicos, privados o ambos, mientras que los partidos políticos son de interés público. Sin embargo, tanto la sociedad civil como los partidos políticos tienen funciones y actividades que son complementarias y por lo tanto no tienen intereses necesariamente antagónicos. Los partidos políticos buscan el acceso al poder político, realizan la gestión social y proponen proyectos económicos, punto en el que hay mucha coincidencia con las funciones de las organizaciones de la sociedad civil, aunque los partidos políticos representan los intereses generales y pueden beneficiarse con las acciones de las organizaciones civiles que persiguen intereses más específicos.

La capacidad de organización comunitaria entre los diferentes sectores de la población, sobretodo los más desprotegidos que padecen carencias, o en situaciones extremas de desastres, ha motivado la emergencia espontánea del apoyo solidario de diferentes grupos de la sociedad civil, desafiando la lentitud en las respuestas de las instituciones gubernamentales. Debido a que las respuestas a los diferentes problemas comunitarios surgen de las propias organizaciones de la comunidad, su conocimiento y su compromiso son más profundos que los diseñados por las instituciones públicas. El diseño de estrategias que responden más rápidamente y con una mayor duración a la solución de los problemas, neutraliza los mecanismos institucionales de apoyo gubernamental.

Para evitar esta organización espontánea de la sociedad civil, los gobiernos privilegian programas de asistencia social donde no se haga mucho énfasis en el desarrollo comunitario y donde se encubra el apoyo gubernamental como despojado de su carácter de proselitismo político. La promoción del desarrollo comunitario tiene fines pragmáticos al intentar hacer algo por los miembros de la comunidad, y fines democráticos al buscar la autoafirmación como comunidad. Así entonces, la sociedad civil es vista como un receptáculo inerte de todo lo que haga el gobierno. No obstante, la devolución del poder social y político a las comunidades, junto con la implementación de una política económica inclusiva por el Estado, es crucial para la promoción de un desarrollo participativo y justo.

Esta puesta en práctica del diseño de una política económica requiere que las reglas de juego establecidas y acordadas entre los diferentes agentes económicos y actores políticos sean, además, cumplidas. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones. Los actores económicos, sociales y políticos estratégicos aprovechan las estructuras de poder para ejercer influencia a favor de las decisiones que benefician sus propios intereses. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos.

En este tipo de desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil representan un papel central en la promoción y facilitación de la participación social en la definición de las políticas de desarrollo, la cual es delimitada como un problema de gobernabilidad en la que se determinan las reglas de juego de los agentes para la formulación de las políticas públicas. Lechner (2000) sostiene que las políticas de desarrollo tienen que manejar complementariamente la modernización y la subjetividad. El capital social tiene carácter

instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación "puramente expresiva y gratuita" como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). La autonomía de la sociedad civil necesita fortalecerse convertirse en un verdadero interlocutor de los agravios del Estado.

La autonomía local descansa en el ejercicio que tienen los ciudadanos para juzgar las acciones de los gobiernos locales quienes tienen responsabilidades de una correcta toma de decisiones en sus competencias ante la comunidad. La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales.

Con la crisis del Estado-nación y su abandono como gestor de una política social que provea el bienestar social, surgen interrogantes sobre cómo deberá estructurarse los aspectos sociales ante el inminente retiro de estas funciones que ejercitaba lo político. Esta política de compensación a los requerimientos y demandas de los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales sobrecargan las estructuras político burocráticos y provocan la crisis del Estado de Bienestar.

Por lo tanto, existe una doble crisis, la crisis de lo político y la crisis del Estado que viven las democracias institucionalizadas. En la crisis de lo político, la crisis del Estado de Bienestar no necesariamente incide en la crisis de la democracia. La crisis de lo político es caracterizada por Ramos (1994) por débiles implicaciones políticas subjetivas, escasos sentimientos de competencia, relevancia de las actitudes desconfiadas y cínicas hacia los políticos, así como una muy baja identificación partidista. Así, en la crisis de lo político, la crisis del Estado de Bienestar no es la causante de la crisis democrática (Del Alamo, 2001).

Hasta ahora, la implementación de la política social ha focalizado a los más pobres y provocado reacciones de resistencia en los sectores de la clase media que no reciben beneficios a pesar de que también sufren las consecuencias de la política económica. Thoreau ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, a rechazar la obediencia y lealtad y a resistir un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables.

Lo que es necesario, es cambiar los términos de la política social a través del establecimiento de un pacto político-social para subordinar el interés individual al interés de la sociedad. Este pacto debe ser el resultado de acuerdos entre partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil de carácter asistencial social, a partir del desarrollo y la participación solidaria de la organización comunitaria de la sociedad civil. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil.

En realidad, la orientación estratégica de la política económica no se modificaría si existe un conjunto de mecanismos acordados y aceptados por todos los agentes económicos y actores políticos, cuando estos ajusten sus expectativas. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

El dilema de la gobernabilidad en Latino América

Latinoamérica no ha sido capaz de dar respuesta mediante un proyecto de desarrollo viable al dilema de cómo lograr la integración a los procesos de mundialización, sino es que a través de la estrategia del modelo de desarrollo neoliberal. La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

Junto con las elites locales y los capitalistas transnacionales han promovido mayores cambios estructurales en las economías latinoamericanas a fin de facilitar la creciente integración de la región en la economía global capitalista. Las elites gobernantes de Latinoamérica generalmente han servido de intermediarias entre el poder externo dominante y la población local. La naturaleza de la integración de la región latinoamericana en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo.

Las economías contemporáneas de Latinoamérica se han convertido en partes integral del nuevo sistema económico global que es dominado no por naciones Estados, sino por grandes corporaciones transnacionales que constituyen los principales actores globales en este sistema. Por lo tanto, las elites latinoamericanas de los negocios han abierto la puerta a las economías de las corporaciones transnacionales que están interesadas en mano de obra barata, recursos naturales, capital financiero y mercados de consumidores en los países latinoamericanos.

Para Latinoamérica, el crecimiento económico y el desarrollo social ha alcanzado altos niveles de costos socio-políticos que han deteriorado la base misma de la gobernabilidad social. En Latinoamérica ahora hay 70 millones más de hambrientos, 30 millones más de analfabetos, 10 millones más de familias sin casas y 40 millones más de desempleados que hace 20 años. Hay 240 millones de seres humanos que carecen de los satisfactores básicos de necesidades de vida y esto cuando la región es más rica y más estable que antes, de acuerdo a la forma en que el mundo o ve (Halebsky, S and Harris Eds., 1995). Muchos países en Latinoamérica están ahora en el camino de alcanzar economías competitivas y están en la posición de diseñar y financiar sus políticas sociales por sí mismos.

Un recuento breve realizado por Jiménez Lazcano (2000), de los efectos del modelo de desarrollo de los países latinoamericanos, menciona los siguientes: La fuerte dependencia económica con el exterior, principalmente con Estados Unidos y la Unión Europea, fuertes crisis financieras, devaluaciones y rescates bancarios, concentración de la riqueza en menos del 10% de la población, lento crecimiento económico, destrucción de la planta productiva, desempleo y subempleo, prioridad a la industria maquiladora, expulsión de trabajadores mexicanos hacia el Norte, privilegios al capital foráneo y al sistema financiero por sobre la economía real, privilegio al servicio de la deuda externa e interna, política económica restrictiva, integración económica hacia fuera y desintegración hacia dentro, rompimiento del tejido social, reducción de los niveles de ingreso de la población, transferencia de la riqueza local al exterior, expansión de la pobreza, rompimiento del pacto social, exclusión de los

indígenas, privilegios al comercio exterior antes que el mercado interno, sectores ganadores y sectores perdedores del comercio exterior, inestabilidad y crisis financiera recurrentes, insustentabilidad del modelo de desarrollo y reducción de opciones de política económica. La modernización puede lograr la sustentabilidad social si se acerca a los fundamentos culturales de la sociedad.

Se tratará de analizar con un poco de más detalle algunos de estos efectos que tienen una relación más estrecha con la gobernabilidad.

Barro (1999) ha demostrado que la desigualdad retarda el crecimiento en los países pobres pero acelera el crecimiento en los países ricos, por lo que existe muy poca relación entre la desigualdad de los ingresos y las tasas de crecimiento e inversión. Por su parte Galor y Moav (2000) concluyen que la desigualdad tiene un efecto positivo en el crecimiento económico en los primeros estadios del desarrollo y un efecto negativo en los estadios de desarrollo posteriores, anterior a una reducción significante en la efectividad de las restricciones del crédito. La desigualdad estimula los procesos de desarrollo mediante la canalización de recursos hacia los dueños de capital que tienen una alta propensidad para el ahorro.

Lindert and Williamson (2001) argumentan que si existe una correlación entre libre comercio y crecimiento económico y que su impacto en la desigualdad no es conclusivo. Por lo tanto, infieren que el libre comercio estimula el crecimiento de los países del tercer mundo y que es difícil aislar los efectos de la globalización en la creciente desigualdad, porque las investigaciones recientes en esta materia, tienen un enfoque muy estrecho que imposibilita su análisis, como en el caso de las experiencias latinoamericanas y del sudeste asiático. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados.

Sin embargo, los mismos países ricos no garantizan un nivel de beneficios que incremente el desarrollo humano a sus habitantes, excluyendo a grandes sectores poblacionales, confirmando que la riqueza es la excepción a la pobreza como regla. Estos resultados, por otro lado, justifican la implantación de políticas que igualen los ingresos sobre la base de una promoción de crecimiento de los países pobres. Las décadas anteriores representaron para muchos países pobres, épocas de retroceso en los índices de desarrollo humano. Los conceptos de desarrollo humano y buen gobierno son conceptos intrincados.

La crisis de gobernabilidad de los sistemas democráticos y la inestabilidad de sus instituciones limitan los alcances del despliegue de los programas de desarrollo humano. Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas. Sin embargo, los gobiernos civiles electos que sucedieron a estos regímenes al final de los ochentas y a principios de los noventas han continuado estas medidas impopulares, junto con otros factores, han prevenido estos regímenes de implementar políticas que combaten las desigualdades más obvias e injusticias sufridas por la mayoría empobrecida de la población en estos países.

De acuerdo al investigador, “es probable que la actitud de muchas sociedades ancladas sea la de negarse a aceptar, a ciegas, la superposición de capas de la ya formada gobernabilidad global, pero la gobernabilidad reluctante implica el reconocimiento de estándares universales de democracia (poliárquica o consociativa) sobre los que se funda y se explica” (Torrijos, 2001). Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de “esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política”. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Por esto, se requiere desarrollar una visión crítica del sistema económico internacional imperante, el cual representa una hipoteca para el futuro de muchos pueblos y por lo tanto, necesita cambiar. El problema de cómo diseñar un sistema económico en el cual el desarrollo tenga lugar sin que todos los intereses, incluyendo los futuros, se perjudiquen, basado en relacionas de cooperación que expresan la voluntad de servicio. El centro de este debate sobre la gobernabilidad son los cuestionamientos al modelo económico que tiene como base el mercado, implementado en las últimas dos décadas y a los desequilibrios sociales que ha generado.

Los contemporáneos latinoamericanos han heredado las estructuras del Estado basadas en e autoritarismo político, la exclusión de grandes sectores de la población de los procesos gubernamentales, así como de las formas crónicas de violencia política, levantamiento militares frecuentes y dictaduras que provocan insurrecciones populares así como una brutal supresión de ellas. Además, las dictaduras militares, la represión militar de las protestas e insurrecciones populares, las invasiones militares foráneas y la frecuente intervención de los militares en los procesos gubernamentales han sido un elemento continuado y prominente de la escena política.

Sin embargo, los regímenes civiles que han reemplazado a las anteriores dictaduras militares no han sido ni verdaderamente democráticas ni soberanas. Los principales retos que enfrenta la gobernabilidad de los países latinoamericanos ante los procesos de globalización de la economía, están la reducción de la pobreza a través de nuevas estrategias de crecimiento orientado, el incremento de la productividad y la competitividad de las economías y el incremento sostenido de la tasa de ahorro e inversión para consolidar la estabilidad macroeconómica. El modelo de ciclo de vida predice que las tasas de ahorro son independientes del ingreso y que el consumo sigue la misma tendencia que el ingreso.

La pobreza en Latinoamérica es un problema estructural causado por la forma en que opera el sistema económico completo (Attanasio y Sélkely, 1999b), por lo que tiene que ser atacado efectivamente con políticas que modifiquen el medio ambiente económico de tal forma que permita a los individuos tomar ventaja de las oportunidades. El enfoque en los mecanismos que generan desigualdad y pobreza y la construcción de un marco de referencia ayudará a identificar los mecanismos estructurales. No obstante, persiste el problema de diseñar un sistema económico donde todos los intereses, incluyendo los futuros, tengan cabida. Muchos países en Latinoamérica están ahora en el camino de alcanzar economías competitivas y están en la posición de diseñar y financia sus políticas sociales por sí mismos.

La pobreza alcanza a 224 millones en Latinoamérica, de acuerdo al análisis de Galaz (2000) En 1980, 135 millones de personas, que correspondía al 35% de los hogares

latinoamericanos eran pobres. Esta cifra alcanzó el 45% que representaba a 200 millones de pobres en 1990 y para 1998, 50 millones de personas que antes pertenecían a las clases medias pasaron a ser pobres. En Latinoamérica ahora hay 70 millones más de hambrientos, 30 millones más de analfabetos, 10 millones más de familias sin casas y 40 millones más de desempleados que hace 20 años. Hay 240 millones de seres humanos que carecen de los satisfactores básicos de necesidades de vida y esto cuando la región es más rica y más estable que antes, de acuerdo a la forma en que el mundo o ve (Halebsky, S and Harris Eds.,1995).

Un informe de Business Week (2000) señala que una quinta parte más alta de la población latinoamericana controla más de la mitad de la riqueza, mientras que la quinta parte más baja recibe sólo el 4.5%. Más del 40% de los 470 millones de latinoamericanos viven con menos de dólares al día y son pobres dentro de los estándares del Banco Mundial. Un cuarto de toda la población latinoamericana vive en condiciones de extrema pobreza con menos de un dólar diario. Latinoamérica se volvió más desigual en la década de los ochenta, la cual permaneció durante los noventa. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Para 1997, la incidencia de pobreza permaneció 3 por ciento mayor a 1980, con un total de más de 70 millones de pobres más que en 1980.

El motivo de este "Exceso de pobreza" sostienen Attanasio y Székeley (1999a:317), es la elevada desigualdad en la distribución de los recursos y también se debe al escaso crecimiento experimentado por la mayoría de los países latinoamericanos durante las décadas de los ochenta y los noventa. En las últimas dos décadas, casi cada aspecto mayor de la vida económica, política y social en Latinoamérica estuvo influida por la integración acelerada de la región en el sistema capitalista global. La desigualdad de ingresos es resultado de una "distribución muy deformada de los activos generadores de ingresos, siendo el más importante de ellos el capital humano".

Estos temas en estas sociedades son predominantemente de naturaleza política doméstica: invertir o no invertir más en capital humano adoptan más políticas impositivas igualitarias y crean fondos colectivos para el cuidado de la salud y las pensiones. El incremento de la desigualdad de los ingresos en el mundo es consecuencia de la ampliación de diferencias entre las naciones principalmente y en menor parte por el incremento de las diferencias dentro de las naciones.

En ninguna parte del mundo, la desigualdad económica es tan profunda como en Latinoamérica (Business Week, 2000) Una de las realidades más impresionantes de Latinoamérica es el grado extremo de desigualdad económica, social y política que caracteriza a las sociedades de la región , a tal grado que esta desigualdad es quizás mejor revelada por la distribución de ingreso entre los niveles más altos y bajos de ingreso en las sociedades latinoamericanas.

En suma, la desigualdad económica y social es extrema a través de Latinoamérica y recientes transformaciones en el sistema capitalista global y las economías de los Estados latinoamericanos han contribuido en su mayor parte a la ya de por sí polarizada estructura de clases, diferenciación étnica, racial y de género. Un estudio de Harris (1997) revela que el más alto 20 por ciento del ingreso obtiene entre el 40 y 70 por ciento del total anual del ingreso ganado en los países latinoamericanos, mientras que el más bajo 40 por ciento de los que obtienen ingresos obtienen solo entre el 5 y el 20 por ciento del total del ingreso ganado

en estos países, el 40 por ciento de todos los hogares latinoamericanos viven bajo la línea de pobreza definida en términos del ingreso requerido para satisfacer necesidades básicas para alimentación, habitación, y ropa. De hecho la mitad de los grupos no tiene un ingreso suficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas de alimentación.

Las diferencias salariales se ampliaron cuando se abrieron las economías de los países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay) en los finales de la década de los setenta (Hanson and Harrison, 1999)influidos quizás por el contexto histórico. Un examen de los países como Chile, Costa Rica y México que han seguido fielmente las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional revela que sus logros publicados en el crecimiento macroeconómico a sido alcanzado al costo de mantener bajos los salarios reales de su fuerza de trabajo asalariada, el adelgazamiento de sus servicios públicos , la reducción de los beneficios sociales, así como el rápido crecimiento del sector informal de sus economías compuesto de vendedores de la calle autoempleados, manos alquiladas, trabajadores en pequeños talleres, jornaleros, reparadores, prostitutas, servidores domésticos y así entre otros (Harris, 1997).

De esta forma, el llamado sector informal de la economía representa un tipo de subsidio para las empresas capitalistas en el sector formal. La presencia de un sector informal grande ayuda a mantener los salarios bajos y los costos de reproducir la fuerza de trabajo urbana a un mínimo para los negocios locales y para las corporaciones transnacionales, por lo tanto los capitalistas son capaces de maximizar sus utilidades pagando bajos salarios a sus trabajadores y pocos si es que algunos beneficios.

Desde entonces, se inician los programas de transferencia del poder y el mando del Estado al mercado mediante la desregulación del Estado y la regulación por el mercado. Sin embargo, los gobiernos civiles electos que sucedieron a estos regímenes al final de los ochentas y a principios de los noventas han continuado estas medidas impopulares, junto con otros factores, han prevenido estos regímenes de implementar políticas que combaten las desigualdades más obvias e injusticias sufridas por la mayoría empobrecida de la población en estos países.

A pesar de que la incidencia de la pobreza disminuyó en la región durante la primera mitad de la década de los noventa del siglo pasado. Sin embargo, la reanudación del crecimiento económico fue insuficiente para reducir el número absoluto de pobres en los países latinoamericanos debido principalmente a “choques adversos”. La falta de gobernabilidad y regulación se debe al fracaso que ha tenido la transferencia del poder y el mando de las instituciones del Estado a las instituciones del mercado.

La reducción de la pobreza es uno de los mayores retos de Latino América. Los países latinoamericanos requieren con urgencia y angustiosamente un nuevo paradigma de desarrollo y de combate a la pobreza mediante la formación de alianzas entre los sectores público y privado en el que participen con más fondos las empresas que se han beneficiado de las privatizaciones. Muchos de los problemas y temas tratados anteriormente persisten en Latino América. En la nueva agenda de gobierno se privilegian las alianzas entre los sectores público, privado y social para el establecimiento de acuerdos de colaboración conjunta.

Lamentablemente en la privatización de las empresas del Estado ha predominado el cálculo racional de las utilidades de los agentes privados y públicos, quienes han satisfecho

intereses privados de rent seekers y free riders en muchos de los casos, apropiándose del patrimonio económico público. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros.

Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional. Estas políticas han disminuido la tasa de crecimiento económico en general y han traído una drástica reducción de los servicios del gobierno así como en el empleo público. Esto ha resultado en una venta total desnacionalizadora de los más grandes beneficios y empresas públicas de estos países y abolido las tarifas protectoras y otras formas de apoyo que previamente tenían las empresas locales.

En el combate a la pobreza, los más beneficiados son las instituciones, la sociedad civil y los sectores productivos que orientan sus actividades a la solución de los problemas de la pobreza. La sociedad tiene un papel importante como actor social del desarrollo. Este nuevo paradigma debe permitir y medir incrementos en la riqueza que no estén desasociados de las medidas de crecimiento monetario, crecimiento de la población y deuda. Los sistemas y prácticas que fallan del actual paradigma hegemónico, marcan el inicio de un cambio eventual a otro nuevo paradigma.

Aunque en Latinoamérica, la política social del Estado de Bienestar nunca se profundizó en ningún país, el modelo económico neoliberal la está desmantelando. Durante los años comprendidos entre 1940 y 1970, se intentaron implantar políticas sociales para reducir las brechas de las desigualdades económicas y sociales, las cuales finalmente beneficiaron a los sectores urbanos, más que a los rurales. Por tanto, la naturaleza excluyente de la transformación económica de la agricultura latinoamericana ha incrementado el empobrecimiento de la población rural y acelerado la migración del pobre rural a las ciudades en busca de empleo. El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido de los beneficios.

Los programas de combate a la pobreza en los países latinoamericanos ofrecen sólo un paliativo temporal por medio de la instrumentación de redes de seguridad social, porque se centran en las consecuencias y no atacan las verdaderas causas de la pobreza. En Latinoamérica, el compromiso del liberalismo para crear una red de seguridad social no fue tan exitoso como lo ha sido en otros países desarrollados. Muchos países en Latinoamérica están ahora en el camino de alcanzar economías competitivas y están en la posición de diseñar y financia sus políticas sociales por sí mismos.

Las principales fuentes de la pobreza son internas a la sociedad: carencia del conocimiento, educación y ciencia, falta del Estado de derecho (regla del derecho), falta de instituciones que protejan las vidas de las personas y su propiedad y provean de un marco de

referencia de los incentivos para la acción individual y la empresa, falta de equipamiento de capital de todos tipos, inestabilidad macroeconómica masiva, gobiernos predatorios, etc. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. Las políticas públicas para reducir la pobreza se centran en el aumento de ingresos mediante instrumentos como el subsidio con transferencias de efectivo y de servicios, etc.

La reducción de la pobreza tiene que estar apoyada por programas de educación y salud, y servicios sociales básicos, pero con una reorientación de las políticas de tal forma que se eviten las diferenciaciones regionales que causaron la profundización de las desigualdades. Difícilmente los Estados Latinoamericanos pueden resolver los crecientes problemas de la pobreza, porque están enfrentando grandes reducciones presupuestales y recortes a sus principales funciones de asistencia social.

La reducción de la pobreza es un punto focal en el diseño de las políticas públicas y el soporte financiero para lograr el crecimiento económico y el desarrollo social de los pueblos latinoamericanos, que ancestralmente ha sido una sociedad muy desigual, y lo es más ahora que antes. La sociedad es un actor social que puede desempeñar un papel importante en lograr un desarrollo equitativo y equilibrado.

La movilidad social es una medida más precisa de justicia social que la desigualdad social. La movilidad social es medida por la forma en que los antecedentes familiares determinan el éxito socioeconómico, pero en la práctica también puede ser medida por correlaciones intergeneracionales y de hermanos (as) El debate sobre la justicia social en los países en desarrollo, se ha centrado en la desigualdad y en políticas destinadas a compensar a los perdedores. No se ha dado prominencia a la movilidad social que se enfocaría al diseño y aplicación de políticas destinadas a crear oportunidades.

Investigaciones empíricas (Dahan y Gaviria, 2000) demuestran que existen diferencias sustanciales en la movilidad social en Latinoamérica, la cual se incrementa con la escolaridad y el ingreso per cápita, pero es levemente asociado con el gasto público en educación. Las inversiones en educación, consideradas como inversiones en capital humano, es una inversión para el desarrollo, si se considera que la educación es el fundamento de la información y esta la base de la productividad del sistema de la globalización. Estos temas en estas sociedades son predominantemente de naturaleza política doméstica: invertir o no invertir más en capital humano adoptan más políticas impositivas igualitarias y crean fondos colectivos para el cuidado de la salud y las pensiones. El capital humano asignado a actividades financieras producirá crecimiento a largo plazo, mientras que a corto plazo lo reducirá.

En una muestra de 16 países latinoamericanos, los investigadores encontraron que la movilidad social tiene una correlación alta con los niveles de educación, en la que los países con mayor escolaridad y menos desigualdad en escolaridad permiten una mayor movilidad. Sin embargo, la movilidad social no está correlacionada con los gastos públicos en educación como porcentaje del producto interno bruto. También encontraron que la movilidad social en Latinoamérica está levemente relacionada con el ingreso per cápita y que la desigualdad está asociada fuertemente con la selección en los mercados matrimoniales.

Algunos países latinoamericanos son pioneros en programas de combate a la pobreza que incluyen componentes adicionales de inversiones en capital humano a través de la educación

y la salud, pero debido a que no han sido adecuadamente institucionalizados estos programas sólo proveen un alivio temporal, lo que termina siempre en un enfoque reduccionista del problema que restringe las políticas. Alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma. Un mayor problema para dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados. Esquemas de créditos de bajos intereses en condiciones favorables, por ejemplo, diseñados para servir al más necesitado, casi invariablemente fallan en alcanzar a la población meta.

Al evaluar las estrategias de inversiones de capital humano, es crucial considerar el portafolio completo de políticas conjuntas de intervención, tomando siempre en consideración que los retornos a las inversiones de capital humano son mayores para los jóvenes, por lo que en este enfoque se abandona a los mayores de edad, como los ancianos. Estos temas en estas sociedades son predominantemente de naturaleza política doméstica: invertir o no invertir más en capital humano adoptan más políticas impositivas igualitarias y crean fondos colectivos para el cuidado de la salud y las pensiones. Estos temas en estas sociedades son predominantemente de naturaleza política doméstica: invertir o no invertir más en capital humano adoptan más políticas impositivas igualitarias y crean fondos colectivos para el cuidado de la salud y las pensiones.

La propuesta de Attanasio y Szélkeley (1999a: 361) para el análisis dinámico de la pobreza consiste en abandonar el enfoque al ingreso familiar y su distribución para enfocarse en el acceso que tienen los pobres a la propiedad y uso de activos generadores de ingresos y su acumulación que incluyen a activos físicos y financieros, capital humano y capital social, los cuales son usados de modo productivo para elevar el ingreso, aunque la relación existente entre capital humano y desarrollo no es contundente (Yáñez, 20001) El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales.

De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la "trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos". El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí.

Para que el capital social pueda ser un instrumento de desarrollo, se requiere de una voluntad política que otorgue más empoderamiento a la confianza, bajo un proyecto de desarrollo orientado por fines colectivos. Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad.

El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil. Considerado el capital social como una herramienta del desarrollo que promueve redes de confianza y asociación bajo un modelo de política económica que fomenta el individualismo, la fragmentación, marginalidad y exclusión social, resulta ser un contrasentido con resultados muy ambiguos. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo

humano, conceptualiza el capital social como la “trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos”

El capital social individual es considerado como un componente del capital humano, e incluye las habilidades intrínsecas y los resultados de las inversiones en capital social. En realidad, el capital humano genera desarrollo cuando se logra una empleabilidad mediante la aplicación económica a través del mercado. La posesión y uso de estos activos en una forma productiva por los miembros del hogar contribuye a su ingreso. Estos temas en estas sociedades son predominantemente de naturaleza política doméstica: invertir o no invertir más en capital humano adoptan más políticas impositivas igualitarias y crean fondos colectivos para el cuidado de la salud y las pensiones

Los investigadores Attanasio y Szélkeley (1999a: 361) presentan evidencias de que “el proceso de formación de capital humano, y hasta cierto punto de su utilización, es decisivo para el desarrollo de la América Latina y para la eliminación de la pobreza”. Este proceso de formación de capital humano tiene la tendencia a centrarse en el desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano es un concepto intrincado al de buen gobierno. La inestabilidad institucional y la crisis de gobernabilidad por la que atraviesan los sistemas democráticos, limitan los alcances de sus programas de desarrollo humano.

Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas.

En la experiencia de América Latina, el proceso de desarrollo económico y social no logró avanzar a pesar de la prolongación de la capacidad para vivir más años (Yáñez, 20001). Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de “esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política”. Muchos de los viejos problemas y temas continúan siendo contemporáneos. De hecho, los problemas contemporáneos de la globalización, la expansión del capitalismo tardío o postmoderno han agravado los más crónicos problemas de la región latinoamericana. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

En las últimas dos décadas, casi cada aspecto mayor de la vida económica, política y social en Latinoamérica estuvo influida por la integración acelerada de la región en el sistema capitalista global. Las economías contemporáneas de Latinoamérica se han convertido en partes integral del nuevo sistema económico global que es dominado no por naciones Estados, sino por grandes corporaciones transnacionales que constituyen los principales actores globales en este sistema.

De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población latinoamericana mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso. La conclusión de que la primera causa dela extrema desigualdad social y

económica en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo.

La complejidad de la realidad social de Latino América Contemporánea es quizás pensada como una complejidad híbrida de ideologías, prácticas y condiciones de la premodernidad, modernidad y postmodernidad. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

El Estado de los países latinoamericanos ha pasado por cambios profundos en sus funciones, en las últimas dos décadas, hasta llegar a ser menor y delgado, aunque se mantenga como la expectativa de que sea más eficiente y efectivo. Los contemporáneos latinoamericanos han heredado las estructuras del Estado basadas en e autoritarismo político la exclusión de grandes sectores de la población de los procesos gubernamentales, así como de las formas crónicas de violencia política, levantamiento militares frecuentes y dictaduras que provocan insurrecciones populares así como una brutal supresión de ellas.

Además, las dictaduras militares, la represión militar de las protestas e insurrecciones populares, las invasiones militares foráneas y la frecuente intervención de los militares en los procesos gubernamentales han sido un elemento continuado y prominente de la escena política, Sin embrago, los regímenes civiles que han reemplazado a las anteriores dictaduras militares no han sido ni verdaderamente democráticas ni soberanas.

Presionada por el entorno económico, la administración pública del Estado latinoamericano abandona el modelo de administración burocrática propia del Estado patrimonialista orientado al modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones, para introducir el modelo administrativo de la Nueva Gerencia Pública impuesto por el modelo neoliberal de Estado que exige la adopción de una cultura gerencial, sin que se hayan desarrollado estadios superiores del modelo burocrático necesarios para la transición.

Mientras no se formule una teoría del cambio institucional y desarrollo de las capacidades del Estado, los alcances de l modelo gerencial están limitados. En cada cambio de las constelaciones institucionales se involucran altos costos de transacción de los actores políticos afectados. Los actores políticos pueden inventar nuevas estrategias para adaptarse a los cambios de reglas y las instituciones son parte de una configuración, donde un cambio hecho en una institución puede tener efectos impredecibles y no esperados en otros. Por lo tanto, lo que se requiere es la construcción de un sistema burocrático moderno que reinvente la racionalidad de la función administrativa y adapte las instituciones a las condiciones del entorno.

Las políticas económicas de corte neoliberal y monetarista despoja a la política social de sus connotaciones ideológicas y centra a la economía de mercado en la nueva doctrina que alienta los procesos de globalización y cercena la soberanía de los Estado-nación para suplantarla por un nuevo concepto de soberanía, la consumidora. Es un imperativo rediseñar la política social ante el inminente abandono como función de lo político, ya que se ha focalizado para atender a los grupos más pobres a los que no ha resuelto atacar las verdaderas causas de ello.

La política social era un mecanismo efectivo de clientelismo político del Estado corporativo, en donde los organismos e instituciones encargadas de esta función, formulaban e implementaban una política social que tampoco promovía la equidad ni la eficiencia, pero que las atenuaba. La transición del Estado corporativo al modelo de Estado gerencial aceleró el descongelamiento de las fuerzas elitistas del capitalismo que se oponen a la acción económica del Estado, para convertirse en los agentes económicos protagonistas del desarrollo cuya representación de intereses es representada por el mercado.

En la mayoría de los países latinoamericanos existe una desconexión entre la presupuestación, planeación de inversiones, sistemas de procuración, aplicación de los recursos financieros y la evaluación de los resultados, los cuales muestran todavía muchas limitaciones y deficiencias.

La reforma del Estado en Iberoamérica tiene como causas las recurrentes crisis fiscales, la globalización de los mercados y los procesos democráticos. Se realiza sin que se tenga una visión clara del papel que debe desempeñar el Estado y de las actividades que deben realizar las entidades públicas de tal forma que determinen su lugar en la reorientación del sector público. Abarca tres períodos: el de ajustes de la balanza de pagos y macroeconómico, la reestructuración de los incentivos y los precios relativos. ; el segundo período involucra la privatización y la contratación de un gran número de actividades del Estado que se consideran particularmente comerciables en un mercado y, el tercer período que comprende los ajustes institucionales a largo plazo necesarios para consolidar y mantener las reformas anteriores, por lo que se ha dado en llamar las reformas de la segunda generación.

Esta última reforma implica dos acercamientos. En primer lugar hay un consenso de que el gobierno debería involucrarse solamente en aquéllas áreas donde el sector privado no tiene una ventaja comparativa y en segundo término, que la expansión selectiva o el fortalecimiento de las actividades gubernamentales se requiere para compensar la baja provisión de bienes públicos, incluyendo los servicios básicos (Rowart, 1999) La provisión de los servicios públicos por agentes económicos con intereses particulares persiguen fines de lucro más que los caritativos. Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

Por otro lado, la asignación para la provisión de los bienes y servicios públicos debe promover la participación mediante mecanismos y procesos democráticos para que los ciudadanos reciban de acuerdo a sus preferencias en función de la comunidad territorial a la que pertenecen. La descentralización eficiente para la provisión de bienes y servicios públicos, requiere como condición básica de una mayor participación ciudadana directa, tanto política como administrativa, y no necesariamente a través de los representantes electos.

Los mecanismos de participación pueden referirse a la participación ciudadana y la participación económica de acuerdo a la clasificación que hace Finot (2000). En el primer tipo se refiere a aquellas decisiones de carácter democrático sobre las asignaciones para la provisión y producción de bienes y servicios públicos, así como a los procesos de ejecución y control de decisiones administrativas. La participación económica se refiere a la introducción de mecanismos de mercado y externalidades en los procesos de asignación para la provisión y producción de bienes y servicios públicos. La participación económica exige la gestión individual a través de organizaciones económicas y sociales que proveen los bienes y

servicios públicos. Estos mecanismos de participación, sin embargo puede ser instrumentos para la manipulación de los verdaderos intereses de la sociedad.

La crisis financiera de los Estados latinoamericanos durante la década de los ochenta y los noventa caracterizada por déficit presupuestales, políticas monetarias flexibles e índices inflacionarios galopantes dio cabida a las intervenciones del Fondo Monetario Internacional. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Como resultado de la crisis de la deuda experimentada por los países tales como México, Bolivia y Argentina durante los ochentas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras agencias de préstamos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, impusieron políticas de ajuste estructural de libre mercado en los gobiernos latinoamericanos a fin de asegurar que dedicaran suficientes fondos a pagar la deuda internacional.

El FMI acudió al rescate imponiendo sus políticas de presupuestos balanceados mediante la austeridad fiscal, una rígida política monetaria, reducción del tamaño del gobierno, privatización de empresas propiedad del Estado (EPEs) y desregulación de la actividad económica, como condición para prestar ayuda. Las crueles medidas de austeridad han sido adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de la región a fin de reducir sus gastos en educación, salud y otros servicios sociales de tal forma que pueden servir a la combinación de deudas de los sectores privados y públicos de los diferentes países.

Estas políticas de ajuste estructural neoliberal han involucrado completamente la apertura de los mercados domésticos de los países latinoamericanos al capital transnacional, la promoción de las llamadas exportaciones no tradicionales a fin de ganar divisas extranjeras tanto como sea posible para pagar las deudas, y la desregulación del capital local y los mercados comerciales, que han involucrado las impopulares medidas de austeridad fiscal dirigidas a reducir los servicios públicos y a privatizar muchas de los servicios públicos y empresas públicas, de tal forma que los fondos públicos estén destinados al pago de las deudas. La privatización de los beneficios, riesgos y responsabilidades de los servicios públicos, también enajena las aspiraciones sociales, las cuales se cancelan si la subjetividad es excluida del orden social. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000).

El papel de gestión de crisis económica y financiera que desempeñan los Estados imperialistas mediante intervenciones para apoyar a los Estados menos desarrollados y a las empresas transnacionales con problemas. En lo que respecta a la reducción del tamaño del gobierno, la cuestión debe centrarse en una reingeniería de procesos más tendiente a la delimitación de actividades y procesos para hacer más eficientes las tareas del Estado.

Estas políticas conocidas también como de ajuste estructural, impuestas por el “Consenso de Washington”, son diseñadas bajo los principios de una nueva ortodoxia de las teorías liberales, que han dado beneficios en el ámbito macroeconómico. Los postulados del Consenso de Washington que han sido impuestos a los países en desarrollo se fundamentan en una liberalización de sus economías, privatizaciones de empresas públicas y en limitar la intervención de los gobiernos en el mercado.

Las naciones que más beneficios han recibido de los procesos de globalización son aquellas que se han apartado de la aplicación de los postulados del Consenso de Washington para regular su propio crecimiento económico. El Consenso de Washington propuso un modelo de Estado liberal, minimalista y reduccionista en oposición ideológica a la concepción del modelo de Estado de bienestar (Welfare State) cuyas prácticas profundizaron las políticas sociales porque tomó como una obligación la provisión de los servicios asistenciales.

Los países pobres, altamente endeudados no tuvieron más opción que aceptar las propuestas del "Washington Consensus" encaminadas a orientar el desarrollo bajo una economía de mercado, el manejo escrupuloso de la macroeconomía mediante el diseño de reformas financieras, la cual implica el desarrollo de instituciones que son inexistentes o subdesarrolladas. Petras (2001d) argumenta que los Estados imperialistas como Estados Unidos, Europa y Japón, a través de las instituciones financieras internacionales presionan a los países receptores de préstamos en el tercer mundo para reducir y eliminar barreras comerciales y privatizar empresas del Estado, lo que permite a las empresas transnacionales penetrar en los mercados y comprar empresas locales.

Después del periodo de la posguerra y y hasta los finales de los setenta, los países del tercer mundo implementaron una política económica contraria a los dictados de las instituciones financieras internacionales debido a las alianzas ideológicas y políticas con las clases sociales y a los movimientos populares nacionalistas. Por lo tanto, el modelo de Estado de Bienestar a escala mundial o global es un proyecto que puede rescatar a la humanidad misma, más que a desaparecerlo para permitir la maximización de beneficios de tipo bursátil.

Sin embargo, la aplicación de estas políticas representa la estagnación de las economías en los países en desarrollo. La estagnación de los países en desarrollo en las décadas de los ochenta y noventa a pesar de la reformas económicas que deberían de haber acelerado y no haber propiciado la caída del crecimiento (Easterly, 2000a) Las características favorables para el crecimiento del ingreso han mejorado, pero el crecimiento de los países en desarrollo se ha estancado. El nivel de incertidumbre para el crecimiento de los países en desarrollo es alto.

Pero también han dado origen a una ingobernabilidad de las instituciones económicas que han propiciado una inestabilidad financiera de los mercados. Además, profundización en los niveles de pobreza, mayor desigualdad y exclusión social, baja calidad de vida, deterioro y precariedad de las condiciones de vida, e incremento en los niveles de violencia social e institucional. La pérdida en la calidad de vida se sacrifica en nombre de un supuesto e incierto progreso futuro.

El logro de mejores niveles de calidad de vida está relacionado con la instrumentación de mecanismos de gobernabilidad institucionalizados que reparten los beneficios del desarrollo en forma más justa y equitativa, dando origen a una sociedad más satisfecha y por tanto menos asimétrica por sus desigualdades. El costo social de la aplicación de estas políticas de ajuste estructural es alto desde el punto de vista de reducción del gasto público, sobretodo en materia de educación, salud, vivienda, etc.

Por lo tanto, las políticas de ajuste estructural hacen referencia a "poder de clase, riqueza y control", en donde el Estado recolonizado (Petras, 2001d), es activo en la implementación

que incluyen “cambios en la propiedad (de público a privado, de capital nacional a capital extranjero” mediante una serie de medidas que benefician a la clase capitalista transnacional. Por lo tanto, la implantación de las políticas de ajuste estructural requieren de “un estado fuerte dispuesto a resistir la oposición de la mayoría. La propuesta para el análisis del cambio institucional es opuesta a la democracia mayoritaria y negociadora como el punto de partida. Como tipos polares, las democracias con un mínimo de puntos de veto son mayoritarias en carácter, mientras que las democracias de negociación contienen un máximo de puntos de veto (Kaiser, 1997)

Un estado ideológicamente comprometido, dispuesto a ocultar su rol histórico como entidad independiente y a rechazar la idea de la soberanía popular para así poder implantar políticas por vías autoritarias, por real decreto. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997). Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Desdichadamente, fue durante el mismo periodo en que se introdujeron los programas de ajuste estructural, que se realizan la apertura de los mercados, reducción del gasto público, la privatización de las corporaciones estatales, aumento de los impuestos y el sometimiento de la política económica al cumplimiento de metas financieras, etc. Se pensó que era la dirección correcta porque se había perdido la fe en el manejo de los recursos por el gobierno.

No obstante, las economías nacionales están siendo saneadas para favorecer a la inversión capitalista transnacional. Los grandes intereses corporativos de las transnacionales atentan contra la acción reguladora del Estado porque limita sus beneficios económicos logrados mediante la adquisición de materias primas y recursos a bajos costos y en abundancia, la penetración de sus productos en nuevos mercados y la reducción de sus costos de transacción en las operaciones de comercialización. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos.

Las políticas económicas han tenido efectos profundos en las políticas sociales, a tal grado que la persecución de políticas que reducen las desigualdades sociales entran en conflicto con la lógica de la acumulación de capital. O al revés, con frecuencia las políticas económicas y sociales protegen y benefician mediante verdaderos abusos de poder, a determinados sectores sociales que tienen más poder económico o político.

Las políticas sociales tienen como objetivo posibilitar capacidades personales y competencias laborales en los individuos, de tal forma que les permita el acceso a mejores condiciones de vida. Lamentablemente, la desnacionalización de las empresas, la concentración del aparato productivo y la destrucción de las cadenas productivas, producto de la implementación de políticas económicas neoliberales que conllevan una atenuación de la política social, han traído consigo un crecimiento del desempleo y una profundización de la pobreza extrema, y por consecuencia

La carencia de adecuadas oportunidades de empleo es una de las principales preocupaciones de los Latinoamericanos. No se genera la suficiente cantidad de empleo, por

lo que pocos individuos tienen acceso a trabajo bien remunerado. Los factores que afectan la oferta laboral están afectados por las reducciones de crecimiento del empleo, el incremento en la desigualdad salarial y los cambios en el desempleo durante la última década en Latino América. Duryea y Székely (1998) concluyen que las dos fuerzas que orientan la oferta laboral en la región han sido la demografía y la educación mejora significativamente el entendimiento de la declinación en el empleo, la cambiante pauta de desempleo y el incremento en la desigualdad salarial.

Una buena calidad de la gobernabilidad democrática propicia el crecimiento económico y el desarrollo social sostenido. El desarrollo social debe estar apuntalado por un desarrollo humano mediante la adquisición de capital humano y un mayor acceso a los recursos y bienes sociales, a efecto de elevar los niveles de calidad de vida. Existe una relación estrecha entre democratización y desarrollo social. Además del sufrimiento causado por la política económica neoliberal han puesto en peligro los límites de los procesos de la democratización política que ha tomado lugar en las sociedades

Latinoamericanas desde el final de los ochentas, estas impopulares políticas neoliberales fueron inicialmente introducidas en la mayor parte de los casos por regímenes militares represivos que se mantuvieron en Latinoamérica en los setenta y los ochenta. El uso de la fuerza es la principal forma en la cual la dominación y la subordinación han sido ejercitadas en Latinoamérica. Los orígenes históricos de las sociedades contemporáneas latinoamericanas se centran en la conquista militar, la subyugación forzada de las gentes indígenas de la región bajo la regla colonial europea el subsiguiente dominio autoritario de la población por los regímenes dictatoriales.

Sin embargo, los gobiernos civiles electos que sucedieron a estos regímenes al final de los ochentas y a principios de los noventas han continuado estas medidas impopulares, junto con otros factores, han prevenido estos regímenes de implementar políticas que combaten las desigualdades más obvias e injusticias sufridas por la mayoría empobrecida de la población en estos países.

El desarrollo económico es el paso de un determinado nivel de vida a otro más alto, en el menor tiempo posible y al menor costo posible. Este desarrollo económico debe estar acompañado de un desarrollo social, entendido en los términos, no sólo de una mejor distribución del ingreso.

También en “el bien ser del hombre, que facilita la convivencia con sus semejantes. Que, además, lo impulsa a la participación y a la ayuda mutua, que insiste en la vigencia de la ley y la vida democrática, que le abre los horizontes de la educación y la cultura, que favorece su acceso al tener, al saber y al poder, para ser más...” (Servitje, 1999) En función de estos criterios, los resultados alcanzados por Latino América en los últimos veinte años, plantean serios cuestionamientos a las bases mismas de la gobernabilidad. Muchos de los problemas y temas tratados anteriormente persisten en Latino América.

En términos generales, las políticas económicas implementadas en la mayoría de los países latinoamericanos presentan rasgos coincidentes aunque con algunas diferencias en el diseño de los paquetes. Para el caso de México específicamente, un factor del riesgo político consistentemente alto (calificado como "BB", grado de no-inversión) es "la calidad de la gobernabilidad" que abarca "la calidad de las instituciones del sector público; la eficiencia de

los servicios gubernamentales y la capacidad del gobierno para establecer la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, la firma Estándar and Poor's que clasifica los riesgos de inversión sostiene que levar a México al grado de inversión no es inevitable, por lo que observa de cerca el gasto presupuestal y el manejo del auge económico. Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. En un análisis de factores dinámicos, Melvin y Schlagenhauf (1985) estimaron el índice de riesgo nacional mensual para México y concluyeron que son determinantes las proporciones de las importaciones a las reservas y la deuda a las exportaciones. ". Para Giddens (1999:36) los riesgos son "la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza." En el riesgo nacional, la inestabilidad sociopolítica es un importante componente.

Una investigación de Brunetti, Kisunko y Weder (1998a) basada en una encuesta a gran escala realizada al sector privado de América Central, que incluye a México, Costa Rica y Jamaica, que evalúa la calidad institucional de los países y determina el impacto de los 15 obstáculos para hacer negocios clasificados en seis categorías, arrojó los siguientes resultados: el mayor obstáculo es el crimen y el robo, seguido por una inadecuada oferta de infraestructura, inflación, corrupción y financiamiento.

El más bajo obstáculo es el terrorismo. En los términos de gobiernos que imponen obstáculos para hacer negocios, la región ocupó del más bajo al más alto, el lugar 18 en el mundo. El mismo nivel 18 de la mejor a la peor región en lo que se refiere a los obstáculos relacionados con la regulación para empezar negocios. El lugar 19 en los obstáculos relacionados con la inflación y el financiamiento, el 10 en obstáculos relacionados con el comercio. El lugar 14 en los obstáculos relacionados con las políticas de ingreso y gasto público. Igualmente el 14 en los obstáculos relacionados con la incertidumbre y el 17 en los obstáculos relacionados con el crimen.

Otra investigación (Brunetti, Kisunko y Weder, 1998b) basada en una encuesta realizada a empresas privadas locales en 72 países, sobre las percepciones de los obstáculos institucionales, particularmente la confiabilidad y la predictivilidad, son cruciales para el desarrollo económico. Esta investigación captura los puntos de vista de los emprendedores locales sobre la predictibilidad de los cambios en las leyes y políticas, en la confiabilidad de la aplicación de la ley, el impacto de burocracias corruptas y discrecionales y el peligro de revertir las políticas debido a los cambios en los gobiernos. Para el caso específico del mundo, Latinoamérica y el Caribe, y México, los resultados en promedios de la encuesta muestran la inestabilidad política y la seguridad de la propiedad y la interfase entre los gobiernos y los negocios, evaluadas en un rango que va de 1 que indica lo peor a 6 como la mejor posible opción, de la siguiente manera:

- Inestabilidad política y seguridad de la propiedad. Las primeras dos preguntas cuestionan sobre incertidumbres involucradas en las transferencias de los gobiernos regulares y en transferencias anticonstitucionales de gobierno (golpes de Estado) a fin de evaluar las posibles incertidumbres de la elaboración de las leyes. (1) = Los cargos constitucionales del gobierno (como resultado de las elecciones) se acompañan usualmente por grandes cambios en las reglas y regulaciones que tienen un impacto en mi negocio. (2) = Constantemente

tengo temor de los cambios no constitucionales del gobierno (por ejemplo, golpes de Estado) que se acompañan por sorpresas de largo alcance en las políticas con un significante impacto en mis negocios. Los resultados son:

	(1)	(2)
Mundo:	3.01	y 3.44
Latinoamérica y el Caribe:	2.94	y 4.50
México:	3.03	y 4.51

Fuente: Interpretación personal basado en datos de Brunei, Kisunko and Weder (1998)

Las siguientes tres preguntas se enfocan en las incertidumbres de la aplicación de la ley. Preguntan si la empresa tiene confianza en las habilidades de las autoridades del Estado para proteger los derechos de propiedad y para garantizar un predictivo proceso judicial. (1) = Robo y crimen son problemas serios que pueden sustancialmente incrementar los costos de hacer negocios. (2) = No tengo confianza en que las autoridades del estado protejan mi persona y mi propiedad de acciones criminales. (3) = La impredictibilidad de lo judicial presenta un problema mayor para las operaciones de mi negocio. Los resultados son:

	Ahora			Antes		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
Mundo:	2.54	2.56	2.91	3.16	3.00	3.17
Latinoamérica y el Caribe:	2.00	2.40	2.71	3.26	3.03	3.09
México:	1.62	1.75	2.66	3.53	3.22	3.35

Fuente: Interpretación personal, basado en datos de Brunetti, Kisunko and Weder (1998)

- Interfase gobierno-empresas. Áreas en las que las empresas confrontan con la acción del gobierno y evalúa el grado en que estas áreas crean obstáculos para la acción de las empresas. Los resultados en promedios son:

	Mundo	Latinoamérica	México
Regulaciones para iniciar negocios / nuevas operaciones:	3.79	3.56	2.44
Controles de precios	4.35	4.18	3.80
Regulaciones en comercio exterior (importaciones/expor-			
taciones	3.59	3.30	3.36
Finanzas	3.00	2.56	2.47
Regulaciones laborales	3.52	2.92	2.97
Regulaciones de moneda extranjera	3.85	3.83	3.70
Regulaciones de impuestos/ o altos impuestos	2.44	2.55	2.44
Inadecuada oferta o infraestructura	3.05	2.48	2.88
Política de inestabilidad	3.38	2.83	2.90
Seguridad o regulaciones de seguridad	3.79	3.54	3.42
Inflación	3.21	2.94	2.79
Incertidumbre general sobre los costos de regulaciones	3.28	3.26	3.24
Crimen y robos	3.22	2.65	2.43
Corrupción	2.87	2.39	2.17
Terrorismo	4.65	4.18	4.13

Fuente: Interpretación personal, basado en datos de Brunetti, Kisunko and Weder, (1998)

A la pregunta de que si la percepción generalizada de la relación entre gobierno y/o burocracia y las empresas privadas son o bien como "una mano que ayuda" (1,2), como agente neutral (3,4), o como "oponente" (56), las respuestas fueron:

Mundo	3.22
Latinoamérica	2.94
México	3.03

Fuente: Interpretación personal, basado en datos de Brunetti, Kisunko and Weder, (1998b)

En 1996, las inversiones públicas y privadas en México se mantuvieron debajo de los niveles de los años setenta y ochenta (Glen y Sumlinski, 1998) La mayoría de los créditos gubernamentales con grado de no-inversión (caso de México), se caracterizan por debilidades en la gobernabilidad" (Standard & Poor's, 1997) Este estudio caracteriza como debilidades de la gobernabilidad: la corrupción oficial y privada, el tráfico de influencias, la corrupción e ineficiencia de los órganos judiciales, la influencia de los carteles de las drogas, deficiencias en la seguridad interna bajo la forma de grupos guerrilleros operando en áreas rurales y la violencia en las grandes ciudades. El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido de los beneficios. Además, el tradicional sector campesino está declinando como resultado de que el campesinado se orienta más a la obtención de salarios en fuentes de ingresos y a su migración a las ciudades.

Si se controla el desarrollo social democrático y el crecimiento económico de los países latinoamericanos, éstos no son significativamente más corruptos que los países más desarrollados. Barro (1998) llega a afirmar que el paquete de préstamos del Fondo Monetario Internacional a México en 1995, fue una recompensa a la corrupción de los préstamos bancarios riesgosos. Mientras más presten los gobiernos de otros países a México, más seguridad tienen los banqueros de otros países de recobrar sus créditos.

La baja gobernabilidad en México, por ejemplo, tiene sus antecedentes en las debilidades de las políticas económicas, sociales, culturales, educativas, etc. y en las debilidades de sus instituciones a pesar de que en el pasado existía una fuerte presencia del estado en la creación de instituciones y de políticas públicas. Un examen de los países como Chile, Costa Rica y México que han seguido fielmente las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional revela que sus logros publicados en el crecimiento macroeconómico a sido alcanzado al costo de mantener bajos los salarios reales de su fuerza de trabajo asalariada, el adelgazamiento de sus servicios públicos , la reducción de los beneficios sociales, así como el rápido crecimiento del sector informal de sus economías compuesto de vendedores de la calle autoempleados, manos alquiladas, trabajadores en pequeños talleres, jornaleros, reparadores, prostitutas, servidores domésticos y así entre otros (Harris, 1997).

De esta forma, el llamado sector informal de la economía representa un tipo de subsidio para las empresas capitalistas en el sector formal. La presencia de un sector informal grande ayuda a mantener los salarios bajos y los costos de reproducir la fuerza de trabajo urbana a un mínimo para los negocios locales y para las corporaciones transnacionales, por lo tanto los capitalistas son capaces de maximizar sus utilidades pagando bajos salarios a sus trabajadores y pocos si es que algunos beneficios.

Los déficit de gobernabilidad están relacionados con la legitimidad del sistema político, los cuales tuvieron su origen en las políticas económicas erróneamente implementadas por las elites que hicieron el diseño organizacional para la transición del Estado mexicano. El análisis en los tipos de veto es actualmente en discusión de la reforma institucional es indicativo de la percepción que prevalece de déficit en el sistema político.

México ha vivido populismos centrados más en las expectativas de gobernantes iluminados que en propuestas concretas de desarrollo nacional mediante un desarrollo institucional. El Estado mexicano ha logrado mantener su legitimidad mediante una política de protección social parcial y promesas futuras de mayores beneficios que favorezcan a los diversos grupos sociales.

Las crisis económicas recurrentes por las que a pasado la economía mexicana, aunado a las debilidades institucionales para limitar los alcances en el tejido social, han sido las repercusiones de la aplicación de la política económica neoliberal y los factores clave del deterioro de la gobernabilidad de la sociedad. In general, la clase trabajadora y otros elementos de la clase baja, los campesinos, los estratos bajos de la clase media, los participantes pobres en el sector informal, etc., han sido forzados a pagar los costos de la crisis económica de los ochenta y el proceso global de reestructuración capitalista que está teniendo lugar desde los setentas.

La crisis de la deuda del tercer mundo inició en México cuando anunció que no podía dar servicio a su deuda en agosto de 1982. Como resultado de la crisis de la deuda experimentada por los países tales como México, Bolivia y Argentina durante los ochentas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras agencias de préstamos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, impusieron políticas de ajuste estructural de libre mercado en os gobiernos latinoamericanos a fin de asegurar que dedicaran suficientes fondos a pagar la deuda internacional.

En la década de los ochenta, México entró en un período doloroso y controvertido de reestructuración del Estado, que implicaron la reorganización económica, reformas políticas y una modernización administrativa. La reducción del tamaño del Estado, la privatización de las empresas propiedad del Estado (EPEs) y la desregulación económica fueron las estrategias adoptadas para el diseño del Estado mexicano, como lo fueron también para otros Estados.

La reestructuración de la deuda soberana durante la crisis mexicana de 1994-95 ha sido ampliamente estudiada para comprender la forma en que los mercados financieros, el gobierno y las instituciones multilaterales responden a las cuestiones de gobernabilidad. Como resultado, a pesar de que las clases altas y sus agentes de gobierno, incurren en la carga de grandes deudas en los setenta y en los ochenta, las clases bajas han estado soportando la carga del pago de la deuda durante los noventa.

La crisis mexicana dejó como enseñanza la problemática de sostener tasas de cambio fijas en un entorno de movilidad del capital internacional. México no se recobró porque su sistema financiero débil se haya fortalecido con la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino porque se benefició con el incremento de exportaciones a Estados Unidos como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el crecimiento acelerado de la economía vecina.

Comparada con la crisis de la deuda de los ochenta y con la crisis mexicana de 1994-95, también llamada el "efecto tequila", ambas son consideradas tener como raíces los imbalances financieros del sector público. A diferencia de la crisis posterior (Asia, Rusia, Suráfrica, Brasil, etc.) que tiene sus raíces en desbalances financieros del sector privado y que es la primera crisis financiera realmente considerada como global que golpea a las economías de los mercados emergentes. La crisis financiera asiática explotó poco después de que las olas de la crisis del peso mexicano hayan bajado. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados.

Por lo tanto, parece que las crisis financieras ocurren más frecuentemente en los últimos años en las economías emergentes, como el caso de México y sus efectos han aumentado la perversidad del capitalismo transnacional. Estas crisis financieras hacen pensar a muchos analistas en que el final del neoliberalismo ya está cerca, posición que es muy discutible. Convertir las deuda privada con el exterior en deuda pública, compromete el futuro y debilita los recursos destinados al gasto público, generando la crisis del presupuesto público. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera.

Las monedas nacionales se han devaluado y pegado al patrón del dólar estadounidense, y el crecimiento de las exportaciones, principalmente de las exportaciones no tradicionales, tales como las frutas, las legumbres, as flores y algunos bienes manufacturados, han sido promovidos a expensas de la baja en la producción de alimentos para el consumo doméstico.

Los gobiernos locales y municipales altamente endeudados son dejados por los gobiernos centrales a la acción del mercado. La redefinición de las funciones de los gobiernos municipales requieren del compromiso de servidores públicos capaces de formular e instrumentar estrategias de desarrollo a largo plazo.

Los gobiernos municipales requieren de políticas que articulen sus esfuerzos con los de la federación. La ciudadanía, organizaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales, organismos empresariales, etc., como actores de la sociedad civil, deben ser involucradas por el gobierno municipal para participación en los procesos de tomas de decisiones para la formulación y ejecución de políticas públicas orientadas a estimular el desarrollo local y regional. El gobierno central evita actuar como prestamista en última instancia lo que crea riesgos cuando los municipios no obtienen financiamiento del mercado, forzando a los gobiernos locales a declararse insolventes.

La autonomía municipal se clasifica en política y administrativa. Es autonomía política la que se refiere directamente al ejercicio del poder de elegir y gobernar y la autonomía administrativa se refiere al funcionamientos de las organizaciones. De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes. La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al

municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

El gobierno municipal puede establecer determinadas reglas del juego en el ejercicio de su autonomía, la cual, de acuerdo a Ruíz Blanco (1993: 120) comprende "la elección de sus propias autoridades (autonomía política); la libre gestión en las materias de su competencia (autonomía normativa); la creación y recaudación de impuestos (autonomía tributaria) y la inversión de sus propios ingresos (autonomía administrativa)". La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

Los fondos públicos del Estado son utilizados para pagar las deudas que generan los capitalistas por mala administración, desviando recursos que pudieron ser utilizados para el gasto en programas sociales. Como resultado, a pesar de que las clases altas y sus agentes de gobierno, incurren en la carga de grandes deudas en los setenta y en los ochenta, las clases bajas han estado soportando la carga del pago de la deuda durante los noventa. En general, en las administraciones de los países se ha visto un incremento de asesores que acompañan la expansión económica que justifican las reducciones demandadas por las instituciones de Bretton Woods como parte de los planes de ajuste estructural que están implementando

En México se inició en 1995 un Programa de Modernización de la Administración Pública con acciones enfocadas a la modernización y fortalecimiento de la capacidad administrativa y a la eliminación de la corrupción, la descentralización de la función pública y la reorganización de las relaciones intergubernamentales dentro del sistema federal. Sin embargo, poca importancia se da a la revalorización de la función pública que debe restablecer las funciones del Estado que son prioritarias para el desarrollo.

La reestatización o neoestatización de las funciones del Estado es una tendencia que se orienta hacia la recuperación de las funciones perdidas o disminuidas durante el período de aplicación de las políticas económico sociales del modelo neoliberal, la cual a su vez se orienta como pieza clave en la fase expansiva de las grandes corporaciones transnacionales. Las corporaciones transnacionales se reparten los mercados internacionales con el apoyo de los Estados imperialistas, que aumentan su poder e influencia. Las instituciones intergubernamentales que tienen como funciones regular ciertas actividades, con frecuencia lo hacen careciendo de la legitimidad democrática que resulta de procedimientos transparentes, arreglos institucionales que facilitan los procesos de rendición de cuentas y por actividades de políticos que buscan su reelección.

La permanencia en el puesto incentiva a los burócratas y políticos a cumplir sus promesas y a mejorar su trabajo, pero una vez en el puesto se escudan en políticas administrativas para proteger sus posiciones, lo que dificulta hacer exigible la rendición de cuentas. Los procesos de rendición de cuentas pueden homogeneizar los intereses e incentivos de la ciudadanía y de los políticos. Los procesos de rendición de cuentas permiten a los ciudadanos evaluar las acciones del gobierno en términos de cumplimientos de sus expectativas y a políticos les permite influir en los juicios de los electores.

La descentralización en Latinoamérica tiene que ser un proceso que permita avanzar los procesos de democratización social y para lograr una mayor eficiencia y eficacia de la

administración pública. En Latinoamérica, los procesos de democratización se han desarrollado siguiendo un mismo patrón y dinámicas similares de confrontación a los gobiernos autoritarios que institucionalizaron los métodos violentos como formas de control político. El uso de la fuerza es la principal forma en la cual la dominación y la subordinación han sido ejercitadas en Latinoamérica. Los orígenes históricos de las sociedades contemporáneas latinoamericanas se centran en la conquista militar, la subyugación forzada de las gentes indígenas de la región bajo la regla colonial europea el subsiguiente dominio autoritario de la población por los regímenes dictatoriales.

Además del sufrimiento causado por la política económica neoliberal han puesto en peligro los límites de los procesos de la democratización política que ha tomado lugar en las sociedades Latinoamericanas desde el final de los ochentas, estas impopulares políticas neoliberales fueron inicialmente introducidas en la mayor parte de los casos por regímenes militares represivos que se mantuvieron en Latinoamérica en los setenta y los ochenta.

Sin embargo, los gobiernos civiles electos que sucedieron a estos regímenes al final de los ochentas y a principios de los noventas han continuado estas medidas impopulares, junto con otros factores, han prevenido estos regímenes de implementar políticas que combaten las desigualdades más obvias e injusticias sufridas por la mayoría empobrecida de la población en estos países. El monopolio del poder y su uso discrecional que mantienen algunos miembros en las estructuras de gobierno es la principal fuente de conductas corruptas, por lo que se requiere de reformas institucionales profundas, reformas que se ha dado en denominar de segunda generación

La reforma institucional tiene en la sociedad civil un agente promotor. Los actores pueden reformar las instituciones básicas de otras maneras más que por evolución en un largo camino institucional, de tal forma que combina las diferentes tradiciones de la democracia. La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio. Categorizando los puntos de veto de acuerdo a los efectos deseados, las estrategias de los actores políticos para el uso de los puntos de veto o en la propuesta de reformas institucionales pueden analizarse en modelo integrado de democracia.

Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente a la reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación. Estas reforma requieren de un marco conceptual que orienta la implantación de acciones en una agenda política bien precisa, que reconstruya y fortalezca las instituciones estatales y políticas bajo una nueva concepción del Estado y sus interrelaciones con la sociedad y el mercado, lo cual contribuye a mejorar la gobernabilidad y a controlar la conductas corruptas.

El programa pretende desarrollar mecanismos para una mayor responsabilidad y rendición de cuentas de las agencias de gobierno, en materia de administración de los servicios públicos, así como asegurar una mayor disponibilidad para establecer asociaciones con las organizaciones no gubernamentales. Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades. Así mismo, las reformas de la segunda

generación tienen que saldar el déficit de justicia social e igualdad y lograr la legitimidad de los Estados-nación.

Los países latinoamericanos han sido sorprendidos por los procesos de globalización porque no tenían los mecanismos económico-políticos y las instituciones necesarias para asimilar los efectos en materia de una mayor justicia social en la distribución de la riqueza. Los retos planteados por los procesos de globalización a Latinoamérica, implican la revisión de las utopías románticas de la integración latinoamericana. La naturaleza de la integración de la región latinoamericana en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo.

Junto con las elites locales y los capitalistas transnacionales han promovido mayores cambios estructurales en las economías latinoamericanas a fin de facilitar la creciente integración de la región en la economía global capitalista. Las elites gobernantes de Latinoamérica generalmente han servido de intermediarias entre el poder externo dominante y la población local. Cualquier intento serio para explicar las desigualdades y las formas de ubicuidad de la injusticia que caracteriza a las sociedades Latinoamericanas inevitablemente conduce un examen crítico de las relaciones de explotación de producción y distribución capitalista que predomina en la región.

Latinoamérica ha abrazado los programas de privatización con mucho entusiasmo y existen evidencias que sugieren que ha habido un decremento del involucramiento del Estado en la economía. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación. De acuerdo con datos del Banco Mundial (Notimex, 2000), los países de América Latina y el Caribe captaron 154 mil 225 millones de dólares por privatizaciones de 1990 a 1998, los que representan la mitad de los ingresos por transferencia de bienes productivos del Estado a inversionistas privados.

De acuerdo con datos de la OCDE, el proceso de privatización mundial tuvo un valor de 145 mil millones de dólares en el año de 1999, el 10 % superior al año anterior. El país más privatizador de América Latina ha sido Brasil, con un total de 66 mil 729 millones de dólares. A pesar de que en los últimos años han declinado las transacciones de privatización en el mundo, América Latina y el Caribe captaron el 77 por ciento de los ingresos mundiales en 1998. En 1999, en la región latinoamericana, las privatizaciones fueron inferiores a los planes establecidos. Las actividades de privatización continúan la tendencia mundial a la reducción del papel del Estado en las economías nacionales, a ajustar los presupuestos y a la atracción de inversión extranjera. La tendencia, por lo tanto, es a incrementar las operaciones de transferencia de las empresas propiedad del Estado al sector privado (EPEs)

Los programas de privatización de las empresas paraestatales en México han sido vastos en sus alcances y hasta cierto punto, exitosos en la reducción del papel de un Estado que era intervencionista en la economía. México es el segundo privatizador de América Latina en la década de los noventa. Entonces el gobierno transfirió a particulares activos por 31 mil 458

millones de dólares, que representan 20.4 por ciento de la venta total de empresas propiedad del Estado (EPS) en Iberoamérica, según un estudio del Banco Mundial (González, Canon y BROS, 2000) El año que más ha captado es 1991. con un total de 11 mil 289 millones de dólares. Mientras que en 1998, México captó 999 millones de dólares. México planea privatizar bienes en aeropuertos, ferrocarriles y en el sector energético, la industria petrolera y eléctrica.

De acuerdo con el estudio de La Porta y López-de-Silanes (1997), en 1982 las empresas de propiedad estatal produjeron el 14% del producto nacional bruto, recibieron transferencias netas y subsidios iguales a 12.7 por ciento del PNB y representaron el 38 por ciento de la inversión de capital fijo. Las privatizaciones alcanzaron un monto de tres mil 160 millones de dólares en 1990, para aumentar a 11 mil 289 millones en 1991 y sumar seis mil 924 millones de dólares en 1992. Para junio de 1992, el gobierno había privatizado 361 de alrededor de 1200 empresas propiedad del Estado.

Las privatizaciones hechas en 1993 representaron dos mil 131 millones de dólares, en 1994 fueron de 766 millones y en 1995 sólo de 167 millones de dólares. En 1996 aumentó a mil 526 millones de dólares, en 1997 creció a cuatro mil 496 millones y en 1998 la venta fue por 999 millones de dólares. El informe del Banco Mundial señala que entre 1990 y 1998 las privatizaciones de empresas públicas alcanzaron un monto de 154 mil 225 millones de dólares, cantidad apenas inferior al saldo de la deuda externa total de México que fue de 159 mil 959 millones de dólares en 1998.

El beneficio de las privatizaciones no ha sido el mayor para los mexicanos a pesar de que sus defensores tratan de demostrar lo contrario. Según datos del privatizador Salinas de Gortari (1999) “las privatizaciones abrieron espacio presupuestal para financiar el gasto social sin recurrir a déficit fiscal”. Los efectos no han sido del todo satisfactorios. Los programas de privatizaciones en México han reducido el empleo a la mitad mientras que la producción se ha incrementado en un 54.3% a pesar de una significativa reducción en inversiones. Un estudio anterior de Galal et al. (1992) analiza el desempeño después de la privatización de doce compañías de diferentes países, incluyendo México, documentando que hubo incremento del 26 % en las ganancias en once casos e incremento de los beneficios a los trabajadores en tres casos.

Estas políticas económicas son las causantes de una profunda desigualdad económica y social y una mala distribución de la riqueza, que generaron una mayor exclusión social y marginación que han dado origen al concepto de los “sin nombre y sin domicilio fijo”, ignorando su existencia como seres humanos y como ciudadanos. Es ampliamente reconocido por académicos e intelectuales que la estructura social latinoamericana, a diferencia de otras sociedades, es una “pigmentocracia” representada en un extremo por los aristócratas descendientes de los españoles, altos, de piel clara, bien educada y dueños de los factores de producción, tierra y capital. Mientras que en el otro extremo se colocan a los descendientes directos de los indígenas, bajos de estatura y de piel obscura. En medio de estos dos estratos, se encuentra uno grande representado por los mestizos.

Una de las realidades más impresionantes de Latinoamérica es el grado extremo de desigualdad económica, social y política que caracteriza a las sociedades de la región , a tal grado que esta desigualdad es quizás mejor revelada por la distribución de ingreso entre los niveles más altos y bajos de ingreso en las sociedades latinoamericanas.

Un análisis de Harris (1997) sobre la situación de Latinoamérica refleja que el más alto 20 por ciento del ingreso obtiene entre el 40 y 70 por ciento del total anual del ingreso ganado en los países latinoamericanos, mientras que el más bajo 40 por ciento de los que obtienen ingresos obtienen solo entre el 5 y el 20 por ciento del total del ingreso ganado en estos países, el 40 por ciento de todos los hogares latinoamericanos viven bajo la línea de pobreza definida en términos del ingreso requerido para satisfacer necesidades básicas para alimentación, habitación, y ropa. De hecho la mitad de los grupos no tiene un ingreso suficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas de alimentación. En suma, la desigualdad económica y social es extrema a través de Latinoamérica y recientes transformaciones en el sistema capitalista global y las economías de los Estados latinoamericanos han contribuido en su mayor parte a la ya de por sí polarizada estructura de clases, diferenciación étnica, racial y de género.

Las grandes corporaciones transnacionales socavan la soberanía y autonomía de los pueblos colonizados o recolonizados, para una toma de decisiones independiente en la regulación de su propia economía. La estructura económica y social de la colonia marca a la sociedad en estamentos, donde las diferencias entre los ricos y los pobres están bien definidas y son aceptadas como inherentes al mismo sistema. Los colonizadores españoles usaron la fuerza militar y los poderes del Estado para asegurar su dominio económico y político sobre las mayorías dominadas (Chua, 1998). La política contemporánea y la vida social de la región se debe en parte al legado del dominio colonial europeo, a sus instituciones de dominación ideológica y a una tradición de militarismo y conflictos armados así como también a una institucionalización de numerosas desigualdades de clases, género y razas étnicas.

El uso de la fuerza es la principal forma en la cual la dominación y la subordinación han sido ejercitadas en Latinoamérica. Los orígenes históricos de las sociedades contemporáneas latinoamericanas se centran en la conquista militar, la subyugación forzada de las gentes indígenas de la región bajo la regla colonial europea el subsiguiente dominio autoritario de la población por los regímenes dictatoriales. Sin embargo, los gobiernos civiles electos que sucedieron a estos regímenes al final de los ochentas y a principios de los noventas han continuado estas medidas impopulares, junto con otros factores, han prevenido estos regímenes de implementar políticas que combaten las desigualdades más obvias e injusticias sufridas por la mayoría empobrecida de la población en estos países.

Estos problemas incluyen un pronunciado grado de explotación económica, desigualdad social y económica, injusticia social y política que ha caracterizado a la región desde los tiempos en que los indígenas pobladores de estas tierras fueron subyugados por la fuerza a la dominación colonial europea en el siglo XVI.

Probablemente ningún otro sector de la población de Latinoamérica más desigualdades e injusticias que las gentes indígenas de la región. Durante los últimos cinco siglos, las gentes indígenas de Latinoamérica han sufrido casi todas las indignidades y abusos imaginables. Desde la conquista europea de la región, la sociedad latinoamericana se ha basado en la maximización de la explotación laboral entre las líneas étnicas y el trajo diferencial de los grupos étnicos tanto por el capital como el Estado han creado una compleja estructura de ethnoclases. Relaciones paternalistas, autoritarias y clientelistas de subordinación entre las elites locales y las masas a los niveles nacionales y subnacionales han ido de la mano con la subordinación de las sociedades latinoamericanas a las elites externas coloniales y

neocoloniales interesadas en la explotación de los recursos naturales, trabajo y capital de estas sociedades.

Las gentes indígenas tienen generalmente ocupado el más bajo nivel de esta estructura de extrema desigualdad económica y social y hasta muy recientemente han estado excluidos o marginados del proceso de la política. (Harris, 19997) El cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra. Sin embargo, a pesar de las condiciones económicas, sociales, etc., hay posición y resistencia al mantenimiento de la estructura de ethnoclases existente de un creciente número de organizaciones, incluyendo los nuevos movimientos sociales organizados.

La propuesta para el análisis del cambio institucional es opuesta a la democracia mayoritaria y negociadora como el punto de partida. Como tipos polares, las democracias con un mínimo de puntos de veto son mayoritarias en carácter, mientras que las democracias de negociación contienen un máximo de puntos de veto Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997). La persistencia de esta estratificación social hasta en la actualidad es una de las causas de marginación y exclusión social y constituye un serio problema para la buena gobernabilidad.

El estrato social dominante es dueña de los principales medios de producción, empresas, etc. Sin embargo, debido a que la fuente de su dominio económico se debe principalmente a razones que no son las del mercado, bajo el nuevo ambiente competitivo de la globalización puede ser su tumba. Lamentablemente, en nombre de la competitividad, millones de personas son desplazados de los sistemas productivos. La competitividad hace a las personas imprescindibles. Pero, además, poco entusiasmo existe de que la mercadización pueda abrir oportunidades a los grupos en desventaja que no tuvieron la oportunidad de participar activamente en la economía.

Con la venta de empresas estratégicas al sector privado, los gobiernos han destruido el activo de la nación, apostándose a la prosperidad que vendría de los procesos de globalización. La gobernabilidad lograda en la primera etapa del gobierno salinista, se fundamentó en el manejo notable de las expectativas y las realidades de una política económica. Se pretendió legitimar el paradigma PRI-gobierno bajo un pasivo consentimiento de "rendimientos".

Con esto, se logró la desactivación del descontento popular por la implementación del programa económico neoliberal, para impulsar cambios más profundos en la democratización política que necesariamente implican una transformación socialista. La democratización política del Estado asegura la participación ciudadana en la elección y control de sus representantes gubernamentales, una mayor transparencia administrativa y mayor proximidad entre la ciudadanía y el gobierno. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas.Se puede afirmar que a pesar de la falta de legitimidad del régimen, no se han presentado cambios profundos en el sistema político mexicano ni tampoco manifestaciones de desobediencia social.

En la actualidad, la forma en que se visualiza en México la implantación de la gobernabilidad, se reduce a lograr la normalidad política. Esta normalidad política, según Champú (1995)es la preocupación por subordinar la democracia electoral a la gobernabilidad del sistema. En la democracia representativa, la ciudadanía solo es tomada en cuenta durante los procesos electorales y desechable en los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones públicas.

Y no necesariamente la democracia tal y como se expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la define "no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo". Las más significativas actividades políticas y democráticas ocurren dentro de las fronteras de los Estado-nación que tienen procesos y constitución democráticas. La democracia electoral no solamente tiene como condiciones suficientes elecciones libres y justas. Los procesos electorales tienden a ser más libres y justos sólo cuando es la culminación de un proceso democrático continuado y no cuando se le subordina.

En las últimas dos décadas, Latinoamérica está pasando por un período de transición múltiple que afecta no solamente a las instituciones económicas, sino también a las instituciones políticas, sociales y culturales, las cuales están internalizando los costos sociales y de beneficencia en términos económicos y de los valores que representan. Décadas de influencia externa en formas muy diferentes han destruido y debilitado los mecanismos de las instituciones tradicionales al mismo tiempo que están creando islas de instituciones modernas que resultan ser ineficientes y distanciadas del carácter de la sociedad en su conjunto.

Iberoamérica se subordinó conscientemente a la política del Consenso de Washington, a los procesos de integración económica y apertura de mercados con la presión de la deuda externa. Los postulado del Consenso de Washington impuestos a los países latinoamericanos limitan la intervención del gobierno en las actividades del mercado, liberan sus economía y abren las empresas del Estado a los capitales privados.

Las naciones que más beneficios han recibido de los procesos de globalización son aquellas que rechazaron los postulados del Consenso de Washington para regular su propio crecimiento. Las políticas económicas de un “buen gobierno” son diseñadas bajo los principios de una nueva ortodoxia económica expresadas en las teorías neoliberales y las diez prescripciones políticas del Consenso de Washington. Tanto el “buen gobierno” como los denominados “derechos de los pueblos” son mecanismos políticos que emplean los agentes económicos para imponer la hegemonía del capitalismo.

El Consenso de Washington prescribe políticas públicas que buscan la reducción de tamaño del Estado, la redefinición de las relaciones entre el mercado, Estado y sociedad, la liberalización comercial y financiera, la privatización de las empresas estatales, presupuestos balanceados, tasas de cambios fijas, etc. como base para el crecimiento económico. Las relaciones entre el Estado y la sociedad se determina en función del ejercicio del poder por parte del estado en un territorio determinado con una relativa autonomía con respecto a otras causas de la vida social. Para el Consenso de Washington, el Estado debe transferir sus funciones y responsabilidades en la promoción del desarrollo a la sociedad.

La versión del Consenso de Washington ha sido actualizada en lo que se ha denominado el Neo-Consenso de Washington o Consenso de Santiago, producto de la Cumbre de las Américas en 1998. En este sentido, se puede afirmar que los procesos de integración de los países latinoamericanos, más que ser entre ellos mismos, es más intenso con el sistema económico y financiero de los Estados Unidos de América del Norte y por supuesto no en los mejores términos.

Los esfuerzos de liberalización comercial en Iberoamérica han tenido un impacto positivo en las importaciones de los países miembros de los bloques comerciales y las propensiones crecientes para exportar se acompañan de las correspondientes propensiones crecientes para importar, sugiriendo que la liberalización comercial tiene un efecto fuerte. El modelo latinoamericano de integración económica puede decirse que es un modelo de nacionalismo latinoamericano que quiere seguir líneas ideológicas diferentes al neoliberalismo y a la globalización y que, sin embargo, para atenuar los efectos de las crisis financieras hace factible poner en práctica mecanismos reguladores que controlen los flujos especulativos de los capitales foráneos. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera.

Las economías contemporáneas de Latinoamérica se han convertido en partes integral del nuevo sistema económico global que es dominado no por naciones Estados, sino por grandes corporaciones transnacionales que constituyen los principales actores globales en este sistema. La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles. Sin embargo, hay que considerar que para lograr niveles más altos de desarrollo, las economías latinoamericanas necesitan elevar su nivel de exportaciones actuales, lo cual se dificulta ante el creciente agotamiento de los recursos. Por lo tanto este modelo de desarrollo basado en el incremento de exportaciones, es hasta cierto punto inviable.

El diseño institucional de esta transición ha sido elaborado por las elites locales, con el fin de hacer modificaciones a los regímenes políticos (formas de gobierno) y los procesos de la gobernabilidad (grados de gobierno). El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997). Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente.

La relación que existe entre la eficiencia de los agentes económicos y las estructuras institucionales con la gobernabilidad, requiere del análisis del diseño de las instituciones de los sistemas políticos. Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser

o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Esto significa que cuando se asume que las intenciones de los actores políticos están conectadas lógica y empíricamente a los resultados institucionales, tenemos que reconocer el hecho que esto es una relación más compleja la cual está influenciada adicionalmente por una amplia gama de factores contextuales. De acuerdo con esto, si estamos interesados en la explicación del cambio institucional, se debe estar consciente que la información disponible para los participantes es limitada. Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional.

Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Camou (1998) denomina a las formas de gobierno y a los grados de gobierno como los "paradigmas de la gobernabilidad". El paradigma (Khun, 1971)o las teorías (Popper, 1968) socialmente se vuelven hegemónicas. Camou señala a estas dos décadas en Latinoamérica como un periodo de "confluencia problemática y multifacético de varias transiciones", entre las cuales identifica la transición social y cultural, la transición económica y la transición política. Muchos países en Latinoamérica están ahora en el camino de alcanzar economías competitivas y están en la posición de diseñar y financia sus políticas sociales por sí mismos.

La transición económica implica transitar del programa de cambio estructural y estabilización macroeconómica (reformas de la primera generación) a la reforma de las instituciones (reformas de la segunda generación). La profundización de las reformas de la segunda generación tiene que remover los modos de gobierno utilizados en la implantación de la primera generación de reformas, para orientarse a la ampliación de la reforma del Estado, la reforma política y el desarrollo de las instituciones democráticas. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado. De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones democráticas cuyo poder se asegura mediante el “enjaulamiento” de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder.

Esta segunda generación de reformas pretende reinventar el aparato institucional del Estado y las políticas enfatizando el nuevo papel del Estado en este proceso para alcanzar una mejor gobernabilidad. El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática requiere reformar el andamiaje institucional del Estado, y los modos y estilos de gobierno. La reforma institucional se orienta a ampliar las concepciones de la gobernabilidad, la democratización del Estado y la reforma del sistema político.

Categorizando los puntos de veto de acuerdo a los efectos deseados, las estrategias de los actores políticos para el uso de los puntos de veto o en la propuesta de reformas

institucionales pueden analizarse en modelo integrado de democracia. La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio. La reforma institucional tiene en la sociedad civil a su principal aliado.

La reforma institucional requiere de un cambio de estrategia para que sea interiorizada por las instituciones. La dificultad para predecir futuros efectos de la reforma institucional da como resultado una estrechez de visión. La transición socio-cultural ha resultado de las transformaciones de un modelo de "modernización desarrollista" a otro de una "modernización globalizadora" que implica la aceptación tolerante de procesos multiculturales, intergeneracionales e intercivilizatorios.

La modernización neoliberal separa a la subjetividad, la considera un proceso autónomo e inconexo que genera tensiones cuando de acuerdo con Lechner (2000), ambos fenómenos son complementarios y es necesario relacionarlos, ya sea en forma espontánea conforme a la apuesta del liberalismo decimonónico o establecida por el Estado conforme al modelo socialdemócrata. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). Los actores pueden reformar las instituciones básicas de otras maneras más que por evolución en un largo camino institucional, de tal forma que combina las diferentes tradiciones de la democracia

La modernización era vista como un proceso de diferenciación estructural e integración funcional donde tenían lugar las categorías de clasificación del mundo, pero para Giddens (1984, 1990), la teoría de la modernización es vista como un proceso de distanciamiento espacio temporal, en el cual el tiempo y el espacio se desarraigan de un espacio y un tiempo concretos. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad que acota la subjetividad. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000).Lechner (2000) sostiene que las políticas de desarrollo tienen que manejar complementariamente la modernización y la subjetividad.

Los procesos de modernización generan aprendizajes rápidos y traen consigo un incremento en las demandas de bienes y servicios e inflación de las expectativas para satisfacer las necesidades y deseos, lo cual no siempre desarrolla la infraestructura y capacidad para lograrlo. La modernización neoliberal separa a la subjetividad, la considera un proceso autónomo e inconexo que genera tensiones cuando de acuerdo con Lechner (2000), ambos fenómenos son complementarios y es necesario relacionarlos, ya sea en forma espontánea conforme a la apuesta del liberalismo decimonónico o establecida por el Estado conforme al modelo socialdemócrata. La concepción tradicional de un Estado como una sociedad homogénea es suplantado por una concepción de un Estado compuesto por sociedades más heterogéneas, plurales y multiculturales. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). La lógica del sistema hegemónico es inversa al protagonismo de lo colectivo, dando mayor énfasis a las políticas y estrategias individuales.

Sin embargo, hay mucha incertidumbre en los procesos de transición por la carencia de instituciones capaces de asimilar los efectos de los cambios y para propiciar la estabilidad económica, social y política. Incluso, los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo reconocen que los factores exógenos en algunos casos obligaron a las naciones latinoamericanas a tomar medidas severas. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional.

Los procesos de transición económica han pasado por los periodos de aplicación de políticas económicas de las llamadas primera generación como de "estabilización económica", "reforma estructural" y "reestructuración económica". La transición política se ha identificado por los procesos de "liberalización política", de "transición a la democracia" o democratización, y de "consolidación democrática".

Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad.

La reforma estructural no trajo consigo un crecimiento económico y un desarrollo social, dejando en evidencia la insuficiencia de sus programas y las limitaciones del liberalismo neoclásico que se centra en el crecimiento económico y lo convierte en un fin en sí mismo. En este sentido, el crecimiento económico es medido en términos cuantitativos del producto interno bruto per cápita y el promedio real de consumo. Todavía más, los modos de gobierno utilizados en la primera generación de reformas resultan ser disfuncionales para la implantación de la segunda generación de reformas que pretenden profundizar el desarrollo de las instituciones democráticas, la reforma del estado y la reinvención de las instituciones políticas y el Estado, para que como un sistema político sea el depositario de “lo público”.

El modelo económico implementado en Latinoamérica desde los años ochenta, basado en el libre mercado, está dejando saldos negativos en su desarrollo social y el crecimiento económico, aumento en los niveles de desempleo y subempleo, incremento de los índices de pobreza, etc. Muchos de los viejos problemas y temas continúan siendo contemporáneos. De hecho, los problemas contemporáneos de la globalización, la expansión del capitalismo tardío o postmoderno han agravado los más crónicos problemas de la región latinoamericana.

En las últimas dos décadas, casi cada aspecto mayor de la vida económica, política y social en Latinoamérica estuvo influida por la integración acelerada de la región en el sistema capitalista global De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población latinoamericana mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

La dependencia económica de América Latina y el Caribe principalmente de los Estados Unidos y de otros países desarrollados durante la era de la globalización, han quedado en evidencia. La conclusión de que la primera causa de la extrema desigualdad social y económica en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo. La globalización o la creciente integración de la región en un sistema capitalista global no ha conducido a los latinoamericanos en una nueva era de postmodernidad. La naturaleza de la integración de la región latinoamericana en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo.

Por supuesto que se puede determinar que la pobreza puede incrementarse cuando hay crecimiento económico, porque hay también incremento de la desigualdad, pero los efectos del crecimiento sobre la reducción de la pobreza no serían sistemáticamente eliminados si se incrementan los niveles de desigualdad. Varios estudios empíricos han encontrado una correlación negativa significativa entre el crecimiento y la desigualdad del ingreso y existen varias explicaciones de este impacto negativo en que cuando hay crecimiento se incrementa la desigualdad del ingreso. La distribución inequitativa del ingreso tiene implicaciones dinámicas en el desarrollo y efectos en el crecimiento económico.

Lindert y Williamson (2001) argumentan que no se puede trazar una correlación entre los efectos de la globalización y la creciente desigualdad. Para el caso latinoamericano, como para el caso de México, el contexto histórico explica el porqué la liberalización comercial coincide con una mayor diferenciación de ingresos. Durante el período de Salinas, la liberalización mexicana confrontó una nueva intensa competencia de manufacturas poco intensas en habilidades en todos los mercados de exportación, con salarios más altos que en otros países. La liberalización de las importaciones mexicanas trajo altas reducciones de tarifas en manufacturas poco intensivas de habilidades que en las manufacturas de alta intensidad de habilidades. Es decir, México era un país con salarios altos y con un mercado de exportación, de tal forma que se ampliaron las diferencias salariales.

Un examen de los países como Chile, Costa Rica y México que han seguido fielmente las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional revela que sus logros publicados en el crecimiento macroeconómico a sido alcanzado al costo de mantener bajos los salarios reales de su fuerza de trabajo asalariada, el adelgazamiento de sus servicios públicos , la reducción de los beneficios sociales, así como el rápido crecimiento del sector informal de sus economías compuesto de vendedores de la calle autoempleados, manos alquiladas, trabajadores en pequeños talleres, jornaleros, reparadores, prostitutas, servidores domésticos y así entre otros (Harris, 1997).

La presencia de un sector informal grande ayuda a mantener los salarios bajos y los costos de reproducir la fuerza de trabajo urbana a un mínimo para los negocios locales y para las corporaciones transnacionales, por lo tanto los capitalistas son capaces de maximizar sus utilidades pagando bajos salarios a sus trabajadores y pocos si es que algunos beneficios. De esta forma, el llamado sector informal de la economía representa un tipo de subsidio para las empresas capitalistas en el sector formal.

Una de estas explicaciones es la realizada por Knell, (1999), quien ha investigado como los desarrollos socioculturales interactúan con el crecimiento y la desigualdad del ingreso. Su

modelo prueba que un incremento en la preocupación general de la sociedad por una posición relativa resulta en un decremento del crecimiento, un incremento en la desigualdad decrece el crecimiento y un incremento en la preocupación por una posición relativa agrava el impacto negativo de la desigualdad en el crecimiento. La sociedad tiene una función importante en la promoción del desarrollo que pude ser justo y equitativo. Por su parte, Galor y Moav (2000) sostienen que la desigualdad tiene un efecto positivo en los primeros niveles de desarrollo y un efecto negativo en los niveles superiores de desarrollo, anterior a una reducción significante en la efectividad de las restricciones crediticias.

Un incremento en la desigualdad del ingreso puede conducir a una declinación en los ahorros agregados (o a una inversión total en capital humano) lo cual reduce las tasas de crecimiento a largo plazo. El reemplazo de la acumulación del capital físico por la acumulación del capital humano como el motor del crecimiento económico, cambia el impacto cualitativo de la desigualdad en los procesos de desarrollo. Las fuerzas motivo asociadas con la acumulación de riqueza que enfatizan el sistema capitalista orienta los costos de capital individual y las empresas privadas capitalistas para expandir sus actividades acumulativas y eliminar todas las barreras geográficas culturales y políticas que obstruyen su paso a la acumulación de riqueza. El capital humano asignado a las actividades financieras mejorará la tasa de crecimiento económico a largo plazo, mientras que a corto plazo tenderá a reducirla.

La teoría clásica sugiere que la desigualdad estimula la acumulación de capital y promueve el crecimiento económico. Este punto de vista refleja los primeros estados de la industrialización, cuando la acumulación del capital físico era el motor del crecimiento económico. En los primeros estadios de industrialización, los proceso de desarrollo son impulsados por la acumulación de capital en donde el capital físico es escaso y la tasa de retorno del capital humano es más bajo que la tasa de retorno del capital físico.

Galor y Moav (2000), desarrollan un modelo de crecimiento económico marcado por una transición endógena del dominio del capital físico como el motor del crecimiento económico a un incremento gradual del de la importancia de la acumulación de capital humano para el proceso de crecimiento. Entonces, si la acumulación de capital humano conduce al crecimiento económico, la evolución de la economía requerirá la acumulación rápida del capital en los estadios tempranos del desarrollo para incentivar las inversiones de capital humano, por lo que la desigualdad estimula los procesos de desarrollo.

Argumentan que el reemplazo de la acumulación de capital físico por la acumulación de capital humano como motor de crecimiento ha cambiado el impacto cualitativo de la desigualdad en los procesos de desarrollo. La desigualdad estimula los procesos de desarrollo mediante la canalización de recursos hacia los dueños de capital que tienen una alta propensidad para el ahorro. Su modelo se basa en tres elementos: el proceso de desarrollo se caracteriza por la complementariedad entre el capital y las habilidades, la propensidad marginal para ahorrar se incrementa con la riqueza y las imperfecciones de los mercados de crédito resultan en bajos niveles de inversión de capital humano.

Por otro lado, la corriente de las imperfecciones del mercado de capitales argumenta que la igualdad estimula las inversiones en capital humano y por lo tanto el crecimiento económico. Hasta ahora no se ha demostrado que exista una relación directa entre la liberalización de mercados de capitales y el crecimiento económico. La volatilidad de los mercados de

capitales limita el crecimiento económico e incrementa los niveles de pobreza. Las inversiones de capital humano localizado en los individuos, está sujeto a retornos individuales disminuyentes, los retornos agregados a las inversiones en capital humano se maximizan si los retornos marginales son iguales entre los individuos.

Este punto de vista refleja los estados tardíos del desarrollo cuando la acumulación del capital humano se convierte en el motor del crecimiento y las restricciones crediticias son inherentes. Para Galor y Moavn (2000), hay asimetría entre la acumulación del capital humano y la acumulación del capital físico. No obstante, estaría por probarse la sistemática asociación entre crecimiento y cambios en la desigualdad, porque hay muchos otros factores que influyen en el crecimiento, la desigualdad y la pobreza.

La evidencia sugiere que la conexión positiva entre el crecimiento y los ingresos de los pobres no han cambiado mucho durante el período de la globalización, que anteriormente. El análisis entre las variables pobreza y desigualdad con el gasto social en Latinoamérica, muestran una correlación negativa y una baja eficiencia de la gestión pública en el área social en las últimas dos décadas, ya que se ha dado prioridad al equilibrio macroeconómico. La gestión pública es un factor importante en la gestión del desarrollo.

Esta gestión pública, al decir de Molina (2001) debe descansar en cinco variables que profundiza los retos consecuencia de una participación ciudadana y de procesos de descentralización: la ciudadanía efectiva, desarrollo económico local, gestión territorial, sociedad de la información y desarrollo sostenible. La gestión pública es un factor importante en la toma de decisiones que fortalecen o debilitan las acciones gubernamentales. Sin embargo, este gasto social en la región latinoamericana se elevó casi al 25% durante la década, pero los retornos sobre las inversiones son muy bajas, debido a factores diversos tales como la corrupción.

Los ciclos económicos de Latinoamérica en los noventa han permitido un crecimiento económico regional promedio de 3.2% que poco ha logrado para los más pobres. El crecimiento económico es medido cuantitativamente en términos del producto interno bruto per cápita y el promedio de consumo real. El crecimiento económico ha sido muy bajo en los últimos años, y la misma tendencia continuará en los próximos años debido a las condiciones externas de los fenómenos de la globalización, como las recurrentes crisis financieras amplificacadas por las condiciones locales de vulnerabilidad cambiaria, fiscal y financiera, situaciones que hacen difícil mantener la estabilidad macroeconómica. Los Estados imperialistas desempeñan importantes funciones de gestores de crisis financieras y económicas de los estados nación menos desarrollados y empresas transnacionales con problemas financieros.

Estos resultados negativos están causando la generalización del descontento social y están desembocando en protestas para manifestar sus inconformidades por la política económica adoptada. La incapacidad de los gobiernos para superar los problemas económicos y sociales están generando situaciones de ingobernabilidad mediante el desarrollo de áreas territoriales donde la falta de aplicación del Estado de Derecho ha dado origen a situaciones caóticas en donde impera la ilegalidad y la barbarie.

Los problemas de bajo, nulo o crecimiento económico negativo y la privación del desarrollo social tienen que ser abordados como problemas básicos de gobernabilidad Existe

una relación estrecha entre democratización y desarrollo social. En todo caso, la gobernabilidad entendida como la capacidad del Estado para resolver los problemas de la sociedad, queda reducida a los "arreglos" entre los diferentes grupos de las elites políticas. Las elites gobernantes de Latinoamérica generalmente han servido de intermediarias entre el poder externo dominante y la población local. La tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966). Para muchos analistas, todos estos efectos del neoliberalismo son síntomas de que el final del neoliberalismo ya está cerca.

Los esquemas tradicionales de elaboración e implementación de las políticas públicas se deciden en los altos niveles tecnocráticos de la conducción y dirección del Estado. Sin considerar la participación democrática de la ciudadanía para su legitimación en función del desempeño más que meramente en los procesos electorales, para ejercitar sus derechos de ciudadano, la fiscalización de la función pública y la participación en el diseño de políticas y programas de su comunidad.

La expansión de la participación democrática y buen gobierno tiene que ser promovido por el establecimiento y fortalecimiento de normas de reciprocidad en lo que Putman (1993,1995) denomina "redes de compromiso cívico, tales como las asociaciones de vecinos, las sociedades de coros, cooperativas, clubes de deportes, partidos basados en las masas. Para Putnam (1993b), "El capital social encarnado en normas y redes de compromiso cívico parece ser un prerequisito para el desarrollo económico así como para un gobierno efectivo". Las relaciones de confianza personal llegan a generar una confianza social o confianza generalizada cuando prevalecen normas de reciprocidad y redes de compromiso cívico (Lechner, 2000). Así, un elevado desarrollo económico puede coexistir con un debilitamiento de las relaciones de confianza y cooperación cívica (Grootaert, 1998). El capital social se expresa en la relación existente entre relaciones de confianza y cooperación cívica.

Estas tecnocracias se caracterizan por una falta de visión a largo plazo y por su apego a seguir las direcciones hegemónicas del denominado "Consenso de Washington" que plantea como cuestiones "intermésticas" las cuestiones económicas y de seguridad en sus relaciones con los países latinoamericanos. Hasta hace poco, los intereses tradicionales de los Estados Unidos en el continente se concebían en los términos de "seguridad militar, solidaridad política y beneficio económico" según el análisis de Lowenthal (1999). Sin embargo, señala el mismo autor: "Cuando los países latinoamericanos se alinean con los Estados Unidos es sobre todo porque tienen intereses compartidos específicos y concretos, y no a partir del supuesto general de la unidad panamericana o por una convergencia natural de intereses".

Al término de una política proteccionista no se tenía un diseño claro de otra política que bajo condiciones de competitividad permitiera a las organizaciones insertarse de lleno en los procesos de globalización. Las instituciones críticamente afectan los costos del ajuste estructural de acuerdo al análisis de North. En este sentido, los análisis del ajuste estructural se refieren al cálculo económico de las expectativas y no consideran la apreciación a la dimensión subjetiva del fenómeno. Las políticas de ajuste estructural tienen más bien una lógica política que una racionalidad económica.

Se trata de que el ajuste estructural cambia el diseño de las instituciones para modificar la estructura de governance, la que a su vez contribuye a la gobernabilidad en el concepto más amplio y por lo tanto, facilita la emeregencia de lo que Luhman (1982) denomina la sociedad "multi-céntrica". La operacionalización del governace de las instituciones económicas, políticas y sociales contribuye a la gobernabilidad. Las modificaciones de la estructura de governance modifican la ingeniería de las instituciones que afectan la gobernabilidad, aunque ambos conceptos se refieran a fenómenos sociopolíticos totalmente diferentes.

El argumento de que para alcanzar los niveles de eficiencia económica se tiene que pagar un alto costo social y que la desigualdad es necesaria para lograr la acumulación de capital y el crecimiento económico, no son totalmente válidas. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. La simetría entre la acumulación del capital físico y el capital humano, sugiere que la igualdad es conductiva por la acumulación de capital humano en tanto que las restricciones crediticias son inherentes cuando se presenta la propensidad marginal para ahorrar incrementos con ingreso, la desigualdad es conductiva por la acumulación de capital físico.

Los efectos adversos de la desigualdad en los subsidios de la acumulación de capital humano y los efectos de la desigualdad en el crecimiento económico se vuelve insignificante cuando las restricciones del crédito disminuyen gradualmente. La desigualdad tiene un efecto positivo en la acumulación de capital y un efecto negativo en la acumulación de capital humano en tanto que las restricciones de crédito son suficientemente inherentes. Con la presencia de restricciones de crédito, la igualdad estimula las inversiones en capital humano y promueve el crecimiento económico.

Por tanto, la desigualdad estimula el crecimiento económico en estados del desarrollo en los que la acumulación de capital físico es el motor del crecimiento, en donde la igualdad estimula el crecimiento económico en niveles de desarrollo en los que la acumulación de capital humano es el motor dominante del crecimiento económico y las restricciones de del crédito son todavía inherentes. En las economías de menor desarrollo, la igualdad beneficia más al desarrollo económico y en donde los flujos de capital internacional disminuyen el papel de la desigualdad y estimulan la acumulación del capital físico. La desigualdad estimula los procesos de desarrollo mediante la canalización de recursos hacia los dueños de capital que tienen una alta propensidad para el ahorro (Galor y Moav, 2000).

La intervención de los gobiernos en la organización de la actividad económica ha sido más propicia para afectar adversamente el bienestar económico, más que tratar de avanzarlo. No obstante, existe una tendencia actual frente a los embates de los procesos de globalización, para fortalecer las funciones de intervención y de regulación del desarrollo local y regional, las cuales son mediadas por las demandas de la sociedad.

Esto, a pesar de que la amplitud y la profundidad de la adversidad han variado de acuerdo a las circunstancias del tiempo (Dunning, 1997) Por otro lado, a pesar de estar en favor de los procesos de integración, los países aplican medidas proteccionistas encubiertas en materia laboral y de medio ambiente, el cual tiende a degradarse. Sin embargo, los desequilibrios del poder entre los 135 países miembros de la Organización Mundial del Comercio pueden ser la causa por la que las constantes violaciones laborales y ambientales sirvan como pretexto para revirar a un proteccionismo.

El problema se complica cuando debido a la aplicación de las políticas de ajuste estructural, sobre todo en los países latinoamericanos, la capacidad del Estado para satisfacer las demandas sociales se está reduciendo substancialmente.

Por lo tanto, las políticas de ajuste estructural hacen referencia a "poder de clase, riqueza y control", en donde el Estado recolonizado (Petras, 2001d), es activo en la implementación que incluyen "cambios en la propiedad (de público a privado, de capital nacional a capital extranjero" mediante una serie de medidas que benefician a la clase capitalista transnacional. Por lo tanto, la implantación de las políticas de ajuste estructural requieren de "un estado fuerte dispuesto a resistir la oposición de la mayoría.

Estas políticas de ajuste estructural neoliberal han involucrado completamente la apertura de los mercados domésticos de los países latinoamericanos al capital transnacional, la promoción de las llamadas exportaciones no tradicionales a fin de ganar divisas extranjeras tanto como sea posible para pagar las deudas, y la desregulación del capital local y los mercados comerciales, que han involucrado las impopulares medidas de austeridad fiscal dirigidas a reducir los servicios públicos y a privatizar muchas de los servicios públicos y empresas públicas, de tal forma que los fondos públicos estén destinados al pago de las deudas.

La privatización de los beneficios, riesgos y responsabilidades de los servicios públicos, también enajena las aspiraciones sociales, las cuales se cancelan si la subjetividad es excluida del orden social. Las crueles medidas de austeridad han sido adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de la región a fin de reducir sus gastos en educación, salud y otros servicios sociales de tal forma que pueden servir a la combinación de deudas de los sectores privados y públicos de los diferentes países.

Estas políticas han disminuido la tasa de crecimiento económico en general y han traído una drástica reducción de los servicios del gobierno así como en el empleo público. Esto ha resultado en una venta total desnacionalizadora de los más grandes beneficios y empresas públicas de estos países y abolido las tarifas protectoras y otras formas de apoyo que previamente tenían las empresas locales.

La propuesta para el análisis del cambio institucional es opuesta a la democracia mayoritaria y negociadora como el punto de partida. Como tipos polares, las democracias con un mínimo de puntos de veto son mayoritarias en carácter, mientras que las democracias de negociación contienen un máximo de puntos de veto (Kaiser, 1997) Un estado ideológicamente comprometido, dispuesto a ocultar su rol histórico como entidad independiente y a rechazar la idea de la soberanía popular para así poder implantar políticas por vías autoritarias, por real decreto. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Los procesos de ajuste estructural causaron inestabilidades y conflictos entre los diferentes actores y agentes económicos debido a la política macroeconómica aplicada a corto plazo. Las políticas de ajuste estructural han barrido las estructuras económicas, políticas y sociales de los Estados nacionales y limitado la posición soberana del Estado.

Lo que ha resultado es un dualismo social en el que se muestra los altos niveles de desigualdad debido a una mala distribución de los beneficios de la riqueza, mientras que una minoría cuenta con todos los recursos, la mayoría vive en niveles inferiores a la línea de pobreza. La dualización de la sociedad es el efecto de la aplicación del modelo económico capitalista que genera profundas desigualdades entre los que tienen oportunidades de recibir los beneficios, los ricos, y los excluidos o marginados quienes no tienen ninguna o pocas posibilidades de acceso. Los organismos internacionales que formulan las políticas económicas y los gobernantes que las implementan son insensibles a las verdaderas causas de la pobreza y tienen una fe ciega en que las fuerzas del mercado y el tiempo son la verdadera solución.

En otras palabras, diseñadores e implementadores de las políticas dejan que en las fuerzas del mercado determine la construcción del tipo de sociedad, creando una separación fuerte entre una racionalidad instrumental que caracteriza a la economía de libre mercado y una racionalidad simbólica representativa de la cultura. La racionalidad instrumental es dominante y convierte en un fin en sí mismo, el desarrollo económico.

Las reformas estructurales y de ajuste, reforma de la primera generación, así como los procesos de integración económica están favoreciendo el crecimiento económico de los sectores productivos más modernos que se han vinculado a la dinámica del comercio internacional. Este crecimiento económico es medido en términos cuantitativos del producto interno bruto per cápita y el promedio de consumo real. Los procesos globales de la reestructuración capitalista e integración y las reformas liberales tomadas por los gobiernos latinoamericanos han reconfigurado el mercado laboral, incrementado la transferencia del ingreso de las clases bajas a las clases altas y debilitado grandemente la posición de la clase trabajadora en Latinoamérica.

Las reformas estructurales promueven la economía de mercado y junto con las reformas de cambio institucional complementan la creación de nuevas instituciones que establecen las reglas del juego para los diferentes agentes económicos que participan en una economía abierta de mercado. Los actores políticos pueden inventar nuevas estrategias para adaptarse a los cambios de reglas y las instituciones son parte de una configuración, donde un cambio hecho en una institución puede tener efectos impredecibles y no esperados en otros. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente ala reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación.

En este esquema de comercio internacional en pleno siglo 21, no hay lugar para otras formas de integración, ni tampoco existe espacio para los que tienen bajos logros. Las relaciones de comercio y de mercados se delimitan en acuerdos entre los Estados, los cuales operan dentro de sus fronteras. El crecimiento económico está siendo generado por la denominada nueva economía vinculada a la alta tecnología, telecomunicación y servicios financieros y no por la vieja economía compuesta por los sectores tradicionales como la construcción, transportes, etc.

Los factores que explican este crecimiento son la flexibilidad laboral y la actualización y capacitación requerida. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que

facilitan la coordinación horizontal mediante redes. Sin embargo, el papel del crecimiento económico tanto en las actividades corporativas como en la flexibilidad de las organizaciones, falla frente a los requerimientos de sustentabilidad. La inmensa mayoría de las personas vinculadas a los sectores productivos más tradicionales están pagando los costos de los ajustes y cambios estructurales, rezagándose en el mejor de los casos, cuando no están siendo marginados del desarrollo o bien desapareciendo totalmente como entes productivos. Sin embargo, a pesar de un crecimiento económico en los sectores de la nueva economía, las desigualdades sociales van en aumento.

Entre otros efectos perniciosos de la emergencia de los regímenes de las políticas neoliberales, éstas han constreñido las actividades de los sindicatos, reducido el gasto del bienestar y generado una inseguridad laboral mediante formas más flexibles, pero también más inseguras de trabajo y remuneración. Los procesos globales de la reestructuración capitalista e integración y las reformas liberales tomadas por los gobiernos latinoamericanos han reconfigurado el mercado laboral, incrementado la transferencia del ingreso de las clases bajas a las clases altas y debilitado grandemente la posición de la clase trabajadora en Latinoamérica.

Los sindicatos se debilitan en su fuerza política y como fuerza defensora de los trabajadores, como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas. El futuro de los trabajadores es muy incierto. Con los procesos de globalización, la enorme reserva de mano de obra no calificada considerada anteriormente como un activo, se está convirtiendo en un pasivo por la falta de oportunidades de acceso al conocimiento tecnológico. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. Los beneficiados con el acceso a los avances tecnológicos sobrevivirán, mientras que los excluidos de estos beneficios profundizarán su miseria.

La gran mayoría de los latinoamericanos que simplemente han sido insertados en los procesos de globalización del consumo, por ejemplo, están manifestando su inconformidad por haber sido excluidos de los beneficios del desarrollo, en aras de la maximización de las ganancias del capital. Por ejemplo, está demostrado que el consumo baja cuando los individuos se retiran de su trabajo y sus ingresos disminuyen.

Es difícil que pueda operar una estrategia para incrementar los niveles de consumo de los pobres, sino se incrementan sus capacidades y competencias de productividad. Los estragos en la cohesión social y en los niveles de vida han sido en muchos de los casos inmanejables. Estas medidas han afectado adversamente el ingreso y los estándares de vida no solo de las clases más bajas sino también de importantes sectores de las clases medias. Estas medidas han afectado adversamente el ingreso y los estándares de vida no solo de las clases más bajas sino también de importantes sectores de las clases medias. Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Los procesos de globalización económica ha convertido en prescindibles a los cada vez más pobres y miserables que constituyen la inmensa mayoría de los seres humanos, mientras que ha convertido en más ricos a unos pocos. La política social neoliberal es el modelo para desechar a los prescindibles. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). Baste señalar a manera de ejemplo que en los últimos cuatro años, el mercado de valores de Estados Unidos redituó ocho billones de dólares al mismo tiempo que millones de pobres murieron de hambre y enfermedades.

Las reformas económicas a favor del mercado introducido en Iberoamérica y el Caribe en las dos décadas últimas han incrementado los niveles de desigualdad económica y social. Han concentrado el ingreso que actualmente muestra la mayor brecha en todas las regiones en desarrollo del mundo, mientras que el 20% de la población concentra el 52.9% del ingreso, el 20% más pobre solo tiene el 4.5% del ingreso. Una de las realidades más impresionantes de Latinoamérica es el grado extremo de desigualdad económica, social y política que caracteriza a las sociedades de la región , a tal grado que esta desigualdad es quizás mejor revelada por la distribución de ingreso entre los niveles más altos y bajos de ingreso en las sociedades latinoamericanas.

Un estudio de Harris (1997) puntualiza que el más alto 20 por ciento del ingreso obtiene entre el 40 y 70 por ciento del total anual del ingreso ganado en los países latinoamericanos, mientras que el más bajo 40 por ciento de los que obtienen ingresos obtienen solo entre el 5 y el 20 por ciento del total del ingreso ganado en estos países, el 40 por ciento de todos los hogares latinoamericanos viven bajo la línea de pobreza definida en términos del ingreso requerido para satisfacer necesidades básicas para alimentación, habitación, y ropa. De hecho la mitad de los grupos no tiene un ingreso suficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas de alimentación.

América Latina ha experimentado un crecimiento económico razonable, aunque no distribuido equitativamente. Es decir, el crecimiento es a favor de una clase de empresarios que no ha podido compartir los beneficios con los demás (Llorente, 1999) No obstante, la recuperación del crecimiento económico permaneció estancado en 1999, con un aumento del producto interno bruto (PIB) regional apenas perceptible de 0.1 por ciento. . La recesión económica que siguió al período de crecimiento creó nuevos males administrativos en los países con crecimiento decreciente, tales como la desmotivación, ausentismo, baja productividad, ineficiencia, la mezcla de los negocios y la política, etc. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

Un estudio de la United for a Fair Economy concluye que como efecto de las políticas económicas regresivas aplicadas en las últimas dos décadas en los Estados Unidos, el uno por ciento de los hogares más ricos ha duplicado su captación de la riqueza nacional. Esto, desde mediados de los setenta y ahora cuenta con más riqueza que 95 por ciento de la población (Canon y BROS, 1999) Un patrón de comportamiento económico similar se repite en América Latina.

Las economías latinoamericanas están siendo integradas en la economía capitalista global como mercados cautivos y la fuente de recursos naturales y humanos baratos para las transnacionales que tienen su base en Norteamérica, las cuales se encuentran retadas por las corporaciones transnacionales que tienen su base en Europa y Asia. La economía capitalista

del mercado tiene un carácter social. Queda así en entredicho la tesis de que las economías abundantes en mano de obra como las de los países latinoamericanos, son las que más pueden obtener crecimiento económico y reducción de la pobreza vía liberalización económica, porque la ventaja comparativa favorece al trabajador pobre. Sin embargo, el futuro de los trabajadores es incierto. Esta tesis ha motivado la aplicación de políticas apropiadas de los Estados fraccionales democráticos y los predatorios, los cuales son empujados en esa dirección que consideran ser la correcta (AL y min, 1996) Es claro que la existencia de un común factor en el grado de liberalización económica, es la destrucción de la ética administrativa.

Esta tendencia altera radicalmente los procesos de la vida y el trabajo en ciertas circunstancias, de tal forma que resultan en un incremento del empleo en el sector servicios con la consecuente declinación del empleo en las manufacturas, el incremento de la fuerza de trabajo femenina y del trabajador emigrante, etc. Así, el empleo como forma de acceso a los mercados tiene alcances muy limitados debido a las competencias y habilidades demandadas. El futuro de los trabajadores es incierto.

Otros autores anotan que los Estados en desarrollo que confían en la ventaja de los costos laborales para las inversiones extranjeras serán golpeados duramente por los movimientos de la automatización flexible. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes. Los nuevos países industrializados no serán del todo afectados si basan su ventaja competitiva tanto en temas de infraestructura y en asuntos fiscales y legislativos, como en la oferta de trabajo (May, 1997).

Además, las únicas ventajas competitivas de los capitalistas latinoamericanos que tienen disponible para competir en el mercado mundial es la mano de obra barata, la cual se mantiene con bajos salarios debido a grandes niveles de desempleo y represión política y ciertos recursos naturales valiosos, pero carecen de tecnología, recursos humanos calificados, son grandes mercados de consumo doméstico y por capital financiero que es poseído por capitalistas en los mayores países capitalistas del mundo.

Además, las únicas ventajas competitivas de los capitalistas latinoamericanos que tienen disponible para competir en el mercado mundial es la mano de obra barata, la cual se mantiene con bajos salarios debido a grandes niveles de desempleo y represión política y ciertos recursos naturales valiosos, pero carecen de tecnología, recursos humanos calificados, son grandes mercados de consumo doméstico y por capital financiero que es poseído por capitalistas en los mayores países capitalistas del mundo. En las economías latinoamericanas abundantes de tierra, la ventaja comparativa indica la especialización.

Esta especialización daña los intereses a corto plazo del capital y el trabajo creando desajustes en los procesos de liberalización económica. Una condición de desigualdad que llama la atención en Latino América es la aguda disparidad en la tenencia de la tierra, profundamente enraizada en desigualdades históricas e instituciones explotadoras y se ha estado agravando por la expansión de las relaciones del mercado capitalista, la amplia comercialización de la agricultura, el desarrollo de las agroindustrias y el desplazamiento concomitante de grandes números de agricultores en pequeñas propiedades y campesinos

pobres (Harris, 1997) El cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra..

Los gobiernos latinoamericanos están siendo requeridos para aliviar los desajustes provocados por el mercado. Para profundizar los procesos de reestructuración económica y para legitimar la re definición de las relaciones de propiedad. Al mismo tiempo que sus capacidades para hacerlo están muy disminuidas después de casi dos décadas de neoliberalismo (Ademán, 1998) Los procesos transaccionales a la democracia en muchos de los países latinoamericanos, aislaron la política de la dinámica de los cambios económicos, sociales y culturales.

Cavarozzi (1992a) analiza esta situación y concluye que "la perspectiva teórica dominante durante la década de 1980 recibió la implantación y la consolidación de las instituciones de la democracia política como un proceso aislado a las modalidades de la transición y orientado, asimismo a prevenir la emergencia del autoritarismo que institucionaliza la violencia. Un presidencialismo autoritario centró en torno a él las relaciones políticas y sociales concentrando todo el poder económico y político, se presentó como un sistema de gobierno orientado por una tecnocracia y asumió el papel del Estado para acelerar la implantación de las políticas neoliberales.

Los ideólogos ortodoxos neoliberales limitaron el papel de regulación de actividades del Estado, así como las funciones de protección y bienestar social. El régimen de gobierno presidencialista tiene un diseño institucional que sigue la separación de los poderes con sus controles mutuos y una distribución basado en sistemas multipartidistas con representación proporcional que fragmenta el trabajo legislativo.

Los regímenes autoritarios carecían de visión y los logros obtenidos en materia de crecimiento económico y desarrollo social, los cuales son muy cuestionables, usaron métodos violentos contra quienes disentían de sus opiniones tanto en la esfera pública como en la privada. En la actualidad, empero, el principal desafío no es impedir las regresiones autoritarias, sino el de reconstruir una nueva matriz de relaciones político-sociales y económicas que reemplace aquéllas que agotó durante la última década y media". La denominada transición democrática del Estado se caracteriza por mutaciones en los rasgos centrales de la estructura “matriz estado céntrica” que Cavarozzi, (1992b) delimita como “una forma de organización de la vida política en torno a la intervención y regulación de estado que impregnó la mayoría de los espacios sociales y que, de ese modo, afectó las oportunidades de vida de prácticamente toda la población”

Sin embargo, las capacidades del Estado se han reducido. A tal grado que los militares están incrementando sus actividades para proveer los servicios de emergencia que tampoco puede proveer los programas asistenciales de la misma sociedad civil (Franco, 1996) Los militares están tomando algunas de las responsabilidades tradicionales del Estado. Este se enfrenta al dilema fundamental de vencer la resistencia de las elites económicas para apoyar la democracia participativa percibida como una amenaza para sus propios intereses.

Las elites gobernantes de Latinoamérica generalmente han servido de intermediarias entre el poder externo dominante y la población local. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder.

Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición". La tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966).

Desde otro enfoque, efectivamente la aplicación de mecanismos de participación política, económica y social pueden ser usados como instrumentos de manipulación y control político de sistemas autoritarios que reprimen mediante métodos violentos a quienes no estén de acuerdo con sus proyectos, institucionalizando así la violencia. Los militares han sido llamados o bien han voluntariado por sí mismos, no solamente para controlar la violencia explosiva, sino también para proveer algunos de los servicios asistenciales que el Estado ha dejado.

El reto principal es hacer que el estado sea responsable ante la sociedad, los grupos sociales y la ciudadanía en general. La sociedad estará de acuerdo con el gobierno que atiende a sus necesidades, pero en desacuerdo y aún en rebeldía sino se satisfacen estas necesidades sociales. Los procesos de globalización han restado fuerza al Estado. Los costos políticos y sociales de la modernización del Estado pueden revertir la hegemonía tecnocrática y neoliberal de los gobernantes.

La modernización neoliberal separa a la subjetividad, la considera un proceso autónomo e inconexo que genera tensiones cuando de acuerdo con Lechner (2000), ambos fenómenos son complementarios y es necesario relacionarlos, ya sea en forma espontánea conforme a la apuesta del liberalismo decimonónico o establecida por el Estado conforme al modelo socialdemócrata. Los procesos de modernización generan aprendizajes rápidos y traen consigo un incremento en las demandas de bienes y servicios e inflación de las expectativas para satisfacer las necesidades y deseos, lo cual no siempre desarrolla la infraestructura y capacidad para lograrlo.

Esto puede ser posible, si como dice Almeyra (1999) la conciencia política y civil de quienes sufren los efectos de la aplicación de las políticas económicas regresivas, encuentran su refugio en la base territorial de la democracia para buscar su autonomía y promover acciones de autogestión. La autonomía local tiene su fundamento en el ejercicio ciudadano para evaluar y juzgar las acciones de los gobiernos locales, quienes tienen responsabilidades de una correcta toma de decisiones de sus competencias ante la comunidad. Las sanciones son el corolario usual de la responsabilidad. La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados. La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales.

El desarrollo de estas culturas de autogestión para la producción y provisión de bienes y servicios públicos es una alternativa para dar respuesta prioritaria a las necesidades por sobre los deseos o preferencias de la ciudadanía y para cubrir los espacios de ineficiencia que las administraciones centralistas no pueden cubrir Esto es posible como resultado de la fusión de una fuerte voluntad de acción política, con un mínimo de conciencia de los sujetos en la

relación de las fuerzas locales y fuerzas internacionales. Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política

La provisión de bienestar social y otros bienes colectivos esenciales a una democracia estable requiere de actores estatales e instituciones que forjen ligas cercanas con los actores privados, cuya cooperación es esencial para la implementación de políticas de estabilización y restauración del crecimiento. No obstante, los burócratas y los políticos no siempre tienen los mejores incentivos para elaborar y poner en práctica políticas eficaces y eficientes que beneficien a todos los agentes políticos, y en mucho de los casos, inclinan sus decisiones hacia la búsqueda de estos intereses privados.

Todavía más, las políticas administrativas pueden encubrir las acciones de los burócratas y los políticos, a quienes es difícil solicitar el ejercicio de la rendición de cuentas Estas conexiones privilegiadas entre los actores del Estado y los privados corresponden a una estrategia no partidista. Por ejemplo, los problemas de la falta de alimentos en tiempos de hambruna tienen una mayor influencia en la estabilidad y crisis de la política económica estatal y regional, de acuerdo con los trabajos del reciente premio Nobel, Amartya Sen. Las monedas nacionales se han devaluado y pegado al patrón del dólar estadounidense, y el crecimiento de las exportaciones, principalmente de las exportaciones no tradicionales, tales como las frutas, las legumbres, as flores y algunos bienes manufacturados, han sido promovidos a expensas de la baja en la producción de alimentos para el consumo doméstico.

Este autor argumenta que las hambrunas están inextricablemente ligadas a las estructuras sociales de la economía doméstica y centradas en temas como la titularidad, pobreza y distribución de la riqueza (May, 1997) Entre las consecuencias de estos fenómenos es previsible en el futuro, la falta de seguridad alimentaría y un significativo entorpecimiento de la infraestructura, incrementando los riesgos de conflictos. La relación existente las variables cultura y pobreza es más complicada que la simple causalidad y resulta más importante estudiar el análisis cualitativo que el cuantitativo de la cultura para poder determinar el posible impacto en la pobreza.

Sin embargo, la participación popular legalizada e institucionalizada que refuerza la gobernabilidad democrática y la descentralización política es relativamente nueva en el contexto de los gobiernos locales en Latinoamérica. Efectivamente, los procesos de descentralización impulsados por el sistema capitalista son inherentes a su propio desarrollo en las circunstancias actuales de trasnacionalización de la economía y los mercados en donde el Estado nación, que una vez fue funcional para su expansionismo, ahora es el principal estorbo.La introducción de la descentralización política orientó la descentralización administrativa hacia la persecución de la gobernabilidad democrática, el combate a la corrupción institucionalizada, reducir la brecha de las inequidades, facilitar la participación ciudadana, etc.

Por lo tanto, el aliento a la participación ciudadana mediante procesos de descentralización política y de reordenamiento territorial, pueden crear las condiciones para impulsar el desarrollo regional bajo el nuevo paradigma que promueve las variables científico-tecnológicas, los procesos de descentralización, el cuidado del medio ambiente y la creación de empresas. Esto les permitiría promover el crecimiento económico y el desarrollo social de las localidades, aumentar la participación ciudadana y democratizar los procesos políticos y sociales. López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de

descentralización responde a una “propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y sociallo permiten y, presionan en su favor.”

Este desarrollo regional se refiere a un conjunto de cambios que son inducidos intencionalmente y conscientemente a través de políticas (Tarapuez Chamorro, 2001). El espacio geográfico del desarrollo regional es sometido a procesos de desterritorialización en que avanza la globalización económica para dar mayor énfasis a los agentes y actores del desarrollo. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes.

Así la economía regional se encuentra sometida a la propia estructura económica, las políticas macroeconómicas nacionales, y los procesos de globalización económica. En esta tendencia, los principales actores del desarrollo regional son las empresas privadas, las organizaciones sociales no gubernamentales, las empresas transnacionales, etc. El Estado deja su papel protagónico como impulsor del crecimiento económico regional para garantizar el desarrollo equitativo regional.

Además, no se encuentran exentas de múltiples problemas en la complejidad de un medio ambiente en el que la política es relegada a la posición de una variable más, debilitando por lo tanto, el impacto que puede tener una política de descentralización. Cuando a la gente se le involucra en decisiones que les afectan su calidad de vida, su participación apoya y sostiene sus propias decisiones, aseguran el uso más eficiente de los recursos para la satisfacción de las necesidades y se hace más difícil su desvío y mal uso porque se transparentan y se vuelven más fácil de detectar.

Por lo tanto, la elevación del nivel de la calidad de vida está interrelacionada con el empleo de mecanismos institucionalizados de gobernabilidad que generan mayor credibilidad en la asignación de los beneficios del desarrollo, contribuyen a crear una sociedad más satisfecha y por lo tanto, menos asimétrica pro sus desigualdades sociales.

La descentralización de la toma de decisiones económicas y políticas y la competencia efectiva ha sido la estructura institucional subyacente para los cambios organizacionales que permiten a las economías y democracias modernas cosechar los beneficios de la tecnología (Norton, 1993). Puede ser verdad que los cambios institucionales usualmente ocurren como las reacciones de personas con visión estrecha a lo que perciben como más o menos un rango estrecho de necesidades. La descentralización económica introduce mecanismos de mercado y externalidades en la asignación de procesos productivos de bienes y servicios públicos.

Las sociedades requieren de cambios organizacionales que concreten los procesos de democratización y descentralización. Puede ser verdad que los cambios institucionales usualmente ocurren como las reacciones de personas con visión estrecha a lo que perciben como más o menos un rango estrecho de necesidades. La democratización social del Estado busca incrementar los procesos de descentralización para potenciar el desarrollo en sus ámbitos espaciales, local y regional.

López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una "propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y sociallo permiten y, presionan en su favor." La base simbólica y material de las democracias no está circunscrita exclusivamente a la participación en las instituciones económicas y políticas, sino también en el acceso al uso ampliado del conocimiento, la información y la comunicación. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado.

Desgraciadamente, los avances tecnológicos que se están distribuyendo en todo el mundo no poseen las mismas posibilidades de "acceso" para todos los habitantes del planeta. Internamente en cada Estado-nación se crean diferencias sociales entre aquellos que tienen acceso al consumo y a los flujos de información internacional y entre aquellos que jamás tendrán la oportunidad de tener acceso a los beneficios de la globalización. Entre estos grupos no existe diálogo pero sí entre las elites de los diferentes países. El resto de los ciudadanos están siendo marginados de los beneficios. Más del 20% de los habitantes más pobres del mundo han quedado excluidos de la explosión del consumo, mientras que el 20% de los habitantes de los países de mayor ingreso tienen el 86% del total de los gastos en el consumo privado, y el 20% más pobre, apenas consumen el 1.3%.

Sin embargo, la gobernabilidad, y por lo tanto, la legitimidad de un gobierno tiene que fundamentarse más en el consenso que la brinde la ciudadanía y menos en la capacidad para resolver problemas. La legitimidad implica el otorgamiento de la confianza de la ciudadanía en forma de mandato a sus gobernantes y es la base de la gobernabilidad democrática, la cual remite a ciertas características específicas del régimen político. La tendencia de las sociedades actuales a alcanzar la gobernabilidad democrática a pesar de los problemas de inestabilidad e incertidumbre política y económica es lo que Torrijos (2001) ha denominado como la gobernabilidad reluctante, la cual considera como una gobernabilidad desde la ingobernabilidad porque se construye a partir de la inestabilidad, la incertidumbre y el caos. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

La gobernabilidad democrática que equilibra las relaciones de la economía, la política y la sociedad debe ser el resultado de una estructura de governance creado por un nuevo diseño institucional bajo una ideología neoliberal, la cual a su vez contribuye a la gobernability o gobernabilidad en su concepto más amplio y a la emergencia de una "sociedad multi-céntrica" definida por Luhman (1982). El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997).

La relación existente entre la eficiencia de los agentes económicos y las estructuras institucionales con la gobernabilidad requieren de análisis del diseño de las instituciones del sistema político. De acuerdo con esto, si estamos interesados en la explicación del cambio institucional, se debe estar consciente que la información disponible para los participantes es limitada. En cada cambio de las constelaciones institucionales se involucran altos costos de

transacción de los actores políticos afectados. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Esto significa que cuando se asume que las intenciones de los actores políticos están conectadas lógica y empíricamente a los resultados institucionales, tenemos que reconocer el hecho que esto es una relación más compleja la cual está influenciada adicionalmente por una amplia gama de factores contextuales.

La aplicación y operacionalización del governance de las instituciones económicas, políticas y sociales contribuye a la gobernabilidad, aunque ambos conceptos se refieran a fenómenos sociopolíticos totalmente diferentes. Las modificaciones en la estructura de governance modifican la ingeniería de las instituciones de gobernabilidad. El diseño institucional está determinado por las negociaciones bajo un sistema de gobernabilidad democrática.

Por abajo de un mínimo democrático requerido, pero con ciertas libertades y derechos políticos, se presenta una poliarquía. Las libertades abstractas no siempre están jurídicamente respaldadas por el Estado. De hecho los sistemas democráticos se presentan con distintas dimensiones que marcan grados diferentes de democracia, con valores y metas de equidad e igualdad que son movibles. De lo que no puede prescindir un gobierno democrático es no contar con el asenso de la sociedad (Córdova, 1998). La gobernabilidad implica la capacidad de las instituciones para mantener la estabilidad económica, política y social. Así, parte del problema de legitimidad del Estado se deben a los problemas que han resultado de las crisis económicas que ha dificultado satisfacer las altas expectativas por los servicios públicos de la gente.

Antes que el Estado en sí mismo se transforme, es más probable que las relaciones informales de las instituciones del Estado con la sociedad civil, se encuentren bajo presión para ser reestructuradas. North (1998) llega a concluir que la causa histórica del subdesarrollo y la violencia política se debe a la implementación de políticas de ajuste estructural, entre las cuales las instituciones financieras internacionales y los donantes condicionan los programas de asistencia, y por lo tanto inclinando el balance del poder en favor de los sectores privados y militar.

Así, tanto el Estado como el mercado han funcionado dentro de las relaciones del poder conduciendo a la promoción de los intereses de corto plazo de grupos privados consolidados tanto nacionales como de los inversionistas extranjeros, más que aquellos de la sociedad como un todo. Mientras que puede ser difícil algunas veces privatizar las principales funciones del gobierno, sin embargo, aquéllas relaciones informales que existen "afuera" o "entre" las instituciones del gobierno público pueden ser más fácilmente cambiadas (Todd, 1998) Más todavía, en el caso del sector privado, el desarrollo de eventos mundiales está modificando los procesos de toma de decisiones de los gobiernos, con algunas funciones que están siendo descentralizadas a los gobiernos subnacionales (Dunning, 1997)

Preponderancia del papel del gobierno local en la negociación de un "nuevo contrato social".

Una estrategia alternativa para contrarrestar y revertir la actual tendencia de la globalización, sostienen algunos autores, entre ellos Korten (1995), es la creación de

comunidades locales autogobernables centradas en negocios locales. En el escenario local, dice Boisier (1988) se optimiza la participación individual, pero resulta ser demasiado estrecha para la acción colectiva, justamente lo que la tendencia globalizadora requiere para profundizar su modelo neoliberal de desarrollo centrado en los intereses individualistas. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes.

La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es. El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otros ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir, (De Swaan Abram, 1997)

Los negocios locales proveen empleo a la gente local, quien pagan los impuestos locales para mantener la infraestructura pública y para la provisión de los servicios públicos y sociales, que confronte los estándares del medio ambiente y los sociales, que participen en la vida comunitaria y compitan justamente con negocios similares en mercados que no tienen jugadores dominantes. Lo que existen son opciones, no tanto alternativas, a la economía capitalista. La economía capitalista del mercado tiene un carácter social. No obstante, en vez de exclamar pasivamente que no existe ninguna otra alternativa, se tiene que reconocer que se puede tener el control y la influencia para dar forma al futuro, a través de acciones, ideas y la política.

Además, es necesario promover la gestión de proyectos de desarrollo con una fuerte base comunitaria que generen oportunidades de acceso a los recursos por parte de los excluidos y que fortalezcan su responsabilidad para evaluar sus propias necesidades prioritamente por sobre sus deseos o preferencias. Igualmente, para la utilización de otros medios que eleven sus condiciones de vida Los servicios públicos que pueden ser proporcionados localmente a los ciudadanos o consumidores, les proporcionan también oportunidades para involucrarse y para responsabilizarse mediante mecanismos de competencia y colaboración.

La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. Tal vez, frente a la fuerza de la tendencia globalizadora, este proyecto alternativo resulte demasiado idealista y romántico. La Nueva Derecha ha inspirado las reformas a los servicios públicos introduciendo los conceptos de apoderamiento de los consumidores o usuarios, quienes toman decisiones con base en elecciones racionales.

Sin embargo, el gobierno local tiene un papel crucial en las negociaciones de un “nuevo contrato social” entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. La autonomía de los gobiernos locales es relativa y siempre se encuentra en conflicto con los demás niveles de gobierno. Desafortunadamente, los gobiernos locales no reconocen su responsabilidad como agentes del desarrollo en la toma de decisiones relacionada con la sociedad. Los ideólogos defensores de las ONG’s (Resumen Latinoamericano, 2001) contraponen el poder local al poder estatal argumentando que éste se encuentra distante y con intereses distintos al de sus ciudadanos. Es además autónomo, arbitrario y ejercido por una clase dominante y explotadora.

El poder local, sostienen, responde directamente a la ciudadanía porque está más cerca. Estos argumentos justifican las acciones de las organizaciones no gubernamentales como intermediarios entre los organismos multinacionales y organizaciones transnacionales patrocinadores y los gobiernos locales afectos al libre mercado para fortalecer los gobiernos neoliberales. Sin embargo, las ONG's no rinden cuenta de sus actividades a las autoridades locales o nacionales con lo que socavan la soberanía y la democracia de los pueblos y la sustituyen por la soberanía consumidora que deja al mercado las principales decisiones en materia de oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

El gobierno local está involucrándose cada vez más en un fuerte y persistente apego al concepto de autosuficiencia y autonomía. La autonomía del gobierno local es siempre relativa, no absoluta, y por lo mismo siempre se encuentra en conflicto con los demás niveles de gobierno. El gobierno local ha sido relegado a una política de descentralización que limita la reforma del Estado y a ser los ejecutores de políticas y decisiones que se toman en otros niveles del centro del Estado.

La descentralización tiene como objetivos aumentar el poder, la autonomía de la decisión y el control de los recursos, las responsabilidades y las competencias de las colectividades locales, en detrimento del poder del poder de los órganos del gobierno central (Mattos, 1990:165-167). . De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales.

La reconstrucción territorial que privilegia al gobierno local en la determinación autónoma de espacios de decisión pública de abajo hacia arriba, tiene que promover la corresponsabilidad de las competencias en la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno y en la concertación de proyectos conjuntos de desarrollo entre los sectores público y privado.

El gobierno local no reconoce su responsabilidad como agentes promotores del desarrollo en la toma de decisiones relacionadas con la sociedad. La gestión pública es un factor importante en las decisiones que fortalecen o debilitan las acciones gubernamentales. Esto entre la mayor parte de los líderes de los grupos representados en los consejos (Leach et al, 1994), a pesar de que no todas las decisiones pueden ser descentralizadas a las instancias de poder local.

Los gobiernos locales constituyen las instancias más próximas a la ciudadanía y tienen una función importante como agentes del desarrollo económico y social de las localidades en la dinámica de una economía globalizada. El desarrollo económico regional es descrito por Tarapuez Chamorro (2001) como "una serie de incrementos en el volumen de las operaciones económicas, es decir, en el producto agregado y en el ingreso total, entendidos éstos como el valor de la suma de lo producido en las diferentes actividades económicas...y como la suma total de los ingresos generados para quienes participan en esas actividades". La economía regional se encuentra limitada por la misma estructura económica, las políticas macroeconómicas nacionales y los procesos de globalización económica.

El nuevo gobierno local, de acuerdo a la Unión Iberoamericana de Municipalistas (DHIAL, 2001), “reivindica el trabajo en equipo, visión y estrategias conjuntas, democracia de deliberación, participación ciudadana, fortalecimiento de las capacidades del gobierno local para abordar los problemas de desarrollo, el rescate de la metodología de la planificación popular y de seguimiento y rendición de cuentas”.

En la agenda del gobierno local, su reinvención política se expresa en la urgencia por promover las competencias del municipio en materia de promoción del desarrollo mediante políticas que articulen los esfuerzos locales con los esfuerzos nacionales. El gobierno municipal puede establecer determinadas reglas del juego en el ejercicio de su autonomía, la cual, de acuerdo a Ruíz Blanco (1993: 120) comprende “la elección de sus propias autoridades (autonomía política); la libre gestión en las materias de su competencia (autonomía normativa); la creación y recaudación de impuestos (autonomía tributaria) y la inversión de sus propios ingresos (autonomía administrativa)”.

De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes. La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

El fortalecimiento de los gobiernos municipales requieren de una mayor autonomía financiera y administrativa, la participación ciudadana y de la sociedad, el manejo eficiente de sus recursos, proyectos intergubernamentales e interinstitucionales, etc. La autonomía municipal se clasifica en política y administrativa. Es autonomía política la que se refiere directamente al ejercicio del poder de elegir y gobernar y la autonomía administrativa se refiere al funcionamientos de las organizaciones.

La participación política de la ciudadanía en los gobiernos locales no debe reducirse exclusivamente a la elección de representantes. En general, los ciudadanos participan poco o son indiferentes en los asuntos políticos, no se identifican con el juego de la política ni con políticos o partidos políticos a los que desdeñan y en ocasiones desprecian. La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados.

Pueden asumir la responsabilidad de la institucionalización de una política social y de servicios públicos que estén menos centralizados. Pueden participar en decisiones de gestión pública local, tales como el gasto público e inversiones, así como en la obtención de fondos e ingresos presupuestales. Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades. La gestión pública local es un factor importante en la toma de decisiones que fortalecen o debilitan las acciones gubernamentales.

Para que la política social, al igual que todas las políticas públicas, sean incluyentes y orientadas al desarrollo humano, requieren de la democracia como plataforma para los procesos de toma de decisiones. La inestabilidad de las instituciones y la crisis de

gobernabilidad de los sistemas democráticos, limitan los alcances de sus programas de desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano es un concepto intrincado al de buen gobierno.

El desarrollo humano se manifiesta en el espacio del desarrollo local como la expresión del capital social que resulta de la participación de todos loas agentes económicos y actores políticos en los diferentes procesos de decisiones. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la "trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos". Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general. Tanto los actores económicos como los sociales y los políticos estratégicos aprovechan las estructuras de poder para ejercer influencia en los procesos de decisiones que les favorecen. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos.

El desarrollo local debe pivotar sobre la base de interacciones comprometidas y solidariamente comunitarias, continuas y activas, más que por la simple contigüidad física y geográfica. El diseño e implantación de programas de desarrollo local integral tiene que considerar la pluralidad e inclusión de los intereses de los agentes económicos y actores políticos, a efecto de establecer acuerdos y compromisos, así como coordinar los esfuerzos de todos en forma eficiente.

El concepto de espacio ha evolucionado de su mera caracterización territorial y física a una conceptualización más abierta y dinámica. Es en el ámbito espacial global en el que se expresan los diferentes fenómenos de la globalización en una forma contextual fragmentada. Los procesos de globalización están acelerando la desterritorialización del Estado nacional para dar lugar a nuevas formas de organización espacial geopolítica y geoeconómica.

De acuerdo a Arellanes Jiménez (2001) este nuevo concepto de espacio es "dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones." Los tomadores de decisiones y los formuladores de las políticas públicas deben descentralizar las operaciones de los programas para llevar los servicios lo más cercano a la gente que tiene que ser servida. Además, deben saber como garantizar la rendición de cuentas y buena práctica, a través de las diferentes unidades de servicio en unidades dispersas.

Los gobiernos locales tienen una importante función para alentar la participación de la ciudadanía a través de la formación de comités y otras actividades. Pero habrá que diferenciar de los comités y algunas organizaciones comunales que reciben la transferencia del poder para ejercerlo en forma destructiva en contra de la ciudadanía, sobre todo en los regímenes totalitarios. Reinventar la política del gobierno local implica "superar las dificultades aparecidas con la introducción en algunos gobiernos locales de tendencias orientadas al gerencialismo-tecnocrático que subestiman a la política de la ciudad como factor

imprescindible en la resolución de problemas" (DHIAL, 2001). Las administraciones de los gobiernos locales tienen varios retos importantes que se reflejan en dos tendencias: el creciente énfasis en la participación de la comunidad en la formulación de las políticas y en la solución de los problemas, así como en la creciente necesidad de medir el desempeño y demostrar los resultados.

Santa-Ana Godoy (2000) argumenta que "En el nivel local nos encontramos en un escenario en que el municipio no cuenta, salvo unas pocas excepciones, con los recursos necesarios para cumplir eficientemente con sus funciones. Los municipios necesitan de políticas que articulen sus esfuerzos a los esfuerzos de la federación.

El municipio tienen el atractivo de la producción y prestación de servicios a la ciudadanía y en materia de desarrollo económico tiene que satisfacer las necesidades y demandas de los agentes económicos. Sin embargo, se presentan problemas que trascienden el espacio territorial de los municipios, cuyas soluciones requieren de esfuerzos conjuntos con otros municipios. En formas muy diversas de colaboración, cooperación y asociacionismo de recursos y esfuerzos entre los gobiernos locales y otros agentes económicos (empresas, sociedad civil, individuos, etc.) y actores políticos (partidos políticos, gobiernos municipales, etc.), se puede impulsar el desarrollo de las localidades.

La capacidad reguladora y fiscalizadora es insuficiente, los recursos humanos disponibles están aún insertos en un sistema estatutario inflexible que impide readecuaciones y sus limitaciones restringen los intentos de atraer cuadros directivos o gerenciales mejor calificados para llevar a cabo las modernizaciones que se reclaman. No obstante, mientras se carezca de una teoría de cambio institucional y desarrollo de las capacidades del Estado, los cuadros tecnócratas tan afectos a las corrientes gerenciales estarán en boga.

Los actores políticos pueden inventar nuevas estrategias para adaptarse a los cambios de reglas y las instituciones son parte de una configuración, donde un cambio hecho en una institución puede tener efectos impredecibles y no esperados en otros. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente ala reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación.

La normativa legal y reglamentaria vigente se contrapone abiertamente al nuevo paradigma de democracia con eficiencia, conocido como Democratista y Eficientista del aparato municipal, predomina en cambio el carácter de la desconfianza en el accionar de políticos, gerentes, administradores y proveedores de servicios municipales". Los municipios necesitan de políticas que articulen sus esfuerzos a los esfuerzos de la federación. La redefinición de las funciones de los gobiernos municipales requieren del compromiso de servidores públicos capaces de formular e instrumentar estrategias de desarrollo a largo plazo.

Para superar parte de estos problemas, una nueva territorialización es conveniente a efecto de que mediante el la formación de asociaciones que mancomunen los recursos y esfuerzos de varios municipios, se formalicen propuestas concretas de desarrollo mediante la creación de instrumentos de apoyo a la gestión municipal acorde al desarrollo regional mediante la promoción de un nuevo paradigma centrado en el desarrollo científico y tecnológico, la

impulsión empresarial, el cuidado del medio ambiente y la profundización de los procesos de descentralización gubernamental.

La gestión pública local requiere de una delimitación de la estructura territorial para aprovechar las ventajas de las negociaciones y estrategias del asociacionismo. Sin embrago, los procesos de desterritorialización en que avanza la globalización económica prácticamente eliminan el espacio geográfico para dar mayor importancia a los agentes y actores del desarrollo. Pero no todos los agentes del desarrollo están incluidos en esta tendencia, sólo los empresarios y las asociaciones civiles no gubernamentales que relevan al Estado en su función impulsora del crecimiento económico regional para garantizar el desarrollo regional equilibrado.

La estructura espacial delimitada por territorios con fronteras físicas y geográficas definen el tipo de interrelaciones entre las diversas entidades geográficas y las diferentes unidades de gobierno. Estas nuevas formas de asociacionismo de municipios para la producción y entrega de servicios públicos, trascienden la división política misma para en contar soluciones conjuntas a problemas similares en forma más efectiva y mediante la generación de economías de escala, dadas las limitaciones espaciales, de capacidades y de recursos.

La redefinición de las funciones de los gobiernos municipales requieren del compromiso de servidores públicos capaces de formular e instrumentar estrategias de desarrollo a largo plazo. Los municipios orientan su desarrollo económico en función de las estrategias del mercado, por lo que la satisfacción de los requerimientos y demandas de los agentes económicos tiene como finalidad incrementar la competitividad mediante políticas que articulen los esfuerzos locales con los nacionales, y estos a su vez con los globales.

Existe la falsa percepción de que el desarrollo comunitario no depende de la proposición de las medidas económicas, sino en la creencia de que las medidas propuestas puedan ser implementadas sin ninguna resistencia interna. Los gobiernos locales constituyen la jurisdicción más cercana a las personas, quienes frente a oportunidades significativas pueden proporcionar el liderazgo para involucrar a la ciudadanía en la formulación e implementación de políticas y decisiones.

La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados. Sin embargo, en la realidad todos los aspectos de la ciudadanía se supeditan a los programas de crecimiento económico y recaudación fiscal municipales, mediante políticas que articulen los esfuerzos locales con los nacionales.

Las redes sociales y la interacción constituyen una parte esencial en cualquier modelo de coordinación de servicios sociales, especialmente cuando la tendencia del estado es desatenderse de estos servicios que antes aseguraba. El desarrollo de las redes sociales están determinadas por un desplazamiento existente de las relaciones fuertes, permanentes y estables por otras más débiles, flexibles y pasajeras. La centralización de la provisión de bienes y servicios públicos limita la eficiencia en la asignación en función de las preferencias colectivas y en el uso de los costos de transacción. El centralismo favorece el desarrollo de ciertas áreas y zonas regionales pero descuida otras. Para la determinación de los costos de transacción se deben de considerar desde la perspectiva de todas las partes involucradas, en

donde todos tengan posibilidades reales de obtener ganancias. En la provisión de bienes y servicios públicos, el Estado tiene como responsabilidad lograr que el mercado logre una mayor eficiencia mediante la reducción de los costos de transacción en las negociaciones.

Pero el empleo de los costos de transacción para economizar es un concepto perverso en los que los costos y beneficios adscritos a las formas alternativas de organización necesitan ser trabajados en forma individual y comparativamente. En este sentido, los altos costos de transacción resultan inherentemente más difíciles para organizar. Un ejemplo es el caso de la provisión de servicios públicos como resultado de las relaciones contractuales entre el gobierno local y las organizaciones voluntarias con fines no lucrativos (OVFNLs) Estas organizaciones pueden operar en las diferentes localidades con algunas variaciones tanto en los términos de las formas contractuales.

Además, los consecuentes costos de transacción involucrados en su gobernabilidad y desde el punto de vista de los procesos contractuales implicados en su administración. Los costos de transacción que incluyen la adquisición de información, lograr los acuerdos y los costos de monitoreo y la aplicación legal de los acuerdos alcanzados. Los "costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Los costos de transacción son los cálculos de los costos para hacer y mantener los acuerdos, cuyos resultados permiten preferir una forma de gobernabilidad determinada por sobre otra. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. La gobernabilidad puede obtenerse mediante la construcción de asociaciones entre los diferentes sectores económicos de una sociedad.

Al nivel de políticas públicas, investigaciones sobre las organizaciones de seguridad social del sector público, éstas contribuyen a reducir los costos de transacción de las empresas privadas que prestan sus servicios de seguridad en las zonas rurales, a pesar de haber cierta tendencia hacia el incremento de los costos burocráticos de las empresas. Además, el tradicional sector campesino está declinando como resultado que el campesinado se orienta más a la obtención de salarios en fuentes de ingresos y a su migración a las ciudades. Por tanto, la naturaleza excluyente de la transformación económica de la agricultura latinoamericana ha incrementado el empobrecimiento de la población rural y acelerado la migración del pobre rural a las ciudades en busca de empleo.

El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido de los beneficios. Por tanto, la naturaleza excluyente de la transformación económica de la agricultura latinoamericana ha incrementado el empobrecimiento de la población rural y acelerado la migración del pobre rural a las ciudades en busca de empleo. Otras alternativas consideran posibles esquemas de cooperación entre las autoridades públicas y las organizaciones privadas para establecer mecanismos de sistemas de seguridad social en los países menos desarrollados. Esto mediante la promoción de asociacionismo entre el Estado, el mercado y las organizaciones basadas en los miembros (Jütting, 1999) Igualmente importante es el papel que desempeña el mecanismo coordinador empleado por las autoridades locales tanto en la administración de los procesos como en los resultados de la entrega de los servicios por una tercera institución (Osborne, 1997: 318)

Hay que considerar que las autoridades locales pueden estar legitimadas por provenir de un proceso electoral democrático o pueden ser autoridades nominadas por los primeros y a la confusión de los diferentes papeles que tienen como agentes y administradores y como propietarios o principales en la provisión de los servicios públicos. En este sentido, el argumento de Santa-Ana (2000) es certero: “De lo que sí estamos seguros, las instituciones u organizaciones estatales o municipales son de la ciudadanía y, ellas a través del sufragio universal, público y secreto eligen a los gobernantes para que administren los Servicios Públicos o nominen a los Administradores, les representen y lleven a cabo el proyecto de construcción de la sociedad que desean”.

Los servicios públicos han sido cuestionados para responder a las innovaciones del cambio. Importantes cambios se manifiestan en la naturaleza de la experiencia administrativa, los modelos de Estado y provisión de los servicios públicos, temas clave de la innovación de la agenda, y las técnicas y procesos administrativos que ayudan a la innovación de la administración de servicios públicos. El cuestionamiento también resulta de la inhabilidad de los oficiales administrativos para adaptarse a los cambios en su entorno, notablemente su inhabilidad para responder a ciertos nuevos retos.

Desde la década de los ochenta, los servicios públicos están siendo más orientados al consumidor, impactados por numerosos cambios entre los que se incluyen: la introducción de administradores y de prácticas administrativas, la sujeción de profesionales a la supervisión administrativa, un uso más amplio de contratos para manejar los servicios públicos y el crecimiento de una economía mixta, un mejor manejo de los presupuestos, intentos para otorgar poder a los ciudadanos y a los usuarios de los servicios públicos, desarrollos en trabajo interagencia y experimentos en sociedades públicas-privadas, incremento del control por el gobierno central en algunas áreas, la emergencia regional unida a la administración central del gobierno, etc. El centralismo favorece el desarrollo de algunas regiones a costa de otras. De acuerdo con Joyce (1998), los "nuevos servicios públicos" implican mejores apoyos entre sí y menos de provisión directa.

El consumismo se ha convertido en un ideal poderoso aunque los consumidores todavía tienen poca influencia en el diseño y evaluación de los servicios públicos. El consumismo es en sí mismo una corriente antidemocrática porque presenta a la elección como un fin en sí mismo más que un medio para la negociación política de fines. En muchas organizaciones de servicios públicos se está dando un pensamiento imaginativo acerca de los nuevos estilos de servicios para el público, así como maneras innovadoras para ayudar a producir soluciones a los problemas de la comunidad, lo cual requiere de un nuevo tipo de administración pública que sustituya a las formas burocráticas. La racionalidad mercantil y la rivalidad partisana son dos factores que enfatizan el déficit ético en la administración pública. Los procesos de globalización presionan al Estado para una redefinición de sus funciones mediante la urgencia de una reforma a la administración pública.

Cierto grado de banalidad partisana está siendo la regla en las administraciones, de tal forma que una carrera administrativa depende de ser más partisano que de la competencia, parece moralmente inaceptable y en cualquier caso contrario a la ética administrativa, principalmente en países con status de servicio público combinado con un código de ética. Cualquiera que sea el tipo de control solamente tiene que ver con las funciones del oficial administrativa que se relaciona con esa ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales caen dentro de este campo.

La carrera administrativa es un medio para influir en el comportamiento y en el desempeño de los servidores públicos. No obstante, es la fe de los servidores públicos en el logro del fin último lo que delimita la ética de la administración moderna Cualquiera que sea el tipo de control solamente tiene que ver con las funciones del oficial administrativa que se relaciona con esa ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales caen dentro de este campo.Un segundo factor en el déficit ético en las administraciones es el involucramiento en los partidos políticos que compiten entre sí por el poder. La administración es usada como un instrumento a través de representantes electos en posiciones de poder dentro de las autoridades locales y a través de las personas en sus diferentes posiciones de poder a nivel central.

Este nuevo tipo de administración pública requiere de servidores públicos con mayor estabilidad, continuidad, capitalizadores de experiencias y menos sujetos a los vaivenes y desfortunas políticas. La forma en que esto puede lograrse es a través de la implementación del servicio civil de carrera que de manera efectiva alcancen los objetivos de las políticas públicas. En una cultura administrativa, el profesionalismo es un valor superior, un valor universal, porque encapsula otros valores, tales como la lealtad, integridad, neutralidad, transparencia, asiduidad, puntualidad, eficiencia e imparcialidad.

El control judicial de la ética implica la verificación de la conformidad de las acciones y las conductas de los oficiales públicos con referencia a los valores tales como la probidad, desinterés, neutralidad e imparcialidad. Cualquiera que sea el tipo de control solamente tiene que ver con las funciones del oficial administrativo que se relaciona con esa ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales caen dentro de este campo.La administración actúa como un juez que asegura el cumplimiento con los valores que forman la ética de la administración y que puntualizan el servicio público.

Los administradores de los servicios públicos reconocen la importancia del logro de estándares de calidad de los servicios, los que evalúan en forma más crítica, considerando que existen sanciones por falta de desempeño. Se puede constatar en la mayoría de los países que los logros en materia de calidad y equidad en la prestación de servicios públicos es deficiente. En el acercamiento tradicional, la falta de una conducta ética que va de la mano con el castigo al oficial público por la falla de cumplir sus obligaciones Hasta ahora, los servicios públicos han estado fuertemente influidos por los profesionales y luego por las fuerzas del mercado. El profesionalismo es considerado un valor en referencia a estándares de conducta y prácticas que van más allá de las competencias técnicas y la experiencia para incluir conceptos tales como la conciencia profesional, la pasión por la excelencia y la auto negación.

Estos valores inclusivos combinados con la competencia técnica de los servidores públicos, permiten a la administración lograr su último objetivo que es salvaguardar el interés general a través de un servicio igualitario y no discriminatorio al público en general. Para este propósito, la competencia técnica tiene que ser parte del molde que favorezca el espíritu del cuerpo entre los servidores públicos sino que también induzca una ética de servicio público, la cual no puede darse por sí misma. (Kampto, 1997).

Consecuentemente, lograr efectivamente la misión del servicio público es el factor determinante en el desarrollo profesional del servidor público. Además, el servidor público es

visto como una encarnación del Estado y sus acciones y comportamientos son siempre importantes para otros ciudadanos. En cualquier caso, no tendrán que ser asimilados por cada servidor público contra un criterio contra el cual juzgar su conducta en pena de sufrir las consecuencias de cualquier situación. La declinación en profesionalismo en la mayoría de los sistemas administrativos se debe precisamente a las desviaciones de los valores con la racionalidad de servicio público.

En un futuro, los servicios públicos estarán más influenciados por los políticos y por el público. Consecuentemente, la administración innovadora de los servicios públicos estará asociada con un mayor involucramiento de los usuarios en el establecimiento de direcciones y prioridades. Así como, en la entrega de los servicios mediante el otorgamiento de poder al usuario, en una evaluación del servicio, así como con innovaciones a través de asociaciones con las comunidades locales y otras organizaciones de servicios públicos. Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades Un nuevo papel para muchas autoridades locales emerge donde el público es servido a través de actividades de solución de problemas mas que una simple entrega de servicios (José, 1998)

Los mecanismos coordinadores de servicios públicos y las implicaciones en la gobernabilidad.

La coordinación de los servicios públicos puede apoyarse en estructuras y procesos (mecanismos) que tienen su fundamento en los esquemas conceptuales de las nuevas teorías organizacionales tales como los modelos de mercado, jerarquías y clanes, los cuales como modelos de mecanismos coordinadores tienen una utilidad descriptiva y también sirven como una herramienta analítica para la predicción de desarrollos futuros, tal como se muestra en la siguiente tabla:

TAREA. **MECANISMO COORDINADOR**

	Mercado	**Jerarquía**	**Clan**
Identificación de la Necesidad.	Hecho por los equipos del área local de los departamentos de servicio social (DSS) y pasado a los equipos de compras locales y regionales.	Hecho por los comités conjuntos de planeación local y pasado a nivel municipal y regional.	Hecho por los Equipos del área Local de los DSS y Pasado al grupo de Asesores Departamentales.
Especificación del Servicio.	Preparado por el equipo de compras.	Acordado como proyecto con el equipo conjunto de planeación municipal.	Acordado con el Equipo sombrilla Establecido por los Departamentos de Servicio social.
Elección del Proveedor del	Ya sea a través de la Competitividad o	Discusiones sostenidas con un	Acordado con el Grupo sombrilla

Servicio.	de procesos de propuestas negociados.	grupo amplio de proveedores internos y externos quienes son invitados a enviar propuestas para su consideración.	Establecido por los Departamentos de Servicio social.
Monitoreo y Evaluación del Servicio.	Indicadores clave Establecidos en el contrato de servicio.	Desempeño como equipos de area como parte de la practica del trabajo social profesional.	Desarrollado por Oficiales de los Departamentos de Servicio social que Forman parte de los Comités Administrativos de los grupos de provisión de servicios.
Mayor fortaleza del Mecanismo.	Maximiza la Eficiencia de los Costos	Resalta las habilidades del especialista.	Permite una Respuesta flexible a la incertidumbre del medio ambiente.
Mayor debilidad Del mecanismo.	Incrementa los costos de transacción de todas las partes.	Consumidor del tiempo y potencialmente demasiado burocrático	Puede ser exclusivo y divisivo.
Papel de la red Dentro del mecanismo de coordinación.	Minimiza los costos de los procesos de elaboración de las propuestas y evaluación.	Reduce el consumo del tiempo y la naturaleza inflexible de la jerarquía burocrática.	Componente integral del clan.

Adaptado de Soborne (1997)

Cada uno de estos acercamientos para la administración plural de los servicios públicos y de los servicios sociales, tiene diferentes ventajas y desventajas, además de las diversas implicaciones para la gobernabilidad de la sociedad, ya que el problema central para cada uno de estos modelos de coordinación de mecanismos de servicios sociales es como obtener resultados en un ambiente cambiante y de alta incertidumbre.

Forster (1999) lista las razones por la cuales la actual administración y gobernabilidad de la provisión de bienes y servicios públicos es deficiente y no tienen relación. Las instituciones y otros organismos diferentes al gobierno proveen bienes con características de bienes públicos, las características de exclusividad o no exclusividad son limitantes del concepto de bienes y servicios, los análisis deficientes sobre la naturaleza contingente de los

bienes y servicios y los problemas teóricos relacionados con la invención y creación de bienes públicos.

La coordinación de estos mecanismos de servicios sociales deben reorientarse a fin de evitar la diferenciación regional en cuanto a la calidad y cantidad de los servicios sociales administrados, principal causa de la ampliación de la brecha de desigualdades.

El sistema redistributivo territorial sobre la base de las iniciativas y aportaciones locales "no es compatible con el objetivo de equidad" (Finot, 2000). La orientación social, más que la territorial, "asegura a las personas un acceso igualitario a una canasta equivalente de servicios, independientemente de su lugar de residencia." Los procesos de descentralización deben ser más responsivos a las preferencias generales, más que a las territoriales. El gobierno local ha sido marginado a un espacio por una política de descentralización que limita la misma reforma del Estado. La descentralización tiene como objetivos aumentar el poder, la autonomía de la decisión y el control de los recursos, las responsabilidades y las competencias de las colectividades locales, en detrimento del poder del poder de los órganos del gobierno central (Mattos, 1990:165-167).

De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales. La tendencia hacia las reformasen los gobiernos municipales y en su autonomía se expresa en las reformas constitucionales en muchos países del mundo.

Kaiser (1997) propone tres principios básicos los cuales pueden explicar los procesos y resultados de ingeniería constitucional: el conservadurismo institucional, la dependencia institucional y el aprendizaje institucional. Mientras que el conservadurismo institucional y las propuestas dependentistas institucionales nos conducen a esperar que la evolución de los sistema políticos democráticos exhiben diferentes patrones, la propuesta de aprendizaje institucional apunta a la convergencia. La investigación en la ingeniería constitucional ha tomado nota de los efectos de difusión, tales como la globalización de las comunicaciones que enriquece las bases cognitivas de las cuales escoger.

La hipótesis del conservadurismo institucional sostiene que las reformas constitucionales en las democracias son relativamente poco comunes, no debido a factores institucionales sino al cálculo de los actores políticos, solamente cuando una gran crisis ocurre, ya sea por un abrupto cambio de factores contextuales o a través de un deterioro dramático de la satisfacción de la política pública, es una ventana de oportunidad abierta para la persecución de planes de reformas.

La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas propuestas son preferidas aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible. La propuesta de aprendizaje institucional sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional..

La construcción espacial de los gobiernos locales debe ser promovente de un diseño institucional y de políticas públicas que contribuyan a lograr niveles altos de crecimiento

económico y desarrollo social. El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997).

De acuerdo con esto, si estamos interesados en la explicación del cambio institucional, se debe estar consciente que la información disponible para los participantes es limitada. Esto significa que cuando se asume que las intenciones de los actores políticos están conectadas lógica y empíricamente a los resultados institucionales, tenemos que reconocer el hecho que esto es una relación más compleja la cual está influenciada adicionalmente por una amplia gama de factores contextuales. Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente.

Cada uno de estos mecanismos ofrece una solución al problema: el mercado asimila la incertidumbre como un principio de la competencia, la jerarquía provee una estructura para tratarla y controlarla y el clan ofrece un vehículo flexible que limita el impacto de esta incertidumbre en sus miembros (Osborne, 1997:325-327). De hecho, las jerarquías tienen su propio organismo de carácter judicial para resolver las controversias que internamente surjan. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes.

Sin embargo, en las jerarquías, el conocimiento es un recurso escaso que se concentra en los niveles altos en unidades funcionales especializadas, lo cual demuestra que el óptimo de Pareto falla como un mecanismo para optimizar la producción y distribución del conocimiento. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. La jerarquía simplemente puede mandar la libre disponibilidad del conocimiento y sobrepasa al mercado en la asignación óptima de este recurso. La debilidad de las jerarquías está en el establecimiento de los incentivos necesarios para la producción del conocimiento, área en la que los mercados tienen mayor ventaja. Hasta ahora no ha sido posible crear un modelo que equilibre las formas del mercado y la jerarquía.

La organización del trabajo en clanes puede contraponerse al dominio de las empresas transnacionales y multinacionales, como en el caso de algunos países, China por ejemplo, y con una organización semejante en menor medida en México. El acercamiento adoptado en el análisis de Osborne enfatiza las interrelaciones entre los diferentes tipos de contratos, la naturaleza de las relaciones contractuales y los procesos de contratación y los conecta con el más amplio medio ambiente societal dentro de los cuales los servicios públicos deben ser administrados.

El desarrollo de estos sistemas contractuales de administración para estos servicios públicos cuestiona en gran medida las implicaciones de la gobernabilidad. Los modelos de coordinación de servicios sociales están contenidos esencialmente en las interacciones de los individuos y las redes que forman en la sociedad. No hay que olvidar la creciente tendencia del Estado a desatender los servicios sociales. La descentralización administrativa ha alcanzado ciertos logros en lo que se refiere a ampliar la cobertura en la provisión de los servicios y bienes sociales.

Los bienes sociales que son gratuitos o libres al acceso de la población, deben ser regulados y gobernados por las instituciones de la sociedad y del Estado. El diseño de las instituciones de la sociedad civil por el Consenso de Washington limita sus agendas y sus desafíos al cumplimiento de una importante función para limitar la acción del Estado.

Mientras que estas redes sociales representan un papel de mediación que disminuye los problemas y los costos más problemáticos en los modelos del mercado y en el de estructuras, en el modelo del clan las interacciones y redes sociales constituyen una parte integrante de su funcionamiento, lo que paradójicamente permite una mayor flexibilidad interna al costo de su responsabilidad externa. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes. No obstante, la descentralización administrativa debe concentrarse en mejorar la eficiencia y la sustentabilidad financiera de los servicios sociales. La modernización puede lograr la sustentabilidad social si se acerca a los fundamentos culturales de la sociedad.

Descentralización política y administrativa como mecanismos de gobernabilidad.

La descentralización de los gobiernos del Estado-nación es una tendencia central que se proyecta en el desarrollo global del siglo XXI.

Los crecientes procesos de descentralización son paralelos a los procesos de globalización. López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una "propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y social lo permiten y, presionan en su favor." Efectivamente, los procesos de descentralización impulsados por el sistema capitalista son inherentes a su propio desarrollo en las circunstancias actuales de trasnacionalización de la economía y los mercados en donde el Estado nación, que una vez fue funcional para su expansionismo, ahora es el principal estorbo.

La descentralización ha sido definida como la delegación del poder del control a los niveles inferiores en las organizaciones. Para el Banco Mundial (2000), la descentralización significa "el creciente deseo de la gente por un mayor decir de sub gobierno, el cual se manifiesta en la aserción de las identidades regionales y empuja a los gobiernos nacionales a alcanzar abajo a las regiones y ciudades como la mejor manera para administrar cambios que afectan la política doméstica y los patrones de crecimiento." El crecimiento regional y urbano está vinculado a las estrategias del modelo de desarrollo que impulsa el sistema económico neoliberal.

El énfasis en el control local que promueve la descentralización, se centra en la toma de decisiones por los mismos individuos que tienen el derecho putativo para definir su propio proyecto de desarrollo. Esto les permitiría promover el crecimiento económico y el desarrollo social de las localidades, aumentar la participación ciudadana y democratizar los procesos políticos y sociales. Los procesos de descentralización transfieren el poder de decisión de las instancias del gobierno central a los gobiernos locales.

La descentralización tiene como objetivos aumentar el poder, la autonomía de la decisión y el control de los recursos, las responsabilidades y las competencias de las colectividades locales, en detrimento del poder del poder de los órganos del gobierno central (Mattos, 1990:165-167). . De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales.

La centralización del desarrollo favorece a ciertas áreas o regiones a costa de otras. Un concepto más estrecho de descentralización la reduce a la sola transferencia de competencias a órganos electos (Palma y Rufián, 1989). Finot (2000) hace una revisión de las formas de descentralización: privatización, delegación, devolución y desconcentración de acuerdo a Rondinelly et al (1989); funcional, territorial y política (Boisier, 1989); administrativa, política y económica (Von Haldenwang (1990).

La tendencia a la descentralización política y administrativa es fuerte en un mundo en constante proceso de globalización. Se considera que la tendencia descentralizadora promovida por la ideología neoliberal es de naturaleza destructiva porque tiene como finalidad reducir o eliminar las responsabilidades y funciones tradicionales del Estado. Los procesos de democratización son promovidos a través de los diferentes canales de participación y expresión que abre la descentralización de la administración pública del Estado. La descentralización administrativa comprende la desconcentración territorial y funcional, así como la delegación a agencias semiestatales (Von Haldenwang, 1990).

En la descentralización administrativa, la gestión administrativa de decisiones políticas territoriales implican su adopción en los niveles locales inferiores. La gestión pública local requiere de un nuevo diseño y una nueva reingeniería de la estructura territorial, para aprovechar las ventajas de la participación social local. La gestión pública local es un factor importante en la toma de decisiones que fortalecen o debilitan las acciones del gobierno. Las estructuras espaciales delimitadas por las fronteras físicas y geográficas que definen las diversas entidades geográficas, determinan las interrelaciones entre los diferentes gobiernos, la sociedad y el mercado. La reingeniería se orienta más a cambios en los procesos y formas de gobierno. La participación en la gestión administrativa se extiende a las organizaciones políticas y sociales.

La descentralización política ha sido consecuente con la descentralización administrativa y se ha orientado a la persecución de la gobernabilidad democrática, a la reducción de la brecha existente de desigualdades, a promover la participación de la ciudadanía y a combatir la corrupción, entre otras políticas (Finot, 2000). La gobernabilidad democrática que equilibra la economía, la política y la sociedad, es el resultado de una estructura de governance creado por un rediseño institucional promovida por el modelo neoliberal, que da lugar a la emergencia de una sociedad “multi-céntrica” de acuerdo a Luhman (1982).

La operacionalización de las estructuras de governance de las instituciones económicas, políticas y sociales tienen efectos directos en la gobernabilidad. En sí, la governance contribuye a la gobernability o gobernabilidad en su concepto más amplio, aunque ambos conceptos se refieran a fenómenos totalmente diferentes. La modificación de las estructuras de governance afecta el diseño de la ingeniería institucional de la gobernabilidad.

La descentralización política de los Estado-nación constituye una fuerza que tiene su origen en el interior mismo y que cuestiona la viabilidad de su gobernabilidad. La democratización de los procesos de descentralización política contribuirá a la formación de una gobernabilidad más democrática que las formas centralizadas. La descentralización política con base en territorios transfiere el poder a las organizaciones del gobierno y de la sociedad civil de las comunidades locales mediante mecanismos de empoderamiento para la provisión de bienes y servicios públicos.

El empoderamiento es un mecanismo que permite a las diferentes instancias de los gobiernos locales asumir sus competencias y facultades. Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades. La descentralización política puede llegar a las organizaciones de la sociedad civil a través de las diferentes instancias en los niveles regionales y locales.

Además, la descentralización otorga el "empoderamiento" de las comunidades. Bajo la descentralización política, las comunidades locales reciben competencias para tomar decisiones relacionadas con su presupuesto para racionalizar democráticamente los rubros de ingresos y de gasto público, bajo determinados procesos y mecanismos democráticos para la asignación de recursos. La definición del gasto público a través de procesos democráticos en función de la capacidad de aportación de cada región, puede contribuir a facilitar la participación ciudadana y aumentar la eficiencia, aunque este método puede crear desigualdades regionales.

La tendencia predominante de descentralización política es la del gasto y vincularlo con las aportaciones locales para infraestructura básica, educación y salud principalmente. La descentralización de funciones para la provisión de estos servicios también requiere la descentralización administrativa de la gestión social. La centralización de las funciones promueve el desarrollo de ciertas regiones y zonas a costa del subdesarrollo de otras. La confrontación de las necesidades del desarrollo local implica inversiones en infraestructura física que no pueden ser financiados con los ingresos fiscales anuales y que por lo tanto requieren de financiamiento externo a través de la emisión de deuda pública.

Sin embargo, con el tiempo resulta difícil para los gobierno locales pagar la deuda, por lo que el problema de la reestructuración de la deuda se ha convertido en un problema pandémico. El problema de la deuda subnacional ha sido identificado como uno de los más espinosos temas de la descentralización que no tiene respuestas económicas o políticas fáciles. (Schwarcz, 2002). Para enfrentar la situación los gobiernos locales tienen que reorganizar sus servicios y operaciones en una reconstrucción cuasi-financiera de forma corporativa, la cual motiva solamente a los deudores pero no a los acreedores

La descentralización política de la infraestructura social debe de ser concurrente con una descentralización de los recursos. La decisión democrática del gasto público es una condición de la eficiencia en los procesos descentralizadores No obstante, la descentralización política encuentra obstáculos con la existente división geográfico-política porque no corresponden a la demanda diferenciada territorializada de bienes y servicios públicos.

Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de

las localidades. Por lo tanto, para que los ciudadanos tengan garantizado el acceso igualitario al financiamiento de los servicios públicos, la asignación de recursos debe estar centralizada, mientras que se descentralizan en forma administrativa los recursos para la producción y operación de los servicios para garantizar su eficiencia.

Por otra parte, el gobierno local puede beneficiarse de la popularidad emergente de la descentralización política y puede ser el vehículo ideal para tal proyecto político debido a su proximidad con la población y a la función percibida de ser el puente entre el Estado y la sociedad civil. El gobierno local debe abrir espacios para las demandas de la sociedad civil por democracia, mayor participación e igualdad regional, mientras que al mismo tiempo debe proporcionar los canales institucionales para acomodar estas demandas y facilitar su encuentro con el Estado (Schönwälder, 1997). En sí mismos, los procesos de descentralización son expresiones propias de la democracia representativa. a pesar de que no todas las decisiones pueden ser descentralizadas a las instancias de poder local

La participación ciudadana en los procesos de descentralización política son muy limitados. La descentralización política permite a los gobiernos locales estimular la participación ciudadana para un mejor sistema redistributivo, más equitativo, con mayor diferenciación y eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos. La participación ciudadana debe ser alentada por los gobiernos locales en los procesos de gestión pública, tales como en las decisiones presupuestales de gasto e ingresos, sobre todo en aquellas decisiones que afectan el uso eficiente de sus propios recursos y el aprovisionamiento de bienes y servicios públicos. Estas decisiones de gestión pública afectan las decisiones gubernamentales en materia de desarrollo local.

Los procesos de globalización someten al Estado-nación a tensiones para una redefinición de sus funciones. Existen dos tendencias de esta redefinición de funciones, por un lado aquella que promueve el fortalecimiento de la función regulatoria del desarrollo local y aquella otra que busca la eliminación de funciones mediante la desregulación. La reestatización o neoestatización de las funciones del Estado es una tendencia que se orienta a la recuperación de las funciones perdidas o disminuidas por la aplicación de las políticas económicas y sociales del modelo neoliberal, la cual a a su vez, constituye la pieza clave de la expansión de las grandes corporaciones transnacionales. La descentralización es un instrumento de la reforma del Estado para reducir el tamaño y funciones del Estado y mejorar su desempeño.

Los procesos de descentralización considerados como reforma del Estado o como reforma política, no puede incluir todas las decisiones. Es en este sentido, la descentralización política un instrumento que estimula la eficiencia y la participación ciudadana en la asignación y provisión de bienes y servicios públicos, pero que desafortunadamente incrementa las disparidades sociales y territoriales. La privatización de los beneficios, riesgos y responsabilidades de los servicios públicos, también enajena las aspiraciones sociales, las cuales se cancelan si la subjetividad es excluida del orden social.

Esto hace necesario modificar los sistemas redistributivos para asegurar la equidad y las diferencias regionales mediante una adecuada combinación entre los sistemas de redistribuición social y territorial. El social asegura la igualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos y el territorial aprovecha las aportaciones colectivas e iniciativas locales. Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la

administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

Desde la perspectiva política de la descentralización (Schönwälder, 1997) del aparato del Estado, ésta tiene que abrir el camino a una y a la apertura de nuevos canales para la participación popular local dentro del sistema político, y para la institucionalización de la participación ciudadana como base de los procesos de democratización que transforman la sociedad civil y el gobierno desde acciones concretas, mediante la legalización de prácticas que refuerzan la gobernabilidad democrática.

Esta gobernabilidad democrática es producto de una estructura de governance resultado de un nuevo diseño institucional promovido por el modelo neoliberal, facilita la emergencia de una sociedad "multi-céntrica" de acuerdo a Luhman (1982). La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación "puramente expresiva y gratuita" como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000).Las formas en que se operacionaliza y aplica la governance en las instituciones económicas, políticas y sociales tienen efectos directos en la gobernabilidad del sistema democrático, aunque ambos fenómenos se refieran a fenómenos sociopolíticos totalmente diferentes.

El análisis de la governance contribuye a la gobernability en su concepto más amplio. Las modificaciones de la estructura de governance afectan la ingeniería de las instituciones de gobernabilidad. Las instituciones de gobernabilidad deben surgir donde existan disparidades en el potencial para la creación de valor. Lamentablemente, poco ha avanzado la participación ciudadana más allá de los procesos electorales y que sea el involucramiento en las decisiones públicas. Además, la participación local también tiene que repercutir en los procesos de toma de decisiones. Así, la reforma administrativa requiere de controles burocrático-administrativos para limitar el uso patrimonialista y corporativista de los recursos del Estado.

La descentralización de las responsabilidades del gobierno puede incrementar la entrega de servicios públicos al nivel local con el apoyo de transferencias fiscales, así como la participación mediante asociaciones de los sectores privados y públicos en los procesos de desarrollo que pongan en movimiento y administren los recursos locales y regionales e incorporen prácticas administrativas profesionales. Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

La agenda del nuevo gobierno promueve los proyectos de colaboración conjunta mediante la negociación y estrategia entre los diferentes niveles de gobierno y entre los diferentes sectores de intereses públicos, privados y sociales. Mediante la descentralización política se transfieren procesos de asignación a mecanismos democráticos locales con transferencia conjunta de fuentes de ingresos. La transferencia de responsabilidades del sector público al sector privado para la producción de bienes públicos bajo mecanismos políticos que se convierten en bienes privados bajo mecanismos de competencia, ha dado lugar a un nuevo tipo de descentralización, la descentralización económica, la cual desde luego persigue fines de lucro más que de caridad.

Lamentablemente, este tipo de descentralización económica que introduce externalidades y mecanismos de mercado, crea fuertes disparidades debido a las diferenciaciones regionales y sociales en la asignación y provisión de bienes y servicios públicos. Para abatir estas disparidades, se requiere la transferencia de recursos desde el centro, mediante mecanismos de compensación al desarrollo regional. Las transferencias de recursos para lograr una mejor redistribución territorial puede efectuarse mediante fondos financieros no condicionados a aportaciones específicas y de libre disponibilidad, así como aquellas transferencias que si están condicionadas.

No obstante, la misma desterritorialziación del espacio geográfico regional está siendo eliminado por los procesos de globalización económica, la cual concede mayor importancia a los agentes y actores del desarrollo. Sin embargo, el Estado como agente del desarrollo pierde su papel protagónico como impulsor del crecimiento que garantiza el equilibrio equitativo de las regiones, para trasladar estas funciones al sector empresarial y a las organizaciones de la sociedad civil.

Una descentralización administrativa que estimule la eficiencia, la participación ciudadana y la factibilidad financiera pueden serlo las transferencias subsidiarias a las aportaciones efectivas e iniciativas locales. El punto importante aquí es el reconocimiento de la capacidad de los gobierno locales para generar recursos propios y tomando en consideración otras variables importantes, como las demográficas.

Por lo tanto, la producción de bienes públicos son parte de la ejecución de decisiones que deben ser tomadas por medio de mecanismos y procesos democráticos y ejecutadas por ciudadanos encargados de efectuar los procedimientos de gestión y control administrativo, el cual es generalmente ejercitado por los oficiales sobre sus subordinados, ya sea en forma autónoma a dirigida a su vez por control judicial. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

Para mejorar el sistema redistributivo mediante cambios en la gestión social y el desarrollo territorial, de acuerdo con (Finot 2000) se deben realizar acciones que impliquen " (i) diferenciar entre asignaciones para la provisión de bienes públicos locales, propios del desarrollo territorial y que podrían ser objeto pleno de descentralización política, y la de una canasta de servicios "sociales", que sería un bien público nacional; (ii) distinguir claramente entre dos sistemas redistributivos subsidiarios, uno territorial y otro social; (iii) tender a descentralizar económicamente la producción de servicios no propiamente gubernamentales hacia los establecimientos (estatales y no estatales); (iv) reconocer legalmente como impuestos (o descontar de ellos) los aportes que los ciudadanos realizan en trabajo, materiales y dinero para mejorar su entorno colectivo, a fin de universalizar las contribuciones tributarias." El concepto de bien público es un concepto multivalente, dependiendo del concepto que se tenga de lo público.

El desarrollo territorial está referido al desarrollo que se vincula territorialmente a un ámbito espacial de una región o municipio determinado. El Estado nacional tienen poca flexibilidad para reaccionar a los constantes cambios de la economía global y sus estructuras rígidas y pesadas son inerciales para la satisfacción de las demandas ciudadanas, lo que ha dado necesidad a reforzar los gobiernos locales y regionales. La inviabilidad e incapacidad de

los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados.

La reinvención de la política del gobierno local tiene su expresión en la delimitación espacial de las competencias del municipio para la promoción del desarrollo mediante políticas que articulen sus esfuerzos con los esfuerzos nacionales. Las competencias exclusivas, complementarias y concurrentes de los gobiernos municipales deben de ser delimitadas.

Los gobiernos con orientación neoliberal están evadiendo la responsabilidad de proporcionar los bienes y servicios públicos. La provisión de los servicios públicos pasa de los organismos estatales a las empresas privadas, en donde el Estado todavía no puede renunciar a su carácter regulador para satisfacer las necesidades y cumplimentar las preferencias colectivas, y para que dichos servicios y bienes públicos se entreguen con calidad, cantidad y costos eficientes. No obstante, los organismos privados más que perseguir fines caritativos, buscan obtener utilidades, por lo que aquellos bienes y servicios que no proporcionan ganancias, por ser intrínsecamente no lucrativo. La privatización de los beneficios, riesgos y responsabilidades de los servicios públicos, también enajena las aspiraciones sociales, las cuales se cancelan si la subjetividad es excluida del orden social. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación "puramente expresiva y gratuita" como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000).

Además, el profesionalismo en el sector empresarial es considerado un valor en referencia a estándares de conducta y prácticas que van más allá de las competencias técnicas y la experiencia para incluir conceptos tales como la conciencia profesional, la pasión por la excelencia y la auto negación.

La descentralización del aparato del Estado mediante la apertura de nuevos canales para la participación popular, dentro del sistema político, libera el potencial democrático representado por los movimientos locales y regionales que operan al nivel de sociedad civil. La descentralización crea las condiciones para una mayor igualdad en las oportunidades de desarrollo entre las regiones, así como al apoderamiento de las clases sociales excluidas. Esto les permitiría promover el crecimiento económico y el desarrollo social de las localidades, aumentar la participación ciudadana y democratizar los procesos políticos y sociales.

Lockwood (1999) integra la literatura de la política distributiva con la literatura de la descentralización incorporando el proyecto de externalidades interregionales en un modelo estándar de política distributiva, en el cual justifica que el gobierno centralizado es menos sensitivo a los "gustos" de los ciudadanos que el gobierno descentralizado. Algunas regiones ganan con la descentralización mientras que otras pierden, así que la descentralización no siempre es un fenómeno unánime. Es decir, la centralización de las funciones del desarrollo favorecen a ciertas regiones o zonas a costa del subdesarrollo de otras.

Esta elección entre centralización y descentralización toma un acercamiento de economía política a la modelación del comportamiento del gobierno. La centralización de las funciones del desarrollo, tales como la financiera y la industrial, favorecen ciertas regiones mientras

que son las responsables del atraso de otras. La descentralización económica transfiere las asignaciones de recursos e insumos de criterios y asignaciones político-administrativos hacia el empleo de mecanismos de mercado y externalidades (Finot, 2000). En la descentralización económica se introducen la operación de externalidades y de mecanismos de mercado en la asignación de los factores e insumos de los procesos de producción, así como en la distribución de los bienes y servicios públicos. La introducción de mecanismos de mercados y externalidades en la provisión de bienes públicos forma "cuasimercados" en donde la demanda se determina en forma política, pero operan mecanismos de competencia en la oferta.

El gobierno central coordina acciones directamente y facilita la coordinación entre individuos. Frijters y Tieman (1999) formulan un marco de referencia flexible para el análisis de la evolución y el comportamiento de las autoridades centrales tomando en cuenta ciertos supuestos alternativos. Los investigadores argumentan que el principal papel de las autoridades centrales en sentido evolutivo es prevenir a los individuos de tomar decisiones con externalidades negativas mayores que los beneficios privados, como en el caso en que terceras personas empeoran su bienestar por la satisfacción de ciertas preferencias.

La habilidad de la autoridad central para comunicarse directamente con cada individuo se debe a que tiene retornos crecientes en la ventaja de escala para colectar y distribuir la información. Una línea de comunicación directa con todos los individuos permite controlar la formación de expectativas en los individuos, lo que permite el control de la violencia. Con el monopolio de la violencia, puede castigar a los individuos que no actúan como se desea. La aplicación de reglas es fácil para las autoridades mayores, lo que deriva en que muchos individuos sigan ciegamente las reglas establecidas por autoridad central. Ya anteriormente, Weber (1922) encontró que un elemento que define a las autoridades centrales es el monopolio de la violencia.

La descentralización es superior en beneficencia a la centralización cuando las externalidades son pequeñas y las regiones heterogéneas. Por el contrario, si la externalidad pierde su fuerza y se vuelve grande, la centralización se hace más atractiva. Las condiciones suficientes para que la mayoría de la población prefiera descentralización o centralización, se formulan tomando como referencia la heterogeneidad de los costos más que sus beneficios.

No obstante la centralización del desarrollo, principalmente en las funciones financieras e industriales, favorece a ciertas zonas a costa del subdesarrollo de otras regiones. Es responsabilidad del Estado en la provisión de bienes y servicios públicos, lograr que los mercados sean más eficientes mediante la reducción de los costos de transacción. Los altos cotos de transacción son inherentemente más difíciles de organizar. Sin embargo, economizar en los costos de transacción es un concepto perverso en los que los costos y beneficios tienen que ser calculados para cada una de las formas de organización las cuales necesitan ser trabajadas comparativamente. La descentralización de las funciones del Estado tiende a reducir los costos de transacción en la producción y entrega de bienes y servicios públicos.

Por tanto, la descentralización del aparato del Estado debe crear las condiciones para una mejor equidad en distribución de los beneficios entre las regiones y otorgar mayor apoderamiento (empowerment) a los grupos sociales considerados como excluidos. Sin embargo, la estrategia de apoderamiento se fundamenta en la capacidad de los individuos

para realizar elecciones racionales como consumidores de bienes y usuarios de servicios públicos y que puede ser constreñida por una política pluralista de bienestar.

Los gobiernos locales y regionales juegan un papel importante en la promoción de espacios para la participación de la sociedad civil, el direccionamiento institucional de sus demandas al Estado, y, por tanto, pueden convertirse en los mediadores de las relaciones que emerjan entre la sociedad civil y el Estado. La descentralización del aparato del Estado puede dar origen a una reforma administrativa que regrese los poderes y los recursos a los gobiernos locales y regionales. Así como la creación de nuevas formas de democracia representativa que incorpore elementos de la democracia material a través de una mayor participación popular directa y a enfrentamientos de la ciudadanía con los elementos formales del poder político para modificar las condiciones de su ejercicio.

Mansbridge (1983) habla de dos tipos de democracia, la adversaria y la unitaria. La democracia adversaria asume intereses en conflicto y emplea procedimientos establecidos para tomar decisiones. La democracia adversaria requiere de información suficiente de los procesos para quienes no están directamente involucrados que pueden tener sus representantes y responsables ante las mismas instituciones. Este tipo de democracia no tiene el atractivo inherentemente normativo que la democracia directa tiene. La democracia unitaria o directa, asume que la gente tiene los mismos intereses, pero no sabe individualmente qué es lo mejor para hacer. La democracia directa parece ser una utopía. La tarea consiste en unir estos dos tipos diferentes de democracia en una red institucional que permita tener las ventajas de los intereses comunes y resolver los conflictos.

El carácter metonímico de la democracia indica su alto valor normativo. Así, la democracia no solamente constituye un conjunto de principios, normas e instituciones, sino también es la práctica de valores de las personas o ciudadanos. De tal forma, que se preserven ámbitos de decisión en políticas públicas, para que sea la misma ciudadanía la que tome las decisiones, aquéllas que por su importancia no deben dejarse en manos del poder político.

Un aspecto importante a considerar son los verdaderos alcances de la descentralización. Entre estos alcances, la descentralización promueve el crecimiento económico y el desarrollo social de las localidades, aumentar la participación ciudadana y democratizar los procesos políticos y sociales. El problema se reduce a delimitar hasta que grado el contenido político de la descentralización tiene que estar estrechamente vinculado a la reforma administrativa para establecer los cambios en las relaciones políticas del poder y socioeconómicas de la sociedad. Aspectos que las elites político-económicas difícilmente pueden conceder. Vista desde este ángulo, la descentralización es por lo tanto un tema eminentemente político que establece retos a la distribución de poder y recursos y al control centralizado del aparato del estado por una elite enquistada (Schönwälder, 1997)

La implementación de políticas de descentralización debe estar acompañada con la creación de nuevos espacios para una mayor participación de la sociedad. Aquí el concepto de espacio delimitado física y territorialmente ha evolucionado a un espacio más abierto y dinámico. Así la descentralización del aparato del Estado, debe liberar el potencial democrático representado por los movimientos locales y regionales que operan al nivel de sociedad civil a fin de servir como suplemento de oportunidades para la participación popular, incluyendo la participación político - electoral proveídas por una democracia más

participativa. Los movimientos sociales que operen al nivel de sociedad civil necesitan estar respaldados por una voluntad política de una eficiente administración y para que las acciones de los movimientos populares sean efectivas, éstos requieren presentarse con un modelo de participación popular, la cual es inherente a su propio voluntarismo. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil.

Pero esta participación popular, de acuerdo con Castells and Borja (1988:47), se restringe a la consulta, información y cooperación con la administración local y no a los procesos de toma de decisiones, las cuales siguen siendo prerrogativas de los representantes electos. Sin embargo, habrá que determinar si se liberan de las actividades productivas de bienes y servicios públicos a las administraciones locales, mediante procesos de descentralización, las repercusiones en términos de beneficios para el desarrollo regional bajo el nuevo paradigma centrado en la profundización de los procesos de descentralización gubernamental, la revolución tecnológica y científica, la impulsión de empresas y el cuidado del medio ambiente.

Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades Este desarrollo regional es inducido consciente e intencionalmente mediante políticas deliberadas e impulsadas por diferentes agentes del desarrollo (Tarapuez Chamorro, 2001). No obstante, la desterritorialización de las fronteras espaciales geográficas a que se ven sometidas las regiones por los procesos de globalización económica concede mayor importancia a los actores y agentes del desarrollo.

Los movimientos sociales populares como "expresión" de la gobernabilidad.

La misma idea de integrar los movimientos populares en alianzas políticas orientadas por la izquierda, señala la importancia particular de los partidos políticos para servir de conexión entre el sistema político y otros movimientos sociales populares que operan al nivel de sociedad civil, mediante los diferentes mecanismos de representación que establezcan y que afecta la gobernabilidad.

Las alianzas posibles entre los movimientos globalifóbicos y los de izquierda, si se convierten en movimientos políticos pueden representar un frente de resistencia y oposición fuerte a los avances de los procesos de globalización económica promovidos por las grandes corporaciones transnacionales y por los acuerdos entre los Estados. Los movimientos establecen demandas para luchar en contra de sistema explotativos, o bien para ampliar y profundizar la democracia.

No obstante, todas las instituciones del sistema político tales como los partidos y los movimientos políticos están perdiendo credibilidad y legitimidad, mientras que los niveles de inestabilidad se incrementan. En este sentido las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos tienen funciones complementarias, más que antagónicas y los proyectos alternativos de partidos políticos diferentes al proyecto dominante hegemónico, tienen que ofrecer estructuras de movilización para tener acceso al poder político.

En el futuro aparecerán instituciones en el ámbito global que sustituyan las funciones que actualmente realizan los partidos políticos en donde los políticos serán los intermediarios entre la ciudadanía global y los tomadores de decisiones en las organizaciones

internacionales. No obstante, los elementos de análisis de la globalización de los movimientos sociales siguen siendo, muy subjetivos.

La mayor parte de los movimientos populares latinoamericanos encuentran apoyo ideológico y político a sus demandas en los partidos de izquierda, a pesar de que estos no han podido reponerse y menos fortalecerse, después de las transformaciones profundas que sufrieran durante la década de los ochenta en Latinoamérica. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

La izquierda ha asimilado y repetido la retórica de la doctrina del libre mercado aunque se ha concentrado en la denuncia del desmantelamiento de las funciones del Estado. Pero ante el descrédito de las políticas de ajuste estructural implantadas, la izquierda Latinoamericana empieza a recobrar posiciones y está en posibilidades de ser capaz de crear nuevos mecanismos para la participación popular y tolerar e incluso impulsar un papel más fuerte e independiente para los movimientos populares (Schönwälder, 1997: 762)

Una política de descentralización exitosa debe crear estructuras de auto-gobierno regional al mismo tiempo que permitir el desarrollo de actores sociales capaces de auto-administrarse y de desarrollar una identidad, lo cual implica la necesidad de "construir" la región en términos sociales (Boisier, 1987: 143; Schönwälder, 1997:763). Hay escasas evidencias de que la región consiste de "sociedades postmodernas" o que se está moviendo a una era postmoderna.

Es el estado el principal actor social que debe promover un crecimiento económico y un desarrollo social equilibrado y equitativo entre las diferentes regiones. La falta de flexibilidad del Estado nación para reaccionar a los acelerados cambios de la globalización económica y la inercia de sus pesadas estructuras que no responden a las actuales demandas de la ciudadanía, hace necesario fortalecer a las regiones.

La región se define en general como un área de territorio sobre la que puede identificarse una marcada unidad de problemas humanos y caracteres físicos con una fuerte tendencia hacia tal unificación. La palabra región proviene del latín que significa línea o demarcación, es decir, la región es el territorio comprendido entre varias líneas de demarcación, y por tanto, es "la unidad o porción de superficie inmediatamente menor que la unidad nacional cuyas características o propiedades socioeconómicas le determinan una identidad económica y socialmente significativa en el conjunto nacional (Tarapuez Chamorro, 2001).

Es decir, con el predominio de ciertos factores tanto comunes como complementarios, que generan una suerte de identidad" siguiendo a Boisier (1988). Una nueva delimitación del espacio territorial del gobierno local es un requerimiento para promover una gestión pública orientada a lograr la participación social de los principales actores y agentes en la solución directa de sus problemas. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La gestión pública es un factor importante en la toma de decisiones que afectan las accione gubernamentales. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos

adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

La implementación de políticas de descentralización y la creación de nuevos espacios para la participación popular de movimientos sociales operando en el ámbito de sociedad civil, deben estar respaldados ampliamente por la voluntad política de una administración local que delimita el voluntarismo inherente de una participación popular que queda restringida solamente a la consulta, información y cooperación, pero que deja la responsabilidad de la toma de decisiones en los representantes electos (Schönwälder, 1997)

Ninguno de los dos acercamientos de la descentralización, el pragmático o el político, puede dar una explicación suficiente si los espacios para la participación popular pueden ser ampliados por la descentralización política. Esto repercutiría en la formación y reinvención de instituciones políticas más eficaces y eficientes, más contestatarias y responsables de las demandas populares, y por lo tanto más involucradas en procesos democráticos. El sistema político que incluye a las instituciones políticas y al estado deben ser los depositarios de "lo público". No obstante, las instituciones del sistema político, tales como los partidos y los movimientos políticos están perdiendo credibilidad y legitimidad en todas las sociedades, al mismo tiempo que se incrementan los niveles de inestabilidad.

Las ideologías (La ideología es el sustituto ateo de la fe, según Novak, 1999) que sustentan el nihilismo y relativismo antropológico del poder de los Estados o de los mercados totalitarios se neutralizan cuando los individuos adoptan actitudes contestatarias y se organizan en movimientos populares. El totalitarismo fue definido por Mussolini como *la feroce volontá* o "ansia de poder desenfrenado sin respeto alguno a la verdad" (Novak, 1999) Pero entre el relativismo moral y el control político del totalitarismo existe el autocontrol en el marco de una sociedad libre que fortalece su cultura moral. Los sistemas de sociedades totalitarias, ya sea porque tienen un partido único en el poder, por ser economías centralmente planificadas o por que son sistemas monárquicos, etc., entran en la caracterización del "Estado soy yo".

Sin embargo, las relaciones conflictivas de las diferentes expresiones de los movimientos populares siempre sujetas a condiciones de incertidumbre, no pueden ser totalmente predeterminadas sin que se sometan a tácticas de control político y manipulativo. Así los movimientos populares pueden representar la crítica radical social y su rechazo sistemático a todo aquello que signifique la dirección de un globalismo neoliberal. En otros casos, los movimientos son manipulados y manejados con ciertos fines estratégicos que benefician a los poderes económicos hegemónicos. Los movimientos establecen demandas en contra de sistema que son de explotación, o bien por la profundización y ampliación de la democracia.

Ya sea que los movimientos populares elijan entre el camino de la violencia o una estrategia cliententelista, cuando se trata de participar en la política local, al menos tienen otras cuatro opciones posibles: pueden tomar la decisión de participar en contra de las instituciones estatales, participar en los partidos políticos y en las instituciones del Estado, formar alianzas más amplias con otros actores y operadores políticos enfatizando sus roles específicos más que liderazgos individuales o bien formar coaliciones con otros actores simultáneamente.

Para insertarse en los procesos de globalización es necesario enfatizar la importancia de formular e implementar una política local para el desarrollo, la cual debe complementar los esfuerzos en las lógicas propias del gobierno local, la sociedad local y el mercado local. Tarapuez y Chamorro (2001) define la política local para el fortalecimiento empresarial como "la organización de los esfuerzos y las acciones de los agentes sociales para el logro de un objetivo amplio y genérico: el desarrollo, competitividad, promoción y fortalecimiento de las MIPYMES", (micro, pequeñas y medianas empresas).

Los regímenes de gobierno presidencialistas que logran coaliciones mayoritarias multiparidistas contribuyen a alcanzar la gobernabilidad democrática. Las coaliciones multipartidistas que logra la cooperación entre sus diferentes actores políticos pueden lograr avances en la estabilidad del régimen político, presidencialista o no, mediante el apoyo popular y una adecuada formulación e implementación de políticas y estrategias para el desarrollo. Tanto los actores políticos estratégicos como los sociales y económicos aprovechan las estructuras de poder para ejercer influencia en los procesos de tomas de decisiones que favorezcan sus propios intereses. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición".

Sin embargo se está viendo cada vez más que la lealtad al partido cuenta más que la eficiencia y la competencia en muchos países La formación de alianzas políticas entre el gobierno y la sociedad, al margen de la estrategia clientelar, es un requisito indispensable para la implementación de programas con alcance socioeconómico. Las coaliciones políticas de gobierno, de acuerdo con la teoría de los eventos, terminan en forma impredecible. No obstante es posible estimar las relaciones de cooperación y conflicto entre las partes involucradas.

La primera estrategia consiste en participar en la política local oponiéndose abiertamente en contra de las instituciones del Estado y presionar a través de alianzas con otros movimientos sociales. Para contrarrestar el influjo de los procesos de globalización económica, es necesario enfatizar la importancia de formular e implantar una política local para el desarrollo, la cual debe complementar los esfuerzos en función de las lógicas de la sociedad, el gobierno y el mercado locales. Para ello, es necesario seguir protegiendo la autonomía del movimiento y dejando las mínimas oportunidades de cooptación, aunque los alcances de éxito en sus demandas sean limitados, a menos que se trate de un movimiento fuerte capaz de arrancar concesiones importantes del Estado.

Las cooptaciones son pequeñas concesiones por los poderes hegemónicos a fin de diluir el criticismo y la oposición a los proyectos de expansión de la economía del mercado. Esta estrategia pone demasiado énfasis en las movilizaciones populares desde afuera del sistema político y descuida las relaciones entre los diferentes movimientos populares, derivándose en una tendencia que termina en la propia marginalización de los movimientos populares.

Cuando los movimientos sociales penetran las instituciones políticas y estatales para influir sus políticas, los líderes pueden alcanzar posiciones en el sistema político local. Lograrlo les permita el acceso a más recursos y a institucionalizar los cambios, aunque

corren el riesgo de ser cooptados para entregar el movimiento a las estructuras clientelistas, comprometiendo su lealtad hasta que finalmente pueden perder la base de su propio movimiento.

Una tercera estrategia consiste en la formación de alianzas con otros actores y operadores políticos con la misma conversión ideológica. De tal forma que se enfatice más el desempeño de papeles específicos con un mayor peso en las demandas populares que los liderazgos individuales, en situaciones tales como vivienda, educación, sanidad, etc. Este tipo de alianzas permite a los movimientos populares crear y agrandar las oportunidades institucionales para la participación en la planeación y ejecución de políticas y programas de gobierno local.

En las alianzas entre los diferentes movimientos populares se manifiestan posibles transferencias de la autonomía en beneficio del más dominante, derivándose en las consideraciones de un viejo dilema para los movimientos absorbidos, entre la decisión de permanecer totalmente autónomo o cooptado. El movimiento popular cooptado y controlado pierde su autonomía en favor de los aliados, de quienes se hace más dependiente, relegando a segundo término a sus propias bases políticas de apoyo.

La creación de coaliciones con aliados preferidos y simultáneamente con otros actores políticos, permiten aprovechar mejor sus fortalezas, ya sea en disponibilidad de recursos o bien en capacidades específicas. Por otro lado, al mismo tiempo que las coaliciones pueden ayudar a proveer una mayor protección a los movimientos sociales, también los hace menos vulnerables frente a los cambios desafortunados y a las vicisitudes de un medio ambiente desfavorable. Schönwälder (1997) considera que las alianzas múltiples de los movimientos populares que operan en el ámbito local con una variedad de otros actores parecer ser la salvaguardia de la autonomía relativa y la forma mas apropiada para maximizar los recursos a su disposición
.

La sociedad civil puede también ser tipificada por los bienes mixtos que genera, los cuales pueden ser privados como los servicios exclusivos para los miembros, solidarios como los servicios de una organización de ayuda mutual, o públicos. Las actividades típicas de la sociedad civil generan como externalidades positivas, el capital social y el discurso público, también considerados como beneficios colectivos de la asociación voluntaria. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil.

El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. La participación en redes sociales genera una externalidad positiva mientras que el status genera una negativa. El desarrollo de las redes sociales están determinadas por un desplazamiento existente de las relaciones fuertes, permanentes y estables por otras más débiles, flexibles y pasajeras. El discurso público, de acuerdo con Wuthnow (1991b), se refiere a la habilidad de una sociedad para articular valores colectivos, para reflejarse en los problemas sociales, y para desarrollar metas políticas.

Formación de capital social para fortalecer la institucionalización de la gobernabilidad.

El capital social se define como el poder adicional para aplicar las reglas disponibles a las comunidades con una red extendida de relaciones sociales horizontales (Banfield, 1958;

Putnam, 1993a; Helliwell and Putnam, 1995). Putnam (1993: 167) define como capital social aquellos “rasgos de la organización social como confianza, normas y redes que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordenadas" que resalta la existencia de una comunidad cívica, la cual resulta de un “proceso histórico, cuyas tradiciones asociativas son preservadas mediante el capital social” y que como forma de organización “permite evitar los dilemas de la acción colectiva mediante lazos de confianza social” (Lechner, 2000). Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es.

La habilidad de una comunidad o grupo de agentes ligados por relaciones sociales horizontales para disciplinar la conducta individual. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. De acuerdo a Putnam (1993: 183), “la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político”. Según varios autores, entre otros, Coleman (1990), Portes & Sensenbrener (1993) y Putnam (1995), el capital social se refiere no solamente al conjunto de recursos sociales involucrados en las relaciones, sino también a las normas y valores asociadas con dichas relaciones sociales. Putnam (1995: 67) define capital social como “redes, normas y confianza social que facilitan la coordinación y cooperación en beneficio mutuo”. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la “trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos” El capital social es el “stock” que históricamente se ha acumulado y que determinan las opciones de desarrollo. El capital social se expresa en la relación existente entre relaciones de confianza y cooperación cívica. Así, un elevado desarrollo económico puede coexistir con un debilitamiento de las relaciones de confianza y cooperación cívica (Grootaert, 1998). Sin embargo, las relaciones de confianza y compromiso cívico representan un flujo más que un stock. Para Putnam (1993b), “El capital social encarnado en normas y redes de compromiso cívico parece ser un prerequisito para el desarrollo económico así como para un gobierno efectivo”.

El mismo Putnam (1995), por ejemplo, conceptualiza el capital social como los “mecanismos de la organización social tales como las redes, normas, y la confianza social que facilita la coordinación y cooperación para beneficios mutuos”. La organización informal de las redes ocurre en una forma espontánea y su eficacia depende en gran medida de la selección de formas de organización interna. El capital social es definido por el mismo Putnam (1993a) como los elementos de la organización social, tales como la confianza, las normas y las redes que establecen relaciones de reciprocidad activadas por una confianza social que emerge de dos fuentes, las normas de reciprocidad y las “redes de compromiso ciudadano”. Las relaciones de confianza personal llegan a generar una confianza social o confianza generalizada cuando prevalecen normas de reciprocidad y redes de compromiso cívico (Lechner, 2000). El capital social se expresa en la relación existente entre relaciones de confianza y cooperación cívica

Para Woocklock (1998), el capital social es un concepto que se relaciona con una estructura de relaciones sociales que tienen como base la confianza de un grupo, lo que le permite lograr sus fines. Spagnolo (1999) define el capital social como la holgura para aplicar el poder presente en una relación social, la cantidad de poder de castigo social creíble y disponible como una amenaza en exceso del requerido para mantener cooperación en la interacción social. Putnam (2000) realiza un acercamiento empírico al capital social enfatizando las evidencias en la membresía organizacional.

El capital social tiene importantes implicaciones para el desempeño de las organizaciones y las instituciones, así como en los mismos ciudadanos. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. Las sociedades pueden incrementar su capital social propiciando, apoyando e invirtiendo en conocimientos, habilidades, valores y talentos, etc. . El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí.

Recientes investigaciones en economía y ciencia política atribuyen las altas tasas de eficiencia organizacional e institucional, crecimiento e ingreso per cápita entre las regiones italianas a diferencias en su capital social. El capital social se define ampliamente como un activo que es inherente a las relaciones sociales entre los individuos, comunidades, sociedades y redes, etc. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Como activo tiene que ser administrado para que adquiera valor, no puede comprarse en un mercado pero que puede cambiar con el tiempo (Leana y Van Buren III, 1999)

Las relaciones sociales median entre las transacciones económicas dimensionando el papel que juega el capital social, definido así en los términos de relaciones de apoyo con otros actores económicos, como por ejemplo, con los consumidores y usuarios potenciales. Las transacciones entre las partes donde la identidad no importa incluye especificidad de los activos es sus diversas formas, incertidumbre y la frecuencia. Esta identidad encuentra vehículos de expresión de sus intereses en los diversos medios espaciales locales, regionales, nacionales e internacionales.

Las relaciones de apoyo mutuo entre los diferentes actores son vistas como “redes de compromiso cívico, por Putman (1993) Se consideran “redes de compromiso mutuo” tales como las asociaciones de vecinos, las sociedades de coros, las cooperativas, clubes de deportes, partidos basados en las masas, etc. que son las formas esenciales del capital social. Esto porque entre más densas sean éstas redes en la comunidad, es más probable que los ciudadanos sean capaces de cooperar para beneficio mutuo. Para Putnam (1993b), “El capital social encarnado en normas y redes de compromiso cívico parece ser un prerequisito para el desarrollo económico así como para un gobierno efectivo”. Las relaciones de confianza personal llegan a generar una confianza social o confianza generalizada cuando prevalecen normas de reciprocidad y redes de compromiso cívico (Lechner, 2000). El capital social se expresa en la relación existente entre relaciones de confianza y cooperación cívica

De acuerdo con Pennings, Lee y Witteloostuijn (1998), tales relaciones se forman de muy diferentes maneras como por ejemplo las enseñanzas mutuas, conexiones personales y familiares, membresías que se interlapan, movilidad interorganizacional, inversiones conjuntas y otros arreglos colaborativos. Estos arreglos colaborativos institucionales reducen

las condiciones de incertidumbre y las diferencias existentes entre los diferentes agentes económicos. La economía no ha considerado la importancia que tienen las redes de relaciones sociales en las que se llevan a cabo las transacciones económicas. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.La interdependencia de las transacciones genera un ambiente de economía. Las redes facilitan la organización informal la cual ocurre en forma espontánea. La consolidación de estas redes de relaciones sociales promueve la participación directa.

Spagnolo (1999) ha desarrollado una teoría de la influencia de las relaciones sociales como habilidad de los agentes para cooperar en el lugar de trabajo se basa en las conexiones entre las relaciones sociales y de producción. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Sostiene que las relaciones a largo plazo entre los miembros de un equipo de trabajo son también interacciones estratégicas repetidas. Cuando los miembros de un equipo de producción comparten relaciones sociales, el capital social disponible puede ser transferido e invertido con utilidades para reforzar la cooperación en la producción. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales.

Las transferencias de confianza de las relaciones sociales a las relaciones de producción son siempre en el interés de la organización pero no siempre en el mejor interés de los agentes. Las relaciones sociales se diferencian unas según ocurran dentro de las empresas o entre las empresas, lo cual es importante para la determinación del mecanismo de gobernabilidad de mercado o de jerarquía a usar. Por lo tanto, la cooperación y la connivencia son términos que pueden ser usados para el mismo fenómeno entre quienes tienen intereses opuestos.

El capital social es considerado como un atributo de los actores individuales (Belliveau, O¨Relly, & Wade, 1996; Portes & Sensenbrenner, 1993) que tienen ciertas ventajas debido a su posición relativa o de localización en un grupo, como redes individuales (Burt, 1992), las interacciones entre empresas (Backer, 1990) Las redes de actores individuales y colectivos “representan un nexo sobresaliente en la relación entre las personas y los sistemas funcionales” (Lechner, 2000). A nivel macro, Putman (1993) describe el capital social como un atributo de las comunidades, Fukuyama (1995) como un atributo de las naciones o de las regiones geográficas y Walker, Kogut, y Shan (1997) como redes industriales. Así, las investigaciones sobre capital social se han enfocado a variaciones en Estados, regiones y países y a variaciones individuales. Faltan estudios que determinen hasta donde las variaciones individuales son el resultado de los grupos sociales a los que se pertenece.

La acumulación de capital social es un proceso no bien entendido por los gobiernos, cuya política económica no debe permitir que los efectos perversos de las fuerzas invisibles del mercado destruyan el capital social de las comunidades, como la inestabilidad y la inseguridad publica lo consiguen. Los sistemas de gobernabilidad democrática permiten la formación y desarrollo de capital humano y social. Las investigaciones de Glaeser, Laibson and Sacerdote, 2000: 29) concluyen que los patrones de acumulación de capital social son consistentes con el modelo standard económico de inversiones.

La resistencia a la transición de la utopía neoliberal con sus desastrosas consecuencias y efectos, tiene lugar gracias a la existencia de reservas de un capital social que protege los

valores del orden social viejo y no permite que se conviertan en anomia, al menos a corto plazo, mientras duren, se renueven y preserven estas reservas. Thoreau ha dicho que los hombres tienen el derecho a la revolución y a rechazar la obediencia, lealtad y a resistir un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables.

Estas fuerzas de resistencia, argumenta Bourdeau, (1998) son fuerzas conservadoras que se resisten al establecimiento del nuevo orden social y se convierten en fuerzas subversivas. De acuerdo con Kaiser (1997), la hipótesis del conservadurismo institucional sostiene que las reformas constitucionales en las democracias son relativamente poco comunes, no debido a factores institucionales sino al cálculo de los actores políticos, solamente cuando una gran crisis ocurre, ya sea por un abrupto cambio de factores contextuales o a través de un deterioro dramático de la satisfacción de la política pública, es una ventana de oportunidad abierta para la persecución de planes de reformas

Estas fuerzas existen adheridas a las instituciones estatales y en individuos y grupos con orientaciones de ciertos actores sociales y políticos que mantienen privilegios del Estado y del orden social establecido. Es el estado el principal actor social que debe promover un crecimiento económico y un desarrollo social equilibrado y equitativo entre las diferentes regiones. Una vez destruido el capital social de un pueblo por políticas públicas irresponsables que solamente buscan el desempeño racional economicista eficiente o la maximización de las utilidades, resulta catastrófico reponerlo, como en el caso de la agenda de la Nueva Derecha cuya orientación economicista tiene ciertas implicaciones moralistas de la sociedad. Pero la respuesta economicista para la Nueva Derecha es la mercadización que alienta un consumismo activo. Esta derecha ha tomado ventaja de las situaciones mediante la promoción de las funciones del Estado orientadas por una política económica que benefician a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales

El capital social es un recurso que es conjuntamente poseído, más que controlado por un solo individuo o una entidad organizacional. . El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí. Tanto de la organización como de cada uno de sus miembros se incorporan aspectos públicos y privados al capital social. Así, del capital social emergen dos patrones, el énfasis en los bienes públicos y el énfasis en los bienes privados.

El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. Desde la faceta de bienes públicos, el capital social es un atributo de unidad social, más que de un actor individual, y los beneficios individuales de su presencia o sufre de su ausencia de una manera secundaria. El capital social es el principal componente de la sociedad civil, principal actor sobre la cual recaen los procesos democratizadores. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. La gobernabilidad democrática facilita la formación y desarrollo del capital humano y social.

El enfoque del capital social a los bienes privados, se refiere al individuo y a sus activos sociales, tales como prestigio, credenciales educativas, membresías a clubes sociales (Leana and Van Buren, 1999). Los investigadores correlacionan las variables del capital social, tales como la membresía a las organizaciones, con el desempeño económico. En vez de considerar al capital social como un atributo de la comunidad, el tratamiento de Glaeser, Laibson and Sacerdote (2000:7) es considerarlo como una característica individual, es decir como un

conjunto de recursos sociales que ayudan a acumular capital humano. Las distinciones entre los modelos de capital social como bienes públicos y bienes privados se muestran a continuación:

DISTINCIONES ENTRE LOS MODELOS DE CAPITAL SOCIAL DE BIENES PÚBLICOS Y BIENES PRIVADOS.

	Capital social como:	
Atributo	Bien público	Bien privado
Nivel de análisis	Macro y meso (unidad social)	Micro (individual)
Beneficio individual	Indirecto	Directo
Beneficio colectivo	Directo	Incidental
Ligas necesarias		Frágil
Incentivos individuales	Débil o moderado (función de evaluación de Beneficios indirectos.	Fuerte

Fuente: Leana and Van Buren (1999)

Sin embargo, el capital humano que es un atributo individual y el capital social están siendo cuestionados y sometidos a discusión bajo el enfoque basado en los recursos de las organizaciones en el cual se concibe que la mercantilización, imitabilidad y apropiabilidad de los recursos intangibles son vistos como preocupantes para las ventajas organizacionales. Sin embargo, la reestructuración económica bajo el esquema de la globalización, requiere de la promoción y desarrollo de capital humano y organizacional. Leana y Van Buren III, (1999) definen el capital organizacional social como un recurso que refleja el carácter de las relaciones sociales dentro de la organización, realizadas a través de los niveles de los miembros orientados por objetivos colectivos y confianza compartida. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

Es por lo tanto un atributo colectivo más que una agregación de las conexiones sociales de los individuos, es un subproducto de otras actividades organizacionales y por lo tanto constituye un componente indispensable para la acción colectiva. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes.

Una vez que la acción colectiva se inicia, en el curso de este mismo proceso emerge una colectividad que puede aplicar sanciones informales contra los que contravienen y recompensar a colaboradores a bajo costo (castigo u ostracismo), a ningún costo e incluso a premio (avergonzar, reprochar o criticar) (De Swaan Abram, 1997). El capital organizacional social es un activo cuya posesión conjunta entre los miembros y la organización beneficia a ambos. Una nueva organización tiene la ventaja de que puede crear su capital social organizacional, en tal forma que mantenga un equilibrio óptimo entre los intereses individuales y los intereses organizacionales, a pesar de su naturaleza contingente de su relación con el desempeño organizacional.

Tanto las formas del capital humano (específicamente en las organizaciones, es el conocimiento acerca de las rutinas y procedimientos que tienen un valor limitado fuera de dichas organizaciones en las cuales las bases del capital ha sido desarrollado) y el capital social, varían en grados de acuerdo a su idiosincrasia con determinadas organizaciones. Esto hace que a mayor grado de idiosincratismo existente con las organizaciones, mayor es su contribución a la fortaleza de la organización.

Características de especificidad y no apropiabilidad del capital humano y social se involucran en las relaciones sociales, económicas y políticas de los individuos, quienes pertenecen a las organizaciones, complicando sus efectos. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Ambos capitales pueden ser importantes recursos de la ventaja competitiva, asumiendo que reside en los miembros o es específico a las organizaciones como partes integrales de recursos que son únicos y que son inobservables. Las organizaciones con altos niveles de capital humano y social generan más competitividad que aquéllas con bajos niveles. Una economía competitiva sustentable requiere de programas de mejora del capital humano y social.

La teoría de la organización basada en los recursos (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984) enfatiza los recursos que mantiene una organización para explicar la rentabilidad. Por otro lado, la teoría de la ecología de la población (Hannan & Freeman, 1989) enfatiza las características de la población para explicar la disolución organizacional como resultado de las tensiones que surgen entre los diferentes niveles de análisis: los individuos, las organizaciones y las poblaciones. El ambiente ecológico de las localidades tiene relaciones estrechas con el sistema local, también denominado ecoware (Vázquez, 1993), el cual es un elemento importante del sistema medio ambiente.

Conclusiones.

La globalización de los fenómenos económicos, políticos y sociales requiere de ser centrada en una humanización, con el fin de establecer equilibrios y balances entre el crecimiento económico, el desarrollo socio-político, la democracia y el bienestar de la sociedad. La globalización está aquí para quedarse, pero el neoliberalismo puede ser parcialmente manejado. Las políticas neoliberales que han llevado a una creciente desigualdad necesitan una reversa urgente porque amenazan la democracia global y complican la crisis del medio ambiente.

Los cambios tecnológicos, económicos, políticos, y sociales acelerados que están

ocurriendo en el medio ambiente, han puesto en crisis la gobernabilidad de las instituciones del Estado-nación. La emergencia de una nueva gobernabilidad, base de una estructura de crecimiento sostenido, debe fundamentarse en cambios profundos de comportamientos, estructuras y procedimientos. Investigaciones más profundas se hacen necesarias para determinar los fundamentos sociales e institucionales de la actual tendencia dominante de la globalización centrada en el libre mercado. La retórica de la doctrina del libre mercado ha sido promovida por los ideólogos conservadores y asimilada y repetida por los de la izquierda.

Las nuevas formas de gobernabilidad de la sociedad en un ambiente de globalización deben considerar como opciones la democratización de los sistemas políticos, el desarrollo de una vida política propia y la autogestión de los pueblos. Las nuevas formas de gobernabilidad de lo colectivo deben sustituir a las estructuras rígidas y pesadas que no dan respuesta a exigencias de la individualidad con orientación abierta y que por lo tanto requieren la emergencia de nuevas formas colectivas con estructuras más abiertas, flexibles y livianas que respondan a las exigencias de la individualidad con orientación abierta. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes.

Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Los procesos de descentralización política y administrativa no toman ventaja de los beneficios de los grupos sociales autogestivos, ni tampoco desarrollan una cultura que propicie su implantación en las organizaciones del sector social.

Además, el imperativo de cualquier forma de gobernabilidad es lograr el fortalecimiento de un sistema que propicie el crecimiento económico y distribuya los beneficios equitativamente entre los pueblos, generando igualdad de oportunidades efectivas y accesos al desarrollo social. No hay que olvidar que el crecimiento económico se mide cuantitativamente en términos del producto interno bruto per cápita y en términos del promedio real de consumo. El desarrollo social se apuntala en el desarrollo humano mediante la adquisición de capital humano y la creación de oportunidades para mayor acceso a los recursos y bienes sociales, para elevar los niveles de calidad de vida.

Si se considera las formas de gobernabilidad como coordinación, su efectividad se determina en función de los costos de transacción. Cada una de las formas de gobernabilidad tiene sus propios costos de transacción y el asunto es determinar cual forma de coordinación es la que promete menores costos en circunstancias específicas, por lo que también requiere de un régimen legal específico. La transacción ideal desde la economía y el derecho es más una forma de mercado spot para la que la identidad no es importante como lo es la aplicación

de reglas legales. Economizar mediante el empleo de costos de transacción es un concepto perverso en el que todas las formas de organización deben ser trabajadas comparativamente.

La transición a las nuevas formas de gobernabilidad de la sociedad requiere la construcción a largo plazo de los equilibrios institucionales necesarios a través de sistemas más pluralistas. Las nuevas formas de gobernabilidad de lo colectivo deben sustituir a las estructuras rígidas y pesadas que no dan respuesta a exigencias de la individualidad con orientación abierta y que por lo tanto requieren la emergencia de nuevas formas colectivas con estructuras más abiertas, flexibles y livianas que respondan a las exigencias de la individualidad con orientación abierta. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes.

El reto es crear un sistema de gobernabilidad y de gestión publica que implique la interacción de los niveles locales, nacionales, regionales y mundiales y que, además, den respuesta a las prioridades del desarrollo social y crecimiento económico. (Larmour,1997). Un acercamiento a la gobernabilidad se traduce del macronivel de sectores a un mesonivel de programas y a un micronivel de un oficial tomando decisiones de qué debe hacer. Una orientación hacia la gobernabilidad se centra en estas circunstancias diferentes y en las maneras en que cada una de las formas de gobernabilidad puede ser más exitosa que otra.

La alternativa para que los Estados-nación recobren su gobernabilidad con niveles saludables de interacción con los componentes y actores del sistema global, con los que será necesario negociar nuevas formas de interacción ajustadas a nuevas reglas del juego de tal forma que equilibren los efectos de la globalización corporativa. Además, que posibiliten un crecimiento económico y un desarrollo social más equilibrado e incluyente de toda una ciudadanía capaz de racionalizar los proceso de globalización, con la participación de todos los sectores económicos, más equilibrado con las fuerzas e intereses capitalistas externos, más realista al tomar en cuenta nuestras propias necesidades prioritariamente por sobre los deseos o preferencias.

A pesar de los buenos deseos, la globalización económica guiada por las corporaciones ya se ha expresado en crisis financieras recurrentes con resultados desastrosos para algunos países, la quiebra de empresas y de cadenas productivas completas, la polarización de la sociedad, etc., lo que hace que muchos analistas anuncien el fin del neoliberalismo. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera.

Un proceso de esta naturaleza requerirá la creación de nuevas instituciones que fomenten y protejan la autodeterminación y autonomía como garantía de la diversidad y pluralidad de intereses y que fundamenten el ejercicio democrático de la sociedad. La autonomía local se fundamenta en el ejercicio de la ciudadanía para evaluar y juzgar las acciones de los gobiernos locales que tienen la responsabilidad de tomar decisiones correctas acerca de sus competencias ante las comunidades. La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad.

Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva

polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general. De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales. Las competencias de los gobiernos locales deben de ser delimitadas entre las que son exclusivas y las concurrentes con otros niveles de gobierno.

Pocos gobiernos nacionales lograron la administración y manejo democrático de la diversidad cultural y étnica de los pueblos. La diversidad es un principio democrático que no admite excepciones y su observancia y práctica es la garantía de una democracia. La hegemonía ideológica de la democracia del mercado pregonada como la única alternativa de los procesos de globalización, que sublima la política y desdeña lo social, está socavando y dañando las mismas bases democráticas de la sociedad global. No obstante, está naciendo una sociedad civil globalizada que se ha manifestado en movimientos antiglobalizadores con cierto éxito relativo, como en el caso de la campaña para la prohibición de minas personales y el movimiento Jubileo para la condonación de la deuda externa de los países más pobres.

El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. La globalización de los procesos económicos ha generado la globalización de la sociedad civil mediante la creación de redes e instituciones las que formulan las agendas globales. La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil.

Las repercusiones de estas prácticas globalizadoras del mercado alteran la funcionalidad de la sociedad mediante el tratamiento de las relaciones de la vida social como simples mercancías cuyos derechos de propiedad son más importantes que los derechos humanos. El establecimiento de un régimen de derechos de propiedad no es garantía de la creación de los incentivos que el mercado necesita, ni tampoco puede prevenir de futuras interevenciones políticas. La prevalencia de la ideología del mercado pone en riesgo las bases mismas de la democracia, de tal forma que el mercado libre es un mito porque limita y subordina la acción política promotora del desarrollo de los pueblos. ”.

Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política. La explicación de la acción política en un contexto institucional es diferente de explicar el cambio institucional En períodos largos de tiempo. En cada cambio de las constelaciones institucionales se involucran altos costos de transacción de los actores políticos afectados. En el último caso, la historia y la cultura política, entendida como los supuestos básicos del mundo de la política, las cuales restringen el rango de alternativas disponibles, tienen que ser sistemáticamente integradas como factores, los cuales entre otros, dan forma a la manera en que los actores políticos perciben las situaciones de elección (Kaiser, 1997)

Los actores políticos pueden inventar nuevas estrategias para adaptarse a los cambios de reglas y las instituciones son parte de una configuración, donde un cambio hecho en una institución puede tener efectos impredecibles y no esperados en otros. Para Giddens (1999:36) los riesgos son “la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza.” Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos

que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales. Las condiciones sociales, económicas, tradiciones culturales o eventos impredecibles importan pero no influyen en forma mecánica en la acción política

Cualquier teoría del cambio debe dar poder a los individuos para oponer resistencia al modelo de los procesos de globalización. Thoreau ha dicho que los hombres reconocen el derecho a la revolución, el derecho a rechazar la obediencia, lealtad y a resistir un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables. Para que los movimientos populares tengan éxito en sus demandas, tienen que reconstruir y fortalecer su identidad colectiva y sus prácticas comunes, de tal forma que les permita preservar su propia integridad y autonomía. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas.

Los procesos de la individualización enfatizan la presencia del individuo por sobre lo colectivo, escindiendo en forma nominalista entre el individuo y la sociedad, mediante el debilitamiento de los referentes materiales y simbólicos de las identidades colectivas. La identidad permite la expresión de los intereses propios en diferentes instancias espaciales nacionales e internacionales. La transformación del capital social tiene relación con los cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los individuos. Es la identidad colectiva la que crea el sentido de pertenencia de los individuos a la comunidad y desarrolla los lazos de solidaridad, a través de una red de relaciones.

El desarrollo lateral en red de las relaciones sociales está intensificando las presiones por una mayor autonomía e identidad culturales locales. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Pero las disociaciones entre la identidad cultural y los procesos de globalización económica provocan fuertes rupturas sociales. Por otra parte, los movimientos populares tienen que ser capaces de influir tanto a otros actores y operadores políticos, como al mismo medio ambiente institucional en que operan, demostrando una mayor habilidad de organización para reunirse en torno a otras estructuras de movimientos populares, con quienes compartan preocupaciones comunes.

Las posibilidades para participar exitosamente en los beneficios de la globalización dependen de la capacidad que tienen los Estado-nación para desarrollar programas de capital humano y social que involucre la formación y administración de recursos humanos de alta competitividad y calidad con una orientación fuerte hacia las tareas de investigación científica y tecnológica. Para avanzar en el estudio del capital humano y social y sus implicaciones en el desempeño de las instituciones, se necesita un enfoque teórico metodológico que combine el punto de vista de la organización basado en los recursos con el punto de vista de la ecología poblacional.

Bibliografía.

Aaron, Henry J., Mann Thomas E., Taylor, Thimothy (1994). Values and public policy. Brookins Institution.

Abboushi, Suhail (2000). “International growth strategies: purposes, motives and risks”, Advances in Competitiveness Research, Vol. 8, No. 1, 2000, páginas 34-59.

Abrego, Lisandro (1999). "Trade liberalisation and foreign direct investment in the presence of tax credits" University of Warwick.

Acemoglu, Daron y Ventura, Jaume (2000). “The world income distribution”, Working paper 01-01, Massachusetts Institute of Technology.

Acuña Llamas, Francisco Javier (1999). La CNDH, una institución a medio camino (Propuesta Para su urgente transformación), Grupo Mandala Editores, México.

Adelman, Jeremy. (1998). “Tequila hangover: Latin America´s debt crisis”. Studies in Political Economy 55, Spring, pp 5-35.

Ades, Alberto and Rafael DiTella (1999), “Rents, competition and corruption” American Economic Review, Vol. 89, No. 4.

Adler, Paul.S (1999). “Market, hierarchy, and trust: the knowledge economy and the future of capitalism”, Version mimeo, University Of Southern California.

AFP y DPA (2001) “Sólo 0.11% de la inversión extranjera reciben los 49 países más pobres del planeta: UNCTAD”, La Jornada, viernes 11 de mayo del 2001.

Aguirre Rojas, Carlos Antonio (2000) “Para una crítica del concepto de globalización”, Revista Theomai, Número 2, segundo semestre del 2000.

Aizenman, Joshua (2000). La privatización en los mercados emergentes. Journal of Economics Integration 15(1), March: 145-161.

Alcántara Meixueiro, Enriique. (1998). El neoliberalismo: repliegue estatal forzoso. Un nuevo enfoque teórico (perdido). Quórum, Año VII, No. 63. Noviembre-diciembre, páginas 135-146.

Alchian, Armen, and Harold Demsetz. (1972). “Production, information costs, and economic Organization”, 62 American Economic Review 777-795.

Ali, Abbas J. (2001) “In defense of globalization”, Competitiveness Review, Vol. 11, No. 1, i-iii.

Almeyra, Guillermo (1999). "La utopía posible", La Jornada, Domingo 26 de Septiembre. Pág. 66

Allen, D.W. (1991). What are transaction costs? In R.O. Zerbe and V:P: Goldberg (Eds.), Research in law and economics (Volume 14, pp. 1-8). Greenwich, CN: JAI Press.

Altman, David (2000a) “Crisis de gobernabilidad democrática: orígenes y mapa de lectura”, Revista Edición especial No. 8/9 mayo 2001. http://www.iigov/pnud/bibliote/revista/revista8_9/docs/revis8_12.htm.

Altman, David (2001b). “Democracia política y desarrollo económico: ¿Existe alguna realidad? Magazine No. 18, Instituto Internacional de Gobernabilidad, Junio, 2001. http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/dhial/dhial18_05.htm.

Amín, Samir (2001). Imperialismo y globalización. http://www.rcci.net/globalización/2001/fg175.htm

Amoore, Louise et al. (1997). “Overturning ‘globalization’: resisting the teleological, reclaiming the ‘political’”. New Political Economy 2(1): 179-95.

Andersen, Torben M (2001) “Welfare policies, labour taxation and international integration”, University of Aarhus, Denmark.

Andriamananjara, Soamiely (1999). "On the size and number of regional integration arrengements", Policy Research Working Paper 2117. The World Bank.

Andriamananjara, Soamiely (1999a) "Regionalism and incentives for multilateralism Office of Economics Working Paper, U.S. International Trade Commission. Washignton.
Ansaldi, Waldo (1990). Gobernabilidad y seguridad democrática. Comisión Sudamericana de Paz, Santiago de Chile.
Appelbaum, Richard and Henderson, Jeffrey (1995). "The hinge of history: Turbulence and transformation in the world economy", Competition & change, Vol. 1, number 1.
Arellanes Jiménez, Paulino Ernesto (2001). "El espacio político de la geopolítica en las relaciones internacionales contemporáneas: Fractura y ampliaciones territoriales y acuerdos comerciales", Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Trabajo presentado en el V Congreso de las Américas, Universidad de las Américas, Puebla. 20 de Octubre del 2001.
Arellano, David (2000) "Organizaciones y nuevo institucionalismo económico. ¿Hacia un nuevo dogma? Ciencias Administrativas, teoría y práctica. Año 2, No. 1, México. Páginas: 41-56.
Archibugi Daniele, Held david y Kohler Martin (1998). Remaining political community: Studies in cosmopolitan democracy. Stanford University Press, Stanford.
Argyres, Nicholas S.; Liebeskind, Julia Porter (1999). "Contractual commitments, bargaining power, and governance inseparability: incorporating history into transaction cost theory", Academy of Management Review, Vol. 24, No.1, 49-63.
Aronson, J. R. and Ott, A. F. (1991). "The growth of the public sector", in D. Greenaway, M. Bleaney and I. M. T. Stewart (eds) Companion to contemporary economic thought, London and New York: Routledge, pp. 523-46.
Attanasio, Orazio y Szélkely, Miguel. (1999a). "Introducción: la pobreza en la América Latina. Análisis basado en activos". El trimestre económico, Vol. LXVI (3), Núm. 263. Julio-Septiembre.
Attanasio, Orazio and Székely, Miguel (1999). "An asset-based approach to analysis of poverti in Latin America", Working Paper #R-376. Inter-American Devbelopment Bank. October.
Avishur, Arieh (2000). "A positive theory of privatization", Working paper, Ben-Gurion University, Beer-Sheva, Israel.
AyalaEspino, José (2001). "Políticas de estado y arreglos institucionales para el desarrollo de México". Revista Planeación y Desarrollo, Edición especial No. 8/9 Mayo 2001. Barcelona, España.
Ayala Espino, José Luis (1996). Mercado, elección pública e instituciones. Miguel Angel Porrúa, México.
Aziz Chaudry, Kiren (1993). "The myths of the market and the common history of late Developers", Politics and Society 21 (3, September 1993):246.
Backer, W. E. (1990). "Market networks and corporate behavior", American Journal of Sociology, 96: 589-625.
Baker, Andrew (1999). "Nébuleuse and the 'internationalization of the state' in the UK? The case Of HM Treasure and the Bank of England", Review of International Political Economy 6:1 Spring 1999: 79-100.
Ballester Marta, Livnat Joshua y Sinha Nisha (1999). "Labor costs and investments in human capital", Draft.
Banco Mundial (2000). Los indicadores del desarrollo mundial año 2000. Washington, D.C.
Banco Mundial (1997). Informe del Banco Mundial. Washington, D.c.
Banfield, E.G. (1958). The moral basis of a blackward society. Free Press, New York.
Barber, Benjamín R. (1998). "Mitos del mercado: por qué el mercado "libre" no lo es", Este País, número 93, diciembre de 1998.
Barber, B. (1984). Strong democracy: participatory politics for a new age. Berkeley, CA:

University of California Press.
Bardham, P. Y Ghatak, M. “Desigualdad, mercados imperfectos y problemas de acción colectiva”. http://www.haas.berkely.edu/groups/iber/wps/cider/c99-108.pdf.
Barel Y. (1989). “Le paradoxe et le systéme. Essai sur le fantastique social. Presses Universitaires de Grenoble. Grenoble. 1989
Barnard, Chester (1938). The functions of the executive. Cambridge: Harvard University Press (Fifteenth printing, 1962).
Bartlett, David and Hunter, Wendy (1997). “Market structures, political institutions, and Democratization: the Latin American and east European experiences”, Review of International Political Economy 4:1 Spring 87-126.
Barro, Robert J. “Inequality, growth, and investment” National Bureau of Economic Research, Inc. Working paper 7038.
Barro, Robert J. (1998). “The IMF doesn´t put out fires, it starts them”, Business Week, December 7.
Bauman, Zygmunt (1998). Globalization: The human consequences. Polity Press. Cambridge.
Bauman, Zygmunt (1993). Modernity and ambivalence. Cambridge: Polity Press.
Baumol, William J. (1993). Welfare economics and the theory of the state”. Aldershot, England:Gregg Revivals.
Baynes, K. (1995). “Democracy and the Rechtsstaat: Haberma’s Faktizitat und Geltung”, en S.K. White (ed) The Cambridge companion to Habermas, Cambridge: Cambridge University Press.
Bebbington, Jan (2000) “Sustainable development: a review of the international development Business and accounting literature”, Working paper 00-17, Aberdeen Papers in Accountacy, Finance & Management. University of Aberdeen.
Bebchuk, Lucian Arye y Roe Mark J. (1999). “A theory of path dependence in corporate ownership and governance”, Stanford Law Review, Volume 52, Number 1, November.
Belliveau, M., O'Reilly, C., & Wade, J. (1996)."Social capital at the top: Effects of social similarity and status on CEO compensation" Academy of Management Journal, 39: 1568 -1593.
Benitez Zenteno, Raúl (1998). “Descentralización y participación ciudadana en la política de población”, Este País, número 93, diciembre.
Berglöf, Erick and Von Thadden, Ernst-Ludwig (1999). "The changing corporate governance paradigm: Implications for transition and developing countries", Départmen d'Économétrie et d'Économie Politique, Universite de Lausanne.
Bernhardt, Dan and Dvoracek, Vladimir (1999). "Why do multinationals in poor countries pay high wages?, Office of Research Working Paper Number 99-0113, University of Illinois at Urbana -Champaign.
Berruga Filloy, Enrique (1997). "Globalismo y fragmentación", Nexos, No. 239, Noviembre.
Birchfield, Vicki (1999). “Contesting the hegemony of market ideology: Gramsci’s ‘good sense’ and Polanyi´s ‘double movement’. Review of International Political Economy 6:1 Spring 1999: 27-54.
Bivo, Itsvan (1946) “The distress of East European small States” in Karoly Nagy, Ed., (1991), Democracy, revolution, self-determination. Boulder, CO: Social Science Monographs, 13-42.
Bodin, J. (1576). On sovereignty. Ed. J.H. Franklin Cambridge: Cambridge University Press.
Boisier, Sergio (1990) “La descentralización: un tema difuso y confuso”, ILPES (Santiago de Chile), Serie Ensayos, Documento 90/05.
Boisier, Sergio (1988). “Palimsesto de las regiones como espacios socialmente construidos”, ILPES. Documento 88/02. Serie ensayos. Santiago de Chile.

Boisier, S. (1987). “Decentralization and regional development in Latin America Today”, CEPAL Review (31): 133-44.
Bonaglia, Federico; Braga de Macedo, Jorge y Bussolo, Maurizio (2001). “How Globalisation improves governance”, OECD Development Centre, September 2001.
Borja, Rodrigo (1997). Enciclopedia de la política". Fondo de Cultura Económica, México, pág.455.
Borrus, M. And Zysman, J. (1997) "Globalization with borders: The rise of Wintelism as the future of global competition", Industry and innovation, 1997, 141-66.
Boudreau, Marie-Claude; Loch, Karen D.; Robey, Daniel and Straund Detmar (1998). ”Going Global: using information technology to advance the competitiveness of the virtual transnational Organization”, Academy of Management Executive, 1998, Vol. 12, No. 4.
Bourdeau, Pierre (1998). “The essence of neoliberalism”, Le Monde. December.
Brandt, Willy (1980). North-South: A programme for survival, Cambridge, MA: MIT Press.
Brada, Josef C., (1996). Privatization is transition--or is it?, Journal of economic Perspectives 10, 67-86.
Bresser_Pereira, Luis Carlos (2001). “Ciudadanía y res pública: La aparición de los derechos republicanos”, Revista Edición Especial No. 8/9 Mayo 2001. http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/revista8_9/docs/revis8_01.htm.
Bresser, Luis C. (1997). “Da administracao publica burocrática á gerencial”, paper Presentado al Seminario “A Reforma do Estado Na América Latina e no Caribe”, Brasilia, 16-17 mayo 1996.
Bretschger, Lucas (1999). "Growth theory and sustainable development", Edward Elgar Publishing. UK.
Brown, Nicholas (1997). “ ‘A sense of number and reality’: economics and government in Australia, Economy and Society, Volume 26, Number 2, may 1997: 233-256.
Bruyn, Severyn T. (1999). “The moral economy”. Review of Social Economy Vol. LVII No. 1 March.
Brunetti Aymo, Kisunko Gregory, and Weder Beatrice (1998a). "How business see government", Discussion Paper 33, International Finance Corporation, Washington.
Brunetti Aymo, Kisunko Gregory, and Weder Beatrice (1998b). "How firms in 72 countries rate their institucional environment", WWZ-Discussion paper Nr. 9811, Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum der Universität Basel.
Brunneti Aymo, Kisunko Gregory, and Weder Beatrice (1999c). “Credibility of rules and economic growth: Evidence from a worldwide survey of the private sector”, The World Bank Economic Review, Vol. 12, No. 3, 353-84.
Brzezinski, Zbigniew. El gran tablero mundial: la supremacía de EU y sus imperativos geoestratégicos.
Buchanan, J.M. (1991). Constitutional Economics, Oxford, Basil Blackwell.
Buchanan, J.M. and Tullock, G. (1962). The calculus of consent: logical foundation of constitutional Democracy, Ann Arbor, University of Michigan Press.
Bull, Hendley (1977) The Anarchical society: A study of order in World politics. New York: Columbia University Press.
Burgers, Willen P.; Cromartie, Jane S. y Davis J. Ronnie. (1998). “Cooperative competition in Global industries: the strategic dimension. The International Trade Journal, Volume XII, No. 4, Winter.
Burt, R. S. (1992). “Structural holes: The social structure of competition”, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Business Week (2000). 10 de julio de 2000.
Business Week (2000). “The fight against latin poverty”, Mayo 1, número 3663-993, páginas 48 -52.

Business Week (1999). "Special Report, Partners." 25 de Octubre.
Cabanellas, Guillermo (1979). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. 12ª. Edición. Buenos Aires.
Cachón, Lorenzo (1996) “Mandamientos (10) para el desarrollo local desde las experiencias europeas para el desarrollo local”, ponencia en el Seminario Nacional Políticas de empleo y gestión municipal, Universidad Católica del Uruguay-Agencia Española de Cooperación Internacional, Montevideo, 10 al 12 de septiembre.
Calás B. Martha and Smircich, Linda (1999). "Past postmodernism? Reflexions and tentative directions", Academy of Management Review 1999, Vol. 24, No. 4, 649-671.
Calderón G., Fernando (2000). “Potenciar la sociedad para fortalecer el desarrollo”, Paper No. 25, Biblioteca de Ideas, Instituto Internacional de Gobernabilidad. http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/paper/p280700bm.htm
Camdensus, Michel (1996). “Vivir en la ciudad global”, en Capítulos del SELA No. 45. Caracas, Enero-marzo de 1996.
Camou, Antonio (1998). "Gobernabilidad y democracia en América Latina", Nexos 241, Enero de 1998, Páginas 105-111.
Camou, Antonio (1995). "Una mirada desde el espejo latinoamericano", Coyuntura, 1 de junio, México, D.F.
Castro J, (2000). “Crisis y gobernabilidad: perspectivas para las reformas de la segunda generación”, Contribuciones, No. 4, páginas 7-20.
Castro, Fidel (1989). Discurso ante los restos de los combatientes cubanos caídos en Angola. Diario Granma. La Habana, 8 de diciembre de 1989.
Carbonara, Emanuela (2000). “Corruption and descentralisation”. Paper. Dipartimento di Scienze Economiche, Universitá di Bologna.
Carnoy, M. (1984) The state and political theory. Princeton: Princeton University Press.
Castells, Manuel (1996). The information age: Economy, society and culture. The rise of the network society, Vol. I, Blackwell Publishers, Cambridge, Massachusetts.
Castells, M. and J. Borja (1988). “Urbanización y democracia local en América Latina”, in M.Castells,, J. Borja, R. Núñez, J. Silva, S. Morales and R. Donoso, La ciudad de la democracia, pp. 7-75.Santiago de Chile: Vector.
Cason, Jim y Brooks, David (1999). "Los 400 más ricos de EU elevaron su capital 177% en una década", La Jornada, Domingo 26 de Septiembre de 1999, Pág. 65.
Castañeda, Jorge G. (1999). “El salinismo”, Nexos 259, julio.
Cavarozzi, Marcelo (1992a). "Consolidación de la democracia y reconstrucción de la economía en América Latina", Revista de la Universidad Autónoma de México, No. 497, junio, pág. 15.
Cavarozzi, M (1992b). “Beyond transitions to democracy in Latin America”. Journal of Latin American Stduies. Vol. 24 (May, 1992), número 2, p.665-684.
Centro Tepoztlán, AC (1999). "Pobreza, exclusión y estrategias de desarrollo", Revista Este País, número 99, junio.
Cerny, P. (1998). “Neomedievalism, civil war and the new security dilemma: globalisation as durable disorder” Civil Wars Vol. 1, No. 1 pp. 36-64.
Cerrillo, A. (2001). “La cooperación al desarrollo y el fomento de la gobernabilidad”. Instituciones y Desarrollo, 8-9, pp. 543-576. http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/revista/revista8_9/docs/revis8_17.htm
Cervantes Galván, Edilberto (1997). "Globalización y procesos regionales", Nexos 239, Noviembre
Chang, Howard F. (1999). “A liberal theory of social welfare: fairness, utility, and the Pareto principle”, Institute for Law and Economics, Working Paper 272. Institute for Law and Economics. December.

Chang, H. J. (1994). The political economy of industrial policy, New York: St Martin's Press.
Chua, Amy L. (1998). “markets, democracy, and ethnicity: toward a new paradigm for law and development”, The Yale Law Journal, Vol. 108, Number 1, October
Chomsky, Noam (2001) “Por qué el Foro Social Mundial?”, http://www.nodo50.net/hijos-madrid/articulos/chomsky_foro.html
Chomsky, Noam “Cruda mirada a Latinoamérica: No hay voluntad de ayudar al Tercer Mundo. Mensaje distribuido por el servidor de correo de la UCV, Red de Jóvenes por la Humanidad y contra el Neoliberalismo en internet.
Chonchol, Jacques (2001) “La cara oculta de la globalización”, http://www.nodo50.net/hijos-madrid/documentos/chonchol.html.
Clegg, S. (1990). Modern organizations. Londres. Sage.
Coase, R. (1937). The nature of the firm. Economica, 4: 386-405
Coase, R. H. (1960). "The problem of social cost". Journal of Law and Economics, 3: 1-44.
Coase, R.H. (1988). The nature of the firm: Influence. Journal of law, Economics and Organization, 4: 33-47.
Coase, R.H. (1991). The nature of the firm (First published in 1937). In O.E. Williamson & S. G.Winter (Eds.), The nature of the firm: origins, evolution, and development: 18-33. New York:Oxford University Press.
Coffe, C. John (1999a). "Privatización and coprorate governance: the lessons from securities market failure", paper in progress.
Coffe, C. John, Jr. (1999b). “The future as History: The prospects for global convergence in Corporate governance and its implications”. Northwestern University Law Review, Volume 93, Number 3, Spring.
Coffe, J. (1998). “The future as history: The prospects for global convergence in corporate Governance and its implications”. Working Paper, Columbia Law School.
Cohen, E. (1995) ¿Los estados son más soberanos en el orden económico?. Problémes Economiques. Paris.
Cohen, A. (ed.) (1982). Belonging: identity and social organization in British Rural Cultures. Manchester University Press, Manchester, UK.
Colasse, Bernard y Standish, Peter (1998) “State versus market: Contending interests in the struggle to control French accounting standardisation”, Journal of Management and Governance 2: 107-147. Netherlands.
Coleman, J. S. (1990) “Foundations of social theory”, Cambridge: Harvard University Press.
Colemán, J.S. (1993) Properties of rational organizations. In S. Lindenberg & H. Schreuder (Eds.), Interdisciplinary perspectives on organization studies :79-90. Oxford, England: Pergamon Press.
Colmenares Páramo, (1999). “Retos del federalismo mexicano”. Comercio exterior, Vol. 49, Núm. 5, mayo de 1999.
Commons, John R. (1932). “The problems of correlating law, economics, and Ethics,” Wisconsin Law Review, 8: 3-26.
Cooper Richard N. (1968) The economics of interdependence: Economic policy in the Atlantic Community. New York: McGraw Hill, Chapter 4 p. 173.
Coppedge, Michael (2000) Latin American Parties: Political darwinism in the lost decade”, University of Notre Dame, Notre Dame, IN. http://www.nd.edu/~mcoppedg/crd/ifdssept.htm.
Coppedge, M. (1997). “El concepto de gobernabilidad: modelos positivos y negativos” en Vega, E. (ed.). Ecuador: Un problema de gobernabilidad. Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES). Quito, Ecuador.
Córdova, Arnaldo (1998). “Importancia de la gobernabilidad”, La Jornada, 12 de septiembre.
Costafreda Andrea (2001,a). “Todo cifras: Indicadores de governance agregados. Seis

dimensiones de una misma realidad", Instituto Internacional de Gobernabilidad. Magazine no. 23, 6 de noviembre del 2001.
Costafreda Andrea (2001). "Las distintas dimensiones del desarrollo humano: tensiones generales y metas compartidas. Entrevista a Hernándeo Gómez Buendía", DHIAL Magazine no, 15. Instituto Internacional de Gobernabilidad. http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/dhial/dhial15/dhial15_02.htm
Costafreda, Andrea (2000). "Las crisis políticas en América Latina de los noventa: Causas y efectos", Biblioteca de Ideas, Magazine 13, Instituto Internacional de Gobernabilidad. http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/dhial13_01.htm.
Cox, Ronald W. (1995). "Corporate coalitions and industrial restructuring: explaining regional trade Agreements", Competition and change, 1995 Vol. 1.
Cox, R. (1994) "Global restructuring: making sense of the changing international political economy", in R. Stubbs and G. Underhill, Political economy and the changing global order, London: McMillan, 45-59.
Crouch, C. And Streeck, W. (1997). "Introduction: the future of capitalist diversity" in C. Crouch and W. Streeck (eds.) Political Economy of Modern Capitalism: Mapping convergence and diversity (London: Sage).
Cruz, César Nicandro (2001). "Gobernabilidad y 'governance' democráticas: El confuso y no siempre evidente vínculo conceptual e institucional", Instituto Internacionald de Gobernabilidad, Magazine No. 23, 6 de Noviembre del 2001. http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/dhial/dhial23/dhial23_05.htm
Curcio Gutiérrez, Leonardo (1996). Gobernabilidad en tiempos de crisis: la experiencia mexicana, en Sociológica (Año 11, No. 30, enero-abril), México
Dahan, Momi and Gaviria, Alejandro (2000). "Sibling correlations and intergenerational mobility in Latin America". Paper. April.
D'souza Juliet and Megginson, William (1999). "The financial and operating performance of Privatized firms during the 1990s", The Journal of Finance, Vol. LIV, No. 4, August 1999.
De Allesi (1980). "The economics of property rights: A review of the evidence", in Research in Law and Economics 2, R.O. Zerbe (ed), Greenwich, Conn., JAI: 1-47.
De la Madrid Hurtado, Miguel (1996) "Soberanía nacional y mundialización", Este País, No. 65, México, pp.35-42.
De Quiroga, Giancarla (1999). "Gobernabilidad y participación ciudadana", en Afers Internacionals (No. 47), Fundación Cidob, Barcelona.
De Swaan Abram (1997). "The receding prospects for transactional policy" Theory and Society. Vol. 26/4 August 1997, 561-575.
Del Alamo, Oscar (2001). "La jaula del poder; reflexiones sobre las sociedades democráticas", Biblioteca de Ideas. Instituto Internacional del gobernabilidad. http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/resenas/tema1/resena0119.htm.
Deal, T. And Kennedy, A. (1988) Corporate cultures, London: Penguin.
Deckker Paul y Van den Broek Andries 1998). "Civil society in comparative perspective: involvement in voluntary associations in North America and Western Europe". Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 9, No. I.
Delgado, Orlando (1999). "El Banco Mundial y los pobres", La Jornada, sábado 2 de octubre, pág. 14.
Deneulin, Séverine (1999). "Survival thresholds and poverty traps", Discusión Paper no. 9927, IRES, Lovain-la-Neuve, Belgique.
DHIAL (2001). "Los desafíos del gobierno local en América Latina: Una nota en apoyo a la Declaración de Baeza. Documento confeccionado con motivo del V Congreso Iberoamericano de Municipalistas", Instituto Internacional de Gobernabilidad. http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/dhial/dhial20/dhial20_2.htm.

Diamond, L. (1992). “Economic development and democracy reconsidered.” American Behavioral Scientist 35:450-4999.
Dollar David and Aart Kraay (2000) “Trade, growth, and poverty.” Manuscript, World Bank (October)
Donzelot, J. (1988). “The promotion of the social”, trans. G. Burchell, Economy and Society 17(3): 395-42.
Doremus, Paul N.; Keller, William W.; Pauly, Louis W. And Reich Simon. (1998). The myth of the global corporation. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Downs, A. (1967) Incide bureaucracy. Boston. Little, Brown & Co.
Dror, Yehezel (1995) “Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos en materia de formulación de políticas”, Documento presentado a la 12 Reunión de expertos del Programa de las Naciones Unidas en materia de Administración y Finanzas Públicas, Nueva York, 31 de julio a 11 de agosto de 1995
Dryzek, J.S. (1990). Discursive democracy: Politics, policy and political science, Cambridge: Cambridge University Press.
Dunning, John H. (1997). “Governments and the macro-organization of economic activity: an Historical and spatial perspective”, Review of International Political Economy 4:1 Spring, 42-86.
Duryea, Suzanne y Szélkely, Miguel (1998). “Labor markets in Latin America: a supply-side story”. Working Papers, Inter-American Development Bank.
Easterly, William (2000a) “Developing countries’ stagnation in spite of policy reform 1980 -1998.
Easterly, William (2000b) “How did highly indebted poor countries become highly indebted? reviewing two decades of debt relief”. Preliminary version for comments.World Bank.
Easterly, William (1999). “How did highly indebted por countries become highly indebted? The World Bank Development Research Group. Policy research workin paper 2225.
Echabarria Ariznabarreta, Koldo (2000). “Reivindicaciones de le reforma administrativa: significado y modelos conceptuales”, Revista del CLAD Reforma y Democracia, No 18, Octubre del 2000.
Ellerman, David P. (1999) “Global institutions: transforming international development agencies Into learning organizations) The aAcademy of Management Executive, Feb. 1999 v 13 i1 p 25 (1).
Enders, Walter and Hoover, Gary A. (2001). “The effects of robust growth on poverty: A Nonlinear analysis”, Working Paper No. 01-02-01, University of Alabama.
Enríquez V., Alberto (2001). “El desarrollo regional/local”, FUNDE. Documento de trabajo. San Salvador. Septiembre del 2001.
Escorcia, Germán (2000). “Tecnología y educación: propósito planetario no excluyente”, Ponencia presentada en el Seminario: repensar a México de cara al 2000. Fundación Carlos Pereyra de Democracia Social.
Evans P. (1998). Globalización contra-hegemónica: Las redes transnacionales como Herramientas. Lucha contra la marginación. Contemporary Sociology, January, 2000.
Faletto, Enzo (1995). “Sociedad y política en los desafíos del futuro”, en Una mirada hacia el Siglo XXI. Caracas, SELA-UNESCO-Nueva Sociedad, pp.184-186.
Fazio, Carlos (2000). “la solidaridad en los tiempos del neoliberalismo”, La Jornada, Masiosare, página 12.
Feenstra, Robert C. and Gordon H. Hanson (1999). “The impact of outsourcing and high-Technology capital on wages: estimates for the United States, 1979-1990.” Quarterly Journal of economics 114 (august): 907-40.
Feenstra, Robert and Gordon Hanson (1996). “Foreign investment, outsourcing and relative Wages”, in R. Feenstra, G. Grossman and D. Irwin (eds), Political Economy of Trade

Policy: Essays in Honor of Jagdish Bhagwati, Cambridge: MIT Press.
Feldman, E. (2001). “The emergence of a new governance systemin Argentina: Institutional change, politics and economics”. Oh.D. Dissertation, Department of Political Science, University of North Carolina, 2001.
Feldman, Eduardo (2001). “La evolución de la reflexión politológica sobre la democratización: del cambio de régimen a la arquitectura institucional de governance y la gobernabilidad”, Revista, Edición especial No. 8/9 Mayo 2001. http://www.iigov/pnud/bibliote/revista/revista8_9/docs/revis8_11.htm.
Feng, Yi. “Democracy, political stability and economic growth”, British Journal of Political Science, 27 (3), July 1997, 391-418.
Fernández Colón , Gustavo (2001). “La caída del capital global”, El capitalismo global en Terapia intensiva, http://www.rccci.net/globalizacion/2001/fg186.htm.
Fernández Santillán, José (1999). “Globalización y Estado nacional”, Este País, número 104, Noviembre.
Fernández Santillán, José (1997) “México: hacia una gobernabilidad diferente”, Este País, Número 80, Noviembre de 1997.
Ferreira, Francisco (199). “Economic transition and the distribution of income and wealth”, Economics of Transition, Vol. 7 (2), 377-410.
Finot, Ivan (2000). “Elementos para una reorientación de las políticas de descentralización y Participación en América Latina”, Documento del CLAD. http://www.clad.org.ve/rev15/Finot.html.
Flores, Fernando (1998). “Los emprendedores y la izquierda”, Nexos 243, marzo, página 67.
Forster, John (1999). “The creation, maintenance and governance of public goods and free goods”, Public Management, Vol. 1, issue 3, 1999, 313-327.
Forrester, J. (1989). Planning in the face of power, Berkeley, CA: University of California Press.
Franck, Thomas M. (1999). “Democracy, legitimacy and the rule of law: linkages”, mimeo.
Frankel, T. (1995,Fall). Foreword. Syposium: A recipe for effecting institutional changes to achieve privatization. Boston University International Law Journal, 13, 295-311.
Franko, P.M. (1996). “The economics of security,” Hemisphere 7/2 p. 17.
Friedman, John (1992). Empowerment: The politics of alternative development. Blackwell, Cambridge, Mass.
Friedman, Jonathan (1994). Cultural identity & global process, London: Sage.
Friedman, Thomas L. (1999). The lexus and the olive tree, New York: Farrar Straus Giroux, 1999, 7-8.
Frijters, Paul and Tieman, Alexander F. (1999). “The role and evolution of central authorities”, Discussion paper, Tinbergen Institute.
Fukuyama, Francis (1999a). “Reconsiderando el fin de la historia”, Milenio, No. 112, Octubre 25
Fukuyama, Francis (1999b). The great disruption: Human nature and the reconstitution of the social order. The Free Press, Nueva York.
Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press.
Fukuyama, Francis (1990). ¿El fin de la historia?. Revista Estudios Políticos. Número 37, página 9.
Galal, Ahmed et al (1992). "Welfare consequences of selling public enterprises", The World Bank, Washington, D.C.
Galaz, Lourdes. (2000). “Pobreza globalizada”, La Jornada, 12 de abril, página 9.
Galor, Oded y Moav, Omer (2000). “From physical to human capital accumulation: Inequality in the process of development”, The Mauris Falk Institute for Economic

Research in Israel, Jerusalem, July 2000
Galbraith, John Kenneth (1962). Economic development in perspective, Harvard University Press.
Gellner, Ernest (1983). Nations and nationalism. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Gerefi, Gary. (1996). “Global commodity chains: new forms of coordination and control among nations and firms in international industries”, Competition and Change, 1996. Vol. 4, pp. 427-439.
Gersbach, Hans (1999). “statemen, populists and the paradox of competence”. Paper work, Alfred-Institute, University of Heidelberg.
Giddens, Anthony (1999). Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras Vidas. Taurus, Madrid 2000.
Giddens (1990) The consequences of modernity. Stanfod University Press.
Giddens, A. (1984) The constitution of society. Los Angeles. University of California Press.
Gilbert, Evan and Michie, Jonathan (1997). "New classical macroeconomic theory and fiscal rules: some methodological problems", Contributions to Political Economy 16.
Gill, S. (1995). “Globalisation, market civilization, and disciplinary neoliberalism”, Millenium 24 (3): 399-423.
Glaeser, Edward L.; Laibson, David and Sacerdote Bruce (2000). “The economic approach to social capital”, Paper, Harvard University and NBER, May 18, 2000.
Glaeser, Edward L. And Jose A. Scheinkman (1996). "The transition to free markets: where to begin privatization, Journal of Comparative economics 22, 23-42.
Glen D. Jack, Sumlinski A. Mariusz (1998). "Trends in private investment in developing countries", International Finance Corporation, Discussion paper 34. The World Bank, Washington.
Gobierno Digital (1997). "El gobierno debe ser líder en la economía digital", 1 de Julio de 1997, México, D.F.
Gómez, José y Loyola Rafael (1999) Alivio a la pobreza. Análisis del programa a la educación, salud y alimentación dentro de la política social. Ciesas: México Progresa, 1999.
González Amador, Roberto (2000). “Megafusiones, poder de mercado”, la Jornada, mayo 5.
González Amador, Roberto; Cason, Jim y Brooks, David. (2000). “México, segundo privatizador de AL en la década de los 90: BM”, La Jornada, 16 de abril, página 18.
González Casanova, Pablo (1997) “Globalidad, neoliberalismo y democracia” en González Casanova y Saxe-Fernández (coordinadores) El mundo actual: Situación y alternativas. UNAM-CEIICH, México.
Gorz, André. (1998). Miserias del presente, riqueza de lo posible. Paidós, Argentina, página 23.
Goulet, Denis (2000). “Changing development debates under globalization”, Working paper # 276. The Hellen Kellog Institute for International Studies.
Goulet, Denis (1999). “¿Qué es el desarrollo después del modernismo?” Revista de Ciencias Sociales, Nueva Época 6 (Enero de 1999): 42-62.
Graff, Michael and Karmann, Alexander (2001). “Does financial activity cause economic growth?”, Dresden Discussion Paper Series in Economics, Nr. 1/01 Technische Universität Dresden.
Graham, E. M. (1993) “Beyond borders: on the globalization of business. Harvard International Review, Summer, pp.8-11.
Grant, Wyn (1998). "Globalization, comparative political economy and the economic policies of the Blair Government", CSGR Working Paper No. 08/98, June.
Gray, John (1999). “Falso amanecer”. Nexos 260, agosto.
Grenada, Miguel Angel (1987). Antología de Nicolás de Maquiavelo. Barcelona, Ediciones

Península, página 202.
Gretschmann, K. (1996) La formulación de la política macroeconómica y la lógica de la Integración. Documento para el curso Integración Regional Europea. Marzo
Grubb, M. , M. Koch, A. Munson, F. Sullivan and K. Thomson (1993), The Earth Summit Agreements: A guide and asssesment. London : Earthscan Publications.
Guerra López, Rodrigo (1999). "Michael Novak: Nihilimso y sociedad libre", Nexos 263, Noviembre, páginas 67-70.
Guerreo Gutiérrez, Eduardo (1999). "Inestabilidad y crimen en el nuevo régimen", Nexos 262, Octubre.
Gylfason, Thorvaldur; Herbertsson, Tryggvi Thor; Zoega, Gylfi. (1999). "Ownership and growth", paper unpublished.
Habermas, Jürgen (1998). "Nuestro breve siglo", Nexos 248, Agosto.
Habermas, J. (1992). Between facts and norms. Cambridge, MA: The MIT Press. (Primera Edición en alemán, 1992).
Habermas, J. (1984) The theory of communicative action, volume 1: Reason and the rationalization of society, Boston, MA: Beacon Press.
Habermas, J. (1974) Legitimation crisis. Boston: Beacon Press.
Hague, Rod; Harrop, Martin & Breslin, Shaun (1998). Comparative government and politics. Macmillan, Londres.
Hahn W. Robert (1998). "Government Analysis of the benefits and costs of regulation" Journal of Economic Perspectives, Volume 12, Number 4, fall 1998, pages 201-210.
Halebsky, S and Harris Eds. (1995). Capital, power and inequality in Latin America. Boulder, Colo.: Westerview
Hall, P. (1997) "The political economy of adjustment in Germany", in F. Naschold and D Soskice (eds) WSB Jahrburch 1997 (Berlin:Sigma)
Hall, P. (1998) "Organized market economies and unemployment in Europe: Is it finally time to Accept liberal orthodoxy?, paper pressented at the Eleven International Conference of Europeanists, Baltimore.
Hallyday, Fred (1997). "Gobernabilidad global: Perspectivas y problemas". Revista Internacional de Filosofía Política (No, 9), Madrid
Hamel G. And Prahalad C. K. (1994). Competing for the future, Boston, MA: Harvard Business
School Press.
Hannan, M.T., & Freeman, J. (1977). The population ecology of organizations. American Journal of Sociology, 82: 929-964.
Hannan, M.T., & Freeman, J. (1984) Organizational ecology. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Hanson, Gordon and Ann Harrison (1999) "Trade liberalization and wage inequaility in México."
Industrial and Labor Relations Review 52 (January): 271-88.
Harper, S. (1989). The British rural community: an overview of perspectives. Journal of Rural Studies 5, 161-184.
Harris, Milton and Raviv, Artur (1999). "Organization design" Draft paper.
Harris Richard (1997) "Capital, inequality and injustice in Latin América", International Journal of Comparative Sociology, June 1997 Vol. 38, November 1-2: 87-
Hart Oliver and Moore John (1999). "On the design of hierrachies: coordination versus specialization". Unpublished research paper
Hart, Oliver, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny, (1997)., The proper scope of governnment:Theory and an application to prisons, Quarterly Journal of Economics 112, 1127-1161.

Hayek F.A.V. (1990) Etrevista en el Mercurio, 19/04/81. Santiago de Chile. Citado en Franz Hinckelammert (1990), Crítica a la razón utópica. San José, Editorial, 2da. Edición, pág. 88.
Hayek F.A.V. (1980) "Un diálogo con el Profesor Hayek, en Diego Pizano S. (comp.) "Algunos Creadores del pensamiento contemporáneo", México, FCE, 1980 Pág. 37.
Hayek, F.A. (1945). The use of knowledge in society. American Economic review, 35: 519 -530.
Held, David (2000) "¿Hay que regular la globalización? Claves de la razón práctica, No. 99, enero del 2000.
Held, David (1995). "Democracy and the Global Order", Standford, Calif.: Standford University Press.
Held D. (1991). "Democracy, the natio-state and the global system", en D. Held (ed.), Political theory today, Polity Press.
Helliwell, J.F., Putnam, R.D. (1995). Economic growth and social capital in Italy, Eastern Economic Journal 21/3, 295-307.
Henderson, Jeffrey (1996). "Globalization and forms of capitalism: conceptualisations and the search for synergies", Competition & Change, Vol. 1, Number 4, pp.403-410.
Henisz, Witold J. (2000) "The institutional environment for economic growth". In Henisz, Witold. The institutional environment for international investment: Safeguarding against state sector opportunism and opportunistic use of the state.
Henisz, Witold J. (1999). "The institutions and governance of economic reform", Public Management, Vol. 1, Issue 3, 1999, 349-371.
Herings, Jean-Jacques; Mauleon, Ana and Vannetelbosch, Vincent J. (2000) "Social rationalizability", Tilburg University.
Hermalin, E. Benjamin (1999). "Economics & corporate culture", Draft. Cornell University and University of California, Berkeley.
Hindess, Barry (1997). "Politics and governmentality", Economy and Society, Volume 26 Number 2, May 257-272.
Hirst, Paul (2000). "Democeacy, globalization and governance" Paper for IPSA Congress Quebec City 2 August.
Hirst, P. And G. Thompson. (1996). Globalization in question. Cambridge: Polity Press.
Hitt et al. (1997); Roth and A.J. Morrison, "Implementing Global Strategy: Characteristics of Global Subsidiary mandates", Journal of International Busines Studies, 23 (1992): 715-735; C.A. Bartlet and S. Ghoshal, Managing across borders: The transnational solution (Boston: Harvard Business School Press, 1989).
Hitt, Michael A., Keats Barbara W., and DeMarie Samuel M. (1998). "Navigating in the new competitive landscape: Building strategic flexibility and competitive advantage in the 21st century", Academy of Management Executive, Vol. 12, No. 4.
Hobbes, T. (1651). Leviathan ed. Oakeshott Oxford Basil Blackwell.
Hoff et al. (1993). "Introducción". In: Hoff, Braverman, Stiglitz (Eds.): The economics of rural organization: Theory, practice and policy. A world Bank Book. Oxford University Press, pp.1-31.
Holmstrom, Bengt. (1999). "The firm as subeconomy", The journal of law, economics and organization", V15, N1.74-102.
Honnet, Axel (1999). "Concepciones de la sociedad civil", Este País, número 102, septiembre.
Hunter, I. (1994). Rethinking the school: Subjectivity, bureaucracy, criticism. Sydney: Allen & Unwin.
Huntington, Samuel P. (1999). "La suoerpotencia solitaria", Este País, número 98, mayo.
Hungtington, Samuel P. (1993) "¿El choque de las civilizaciones?", Revista Foreign Affairs,

1993.
Ihering, R.V. (1987) A Luta pelo direito. Río de Janeiro: Editoria Liber Juris (Primera edición en Alemán, 1872).
Ireland, R. Duane and Hitt Michael A. (199). "Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century:: The role of strategic leadership", Academy of Management Executive, Vol. 13, No.1.
Ivanova, Antonina (2000) "Globalización y convergencia", Ciencias Administrativas, teoría y Praxis, Año 2, No. 1, Junio del 2000, México, páginas 105-128.
Jalife-Rahme (1999). ¿Economía global o unipolar?, El Financiero, 20 de marzo.
Jaspers, Karl (1965). "Origen y meta de la historia". Editorial Revista de Occidente, Madrid, páginas 94-95.
Jiménez Lazcano (2000). "Integración o desintegración de América Latina", Macroeconomía, Año 7, Num.83.
Jodha, N.S. (1988). "Population growth and common property respurces: Microlevel evidence from India," in Proceedings of a United Nations Expert Group Meeting on consequences of rapid population growth in less developed countries, August 23-26, Popultaion Division, IESA, United Nations, New York.
Jones, L. Steven et al. (1999). "Share issue privatizations as financial means to political and economic ends", Journal of Financial Economics 53 (1999) 217-253.
Johnson, Chalmers (2000). Blowback. The costs and consequences of American Empire. Metropolitan Books.
Joyce, Paul (1998). "Management and innovation in the public services", Srategy Change 7, 19-30.
Ju, Jiandong (2000). "The measurement of welfare", Paper, Department of Economics, University of Oklahoma.
Jütting, Johannes (1999). Strengthening social security in rural areas of developing countries. ZEF Discussions papers on development policy. Zentrumfür Entwicklungsforschung, Universität Bonn.
Kaiser, André (1997). "Types of democracy. From classical to new institutionalism", Journal of Theorethical Politics 9(4): 419-444.
Kali, Raja (1999). "Business groups, the financial market and economic development", Department of Economics, University of Arkansas.
Kampto, Maurice (1997) "Reafirming public-service values and professionalism". International Review of Administrative Sciences, Vol. 63 (3), Sept 97, 295.
Kaplow, Louis and Shavell Steven (2000) "Principles of fairness versus human welfare: on the evaluation of legal policy", Discussion Paper No. 277, Harvard Law School, Cambridge, Ma.
Karl, T. (1990). "Dilemmas of democratization in Latin America". Comparative Politics. Vol. 23 (October,1990), número 1, p. 1-21.
Karl, T. And P. Schmitter (1991). "Modes of transition in Latin America, Southern and Easter Europe". International Social Science Journal. Número 128 (Mayo 1991), p. 269 -284.
Kaufmann, Kraay and Zoido-Lobatón (1999) "Governance Matters", World Bank.
Kayateki, Serap A.; Ruccio, David F. (1998). "Global fragments: subjectivity and class politics in discourses of globalization", Economy and Society, Volume 27, number 1, February , 74 -96.
Keohane, Robert O., and Nye, Joseph S. Jr. (2001) "Governance in a globalizing world," In Nye,Joseph S. Jr., ed., Governance in a globaling world (Washington: Brrokings Institution).
Keohane, Robert O., and Nye, Joseph S. Jr. (2000) "The Club model of multilateral

cooperation and the World Trade Organization: Problems of democratic legitimacy", Revised version. John F. Kennedy School of Government, Harvard University, June 2000.
Khun, T (1971) La estructura de las revoluciones científicas. México. FCE.
Kilson, Martin and Cohen, Mitchel (1999). "Introduction to Africa today: crisis and change", Dissent, 293, 295 (Summer).
Klein, B. (1993). "Contracts and incentives: the role of contractual terms in assuring performance", In L. Werin & H. Wijkander (Eds.), Contract economics: 149-172. Cambridge, MA: Blackwell.
Klitgaard, Robert (1988), Controlling corruption, Berkeley and London: University of California Press, 1988
Knell, Markus (1999). "Social comparisons, inequality, and growth", Journal of Institutional aAnd Theorethical Economics, Vol. 155, No. 4, December, páginas 664-695.
König, Klaus (1998). "Three worlds of public administration modernization", International Journal of Organization Theory and Behavior, 1(4), 481-520.
Kooiman, J. (1993). Modern governance: new government-society interactions. London; Newbury Park, Calif.: Sage Publications.
Korten, C. David. (1995). When corporations rule the world. West Hartford, CT: Kumarian Press.
Kranton, R. (1996) "reciprocal exchange: a selfsustaining system," American Economic review, 86, 830-51.
Krueger, Anne O. (1999). "Trade creation and trade diversion under Nafta", NBER Working Paper Series. National Bureau of Economic Research.
Krugman, P. (1995). "Duth Tulips and emerging markets", Foreign Affairs, núm. 4, julio -agosto de 19995.
Kymlicka, Will (2000) "Federalism and Secesión: At home and abroad", Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Vol. XIII, No. 2 (July 2000), páginas 207-224.
Laïdi, Zaki (2000). "El desafío de la hipermundialización", Nexos No. 268, abril.
La Jornada (1999). "Editorial", diciembre 4 de 1999.
Lal, Deepak y Myint Hla (1996). The political economy of poverty, equity and growth: a comparative study. Oxford, Clarendon Press.
La Porta, R., López-de Silanes, F. (1997). "Benefits of privatization - Evidence from México. Private Sector. World Bank, Washington, June, pp. 21-24.
Larmour, Peter (1997). "Models of governance and public administration", International Review of Administrative Sciences, Vol. 63 (3) September 1977, 383-
Lasagna, Marcelo (1999). "La reforma política para el desarrollo institucional en América Latina". Barcelona. Instituto Internacional de Gobernabilidad, 1999.
Latapí Sarre, Pablo (1998). "Los caminos del México alternativo", Proceso 1155, 20 de diciembre.
Lawrence, Robert Z. (1996). Regionalismo, multilaterismo e integración profunda. Washington, DC: Brookings, 1996.
Leach, S., Stewart, J. and Walsh, K. (1994). The changing organization and management of local Government, Macmillan, London.
Leana, R. Carrie and Van Buren III, Harry (1999). "Organizational social capital and employment practices", Academy of Management Review, Vol. 24, No. 3, 538-555.
Lebret, L. J. And Moreux, R. (1942). Économie et humanisme, Numéro Spécial, Fevrier/Mars.
Lechner, Norbert (1999).
Lechner, Norbert (1995). Cultura política y gobernabilidad democrática. Instituto Federal Electoral, México. Mimeo.
Levy, B. and Spiller, P. eds (1996). Regulations, institutions and commitment: Comparative

studies of telecommunications. New York: Cambridge University Press.
Lavy, B. and Spiller, P. (1994). “The institutional foundations of regulatory commitment: A comparative analysis of teleccomunications regulation”, Journal of Law, economics and Organization, 10:1, 201-46.
Lindert, Peter H and Williamson, Jeffrey G. (2001) “Does globalization make the world more unequal?” NBER Working Paper no. 8228, April 2001.
Linz, J. y Stepan Al, (1996). "Toward consolidated democracies", en Journal of Democracy, Num. 2, April, p.22.
Lipset, S.M. (1979) “Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy.” American Political Science Review 53:69-105.
Livnat, Joshua y Sinha, Nisha (1999). “Labor costs and investments in human capital”,
Llorente, Bernarda (1999). "No bastan la democracia y el mercado; hace falta el Estado de Bienestar", Milenio, número 70, enero 4 de 1999.
Lockwood, Ben (1999). “Distrbutive politics and the benefits of decentralisation” University of Warwick and CEPR, August 1999.
López Valladares, Mirtha (2001). “Potencialidades del municipio para el desarrollo local en Venezuela”, Revista Vnezolana de Gerencia, Año 6, No. 15, 2001, 446-461.
Loury, G. (1977). “A dynamis theory of racial income differences”. In P. A. Wallace & A.M. LaMonde (Eds.), Women, minorities, and employment discrimination: 153-186. Lexington, MA: Lexington Books.
Lowenthal,F. Abraham (1999) “Relaciones Estados Unidos-América Latina al cambio del siglo:gestión de la agenda “interméstica”, Este País, número 99, junio.
Loza Otero, Nicolás (1997). “La transición en sus espejos”, Nexos 239, Noviembre, I-VIII.
Lucas, Robert (1990) “Why doesn´t capital flow from rich to poor countries?” American Economic Review 80 (May): 92-6.
Luhman, N. (1982). “The differentiation of society”. New York: Columbia University Press.
Luna, Sergio (2000) “Mexican economic integration: external achievements and internal challenges Part 1: views on globalization”, Review of the economic situation of México, Volume LXXVI Number 897, September 2000, pages 372-379.
Luxemburgo, Rosa (1977). Escrito políticos. Grijalbo, Barcelona, páginas 12-22.
Lynn, Laurence E.; Heinrich, Carolyn J. Hill, Carolyn J. “Studying governance and public management: Challenges and prospects”, Jopurnal of Public Administration and Theory. April 2000 v10 i2 p233.
Ma, Hao (2000). “Toward an advantage-based view of the firm”, Advances in Competitiveness Research, Vol. 8, No. 1, 2000, páginas 34-59.
Malvin, M.and Schlagenhauf. (1985). “A country risk index: Econometric formulation and an Aplication to México,” Economic Inquiry, 23, 601-619.
Marshall Martha, Wray Lyle, Epstein Paul, Grifel Stuart (1999). "21st century community focus:Better results by linking citizens, government, and performance measurement" Public Management; Volume 81, Issue 10, Nov. Washington.
Marx, Karl (1971-76). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Borrador 1857-1858. Ed. Siglo XXI, México 1971-1976.
May, Christopher (1997). “From international political economy to global political economy. The International Political Economy Yearbook Series: an assessment”, Political Geography, Vol. 16, No. 7, pp. 605-615.
Mayntz, R. (2000). “Nuevos desafíos de la teoría de ‘governance’”. Instituciones y Desarrollo, 7, pp. 35-52. http://www.iig/pnud/bibliote/revista/revista7/docs/mayntz.htm
Malkin, Elizabeth (2000). Backlash behind the anxiety over globalization”. Business Week, Number 3662-992, April 24, páginas 48-53.
Mandsbridge, Jane J. (1983) Beyon adversary democracy (New York, Basic Books, 1980;

Chicago, University of Chicago Press.
Márquez Ayala, David. (2000). “Globalización...¿Cuál?. La Jornada, mayo 5.
Marsiglia, Javier y Pintos, Graciela (2001). La construcción del desarrollo local/regional: Temas, actores y nuevas modalidades de intervención, en Cuadernos del CLAEH, No. 78 -79.
Mattos, Carlos de (1990). “La descentralización ¿Una nueva panacea para impulsar el desarrollo local?” Rev. Economía y Sociedad. No. 3, Santiago de Chile, pp. 165-178..
McFarlan, Warren F. (1999). “Working on non profit boards: Don´t assume the shoe fits”, Harvard Business Review, November-December, pp. 64-80.
McGrew, Anthony (1990). “A global society” in Stuart Hall, David Held, and Anthony McGrew, Modernity and its futures. Cambridge: Polity Press.
McGuirre, W. J. (1984). Search for the self: going beyond self-steem and the reactive self in R.A.Zucker, J. Aronof, & A.I. Rabin (Eds.), Personality and the prediction of behavior: 73 -120. New York: Academic Press.
Megginson, L.William and Netter M. Jeffry (1998). "From state to market: a survey of empirical studies on privatization", Paper presented at Global Equity Markets, University of Oklahoma.
Megginson, W., Nash, R and Randenborgh, M. (1994) “The financial and operating Performance of newly privatized firms: An international empirical analysis.” Journal of Finance, 49:2 pp 403-52.
Mehra, Ajay; Kilduff, Martin; Brass, Daniel J. (1998). “At the margins: A distinctiveness approach to the soacil identity and social networks of underrepresented groups”, Academy of Management Journal, 1998, Vol. 41, No. 4, 441-452.
Melucci, Alberto (1990). “Frontierland: collective actino between actors and systems”, Ponencia presentada en el XII Congreso Internacional de Sociología, Madrid, España, 9 al 13 de julio de1990.
Meredyth, Denise (1997). “Invoking citizenship: education, competence and social rights”, Economy and Society, Volumen 26, Number 2, May 1997: 273-295.
Miller, David (1998). Sobre la nacionalidad. Autodeterminación y pluralismo cultural, Paidós, Barcelona.
Minson, J. P. (1993). Questions of conduct: sexual harrasment, citizenship, government. London: Macmillan.
Moe, T. (1997) The positive theory of public bureaucracy. In Muller, D. ed. Perspectives of Public Choice : a handbook. New York, Cambridge University.
Molina, Carlos Hugo (2001). “La ciudadanía efectiva como instrumento de gobernabilidad Democrática”, Magazine 18, Junio 2001. Instituto Internacional de Gobernabilidad. http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/dhial/dhial18_03.htm.
Montemayor, Carlos. (2000). “Los excluidos y el FMI”. La Jornada, martes 25 de abril, página 19.
Moran, Peter y Ghoshal, Sumantra (1999). "Markets, firms and the process of economic Development" Academy of Management Review, 1999, Vol. 24, No. 3, 390-412.
Morell Ocaña, Luis (1984) La administración local. Tecnos (Madrid)
Moudud, Jamee K and Ajit Zacharias (1999). “The social wage, welfare policy, and the phases. of capital accumulation”, The Jerome Levy Economics Institute.
Mueller, Denis C. (1979). Public Choice. Cambridge University Press.
Mullainathan, Sendhil and Thaler, Richard (2000) “Behavioral economics”, working paper 00-27, Massachuusetts Institute of Technology.
Murillo Castaño (2000). “La organización de la sociedad civil: ¿Una alternativa respecto a los partidos políticos?. Bilbioteca de Ideas. Instituto Internacional de Gobernabilidad. http://www.iigov/iigov/pnud/bibliote/documentos/docu0013.htm.

Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1997). “Social capital, intellectual capital and the creation of value in firms”, Academy of Management Best Paper Proceedings: 35-39.
Nelson, R.R., & Winter, S.G. (1982). An evolutionary theory of economic change. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Nickerson, A. Jack and Bergh Vanden Richard (1999). "Economizing in a context of strategizing: governance mode choice in Cournot competition", Journal of Economic Behavior & Organization, Vol.40, 1-15.
North, Douglas (1990). “A transaction cost theory of politics,” Journal of Theorethical Politics, 2 (No. 4): 355-367.
North, D. (1981) Structure and change in economic history, New York, New York: Norton.
North, D. (1984): Transaction cost, institutions and economic history. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 140, pp. 7-17
North, D. (1990) Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge: Cambridge University Press.
North, D. (1993) "Institutions, transaction costs and productivity in the long run", paper presented to Eighth World Productivity Congress, Stockholm, May.
North, Liisa L. (1998).”Reflections on democratization and demilitarization in Central America”, Studies in Political Economy 55, Spring. Pp.155-171.
Notimex (2000). “AL captó más de 154 mil mdd por privatizaciones”, La Jornada, 12 de abril, página 27.
Novak, Michael (1984). Visión renovada de la sociedad democrática, Centro de Estudios en Economía y Educación.
Novak, Michael (1999). “El despertar del nihilismo”, Nexos 263, Noviembre, páginas 71-79.
Oates, Wallace (1972) Fiscal federalism. Trad. Federalismo fiscal. IEAL (Madrid), 1977.
OCDE (1999) Reforma Regulatoria en México.
O’Donnell, G. (1998) “Horizontal accountability and new polyarchies”. The Helen Kellogg Institute for International Studies. Working paper número 253. South Bend: University of Notre Dame, 1998.
O’Donnell, G. (1996). “Illusions about consolidation”. Journal of Democracy. Vol. 7 (April, 1996), número 2, p. 34-51.
O’Donnell, Guillermo (1994). “Delegative democracy”, Journal of democracy. Vol. 5, (1994), no. 1, páginas 55-69.
O’Donnell, G. (1979). Modernization and burocratic-authoritarianism. Berkeley: Institute of International Studies.
Offe, C. (1975) "The theory of the capitalist state and the problem of policy formation". In Leon N. Lindberg, Robert Alford, Colin Crouch and Claus Offe (eds) Stress and contradiction in modern Capitalism. Lexington: D.C. Health.
Ohmae, Kenichi (1995a). The end of the nation state: The rise and fall of regional economies. London: HerperCollins.
Ohmae, Kenichi (1995b). The evolving global economy :making sense of the new world order.Boston: Harvard Business Press, 1995.
Orive, Adolfo (1997) Para una política económica de Estado, inédito, México, Octubre de 1997, pág. 12.
Ortega Ortíz, Reynaldo Yunuen (2001) “Choque de civilizaciones o conflictos de poder”, El Universal, Lunes 29 de octubre página 29.
Osborne, Stephen P. (1997). “Managing the coordination of social services in the mixed economy of welfare: competition, cooperation or comon cause?”, British Journal of Management, Vol. 8, 317-328.
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions of collective Action. Cambridge. Cambridge University Press.

Ouchi, W. (1980). “Markets, bureaucracies and clans,” Administrative Science Quarterly, 25, March.
Ouchi, W. (1981) Theory Z, Reading, MA: Addison-Wesley.
Pachano, Simón (1990). Gobernabilidad en crisis. Comisión Sudamericana de paz, Santiago de Chile.
Pal Leslie (1996). "Policy analysis as soulcraft", Canadian Public Administration, Vol. 39, No. 1.
Pagano, Marco y Volpin Paolo (1999). “ The political economy of corporate governance”, Working Paper No. 29, Centro Studi in Economia e Finanza, Universitá Degli Studi Di Salerno.
Palma, Eduardo; Rufián, Dolores (1989). Las nociones de centralización y descentralización. ILPES (Santiago de Chile), Documento CPS-48.
Parker, Martin (1998). "Organisation, community and utopia", Studies in cultures, Organizations and societies, Vol. 4, number 1.
Pasqua, S. y Rey, V (2001). “La gobernanaza de la Unión Europea: Entrevista a Jérome Vignon”. Instituciones y Desarrollo, 10 (traducción de Amadeu Solá).
Pennings, Johannes M.; lee, Kyungmook, Witteloostuijn, Aren van (1998). “Human capital, social capital, and firm dissolution”, Academy of Management Journal, 1998, Vol. 41, No. 4, 425-440.
Penrose, E. T. (1959). “The theory of the growth of the firm”. Oxford, England: Blackwell.
Perotti, E. (1995) "Credible privatization: American Economic Review 85, 847-859.
Petrella, Ricardo (1996). Le bien commun. Labor, Bruxelles, páginas 9-13, 49-52.
Peón Solís, Augusto (1999). "A propósito de la globalización: ¿es inminente la desaparición del Estado?" Este País, número 102, septiembre.
Pepper, V. John (1999). “What do welfare-to-work demonstrations reveal to welfare reformers?, Department of economics, University of Virginia.
Peters, B. Guy (1998) “Globalization, institutions and governance”, European University Institute, Jean Monnet Chair Paper. Robert Schuman Centre. No. 98/51.
Peters, T. and Waterman, R. (1982) In search of excellence, New York: Harper and Row.
Petras, James (2001a) “El imperialismo resurgente: el problema principal del nuevo milenio”. Mimeo.
Petras, James (2001b) “El imperio neomercantilista en América Latina”, Especial para Rebelión.
Petras, James (2001c). “El mito de la tercera revolución científico-tecnológica en la era del imperio neo-mercantilista”, La página de Petras, 28 de julio del 2001, http://www.eurosur.org/rebelion/petras/revcient280701.htm.
Petras, James (2001d). “centralidad del estado en el mundo actual “, La Página de Petras, 26 de mayo del 2001, http://www.rebelión.org/petrascentralidad.htm.
Phelps, Edmund S. (1993). “The argument for private ownership and control”, in Annual Economic Report, European Bank for Reconstruction and Development, London.
Phillips, Martin (1998) "The restructuring of social imaginations in rural geography", Journal of Rural Studies, Vol. 14, No. 2, pp.121-153.
Pieza Rugarcía, Ramón. (1999). “Cuestionan al neoliberalismo”. Siempre, No. 2389, abril 1.
Pineda Pablos, Nicolás (1999). “Tres conceptos de ciudadanía para el desarrollo de México”, Este País, núemro 101, agosto.
PNUD (1997a) Informe sobre el desarrollo humano 1997. New York, NY p. 17.
PNUD (1997b). “Governance for sustainable human development”. Nueva York: PNUD, MDGD-BPP, UNDP Policy Document, 1997.
PNUD (1997c). “Reconceptualizing governance”, New York; PNUD, MDGD-BPP, Dicussion Paper No. 2, 1997.

PNUD (1996) “El PNUD en los años 90” Año Internacional para la Erradicacón de la Pobreza, Juego de documentos informativos. Washington, D.C. p-1-4
Poitevin, R. (Próximo), “Reflections on the problems of democracy in Guatemala,” in L. North and A. Simmons (eds.) Refugee return and transformation: prespectives on Guatemala in the 1990s.
Polanyi, Karl (1957). The great transformation: Political and economic origins of our time, Boston: Beacon Press.
Pollack, A. Mark (1997). "Representing diffuse interests in EC policy-making", Journal of European Public Policy 4:4 December: 572-90.
Popper, K. (1968) The logic of scientific discovery. Londres. Hutchinson.
Porter, Michael (1991). La ventaja competitiva de las naciones. Ediciones Vergara. Buenos Aires.
Portes, A.- (1997) The urban Caribbean: Transition in to the new global economy, Baltimore: John Hoppkings University Press.
Portes, A. (1999) Global villagers: “The rise of transnational communities”, en American Prospect, No. 25, March-April 1996.
Portes, A., & Sensenbrenner, J.(1993). “Embeddedness and immigration: Notes on the social determinats of economic action. Amerivan Journal of Sociology, 98: 1320-1350.
Prats Catalá, Joan (2001). “Reinventar la burocracia y construir la Nueva Gerencia Pública”. Biblioteca de Ideas. Instituto internacional de Gobernabilidad. http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/documentos/docu0063.htm.
Prats Cabrera, Joan Oriol (2001). “Desigualdad, mercados imperfectos y problemas de acción Colectiva. Comentarios”, Colección de reseñas, Biblioteca de ideas, Instituto Internacional de Gobernabilidad. http//www.iigov.org/iigov/PNUD/bibliote/resenas/resena0104.htm.
Prats, Joan (2000). “Tot prevenint les crisis de governability democràtica. Un aspecte oblidat de la cooperació política” en Catalunya Global, No. 3 (mayo). http://www.iigov/cpd/cg3/joan.htm.
Prats, Joan (1999). “Administración pública para el desarrollo de hoy: De la administración a Management, del management a la gobernabilidad”. Caracas: Venezuela. Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo. http://clad.org.ve/prats.html
Pritchett; Lant (1996). “Forget convergence: Divergence past, present and future,” Finance and Development (June, 1996):40.
Provan, Keith G and Sebastian, Juliann G. (1998). “Networks within networks: service link overlap, organizational cliques, and network effectiveness”, Academy of Management Journal, Vol. 41, No. 4, 453-463.
Przeworski, Adam (1996). “On the design of the state: a principal agent prespective”, documento dado en el seminario internacional sobre la Reforma del Estado en Latinoamérica y el Caribe, Brasilia.
Przeworski, Adam (1997). "Una mejor democracia, una mejor economía", Claves de razón práctica, No. 70, Marzo.
Przeworski, A., and Fernando Limongi (1979). “Modernization: Theories and facts.” World Politics 49 (2): 155-183.
Putnam, R. (2000) “Bowling alone”, mimeographed.
Putnam, R. (1993a) Making democracy work: Civic traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
Putnam, R. (1993b). The prosperous comunity: social capital and public life. The American Prospect, 13: 35-42.
Putnam, R.D. (1995). “Bowling alone: America´s declining social capital”. Journal of Democracy, 6: 65-78.
Ramos, Ramón (1994). “La jaula del poder; reflexiones sobre las sociedades democráticas”,

Claves de la razón práctica", No. 39, enero 1994.
Ramonet, Ignacio (2000). "Impacto de la globalización en los países en desarrollo" Trabajo No publicado.
Redclift, M. (1987). Sustainable development: Exploring the contradictions. London: Methuen.Reich, Simon (1998). "What is globalization? Four posible answers", Working Paper #261
The Helen Kellogg Institute for International Stduies, December 1998.
Resumen Latinoamericano (2001) "Duro alegato de James Petras contra las ONG's" http://.nodo50.net/hijos-madrid/documentos/petrasong.htm.
Riordan, M., Williamson, O.E. (1985). Asset specificity and economic organization. International Journal of Industrial Organization 3, 365-378.
Robertson, R. (1995). "Glocalización: time-space and homogeneity and heterogeneity", in: M.
Featherstone, S. Lash and R. Robertson (Eds), Global modernities (London, Verso).
Robertson (1990). Mapping the global condition.
Rocco, Raymond (1999). "The formation of Latno citizenship in Southeast Los Angeles", Citizenship Studies, Vol. 3, No. 2.
Rodríguez, Marcos (1997). Desarrollo local y cabildeo. FUNDE. Documento de trabajo No. 87. San Salvador. Mayo de 1997.
Rodrik, Dani (1999) "Where did all the growth go? External shocks. Social conflict, and Growth collapses" Journal of Economic Growth. Volume 4, Issue 4, December 1999, pp. 385-412.
Rodrik, Dani (1998), "Why do more open economies have bigger governments?", Journal of Political Economy , Vol. 106(5):997-1032.
Rodrik, Dani (1997) #Has globalization gone toofar? Washington, D.C.: Institute for International Economics.
Rogers, John H and Smith Hayden P. (2001) "Border effects within the Nafta Countries", International Financial Discussion Papers, Board of Governors of the Federal Reserve System.
Number 698, March 2001.
Rondinelli, Dennis A.; McCullog, James S.; Johnson, Donald W. (1989) "Descentralizing public services in developing countries: issues and opportunities", The Journal of Social, Political and economic Studies, Vol. 14. No. 1.
Rosanvallon, Pierre. (1996). La nueva cuestión social. Manatial, Argentina, p. 17.
Rosass, María Cristina (2000) "Federalismo, regionalización y globalización en México y Canadá", Quórum, No. 70, Enero-febrero 2000, Páginas 154-182.
Rosenau, James (1995). "The dynamics of globalization: Towards an operational formulation," San Diego, Paper presented at the International Studies Association Convention, San Diego. 18 de abril.
Rowat, Malcom D. (1999). "The emerging role of the state in Latin America", Public Management. Vol.
1, number 2, pages 261-287.
Rubio, Luis (1999). "Privatización: falsa disyuntiva", Nexos 258, junio.
Rubio, Luis (1998). "Ciudadanía y gobierno en la era de la información", Nexos 241, Enero.
Rueschemeyer, Diietrich, Stephens, Evelyn Huber and Stephens, John (1992) Capitalist development and democracy, Chicago: University of Chicago Press.
Ruigrok, Wonfried and van Tulder, Rob (1995). The logic of international restructuring. London and New York: Routledge, 1995.
Ruiz Blanco, Eliécer (1993). Derecho tributario municipal. Ediciones Libra, C.A. Caracas, pp. 7-46.

Ruys, Pieter H.M; Brink, René van den and Semenov Radislav (1999). Values and governance
systems. Center for Economic Research, Tilburg University.
Runciman, W.G. (1995) "The 'triumph' of capitalism as a topic in the theory of social selection".
New Left Review, 210.
Rustow, D. (1970). “Transitions to democracy.” Comparative politics 2-3 (April): 337-363.
Said, Edward W. (2000), “Problemas del neoliberalismo”. El País Digital, No. 1614, martes 3 de octubre.
Salamon, Lester y Anheier, Helmut (1997) “The civil society sector”, Society, 34, 2.
Salazar Xirinachs. “El papel del Estado y del mercado en el desarrollo económico”, en El desarrollo desde dentro.
Salinas de Gortari, Carlos (1999). “Las cifras y la sociedad civil”, Nexos 260. Agosto.
Samuelson, Paul A. (1954) “The pure theory of public expenditure”, Review of Economics and Satistics, Vol. XXXVI, N.4
Sandmo, A. (1989) “Public goods” in J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman (eds.) The new palgrave: Allocation, information and markets. New Yoork: W.W. Norton.
Sandoval Ballesteros, Irma Eréndira (2000) “Reflexiones críticas sobre la “globalización” de la pobreza”, Quórum, año IX, No. 71, marzo-abril 2000, 86-95.
Sánchez Albavera (1995) “Globalización y estructuración energética en América Latina. En revista de CEPAL No. 56, agosto pp. 125-136.
Sanderson, Ian (1999). “ Participation and democratic renewal: from ‘instrumental’ to ‘comunicative rationality’?”, Policy and politics Vol. 27, No. 3.
Santa-Ana Godoy, Gustavo (2000). “La participación ciudadana y el poder real”, Cuadernos de Análisis No. 3 Estado, Política y Sociedad”, Agosto.
Santos Milton (1993). “Tiempo y espacio en la revolución tecnológica”, Conferencia en ocasión del IV Encuentro de Geoárafos de América Latina. Mérida, 30 de marzo de 19993
Santiso, Carlos (2001). “Gobernabilidad democrática y reformas económicas de segunda generación en América Latina”, Revista Edición especial No. 8/9, Mayo 2001. Instituto Internacional de Gobernabilidad.
http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/revista/revista8_10.htm
Sappington, David E.M. and Joseph E. Stiglitz (1987), Privatization, information and incentives,
Journal of Policy Analysis and management 6, 567-582.
Sassen, S. (1999) Global financial centres: en Foreign Affairs, Vol. 78: 75-87, No. 1 January -February 1999.
Sassen, Saskia (1995). "The state and the global city: Notes towards a conception of place -centered governance" Competition and Change, 1995 Vol.1.
Saxe-Fernández, John (2000). Etrevista realizada por K. Moreno. Inédita. Abril 2000.
Saxe-Fernández, John (coord). (1999). Globalización: crítica a un paradigma. Plaza y Janés -UNAM, México.
Scharpf, W. Fritz (1997). "Introduction: the problem-solving capacity of multi-level governance", Journal of European Public Policy 4:4 December: 520-538.
Schmitter, P. C. (2001). What is there to legitimize in the European Union…and how might This be accomplished? 29th Joint Sessions of Workshops of the European Consortium of political research. Grenoble, France.
http://www.essex.ac.uk/ecpr/jointsessions/grenoble/papers/ws5/schmitter.pdf.
Schönwälder, Gerd (1997). “New democratic spaces at the grossroots? Popular participation in Latin American local governments”, Development and change Vol.28, pp. 753-770.
Schumpeter, Joseph S. (1962) Capitalism, socialism, and democracy (New York; Harper’s,

1942). Harper Torchbook edition, 1962: p.269 (Chapter XXII)
Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Schwarrcz, Steven L. (2002). “Globalization, descentralization, and the subnational debt problem”, Duke Law Journal, February 2002.
Schwarcz, Steven L. (2000) "Sovereign debt restructuring: A bankruptcy reorganization approach", Cornell Law Review No. 4.
Schwarcz, Steven L. (2000). “Sovereign debt restructuring: A bankruptcy reorganization approach”, Cornell Law Review Issue 85, 4.
Screpanti, Ernesto (1999). “Capitalism forms and the essence of capitalism”, Review of International Political Economy 6:1, Spring.
Selznick, P. (1957). Leadership in administration: A sociological interpretation, New York: Harper and Row.
Semo, Ilán (1998). “¿El Estado-mosaico?”, Fractal No. 8, p. 163, 1998.
Sen, Amartya (1999). “Democracy as a Universal value.” Journal of Democracy 10 (3):3-17.
Sen, Amartya (1973). “On economic inequality”. Oxford: Oxford University Press.
Servitje, Lorenzo (1999). “Hablemos de desarrollo social”, Este País, número 99, junio.
Sevidvash, Farhang (2000). “El papel de las organizaciones no gubernamentales en la Promoción de una gobernabilidad global democrática”, Magazine No. 17, Biblioteca de Ideas, Instituto Internacional de Gobernabilidad. http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/dhial17_06.htm
Shorris, Earl (1994). “Anation of salesmen: the tyranny of the market and the subversion of culture. New York: W.W. Norton.
Simon, Herbert (1957) Administrative behavior. New York: Mcmillan, 2nd ed.
Simon, Herbert A. (1955) “A behavioral model of rational choice,” Quarterly Journal of Economics, 69 (February 1955): 99-118
Simon, Herbert (1951). “A formal theory of the employment relationship,” 19 Econometrica, 293-305.
Slaughter, Anne-Marie (2000) “Governing the global economy through government networks.”
In Michael Byers, ed., The role of Law in International Politics: Essays in international Politics: Essays in international relations and international law (Oxford: Oxford University Press 2000): 177-206 PÁGINAS 193-194.
Sloterdijk, Peter (1999). “Patria y globalización”, Nexos 262, Octubre.
Smith, Peter H. (1999). “México” en Robert Chase et al, eds.: Pivotal States: A new Framework for U.S. policy in the developing world. W.W. Norton & Company, New York.
Sobrino Sierra, Carlos (2000) “Por una política social incluyente, democrática y humana”, Quórum, año IX/ No. 71/ marzo-abril 2000, páginas 13-23.
Sokal, Alan y Bricmont Jean (1999). “La crítica al relativismo posmodernista”, Este País, número 104, Noviembre.
Solá, A. (2000). “La traducción de governance”. Puntoy coma (Servicio de traducción de la Unión Europea, 65. http://europea.eu.int/comm/translation/bulletins/puntoycoma/65/pyc652.htm
Solis, Otton (2000). “Metamorfosis del Estado y la política del poder central al poder local”, Documento presentado en el Panel Internacional sobre El Desarrollo Local: Paradigma de Ingreso al Siglo XXI, FUNDACOMUN-PNUD, Caracas 18 de Agosto de 1999.
Soloaga, Isidro y Winters L. Alan (1999). "How has regionalism in the 1990s affected trade?. Policy Research Working Paper 2156. The World Bank Development Research Group.
Sonntag, Heins R. (1995) “El desarrollo social como problema”, en el volume

Una mirada hacia el Siglo XXI. Caracas, SELA-UNESCO-Nueva Sociedad, 1995, pp.184 -186.
Sorensen, Eva (1997). “Democracy and empowerment”, Public administration, Vol. 75. Autumn, 1997 (553-567).
Soros, George (1999). “Capitalismo global ¿Última llamada?” Nexos, No. 260, agosto.
Soros, George. (1998). “Hacia una sociedad global abierta”, Nexos 243, marzo de 1998.
Spagnolo, Giancarlo (1998). "Markets and cooperation", Working paper No. 257. Stockholm School of Economics, Stockholm.
Spagnolo, Giancarlo (1999). “Social relations and cooperation in organizations”, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 38 (1999) 1-25.
Spence, David B. and Gopalakrishnan, Lekha (2000). “Bargaining theory and regulatory reform: the political logic of inefficient regulation”, Vanderbilt Law Review, Vol. 53, number 2, 559-652.
Standard and Poor's (1997). "Calificaciones y comentarios", Lacey Gallagher; Octubre.
Strange, Susan (1999). Dinero loco.El descontrol del sistema financiero global. Edit. Paidós, España.
Stein, Howard (1999). "Globalisation, adjustment and the structural transformation of African Economies?: The role of international financial institutions", GSGR Working Paper No. 32/99, Centre for the Study of Globalization and Regionalisation, The University of Warwick.
Stoker, G. (1998). “El ‘Buen gobierno como teoría’: cinco propuestas”. Revista Internacional de Ciencias Sociales. 155. http://www.unesco.org/issj/rics155/stokerspa.html#gstle
Storck, John y Hill Patricia A. (2000). “Knowledge difussion through “strategic communities”, Sloan Management Review, Winter 2000, Viol. 41 No. 2. Pp. 63-74.
Streeck, W., and Schimitter, P.C. (1985). “Community, market, state -and associations?. In W. Streck and P. C. Schmitter (eds.), Private interest government, Sage, London.
Streeten, Paul (1992). “Future generations and socio-economic development-Introducing the long-term perspective,” unpublished ms. Dated January 1991, 3.
Stren, R. (2000). Nuevos enfoques para la gobernancia urbana en América Latina. Ponencia Presentada en: El CIID en la gestión del desarrollo urbano sostenible en América Latina: Lecciones aprendidas y demandas de nuevos conocimientos. 6, 7 de abril, 2000, Montevideo. http://www.idrc.ca/lacro/docs/conferencias/stren_s.html.
Tang, Paul and Adrian Wood (2000). “Globalisation, co-operation costs and wage inequalities”, unpublished paper, Netherlands Planning Bureau, The Hague, and Institute of Development Studies, Brighton (www.ids.ac.uk/ids/global/ttint.html).
Tarapuez Chamorro, Edwin (2001). “Una política municipal para el desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, Revista Venezolana de Gerencia, Año 6, No. 15, 2001, 423-445.
Taylor, M. And Singleton, S. (1993). “The communal resource: Transaction costs and the solution of collective action problem”, Politics and society 21 (2): 195-214.
Tétreault, Mary Ann (1999). “Out-of-body experiences: migrating firms and altered states”, Review of International Political Economy 6:1 Spring 1999: 55-78.
Thomas Howard, Pollock,Timothy; and Gorman Philip (1999). "Global strategic analyses: Frameworks and approaches", Academy of Management Executive, Vol. 13, No. 1.
Tomlinson, John. (1999). Globalization and culture. Polity Press:Cambridge.
Tönnies, F. (1957) Community and Association, trans. C. Loomis.Routledge and Kegan Paul, London.
Tood, Graham (1998). “Megacity: globalization and governance in Toronto”, Studies in

Political Economy 56, Summer, pp. 193-216.
Torrijos R., Vicente (2001). "La gobernabilidad reluctante", Biblioteca de Ideas, Instituto Internacional de Gobernabilidad. http://www.iigov/iigov/pnud/bilbiote/documentos/tema1/docu0090.htm
Touraine, Alan (2000). "El sistema y los actores", Revista del CLAD Reforma y Democracia. http://www.clad.org.ve/rev18.html.
Treisman, Daniel (1999). "The causes of corruption: a cross-national study", Working paper. Stockholm Institute of Transition Economics and East European Economics.
Trejo, Guillermo (2000). "¿Por qué el funcionamiento de la democracia requiere de la alternancia?, Nexos, No. 270, Junio de 2000.
Tsai, Wenpin and Goshal, Sumantra (1998). "Social capital and value creation: the role of intrafirm networks", Academy of management, Vol. 41, No. 4, 464-476.
UNWCED (1987) Our common future (The Brundtland Report). United Nations World Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press.
Urquiza, Waldemar y Ulloa, Félix (2001). "La sociedad civil salvadoreña frente a los actuales problemas nacionales", Diálogo-debate.
Van Hemelryck, Libero (2001). "El enfoque sistémico del desarrollo local", Manual Enfoque sistémico y desarrollo local, Escuela de Planificadores Sociales, SUR.
Vargas Llosa, Mario (2000). "Las culturas y la globalización", http://www.elpais.es/p/d/graficos/cabezas/filete.gif.
Vázquez Barquero, Antonio (1993). Política económica local: la respuesta de las ciudades a los desafíos del ajuste productivo (Madrid, Editorial Pirámide.
Veliyath, Rajaram and Zahara Shaker A. (2000). "Competitiveness in the 21st century: Reflections on the growing debate about globalization", Advances in Compettitiveness Research, Vo. 8, No. 1, 2000, páginas 14-33.
Vilas, M. Carlos (1997) "América Latina y el nuevo orden mundial", en González Casanova y Saxe-Fernández (coordinadores), UNAM-CEIICH, México, 1997, pág. 354.
Villareal, René (2000) "Hacia una economía institucional del mercado". Biblioteca de Ideas, Instituto Internacional de Gobernabilidad. http://www.iigov.org/iigov/pnud/bilbiote/documentos/docu0057.htm.
Villoro, Luis. (2000). "De la libertad a la comunidad", Este País, número 106, enero.
Walker, G., Kogut, B., & Shan, W. (1997). Social capital, structural holes, and the formation of an industry network. Organizational Science, 8: 109-125.
Von Haldenwang, Christian (1990) "Hacia un concepto politológico de la descentralización del Estado en América latina". EURE, Vol. XVI, No.50 (Santiago de Chile).
Wagner, A. (1883) "Three extracts on public finance", in R.A. Musgrave and A. T. Peacock (eds) (1958), Classics in the theory of public finance. London: Macmillan.
Wallerstein, Immanuel (1999) "World-System análisis", en Enciclopedia of Political Economy, Ed. Routldge, Londres, 1999.
Wallerstein, Immanuel (1997) "¿Cambio social? El cambio es eterno, nada cambia jamás." : Memoria No. 100. P del cemos. México, junio 1997.
Wallerstein, Immanuel (1994) "Hold the tiller firm: on method and the unit of analysis", Comparative Civilizations Review, Num 30, Spring 1994.
Wallerstein, Immanuel (1983) "An agenda for world-system analysis" in Contending Approaches to world-system analysis, Ed. Sage, Beverly Hills, 1983.
Ward, Bárbara (1976). "Foreword," in Mahbub ul Haq, The poverty curtain, choices for the Third World, New York: Columbia University Press, 1976. Xii.
Weber, Max. (1981). Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica, México.
Weber, Max (1922). "Wirtschaft and Gesellschaft", Tuebingen: Mohr.
Weimer, David L. (1995) Institutional design. Boston: Kluwer.

Weimer, D.L., & Vining, A.R. (1992). Policy analysis: Concepts and practice (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Wenger Ettiene C. Y Snyder William M. (2000). “Cpmmunities of practice: the organizational Frontier”, Harvard Business Review, January-February 139-145.
Wernerfelt, B. (1984). “A resource-based view of the firm”. Strategig Management Journal, 5: 171-180.
Wettstein Morador, Mariana (2000). “El proceso de globalización mundial” , paper http://www.1.ldc.lu.se/latinam/virtual/geografia/defuno.htm.
Whitley, Richard. (1996). “Business systems and global commodity chains: competing or complementary forms of economic organisation?. Competition and Change, 1996 Vol. 1, pp. 411-425.
Whitle, R. (1992b). “Societies, firms and markets: the social structuring of business systems´in Whitley, R (ed) European Business Systems, London: Sage
Williams, R. (1976) Keywords, London: Fontana.
Williamson, J. G. (1995). Globalización, convergence and history, NBER Working paper No. 5259, Cambridge, Mass.: NBER.
Williamson, Oliver E. (2000). “Why law, economics, and organization?”, Business and Public Policy Working Paper BPP-81. Institute of Management, Innovation and Organization, University of California, Berkeley.
Williamson, O.E. (1975). Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications. New York:Free Press.
Williamson, O.E. (1985). The economic institutions of capitalism. New York: Free Press.
Williamson, O.E. (1991), “Economic institutions: Spontaneous and intensional governance,” Journal of Law, Economics and Organization, 7.
Williamson, O.E. (1991). Strategizing, economizing, and economic organization, Strategic Management Journal.
Wolfe, A. (1989). “Whose keeper”, University of California Press, Berkeley, California.
Woocklock, M. (1998). “Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework”, Theory and Society, Vol. 27, No. 2.
Wood, Adrian (2000). “Globalisation and wage inequalities: a synthesis of three theories”, Department of international Development, August 2000.
World Bank (2000). Entering the 21st Century World Development Report !999/2000.
World Commission on Environment and Development (1987). Our common future, New York: Oxford University Press, 1987, 89.
Yañez, César (2001). “El capital humano y las políticas sociales en la agenda del desarrollo centrado en las personas”, Revista Edición Especial No. 8/9 Mayo 2001. http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/revista/revista8_9/docs/revis8_09.htm.
Zafirovski, Milan (1999). “Profit-making as social action: an alternative social-economic perspective”,Review of Social Economy Vol LVII No. 1 March.
Zakaria, Fareed. “The rise of liberal democracy”, 76 Foreign Affairs, No. 6, 22, 22-23.
Zahra, Shaker A. (1999). "The changing rules of global competitiveness in the 21st century", Academy of Management Executive, 1999, Vol. 13. No. 1.
Zahra, Shaker A. And O'Neill, Hugh M. (1998). "Charting the landscape of global competition: Reflections on emerging organizational challenges and their implications for senior executives", Academy of Management Executive, Vol. 12, No. 4.
Zenger, Todd R., and William S. Hesterly (1997), “The disaggregation of Corporations: Selective intervention, high-powered incentives, and molecular units,” Organization Science, 8,3.
Zerbe O. Richard, McCurdy E. Hpward (1999). “The failure of market failure”, Policy Análysis Management, volume 18, numer 4, 558-578.

Ziccardi, Alicia (1995). "La gobernabilidad en las metrópolis latinoamericanas", Comercio Exterior, México, D.F.
Zizek, Slavoj (1999). "Chantaje por partida doble", Revista Este País, número 99, junio.
Zucker, L.G. (1987) Institutal theories of organization, en W. Scott (ed) Annual Review of Sociology, 13, p 443-64.